

ORAS
LA
LIBRERIA
DE ESPAÑA

333(460)

CAR
ews

este libro antes
an

ENSAYO SOBRE LA HISTORIA

DE LA

PROPIEDAD TERRITORIAL EN ESPAÑA

POR

D. FRANCISCO DE CÁRDENAS

DE LA

Academia de la Historia y de la de Ciencias morales y políticas

TOMO I



R. 13. 873

MADRID

1873

IMPRESA DE J. NOGUERA Á CARGO DE M. MARTINEZ

CALLE DE BORDADORES, NÚM. 7

*Quedan reservados al autor los derechos
de la propiedad literaria de esta obra.*

PRÓLOGO

La propriété est le principe le plus fondamental à l'aide du quel on puisse expliquer les révolutions de l'histoire... elle régit positivement l'histoire...

PROUDHON, *Theorie de la propriété*, ch. 9.

Pocas cuestiones interesan tanto á la sociedad en la época presente de discusion y controversia, aún sobre las verdades al parecer más elementales, como las que se refieren á la constitucion, indole y condiciones de la prosperidad territorial y al limite y extension de sus derechos. Una vez admitida la legitimidad de esta esencialísima institucion, y desvanecidos los sofismas en que se apoyan los que la combaten y niegan, nace al punto, por el órden lógico de las ideas, la cuestion importante de si deberán abandonarse los bienes apropiados al libre y absoluto arbitrio del individuo, ó si se sujetarán su disposicion y uso á las reglas que dicte el interés comun; ó en otros términos, si en la organizacion de la propiedad debe prevalecer el principio de libertad ó el de sociabilidad, que juntos constituyen, aunque en antagonismo necesario, la naturaleza moral del hombre.

De cada una de estas soluciones resulta una constitucion ó forma diferente de la propiedad: la que somete y subordina el libre albedrío del individuo al interés social ó colectivo, y la que sacrifica este interés á la libertad individual. La primera tiene por caracteres distintivos, ya la participacion del Estado ó de las corporaciones en el dominio ó los frutos de la tierra, ya

la servidumbre personal inherente á su posesion, ó ya las restricciones de la facultad de enajenarla y trasmitirla; la segunda se da á conocer por su condicion libérrima de todo vínculo con la cosa pública y de toda limitacion y cortapisa de la facultad de disponer, de enajenar en vida y de trasmitir en muerte: *jus utendi et abutendi*, como decian los jurisconsultos. Y para dar nombre á estas diversas constituciones de la propiedad, adoptaré los que representan, si no todos, la mayor parte de sus respectivos elementos, llamando á la una «amortizacion» y á la otra «desamortizacion», ya que con estas metáforas se conocen vulgarmente y á su vez el sistema que establece y el que rompe las trabas de la propiedad individual.

Estas dos formas de la propiedad, correspondiendo exactamente á la doble naturaleza del hombre, como sér libre y dueño de sí mismo y como individuo sujeto, por la ley natural y divina, á las necesidades y obligaciones morales y sociales de su especie, reciben el impulso y la direccion de los principios de que respectivamente emanan. Así como hay entre estos principios contradiccion y antagonismo, así ha habido siempre, y no puede ménos de haber, dos tendencias opuestas y en perenne lucha, por dar á la propiedad una ú otra de aquellas constituciones exclusivas. La historia de la propiedad, desde sus orígenes hasta nuestros días, está casi reducida á la contienda entre ambas tendencias. Unas veces ha prevalecido en su organizacion el principio «individualista» (desamortizacion), otras veces el «social» (amortizacion); pero nunca tan completamente que llegara á desaparecer ninguno de ellos, ni que cesara siquiera la pugna entre ambos.

La subsistencia de este gran fenómeno, así en el mundo antiguo como en la sociedad moderna, no solamente prueba su necesidad histórica en el progreso de la civilizacion, sino que por la íntima relacion que ha tenido en todos tiempos la organizacion de la propiedad con la de la familia y la del Estado, explica las mudanzas acaecidas en el órden social y político de las naciones. No fué una mera y casual coincidencia la del régimen político del mundo oriental, fundado en la absorcion del individuo por el Estado y en el sistema las castas, con el régimen de la propiedad colectiva. No fué tampoco fortuita la coexistencia, en Grecia y en Roma, de todas las alteraciones de su respectiva constitucion social y política, con las acaecidas en órden á la propiedad territorial. La notoria insuficiencia del régimen de gobierno introducido por los bárbaros inmediatamente despues de su invasion,

no fué una circunstancia independiente del principio individualista, que predominó en la propiedad, en aquellos primeros tiempos. El régimen feudal nació en casi toda Europa cuando la propiedad se constituyó bajo el influjo del principio colectivo, y desapareció cuando esta, sacudiendo el yugo de la amortizacion, recuperó la libertad perdida. No es ménos de notar la coincidencia en casi toda Europa de la destruccion sucesiva del régimen feudal con el nacimiento de los mayorazgos, como si se hubiera pretendido llenar con ellos el vacío que dejaba la desaparicion del feudalismo. Por último, en los tiempos modernos es imposible desconocer el influjo decisivo de la abolición de las vinculaciones y del predominio del principio individualista en el régimen de la propiedad, sobre las instituciones sociales y políticas, y las mudanzas que en ellas acaecen.

Hoy mismo luchan entre sí aquellas dos poderosas tendencias, manifestándose una en la escuela individualista y otra en la socialista y en la comunista, cuyos terribles problemas amenazan la paz del mundo. La primera de estas escuelas continúa defendiendo la libérrima disposicion de todo género de dominio, como consecuencia necesaria del famoso principio *de dejar hacer* y de la justa libertad de los cambios; y aún algunos de sus adeptos combaten las escasas restricciones que pesan todavía sobre la propiedad, en beneficio de las familias ó de otros intereses colectivos, como la *legítima* forzosa de los descendientes y la sucesion *ab intestato* de los colaterales. Socialistas y comunistas, aunque difieran en doctrinas, pretenden transformar el mundo organizando de nuevo la propiedad bajo formas distintas, pero inspiradas todas por los mismos principios que la estancaron y monopolizaron en los antiguos pueblos de Oriente y en la Europa moderna, bajo el régimen feudal.

El socialismo con su quimérica organizacion de la industria, su sistema de asociacion de trabajadores para impedir la llamada tiranía del capital, sus utopías de crédito gratuito y circulacion forzosa del papel-moneda, en lugar del numerario, su pretendido derecho al trabajo y su impuesto progresivo, aunque afecte reconocer el derecho de propiedad, concluye por limitarlo más ó ménos, restringiendo el disfrute individual de la tierra, para dar en ella al Estado una participacion indebida. El comunismo, más franco y sincero en la exposicion de sus doctrinas y en la manifestacion de sus aspiraciones, niega la propiedad privada de la tierra, para atribuirla toda á


la colectividad social ó al Estado, como en la India y en el Egipto antiguo, pretendiendo luego por el trabajo y la vida en comun, una más justa distribución de los productos y en general de toda la riqueza.

No diré á cual de éstas dos tendencias opuestas se acerca más la de aquellos economistas que llevando hasta sus últimas consecuencias la teoría que funda sólo en el trabajo la justificación del derecho de propiedad, atribuye al Estado la del más valor que suelen adquirir las tierras, sin esfuerzo ni sacrificio de sus dueños y por hechos independientes de su voluntad, como el aumento de la población y de la industria. Pues siendo, dicen, aquel más valor resultado de la mayor prosperidad del país, originada por el concurso y el trabajo de todos los habitantes, debe ser propiedad de estos, y en su representación del Estado, el cual podría hacerles participar del nuevo beneficio, disminuyendo los impuestos generales en una suma equivalente á la renta del mayor valor de las tierras favorecidas, que debería ingresar en el Fisco.

Pero no es mi ánimo hacer la historia ni la crítica de las doctrinas ni de las utopías que á la propiedad se refieren, sino en cuanto hayan influido en su régimen y gobierno. Mi principal objeto es dar á conocer las vicisitudes de aquella institucion, de que dan testimonio las leyes, las crónicas, las escrituras y los documentos históricos, demostrando á la vez la subsistencia de los dos principios á que su organizacion obedece en todas las sociedades cultas, como esenciales que son á la humana naturaleza. Para conseguirlo empiezo resumiendo brevemente en el libro I y como por via de introduccion, la historia de la propiedad territorial, bajo los puntos de vista indicados, en los más célebres pueblos del mundo antiguo, y en las principales naciones de la Europa moderna. Los libros siguientes dan á conocer los varios estados, progresos y vicisitudes de la misma institucion desde la época de los godos hasta nuestros dias, así en los reinos de Leon y Castilla, como en los de Aragon, Cataluña, Valencia y Navarra, mientras que fueron independientes ó conservaron sus leyes propias y sus costumbres diversas. Y no me he limitado en este prolijo estudio á consultar las leyes generales, escritas sobre la materia, puesto que son insuficientes para dar en ciertos periodos, cabal idea del estado verdadero de la propiedad, sino que he tratado de penetrar en la vida práctica de esta, y valiéndome de los fueros municipales, diplomas y documentos contempo-

ráneos, he procurado inquirir todos los hechos que pudieran dar á conocer sus íntimas y constantes relaciones con el Estado y con la familia.

Reconozco sin embargo, que aún queda algo que averiguar y no poco que decir para completar la historia de la propiedad en España. Por eso no considero esta obra, sino como un mero ensayo; pero, si abriendo una senda poco frecuentada hasta ahora, otros escritores más competentes ilustrasen con nuevos estudios, este ramo importante de nuestra historia nacional, habría logrado cumplidamente mi objeto.



LIBRO PRIMERO.

INTRODUCCION

**Nociones generales acerca de los orígenes y principales vicisitudes
de la propiedad territorial
en los pueblos antiguos y en la Europa moderna.**

CAPITULO PRIMERO

La propiedad en los antiguos pueblos de Oriente.

I.

LA INDIA Y EGIPTO.

La propiedad individual de la tierra no fué apenas conocida en los antiguos pueblos de Oriente. Entre los asirios y babilonios, el Rey ó el Estado, como dueño de todas las tierras, distribuía una parte de ellas entre sus soldados y vasallos, mediante cierta pensión ó tributo perpétuo, y se reservaba la otra para cultivarla y recoger su fruto. Aquellas rentas y estos productos constituían principalmente el Erario público.

En la India, desde los tiempos más remotos, también pertenecía al soberano el dominio de todas las tierras. Dice una de las leyes de Manu: «el Rey tiene derecho á la mitad de los tesoros escondidos en la tierra y de los minerales que se extraen de ella, porque es señor supremo del suelo.» En el Digesto de las leyes de la India, se lee también: «la tierra vino á ser, por la conquista, propiedad del sábio Casyapa: encomendada después por este á los Chactryas para que la protegiesen, fué con el tiempo propiedad suya, para venir á parar por herencia á poderosos conquistadores, y no á los súbditos que la cultivaban». Conforme con estos principios, asegura Es-

trabon que toda la tierra de la India era propiedad del Rey; que dividida la poblacion en siete clases, era la de los labradores la única que podia dedicarse al cultivo; que estos labraban la tierra que les tocaba en suerte, más bien que como dueños, como arrendatarios ó aparceros del Estado, al cual entregaban la cuarta parte de todos los frutos, y que con ellos mantenía el soberano á los individuos de las demás clases, entre las cuales se contaban, como es sabido, la de los pastores, la de los guerreros, la de los presidentes ó inspectores de los servicios públicos, y la de los consejeros, que eran á la vez administradores de la justicia y de los intereses públicos y aún privados (1).

Conquistada la India por los musulmanes, no varió sin embargo el estado de la propiedad territorial. Un conocido misionero, en la costa de Coromandel, el padre Lalanne, escribía en 1709 de aquel país: «El Rey de cada Estado es dueño absoluto de las tierras del mismo, y sus oficiales obligan á los vasallos á cultivar la porcion que con tal objeto reparten á cada uno (2).» El gobierno musulman sucedió al Gran Mogol en todas sus regalías, inclusa la del dominio universal; y aunque los jurisconsultos musulmanes de la India han procurado atenuarlos, indicando que el Emperador no puede disponer á su capricho de todas las tierras, reconocen su derecho á todos los frutos, con tal que quede al cultivador lo necesario para su sustento y el de su familia, y para la siembra inmediata (3).

Ni bajo la dominacion inglesa ha mejorado tampoco la condicion de los terratenientes. La Compañía de la India quedó dueña á su vez de la tierra cuando adquirió del Gobierno indígena el derecho de exigir y recaudar los tributos de que antes hice mencion. Además se habian aumentado considerablemente desde que Estrabon escribió su *Geografia*, pues no consistian ya en la cuarta parte, sino en la mitad de todos los frutos de la tierra, lo cual equivale, como es sabido, á la mayor parte del producto líquido, si no á todo. La Compañía se obligó á no aumentar esta cuota, pero reservándose el derecho de expropiar al labrador que no satisficiera la suya. También se obligó á respetar la posesion de los que pagaran puntualmente su renta; pero salva esta condicion. dispuso de todas las tierras, bien dándolas como en fendo hereditario á ciertos oficiales, que recaudaban para si los

(1) Strabon, libro XV.

(2) *Cartas edificantes*, t. VI, pág. 367.

(3) Galoway, *Observations on the constitution and present government of India*, pág. 40.

tributos de los colonos, pagando por ellos á la Compañía una cuota determinada, ó bien tratando directamente con los mismos colonos y percibiendo de ellos la cantidad señalada.

Tan ligada se halló siempre en la India la propiedad territorial con el Estado; mas en sus relaciones con la familia no descubre ménos su carácter de limitada y colectiva. La tierra es allí como una especie de depósito ó fideicomiso confiado al hombre para que atienda á las necesidades de su familia. El hijo es tenido como co-propietario con supadre de los bienes hereditarios. Todos los dejados por muerte pertenecen de derecho á los herederos naturales del difunto. El padre de familias puede enajenar en vida los bienes adquiridos con su industria, pero no los indispensables para sí y su familia, ni los hereditarios, ni los adquiridos con sus productos (1). Si cualesquiera de estos bienes fuesen enajenados, pueden los interesados pedir y obtener la revocacion del acto ó contrato en que se haya intentado trasferirlos.

Una costumbre antiquísima, que trae origen sin duda de los tiempos patriarcales, establece por regla general la posesion en comun de los bienes patrimoniales de las familias. No solamente tienen el condominio de ellos los hijos con sus padres, sino que aún despues de la muerte de estos, continúan disfrutándolos, como en sociedad, todos los parientes con derecho á su herencia, cualquiera que sea el grado de su parentesco. Uno de los partícipes, que entre hermanos suele ser el primogénito (2), administra toda la hacienda y compra ó vende por cuenta de ellos, si bien para esto último necesita el consentimiento de sus consócios. Ni por la muerte de ninguno de estos se disuelve tampoco la compañía, porque cuando alguno fallece ocupan su lugar los herederos. La indivision de la herencia no se concluye hasta que la solicita uno de los partícipes, lo cual no suele ser frecuente.

No prevalece ménos el interés colectivo de familia y de conservacion de su patrimonio, en el orden de la sucesion hereditaria. A falta de descendientes varones hasta el tercer grado, hereda la viuda y en su defecto las hijas. Aun entonces procura evitar la ley que el patrimonio salga de la fa-

(1) Antiguamente no eran conocidos los testamentos.

(2) Esta costumbre proviene de una ley antigua, segun la cual el primogénito, como continuador del culto y jefe religioso de la familia, «tomaba posesion de todo el patrimonio, y los demás hermanos vivian bajo su autoridad, como si estuviesen bajo la de su padre.» segun se lee en un texto inserto en las leyes de Manu, IX, 105, 107 y 126.

milia, y para ello llama en primer lugar á las hijas solteras, en segundo á las casadas, y en tercero á las viudas. A falta de hijas y de hijos de estas, heredan los ascendientes, y en su defecto los colaterales (1).

En Egipto hubieron de distribuirse primitivamente las tierras entre los sacerdotes, los guerreros y los labradores, que formaban, como es sabido, una clase aparte en aquella antigua nacion. Luego rescató el gobierno las que poseian estos últimos, aprovechando la ocasion de tiempos calamitosos de hambre y escasez; pero volvió á distribuir las entre el pueblo, aunque con la obligacion de pagar un cánon por su disfrute.

No se saben de cierto la forma y condiciones con que la clase de los labradores poseia primitivamente sus tierras, si en comun ó individualmente, con cargas ó sin ellas. Lo que parece indudable es que bajo el ministerio de José, los egipcios de la clase del pueblo cedieron al Rey sus propiedades para obtener granos con que alimentarse y remediar su miseria (2). Luego, ya por ser todas las profesiones hereditarias, ó ya por haber tal separacion entre ellas que nadie podia ejercer sino aquella en cuyo gremio habia nacido, fué preciso acudir á los que habian sido labradores para que volviesen á cultivar las mismas tierras que les pertenecieran, si bien pagando por su disfrute un cánon cierto, y quedando por este concepto sometidos á una especie de servidumbre. Pagábase por razon de este cánon una quinta parte de todos los frutos (3). Los sacerdotes poseian libremente todas sus tierras sin satisfacer por ellas cánon ni impuesto alguno. La misma exencion disfrutaban los guerreros, al ménos en cuanto á una cierta porcion de terreno con que el Rey debia recompensar sus servicios (4). Una tercera parte del territorio pertenecia de este modo á los sacerdotes, y otra tanta al patrimonio del Rey. La tradicion enseñaba que la diosa Isis, queriendo estimular el celo de los ministros de la religion para que rindiesen homenaje á Osiris, les dió aquellas inmensas propiedades, á fin de que con ellas proveyesen á su sustento y á los gastos del culto (5).

No se conocen las leyes especiales que establecieran el orden de sucesion, mas debieron tender á conservar probablemente indiviso el patrimo-

(1) Estas noticias y otras no ménos curiosas de la legislacion indiana, pueden leerse en un artículo que lleva por título *Aperçu historique et analytique du droit Hindou*, escrito por Mr. Boscheron des Portes, antiguo presidente del Tribunal de Pondichery é inserto en la *Revue historique du droit*, 4me. livraison, 1855.—Juillet-Août.

(2) *Génésis*, cap. XXXVII vers. 15 y sig.

(3) *Gén.*, cap. XXXVII, vers. 19, 21, 23, 24 y 26.

(4) Herodoto, lib. II, pár. 168.

(5) Diodoro Sículo, I. pár. 21.

nio de las familias. Ni se concibe que fuese de otro modo, cuando por la separacion absoluta entre las diversas profesiones, sólo ejercian la labranza los que poseian la tierra de sus mayores, sólo aspiraban al sacerdocio los que disfrutaban la dotacion perpétua en tierras asignada á los ministros del culto y no podian dedicarse á la milicia sino los que habian nacido en esta clase, y gozaban por ello los bienes asignados á la misma. Con el oficio debia, pues, trasmitirse el beneficio á él inherente.

II.

LA PROPIEDAD EN EL PUEBLO HEBREO.

El mismo principio que en las demás naciones orientales, predominó en el régimen de propiedad territorial del reino de Israel, pero con notables diferencias, que revelan la superioridad de su civilizacion en el orden moral. Dios, como dueño y soberano del cielo y de la tierra, otorgó una parte de esta última á su pueblo escogido. El Señor dijo á Abraham: «Yo soy el Eterno que te he hecho salir de Ur de los Caldeos, para darte este país.» También dijo á Moisés: «Yo os haré entrar en la tierra que he jurado dar á Abraham, y os la concederé en herencia.» Dueña ya esta nacion de la tierra prometida, Moisés primero y Josué después la dividieron entre las tribus, excluyendo del reparto á la de Leví, no porque fuese indigna, ni incapaz de poseerla, sino porque no pudiendo ocuparse sus individuos en la labranza ni en los trabajos manuales, no habria sido su dominio de gran provecho. Así es que si los levitas no tuvieron parte en los campos, recibieron en cambio multitud de ciudades para su habitacion con terrenos inmediatos á ellas en que apacentar sus ganados (1), los diezmos, las primicias y otros tributos.

Mas consagrada al servicio público del culto esta parte de la propiedad territorial, el Estado no se reservó ninguna participacion en la señalada á las otras tribus, la cual por lo tanto hubo de ser independiente de todo vin-

(1) *Josué*, cap. XXI, vers. 2. La tribu de Leví hubo de alcanzar mayor parte que las demás en la propiedad urbana, pues componiéndose solamente de 22.000 individuos, llegó á poseer 48 ciudades, cuando las tribus de Simeon y Zabulon, que contaban cada una más de 60.000 personas, ocupaban solamente la primera 12 y la segunda 17 ciudades (*Números*, cap. XXXV, vers. 6-8; cap. I, vers. 22-31; cap. III, vers. 43. *Josué*, cap. XIX, ver. 1-16.)

culo directo con el soberano, Josué dictó algunas leyes sobre el modo de usar y disfrutar las nuevas propiedades, pero ninguna que atribuyese á los jefes del pueblo parte en su dominio. Los jueces, instituidos despues, solian ser remunerados con donativos voluntarios, mas no percibian para si ningun tributo. La tierra contribuia al templo con el diezmo de sus frutos, porque era de Dios, pero no al soberano con ningun impuesto. Moisés y Josué al repartirla no afectaron dar lo suyo, como suponian darlo los reyes conquistadores de Asiria, de la India ó de Egipto, sino que meros intérpretes y ministros del Altísimo, cumplieron su promesa, repartiendo los bienes que de él procedian, entre su pueblo escogido.

De este origen de la propiedad nacieron los más importantes derechos, respetados durante mucho tiempo, aunque quebrantados al fin desde la institucion de la monarquía. Como la propiedad no venia del soberano, no podia este privar de ella á ninguno de sus súbditos, ni alterar su repartimiento, ni menguar sus frutos con impuestos forzosos, ni confiscarla para el Estado por razon de delitos. Así es que en tiempo de los Jueces los impuestos no podian exigirse, sin estar autorizados y consentidos por una Asamblea compuesta de los jefes de las tribus y otros principales contribuyentes. Si los reyes se atribuyeron más tarde la facultad de establecerlos, y usaron de ella con grave exceso, no se fundaron ya en ningun dominio originario del Estado sobre las heredades particulares, sino en su autoridad discrecional y soberana; y es digno de notarse cómo estas exacciones, aunque forzosas, conservaron, sin embargo, el nombre de donativos, que tuvieron bajo los Jueces, como si en realidad continuaran siendo voluntarias.

En el mismo tiempo, no era lícito á ningun tribunal civil imponer la pena de confiscacion: cuando algun delincuente quedaba inhabilitado para poseer bienes, pasaban los suyos integramente á los herederos. Luego los reyes se atribuyeron el derecho de imponer aquella pena, pero sólo cuando dictaban por si mismos la sentencia, pues los tribunales, aun el del Sanhedrin, no tuvieron nunca facultad para privar de su patrimonio á ninguna familia. Si la excomunion mayor llevó siempre consigo, como consecuencia, la pérdida de los bienes del culpado, y si otros mandamientos tuvieron por sancion la misma pena, no resultaba esta en provecho del fisco: Dios, que habia dado la tierra, era quien únicamente podia quitarla, y por eso la confiscacion en aquellos primeros tiempos fué una pena religiosa, en cuya virtud, la heredad de que se despojaba al propietario quedaba consagrada al señor, y no podia ser destinada jamás á usos profanos, ni restituida al dominio particular. Como consagrada al Señor, pertenecia al templo, es

decir, volvía á Dios, y quedaba destinada á su servicio (1). Si despues los reyes se atribuyeron la facultad de confiscar para sí las propiedades de sus súbditos, segun se ve por varios ejemplos, no es en la Sagrada Escritura donde se hallará la ley que así lo prescriba. Oponíase, por el contrario, á toda idea de confiscacion el precepto que mandaba volver á las familias los bienes que por cualquier título, hubiesen salido de ellas, con exclusion de los consagrados al templo.

Fué, sin duda, un gran progreso en el camino de la civilizacion el que realizó el pueblo hebreo, constituyendo su propiedad individual con independencia del Estado. Llámola individual, porque aunque no lo fuese al principio dentro de cada tribu, dado que los textos no refieren sino el reparto hecho entre ellas, debió ser distribuida muy luego tambien entre sus individuos, puesto que de otro modo no tendrian sentido muchos preceptos y pasajes de los Sagrados Libros. Pero si ningun derecho individual se sacrificó al Estado como cuerpo politico, en aquella constitucion de la propiedad, en cambio todos ellos cedieron su lugar al interés colectivo y de conservacion de las familias. No tenia otro objeto la prohibicion de enajenar perpétuamente los bienes inmuebles, decretada por Moisés, pues á esto equivalia la ley que ordenaba celebrar un jubileo cada cincuenta años, á fin de que en él se restituyeran las heredades enajenadas á las personas ó familias de quienes procedian (2). Verdad es que este precepto riguroso hubo de ser modificado un tanto en la práctica por la jurisprudencia. Así es que, aunque los Sagrados Textos no lo dicen, el historiador Josefo asegura que al devolver los bienes enajenados, se ajustaba la cuenta de lo que habian costado y producido al poseedor, y si los costos excedian de los productos, no se verificaba la devolucion sin que el interesado en obtenerla abonase la diferencia (3). Fuera de este caso, se verificaba la rescision de las enagenaciones sin interés ni precio. Así se hubo de usar aquel retracto, á pesar de sus graves inconvenientes económicos, hasta la primera destruccion del Templo por los asirios. Entonces la tierra de los hebreos permaneció sesenta años sin cultivo y casi despoblada, y al verificarse su restauracion con la de la patria, no hubo de ser restablecido aquel antiguo derecho (4).

No fué este el único medio de conservar los patrimonios familiares en el

(1) *Levitico*, cap. XXVII, vers. 21-28. *Numeros*, cap. XVIII, vers. 14.

(2) *Levitico*, cap. XXV, vers. 8-13.

(3) *Antiquit.*, lib. III, cap. XII, pár. III.

(4) *Cuneus*, I, c. 6, cit. por Pastoret, *Hist. de la legislat.*, tom. IV, pag. 457.

pueblo de Israel, pues tambien contribuyó eficazmente á ello el retracto *gentilicio*, establecido y con harta extension aplicado por las leyes de Moisés. «La tierra, dice el Levítico, no será vendida perpétuamente, porque me pertenece, y vosotros sois en ella colonos y extranjeros.» Este sagrado texto comprende, en sus términos breves y precisos, toda la teoría jurídica de la propiedad individual hebrea. Y luego continúa: «Si algun necesitado vendiere su heredad, su pariente, si quisiere, podrá redimirla del comprador: si no tuviere pariente y él mismo pudiere haber el precio de la redencion, hágala, abonando al comprador la cantidad que hubiere desembolsado, con descuento de los frutos producidos desde la enajenacion. Si no pudiere verificar de este modo el rescate de lo vendido, aguarde para realizarlo al año del jubileo. Si la casa se hallare en ciudad amurallada, podrá redimirla en el término de un año, y si no lo hiciere, no lo intentará despues, ni aún en el año del jubileo. El que vendiere casa en ciudad abierta, podrá redimirla como cualquier finca rústica. Las casas de los levitas situadas en las ciudades, si se vendieren, podrán ser rescatadas en cualquier tiempo, y si no lo fueren, revertirán á sus dueños antiguos en el primer jubileo.» Con tales restricciones de la facultad de contratar y tantos medios de rescindir las enajenaciones verificadas, el dominio individual era más bien un mero usufructo, y los bienes se perpetuaban fácilmente en las familias y tribus que primitivamente los adquirieran.

Al mismo fin iba encaminado el orden de sucesion hereditaria establecido por la ley. En tiempo de los Patriarcas podia disponer el padre de toda su herencia, aunque por costumbre se reconociese cierto derecho á ella en el hijo primogénito. Temiendo Sara que Abraham dividiese por igual su patrimonio entre sus hijos Isaac ó Ismael, le exhortó á que arrojase de su casa á este último con su madre la egipcia Agar, y habiéndolo verificado así Abraham, fué su único heredero Isaac, como hijo de su primera y legitima esposa, recibiendo solamente algunos legados, los hijos de sus demás mujeres (1). Jacob dejó á José una parte de su herencia, igual á la de sus hermanos y además una porcion de la tierra conquistada á los Amorreos; porque aunque Ruben como primogénito, era quien debia obtener esta preferencia, perdió su derecho por el crimen que habia cometido, violando el lecho nupcial de su padre. El mismo patriarca Jacob habia adquirido, por compra á su hermano mayor Esaú, su derecho de primogenitura en la herencia de su padre Isaac.

(1) *Génesis*, cap. XXI, vers. 10, cap. XXV, vers. 5-6. *Líb. Judicum* cap. 9, vers. 3.

Las leyes posteriores determinaron ya más claramente los derechos de sucesión. Desde entonces no fué lícito á los padres que hicieran testamento instituir herederos á otros que á sus hijos, por más que esta prohibición quedase muy restringida y desvirtuada con la facultad de hacer legados y donaciones parciales á otros parientes y á los estraños, si bien sujetos á reversion en el año del jubileo (1). Todos los hijos varones fueron llamados en primer lugar á la herencia del padre, pero tomando el mayor doble porción que los otros, por razón de primogenitura (2). A falta de hijos varones debían heredar los nietos y demás descendientes.

Las hijas, en los tiempos primitivos, no sucedían á sus padres en ningún caso, como que con ellas podían salir los bienes de las familias que los poseían. Pero según refieren los Sagrados Textos, las hijas de Salphaad se presentaron ante Moisés, el sacerdote Eleazar y los príncipes del pueblo, á la puerta del tabernáculo, y dijeron: «nuestro padre ha muerto en el desierto sin dejar hijos varones, ¿por qué ha de desaparecer su nombre en su familia? Dadnos una heredad entre los parientes de nuestro padre.» De modo que las hijas de Salphaad no aspiraban á heredarle exclusivamente: se contentaban con recibir una parte entre los parientes varones más lejanos, que eran los legítimos herederos. El Señor, á quien Moisés llevó en seguida aquella súplica, respondió: «las hijas de Salphaad piden lo justo: dales tierra entre los parientes de su padre y que sucedan en la herencia de este.» Pero si con esta resolución no se daba á las hijas preferencia alguna sobre otros parientes, teniéndose en cuenta sin duda el derecho adquirido por los de Salphaad, la ley que al mismo tiempo dictó el Señor á Moisés para lo sucesivo admitió ya aquella preferencia y muy cumplida. Entonces quedó solemnemente declarado el derecho de las hijas á suceder exclusivamente á sus padres á falta de hijos y de sus descendientes varones. Así los principios de la equidad y los sentimientos de la naturaleza se sobrepusieron á los intereses políticos y al egoísmo de las razas. Puesto que no hubiese hijos que perpetuaran las familias, quiso Dios que las hijas disfrutaran lo que había sido de sus padres, aunque sin ninguna preferencia entre ellas, por razón de primogenitura. A falta de hijas llamó Dios á la herencia á los hermanos del difunto, con preferencia á los ascendientes, puesto que no lo menciona el Texto Sagrado. No habiendo hermanos debían heredar los tíos carnales paternos, y faltando estos también, los demás parientes colaterales

(1) Pastoret. *Hist. de la legisl.*, tit. III, pág. 481.

(2) *Deuteronomio*, cap. XXI, vers. 15-17.

más próximos, con exclusion de los más remotos (1). Mas en todo caso no se tenían por tales parientes, para los efectos de la sucesion, los de la linea materna, por cuanto pertenecian á otra familia, á la cual al casarse la madre habia dejado de pertenecer para entrar en la de su marido.

Este sistema de sucesion, dictado por Dios á Moisés con motivo de la peticion de las hijas de Salphaad, señala un progreso importante en la civilizacion del pueblo hebreo. Determinar y definir los derechos de familia en la sucesion hereditaria, cuando no estaban consignados en ninguna ley escrita, era ya una novedad de grave trascendencia, pero aún la tenia mucho mayor la de admitir á las hijas, con exclusion de otros parientes paternos, á la herencia del padre, cuando, por otra parte, no se renunciaba al sistema consagrado hasta entonces por la costumbre, para mantener en las tribus y en las familias los bienes repartidos entre ellas. Despues la jurisprudencia, interpretando más ó ménos latamente el derecho escrito, amplió sus prescripciones á casos en él no previstos, en sentido casi siempre favorable á la sucesion masculina. Así es que hubo de darse lugar á la herencia de los ascendientes en defecto de descendientes, mas excluyendo en todo caso á las madres y ascendientes maternos, y distinguiendo entre los bienes troncales y los adventicios, para el efecto de que los primeros volvieran á su raíz y los segundos se adjudicaran á los parientes del difunto. Tambien se hubo de conceder al marido el derecho de heredar á la mujer, en defecto de ascendientes, pero negándose al mismo tiempo esta capacidad á la mujer respecto al marido, por más que la *Historia Sagrada* ofrezca en Judit un ejemplo de lo contrario (2).

Ya el mismo legislador quiso neutralizar el efecto de la sucesion de las mujeres en la integridad de los patrimonios familiares, prohibiendo el matrimonio entre personas de tribus diferentes, y admitiendo la costumbre singular de la *leviracion*. Segun se lee en el libro de los *Números*, los cabezas de la familia de Galaad se acercaron á Moisés y le dijeron: «El Señor os ha mandado dividir la tierra entre los hijos de Israel, y dar á las hijas de Salphaad, nuestro hermano, la heredad debida á su padre; si ellas se casan con hombres de otras tribus, llevarán á estas lo que poseen y quedará nuestra heredad menguada.» Respondiendo Moisés á esta peticion declaró que las hijas de Salphaad podrian casarse libremente, pero con hombres de su

(1) *Números*, cap. XXXVII, vers. 1 al 2.

(2) Selden, *De successioneibus ad leges Hebræorum ad bona defunctorum, lib. singularis*. Lugd. Batavorum, 1638. — Caps. XII, XIV, XVII y XVIII.

propia tribu, y ordenó que en adelante no se permitiese el matrimonio entre personas de tribus diferentes «para que no salieran las heredades de las familias,» según la expresión del Sagrado Texto (2).

Leviracion se llamaba aquella singular costumbre en cuya virtud la viuda que quedaba sin hijos, debía solicitar en matrimonio á alguno de los hermanos del marido difunto. Esto se verificaba con cierta solemnidad y determinadas ceremonias. No era obligación estricta del hermano casarse con su cuñada, pero no quedaba bien mirado quien lo resistía, por cuanto se consideraba interesada en ello la honra de la familia. Sólo cuando los hermanos del difunto rehusaban el matrimonio con su viuda, del modo solemne indicado, quedaba aquella en libertad de casarse con otro.

El matrimonio de *leviracion* tenía por objeto perpetuar el nombre y la familia del hermano difunto. En su virtud, todos los bienes de éste y la dote de la viuda se trasmitían al hermano que se casaba con ella, si bien no podía enajenarlos. El primer hijo nacido de este consorcio llevaba el nombre del primer marido de su madre y heredaba todos sus bienes, con exclusión de su padre natural y de los demás hijos que éste pudiera tener de otro matrimonio (2). Así se logró conservar muchos años el patrimonio de las tribus y de las familias, á pesar de la tendencia irresistible de la propiedad á comunicarse, dividirse y transformarse, y á pesar también de las revoluciones y trastornos que de tiempo en tiempo cambiaron el estado social polít. del pueblo hebreo.

Estos ejemplos bastan para dar idea de cómo en el mundo primitivo hasta ahora conocido, estuvo constituida la propiedad bajo el influjo de los intereses colectivos. Allí, donde el dominio de la tierra ó de gran parte de ella perteneció al Soberano, ó á una clase privilegiada poco numerosa, ó á familias que no podían enajenarla perpétuamente, predominó el principio de amortización y fué la propiedad inmueble base necesaria de las instituciones sociales y políticas más importantes. Constituida así en la India, mantuvo el sistema de las castas y el régimen patriarcal doméstico, base y cimiento de la organización política de aquella nación. Inmovilizada en manos del monarca, de los sacerdotes y de los guerreros de Egipto, contribuyó la propiedad, durante muchos siglos, á sostener la organización teocrática del gobierno, de la sociedad y de la familia en aquel antiguo reino. Las leyes con que el pueblo de Israel procuró conservar las tierras en las tribus

(1) *Numer*, cap. XXXVI, vers. I et seq.

(2) *Deuteronomio*, cap. XXV, vers. 5.º al 10.

y familias que las poseyeran originariamente, ayudaron no poco á mantener el carácter distintivo de aquella nacion, su espíritu democrático, la igualdad de todos sus individuos ante Dios, y la ley y el depósito de sus antiguas y venerables tradiciones.

La organizacion de la propiedad en Oriente, desde los tiempos más remotos, es la que corresponde á la índole de su civilizacion. Ni en las instituciones religiosas, civiles y políticas ha habido allí alteracion sensible, ni las costumbres han experimentado mudanza notable. Las que fueron en los tiempos más antiguos de que hay memoria, esas son hoy en sustancia, con poca diferencia, llevando todas el sello de la unidad y de la inmovilidad absolutas. Bajo la influencia de la civilizacion oriental, el individuo es poco más que nada; el Estado lo es todo: el uno tiene casi todos los deberes, el otro casi todos los derechos. El Estado absorbe y anonada al hombre. Por eso la propiedad en Oriente presenta caracteres uniformes hasta cierto punto en su esencia; es incompleta en sus derechos, incapaz de desenvolvimiento histórico importante, é insuficiente como medio de civilizacion y de progreso. No levanta el ánimo del hombre al sentimiento de su dignidad, ni favorece su instinto de independendencia, ni contribuye apenas á su perfeccion moral, pero inmoviliza, sostiene y perpetúa las primitivas instituciones sociales y políticas de aquella antiquísima region del mundo.

CAPITULO II.

Relaciones de la propiedad territorial con la religion primitiva y la constitucion de la familia.

Antes de exponer la constitucion de la propiedad territorial en Grecia y Roma y sus vicisitudes, necesito dejar establecido y comprobado un hecho histórico, comun á aquellas Repúblicas, y que sirve para explicar los que son objeto de esta obra. Tal es la íntima relacion de dependendencia que se nota entre las creencias y dogmas religiosos de la antigüedad, por lo ménos en Occidente, y los derechos y obligaciones de la propiedad territorial. Quizá esta misma relacion existió tambien en los tiempos pre-históricos en algunos pueblos orientales, y particularmente en los de la India, madre de las razas europeas; pero son tan escasos los vestigios que quedan de ella, que no bastan para explicar los fenómenos referidos anteriormente. No sucede así en Grecia y Roma, de cuyas instituciones quedan multitud de do-

cumentos auténticos que las dan á conocer, si no con todos sus pormenores, con la mayor parte de los que se necesitan para comprobar las relaciones que existian entre ellas.

Los pueblos de Oriente comunicaron su civilizaci6n á Grecia, segun la tradicion: Grecia trasmitió la suya á Italia; pero habia una institucion comun á estas naciones, que no debió ser importada de ninguna parte, por más que existiese tambien fuera de ellas, puesto que nace espontáneamente con la sociedad primitiva, aunque se organice de diferente modo, segun las circunstancias t6picas que concurren á su establecimiento. Tal es la religion particular y doméstica, el culto de familia, independiente de todo culto general, la adoracion de un Dios privado y exclusivo, ya un idolo especial, ó ya el espiritu ó las imágenes de los propios antepasados. El principio de una religion familiar, protectora de la raza contra todos los peligros del mundo, era sin duda comun á los pueblos indo-europeos, y quizá á todas las sociedades nacies en su organizacion primitiva; mas variando esta religion de forma y caractéres segun los lugares, las razas y los tiempos, no pudo influir de la misma manera en las otras instituciones sociales. Así, pues, el culto de familia existió tal vez en Occidente desde la antigüedad más remota; pero su forma varió, ya por circunstancias t6picas, ya por el influjo de la civilizaci6n, de las costumbres y de las instituciones orientales.

La religion de familia, por la forma en que se practicó en Grecia é Italia, fué la que dió á la propiedad territorial de ámbos pueblos sus caractéres comunes primitivos. Los dogmas y prácticas de esta religion, no diré que fueron la única causa de ellos, como supone un distinguido escritor contemporáneo (1); pero sí que contribuyeron sobre manera á la individualidad, la inalienabilidad, la inviolabilidad y demás circunstancias características del dominio, segun su constitucion primitiva en Occidente.

Eran los dioses de aquella religion el hogar ó fuego sacro que constantemente debia arder en cada domicilio y los antepasados de las respectivas familias. El modo de dar culto á estos dioses tendia á constituir una propiedad individual con condiciones y formas especiales, distintas de las que hemos visto prevalecer en Oriente. Por ellas se establecia un vínculo misterioso entre el suelo y los mismos dioses, sirviendo de intermedio la familia.

(1) Fustel de Coulanges *La cité antique*; París, 1866 cuya doctrina acepto y cito en todo lo que se refiere á las relaciones del culto con la constitucion primitiva de la propiedad.

y este vínculo daba al dominio de la tierra aquellos importantes caracteres.

Hé aquí cómo la práctica de semejante culto conducía á este resultado en Grecia y en Italia. Cada casa y cada familia, poseyendo sus dioses particulares, necesitaban para ellos un altar, símbolo de la vida sedentaria. Una vez colocado este altar, no podía trasladarse á otro sitio sin vencer graves dificultades materiales y religiosas. Junto á él habitaba la familia, que debía desempeñar los actos del culto, y así se establecía un lazo estrecho entre ella y el espacio por el dios hogar ocupado. Cada familia necesitaba su dios, por cuanto el de una no servía para nada á otra, ni los extranjeros podían acercarse á él, ni invocarle. De aquí el aislamiento del hogar y su carácter doméstico y reservado, que indicaban sus nombres genéricos de *Dios oculto* en Grecia y de *Penates* en Roma. El aislamiento del hogar requería un espacio alrededor cercado, que lo ocultara de la vista pública y lo separara del hogar vecino. Este recinto era sagrado y estaba protegido por el dios al cual servía de asilo. En él se hallaban en los tiempos primitivos no sólo la casa-habitación de la familia, sino sus ganados y sus tierras cultivadas. Por eso cuando se fabricaron ciudades no fueron contiguos sus edificios, ni se levantaron paredes medianeras. En Roma debía mediar por lo ménos un espacio de dos pies y medio entre las casas respectivas (1); lo cual, si con el tiempo pudo considerarse como una mera regla de policía urbana, quizá tuvo su origen en aquella prescripción religiosa. El hogar aislado é incomunicado, con habitación para la familia, no se concibe sin muros ó setos que la defiendan de la pisada del vecino, ni sin la libre disposición de su recinto. De aquí aquel proverbio griego que recuerda Diodoro de Sicilia: «La religion enseñó al hombre á fabricar su casa (2).» De aquí la propiedad individual y privada del mismo recinto, con derechos tan exclusivos y tan sagrados, como que participaban de ellos los dioses, lares que en él tenían su asiento. «¿Qué cosa más sagrada, decía Cicerón, que la habitación del hombre? Allí está el altar; allí arde el fuego sagrado; allí están las cosas santas y la religion (3).» Tales creencias exigían, como se ve, la inviolabilidad del domicilio.

Eran también objeto del culto doméstico los manes de los antepasados, cuyos espíritus se suponían encerrados en el fondo misterioso de sus tum-

(1) Varron, *De lingua latina*, v. 22.—*Festus. Verb. Ambitu*.

(2) V. 68.

(3) *Pro domo*, 41.

bas. Considerábanse los mayores como una especie de semidioses, propiedad exclusiva de sus descendientes, á quienes protegían con su sombra, y que sólo ellos invocaban en sus aflicciones. Los extraños nada podían esperar de su munificencia. Cada familia tenía su sepulcro separado, en el cual únicamente podían ser sepultados sus individuos. Por eso era acto de impiedad muy grave extraer á un muerto de su tumba propia ó no enterrarle en ella. Cuando esto sucedía se juzgaba que el espíritu del difunto vagaba errante y en pena, causando estragos en las propiedades y en las personas, en venganza de la impiedad cometida. Pero una vez sepultado el cadáver, tomaban sus manes posesion del lugar de la sepultura y no podían ser despojados de ella. Así no era permitido en Grecia demoler ninguna tumba (4), y en Roma se necesitaba para trasladarla una licencia especial de los Pontífices (5). Una de las principales ceremonias del culto de los muertos era la comida fúnebre que en días señalados debía celebrar la familia junto á su sepulcro con ritos y prácticas especiales.

Todas estas creencias influyeron poderosamente en la constitucion de la propiedad. Si solamente la familia tenía el deber y el derecho de tributar culto á sus antepasados y optar á sus beneficios; si ella solamente podia intervenir en las ceremonias domésticas y velar por el reposo y bienestar de sus mayores, toda familia necesitaba poseer exclusivamente un pedazo de tierra destinado á esta práctica esencial de su religion. Si el lugar de la tumba quedaba perpétuamente santificado; si no era fácil ni conveniente trasladarla con frecuencia; si los muertos tenían en su propiedad cierta participacion, el dominio de las familias en esta parte del suelo debía ser necesario, inalienable é imprescriptible.

Su destino no era prestar servicio tan sólo á una persona, ni á una generacion, sino á una sucesion de generaciones, y de aquí el deber de conservarlo y transmitirlo íntegro de una en otra. El lugar de la sepultura era, pues, una propiedad colectiva, amortizada en la familia é instituida en su favor. Así es que todavía en tiempo de Ciceron prescribia la ley romana que si alguno vendiera el campo en que se hallara la tumba de su familia, se entendiese excluido de la enajenacion el lugar que ocupara aquella, y reservado además el derecho de paso á la misma, á fin de que no dejarán de cumplirse las ceremonias del culto (1). Y como la costumbre primitiva en

(4) Licurgo contra Leocrates, 25.

(5) Plinio, *Epist.* 10 y 73.

(1) Cicer. *De legibus*, II, 24, = *Dig.*, lib. XVIII, tom. I, l. 6.

Grecia y en Roma fué enterrar los muertos de cada familia en su heredad propia (1), que era por lo comun la del hogar y del domicilio, la propiedad de la tumba fué inseparable de la del campo contiguo, quedando una y otra bajo la proteccion de los manes encerrados en sus entrañas. Hé aquí cómo sin la propiedad individual y estable, dada la creencia de los antiguos en los *lares* y *penates*, el Dios del hogar habria andado errante, las familias se habrian mezclado y confundido, y los muertos habrian quedado abandonados y sin culto, con grave ofensa del dogma religioso.

La constitucion de la propiedad individual, bajo los auspicios de la religion, ofrecia aún otra ventaja importantísima en las edades primitivas, que era consagrar su inviolabilidad por los medios más eficaces y con la más poderosa de las sanciones. Los dioses que habitaban dentro del recinto familiar eran los encargados de defenderlo y custodiarlo. Guardas del campo les llamaba Tibulo (2), sin duda porque los dioses concurrían á señalar y consagrar la division y límites entre las propiedades. El espacio de tierra inculta, de algunos piés de ancho, que circuía la heredad, separándola de las vecinas, era en Roma lugar sagrado é imprescriptible (3). Para mantenerlo inviolable, solia el padre de familias recorrerlo solemnemente de tiempo en tiempo, cantando himnos y llevando delante de si las victimas que despues ofrecia en holocausto (4). Otras veces colocaba en el mismo espacio hitos de piedra ó madera, con sacrificios y ceremonias religiosas. Estos hitos eran sagrados, como que representaban la imágen del dios *Término*, y por lo tanto inamovibles. La tradicion contaba que Júpiter, queriendo levantarse un templo en el monte Capitolino, no pudo desposeer á aquel dios. Para invadir el campo ageno era menester quebrantar sus límites; derribando á un dios, y por lo tanto cometer un sacrilegio; que la ley romana castigaba consagrando, esto es, inmolando al hombre ó al animal invasor (5). Los sabinos los helenos y los etruscos tenían tambien sus términos sagrados. Una ley helénica decia que «quien tocara ó separara algun hito, seria condenado por los dioses: su casa desaparecería; su raza se extinguiría, su

(1) Esta costumbre la atestiguan en Grecia una ley de Solon citada por Gayo in *Dig.* lib. X, t. I, l. 13, Plutarco in *Aristides*, y Demóstenes, *contra Calicles*; y en Italia las Doce Tablas y Sículo Flaco (edic. Goez p. 4, 5) cuando dice que "habia antiguamente dos modos de colocar las tumbas: á la orilla ó en medio de los campos."

(2) *Lares agri custodes*. I. l. 23.

(3) Circer. *De legibus*, I. 21.

(4) Caton. *De re rustica*, 141.

(5) *Festus verb.* Terminus,

tierra no produciría fruto; el granizo, el moho y el fuego de la canticula destruirían su cosecha, y sus miembros se cubrirían de úlceras y se caerían de consuncion» (1).

Con la religion doméstica, que tendia, como se ve, á la individualidad, la *familiaridad*, y la inalienabilidad del dominio, concurría á la constitucion de este en Grecia y en Italia, otro elemento poderoso, que era el influjo de la civilizacion oriental, con su propension manifiesta á negar la propiedad individual y á reconocer en el Estado la absoluta de todo el territorio. A estos dos elementos históricos y tradicionales se agregaba aún el del carácter natural, independiente y expansivo de los pueblos, que pugnaba constantemente por la propiedad individual. De modo que la de Grecia y Roma fué el resultado de estos tres elementos diversos en los varios periodos de su desenvolvimiento y de su lucha. El elemento oriental prevaleció más en Esparta que el europeo: éste más que el otro en Atenas, pero gravemente restringido siempre por el elemento religioso. Modificase este último, particularmente en Roma, ó se debilita su influjo en las instituciones civiles, piérdense las reliquias de la civilizacion oriental depositadas en ellas, y predomina el elemento europeo.

Véase ahora cómo se combinaron estos elementos en Grecia y Roma para dar forma y vida á la propiedad territorial.

CAPITULO III.

Constitucion de la propiedad territorial en Grecia.

En Esparta, como en Oriente, la propiedad originaria de la tierra correspondia toda al Estado, el cual distribuyó una parte considerable de ella entre los ciudadanos, en porciones iguales. La república se reservó indivisa otra parte del suelo, para proveer con ella de sus lotes respectivos á individuos de las futuras generaciones, que por las leyes de sucesion no debieran disfrutar de los repartidos. Aun en estos hubo de conservar la República cierto dominio directo, pues lo que los ciudadanos adquirieron fué, más bien que la propiedad absoluta, una especie de usufructo revocable. Así se infiere de que Licurgo pudiese, muchos siglos despues, sin grave in-

(1) *Scriptores rei agrariae*. Edic. Goetz, pág. 258.

conveniente de injusticia, hacer un nuevo reparto de todas las tierras, distribuyendo 900 lotes entre los ciudadanos y 50.000 entre los habitantes de la Laconia (1). Este segundo repartimiento hubo de verificarse para restablecer la igualdad de los lotes del primero, profundamente alterada con el trascurso del tiempo, por la fuerza natural de las cosas. Entonces la porcion individual de los varones hubo de ser mayor que la de las mujeres.

Propúsose además Licurgo mantener perpétuamente esta division de las propiedades y realizar la utopia seductora de la igualdad de las fortunas, para conservar así las familias privilegiadas, á quienes correspondia únicamente el dominio del suelo y el manejo de la cosa pública. Las prescripciones religiosas favorecian además este intento, por los estrechos vínculos que establecian entre las familias y sus moradas respectivas, templo de sus dioses privados, segun antes queda dicho. Así no hubo de parecer violenta la ley que en Esparta y en otras ciudades de Grecia prohibia enajenar los bienes inmuebles, bajo pena de infamia, escepto en casos de necesidad extrema (2). Establecióla Licurgo en Esparta, rigió en Locres y en Leucades (3), y Phidon la introdujo en Corinto, aunque indirectamente, ordenando que fuesen inalterables el número de las familias y sus patrimonios (4). En consecuencia de esta inalienabilidad primitiva de las propiedades, no fué conocida en Grecia la expropiacion por causa de utilidad pública, y hasta que imperó por completo la democracia, no se usó la confiscacion sino como resultado forzoso del destierro, que privaba al desterrado de todos los derechos de ciudad. Aún la expropiacion de los inmuebles para el pago de deudas no estaba autorizada en algunas repúblicas; y en Elea, se sabe por Aristóteles, que estaba prohibida la hipoteca.

Era tambien consecuencia de este sistema de inalienabilidad é igualdad de fortunas la prohibicion de dotar á las mujeres, que existió asimismo en Esparta (5), puesto que con las dotes habria menguado el patrimonio de unas familias y excedido el de otras de la tasa legal. El legislador hubo de considerarlas innecesarias, teniendo en cuenta, sin duda, que el hijo primogénito heredaba íntegro el lote del padre, y que los demás hijos debian

(1) Plutarco, *Lycias*, pár. 12.

(2) Plutarco, *Licurgo: Agis*.

(3) Arist., *Polit.* II, 4, 5.

(4) Arist. *Polit.*, II, 5, 7.

(5) Eliano. *Histor. divers.*, lib. VI, c. 6. Justin., 3, c. III, *Apoplith.*, página 227.

recibir el suyo de la República, si reconocidos sus cuerpos en el Consejo de los Ancianos, parecían robustos y útiles (1).

La religion doméstica era, como he dicho antes, un depósito de familia que se trasmitia hereditariamente por linea de varon; y siendo la propiedad en cierto modo, una dependencia de ella, debia trasmitirse de la misma manera, sin tener en cuenta para nada la voluntad del propietario. El hijo varon primogénito sucedia exclusivamente al padre en sus funciones de jefe de la religion doméstica y director de sus ceremonias y sacrificios, por lo cual debia tambien corresponderle la facultad de disponer del lugar en que estos debian verificarse y de las cosas inherentes á ellos. Hé aquí cómo la ley religiosa cooperaba á los fines de la civil, que en Esparta procuraba mantener la integridad y primitiva division de los patrimonios. Por eso en los primeros tiempos de aquella República heredaba todo el haber del padre el hijo varon primogénito (2); por eso en Tebas y en Corinto no podia aumentarse ni disminuirse el número de los lotes de tierra (3), lo cual impedia toda division hereditaria entre los hermanos. No trasmitiéndose el culto sino por linea de varon, no existia parentesco sino entre los individuos de ella, y así es que los que sucedian como parientes, á falta de hijos, tanto en las cosas divinas como en las humanas de la familia, eran solamente los colaterales de la misma linea, por su órden de hermanos, sobrinos, tíos, etc.

Establecida por la ley una regla inflexible para la sucesion hereditaria, eran inútiles los testamentos. ¿De qué hubiera servido la facultad de otorgarlos cuando no podia darse á los bienes otro destino que el prescrito por el legislador? Así es que no los hubo en Esparta hasta despues de la guerra del Peloponeso (4), del mismo modo que tampoco fueron conocidos en los tiempos más remotos de la India, ni posteriormente, en Tebas ni en Corinto (5). La sucesion del hijo en las funciones religiosas del padre no era sólo un derecho, sino un deber riguroso, y de aquí su calidad de heredero necesario del haber paterno. Por eso no disfrutó en Grecia la facultad de renunciar la herencia, ni la de aceptarla á beneficio de inventario.

Pero como el fin á que aspiraba el legislador de Lacedemonia era una utopia irrealizable, todos sus esfuerzos fueron inútiles para dar larga vida á su obra. El europeo, independiente y ambicioso, no se sometia tranquila-

(1) Plutar. *Lycias*, 32.

(2) *Fragm. des historiens grecs*. Coll. Didot, t. II, p. 211.

(3) Arist. *Polit.*, II, 9.

(4) Plutarco. *Agis*, 5.

(5) Arist. II, 3.

mente á unas leyes que condenaban todas sus aspiraciones á los goces y á la fortuna. Por otra parte, el rigor de los preceptos religiosos, que daban á la sociedad una cierta organizacion aristocrática, no podia ménos de relajarse con los triunfos repetidos y la preponderancia reciente de la democracia. Así al cabo de algun tiempo pudo el Eforo Epydates hacer pasar en Esparta una ley autorizando los testamentos y las donaciones entre vivos, y otra llamando á las hijas á la sucesion de sus padres (1). Entonces cesaron tambien los privilegios de la primogenitura, cuya abolicion habian reclamado en algunas ciudades, con las armas en la mano, los hijos menores de las familias patricias. Ellos hubieron de ser los que, segun Aristóteles, se sublevaron contra la autoridad paterna y los privilegios de los primogénitos en Heraclaea, Cnide, Istros y Marsella (2), logrando por este medio los derechos políticos de que antes carecian.

Con tales leyes quedaron necesariamente sin efecto las que prohibian la enajenacion de las tierras, pues era en vano esta prescripcion cuando por última voluntad ó por derecho de sucesion hereditaria, podian dividirse ó acumularse, como en efecto se acumularon y se dividieron, los patrimonios familiares. El espectáculo de la opulencia de los ricos junto á la miseria del mayor número dió ocasion más de una vez al levantamiento contra aquellos, de la codiciosa muchedumbre. Estimulado y auxiliado por ella, intentó el rey Agis restablecer las instituciones antiguas y el nivel entre las fortunas, haciendo una nueva distribucion de las tierras y aboliendo las deudas. Al principio luchó con buena suerte; mas á pesar de sus triunfos y de su ejemplo generoso, sucumbió al fin en la empresa. Lo mismo intentó despues el rey Cleomene, y destronado, tuvo que acabar sus dias en las prisiones de Egipto (3). Ninguno de ellos logró, pues, realizar con la fuerza y el auxilio de la democracia lo que antes hiciera Licurgo, sin obstáculo ni resistencia, y era que el sentimiento de la libertad y del dominio individual habia llegado á ser más poderoso que el influjo de las tradiciones orientales y de las formas rigoristas del culto doméstico.

Siendo este culto igual en Atenas, y poseyendo los atenienses las mismas tradiciones orientales, la propiedad territorial en esta República debió tener en su origen los mismos caracteres distintivos que en Esparta. Allí tambien el Estado, dueño de todas las tierras, las dividió entre los ciuda-

(1) Plutar. *Agis*, 7, 24.

(2) *Polit.*, VIII, 5.

(3) Plutar, *Agis*, 26, *Cleomene*, 36.

danos: allí tambien la religion privada hizo inalienables estas propiedades. Pero en cuanto á la extension de los derechos del dominio y á la cuantía de los patrimonios, hállase desde luego notable diferencia entre ambas repúblicas. En Atenas hubo de hacerse el primer reparto de tierras sin reservarse el Estado derecho alguno de reversion sobre ellas, puesto que Solon, al dictar sus leyes, resistió como injustas las pretensiones de la muchedumbre, que exigía una nueva distribución de las propiedades. Verdad es que transigió con la democracia, autorizando una nada justa reduccion de las deudas; pero esta concesion, por censurable que fuese, no quebrantó al ménos la inviolabilidad del dominio territorial, que quedó á salvo. Tampoco aspiró el legislador de Atenas á realizar el principio quimérico de la igualdad de fortunas. Lejos de eso, reconoció como fundamento de su Constitucion la desigualdad de los patrimonios, al tomarla por norma para dividir al pueblo en cuatro clases, fijando con arreglo á ella los derechos políticos de los ciudadanos (1).

Mas si aquella aspiracion quimérica no contribuyó en Atenas, como en Esparta, á la inalienabilidad de las propiedades, la identidad del culto religioso hubo de producir este resultado en los tiempos primitivos. Solon no prohibió enajenar las tierras, pero dificultó extremadamente su circulacion, privando al que las vendiese de sus derechos de ciudadano (2). En todo caso la mutacion de la propiedad necesitaba autorizarse por la religion, solemnizándola con un sacrificio religioso; y el mero gravámen de ella requeria ser anunciado al público con signos exteriores, que no dejasen duda del estado político del propietario.

Consecuentes con estos principios los atenienses, lo mismo que los lacedemonios, no conocieron en los tiempos antiguos las dotes ni los testamentos. La herencia correspondia toda entera á los hijos varones, y entre estos, probablemente, al primogénito: á falta de descendientes varones, pasaba á los parientes colaterales de la linea paterna por su orden y grado.

Mas la legislacion posterior escrita fué una obra de ingeniosa transaccion entre aquel antiguo derecho y el que inspiraban la equidad y la naturaleza. Solon autorizó el uso de las dotes, pero con tal de que no se dieran por razon de ellas, sino objetos de corto precio (3). Tambien autorizó la testa-

(1) Plutar. *Solon*, 20, 25 y 26.

(2) Eschino contra Timarco, Diogen. Laerc., I, 55.

(3) Plutar. *Solon*, 37.—Con el tiempo, sin embargo, se olvidó esta restriccion y se generalizó la costumbre de otorgar dotes cuantiosas.

mentifaccion, pero solamente en favor de los ciudadanos que careciesen de hijos legítimos varones (1).

Esta novedad importantísima no hubo de recibir desde luego la aprobacion unánime de la ciencia. Mientras que los legisladores, hombres prácticos, se esforzaban por conciliar las tendencias opuestas de la tradicion y de la libertad, los filósofos se apasionaban teóricamente por una ó por otra, forjando algunas utopías seductoras, que la experiencia no autorizó jamás. Platon, el más grande de todos ellos, tomando la defensa de la tradicion, supone en su tratado *De las leyes* que un hombre exclama en el lecho de la muerte: «¡Oh Dioses, qué duro es no disponer de mis bienes como mejor me parezca, en favor de quien me agrada, dejando más á este y ménos á aquel, segun el afecto que me manifiesten!» Y el legislador le responde: «Tú, que no puedes esperar más de un día de vida; tú, que pasas solamente por la tierra, ¿quieres decidir tales negocios? Tú no eres dueño de tus acciones ni de tí mismo; tú y tus bienes pertenecen á tu familia; es decir, á tus antepasados y á tu posteridad..... Que nuestros ciudadanos dividan entre sí las tierras.....; mas persuádanse de que la porcion que toque á cada uno en el reparto no será ménos del Estado que suya..... (2).» Tal era, en efecto, el espíritu de la antigua legislación griega, al cual obedecian los modernos legisladores cuando no osaban dar satisfaccion cumplida al sentimiento individualista en el régimen de la propiedad.

Este sentimiento, sin embargo, fué más poderoso que la filosofía política tradicionalista de la época, y en su consecuencia no sólo fué admitida la testamentifaccion, segun queda dicho, sino que se quebrantó el rigor de los principios que excluian á las mujeres de toda participacion en la herencia paterna, sacrificando hasta cierto punto, los intereses de la familia religiosa y civil á los de la familia natural. Fué permitido al padre menguar la legítima de su hijo y heredero, para constituir dote á las hijas que no le podian heredar. Así pudo el padre de Demóstenes destinar una sétima parte de su herencia para dote de una hija, hermana del gran orador (3). Al hijo heredero se impuso la obligacion de casarse con su hermana consanguínea, ó dotarla convenientemente, haciéndola partícipe de este modo en la herencia paterna (4). El pariente colateral que heredaba á falta de hijos varones, te-

(1) Plutar. *Solon.*, 21.

(2) *De legibus*, diálogos 5 y 11.

(3) Demost. in *Boeotum*.

(4) Demost. in *Eubul.*—Plutar. *Themist.*, 22. *Isco*, X, 4.

nia la misma obligacion respecto á la hija del difunto, y si aquel ó esta se hallaban casados, podian divorciarse para contraer el nuevo matrimonio (1). El que tenia una hija y ningun hijo, podia tambien casarla con un extraño, bajo la condicion antes dicha, de reputar como propio el hijo que naciera de ella.

En Atenas, como en toda la Grecia, no se estimaban parientes con derecho á heredar, sino los de las líneas de varon. Decia una ley antigua de aquella república: «Si un hombre muere sin hijo, le heredará su hermano, con tal que sea consanguíneo, y en su defecto el hijo del hermano, porque la sucesion pasa siempre á los varones y á los descendientes de varones (2).» Mas esta ley, que respondia exactamente á la tradicion y á los preceptos religiosos, estaba modificada en tiempo de Demóstenes, puesto que ya entonces solia estimarse parentesco el que venia por linea de mujer. Tampoco quedaron abolidos de una vez en Atenas todos los privilegios de la primogenitura. Al derecho exclusivo del primogénito á la herencia del padre, sucedió el igual de todos los hijos varones; pero todavia en tiempo de Demóstenes conservaba el hijo mayor la ventaja sobre sus hermanos, de heredar la casa paterna, además de su legítima (3): vestigio indudable de antiguas costumbres y prueba concluyente de la relacion intima que originariamente existia entre el domicilio y la religion, y entre las funciones del culto y el gobierno de la familia. Por último, la sucesion entre parientes colaterales quedó atribuida, á falta de hermanos consanguíneos, á los sobrinos, hijos legítimos de ellos: en su defecto á los nietos y descendientes de los mismos hermanos, prefiriendo los varones á las mujeres, aunque estuvieran en grado remoto; y no habiéndolos, tocaba suceder á los primos-hermanos por linea paterna y á sus hijos. Mas cuando faltaran todos estos parientes, fueron llamados á la herencia por orden de grados, hasta el quinto, los colaterales de la linea materna; y sólo no habiéndolos tampoco, entraban á heredar los parientes del padre en grados más remotos (4).

Con todos estos paliativos y transacciones prudentes trataron los griegos de conciliar la conservacion de las familias, que como las castas privilegiadas de Oriente, constituian el nervio de la República, con la justa satisfaccion de los derechos individuales, obra de la naturaleza. Habia, sin embargo, una diferencia importante entre la propiedad espartana y la ateniense. Una

(1) *Iseo*, III, 64, X, 5.—*Demos. in Eubul.*, I, 41.

(2) *Demos. in Macart.*; in *Leoch.* *Iseo*, VII, 20.

(3) *Demos. in Boet. de nomine.*

Demos. in Macart.—*Iseo, Success. de Pyrrho.* *Herald.*, *Quæst. quotidianæ*, I, c. 17

y otra reconocían sin duda orígenes comunes en la India y en una religión primitiva; mas al plantearse en Europa, la espartana conservó y retuvo muchos más vestigios de su historia que la ateniense. Aquella, por lo tanto, tardó mucho más tiempo en *individualizarse* y salir de la dependencia inmediata del Estado: esta se hizo independiente desde luego. Ambas fueron limitadas en sus derechos por motivos religiosos y por intereses colectivos de familia; mas la espartana vivió además oprimida, y quedó, durante mucho tiempo, sacrificada al propósito quimérico de la igualdad de fortunas. Esta circunstancia contribuyó poderosamente á estancarla y amortizarla en pocas familias, y á retardar su desenvolvimiento y progreso. En Atenas no incurrieron los legisladores en error tan grave, y así, aunque sujeta la propiedad por los vínculos de familia, y amortizada, hasta cierto punto, en su beneficio, no tuvo el Estado en ella los derechos que en la de Lacedemonia.

CAPITULO IV.

Propiedad romana: sus clases: su trasmisión por muerte.

I.

ORIGEN DE LAS DIVERSAS CLASES DE PROPIEDAD.—DOMINIO QUIRITARIO.

La propiedad territorial apareció por primera vez en Roma en forma colectiva y con todos los caracteres de la oriental. Mas siendo allí el culto doméstico privado el mismo que en Grecia, hubo de contribuir de igual manera á *individualizarla* y á hacerla cada día más independiente del Estado. En pugna ya los dos principios antitéticos, característicos del dominio, produjeron una larga rée de revoluciones sociales y de trastornos políticos, que demuestran hasta la evidencia el influjo constante de una ú otra forma de la propiedad territorial en el progreso de la humanidad y en la vida de los Estados.

Supónese que Rómulo dividió en tres partes el territorio romano, de las cuales una repartió con igualdad entre las treinta curias que componían el púeblo; otra muy considerable destinó al culto público, y otra reservó para el Estado con el nombre de *ager publicus*. Cada una de las curias adquirió por este reparto el dominio colectivo de las tierras que le tocaron en suerte, las cuales hubieron de permanecer indivisas entre los miembros de las mismas curias, sin que ninguno de ellos adquiriese propiedad individual y ex-

clusiva en alguna de sus porciones. Ignórase cómo en aquella edad remota utilizaron los ciudadanos estas tierras. Tampoco se sabe cómo aprovecharon la religion y el Estado las que se reservaron. La tradicion de antigüedad tan remota aparece siempre vaga é incompleta, mucho más cuando es objeto de controversia como la historia de los tiempos primitivos de Roma.

Mas esta forma de propiedad no correspondia ya probablemente á las necesidades ni á los sentimientos de independencia del pueblo romano, y así bajo el segundo de sus reyes hubo de cesar la indivision de las tierras repartidas á las curias. Cuéntase de Numa Pompilio que distribuyó estas tierras por suertes entre los ciudadanos que antes las disfrutaban en comun, que consagró con ceremonias religiosas los límites de las nuevas heredades, y que determinó los derechos de sus dueños (1). Algunos escritores contradicen el hecho de la indivision primitiva del campo romano, suponiendo que las únicas tierras que individualmente repartió Numa fueron las que su predecesor Rómulo habia conquistado por la guerra. Ciceron dice, en efecto, que Numa distribuyó *agros, quos bello Romulus ceperat*; pero Plutarco y Dionisio Halicarnaseo, que confirman el hecho, no lo hacen con la misma limitacion (2), ni la supone siquiera necesariamente el texto de Ciceron citado, ya que de repartir Numa las tierras conquistadas por Rómulo, no se infiere que no hiciera lo mismo con las que indivisas podian pertenecer á las curias. Mas de cualquier modo que esto fuese, basta consignar parami propósito que la individualidad del dominio, si no existia ya en Italia al fundarse en Roma, se determinó y regularizó por lo ménos en sus tiempos primitivos.

Los derechos adquiridos por aquellos ciudadanos, trasmitidos despues á sus sucesores, constituyeron con el tiempo el dominio más completo é independiente que en la antigüedad se conoció, el *jus quiritarianum*. Mas por lo mismo que comprendia tantos derechos fué más limitado su uso, y así durante algunos siglos no se extendió sino á las tierras del campo romano, repartido á las curias y á las equiparadas despues á ellas, y no se ejerció sino por los ciudadanos romanos y los del Lacio, que disfrutaban el estado de *latinos*. Los italianos y los extranjeros tardaron mucho tiempo en adquirir la capacidad de tal dominio.

Las tierras consagradas al culto público debieron ser de gran importancia, puesto que vendida una parte de ellas por orden del Senado, bastó su

(1) Ciceron. *De Repub.* II, pár. 14. Dionis. Halicarn. *Antiquit.* II, 74.

(2) Cicer. y Dionis., *lug. cit.*, y Plutar. *Numa*, 16.

precio para costear la guerra con Mitridates. Esta propiedad no varió tampoco despues de condicion. Desde el principio fué excluida del comercio, y así permaneció, excepto en circunstancias extraordinarias, en las cuales, si las necesidades públicas lo exigian, se autorizaba la enajenacion de alguna parte de los bienes de los templos, como sucedió en la guerra citada. Era, por último, esta propiedad imprescriptible; quien la detentaba, no llegaba jamás á adquirirla legitimamente, cualquiera que fuese el número de años que la poseyera.

Las tierras del Estado, *ager publicus*, se aprovechaban, adjudicándolas en pequeñas porciones, como en arrendamiento ó usufructo, á los caballeros, mediante cierta pension y con reserva absoluta del dominio directo. A estas tierras se equipararon despues, aunque no en todo absolutamente, las conquistadas fuera de Italia, que tomaron el nombre de *propiedades provinciales*. La República utilizaba estas propiedades, ya dejándolas á sus antiguos poseedores, mediante el pago de un cánon cierto, ya arrendándolas ó ya vendiéndolas, pero reservándose en todo caso una especie de dominio directo. Por consecuencia de esta reserva, los poseedores de las *tierras provinciales* no podian consagrarlas ni enajenarlas por derecho quiritarío, ni transmitir las por testamento, ni adquirirlas por *usucapion*, y pagaban como tributo generalmente el diezmo de los granos y el quinto de los demás frutos. Con razon, pues, no se llamaba dominio el derecho de los poseedores de estas tierras, sino *posesion* ó *usufructo* (1).

El dominio quiritarío fué, pues, el único que quedó constituido con independencia del Estado y en provecho exclusivo del individuo, pero considerándose tal, no la persona aislada del propietario, sino la familia ciudadana representada por su jefe. Ni el Estado ni la curia tuvieron participacion alguna en la propiedad privada, al ménos desde el reinado de Numa; pero en cambio prevalecieron en su constitucion los intereses de la familia civil, que era base y cimiento de aquella república. El Estado entonces no se componia como hoy de individuos, sino de familias fuertemente organizadas, cuya conservacion procuraban á toda costa los legisladores.

No es fácil saber hoy si para asegurar el cumplimiento de este propósito fueron en su origen inalienables las propiedades quiritarias, no conociéndose leyes anteriores á las Doce Tablas. De ellas y de la circunstancia de

(1) De estas propiedades decia el jurisconsulto Gayo: "*In eo solo dominium populi romani est vel Caesaris, nos autem possessiones tantum et usufructum habere videmur.*" Inst. II, 7.

haber profesado los romanos el mismo culto privado y familiar que los griegos, puede, sin embargo, deducirse la presuncion vehemente de una inalienabilidad primitiva, semejante á la notada en Grecia. Aquellas leyes famosas permitian enajenar las heredades, pero con exclusion del lugar que ocupaban los sepulcros de las familias, y con reserva de las servidumbres necesarias para facilitar el paso á ellos. ¿No fué esta tal vez una novedad en la legislacion consuetudinaria que anteriormente no autorizaba semejantes enajenaciones?

De cualquier modo que esto fuese, la trasmision de la propiedad quiritaria no se verificaba por actos privados. Interesaba á la religion doméstica y á la familia, porque en la heredad vendida residian sus dioses y se hallaba el asiento de su culto: afectaba al Estado, porque aquella propiedad era el patrimonio político de la aristocracia, que lo constituia y gobernaba. Por eso su enajenacion, aunque permitida, no podia verificarse sin que la autorizaran é intervinieran oficiales públicos, ministros á la vez del culto. Ni la simple manifestacion de la voluntad, ni la entrega material de la cosa, bastaban para trasladar el dominio quiritario (1). La division de un patrimonio entre hermanos requeria ciertas ceremonias religiosas y la intervencion de un sacerdote *agrimensor*. La venta exigia tambien formalidades de la misma indole, en preseneia del sacerdote *libripens*, y la ceremonia de la *mancipacion*.

¿No es todo esto quizá un indicio de cierta inalienabilidad primitiva, inspirada por intereses religiosos y políticos, y que por lo tanto no podia ser revocada sin el consentimiento de la religion y del Estado? Así es que la propiedad provincial, que habia tenido distinto origen, que era ajea al culto doméstico y extraña á la Constitucion del Estado, puesto que no atribuia derechos políticos, no estuvo nunca sujeta á tales restricciones, y se transmitió y comunicó sin ceremonias religiosas, por los medios naturales que la equidad y la razon sugieran.

Consagrada la propiedad quiritaria á la familia civil, no estaba, sin embargo, al alcance de todos sus individuos. Fiel á la tradicion religiosa de sus orígenes, siguió transmitiéndose con la direccion del culto doméstico; y correspondiendo tales funciones al más anciano de los ascendientes vivos, este fué el único jefe y representante de la familia, y tambien el único propietario en ella. Todos los individuos sujetos á su potestad, no solamente se hallaban incapacitados para ejercer el dominio, sino que ellos mismos

(1) Gajii Inst. II, 22, 65.

eran propiedad del padre de familias (1). Así, la mujer que no era hija de familias estaba perpétuamente en la tutela de sus agnados, sin cuya licencia no podía testar, ni contraer obligaciones, ni enajenar sus bienes. Por lo mismo, al casarse la mujer entraba con toda su hacienda, inclusa la dote, en poder de su marido (*manus*), constituyéndose su hija de familias. Además, en los primeros tiempos de la República adquiría el marido tan irrevocablemente la dote de su mujer, que no podía esta exigir su restitución, ni aún en el caso de ser repudiada (2). Y no se crea que estas costumbres y disposiciones legales tenían por objeto en los primeros tiempos la protección de las personas que por su edad ó sexo no podían defenderse á sí mismas. Este pudo ser el fin de la parte que de ellas subsistió y de otras análogas, adoptadas posteriormente; mas en los orígenes de la república y durante algunos siglos después, lo que se procuraba por tales medios, era conservar las familias, evitando que se quebrantase su unidad y que se desmembrase su patrimonio.

Era tan inseparable la propiedad de la familia y tan inviolable el dominio del ciudadano, que en Roma, lo mismo que en Grecia, no se conoció la expropiación por causa de utilidad pública, y ni aún siquiera hubo de ser admitida en el derecho antiguo por causa de deudas. La ley de las Doce Tablas, tan rigurosa contra el deudor, le conminó á pagar con su cuerpo, y no forzosamente con su propiedad. El propietario que caía en la esclavitud por deudas no perdía sin duda el dominio de todas sus cosas, puesto que la ley de las Doce Tablas suponía el caso de que viviese de lo suyo, *si volet suo vivere*; y sólo cuando esto no se verificaba, debía el acreedor alimentarle con una libra de pan (3). El acreedor se servía del deudor esclavo y de sus cosas, mas sin adquirir el dominio de ellas. Abolida posteriormente la servidumbre por deudas, fué cuando, para no quebrantar, siquiera en la apariencia, la inviolabilidad del dominio, se inventó que el Pretor pudiese vender para pago de los acreedores, no la *propiedad* ó *dominium* del deudor, sino sus bienes, *bona*. Con esta pueril distinción se creyó mantener el principio del antiguo derecho, que no permitía despojar al ciudadano, contra su voluntad, de aquel dominio quiritorio tan privilegiado y tan independiente.

(1) Sext. Empiric. Pyrrhon. Hypot. III, c. 24.

(2) Gayo, *Inst. III*, 82. Cicer., *Topic*, n. 4. Boethius., *Ad topic.*, edic. Orelli, p. 317.

(3) Haubold. *Tablas cronológicas de la Hist. del Derecho romano. Fragmentos de las leyes de las Doce Tablas*. Tabla 3.*

II.

SUCESSION HEREDITARIA Y TESTAMENTIFICACION.

El mismo propósito de mantener la unidad y el esplendor de la familia y la observancia de los preceptos del culto, se descubre en el modo de disponer de la propiedad por causa de la muerte. La ley establecía un orden riguroso de sucesion, conforme con aquellos principios. La herencia, como el culto doméstico, *sacra privata*, se trasmitía á los hijos de varon en varon, juntamente con la familia y su gobierno. La familia era, pues, un conjunto de intereses domésticos, religiosos y políticos, que constituian uno de los elementos componentes del Estado: el heredero sustituía al difunto en la representacion y direccion de estos intereses. Por eso no era indiferente para la República que las familias conservasen su unidad y su integridad: por eso procuraron las leyes antiguas que se trasmitiesen enteras con sus cargas y beneficios, y que su representacion y gobierno no recayesen en personas inhábiles para desempeñarlos.

La existencia de un heredero no interesaba solamente al favorecido, sino al heredado, á su familia entera y á la República. Al difunto, porque de este modo lograba, á pesar de su muerte, una como prolongacion de su vida, á la cual servian de alimento los sacrificios y los convites funerarios: á la familia, porque así mantenía su integridad y su culto y su poder en el Estado: á la República, porque su fuerza consistía en el número y vigor de sus miembros, que no eran, como he dicho, los individuos, sino las familias. Por eso en los tiempos antiguos, no solamente era obligacion del padre instituir heredero á su hijo, ó desheredarle expresamente, sino que era obligacion del hijo aceptar la herencia paterna. El derecho de repudiarla y el de admitirla á beneficio de inventario, no fueron reconocidos hasta despues de algunos siglos de la existencia de Roma. El hijo no se llamaba simplemente heredero, sino *heredero suyo necesario* (*hæres suus*), que es como si se dijese, heredero forzoso de sí mismo, *sui ipsius*, porque entre él y su padre no podía haber donacion legitima, ni mutacion de propiedad, habiendo entre ambos cierta coparticipacion en el dominio. Por eso algunos siglos despues recordaba Justiniano que el hijo, aún viviendo el padre, era considerado como dueño de su hacienda, y á la muerte de este casi no hacia más que continuar su dominio (1).

(1) Inst. III, l. 3. „Et statim morte parentis quasi continuatur dominium.“

Y como el culto, segun la creencia religiosa del tiempo, no se trasmitia por las mujeres, las cuales al casarse, renunciaban al de su familia, para adoptar el de su marido, la propiedad, que en sus orígenes era inseparable del culto, no hubo tampoco de transmitirse por ellas. No hay texto expreso en que fundarse para asegurar que antes de las Doce Tablas fueran absolutamente incapaces de heredar las mujeres, pero tal vez se presume ó se infiere de lo que aquel antiguo derecho les otorgaba. Justiniano recordaba que segun las Doce Tablas, no heredaban las mujeres, ni los parientes de su línea, excepto la hija y el hijo que tenian derecho á la herencia de la madre (1). Caton el viejo, restaurando antiguas costumbres, ya quizá olvidadas, hizo promulgar la ley Voconia, que prohibia instituir herederas á las mujeres, sin excepcion alguna, aún á la hija única, y sólo permitia legarles la cuarta parte de los bienes (2). Siglo y medio despues, en tiempo de Ciceron, el que dejaba un hijo y una hija no podia legar á esta más de un tercio de sus bienes, y el que dejaba una hija única, la mitad solamente de los mismos (3). ¿Estas limitaciones del derecho de adquirir por testamento, no arguye incapacidad manifesta para suceder *ab intestato*? Si las hijas hubieran tenido derecho de heredar á sus padres del mismo modo que los hijos, ¿cómo es posible que se les restringiera el de ser legatarias? Lo que estas prescripciones del derecho antiguo revelan es una exclusion absoluta, primitiva de las mujeres, de toda sucesion hereditaria, la cual fué sucesivamente modificándose con excepciones numerosas, y continuó despues reduciéndose, ya con las ingeniosas ficciones del Pretor, que daba en casos tales la posesion de los bienes en lugar del dominio, ya con los Senado-consultos Claudiano y Tertuliano, que llamaron á las madres á la sucesion de sus hijos, y ya con otras constituciones posteriores, que al fin concluyeron del todo con aquella incapacidad.

Por motivos semejantes no heredaba al padre el hijo emancipado y si el meramente adoptivo. El primero dejaba de pertenecer á la familia, se hacia cabeza de otra nueva y cambiaba de culto: el segundo entraba en la familia del adoptante y abrazaba su religion, dejando la propia; así cesaba el fundamento del derecho hereditario del uno, al paso que se creaba el del

(1) Inst. III, t. 3, pr. «Lex XII tabularum... præponebat masculorum progenerium: et eos qui per femini sexus necessitudinem sibi junguntur, adeo expellebat, ut ne quidem inter matrem et filium filiamve ultro citroque hereditatis capiendæ jus daret.»

(2) S. Agust. *De civitate Dei* III, 21.

(3) Cicer. *De republ.* III, 10.

otro. Nadie podia tener dos cultos, ni pertenecer á dos familias, pero nadie tampoco podia dejar de poseer una familia y un culto, con los derechos correspondientes.

No se conoce ley romana que atribuyera preferencia al primogénito sobre sus hermanos menores en la herencia paterna; pero quizá la hubo tambien en Italia como en Grecia, en tiempos anteriores á la legislacion escrita. *Sors* se llamaba desde los tiempos más remotos el patrimonio de una familia, y se denominaban *consortes* los hermanos ó parientes que poseian indiviso el patrimonio paterno (1). ¿No revela quizá esta palabra, que los es critores más antiguos emplean siempre en el sentido indicado, una antigua costumbre, abandonada ya en tiempo de la República, en cuya virtud se debiera conservar indivisa la herencia paterna entre los hijos ó herederos varones y en la cabeza del primogénito? La llamada *gens*, conjunto de individuos de la misma raza, ¿no suponía la unidad de toda la familia bajo la autoridad del mayor de sus ascendientes vivos? Así es que la *gens* y los *gentiles* fueron extinguiéndose á medida que los hermanos fueron separándose para formar familias, quedando entonces solamente á los primogénitos cierta autoridad religiosa.

A falta de hijos las Doce Tablas llamaban á la sucesion á los *agnados* más próximos, es decir, los que siendo parientes entre sí por línea de varon, reconocian un ascendiente comun. En su defecto entraban á heredar los *gentiles*, que segun la opinion más justificada, eran todos los descendientes del primer fundador conocido de la familia, los cuales llevaban el nombre patronimico de ella y profesaban un mismo culto, bajo la dependencia del mayor de sus ascendientes. Poco importa para mi objeto que no se puedan determinar hoy con exactitud todas las diferencias que establecia el antiguo derecho entre los *agnados* y los *gentiles*. No es extraño que sean hoy las relaciones de *gentilidad* objeto de dudas y de controversia entre los eruditos, cuando por haber dejado de estar en uso hacia mucho tiempo, en el de Ciceron, se disputaba ya sobre ellas. Mas lo que no parece dudoso es que se denominaban *gentiles* todos los que pertenecian á una misma familia, ya por nacimiento ó ya por actos juridicos que producian efectos semejantes, como la manumision y el patronazgo, y que entre ellos y los *agnados* la diferencia consistia más bien en la distancia del grado que en la naturaleza del parentesco. Despues de los *gentiles* á nadie más llamaban á la herencia las leyes de las Doce Tablas; de modo que segun aquel antiquísimo derecho, nunc

(1) Festus. V. *Sors*.—Velejus I, 10.

debían salir de la familia civil los bienes que una vez llegaban á entrar en ella. Por eso no heredaban entonces los *cognados* ó parientes por línea femenina: por eso el sobrino heredaba en su caso al tío paterno y nunca al materno.

Pero al mismo tiempo que las leyes establecían este orden riguroso de suceder, reconocían el derecho de testar, que es una de las más cumplidas manifestaciones de la libertad é individualidad del dominio. No hay memoria escrita del tiempo en que este derecho no existiese, como en Grecia; mas es de presumir que no fuera muy anterior á las Doce Tablas, en las cuales se halla ya consignado. La forma primitiva de aquel acto, manifiesta al parecer que tenía por objeto derogar una ley comun respecto á un caso particular. Esta ley comun, que era la que prescribía el orden de las sucesiones, y señalaba el heredero de cada ciudadano, debió de ser anterior, como regla más conforme que la testamentifaccion, con las creencias religiosas y las costumbres primitivas de la raza indo-europea. La facultad de invertir este orden, ó de proveer en raros casos á la falta de todo heredero legítimo por medio del testamento, hubo de ser, pues, una excepcion adoptada posteriormente, cuando modificadas las prácticas religiosas empezó á prevalecer el interés individual sobre el colectivo de familia. No era el testamento la regla comun, y el orden de sucesion legal la excepcion ó lo supletorio, como creyeron los jurisconsultos modernos, que lo contrario es lo que se observa en el modo de aparecer en las sociedades primitivas aquellas instituciones del derecho civil. Sería Roma una notabilísima excepcion en la historia del mundo, si hubiera conocido los testamentos antes que la sucesion intestada.

No hay que buscar pruebas directas de este fenómeno en el derecho primitivo de Roma, que no fué siquiera el de las Doce Tablas, y era ya oscuro y casi desconocido en tiempo de Ciceron; mas el término jurídico *heredero suyo necesario* que usaba todavía Justiniano, y venia de la más remota antigüedad, por más que no conservase su significacion primitiva, daba á entender que el hijo ó descendiente constituido bajo la inmediata potestad del difunto, á quien cuadraba aquella denominacion, no sólo heredaba forzosamente, porque no podia eximirse de adir la herencia, sino tambien porque el padre no podia privarle de ella.

Si habiendo un heredero de esta especie no podia el testador instituir otro, debió de estar al principio limitada la facultad de testar á los ciudadanos que no tuvieran tales herederos. No fué poca, sin embargo, la libertad otorgada en esta materia si, como parece, quedó árbítro todo ciudadano

para dar á su familia un jefe distinto del señalado por las leyes y extraño á ella, ya que á esto equivalia en aquellos tiempos la institucion de heredero. Pero si, fundándose en el sentido literal y los términos absolutos del texto de las Doce Tablas que mandaba guardar como ley la última disposicion que el padre de familia luciera desus bienes, no se admitiese la interpretacion indicada de las palabras *suyo necesario*, no habrian tenido limite el arbitrio de los testadores, ni derecho seguro las familias, lo cual tampoco parece probable. Así es, que si por una parte autorizaba el nuevo derecho escrito la testamentifaccion, por otra rodeaba su ejercicio de obstáculos y dificultades que la embarazaban. Puesto que una ley determinaba el órden de sucesion, el testamento que venia á alterar este órden no podia otorgarse sino por medio de otra ley, con todas sus formas y solemnidades. Necesitábase, por lo tanto, que el pueblo entero se reuniese por curias, en *comicios calados*, bajo la presidencia del Pontífice, que era la más solemne de sus reuniones, y que en esta forma votara, aprobando ó desaprobando, lo que el testador le propusiera. Obligar al ciudadano, que intentaba desheredar al pariente, su heredero legítimo, á hacerlo con tal publicidad y en sana salud, teniendo que arrostrar tal vez la oposicion de su familia ó los peligros de una esperanza defraudada, y someter despues de todo su decision á la insegura voluntad de la muchedumbre, eran en verdad hartas dificultades para generalizar el uso de los testamentos. Debieron, pues, estos continuar siendo, durante mucho tiempo, leyes excepcionales de la comun, sin covertirse en regla general, hasta que, abandonada aquella antigua forma, se adoptó la ménos solemne de vender el testador la herencia á su heredero (*per aes et libram*).

La facultad de testar, fué quizá una transaccion entre la propiedad colectiva y la individual, pero con restricciones que dejaban á salvo la unidad de la familia y la integridad de su patrimonio, que era el verdadero interés político de un Estado compuesto, como he dicho, no de individuos, sino de familias. Por eso no era válido el testamento si no comprendió la institucion de un heredero universal, es decir, de una persona que sustituyese al testador en la representacion de los intereses domésticos y religiosos que constituian la *familia*, y llevaban este nombre segun el lenguaje del tiempo. Para el Estado era el testamento un acto de trasmision ménos de la propiedad privada, que del gobierno y direccion de una parte de la sociedad. El padre de familias, propietario y sacerdote del culto doméstico, era además señor y juez de su mujer, de sus descendientes, de sus esclavos y de sus libertos, con derecho hasta de vida y muerte sobre ellos, y toda

esta potestad era la que debia transmitirse al heredero por medio del testamento. Véase cuán justificada estaba la intervencion del soberano en este acto y la facultad primitiva del pueblo para negar su asentimiento á la institucion de todo heredero incapaz de desempeñar aquellas importantes funciones.

CAPITULO V

Propiedad romana: sus alteraciones y su fin.

I.

VICISITUDES DE LAS PROPIEDADES PÚBLICAS Y DE LAS NO QUIRITARIAS.

Aún más pronto que en la propiedad privada, se sintió el influjo del principio individualista en la propiedad pública, que con el nombre de *ager publicus*, se reservara el Estado. Adjudicadas muchas tierras de esta procedencia á los caballeros, en usufruto revocable, con el tiempo se fué borrando la memoria de la propiedad que el Estado se habia reservado en ellas. Sus poseedores no podían enajenarlas, ni adquirir su dominio por usucapion, ni transmitir las por testamento; mas con el auxilio del Pretor lograron introducir las en el comercio y trasferirlas de modos diferentes y con el mismo efecto que las cosas de dominio quiritario. Así el *ager publicus* amortizado de derecho á favor del Estado, fué de hecho quedando libre de toda restriccion, como las propiedades quiritarias.

Este proceder de los caballeros excitaba, como era natural, la codicia de los plebeyos, casi desheredados entonces de toda propiedad territorial. Lo unico que estos habian obtenido en los anteriores repartimientos de tierras, era el derecho de pasto en algunas de ellas, que tenían la calidad de comunes. El rey Servio Tulio les otorgó despues la propiedad de una parte de estas mismas heredades. Establecida la República, se dió á cada ciudadano pobre un fundo da siete yugadas en las tierras que habian pertenecido á la corona, y en el año 298 de la fundacion de Roma se distribuyó entre los plebeyos el monte Aventino, que habia sido hasta entonces de aprovechamiento comun. Mas estas concesiones no bastaban á satisfacer las necesidades de la plebe, cada dia más fuerte y numerosa, y cada dia tambien más ofendida de su exclusion del *ager publicus*, que ella habia conquistado con su sangre y regado despues con el sudor de su frente, por cuenta de los orgullosos patricios.

Con no ménos razon que los plebeyos aspiraban al dominio libre los nuevos súbditos de la República en los países recién conquistados. Roma no podia á su vez denegar con demasiada insistencia estas pretensiones, porque á medida que extendia su territorio, fundaba colonias y acrecentaba sus Estados, necesitaba más la amistad y la alianza de las naciones sus subordinadas, y uno de los medios de captársela era comunicarles los privilegios de la metrópoli, entre los cuales figuraba como uno de los más importantes el *comercium*, ó sea el derecho de propiedad romana. Fuése, por lo tanto, prodigando este derecho á clases numerosas, y una vez vulgarizado, perdió su carácter político, relajándose al fin sus vínculos con el culto doméstico, con la organizacion de la familia y con la Constitucion del Estado.

Aun entre los caballeros se notó desde el principio señalada tendencia á romper las escasas trabas de la propiedad quiritaria. Mientras que los viejos patricios de la antigua alcurnia procuraban mantener la constitucion de la propiedad, garantía del poder y de la subsistencia de sus familias, los patricios nuevos, en quienes hacian más fuerza la necesidad presente y la razon natural que la voz de la historia, reclamaban y obtenian de los Pretores, ley viva del Estado, fórmulas jurídicas y medios indirectos para eludir las embarazosas restricciones con que el derecho estricto limitaba su dominio quiritario.

Así es como el individualismo pugnaba desde el principio por modificar el régimen de la propiedad de todas clases, áun de la religiosa, puesto que haciendo esta parte del Estado, es comun á ambas lo que se diga de una de ellas. En el *ager publicus* favorecen el triunfo de aquel principio los caballeros que usurpaban la libre disposicion de sus tierras, y los plebeyos que las codiciaban y las obtenian por la fuerza: en la propiedad quiritaria peleaban por la misma causa los nuevos súbditos que aspiraban á obtenerla y los nuevos patricios, ignorantes de la tradicion. Hé aquí ahora las trasformaciones que por consecuencia de esta lucha fué experimentando la propiedad.

La nobleza resistió largo tiempo el empuje de los plebeyos por apoderarse de las tierras conquistadas; pero al cabo las leyes agrarias de Licinio, Stolo y Sexto le otorgaron el derecho de poseerlas, lo mismo que los caballeros. Esto bastó para que viniese el poder á manos de la plebe, como sucedió desde que el dictador Philon hizo publicar una ley ordenando que los plebiscitos obligasen á todos los ciudadanos (1). Sin embargo, no se sa-

(1) "*Ut plebiscita omnes quirites tenerent*," dice Tito Livio.

tisfacieron con adquirir un derecho á poseer, que no les daba inmediatamente el hecho positivo de la posesion. Además, aunque muchos de ellos obtuvieron tierras públicas, veíanse con frecuencia despojados por los grandes propietarios, y esto fué ocasion de que escasearan en Italia los habitantes libres, segun dice Plutarco (1), porque ocupaban su lugar los colonos bárbaros que cultivaban las tierras de los ricos, en vez de los ciudadanos arrojados de ellas. Para remediar este daño trató la plebe de sujetar á un máximo inflexible las tierras que habian de poseer los patricios en el *ager publicus*, y consiguió de los Gracos que acogieran y patrocinaran esta pretension. Formulóse al fin una ley disponiendo que los ciudadanos que poseyesen en el *ager publicus* más de cincuenta yugadas de tierra abandonasen el exceso mediante indemnizacion, á fin de que el Estado lo distribuyera entre los ciudadanos pobres, con las cargas ordinarias. La ley llegó á pasar por mayoría de votos, no obstante la oposicion de los patricios; pero no pudo ejecutarse, y costó la vida á los Gracos, que la habian apoyado con su influencia.

La plebe, sin embargo, no desmayó en su propósito. Alistada al servicio de todos los ambiciosos que se alzaban por conquistar el poder en las turbulencias de la república, tomó parte en las guerras civiles, venció en ellas y obtuvo abundantes propiedades en cambio de sus servicios. Con tierras pagó Sylá á sus legiones victoriosas (2). De César obtuvieron tierras tambien hasta 120.000 legionarios (3). Antonio, siendo triunviro, repartió entre sus soldados 118 ciudades, y cuando vistió la púrpura imperial fundó en Italia veintiocho colonias militares, con los repartos de tierras correspondientes entre los colonos (4). Las mismas guerras civiles daban lugar tambien á confiscaciones de tierras del *ager publicus* que poseian los vencidos, y que por efecto de la victoria pasaban á manos de los vencedores. Así fué desl apareciendo aquella inmensa propiedad pública, amortizada en servicio del Estado; objeto de universal codicia, pasó en su mayor parte al dominio individual, y lo que quedó de ella se confundió despues con el patrimonio de los emperadores.

Repartido el *ager publicus* del modo que queda dicho, dejó de ser patrimonio de la aristocracia, nervio y sosten del Estado en los primeros tiempos de la república. Nació el imperio en sustitucion de aquella nobleza

(1) Tiber. Grachus.

(2) Plutar. Sylá, 31, 33.

(3) Sueton. in Jul. Ces., 20, 38.

(4) Apian., Guerras civiles. Velej. Paterc., II, 74. Suet. Octav. 13.

desautorizada y enflaquecida, y con él se formó al punto otro patrimonio territorial á disposicion del Estado, aunque sujeto á condiciones diferentes. Tal fué el patrimonio fiscal, compuesto de las tierras particulares de los emperadores, las vacantes, las de herencias caducadas y las confiscadas á los ciudadanos. El Estado utilizaba al principio estas tierras arrendándolas y exigiendo además á sus poseedores algun tributo; mas hubo de ser este despues tan crecido, que los arrendatarios las abandonaron por no serles su cultivo de ningun provecho. Entonces se inventó dar estas tierras en enfitéusis, dividiendo su dominio entre el Estado y sus colonos. En virtud de este contrato usufructuaba el enfitauta su respectivo prédio, mas no le era lícito enajenarlo sin licencia del fisco, el cual podia entonces ejercer su derecho de retracto, ó exigir por laudemio el 2 por 100 del precio de la venta. Los servicios públicos, y particularmente los de las legiones que guarnecian las fronteras, se pagaban con enfitéusis de tierras, cuyo cánon era el mismo servicio militar ó civil del enfitauta. Hasta la Iglesia solia pagar sus deudas con tierras. De este modo lo único que quedó como propiedad colectiva y amortizada en el Estado fué el dominio directo de las tierras fiscales; el útil é inmediato volvió al comercio y fué propiedad casi libre de los particulares.

A la vez que el patrimonio local, se formó el de los municipios, compuesto en gran parte tambien de tierras que se hallaban fuera del comercio. Los edificios consistoriales, los destinados á ejercicios ó espectáculos públicos y los templos, que todas las ciudades poseian, eran por su naturaleza inalienables. Tambien debian serlo los bienes con cuyas rentas se proveia, en parte al ménos, á los servicios municipales. Las leyes permitian y aun favorecian su adquisicion. Las ciudades que segun los principios del antiguo derecho estricto, no eran personas jurídicas, capaces de heredar, fueron habilitadas para hacerlo por el medio indirecto del fideicomiso, en virtud de una ley del emperador Trajano. Otra ley poco posterior, prescindiendo de ficciones legales, las autorizó para ser nombradas directamente herederas, y el emperador Adriano las habilitó para aceptar legados (1). Asi se formó y se acrecentó la propiedad de los municipios, que no obstante haber servido algunas veces para saciar la codicia de los emperadores, era todavia considerable cuando los bárbaros la ocuparon y dividieron como fruto de su conquista.

Mientras que se formaba la propiedad municipal y la del Estado sacudia

(1) Inst., L. 2, tit. 1, pár. 6. *Dig.* XXX, tit. 1.º l. 122.

el yugo de su constitucion primitiva, tambien pugnaba por libertarse del suyo la propiedad no quiritaria de los súbditos del Imperio, que no disfrutaban los derechos de ciudadanía. Los pueblos de Italia, regidos al principio por leyes diferentes, consiguieron las libertades y privilegios del dominio quiritario antes del siglo VII de la fundacion de Roma. Muchas provincias y ciudades fueron despues equiparadas á la Italia, en cuanto á su régimen civil y político (*jus italicum*), en premio de sus servicios. Las propiedades á que no alcanzó este beneficio, conservaron su carácter de provinciales, sujetas por lo tanto al *vectigal* ó tributo que las distinguia de las quiritarias. Segun los principios del antiguo derecho estricto, la ley no amparaba más que la posesion de estas propiedades: su enajenacion y comunicacion por contrato, no siendo actos civiles que aquella autorizase, carecian de valor jurídico ante los tribunales. Mas como este formalismo riguroso era contrario á la equidad y al espíritu de independencia individual que penetraba ya en todas las instituciones, el derecho pretorio vino pronto á corregir sus efectos. Así, con la proteccion de los gobernadores, que desempeñaban en las provincias el oficio del Pretor, entraron en el comercio aquellas propiedades, y pudieron enagenarse, empeñarse y prescribirse, no civil, pero si naturalmente, segun la expresión de los jurisconsultos. Esta vana distincion y el *vectigal* constituyeron entonces la única diferencia entre la propiedad provincial y la quiritaria, pues sus derechos y sus efectos en la práctica fueron en un todo idénticos. Por último, careciendo ya de fundamento hasta esta distincion, Justiniano declaró la igualdad de ambas propiedades, no quedando desde entonces en el imperio más que una clase de dominio privado (1).

Esta igualdad, sin embargo, no fué la de la libertad, sino la de la servidumbre, que tampoco era otra cosa posible bajo el yugo arbitrario de los emperadores. El Estado renunció á sus derechos de señor directo en las tierras provinciales, pero fué extendiendo á Italia el impuesto territorial, y haciéndolo tan gravoso en todas partes, que los propietarios tuvieron que abandonar las tierras ménos fértiles. El fisco para suplir esta falta en sus ingresos, aumentó el tributo de las tierras que continuaron cultivándose, tanto como habian dejado de satisfacer las ya incultas, y entonees los propietarios tuvieron que abandonar tambien las más fértiles (2). Como la corta propiedad es la que ménos puede soportar los tributos excesivos, desapa-

(1) *Cod. Just.* VIU, tit. 25, ley un. *De nudo jure quiritum tollendo.*

(2) Salviano, *De gubernatione Dei*, lib. IV.

recieron casi por completo los pequeños propietarios, y no bastaron para restablecerlos ni los decretos del emperador Pertinax, que ofrecían gratuitamente tierras exentas de impuesto por diez años, á cuantos quisieran cultivarlas (1).

Los dueños de las medianas propiedades provinciales que subsistieron se libraron del dominio directo del Estado, pero fué para caer bajo el yugo insoportable del municipio, además del de los tributos fiscales. Por una singular combinacion de circunstancias, se habia convertido el desempeño de los cargos municipales en una verdadera servidumbre. Los curiales no podian enagenar su hacienda sin licencia del Juez, porque con ella debian responder, no sólo de su administracion, sino de la de sus colegas y de sus sucesores, y de la recaudacion de los tributos, cualquiera que fuese su importe (2). Cuando las rentas municipales no alcanzaban á cubrir el presupuesto de gastos, ellos debian satisfacer el déficit con su propio peculio. Los curiales, en suma, vivian cautivos de la ciudad que administraban. Estos cargos tan onerosos, y que además solian ser hereditarios, recayeron forzosa y casi exclusivamente en los propietarios medianos y sus hijos, porque los más ricos pertenecian en su mayor parte á alguna de las clases superiores dispensadas de ejercerlos, y los pobres y los que disfrutaban corta hacienda estaban tambien exentos por insolventes. Así muchos desdichados propietarios que no se hallaban en ninguno de estos casos, por librarse de cargos tan odiosos y no transmitirlos á sus hijos, abandonaban sus bienes ó abrazaban el estado eclesiástico, ó se alistaban en los ejércitos, y aun algunos hasta se hacian esclavos, considerando, segun dice Salviano, ménos dura esta condicion que la de curial (3). Tantos debieron ser los que por estos medios se libraron de aquel servicio público, que para que no faltase quien lo desempeñara, fué necesario prohibir por ley á los curiales y á sus hijos mudar de estado y profesion (4).

II.

FIN DE LA PROPIEDAD QUIRITARIA, Y CONDICION DE LA PRIVADA BAJO EL IMPERIO.

En la constitucion de la propiedad quiritaria habia ido prevaleciendo entretanto el espíritu de libertad individual, representado por los nuevos

(1) Herodi. *Hist.* II, 4.

(2) *Cod. Theod.* XII, t. 1. l. 9, 54; IX, t. 35, l. 2.—*Cod. Just.* X, t. 33, l. un.

(3) S. Ambros. *Epist.* 40 *ad Theodos.*—*Cod. Theod.* XII, t. 1. l. 59, 63, 104, 115, 168.—Salv. *De gubern. Dei.*

(4) *Cod. Theod.* VIII, t. 4, l. 28.—*Casiod. Var.* II, 18, IX, 2, 4.

patricios, que como antes he dicho, aspiraban á suprimir formalidades y restricciones jurídicas, cuyo sentido histórico no comprendían, y que embarazaban el libre uso de sus derechos. A medida que fueron modificándose ó abandonándose las antiguas prácticas del culto doméstico por las del culto público de la ciudad, fueron naturalmente desapareciendo las relaciones de la propiedad con la religion privada, y desvirtuándose los vínculos que la ligaban á la familia. Esta, á su vez, segun fué haciéndose independiente de la religion y de la propiedad, fué perdiendo su carácter de elemento político del Estado. Así, en el mismo orden fueron suavizándose y alterándose, por falta de objeto y razon, las formas rigurosas que dificultaban la trasmision del dominio quiritarario. El edicto del Pretor estableció nuevos modos de adquirir, considerando insuficientes los que reconocia el antiguo derecho, y protegió con una excepcion el dominio así adquirido, tanto contra el tercero, como contra el dueño por derecho quiritarario (1).

No podia ciertamente el Pretor conceder el dominio de esta especie, pero daba la propiedad llamada natural, y con ella, si bien no se revocaba de derecho el dominio quiritarario del anterior poseedor sobre la cosa enagenada, se suprimian de hecho todos sus efectos. Así, cuando Justiniano igualó la propiedad natural á la quiritaria, reconociendo una sola clase de dominio privado, comun á todos los ciudadanos, cuando sustituyó con la entrega (*traditio*) los antiguos modos de adquirir, no hizo más que escribir en la ley lo que estaba ya admitido y sancionado por la costumbre.

Con no haber en cada familia más propietario que el jefe de ella, puesto que para él era cuanto adquirian las personas constituidas bajo su potestad, contribuia eficazmente la propiedad quiritaria á mantener entre las mismas personas vínculos estrechos, en el padre la poderosa autoridad de los tiempos primitivos, y en la familia toda, la cohesion y unidad indispensables para ser elemento político del Estado. Comenzó la propiedad á perder esta virtud cuando Augusto concedió á los hijos el dominio absoluto del peculio castrense; se quebrantó más cuando las leyes asimilaron á este otros varios peculios; y desapareció del todo cuando Justiniano concedió á los hijos de familia el dominio de todos los bienes que adquiriesen, dejando al padre solamente la administracion ó el usufruto, segun los casos.

La propiedad de las mujeres era en los antiguos tiempos incompleta ó nula. Sujetas, cuando no á la pátria potestad, á la potestad marital (*manus*), ó á la tutela de sus agnados, no tenian la libre disposicion de los bienes de

(1) *Gojii. Inst.* II, 40, I, 54, 17, 167, II, 88, III, 166.—*Dig.* XXI, t. 3, l. 1, 2, 3,

su pertenencia, ni ellas mismas por incapacidad, ni sus tutores por carecer de dominio. Así, la propiedad de las mujeres como la de los menores se hallaba hasta cierto punto fuera del comercio y casi amortizada. Mas esta circunstancia fué desapareciendo á medida que se templó el rigor de las disposiciones que sujetaban á las mujeres á la tutela de sus agnados. De ella se eximieron en primer lugar por las leyes Julia y Papia Popea, las madres viudas que tuvieran cierto número de hijos. Despues los emperadores concedieron el mismo privilegio á otras muchas mujeres. Por último, habiendo alterado el Pretor el órden de suceder, segun ahora veremos, quedó tal tutela casi sin objeto, hasta que fué abolida expresamente por el Senado-consulta Claudiano. Con esto adquirieron la libre disposicion de sus propiedades todas las mujeres que no se hallaban bajo la potestad de otro, y entraron en el comercio cuantiosos bienes. Las que se hallaban bajo la potestad marital, que antiguamente perdian por completo y de un modo irrevocable el dominio de los bienes que aportaban al matrimonio, obtuvieron tambien el derecho de reclamarlos, cuando este se disolvia por muerte ó por divorcio (1). Y aunque el marido conservó el dominio de la dote, quedó limitado su uso, primero, con la prohibicion de enajenar y empeñar los bienes dotales consistentes en prédios itálicos, sin consentimiento de la mujer, y despues, haciendo extensiva esta prohibicion á toda clase de prédios dotales, y aún á los casos en que las mujeres consintieran las enajenaciones (2).

A medida que dejaba de prevalecer en la constitucion de la propiedad el interés religioso, el político del Estado y el colectivo de la familia, el particular de sus individuos lograba satisfaccion cumplida, protegido por la equidad. Dejando de ser las familias elementos políticos del Estado y sus jefes depositarios de una parte considerable de la autoridad pública (lo cual sucedió luego que cambió la constitucion de la república y se redujeron los derechos de la patria potestad), debieron variar y modificarse los derechos hereditarios. Entonces la testamentifaccion se convirtió en regla general, y el órden de sucesion abintestato en excepcion y suplemento de aquella regla, á diferencia de lo que hubo de suceder en los tiempos primitivos. Y como ya la trasmision de la hacienda, y aún de la familia, no era asunto de tan grave trascendencia, ni el hacerla por última voluntad suponía la derogacion en casos especiales de una ley comun, los testamentos dejaron de

(1) *Cod. Just.* V, t. XIII, l. un.

(2) *Ulp. Dig.* XVI, t. 1.º, l. 2.º, *Cod. Just.* V, t. 13, l. ún. pár. 15.

ser actos del poder legislativo. Así es que á los otorgados en esta forma, ó con intervencion de la autoridad pública, sucedieron el testamento solemne ó que llevaba consigo la prueba de su autenticidad, el testamento privilegiado, en ciertos casos, el codicilo y el fideicomiso. Solamente se mantuvieron de los tiempos antiguos ciertas formas externas, en recuerdo de las primitivas, y la necesidad de la institucion de heredero, aunque esto ménos con un fin político, que para obligar á los padres á instituir ó desheredar expresamente á los hijos varones que tenian bajo su potestad (1).

El interés colectivo de familia quedaba satisfecho con que la herencia paterna recayese en los hijos varones que se hallaban bajo la patria potestad. Ellos eran los primeros miembros de la familia *civil*: á ellos se transmitia el conjunto de intereses domésticos, religiosos y políticos que la constituian; y por eso, cuando fué más ámplia la facultad de testar, fueron ellos los únicos herederos legítimos de quienes no era lícito al padre prescindir por completo, cuando hacia testamento, ya para instituirlos, ó ya para desheredarlos expresamente. Mas cuando el interés de la familia natural reemplazó al colectivo de la civil, ideáronse medios de favorecer con la herencia paterna á todos los miembros de la primera. No se privó directamente al padre de la facultad de preterir á los hijos emancipados, á las hijas y á los nietos, excluidos por la ley, de la familia civil; mas el Pretor les otorgó, si eran preteridos, la posesion de la herencia por medio de un interdicto (2). La desheredacion expresa de los hijos no requeria tampoco al principio manifestacion de causa; mas luego los *centumviri*, animados del mismo sentimiento de equidad, anularon los testamentos en que se desheredaba á algun hijo, sin motivo á su parecer suficiente. Por ultimo, la ley señaló las causas concretas de la desheredacion, y como legitima de los herederos *suyos*, la cuarta parte de la herencia (3).

El mismo principio que tendia á confundir la familia civil con la natural conducia á graves alteraciones en el orden de suceder abintestato. Verificáronse estas primeramente con el auxilio del Pretor, el cual otorgó, no la herencia, pero sí la posesion de los bienes hereditarios, á los que la equidad y la razon natural consideraba con mejores títulos. Concedióse entonces esta posesion á los hijos emancipados, juntamente con os herederos *suyos*, á los hermanos tambien emancipados, en union con los

(1) *Gajii Inst.* II, 123.

(2) *Gajii Inst.* II, 135.

(3) *Dig. De inoffic. testam.* V, t. II, l. 3. Ulp., l. 8, pár. 11.—Paulo, l. 23.

agnados, y en defecto de agnados de primer grado, á los *cognados* ó parientes maternos del mismo grado, en lugar de los agnados de segundo. Otorgada una vez tal posesion á los parientes que habian salido de la familia civil, sucedieron al padre la hija casada, y el nieto al abuelo materno, en defecto de agnados. Declaróse al mismo tiempo recíproco el derecho de sucesion entre la madre y los hijos, y [áun se otorgó, á falta de agnados, al cónyuge superviviente. Admitidos al fin en la práctica estos nuevos derechos de sucesion, extraños á todo interés político en la trasmision de la propiedad, Justiniano, en las Constituciones que llevan su nombre, no hizo apenas otra cosa que determinarlos mejor y regularizarlos, inspirándose, como el Pretor, en los sentimientos de la naturaleza. En su consecuencia, prescindiendo de sutilezas legales y de viejas tradiciones, y acomodando el derecho al hecho, abolió toda distincion entre la herencia y la posesion de bienes, entre los hijos emancipados y los constituidos bajo la patria potestad, y entre los agnados y los cognados. Suprimió por completo la familia civil, sustituyéndola con la natural, y llamó á la sucesion, despues de los descendientes y ascendientes, á los colaterales más próximos, con exclusion de los más remotos, sin diferencia por razon de líneas ni de sexo, por el orden conocido y aceptado hoy todavía en los códigos modernos.

Los triunfos del individualismo en la constitucion de la propiedad romana dieron á esta un carácter eminentemente democrático, pero ni acabaron con la amortizacion de una parte considerable de ella, ni dieron siquiera seguridad al dominio privado. A las tierras consagradas al culto pagano sucedieron con el tiempo las inmensas propiedades de la nueva Iglesia: á las *posesiones* del *ager publicus* y de las tierras provinciales, siguieron los enfiteúsas de las tierras fiscales y la propiedad municipal, y al monopolio en los patricios del dominio quiritario, reemplazó el dominio eminente y universal atribuido á los emperadores, que sirvió de título á las confiscaciones más inicuas y á los tributos más exorbitantes y arbitrarios.

El dominio quedó convertido en un derecho individual, independiente de la religion privada y de la familia política, y propio de todos los hombres libres, sin diferencia de condicion ni de sexo. Esta novedad era á la vez efecto y causa de un cambio radical y profundo en las relaciones del Estado con sus miembros, que trasformó al cabo en monárquica y democrática, la Constitucion aristocrática y republicana de Roma. El nuevo soberano, levantado sobre las ruinas de la República, estimó regalías propias los que antes fueran privilegios políticos ó derechos colectivos del patriciado. El derecho que en los primeros siglos pretendian tener los caballeros á todas las

tierras vacantes, se lo atribuyeron despues los Césares. Todos los propietarios tuvieron por razon de su dominio iguales derechos, pero todos quedaron tambien sujetos á tributos tan enormes, que más que dueños absolutos, semejaban partícipes con el Fisco en la propiedad del suelo. Derogáronse las leyes antiguas, que atribuian el monopolio de la propiedad á los padres de familia, mas no por eso se subdividieron y repartieron las propiedades de un modo más igual y equitativo. Los propietarios cortos, no pudiendo soportar los tributos, abandonaron ó vendieron sus heredades por vil precio á los ricos capitalistas. Los plebeyos se abstenerian de adquirir el escaso número de yugadas de tierra cuya posesion obligaba á servir en la curia (1), y ó cultivaban como enfiteutas los prédios fiscales, ó vivian de las distribuciones de granos, que periódica y gratuitamente hacía el Gobierno. Los ricos no volvieron á verse amenazados por nuevas leyes agrarias; pero sus haciendas quedaron á merced del Fisco y de los delatores, á cuya codicia ofrecian constante pábulo las leyes que penaban con la confiscacion ó enormes multas los más leves delitos (2). Además, los emperadores no siempre remediaban sus necesidades ó las del Estado, aumentando los impuestos ó las pensiones de sus colonos, pues muchas veces encargaban á los delatores que escudriñasen la vida privada de los ciudadanos ricos, á fin de hallar pretexto para condenarles por algun delito de los penados con confiscacion.

La propiedad, en efecto, no podia ser más libre ni más segura bajo un gobierno despótico, que erigia en ley el arbitrio del César. Allí, donde el soberano es dueño absoluto de la vida de sus vasallos, no puede, sin inconsecuencia, dejar de serlo tambien de su hacienda. Donde la persona del súbdito pertenece al principe, no puede ser inviolable la propiedad privada. Hé aqui como despues de haber declarado Ciceron, en nombre de la filosofía, que quien negara el derecho de apropiacion, violaria una ley de la naturaleza humana (3), Séneca declaró en nombre del derecho civil, el dominio eminente del César sobre todas las cosas del Imperio, fundándose en que los súbditos tenian solamente la posesion de ellas (4). Esta teoría era en verdad

(1) 25 jugera. Cod. Theodos. XII, t. 1.º, l. 33, 72.

(2) Veintinueve delitos daban lugar á la pena de confiscacion y entre ellos el de lesa majestad en todos sus casos.

(3) *De officiis*, I, 7.

(4) "Jure civili omnia regis sunt, ut tamen illa, quorum ad regem pertinet universa possessio, in singulos dominos descripta sunt et unaqueque res habet possessorem suum." (*De beneficiis*, VII, 4.)

conforme con los hechos y con los principios de aquella Constitución.

¿Cómo, sin ella, se habría justificado la práctica de disponer el soberano de la hacienda de sus vasallos? Y admitida esta práctica, ¿qué era más que una mera posesion la propiedad privada?

CAPITULO VI

La propiedad en Europa, bajo la dominacion de los Bárbaros.

I.

ESTADO DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA CONQUISTA.

Tal era la triste condicion de la propiedad en el Imperio romano, cuando los pueblos germánicos, sus conquistadores, llevaron á ella, como á las demás instituciones sociales, el espíritu de individualismo é independencia, carácter distintivo de su nacionalidad. Mientras que estos pueblos eran tribus errantes, que el hambre ó la conquista llevaba de una á otra tierra, no conocieron la propiedad individual inmueble; el suelo era de dominio comun; los frutos solamente se dividian entre las familias (1). Pero cuando algunos de ellos contrajeron alianzas con los emperadores, recibiendo en pago de sus servicios el usufructo de extensos terrenos y tomando en ellos estable asiento, comprendieron las ventajas del dominio territorial privado y se esforzaron por adquirirlo, por consolidarlo y por estenderlo. Este y otros goces que desconocian los bárbaros, y que los romanos les enseñaron á disfrutar y codiciar, fueron los más poderosos estímulos para la conquista del Imperio.

Al verificarse este gran suceso, llenaban ya los bárbaros, con diferentes títulos y condiciones, muchas y muy extensas provincias. Así les fué tan fácil apoderarse del territorio romano; por eso su lucha con los emperadores, segun observa oportunamente un distinguido escritor moderno, tuvo más bien el carácter de una guerra civil que de una guerra extranjera. Es tambien digno de notarse que en ella el comun del pueblo indigena, ó no tomó parte, abrumado por el peso de su miseria, ó favoreció á los bár-

(1) Tácito, *De moribus Germanorum*, XVI, XXVI, Caesar, *De bello gallico*, VIII, 22,

baros en odio á la tiranía de los Césares. Tal vez contribuyó esta circunstancia á que los conquistadores usaran de cierta moderacion con los vencidos, atendidas las leyes y costumbres de la época. Pudieron, con arreglo á ellas, apoderarse de todas las tierras, despojando por completo á los indígenas, y sin embargo, los visigodos y los borgoñones tomaron sólo las dos terceras partes (1), los hérulos y los ostrogodos la tercera únicamente (2), los francos no ocuparon más que las tierras incultas de las Gálias, dejando las cultivadas á sus dueños, y los lombardos, sin hacer un reparto fijo, se reservaron solamente la tercera parte de los frutos de las tierras cultivadas.

Para comprender la especie de dominio que ejercieron los bárbaros sobre estas tierras, debe tenerse presente que su conquista no fué como la de un Estado, cuyo jefe se apodera de otro con el auxilio de sus ejércitos, en nombre y provecho de la nacion que representa. Los pueblos bárbaros invadieron el territorio del imperio en bandos militares, cuyos individuos no tenían entre sí más vínculos que los indispensables para llevar adelante sus conquistas, haciendo la guerra por su propia cuenta. No vinieron como soldados de una nacion, sino como muchedumbre de soberanos asociados para pelear bajo la direccion temporal y transitoria de alguno de ellos y repartir despues equitativamente entre todos, las tierras y despojos de la conquista. Terminada la comun empresa, tomó asiento cada uno en el lugar que le cupo en suerte, en él ejerció todos los derechos de conquistador, y no se consideró ligado á sus compañeros por otros compromisos, que los aceptados libremente antes de la victoria. Estos se reducian, por lo comun, á reconocer un jefe militar y un presidente de las asambles en que se ventilaban los negocios de interés público. Así los bárbaros, en las tierras de este modo adquiridas, llamadas despues *alodios*, ejercieron un dominio individual, absoluto é independiente, no sujeto á ninguna obligacion social, y que, como se dijo más tarde, no debia nada á nadie, ni dependia más que de Dios y de la espada de cada uno.

La tierra *alodial*, por lo tanto, no pagaba censo, renta ni tributo, ni estaba gravada con ningun género de servidumbre. Su posesion suponía en el poseedor los derechos originarios de la conquista, y por consiguiente, los privilegios de los conquistadores, únicos derechos políticos de la época,

(1) *Lex burgund.*, t. 54, 55. *For. judicum*, lib. X, t. I, 1, 8, 9, 10. Los borgoñones dejaron además á los romanos la mitad de las tierras incultas.

(2) Cassiodor., *Var.*, II, 16. Procop., *De bello gothico*, I, 1.

según diríamos en el lenguaje moderno. Tales eran, además de la autoridad soberana dentro del alodio, asistir á la Asamblea deliberante del cantón, para oír y sentenciar las causas y pleitos de su competencia, ser juzgado por sus iguales en la misma Asamblea, y tomar parte por sí y con sus vasallos, en todas las expediciones militares. Este último derecho, por más que con el tiempo se convirtiese en pesada carga, fué muy estimado al principio, cuando la guerra era el único origen del poder y de la riqueza.

Las tierras adjudicadas á los jefes de las huestes, fueron también poseídas por ellos, en calidad de alodios y con los mismos derechos que disfrutaban en las suyas los simples soldados. En ellas también solamente tuvieron los caudillos dominio verdadero y completa soberanía. Porque no debe confundirse la autoridad pública, según la entiende la sociedad moderna, con la autoridad de los reyes bárbaros. Ahora el soberano ejerce su potestad dentro de señalado territorio, sobre él y sus habitantes: entonces el caudillo de una tribu ó nación, si bien tenía cierta autoridad limitada sobre las personas que la componían, no gozaba ninguna en las tierras que no pertenecían á su patrimonio particular. Los condes en los *cantones*, los *Centenarios* en sus *centenas* y los *Decanos* en sus *decanías*, aunque con algunos escasos atributos del poder público, no disfrutaban verdadera jurisdicción territorial. El cabeza de familia, dueño de casa (*mansus*), era quien dentro de ella y de su demarcación, ejercía potestad soberana. El príncipe no era señor territorial más que dentro de sus *mansus* y con la misma autoridad que cualquiera otro hombre: fuera de ellos, no era apenas más que el jefe de una muchedumbre de soldados voluntarios.

Las tierras dejadas á sus poseedores indígenas, no hubieron de empeorar mucho de condición. Aunque los vencidos corrieron diversa suerte, según sus circunstancias y la codicia del vencedor, todos continuaron sujetos á la ley romana, por la cual siguieron también rigiéndose sus propiedades. Los grandes propietarios perdieron gran parte de su hacienda, pero la clase media y la ínfima no hubieron de padecer demasiado por cambiar de dominación. Tan miserable era su estado bajo el imperio de los Césares, que «preferían, al decir de escritores contemporáneos, la dominación de los godos ú otros bárbaros;» y, según San Isidoro, «más bien querían vivir pobres bajo el yugo de estos, que poderosos y sujetos á los tributos gravísimos de los romanos (1).

(1) Salviano. *De gubernatione Dei*, lib. V.—Paulo Orosio, III, 18.—San Isidoro, *Chron. Gothor.*, anno 447.

Y en efecto, aquellas clases, cuya triste suerte bajo la dominación romana, no era fácil agravar, aunque quedaron sin participación directa en el gobierno y sin los privilegios de la raza conquistadora, conservaron su influencia en las ciudades (1), predominaron en la Iglesia y no pagaron quizá mayores tributos que bajo el gobierno del Imperio, el cual, por lo complicado y centralizador, debió de ser más costoso que el sencillo y descentralizado de los bárbaros (2). Verdad es que al lado de estos propietarios libres vivían otros romanos menos afortunados, los *tributarios*, á quienes había cabido la suerte de cultivar las tierras de los conquistadores, y que llevaban, por lo tanto, una condición semejante á la de los colonos; pero quizá no fueron más en número que en tiempo de los Césares.

Las tierras que no se repartieron, ni formaban parte de las casas, como adyacentes á ellas, fueron propiedad común de la decanía respectiva, y conocidas con el nombre de *marca* en los documentos contemporáneos. A ellas pertenecían los prados y los montes en que los bárbaros criaban y apacentaban sus ganados, ó se ejercitaban en la caza, á que tan apasionados eran. En España quedaron indivisos los montes y bosques, á fin de que sus pastos pudiesen aprovecharse comunalmente, tanto por los godos como por los romanos (3).

Así, pues, dominio alodial, dominio romano y dominio comunal fueron las tres clases de propiedades que quedaron en Europa, inmediatamente después de la conquista, ya que no demos aquel nombre al derecho de los *tributarios* y colonos en las tierras que fecundaban con el sudor de sus rostros. En la primera de aquellas propiedades prevaleció el interés individual sobre el colectivo del Estado: en la segunda, ambos intereses tenían su re-

(1) Los bárbaros hicieron al principio poco caso de las ciudades, que abandonaron á la influencia romana, y habitaron con preferencia en los campos, según su antigua costumbre.

(2) De las leyes 8 y 16, t. 1, l. 10 del *For. jud.* se infiere que el Rey podía reducir á menos del tercio la parte de propiedad dejada á los romanos, para acrecentar la debida á los visigodos. Esto prueba que los bárbaros se consideraron dueños absolutos del territorio conquistado, y que si cedieron una parte á los poseedores antiguos, fué por merced gratuita y revocable. Pero al mismo tiempo era interés del gobierno que los romanos conservaran esta parte de propiedad y no pasase á los visigodos, á fin de que, como dice la ley 16 citada, no menguaran las rentas del Erario; de donde se infiere que los bárbaros poseyeron sus dominios libres de todo impuesto, y que los romanos lo pagaban por los suyos al fisco. Este impuesto debió de recaudarse sin grande esfuerzo, estando ya acostumbrados los contribuyentes á satisfacerlos tan cuantiosos á los Césares.

(3) *For. judic.*, lib. 10, t. 1, l. 9.

presentacion, segun se la habia dado el novisimo derecho romano: en la última predominó el interés colectivo de localidad sobre el individual privado. De modo, que ni aún en los tiempos ni en los pueblos en que más ha prevalecido el sentimiento individualista en la constitucion de la propiedad, ha dejado de existir una gran parte de ella constituida bajo el influjo de los intereses colectivos y del principio de amortizacion. Con el alodio, patrimonio individual é independiente, nace la marca, patrimonio comun de la sociedad civil, y entre tanto, crece con rapidez admirable la propiedad de la Iglesia, patrimonio comun de la sociedad religiosa, amortizado perpétuamente en beneficio del culto.

Puestos ya en contacto y pugna los dos principios contrarios, que dan forma al dominio, veamos la vária suerte que corrieron y las trasformaciones que ocasionaron en la constitucion de la propiedad europea. Que esta no tenia entonces las condiciones indispensables para ser base y sosten del Estado, es cosa que no puede dudarse. Los bárbaros formaban, como he dicho, una coalicion de pequeños soberanos, entre los cuales se habia repartido el territorio del imperio; y como muchos príncipes independientes no pueden vivir cerca unos de otros, largo tiempo, en igualdad perfecta y sin que nazcan de su misma vecindad, necesidades y relaciones nuevas, los coligados no pudieron gobernarse por las reglas de sus antiguos pactos de alianza, que carecian ya de objeto, y no tenian tampoco otras adecuadas á las nuevas circunstancias, porque aún no habian llegado á establecerse. La falta de un régimen conforme á esta nueva situacion y nuevas relaciones de los bárbaros, como habitantes fijos, propietarios estables y vecinos sedentarios, debieron dar lugar á violencias, usurpaciones y conflictos entre ellos, que al cabo trajeron la completa disolucion de su alianza.

Aquella nueva sociedad necesitaba centralizar el poder, estrechar los lazos de la obediencia, establecer entre los asociados las gerarquías, que en la infancia de la civilizacion dan consistencia y solidez al cuerpo social, y procurar, por la union de los intereses, la de los individuos y las clases, que tanto contribuye á la cohesion y fuerza del Estado. Mas para realizar tan alto propósito, no eran ciertamente medios adecuados poner á la cabeza de cada nacion un jefe militar, en vez de un completo soberano, dividir el poder público entre las Asambleas de los cantones y los Condes, que aspiraban á la independéncia, y distribuir la soberania efectiva entre una muchedumbre de propietarios libres, iguales y casi independientes de toda autoridad comun, excepto en las cosas de la guerra. El Franco, el Borgoñon ó el Lombardo, que no tenia con el príncipe más obligaciones que la del servi

cio militar limitado, del cual sacaba gran provecho, ni con la autoridad provincial más vínculo que el de la Asamblea del canton, solia encerrarse en su morada con su familia, parciales y siervos, hacia de ella su única patria, y al interés de mantenerla ó acrecentarla con tierras, siervos y clientes, sacrificaba todo interés público.

Los condes, entre tanto, usurpaban las atribuciones de las Asambleas y las tierras del príncipe, oprímian á los desvalidos y adquirian grandes heredades dentro de sus demarcaciones, á fin de ejercer en ellas, además de la jurisdiccion de su cargo, los extensos derechos del dominio alodial. De este modo se iban convirtiendo los condados en señoríos independientes. Todo conspiraba, pues, á dificultar la centralizacion del poder y á reducirlo y á encerrarlo en límites territoriales tan estrechos, que fuese nulo ó insensible su influjo en la reorganizacion social. Por eso no pudieron establecer los bárbaros Estados vigorosos, sino federaciones frágiles, que habrian perecido muy en breve, si un secreto impulso ó la fuerza natural de las cosas no hubiera conducido á aquellos conquistadores á modificar profundamente la constitucion del dominio. Gracias á esta mudanza, pudo ser luego la propiedad base de una Constitucion política, que contuvo la disolucion de la sociedad.

II.

LOS BENEFICIOS Y SU INFLUENCIA EN EL RÉGIMEN DEL ESTADO.

Poco tiempo despues de la conquista y cuando parecia estar á punto de disolverse la sociedad europea, se verificó un cambio en la constitucion de la propiedad, que restableció un tanto sus quebrantados vínculos con la cosa pública. Tal fué la institucion de los *beneficios*, inspirada sin duda por el interés individual, pero que cedió en provecho del social y colectivo.

Los reyes, poseedores, como he dicho, de grandes alodios, los dividieron con sus *parciales, comensales, fieles, antrustiones* ó *leudes*, dándoselos como retribucion de altos cargos, á título de *beneficio*, y con inmunidad de todo servicio, carga y jurisdiccion local. El Código de los visigodos hace mencion de los *fideles regis* que habian recibido mercedes de la corona y la servian en altos puestos del Estado ó del palacio real (1). Ya en aquel tiempo podian los *fieles* disponer libremente de estas propiedades, así en vida como en muerte; pero la circunstancia de haber tenido que confirmar y sancionar esta facultad el Concilio IV de Toledo, contra los embarazos

(1) *For. judic.*, Proem. XVIII tomado del Concilio IV de Toledo.

que á su uso pudiera oponerle á corona, es motivo bastante para presumir que hubo una época en que semejante derecho no existía, por ser el dominio de tales bienes temporal y revertible.

Codiciosos de tanto honor y provecho los propietarios libres, que vivían retirados en sus tierras, aspiraron al título de vasallos de la Corona, y rodeados de sus clientes y servidores, se presentaron en la corte, para rendir pleito-homenaje al soberano (1). En virtud de esta ceremonia quedaban sujetos á la jurisdiccion inmediata del rey, y podían ejercer los altos cargos del Estado y del palacio, recibiendo en recompensa tierras á título de beneficios. Los moradores de estas tierras quedaban entonces exentos de la potestad del conde y sujetos á la del beneficiario, al cual debían acudir también con el tributo (*fredum*), que era señal de la soberanía (2).

Así se introdujo una nueva forma de propiedad, que sin ser alodial, llevaba consigo el ejercicio de la autoridad pública y la administración de justicia, pero no independiente, sino subordinada al poder central, puesto que el beneficiario reconocía por superior gerárquico al rey, como él lo era de sus vasallos. Disfrutar un *beneficio* de la corona, equivalía á poseer una parte importante de la autoridad pública, bajo la dependencia del soberano. Extendiéndose el uso de este género de propiedad, volvía á ser la tierra vínculo poderoso entre el Estado y los súbditos, sin lo cual no era posible en aquellos tiempos la reorganización de la sociedad.

La costumbre de dar tierras en beneficio, fué al punto adoptada por los grandes propietarios alodiales. Como la autoridad pública era las más veces insuficiente para defender á los débiles, reprimir á los osados poderosos y resistir á los enemigos exteriores, necesitábase para vivir en paz y seguridad, aumentar el poder de las fuerzas individuales. Los dueños de vastos lugares necesitaban para conservarlos mantener á su devoción un número adecuado de personas interesadas en defenderlos, ya como vecinos y moradores, ó ya como partícipes en su propiedad. El modo de procurarse este concurso, era recibir vasallos con obligaciones de servicio y defensa, mediante alguna porción de tierra en beneficio (3). Los proletarios aceptaban con gusto el vasallaje, porque con él, no sólo podían asegurar su subsistencia, sino también su libertad, siempre en peligro de ser sacrificada por la codicia ó la violencia de los poderosos. Y era tan general y tan grave este peligro, que muchos hombres desvalidos se sometían al señorío de los ricos

(1) Marculfo. *Formulas* I, 18. *De regis antrustione*.

(2) Marculfo. *Formulas* I, 3. 24.

(3) Ducange. verb. *Beneficium*.

propietarios, aun sin que mediara concesion de beneficio, con el único fin de que les dispensaran una proteccion que no podia otorgarles la autoridad publica. Tal era el contrato de *recomendación*, en cuya virtud, el recomendado reconocia á un señor por juez y por caudillo, y participaba de las mismas inmunidades que los demás vasallos, ya gratuitamente ó ya pagando además por ello cierta suma llamada *salvamentum* (1). Esta costumbre dió origen en España á algunos pueblos de behetría.

Aún más que los proletarios necesitaban recomendarse á los poderosos los hombres de escasa ó mediana hacienda para ponerla á cubierto de la usurpacion y del pillaje; lo cual dió lugar á que la recomendacion de las personas se extendiera á las propiedades. Esta nueva especie de recomendacion se verificaba transfiriendo el vasallo al señor su alodio, con ciertas ceremonias, y recibéndolo despues del mismo señor solemnemente á título de beneficio y para poseerlo como usufructuario (2). Este contrato se llamaba en España de *incomunion* y de él quedan varios ejemplos en las escrituras antiguas (3). Nunca se recomendaban las propiedades sin las personas, por más que estas se recomendasen muchas veces sin las propiedades.

Tan triste era la suerte de los cortos propietarios, que hubieron de ser innumerables los que abandonaron así el dominio directo de sus heredades y se redujeron á conservar el usufruto, para eximirse de la jurisdiccion impotente y de la milicia tiránica de los condes ó para convertir al temible señor, su vecino, que codiciaba su servicio, en poderoso y solícito patrono. Por otra parte, los señores, para acrecentar sus estados y sus ejércitos, solian obligar, ya con la fuerza ó ya con la astucia, á los dueños de pequeños alodios á ponerse bajo su proteccion. Algunos, por aumentar sus vasallos, no reparaban en la calidad de ellos y tomaban como recomendados á delinquentes, que por este medio buscaban y conseguian su impunidad. En España hubo muchos ejemplos de tales recomendaciones (4).

(1) Ducange. verb. *Salvamentum*.

(2) Marculfo I, 12, presenta una fórmula de esta recomendacion. Su símbolo era la entrega de una vara ó una rama de cespéd.

(3) D. Tomás Muñoz y Romero, en un erudito artículo sobre el estado de las personas en los reinos de Asturias y Leon, inserta dos de estos documentos, de que me haré cargo en otro lugar.

(4) El Sr. Muñoz y Romero, en el escrito antes citado, da noticia de una escritura del tumbo viejo del monasterio de Sobrado, fechada en 1006, por la cual Gutier Munionis y Arias Munion, con su hermana Munia, dan al conde D. Mendo y su mujer y al rey D. Alfonso una casa, porque habiendo cometido los hombres de ella tres homi-

Aún era más frecuente buscar amparo contra la opresion de los poderosos y las depredaciones de los malhechores en la recomendacion á la Iglesia, entregando su persona y sus bienes á algun obispo ó al prelado de algun monasterio. En estos contratos solia estipular el recomendado, bien que se le proveyese de alimento y vestido, con alguna pension vitalicia ú otro emolumento, ó bien que se le devolvieran los mismos bienes que él daba, á veces acrecentados con otros de la Iglesia; pero todos á título de *precario*, que era un mero usufructo, más ó ménos limitado en cuanto á su duracion y sus derechos, segun las condiciones establecidas por los contratantes. Pero de cualquier modo, eran estos contratos de la mayor trascendencia en el órden público; porque disfrutando la Iglesia los privilegios de la inmunidad, y formando el dominio directo de los bienes recomendados parte de su patrimonio, gozaban estos y sus usufructuarios de la misma inmunidad, quedando sujetos á la jurisdiccion del obispo ó del prelado y exentos de la del conde, así como del servicio militar, de peajes y de otras gabelas que pesaban sobre los hombres libres.

El *precario* fué muy usado en España, sobre todo bajo la monarquía visigoda, pero aún más que en la forma dicha, como medio de utilizar los bienes eclesiásticos. La Iglesia solia dar el usufructo de ellos á clérigos ó legos en remuneracion de los servicios que les prestaban, los primeros sobre todo, como ministros del culto. El eclesiástico que abandonaba su estado y el lego que dejaba de prestar el servicio estipulado, debían restituir á la Iglesia todo cuanto de ella habian recibido (1). El *precario* era á veces vitalicio y á veces transmisible á los herederos del recomendado, segun las condiciones convenidas; ya la Iglesia lo prorogaba gratuitamente á los mismos herederos, ó ya era forzosa esta próroga, segun la ley. Pero lo que se usaba más generalmente era otorgarlo por término de cinco años prorogables, con la obligacion de pagar á la Iglesia un corto tributo en reconocimiento de su señorío directo (2).

Así se fueron reduciendo los hombres libres al estado de vasallos particulares; los dueños de cortos alodios fueron convirtiéndose en beneficiarios, y el dominio directo de la tierra se fué acumulando en el clero y la noble-

cidos y arrancado varios carteles de emplazamiento, temieron la justicia del rey y del conde. Tambien da noticia de otra escritura de 1022, por la cual un tal Gontoi y su mujer dan la mitad de ciertos alodios á Vimara á fin de que los defendiera, con motivo de cierto adulterio cometido por un hijo de aquellos con una sobrina de Vimara.

(1) *For. jud.*, lib. V. t. I. l. 5.

(2) Conc. VI. Tol. can. 5. Conc. de Reims, can. 35.

za. De este modo llegaron á desaparecer los alodios pequeños, sobre todo en las regiones del Norte de Europa, que por ser las más castigadas de guerras é irrupciones de bárbaros, conservaron ménos tiempo el orden social antiguo y necesitaron fundar más pronto un nuevo régimen que las librase de la anarquía. Las pequeñas propiedades libres no podian conservar su inviolabilidad en medio de tantas violencias. Así tambien fué reduciéndose el territorio sujeto á la potestad de los condes, que no se habia convertido en su propiedad particular, no quedando al fin en el Estado más autoridad fuerte y respetada que la que nacia de la gran propiedad y de la Iglesia. Así, por último, vino á ser más estable la propiedad en las familias y clases que la disfrutaban, y se fué organizando en la forma entonces más adecuada para la restauracion del orden social. —

En una situacion como la de Europa desde el siglo v al x, en que no predominaba ninguno de los elementos constitutivos de la civilizacion, ni la autoridad pública era bastante fuerte para sujetar las voluntades rebeldes, la fuerza era el medio más necesario para adquirir, y sobre todo, para conservar la propiedad. Hallábase entonces la fuerza en los que poseyendo más tierras tenian bajo su dependencia mayor número de vasallos dispuestos á la guerra. Por eso los propietarios cortos que carecian de este recurso, ó fueron despojados violentamente ó se sometieron al yugo de los poderosos, á fin de salvar una parte de sus derechos, ya que conservarlos todos no les era posible. De aquí resultaron grandes propiedades acumuladas, si bien con limitaciones, en cuanto á su disposicion y uso, por la participacion que tenian en ellas sus poseedores inmediatos; pero tambien se salvó así la propiedad amenazada como institucion, la cual, si momentáneamente suele descansar en la fuerza, no puede vivir largo tiempo sino al amparo de las leyes y de las justas costumbres.

Gracias á esta trasformacion de la propiedad, la aristocracia nacida de la conquista pudo conservarse, fortalecerse y aun mejorar moralmente su condicion; la Iglesia consolidó y acrecentó su poder temporal, sin cuyo auxilio no habria salido Europa de la barbarie, y la monarquía cobró algun vigor, aunque no todo el que necesitaba, para dar eficaz impulso, direccion y unidad á la grande obra de la regeneracion europea. Por consecuencia del mismo fenómeno se crearon entre las familias y los individuos, los ricos y los pobres, los fuertes y los débiles, nuevas relaciones de proteccion y de servicios y nuevos vinculos de union y dependencia, que dieron á la sociedad la cohesion y consistencia de que al principio carecia, y produjeron el feudalismo, único remedio entonces contra la disolucion social que amenazaba.

De modo que la propiedad, así modificada por el principio de los intereses colectivos, ayudó á la Iglesia, consolidó la aristocracia y fortaleció la monarquía, contribuyendo eficazmente al desenvolvimiento de estas tres grandes instituciones, base y cimiento de la moderna civilización.

Pero mientras este principio surtía aquellos efectos, pugnaba también por obrar los suyos el principio contrario de libertad individual. Manifestóse este desde luego en la larga y empeñada contienda de los beneficiarios con los señores del suelo. Aunque desde su origen habia algunos beneficios hereditarios, los más eran temporales ó vitalicios. Pero como el trabajo constituye sobre la materia una especie de derecho, que es título moral del dominio, y la agricultura no prospera sin la estabilidad y seguridad del cultivador en la posesion de sus tierras, los beneficiarios tendian constantemente á ampliar y asegurar sus precarios derechos. Los que disfrutaban beneficios temporales, como retribucion de algun cargo público revocable, aspiraron á hacerlos vitalicios, y muchos lo consiguieron. Los que poseian beneficios vitalicios, revocables á la muerte del soberano, se apresuraban á solicitar la confirmacion de su sucesor cada vez que vacaba la corona, con lo cual llegó á convertirse primero en costumbre general, y despues en ley, lo que al principio fué mera gracia de la potestad discrecional de los príncipes. Algunos poseedores de grandes beneficios vitalicios, para convertirlos en hereditarios, usaban el fraude de enajenarlos á un tercero y adquirirlos luego de él, como alodios, con las formas más solemnes (1). Sabido es cómo en Francia los vasallos inmediatos de la corona, para asegurar sus beneficios, se coaligaron con el mayordomo del palacio y dieron el trono á la dinastía de los Carolingios. Ludovico Pio prodigó á sus beneficiarios toda clase de mercedes. Por último, Cárlos el Calvo, cansado de tan larga lucha y amenazado su reino de una invasion de normandos, otorgó por regla general la codiciada sucesion en todos los beneficios á los herederos aptos para servir las armas y cumplir las demás cargas del vasallaje (2). La misma costumbre habia ido introduciéndose en los demás reinos de Europa; y por último la autorizó y generalizó en 1138 Conrado II en los dominios del

(1) Carol. Magn., ann. 806, Capitular. V, cap. VIII.

(2) Capitular. Carol. Calv. ann., 877, tit. LIII, cap. X, in Baluz., t. II, pág. 176. "Si aliquis ex fidelibus nostris post obitum nostrum.... seculo renuntiare voluerit, et filium vel talem propincuum habuerit, qui reipublice prodesse valeat, suos honores, prout melius voluerit, ei valeat placitare. Et si in alode suo quiete vivere voluerit, nullus ei aliquod impedimentum facere presumat, neque aliud aliquid ab eo requiratur, nisi solummodo ut ad patrie defensionem pergat."

Imperio, siguiendo su ejemplo los legisladores de los otros Estados (1).

La herencia de los beneficios fué una concesion al principio individualista en el régimen de la propiedad, que influyó gravemente en el político del Estado. Sujetos los señores á la corona por el vínculo del beneficio, y á los señores, sus particulares vasallos, por las tierras que disfrutaban de ellos, con igual título, habíase formado una ordenada gerarquía de personas unidas entre sí por el lazo de la propiedad, con tal dependencia unas de otras y todas de la primera en categoría, que casi hubiera podido sustituir al poder central, universal y directo de los emperadores. Mas cuando los beneficios fueron hereditarios é imperdibles, se relajó el vínculo de dependencia que unia á los señores con el monarca, y se rompió el que ligaba á los últimos vasallos con la corona. Los condes, los señores, los obispos, no temiendo ya perder sus haciendas, fundamento de su poderío, aspiraron á la independencia absoluta, movieron guerras, impusieron á veces su yugo al monarca y mantuvieron vivo el espíritu de rebelion. Los que fueran propietarios cortos é independientes, que habrian podido servir de contrapeso al rebelde influjo de los soberbios nobles, eran ya, en su mayor parte, humildes vasallos. El patrimonio real, sin los recursos que antes le proporcionaba la concesion temporal y frecuente de los beneficios, se hallaba arruinado y sin medios de dar fuerza y prestigio al trono. De modo que la mayor independencia de los beneficiarios quebrantó un tanto los vínculos sociales y produjo cierto retroceso en la obra de la restauracion política de los Estados europeos.

En vano procuró Carlo-Magno sustituir al vinculo material de la propiedad vitalicia ó precaria, el vínculo moral de un juramento de fidelidad y homenaje, que habian de prestar al rey todos los hombres del reino, sin perjuicio de la fe y obediencia que, como vasallos, debieran á sus señores particulares. Esta invencion fué ingeniosa y profunda, pero aquella sociedad no estaba aún suficientemente preparada para realizarla. El vulgo, sobre todo, no comprendia aquella doble fidelidad, ni cómo se podia servir á la vez á dos señores. Semejante distincion suponía cierta division de poderes, á que no podia fácilmente acostumbrarse una sociedad, que confundia frecuentemente la autoridad con el dominio. Multitud de vasallos se negaron, pues, á prestar aquel juramento; los sucesores de Carlo-Magno no tuvieron fuerza para exigirlo, y así quedó dividida la soberanía en menudas fracciones, correspondientes á otras tantas de la propiedad territorial. Muchos que fue-

(1) *Lib. Feud.* Lib. V, t. I.

rón en su origen grandes beneficios, se convirtieron en reinos; otros perdieron su independencia, pero todos entraron de lleno en el régimen feudal. El sistema de los beneficios no hereditarios constituía ya un feudalismo incompleto. Carlo-Magno intentó fundar un imperio y una centralización que, si hubiera durado, habría hecho imposible el feudalismo. Mas aquella atrevida empresa fracasó, la herencia de los beneficios aumentó la independencia de sus poseedores, la soberanía política se dividió y subdividió hasta lo infinito, y de todo ello resultó un nuevo sistema de organización social y política, parecida á la que originaría el régimen de los beneficios, pero mucho más completa. Bajo ella continuó, sin embargo, la propiedad amenazada y violada muchas veces, pero consagrada también, en cuanto lo permitía el desorden de los tiempos, al servicio de los intereses colectivos.

III.

MODOS DE TRASMITIR LA PROPIEDAD ENTRE VIVOS Y POR MUERTE.

A las restricciones de la libertad del dominio, que eran consecuencia del estado de la sociedad europea en los primeros siglos de la dominación de los bárbaros, hay que agregar las que creó la ley en interés de las familias. Estas limitaciones se referían unas á los modos de poseer y otras á la facultad de disponer y de adquirir, y ambas contribuyeron en gran manera á la amortización de la propiedad.

En los primeros tiempos, después de la conquista, la propiedad y el nacimiento determinaban la condición social de las personas. El bárbaro que perdía su alodio, solía perder con él todos sus derechos políticos; el noble que no heredaba la fortuna de su padre, entraba las más veces en la clase llana. Verdad es que como entonces la propiedad no cambiaba de dueño con frecuencia, ni era muy común el uso de los testamentos, se transmitía casi siempre á los hijos la nobleza de los padres indirectamente con la sucesión de los bienes raíces. Mas con las guerras y trastornos que después ocasionaron tantos despojos y cambios de fortuna, los propietarios hubieron de sentir la necesidad de garantizar por otros medios la transmisión á sus descendientes del rango y condición que ellos disfrutaban. Siendo además la tierra fuente de autoridad y poder, que habían de emplearse muy particularmente en mantener y acrecentar la posición y el esplendor de las familias, era interés de estas, así como del Estado, que estuviese en manos de personas capaces de cumplir aquellos fines. Estas consideraciones de-

mostraban la conveniencia de limitar las facultades del dominio y de intervenir y regularizar los actos por los cuales se verificaba su trasmision.

Los franco-sálicos, los ripuarios, los borgoñones y algunos otros pueblos germánicos distinguían cuidadosamente, en cuanto á sus efectos jurídicos, los bienes heredados (*alodium, bonum paternum*) de los adquiridos, (*atractum, bonum ex conquisitu, conquestum*) (1). De estos últimos se podía disponer libremente, mas no era lícito enajenar los primeros sino con consentimiento y en presencia de los herederos legítimos del vendedor, á ménos que el comprador ó adquirente fuese el rey ó la Iglesia (2). Esto no obstante, se ve por numerosos documentos, que la Iglesia procuraba asegurar sus adquisiciones, haciéndolas aprobar por las mujeres y los hijos de los enajenantes. De este antiguo derecho de las familias nació despues el retracto de abolengo, que todavia autorizan algunas legislaciones. En su virtud pudieron los hijos y descendientes conservar aquella parte del patrimonio familiar con que sus mayores habian mantenido su independencia y su rango.

El órden de sucesion hereditaria en los pueblos bárbaros descubria el mismo propósito de conservar el estado de las familias y de que los derechos y servicios públicos á él inherentes, recayeran en personas hábiles para ejercer los unos y prestar los otros. En todos aquellos pueblos sucedian los hijos por igual en los bienes alodiales de sus padres, pero en todos tambien, ménos entre los visigodos, disfrutaban cierta preferencia los varones sobre las mujeres y los agnados sobre los cognados. Entre los francos además, las tierras llamadas *sálicas*, que eran probablemente las repartidas á raiz de la conquista, no podian ser poseidas por mujeres (3), sin duda en observancia de alguna costumbre antigua, adoptada con el fin de que no se eximiese ningun propietario del servicio de guerra. Tambien las leyes de los thuringios y de los sajones excluian en ciertos casos de las herencias á las mujeres. Entre los anglos heredaba el hijo, y sólo no habiéndolo, tenia derecho la hija al dinero y á los esclavos. Aun en este caso, quien sucedia en los alodios era el pariente agnado más próximo, dentro del quinto grado, y solamente en su defecto, podia heredar la hija los bienes inmuebles (4). La ley de los ripuarios no llamaba á la nieta á la herencia

(1) *Lex Ripuar.*, t. 56. *Lex Sálica*, t. 7. *Lex Burg.* 1, pár. 5.

(2) *Lex Saxon.*, t. 15, cap. 1.

(3) *Lex Sálica*, t. 62, pár. 6.

(4) *Lex Anglor.*, t. 6, pár. 1 al 8.

del abuelo sino á falta de herederos varones (1). Entre los borgoñones y los alemanes no heredaban las hijas sino en defecto de hijos varones (2).

A falta de descendientes concedían la herencia las leyes bárbaras á los parientes colaterales, pero no siempre los más próximos al difunto, como quiso Justiniano, consultando el vínculo de la sangre, sino los más inmediatos al tronco comun y por líneas. Así es que heredaban primero los descendientes del padre del difunto, en su defecto los del abuelo, despues los del bisabuelo y así sucesivamente. Con estas leyes no pasaban fácilmente los bienes de unas á otras familias, por efecto del matrimonio de las mujeres, y así se procuraba que el patrimonio y gobierno de las mismas familias recayesen en personas capaces de protegerlas y de conservar su estado social, y que la propiedad no fuera á manos incapaces de prestar al Estado los servicios debidos.

De la disputada y al fin conseguida herencia de los beneficios resultó tambien un nuevo y perpétuo vínculo entre la propiedad y las familias, que contribuyó á mantenerlas en su respectiva gerarquía. Si aquella novedad alojó por una parte los lazos entre el Estado y los grandes propietarios, estrechó por otra los de los individuos que componían las familias feudales, que no eran sólo los parientes del beneficiado, sino sus clientes, vasallos y siervos con toda su descendencia, sujetos á su potestad. Estas familias numerosas, elementos políticos del Estado, que podían disolverse cuando los beneficios eran vitalicios ó temporales, no corrieron semejante riesgo desde que, siendo estos hereditarios, no podía faltarles la tierra, vínculo de su union. Repartida despues esta tierra entre vasallos y clientes en pequeños beneficios, quedó perpétuamente consagrada al servicio de las familias que moraban en ellas, resultando una multitud de asociaciones locales, las únicas fuertes que consentía aquella sociedad y sobre las cuales habían de fundarse más tarde los verdaderos Estados.

Siendo la propiedad una de las fuentes del poder y del estado civil y político de las personas, era de interés comun que no se trasmitiese sin la publicidad y solemnidades que tales circunstancias requieren. Por eso, según las costumbres germánicas, no se trasladaba el dominio por la simple manifestacion de la voluntad, sino que se necesitaba la entrega solemne y simbólica ante la asamblea del canton, presidida por el conde. Verificábase esta ceremonia entregando el vendedor al comprador, en el lugar referido,

(1) *Lex Ripuar.*, t. 56, pár. 4.

(2) *Lex Alaman.*, t. 57 y 92. *Lex Burgund.*, t. 14, 1 y t. 65.

una vara con un puñado de césped y un guante ú otro cualquier objeto. Así entre los germanos, lo mismo que en los primeros tiempos de Roma, y por iguales causas, no se trasladaba el dominio sin intervencioa de la autoridad pública, ni sin fórmulas y solemnidades que acreditaran la autenticidad y la legalidad del acto. Verdad es que con este modo de enajenar subsistieron la venta y la donacion romanas, pero fué sólo entre los naturales que continuaron rigiéndose por el derecho imperial. Así la fórmula de la enajenacion germánica fué más usada en los países del Norte, donde aquel derecho subsistió ménos tiempo, al paso que en las provincias del Mediodía en que duró más, y sobre todo en los contratos de la Iglesia, se empleó más frecuentemente la fórmula romana.

Desde el siglo V al X sufrió, pues, la propiedad tres modificaciones importantes, en relacion con otras tantas, acaecidas en la constitucion social y política de Europa. Estas modificaciones no fueron, sin embargo, sucesivas y correspondientes á diversos periodos cronológicos. Las separo para hacerlas más perceptibles, pero en realidad fueron casi simultáneas. En la Edad Media se hallaban á la vez en gérmen todas las instituciones, y por lo tanto no se puede señalar al desenvolvimiento de cada una un periodo distinto.

La propiedad aparece primero subdividida é independiente. En este estado, casi todos los hombres libres que habian tomado parte en la conquista, ó sus descendientes, eran propietarios, con los mismos derechos, dentro de sus tierras, que un soberano en las extranjeras conquistadas, además de los del dominio privado. Esta propiedad era tan libre como la persona del dueño, el cual no contribuia con nada al Estado por razon de ella, pues si debia servirle, ya en la guerra ó ya en las asambleas, era ménos como propietario que como miembro de una banda guerrera, ó como obligado voluntariamente por sus compromisos personales. No siendo estos vínculos suficientes para restaurar la sociedad europea, como lo habian sido para trastornarla, siguió prevaleciendo la fuerza sobre el derecho, y no pudo afirmarse aquella especie de régimen.

En su segundo estado la propiedad se acumula y pierde una parte de su independencia. Con las guerras y nuevas conquistas, que acrecentaron el patrimonio de los reyes y el de la Iglesia y cambiaron tantas veces la fortuna de los súbditos, desapareció pronto el primer reparto de tierras hecho por los bárbaros. Con el imperfecto régimen político y administrattvo, que sustituyó al del imperio, hubo aún ménos seguridad que antes para las personas y sus bienes. La corta propiedad pidió amparo á la gran propiedad

y fué absorbida por ella. La misma gran propiedad, á su vez, no sirvió al dueño sino á costa de que participaran de sus frutos, como condueños, los que la hacían producir y la podían defender con sus brazos. De aquí resultaron los beneficios que, si por un lado hicieron la propiedad más comunicable, por otro menoscabaron los derechos y la independencia de todos sus partícipes. Los beneficios establecieron un nuevo vínculo de union y un órden gerárquico más completo, porque en su virtud quedaron más obligados al monarca los ricos y los próceres, y á estos los pueblos, pero un vínculo que rompiéndose y renovándose periódicamente, no daban al Estado ni á las clases que lo constituían la estabilidad ni la consistencia necesarias.

La propiedad en su tercer estado rompe uno de sus principales lazos con el poder central, pero quedando organizada más que antes lo estaba, en provecho de las grandes familias. Monarcas débiles otorgan á vasallos poderosos la herencia de los beneficios; así los grandes propietarios se hacen más independientes del jefe del Estado, pero restringiéndose á la vez la libre disposicion de la propiedad beneficiaria. No dependió esta entonces del arbitrio del rey, ni de las contingencias de la vida, pero sí hasta cierto punto de los derechos familiares, cada vez más estensos y mejor definidos. Relajado el vínculo entre el monarca y los beneficiarios, se quebrantó igualmente el que existía entre aquel y los vasallos y clientes de estos, que eran la masa del pueblo; pero como se estrechó al mismo tiempo el que mediaba entre las tierras y sus colonos, esta clase, que era la más numerosa, adquirió mayor seguridad y estabilidad en su posesion. Así, todo lo que perdió de fuerza el poder supremo y de cohesion el Estado, lo ganaron las familias, las asociaciones locales y el principio de autoridad en ellas.

CAPITULO VII

Los feudos y sus efectos en el régimen de la propiedad.

I.

NATURALEZA DE LOS FEUDOS Y DE LOS DERECHOS FEUERALES.

Desde que se generalizó la herencia de los beneficios, quedó constituida la propiedad feudal; más esta trasformacion no se verificó de una vez, sino lenta y gradualmente. Así, los señores conservaron durante largo tiempo, y cuando ya los beneficios eran de hecho hereditarios, algunas facultades y prerogativas, testimonio irrecusable de un derecho diferente y de un origen temporal y vitalicio. Tal era, entre otras, la facultad de confirmar á los herederos de los beneficiarios en la posesion de los beneficios en que sucedian, no siendo de otro modo legítima su adquisicion. Los reyes de Francia hacian uso de este derecho respecto á sus vasallos inmediatos todavía en el siglo ix, y sobre beneficios que tenian notoriamente la calidad de hereditarios (1). Entonces este acto, aunque ya mera ceremonia, que no suponía que el señor dejase nunca de confirmar el beneficio á los sucesores legítimos del beneficiario, manifestaba cierta dependencia, resto de un vínculo anterior mucho más estrecho, con el confirmante. Mas esta costumbre fué tambien desapareciendo, sobre todo en Francia, y así se fueron convirtiendo en señores independientes los vasallos inmediatos de la corona.

No debe confundirse la propiedad feudal con la beneficiaria, por más que en ambas se encuentren algunos caracteres análogos y aún idénticos. Había entre ellas la diferencia importantísima de que la herencia era en los beneficios circunstancia excepcional y poco frecuente, y en los feudos era general y propia de su índole. En los primeros conservó siempre el señor su dominio directo de derecho y de hecho, transfiriendo el útil á uno ú otro beneficiario, ó reasumiéndolo en determinados casos. Mediante esta

(1) Un feudo dado por Carlo Magno en 795 á un vasallo llamado Juan "para él y sus descendientes," le fué confirmado despues á su intancia por Ludovico Pio en 815, con la misma calidad de hereditario, y luego, en 844, volvió á confirmarlo Carlos el Calvo en Teutfriedo, hijo de Juan.

facultad podia procurarse el señor nuevos clientes y vasallos, sin aventurarse en empresas belicosas, y conservar los que ya tuviese, puesto que se esforzarian por no perder la buena voluntad del que podia negar á sus hijos la confirmacion esperada. Mas si por un lado estas condiciones del dominio tendian á mantener fuertemente constituida la asociacion feudal, por otro la debilitaban en extremo. De la facultad del señor para disponer libremente de los beneficios, resultaba cierta inestabilidad en la posesion de la tierra, que alojaba el lazo entre esta y sus poseedores, y áun dificultaba la fijeza de la poblacion. Esta misma circunstancia estimulaba al vasallo á sacar de la tierra el mayor fruto posible en el menor tiempo dable, áun cuando fuese con menoscabo de las fuerzas productivas del suelo y de los derechos del dueño. La lucha entre estos intereses contrarios y la necesidad que, como si fuese un derecho, sentia el vasallo de conservar y transmitir á sus hijos el campo en que habia invertido tal vez su fortuna y el trabajo de toda su vida, daban ocasion frecuente, tanto á los actos tiránicos ó vejatorios de los señores, como á la rebelion y á los desmanes de los vasallos.

El señorío del feudo apenas daba derecho sobre el suelo, pues con la herencia quedaba reducido á un título para exigir ciertos servicios personales. El señor feudal no tenia, pues, más medio de accion sobre sus vasallos que la fuerza y la guerra, así como antes podia obrar sobre ellos sólo con el uso pacífico de su derecho. Pero tanto como se relajó el vínculo entre el señor feudal y la tierra, tanto más se estrechó el de esta con sus poseedores inmediatos, y así la poblacion fué más estable, y la propiedad ménos amovible. El feudatario era más dueño de su tierra que el beneficiario; pero esta extension de sus derechos reales quedó generalmente hasta cierto punto compensada, con una más estrecha dependencia personal y una mayor amplitud de los derechos señoriales.

La fidelidad al señor, la defensa de su persona y el servicio de guerra y de corte eran todas las obligaciones del beneficiario. Ninguna otra podia exigirsele, que no estuviese estipulada libremente. Mas cuando con la herencia, se convirtieron en feudos los beneficios, se determinaron con más precision las obligaciones militares de los vasallos, así como sus servicios, tanto en los consejos del señor (*fiducia*), como en sus tribunales (*justitia*), cuando eran convocados á unos ú otros. Entónces tambien se les impusieron nuevas exacciones y gabelas, que con los nombres bárbaros de *auxilia*, *relevium*, *placitum*, *forisfactura*, *tutela* y *maritagium* constituyeron cargas inherentes á la propiedad feudal.

Llamábase *auxilia* los servicios pecuniarios con que los vasallos debían

contribuir al señor en casos previamente señalados, ó cuando ellos los otorgaran voluntariamente. En Inglaterra, segun la *Carta magna*, y en otros países, segun ley ó costumbre, era forzoso este servicio, cuando el señor lo necesitaba para su rescate del cautiverio, ó para armar caballero á su hijo primogénito, ó para casar á la mayor de sus hijas. En Francia solia exigirlo tambien el señor cuando casaba á su hermana ó á su hijo primogénito y cuando salia en expedicion para Tierra-Santa.

Relevium ó *relevamentum* era un derecho que, á la muerte del vasallo, pagaba su heredero al señor, como en reconocimiento de su dominio directo sobre el feudo en que sucedia. La cuota y el nombre de este tributo y los casos de su exaccion variaban, segun los países. En unos no lo pagaban los hijos y descendientes, y en otros ni áun los herederos colaterales, como no pasaran del segundo grado. En Alemania consistia en armas y caballos, segun se lee en un edicto publicado en 1037 por el emperador Conrado. En Inglaterra era la cuarta parte de la renta anual del feudo, y se llamaba *heriot*, segun la *Carta magna*. En Francia, cuando el vasallo dejaba de pagarlo, podia el señor apoderarse del feudo y disfrutarlo un año.

Placitum, *rechatum* ó *reaccapitum* eran los nombres de un derecho que el que compraba feudo de un vasallo pagaba á su señor, como precio de su asentimiento á este contrato. Las relaciones de servicios personales que mediaban entre el vasallo y el señor exigian que cuando aquel hubiera de poner en su lugar á otro que los desempeñase, lo hiciera con licencia del que habia de recibirlos, y de aquí el pagar alguna cantidad por obtenerla. Por la misma razon, cuando el señor enajenaba su dominio, era menester que los vasallos autorizaran la enajenacion como testigos, aunque no fuese necesario su consentimiento. Así Lotario III en Italia (1), Federico I en Alemania y Rugiero en Sicilia, prohibieron enajenar los feudos sin permiso de los señores. En Francia y en otros países, cuando un vasallo trataba de vender bienes feudales, podia el señor reivindicarlos, abonando su precio, ó exigir como alcabala, la renta de un año (2). En Inglaterra, estando ya prohibidas las subinfeudaciones, permitió Eduardo III á sus vasallos inmediatos vender las tierras que poseyesen de la Corona, siempre que pagaran al fisco, por cada enajenacion, un tercio de la renta anual respectiva y que los adquirentes las disfrutaran con la misma calidad de vasallos inmediatos del rey (3).

(1) *Lib. Feud.*, l. II, t. IX. 52.

(2) Ducange. V. *Reaccapitum*, *Placitum*, *Rachatum*.

(3) Hallam. *Hist. of the middle ages*, t. I, p. 91, 7.^a edic.

Llamábase *forisfactura* el derecho del señor para recuperar los feudos vacantes por confiscacion penal, ó por falta de herederos legítimos del vasallo. Debiendo suceder en los feudos los descendientes del primer poseedor, y cuando más, los individuos de su familia, eran comunes los casos de reversion por falta de herederos legítimos, sobre todo, donde como en Inglaterra, no se permitía disponer por testamento de los bienes inmuebles. No era ménos frecuente la confiscacion de los feudos, castigándose con esta pena todos los delitos del vasallo contra su señor y contra el Estado. La *Assisas de Jerusalem* la imponían en muchos casos, ora con el carácter de vitalicia, ora con el de perpétua. En Inglaterra hubo de prevalecer el uso de la confiscacion bajo esta última forma, en tiempo de los reyes normandos, mediante una ficcion legal, que ha durado hasta hace pocos años, y que consistía en suponer manchada y corrompida la sangre de los que delinquían contra su señor ó contra el Estado (*corruption of blood*) (1).

Por el derecho de *tutela* se apoderaba el señor de la de su vasallo, menor de edad, cuidaba de su persona y disfrutaba sus bienes durante la minoría. Era conforme este derecho con la naturaleza y las costumbres del feudalismo, puesto que nadie tenía más interés que el señor en instruir bien al vasallo en la profesion de las armas, que era general en todas las clases, ni más títulos tampoco para gozar el feudo concedido, con obligacion de servicio militar, miéntras que el feudatario, por su edad, era incapaz de cumplirla. Fué este derecho general en Inglaterra y Normandía, y muy usado en Alemania, Italia y España.

La voz bárbara *maritagium* significaba el derecho del señor para ofrecer un marido á su vasalla, y exigir, si no fuese aceptado, una suma igual á la que él mismo hubiera prometido al señor, por su consentimiento en este matrimonio. Despues se hubo de extender tal derecho á los vasallos varones, que los señores tenían en tutela. Fué muy usado en Inglaterra, Alemania, Sicilia y Francia. Segun la *Assisas de Jerusalem*, debia el señor presentar tres pretendientes, y podia obligar á la vasalla á escoger á alguno de ellos, siempre que ninguno fuera de condicion inferior á la suya. Hubo de dar origen á este derecho, por una parte, la incapacidad de las mujeres para desempeñar por si los servicios propios de los feudos, de cuya sucesion no estaban siempre ni absolutamente excluidas, y por otra el interés de los señores en la buena eleccion de sus vasallos; pero con el tiempo no fué

(1) Hallam. *ibid.*, p. 94.

más el *maritagium* que una mera exaccion fiscal, de las que enriquecian el erario de los señores.

Tales fueron despues del siglo x las cargas más usuales de la propiedad feudal; y como ni las capitulares de Cárlo-Magno y los demás reyes de su familia, ni las escrituras anteriores á aquella época hacen mencion de ellas, débese creer que no existian entonces, y que, por lo tanto, hubo en este concepto una notable diferencia entre los beneficios y los feudos. Algunos de aquellos servicios se prestarian sin duda por determinadas propiedades, ántes de la época indicada; pero hasta el siglo xi, y tal vez hasta el xii, no fueron objeto de la legislacion foral comun. Si hubieran existido en los siglos viii y ix, no es tampoco probable que tantos alodios se hubieran convertido en beneficios, por interés y con beneplácito de sus dueños.

La propiedad así constituida, y aunque hereditaria, continuó siendo uno de los más poderosos vínculos de aquella sociedad, como principio eficaz de asociacion, y la base más sólida de la autoridad pública. Los señores impusieron sin duda tales gabelas con la mira única de su interés particular, pero de ellas resultó la ménos desordenada independencia de los vasallos, y cierta limitacion á la movilidad de la propiedad, que por ser ésta fuente de la soberanía, equivalia á la facilidad de cambiar frecuentemente de gobierno. Si, á pesar de todo, consiguieron hacerse independientes tantos vasallos, y se erigieron en señoríos soberanos tantos feudos de la Corona, y se dividió la Europa en tantas pequeñas soberanías, retardándose la formacion de los grandes Estados, en que únicamente podia desenvolverse la civilizacion moderna, ¿qué habria sucedido si los vasallos no hubiesen conservado más vínculos con sus señores que los frágiles é inconstantes de los primeros beneficios? El servicio militar sólo en casos de guerra podia exigirse, y entonces era tambien cuando los vasallos podian más fácilmente sacudir el yugo señorial ó vender más cara su obediencia. El servicio se eludia aún con más facilidad, bien porque realmente no la habia siempre para trasladarse al palacio de los reyes, bien porque el interés de estos en exigirlo solia ser ménos eficaz. Pero las cargas pecuniarias ni se eludian por los vasallos, ni se renunciaban ú olvidaban por los señores, con la misma facilidad, y eran un estímulo constante y poderoso para mantener á los unos bajo la dependencia de los otros.

La herencia de los beneficios contribuyó, por último, á la mayor seguridad en el estado de las personas y al progreso de la riqueza pública. Cuando las tierras beneficiarias revertian á los señores frecuentemente, con la misma frecuencia mudaban de condicion y desaparecian todos los dere-

chos creados sobre ellas por el beneficiario. Si este las habia dado á colonos ú otros sub-beneficiarios, todos perdian el estado que por ello tuvieran, como el señor no volviese á dar el beneficio, al mismo, ó á sus descendientes. Mas desde que los feudos no se trasmitieron sino por un órden riguroso, préviamente establecido, no pudieron variar de condicion las tierras feudales por la mera voluntad de los señores; fué menester el concurso, raras veces obtenido, de todos los partícipes en su dominio, y por consiguiente, se afirmó y perpetuó la condicion respectiva de todos ellos, y dejando tambien de estar á la merced del más fuerte, entre los mismos. Esta mayor estabilidad del carácter civil de las tierras y del estado de las personas dependientes de ellas, fué á la vez un estímulo para mejorar el cultivo, pues así pudo el propietario buscar por medio de las subinfeudaciones el capital ó la industria, que ántes no acudian tal vez á la tierra, por la inseguridad de su posesion, durante el tiempo necesario para recoger el fruto. Todos los que de cualquier modo, participaban de los del dominio del suelo, se consideraban unidos á este por un vínculo más estrecho de amor, de interés y de esperanza. Lo mismo se perpetuó en su posesion la familia del señor, vasallo inmediato á su vez, de la corona, que las familias de los subfeudatarios y colonos, entre quienes se hallaba dividida la tierra feudal. Todos se acostumbraron así á considerar la de su patrimonio como la base estable de su condicion social, y á estimarse ligados con la de su nacimiento ó su morada, por un lazo indisoluble.

II.

MODO DE SUCEDER EN LOS FEUDOS.—SUS CONSECUENCIAS EN EL ÓRDEN SOCIAL Y POLÍTICO.

La herencia no habria quizá bastado para dar asiento y estabilidad á la poblacion, consistencia y fijeza á la sociedad, si no hubiese tenido por su forma á mantener la integridad de los feudos y su posesion en las familias que venian disfrutándolos. Si se hubiese admitido para ellos, el órden de suceder establecido por Justiniano, la propiedad se habria dividido hasta el extremo y habria pasado de manos con tal frecuencia, que difícilmente hubiera podido establecerse entre la tierra y sus moradores, el vínculo de union vigorosa que necesitaba una sociedad casi disuelta y cuyos elementos primitivos eran completamente ineficaces para restaurarla. Si los bárbaros, despues de tomar asiento en Europa, hubieran apelado á sus propias tradi-

ciones para reconstruir la sociedad medio disuelta, sólo habrían encontrado el recuerdo de su organizacion primitiva en tribus errrantes y bandas guerreras, ó sea un estado de barbarie, al cual no podian ya retroceder los súbditos del Imperio. Mas en vez de aquellos recursos ineficaces, acudieron al de la propiedad territorial, que era para ellos un nuevo elemento de civilizacion, y podia constituirse y comunicarse de manera, que contribuyese á fundir las diferentes razas, á unir las familias y á convertir las tribus y bandas en asociaciones estables y sedentarias.

No fueron estas consideraciones, sin embargo, las que determinaron el orden de suceder en los feudos, sino otras más prácticas y ménos trascendentales, nacidas del estado de fuerza en que vivía la sociedad, y más al alcance de los legisladores de la época. El poseedor del feudo debía ser apto para prestar el servicio militar inherente al mismo. De aquí la exclusion de las mujeres de la herencia feudal. Era además conveniente que cada feudo tuviera, dentro de si mismo, los medios de defensa necesarios para resistir las agresiones de la fuerza. De aquí la tendencia de las leyes á impedir la desmembracion de los feudos, bien prohibiendo su enagenacion parcial, ó bien estableciendo directa ó indirectamente el derecho de primogenitura. Encaminado á estos fines el orden de sucesion feudal, dió además por resultado la conservacion de las familias, una organizacion local de la sociedad mucho más vigorosa y un gran número de propiedades amortizadas.

Desde los primeros tiempos del feudalismo era costumbre generalmente recibida, la de que sucediesen en los feudos los hijos varones, con exclusion de las mujeres. Así se practicó siempre en Alemania. Verdad es que en algunos países se otorgó despues la herencia feudal á las hijas tambien, siempre que pusieran un sustituto que prestase por ellas los servicios militares correspondientes; más estos eran feudos *improprios*, segun la calificacion de los juriconsultos contemporáneos, lo cual prueba que la sucesion masculina era inherente, en su origen, á la naturaleza de la propiedad feudal.

En cuanto á la sucesion por derecho de primogenitura, hubo costumbres diversas; pero sin embargo revelaban cierta tendencia á conceder el feudo íntegro al hijo mayor del vasallo. En Inglaterra, poco despues de la conquista de los Normandos, heredaba el primogénito el feudo principal de los que disfrutara su padre, y despues se hizo extensivo este derecho á todos los feudos y tierras que el mismo hubiera poseido, con carga de servicio militar (1). Entre los Lombardos, y al principio entre los Francos, partian

(1) Hallam, *Middle ages*, t. II, p. 47.

los hijos todos los feudos del padre; mas despues se introdujo en muchas provincias de Francia la costumbre llamada de *hermandad* (*frerage*), segun la cual, los feudos principales de baronia se adjudicaban integros al primogénito, con la obligacion de constituir á sus hermanos menores una dotacion en dinero (*apanage*), proporcionada á su nacimiento y á sus circunstancias (1).

Los feudos de inferior categoria, se dividian entre los hijos, en unos lugares por igual, y en otros, dando las dos terceras partes al primogénito, y distribuyendo la parte restante entre los demás hijos, con la obligacion de rendir, cada uno por la suya, el homenaje acostumbrado al mayor de ellos, el cual á su vez debia prestarlo al señor, por la totalidad del feudo. Esta especie de subinfeudacion parcial, como limitacion del derecho de primogenitura, fué tambien adoptada en Flandes y en Hainault (2). En Alemania se guardó primero como ley comun, la sucesion por derecho de primogenitura, con reserva de una corta dotacion á favor de los hijos menores. En el siglo xiii se cambió esta costumbre, por la de partir entre todos los hijos, los grandes feudos, que constituian Principados. Como tales particiones debilitaran el poder de las familias aristocráticas, en unas provincias se adoptó el uso de conservar los feudos indivisos, viviendo y gobernando juntos en sus tierras todos los coherederos, y en otras, hacian éstos pacto de sucesion reciproca, en el mismo feudo, para evitar su incorporacion al imperio, por falta de descendientes varones. Luego el emperador Carlos IV publicó la famosa *Bula de oro*, que prohibia la division de los feudos á que fuese unido el derecho de elegir los emperadores, y mandó suceder en ellos, por rigoroso derecho de primogenitura. Por último se hizo extensiva esta célebre ley á todos los grandes feudos del imperio (3).

Otro medio de conservar la integridad de los feudos y del patrimonio de las familias, fué la observancia de la antigua costumbre germánica, que prohibia enagenar los bienes troncales, sin el asentimiento de los parientes, que pudieran algun dia tener derecho á ellos. Los del feudatario tenian, pues, la facultad de retraer para sí, los bienes raices feudales, que aquel enagenara, mediante el pago de su importe. Este derecho, que el *Libro de los feudos* llama *protimeseos* (4), no se otorgaba á todos los parientes sin distincion. En los feudos heredados del padre, sólo podian ejercitarlo los

(1) Ducange, V. *Apanamentum, Baro.*—Etablissements de S. Louis, c. 24.

(2) Martenne. *Thesaurus Anecdotor*, t. I, p. 1092, cit. por Hallam, t. I, p. 93.

(3) Hallam., *Middle ages*, t. I, p. 332.

(4) Lib. V, tit. 13.

parientes de la línea paterna (1). Mas rigurosa en este punto la legislación inglesa, prohibió toda enagenación de los feudos condicionales.

Nótese ahora como de este orden de sucesión debió resultar la amortización de la mayor parte de la propiedad privada. No podía esta salir de las familias por herencia; trasferirla por contrato era también difícil, teniendo los parientes, que podían heredarla, interés en impedirlo y derecho de retraerla: dividirla era también imposible, donde regía el derecho de primogenitura ú otro análogo; luego debía forzosamente estancarse y perpetuarse en las familias que la poseyeran.

Otra consecuencia importante de la herencia de los feudos fué la creación de una aristocracia de nacimiento, consagrada perpétuamente al servicio público. Antes de aquel suceso, no existía una verdadera aristocracia. Nobles solían ser los poseedores de grandes beneficios, que ejercían potestad soberana dentro de sus tierras, ú oficios del Estado ó de la corte; mas no transmitiendo necesariamente á sus hijos, ni su calidad, ni sus empleos, ni sus riquezas, no formaban una clase permanente, con tradiciones especiales, espíritu de cuerpo, intereses comunes, vida propia, é independencia bastante para constituir un verdadero poder social. Pero cuando por la fuerza de las cosas y la debilidad de los príncipes, lograron los beneficiarios perpetuarse de hecho en sus dominios, adquirieron todas aquellas circunstancias, y con tal auxilio, consiguieron que la ley convirtiese aquel hecho en derecho hereditario. Vinculada así la propiedad feudal en determinadas familias, quedó también como vinculado todo lo que era fruto de ella, á saber: las diversas condiciones sociales á que daba origen, la autoridad política, la jurisdicción civil y penal, y el derecho de exigir y la obligación de prestar ciertos servicios públicos. Estas familias constituyeron entonces una verdadera clase del Estado, que por su derecho y sus medios propios, ejerció sobre las demás una influencia poderosa: que confundiendo sus intereses con los de los lugares sujetos á su potestad, consagró su existencia á defenderlos y conservarlos; y que á la única autoridad eficaz que entonces era posible, la local y limitada de señorío, dió toda la firmeza y energía compatible con la flaqueza del poder supremo.

No haré, sin embargo, la apología de aquella aristocracia, ni ménos trataré de justificar sus escandalosos abusos. Sé que muchos de aquellos próceres fueron tiranos y opresores de sus vasallos, ó desleales y rebeldes á

(1) "Alienatio feudi paterni non valet, etiam domini voluntate, nisi agnatis consentientibus." Lib. 2, feudor, t. 39.

sus monarcas, y que, con su indisciplina y sus violencias, retardaron la constitucion de los Estados modernos, fruto de la nueva civilizacion; mas tampoco puede negarse que sin la aristocracia feudal, quizá habria desaparecido completamente de Europa todo principio de autoridad pública, el espíritu de caballeria, asilo entonces de los sentimientos morales de abnegacion, generosidad y desinterés, el espíritu de familia, cuyas relaciones se estrecharon y desarrollaron en la vida interior y aislada de los castillos, y un resto de unidad política, que se conservó en las asociaciones locales, formadas por los feudos. La aristocracia y la Iglesia fueron depositarias de los únicos elementos de civilizacion que encerraba la Edad Media. Sin ellas habria llegado la sociedad al último grado de disolucion, se habrian roto los débiles lazos que unian á sus individuos, la fuerza pública habria perdido todo principio de organizacion, y la civilizacion antigua no habria dejado en Europa más vestigios, ni ejercido sobre ella más influjo que la civilizacion de los Aztecas y los Incas en el Nuevo Mundo. Sin la aristocracia habrian perecido en Europa, como en el África romana, hasta las últimas reliquias de la antigua organizacion social; y así como en esa otra parte del mundo no encontraron resistencia los hijos de Mahoma, porque la sociedad romana estaba completamente aniquilada, y los vándalos no habian sabido formar otra nueva, así tampoco habria podido defenderse Europa de los fanáticos musulmanes, que tambien la invadieron, si los próceres no hubieran logrado reunir y oponerles huestes numerosas, producto de una sociedad medianamente organizada, y toda ella habria caido, como España, bajo el yugo de Mahoma.

La inestabilidad de todas las instituciones públicas, la inseguridad de todas las condiciones sociales y de los intereses dependientes de ellas, y la falta de un orden jerárquico sólido y no sujeto á frecuentes mudanzas, eran, como antes he dicho, los principales vicios y defectos de la sociedad europea en los primeros tiempos despues de la conquista. Mas desde que hubo una aristocracia hereditaria, la misma firmeza y seguridad que ella, adquirieron, por lo general, todas las demás clases sociales. Vinculados en unas familias el poder y la propiedad, quedaron vinculados en otras su participacion en la misma propiedad y el deber de la obediencia. Así como unos nacia duques, condes ó barones y grandes feudatarios de la corona, así nacia otros sub-feudatarios suyos (*valvasores*) que formaban tambien cierta aristocracia, aunque de segundo orden, y otros, vasallos de estos, nobles tambien, pero de clase inferior, y otros colonos, y otros plebeyos, y todos con derechos y deberes recíprocos, fundados en la propiedad y en

la sangre. Con tal sistema no debian ser tan frecuentes como antes las vicisitudes del estado social de las personas. En Francia hubo un tiempo en que los plebeyos no podian obtener feudos. Despues fueron habilitados para adquirirlos por compra, herencia ó prescripcion, pero reservándose la corona el derecho de exigirles un tributo al tiempo de la adquisicion y otro cada veinte años, y excluyendo en todo caso de la sucesion feudal al que, por lo ménos, no fuera hijo de padre noble (1). En Alemania no podia heredar el feudo inmediato de la corona quien no fuera hijo de padre y madre nobles. Y sin embargo, los plebeyos eran hombres libres, y propietarios no privilegiados, que habitaban, ora en el campo, ora en las ciudades, sin confundirse nunca con los colonos, cuyo estado era un término medio entre la esclavitud y la libertad.

La herencia de los feudos no habria contribuido tanto á la estabilidad de las clases sociales, si hubiera continuado el uso antiguo de cambiar la condicion de las tierras cada vez que se alteraba la de su dueño. Con el trascurso del tiempo, que pone el sello de su autoridad al hecho de la posesion, y con perpetuarse en las familias las propiedades territoriales, que una vez entraban en ellas, se abandonó aquella antigua práctica, y las tierras continuaron siendo nobles, libres ó serviles, aunque pasaran al dominio de quien disfrutara estado civil diferente. En Francia habia desde antiguo *mansi ingenui* y *mansi serviles* por sí mismos, é independientemente del estado de sus propietarios. En Inglaterra habia tierras llamadas de *liberum tenementum* y tierras de *villenagium*, que correspondian á las que se denominaban despues en Francia tierras *nobles* y tierras de *rotura*. Pero tanto en uno como en otro país, habia nobles en posesion de tierras villanas, y plebeyos disfrutando feudos nobles, sin mudar ninguno por eso de condicion.

La estabilidad y distincion del estado civil y político de las personas equivalia entonces á la fijeza y determinacion de las relaciones entre las diversas clases de la sociedad. Además, la herencia de los feudos era, segun antes he dicho, la herencia del poder. Dando consistencia y duracion á aquellas relaciones, se robustecia la autoridad de unas clases y se aseguraba la sumision de otras. Haciendo hereditario el gobierno local, se le dió uno de los atributos que más fuerza moral y prestigio comunican á la autoridad pública. Entonces, y mucho despues, cuando el poder se adquiria por el nacimiento, considerábase al que lo desempeñaba como designado y

(1) *Hallam*, obr. cit., t. I, pág. 103.

escogido por Dios, que para tales fines, le había traído al mundo. No se remediaron con esto, sin embargo, todos los males del tiempo; mas el orden moral y material posible en una sociedad falta de cohesión en sus elementos, y de unidad de acción y de propósitos en el poder supremo, lo dió la herencia de los feudos á la sociedad de los siglos medios.

III.

CÓMO CONTRIBUYÓ LA HERENCIA DE LOS FEUDOS Á CREAR LA SOBERANÍA TERRITORIAL.

La estabilidad en la posesión de la tierra produjo al fin el resultado importantísimo de dar carácter territorial á la autoridad pública, que hasta entonces había sido personalísima. La base de la sociedad germánica era el consentimiento libre de sus individuos. El patrono no podía exigir del cliente más servicios que los acostumbrados ó los prometidos, así como después el señor no podía reclamar de sus vasallos sino los servicios inherentes al feudo, que eran los consentidos por sus antecesores, y prometidos libremente por ellos cada vez que prestaban homenaje. El hombre libre, que no lo había tributado á nadie, no formaba parte propiamente de aquella sociedad, ni debía siquiera obediencia al soberano ó al conde su representante, sino cuando era llamado á las armas ó á juzgar á sus iguales. El que lo era del señor particular, no debía apenas obediencia al rey, pues tan limitadas ó controvertidas eran sus obligaciones con el soberano. La autoridad de este sobre la de los hombres que no le habían rendido homenaje como vasallos, y la de los condes, sus delegados, mientras que no convirtieron sus territorios en señoríos, conservaban así el carácter personal que tuvieron en los primeros tiempos después de la conquista. Así, cuando Cárlo-Magno trató de sujetar á su autoridad suprema á los habitantes de su imperio, que vivían exentos de ella, no discurrió otro medio que exigir, según antes he dicho, un juramento directo de fidelidad á los vasallos de señores. Pero con la transformación de los alodios cortos en beneficios y de muchos condados en señoríos independientes, aquella sombra de soberanía central, quedó reducida á un limitado territorio, y aún dentro de él, no se ejerció sino sobre un escaso número de personas. Por eso se observa que aunque estaban obligados á acudir á la guerra, tanto los meros súbditos como los vasallos de la corona, eran siempre estos últimos los que formaban la mayoría de los ejércitos.

La soberanía propiamente dicha, residía en la propiedad territorial. Ejercíanla el monarca en sus dominios particulares, el señor en sus tierras y sobre sus vasallos, el feudatario sobre los subfeudatarios, y todos los propietarios sobre sus colonos solariegos, adscritos perpétuamente á sus heredades para cultivarlas y percibir sus frutos mediante el pago de cierta pension. Aunque esta soberanía emanase de la tierra, como no ejercía su accion sobre los hombres libres que moraban en ella, y solamente por esta circunstancia, á no ser que hubiesen rendido vasallaje al soberano, era eminentemente personal. Mas como los feudos se concedían generalmente con la cláusula de inmunidad territorial, con ellos fué tambien tomando este carácter la soberanía.

Consistía la inmunidad en prohibir á los condes, jueces y demás delegados de la corona la entrada en las tierras señoriales, para formar causas, exigir multas, tomar alojamiento, imponer tributos y reclamar fianzas de estar á derecho (1). Generalizado este privilegio entre los vasallos inmediatos de la corona, las iglesias y los monasterios, y los hombres libres que moraban en los vastos territorios de su pertenencia, ó quedaban exentos de toda jurisdiccion, ó habian de estar sujetos á la del señor, que era el único que en tales lugares podía hacer justicia. Así las inmunidades se consideraron desde luego como el medio más adecuado de extender la autoridad de los señores á todos los habitantes de sus respectivos territorios. Tal vez hubo hombres libres que, repugnando esta nueva sujecion, aspiraron á conservar su nativa independendencia; pero contra sus pretensiones se inventó la sábia regla política que no permitía hubiese hombre sin señor, con la diferencia de que el vasallo por nacimiento debía reconocer por tal al que le diera la naturaleza, y el hombre libre podia escogerlo á su arbitrio. Así sucedia en Francia en tiempo de Cárlos el Calvo, segun se infiere de sus Capitulares (2), y despues, segun el *establecimiento* 87 de San Luis, que ordenaba á todo forastero que se estableciese en una baronia, reconocer al baron como señor, en el plazo de un año y un dia. En Inglaterra, segun las leyes anglo-sajonas, ningun hombre debía estar sin señor. En España, los hombres libres que no tenian por superior inmediato al rey, á la Iglesia ó á algun señor hereditario, eran de behetria, y por

(1) Todo esto contiene la fórmula de inmunidad que publicó Marculfo. *Append.*, form. 44.

(2) Baluzii Capitul., tom. 1, pág. 308, ann. 806, p. 356, XXXVI.—Capit. Carol., Calv. ann. 877.

lo tanto debian escoger por señor al que «más bien les ficiese,» segun las palabras de una ley de Partida (1).

Pero sin la estabilidad que la herencia dió á los señores y vasallos en la posesion del suelo, no habria conservado la soberanía local el carácter territorial que le daban las inmunidades, y sin soberanía territorial no hay poblacion sedentaria, ni sociedad civilizada. Si la herencia no hubiese hecho permanente la inmunidad de las tierras, los hombres libres, sujetos por ella, habrian cambiado con frecuencia de condicion, y dificilmente se habrian acostumbrado á considerarse súbditos por razon del lugar de su morada. Si los señores á su vez, hubieran estimado precaria y transitoria su potestad, seguramente habrian oprimido y tiranizado mas á sus vasallos. Las behetrías españolas ofrecen un vivo ejemplo de lo que hubiera sido en toda Europa la soberanía territorial, si no hubiese sido estable la posesion de la tierra. Los pueblos de behetría, con su codiciado privilegio de elegir señor, fueron siempre víctimas, ó de la anarquía interior mas abominable, ó de la arbitrariedad y la codicia de sus señores transitorios. En vano procuraron las leyes reprimir aquellos desmanes, fijando los derechos de los señores y las obligaciones de los vasallos: D. Alfonso X tuvo al fin que prohibir el establecimiento de nuevas behetrías: las antiguas se fueron entregando voluntariamente unas tras otras, ya á la corona, ó ya á señores perpétuos; y los pueblos que disfrutaron aquel triste privilegio sólo han quedado en nuestra memoria como ejemplos de mal gobierno, de arbitrariedad y de indisciplina.

IV.

INFLUENCIA DE LA PROPIEDAD EN LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS NACIDAS DEL FEUDALISMO.

La propiedad estable y hereditaria contribuyó asimismo á suplir, hasta cierto punto, la insuficiencia de las instituciones políticas, nacidas del feudalismo. La sociedad europea, desde el principio de la Edad Media, encerraba, como dice Mr. Guizot (2), los gérmenes de las instituciones fundamentales que han regido siempre en el mundo, á saber: la Monarquía, la Democracia y la Aristocracia. Los reyes bárbaros, con su limitada autoridad de generales de ejército, y sus pretensiones, en algunos casos, á la

(1) L. III, t. XXV, Part. 4.^a

(2) *Hist. de la civilisation en Europe.*

sucesion de los césares, representaban el principio monárquico. Las asambleas generales de los francos (*Campos de Marzo* y *Campos de Mayo*) y las asambleas locales de canton (*Mallus*): las que anualmente celebraban los longobardos, con asistencia de los propietarios y el concurso de la muchedumbre, para deliberar sobre los asuntos de interés general: las grandes juntas del *Witenagemot*, en que los anglo-sajones dictaban sus leyes generales, con asistencia de todos ó la mayor parte de los propietarios: las asambleas de distrito del mismo pueblo (*Shiregemot*), á que concurrían los hombres libres de la localidad, y otras instituciones análogas, revelan la existencia en la Edad Media de muchos elementos democráticos. La soberanía democrática de los padres de familia, el patronazgo de los jefes de banda sobre sus clientes, y la desigual reparticion de las tierras conquistadas eran tambien fecundos gérmenes de aristocracia. Pero confundidas y no armonizadas entre sí estas diversas instituciones, unas se desenvolvieron, otras se desvirtuaron y casi se extinguieron, y todas se trasformaron por el influjo poderoso de la tendencia, que al fin predominó, en la constitucion de la propiedad.

La monarquía germánica, por su carácter militar y su autoridad limitada, era insuficiente para crear desde luego un poder central tan fuerte, como lo exigía el universal desconcierto de la sociedad europea; pero conservada y fortalecida con el prestigio de la victoria, llamó á la propiedad en su auxilio, y las concesiones de beneficios acrecentaron su influencia. Los convites y las donaciones de armas ú otros objetos muebles, único vínculo entre el caudillo germano y sus clientes, al tiempo de la conquista, eran cimiento harto frágil para fundar sobre él la autoridad permanente del superior y la dependencia constante del súbdito. Pero cuando los jefes, en lugar de armas y manjares, dieron á sus parciales tierras, con el cargo de algun servicio público, las relaciones entre ellos adquirieron mayor solidez y estabilidad, los caudillos afirmaron y extendieron su poder, y los hombres libres quedaron más ligados con ellos, por los lazos del interés y de la gratitud. Así tomó tanto incremento el principio monárquico en la época de los beneficios, y Cárlo-Magno pudo intentar la restauracion del imperio romano, y se llegaron á constituir algunas grandes monarquías, que recogieron y transmitieron á las generaciones venideras, las tradiciones de autoridad y centralizacion de los césares. Así la constitucion beneficiaria de la propiedad contribuyó eficazmente al desenvolvimiento de la institución monárquica, que yacía en germen, en el seno de aquella sociedad.

Pero declarada la herencia de los beneficios, perdió la monarquía uno

de los principales elementos de su poder, porque haciéndose casi independientes de ella los grandes propietarios, se dispersaron las fuerzas sociales, que iban reorganizándose, y la árdua empresa de restablecer la unidad política y la centralización administrativa quedó frustrada para mucho tiempo. El principio monárquico se disvirtuó entonces, y aunque su espíritu se conservó un tanto adulterado y corrompido, en los señoríos locales soberanos, no logró reponerse ni cobrar aliento hasta que por confiscaciones, matrimonios, herencias, contratos y disposiciones reales de legalidad más ó ménos dudosa, consiguió recuperar la corona la mayor parte del territorio infeudado. Entonces se inventó una nueva regla de derecho público adecuada á las necesidades de la época, y que sirvió de fundamento para la reversion á la corona de muchos feudos: tal fué la que declaraba inalienables é imprescriptibles los bienes del Estado. Y así como la conversión de los beneficios temporales en feudos hereditarios debilitó el principio monárquico, así lo restauró y fortaleció la incorporación al Estado de aquellas propiedades, porque con ellas la corona no sólo ganó el dominio, sino la potestad de qué carecía en una parte considerable del territorio.

No menor influencia ejerció la forma de la propiedad en las instituciones democráticas de aquellos pueblos. Hecho el primer reparto de tierras, los nuevos dueños las entregaron para su cultivo á esclavos ó colonos, y no se separaron de los jefes que les habian conducido á la victoria. Pero instituidos los beneficios, y fundados con ellos vastos lugares, inmunes de toda autoridad general, se formaron otros tantos centros de población, distantes unos de otros, y cuyo gobierno y custodia reclamaban la presencia del respectivo dueño. Fueron, en su consecuencia, dispersándose los hombres libres y arraigándose en estos lugares diversos, y de aquí resultó una grave dificultad material para la celebracion periódica y constante de las asambleas políticas. En los primeros años, después de la conquista, no eran ya frecuentes sino entre los germanos establecidos en sus fronteras. Mr. Guizot observa con este motivo, que las leyes de los alemanes, de los bojaríos y de los francos-riparios hablan de estas asambleas más frecuentemente y en tono más imperativo que las de los franco-salios que habitaban en lo interior de la Galia y en medio de una población romana (1). Así Carlo-Magno tuvo que reducir á tres cada año las reuniones de las asambleas de distrito, que antes fueran mensuales, quincenales y aún se-

(1) *Hist. de la civilisat. en France*, t. IV, p. 287.

manales. En tiempo de Ludovico Pio habian caido estas asambleas tan en desuso, que los condes y jefes de las provincias no solian convocarlas, sino como medio de sacar multas á los hombres libres que no acudian á ellas. Por las mismas causas fueron tambien olvidándose las asambleas nacionales. Bajo la dinastía Merovingia se celebraron ya en Francia pocos *Campos de Marzo*, y despues ya no fueron sino reuniones solemnes en que los vasallos poderosos transigian sus diferencias con el rey, ó le ofrecian ciertos presentes en cumplimiento de una antigua costumbre (1). Bajo la dinastía de los Carolingios fueron restablecidas estas asambleas, mas sin su carácter primitivo y por corto tiempo, puesto que desde el reinado de Cárlos el Calvo no vuelve la historia á hacer memoria de ellas. Por último, generalizado y consolidado el feudalismo, se perdieron hasta los últimos vestigios de aquella institucion famosa. Dividido el territorio en señoríos independientes, los tribunales señoriales reemplazaron á las asambleas de canton, que tenian el mismo objeto. Reducida la esfera de los intereses públicos, y rotos ó muy quebrantados los vinculos de las asociaciones locales con el Estado, no hallaron los hombres libres estímulo bastante eficaz para dejar el regalo de su casa y emprender frecuentes viajes, largos y penosos tal vez, para asistir á una asamblea en que no se ventilaban ya los negocios de su interés inmediato.

Las instituciones aristocráticas recibieron, por el contrario, un impulso vigoroso de la propiedad feudal. Ya se ha visto cómo de la herencia de los beneficios resultó una verdadera clase aristocrática; hé aquí ahora cómo la propiedad feudal, por su naturaleza y sus accidentes, contribuyó á fomentarla y extenderla. La potestad que el germano libre, padre de familias, ejercia dentro de su casa, elemento aristocrático de gran importancia, se extendió y fortaleció, cuando con la herencia de los beneficios, se acumuló la propiedad territorial, aumentándose con ella, como era forzoso, el número de colonos y clientes que hacian parte de la familia sujeta á aquella autoridad. El patronazgo, que era otra institucion eminentemente aristocrática, hubo de adquirir grande incremento cuando, con los beneficios tan codiciados, acrecentaban los patronos el número de sus clientes. Por último, el orden de sucesion feudal, con sus preferencias á los varones, y sus tendencias á la primogenitura, mantuvo y fomentó la desigual particion de la riqueza y la acumulacion de la propiedad; todo lo cual favoreció sobremanera el desenvolvimiento del principio aristocrático.

(1) Guizot. *Civilis. en France*, t. IV, p. 289.

Estas instituciones fueron, sin embargo, insuficientes, no sólo para consolidar un gobierno central comun, sino para mantener el orden y la justicia dentro de las pequeñas sociedades que formaban los señoríos. En vano se estableció una organizacion judicial en que, como dice Mr. Guizot, tenian intervencion los tres principios de gobierno, ó más bien, las fuerzas vivas de la sociedad que los representaban (1): de la combinacion y contrapeso de estos elementos no resultó una tolerable administracion de justicia. Los señores, cada vez más poderosos, fueron árbitros de sus tribunales; denegaron la justicia, seguros de su impunidad, y apelaron á la fuerza contra sus vasallos, cuando deberian haber acudido á su superior ó al rey. Los hombres libres dejaron de concurrir á la audiencia feudal: los señores tuvieron que designar á su arbitrio los jueces que habian de formarla, y así vino á caer en desuso el juicio por los *Pares*. El monarca, con su autoridad menoscabada y controvertida, no pudo dispensar á los agraviados la proteccion á que tenian derecho contra las demasias de los señores. Así no quedó otra garantía para los derechos civiles que el combate judicial y la guerra privada, y á uno y otra se acudió, en efecto, segun el estado y circunstancias de los contendientes.

Si hubiera de seguir paso á paso la historia del feudalismo, diria ahora cómo de la tiranía de los señores y de la insubordinacion de los grandes vasallos, provinieron las causas que al fin acabaran con aquel régimen. Diria, por ejemplo, que, aumentándose en unas partes el poder de la corona, como en Francia, en otras el de la democracia, como en Italia, y en otras el de la aristocracia, como en Alemania, quedaron destruidas ó profundamente quebrantadas las instituciones feudales, formándose en su lugar poderosas monarquías, repúblicas ó federaciones aristocráticas. Mas para no traspasar los limites de mi asunto, basta examinar ahora el influjo de las vicisitudes de la propiedad en la abolicion del feudalismo, y las alteraciones que ella misma experimentó por consecuencia de este suceso.

(1) Observa ingeniosamente Mr. Guizot que en la administracion de justicia intervenia el principio aristocrático, por ser el señor quien recibia la demanda del vasallo, convocaba á los jueces que habian de fallarla y ejecutaba la sentencia: el principio democrático, por la necesidad de que estos jueces fueran los *Pares* del demandado; y el principio monárquico, por el recurso reservado al rey cuando el señor denegaba la justicia ó dictaba sentencia injusta, ó se suscitaba pleito entre él y el vasallo, sobre intereses ajenos al feudo.

V.

INFLUENCIA DE LAS VICISITUDES DE LA PROPIEDAD EN LA DESTRUCCION
DEL FEUDALISMO.

He dicho ántes que cuando por efecto de la herencia de los beneficios, se relajaron los vínculos de la propiedad con el Estado ó con el monarca que lo representaba, se estrecharon más los que unian con sus jefes á las pequeñas asociaciones; ahora añadiré que estos lazos fueron tambien aflojándose, por la accion de otras causas. Los vasallos particulares aspiraron, como era natural, á poseer sus tierras con la misma calidad hereditaria que habian alcanzado sus señores, y á conquistar de este modo su independencia. Consiguieron lo primero, despues de empeñada lucha, pero con restricciones tales, que retardaron la consecucion de lo segundo. Tres siglos más tardaron los vasallos particulares, los colonos y los siervos en alcanzar una libertad semejante á la de los vasallos inmediatos de la corona.

El sistema feudal llevaba dentro de sí mismo los gérmenes de su muerte. Para persuadirse de ello, basta considerar que los vasallos podian hacerse independientes siendo fuertes; que eran fuertes siendo muchos, y que el feudalismo tendia, por una ley indeclinable de su naturaleza, á aumentar el número y la fuerza de los vasallos. Para mantener los señores su autoridad y su independencia, necesitaban acrecentar cada dia su poder y sus recursos, concediendo feudos y gravando los concedidos con nuevas cargas, puesto que sólo así fomentaban su clientela, su ejército y su hacienda. Estas nuevas infeudaciones aumentaban las clases interesadas en la destruccion del régimen feudal, al paso que las nuevas exacciones exacerbaban su descontento. Estas clases hallaron proteccion en la corona, á la cual podian recurrir en queja contra sus señores, y aliados activos y poderosos en los hombres libres, habitantes de las ciudades privilegiadas con una administracion municipal independiente y otras libertades y franquicias. De modo que lo mismo que servia para conservar la organizacion feudal, contribuia eficazmente á minarla y destruirla en lo futuro. No podia ésta mantenerse sino á condicion de que la propiedad se subdividiera más y más cada dia con nuevas infeudaciones, las cuales á su vez acrecentaban el número y la fuerza de los enemigos del feudalismo.

Contribuyó tambien la propiedad á la abolicion de este régimen á me-

dida que fué haciéndose más comunicable. Esta cualidad permaneció al fin en los feudos: 1.º Por haber sido llamadas las mujeres á la sucesion de muchos de ellos. 2.º Por haberse facilitado su particion entre los herederos de los feudatarios. 3.º Por haberse disminuido las trabas que impedían ó dificultaban su enajenacion. 4.º Por haberse aumentado el número de personas hábiles para poseerlos.

Las mujeres estaban al principio generalmente excluidas de la sucesion feudal, como incapaces de servir las armas. Cuando los señores fueron bastante fuertes para negar ó escatimar á la corona su servicio personal y esta tan débil que no siempre podia exigirlo, se introdujo la costumbre de redimirlo mediante cierta suma de dinero, llamada en Francia *escuage*. Los mismos monarcas aceptaron gustosos esa transaccion, porque siendo generalmente limitado el servicio militar á un corto número de dias, no podian contar con sus vasallos para guerras largas ó expediciones lejanas, sin pagarles fuertes soldadas y hacer gastos superiores á sus recursos (1). Esta misma costumbre adoptaron despues los señores respecto á sus vasallos particulares; mas con ella cesó, tanto respecto á los mismos como respecto á los feudatarios inmediatos á la corona, el motivo que excluía á las mujeres de la sucesion feudal, puesto que para redimir el servicio, era su aptitud igual á la de los varones. Habilitadas las mujeres para heredar los feudos, trasfirieron de unas á otras familias, por sus matrimonios, aquellas propiedades, y cesó la estabilidad de los patrimonios, que tanto habian contribuido á crear y mantener el régimen feudal.

A la tendencia favorable á la primogenitura que mostraban las leyes de sucesion, aun allí donde no estaba plenamente admitido este derecho, se opuso el interés de los señores en facilitar la particion de los feudos, á fin de tener por este medio á su devocion mayor número de vasallos. En Francia era costumbre antigua, segun antes he dicho, que los hermanos menores, entre quienes se dividía un feudo, rindiesen homenaje al primogénito por su respectiva porcion; mas á principios del siglo xiii, el rey Felipe Augusto y otros varios señores abolieron esta práctica, disponiendo que en adelante todos los diviseros de un feudo tributaran pleito homenaje al señor inmediato (2). Casi al mismo tiempo se adoptó en Alemania la costumbre ántes referida de dividir entre los hijos los grandes feudos que constituian principados. Estas divisiones y subdivisiones fueron naturalmente

(1) Ducange; v. *Hostis*. Hallam, t. I, p. 153.

(2) *Ordonnances des Rois de France*; Philip. Aug., ann. 1209.

multiplicándose con el trascurso del tiempo; con lo cual, si se aumentó en efecto el número de vasallos, también se agravó la dificultad de gobernarlos y de mantener su sumisión al régimen vigente.

Cuando los feudos no se transmitían por herencia era propia de su índole la inalienabilidad, por cuanto sin ella se habría perjudicado el derecho á la reversion del señor inmediato. Declarados hereditarios, todavía no les cuadraba la libre facultad de enajenarlos, ya porque el adquirente podía no ser apto para desempeñar el servicio inherente á ellos, ya porque el señor podía perder su derecho á la reversion, en el caso en que debiera verificarse por morir el vasallo sin herederos legítimos. Pero conmutado en pecuniario el servicio militar, y á medida que fueron también conmutándose los demás servicios personales, no sólo cesó el motivo que impedía las enajenaciones, sino que el promoverlas y facilitarlas fué interés de los mismos señores para acrecentar los productos del derecho de laudemio que exigían por ellas. Así en algunos países, aún sin previa licencia de los señores, podían venderse las propiedades feudales á cualquier persona hábil para disfrutarlas, siempre que se pagase el derecho establecido.

Las subinfeudaciones, admitidas y generalizadas desde el principio, aumentaron considerablemente, según antes he dicho, el número de propietarios territoriales; pero disminuyeron al mismo tiempo la acumulación de la propiedad, que tanto contribuía al sostenimiento de aquel régimen. En Francia fueron siempre permitidas con ciertos requisitos: en Inglaterra sólo en los primeros tiempos, después de la Conquista. La *Carta-Magna* las dificultó, y Eduardo I las prohibió después absolutamente. Es de notar, sin embargo, que el mismo estatuto que dictó esta prohibición alzó la que de antiguo existía de enajenar los bienes feudales, y permitió hacerlo siempre que el adquirente entrase á poseerlos bajo la dependencia inmediata, no del vendedor, sino del señor directo. (1) Aunque este beneficio no alcanzó desde luego á los feudos de la corona, Eduardo III lo extendió después á ellos, gravando sus enajenaciones con un fuerte derecho. (2) De modo que, si la ley inglesa prohibió por una parte las subinfeudaciones, arbitró por otra un medio más seguro de conseguir sus efectos en cuanto á la comunicabilidad del dominio material, sin menoscabo de la sujeción directa de todos sus partícipes al señor ó á la corona.

(1) Este estatuto es del año xviii del reinado de Eduardo I, que los legistas ingleses conocen con la rúbrica *Quia emptores*.

(2) Blackstone, *Commentaries*, t. 2., c. 5.—Hallam, t. 1., c. 2.

Los colonos, villanos y solariegos formaban una clase numerosa, privada generalmente del derecho de propiedad. En Francia no podían adquirir feudos. (1) En Inglaterra los villanos no adscritos á alguna tierra, no podían siquiera tener peculio, porque su persona y sus bienes estaban siempre á merced de sus señores. (2) Estos villanos no eran, sin embargo, siervos, como sucedía en casi todo el continente. (3) En Castilla los solariegos que no poblaban en las riberas del Duero sufrían esta condición, si hemos de dar crédito á la ley del Fuero viejo, que permitía á sus señores «tomarles el cuerpo é todo quanto en el mundo ovier.» (4) Aun aquellos colonos que podían ser propietarios, rara vez lo conseguían por falta de medios, pues si bien pagaban por sus tierras pensiones fijas no solían serlo las exacciones durísimas y arbitrarias á que además estaban sujetos, y así difícilmente acumulaban ahorros con que adquirir propiedades.

Mas esta condición tristísima de los colonos fué lentamente mejorándose, ya con las libertades y franquicias otorgadas más ó ménos voluntariamente por los mismos señores, ya con el derecho que expresa ó tácitamente se les reconoció de adquirir propiedades. Menguábase entretanto el número de estos desgraciados con las manumisiones frecuentes que la Iglesia fomentaba con su doctrina y su ejemplo y que las ciudades libres y los señores se veían forzados á conceder, ya como recompensa de servicios, ó ya para evitar conflictos ó rebeliones. Las ciudades de Italia dieron libertad á multitud de colonos en premio de los servicios que les habían prestado en sus guerras ántes del siglo xi. Los colonos de Alemania no empezaron á ser libres hasta el siglo xiii. Los de Francia, después de haberse levantado contra sus señores en el siglo xi y de haber adquirido feudos contra lo dispuesto en las leyes, obtuvieron su libertad de Luis X, al ménos en los Estados propios de la corona, y quedando gravados con un tributo. En Inglaterra llegaron á tener los propietarios tal número de colonos que, no pudiendo darles ocupación en sus tierras, ellos mismos arrendaban sus propios servicios á otros señores durante la mayor parte del año. Y aunque el peculio que por tales medios reunían estuviere á la merced del señor, como este no usara generalmente de su derecho, fueron así los colonos acumulando capitales que les procuraron al fin la independencia. Otros señores

(1) *Coutume de Beauvais*, c. 48.

(2) *Littleton*, l. 2., c. 11.—*Glanville*, l. 5., c. 5.

(3) *Hallam.*, t. 1.º, c. 2, part. 2.ª

(4) L. 1., t. 7., lib. 1. De estos solariegos trataré extensamente cuando exponga las vicisitudes de la propiedad en España.

res, por favorecer á sus vasallos ó por captarse su benevolencia, limitaban sus servicios á condiciones y tiempos fijos que escribían y consignaban en un registro, de lo cual resultó un modo de posesion llamado por copia de escritura (*copy hold*) y que consistía en no poder ser obligado el colono á sufrir otras cargas que las consignadas en el registro ó las acostumbradas en el feudo, ni ser privado de su posesion mientras que no dejase de satisfacerlas. La ley vino por último en auxilio de los colonos, ordenando que los que abandonaran á sus señores y moraran un año y un día en pueblo amurallado se entendiese que ganaban por prescripcion su libertad. Por todas estas causas, al empezar el siglo xiv la mayor parte de los colonos ingleses se habían ya convertido en trabajadores asalariados ó en propietarios por copia de registro (*copy holders*). Mas como en Inglaterra tienen raíces tan hondas todas las instituciones, aún en tiempo de la reina Isabel se encontraban algunos antiguos villanos, y los poseedores por copia de registro han durado hasta nuestros días.

Siendo la propiedad instituida bajo el influjo de los intereses colectivos, base y cimiento de las instituciones feudales, claro es que alterada su constitucion no podia sostenerse el feudalismo. La nobleza soberana, depositaria de casi todo el poder público y nacida y conservada con el auxilio de las grandes propiedades hereditarias vinculadas de hecho ó de derecho en sus familias, perdió grande autoridad y fuerza cuando, por efecto de la sucesion femenina, la division igual de las herencias y la enajenacion y desmembracion de los feudos dejó de pertenecer á su patrimonio político la mayor parte de la tierra apropiada que no poseian la corona ni la Iglesia.

Los monarcas no tenían más ejército que el que formaban sus vasallos, obligados á militar á sus órdenes por razon de las tierras que poseian de ellos. Pero cuando este servicio personal de difícil exaccion se conmutó en pecuniario, modificándose en tal concepto la indole de la propiedad feudal pudieron los reyes sustituir sus mesnadas de feudatarios con ejércitos asalariados y permanentes que eran más adecuados para fundar la autoridad y la independencia del trono.

El sistema de gerarquías sociales, lazo de union entre todas las personas, desde el rey hasta el colono, pudo subsistir mientras que las obligaciones personales, fruto de la propiedad, mantenian unidas entre sí y sujetas á la tierra las clases y las familias. Mas todo este organismo interno de la sociedad quedó profundamente alterado y falto de eficacia cuando se conmutaron los servicios personales en pecuniarios y cuando, por la

subdivision, comunicabilidad y movimiento del dominio se quebrantaron los vínculos de las clases y de las familias con la tierra.

No menor trasformacion debió sufrir la administracion de justicia, fundada en las relaciones personales que por razon de sus tierras mantenian los vasallos entre sí y con su señor, cuando la propiedad territorial, alterada su constitucion, dejó de producir estas relaciones personales. Convertidos los feudos casi en censos enfitéuticos, debilitóse la jurisdiccion señorial que nació de ellos. Encastillados los vasallos en sus apartadas fortalezas mantuvieron pocas relaciones entre sí y con sus señores, haciéndose así más difícil cada día reunirlos para que como *pares* fallaran las causas del territorio, con todo lo cual se fortaleció el poder de la corona y los vasallos particulares recibieron de ella una proteccion más eficaz contra las demasías de los poderosos que la que podia ofrecerles la justicia local.

Las rentas públicas, producto de los bienes patrimoniales de la corona, y las multas, confiscaciones, herencias, enajenaciones y otros servicios no alcanzaban para cubrir las atenciones más perentorias del Estado. Pero cuando alterada la constitucion de la propiedad entraron en el comercio multitud de predios amortizados ántes, multiplicándose así las enajenaciones que devengaban derechos reales, y volvieron á la corona muchos dominios mal ó bien adquiridos, recibió el real Erario un incremento considerable y otro no menor el poder del trono.

El sistema de cultivo por medio de colonos ó de esclavos, que era otro de los auxiliares del feudalismo, existia mediante la facultad de los señores para adscribir perpétuamente á sus heredades los trabajadores necesarios, con condiciones más ó ménos determinadas y equitativas. Pero separados estos colonos de sus tierras ó convertidos en propietarios, y abandonado el uso de establecerlos, es decir, modificada en este punto la constitucion de la propiedad, no pudo ya sostenerse aquel sistema de labranza, y fué menester sustituirlo con el del trabajo libre, que á su vez contribuyó á acabar con las últimas reliquias del feudalismo.

Hasta la ejecucion de las obras públicas (si tal nombre merecen algunos malos puentes, tal cual pésimo camino y los muros de las poblaciones) dependia íntimamente de la organizacion de la propiedad. La construccion y reparacion de estas obras eran carga personal de los vasallos y colonos que poseian las heredades del lugar; mas estos servicios fueron tambien de los conmutados en pecuniarios, y entónces se hicieron cargo de su ejecucion, bien los señores ó bien las ciudades y concejos recién establecidos.

Por todas estas causas, emanadas de la constitucion de la propiedad, adquirieron grande incremento otras clases sociales y otras instituciones incompatibles con el feudalismo. Las clases medias, las monarquías más ó ménos absolutas, las repúblicas italianas, las federaciones alemanas, las ciudades y comunes libres, los ejércitos mercenarios y los tribunales permanentes, producto de las vicisitudes de la constitucion de la propiedad, acabaron con las instituciones más esenciales del feudalismo, dejando sólo sus formas externas y algunos débiles vestigios que han caído despues al golpe de las revoluciones.

VI.

INSTITUCION DE LOS MAYORAZGOS EN FRANCIA, INGLATERRA Y ALEMANIA.

Con la destruccion del feudalismo quedaron muy sueltos y relajados los vínculos de la propiedad con el Estado y con la familia: mas no desapareció el principio que les habia dado origen. Siendo éste por su naturaleza necesario y eterno, lo único que en él hay variable es la forma de su manifestacion, con la cual traspasa á veces los limites de lo conveniente ó no toca los de lo indispensable; pero vivirá y obrará mientras duren la sociedad y el hombre. Así es que cuando, desnaturalizados los feudos, no fueron ya garantía suficiente de la conservacion de las familias y de la constitucion interna del Estado, el principio de amortizacion se manifestó en otra forma, adecuada tambien para aquel objeto. Tal fué la de los vínculos y mayorazgos, destinados á asegurar el dominio de la tierra en las clases y familias aristocráticas y á mantener sus relaciones con el Estado. Este nuevo modo de posesion no llenaba, sin embargo, tan cumplidamente su fin. Con ella volvía á ser la propiedad una base importante de la organizacion política de la sociedad, mas no su fundamento casi único, como habia sucedido cuando la misma propiedad era fuente de casi todo poder, y por lo tanto de casi toda obediencia.

En los reinos y provincias donde, por haberse arraigado ménos, se modificó ó extinguió más pronto el régimen feudal, fué tambien donde primero y más generalmente se adoptaron las sustituciones y mayorazgos. La observancia del derecho romano no duró tanto tiempo en las regiones del norte de Europa como en las del mediodia, y por eso en aquellas se generalizaron y consolidaron mucho más que en estas las instituciones feudales. En las provincias de Francia en que continuó rigiendo la legislacion del Imperio penetró mucho ménos el derecho feudal que en las que se go-

hernaban por diversos fueros y usos tradicionales que formaban el derecho consuetudinario. Si con la falta ó destruccion del feudalismo quedó desatendida alguna necesidad social ó política, debió sentirse ántes en las provincias regidas por la legislación imperial.

En estas provincias, donde siendo pocos los feudos no bastaban para conservar las familias, el derecho romano proveía hasta cierto punto á esta necesidad por medio de la sustitucion fideicomisaria, admitida por Justiniano. Consistía ésta en la institucion de un heredero, al cual se imponía la obligacion de conservar los bienes heredados, á fin de que á su muerte pasaran á un sustituto, el cual habia de suceder en ellos con el mismo gravámen, para que á su muerte también los trasfiriera á otro sustituto, pudiendo repetirse de este modo las sustituciones hasta el cuarto de los descendientes si moría impúber y eran llamados á ellas los de una misma familia, ó sin limitacion alguna, á voluntad del testador, en cualquiera otro caso. (1) Usando de este derecho podían conservarse los bienes en las familias durante cuatro generaciones por lo ménos, y por mas tiempo cuando el último sustituto establecía una nueva sustitucion á favor de sus descendientes. Usáronse mucho estas sustituciones sin la limitacion de tiempo indicada en las provincias de Francia en que continuaron guardándose las leyes imperiales. Mas no sucedió lo mismo en las provincias de derecho consuetudinario, donde casi toda la propiedad era feudal, y por lo tanto no se necesitaba la sustitucion fideicomisaria para conservarla en las familias, puesto que el feudalismo producía este resultado. «Sólo algunas personas de alto rango, escribía un antiguo jurisconsulto francés, se sirven de esta sustitucion en las provincias *consuetudinarias* para conservar á sus descendientes algun señorío antiguo ó impedir su enajenacion, por lo cual se suele hacer tales sustituciones á favor de los varones primogénitos.» (2)

Cuando más se generalizó en Francia esta institucion fué en los siglos xv y xvi, es decir, precisamente cuando el feudalismo vino á mayor decadencia. De modo que, cuando la constitucion feudal de la propiedad dejó de cumplir su objeto, se intentó suplirla con aquella otra institucion de origen romano, la cual, usada primero solamente en las provincias re-

(1) Justiniano dispuso en su Novela 159 que en los fideicomisos la prohibicion de enajenar no pasara de la cuarta generacion; mas en esta prohibicion no quedaron comprendidos, segun se infiere de su texto, todos los fideicomisos graduales, sino solamente los instituidos bajo el nombre colectivo de una familia, y en el caso expreso de morir impúber el cuarto sustituto.

(2) Ferrieres. *Nouvelle traduction des Institutes*, lib. 2.º, tit. XXIII, par. 2.º

gidas por el derecho imperial, se extendió despues á otras provincias para conservar señorios antiguos, ó sea dominios feudales. La corona no se opuso abiertamente á esta innovacion; pero quebrantada y modificada la antigua constitucion feudal de la propiedad, no quiso tampoco consentir que los señores la restableciesen indirectamente con la perpetuidad de las sustituciones. Tal hubo de ser el objeto de la ordenanza de 1560, llamada de Orleans, que mandó no pasaran las sustituciones del segundo grado, fuera de la institucion y el de la ordenanza de 1566, llamada de Moulins, declarando que la anterior sería aplicable á las sustituciones posteriores á su fecha, y que las anteriores se considerarían extinguidas cuando hubieran pasado de la cuarta generacion. La primera de estas ordenanzas restringió por lo tanto la facultad de vincular, y la segunda dejó sin efecto todas las antiguas sustituciones que no se ajustaran á las condiciones de tiempo señaladas por la ley romana. Ambas ordenanzas, sin embargo, no tenían tanto por objeto la ventaja económica del desestanco de la propiedad como el fin político de debilitar á la nobleza, en pugna siempre con los monarcas. Y comprendiéndolo así los nobles, eludieron por su parte el efecto de tales prohibiciones y conservaron amortizados sus bienes en sus familias, gravándolos con sustituciones nuevas cada vez que espiraban las antiguas.

En Inglaterra desde la conquista de los normandos pertenecía á la corona el dominio directo y feudal de todo el territorio. Los propietarios tenían perpétuamente el dominio útil de sus tierras, pero todos debían por ellas algun servicio al rey. Los feudos eran absolutos ó condicionales. En los primeros se sucedía conforme á las reglas del derecho comun, y en los segundos con arreglo á las condiciones establecidas por el señor directo. El derecho comun, producto en su mayor parte de la antigua legislación anglo-sajona, otorgaba la sucesion á todos los hijos por igual, sin distincion de sexos. Esto no obstante, aún en tiempo de los anglo-sajones existían ya feudos concedidos con la obligacion de transmitirlos á personas determinadas y sus descendientes, y devolverlos al señor por falta de estos y con otras graves restricciones del dominio. (1) De los feudos absolutos y de los condicionales nacieron dos especies de dominio, uno feudal, propiamente di-

(1) Sharon Turner (*History of the Anglo-Saxons*, vol. 3, apénd. 4) cita varios ejemplos de concesiones de tierras hechas en este período, unas con la prohibicion de enajenarlas sin permiso del cedente y otras con la condicion de que á la muerte del concesionario pasaran á una ó más personas señaladas, y por su falta al mismo cedente ó á alguna corporacion eclesiástica ú otra persona.

eho (*fee simple*), que podia subinfeudarse, pero no enajenarse sin consentimiento del señor, y pasaba á los herederos naturales del feudatario, y otro vinculado (*fee tail*) que de hecho se enajenaba, pero que de derecho debia transmitirse á ciertas y determinadas personas y volver por su falta al señor primitivo ó su descendencia. Llamábanse tambien el primero *feudum antiquum* y el segundo *feudum novum*.

No era, sin embargo, absoluta la facultad de disponer del feudo *nuevo*. Concedido á una persona *para sí y sus descendientes*, que era una de las fórmulas más usadas, no podia el poseedor enajenarlo mientras no tuviese hijos, por no estimarse cumplida entretanto la condición con que se habia transmitido el dominio; mas nacido el primer hijo ya se podia disponer del feudo aunque fuera en perjuicio de los herederos, porque supuesta dicha cláusula, el hijo con el padre formaban una sola persona jurídica adquirente, y hasta que ambos coexistian no se entendia consumada la adquisicion. Para que nunca tuviese lugar la reversion al señor de tales feudos, el feudatario solia enajenarlos aparentemente luego que tenia sucesion, á fin de adquirirlos despues del mismo comprador como propiedad libre, ó sea como feudo simple. (1) De este modo se convertian en libres los feudos vinculados, y no se lograba el fin de su institucion ni se cumplia la voluntad de los fundadores.

El feudo simple ó antiguo pasaba, como he dicho, á los herederos naturales del feudatario; pero el derecho comun varió mucho sobre este punto desde la conquista de los normandos. Bajo los reyes de esta dinastía la sucesion por igual, sin distincion de sexos, dejó de estar en uso en todo el reino, ménos en algunas provincias. En tiempo de Enrique I (de 1100 á 1155) recaia ya en el primogénito el feudo principal del padre. (2) Poco despues se le atribuyó el derecho de suceder en todas las tierras que poseia el padre, con carga de servicio militar. (3) Aunque estos feudos antiguos no podian enajenarse sin licencia del señor, la costumbre autorizó á sus poseedores para disponer de alguna corta porcion de ellos en favor de sus parientes ó del mismo señor. (4) Admitido, por otra parte, el uso de comprar

(1) Cunningham. Law Dictionnary. V. *Estate*. Blackstone, *Commentaries*, book 2, c. 77.

(2) Hallam, c. VIII, part. 2.^a.

(3) Asi sucedia en tiempo de Glanville, colector primitivo del derecho comun inglés *Common law*.

(4) Aunque la historia de las leyes inglesas sobre la facultad de enajenar es muy oscura hasta el reinado de Eduardo I (de 1272 á 1307), resulta de Glanville que el feudatario podia enajenar, *rationabilem partem de terra sua* (1. VIII, c. I).

aquella licencia y de que los nuevos adquirentes continuaran bajo la dependencia de los antiguos señores, estos eran los más interesados en promover tales enajenaciones. Por todo lo cual, ni los feudos antiguos ni los nuevos ofrecian á fines del siglo xiii las garantías de estabilidad y duracion en las familias que la aristocracia inglesa poderosa, pero combatida al mismo tiempo, necesitaba para su seguridad y esplendor.

Otra circunstancia pudo contribuir en gran manera á desvirtuar las calidades aristocráticas de las propiedades de la nobleza, sobre todo si se hubiera realizado por completo. En los primeros años del siglo xiii, al concluir la guerra de los Barones, trató el rey de disminuir el número y la importancia de estos poderosos vasallos, dividiendo en pequeños feudos todos los grandes Estados que por confiscacion ó reversion volvian á la corona. Si los sucesores de *Juan sin Tierra* hubiesen seguido constantemente este sistema, á la vuelta de un siglo habria sin duda cambiado la organizacion material de la propiedad, perdiendo con ella su preponderancia aquella soberbia é indomable nobleza.

Desvirtuada por todas estas causas la constitucion feudal de la propiedad en sus relaciones con el Estado y con las grandes familias, tambien en Inglaterra nacieron los mayorazgos. En circunstancias semejantes se apeló en Francia á la sustitucion fideicomisaria, que el derecho romano autorizaba ya en algunas provincias; mas como en Inglaterra no se conocia apenas este derecho, se acudió á una institucion indigena que, ligeramente modificada, podia producir los mismos resultados que la sustitucion romana. Tal era el *feudo nuevo* ó condicional, que no debia nunca salir de la familia del feudatario, y cuyo uso hubo entónces de generalizarse, sobre todo cuando los barones consiguieron modificar el derecho en este punto, mediante el estatuto de Eduardo I, llamado *de donis conditionalibus*.

Declaráronse en este estatuto feudos vinculados: 1.º Las tierras concedidas á algun matrimonio para *él y sus hijos*, pero con la cláusula de que muertos ambos cónyuges sin sucesion revertirian al cedente ó sus herederos. 2.º Las tierras concedidas tambien á un matrimonio libre sin aquella cláusula las cuales debian entenderse sujetas á la misma reversion, aunque la escritura de establecimiento no la contuviera expresamente. 3.º Las tierras concedidas á una sola persona y sus *sucesores de su propio cuerpo*, con cuya cláusula se distinguia la donacion con carga de reversion, de la absoluta ó en feudo simple. Las propiedades adquiridas de cualquiera de estos modos podian ántes enajenarse por sus poseedores, con lo cual desapareceria la especie de vinculacion que se habia pretendido imponerles.

Mas Eduardo I ordenó en su indicado estatuto que en adelante se cumplieran exactamente todas las condiciones con que tales tierras fueran concedidas; que sus poseedores no las enajenaran sino cuando el fundador les hubiera otorgado este derecho, y que en su consecuencia, siempre que algun matrimonio fuera llamado á la posesion de un feudo vinculado y muriera uno de los cónyuges, no pudiese trasmitirlo el superviviente á hijos que tuviere de otro consorcio. (1)

Aplicóse desde luego este estatuto á los pequeños feudos en que se dividieron los grandes, confiscados ó recuperados por la corona despues de la guerra de los Barones. Por él se rigieron igualmente los más de los feudos que despues otorgaron los nobles, los cuales se aprovecharon de la ley nueva no sólo para asegurar el patrimonio de sus familias, sino para impedir su confiscacion, cualesquiera que fuesen los delitos que sus sucesores cometieran, puesto que cuando los bienes vinculados dejaron de ser alienables no podian ya ser confiscados. Así fué supliéndose con este nuevo género de propiedades la insuficiencia de la feudal, para mantener los vinculos de la tierra con el Estado y la familia.

Sin embargo, en el reino de Inglaterra, propiamente dicho, la facultad de vincular no fué nunca absoluta y con efecto de inalienabilidad perpétua de los bienes vinculados. Como el estatuto *de donis conditionalibus* se referia únicamente á las concesiones de tierras á favor de personas vivas y sus hijos, sin distinguir si estos eran ó no nacidos, la jurisprudencia lo interpretó en el sentido de poderse fundar mayorazgos llamando á su disfrute una ó más personas existentes, sin limitacion de número, y á sus hijos futuros, los cuales podrian enajenarlos á su mayor edad (21 años) si la fundacion no les obligaba á devolverlos al fundador ó sus herederos. En apoyo de esta interpretacion dictó despues una ley Eduardo III que prohibia disponer de la propiedad por más tiempo que la vida del cesionario y veintiun año más, ó sea durante la menor edad del segundo sucesor de los bienes enajenados. Sólo en Escocia no hubo ley ni jurisprudencia que restringiese la facultad de vincular, y así usaron de ella los propietarios fundando muchos mayorazgos perpétuos y absolutamente inalienables que aún duran en nuestros dias.

Mas al estatuto *de donis conditionalibus* acompañaron otras disposiciones legales que desvirtuaban hasta cierto punto los efectos económicos de las vinculaciones. El mismo Eduardo I publicó despues el estatuto llama-

(1) Puede verse textual este estatuto en Conningham.—Law, Dictionary, V. *Estáte*.

do *Quia emptores*, permitiendo enajenar los feudos siempre que los compradores conviniesen en poseerlos con dependencia no de los vendedores, sino del señor inmediato, y prohibiendo á la vez las subinfeudaciones, segun he dicho en otro lugar. Con las primeras de estas disposiciones se amplió el dominio del feudatario, pero sin menoscabo de los derechos señoriales que disfrutaba la aristocracia. Las subinfeudaciones hubieron de prohibirse como gravosas á la corona, que perdía con ellas los derechos eventuales á la reversion y otras ventajas. Pero lo que más afectó á la inalienabilidad primitiva de los bienes feudales fué otro estatuto de Eduardo I aboliendo el privilegio que hasta entónces habian disfrutado aquellos bienes de no ser responsables de las deudas de sus dueños. (1) Así el sistema de vinculaciones adoptado en Inglaterra, dando cierta estabilidad á los patrimonios familiares, no los condenó, como en Escocia, á una amortizacion perpétua y absoluta.

Grave mudanza sufrió tambien la constitucion feudal de la propiedad en Alemania desde que fueron admitidos y usados en el imperio los feudos llamados *impropios* y los *feudos nuevos*. Allí los antiguos feudos llevaban siempre consigo la obligacion del servicio militar, se trasmitian tan sólo á los descendientes varones del feudatario, puesto que extinguida la linea de estos debian revertir al señor, y confiscados al vasallo por razon de delito pasaban temporal ó perpétuamente, segun los casos, á los descendientes, á los colaterales ó al mismo señor. (2) Mas publicado y adeptado el *Libro de los feudos*, escrito ya en una época en que estaba muy quebrantada la disciplina feudal, se introdujeron en Alemania grandes novedades sobre esta materia. Admitiéronse entónces como feudos *impropios* los llamados *francos*, que no obligaban al servicio militar; los *femeninos*, en que podian suceder las mujeres, y los *hereditarios*, en que sucedian los herederos del vasallo, aunque no fuesen sus parientes. Usáronse asimismo con la denomi-

(1) Este estatuto, promulgado en 1285, declaraba que los acreedores comerciantes podrian reclamar la posesion de los bienes feudales de sus deudores á fin de cobrar de sus productos el importe de sus créditos, ménos los intereses. Otro estatuto del mismo año dispuso que quedara sujeta á ejecucion, por deudas, la mitad de los mismos bienes.

(2) Si el vasallo enajenaba el feudo ilícitamente pasaba éste á sus hijos, y segun algunos autores, á sus parientes colaterales. Si el vasallo perdía el feudo por faltas contra su señor, éste lo recuperaba y disfrutaba durante la vida del vasallo culpable y de sus hijos. Si lo perdía por falta contra la familia del señor, pasaba desde luego á los agnados, con exclusion de los hijos. (Schmier. *Jurisprudentia canonico-civilis*, t. II, pág. 246 n. 564 y sig.)

nacion de *feudos nuevos* los establecidos con la condicion de no revertir á los señores cuando se extinguiesen los descendientes del feudatario, y de pasar entónces á sus parientes colaterales, sin limitacion de grados ni de lineas, los que podian enajenarse sin licencia del señor y adquirirse por precio, los que revertian necesariamente al señor cuando el vasallo los enajenaba sin su licencia ó cometia traicion ó felonía, y los que pasaban á los eclesiásticos, cuando eran personas ilustres. Coincidieron con estas novedades la de dividirse entre los hijos los feudos principales, y la de dotar los señores á sus hijas y hermanas con una parte de la renta de sus feudos. (1)

Relajados con estas nuevas prácticas los lazos de la propiedad territorial con las familias, hubose de acudir para reanudarlos á las vinculaciones y á ciertos usos y costumbres locales. Con la adopcion del *Libro de los Feudos* coincidió la introduccion primero en las escuelas y despues en los tribunales de toda la legislacion de Justiniano, la cual, formando desde luego y por tácito consentimiento el derecho privado aleman, fué al fin sancionada en el siglo xv por varios emperadores. Autorizados por ella, segun ántes se ha visto, los fideicomisos familiares, sirvieron de fundamento á una institucion del mismo nombre y con todos los efectos de los mayorazgos. En su virtud, los nobles y personas ilustres que deseaban conservar el patrimonio de sus familias y estimaban que la infeudacion no lo aseguraba bastante podian fundar un fideicomiso familiar, nombrando un heredero de sus bienes inmuebles, con la obligacion de trasmitirlo al tiempo de su muerte á otro de sus parientes. En estos fideicomisos sucedian por regla general los agnados y nunca las mujeres, aunque las hubiese de mejor línea, como no fuera en defecto de varones. No necesitaba expresar el testador la especie de fideicomiso que queria establecer; bastaba que manifestase su intencion de conservar la herencia en su familia, para que se entendiese instituido un fideicomiso familiar, cuyos poseedores quedaban tácitamente gravados con la obligacion de dejarlo á alguno de sus parientes. Pero la costumbre más usada era designar el testador á todos los futuros sucesores, disponiendo que entre los agnados varones siguiera la sucesion el órden de la mayor edad ó el de la primogenitura. En el primer caso era preferido el mayor de los parientes, y en el segundo el primogénito de la línea favorecida; pero en ambos tenian prelacion por su

(1) Schmier, lib. II, tract. 3.^o, part. 1.^a, cap. II, sect. 4. y libro III, tract. 4, part. 2.^a, cap. III.

orden los primeros nombrados en el título de fundacion. (1) Habiéndose suscitado la duda de si para computar el parentesco del sucesor inmediato debia tomarse en cuenta el que tuviese con el fideicomitente ó con el último poseedor, los jurisconsultos la decidieron por último á favor de éste, no sin una larga y empeñada contienda entre los que sostenian contrarias opiniones.

Al mismo fin que los mayorazgos contribuyeron ciertos usos y costumbres locales introducidos ó confirmados por la jurisprudencia nacional. Ya he dicho en otro lugar que la ley prohibia la division de los grandes feudos que constituian electorados, que á su ejemplo se sujetaron tambien á la regla de la primogenitura otros muchos feudos principales que llevaban aneja alguna dignidad, si bien reservándose á los hermanos menores cierta dotacion, y que en algunas provincias se mantuvo la integridad de los feudos mediante la costumbre de continuar unidos los hermanos, que tenian derecho á ellos, viviendo en sus tierras, partiendo las rentas y usando todos á la vez los títulos y preeminencias inherentes á su posesion. Ahora añadiré que en otras partes, cuando un padre dejaba varios feudos, se distribuian íntegros entre los hijos, indemnizándose estos reciprocamente de las diferencias de valor que hubiera entre ellos.

Para que los bienes no salieran de las familias estableció además la jurisprudencia que, aun en los feudos femeninos, fuera preferido el varon á la mujer, en igualdad de circunstancias. Con el mismo fin fueron excluidos de la sucesion feudal los hijos adoptivos, los naturales y los legitimados por rescripto imperial. Por otra parte los estatutos locales no daban siempre igual derecho á las mujeres que á los varones, á la sucesion hereditaria en general. En Suavia, Franconia y Estados del Rhin las hijas dotadas debian renunciar á la herencia paterna. En otras provincias era tan comun esta renuncia que se presumia de derecho tácitamente, aunque no constase expresa. En Austria no tenian derecho á suceder abintestato los ascendientes. En Lubeck no disfrutaba tampoco este derecho el padre respecto al hijo que moria despues de separado de su casa.

Vese, pues, que en las tres grandes naciones en que el feudalismo arraigó más profundamente siguió inmediata á su decadencia la institucion de los mayorazgos. La repeticion de este fenómeno en circunstancias tan semejantes da bien á entender que aquella institucion fué inventada por la sociedad para llenar el vacío que dejaba en el régimen de la propiedad la desaparicion del feudalismo.

(1) Schmier, lib. III, tr. 4, sect. 1, pár. 4.

CAPITULO VIII.

La desvinculacion y la desamortizacion de la propiedad civil en Inglaterra.

I.

LA DESVINCULACION DE LA PROPIEDAD PRIVADA ÁNTES DEL SIGLO XVIII.

À la ventaja alcanzada por el principio *social* con la institucion de los mayorazgos en los principales Estados de Europa debia seguir el triunfo del principio *individualista*, si habia de cumplirse la ley que desde la antigüedad más remota gobierna el dominio de la tierra. Ahora se verá cómo en efecto, desde entónces llevó este último principio la mejor parte en la contienda y caminó la propiedad hácia su desamortizacion, aunque no siempre al mismo paso ni por las mismas vías. Refiérome únicamente á la propiedad civil, porque la eclesiástica obedece además á leyes de otro orden que no permiten confundirla con aquella, por más que en la edad moderna hayan ambas experimentado vicisitudes análogas.

Apenas se establecieron los mayorazgos en Inglaterra, las leyes y los tribunales procuraron desvirtuar su efecto franqueando por otros medios la libre disposicion del dominio, sin consideracion á los intereses colectivos del Estado y de las familias que dependian de la tierra. Ya se ha visto en el capitulo anterior cómo Eduardo I alzó la antigua prohibicion de enajenar los feudos; cómo el estatuto *de donis conditionalibus*, que habia dado origen á los mayorazgos, fué interpretado desde luego con la limitacion de no deber durar las vinculaciones más tiempo que la vida de las personas existentes llamadas á ellas y la de su sucesor inmediato, y cómo, en fin, perdieron en gran parte los bienes feudales del antiguo privilegio de no ser responsables de las deudas de sus poseedores. Ahora se verá cómo en los reinados posteriores y hasta nuestros dias ha seguido conquistando la propiedad nuevas libertades en Inglaterra, aunque sin haber perdido aún su carácter distintivo de lazo de union entre el Estado y la familia, la sociedad y el individuo.

Apenas habian trascurrido dos siglos desde la promulgacion del estatuto de *donis conditionalibus* cuando los tribunales ingleses establecieron el primer precedentê de un procedimiento mediante el cual pudieron los poseedores de mayorazgos librar sus bienes, privando á sus sucesores de los derechos que les dieran las fundaciones. Este procedimiento habia sido inventado mucho ántes, pero se usaba solamente para eludir la ley que vedaba á las manos muertas adquirir bienes raices. Cuando una corporacion deseaba adquirir tales bienes sin incurrir en pena alguna figuraba una demanda de reivindicacion contra el enajenante, fundada en un supuesto título. El demandado se dejaba vencer en el juicio y el tribunal adjudicaba los bienes á la corporacion, fundándose en que no se verificaba por ello una adquisicion nueva. Como este procedimiento no era aplicable sino á las enajenaciones á favor de manos muertas eclesiásticas, aunque los tribunales pretendieron alguna vez utilizarlo para facilitar la enajenacion de bienes vinculados no lo consintió el rey. Mas en el siglo xv, reinando Eduardo IV, y cuando la guerra civil entre las casas de York y de Lancaster asolaba el reino, ocurrió un caso en que hubo de emplearse aquel procedimiento para eludir la inalienabilidad de ciertos bienes sujetos al estatuto mencionado, lo cual no rechazó entónces el rey porque él á su vez deseaba eludir tambien el privilegio de no ser confiscables que como inalienables disfrutaban los bienes vinculados de los barones rebeldes. Desde entónces pudieron enajenarse y confiscarse los bienes desvinculados por el procedimiento referido, y esto allanó el camino á Enrique VIII para promulgar despues otro estatuto sujetando á confiscacion los bienes de mayorazgo por los delitos de sus poseedores.

Así quedó establecida la práctica de enajenar estos bienes por el procedimiento que se llamó de «reivindicacion comun» (*common recovery*), que consistia tambien, como el antiguo, en figurar un pleito entre el poseedor y el adquirente. Presentaba éste su demanda pidiendo la reivindicacion del mayorazgo en virtud de un supuesto título; contestaba el poseedor que un tercero estaba obligado como fiador á la eviccion, defendiéndole en juicio é indemnizándole con otros bienes si fuese vencido: este tercero comparecia para reconocer su obligacion, pero luego se dejaba vencer en el pleito y el tribunal lo sentenciaba mandando entregar al actor los bienes litigados, é indemnizar al demandado á costa del fiador. El demandante era en estos casos, ó el comprador verdadero de los bienes ó una persona de la confianza del demandado, que se obligaba á devolvérselos en pleno dominio luego que se pronunciara á su favor la sentencia. Es digno de notarse

que el pregonero del tribunal representaba casi siempre el papel de fiador, sujeto á la eviccion, por lo cual se le llamaba *fiador comun*.

En el siglo xvi, y particularmente en el reinado de Enrique VIII, sufrieron aún más rudos golpes la amortizacion y las vinculaciones. Aquel monarca innovador y ambicioso hizo cuanto pudo para cambiar la constitucion de la propiedad, del mismo modo que habia trastornado la de la Iglesia, pero no tanto por miras de interés público cuanto para ponerla más al alcance de su codicia. Aspiraba á dominar como señor absoluto: la aristocracia podia estorbárselo con el poder que le daba su riqueza; de aquí su propósito de variar el régimen de la propiedad, y si sus reformas no produjeron por completo este efecto se debió al amor del país, á sus tradiciones y á sus costumbres. Despues de haber obtenido Enrique una ley del Parlamento declarando obligatorio para los sucesores de mayorazgos los arrendamientos de largo plazo otorgados por sus antecesores, lo cual equivalia en muchos casos á privarles de toda renta por no corto tiempo, arbitró otro medio para hacer alienables los bienes de esta especie. Tal fué el objeto de un estatuto disponiendo que cierta forma de enajenacion, autorizada únicamente para los bienes libres, fuese aplicable tambien á los vinculados. Pero esto exige más explicacion.

Segun el antiguo derecho feudal, el modo más frecuente de adquirir el dominio de los inmuebles era tomarlos en feudo; y como las infeudaciones no eran válidas sin la ceremonia del homenaje y la entrega de los bienes feudales, no se podia adquirir sin ésta el dominio de la tierra. Pero en Inglaterra desde tiempos muy remotos podia suplirse aquella ceremonia con un procedimiento judicial llamado *finis (fine)*, que surtia los mismos efectos jurídicos. Tal era la transaccion que, con licencia del rey, ponía término á un litigio verdadero ó figurado sobre la propiedad de ciertos bienes libres, reconociéndola y declarándola á favor de una de las partes contendientes. Para asegurar el dominio adquirido cuando su trasmision legal era difícil ó peligrosa se figuraban en Inglaterra estas transacciones solemnes, llegando á ser tan universal su uso que hasta el nombre *finis* perdió su significacion primitiva y verdadera, representando, no uno de aquellos actos, sino una mera fórmula para enajenar las propiedades libres. Segun ella, el adquirente demandaba al enajenante la cosa enajenada en virtud de un pacto que se suponía celebrado entre ambos y á cuyo cumplimiento se resistía el demandado. Por la admision de esta demanda se pagaba al rey cierto derecho. Contestaba el demandado reconociendo su falta y suponiendo que habia pendientes negociaciones de transaccion. El actor entónces, recono-

ciendo este hecho y fundándose en haber afianzado la prosecucion del juicio con prendas que perderia si lo abandonara sin la correspondiente licencia, pedia al tribunal se la concediese para terminar la transacción. Por esta licencia devengaba el rey otro derecho, pagado el cual, se celebraba un convenio en presencia del tribunal mismo ó de alguno de sus jueces, reconociendo el demandado que la propiedad litigada correspondia al demandante. Reduciase despues este acto á escritura, la cual, registrada en cierta oficina y pregonada diez y seis veces en audiencia pública, quedaba transmitido el dominio de los bienes y era irrevocable, á ménos que en el término de cinco años pareciese á disputarlo un tercero de mejor derecho. Trascurrido este plazo no era admisible ninguna demanda con tal objeto.

Este modo de enajenacion, usado solamente para los bienes libres, fué el que Enrique VIII extendió á los vinculados. Ya Enrique VII habia manifestado el mismo propósito, si como se cree trató de debilitar el poder de la nobleza, abriendo camino con cierto estatuto á la enajenacion de su propiedad; mas no hubo de ser bastante explicito, y aunque los jueces propendieran siempre á cumplir la voluntad del rey, no se atrevieron á declarar alienable la propiedad vinculada por una mera interpretacion de ley, cuando prescribia terminantemente lo contrario el estatuto *de donis conditionalibus*. Pero Enrique VIII fué más atrevido y consumió la obra intentada por su antecesor, declarando que los mayorazgos podian enajenarse por el procedimiento referido, exceptuando tan solo los fundados por la corona y aquellos en que ésta tuviera derecho de reversion (1).

Otro estatuto del mismo monarca declaró que los bienes vinculados podrian tambien enajenarse para pagar las deudas de sus poseedores á favor del Estado. La reina Isabel permitió despues destinarlos á obras de beneficencia. Los tribunales llegaron al fin á considerar los procedimientos ántes referidos como medios ordinarios de transmitir el dominio de los bienes de mayorazgo cuando convenian en la enajenacion los que habian adquirido algun derecho á ellos, y asi se ha practicado hasta nuestros dias.

Tambien á la propiedad que sin ser vinculada surtia los efectos políticos y económicos de las vinculaciones otorgó Enrique VIII amplias libertades. Desde la conquista de los normandos no era permitido disponer por

(1) Hallam.—Constitutional history of England. t. 1, pág. 15.—Penny Cyclopedica, V. *Tenant intail. Fine y Recovery Common*.—Blackstone *Commentaries on the law of England*, book 2, ch. 7 and 21.

estamento de las tierras libres. Sólo en el condado de Kent y en algunos pequeños lugares existia costumbre en contrario. Aquella prohibicion era consecuencia de haberse dividido en feudos casi todo el territorio bajo la dominacion normanda, pues no pudiendo estos mudar de dueño sino mediante la ceremonia de la infeudacion y con licencia del señor, no cabia transmitirlos por sucesion testamentaria. Mas relajados los vínculos feudales de la propiedad y admitidos otros modos de comunicarla, ya no tenia tanto fundamento la prohibicion de testar de ella, y así la alzó Enrique VIII en cuanto á las dos terceras partes de los inmuebles, que constituian la dotacion de los feudos gravados con servicios militares á favor de la corona, y en cuanto á la totalidad de los bienes, cuando los feudos no tuvieran más carga á favor del Estado que alguna renta fija en dinero ó en especie. Entónces fué libre todo propietario para testar á favor de cualquiera persona que no fuese mano muerta eclesiástica de todos sus bienes raíces, excepto la tercera parte de los feudos militares; de las tierras poseidas con obligacion de pagar una renta indeterminada y á voluntad del señor directo, ó sea por el titulo llamado *Copy hold* (1); de los inmuebles cuyo dominio era todavía incierto, por estar sujeto á condiciones contingentes, y de los adquiridos despues de otorgado el testamento (2).

Nada innovó Enrique VIII en cuanto á la disposicion por testamento de bienes muebles, porque si bien en tiempos antiguos la facultad de testar de ellos estaba limitada por el derecho de la mujer y el de los hijos á heredar las dos terceras partes ó la mitad, segun los casos, cuando concurrían á la herencia, esta limitacion estaba derogada por la costumbre. Así en tiempo de aquel mocarca y desde mucho ántes se testaba libremente de los bienes

(1) La tenencia de tierras por *copy hold* era la que disfrutaban los labradores á quienes un señor feudal habia distribuido algunas de sus tierras, inscribiendo esta concesion en el registro de sus Estados. El poseedor de estas tierras, llamado *Copy holder*, las tenia á voluntad de su señor, segun la costumbre del feudo, pagando en unos la renta que aquel le queria exigir y en otros la autorizada por el uso. En los primeros, si el señor exigia más renta que el importe de los productos de la tierra en dos años, los tribunales, á instancia de los perjudicados, debian moderar esta exaccion. En los segundos, muerto el poseedor solia tener derecho su pariente más próximo á sucederle en su usufructo, pagando al señor cierta cantidad. Un estatuto de la reina Victoria ha mandado conmutar por una renta fija y un módico derecho de traslacion de dominio todas las exacciones arbitrarias ó regulares de los *Copy holders*. En el mismo estatuto se adoptaron tambien algunas disposiciones para la completa liberacion de estas tierras mediante el pago de lo que importara la capitalizacion de las rentas y derechos que los señores perciben de ellas.

(2) Blackstone: *Comment*, book 2, ch. 23.

muebles en toda la Inglaterra, excepto en el país de Galles, en el condado de York y en la ciudad de Lóndres, que habian conservado el derecho antiguo y aún lo mantuvieron despues, hasta que fué expresamente derogado en el siglo último.

Otra especie de propiedad hay en Inglaterra que debió tambien su libertad á Enrique VIII. Para evadir el cumplimiento de las leyes que prohibian adquirir inmuebles á ciertas personas, ó por otros motivos privados, se hacia uso del fideicomiso, en cuya virtud se legaban á uno ciertos bienes, con la obligacion de entregar sus productos á un tercero, conocido en la jurisprudencia inglesa con el nombre de *usuario* (cestui qui use). Eduardo IV, cuando aún no era lícito testar de los inmuebles, declaró que el derecho del *usario* á los productos del fideicomiso era trasmisible por testamento. Ricardo III amplió sus facultades en cuanto á disponer de los bienes fideicometidos. Enrique VII declaró responsables estos bienes de las deudas del *usuario*. Enrique VIII, por último, dió á éste la propiedad verdadera (1).

Mas aún despues de facilitarse la desvinculacion de los mayorazgos y la libre disposicion por testamento de todos los bienes raíces, todavía ocupaban los feudos militares la mayor parte del territorio y subsistian por consiguiente, aunque convertidas ya su mayor partē en servicios pecuniaros, las cargas onerosísimas del feudalismo.

El poseedor de alguno de aquellos feudos antiguos que obligaban á servir las armas no habia llegado á adquirirlo sin pagar á la corona un fuerte derecho: podia enajenarlo sin pagar tambien la real licencia necesaria para ello: si moria dejando por sucesor á un hijo de menor edad, correspondia la tutela de éste y gran parte de sus rentas al monarca: si tenia hijas, disponia el rey de su mano en favor de quien más le placia ó mejor se la pagaba. Todas estas gabelas y otras más de que ántes he hecho mencion no desaparecieron sino con la monarquía. Cierta es que, restaurado Cárlos II al trono de sus mayores, restableció casi todas las instituciones abolidas por la revolucion; pero como los caballeros más comprometidos por su causa juzgaran intolerable la continuacion de aquellos privilegios feudales, promulgó poco despues el mismo monarca un estatuto derogándolos para siempre y eximiendo de todo servicio, excepto el de las rentas fijas con que independientemente estuvieran gravados, á los poseedores de los antiguos feudos militares. Así quedaron estos convertidos en propietarios

(1) Blackstone: *ibid.* 2, ch. 20.



libres, puesto que el censo, si alguno pesaba sobre el inmueble, no alteraba su condicion; así cesó también la prohibición de testar de la tercera parte de los feudos militares que había quedado subsistente después de la reforma de Enrique VIII (1).

No se crea, sin embargo, que este estatuto acabó con el feudalismo en la Gran-Bretaña, aunque lo quebrantara profundamente. Con él mejoraron su estado y aseguraron su independencia los vasallos inmediatos de la corona; pero no los feudatarios de señores particulares, que eran más numerosos. Carlos II dejó subsistentes los feudos llamados de *grand serjeanty*, por los cuales debían los vasallos ciertos servicios de honor al rey (2): los llamados de «limosna libre» (*franck almonig*), que eran los concedidos á determinada corporación ó familia para invertir sus rentas en limosnas á su voluntad, y los denominados de *copy hold*, gravados con rentas indeterminadas á favor de los señores, según he dicho anteriormente.

En Escocia no fué aplicada la ley de Carlos II hasta mediado el último siglo, que es cuando se abolieron allí los feudos militares con otras instituciones emanadas del feudalismo. Es también digno de notarse que en este reino, donde hoy todavía se pueden fundar mayorazgos perpétuos, no fueron nunca admitidos aquellos simulados procedimientos que sirvieron en Inglaterra para desamortizar y enajenar los bienes vinculados.

II.

LA DESVINCULACION DE LA PROPIEDAD PRIVADA DESDE EL SIGLO XVIII.

Hasta el siglo XVIII, la pugna entre las dos tendencias contrarias que alternativamente prevalecen en la vida de la propiedad había sido una lucha de intereses; pero desde entonces fué también una cuestión de principios, por haberse mezclado en la contienda los filósofos innovadores y los modernos economistas. Los jurisconsultos ingleses, que nunca fueron por lo general favorables á las vinculaciones, se pronunciaron en el último siglo aún más resueltamente contra ellas, auxiliados ya entonces con el apoyo de las nuevas doctrinas económicas. «Los mayorazgos, decía el famoso Blackstone, son manantial perenne de pleitos y dificultades..... Los me-

(1) Blackstone, II, ch. 23.—Macaulay, *History of England*, t. 1, ch. 2.

(2) Estos servicios eran de diferentes especies, como por ejemplo, llevar la bandera del rey en ciertas ocasiones, ó su lanza, ó su espada, ó ser su dispensero ó su campeón, ó desempeñar algún noble oficio en las coronaciones.

dios inventados para desvincularlos han disminuido los graves daños que originan á la riqueza pública; pero siendo estos ya generalmente conocidos, y estando demostrada la conveniencia de facilitar la desamortizacion de los bienes vinculados, es de desear que se abrevien los procedimientos que se emplean para verificar su enajenacion, despojándolos de las sutilezas que los embarazan. Podríase derogar el estatuto *de donis conditionalibus*, aunque esto, restableciendo la antigua doctrina de los feudos condicionales, daria lugar á muchos litigios. Si se declarara al poseedor vincu- lista propietario libre, del mismo modo que puede él llegar á serlo me- diante el procedimiento ántes explicado, se perjudicaria injustamente á los sucesores futuros y á los *reversionistas*, privándoles de los medios que hoy tienen para oponerse á la enajenacion ó desvinculacion. Mas se podria autorizar á los poseedores para hacer tales enajenaciones por medio de una escritura solemne, con intervencion de los tribunales, al concluir el término que segun la ley pueden durar los mayorazgos, esto es, la vida de las per- sonas existentes llamadas en su primer lugar á su disfrute, y la del sucesor inmediato no nacido aún lo cual no tendria ninguno de los inconvenien- tes dichos que está en uso en las colonias inglesas de América y se practica para destinar bienes vinculados á fundaciones piadosas (1). Despues ve- remos cómo prevaleció al fin y se convirtió en ley esta opinion del juris- consulto inglés.

Los economistas del mismo siglo profesaban en esta materia opiniones aún más radicales que las de los juriconsultos. El célebre Smith, en su obra famosa sobre *la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones*, ana- lizó y ponderó con sagacidad notable los inconvenientes económicos de la amortizacion y de la acumulacion de la propiedad. «No hay nada, dice, tan duro ni tan contrario al interés de una familia numerosa como el de- recho que, para enriquecer á un hijo, deja á los demás casi reducidos á la miseria.» En su concepto, desde que la Europa está organizada de manera que los gobiernos pueden proteger las propiedades de todos, no hay razon para que las leyes persistan en mantener grandes propiedades que por su extension y recursos encierran dentro de sí mismas medios suficientes para su defensa. Dijo además de los mayorazgos que se fundaban en la suposi- cion absurda de tener derecho una generacion para imponer condiciones á las sucesivas, limitando las facultades inherentes á la propiedad, y que con el derecho de primogenitura se favorecia la acumulacion de la riqueza,

(1) Blackstone, II, 7, 16.

causa, en su entender, del alto precio de las tierras, de la imperfeccion del cultivo y del atraso de la agricultura. Ponderó las ventajas del cultivo en pequeño, y trató de probar que ni aún los colonos de los grandes propietarios podían ser buenos agricultores (1).

Aunque el pueblo inglés no se deja seducir fácilmente por meras especulaciones científicas cuando tiene que resolver cuestiones prácticas de administracion ó gobierno, no es tampoco del todo insensible á ellas y acepta siempre las que llega á confirmar una inteligente experiencia. Así Smith, sin dejar de ser admirado en su país, tuvo desde luego aún más prosélitos en el continente; y aunque hizo prevalecer entre sus compatriotas el espíritu de sus doctrinas, no ha logrado hasta ahora ver aceptadas por los legisladores de la Gran-Bretaña todas sus conclusiones. Las ideas ántes indicadas sobre las vinculaciones y la amortizacion de la propiedad, se descubren sin duda en el fondo de todas las reformas de la legislacion territorial realizadas ó proyectadas desde fines del último siglo; pero las teorías absolutas que Smith deducia de ellas y que en Francia y en España se han pretendido poner en práctica en distintas épocas, no se han ensayado todavía en Inglaterra. Allí tiende el legislador á favorecer la libertad y la personalidad del dominio, pero nunca ha creído conveniente decretar en un día la absoluta independencia de la tierra de todo vínculo social y político.

Como la inalienabilidad de los bienes no podía sostenerse sino por tiempo limitado, cuando se dejaba alguna propiedad con la condicion de trasferirla con sus rentas devengadas ó sin ellas á persona determinada luego que se verificase cierto acontecimiento futuro, tal propiedad seguía siendo inalienable hasta que éste se verificara, sin perjuicio de transmitirse entretanto por herencia y siempre en el supuesto de no durar la inalienabilidad más que la vida de los concesionarios existentes y veintiun años después. Mas deseando Jorge III abreviar este término, ya para que el dominio no estuviera incierto, ó ya para evitar en su caso la acumulacion de cuantiosas riquezas, promulgó en 1800 un estatuto, por el cual ordenó que nadie dispusiera de sus bienes de modo que se acumularan sus rentas y sus productos por más tiempo que la vida del enajenante y veintiun años más, ó durante la menor edad de personas determinadas.

Después Guillermo IV, siguiendo la opinion de Blackstone ántes in-cada, abolió los fingidos procedimientos (*common recovery* y *fine*) usados para la desvinculacion y la enajenacion de los bienes de mayorazgo, aunque

(1) Smith, lib. III, c. III, 4.

no sin sustituirlos con una escritura solemne, otorgada con intervencion de los tribunales y registrada en sus archivos, la cual habia de surtir los mismos efectos. Tambien se revocó en el mismo reinado un estatuto de Enrique VI, que prohibia á las mujeres enajenar los mayorazgos que hubieran adquirido por donacion de sus maridos. Entónces se promulgó tambien un estatuto reformando el antiguo, que limitaba á la mitad del mayorazgo la responsabilidad de las deudas contraidas por el poseedor, y declarando que el mayorazgo entero seria en adelante responsable de tales deudas y podria, por lo tanto, ser enajenado para satisfacerlas.

En el reinado actual se han publicado por último varias leyes con igual tendencia. Era regla antigua de jurisprudencia que cuando se trasferia sin ninguna restricción expresa la propiedad de un inmueble] debia ésta entenderse vitalicia. Un estatuto reciente ha derogado esta regla, declarando que en tal caso se deberá entender el dominio así transmitido, perpétuo y por juro de heredad. Subsistian en toda Inglaterra los poseedores *por copia de registro* (*copy hold*) de que ántes he hecho mencion, gravados con censos y servicios inciertos, y otro estatuto de la reina Victoria les ha facilitado el completo rescate de tales propiedades mediante el pago del capital que representen sus cargas, equitativamente graduadas. Estaba vigente el estatuto de Enrique VIII, citado ántes, que no concedió sino con graves limitaciones la facultad de testar de los inmuebles, y otro de la misma reina ha ampliado este derecho á todas las propiedades, de cualquier origen y calidad que sean (1).

Mas á pesar de estas leyes y de las doctrinas de los filósofos y de los economistas, todavia conserva la propiedad en Inglaterra su primitivo carácter de estabilidad y fijeza y sus estrechos vínculos con el principio aristocrático predominante en su régimen social y político. Sus tierras son por lo comun feudales, si se exceptúan las ciento ochenta y tres ciudades *incorporadas*, cuyo suelo, sin embargo, corresponde generalmente á algun señor vecino. El principio de la sucesion hereditaria por derecho de primogenitura se observa con tanta fidelidad en las familias, que aún hay muchas tierras en poder de los que las adquirieron en el siglo xi por repartimiento de conquista.

La ley permite disponer libremente de todos los bienes no vinculados. En todo el reino de Inglaterra y en el pais de Gales, ménos en el condado de Kent, puede el padre nombrar heredero á un extraño, con tal de que

(1) Blackstone, II, ch. 11, 21, 23, 32.

desherede expresamente á los hijos, manifestando ó no la causa. Pero como si el testador no dispone lo contrario debe sucederle en toda la herencia inmueble el hijo primogénito, con exclusion de sus hermanos menores y de sus hermanas, la costumbre, más poderosa que la ley, hace que los padres renuncien á aquella libertad y omitan toda institucion de herederos prevaleciendo así casi siempre la sucesion por primogenitura. Conviene advertir, sin embargo, que este derecho queda algo reducido en la práctica, porque una singular jurisprudencia no cuenta por inmuebles para los efectos de la sucesion las minas, las fábricas, los caminos y canales, los edificios urbanos, los fondos públicos y todo lo que en tiempos antiguos no solia estar infeudado (1).

Aunque no pueden vincularse bienes sino por tiempo limitado, y la ley autoriza, como se ha visto, las desvinculaciones, es costumbre muy usada cuando el primogénito del poseedor de un mayorazgo trata de contraer matrimonio, la de otorgar un contrato desvinculando sus bienes, pero vinculándolos á la vez de nuevo á favor del hijo primogénito del consorcio futuro. De este modo el padre, poseedor actual, continúa disfrutando el mayorazgo á título de propietario vitalicio: el hijo sucede en él con igual carácter, y el nieto que primero nazca entra á poseerlo en su día como vinculista. Y como el derecho de éste, mientras no nazca ó sea menor, podria perjudicarse por alguno de sus antecesores en la posesion del vinculo enajenándolo ó hipotecándolo, es costumbre tambien nombrar en la misma escritura de desvinculacion uno ó más individuos con el título de *protectores* que defiendan al póstumo ó menor, y sin cuyo consentimiento no puede alterarse el estado legal de los bienes reservados. Estos contratos suelen repetirse en las familias cada dos generaciones, y así se perpetúan los mayorazgos, á pesar de las leyes, que no permiten fundarlos sino temporales.

Tambien bajo otro concepto se suele dar en la práctica á las vinculaciones una amplitud que no tienen por derecho. La ley no permite vincular más que las tierras de juro de heredad; pero la jurisprudencia ha inventado medios para constituir tambien mayorazgos, aunque indirectamente, con bienes de otra especie, así como con propiedades temporales y vitalicias. Hácese esto transmitiendo el dominio á una ó más personas de confianza, con calidad de fideicomiso, á favor de un matrimonio ó de alguno de los cónyuges durante sus vidas respectivas ó la de su hijo primogénito.

(1) Blackstone, I, ch. 16.—Tapiés, *La France et l'Angleterre*, p. 20.

Así quedan inalienables los bienes fideicometidos hasta que el primer sucesor llamado y no nacido al tiempo de constituirse el fideicomiso cumple 21 años.

En Escocia no permite la ley disponer por testamento más que de los bienes muebles. Esta limitacion es allí tanto más importante cuanto que se considera bienes inmuebles no sólo las tierras y los edificios, sino las pinturas, las máquinas, los libros, las vajillas y otros objetos semejantes, á fin de que alcance hasta ellos la sucesion por primogenitura. Al lado de este derecho amplisimo subsiste la facultad de vincular por tiempo ilimitado y sin restriccion en cuanto al número de las personas llamadas á suceder en los mayorazgos. Mas aunque la ley prohíbe disponer por testamento de la propiedad inmueble, porque los antiguos feudos no se transmitian válidamente sin la inmediata aceptacion del vasallo, es práctica en Escocia trasferir la propiedad por acto entre vivos, reservándose el cedente durante su vida el usufructo (1).

Pero como las leyes modernas, si bien han extendido las facultades del dominio ó de la posesion de la tierra no han alterado forzosamente su distribucion, la propiedad territorial en la Gran-Bretaña conserva sus caracteres primitivos de acumulacion y estabilidad. La estadística ofrece sobre este punto datos muy importantes. Cinco sextas partes de los 45 millones de fanegas que comprende el territorio del reino de Inglaterra se hallan en poder de sólo 50.000 grandes propietarios. La acumulacion es aún mayor en Escocia, pues los 20.827.500 fanegas que comprende su territorio pertenecen solamente á 7.118 propietarios. ¡Qué diferencia entre esta distribucion de la propiedad y la de Francia, donde 115 millones de fanegas de tierra cultivada se hallan subdivididas entre 4.800.000 familias!

Para juzgar de la estabilidad del dominio de los inmuebles en Inglaterra baste saber que todas las enajenaciones de ellos afectan cada año por término medio á 1/500 de su territorio. A este resultado contribuyen no sólo las leyes y costumbres referidas, sino tambien las dificultades que en la práctica ofrece la enajenacion de toda propiedad. Como no existen notarios y se transmite el dominio generalmente por contratos privados, son muchos los propietarios que carecen de títulos, y más aún los que los tienen tan oscuros y complicados que no pueden satisfacer al comprador menos escrupuloso. De aquí resulta la necesidad de valerse en la venta de todo

(1) Blackstone, II, 21.

inmueble de un letrado que, ó examine los títulos, si los hay, ó prescriba en otro caso las diligencias necesarias para suplirlos; y aunque el Estado no cobra alcabala ni derecho alguno, la mediacion de aquel funcionario suele ser más costosa que el impuesto de mutacion, donde existe. Recientemente se ha establecido un registro de la propiedad que suplirá con el tiempo la falta ó la imperfeccion de los títulos de dominio, pero no sin gastos cuantiosos que retraen á veces de las enajenaciones. Además estos gastos, así en el nuevo registro como fuera de él, no guardan la proporcion debida con el valor de las cosas enajenadas, de lo cual resulta ser más conveniente comprar grandes que cortas propiedades, y así, á pesar de las traslaciones de dominio, no progresa ó progresa poco la division del suelo (1).

III.

DESAMORTIZACION DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL.

Hay tambien en Inglaterra otra propiedad civil exclusivamente consagrada á intereses colectivos y fuera del comercio, que es la que poseen los pueblos como bienes de propios y de aprovechamiento comun. Las corporaciones municipales han provisto allí desde su origen á las necesidades públicas con las rentas de sus tierras, su participacion en los diezmos y el producto de ciertos arbitrios. Cometianse antiguamente grandes abusos en el manejo de estos bienes, y como la ley no prohibiera enajenarlos solian malverse y dilapidarse, sin que la autoridad del gobierno alcanzara el remedio. Así una de las novedades introducidas en la ley municipal de 1835 fué limitar las facultades que en este punto disfrutaban las corporaciones municipales, prohibiéndoles vender, gravar é hipotecar sus bienes fuera de ciertos casos muy calificados. Tambien ordenó esta ley que no fueran arrendados tales bienes sino por rentas fijas, prévia y claramente designadas y por plazos que no excedieran de 51 años.

Hay además, como he dicho, tierras de aprovechamiento comun cuyo dominio directo corresponde siempre á algun señor feudal, con la obligacion de permitir á sus vasallos ó terratenientes que disfruten sus pastos, corten leña de sus montes ó los utilicen de otra manera, aunque con algunas limitaciones de lugar, de tiempo ó de objeto. De estos aprovechamientos, unos corresponden al terrateniente por ministerio de la ley y como consecuencia de ser la tierra de origen feudal, otros proceden de concesiones

(1) Tapiés, obr. cit., pág. 22.

particulares expresas, otros se fundan en la prescripcion de largo tiempo, y otros no tienen más título en su apoyo que la costumbre del lugar.

En cada estado ó territorio señorial debe haber una porcion de tierra señalada, donde los vecinos ó terratenientes, por el mero hecho de serlo, puedan apacentar sus animales de labranza. En algunos Estados se extiende este derecho por concesion expresa, prescripcion ó costumbre, ó á terratenientes que no dependen del señor feudal respectivo, ó á más ganados que los necesarios para la labranza, ó á tiempo ilimitado, ó á aprovechamientos que no son indispensables para mantener labradas las tierras del feudo. Hay tambien pueblos que en estos mismos terrenos tienen mancomunidad de pastos con otros pueblos vecinos, y por último hay campos comunes (*common fields*) que son tierras destinadas á la labranza por sus dueños, pero en las cuales, una vez levantada la cosecha, tienen derecho á apacentar sus ganados, ya los mismos propietarios en comun, ya todos los vecinos del término, según la costumbre.

Mas desde el reinado de Enrique III vienen disminuyéndose en Inglaterra las tierras comunes de todas clases. Aquel monarca permitió á los señores acotar y poner en cultivo todos los terrenos que eran comunes por ley, en la parte que no fuera indispensable para el servicio á que sus vasallos tuvieran derecho. Eduardo I amplió esta facultad á los terrenos comunes por prescripcion ó costumbre, salvo siempre el derecho estricto de los vasallos. Jorge II permitió el cerramiento de todo género de heredades, sin limitacion alguna, siempre que se hiciera para plantar montes y lo consintiera la mayor parte de los interesados en el aprovechamiento. Jorge III otorgó igual facultad con las mismas condiciones, aunque el acotamiento se verificara para arrendar ó dar á censo el terreno acotado, siempre que éste no excediera de la dozava parte del comun y se empleara su producto en mejorar este último. Despues se han acotado muchas tierras comunes en virtud de leyes especiales votadas por el Parlamento, y hoy continúa acotándose aún sin este requisito y con arreglo al estatuto de Jorge III.

Por efecto de estas leyes no sólo se han acotado, sino que se han distribuido á título de censo ó de largo arrendamiento entre los terratenientes de cada feudo las tierras y los *campos comunes* propios del mismo. En estos repartimientos suele reservarse el señor, como propiedad libre y absoluta, una decimasexta parte del terreno acotado, distribuyendo las quince restantes entre los interesados en la comunidad, aunque no por partes

iguales, sino en proporcion á la tierra que cada uno posee (1). En otro país más afecto á la igualdad democrática se habria hecho la distribucion de modo que resultara el mayor número posible de propietarios: en Inglaterra se procedió de otro modo, ya porque naciendo el derecho de cada partícipe de su calidad de terrateniente, cuanto más tierra poseyera en tal concepto tanto mayor parte habria tenido en el aprovechamiento comun y debia tener en los terrenos que se distribuyesen, y ya porque era de esperar que estos terrenos serian tanto mejor cultivados cuanto más capital pudieran invertir en ellos los nuevos poseedores. En 1780 se dividieron por orden del Parlamento cerca de 12.500.000 fanegas de tierras comunes, adjudicándose en la proporcion indicada á los antiguos partícipes de su aprovechamiento. De este modo han venido á parar aquellas tierras en propietarios ricos y hábiles y se hallan hoy cultivadas con inteligencia y esmero. (2)

Así, pues, las leyes promulgadas en Inglaterra desde hace más de dos siglos tienden generalmente á permitir la desamortizacion, mas sin imponerla por la fuerza. La nacion, obedeciendo á sus instintos y fiel á sus tradiciones, se aprovecha de esta libertad para mantener la acumulacion y la estabilidad de sus propiedades, mas sin que esto haya perjudicado al crecimiento rápido de la riqueza. Hay allí, por lo tanto, mucha propiedad amortizada; pero con amortizacion tan flexible, segun la ley, que se puede prescindir de ella siempre que lo exige el interés de una familia y aún el capricho de un individuo. Un pueblo ménos apegado á sus hábitos y ménos fiel á su historia habria tal vez usado de las nuevas leyes para cambiar la constitucion y el carácter social y político de su propiedad territorial; pero léjos de eso, el pueblo inglés se vale de ellas para remediar los inconvenientes que la amortizacion lleva consigo. Hay allí mayorazgos, pero sólo en tanto que los quieren los propietarios; hay derecho de primogenitura, pero sólo cuando el testador no lo revoca. Así nadie puede quejarse de que la amortizacion le oprima y menoscabe su riqueza, sin embargo de haber tantas propiedades amortizadas.

(1) Blackstone, II, 3, III, 16.

(2) Tapiés, obr. cit. p. 2. = *Penny Cyclopaedia*. V. Borough.

CAPITULO IX.

Opiniones de los filósofos y de los políticos de la escuela
del siglo XVIII acerca del origen, naturaleza y extension del derecho
de propiedad.

Los filósofos y los políticos del siglo xvm, renovando en parte doctrinas antiguas un tanto olvidadas, ó fundiéndolas con otras nuevas, combatieron duramente la organizacion histórica de la propiedad, como contraria á la justicia y al interés bien entendido de la sociedad y del individuo. Siguiendo el método filosófico á la sazón predominante, separaron al hombre de la sociedad y al individuo de la familia para examinar sus necesidades, analizar sus derechos y buscar los medios de conseguir su dicha. La propiedad era á sus ojos una invencion de la ley positiva, dirigida únicamente á satisfacer las necesidades materiales del hombre en la tierra. Cuidando de examinarla con el mayor esmero en sus relaciones con el individuo, prestaron poca atencion á sus relaciones con el Estado y trataron de reconstituirla sin tener en cuenta esta circunstancia esencial de su naturaleza. El bienestar del hombre, decian, consiste en la satisfaccion de sus necesidades, la cual no se alcanza sin la facultad de disponer de todo lo que nos pertenece en nuestro exclusivo provecho, prescindiendo de todo interés general ó colectivo. Y no quedarán por eso abandonados estos intereses, añadian, porque siendo el bien público la suma de todos los bienes individuales debe resultar la sociedad necesariamente satisfecha cuando cada uno de sus miembros posea los bienes necesarios para lograr el bien propio. Ligada todavía la propiedad con tantos intereses colectivos, ajenos ú opuestos al interés particular, no llenaba cumplidamente sus fines individuales; era menester, por lo tanto, en concepto de los innovadores, empezar destruyendo por completo su antigua organizacion si habia de dársele otra más conforme con los principios políticos modernos.

Las restricciones del dominio no eran consideradas como expresion legítima de necesidades sociales verdaderas, sino como abusos ó extravagancias de las generaciones pasadas, fruto del desórden y de la ignorancia de

otros tiempos y causa de que la propiedad no llenara los fines para que habia sido instituida por la ley. Examinada la historia por el prisma de las doctrinas absolutas de la época, era el feudalismo un sistema aborrecible é injustificable, inventado para mantener al hombre en perpétua esclavitud, y que habia detenido muchos siglos el progreso de la civilizacion europea. Los derechos señoriales no tenian á sus ojos más origen que la usurpacion y violencia. Las instituciones que ponian algun embarazo á la circulacion de la riqueza eran obra tan sólo de la codicia, de la rapacidad y del orgullo insensato de los nobles, y de la ignorancia, de las preocupaciones y del fanatismo de los plebeyos.

El prescindir de las relaciones de la propiedad con la familia era tambien consecuencia del carácter democrático de las ideas predominantes. Para la democracia, considerada en sus diversas manifestaciones, tienen existencia oficial reconocida el Estado y los individuos, pero no las familias. Bajo su imperio pueden estrecharse ó relajarse los vinculos del individuo con el Estado, segun que la democracia sea meramente liberal ó socialista; pero los lazos entre el Estado y las familias se rompen por completo, así como tambien se relajan los que unen á los miembros de ellas. No cumple á mi propósito averiguar las causas de este fenómeno; basta consignarlo como un hecho para deducir despues las consecuencias que tienen relacion con el asunto de este capítulo.

En tal supuesto, y admitida la democracia como el mejor régimen político, ¿qué consideracion habia de guardarse con las instituciones que tenian por objeto mantener la unidad, el poder y la representacion politica de las familias? Procurar la perpetuidad de estas bajo un régimen que no las reconocia sino como corporaciones privadas apenas sujetas á la ley civil, pero con las cuales no habia de mantener el Estado relaciones de ninguna especie, habria sido una inconsecuencia. Y como era con los individuos con quienes el poder público debia entenderse directamente, túvose, y con razon, por más lógico mejorar su estado, promoviendo su independendencia y acrecentar su número, sacándolos cuanto ántes del seno de las familias. Léjos, pues, de fortalecer la organizacion de estas y de favorecer el acrecentamiento de sus riquezas, lo que convenia á la democracia era quebrantar su poder restringiendo los derechos de la patria potestad, promoviendo la emancipacion de los hijos y facilitando entre ellos la division de la herencia paterna.

¿Ni cómo en un sistema que buscaba únicamente el bienestar del individuo, habian de tener cabida el derecho de primogenitura, el privilegio de masculinidad, la distincion en las sucesiones entre bienes *troncales* y *adqui-*

ridos, las mayorazgos y la legítima de los parientes colaterales? Todas estas instituciones del derecho positivo suponían el sacrificio del individuo á la entidad colectiva de la familia, y este sacrificio era completamente inútil é inmotivado si la familia no había de tener ninguna representacion política.

No se compadecían tampoco con tales instituciones el derecho natural ni la igualdad, que enseñaban y proclamaban aquellos filósofos; los preceptos del derecho natural, por su universalidad y sencillez; la igualdad, porque con ella no caben las castas privilegiadas que pretendían conservarse. Teniendo todos los hombres igual derecho á la vida y á los medios de sostenerla, la ley debía en su concepto procurar al ménos la igual distribucion entre ellos de todos los bienes de la tierra. Los mayorazgos, los derechos de primogenitura y los privilegios de masculinidad, lèjos de favorecer aque propósito, introducían en la sociedad distinciones odiosas á los ojos de la democracia y producían una desigualdad intolerable en la distribucion de la riqueza. Por ellos se acumulaban, no ya en pocas familias, sino en algunos individuos de ellas, propiedades cuantiosas, quedando desheredados y empobrecidos los que no tenían la doble dicha de pertenecer á alguna de las castas privilegiadas y de nacer ántes que sus hermanos. Excluir por medios tan artificiosos á la mayoría de los hombres del dominio de la tierra que el Criador puso á su servicio, debía parecer, en efecto, inicuo y absurdo á filósofos que aspiraban á realizar la igualdad más perfecta entre ellos y tenían viva esperanza de alcanzarla.

De no considerar la propiedad sino como un medio de satisfacer las necesidades del individuo, nacia además otra consecuencia importantísima. Si la ley otorga la propiedad al hombre, tan sólo para que satisfaga sus necesidades materiales, que cesan con la muerte, no hay razon para que continúe sujeta aún despues al capricho de los que la disfrutaron en vida. Por eso parecia tan absurdo á Robespierre que dispusiera de la tierra quien estaba ya confundido con ella y convertido en polvo. Y en efecto, si la necesidad de conservar la vida fuera el único fin del dominio, no debían durar sus efectos ni una hora despues de la muerte.

A estas consideraciones teóricas y generales, contrarias al antiguo régimen de la propiedad en Francia, se agregaban otras no ménos eficaces nacidas de las circunstancias de la nacion. La monarquía francesa habia vencido en los siglos pasados á la aristocracia, mas sin destruirla por completo: la una preponderaba sin duda, pero la otra subsistia, si no enseñoreada del territorio, como en otros tiempos, con el esplendor y la grandeza de una clase todavía privilegiada y poderosa. A la sombra de la monarquía se

habia levantado y engrandecido una clase, término medio entre las dos primitivas, el tercer estado, que al mediar el siglo xviii se hombreaba con la aristocracia y rivalizaba con ella en ilustracion, en poder y en riqueza. Llegada esta clase á la plenitud de su desarrollo, era natural que codiciara la autoridad de la nobleza, su émula, y que áun procurara desvirtuar la de la monarquía, su antigua protectora. De esta diversidad de sentimientos é intereses debia resultar una encarnizada lucha entre las contrarias influencias que aspiraban al predominio en la sociedad. El campo de la contienda debia ser naturalmente aquel en que tuviera reunidas sus fuerzas la parte beligerante poseedora del derecho disputado; es decir, que para vencer á la nobleza era menester buscarla en el terreno de las antiguas instituciones feudales y de los privilegios de la propiedad, donde se hallaban los cimientos de su preponderancia. La cuestion que debia ventilarse era además de principio y forma de gobierno, y cómo el existente estaba intimamente enlazado con la antigua organizacion de la propiedad no era posible resolverla sin alterar profundamente esta organizacion.

Suprimir el derecho de primogenitura, los mayorazgos y todas las demás instituciones que sostenian y acumulaban la propiedad en cierto número de familias y en corporaciones perpétuas, y sustituir á este régimen de privilegios otro comun, uniforme é igual para todos, pero con opuestas tendencias, equivalia á acabar con la aristocracia, á debilitar el principio monárquico que de ella recibia fuerza, y á dar, por último, el triunfo á la pujante clase media. Por eso los escritores que, como Montesquieu, no aspiraban á cambiar en Francia el principio del gobierno, aunque en sus aplicaciones quisieran modificarlo, no condenaron absolutamente los mayorazgos, limitándose á proponer que los nobles solamente tuvieran la facultad de establecerlos. Montesquieu no sólo consideraba necesarios los mayorazgos en toda monarquía para sostener lo que él llamaba *principio del honor*, como principio de gobierno, sino tambien el derecho de primogenitura, el retracto de linaje, y por regla general todas las instituciones que tendian á conservar los bienes en las familias nobles (1). Pero de muy diverso modo discurrían los que aspiraban á cambiar el principio y la forma de gobierno. Por lo mismo que las vinculaciones mantenían el poder de las familias nobles, era menester, en su concepto, destruirlas, á fin de que no embarazaran el establecimiento del régimen democrático.

(1) *Esprit des lois*, v. 8.

Al lado de los filósofos y de los políticos combatían la antigua organización de la propiedad los nuevos economistas. Investigando estas las leyes de la producción y de la distribución de la riqueza, advirtieron que una de las causas que dificultaban su desarrollo era el estado de la propiedad inmueble. La escuela de los *fisiócratas*, nacida en Francia en el mismo siglo xviii, considerando la tierra como única fuente de riqueza, hizo de la agricultura el objeto predilecto de sus especulaciones. Indagando las causas de su atraso, señaló, entre otras, la condición miserable de los labradores, abrumados de censos, corveas y otras gabelas feudales. Quesnay, fundador de la escuela, no creyó, como alguno de sus sucesores en la ciencia, que el cultivo en pequeño fuera más favorable á la producción que el de extensas proporciones; pero condenó con mucha razón un régimen que ponía la tierra en manos de labradores sin el capital necesario para mejorar su labranza. Así sucedía, en efecto, en los Estados feudales, cuyos vasallos estaban gravados con tributos tan enormes y con cargas tan insostenibles, que apenas sacaban más fruto de su trabajo que un escaso sustento. Quesnay hubo de tener presente la triste suerte de estos misérrimos cultivadores cuando aseguró que el comercio y la industria no añadían valor alguno á la riqueza pública, porque la diferencia entre el precio del producto bruto y el del elaborado equivalía al salario del trabajador, ó sea á la cantidad consumida en su alimentación durante la obra. Y por más que este juicio fuese equivocado, la verdad es que, practicada la agricultura bajo las condiciones durísimas á la sazón acostumbradas, el valor añadido por el trabajo del labrador solía venir, bajo el régimen feudal, á poder de los señores.

Los economistas de la escuela inglesa fundada por Adán Smith, sin convenir en principios muy fundamentales con los *fisiócratas*, venían á parar al mismo resultado. No la tierra, sino el trabajo era á sus ojos la fuente de toda riqueza, y por lo tanto aquella organización de la propiedad que más lo promoviera y facilitara debía ser también la más adecuada á su objeto. La que á la sazón existía no la llenaba cumplidamente, porque disminuía el estímulo al trabajo, menguando inconsideradamente su utilidad. Tal era el resultado del régimen feudal, que atribuía al señor la mayor parte de las ganancias del vasallo, mediante el censo, la talla, las corveas y otras muchas gabelas onerosas, y tal era también el efecto de las instituciones, que para conservar las fortunas de ciertas familias, fomentaban la pereza de los propietarios. El derecho de primogenitura estimulaba también la ociosidad de aquellos á quienes favorecía, privando al mismo tiempo á la mayor parte de

los hijos de uno de los elementos más esenciales para la producción de la riqueza; con lo cual, á la vez que se disminuía en los unos la necesidad del trabajo, carecían los otros del capital indispensable para hacerlo más lucrativo.

El derecho de los linajes á suceder en determinados bienes privaba al propietario de la facultad de darles el destino más conveniente para la producción, al paso que los hacía recaer en las personas ménos aptas quizá para utilizarlos. Los mayorazgos, apartando de la circulación multitud de propiedades, impedían que el estímulo de aumentar su valor las mejorara, haciéndolas más productivas. A la misma causa se atribuía también la escasez de tierras enajenables, y por consiguiente su alto precio en el mercado y la menor utilidad del trabajo que se empleaba en su cultivo. Así, pues, muchas propiedades independientes, con todas las ventajas del dominio libre, y sin ningún derecho preexistente que las redujese, era á los ojos de la escuela economista de Smith, el mayor estímulo que se podía ofrecer al trabajo y á la producción de la riqueza. La mayor libertad imaginable con la menor acumulación de riqueza posible era la verdadera fórmula del sistema de propiedad que deseaba aquella escuela.

Las doctrinas ántes enunciadas de los filósofos claudicaban, sin embargo, en parte por fundarse en principios harto exclusivos. No es cierto que la propiedad sea solamente el medio de satisfacer las necesidades materiales del hombre; es además un medio de satisfacer sus necesidades morales, como ser dotado por Dios del sentimiento de la sociabilidad y de la familia. De aquí resulta que por su naturaleza, é independiente de las leyes positivas, es la propiedad un vínculo del individuo con la familia y con la sociedad. Suprimida se concibe que puedan subsistir estas instituciones tutelares, pero sin los medios que más contribuyen á fortalecerlas y perpetuarlas.

Si el hombre hubiera venido al mundo para vivir aislado como los brutos en medio de los bosques, sin más necesidades que las de su cuerpo, la propiedad sería lo que suponían los filósofos del siglo xvin. Pero el hombre tiene además una familia á quien ama, y se sirve de la propiedad para conservarla: pertenece á una sociedad, de la cual recibe á cada instante los más esenciales servicios, y la propiedad le une á ella por vínculos indisolubles. Es este carácter de la propiedad tan universal y tan necesario, que no existe ni ha existido sin él en ningún pueblo del mundo. Observación que bastaría por sí sola para convencer de aquella verdad incontestable, aunque otros hechos no la comprobaran.

Queda, pues, demostrado el error de los que, suponiendo que la propiedad no tiene más origen legítimo que la ley positiva, no sólo prescindían de sus relaciones con la sociedad y con la familia, sino que procuraban anularlas. No son los legisladores ni los conquistadores de reinos los que crearon los derechos indispensables para que el hombre cumpla su destino en el mundo, ni el matrimonio, ni la patria potestad, ni el derecho á trabajar y de proporcionarse el sustento. La ley, por lo tanto, no puede abolir la propiedad ni ninguno de estos derechos: ella los acepta, los asegura, los armoniza, mas no puede suprimir ninguno de sus caracteres esenciales. Si la propiedad existe para algo más que para satisfacer las necesidades corporales del propietario; si existe tambien para el Estado y para la familia, el legislador no puede limitar su existencia al servicio del individuo, así como estando instituido el matrimonio, no sólo para el bienestar de los cónyuges, sino en utilidad tambien de la sociedad y de la familia, sería inútil y absurda la ley que, prescindiendo de una y de otra, lo reglamentase en interés exclusivo de los esposos.

Y no se diga que el interés público queda satisfecho, una vez asegurado el de todos los individuos, porque esto no es verdad sino cuando se satisfacen realmente todos los intereses de todos y de cada uno de aquellos, lo cual está muy lejos de suceder en esta materia. ¿Acaso los intereses del individuo en la propiedad se reducen á satisfacer con ella el mayor número posible de sus necesidades materiales? Y si el hombre tiene además otras necesidades morales, á que dá satisfaccion la propiedad, no se organizará esta conforme al bien público en tanto que unas y otros no se satisfagan simultáneamente. Luego no dándose satisfaccion más que á un orden de ellas, y desconociéndose las otras, no se puede estimar satisfecho el interés social.

La supresion de la familia como entidad política, y la relajacion de los vínculos que unen á sus individuos, para aumentar el número de los ciudadanos independientes, fueron tambien invenciones harto peligrosas. Natural era que á medida que iba creciendo la fuerza centralizadora del Estado se estrecharan sus relaciones con el individuo y se hiciera ménos necesaria la vigorosa organizacion de la familia antigua. Cuanto mayor ha sido el poder y la eficacia de la autoridad pública, tanto más limitada ha debido ser la autoridad doméstica y ménos importancia ha debido tener la familia en la organizacion política del Estado. Pero de que ni la familia romana ni la sociedad doméstica del feudalismo sean compatibles con la civilizacion presente, no se sigue que se deba anular por completo este elemento político.

La autoridad pública ha podido reemplázar á la doméstica en muchas de sus funciones, pero nunca le sustituirá en todas con venaja de la sociedad y del individuo. Su accion, para ser eficaz, seria insoportablemente tiránica, y no siendo tiránica sería completamente ineficaz. Redúzcanse los derechos de la patria potestad, sustitúyanse con la autoridad abstracta de la ley, limitense las obligaciones entre padres é hijos á las absolutamente indispensables para la crianza y primera educacion de estos, y la familia será una asociacion temporal y pasajera, muy semejante á la del bruto con sus hijuelos, que cria á sus pechos, ó cubre con sus alas, en tanto que no aprenden á buscarse el alimento.

Considerada así la familia, seria tambien una institucion groseramente materialista, indigna de la elevada naturaleza del hombre, y un eslabon tan frágil de la cadena social, que se romperia al menor esfuerzo. La sociedad civil no ha sido nunca ni puede ser jamás una reunion de individuos, sino de familias, que el individuo nunca existió solo y aislado en el mundo. La familia es elemento esencial y base firmísima de la sociedad. Si la una perece ó se desvirtúa, ¿qué será de la otra? Si las familias, en vez de cuerpos hasta cierto punto permanentes, con tradiciones, costumbres y tendencias comunes, no fueran sino reuniones transitorias, frecuentemente renovadas para un fin limitado, que pasaran como el relámpago sobre la haz de la tierra, sin dejar de sí rastro ni memoria, ¿qué sería de la sociedad? ¿No sería de temer que con elementos tan contingentes no se pudiera formar un compuesto bastante sólido y duradero?

Las doctrinas democráticas del siglo xviii dieron grande impulso á la obra de trasformacion de la familia, comenzada bajo el imperio de los Césares, quebrantando al mismo tiempo los vínculos sociales, no en su extension, pero sí en su intensidad. Entre el súbdito y la autoridad comun suprema hay hoy más relaciones de dependencia que en otro tiempo, pero ménos estrechas que las que existian ántes entre el mismo súbdito y la autoridad local de entónces. La civilizacion—ignoro si por fortuna ó por desgracia—con esta, que podriamos llamar tendencia subversiva de la familia, posee otra eminentemente conservadora, que conduce á la centralizacion del poder, la cual neutraliza hasta cierto punto los efectos de la primera. Mas no los corrige por completo, y al fin la sociedad cimentada sobre la centralizacion del poder es una obra de arte, y la fundada en la organizacion de la familia es obra de la naturaleza.

Otro de los principios en que los filósofos del siglo xviii pretendian fundar la nueva organizacion de la propiedad era la igualdad democrática.

Principio falso, deducido de la inexacta apreciacion de los hechos, refutado tan victoriosamente en la region de la ciencia y en la de la historia, que seria excusado analizarlo detenidamente. Verdad es que todos los hombres vienen al mundo con igual derecho á procurarse el sustento, pero no todos traen iguales medios para conseguirlo. Esta desigualdad originaria es obra de la Providencia que, como todas las suyas, no puede carecer de objeto aunque el entendimiento humano no alcance á comprenderlo. El hombre sin embargo, la consideró como una imperfeccion del órden social, y trató de corregir la obra del Criador, procurando, ya que no era posible la igualdad de facultades, la igual participacion en el dominio de la tierra. Vana tentativa: la empresa no pasó nunca del estado de la utopia, y si algun desventurado intentó realizarla, recibió al punto terrible desengaño. Para algo crió Dios desiguales á los hombres; para algo no dió á la tierra toda la extension que necesitaria, si debieran poseer en ella parte igual todos sus habitantes.

De tener todos los hombres igual derecho á la vida no se sigue que todos tengan igual derecho á conservarla por los mismos medios y á disfrutar de ella en idéntica forma. La posesion de la tierra no es más que uno de estos medios, y por lo tanto el que no puede adquirirla no queda privado por eso de los necesarios para cumplir su fin en el mundo. Y siendo este el límite de la igualdad primitiva, tan encomiada por los demócratas, ni el derecho de primogenitura ni los mayorazgos eran contrarios á ella. Estas instituciones negaban la herencia de ciertos bienes á personas que bajo otro régimen habrian sucedido en ellos, y por lo tanto les privaban de la facultad de subsistir con el producto de tales bienes, pero no sin que las costumbres y las leyes atendieran por otros medios á su subsistencia. Unidas entónces las familias por vínculos más estrechos, no se disolvian como hoy, al morir los padres, sino que quedaban al cuidado y bajo la dependencia del primogénito. Este atendia á la subsistencia y educacion de sus hermanos menores, les daba carrera y les proporcionaba los medios de vivir independientes. Los segundos de las casas nobles tenian además por inveterada costumbre el monopolio de ciertos cargos públicos del Estado y facilidad de obtener los de la Iglesia. No es, pues; cierto que hubiera esencial contradiccion entre las instituciones mencionadas y el principio de igualdad de derecho á la vida.

Nada más diré de esa otra igualdad que con tanto afan buscaban aquellos filósofos, sino que es contraria al órden de la naturaleza. Y si ella es por lo tanto moral y materialmente imposible, ¿para qué ha de aspirar el

legislador á realizarla? La sociedad misma se funda en la desigualdad; todo está ordenado en ella, teniendo en cuenta esta importante circunstancia. En la desigualdad se fundan las grandes instituciones sociales que son obra de los siglos y fruto de la experiencia de muchas generaciones. Por lo tanto, si el legislador ha de proceder lógicamente, si no ha de ponerse en contradicción con la naturaleza y con la sociedad, debe dictar sus mandatos de acuerdo con aquel hecho necesario y primitivo, y en vez de procurar la nivelación de fortunas, como ideal de sus obras, respetar su desigualdad, ó tender cuando más y siempre por medios indirectos, si es posible, á que desaparezcan con el tiempo las grandes desigualdades, que por su enormidad, pueden ser peligrosas.

CAPITULO X

Estado de la propiedad civil en Francia antes de la revolucion de 1789

I

DE LA PROPIEDAD PRIVADA, SUJETA Á VINCULACION

Relajada en Francia la disciplina feudal, no quedaron, sin embargo, libres todas las tierras del reino. Dividido éste, según antes he dicho, en provincias de *derecho escrito* y de *derecho consuetudinario*, era tan diverso en ellas el estado de la propiedad, como diferentes eran sus leyes y costumbres. En todas, no obstante, conservó la propiedad territorial relaciones con el orden político, aunque ménos estrechas, y vínculos más ó ménos fuertes con el estado civil y político de las familias. Bajo el régimen feudal se atribuían los señores el dominio directo de las tierras, lo cual menoscababa gravemente la libertad y la independencia de sus poseedores inmediatos. La monarquía absoluta tuvo la pretension de heredar este importantísimo derecho, y aunque algunos jurisconsultos se lo negaron, muchos lo dieron por sentado y lo tuvieron por incontestable. Galland, autor de un antiguo tratado de feudos, sostuvo la doctrina de que el rey era señor universal de todas las tierras del reino (1). Este mismo principio se consignó en el código de Marillac de 1629 (2), escrito en el reinado de Luis XIII y en un edicto de Luis XIV publicado en 1692. En las instrucciones que

(1) *Traité du Franc alleu*. Ch. 7.

(2) Art. 383.

este último monarca dejó al Delfin, decia: «Todo cuanto se halla dentro de nuestros Estados nos pertenece por el mismo título. Debeis saber que los reyes son señores absolutos, que tienen naturalmente la plena y libre disposicion de todos los bienes, tanto los poseidos por la gente de Iglesia como por los seglares, para usarlos como prudentes ecónomos» (1). Siguiendo la Sorbona esta misma doctrina en una consulta que dirigió al rey, sobre la conveniencia de establecer cierto tributo, le reconocia tambien el derecho de disponer de los bienes de todos sus súbditos. No significaba, en verdad, este señorío supremo la potestad del rey para entrar arbitrariamente en posesion real de los bienes patrimoniales de sus vasallos; pero servia para justificar el impuesto de la *talla*, las exacciones arbitrarias, las confiscaciones, el derecho llamado de *bastardia*, el de *aubaina* y otros, que como estos, eran signo de originaria servidumbre, ó enervaban el capital agrícola en manos del cultivador, ó atentaban á la plenitud de los derechos del dominio.

Así, en cuanto á participar el Estado de la propiedad de las tierras patrimoniales, la única mudanza legal introducida bajo la monarquía absoluta, fué suceder el rey en los derechos de los antiguos señores, que ántes eran soberanos ó poco ménos en sus respectivos lugares. Pero de hecho hubo una gran variacion en el estado de los propietarios, porque estos fueron mucho más libres bajo la dependencia de un rey poderoso y lejano, que bajo la de un señor codicioso y mezquino, con la vista siempre fija sobre todos y cada uno de sus vasallos. Por eso, á pesar de la pretension del monarca á heredar el dominio directo de todas las tierras feudales, su participacion en ellas fué menor y ménos gravosa para el vasallo que la que tuvieran los señores, y la propiedad avanzó tanto hácia su emancipacion de la autoridad pública.

En la misma época no dejó tampoco de depender de la propiedad la condicion política de las personas. Bajo la monarquía absoluta continuó la distincion entre el dominio feudal y el alodial, la tierra noble y la plebeya ó de *rotura*, y siguieron asimismo distinguiéndose las personas en señores y vasallos, nobles y plebeyos, según la calidad de sus propiedades. Explicados quedan en otro lugar el origen y naturaleza de los alodios y de los feudos. Las tierras nobles podian ser alodiales ó feudales. Las tierras de *rotura* eran las que los señores habian dado á censo á sus antiguos colonos despues de abolida la esclavitud, con obligacion de romperlas y cultivarlas.

(1). *Oeuvres de Louis XIV*, t. II, p. 93.

Aunque incorporados á la corona los grandes feudos, quedaron abolidos los privilegios feudales más incompatibles con la unidad de la monarquía, ni los meros propietarios de rotura perdieron tampoco las ventajas inherentes á su estado. Así los nobles tenían grande interés en conservar en sus familias las tierras que preservaban su condicion política. Los vasallos tenían igual interés respecto á las tierras de *rotura* que constituian su patrimonio, tanto más cuanto que conservándolas no se inhabilitaban para mejorar de estado, puesto que podian hacerse nobles adquiriendo tierras de esta calidad, sin dejar la posesion de las otras. Todas estas circunstancias contribuyeron á la estabilidad de las posesiones territoriales independientemente de los mayoraзgos, aún despues que el feudalismo se hallaba en decadencia.

No contribuyeron ménos al mismo resultado las reglas más generales que, no obstante su variedad infinita, establecian las costumbres locales para la trasmision del dominio por causa de muerte. Fuera de las provincias del Mediodia, en las cuales, sirviendo de norma el derecho romano, se trasmitia la propiedad con sujecion á reglas que no tenían por objeto su conservacion en las familias, en casi todas las restantes tendian más ó ménos directamente á este propósito las disposiciones del derecho consuetudinario. En la sucesion hereditaria campeaba por lo general el derecho de primogenitura, el de masculinidad, la distincion entre los bienes troncales y los adquiridos, la legitima reservable á los parientes colaterales, y otras instituciones semejantes.

El derecho consuetudinario llamaba en primer lugar á la sucesion á los hijos del difunto; pero muchas *costumbres* excluian de ella á las hijas, ya en favor tan sólo de los varones nobles, ya sin distinguir entre nobles y plebeyos, en unas partes con limitacion á los bienes hereditarios de calidad noble, y en otras sin limitacion alguna. Ciertas *costumbres* excluian de la herencia solamente á las hijas casadas y dotadas, y otras tambien á las no dotadas. Algunas no contenian ninguna exclusion de esta especie, pero surtian el mismo efecto, obligando á las hijas á renunciar la sucesion cuando otorgaban su contrato de matrimonio y recibian dote de sus padres.

Tambien se entendian de modos muy diversos los beneficios de la primogenitura. Daba este derecho: 1.º A una casa-morada, que el primogénito podia elegir entre las de la herencia. 2.º A cierto espacio de terreno alrededor de la misma casa, llamado el *vuelo del capon*, de cabida de media fanega, poco más ó ménos. 3.º A una porcion de los demás bienes, cuya cuantía era variable segun la costumbre de cada lugar. 4.º A conservar los

papeles de familia, como títulos de nobleza, contratos de matrimonio, particiones y cartas genealógicas, é igualmente los retratos de familia, los manuscritos de los antepasados, los libros anotados al márgen por estos y las insignias de sus dignidades y títulos. Algunas *Costumbres*, como la de París y la de Orleans, atribuían el derecho de primogenitura al hijo mayor, y en su defecto y representacion á sus hijos, y aún á sus hijas; y cuando varios de estos heredaban, debían dividir la herencia de manera que el mayor de ellos sacare de ventaja sobre los demás, los derechos de primogenitura que quedan referidos. Otras *Costumbres* reconocían también estos derechos á la hija mayor, en defecto de hijos varones. En unos lugares no se daba ventaja á los primogénitos, sino en cuanto á la sucesion de los feudos ó entre los nobles; en otros se extendía á toda clase de bienes ó á toda clase de personas.

A falta de descendientes, procuraba el derecho consuetudinario mantener el patrimonio de las familias, llamando á la sucesion por derecho de *troncalidad*, esto es, devolviendo los bienes á la familia del padre ó de la madre, segun su procedencia.

Los parientes colaterales más próximos heredaban en su caso, pero con la diferencia de que en unas provincias se admitía entre ellos el derecho de representacion más ó menos limitado, en otras eran preferidos los varones á las mujeres, en igualdad de grado, para la sucesion de los feudos, ó estaba prohibida la division de estos en la línea colateral, ó debía suceder en ellos el mayor de los varones; y en su defecto la mayor de las mujeres, sin distincion entre nobles y plebeyos. Otras *Costumbres* daban los bienes troncales al pariente colateral más próximo del ascendiente que primero los habia adquirido, ó á su descendiente en línea recta, ó al pariente más próximo del último poseedor en la línea respectiva. El objeto de estas prescripciones era, segun se ve, conservar la propiedad en las familias; y así, aunque las relativas á la exclusion de las mujeres traía origen del servicio militar, propio de los feudos, no cesaron, despues de abolido ó conmutado este servicio, para evitar que las hijas, saliendo de sus familias por el matrimonio, llevarán á otras los bienes de sus antepasados.

La misma tendencia revelaban las disposiciones del derecho consuetudinario relativas á la facultad de testar. El órden de suceder referido era la regla general de las herencias, la cual, si podia alterarse en los testamentos, era como por via de excepcion y no sin graves restricciones. No habia más heredero que el señalado por la ley: si el testador instituía otro diferente, considerábasele como legatario que debía recibir su legado del here-

dero legítimo, único autorizado para apoderarse de la herencia. Así pasaba por axioma de derecho en las provincias del Norte, *que sólo Dios puede hacer un heredero*.

Casi todas las *Costumbres* limitaban en interés de las familias la facultad de disponer por testamento. Según unas, se podía testar solamente de la cuarta parte de la hacienda, de la tercera ó de la mitad, reservándose la parte restante para el heredero legítimo. Según otras, se podía disponer tan sólo de los muebles, de los inmuebles adquiridos de extraños y de una parte de los bienes troncales, variable según los lugares. La *Costumbre* de Berri era la única que permitía testar de los bienes de todas clases, sin limitación alguna. La parte no disponible correspondía en todo caso á la familia ó al pariente llamado por la ley á la sucesión; y si éste era hijo ó descendiente, aquella parte estaba también señalada por ley ó costumbre, y solía consistir en la mitad de lo que debería corresponderle, si el ascendiente no hubiera hecho testamento. La desheredación de los hijos y parientes estaba permitida, mas no sin que el testador alegara justa causa (1). De modo que, según el derecho consuetudinario, había dos legítimas, una de origen germánico, á favor de la familia, como cuerpo colectivo, y sin consideración al interés particular de ninguno de sus individuos, y otra semejante á la romana, destinada exclusivamente á los hijos. En la primera se descubre cierto fin político; en la segunda sobresale el carácter moral y doméstico.

En las provincias meridionales se transmitían también los feudos por derecho de primogenitura, aunque en ellas eran pocos los bienes de esta especie. En cuanto á todos los demás bienes, regía el derecho romano, y sin embargo, respecto á los de origen plebeyo, se arrogaron los padres la facultad de legarlos en su totalidad ó en su mayor parte á los primogénitos, y el tiempo sancionó esta costumbre. Así, aun en estas provincias menos feudales, se admitió, aunque con limitaciones, la facultad de disponer por testamento del modo más adecuado para mantener perpétuamente el patrimonio de las familias.

Al lado de las propiedades libres, alodiales ó feudales, sujetas por tantos vínculos á intereses colectivos, crecían y se generalizaban los mayorazgos, acumulándose y perpetuándose por su medio en las familias nobles grandes

(1) Taulier.—*Theorie raisonnée du code civil*, vol. III, tit. I. Pothier *Traité de successions*, ch. 2.—Argou, *Institutions du droit français*, lib. 2, ch. 25.—Laferrière, *Histoire du droit français*, lib. 2, ch. 10.

riquezas. Celosos los reyes del poder de estas familias, no eran favorables á una institucion que tanto lo aseguraba y engrandecia, pero tampoco osaban abolirla. Limitáronse, como he dicho en otro lugar, á modificarla, restringiendo los plazos de las vinculaciones, pero ni siquiera lograron de hecho este resultado las Ordenanzas reales promulgadas sobre la materia en el siglo xvi, ni la misma Novela de Justiniano, que señalaba el término de las sustituciones. Pudiendo éstas renovarse cada vez que terminaban, muchas familias usaron de esta facultad, y así se perpetuaron en ellas los bienes vinculados. Además la Ordenanza de 1560, que prohibía pasaran del segundo grado las sustituciones, no se llevó á efecto en algunas provincias hasta muchos años despues de publicada. En Flandes y en Artois no rigió hasta 1611: Franco-Condado y Rosellon no la obedecieron hasta 1747; y así aún sin renovarlos, se conservaron en muchas partes los mayorazgos.

II.

ESTADO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL.

Justamente con las propiedades vinculadas y las de dominio restringido, existian las de los pueblos y comunes, destinadas unas al aprovechamiento general de los vecinos y otras á sufragar con sus rentas y productos los gastos de la administracion municipal. Desde el establecimiento del feudalismo y aún ántes, poseian ya los pueblos en propiedad ó en usufructo, bosques, prados, eriales y otros terrenos de uso comun. Procedia la mayor parte de estos bienes de mercedes otorgadas por los señores feudales, el rey ó los monasterios al comun de sus vasallos, para estimularles á mejorar el cultivo y para fomentar la poblacion de sus campos. Otras de las mismas propiedades traian más remoto origen. En las comarcas cuyos habitantes conservaron su libertad y su hacienda, mediante el pago de ciertos tributos señoriales, hubieron de respetarse las propiedades que antiguamente se habian disfrutado como comunes. Algunos de ellos traian tambien su origen de herencias ó legados ó de adquisiciones á título oneroso costeadas con el producto de repartos voluntarios, de multas, confiscaciones y de otros arbitrios locales (1). Los terrenos baldios y vacantes se reputaban propiedad del señor, en virtud de la antigua jurisprudencia que le atribuia el dominio de todas las tierras de la demarcacion señorial, que él ó sus antecesores no hubieran expresamente enajenado. En

(1) Charl. Dupin, *Histoire administrative des communes de France*, pág. 175.

compensacion de este derecho pesaban sobre el señor no pocas obligaciones, como la de pagar el sueldo de los jueces, costear las cárceles y juzgados, mantener á los expósitos y sufragar todos los demás gastos de la administracion de justicia.

Los bienes comunales se reputaban tan inalienables como los de la Iglesia. Algunos pueblos, que abrumados de deudas y de impuestos enajenaron sus propiedades á vil precio, durante las turbulencias anteriores al reinado de Enrique IV, fueron autorizados en 1600 por este monarca, para rescatarlas, devolviendo á los compradores el precio desembolsado en el término de cuatro años. Enajenaciones verificadas con iguales circunstancias durante los reinados de Luis XII y Luis XIV, por pueblos de las provincias de Champaña y Picardía, fueron tambien revocadas en 1659, con la obligacion de reembolsar el precio dado en el término de diez años. Este mismo privilegio se hizo despues extensivo á otros muchos pueblos.

La propiedad comunal era objeto entre tanto de fraudes y usurpaciones graves por parte de los señores y de los vecinos poderosos. En 1579 mandó el rey hacer pesquisa contra los que hubieran sustraído titulos ó documentos para apoderarse de bienes comunes, y declaró sin efecto las transacciones y concordias arrancadas por los señores á sus vasallos con igual objeto. En 1667 fueron autorizados todos los pueblos para recuperar en el término de un mes, y sin ninguna formalidad prévia, los inmuebles comunales enajenados, arrendados ó acensuados desde 1620, con reembolso del precio en diez años.

Ciertas costumbres antiguas, fundadas en el origen señorial de la mayor parte de las tierras comunales, permitian reducir la extension de estas, aunque no sin resarcir á veces de su importe á los pueblos. Los señores tenían desde tiempos muy remotos la facultad de retraer para sí la tercera parte de los montes y prados comunales que ellos ó sus antecesores hubiesen concedido á los pueblos por título gratuito, debiendo reputarse tal el de la adquisicion, siempre que no se probara lo contrario. Cuando los señores no habian concedido el dominio sino sólo el uso comun de tales tierras, podian reducirlo á una parte de ellas, recuperando la libre disposicion de todas las restantes. Mas como el ejercicio de estos derechos hubiera dado lugar á graves abusos, anuló el rey en 1667 todas las particiones de terrenos de propiedad comunal, verificadas en los treinta años anteriores entre los señores y los pueblos; si bien al poco tiempo se declararon subsistentes, siempre que se probase que las adquisiciones primitivas se habian verificado á título gratuito, y que las dos terceras partes del terreno público dejado

al aprovechamiento comun, eran suficientes para su objeto. En cuanto á la division de los terrenos comunes, cuya propiedad conservaban los señores, no hubo de hacerse novedad alguna, hasta que á principio del último siglo se substituyó la antigua costumbre con la de descargar una parte de los mismos terrenos de toda servidumbre de aprovechamiento, pasando la otra parte en dominio pleno á la comunidad que ántes tuviera el uso.

Tal era en Francia el estado de la propiedad á mediados del siglo XVIII. El régimen feudal se hallaba profundamente quebrantado; pero los vestigios que de él quedaban en las ideas y en las costumbres, en los usos y fueros particulares respecto á herencias y sucesiones, en los mayorazgos y en las propiedades municipales, daban todavía al dominio de la tierra cierta estabilidad favorable á los intereses colectivos de clase y de familia. Para destruir por completo esta organizacion vigorosa y sustituirla con otra en que predominara el principio contrario de libertad é individualismo, se necesitó primero una contienda apasionada de doctrinas, y después un terrible sacudimiento político.

CAPITULO XI

Estado de la propiedad civil en Francia durante la revolucion de 1789.

I.

VICISITUDES DE LA PROPIEDAD PRIVADA EN ESTE PERÍODO.

Las doctrinas anteriormente expuestas comenzaron á dar fruto ántes de la revolucion de 1789. Luis XV promulgó en 1749 su famoso edicto prohibiendo á las manos muertas adquirir bienes raíces. Turgot, ministro de Luis XVI, tuvo entre otros proyectos, el de abolir las corveas y los derechos feudales más gravosos, regularizar el impuesto del clero y la nobleza, redimir las rentas feudales, sin perjuicio de los derechos de propiedad, y establecer el comercio interior de granos; pero como hombre más versado en libros que en negocios, no logró llevar á efecto sino una parte de sus planes, y esos con tan poco acierto y fortuna, que le costaron á él el ministerio y al país una grave sedicion. Su decreto declarando libre el comercio interior de granos provocó grandes tumultos y fué revocado: el que abolía las corveas, substituyéndolas con un impuesto en metálico, sufrió igual suerte por la obstinada oposicion de los Parlamentos. Sin embargo, el mismo Luis XIV suprimió por completo ó redujo considerablemente otros dere-

chos feudales, muy onerosos, tales como el de *talla* (1), el de *feudo franco* (2), el de *mano muerta* (3), el de *milicia*, el de *gabala* y el de *ayudas* (4). Hizo aún mucho más, que fué repartir en algunas provincias, entre los vecinos de los pueblos las tierras de aprovechamiento comun, dando á cada familia un lote igual, con obligacion de pagar un módico censo ó sin ella (5).

Pero cuando quedaron radical y definitivamente abolidas todas las instituciones feudales de Francia, fué en la sesion memorable que la Asamblea Constituyente celebró en la noche del 4 de Agosto de 1789. Apenas estalló la revolucion, una gran parte de los labradores y de los villanos rehusaron el pago de los derechos feudales, persiguieron á sus antiguos señores, incendiaron sus castillos, quemaron sus títulos de propiedad y cometieron atroces venganzas. Desde el 14 de Julio de aquel año creció aún más la agitacion y fué universal el desórden. El gobierno se presentó á la Asamblea para darle cuenta del estado de la nacion y pedirle los medios de remediarlo.

Entre los enemigos del antiguo régimen cundia la opinion de que siendo la causa del mal el agravio que las antiguas instituciones feudales inferian á los pueblos, era menester suprimirlas ó modificarlas radicalmente. Aun los nobles, partidarios desinteresados de las reformas, participaban de esta opinion. Dos de ellos, animados de un alto espíritu de abnegacion y de desinteresado patriotismo y rebotando de entusiasmo, propusieron la abolicion inmediata de todos los derechos feudales. Este sublime ejemplo excita el amor propio de unos, empeña el desinterés y la generosidad de

(1) Impuesto que exigia el señor á sus vasallos en uso de su soberania. En unas provincias se imponia sobre las propiedades, y se llamaba *talla real*; en otras sobre las personas y por cabezas; y en todas habia lugares, corporaciones, individuos y familias exentos por privilegio de satisfacerlo.

(2) Dábase este nombre (*fran fief*) al tributo personal que se exigia al poseedor plebeyo de feudo ó tierra noble.

(3) Derecho señorial en cuya virtud quedaban reducidas ciertas personas á la condicion servil.

(4) Estas eran contribuciones indirectas muy gravosas, que traian su origen del feudalismo.

(5) Así se ordenó en 1762 en cuanto á los pueblos de la provincia de *Trois Evéchés*: en 1771, 1773 y 1777 respecto á los de las *Generalidades* de Auch y de Pau; en 1774 respecto á los pueblos del Ducado de Borgoña, del Maconado, del Auxerrois y de los países de Gex y de Bugey; en 1777 respecto á las provincias francesas de Flandes; y en 1779 respecto á la provincia de Artois. (Daloz. *Jurisprud. genér. V. Commune*, n. 2, 176.

otros, y haciendo cada cual alarde de su amor á la pátria, todos á la vez renuncian y sacrifican sus privilegios personales en aras del interés comun. Entónces los nobles abandonan sus prerogativas y derechos feudales, el clero sus exenciones, las ciudades sus privilegios, y hasta algunos, favorecidos con pensiones del Estado, las ceden en beneficio del Tesoro. La Asamblea parecia embriagada de entusiasmo por la causa del pueblo.

En aquella noche célebre quedó acordada la abolicion de la servidumbre, de las jurisdicciones señoriales, del monopolio señorial de la caza, de los gremios, de la venalidad de los cargos públicos y de las pensiones de gracia. Los derechos de señorío y de diezmo fueron al mismo tiempo declarados redimibles; quedó tambien decretada la igualdad de los impuestos, y la de los ciudadanos para el ejercicio de los cargos públicos; los privilegios de ciudades y provincias fueron suprimidos para siempre.

La conducta de la nobleza en aquella ocasion crítica es más digna de admiracion, por los elevados sentimientos que la inspiraron, que capaz de resistir un exámen imparcial y severo. Pasado el primer arrebato de la noble pasion que dominó á la Asamblea en aquella sesion memorable, advirtieron los hombres sensatos que los legisladores habian procedido con alguna ligereza y dejádose arrastrar por su amor al bien más léjos de lo que permitia la justicia y de lo que reclamaba la conveniencia pública. Muchos de los derechos feudales suprimidos constituian una propiedad que podria ser perjudicial para la nacion, pero que estaba desde tiempo inmemorial reconocida por las leyes. Además, los diputados habian recibido de sus comitentes un mandato expreso y circunstanciado, comprensivo de todos los agravios públicos que en su concepto necesitaban remedio, y entre ellos no figuraban los derechos feudales; ¿tendrian facultad para suprimirlos repentinamente y sin prévia indemnizacion de sus poseedores, una vez admitida, como lo estaba entónces, la doctrina del mandato imperativo? ¿Pudieron los nobles, que eran miembros de la Asamblea, despojar á los de su clase que no lo eran, de los privilegios que habian conquistado sus mayores, derramando su sangre por la pátria?

Estas consideraciones hubieron de originar algunas dificultades al tiempo de reducir á leyes y preceptos prácticos los acuerdos generales del 4 de Agosto. Sin embargo, el amor á las reformas dispó al fin los escrúpulos de la legalidad, y la justicia estricta cedió, como era natural, al influjo poderoso de las ideas políticas dominantes. Fueron, pues, abolidos los derechos feudales con perjuicio mayor ó menor de sus poseedores, segun era e que ellos ocasionaban al país, sin tenerse en cuenta para nada la legiti-

dad de su adquisicion. Los servicios pecuniarios en que habian sido conmutados los personales que ántes prestaran los vasallos por razon de sus tierras, y los que procedian de la antigua servidumbre de los plebeyos, fueron abolidos por entero y sin compensacion alguna. Tambien acabaron del mismo modo los derechos que se pagaban por la venta y por la sucesion hereditaria de las propiedades feudales y los monopolios de caza. Sólo se respetó el dominio directo de los señores en los prédios enfitéuticos; pero si desde luego no se otorgó á los colonos gratuitamente la plena propiedad de ellos, se les facultó para obtenerla, aun contra la voluntad de los señores, mediante la redencion del cánón.

En la abolicion del diezmo no procedió la Asamblea con ménos pasion é injusticia. Lo acordado el 4 de Agosto fué redimirlo; mas no satisfechos con esto los innovadores, decidieron suprimirlo sin compensacion alguna á cargo de los propietarios que obtuvieran el beneficio. Para salvar esta inconsecuencia se supuso que la redencion se verificaria, haciéndose cargo el Estado de la manutencion del culto. En vano demostró el abate Sieyes que la redencion verificada de esta manera cargaba injustamente á la nacion con una deuda que debia pesar tan sólo sobre los propietarios, y equivalia á regalar á estos el diezmo á costa de todos los demás contribuyentes. La mayoría de la Asamblea decretó la abolicion pura y simple, si bien ordenando que mientras se hacia cargo el gobierno del mantenimiento del culto, se continuara pagando el abolido impuesto. Prevencion inútil: los pueblos, acostumbrados ya á la licencia, se negaron á satisfacer más tiempo un tributo que sus legisladores condenaban y abolian por opresor é injusto.

Mas apenas quedaron rotos los últimos vínculos feudales de la propiedad, la experiencia ofreció un terrible desengaño á los cándidos políticos que habian apoyado esta reforma como medio de calmar la agitacion del pueblo y prevenir nuevos desórdenes. Los revoltosos, más bien alentados que satisfechos, siguieron incendiando los castillos y talando los campos recién libertados de la feudal servidumbre. Derramados por todas las provincias, cometieron en ellas tantos excesos, que el gobierno tuvo que acudir de nuevo á la Asamblea para pedirle, no ya medidas preventivas y benévolas concesiones, sino medios eficaces de represion severa; y la Asamblea, que pocos dias ántes habia creído conjurar la tempestad con su condescendencia, tuvo que reconocer tácitamente su error, decretando contra los revolucionarios el empleo de la fuerza (1).

(1) Thiers. *Histoire de la Revolution française*, ch. 3.

Abolido el dominio feudal, quedaban subsistentes los vínculos de la propiedad con la familia por medio de las sucesiones y de las herencias, y la revolucion necesitaba tambien desatarlos para ser consecuente en sus principios. Comenzó, pues, la Asamblea Constituyente estas reformas en 8 de Abril de 1791, aboliendo, entre herederos *ab intestato*, toda desigualdad procedente de *Costumbres* provinciales, de la diferencia de sexos ó de la primogenitura. Luégo trató de establecer la misma igualdad de derechos entre los herederos testamentarios, con lo cual puso naturalmente en cuestion la facultad de testar. El diputado Cazales, buscando en ella un contrapeso adecuado á la igualdad de derechos en la participacion legítima, propuso la adopcion en todo el reino de las leyes romanas sobre la materia. Mirabeau, celoso partidario del principio de igualdad, no queria dar al padre la facultad de disponer de más de la décima parte de su hacienda, y en todo caso, no para favorecer con ella á alguno de los hijos. «¿No tiene bastante la sociedad, decia, con los caprichos y pasiones de los vivos, sino que ha de sufrir tambien las pasiones y los caprichos de los que ya no existen? ¿No tiene bastante con sufrir las consecuencias del despotismo testamentario de tantos siglos, sino que hemos de gravarla tambien con las de los testamentos futuros que revelen voluntades extravagantes ó desnaturalizadas? ¿No hemos visto multitud de testamentos respirando orgullo ó envidia, un injusto despego ó una predileccion inmotivada? La ley anula los testamentos llamados *ab irato*, y sin embargo, acata y respeta estos otros que deberian llamarse *a decepto*, *a morbo*, *ab imbecili*, *a delirante*, *a superbo*» (1). Robespierre, más consecuente con los principios democráticos, opinó por la absoluta prohibicion de testar. Otros diputados de fracciones diversas juzgaban que era bastante reducir en el padre de familia la facultad de testar á la cuarta parte de la herencia. Pero la Asamblea no se atrevió entónces á resolver cuestion tan árdua, y se limitó á votar la ley sobre particiones *ab intestato*, ántes citada, y otra prohibiendo á los testadores imponer á sus herederos y legatarios condiciones coactivas de su libertad en materias religiosas, ó de eleccion de estado, profesion ó empleo (5 Setiembre 1791).

Digno es de notarse que una Asamblea tan decidida á libertar la propiedad de las trabas y vínculos del antiguo régimen, no pensara desde luego en la abolicion de los mayorazgos. Al disolverse la Constituyente lle-

(1) Discurso leído en la tribuna nacional por Talleyrand, algunas horas despues de la muerte de su autor Mirabeau.

vaba Francia cerca de tres años de revolucion y, sin embargo, todavía duraban aquellas instituciones y la facultad de establecerlas. La *Asamblea legislativa* fué la que las suprimió por completo en 25 de Agosto de 1792.

Pero á la *Convencion nacional* era á la que estaba reservado llevar, si no á las últimas, á muy lejanas consecuencias las nuevas doctrinas acerca de la propiedad. Después de haber confirmado esta Asamblea la abolición de los mayorazgos, prohibió en 7 de Marzo de 1793 los testamentos y aun las donaciones entre vivos en línea recta. Pareciéndole luego demasiado absoluta esta prohibición, en 26 de Octubre del mismo año permitió disponer de la décima parte de la herencia á los que tuvieran herederos legítimos en línea recta, y de la sexta á los que tuvieran tales herederos en línea transversal, aunque prohibiendo en uno y otro caso legar la parte disponible á alguno de los mismos herederos. Lo más grave de este decreto fué haberle dado fuerza retroactiva, porque en su virtud quedaron anuladas todas las disposiciones testamentarias y entre vivos, otorgadas por los padres en perjuicio de los hijos, y por todos los testadores, en menoscabo de sus herederos presuntos, desde el 14 de Julio de 1789. También se dió entónces efecto retroactivo, desde esta fecha, al decreto ántes referido de 1791 que igualaba á los herederos *ab intestato*; y para este fin debían rehacerse todas las particiones otorgadas, contra lo ahora prescrito, en los cuatro años anteriores.

A esta violacion gravísima de los derechos de propiedad siguió todavía otra no ménos trascendental y repugnante. En 6 de Enero de 1794 anuló la Convencion todos los testamentos cuyos autores vivian aún ó habian muerto después del 14 de Julio de 1789; mandó hacer, respecto á los fallecidos, nuevas particiones en las cuales trajeran los herederos á colacion todos los bienes que hubieran recibido por donacion entre vivos de los testadores aunque hubieran sido dados con expresa y legítima dispensa de colacionarlos: abolió la antigua diferencia entre bienes *troncales* y *adquiridos*: llamó á la sucesion de los que morian sin descendientes á sus hermanos y sobrinos carnales, con preferencia á los ascendientes y con derecho de representacion ilimitada; y dió, por último, efecto retroactivo á todas estas prescripciones desde el 14 de Julio de 1789, fecha de la revolucion (1).

Este fué el último triunfo que en la esfera de la legislacion alcanzaron los que en nombre de la libertad, pretendian dar á la propiedad de la tierra una organizacion nueva. Y creian aquellos ilusos hacer triunfar todas las

(1) Taulier, *Theorie du Code civil*, liv. 3, t. 1.

libertades individuales cuando, so pretexto de restablecer la igualdad entre los ciudadanos y de favorecer la division de la riqueza, proscribian la facultad de testar y atentaban contra el sagrado derecho de dominio, adquirido legitimamente por sucesion, herencia ó donaciones desde 1789, y cuando lo que realmente hacian era una aplicacion exagerada y funesta de las mismas doctrinas que, bajo el régimen feudal, limitaban los derechos de la propiedad privada. Tan cierto es que las ideas extremadas se tocan y confunden, así en la region de las teorías como en la de los hechos. Lo único que faltó á los revolucionarios de 1795 para coronar su obra fué decretar la abolicion pura y simple de la propiedad en nombre de las doctrinas que declaraban su libertad y su independencia como un derecho imprescriptible y una necesidad económica inexcusable.

Pero si la ley no llegó á este extremo, no faltó una escuela política que lo sostuviera y que sólo por falta de tiempo no consiguió realizar sus perniciosas teorías. Robespierre tenia preparada una *Declaracion de los derechos del hombre*, que trató de consignar en la Constitucion de 1792, en la cual se decia que la propiedad es el derecho de todo ciudadano á «disfrutar la porcion de bienes que le asegura la ley» (1); es decir, un mero usufructo tansitorio sujeto á la voluntad de los legisladores. Pensaba, como Saint Just, que quien se mostraba enemigo de su país, esto es, del régimen del terror que entónces dominaba, no debia ser propietario en su territorio (2). Trataba de empobrecer á los ricos haciendo decretar el *impuest-progresivo*, que por fortuna no llegó á tener efecto (3), y proclamando el derecho al trabajo (4), entendido de cierto modo. Marat abogó enérgicamente por la ley del *máximun*, que ponia un limite á la adquisicion de tierras y de capitales. Babeuf predicó francamente el *comunismo* por medio de su periódico *El Tribuno del Pueblo*. «El único modo, decia el número 35 de este diario, de asegurar la subsistencia á todos los ciudadanos, es suprimir la propiedad particular, obligar á cada uno á depositar en el almacen comun el fruto en especie de su talento ó su industria, y que la Administracion lo distribuya en proporciones iguales y á domicilio.» A tal extremo de esclavitud y abyeccion individual querian reducir á los hombres los que habian hecho una gran revolucion por la libertad, la independencia y la dignidad del individuo.

(1) Lamartine, *Hist. des Girondins*. Tomo V, pág. 388.

(2) Rapport au Comité de Salut publique, 8 ventose an II.

(3) Decret de 18 Mars 1793.

(4) Véase la declaracion de derechos de Robespierre, arriba citada.

II.

DESAMORTIZACION DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL.

Una revolucion que se habia propuesto extirpar hasta los últimos gérmenes del feudalismo y acabar con toda especie de amortizacion no podia ménos de atacar y suprimir la propiedad de las corporaciones municipales. Siendo feudales los derechos que aún conservaban los señores sobre los bienes de los pueblos, uno de los primeros actos de la revolucion fué abolirlos y adjudicar á los mismos pueblos una multitud de propiedades y derechos que se suponian usurpados por los señores. Así, en aquel primer periodo de la revolucion, parecia que el nuevo régimen, léjos de ser contrario á la propiedad municipal, tendia á fomentarla puesto que la favorecia aún á costa de la justicia y de los derechos consagrados por el trascurso de los siglos. Con este objeto dictó la Asamblea Constituyente varias leyes. En 1790 revocó la facultad de los señores para rescatar la tercera parte de las tierras comunes, cedidas por ellos gratuitamente á los pueblos, y todos los repartimientos de terrenos verificados en virtud de esta facultad, sin sujecion á la Ordenanza de 1669, ántes mencionada. En 15 de Abril de 1791 se declaró á los pueblos la absoluta propiedad de las tierras baldías y vacantes, no dejándose á los señores, á quienes ántes correspondia esta propiedad, más que la de los terrenos de que hubiesen tomado posesion pública y solemne ántes de 4 de Agosto de 1789. No satisfecha la Asamblea con estas disposiciones, adoptó en 28 de Agosto de 1792 la de extender la revocacion de los repartimientos del tercio de los terrenos comunes, verificados sin ajustarse á la Ordenanza de 1669, á los ejecutados con sujecion á ella, la de adjudicar á los pueblos, no sólo los baldíos, de que los señores no hubieran tomado posesion pública ántes de 1789, sino tambien todos aquellos que, aunque no hubieran sido nunca comunales, estaban poseidos por señores que no podian justificar su dominio con títulos fehacientes ó posesion de cuarenta años. De este modo se hicieron de propiedad comunal la mayor parte de las tierras baldías existentes y las que en época no lejana habian dejado de serlo para entrar en cultivo. Al mismo tiempo se derogaron todas las Ordenanzas, providencias y edictos publicados desde 1669 disponiendo ó autorizando para disponer, con perjuicio de los pueblos, de las tierras en que éstos tuvieran algun aprovechamiento comun: se facultó á las municipalidades para reivindicar las propiedades ó usufructos que hu-

bieran perdido desde la misma fecha por consecuencia del régimen feudal, y las que en cualquier tiempo hubieran pasado de ellos á los señores y éstos poseyeran sin justificar su adquisicion por título escrito y causa onerosa; y se ordenó, por último, una revision general de todos los contratos en cuya virtud habian conmutado los señores en dominio pleno, sobre porciones limitadas de tierras, la antigua servidumbre de aprovechamiento comun que ántes pesaba sobre la totalidad de las feudales. La Convencion nacional, llevando aún más léjos su saña contra la nobleza, declaró en 10 de Junio de 1793 que todas las tierras baldías podian ser reivindicadas por los pueblos, aunque hubieran estado poseidas por señores más de cuarenta años, y aunque éstos las hubieran adquirido por cualquier título feudal ú otro que no fuera un contrato oneroso y auténtico: con cuya declaracion, con la interpretacion latísima de las palabras *aprovechamientos comunes* y *terrenos baldíos*, y con poner á los nobles fuera de la ley, para que no pudieran defenderse en los tribunales, quedó consumado el despojo de los antiguos propietarios feudales (1).

Así quedaron satisfechas en este punto las exigencias políticas de la revolucion, pero no sus doctrinas económicas. ¿Qué iban á hacer los pueblos de sus propiedades, tan aumentadas ya con el botin del feudalismo? Acumulada en sus manos tanta riqueza, hacíase casi improductiva y ofrecia todos los inconvenientes de la amortizacion. Era menester, por lo tanto, restituirla al comercio. Así, después de haber despojado á los antiguos propietarios feudales en interés de los pueblos, se cayó en la cuenta de que era menester despojar á los pueblos en interés de la nacion.

Para determinar la forma de esta segunda expropiacion, atendieron los legisladores revolucionarios á la diferencia que, por razon de su uso, existia entre los bienes municipales. La Asamblea Constituyente, en 14 de Agosto de 1792, decretó en principio el reparto, entre los vecinos, de los bienes de aprovechamiento comun; mas esta operacion no tuvo efecto hasta que en 10 de Junio de 1793 determinó la Convencion nacional el modo de verifícarla. Una ley de esta fecha, llamada con razon la ley agraria de la revolucion francesa, permitió dividir en lotes iguales todas las tierras comunes, excepto los montes, y mandó distribuirlas entre los vecinos respectivos, si estos acordaran la division, no por familias, sino por cabezas. Las mujeres, los niños, los criados, todos los habitantes, en fin, menos los seño-

(1) Dalloz. *Jurisprud. gener. V. Commune.* t. 6, ch. 3, art. 1, 2, 3, 4.

res que hubiesen retraído el tercio de los terrenos comunes, tenían iguales derechos en este universal repartimiento.

Difícilmente podía imaginarse una medida más conforme al espíritu de la revolución, ni que mejor cumpliera los deseos de los economistas de la época acerca de la subdivisión, generalización y circulación de la propiedad. Con ella, no sólo quedaba desamortizada la única parte de la riqueza inmueble que aún no lo estaba, sino que iban á crearse, como por encanto, muchos millones de pequeños propietarios cultivadores, prontos á realizar la fábula de la Edad de Oro. Y para que estos enriquecidos ciudadanos no abandonaran sus dominios ántes de comprender las ventajas de la propiedad, lleno el legislador de paternal solicitud, les prohibió enajenarlos en el término de diez años. Por efecto de esta ley, hasta las orillas del mar se repartieron entre los vecinos de muchos pueblos á título de terrenos baldíos. En fin, tales abusos hubieron de cometerse que la Convención nacional, que no era por cierto asustadiza, se aterrorizó de su propia obra.

Repartidos los bienes de aprovechamiento común sólo faltaba disponer de los de propios, cuyas rentas se empleaban en los gastos municipales. La Convención nacional verificó este despojo declarando extinguidas en 24 de Agosto de 1793 todas las deudas de la república á favor de los pueblos, y convirtiendo en deuda nacional una parte de la que pesaba sobre éstos. Al mismo tiempo adjudicó al Estado todos los bienes municipales que no fueran de uso común, y cuyo repartimiento acababa de decretarse, y mandó venderlos en la misma forma que los bienes nacionales (1).

Con estas leyes terminó la revolución su obra desamortizadora. Fuera de los montes no quedaba ya en Francia una pulgada de terreno que no pudiera circular en el comercio y subdividirse y acomodarse á todas las necesidades del individuo. Los bienes del clero, los de beneficencia, y aún los de los nobles, habían sido ya confiscados y en gran parte enajenados á vil precio: los feudales y los de mayorazgo eran libres de toda carga y restricción á favor de las familias: los municipales iban á pasar inmediatamente al dominio privado. Era, pues, completo el triunfo del principio individualista sobre el social en la forma y estado del dominio; mas un predominio tan absoluto no podía ser tampoco muy duradero.

(1) Dalloz, obr. cit., lug. cit., t. 6, ch. 5, art. 1, y ch. 1, pár. 2.

CAPITULO XII

Vicisitudes de la propiedad civil en Francia después de la revolucion de 1789.

I.

ESTADO DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y RESTABLECIMIENTO DE LOS MAYORAZGOS.

Los excesos de la anarquía produjeron al fin la reaccion que es siempre su consecuencia. Amanzada la sociedad de disolverse si seguía por el camino en que la llevaban sus legisladores y jefes, el terror, el cansancio, y los desengaños produjeron un cambio favorable en la dirección de los negocios públicos. Las doctrinas revolucionarias practicadas no habían producido hasta entonces sino desastres, ruinas y escarmientos. Este era un hecho notorio, é incuestionable, que por más que trataran de desfigurarlo los interesados en la continuación del régimen del terror, había de surtir su efecto. Los revolucionarios de buena fé y de doctrina hicieron alto un momento para revisar las que profesaban acerca de la propiedad, y advirtieron que sus teorías eran demasiado absolutas y por lo ménos cuestionables. La nación tocaba por sí misma las injusticias, los abusos y las dilapidaciones á que daban lugar las nuevas leyes, que habían privado de sus propiedades á los hospitales y á los pueblos, abolido la facultad de testar y revocado los actos ejecutados anteriormente en virtud de ella. Así los unos consintieron fácilmente en retroceder un tanto hasta colocarse en lo que estimaban el justo medio, mientras que la otra los impelia en la misma dirección hasta mucho más allá del punto en que ellos habían resuelto detenerse.

La reaccion contra los principios anárquicos que habían trastornado la constitucion de la propiedad comenzó por una ley de la misma Convencion (24 Abril 1795), suspendiendo todos los procedimientos intentados para aplicar, con efecto retroactivo, la de 6 de Enero de 1794, sobre anulacion de testamentos, referida anteriormente. Dado este primer paso, y vencidos en la revolucion termidoriana los escasos partidarios que aún quedaban del

régimen del terror, en 26 de Agosto de 1795 quedó enteramente abolido el efecto retroactivo, no sólo de la ley últimamente citada, sino de la de 26 de Octubre de 1793, que fijaba la legítima de los hijos y la de los parientes. Algo más duraron las leyes relativas á la testamentifaccion, pero en 25 de Marzo de 1800, bajo el consulado de Bonaparte, se restableció la facultad de testar sobre bases más ámplias en beneficio de la menguada autoridad paterna y del quebrantado espíritu de familia. Entónces se permitió á los testadores disponer libremente de la cuarta parte de su herencia, si dejaban de uno á tres hijos; de la quinta parte, si dejaban cuatro hijos; de la sexta, si dejaban cinco, y así sucesivamente. En cuanto á los que no tuvieran descendientes, se estableció que pudieran disponer de la mitad de su herencia los que dejaran ascendientes, hermanos ó sobrinos carnales, y de las tres cuartas partes los que dejaran sólo tíos, primos ó sobrinos, hijos de éstos. En la misma ley se revocó la prohibicion de legar la cuota disponible por testamento á alguno de los herederos con derecho á legítima (1).

El Código civil, promulgado en 1801, resolvió todas las cuestiones relativas á la propiedad por transacciones prudentes entre los diversos intereses comprometidos en ellas, á saber, el del individuo, el de la familia y el del Estado. Inspirándose á la vez sus autores en los principios revolucionarios del 89, en el derecho romano y en el consuetudinario, aplicaron ya los unos ó ya los otros, procurando armonizarlos con las costumbres y necesidades de la época, las cuales, si por una parte reclamaban una vigorosa reorganizacion de los elementos sociales quebrantados y dispersos, no toleraban tampoco la pura y simple restauracion del antiguo régimen. Justo es confesar, sin embargo, que los autores del nuevo código no lograron mantener siempre igual el fiel de la balanza entre estas diversas tendencias.

Triunfo fué del principio individualista la confirmacion de las leyes revolucionarias que abolieron toda diferencia entre las tierras *nobles* y las de *rotura*, los bienes *troncales* y los *adquiridos*, los hijos y las hijas, los primogénitos y los demás hijos (art. 732). Al mismo principio debe atribuirse la prohibicion de desheredar á los hijos, pues aunque parece dictada por un interés de familia, cede en menoscabo de la autoridad paterna, cuyo mantenimiento y prestigio es el principal interés de la familia considerada como elemento social. No debe confundirse el interés individual de los hijos con el colectivo de los linajes, que no siempre hay entre ámbos entera conformidad. Interesa á los hijos que no quede su legítima al arbitrio de

(1) Taulier. *Theor. du Cod. civ.* liv. 3, t. 1.

un padre desnaturalizado; pero lo que conviene á la familia, como entidad social, es que el padre no carezca de los medios necesarios para conservar en ella la union y la disciplina.

Tambien predominó el interés del individuo sobre el de la familia en las disposiciones del Código que en las sucesiones *ab intestato*, limitaron el derecho de representacion, en la línea colateral, á los descendientes de los hermanos (art. 742), llamaron á la sucesion, por falta de descendientes, á los mismos hermanos en union con los padres (art. 751), y en defecto de éstos á los hermanos solos con preferencia á los abuelos, y mandaron dividir la herencia entre los ascendientes de diversas líneas por porciones iguales, sin tener en cuenta la procedencia de los bienes (art. 746). Pudiera aún citar otras varias disposiciones inspiradas por el mismo principio, entre ellas la separacion de bienes entre los cónyuges, tan opuesta á la autoridad marital y al espíritu de familia.

Concesion al interés de ésta fué sin duda el señalamiento de una legítima á los hijos y á los ascendientes, y el permiso dado al padre para testar de su cuota disponible á favor de cualquiera de sus herederos legítimos (artículos 913 y 919), y aumentar por lo tanto su haber, lo cual destruía radicalmente la igualdad entre los herederos que habian pretendido establecer las leyes de la revolucion y proporcionaba á la autoridad paterna medios saludables de gobierno. Igual objeto tuvieron las disposiciones que llamaban á la sucesion intestada á los parientes colaterales hasta el duodécimo grado ántes que á la viuda del difunto (art. 755): las que en la misma sucesion atribuian al hijo legítimo una porcion hereditaria mucho mayor que al hijo natural que con él concurriese, y la que, á falta de hijos legítimos, no llamaba á los naturales sino en concurrencia con los ascendientes y colaterales, cuando les hubiese (art. 755).

Al interés del Estado no concedió el Código más limitaciones del dominio que la expropiacion por causa de utilidad pública con indemnizacion prévia (art. 545), el impuesto y ciertas servidumbres originadas por la situacion de los prédios (art. 649). Ni el estado político de las personas, ni sus relaciones con el Estado volvieron á depender de la propiedad, por más que se subordinara á ella el ejercicio de ciertos derechos ó funciones públicas. Todos los propietarios fueron iguales ante la ley, mas no sin que por mucho tiempo haya continuado siendo la cuantía de la propiedad el criterio de la capacidad política.

Tambien tuvieron cabida en el Código las leyes revolucionarias que prohibian las sustituciones y los mayorazgos (art. 896), como no podia mé-

nos de suceder en una obra de legislación tan democrática. Mas apenas restauró Napoleon el trono, sintió la necesidad de darle fuerza y esplendor, rodeándole de algunas de las instituciones aristocráticas que habian perecido con el antiguo régimen. Desconfiando de atraer á su corte á las antiguas familias nobles, que le desdeñaban é influían en su daño, imaginó contrabalancear este influjo creando una nobleza nueva, rival de la antigua, cuyos intereses se confundieran con los de la naciente monarquía, y que debiéndolo todo al nuevo soberano, profesara una adhesión sin límites á su persona. El emperador, sin embargo, procedió lentamente y con pulso en la ejecución de tan difícil empresa, porque el restablecimiento de privilegios abolidos pocos años ántes, con casi universal aplauso, habia de parecer inconciliable con los principios de igualdad que habian penetrado con la revolución, no sólo en las instituciones, sino en las costumbres. Así comenzó su obra por las provincias, poco ántes extranjeras y recién incorporadas al imperio, erigiendo en grandes feudos de la corona, en 6 de Marzo de 1806, las de Dalmacia, Istria, Friul, Belluno, Conegliano, Treviso, Basano, Vienne, Pádua y Rovigo, poco ántes conquistadas. El emperador se reservó dar la investidura para la sucesión hereditaria en estos feudos á los varones primogénitos, descendientes legítimos de los primeros feudatarios, pero declarando que en defecto de sucesores con estas calidades, revertirían aquellos á la corona.

Dado este primer paso, que al pronto no llamó la atención por tratarse de un territorio extraño y de bienes de conquista, las circunstancias favorecieron el restablecimiento de las vinculaciones en todo el imperio. La princesa Paulina, hermana de Bonaparte, y su marido el príncipe Borghese habian cedido al reino de Italia su principado de Guastalla; y como no pareciese justo que esto se verificara sin la compensación correspondiente, se ordenó por un Senado-consulto de 14 de Agosto de 1806, que el precio de la cesión se invirtiera en comprar bienes en Francia, que se darian á los príncipes para que ellos y sus descendientes varones los poseyeran con las mismas condiciones y cargas con que habian tenido el principado. En esta misma ley se reservó el emperador la facultad de conceder á los cabezas de familia que poseyeran algun título hereditario, licencia para fundar mayorazgos á favor de sus hijos varones y sus descendientes de varón en varón, por orden de primogenitura (1). Admitido así el principio de las vinculaciones, cuidóse de reformar el artículo del Código civil que prohibia las

(1) Dalloz. *Jurispr. gener.* V. *Majorat*.

sustituciones, con una excepcion á favor de los bienes libres que formaran la dotacion de algun título hereditario (art. 896).

Con estos antecedentes hubo de creerse posible la ereccion de una nueva nobleza, y en 1.º de Marzo de 1808 apareció un decreto creando títulos hereditarios, transmisibles al varon primogénito, cuando el padre hubiera instituido mayorazgo á su favor. Dictóse otro decreto en el mismo dia reorganizando la nobleza y procurando justificar su necesidad con estas razones, entre otras: «El objeto de la nueva institucion no es solamente rodear nuestro trono del esplendor que conviene á su dignidad, sino tambien alimentar en el corazon de nuestros súbditos una emulacion saludable, perpetuando ilustres recuerdos y conservando siempre presentes en las edades futuras la imágen de las recompensas concedidas á los grandes servicios hechos al Estado.» En este decreto se señalaron los bienes que podrian vincularse y se determinó el modo de proceder y de intervenir el gobierno en su vinculacion, segun que procedieran de mercedes de la corona ó del dominio particular de los mismos poseedores de títulos, que para transmitirlos hereditariamente usaran de la facultad de vincular: se fijó el orden de sucesion en la linea descendiente legitima, de varon en varon y por derecho de primogenitura: se declaró nula toda enajenacion de bienes vinculados y toda imposición de nuevo gravámen sobre ellos, mas sin perjuicio del derecho de los hijos para exigir su legitima completa, aún á costa de los mismos bienes, cuando el testador no dejara caudal libre suficiente para cubrirla: se impuso á los poseedores de mayorazgos la obligacion de pagar á las viudas de sus antecesores pensiones alimenticias, y aún algunas de las deudas contraídas por ellos: se determinaron las condiciones con que en circunstancias especiales podrian enajenarse los bienes vinculados: se declaró que estos bienes no tendrian por sí ni conferirian á sus poseedores ningun privilegio de que no disfrutaran las otras propiedades ó los demás ciudadanos y se dispuso, en fin, que cuando se extinguiera la linea masculina legitima de cualquier poseedor de mayorazgo, fundado con bienes particulares, quedaran suprimido el título y libres los bienes, que podria reclamar el heredero, y que cuando llegara al mismo caso algun mayorazgo fundado con bienes dados por la corona, revertieran estos al Estado (1).

Posteriormente, y todavia bajo el Imperio, se amplió aún más el uso de la nueva institucion. En 17 de Marzo de 1809, se autorizó á las mujeres casadas para fundar mayorazgos con sus bienes propios á favor de sus ma-

(1) Dalloz. V. *Majorat*, n. 4.

ridos y de los descendientes de ámbos, y se permitió la vinculacion de bienes que no eran vinculables por los decretos anteriores. En 4 de Junio del mismo año se permitió la acumulacion en un solo poseedor y la institucion por una misma persona de dos ó más mayorazgos. En 5 de Marzo de 1810 se ordenó á los poseedores de vínculos instituidos en territorio extranjero vender en cierto plazo los bienes que constituian su dotacion y sustituirlos con otros que radicaran en Francia (1).

El gobierno de la Restauracion no sólo aceptó de buen grado esta obra del imperio, sino que procuró afirmarla y darle aún mayor ensanche. Luis XVIII, tratando de enlazar más esta institucion con el nuevo régimen político, dispuso en 25 de Agosto de 1817 que ninguno, excepto los eclesiásticos, pudiera ser nombrado par del reino si no fundaba previamente un mayorazgo perpétuo de primogenitura y masculinidad cuya renta líquida fuera de 50.000, 20.000 ó 10.000 francos, segun que el título, cuya dotacion constituyera, fuese ducado, marquesado, condado, vizcondado ó baronía. A esta ordenanza siguieron otras, que sin introducir ninguna variacion esencial en el régimen de la institucion, la favorecian y estimulaban su uso. Así en los veintidos años que trascurrieron desde su restablecimiento hasta su extincion se fundaron 440 mayorazgos, cuya renta anual ascendia á 5.819.454 francos (2).

Eran, pues, los mayorazgos franceses, en su última época, una institucion exclusivamente política destinada á sostener una aristocracia de reciente origen, que debia servir como de contrapeso á la antigua en la Cámara de los pares. Su restablecimiento fué una consecuencia de la restauracion de la monarquía y particularmente de la de los títulos hereditarios decretada por Napoleon. Así no debe parecer extraño que triunfante la revolucion de 1830 y modificado el sistema político preexistente, desaparecieran las vinculaciones como contrarias al espíritu y á las tendencias del que le sucedió. La nueva Constitucion respetó la nobleza y aseguró la trasmision de sus títulos, pero sin hacer mencion de los mayorazgos (art. 62). La ley de 29 de Diciembre de 1831 abolió la pairía hereditaria, y desde entonces faltó el objeto principal de las vinculaciones. Por otra parte, el gobierno nacido de una revolucion hecha en nombre de los principios políticos de 1789, aunque algo modificados, no podia ménos de desdeñar toda institucion contraria á la igualdad civil. Así fué uno de sus primeros actos la

(1) Dalloz. V. cit. n. 4, 1, 2.

(2) Dalloz. V. cit., n. 5.

revision del Código penal, para suprimir un artículo, que con el objeto de asegurar sus prerogativas á la nobleza, castigaba la usurpacion de cualquiera de sus títulos. Por eso decian los hombres del nuevo régimen: ¿cuál puede ser la utilidad de los mayorazgos cuando no hay una aristocracia que ejerza por derecho propio altas funciones políticas, y cuando el Estado por consiguiente no tiene interés alguno en que las familias nobles que hoy existen se conserven ó desaparezcan, mantengan su elevado rango ó se confundan arruinadas con el comun del pueblo?

No era, sin embargo, acertado en el concepto de otros éste razonamiento, aún en el supuesto de que fuera preferible la pairía vitalicia á la hereditaria. En Francia, decian, hay además de la Cámara de los pares, un trono á cuyo alrededor no sentarian mal ciertas instituciones, que como los mayorazgos, contribuyesen, segun Montesquieu, al sostenimiento del principio monárquico. Una monarquía rodeada solamente de instituciones democráticas, no tendria en su concepto suficiente estabilidad. La democracia como elemento que templa y modifica el rigor y la fuerza de otros elementos sociales, era á sus ojos admisible, mas no como elemento preponderante, pues no creaba nada sólido y duradero. Pero la verdad es que el gobierno de la Restauracion con su pairía hereditaria, sus mayorazgos y el principio de la legitimidad en su favor, no pudo tampoco sostenerse. Aquel régimen cayó porque sus elementos políticos no tenían la unidad necesaria, ni por consiguiente la fuerza indispensable para dominar la resistencia que habian de provocar sus desaciertos. La aristocracia antigua, profundamente quebrantada desde la revolucion de 1789, se anuló bajo el imperio, y cuando trató de rehacerse bajo la égida de Luis XVIII, pudo notar cuán disminuidas se hallaban sus fuerzas, cuán relajada su organizacion y cuán poco identificados sus miembros con el espíritu de la nueva sociedad nacida de las ruinas de la antigua. A la nueva nobleza, que habia sobrevivido al imperio, faltaban todavía muchos años de vida, y de vida gloriosa é inmaculada, para corresponder dignamente á su elevada vocacion; que no es obra de la voluntad de un hombre, aunque se llame Bonaparte, ni asunto de unos pocos años, la fundacion de una aristocracia útil y digna.

El trono no podia poseer la fuerza moral ni el prestigio que le dan la costumbre y la tradicion en un pueblo que se acordaba todavía de haber visto subir al cadalso á un rey inocente, que habia visto bajar del sόlio á un emperador poderoso y que habia asistido á la caida de tantas monarquías seculares en Europa, y á la elevacion de tantas otras improvisadas. Habia pasado la revolucion con sus errores y sus desastres, pero dejando

arraigados en la sociedad sentimientos democráticos, que lo mismo bajo el Directorio que bajo el Consulado y el Imperio, preponderaron en todas las instituciones nuevas. Y cuando todo llevaba en la sociedad el sello de la democracia, ¿qué efecto habian de producir unos cuantos títulos hereditarios de ayer, con otros tantos mayorazgos de la misma fecha? Grande fué el error de Napoleon si supuso que un *fiat* de su boca bastaba para crear una aristocracia, capaz de templar la fuerza del torrente democrático á que él mismo habia dado impulso, dejándolo correr libremente por todas las venas del cuerpo social. Ni la restauracion se sintió capaz de contenerlo, y dejándole abierto el paso, confió en que los elementos desenterrados del antiguo régimen, si lograban moderarlo, torcerian por lo ménos su curso. Pero estos elementos, al entrar de nuevo en accion, se hallaban tan débiles y quebrantados de fuerza, que no bastaron para poner un dique al torrente, y lo que tan sólo lograron oponerle fué cierta resistencia que, comprimiéndole un momento, aumentó su pujanza.

Contra esta organizacion social y política tan eminentemente democrática, ¿qué podian hacer los 440 nobles con sus improvisados mayorazgos, que existian en 1830? Poco, ciertamente. Suprimirlos era un acto de lógica en los hombres que habian hecho una revolucion para purgar el régimen político vigente de ciertas reliquias del antiguo. Tal supresion no era censurable sino á los ojos de aquellos que creyendo funesto para la sociedad el predominio de las ideas democráticas, pensaban que lójos de favorecerlo, deberian fomentarse las instituciones que con el tiempo, pudieran moderarlo.

Prevalecieron, como era natural, las otras ideas entre los vencedores de 1830, y así desde el año siguiente se presentaron varias mociones en las Cámaras para la abolicion completa de los mayorazgos. Estas tentativas, sin embargo, no produjeron desde luego más efecto que preparar favorablemente la opinion pública para la supresion definitiva, la cual fué al fin decretada por la ley de 12 de Mayo de 1835. En ella se prohibió instituir nuevos mayorazgos, mas sin acabar de una vez con todos los existentes. De estos unos estaban fundados con bienes cedidos por la corona, con cláusula de reversion, extinguidas las líneas llamadas á poseerlos, y otros con bienes propios de los mismos fundadores. Despojar de los primeros á las familias que los poseian, para que se verificara desde luego la reversion, habria sido una injusticia: declarar libres sus bienes y el pleno dominio de sus actuales poseedores, equivalia á privar al Estado de su derecho á la reversion. Para evitar unos y otros inconvenientes se declaró la subsistencia

de tales mayorazgos, hasta que, con arreglo á las fundaciones, debieran volver sus bienes á la corona. También ofrecia graves dificultades la abolicion pura y simple de los mayorazgos fundados con bienes de particulares, puesto que con ella se habria hecho un beneficio gratuito á los poseedores actuales á costa del derecho adquirido por los sucesores inmediatos. Por esta consideracion y por la de haber pasado sólo veintidos años desde la institucion de las vinculaciones más antiguas, dispuso la ley que estos mayorazgos quedaran extinguidos luégo que pasaran al segundo grado de la sucesion, sin contar el primer llamamiento, esto es, luégo que recayeran en el tercer sucesor; y que los fundadores existentes, poseedores todavía de sus bienes vinculados, pudieran revocar ó modificar las fundaciones otorgadas, á ménos que el sucesor inmediato hubiera contraído matrimonio ántes de la publicacion de la ley, ó tuviera hijos del mismo matrimonio ya disueltos (1).

En virtud de esta ley iban desapareciendo lentamente las propiedades vinculadas, cuando estalló la revolución de 1848, la cual, despues de haber abolido los títulos de nobleza, creyó obrar lógicamente destruyendo también de un golpe los últimos vestigios de sus mayorazgos. La Asamblea Constituyente decretó, pues, una ley en 11 de Mayo de 1849, reformando la de 1835, en cuanto á los mayorazgos fundados con bienes de particulares. Dispúsose en ella que estos bienes quedaran libres desde luégo en los actuales vinculistas, siempre que á la sazón no existiera sucesor inmediato de segundo grado, nacido ó concebido ántes (2). De este modo quedaron abolidos muchos mayorazgos, que segun la legislacion anterior habrian podido subsistir aún algunos años.

Esta ley fué, sin embargo, una de las ménos importantes de la revolución de 1848. El objeto de la Asamblea al decretarla, más que hacer una reforma trascendental, que ya no era posible, fué consignar una protesta contra la antigua institucion vincular, como inconciliable con el carácter inminentemente democrático de la sociedad y de las instituciones francesas. El segundo Imperio, derrotando á la democracia en el terreno de la fuerza, le hizo concesiones importantes en todo lo que era compatible con la paz pública y la seguridad presente del Estado. Léjos de contener las tendencias democráticas de la civilizacion francesa, las alentó y favoreció, teniendo tal vez más en cuenta los intereses presentes que los del porvenir. Por

(1) Dalloz. V. *Majorat* n. 6, 7.

(2) Dalloz. *Id.* n. 8.

eso no fué derogada la ley de desvinculacion de 1849, ni la de 1855, y entre las instituciones conservadoras que fueron restablecidas, no llegó á contarse la de los mayorazgos.

II.

RESTABLECIMIENTO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL.

Veamos ahora el efecto de las ideas reaccionarias en el régimen de la propiedad municipal. Apenas comenzaron los propios á venderse y los comunes á repartirse, se sintieron las consecuencias desastrosas de las leyes dictadas sobre esta materia. Ya en 9 de Agosto de 1795 un diputado de la Convencion nacional habló contra el repartimiento de los bienes comunales, ordenado por la ley de 10 de Junio de 1793, sosteniendo que ésta «era injusta y destructora de la agricultura, surtia un efecto contrario á su objeto y perjudicaba á los intereses de la nacion; y pidiendo que sus observaciones pasaran á la comision de legislacion, á fin de que informara sobre el asunto.» La Convencion, que ya empezaba á asustarse de sus propias obras, acogió favorablemente esta mocion. Nada más hizo aquella Asamblea; pero al año siguiente el Directorio y el Consejo de los Quinientos, considerando los funestos resultados de la ley referida, los cuales se agravaban por la precipitacion con que se repartian las tierras y las incorporaciones y enajenaciones fraudulentas que de ellas se verificaban, mandaron suspender los repartimientos, manteniendo, sin embargo, provisionalmente los ya ejecutados (9 Junio 1796). Entre tanto continuaba la enajenacion de los propios, hasta que fué prohibida tambien por otra ley de 21 de Mayo de 1797, la cual derogó terminantemente las de 9 de Junio y 24 de Agosto de 1793, que incorporaron á la nacion, y mandaron vender todas las propiedades municipales que no debian repartirse. Esta nueva ley reconoció y ratificó todas las enajenaciones verificadas hasta entónces, y sólo permitió en lo futuro las que se ejecutaran con intervencion y aprobacion especial del poder legislativo.

Pero las dificultades á que dieron lugar las leyes revolucionarias fueron graves y numerosas. Suscitáronse innumerables cuestiones entre los pueblos y entre los vecinos con motivo de los repartimientos. Hiciéronse éstos en unas partes sin consignarlos en ningun documento; en otras con injusticia y parcialidad notorias, y en todas con informalidad manifiesta. Suspendidos después por la ley de 9 de Junio de 1796, quedaron indeciso muchos derechos y vivas muchas cuestiones que exigian resolucion inme-

diata. Esta no se dictó hasta que por la ley de 29 de Febrero de 1804 se confirmaron todos los repartimientos de bienes comunes, consumados, que constaran por escrito: se anularon los que no constaran del mismo modo, á no ser que los poseedores hubieran desmontado, roturado ó ejecutado obras importantes en el terreno repartido y se obligaran á pagar al pueblo que ántes lo poseyera, un cánon redimible igual á la mitad del producto, ó á lo que valiera en renta el prédio ántes de ponerlo en cultivo; y se mandó devolver á los pueblos todos los bienes que les pertenecieran y no hubiesen sido válidamente repartidos ni enajenados, conforme á las prescripciones anteriores (1). Entre tanto, como ninguna de las leyes anteriores habia ordenado la devolucion á los pueblos de los bienes de que se habia apoderado el gobierno, para proceder á su venta, conforme á la ley de 24 de Agosto de 1793, estos bienes, aunque considerados ya del dominio de los pueblos, continuaron en poder de la Administracion con el carácter de inalienables.

En este estado permaneció la propiedad municipal, hasta que el gobierno imperial, tocando ya á su término, abrumado de guerras y de deudas, llevando al extremo sus principios de centralizacion y sus prácticas de arbitrariedad, buscó en los bienes de propios los recursos que no le daban ya las contribuciones ni los empréstitos. Con este objeto se hizo la ley de 20 de Marzo de 1815, que mandó enajenar por cuenta del Estado, todos los bienes municipales, excepto los montes, las tierras de aprovechamiento comun y las propiedades destinadas á algun servicio público, indemnizando á los pueblos de la renta líquida que perdieran por efecto de esta expropiacion, con títulos de la Deuda pública del 5 por 100. El Consejo de Estado, apoyando esta medida, no se atrevió á fundarla en ningun derecho de soberanía, ni en razones económicas, sino en que estando vigente la ley de 1793, en cuanto ponía á cargo del Estado los créditos activos y pasivos de los pueblos, debía tambien estarlo, en cuanto autorizaba al gobierno para incautarse de los bienes de propios, pues que esto debía considerarse como resarcimiento de las pérdidas que tal liquidacion pudiera ocasionarle (2). Empezóse, pues, la venta de estos bienes, á pagar su precio en seis plazos, mas sin que el gobierno se apresurara á dar á los pueblos la indemnizacion prometida.

Al caer el Imperio habíanse ya vendido no pocas de estas propiedades,

(1) Dalloz, V. *Commune*, n. 1775.

(2) Dalloz, V. *Commune*, n. 136, 1878

sin que sus antiguos poseedores hubieran sido indemnizados. Fuéronlo, sin embargo, cuando Luis XVIII subió al trono. El gobierno de la Restauración, no creyendo prudente suspender desde luego tales enajenaciones, juzgó por lo ménos indispensable acallar inmediatamente las quejas de los perjudicados. Así continuó en vigor la ley de 1815, hasta que concluida del todo la guerra y asegurado el nuevo régimen, se publicó otra ley en 26 de Abril de 1816, mandando devolver á los pueblos todos los bienes de que habían sido expropiados y no habían sido vendidos, y declarando firmes y válidas las enajenaciones hasta entónces verificadas (1).

Desde aquella época disfrutaban los pueblos tranquilamente los bienes de propios y comunes que se salvaron de la rapiña de la revolucion y de la arbitrariedad del Imperio, sin que, á pesar de los trastornos ocurridos en este largo periodo, se haya vuelto á expropiarlos forzosamente. Verdad es que tampoco fueron tantos los bienes devueltos á los pueblos, atendido su número y su riqueza, pero siempre ascendia su renta en 1836 á 6 millones de francos, lo cual suponía un capital de 200 millones (2). Y Francia ha prosperado más aún desde entónces, á pesar de esta riqueza amortizada que ha quedado en su seno y de la mayor que aún existe del mismo modo, representada por los bienes de aprovechamiento comun. Dos ensayos de expropiacion municipal se han hecho, pues, en aquel país, uno por la revolucion desbordada; otro por el Imperio en la época de su mayor tiranía, y sin embargo, no se ha conseguido poner en circulacion todas las propiedades de los pueblos.

(1) Dalloz, V. *Commune*, n. 1882.

(2) Rapport au roi sur la situation financière des Communes du Royaume, exercice de 1836. (*Patria, La France ancienne et moderne*, pág. 2608.

LIBRO II.

Estado de la propiedad territorial en España bajo la dominación de los visigodos y la de los árabes.

CAPITULO I

De los caracteres feudales de la propiedad.

En la rápida y general exposicion que he trazado en el libro I de los progresos y vicisitudes de la propiedad territorial en sus relaciones con el Estado y con la familia, se ha visto cómo las diferentes especies de dominio conocidas en Europa originaban y mantenian el estado civil y político de las personas y de las clases diversas que formaban la sociedad, y cómo dependia este estado de que las tierras del patrimonio familiar fuesen libres ó tributarias, ó se poseyeran en pleno ó menoscabado dominio, á perpetuidad ó por tiempo limitado, con títulos firmes ó precarios. Habráse observado tambien cómo adquirida la propiedad por conquista ú otros títulos, servia de fundamento á la soberanía que ostentaban los reyes, principes y caudillos: cómo subdividida y trasmitida en cortas porciones á los particulares, estrechaba y aseguraba los vínculos del vasallaje, era la base de los ejércitos que defendian la patria ó ensanchaban sus límites y organizaba los poderes públicos, y cómo restringida en cuanto á su disposicion y uso, tendia á conservar las gerarquías sociales, la autoridad de las clases superiores y el estado de las familias. Si investigamos ahora la constitucion y las vicisitudes de la misma propiedad en los antiguos reinos de España, á la luz de sus leyes especiales y de los documentos contemporáneos, se verá cómo contribuyeron á la formacion, conservacion y progreso de aquellas repúblicas, y al establecimiento de un régimen político, judicial y administrativo que, aunque con graves

vicios y defectos, restauró la sociedad cristiana. Así se verá cómo en España obedeció la propiedad á la misma ley que en el resto de Europa y experimentó vicisitudes semejantes en su esencia, aunque no fueran del todo idénticas en su forma.

De este exámen resultarán tambien desvanecidas las dudas que aún pudiesen subsistir acerca de la existencia del feudalismo en algunos de nuestros antiguos reinos. Háse sostenido por varios escritores que el sistema feudal europeo, aunque establecido en Cataluña y Valencia, no llegó á prevalecer en Aragon ni en Navarra, y particularmente en Leon y Castilla. Alégase en apoyo de esta opinion, que ni las leyes ni los documentos antiguos de estos reinos hacen mencion de los *feudos*, como si una misma institucion no pudiese existir con nombres diferentes en distintas regiones de la tierra. Pero aún prescindiendo de que no es enteramente exacta aquella aseveracion, lo que importa averiguar es si aunque con denominaciones y formas diversas, existieron en toda la Península los elementos esenciales del feudalismo. Porque el fin útil y práctico de las investigaciones no es escudriñar nombres y resolver cuestiones de palabras, sino determinar con exactitud las semejanzas y las diferencias entre las instituciones sociales y políticas españolas y sus contemporáneas extranjeras, para comprobar así la comunidad de origen, carácter y tendencia de nuestra civilizacion con la europea. Y en efecto, sin regir en nuestra Península el código feudal que, como suplemento al de Justiniano, servia de derecho comun en la materia, sin existir en algunas provincias unos pequeños estados con el nombre oficial de feudos, hallaremos en todas ellas los elementos esenciales del feudalismo y una organizacion feudal más ó ménos acabada y perfecta.

Bien puede asegurarse que existe este régimen allí donde la propiedad territorial esté constituida de modo que fije y determine las relaciones del individuo, con el Estado, con la autoridad local y con la familia. Tres eran, por lo tanto, los caracteres esenciales de la propiedad feudal: 1.º, la separacion entre el dominio útil y el directo de la tierra, reservándose el señor de éste la facultad de exigir del que lo fuera del otro, fidelidad y servicios militares y políticos: 2.º, la union al dominio directo de la tierra de una parte mayor ó menor de la autoridad pública sobre los individuos que en aquella vivian como naturales ó como colonos: 3.º, restricciones de la facultad de disponer de ambos dominios, ya en interés de las familias que debian suceder en ellos, ya para que no se menoscabaran los derechos del dominio directo.

Estos son los caracteres que realmente distinguen el feudalismo de cual-

quiera otro régimen social y político. Así la separacion entre el dominio directo y el útil cabe dentro de cualquier sistema; pero solamente es propio del feudal el que esta division sea causa de una *especie de servidumbre*, como decia Godofredo, en cuya virtud el que aceptaba el dominio útil quedaba, por este mero hecho y sin otra estipulacion, obligado á prestar al señor del directo fidelidad y servicios de paz y guerra. La obligacion en el vasallo de acudir con tales servicios, suponía en el señor el derecho de exigirlos; mas era peculiar y exclusivamente propio de los feudos que quien poseyera aquel derecho, sólo por su calidad de propietario, ejerciera una parte mayor ó menor de la autoridad pública, siendo, por lo tanto, la jurisdiccion y el imperio atributos inseparables de una gran parte de la propiedad territorial. Por último, sin las restricciones que impedían ó dificultaban la libre enagenacion del dominio, ni habrian conservado su estado civil las familias feudatarias, ni los señores habrian podido mantener su autoridad sobre ellas, ni se habria sostenido el régimen feudal largo tiempo. Sabido es cómo este régimen se desnaturalizó y trasformó á medida que aquellas restricciones fueron desapareciendo.

Tales eran tambien los caractéres y atributos de una parte considerable de la propiedad territorial en los varios reinos de España. No sólo en Cataluña y Valencia, sino en Leon, Castilla, Aragon y Navarra, habia muchas tierras cuyo dominio directo llevaba consigo el derecho de exigir fidelidad y servicios militares de los hombres que las habitaban ó poseian, con potestad y jurisdiccion sobre ellos, y cuyo dominio útil estaba limitado en interés de los señores ó de las mismas familias feudatarias. Esta especie de propiedad, que en reinos extranjeros se llamaba feudo, se denominaba en España *prestimonio*, *mandacion*, *encomienda*, *tierra*, *tenencia*, *honor* ó *señorío*, excepto en Cataluña, Valencia y Ribagorza, donde era tambien conocida con aquel nombre europeo. Fué más general y uniforme en estos reinos que en los de Leon y Castilla, pero sin faltar en ninguno, puesto que en todos dejó evidentes y numerosos vestigios. ¿Qué importa, pues, la distinta denominacion de este régimen, si sustancialmente era el mismo que con la de feudo se conocia en otras?

Tampoco basta para dudar de su identidad esencial la circunstancia de hallarse algunas diferencias de forma ó accidente entre nuestras instituciones feudales y las extranjeras, pues la misma diversidad se muestra entre estas últimas, sin que se les niegue por eso el carácter comun de feudales. ¿Fué acaso idéntico aquel régimen en Alemania y en Italia, en Francia y en Inglaterra? ¿Rigieron por ventura en estos pueblos las mismas leyes políti-

cas y civiles durante la Edad Media? ¿Fué enteramente igual en ellos la condicion de las personas y de las tierras, la de los señores y la de los vasallos? Precisamente uno de los rasgos característicos de la sociedad en los siglos medios era presentar con formas particulares, locales y varias unas mismas instituciones sociales y políticas. El olvido de las ciencias, la dificultad de las comunicaciones, las guerras constantes y el predominio de los intereses individuales ó de los de clase explican suficientemente este fenómeno. No es, pues, extraño que, al adoptar cada pueblo el feudalismo, única fórmula de organizacion social y política conocida entónces, en los países cristianos, lo estableciese y practicase del modo más adecuado á sus peculiares circunstancias, resultando de aquí la variada multitud de formas con que existia en las naciones de Europa y aún en las diferentes provincias de unos mismos Estados.

Si seguimos la huella de este régimen en la legislacion y en la historia de nuestros antiguos reinos, empleando como criterio para comprobarlo los tres caracteres de la propiedad feudal ántes indicados, le veremos aparecer en todas partes siempre esencialmente idéntico, aunque con variedad de nombres y de formas, y sufriendo en el curso de su vida vicisitudes y alteraciones análogas. Se observará además que nuestro feudalismo tuvo el mismo principio y origen que el de las otras naciones europeas, que si se desarrolló y extendió algo ménos que en ellas por causa de la reconquista sarracena, no dejó de ser conocido y practicado en ninguna provincia, y que concluyó del mismo modo y por iguales causas, aunque algo ántes que en otras naciones de Europa, porque los medios empleados para conquistar el territorio aceleraron su fin. Y como todo cuanto se diga del feudalismo se dice la propiedad territorial, que era su fundamento, la historia de esta durante la Edad Media, lo es á la vez de todas las instituciones feudales.

Estos mismos tres caracteres que constituian el feudalismo de la propiedad, determinaban á la vez sus relaciones con el Estado y con la familia. La propiedad servia al Estado, porque los propietarios tenian el deber de defenderlo con las armas, de sostenerlo con sus recursos y de regirlo con su autoridad; y servia á la vez al Estado y á las familias, porque con las restricciones de la facultad de transmitir y desmembrar el patrimonio de éstas, se mantenía la union entre sus miembros, se estrechaban sus vínculos con la tierra, madre de la riqueza, y se conservaba su estado social y político. Y no se oponga á esta consideracion que los servicios á que la propiedad obligaba aprovechaban más á los señores del dominio directo que á la república, pues la nocion del Estado no se hallaba entón-

ces quizá ménos representada por débiles monarcas, con escasos medios de accion sobre sus súbditos, que por meros señores territoriales que eran los que en realidad gobernaban en sus lugares y proveian á todas las necesidades públicas. A ellos más que al rey estaban á la sazón encomendadas las funciones propias del Estado, y por lo tanto las relaciones que con los señores la propiedad tenia, eran casi las únicas que con el Estado sustentaba. Así que en los lugares en que el rey era señor territorial, además de tener la potestad suprema, era donde únicamente ejercia la plenitud de la autoridad pública. Los derechos del señor sobre sus vasallos eran los del soberano sobre sus súbditos en las sociedades modernas, pero con la diferencia importante de ser éstos mucho más limitados, y de fundar aquellos su legitimidad en el dominio originario ó actual de la tierra, cuando estos otros buscan la suya en principios morales de orden más elevado. Los excesos de los señores feudales y la opresion que sufrieron tantos de sus vasallos, no disminuye en nada la fuerza de esta verdad. Pudieron exigirse y se exigieron de la propiedad más servicios y cargas de los que habia menester la república; pero de aquí no se infiere que el principio en cuya virtud se impusieron no fuera siempre la autoridad del señor y la necesidad pública, verdadera ó supuesta. Tambien en las sociedades modernas se exige á veces de los súbditos más de lo necesario, y no por eso se deja de invocar para ello la autoridad y el interés del Estado.

CAPITULO II

Estado de la propiedad territorial bajo la dominacion visigoda.

I.

TIERRAS LIBRES Y TIERRAS GRAVADAS CON SERVICIOS PÚBLICOS.

Para dar á conocer, y sobre todo para explicar cumplidamente la organizacion de la propiedad en España durante la Edad Media, es indispensable recordar la que le habian dado las leyes y costumbres de los visigodos al tiempo de la irrupcion sarracena. De ellas, de las necesidades que originó la reconquista del territorio, y del ejemplo de otras tierras, conquistadas tambien en su día y poseidas á la sazón por las tribus septentrionales, nació aquella organizacion tan feudal en su esencia como la de Cataluña, aunque con formas varias y nombres diferentes. Veamos, pues, cómo los

principales elementos que vinieron á constituir la se encontraban ya en la sociedad y en la legislación visigoda.

Era, según en otro lugar he dicho, un principio de derecho público entre las naciones antiguas, que el conquistador, por serlo, ganaba, no sólo el dominio eminente, sino el particular y privado de todas las tierras á donde alcanzaba su poderío. En virtud de este principio, capitanes y soldados tomaban para sí las que, según su jerarquía ó sus merecimientos les tocaban en el reparto, dejando sólo á los vencidos una parte mayor ó menor del territorio, no en reconocimiento de su derecho, sino por consideraciones de conveniencia pública. Los visigodos se apropiaron, pues, las dos terceras partes de las tierras cultivadas, y dejaron á los españoles el tercio solamente de las que poseían. El despojo de los antiguos propietarios y el nuevo reparto causaron, como es de suponer, una perturbación gravísima en todos los pueblos que contribuyó, tal vez más que nada, á retardar la fusión de las razas y la segura pacificación del reino.

En vano procuraron los legisladores garantizar las propiedades así adquiridas, respetando los hechos consumados, y no permitiendo que volviesen á ponerse en tela de juicio las cuestiones del reparto, pues al verificarse la invasión sarracena, no estaban del todo extinguidos los odios de la conquista, ni se habían de hecho fundido é identificado las razas, por más que hubiesen desaparecido las leyes que se oponían á ello. Deseosos los monarcas de que desapareciese aquel motivo constante de perturbación social, habían declarado inalterable la primitiva división de las tierras (1): habían dispuesto que el partícipe que quebrantara el pacto de esta división, invadiendo la propiedad de su compañero, perdiese todo lo invadido y otro tanto más de lo suyo propio (2): que «ni los romanos tomaran nada de las dos partes distribuidas á los godos, ni éstos ocuparan la tercera parte dejada á los romanos, ni reclamaran de ellos más de lo que les había sido dado por los reyes (3):» que si el godo ó el romano pusiese en cultivo montes indivisos, sin dejar en ellos una porción de igual valor, que pudiese ocupar su consorte, dividiese con éste la tierra cultivada (4): que los jueces, villicos y prepósitos devolvieran á los romanos las tierras que les habían sido usurpadas, quitándolas á los detentadores, á ménos que llevasen 50 años de po-

(1) *For. Jud.*, l. I, tit. I, lib. X.

(2) *For. Jud.*, l. V, id., id.

(3) *For. Jud.*, lib. VIII, id., id.

(4) *For. Jud.*, l. IX, id., id.

sesion en ellas (1): que se conservaran los antiguos linderos de las propiedades (2): que cualquiera cosa ó parte de tierra que legitimamente se hubiere separado de una heredad para agregarla á otra, ántes de la venida de los godos, continuara como la hubiesen dejado los romanos; y que cuando la extension de una heredad no pudiera probarse por linderos ciertos, se apelara al juicio de árbitros, pero sin señalar en ningun caso nuevos términos, no hallándose presente el otro consorte (3).

Todas estas providencias iban, como se ve, encaminadas á garantir las propiedades respectivas y á mantener á los poseedores actuales en la situacion en que quedaron después de la conquista; pero la frecuencia con que se dictaron es la prueba mejor de su ineficacia, así como el texto de una de ellas da claramente á entender las usurpaciones numerosas de que fueron víctima los españoles, aún en la escasa parte de propiedad que debieron á la política y á la misericordia de los godos. Hubieron de ser tan comunes y continuadas las depredaciones, que fué necesario establecer una prescripcion especial, de tiempo tan largo como de 50 años, es decir, igual á la establecida respecto á las cosas de los menores, para que por semejante título pudiera ganarse el dominio de las heredades romanas y godas (4). Así es que en cuanto á la prescripcion, eran más privilegiadas estas propiedades que las de la Corona, las cuales prescribían con la posesion de 50 años.

Las tierras repartidas á los godos quedaron al parecer exentas de tributos; pero no las dejadas á los españoles. Así se infiere de la ley ántes referida, que mandaba restituir á los romanos las propiedades usurpadas. Era uno de sus fines, segun indica el texto, que «no perdiese el fisco ninguno de sus derechos (5);» lo cual da claramente á entender que las tierras no eran tributarias, sino cuando se hallaban en el dominio de los españoles.

La propiedad, una vez repartida entre la Corona, los godos conquistadores y los españoles, sirvió de vínculo entre las varias clases de personas y de fundamento á la nueva organizacion social. Los godos que recibieron su parte en el botin quedaron más obligados que ántes á seguir á la guerra y auxiliar con otros servicios al jefe de la nueva monarquía. Los reyes distribuyeron una buena parte de sus tierras entre la Iglesia, que les ayudaba en

(1) *For. Jud.*, l. XVI, id., id.

(2) *For. Jud.*, l. I, tit. III, lib. X.

(3) *For. Jud.*, l. V, id., id.

(4) *For. Jud.*, l. I, t. II, lib. X.

(5) «Ut nihil fisco debeat deperire.» L. XVI, t. I, lib. X.

el gobierno de sus súbditos, los *curiales* y *privados de corte*, y los siervos fiscales, que hacían producir las heredades y contribuían con las rentas de ellas y con sus propios haberes á levantar las cargas públicas. Los capitanes y señores godos hicieron distribuciones semejantes entre sus clientes y bucelarios, tanto para sacar fruto de sus grandes haciendas, cuanto para mantener su propia gerarquía con servidores y defensores numerosos, segun se necesitaba en una sociedad en que el poder público no protegía eficazmente á todos los súbditos.

Los nobles godos fueron propietarios alodiales y libérrimos poseedores de las tierras de conquista: pero aunque al adquirirlas no contrajeron con el Estado ó con el rey ninguna obligacion nueva por ley ni por pacto, la personal que de antiguo tenían con los jefes, bajo cuyas banderas habian militado voluntariamente, debió ser más eficaz de hecho, tanto por su mayor interés en conservar las ventajas adquiridas, cuanto porque teniendo una residencia fija y una hacienda intrasferible, era más fácil exigirles su cumplimiento. Verdad es que estas mismas circunstancias, y sobre todo la de haberse dispersado por todo el territorio los nuevos propietarios para disfrutar tranquilamente con sus familias los bienes que les deparaba la fortuna, y el aislamiento en que quedaron unos de otros, y en que continuaron sus herederos y descendientes, quebrantó al cabo el espíritu militar del pueblo godo y relajó los vínculos de la disciplina, á que por tradicion estaban sujetos los súbditos de la nueva monarquía; mas esto no hubo de suceder hasta algunos siglos más tarde, cuando otras causas habian contribuido á modificar el carácter y las costumbres de la nacion. Wamba fué el primer monarca que, advirtiendo y condenando la negligencia de los godos en el cumplimiento de sus obligaciones militares, las declaró por leyes escritas é impuso penas severas á los que no acudían á la hueste, cuando fuerzas enemigas invadieran el territorio ó estallase dentro de él alguna rebelion armada. Mas deben tenerse en cuenta las circunstancias que dieron ocasion á estas leyes. Paulo se habia rebelado contra Wamba con fuerzas numerosas, y la guerra civil devastaba una parte del reino; ¿qué extraño es que muchos nobles godos, conniventes con los sublevados, ó interesados en su triunfo, ó dudando del de los leales, se abstuvieran de tomar parte en la lucha?

Las tierras así adquiridas dieron origen á una multitud de nuevas relaciones personales, elementos necesarios de aquella organizacion social. Sabido es que en los pueblos de raza ó de costumbres germánicas existia la del patronato, en cuya virtud cada jefe ú hombre poderoso tenia á su devocion

una clientela más ó ménos numerosa, que estaba á su servicio en paz y en guerra, y á la cual dispensaba favores y dádivas. Hasta la conquista solian éstas consistir en armas y manjares; pero cuando los godos se vieron dueños de vastas heredades, á cuyo cultivo no podian proveer por sí mismos, repartieron muchas de ellas entre sus clientes ó buccelarios, con condiciones determinadas y como precio de sus servicios. Novedad tan importante fué de la mayor consecuencia en el orden de las relaciones sociales, porque con ella el vínculo del patronato fué mucho más estrecho y duradero; familias numerosas, que ántes vagaban á merced de los accidentes de la guerra ó del capricho de sus señores, fijaron su asiento en lugares determinados, defendiéndolos con sus armas, poblándolos con sus hijos y fomentándolos con su trabajo, y patronos y clientes quedaron identificados así por un interés común, más permanente y eficaz que el que habia podido existir cuando sólo mediaban entre ellos regalos y convites. Y no puede dudarse que una vez asentados los godos en España, se sirvieron de sus heredades para constituir y extender sus patronatos, pues una ley del Fuero Juzgo disponia que «el patrono que recibiese un cliente de otro, le diera *tierra*, á fin de que pudiera volver á su anterior patrono la *tierra* y todo lo demás que de él tuviera» (1).

Los derechos del patron sobre el cliente eran exorbitantes. La mitad de todo cuanto éste adquiria pasaba al dominio de aquel; los hijos del uno así como los del otro heredaban las obligaciones y derechos de sus padres respectivos, de modo que los descendientes del cliente debian prestar á los del patrono los mismos servicios que éste hubiera de aquel exigido. Si el cliente moria no dejando hijos, pero sí hijas, quedaban estas bajo la potestad del patrono, quien podia casarlas con hombres de igual condicion, á fin de que continuaran poseyendo lo que hubiera dado á su padre ó madre; mas si ellas se casaban contra la voluntad del patrono, con hombres de estado inferior, perdian todo derecho á suceder en los bienes que hubiesen adquirido sus padres del mismo patrono ó de su familia y éste ó sus herederos podian recobrarlos (2). Solian los clientes ejercer el oficio de sayones, y entónces todo cuanto en él ganaban correspondia á su patrono (3). El que habitando con éste le era infiel y desleal, perdía, no sólo todo cuanto de él habia recibido, sino tambien la mitad de cuanto por sí sólo hubiese

(1) *For. jud.* l. 4.^a, tit. III, lib. V. «Ille (patronus), cui se commendaverit, donet terram, nam patronus quem relinquit. et terram et quod ei dedit, obtineat.»

(2) *For. jud.* l. 1.^a, tit. III, lib. V.

(3) *Id.* l. 1.^a, *id.* *id.*

ganado, pasando lo uno y lo otro á poder del patrono (1). Los únicos derechos importantes del cliente consistían en la facultad de abandonar al patrono que no era de su agrado, encomendándose á otro, y en la irrevocabilidad de su dominio sobre las cosas adquiridas del mismo patrono, mientras no saliera de su patrocinio ó no faltase á la fidelidad. Mas el primero de estos derechos debía de ser de poca eficacia práctica, no pudiendo ejercitarse sin devolver al patrono abandonado todo lo que de él se había recibido, y la mitad de todo lo demás que el cliente hubiese ganado; y el segundo podía ser fácilmente eludido con el pretexto de la infidelidad, mucho más cuando las leyes no señalaban los actos por los cuales se incurria en ella, y los patronos tenían el derecho de juzgar, castigar y azotar á sus clientes (2). Pero de cualquier modo que esto fuese, en las relaciones entre patronos y bucellarios es preciso reconocer el origen verdadero de las que más tarde mediaron entre señores y vasallos en los feudos propios y los señoríos que se asemejaban á ellos.

Muchas de las tierras adjudicadas á la corona fueron repartidas á los *curiales y privados de corte* y á la Iglesia. Llamábanse al parecer curiales y privados los que por razon de las propiedades que disfrutaban, contribuían al erario con ciertos censos y otras prestaciones de frutos y caballos. Eran hidalgos, aunque poseedores de tierras tributarias. No debían por regla general, segun una ley de Chindasvinto, enajenar su hacienda; mas si lo hacían de toda ella, debía el adquirente pagar todo el censo ó tributo y los demás servicios con que estaba gravado su causante; y si enajenaba una parte y no más, el que la adquiriese sólo quedaba obligado á satisfacer la proporcional que correspondiera del mismo censo ó tributo y servicios. Si el adquirente no accedía desde luego á prestarlos ó dejaba pasar un año sin pagar el censo, perdía cuanto hubiese adquirido y el precio que hubiera dado, y el rey podía dar lo enajenado al mismo que lo enajenó á otra persona. Los curiales podían libremente enajenar unos á otros sus propios bienes, aunque siempre con la condicion dicha de cumplir el adquirente las obligaciones de su causante (3). De modo que aunque tales enajenaciones á favor de los no curiales estaban prohibidas, podían convalidarse y subsistir una vez verificadas, con tal de que el adquirente se constituyera en lugar del vendedor.

(1) Id. l. 3.^a, id., id.

(2) Id. leyes 1.^a y 3.^a, tit. III, lib. V, y l. 8.^a, tit. V, lib. IV.

(3) Id., l. 19, tit. IV, libro V.

Daba además el rey las tierras de la corona á sus *fieles*, esto es, los súbditos que estaban á su mandado, le prestaban servicios ó guardaban su persona. Un cánón del concilio IV de Toledo, inserto en el *Fuero Juzgo*, hace mencion de ellos, mandando que no fuesen privados sin justa causa de su dignidad, ni de los bienes que les hubieran dado y debian darles los reyes, ni se les impidiese disponer de ellos en favor de sus descendientes ó de quienes fuera su voluntad; pero que si fuesen desleales, ó dejasen de servir á la corona con lo que de ella recibieran, quedaran al arbitrio del monarca con su persona y bienes (1). Quizá estos *fieles* de que habla el concilio no eran en la esencia distintos de los que más tarde llamaba Chindasvinto *curiales y privados de corte*; pero siempre habia entre ellos la notable diferencia de que los primeros podian disponer de su hacienda sin limitacion alguna, segun el cánón citado (*poterit relinquendi, vel quibus voluntas eorum decreverit conferendi spontaneo fruuntur arbitrio*) y los segundos no podian enajenar la suya libremente, sino á otros cuariales (*nunquam facultatem suam vendere, vel donare vel commutatione aliqua debent alienare*).

Otras tierras de la corona se daban á *siervos fieles* para que las cultivaran y contribuyeran al erario con una parte de sus frutos. Era el estado de estos siervos muy superior al de los demás y algo semejante al de los hombres libres. Algunos de ellos ejercian cargos públicos importantes, muchos poseian esclavos, y el testimonio de todos era admitido en juicio, como el de los ciudadanos (2). Los que poseian tierras de la corona tenian en ellas una especie de dominio, aunque restringido. No podian manumitir á sus siervos sin licencia del rey, ni enajenar sus heredades á hombres libres, pero si á otros siervos de su misma condicion. Tambien se les permitia dar á la Iglesia ó á los pobres sus bienes muebles, mas si no poseian más que tierras ó esclavos, podian venderlos á otros siervos fiscales y dar su precio á la Iglesia (3). De todo lo cual se infiere que la corona conservaba en las tierras de estos siervos una especie de dominio directo y cierta participacion en sus frutos, con algunos servicios que no podia exigir de los hombres libres, pues de otro modo no se comprenderia la prohibicion de vender á estos aquellas tierras. Si sólo hubiese mediado entre el rey y sus siervos la obligacion real de un censo inherente á las fincas, se ha-

(1) Id. *Primus titulus: De electione principum*, etc. XVIII.

(2) Id. l. 6.^a, lib. II.

(3) Id. l. 16.^a, t. VII, lib. V.

brian éstas podido trasferir á hombres libres sin menoscabo del erario, puesto que cualquiera que las poseyese habria sido capaz de satisfacer sus cargas.

Pero ni las leyes escritas ni las autoridades encargadas de su ejecucion, bastaban para garantir á los propietarios la posesion y libre uso de sus bienes. Las mismas leyes y los cánones de los concilios nacionales dan á conocer demasiado la inseguridad en que aquellos vivian, no sólo por la impotencia del gobierno para protegerlos contra los usurpadores, sino tambien por la frecuencia con que eran víctimas de la codicia de los mismos príncipes. Decian los padres del concilio VIII de Toledo: «Vimos algunos que despues de ser reyes, empobrecieron á los pueblos, tomando para sí los bienes de sus súbditos...» Aún más franco y explicito el rey Recesvinto, confesaba en una de sus leyes que «la inmoderada codicia de los príncipes, sus antecesores, se habia cebado con el despojo de los pueblos, aumentándose por lo tanto el real patrimonio á costa de los escasos haberes de los súbditos...» En su vista el rey y el concilio ordenaron que no se obligara á ningun deudor á otorgar á favor del monarca escritura de deuda que á otro se debiese, á fin de dejar frustrado el derecho del acreedor; que no se transfiriera á la corona el dominio de ningunos bienes, sino por escritura, en que se hiciese constar la libre voluntad del enajenante y la causa de la enajenacion: que si alguno de tales contratos se otorgara á pesar de todo, con violencia, se rescindiría, devolviéndose lo enajenado á su dueño; que respecto á lo ya adquirido por el rey mediante escrituras ó documentos auténticos, se examinarán los testigos que los suscribieran para averiguar si habia mediado coaccion ó fraude y se anularán los contratos, segun lo que resultara de esta indagacion: que esto mismo se hiciese en cuanto á los inmuebles y siervos adquiridos por el rey sin escritura, pero si ante testigos, y por último, que de todas las cosas adquiridas por los reyes desde Chintila, perteneciesen á la corona las que de su poder no hubiesen salido y al patrimonio personal del monarca, las que hubiera éste heredado ó de otro modo adquirido de sus parientes y las que poseyera al tiempo de ascender al trono (1).

Estas disposiciones que revelan por una parte los graves abusos que originaba todavia la tradicion antigua acerca del dominio absoluto del conquistador en toda la tierra conquistada, da á conocer por otra la energia con que la Iglesia la combatió, señalando los limites del derecho del soberano, dis-

(1) *For. jud. Primus titulus de electione incip. IV y l. 5.^a, tit. I, lib. II.*

tingüendo equitativamente los bienes que correspondían á su persona, de los que eran propios de la república, y amparando á los particulares contra los abusos de la arbitrariedad y la tiranía. No le ayudaron desgraciadamente en tan noble empresa todo lo que era menester las demás influencias sociales de la época, por oponerse á ello el atraso de la civilización y los tristes ejemplos del régimen imperial á que estaban habituados los españoles; pero de todos modos y aún más por las mismas circunstancias, debe este contarse entre los servicios que prestó la Iglesia á la causa de la justicia y del derecho en aquella sociedad poco regularizada. Cuando no estaban de modo alguno deslindados los derechos del Estado respecto á los personales del monarca, y no se tenían muy en cuenta los del individuo respecto al soberano, fué notable progreso la obra iniciada en el concilio VIII de Toledo y llevada á cabo por Recesvinto.

II.

DE LAS TIERRAS DE LA IGLESIA.

La Iglesia recibió también su parte en los despojos de la conquista, primero la arriana, cuyo culto profesaban los godos, y después la católica, desde la conversión de Recaredo. Era tan reconocido su derecho á esta participación, que si hubo monarcas arrianos que persiguieron á los católicos y despojaron sus templos, los hubo también que, sin abjurar su falsa creencia, autorizaron el verdadero culto, dotaron iglesias y fundaron monasterios. Amalarico, cuando apenas había trascurrido un siglo desde la primera invasión, y medio desde la conquista de la provincia Tarraconense, concedió á los católicos el uso libre de su religión y les permitió celebrar el segundo concilio de Toledo. Su sucesor Theudis les confirmó esta libertad, y Atanagildo, en la segunda mitad del siglo VI, fundó el monasterio Agaliense (1). Las persecuciones de Eurico y Alarico, que hicieron perder á la Iglesia muchos bienes muebles, no la hubieron de despojar de todos los raíces, pues el Concilio II de Toledo, celebrado en 527, mandó devolver á aquella los campos y villas de su propiedad, á la muerte de los clérigos que los usufructuaban (2); y el de Lérida de 531 adoptó providencias contra los ecle-

(1) Mendez Silva, *Catálogo real de España*, pár. III, fól. XV,

(2) Concil. II de Toledo, cap. IV.

siásticos que, al morir los prelados, invadian sus bienes muebles ó inmuebles (1). Leovigildo más tarde confiscó los bienes de las iglesias, desterró á los obispos católicos y puso en su lugar otros prelados arrianos, pero tambien restituyó después á algunas lo que les había tomado y aún dotó otras con nuevas propiedades. Así consta que lo verificó por lo ménos con el monasterio Servilano, al cual después de reintegrado en su hacienda, dió un lugar inmediato á Mérida, en cabeza de su prelado Nuncto, monje recién venido de Africa, famoso por su santidad (2). Convertido Recaredo al catolicismo y con él la mayoría de su nacion, restituyó á sus legitimos dueños los bienes confiscados, no sólo á las iglesias sino á los particulares, fundando y dotando con su patrimonio nuevos templos y monasterios (3). No fueron ménos liberales los demás monarcas sus sucesores. Sisebuto fundó y dotó la iglesia de Santa Leocadia de Toledo (4); Chindasvinto, el famoso monasterio de Compludo y el de San Roman (5); Recesvinto, la iglesia de San Juan de Baño, cerca de Dueñas (6); Ervigio y Egica fueron proclamados bienhechores del clero en los concilios XIII y XIV de Toledo (7). Todavía en tiempo de Leovigildo había prelados bastante ricos para fundar con sus rentas grandes establecimientos piadosos. Paulo, diácono, cuenta de Mazona, metropolitano de Mérida, que fundó y dotó un hospital para toda clase de enfermos sin distincion de libres ó siervos, cristianos ó judíos, encargando que se aplicase á él la mitad de todas las ofrendas y regalos que llevaran á su palacio (8).

Además de las donaciones voluntarias de los fieles, contribuyeron en

(1) Concilio de Lérida, cap. XVI.

(2) Paulo diácono, que da esta noticia, cuenta despues que los vecinos del lugar concedido á Nuncto dijeron entre sí: vamos á ver quién es ese nuevo señor á quien somos dados: que habiéndole visto feo y mal vestido, dijeron: vale más morir que servir á tal señor; y que al cabo de algunos dias encontrando solo á Nuncto, guardando unas ovejas, le asesinaron. Presos despues de algun tiempo los asesinos y presentados á Leovigildo, dijo este monarca: dejadlos libres, que si ellos mataron al siervo de Dios, Dios los castigará sin nuestro auxilio; y en efecto, prosigue Paulo, el diablo se apoderó de ellos y los mató despues de atormentarlos algunos dias. (*De vita PP. Emeritensium.*)

(3) *Chronicon Biclarense*, anno 586.

(4) Roderic., *De reb. Hispan.*, t. VI, lib. cap. XVII.

(5) Morales, *Crónica de España*, t. VI, lib. XII, cap. XXVIII.

(6) Así resulta de la inscripcion que copia Masden en su *Hist. crit. de España* tomo IX.

(7) Conc. Tolet. XIII., can. 4, y XVI, can. 7.

(8) *De vita PP. Emeritensium.*

gran manera á dotar ricamente á la Iglesia, las disposiciones canónicas que le atribuyeron el derecho á ciertas herencias. Disfrutaba desde luégo la de sus libertos que morían sin herederos legítimos, con la circunstancia de que éstos y su posteridad no salían nunca de su patrocinio, y en todo caso la de los presbíteros y diáconos que, ántes de ordenarse, habían servido á la misma iglesia como colonos ó siervos (1). Tenían derecho también á heredar la mitad de todos los bienes que los eclesiásticos, sus administradores, hubiesen adquirido durante su administracion, cuando al ordenarse tuvieran algun patrimonio propio de cierta cuantía. Exceptuábanse tan sólo los bienes adquiridos por donaciones remuneratorias; pero éstos también correspondían á la Iglesia, cuando el clérigo no disponía de ellos por testamento (2). Los monjes al entrar en el claustro, podían conservar sus bienes propios y no perdían su derecho á heredar por testamento ó abintestato como si fuesen seglares; pero muchos de ellos renunciaban estos bienes á favor del monasterio cuando profesaban, y los clérigos, monjes y monjas que morían intestados y sin parientes dentro del sétimo grado, eran heredados por sus iglesias ó conventos respectivos (3). Con tantos medios de adquirir y la prohibicion de enajenar lo adquirido, sin circunstancias y formalidades muy señaladas, que venia establecida por los cánones desde tiempos anteriores y fué confirmada tantas veces después, no pudo ménos de crecer rápidamente el patrimonio eclesiástico.

Sin embargo, no contribuyó poco á menguarlo la codicia y la incuria de sus propios administradores. Las antiguas disposiciones canónicas, restringiendo la libre disposicion de los bienes eclesiásticos, son la prueba más concluyente de los abusos y usurpaciones de que eran objeto. Los antiguos cánones de la Iglesia oriental, reproducidos y confirmados en el segundo concilio de Braga, condenaban al obispo que, sin necesidad de la Iglesia ó sin conocimiento del clero respectivo, enajenara bienes eclesiásticos, mandaban que estos bienes fueran conocidos de los clérigos, á fin de que «no pudieran ocultarse y perderse á la muerte del prelado,» y castigaban á los obispos y presbíteros que «aplicaban caprichosamente las cosas eclesiásticas, las distribuían entre sus parientes ó las destinaban á usos propios (4).» El concilio de Valencia de 525 condenó á los clérigos que «con manos ra-

(1) Conc. Tolet. IV, cán. 70 y 74.

(2) Conc. Tolet. IX, cán. 4.

(3) *For. jud.*, l. 21, t. II, lib. IV.

(4) Conc. Bracar. II, cán. 14, 15 y 16.

paces y á manera de ladrones» tomaban los bienes del obispo al tiempo de su muerte, disponiendo para evitarlo que el prelado comprovincial más próximo se hiciera cargo inmediatamente de la iglesia vacante, formara inventario de sus bienes dentro de ocho días y lo remitiera al metropolitano, el cual nombraría quien los administrase (1). El concilio I de Braga, celebrado en 565, dispuso en confirmacion de una antigua costumbre, que las rentas eclesiásticas se dividieran en tres partes iguales, una para el obispo, otra para los clérigos y otra para el culto y la reparacion de los templos, debiendo ser administrada esta última por el arcipreste ó el arcediano, que darian cuenta al prelado de su inversion (2).

Estas acertadas providencias no hubieron de impedir completamente, sin embargo, la dilapidacion de los bienes eclesiásticos, ni de regularizar y garantizar su buena administracion. De ello dan irrecusable testimonio los concilios y los diplomas contemporáneos. Así el concilio III de Toledo censuró á los obispos que exigian de sus iglesias parroquiales contribuciones injustas, y mandó acusar á los que tomaran de ellas más de lo que les correspondiese de derecho (3). El concilio IV de la misma ciudad condenó igualmente á los sacerdotes que usurpaban y aplicaban á usos propios las cosas donadas á las iglesias erigidas por los fieles, y ordenó que el obispo que tomase de sus rentas más del tercio, fuese acusado al concilio por el patrono (4). Entre tanto se habia introducido entre los seglares la abominable costumbre de hacer objeto de grangeria el patronato de las iglesias, edificándolas á su costa y manteniendo el culto para hacer suyas las ofrendas y donaciones de los fieles y crear de este modo una propiedad que entraba desde luego en el comercio, como las cosas profanas (5). El concilio X de Toledo, conociendo estos abusos, censuró á los obispos que daban monasterios y parroquias á sus parientes ó favoritos, por lo cual, añadia, hay en algunas iglesias párrocos iníquos que roban lo que corresponde al prelado ó gravan á sus feligreses con exacciones injustas (6). El rey Égica suplicó á los padres del concilio XVI de la misma ciudad que condenasen á los obispos negligentes en procurar la reparacion de los templos ruinosos, á los que exigian á sus parroquias los tributos que ellos, por los prédios que disfrutaban

(1) Conc. Valent. II.

(2) Conc. Bracar. I, cán. 7.

(3) Cán. 50.

(4) Cán. 33.

(5) Conc. Bracar. II, cán. 11.

(6) Conc. Tolet. X, cán. 3.

ban, debían al erario, y á los que daban como estipendio las cosas de las mismas parroquias (1).

Las leyes civiles tuvieron que venir después en apoyo de las disposiciones canónicas. No siendo éstas bastante eficaces, ordenaron los monarcas, que el obispo, al hacerse cargo de su iglesia formara inventario de todas las cosas de ella, ante cinco testigos, y que si alguna faltase al tiempo de su muerte, la abonaran sus herederos al sucesor en la mitra (2); que fuese nula toda enajenacion, que sin los requisitos canónicos, hiciera el prelado, el presbítero, rector ó párroco ó cualquiera de los clérigos (3); que el obispo, que segun una nueva costumbre, percibiera el tercio de la renta eclesiástica correspondiente á las parroquias, lo invirtiera en su reparacion, y el que no lo percibiese cuidara tambien de que ésta se verificase bajo su vigilancia; que los mismos prelados no gravasen con exacciones arbitrarias los dos tercios de las mismas rentas eclesiásticas asignados al clero y á los templos; y que tuviera un sacerdote al ménos toda iglesia que poseyese 10 siervos (4). Por último, el rey Wamba, considerando que muchos prelados se apoderaban con *rapacidad insaciable* de los bienes de las parroquias y monasterios para adjudicarlos á la Iglesia principal ó á otras iglesias, ó los cargaban con pensiones ó estipendios, invocando después la prescripcion de 50 años (con lo cual, no sólo disponían de lo ageno, sino que cometían un sacrilegio, de que nadie se atrevia á acusarles por temor á su autoridad) mandó que no les valiera en adelante aquella prescripcion; que los herederos de los patronos de las iglesias despojadas, y en su defecto cualquier persona acusara á tales prelados: que respetándose las posesiones de 50 años y encomendando á Dios el castigo de los usurpadores, se restituyeran todas las cosas usurpadas y poseídas durante ménos tiempo, cuyo dominio no se podría ya convalidar en lo sucesivo, y podría ser reclamado por el dueño legítimo en cualquiera época: que si el prelado no verificara la restitucion, ni abonara el importe de lo reclamado, se le castigara con excomunion y penitencia: que se impusiese la misma pena al obispo que maliciosamente retuviese alguna cosa usurpada por su antecesor; que el juez que no aplicara esta ley, indemnizara á la iglesia despojada de lo que hubiera perdido; y que los prelados, al instituir á los párrocos, les enterara de los bienes propios

(1) Conc. Tolet. XVI, tom. régio.

(2) *For. jud.*, l. 2, t. I, lib. V.

(3) *Id.*, l. 3, t. I, lib. V.

(4) *Id.*, l. 5, t. I, lib. V.

de sus iglesias, mostrándoles las escrituras y documentos que justificaran su adquisicion (1). Todas estas providencias y otras varias que pudieran citarse, indican claramente la inseguridad del dominio de la Iglesia; y si éste, siendo el más garantido, andaba tan perturbado, júzguese cuánto más lo estaría el de los particulares, sobre todo si no contaban con el favor de los poderosos, ó con el auxilio de una numerosa clientela.

La Iglesia utilizaba sus propiedades, ora cultivándolas por medio de sus esclavos ó de sus colonos, y percibiendo toda la renta ó una parte de ella, ora dándolas temporalmente á sus clérigos por via de estipendio. De las cultivadas por esclavos percibia todo el fruto, anticipando los gastos; de las entregadas á colonos adscritos tomaba la parte establecida por costumbre, siendo de cuenta de ellos la anticipacion. Los colonos eran generalmente libertos ó descendientes de libertos, que al salir de la servidumbre habian quedado bajo el patrocinio de la iglesia manumitente, y obligados á contribuirle con una parte de los frutos de las tierras que ántes cultivaban ó con otras prestaciones y servicios personales. Habíalos tambien manumitidos por señores particulares, con la condicion de permanecer bajo el patrocinio de alguna iglesia, á la cual contribuian con lo que correspondiera á su patrono. Las leyes visigodas no tratan sino incidentalmente de estos colonos; mas el cánón 16 del concilio IX de Toledo da claramente á entender que su obligacion principal consistia en pagar censo á la Iglesia (2). Por eso los cánones, después de no autorizar la manumision de tales siervos, sin que el prelado manumitente indemnizase á la Iglesia de su valor (3), prescribieron tan repetidas veces que el manumitido y su descendencia quedaran siempre sujetos á aquel patrocinio, á ménos que el obispo que lo manumitiera diese en su lugar dos siervos de igual precio (4). Por eso dispuso el concilio IV de Toledo que, no sólo el liberto, sino sus descendientes, practicasen cada uno á su vez, ante el obispo, acto de reconocimiento de su estado y de su obligacion de obedecer y de contribuir á la Iglesia segun sus facultades (5), en lo cual puede descubrirse uno de los orígenes del homenaje que

(1) *For. Jud.*, l. 6, tít. I, lib. V.

(2) "In dominium partis alterius rei sue censum nullo modo transire permittimus," dice el cánón citado al prohibir á los libertos de la iglesia la enajenacion de sus bienes.

(3) Conc. Tolet. IV, cán. 67: "Episcopi qui nihil ex proprio suo ecclesie Christi compensaverunt... liberos ex familia ecclesie... facere non presumant..."

(4) Conc. Tolet. IV, cán. 68.

(5) Conc. Tolet. IV, cán. 70: "Liberti ecclesie, quia nunquam moritur eorum

rindieron después los vasallos á sus señores, cada vez que tenían uno nuevo ó entraban ellos en su servicio. Por eso, en fin, el liberto que abandonaba por otro el patrocinio de la Iglesia, y amonestado no volvía á él, caía de nuevo en su anterior servidumbre (1).

Los libertos debían recibir al tiempo de su manumision alguna parte de la hacienda de la Iglesia para mantenerse con ella y servir á sus patronos. El concilio de Agde celebrado en 506, que era uno de los recibidos en España, disponia que los obispos respetasen estas donaciones hechas por sus antecesores á los libertos, en cuanto no excedieran de 20 sueldos en tierras, viñas ó casas (2); por donde se ve claramente que los donatarios se convertían en colonos de la Iglesia y contraían la obligacion de satisfacerle los censos y prestaciones á que aludian los concilios de Toledo. La Iglesia á su vez quedaba obligada á defender su persona y su peculio (3), de la misma manera que algun tiempo después se comprometían los señores feudales y solariegos á defender contra todo el mundo la persona y bienes de sus vasallos. Por último, la Iglesia se encargaba de la educacion de los hijos de sus libertos y les obligaba á recibirla, considerando como una falta punible en sus padres el entregarlos á otros con tal objeto (4).

Ninguna disposicion canónica prescribia la forma en que se debía dar á los clérigos sus emolumentos, pero se infiere de muchas la costumbre de otorgárselos en tierras, que ellos cultivaban y que por su muerte se devolvían á la Iglesia. El concilio de Agde ántes citado disponia que lo que poseyeran los clérigos por remuneracion de la Iglesia no pasara nunca á su dominio, cualquiera que fuese el tiempo de su posesion (5). El concilio IV de Toledo ordenaba que «los eclesiásticos que tuviesen campos ó viñas de la

patrona, a patrocinio ejusdem nunquam discedant nec posteritas quidem eorum sicut priores canones decreverunt; ac ne fortè libertas eorum in futura prole non pateat ipsaque posteritas naturali ingenuitate obtinens, sese ab ecclesie patrocinio subtrahat, necesse est ut tam idem liberti quàm ab eis progeniti professionem episcopo suo faciant, per quam se ex familia ecclesie liberos effectos esse fateantur, ejusque patrocinium non relinquunt, sed juxta virtutem suam obsequium ei vel obedientiam præbeant." El cánón 9 del concilio VI de Toledo repitió la misma disposicion, mandando que este acto de reconocimiento se practicara por los libertos cada vez que entrara á gobernar la Iglesia un nuevo prelado, y que si no lo hicieran dentro de un año, volvieran á caer en la servidumbre.

(1) Conc. Tolet. IV, cán. 70.

(2) Conc. Agathense, cán. 7.

(3) Conc. Tolet. IV, cán. 72.

(4) Conc. Tolet. VI, cán. 10.

(5) Cán. 59.

Iglesia para su sustento, los poseyeran hasta su muerte, y que después se devolvieran á aquella ó se trasfiriesen á aquel á quien el obispo los diera por prestaciones y servicios á la misma Iglesia (1). Todas estas prescripciones concuerdan perfectamente con la del papa Simaco, en su epístola al obispo Cesáreo, que hace parte de su antigua Coleccion canónica de España, segun la cual podian darse temporalmente á los clérigos, á sus mandatarios y áun á los extraños en caso de necesidad, las propiedades de la Iglesia (2). Tambien conviene con los citados cánones una ley visigoda, segun la cual los herederos del obispo ó de otros clérigos que hubiesen encomendado sus hijos á la Iglesia, recibiendo de ella tierras ú otros bienes, debian perderlos inmediatamente si los encomendados abandonaban el servicio eclesiástico, volviendo al estado seglar. Esta disposicion era igualmente aplicable á los clérigos que tenian bienes de sus iglesias y dejaban de servirla por cualquier causa; pero las viudas de estos clérigos, cuyos hijos estaban encomendados del mismo modo, no debian ser privadas durante su vida de los bienes eclesiásticos que el padre hubiese disfrutado (3).

III.

DEL COLONATO Y DEL PRECARIO ENTRE GODOY ROMANOS.

Alguna parte de la tierra distribuida á los propietarios alodiales del órden civil fué tambien á manos de sus libertos y colonos. Los esclavos manumitidos llevaban casi siempre algun peculio adquirido por ellos durante su servidumbre, ó dado por sus señores al tiempo de emanciparlos; pero si no quedaban enteramente libres, no era tampoco completo su dominio. Habia, en efecto, dos clases de manumision: por la una se concedia al siervo el estado de *ciudadano romano*, segun la expresion que todavia se usaba en los documentos visigodos, sin ninguna restriccion de la libertad, y por la otra se les otorgaba tan sólo el estado de *ingenuidad*, pero con limitaciones determinadas de gabelas y servicios á favor del patrono. Esta distincion, que ya daban á conocer los cánones, prohibiendo conferir órdenes sagradas á los libertos que no estuvieran manumitidos de aquel primer modo, ha sido plenamente confirmada despues con la publicacion de las *Fórmulas visigodas* halladas en la Biblioteca real de Madrid. Por ellas se ve que la emanci-

(1) Cán. 4.

(2) *Collect. canonum Ecclesiae Hispan.*, tég. 140, I.

(3) *For. jud.*, l. 4, tit. I, lib. V.

pacion se hacia ya con la cláusula de que mientras viviera el manumitente habia de permanecer el liberto bajo su patrocinio, y que sólo despues de la muerte de aquel quedaria éste libre de toda prestacion (obsequio) y con derecho á residir donde quisiese (1), ó ya con la condicion de que desde el mismo dia del otorgamiento tendria el manumitido aquel derecho y plenísima libertad (2). Las mismas Fórmulas dan tambien testimonio de la costumbre de donar alguna cosa el patrono al liberto al tiempo de la manumision. «Os dejo vuestro peculio, dice una de ellas, y para confirmar vuestra ingenuidad, os doy en tal lugar esto y aquello, que adquiri de la munificencia de nuestro glorioso señor, pero con la condicion de que mientras yo viva, me prestes como ingénuo el obsequio debido.....» (3).

¿Pero en qué consistia este *obsequio*, principal diferencia entre los libertos de una y otra clase? No lo hallamos determinado en ninguna ley ni documento de la época; de donde infiero que así podia limitarse á obedecer y tributar al patrono las consideraciones y servicios que la gratitud exige, como extenderse además al pago de censos y tributos, y á la prestacion de obras personales las más gravosas. Pudiendo los patronos estipular sobre este punto lo que juzgasen más conveniente, segun sus circunstancias, las de los libertos y las que mediaran en la manumision, hubieron de ser varios y diversos los usos y costumbres. Pero sabiéndose que los manumitidos quedaban por ministerio de la ley, bajo el patrocinio del señor, á no ser que se les eximiera de él expresamente; que solian recibir tierras del patrono en el acto de la manumision, que eran como prenda de union entre ambos; que estos libertos debian á sus patronos prestaciones (*obsequia*); y que en tal concepto pagaban sus censos los libertos de las iglesias, bien se puede asegurar que los de patronos seculares sufririan gravámenes semejantes.

En confirmacion de este aserto puede citarse tambien una ley visigoda, la cual, aludiendo á los colonos que los propietarios solian poner en sus tierras, supone ser inherente á ellos la obligacion de contribuir al patrono con ciertas prestaciones ó censos. Dáse á entender en esta ley, á pesar de lo oscuro de su texto en el original latino, que si el colono (*accola*) puesto por el dueño en la heredad trasmitia á otro el *tercio* de ella (*tertium*), es decir, la parte de tierra dejada á los romanos, el adquirente debia contribuir por

(1) *Formules wisigothiques inédites publiées d'après un manuscrit de la bibliothèque de Madrid par Eugene de Roziere.*—Paris, 1854, Fórmulas III y IV.

(2) *Formules wisigothiques, etc.*, II y IV.

(3) *Id.* Fórmula V.

ella al patrono del mismo modo que lo hiciera su causante (1). De esta ley se deducen dos hechos importantes: uno, que los patronos daban tierras en colonato á sus clientes, y otro, que el tercio de las dejadas á los indígenas solia poseerse por éstos como colonos y bajo el patrocinio del dueño de los otros dos tercios. El traductor castellano del *Forum Judicum*, queriendo hacer una obra de inmediata aplicacion, prescindió del sentido histórico de muchos textos, ó los acomodó á las circunstancias y á la nomenclatura del siglo xiii, en que escribía. Así traduce la ley citada, diciendo que si «aquel que tiene la tierra (como labrador puesto por otro) diere la tercia parte de la tierra á otro que labre, pague cada uno dellos la renda de la tierra segun la partida que tiene» (2). Parece por estas palabras que el legislador quiso sólo establecer una regla de proporcion en el pago de la renta, cuando la heredad se dividiese para enajenarla; mas no es esto lo que resulta del texto latino, si se considera que las leyes visigodas llaman generalmente *tertias* en las propiedades, no á esta parte alicuota de ellas, sino á todas las tierras en cuyo disfrute continuaban los romanos. Además, tampoco se comprende ni se explica por qué habia de aplicarse la regla de proporcion, cuando se enajenara la tercera parte de la heredad del colono, y no cuando fuese enajenada una parte mayor ó menor.

Por lo demás, las mismas leyes visigodas demuestran cuán incompleto y limitado era el dominio de los libertos en las tierras que disfrutaban. Estábales rigurosamente prohibido, bajo graves penas, abandonar á sus patronos, ó á sus descendientes (3); y como dejar al patrono cuya heredad se cultivaba, equivalia á abandonar esta heredad y dejar de prestar los servicios debidos por ella, es de creer que los libertos en cuya manumision habia mediado concesion de tierras, quedaban como colonos adscritos á las mismas, y obligados, por lo tanto, á contribuir al patrono con una parte mayor ó menor de los frutos. Consta, además, que á veces el manumitente imponia al manumitido la obligacion de no disponer de su peculio, ni aún en favor de sus hijos, con lo cual quedaba reducido su derecho á un mero usufructo, en que tenia el patrono la nuda propiedad (4). Además el patrono que habia dado algo á un liberto que moria después fuera de su servicio y sin hijos,

(1) *For. jud.*, l. 15, t. II, lib. X. «Qui accollam in terra sua suscepit et postmodum contingat ut ille qui suscepit, cuicumque tertiam reddat, similiter sint et illi qui suscepti sunt, sicut et patroni eorum qualiter unumquemque contingerit.»

(2) Fuero juzgo, l. 15, t. II, lib. X.

(3) *For. jud.*, l. 13 y 20, t. VII, lib. V.

(4) *Id.*, l. 14, t. VII, lib. V.

legítimos, tenía derecho á toda su herencia. El liberto que permanecía en la tierra de su antiguo señor, no podía disponer sino de la mitad de lo que ganaba en ella, porque la otra mitad correspondía al mismo señor. El patrono de un liberto que se encomendaba al patrocinio de otra persona, no sólo tenía derecho á recobrar cuanto le hubiese dado, sino también á percibir la mitad de lo que el mismo liberto adquiriese bajo la potestad del nuevo señor (1). Al liberto que moría intestado y sin hijos, sucedían el patrono y sus descendientes (2). El colono, según una ley de Chindasvinto ántes citada, no podía enajenar sus tierras, viñas, casas ó esclavos, y si alguno los compraba debía restituirlos sin resarcirse del precio (3). El dominio de todos estos bienes estaba, pues, dividido entre las familias de los libertos y las de los patronos, y así constituía entre ellas un vínculo estrecho de dependencia, de los más importantes en aquella organizacion social.

Estos poseedores eran también sin duda los que las leyes romanas vigentes á la sazón en España, llamaban *colonos* ó *inquilinos*. Los godos hubieron de aplicar á los libertos lo que en cuanto á ellos y á los colonos, ordenaba el *Breviario de Alarico*, si bien con algunas modificaciones, todas favorables á la libertad. Respecto de los manumitidos disponía aquel código, que aunque fueran ciudadanos romanos, no pudiesen instituir herederos á sus hijos, si el manumitente no se lo permitía, ya expresa y determinadamente, ó ya de un modo tácito, renunciando á su herencia; que sólo cuando el patrono hubiere fallecido pudieran los libertos con hijos transmitir á éstos su herencia, sin dar parte en ella á los descendientes del patrono; que si el liberto moría sin hijos y hacía testamento, dejase la tercera parte de su hacienda á los hijos ó descendientes por línea masculina del patrono; y que si moría intestado, sin hijos ni nietos, pero con padres ó hermanos, sucedieran en la mitad de su herencia los parientes más próximos, y en la otra mitad los descendientes del patrono (4). Mas si el liberto ciudadano romano descendía por su culpa á la condicion de *latino*, y en ella moría, aunque dejara hijos, el patrono ó sus descendientes sucedían en toda la herencia (5). Como consecuencia del derecho eventual, que reservaba la

(1) *Ford. jud.*, l. 13, t. VIII, lib. V.

(2) *Id.*, l. 14, cit.

(3) *Plebei glebam suam alienandi nulla umquam potestas manebit*. L. 19, t. IV, lib. V.

(4) *Lex romana Wisigottorum*, A. Gustavo Haenel, Lipsie, 1848.—*Novellar. Valentiniani III*, tit. IV.—*Interpretatio*, pág. 262.

(5) *Lex romana*, etc.—*Codicis Theodos.*, lib. II, tit. XXII.—*Interpretatio*, pág. 60.

ley al mismo patrono en los bienes del liberto, si este enajenaba alguna cosa con ánimo de defraudarlo, aquel ó sus hijos podían reivindicarla (1).

Los colonos estaban perpétuamente sujetos, según el mismo Breviario, á la servidumbre de la tierra y se trasmitían con ella. Si alguno abandonaba á su señor, poniéndose bajo la potestad de otro, no se admitía demanda alguna en juicio acerca de su estado, sin que primero fuese restituido á aquel que lo poseía (2). El que detentaba un colono ageno debía restituirlo con los tributos que hubiera devengado en su poder (*domino restituat et tributa ejus quamdiu apud eum fuerit, cogatur exolvere*) y pagar una multa. Los colonos varones se prescribían por la posesión de treinta años, y las mujeres por la de veinte; mas si ántes de tal tiempo eran hallados por su dueño, podía éste reivindicarlos juntamente con sus hijos y con su peculio. El señor era responsable por ellos, y como compensación de este gravámen no podían los colonos, sin conocimiento del mismo señor, enajenar sus tierras ni su patrimonio (3). Comparando ahora estas leyes propias de los españoles, cuando los godos se regían por otras especiales, con las que se insertaron después en el código comun á ambos pueblos, el *Forum Judicum*, se advierte desde luego cuanto mejoró el estado de los libertos colonos, por más que sus derechos como propietarios continuasen todavía bastante restringidos.

Eranlo también no poco los de los poseedores por el título llamado *precario*, usado también en España, según se ha visto en otro lugar. Llamábase así el contrato, por el cual el dueño de una tierra la daba en cultivo á otro que «había de percibir todos sus frutos, obligándose á entregarle la décima parte de ellos, á no ocasionarle ninguna contrariedad ni perjuicio, á promover en todo su utilidad, y defender la misma tierra» (4). De esta cláusula, que se lee en una de las fórmulas visigodas de que ántes he hecho mención, se infiere que el precarista era algo más que un arrendatario y que un censatario, puesto que las frases que se leen en ellas; *spondeo nullo unquam tempore pro easdem terras aliquam contrarietatem aut præjudicium parte vestre afferre, sed in omnibus pro utilitatibus vestris adsurgere, et responsum ad defendendum me promito persolvere*, más pare-

(1) *Lex romana*, etc.—*Pauli Sententiar.* Lib. III, tit. III.—*Interpretatio*, pág. 378.

(2) *Lex rom.*, etc. *Cod. Theodos.*, lib. IV, tit. XXI. *Interpretatio*, pág. 132.

(3) *Lex rom.*, etc. *Cod. Theod.* lib. V, ts. IX, X, XI. *Interpret.* páginas 146 á 150.

(4) *Formul. Wisigotti.*, XXXVI y XXXVII.

cen de una carta feudal, que de una escritura de arrendamiento ó censo.

Haciase aquel contrato á veces por tiempo limitado, y á veces sin tiempo: en el primer caso volvía la tierra al dueño, cumplido el término, y en ambos debía verificarse la misma reversion cuando el poseedor dejaba pasar un año sin pagar el cánon (1). Adoptaron además los legisladores otras disposiciones para que los señores no perdieran su dominio directo en tales heredades, ni la décima de los frutos, que segun la costumbre más general, debía satisfacerles el precarista. Los padres del concilio VI de Toledo ordenaron que los clérigos y las demás personas, que por razon de estipendio, disfrutaran bienes eclesiásticos, los poseyeran á título de precario y otorgaran de ello la correspondiente escritura, á fin de que en ningun tiempo se invocara la larga posesion en perjuicio de la Iglesia (2). Con este contrato, las corporaciones eclesiásticas y áun los particulares, hicieron fructíferos vastos terrenos incultos, que tal vez no habrian podido aprovecharse de otro modo, y los que quedaron desheredados en el reparto general de las tierras, pudieron aspirar á la ventaja de poseerlas, ya que no solian tener capital para adquirirlas en pleno dominio.

IV.

DEL SERVICIO MILITAR Y LA JURISDICCION INHERENTES AL DOMÍNIO TERRITORIAL.

En tiempo de los visigodos era todavía la obligacion de servir en la milicia, como entre los germanos, más bien personal, por razon del estado de cada uno, que real, ó en consideracion á la propiedad que se disfrutaba, segun después estuvo en uso. Los godos de raza, y particularmente los señores y nobles que tomaban parte en la eleccion de sus principes, se estimaban obligados por este solo hecho y por la tradicion, á defender, ayudar y servir al monarca elegido. Los españoles romanos, como vencidos y conquistados, estaban á la merced de sus dominadores, así para los servicios de la paz como para los trabajos de la guerra. Unos y otros hubieron de cumplir fielmente aquella obligacion en los primeros tiempos después dela conquista, ó por lo ménos, no ha quedado memoria de ningun hecho en contrario ó que les acuse de incapacidad ó de tibieza en el desempeño de sus deberes militares. Pero una vez establecidos los visigodos en la vasta

(1) *For. Jud.*, l. 11, 12 y 19, t. I, lib. X.

(2) *Conc. Tolet.*, VI, cán. 5.

extension de la Península, repitiéndose con harta frecuencia las campañas, ora para resistir á los enemigos exteriores, ora para sojuzgar á los rebeldes del interior, y relajada cada vez más la disciplina con las frecuentes mudanzas de soberano y de gobernadores, hubieron de eludir el servicio militar muchos de los que venian en la costumbre y en la obligacion de prestarlo. Fué menester entónces dictar leyes severas contra los capitanes que por dinero dejaban de compeler al servicio, ó permitian á los soldados volver á sus casas ántes de tiempo; contra los jefes y oficiales que abandonaban sus compañías; y contra los condes que en las ciudades y castillos no tenian dispuestas las provisiones necesarias para el ejército (1).

Indignado el rey Wamba contra «los que abandonaban la hueste ó no acudian á ella, los que preferian el regalo de su casa ó el interés de sus negocios á la salvacion de la pátria; los que no llevaban á campaña ni la vigésima parte de sus siervos, prefiriendo la guarda de su hacienda á la de su propia vida, como si pudiesen conservar la una sin la otra,» dispuso bajo penas severísimas que en los casos urgentes, cuando apareciesen en el reino tropas enemigas ó estallara una rebelion, todos los hombres del estado seglar ó eclesiástico, que se encontrasen en el lugar del suceso y dentro de las cien millas próximas, salieran con todas sus gentes en son de combate. Para los demás casos de guerra ordenó el mismo monarca que señalado el dia en que el rey, duque ó conde habia de salir en hueste, acudiesen á ella no sólo los convocados, sino todos los que supieran el lugar de su reunion, bajo pena de confiscacion y destierro á las personas principales, y *decalvacion* infamante y multa, ó esclavitud á las de menor estado; que no se eximiesen de esta obligacion sino aquellos que designara el rey, los menores de edad, los ancianos y los enfermos; que todos llevasen consigo la décima parte de sus siervos, armados de todas sus armas, y que ninguno dejase de estar á las inmediatas órdenes de su señor ó patrono ó de algun otro jefe (2).

Pero si bien en todas estas disposiciones severísimas no se advierte relacion alguna entre el disfrute de la propiedad y el servicio de las armas, una ley posterior del rey Egica ofrece de ella algun indicio, aunque no bastante determinado y concreto. Los siervos fiscales que como ántes he dicho, solian poseer tierras de la corona, con condiciones semejantes á las de los vasallos feudales de la Edad media, habian recibido, sin duda, al ser emancipados ellos ó sus ascendientes, alguna porcion de aquellas tierras ú

(1) *For. jud.*, leyes 1, 3, 4, 5 y 6, tit. II, lib. IX.

(2) *Id.*, l. 8 y 9, id. id.

otra donacion de su real patrono, pues existiendo tal costumbre entre los demás siervos, no es de suponer que dejase de guardarse entre los que disfrutaban mejor estado. Estos libertos no hubieron de contar al principio entre sus obligaciones la de llevar las armas, sin duda porque en los primeros tiempos era éste un derecho exclusivo de los godos libres de origen. Después fueron comprendidos con todos los demás súbditos de la corona, en las rigorosas leyes militares de Wamba citadas; mas sea porque no se estimase bastante eficaz la obligacion general prescrita en ellas, ó porque se creyese conveniente fortalecerla con otra especial, distinta de la de los meros súbditos, y dependiente de las relaciones entre tales libertos y la corona, es lo cierto que el rey Egica, reconociendo que ya acudían á sus ejércitos bastantes soldados, determinó, sin embargo, aumentar su número, mandando que sirviesen en ellos todos los libertos fiscales y sus descendientes; eximiendo tan sólo á los que se hallaran ocupados en otros cargos públicos por orden del rey ó del conde y á los enfermos notorios ó de otro modo impedidos (1). ¿No es de presumir que el fundamento de esta obligacion fueran las mercedes de tierras que solía hacer la corona á sus siervos al tiempo de manumitirlos?

Tambien existen indicios de la misma obligacion en la de los curiales y clientes respecto á sus patronos, fundadas igualmente en sus relaciones especiales y en las liberalidades que estos hacían á aquellos. Segun una ley visigoda ántes citada, los *curiales* y *privados de corte* debían dar caballos a rey (*caballos ponere*) (2), lo cual en el lenguaje del tiempo significaba servir al monarca con caballeros armados. Y teniendo los curiales gravados sus bienes con esta obligacion, es claro que los que poseían llevaban consigo el servicio militar. Otras leyes del mismo origen refieren que los patronos daban á sus clientes *armas* ú otras cosas que estos perdían cuando se separaban de su servicios (3); de lo cual debe inferirse que los *buccellarios* contraían la obligacion de servir á sus señores con ellas, del mismo modo que los clientes á los patronos germanos y los vasallos á sus señores feudales.

Tampoco se consideraba aún en aquel tiempo la jurisdiccion y potestad pública, como fruto del dominio privado de la tierra. Este principio, que

(1) *For. jud.* l. 19, t. VII, lib. V.

(2) *Id.* l. 19, t. IV, lib. V. "Curiales igitur vel privati qui caballos ponere..... consueti sunt..."

(3) *Id.* l. 1 y 2, tít. III, lib. V.

tanto contribuyó á reorganizar la sociedad, casi disuelta por la conquista, no se desenvolvió hasta mucho después, es decir, cuando la propiedad fué un vínculo más estrecho entre el propietario y la misma tierra. Pero si todavía no era ésta el origen inmediato de la jurisdiccion, ya comenzaba á contribuir de algun modo á establecerla, creando relaciones sociales que la producian aunque limitada. La jurisdiccion se ejercia en general por los delegados del rey, con los nombres de duques, condes, vicarios, *assertores pacis*, tiufados, milenarios, centenarios, decanos y defensores, ó por el rey en persona, y á veces por los obispos; pero además existia otra especie de jurisdiccion privada, la de los señores sobre sus esclavos, y la de los patronos sobre sus clientes. La primera procedia del dominio señorial, y aunque en su origen no tuviese relacion alguna con la propiedad de la tierra, llegó en cierto modo á depender de ella, cuando los siervos quedaron perpétuamente adscriptos á la gleba y se les reconoció por costumbre el derecho de no ser separados de las heredades en que prestaban su servicio. Transmitiéndose necesariamente tal jurisdiccion con estas heredades, claro es que quien las adquiria ganaba, por razon de las mismas, la potestad correspondiente sobre los hombres que las poblaban y hacian productivas. Cuando estos siervos eran manumitidos con la condicion de seguir adscriptos al terroño, mejoraban ciertamente su estado, pero no salian enteramente de la potestad de sus patronos, los cuales continuaban teniendo sobre ellos la misma jurisdiccion que ántes.

Las leyes visigodas modificaron las romanas sobre la potestad dominical. Ordenaron que los siervos, reos de homicidio, ú otro delito capital, fueran sometidos al juicio público y no juzgados por sus señores; pero si los jueces dejaban de ejecutar la pena de muerte, quedaba al arbitrio de aquellos aplicarla ó remitirla. El señor que castigando á su esclavo le originaba, sin intencion, la muerte, jurándolo así, quedaba libre de toda pena. La ley conminaba con destierro, penitencia y confiscacion al señor que mutilaba voluntariamente á su siervo: mas si lo verificaba resistiendo ó vendiendo una ofensa material del mismo siervo, no sufría ninguna pena. Tambien correspondía al señor castigar al esclavo que le robaba algo de su propiedad ó de la de alguno de los demás con-siervos (1). Por lo tanto, la jurisdiccion dominical se extendia á todos los delitos no capitales, y aún á los capitales, como lo consintiesen los jueces.

Tambien suponen las leyes visigodas la facultad del patrono para casti-

(1) *For jud.*, leyes 12 y 13, tít. V, lib. VI, l. 21, tít. II, lib. VII.

gár con azotes á los que estaban constituidos bajo su patrocinio, que eran los libertos y los clientes ó buccelarios. No fijan tales leyes los límites ni la forma de esta potestad, pero la confirman positivamente al declarar irresponsable al que, castigando con azotes á su pupilo, *patrocinado* ó siervo, le causaba contra su voluntad la muerte (1).

La propiedad, pues, entre los visigodos no tenia aún todos los signos característicos del feudalismo, pero encerraba como en incubacion todos sus gérmenes. Procedía de la conquista, era el fundamento de muchos vínculos sociales, sufría algunas limitaciones en beneficio del Estado y de las clases privilegiadas, conservó las que el derecho romano establecía á favor de las familias, originaba ciertas obligaciones militares y confería alguna parte aunque muy corta, de la potestad pública. Abandonada á su propio y natural desenvolvimiento, hubiera producido un régimen feudal tan riguroso como el de Alemania, el de Inglaterra ó el de Francia. Pero una nueva conquista y la necesidad de recuperar lenta y laboriosamente la nacionalidad y el territorio, dieron lugar á un régimen, feudal en su esencia, puesto que no se conocía ni era quizá posible otra fórmula de organizacion social, pero bastardo en su forma.

CAPITULO III

Estado de la propiedad territorial en España bajo la dominacion de los árabes.

I.

CONQUISTA DE LOS SARRACENOS. — ESTADO DE LOS MOZÁRABES.

La reorganizacion de la sociedad y del Estado, muy adelantada bajo la monarquía visigoda, quedó profundamente trastornada, si bien no destruida del todo, con la invasion y conquista de los sarracenos. Desapareció el régimen político, modificáronse las relaciones del súbdito con el soberano y las que mediaban entre las clases sociales, se alteró un tanto de hecho el estado de las personas, y sufrió por consiguiente graves mudanzas el de la propiedad territorial. Veámos cuáles fueron éstas, y cómo á pesar de ellas no dejó de ser en España el dominio y posesion de la tierra

(1) *For. Jud.*, l. 8, tít. V, lib. VI.

un vínculo social importante y un elemento necesario de la nueva civilización.

Es un hecho averiguado, y ya hoy por todos los historiadores reconocido, que los árabes no entraron en España asolando pueblos indefensos, exterminando habitantes inermes y pacíficos, y apoderándose de todas sus riquezas como de cosa propia, según dan á entender los antiguos cronistas, sin advertir que tan exagerados conceptos estaban en contradicción con muchos hechos que ellos mismos narraban, rindiendo á la verdad tributo. Abiertas de par en par las puertas de la patria con la traición y derrota de Guadalete, no apercibidos á la defensa los más de los pueblos, quizá por no atribuir á aquella irrupción el carácter de una verdadera conquista, y faltos de dirección y de disciplina los que hubieran podido aún detenerla ó dificultarla, los mahometanos ocuparon la mayor parte de la Península con muy escasa resistencia, y la comenzaron á poseer sin temor de que los que no habían sabido defenderla fuesen capaces de recobrarla. Así es, que para consumir su atrevida empresa, no necesitaron emplear la devastación y el exterminio como otros conquistadores, y para asegurar su dominación no creyeron tampoco necesario reducir á la servidumbre á los vencidos, despojarles de sus propiedades como habían hecho los bárbaros, y ni aún privarles siquiera de sus leyes civiles, de su gobierno interior, de su culto é instituciones religiosas.

Esta política era además conforme con la ley mahometana que prohibía matar á las mujeres, á los niños, á los ancianos y á los mōnges, á ménos que se defendieran por armas, y mandaba guardar el seguro concedido al enemigo y los convenios con él estipulados (1). La misma tolerancia habían procurado inspirar los primeros kalifas de Oriente á sus huestes fanáticas en las anteriores conquistas del Islamismo. Cuando Abubeker, inmediato sucesor de Mahoma, entregó á Yezid el mando de su ejército y le envió á conquistar la Siria, dirigió una arenga á los soldados, diciéndoles entre otras cosas: «No abuseis de la victoria. No mancheis vuestras espadas con la sangre de los vencidos, ni la de los niños, las mujeres, ó los ancianos. Cuando os halleis en territorio enemigo, no taleis sus árboles, ni destruyais sus palmeras, ó sus frutos, ni saqueéis sus campos, ni sus casas. Tomad de sus bienes y de sus ganados lo que os haga falta, pero no des-

(1) Suma de los principales mandamientos y vedamientos de la Ley y Çunna, cap. XXXV. Publicada por la Academia de la Historia en el *Memorial histórico español*, t. V, pág. 247.]

truyais cosa alguna sin necesidad. Ocupad las ciudades y fortalezas, y derribad aquellas que puedan servir de refugio al enemigo. Tratad con compasion á los que se rindan y se humillen, y Dios os tratará á vosotros con misericordia. Oprimid á los rebeldes y á los soberbios, y á los que falten á los tratados. Que no haya falsedad ni ambigüedad en vuestros convenios con el enemigo. Sed fieles y leales con todo el mundo, y mantened siempre vuestra fé y vuestras promesas. No turbeis el reposo de los monges ni de los solitarios, ni derribeis sus moradas, pero herid de muerte al enemigo que os resista.» Estos nobles y sábios preceptos, tan conformes con el espíritu del Koran, como adecuados para facilitar la dominacion de sus propagadores, encontraron en España tanto más fácil cumplimiento, cuanto que la inmensa mayoría de sus habitantes se sometió prontamente al conquistador, obedeció á los emires y kalifas más constante y sumisamente que los súbditos musulmanes, y hasta les ayudó á veces á consolidar y mantener su gobierno.

No quiere esto decir que la conquista se verificase sin derramar sangre alguna, ni que fuese siempre suave para los cristianos el yugo sarraceno. Hubo desastres en la invasion, hubo persecuciones, hubo mártires, pero fueron mayores las calamidades ocasionadas por las guerras civiles entre las diversas tribus asiáticas y africanas que se disputaron el mando, que las causadas por la tiranía de los vencedores con los vencidos. Mucho sufrieron los cristianos bajo el imperio fugaz de algunos emires opresores y de no pocos walides ó gobernadores codiciosos, pero no más tal vez que los musulmanes sujetos á su poderío. En los periodos de guerra civil y anarquía que atravesó España, ya bajo la dominacion de turbulentos caudillos, ya cuando se disputaban el Califato independiente los Almoravides ó los Almohades, todos padecieron casi igualmente sin distincion de fé ni de origen. Alguna vez fueron perseguidos los cristianos, porque el fervor de su celo religioso les arrastraba á demostraciones ofensivas en concepto de los mahometanos; pero tales persecuciones fueron de corta duracion y nunca generales en toda la Península. Su condicion de hecho no era en todo igual á la de los musulmanes; pero sí tan favorable como podia serlo entónces la de un pueblo conquistado, que no se habia fundido ni podia fundirse con sus conquistadores.

Al apoderarse los árabes de nuestro territorio huyeron de sus casas y se refugiaron en las montañas de Astúrias, Navarra y Cataluña muchos naturales, la mayor parte ricos y de la nobleza hispano-goda, eludiendo así el yugo enemigo; pero la masa de la poblacion, la mayoría de los propietarios nobles y plebeyos, los curiales y privados, los buccelarios, los

colonos, los libertos y los siervos no abandonaron sus hogares, y resignados con la triste suerte de la patria, trataron de vivir en paz con los vencedores. Los emigrados debieron ser en escaso número, comparados con los sometidos, puesto que de otro modo no habrían podido albergarse ni vivir en los estrechos valles, ni en las escarpadas sierras que les dieron asilo. Esta poblacion numerosa, que permanecia en el país conquistado y que constituia la casi totalidad de sus habitantes, dado que no podia compararse con ella la que invadió el territorio y se esparció despues por las provincias, no perdió su estado civil, ni todos sus derechos politicos. Los hombres libres, los siervos, los libertos, los patronos, los clientes, los colonos y los privados, conocidos todos despues con la denominación comun de mozárabes, mantuvieron su respectiva condicion como en tiempo de la monarquía visigoda, puesto que continuaron rigiéndose por sus leyes. Hasta los nobles conservaron algunas de sus prerogativas en cuanto eran conciliables con el nuevo régimen politico. Los mozárabes tuvieron sus condes y jueces especiales que les administraban justicia, segun sus leyes, y estos cargos honorificos debieron de recaer en los más distinguidos de entre ellos. Los Santos mártires de Zaragoza, Voto y Félix, vivian rodeados de clientes y de siervos enmedio de la opulencia, ejercian la noble profesion de las armas y se entregaban al recreo de la caza, propio tan sólo de los caballeros, segun las costumbres de la Edad Media (1).

Conforme á las leyes y costumbres árabes, los vencidos que abrazaban la religion del Profeta quedaban en un todo igualados á los musulmanes; los que persistian en su fé tenian derecho á la proteccion de los vencedores y á ser tratados del mismo modo, mediante el pago de un tributo de capitation establecido sobre todos los no musulmanes (2). Este tributo era como el rescate de la noble condicion de ciudadano. Llamábase *ta'dyl*, que significa *igualacion*, porque en efectó, igualaba á los musulmanes con los que no lo eran en cuanto á la proteccion de sus personas y sus propiedades. Por eso el kalifa Aly decia de sus súbditos cristianos y judios: «No están ciertamente sujetos al tributo, sino para poner al mismo nivel su sangre con nuestra sangre, sus bienes con nuestros bienes» (3).

Esta fué tambien la norma de los kalifas que dominaron en España. Así es que los mozárabes, ó sea casi la totalidad de los godos romanos, no

(1) *Acta martir. Voti et Felix in.... España Sag.*, tomo XXX, págs. 401 y 402.

(2) Conde, *Historia de la dominación de los árabes*. Parte I, cap. XVI.

(3) Viardot, *Hist. des árabes, etc.* Parte II, chap. 1.º, pág. 47.

sólo conservaron su estado civil con sus propias leyes en todo lo concerniente á sus relaciones privadas, sino tambien sus jueces propios, condes y oficiales visigodos con jurisdiccion civil y criminal tan extensa, como que sólo para aplicar la pena de muerte necesitaban impartir el auxilio del wálid ó gobernador de la provincia (1). Conservaron además el ejercicio casi libre de su culto, gran parte de sus templos, su gerarquía y circunscripciones eclesiásticas, sus monasterios, sus prelados y sus ministros, sin más restriccion que la de no celebrar en las calles sus ceremonias religiosas (2). Fueron admitidos al desempeño de los cargos públicos, juntamente con los musulmanes, sobre todo á los de la milicia y los del palacio de los emires y kalifas (3). Por último, retuvieron los más de ellos la posesion de sus bienes con la libre facultad de enagenarlos, que muchos no tenian ántes, y sin otras limitaciones que las que la ley general imponia á los propietarios musulmanes, reducidas al pago del impuesto (4).

No fué siempre igual, sin embargo, la condicion de los cristianos, que si á veces protegian los emires sus personas y propiedades, á veces menospreciaban sus derechos con notoria injusticia. Abd-al Rhaman I dió un señalado testimonio de respeto á la propiedad cristiana absteniéndose de convertir en mezquita la mitad de la catedral de Córdoba, dedicada todavía en su tiempo al culto católico, hasta que los mozárabes principales de la ciudad convinieron en vendérsela por la enorme suma de cien mil dineros (5), y el permiso de reedificar las iglesias destruidas desde la conquista; mas á esto habia precedido que estando asegurado á los cristianos por los tratados la posesion de todo aquel templo, cuando se aumentó la poblacion con la venida de los árabes de Siria habia dedicado el gobierno á mezquita la otra mitad del edificio, siguiendo el ejemplo de lo que se habia hecho en Damasco, en Hemera y en otras ciudades conquistadas por los musulmanes,

(1) Isidoro de Beja, hablando del emir Okban dice: *Neminem nisi per justitiam proprie legis damnet..... Pacensis Chron.* núm. 61. Florez, *Esp. sagrada*, t. VIII, apén-dice 2.º—Alvaro de Córdoba hace mencion no sólo de los condes sino de otros jueces cristianos. (Carta 9.ª en Florez, *Esp. sagr.*, t. XI, pág. 151. Véase tambien el *Memoriale Sanctorum* de S. Eulogio, lib. III, cap. 16.) *Legibus nos propriis uti non prohibemur..... (Vita B. Joannis Abb. Gorgiensis, cap. XIII, §. 122. Acta Sanctorum 27. Februarii; citado por Herculano Hist. de Portugal, t. III, pág. 177.)*

(2) *Pacensis Chron.*, núm. 19. *Esp. sagr.*, t. III, pág. 262.

(3) *Eulogii Memoriale Sanctorum*, lib. II, cap. XVI y lib. III, cap. I.—Aymonius. *De translatione martirum*, lib. II, cap. X. *Esp. sagr.*, t. X, págs. 519 y 521.

(4) Dozy, *Histoire des Musulmans d'Espagne*, t. II, pág. 41.

(5) Cerca de cuatro millones de reales, que atendido el valor de la moneda en aquel tiempo, equivaldrian hoy á cerca de 44 millones.

donde con igual objeto se habia privado á los cristianos de la mitad de sus catedrales (1).

La mayor parte de las ventajas que disfrutaban los mozárabes, les estaban aseguradas por los tratados, que para la rendicion de ciudades principales, celebraron con los vencedores. Toledo capituló en 712 estipulando que aquellos de sus habitantes que no quisieran permanecer en la ciudad, saldrían de ella libremente, aunque perdiendo sus bienes: que todos los demás conservarían sus casas, tierras y propiedades de cualquiera especie: que mediante el pago del tributo (*ta'dyl*) podrían estos también practicar su culto y poseer las iglesias existentes, aunque sin edificar otras nuevas, ni hacer procesiones públicas sin autorizacion del Gobierno; y que se regirían por sus leyes civiles y religiosas y serían juzgados por sus jueces, con tal de que ninguno fuera castigado por convertirse á la fé musulmana (2). Iguales condiciones obtuvo la opulenta Mérida, á pesar de su obstinada resistencia al ejército de Muza, sin más gravámen, por razon de esta circunstancia, que la confiscacion de los bienes de las iglesias y de los que habían muerto con las armas en la mano durante el sitio (3). El conde Teodomiro, después de defenderse largo tiempo en la provincia de Murcia, logró aún de Abd-al-Azys una capitulacion más ventajosa, pues conservó para sí y sus habitantes la posesion y gobierno de la que los árabes llamaron *Tierra de Tadmír*, con siete ciudades, mediante la obligacion de pagar al kalifa cierto tributo (4). Zaragoza fué peor tratada á causa del impuesto considerable, que además de los ordinarios, le exigió Tharyk con el nombre de *rescate de sangre* (5). Pero con capitulaciones ó sin ellas, en casi todas partes quedaron á salvo la libertad personal, la propiedad inmueble de los individuos sometidos y el ejercicio del culto, variando tan sólo la cuantía del tributo, según los accidentes de la guerra y las circunstancias de los jefes que ejecutaban la conquista.

(1) Dozy, *Histoire des Musulmans*, t. II, pág. 49.

(2) Viardot, *Hist. des Arabes*, etc. Part. I.^a cap. II, pág. 77.

(3) Id., id., pág. 80.—Dozy, *Hist. des Musulmans*, t. II, pág. 40.

(4) Según el texto de esta capitulacion, que han conservado los historiadores árabes y aprobó el kalifa Walýd, cada "noble godo debia pagar al año un dinar de oro, cuatro medidas de trigo y otras tantas de cebada, vino, vinagre, aceite y miel, y cada siervo la mitad del tributo." Dozy, id., pág. 82, nota 1.^a

(5) Viardot, *Hist. des Arabes*, etc. Parte I.^a, cap. II, pág. 83.

II.

REPARTIMIENTOS DE TIERRAS ENTRE LAS TRIBUS CONQUISTADORAS.

Los hombres de las diferentes naciones y tribus que componian el ejército invasor no se creían tal vez perjudicados por estas capitulaciones, ni aunque las violasen muchas veces, tenían derecho alguno para resistirlas. Según las leyes musulmanas, los alistados en un ejército, además de la paga de campaña, tenían derecho á las cuatro quintas partes del botín, después de sacar la restante para el kalifa: el reparto debía hacerse por igual entre todos, aunque con doble porción á los de á caballo que á los infantes (1).

Contábase en el botín todo lo que se tomaba al enemigo por fuerza de armas, incluso los prisioneros y todo lo que el enemigo daba para obtener la paz; pero no las tierras, sin duda porque éstas no tenían valor entre tribus nómadas y errantes, más dadas al pastoreo que al cultivo, como lo eran los árabes cuando recibieron la ley de Mahoma. De ello ofrecen buena prueba el texto mismo del *Gunna*, que manda «partir en el lugar ó villa del campamento todo el despojo» (2), esto es, en el mismo sitio de la batalla. Esto mismo se infiere de un decreto de Al-Haken II, declarando las obligaciones y derechos de los guerreros en campaña. «Todos los despojos, dice, sacado e quinto que nos pertenece, se repartirán en el mismo campo ó lugar de la lid. El caballero tendrá dos partes, y el de á pié una: de las cosas de comer tomad cuanto necesiteis..... (3).» Si pues todos los despojos habían de repartirse en el mismo campo ó lugar de la lid, y si los soldados no tenían derecho sino á lo que les tocase en tal reparto, claro es que en él no podrían comprenderse las tierras y heredades del país, que no era posible conocer ni ménos dividir hasta después de abandonar el campo de batalla y ocupar y medir el territorio.

Pero aunque como botín no pudieron reclamar los invasores una participación en la propiedad territorial, era indispensable que la tuviesen por conveniencia ó por gracia, una vez decididos á guardar su conquista y á fijar su residencia en España. Hízose, por lo tanto, entre ellos un reparto de tierras, tomándolas principalmente de las abandonadas por los patricios emigrados, de las confiscadas á la Iglesia y de las conquistadas por fuerza de

(1) Suma de la ley y *Gunna*, cap. 35, *Memorial histor.*, pág. 333. Decreto del kalifa Al-Haken II; en Conde, *Historia de los árabes*, parte II, cap. VI, edición de Barcelona, 1844.

(2) Suma de la ley y *Gunna*, cap. 35, id.

(3) Conde, id., id.

armas. Mas esta primera distribucion de tierras no hubo de hacerse adjudicando á cada individuo un lote determinado, sino dando á cada tribu la posesion colectiva de una cierta porcion de terreno, á fin de que en comun la cultivasen y poseyesen. Esto se infiere de un pasaje del Cronicon de Isidoro de Beja, en que se dice: que «Al-Samah ó Zama, segun el cronista, dividió por suertes entre los sócios ó partícipes, los prédios y cosas muebles, que desde antiguo, y como presa, conservaban indivisos los árabes de todas clases, dejando una parte á dividir entre los militares y aplicando otra al fisco» (1). La expresion *gens omnis arabica* que emplea el cronista, alude sin duda á las diferentes tribus y castas que vinieron con Tharyk y Muza, cuya rivalidad empezó á manifestarse inmediatamente despues de la victoria y dió luego origen á tantos desastres. Las palabras *olim prædabiliter indivisum retemptabat* dan claramente á entender que aquella gente árabe habia ocupado desde tiempo ántes como despojos, y conservaba sin partir muchas heredades y aún cosas muebles. Infíerese tambien de este texto que el primer reparto de tierras no hubo de hacerse por autoridad pública, ó conforme á reglas emanadas de ella, sino por ocupacion arbitraria, y sin tener en cuenta el interés público, puesto que el emir tuvo que destinar una parte al fisco, sin duda por no haberla este tenido, ó haberla tenido escasa en la division primitiva. Los militares entre quienes habia de repartirse la separada del acervo comun, eran probablemente los que á la sazón servian en la guardia del emir, único ejército permanente que tenian los árabes, para acompañar y defender la persona del kalifa y mantener el orden interior, pues en tiempo de guerra eran soldados todos los musulmanes capaces de llevar las armas. Los siervos que á la sazón cultivaban las tierras ocupadas por los conquistadores, se mantuvieron en ellas. Siendo los indigenas los que mejor conocian entónces los procedimientos de la agricultura, era natural que se les impusiese la obligacion de seguir prestando despues de la conquista, el mismo servicio que antes prestaban á sus antiguos señores. Su suerte, sin embargo, fué muy diferente, segun que las tierras á que estaban adscriptos pasaban al dominio particular (ó continuaban en el del Estado. Los siervos de las tierras repartidas pagaban á los propietarios musulmanes las cuatro quintas partes de sus frutos: los de las tierras del Es-

(1) «*Pædia et manualia vel quidquid illud est quod olim prædabiliter indivisum retemptabat in Hispania gens omnis Arabica, sorte sociis dividunt: (partem reliquit militibus dividendam), partem ex omni re mobili et immobili fisco associat.*» Isid. Pacensis Chron. núm. 48, in *Esp. Sagr.*, t. VIII, pág. 305.

tado contribuian solamente al erario con el tercio de los productos (1).

Al-Samah fué, pues, quien al parecer constituyó entre los árabes de España la propiedad territorial verdadera, la individual, que no conocian ni necesitaban tal vez las tribus nómadas de Asia y Africa, y fué, como es sabido, el principal elemento de la civilizacion europea. La necesidad de ella hubo de irse sintiendo más cada dia, segun fueron menguando las ganancias de la guerra, fijando su residencia los errantes invasores, creciendo la poblacion y el consumo. Así es que á aquellos primeros repartos de tierras sucedieron otros muchos, que tales circunstancias hacian indispensables. El emir Ambisah, sucesor de Al-Samah, por nombramiento del kalifa, distribuyó nuevas tierras entre los musulmanes más pobres, unas incultas y baldías, y otras abandonadas por muchos judíos sus dueños que, sin cuidarse de ellas, marcharon á Palestina para seguir al impostor Zonarias, anunciado á la sazón como el Mesías. Los cronistas árabes hacen mencion de otro reparto que en 743 verificó el emir Husan, más conocido por Abul-Khatar, despues de haber sujetado con los berberes ó moros que trajo consigo de allende el estrecho, á los árabes rebeldes que, negando obediencia al walid de Africa, se habian declarado independientes de toda soberanía, y apoderándose del gobierno de varias ciudades. Husan distribuyó tierras á las tribus de Siria y Arabia, que eran las más poderosas, y competian entre si por apoderarse de la comarca de Córdoba, dándolas á cada una, en regiones, por su clima y productos semejantes á las de su origen respectivo y con mayor extension. Entraron en este reparto tanto las tribus ya establecidas en España, como las que vinieron despues, procedentes de Beledý, en Arabia, de Hemesa, de Palestina, de Alordania en las orillas del Jordan, de Damasco, de Kimrin, Wacita, Irak y Kairwan. Los árabes beledys ya establecidos conservaron todo lo que poseian, dándose las nuevas propiedades en Ocsonoba y Beja, Sevilla, Niebla, Sidonia y Algeciras, Málaga, Granada, Jaen, Cabra, y en otras provincias más lejanas. El débil reino ó señorío de Teodomiro no pudo ya entonces mantener su autonomía, y hubo de desaparecer con Atanagildo, que á la sazón lo gobernaba, puesto que las tierras de Murcia fueron tambien de las distribuidas entre los árabes.

Con todo esto, sin embargo, no tenian para proveer desde luego á su sustento los que por llegar los últimos, no disfrutaban ya otras heredades productivas, y necesitaban algun tiempo para romper y hacer fructificar las nuevamente ganadas. Entonces los emires adoptaron una costumbre muy

(1) Dozy, *Hist. des Musulmans*, tomo II, pág. 39.

seguida despues por todos los reyes de España, que fué consignar á aquellos á quienes no se daban tierras, pensiones alimenticias sobre las rentas que de heredades propias, cultivadas por colonos cristianos, poseia el erario. Tales eran aquellas cuyo dominio directo se reservó el Estado, dejándolas en poder de los siervos que las trabajaban, mediante la condicion de contribuir al Tesoro con el tercio de todos sus productos. Este tercio fué el que sirvió luego para constituir rentas á manera de feudos con que remunerar los servicios de los últimos conquistadores. Así no perdieron nada los colonos del fisco, pues para ellos era indiferente pagar sus tributos al Estado ó al propietario particular á quien el kalifa hubiere trasferido su derecho.

Mas no solia acudirse á este recurso cuando las revueltas interiores ó los azares de la guerra daban ocasion ó pretexto para apoderarse de las tierras dejadas á los cristianos, aunque fuese violando las estipulaciones concluidas. Así sucedió cuando fué destinada á mezquita la primera mitad de la catedral de Córdoba; y el mismo Abd-al-Rhaman I, que no osó apoderarse de la otra mitad, sino despues de comprarla por un precio subido, no tuvo reparo en confiscar las tierras de Ardabasto, uno de los descendientes de Witiza, fundándose en que eran demasiada propiedad para un cristiano (1). Por otra violacion flagrante de los tratados desapareció el pequeño Estado constituido en Murcia por Teodomiro.

No eran solamente los emires y los kalifas los autores de tales desmanes; pues las solian cometer aún más graves los gobernadores subalternos de las provincias. Ni eran tampoco solamente los cristianos los únicos despojados, que los musulmanes no experimentaban tal vez ménos la rapacidad de sus caudillos. Al-Haorr, emir de Córdoba por los años de 715 á 718, mandó entregar al erario los bienes arrancados á los cristianos durante la paz, so color de tributos, y con tormentos crueles hizo restituir los tesoros que ocultaban los alcaides y walides (2); aunque, si ha de creerse á los historiadores árabes, Al-Haorr fué un gobernador rapaz y tirano, que satisfaciendo en los berberes ó moros sus ódios de raza, empleó principalmente aquellas crueldades con los que no se prestaban á saciar su codicia. Yahia en los tres años que desempeñó el emirato, por los de 725, atormentó igualmente á muchos sarracenos para obligarles á devolver los bienes robados en tiempo de paz, algunos de los cuales restituyó á los cristianos (3). El emir Al-

(1) Dozy, *Hist. des Musulmans*, tom. II, pág. 49.

(2) *Pacensis Chron.*, núm. 44.

(3) *Idem id.*, núm. 54.

Haitan, que gobernaba en 729 y oprimió duramente á los musulmanes, despojó á muchos de ellos de sus bienes bajo el pretexto de iguales restituciones (1). Abd-Al Rhaman I devolvió á los mozárabes algunas iglesias, de que estaban privados con infracción de las capitulaciones, aunque ordenando al mismo tiempo destruir las que con igual infracción, se habían edificado despues de la conquista (2). ¡De cuántas otras violencias no serian victimas los cristianos en los continuos trastornos y las sangrientas guerras civiles que después ocurrieron bajo la fugaz dominacion de gobernadores codiciosos, sin más norma ni ley que su arbitrio, y sin otra responsabilidad efectiva que la que les solian exigir sus propios súbditos con la rebelion y la fuerza de las armas! El emir Okbah, para remediar las iniquidades cometidas bajo el imperio de sus antecesores, destituyó á todos los walides que por su crueldad y avaricia se habían hecho tan odiosos á los musulmanes como á los cristianos; castigó severamente las concusiones de los recaudadores y llenó las cárceles con malversadores de los caudales públicos (3). Apoderado Thueba, por traicion, del emirato de Córdoba, y Samail del de Zaragoza, los walides de las provincias, siguiendo su ejemplo, miraban como rebaños propios, segun la expresion de los cronistas árabes, así á los cristianos como á los musulmanes pacíficos: vagaban por los pueblos despojándolos con estorsiones arbitrarias, exigiéndoles desusados tributos y apoderándose de cuanto producian las tierras. Los de Andalucía pretendian ser obedecidos por los de Toledo y Mérida; éstos no reconocian superioridad en los de Córdoba ni en los de Zaragoza; todos procuraban acrecentar su partido ofreciendo por estímulo la licencia y la impunidad, y así los propietarios y colonos no tenían más recurso que el de la propia fuerza para defender y conservar sus pastos, sus rebaños y sus propiedades (4). Los emires y principales caudillos toleraban estos abusos para ganar popularidad; y si los musulmanes no se eximian de tan crueles persecuciones, júzguese la suerte que correrian los indígenas en periodos de tanta confusion y desórden.

A veces los accidentes de la guerra con los asturianos ó los aragoneses daban ocasion á semejantes despojos. Los habitantes de los territorios, que unos ú otros contendientes recorrían en sus algaradas, veían á cada paso

(1) Conde, *Historia de los árabes*, etc., part. I, cap. XXIII.

(2) Conde, *Idem*, part. I, cap. XXIV.

(3) Conde, *Idem*, part. I, cap. XXVII.

(4) Conde, *Idem*, part. I, cap. XXXVI.

arrasados sus campos y destruidas sus propiedades. Si algunos de ellos transigian con el enemigo para no ser tan mal tratados ó le seguian en su retirada, los demás sufrían en su persona y bienes la venganza que no podia tomarse en los fugitivos. Alfonso I de Aragon invadió la Andalucía, llegando con su ejército hasta Córdoba en 1124; y como le siguiesen en su retirada hasta cerca de 10.000 mozárabes, á los cuales dió en su tierra heredades y nobleza, muchos de los que quedaron en las provincias del kalifa fueron despojados de sus bienes, ó azotados y presos, ó desterrados á África, ó tal vez muertos en suplicios crueles como represalia de la victoria obtenida por el ejército aragonés (1).

La historia no refiere, sin duda, todos los despojos y violencias de que fueron víctimas los cristianos en la sangrienta y prolongada lucha de razas asiáticas y africanas, librada en la Península durante su esclavitud; mas para formar idea de ellos, basta observar que á los pocos años de la conquista, toda la poblacion mozárabe habia desaparecido de los campos, refugiándose en las villas y en las ciudades, único lugar donde las crónicas hacen mencion de ella. Las tribus africanas, por el contrario, aún cambiando su vida errante por la sedentaria, preferían residir en el campo donde podían mejor que en los pueblos, conservar hasta cierto punto sus hábitos primitivos. Los caudillos con algunos pocos de sus hombres más fieles, ocupaban las ciudades, en las cuales contaban por otra parte con la adhesión de los judíos; pero la mayoría de los que formaban los ejércitos, permanecían en los campos vecinos al cuidado de las tierras que se les adjudicaban en ellos. Puestos en contacto, aunque sin confundirse nunca, los propietarios rurales y colonos cristianos con los soldados groseros y semi-salvajes, que componían el grueso de los ejércitos musulmanes, ¿cómo era posible que se respetasen mutuamente y que no acabaran los más débiles por ceder su lugar á los más fuertes? El único refugio de aquellos desgraciados habitantes eran las ciudades, donde podían protegerse unos á otros, donde residían sus condes y jueces dispuestos á ampararles y donde se hallaba la autoridad musulmana, que podía hacerles justicia contra sus opresores. Pero los acogidos á las grandes poblaciones no salvaron su hacienda y su vida sino á costa de abandonar ó por lo ménos de no disponer tan libremente como debieran, de sus heredades, siempre expuestas á las depredaciones de los propietarios vecinos. Hé aquí cómo á pesar de la protección que las leyes, los tratados y algunos

(1) Garibay, *Historia de España*, lib. III, cap. VIII. *Orderici Vitalis Hist.*, lib. XIII, núm. 6, in *Esp. Sagr.*, t. X, apéndice último.

emires y kalifas dispensaron á la propiedad de los españoles sometidos, hubieron estos de sufrir graves estorsiones y violentos despojos.

III.

TRIBUTOS Y EXACCIONES.

Despues de la inseguridad era el tributo la condicion más onerosa del dominio. Los propietarios musulimes pagaban en tal concepto el *Kharadj-al, Zagah* ó *Azaque*, que consistia en la décima ó la vigésima parte del producto de la tierra, deducida la semilla sembrada, de los ganados y de otros efectos. Cuando la cosecha no llegaba á cinco cahices de grano, no se pagaba diezmo de ella. Las tierras de secano contribuian con la décima, y con la vigésima las de regadio. Los que vendian y compraban muebles ó alhajas pagaban tambien diezmos. Los que hallaban tesoros ó cosas abandonadas, ó tomaban despojos en la guerra, debian pagar el quinto. Esta misma cuantía adeudaban los ganados. Además cada muslim debia contribuir en la Páscoa del Ramadan, con una medida de grano llamada el *azaque del alfitra*. Por último, de la plata y del oro extraídos de las minas se pagaba un cuarto de diezmo. El producto de este tributo debia invertirse en el palacio del kalifa, en el salario de sus oficiales, alcaides, justicias y alfaquies, en las mezquitas y fuentes públicas, en escuelas y maestros, redencion de cautivos mahometanos y limosnas á pobres que rezaran las cinco oraciones ó *azalas* (1).

Los tributos de los mozárabes pasaron por vicisitudes diferentes segun los tiempos y las circunstancias de los pueblos. Al principio hubieron de pagar unos el quinto y otros el décimo de los frutos, puesto que el emir Al-Samah, al repartir tierras á los musulmanes, hizo un empadronamiento ó censo de los habitantes, y regularizó los impuestos disponiendo que fuesen iguales en todos los pueblos (2). Su sucesor Ambisah, no estimando tal vez justificada esta novedad, ordenó que los pueblos que se hubieran rendido voluntariamente, pagaran el diezmo de los frutos, y que satisficiesen el quinto los conquistados por fuerza de armas (3). Por eso Isidoro

(1) Suma de los principales mandamientos y devedamientos de la ley y Çunna, capítulos XXVI, XXVI, XXVII, y XXVIII. *Memorial histórico español*, t. V., p. 247.

(2) Así lo asegura Rowes de Saint-Hilaire en su *Histoire d'Espagne*, t. II, ch. III, edic. de 1837, aunque no dice la fuente de donde toma la noticia.

(3) *Izit autem missit præfectum in Hispanias Adham filium Melic, et præcepit ei ut civitates, oppida et castella, quas primum arabes expugnaverant, subjiceret sub tributo, videlicet, ut quintam partem omnium proventuum fisco solverent annuatim; quæ au-*

de Beja le atribuía haber duplicado el tributo de los cristianos (1).

Así es que habiéndose sublevado la villa de Tarazona, según cuentan los historiadores árabes, entró Al-Samah en ella por fuerza, arrasó sus murallas, castigó á los jefes de la sedición y duplicó el impuesto que pagaban sus habitantes (2). Concuerdan con estas noticias la que se lee en la escritura que en 734 otorgó á favor de los cristianos de su territorio el walid de Coimbra, Alboacen-Iben-Mohamad-Al-Hamar, en cuyo documento se mandaba que pagaran aquellos doble impuesto que los moros, y 25 *pesantes* de plata por cada iglesia, 50 por cada monasterio, y 100 por cada catedral (3). Mas al poco tiempo el emir Okbah, hácia el año 736, hizo un nuevo empadronamiento, y volviendo al sistema de Al-Samah, igualó los tributos en todos los pueblos, sin distinciones odiosas por razón de origen ú otras causas en que se fundaba su desigualdad (4). En algunas partes, sin embargo, el impuesto de los cristianos debía ser de cuota fija, y así se lee en una escritura de 760 que un conde de los mozárabes de Coimbra, llamado Thendio donó al monasterio de Lorban dos heredades, declarando que se pagaban por ellas á los árabes, señores de la tierra, ocho *pesantes* de plata (5).

Además de la contribucion territorial pagaban los cristianos y los judíos la personal ó de capitulacion antes indicada (*ta'dyl*), cuya cuantía hubo también de sufrir algunas vicisitudes. Ya he dicho que este tributo era el que igualaba de derecho á los no musulmanes con los que lo eran. Los cristianos de cada pueblo pagaban por tal concepto una suma fija, que debía repartirse entre ellos, con arreglo á padrones nominales que de los mismos se formaban. Los recaudadores del kalifa exigian al parecer aquella suma

tem se sponte reddiderant, decimam tantum solverent pro tributo, et hi et illi in suis possessionibus liberi remanerent: D. Roderici, *Hist. Arabum*, c. II. El nombre *Adham*, que se lee en el texto es equivocado, pues quien gobernaba en España en la época á que se refiere el arzobispo, y quien fué enviado por el kalifa Yezyd ó Izt, como dice el texto, era Ambisah. Concuerdan con esta noticia los historiadores árabes que extrató Conde en su *Historia de los Arabes*, etc., parte I, c. XXII.

(1) *Pacensis Chron.*, núm. 52.

(2) Conde, *Idem*, p. I, c. XXII.

(3) Florez, *Esp. Sagr.*, t. X, pág. 273. Esta escritura ha sido calificada de apócrifa por algunos historiadores, si bien no resulta suficientemente demostrada su falsedad. Pero aunque en realidad no la hubiera suscrito Alboacen, es de fecha muy remota, refiere hechos confirmados por otros documentos irrecusables, y fué escrita, sin duda, por quien conociendo bien las costumbres de aquel tiempo, no es probable que las desfigurase á costa de la verosimilitud de su obra.

(4) Conde, *Idem*, p. I, c. XXVII.

(5) Huerta, *Anales de Galicia*, t. II, apéndice II.

del conde ó *excerptor* mozárabe, siendo cargo de este reclamar la cuota de cada contribuyente. La de los ricos era 48 *dirhems*, 24 la de los hombres de la clase media y 12 la de los que vivían del trabajo de sus manos. Estas monedas equivalían respectiva y aproximadamente á 107-54 y 27 rs. y á once veces estas sumas si se tiene en cuenta la diferencia entre el valor del numerario en aquella época y en la presente. Pero las mujeres, los niños, los enfermos, los ciegos, los monjes, los mendigos y los esclavos estaban exentos del tributo (1).

Esta igualdad, sin embargo, tenía más de aparente que de efectiva. Para mantenerla habría sido necesario que la cuota señalada á cada ciudad, villa ó distrito creciese ó menguase periódicamente con el aumento ó disminución de sus habitantes cristianos, y lejos de hacerse esto, como que los padrones no solían rectificarse en mucho tiempo, á pesar de las frecuentes vicisitudes de la población en periodos turbulentos, la cuota tributaria permanecía invariable. Por eso Isidoro de Beja notaba como un acto de grande y poco frecuente justicia del emir Yusuf, la formación de un nuevo censo de contribuyentes, borrando de él á los cristianos difuntos (2). Ni fueron tampoco siempre las cuotas individuales señaladas las que autorizó la ley. El kalifa Mohamad, al arreglar la hacienda pública por los años de 852, hizo economías en los gastos, rebajando el sueldo á los militares y otros funcionarios, y agravó el tributo de los cristianos, auxiliando á su repartimiento el obispo de Málaga y otros mozárabes, con grave escándalo de San Eulogio, que ha conservado la memoria de aquel hecho (3). Últimamente llegó á aumentarse á razón de 40 doblas de oro y 40 adarnes de plata por cada varón mayor de edad (4).

También había mozárabes exentos del impuesto; tales eran al parecer, los que ejercían funciones en el real palacio, ó servían en la milicia. San Eulogio, escritor contemporáneo, censuró duramente al kalifa Mohamad por haber privado á los cristianos de los cargos que desempeñaban en su palacio, y de sus estipendios á los militares, sujetándoles á tributos que antes no pagaban (5). Otros muchos solían eludir el pago del tributo sin estar exentos de él. El presbítero Leowigildo, escritor de la época, da claramente á entender, que algunos cristianos lograban de hecho esta exención perma-

(1) Dozy, *Hist. de. Musulmans*, t. II, p. 40.

(2) *Pacensis Chron.*, núm. 75.

(3) S. Eulogii, *Memorialis Sanctorum*. lib. I, II cap. V, PP. Toletani, tom. II.

(4) Suma del Cúmma, c. XXVII, id.

(5) S. Eulogii, *Memorialis Sanctorum*. lib. III, c. I.

neciendo encerrados en sus casas, ó no saliendo de ellas sino con la oscuridad de la noche (1). Y se concibe que esto sucediese cuando los padrones de contribuyentes no se renovaban con frecuencia, y la accion del gobierno era tan poco eficaz, como lo es siempre en toda administracion desordenada y é imperfecta. Es de creer, por lo tanto, que sólo pagarían tributo aquellos á quienes fuese imposible eludirlo. El mismo San Eulogio lo reconocia así en la obra ántes citada, confesando que las rentas del kalifa estaban muy menguadas, porque los contribuyentes no le acudían con los impuestos. Así es que Al-Mondhir, sucesor de Mohamad, considerando sin duda la dificultad de exigir á sus pueblos los diezmos atrasados, se vió en la necesidad de perdonárselos (2). Y como los cristianos más celosos profesaban la máxima de no ayudar al gobierno en la recaudacion de sus rentas, no es de creer le prestasen para ello eficaz auxilio los condes y oficiales mozárabes. Un obispo de Málaga fué calificado poco ménos que de apóstata por haber formado el padrón de los cristianos de su diócesis y enviándolo al kalifa. Igual nota recayó sobre un conde llamado Servando, porque con órden del soberano, exigió un tributo de 100.000 escudos á los mozárabes de Córdoba (3).

Así, pues, en las provincias conquistadas, la propiedad territorial quedó dividida entre los musulmanes y los cristianos. Los antiguos propietarios que permanecieron en el país, conservaron por regla general la que poseían, y la disfrutaron con sujecion á sus leyes visigodas. Los musulmanes poseyeron las que les fueron repartidas con arreglo á su ley. Unos y otros estaban sujetos á gravosos tributos, más pesados para los primeros, sobre todo para los nobles godos, que en la antigua monarquía se hallaban exentos de ellos. Unos y otros tambien padecieron despojos y estorsiones, gabelas extraordinarias y depredaciones violentas, aunque tal vez más frecuentes los cristianos, puesto que musulmanes eran siempre los opresores. Con tributos variables, al arbitrio de los emires y kalifas, y cuya exaccion estaba encomendada á walides malversadores y rapaces, ningun propietario tenia seguridad de recoger el fruto de su dominio. Con las algaradas de los enemigos, ora cristianos, ora infieles; con guerras civiles casi permanentes entre razas rivales, ningun propietario estaba seguro de su derecho. La propiedad concedida á los sarracenos sirvió para fijarlos en el territorio.

(1) Leovigildi, *De habitu clericorum*.

(2) D. Roderici, *Historia Arabum*, c. XXIX.

(3) Florez, *Esp. Sagr.*, t. X, pág. 275.

para modificar su condicion de tribus errantes, para hacerles entrar en los senderos de la civilizacion; pero como las inmigraciones se sucedian unas á otras con harta frecuencia, siendo siempre las últimas de razas y pueblos más bárbaros que las anteriores, y como la lucha entre estos mismos pueblos, y las guerras de la conquista no permitieron el establecimiento de un régimen de gobierno regular y permanente, á cuya sombra se desenvolvieran las instituciones conservadoras del Estado, la propiedad de la tierra no llegó á ser un vínculo social tan poderoso como lo era á la sazón en las naciones cristianas de Europa. Su inestabilidad, su inseguridad, sus trasmisiones frequentísimas, su independencia de todo interés colectivo, excepto el del Estado en la exaccion del tributo, no eran conciliables con ninguna organizacion en que fuese ella la base de las instituciones sociales más importantes. Mucho ménos pudo serlo la propiedad de los mozárabes, sujeta á los mismos ó aún más graves accidentes. Nada se fundó ni era posible fundar sobre la una ni sobre la otra, ni sobre ambas á la vez: no sobre alguna de ellas exclusivamente, porque habria sido ineficaz, no participando de su influjo los poseedores de la otra: y no sobre ambas, porque perteneciendo á pueblos diferentes y que formaban, por decirlo así, dos sociedades diversas, constituian elementos heterogéneos incapaces de sujetarse á una regla comun. ¿Qué eficacia habrian tenido las instituciones que se fundaran exclusivamente en la propiedad de los musulmanes, quedando exentos de su influjo los cristianos que formaban la mayoría de la poblacion? ¿Ni qué efecto habrian producido las que se apoyaran en la propiedad de estos, dejando á un lado á los musulimes, que eran los señores de la tierra, y tambien los mayores propietarios? Pues para edificar sólidamente sobre ambas propiedades, habria sido necesario reducirlas á una condicion comun: lo cual no era posible sin establecer igual comunidad entre los propietarios, y esto exigia á su vez una fusion de razas que nunca habrian de identificarse. En vano los musulmanes comunicaron á los mozárabes su idioma, sus trajes, sus ciencias, su literatura y sus costumbres fastuosas y caballerescas, la religion abria entre ellos un abismo insondable. Hubo cristianos que se mezclaron en matrimonio con los infieles, algunos hasta se circuncidaron, pero semejantes aberraciones, contrarias á la ley de la Iglesia, ni fueron muy frecuentes, ni dejaron nunca de ser aborrecidas y condenadas. Siendo imposible la fusion de las razas, no era posible la unidad de legislacion, ni hacedera por lo tanto una organizacion de la propiedad que la erigiese en base sólida de relaciones permanentes entre los individuos, las clases y el Estado.

IV.

MODOS DE ADQUIRIR, TRANSMITIR Y UTILIZAR LAS PROPIEDADES.

En la sociedad visigoda estaba el germen de las instituciones que después se desarrollaron en la monarquía de Leon y de Castilla. La propiedad no era en ella todavía el elemento conservador del Estado, como entidad política, ni como conjunto de clases y de individuos relacionados entre sí por los vínculos de un interés común; pero encerraba en su organización los gérmenes de otra capaz de restablecer y conservar una sociedad casi disuelta por la irrupción de los bárbaros, la guerra y la conquista. Algo había entre los visigodos que inclinaba á hacer de la propiedad un vínculo de sujeción y de dependencia entre las clases y los individuos, un medio de defensa material del Estado y un auxiliar poderoso de la autoridad pública. Bajo la dominación musulmana desaparecieron estas tendencias. La propiedad de los mozárabes se rigió por otras leyes que las que autorizaban su libre ejercicio, su adquisición y su trasmisión, sin más cortapisa que la reserva de la legítima de los hijos y de los derechos familiares consignados en el Fuero Juzgo.

La propiedad de los musulimes se gobernó por la ley mahometana y la Çunna, que siendo la expresión de una sociedad errante y semi-bárbara, poco familiarizada con el dominio individual y perpétuo de la tierra, no le había atribuido ninguna función importante en el régimen de la cosa pública, y que siendo además inmutable de suyo, no se acomodaba á las necesidades de los tiempos, ni seguía los progresos de la civilización. Según estas leyes, Dios es el verdadero señor de la vida y de la hacienda de los creyentes, y ejerce su derecho por medio de los kalifas, soberanos absolutos y sus representantes en el mundo. Pero este dominio universal no impedía que los súbditos disfrutaran libremente la tierra, sin más gravámen que el pago del diezmo. Ningun otro vínculo tenía la propiedad con el régimen del Estado: era únicamente el patrimonio de la familia, fuera de la cual no originaba obligaciones ni derechos.

Los modos de adquirir, transmitir y utilizar el dominio eran, por lo tanto, los que correspondían al carácter exclusivamente privado de la propiedad. Las tierras baldías, nunca apropiadas y distantes de poblado, se adquirían por la mera ocupación, regándolas ó edificando en ellas, más no podían reclamarse después de abandonadas mucho tiempo, si entre tanto

venia otro á ocuparlas (1). La propiedad se trasmitia por venta, donacion ó herencia, y podia así comunicarse bien el dominio pleno, ó bien el uso y aprovechamiento más ó ménos restringido.

La facultad de enajenar era ilimitada. Cualquiera podia vender toda su hacienda, y verificándolo con los requisitos que la ley exigia para la prueba del acto y con fiadores de saneamiento, nadie tenia derecho á oponerse á la enajenacion (2). Tambien era casi ilimitada la facultad de donar en vida; pero con circunstancias que restringian bastante el derecho de los donatarios. Sólo cuando la hacienda era cuantiosa, no podia comprometerse toda en una donacion. Era este acto irrevocable de suyo; pero si el donante moria antes de entregar la cosa, nada perdía el donatario de su derecho á reclamarla; si el acto pasaba entre padre é hijo soltero, podia aquel revocarla; y si demandado el donante por la entrega de la cosa, juraba no haberla ofrecido, quedaba tambien libre de su empeño (3).

El derecho de la familia en las herencias era el único limite de la facultad de disponer de los bienes por última voluntad. Mahoma habia ordenado en sus leyes que se dejasen los bienes por testamento á los padres y parientes con generosidad; que se diese á los hijos doble porcion que á las hijas; que no dejando el difunto más que una sola de estas, tomase la mitad, y si dos, las dos terceras partes de la herencia: que el padre y la madre recibieran cada uno la sexta parte de la herencia, si concurrían con un hijo, y que no habiéndolo, aunque hubiese hermanos, se adjudicara á la madre una tercera parte; y en todo caso heredara el cónyuge superviviente, con la diferencia de que habiendo hijos corresponderia á la viuda una octava parte y una cuarta al viudo, y no habiéndolos, deberia tomar aquella esta porcion y una mitad el viudo (4). La Cunna, desenvolviendo y completando despues estos preceptos, declaró que el testador enfermo no podia disponer libremente sino del tercio de sus bienes, siendo los dos tercios restantes legitima de los hijos, padres, abuelos y parientes, con exclusion expresa de algunos de estos por proceder de línea femenina ó por otras circunstancias que incapacitaban para heredar, como la de no profesar la religion mahometana. Tambien fijó la Cunna el orden de suceder estos

(1) Leyes de moros, tít. 229, publicadas por la Academia de la Historia en el *Memorial histórico*, tomo V, pág. 187.

(2) Leyes de moros, tít. 237, *Mem. Hist.* citado.

(3) Leyes de moros, títulos 241, 251, 253 y 254 id.

(4) Koran, c. II, vers. 176, c. IV, v. 8 y sig. 13 y 14.

herederos, disponiendo que cuando concurrieran padre, hijo y marido, no se excluyesen recíprocamente y tomase cada uno la porción señalada, dando preferencias á los varones de línea masculina sobre las mujeres (1).

Este orden de sucesion consultaba por lo tanto mucho más el afecto de familia que el establecido por Justiniano con tal propósito. En este se guardaron algunos respetos á la tradicion, no admitiendo la concurrencia sino entre parientes de igual grado, fuera del caso único de la representacion, excluyendo al cónyuge, fijando un límite al parentesco que habilitaba para heredar, y señalando porción legítima tan sólo á los hijos y á los padres: en la sucesion musulmana tuvieron cabida á la vez el padre, los hijos y el cónyuge: no quedó excluido ningun pariente por razón de su grado, y todos tuvieron derecho á una cuantiosa legítima. Lo único en que se nota un tanto el influjo de la tradicion y de la costumbre es en la preferencia concedida á los varones sobre las mujeres; pero aún así quedó muy mejorada la condicion de estas, pues para apreciarla debidamente es menester comparar la que era en Arabia antes de la reforma de Mahoma, con la que fué despues. El profeta halló á la mujer esclava y reducida al estado de cosa en el sentido propio de la palabra; transigiendo hasta cierto punto con este hecho, la declaró inferior al hombre y con ménos derechos; pero al mismo tiempo le otorgó muchos de que carecia, y la elevó á la categoría de persona.

He dicho que en el orden de suceder entre los musulimes predominaba el afecto y no el interés de familia, porque sus llamamientos tienden más á favorecer á los parientes de mayor cariño que á conservar la unidad y el esplendor de las razas. Dividiéndose frecuentemente entre muchos los dos tercios del patrimonio de todos los que morian con testamento ó sin él, y limitada siempre á un tercio la libre disposicion del difunto, necesariamente habian de desmembrarse y deshacerse en poco tiempo todas las fortunas, faltando con ellas una prenda eficaz de la duracion de las familias. Sin embargo, este era el sistema de sucesiones que correspondia á una sociedad democrática como lo fué la musulmana despues que vinieron á formar parte de ella las tribus de Africa, en que no habia clases ni gerarquías aristocráticas, en que todos eran iguales ante el poder arbitrario del kalifa, y en que no debia haber más autoridad que la del soberano, ni más influencia que la de sus seides y caudillos.

Los propietarios árabes utilizaban sus tierras, ó cultivándolas por medio

(1) Suma de la ley y Çunna, caps. XLIII y XLIV.

de esclavos, ó dándolas en tenencia ó arrendamiento. Los esclavos árabes no hubieron de ser nunca siervos adscriptos á la gleba: su condicion era la más inferior de cuantas entonces se conocian: trabajaban en la tierra ó en cualquier otro menester al arbitrio de sus señores. Lo que los musulmanes de España llamaban *tenencia* era una especie de contrato de usufructo, por el cual se destinaba una heredad ó un conjunto de bienes temporal ó perpétuamente al provecho de una persona ó al cumplimiento de un fin piadoso. El que daba en tenencia una cosa, no volvía á recobrarla como no lo estipulase así expresamente. Cuando el contrato tenia por objeto alguna obra de piedad, tomaba el nombre de *açadaca*, pasando en todo caso la posesion de la heredad, ó solamente la parte necesaria de sus productos, á la persona ó corporacion favorecida, con la condicion de no enajenar, ó sin ella, segun los términos de la escritura. Para favorecer á un menor, incapaz de adquirir, dábanse á su padre bienes con aquel título y la condicion de invertirlos en provecho del hijo.

Ea muy frecuente la tenencia vitalicia, en cuyo caso, como en el usufructo, volvian los bienes, por muerte del que los tenia, á poder del que los dió á sus herederos. Nótanse en estos contratos varias singularidades, algunas de las cuales revelan tal vez un origen puramente oriental. Tales eran, por ejemplo, que cuando se daban casas en tenencia podia el otorgante continuar morando en alguna de ellas: que si este contraia su obligacion estando sano, y moria antes de entregar la cosa ofrecida, quedaba aquella estipulacion sin efecto; y que si constituia la tenencia estando enfermo ó por última voluntad, no podia comprender más del tercio del caudal, porque el resto correspondia á los parientes (1).

Pero el contrato que debia usarse con más frecuencia, era sin duda el arrendamiento. Asi se infiere de las muchas leyes dictadas para su régimen y del acierto con que se resuelven en ellas todas las dudas y dificultades á que suelen dar lugar. La conformidad de estas resoluciones con las adoptadas para casos semejantes en las leyes españolas de la época, hacen presumir tambien que las de *Moros* fueron tomadas en esta parte de los códigos y compilaciones castellanas. Otras coincidencias se notan tambien entre ambas legislaciones que revelan tal vez el mismo origen, y dan á entender que la compilacion musulmana se completó mucho despues de la conquista, quizá bajo el imperio de la monarquía cristiana y por los moros que vivian sujetos á ella.

(1) Leyes de moros, títos. 238, 239, 240, 250 y 251. *Mem. Hist.* citado.

LIBRO III.

De la propiedad territorial en los reinos de Leon y Castilla durante la Edad Media.

CAPITULO I

Repoblacion y reconstitucion de la propiedad territorial.

I.

PRIMEROS TIEMPOS DE LA RECONQUISTA.

Si bajo la dominacion musulmana no fué la propiedad de la tierra un vínculo social muy poderoso, en las provincias y territorios cristianos contribuyó eficazmente desde luego á facilitar la reconquista, la defensa y la restauracion de la sociedad española. Las montañas de Astúrias, Aragon, Vizcaya y Cataluña, y las tierras de Galicia que se salvaron de la invasion, dieron asilo á muchos españoles, gente principal y eclesiásticos, que emigraron de las provincias invadidas, ya al aproximarse las huestes enemigas, ya despues, para librarse de las persecuciones y de la opresion que á temporadas padecian los cristianos sometidos. Los habitantes de aquellas comarcas, ni aún con el refuerzo de los primeros emigrados, fueron desde luego en número suficiente para constituir un reino, segun puede inferirse de las relaciones de nuestros cronistas; mas formaron el núcleo de un nuevo Estado y de una sociedad nueva, los cuales, organizados adecuada y exclusivamente para la guerra, y creciendo y desenvolviéndose por su propia virtud, bastaron con el tiempo para arrojar de la Península hasta el último vástago de la raza musulmica.

Satisfechos los emires y caudillos árabes con haberse enseñoreado tan

fácil y prontamente de casi toda España, despreciaron al pronto, y aún durante algunos años, aquel puñado de atrevidos montañeses, que blasonaban de su independencia en pobre y reducida tierra, digna apenas de los esfuerzos de la conquista. Tampoco causaban, al parecer, grave daño, ni aún pesada molestia á vencedores poderosos, unos cuantos nobles godos, obispos y clérigos, que seguidos de sus elientes y de otros no muchos patriotas, celosos de su independencia, se ocupaban principalmente en guardar sus miserables hogares, apoderarse de tal ó cual enemigo extraviado en los inmediatos valles, y en ocultar las reliquias y los cuerpos de los santos. Así los cristianos independientes de Astúrias no fueron nunca dominados, ni aún combatidos durante muchos años, por más que estuviese muy cerca de ellos el walid de Jijon, Munuza, y pudieron organizarse tranquilamente y disponer para las grandes campañas.

Esta situacion de los cristianos libres influyó eficazmente desde luego en el modo de constituirse y reorganizarse la propiedad territorial. Aquella sociedad, armada como un ejército, y en constante estado de defensa, necesitó distribuir de un modo adecuado á este objeto las tierras en que dominaba; y aunque no hay documentos contemporáneos que justifiquen las mudanzas que estas experimentaron, la tradicion conservó de ellas alguna noticia, que escrita más tarde, ha podido llegar hasta nuestros dias.

Los prelados de las Cortes de Guadalajara de 1590 se quejaron á don Juan I de que el señor de Vizcaya y muchos caballeros é hidalgos del mismo señorío y de los territorios de Alava, Guipúzcoa, y otros inmediatos, se decian patronos y llevaban los diezmos de sus iglesias, contra lo dispuesto en el derecho comun canónico, que se habia ya extendido con la publicacion de las Decretales pontificias. Mandó el rey oir en justicia á los señores acusados de esta usurpacion, quienes despues de consultar á sus letrados, fundaron los títulos de su derecho en los orígenes y en la historia de su propiedad sobre las tierras y las iglesias cuyos diezmos se reclamaban. La crónica original de aquel monarca nos ha conservado una memoria preciosa de la reconstitucion de la propiedad territorial en los primeros tiempos de la reconquista, mediante el razonamiento que puso en boca de los caballeros vascongados (1). Estos dijeron: «Segun hemos oido de nuestros antecesores é ellos de los suyos, esto (el patronato y los diezmos) vino de quando los moros ganaron é conquistaron á España, é los fijos-dalgo, algunos que escaparon de la tal pérdida alzáronse en las montañas, que eran

(1) Cron. de D. Juan I, año 12, cap. XI.

hiermas é muy fuertes é non plobadas, é allí se defendieron de los moros; ca señor, en ningund lugar de los que nos levamos los diezmos, los moros nunca pudieron entrar nin le ganar, é los nuestros antecesores se lo defendieron con muy gran trabajo é sangre. E para se mejor defender ordenaron que todos tovesen en sus comarcas ciertos cabdillos á quien fuesen obedientes ó estoviesen por sus mayores en las peleas que con los moros avian; é para mantenimiento de aquel cabdillo ó cabdillos, por las costas que facia cuando se ayuntaban con él, ordenaron que todos le diesen un diezmo de todo lo que ellos labrasen: (é entonce non avia iglesia ninguna poblada en aquella tierra (é el cabdillo que fuese tenuto de los escoger é dar alguna pasada de vianda quando á él viniesen: otrosí, que les tuviese un clérigo que les dixiese su misa, porque el servicio de Dios é de la santa fé católica non fuese olvidado é fincase la remembranza de la cristiandad: é el dicho cabdillo que mantuviese al clérigo ó capellan que la tal misa dixiese. E así se guardó dende en adelante, é gracias á Dios ellos se defendieron de los moros é ayudaron al servicio de los reyes sus señores en manera que echaron á los moros de la tierra é la conquistaron é ganaron é fincaron ellos en aquella posesion de levar los tales diezmos é mantener los clérigos hasta aquí.»

Segun esta relacion, al parecer fidelísima, los nobles y caballeros que de antiguo residian en los territorios libres, y los que despues emigraron á ellos se apoderaron de los lugares más adecuados para la resistencia, edificando fortalezas y castillos, de que fueron dueños, y cuya tenencia y defensa encomendaron á otros caudillos inferiores. Estos fueron, pues, los jefes militares y civiles de los lugares amparados por las mismas fortalezas, puesto que sus vecinos debian obedecerles, pelear á sus órdenes contra el enemigo comun, y contribuirles con el diezmo de los frutos de sus tierras para subvenir á los gastos de la defensa y gobierno del territorio. Los caudillos á su vez tenian la obligacion de alimentar á los colonos mientras que los ocupaban en alguna funcion de guerra, y de nombrar y mantener un sacerdote que fuese su párroco y desempeñase en cada lugar los actos del ministerio católico. Quedaron, pues, gravadas aquellas tierras con un tributo comun, cuyo producto habia de invertirse en las dos necesidades que constituian á la sazón el único vínculo de aquella sociedad naciente, la religion y la guerra. Este tributo constituyó tambien un nuevo género de propiedad, puesto que representaba una cierta participacion fija y constante en los frutos del suelo. De esta nueva y sucesiva distribucion de la tierra nació un conjunto de relaciones sociales, cuya base principal era el dominio ó la po-

sesion de los inmuebles. El que ocupaba algun lugar, poblado ó yermo, amparándolo con fortalezas ó con hombres que lo guardasen, adquiria en él cierto dominio eminente y se constituia en autoridad de sus habitantes. Los caudillos ó jefes inmediatos de estos lugares dependian del señor de quien eran delegados, y procuraban la conservacion y prosperidad de la comarca, pues que á sus expensas vivian. Los colonos vasallos, aunque sujetos á una potestad no siempre suave, y aunque maltratados á veces por sus caudillos, mantenian enhiesto el pendon de la independencian de la patria, proveian libremente á sus necesidades religiosas y se libraban del yugo aborrecido de los musulmanes.

De un modo semejante, aunque con circunstancias especiales dignas de notarse, se reconstituyó la propiedad una vez empezada la reconquista en los territorios que fueron incorporándose á los que sirvieron de cuna á la monarquía de Astúrias. Los ejércitos cristianos ocupaban, ora tierras yermas enteramente despobladas, ora lugares medio despoblados y medio destruidos, ora, en fin, villas y ciudades en buen estado y cumplidamente pobladas. Si el nuevo territorio, aunque yermo, era adecuado para la resistencia, se daba en propiedad ó en encomienda á algun caudillo para que levantase en él fortalezas, y con sus vasallos y siervos lo poblase y defendiese. Si el lugar estaba en parte destruido y despoblado, ó se fortificaba y repoblaba por el mismo sistema, ó si no se podia mantener en estado de defensa, se arrasaba, y sus habitantes eran trasladados, con más ó ménos violencia, á otras comarcas, bien para que las poblasen como colonos, ó ya para ser vendidos como cautivos. Cuando la ciudad ó villa conquistada era importante por su vecindario y riqueza, y podia ser defendida, si habia sido ocupada por capitulacion, en la cual se hubiese estipulado respetar la vida y la propiedad de los vencidos, quedaban estos en una condicion semejante á la de los mozárabes en los pueblos dominados por los moros,

En los primeros tiempos de la reconquista fué la guerra con ellos de devastacion y exterminio. Los caudillos cristianos no daban cuartel á los infieles; los pasaban á cuchillo ó los hacian esclavos; y si tomaban lugares defendidos que no podian conservar, los quemaban y arrasaban, transportando como rebaños á Astúrias ó á Galicia los restos de su poblacion. Alfonso I, segun sus primitivos cronistas, tomó por armas muchas villas y castillos, y no pudiendo después conservarlos, mató á todos los moros que encontró en ellos, derribó los muros, abrasó las casas y se llevó consigo á los habitantes cristianos, con los cuales pobló las desiertas montañas de Santillana y Trasmiera, Primorias, Soporta, las costas de Galicia y otros

lugares (1). Quizá se proponían también aquellos reyes evitar las agresiones enemigas, poniendo de este modo vastos desiertos entre ambas fronteras. Las breves indicaciones que sobre estos hechos se leen en las crónicas bastan, sin embargo, para comprender la situación tristísima, no sólo de los pocos musulmes que á la sazón habitaban aquellos lugares, sino de los mozárabes, que formaban la mayoría de la población, los cuales, si ayudaban á los ejércitos cristianos, se exponían al rigor de los infieles, y si permanecían neutrales eran confundidos con los moros en la matanza general ó se veían arrastrados como siervos á tierras extrañas con pérdida de toda su fortuna. Otras veces, aunque ya en épocas más adelantadas, se verificaban iguales emigraciones bajo la protección de los ejércitos cristianos, á instancia de los mismos mozárabes, que, oprimidos por la tiranía de los emires, invocaban aquel auxilio para abandonar sus hogares y buscar en tierra extraña la subsistencia y la libertad de que carecían en la propia. Entónces, los que lograban sacudir de este modo el yugo enemigo, solían tomar asiento en las provincias de los cristianos, ocupando tierras por *presura* ó por reparto, y sirviendo con ellas y con sus personas á la causa santa de la patria (2).

Los reyes de Asturias considerándose, en todo caso, herederos de los reyes godos, guardadores de sus leyes y depositarios de sus tradiciones, estimaban pertenecerles por derecho de conquista y en propiedad absoluta, todas las tierras que ganaban á los infieles, sin más limitación que la de respetar las propias de los cristianos mozárabes, si no habían hecho cosa por que debieran perderlas, y la que resultase de las condiciones estipuladas en los tratados á favor de los vencidos. Todas las cosas muebles incluso los cautivos, que formaban el botín de la guerra, debían dividirse entre los

(1) Sandoval, *Historia de los cinco obispos*, pág. 92.

(2) Sebastian de Salamanca dice de Alfonso I, después de referir las muchas ciudades y villas que tomó á los moros: "Omnes quoque arabes occupatores supradictarum civitatum interficiens, christianos secum ad patriam duxit;" añadiendo en seguida que en este tiempo se poblaron Primorias, Liébana, Trasmiera, Soporta, Carranza, Burgos y las marismas de Galicia, Alava, Vizcaya, Araon y Orduña, poseídas siempre por sus naturales, se restauran por ellos. Chron. in Sandoval, *Cinco obispos*, pág. 46.—De Ordoño I dice el mismo cronista: "Multas alias civitates preliando cepit, id est... Talamancam cum rege suo nomine Mazeror et uxore sua; bellatores omnes eorum interfecit, reliquum vero vulgus cum uxoribus et filiis sub corona vendidit. Id. id., pág. 55.—El cronista Sampiro cuenta de Alfonso III que "cepit gladio castellum, que dicitur Quinta-lubel; partim gladio truncavit, partim secum adduxit. Chron. in Sandoval, etc., pág. 63.—De Ordoño II, dice: "Congregato magno exercitu, jussit arma componi, et in eorum terram, que dicitur Sintilia, strages multas fecit, terram depopulavit: etiam castella multa in ori gladii cepit." Id. id., pág. 64.

soldados, después de sacar la parte del rey; mas el territorio no entraba en suerte, porque correspondia todo á la Corona. Este derecho no estaba limitado por la ley escrita como en Aragon, donde era obligacion expresa del monarca repartir entre barones y grandes vasallos las tierras conquistadas, pero si por la necesidad y la costumbre, que surtian el mismo efecto. Verdad es que una ley de Partida, sancionando probablemente algun uso antiguo, mandaba galardonar á los tres soldados que primero entrasen en villa ó castillos cercados, con otras tantas casas y los heredamientos de sus respectivos dueños (1); mas ni estos casos eran tan frecuentes, ni la parte del botin á tales soldados reservada, tan grande, que menoscabara de un modo sensible el dominio adquirido por el soberano. Lo que efectivamente lo restringia era la imposibilidad de conservar las tierras ganadas, sin ponerlas en estado de defensa: y como los recursos de la Corona eran tan escasos, no podian ser otros los defensores que aquellos á quienes se concediera una participacion en las mismas tierras. Tambien necesitaba el rey utilizarlas de alguna manera, si habia de proveer con ellas á las atenciones del Estado; y como el único medio de hacerlo era poblarlas de colonos laboriosos, puesto que no tenia siervos bastantes para cultivarlas, necesitaba entregarlas á los mismos colonos, ó á personas que las llevasen por su cuenta. Esta necesidad era tanto mayor, cuanto que valiendo entónces muy poco la nuda propiedad territorial, no podian sacarse de ella los cuantiosos rendimientos que habia menester la Corona, sin poner en cultivo terrenos vastísimos, lo cual exigia un número considerable de brazos, que no se podian reunir por otro sistema de explotacion que el de los repartimientos.

II.

CONDADOS Y PRESURAS.

Aunque de derecho fuese el rey dueño alodial de las tierras conquistadas, sin más excepciones que las referidas, no poseia de hecho sino aquellas que expresamente se reservaba y ocupaba, pues que las demás ó permanecian vacantes, ó se daban en diferentes conceptos á los que hubieran de utilizarlas. El rey como propietario y señor absoluto de las tierras de conquista, tenia en ellas todos los derechos posibles: las poblaba ó no, á su arbitrio, las cultivaba ó dejaba incultas, regia y gobernaba á los que resi-

(1) L. VII, t. XXVII, Par. II.

dian ó venian á morar en ellas, disponia de los montes, aguas, minas, canteras y demás frutos naturales, y percibia de los industriales la parte que estimaba correspondiente á la entidad de su dominio. Mas al repartir sus tierras, no siempre trasmitia el rey todos estos derechos, pues al contrario, rara vez se despojaba de los que más directamente afectaban á su soberanía, sobre todo en los primeros siglos de la reconquista.

Las grandes comarcas, que comprendian alguna ciudad importante, con sus villas y aldeas, se daban á los condes, no en propiedad, sino para su defensa, administracion y gobierno. La corona les trasmitia sus derechos sobre tales territorios, en lo tocante á disponer su poblacion, el cultivo y disfrute de sus tierras yermas, la cobranza de los tributos y el ejercicio de la jurisdiccion. En su consecuencia, los condes percibian todos los emolumentos y rentas que por el ejercicio de su autoridad hubiera podido exigir la corona, y contribuian con una parte de ellos al Erario.

Los condes de Castilla, hasta mediados del siglo x, fueron amovibles á voluntad del monarca, y así llegaron á contarse dos en un mismo año sucesivamente. Unos se llamaron condes de Castilla, y otros lo fueron á la vez de comarcas distintas de este reino, titulándose de Búrgos, de Lantaronz, de Amaya, de Lara y de otros pueblos de poca importancia. El condado de Alava hubo de ser hereditario en los Vigilas ó Velas, puesto que durante más de un siglo, no salió de esta familia, y tal vez se habria perpetuado en ella, á no haberlo abandonado primero el conde Vela, que huyó á Córdoba por no reconocer la soberanía del conde Fernan Gonzalez, y después sus tres hijos, por no prestar obediencia á su sucesor Sancho Garcés. Fernan Gonzalez no fué independiente de derecho hasta después de mediar el siglo x. De los demás condes de pueblos ó distritos ménos importantes, se cree que empezaron á ser vitalicios en tiempo de San Fernando, y hereditarios y perpétuos en el de Fernando IV; mas sin que por eso desaparecieran en el siglo xiii todos los amovibles, ni en el xiv todos los vitalicios. Sin duda coexistieron durante algun tiempo unos y otros, aunque en las épocas señaladas empezaran muchos á mudar de naturaleza.

Cuando las crónicas con su concision acostumbrada, refieren que el rey ganó tales ó cuales tierras y puso condes en ellas, ó las dió á poblar á algun vasallo, no quieren decir solamente que nombró los gobernadores de sus nuevos dominios, sino que trasmitió además el derecho de explotarlos, en forma semejante á la conocida en otros países con el nombre de beneficio. El conde ó magnate que obtenia tal merced, se trasladaba al territorio de su jurisdiccion con sus clientes y siervos, ocupaba los castillos, levantaba otros nuevos

donde le parecia conveniente, ó reedificaba los destruidos, se apoderaba de las propiedades abandonadas ó confiscadas y las distribuia á su albedrío, fundaba monasterios y los dotaba con tierras y vasallos, repartia tierras y otorgaba privilegios á los lugares que deseaba restaurar ó poblar de nuevo, y para el gobierno y órden interior nombraba jueces, mayordomos y sayones, sujetos á su dependencia. De los antiguos habitantes percibia los tributos y censos acostumbrados: en las heredades y tierras que ocupaba y cultivaba con sus siervos ó solariegos, que serian seguramente las más pingües, adquiria dominio perpétuo y absoluto; y de los nuevos pobladores exigia los servicios y emolumentos que tenia á bien señalarles. Ni el rey, ni los condes poblaban siempre, como pudiera entenderse por la vaga expresion de las crónicas, edificando por su cuenta todas las casas que habian de habitar los pobladores, pues ya se ve que esto habria sido imposible, cuando era tan escaso el patrimonio de la corona y no muy pingüe el de los particulares. Poblar significaba poner en un territorio persona que llevase á él pobladores, bien de su propia familia, clientela y siervos, ó bien de gente extraña, á quien se ofrecian como estímulo, tierras, ganados, montes, aguas, libertades municipales, tributos módicos, y lo que en aquella edad valia más que todo, proteccion y seguridad para las personas y las propiedades. Así lo que cumplia hacer al nuevo señor era construir fortalezas, levantar murallas, edificar templos y poner en ellos clérigos que administrasen los sacramentos; y si con esto se consideraba el lugar medianamente seguro de las algaradas sarracenas, y se ofrecian buenas tierras de cultivo, con alguna ventaja en su disfrute, y se añadia á todo algun cuerpo de santo ó reliquia venerada que dispensase su proteccion al vecindario, al punto acudian pobladores, ya de otros territorios cristianos ménos favorecidos, y ya de los mismos mozárabes, que habitaban en las ciudades infieles.

Así pobló Alfonso X muchas tierras de Astúrias, algunas de Castilla y las costas de Galicia (1): así repobló Ordoño I á Tuy, Astorga, Leon y Amayo, que estaban desiertas desde que Alfonso I las tomara á los moros (2), constando la particularidad de que el último de estos lugares y el de Santa Juliana, en Astúrias, fueron fundados por un conde de Castilla llamado don Rodrigo y de órden del mismo rey Ordoño (3): así es como Alfonso III po-

(1). *Sebastiani.*, *Cron.*, p. 48, in Sandoval, *Cinco obispos*.

(2). *Id. id.*, p. 54.

(3). *Chronicon Burgensis* in *España sagrada*, t. XXIII, p. 320. *Annales Compostellani*, in *id.*, p. 318.

bló á Zamora, Simancas, Dueñas y tierra de Campos, encargó á su hijo García la poblacion de Toro y al conde de Castilla, Diego, la de Búrgos (1); así Ramiro II pobló á Salamanca y Ledesma con otros muchos castillos, entónces desiertos, y durante su reinado poblaron Munio Nuñez á Róda, Gonzalo Tellez á Osma y Gonzalo Fernandez á Cozca, Coruña y San Estéban, á orillas del Duero (2). El conde Fernan Gonzalez por su propia autoridad y con sólo el auxilio de Dios, como dice Sampiro, pobló á Sepúlveda (3); Alfonso V restauró la ciudad de Leon, que se hallaba destruida desde la entrada de Almanzor en ella (4), y Fernando I los castillos y ciudades de Salamanca, Avila, Cuenca, Arévalo, Olmedo, Medina, Segovia, Iscar y Cuellar (5). Hubo condes pobladores, no sólo en Castilla, sino tambien en Galicia, en Alava, en Carrion, en Astúrias y en otras varias comarcas, y de ellos, unos extendian su jurisdiccion á todo el territorio conocido con aquellos nombres y otros la tenian limitada á ciertos distritos ó ciudades del mismo.

Consérvanse algunas memorias que dan á conocer cómo se verificaba la repoblacion de estas ciudades y villas. Reconquistado por Alfonso I, el territorio de la diócesis de Lugo, que poco ántes devastaran los sarracenos, y vuelto á ella el obispo Odoario, que habia andado fugitivo durante la invasion, hubo el rey de encomendarle su repoblacion y gobierno. En una escritura del año 760 refiere menudamente aquel prelado todo lo que hizo para cumplir su encargo. Después de contar en ella la entrada de los moros, su fuga de la diócesis y la reconquista, dice Odoario: «Nos dirigimos á Lugo con nuestras muchas *familias* (esto es, clientes, vasallos y siervos) y con los demás *pueblos* (es decir, hombres extraños á su servicio), así nobles como no nobles, y encontramos la Sede destruida é inhabitable. Entónces trabajamos allí y edificamos la casa de Dios ó iglesia de Santa María y ocupamos el lugar del palacio y restauramos la ciudad y plantamos en las afueras viñas y manzanos. Después concedimos á los de nuestras *familias* posesiones en todas partes y les dimos bueyes para la labranza y jumentos para su servicio. Luego salimos de la ciudad, por las villas y heredades,

(1) *Sampiri, Chron.* in Sandov., obr. cit., p. 63. *Annal. Complutenses*, in. Esp. Sag. tomo XXIII, p. 310.—*Chron. Burgensis* in Esp. Sag., t. XXIII, p. 307.—*Annal. Compostellani*, id., p. 318.

(2) *Annal. Complutenses*, id. p. 310. *Sampiri, Chron.* id. p. 67.

(3) *Sampiri, Chron.* id. in Sandoval, p. 67.—*Annal. Complut.* in Esp. Sagr. p. 311.

(4) *Pelayii, Chron.* in Sandoval, p. 74.

(5) *Pelayii, Chron.* id. p. 76.

para procurar que las labrasen y hallamos en las riberas del Miño destruidas las villas de Suco de los Muertos y de Rudesilva. Pusimos nuestra familia de los Agarios en el Puerto del Miño, á cuyo lugar dimos aquel mismo nombre, y en otra villa, que dimos como de nuestra *presura*, pusimos á Avezano, llamándola Avezan (1): á la villa Guntini enviamos á Guntino: á Desterigo, Destario: á Provesende, Provesendo, de quien tomó su nombre: á la villa Sendon, enviamos á Sendon de apellido Bocamalo; y tomamos la villa de Macedon, donde pusimos á Macedonio, y así cada una de estas villas tomó el nombre de su poblador. Concluidas estas cosas, hicimos primero las iglesias. Mandamos edificar la de Santiago de Mancilan en el puerto de Agari, que está fundada en la villa de Avezan, señalándole dextros ó mansos, como manda la ley, el día de su dedicacion, y dándole además heredades y plantíos fuera de la villa, concedida á nuestra familia. Luego mandamos edificar la iglesia de San Julian de Bocamalos en la villa de Sendon de Bocamalo, que era de nuestra familia y la consagramos, y es la fundada en nuestra *presura* (tierra adquirida en dominio alodial por ocupacion) en la ribera del Miño. Del mismo modo mandamos construir la iglesia de Santa Eulalia de Macedon, donde pusimos á Macedonio, y la dotamos con la misma villa, con la familia nuestra que hay en ella y sus términos.» En seguida dona el obispo todas estas iglesias con sus bienes á la diocesana

(1) La frase correspondiente á esta, en el original, ofrece algunas variantes en los textos publicados por Huerta en sus *Anales de Galicia*, y por Risco, en el tomo XL de la *España Sagrada*, apénd. 12. La copia de que se valió Huerta, dice: "Villas et destructas de Succu Mortuorum et de Rude Sylva, ubi possuimus nostra familia, ad Portum Minei qui dicitur Agari, super ipsum Portum, missimus ibi Agario, et in alia villa possuimus Avezano et missimus ad eam nomen Avezani de nostra presura." El texto publicado por Risco, al parecer más correcto, aunque tampoco lo es del todo, dice: "Villas destructas... ubi possuimus nostra familia ad portum Minei, que dicunt Agari. Super ipsum portum missimus ibi Agario; et in alia villa possuimus Avezano et missimus ad eam nomen Avezani de nostra presura." También es al parecer equivocada la traduccion de esta frase que hizo Huerta. Dice: "Al Puerto de Miño, que se llama Agari, sobre el mismo Puerto, enviamos á Agarico; y en otra villa pusimos á Avezano y enviamos á ella la familia llamada Avezan, de nuestros pobladores." Huerta entendi6 por familia los parientes de Odoario y esta es la causa de su error. Lo que se dice en el texto sobre el significado de esta palabra en la Edad Media, basta para comprender que Odoario, no sólo envi6 á Agarico, sino á la familia de los Agarios, que era, sin duda, una de las que formaban su clientela. Tampoco entiendo que "nostra presura" se deba traducir por "nuestros pobladores, pues es sabido que "presura era el título en cuya virtud se adquiría por ocupacion el dominio alodial de una tierra inculta. Es más exacta la traduccion que doy en el texto, aunque sea ménos literal.

de Lugo y concluye conminando con penas severas á los que quebranten su voluntad.

Vése por este notable documento que el obispo Odoario distinguia las tierras de presura de las adquiridas por otros títulos, y que unas estaban dadas á sus *familias* y otras á *pobladores* á quienes no atribuía aquella capificación. Estos pobladores eran sin duda los hombres extraños á su servicio, nobles y plebeyos, que fueron también con él y á quienes aludía en el mismo documento. En las tierras de presura por lo ménos, estimaba el prelado haber adquirido dominio hereditario perpétuo.

Así resulta del testamento que habia otorgado en 747, puesto que en él dejó á la iglesia del Salvador y de Santa María de Lugo, esta misma ciudad, declarando haber restaurado y amurallado 36 villas, cuya mayor parte *habia adquirido por presura* y poblado con sus parientes y familia, y haber fundado sesenta y cuatro iglesias con sus bienes y familias respectivas. El rey Alfonso confirmó este testamento llamado de «restitucion ó reintegro aumentado con las presuras del obispo,» tal vez porque muchas de estas propiedades habian pertenecido á la iglesia ántes de la invasion sarracena (1).

Falta ahora averiguar las condiciones con que otorgó Odoario las tierras que repartió á los pobladores, y la especie de dominio ó de derecho que estos adquirieron sobre ellas. No lo dicen los documentos reseñados, pero afortunadamente se han conservado otros, que además de confirmar su sentido, segun queda explicado, dan á conocer aquellos puntos con toda claridad. Existe una escritura otorgada por una de las familias heredadas por el mismo Odoario en la diócesis de Lugo, en que los otorgantes hablan así: «Nosotros, hombres humildísimos, á saber: Aloito y mi mujer Ika, y mis parientes Gimeno, Riccilon, Dulcidilo, Félix, Margarita, Genserico, Berosindo, Mosinda, Trasilde, Sisenando y Kagilda, que en union con otros muchos, salimos de Africa (esto es, del territorio ocupado por los moros) con el señor Odoario, obispo (de quien éramos criados y servidores) (*famuli et servitores*), encontramos desierta la ciudad de Lugo é inhabitables sus términos. Dicho glorioso prelado Odoario, trató de restaurar la ciudad y su provincia, y la llenó con su propia familia. Nosotros los arriba nombrados, que éramos de su familia y habíamos perseverado en su servicio muchos años, le pedimos con toda reverencia que nos concediera y donara una villa de las

(1) *España sagrada*, t. XL, apénd. 10.

que habia ocupado, lo cual no tardó en hacer, movido de misericordia. Y nos dió la villa nombrada Villamarco, que habia tomado y después donado á Marco su sobrino, de quien recibió el nombre, y es la situada en el término de Lugo, territorio de Flamosó. Diónos esta villa por el servicio que le hicimos, y de élla obtuvimos con la condicion y pacto de que durante nuestra vida y la de nuestros sucesores habiamos de estar á su voluntad y mandado y al de sus sucesores en la ciudad perpétuamente.» Refiere en seguida Aloito que después le reveló Dios en sueños su voluntad de que edificara un templo, y que habiendo comunicado aquella vision al prelado, le mandó éste construir una iglesia en honor de Santa Colomba, para cuya obra le auxilió con hombres de su propia familia, poniendo por su mano la primera piedra y que concluida la iglesia, la dedicó y consagró el mismo prelado con su cimiterio y sus términos para la manutencion de los clérigos destinados á su servicio, y depositó en ella las reliquias de la santa de su advocacion. Señala después Aloito los términos de la nueva iglesia, manda pagarle los diezmos y primicias, la dota además con la quinta parte de todas las heredades que por presuras habia recibido del prelado el dia de la dedicacion, y con los ornamentos, vasos sagrados y demás utensilios necesarios para el culto, y concede para los estipendios de los clérigos las tierras, árboles y demás cosas indispensables. Concluye la escritura diciendo Aloito que todo lo da con la condicion de que él y sus descendientes guardarán fidelidad por derecho hereditario á Odoario y sus sucesores, como si vivieran en heredad propia de estos, y contribuirán anualmente á Dios y á Santa María con el censo canónico, teniendo y poseyendo la villa y la iglesia como de mano del prelado y sus sucesores» (1).

Vése por este documento que Aloito y los co-otorgantes no eran parientes de Odoario, aunque si una de sus familias, es decir, de las familias de sus antiguos clientes, buccelarios ó siervos, y que hallándose á su servicio en algun lugar ocupado por los moros, le siguieron á Galicia cuando D. Alfonso arrojó á los mahometanos de la diócesis de Lugo. No es posible saber si los de aquella familia vivieron con el obispo en calidad de siervos, de libertos, de colonos, de clientes ó buccelarios, pues la expresion de *famuli et servitores* que dice el texto, cuadraba á cualquiera de estas personas, pero seguramente su estado no era de completa libertad. Tal vez eran ya libertos ó clientes, y habian mejorado su condicion en premio de su fidelidad y de

(1) *España sagrada*, t. XI, apénd. 9.

su constancia en el servicio de su señor. También resulta claramente que lo que adquirieron no fué el dominio alodial y absoluto de la villa de Villamarco, sino el derecho de disfrutarla y poseerla perpétuamente con condición de vasallaje, que eso es lo que significa en el lenguaje de los documentos de la Edad Media, estar á la voluntad y mandato de alguno (*jussionem ejus, et voluntatem sucesorum ejus faciamus in perpetuum.*) De modo que lo que el obispo constituyó sobre la villa referida, fué una especie de feudo ó beneficio, como los que usaban ya en otros países de Europa, y por lo tanto, un género de propiedad por cuyo medio quedaban los que la poseían sujetos á la autoridad de un superior y se organizaba un nuevo sistema de gerarquía y de disciplina social.

Vinieron también á poblar con Odoario otros hombres de condicion libre y aún noble, segun antes se ha dicho, y estos hubieron de poseer sus tierras con más independencia que los que eran propiamente de las familias del prelado. Aquellos propietarios disponían libremente de sus heredades, las dividían ó las agregaban á otras, que compraban con su peculio y las enagenaban, señalando las condiciones con que habían de disfrutarse. Así decia Odoario en la Escritura de donacion primeramente citada, que habia dado á Avezano la Villa de presura de este nombre, la de Guntin á Guntino y la de Desterigo á Desterio. Y en efecto, en un documento de 757 aparecen estos sugetos, diciendo así: «Nosotros todos, poseedores por presura con calidad hereditaria (*pressores de generis hereditarios*), Avezano con mis hijos Guntino y Desterigo, venidos de Africa para la presura de la tierra de Galicia, con otros pobladores ingenuos, por mandato del príncipe D. Alfonso, ocupamos villas y heredades incultas, y entre ellas las de *Rudasilva* y *Súco de los Muertos*.... con todas sus vegas y pesqueras íntegramente, é hicimos nuestra habitacion en la parte oriental, esto es, en *villa Guntin*, en *villa Avezan* y en *Desterigo*, poseyéndolo todo muchos años:» Por donde se ve que Avezano y sus hijos eran ingenuos y libres y no familia de Odoario; que vinieron con él, no por su mandato, como Aloito y los demás que otorgaron la anterior escritura, sino por orden del rey, y que adquirieron tierras de presura hereditarias y al parecer sin la condicion de servicio y vasallaje impuesta á los pobladores de Villamarco, dado que ninguna mencion se hace de ello en escritura, cuando en la de Aloito, que tenia el mismo objeto, se expresa de un modo muy circunstanciado.

Prosigue Avezano diciendo, que por inspiracion divina edificó una iglesia en su villa de Avezan, para cuya consagracion llevó al obispo Odoario; que le señaló mansos de su propia presura, cuyos limites determina, man-

dando que de ellos se paguen á la nueva iglesia diezmos y primicias: que la dotó con vasos y ornamentos sagrados, libros y cruces; así como con ganados y fincas, y «con tierras compradas unas por su justo precio y adquiridas otras por presura;» y por último, manda reservar una parte de las rentas de la iglesia para sus parientes clérigos y en su defecto, para los que hagan vida monástica, y prohíbe toda enajenación (1).

Así pues, Aloito y Avezano fueron igualmente pobladores y, sin embargo, ¡cuánta diferencia en la manera de disponer de sus propiedades, fundada en la diversidad de su condicion! Aquel pide humildemente á Odoario alguna villa, este la toma por presura; el uno se obliga á estar á la obediencia del señor, el otro no dice haber contraído obligación ninguna; el primero no edifica su iglesia hasta que el prelado le da su licencia y su auxilio, el segundo la fabrica desde luego y sólo busca al obispo para que la consagre. Aloito, en fin, se reserva el patronato de su iglesia, pero con la condicion de poseerla como de mano del prelado, y permaneciendo en su fidelidad; Avezano no reconoce esta especial dependencia y dispone con libertad de una parte de los frutos de la nueva fundacion á favor de sus parientes.

De un modo semejante procedieron los condes pobladores de Leon y Castilla. El conde Munio Nuñez, que lo era de esta última region, pobló á Brañosera, en union con su mujer Argilo. En la carta-puebla que otorgó á los vecinos en 824, dijo haber conducido á aquel lugar desierto á Valero, Félix, Zonio, Cristuebalo y Cervello con toda su descendencia, los cuales eran sin duda otras tantas familias de libertos ó clientes más ó menos libres; dió el lugar referido, con sus montes, aguas, árboles y términos á los dichos hombres y á los demás que viniesen á poblar con ellos; mandó que el montazgo, que debian pagar los que de otras villas vinieran á pastar en los términos de Brañosera, se diviese entre el conde y los vecinos; eximió á estos de *anubda* y de guardia de castillos (2), mandándoles pagar al conde cuanto tributo é *insurcion* pudieran; y fundó una iglesia con su *manso* correspondiente (3). Es de advertir que en este documento no se invoca

(1) *España Sagr.*, tomo XL, apend. 11.

(2) No se sabe hoy con certeza en qué consistía la carga de *anubda*, cuyo nombre se lee en muchos diplomas de la Edad Media. Presúmese que era un servicio personal para la defensa y seguridad de los pueblos, reducido á explorar las operaciones de enemigo para precaverse de ellas. La Guardia de castillos era, como indica su nombre, servir en ellos de velas ó centinelas para evitar las sorpresas del enemigo.

(3) *Insurcion* era el censo ó tributo en especie ó en dinero con que contribuían las



para nada el nombre del rey, á pesar de que entonces dependia de Leon el condado de Castilla: el conde Munio lo otorga como disponiendo de cosa propia, y si más tarde lo confirmó el conde Fernan-Gonzalez, fué en concepto de sucesor de su abuelo Munio en el condado de Castilla (1).

III.

RELACIONES DE LOS CONDES CON LA CORONA Y CON LOS PUEBLOS.

Los condes contribuian á la corona con una parte de los tributos y rentas que percibian de los vasallos y hacian suya toda la restante. No es posible saber hoy cuál era la parte que debia recibir el rey de estos productos, pero es seguro que hubo en este punto gran variedad de usos y costumbres. Los condes de Galicia pagaban un tributo al rey de Leon, y por lo tanto debian hacer suyas todas ó gran parte de las rentas. Asi se infiere del texto en que el cronista Sampiro refiere la insurreccion de aquella provincia en tiempo de Sancho I (2). Dice que el Rey sujetó la tierra de Galicia hasta el Duero; que entónces Gonzalo, que era duque en la orilla opuesta de este rio, vino con grande ejército hasta ella; que desde allí envió sus mensajeros al rey, ofreciéndole con juramento pagarle el tributo de la tierra que tenia; y que luego le mato á traicion con un veneno (3). Importa poco averiguar si es ó no exacto el cronista al llamar duque y no conde á Gonzalo; basta saber que éste gobernaba al lado allá del Duero, con autori-

tierras al señor solariego. Melgar de Suso, segun el fuero de 950, debia pagar por infurcion una fanega de trigo, una de cebada, cuarto orzas de vino y un tocino de veinte dineros.

(1) Muñoz Romero, *Coleccion de fueros*, etc., p. 16.

(2) Fernando I dió á la iglesia de Leon una serna llamada de Pocolo, que decia haber poblado y cultivado su abuelo el conde D. Sancho, por medio de su servidor Munio Godestiz. *España Sagr.*, t. XXXVI, apénd. 23.

(3) *Sampiro, Chron. in Sandoz. Cinco obispos*. Hay una diferencia notable entre el texto de este pasaje de la crónica que publicó Sandoval y el que dió á luz el P. Florez. El primero dice "*conjuratiōe ut persolveret tributum*" y el segundo "*conjuratiōe facta ne exolveret tributum*." Esta última leccion no tendria sentido á ménos de traducir por *conjuratiōe*, "conspiracion" y no "juramento." Entiendo pues esta frase como la entendió el arzobispo D. Rodrigo, que pudo haber á las manos copias más correctas de la crónica que los autores modernos, y leyó sin duda *ut* en vez de *ne*, cuando refirió el suceso del modo que queda expresado en el texto. Del mismo modo lo entendió tambien el autor de la *Crónica general* que lleva el nombre de D. Alfonso el Sábio, aunque llamando á Gonzalo conde y no duque, á mi parecer, con más acierto.

dad igual á la de los condes de otras comarcas y que la oferta y reconocimiento del tributo por las tierras que tenia de la corona aplacaron á don Sancho, haciéndole volver á Leon, para presumir que algunos condes á ménos no tendrían más obligaciones con el monarca que la de pagarle algun tributo cierto y acudir á su mandado en paz y en guerra. Otros condes contribuirían sin duda á la corona con una parte proporcional de las rentas, multas y demás emolumentos que percibían de los vasallos.

Pero de cualquier modo que esto fuese, es claro que todos aquellos derechos de los condes formaban un cierto patrimonio que, si al principio fué eventual é inseguro, tuvo después, con la herencia, todos los caracteres de la propiedad. Del mismo modo que el condado de Castilla, siendo en su primera época un beneficio amovible á voluntad de los reyes de Leon, vino á ser Estado independiente y propiedad libre en Fernán-Gonzalez y sus sucesores, otros muchos condados, que en sus orígenes tuvieron igual amovilidad, se convirtieron con el tiempo en patrimonio propio de determinadas familias, aunque con ménos independencia de la corona. Los condes eran dueños de la tierra no entregada al dominio particular en sus propios condados, de las aguas y montes públicos, de la jurisdiccion, de las multas, de los tributos y de los vasallos; pero contribuyendo á la corona con las rentas acostumbradas y con sus soldados, prestándole homenaje por su señorío eminente, y estando siempre á su mandado en paz y en guerra; y aún así este dominio concluía á voluntad del monarca, por faltas del poseedor, por la muerte de éste ó por la del mismo soberano. Cuando todos los condados eran amovibles no perdía el conde poblador las villas ó sernas de presura propia al ser privado de su cargo para trasmitirlo á otro; pero si todos los demás derechos que á aquel eran inherentes. Llamábanse los condados vitalicios cuando el monarca, más por costumbre que por ley, mantenía en su posesión á los que la tuvieran, mientras no faltasen á la fidelidad ó á los deberes de su cargo. Entónces, muerto el poseedor, daba el rey su condado á quien le parecia, por más que, á no haber razon en contrario, propendiera á conceder la sucesión á alguno de los hijos del difunto, hábiles para el servicio público. Otro tanto acontecia al morir el soberano, pues su sucesor tenía el derecho de elegir nuevamente para todos los cargos públicos, estimándose rotos los vínculos de sus servidores con la corona, mientras no se renovasen con un nuevo homenaje; si bien prestado éste, solían los reyes confirmar la mayor parte de tales mercedes.

Además de estas restricciones de las facultades de los condes á favor de la corona, existían otras, al parecer en provecho de los pueblos y vasallos,

aunque no se pueda hoy determinar toda su extension con exactitud. Cuando por primera vez poblaban un término y distribuian sus tierras entre nuevos colonos, podian los condes, así como los señores solariegos, por si y sin real licencia, determinar las condiciones á que los pobladores habian de sujetarse, que es lo que se llamaba establecer su fuero. Pero cuando se trataba de fomentar ó aumentar una poblacion ya constituida, modificando el fuero, es decir, los tributos y cargas de los pobladores establecidos, solia pedirse la intervencion ó confirmacion de la corona. Así se deduce al ménos de los muchos fueros dados directamente por los reyes á pueblos de condados, y de algunos de los concedidos por condes ó señores, en que se expresaba la circunstancia de haber mediado licencia, mandato ó confirmacion real. El obispo de Nájera, D. Gomez, que en 1065 pobló la villa de Longares, estableció su fuero por autoridad propia (1), y al transmitir á la iglesia de San Martin su pueblo de San Anacleto, que ya formado compró al Rey D. Sancho, declaró que lo entregaba con el mismo fuero que habia recibido de aquel soberano (2). Fernan-Armentales pobló á Melgar de Suso y otras villas inmediatas, y les dió un fuero, que más tarde hizo confirmar por el conde Garci-Fernandez, soberano de Castilla (3). La reina viuda de Navarra, Doña Estefania, repobló y dió fuero á Sojuela con la confirmacion de su hijo el Rey D. Sancho III (4). D. Pedro Fernandez, maestre de Santiago, dió nuevo fuero á la villa de Castrotarafe, expresando que lo hacia con consentimiento y mandato del rey Fernando II de Leon (5). D. Diego III, obispo de Orense, restauró esta ciudad y le dió fuero á principios del siglo xii, con beneplácito y confirmacion de la corona (6). Verdad es que con estos fueros se daban otros tambien á poblaciones señoriales, ya establecidas, sin intervencion al parecer del soberano; pero los más tenian por objeto mejorar la condicion de los pobladores, ó confirmar la existente; y algunos se daban con el beneplácito de los vecinos, por lo cual no es extraño que se prescindiera de aquella formalidad. Pero de cualquier modo es indudable que los reyes procuraban impedir que los señores agravasen la condicion de sus vasallos, puesto que, además de los documentos citados,

(1) Gonzalez, *Coleccion de documentos de las provincias vascongadas y Castilla*, t. VI, núm. 235, pág. 65.

(2) Id., *idem*, t. V, núm. 239, pág. 76.

(3) Muñoz, *Coleccion de fueros, etc.*, pág. 27.

(4) Id., *idem*, pág. 220.

(5) Muñoz, *Coleccion, etc.*, pág. 482.

(6) Id., *idem*, pág. 499.

existen otros muchos de enajenaciones de territorio, en los cuales se declaraban menudamente los fueros que habian de hacerse á los señores, es decir, los tributos y servicios con que les habian de acudir los habitantes y vasallos.

Dábanse tambien á la iglesia y á los particulares tierras para poblar ó ya pobladas, dentro ó fuera de la circunscripcion de los condados, por títulos y con condiciones diferentes. Si la corona tenia el derecho de remover libremente á los condes, claro es que se reservaba el de disponer de cualquier parte del territorio de los mismos, para uso propio ó de comun provecho. Los que servian al Rey en su córte ó en la guerra, los eclesiásticos ó los seculares que emigraban de las provincias dominadas por los sarracenos para establecerse en las de los cristianos, todos podian optar á un pedazo de terreno, y la mayor parte lo pedia, quién para su subsistencia, quién para guardar la frontera, y quién para edificar una iglesia, monasterio ú hospital con las adyacencias y demás derechos inherentes. La corona hacia estas concesiones, si de lo inculto, porque le pertenecia en propiedad todo el territorio sin dueño: si de lo cultivado, porque entónces se entendia que no comunicaba más derecho que el que ella poseyera. Mas en todo caso eran estas mercedes de gran importancia, porque no solian limitarse á la nueva posesion de la tierra cultivable, sino que comprendian tambien los medios necesarios para aprovecharla y hacerla productiva. Así, cuando se daba un territorio poblado, solia entenderse con los hombres que lo cultivaban, ó sea con el derecho de exigir de ellos una parte de los frutos. Cuando el terreno era desierto é inculto, se extendia la concesion á llevar á él pobladores, sobre los cuales tendria el dueño potestad y jurisdiccion más ó ménos limitada. Cuando se otorgaba un lugar para fabricar en él monasterio ó iglesia, se entendia que con él iba tambien un espacio de terreno alrededor, suficiente para mantener el culto y sus ministros, y por lo tanto, con los habitantes que en el mismo terreno hubiese. Por eso edificar una iglesia ó monasterio donde no lo hubiera, equivalia á fundar una poblacion, y cuando se donaba ó vendia un monasterio ó iglesia, se enajenaba en realidad un pueblo. Lo mismo acontecia, aunque por motivos diferentes, cuando se daban terrenos en la frontera, pues era menester defenderlos, y para defenderlos construir fortalezas y poblarlas, y para poblarlas, organizar una especie de señorío á favor del propietario.

Así para que estos nuevos señoríos no cediesen en mengua de los ya existentes, ni en perjuicio de la corona, prevenian muchas escrituras de donaciones de tierras realengas que los adquirentes no habian de poblarlas con

vasallos de la corona ó del señor donante. El conde Fernan Gonzalez dió en 941 al monasterio de Cardena, el de San Miguel de Xavilla, con sus tierras y heredades en propiedad absoluta y con licencia para poblar, excepto con los hombres y vasallos del mismo conde ó de sus villas, con cualesquiera otros hombres, no tributarios suyos ó vecinos de otras villas sin distincion (1). Por donde se ve que en el condado de Castilla, cuando aún no era de derecho independiente, existian como he dicho ántes, tierras pobladas, propias y tributarias del conde Fernan Gonzalez, como dueño alodial y privado, y tierras libres, cuyos habitantes no contribuian al conde con ningun impuesto. Tenia el conde, por lo tanto, dos clases de vasallos, los suyos propios solariegos, y los realengos, que no conservaban de él más dependencia que la débil y escasa del vínculo meramente político, segun se comprendia en aquellos tiempos.

Así pues, la propiedad se reorganiza desde que comienza la reconquista, ya por los condes á quienes con el gobierno se encomienda la poblacion del territorio, con la facultad de ocuparlo y de cederlo á quienes lo hubieran de cultivar, ya por señores (seniores), á quienes sin aquel título, se confiere igual potestad, ya por las iglesias y monasterios, á quienes los reyes y los condes dan vastos terrenos y numerosos vasallos, y ya por presuras arbitrarias de toda clase de pobladores en los lugares incultos, con confirmacion de la corona ó sin ella. Al lado de estas nuevas propiedades subsistian las antiguas que lograron salvarse del comun naufragio; ¡pero cuánta diferencia entre ellas! Todos pueden hacerse propietarios: las tierras se reparten con mano pródiga ó estan á disposicion del primer ocupante, pero no todos sus poseedores tienen sobre las mismas igual derecho. El rey es dueño de la tierra conquistada, pero con diferentes clases de dominio. En el conjunto, con exclusion de las propiedades antiguas, es su dominio más bien potestativo que actual; en las villas, distritos, ó heredades dadas ó confirmadas á los vasallos, es un mero dominio directo, con más ó menos derechos, segun los términos de la concesion: en las tierras cultivadas por la corona y de su cuenta, es el dominio alodial pleno. El conde tenia en su condado análogos derechos, con la diferencia de ejercer por delegacion los correspondientes al dominio potestativo de la corona. El señor los tenia en su lugar idénticos á los del rey, aún sin esta diferencia. Los meros propietarios, los poseedores inmediatos de las tierras tenian por lo tanto diferentes cla-

(1) *Tamen non de meos homines, et de meas villas, sed de homines excursus et de alias villas.* Berganza, *Antigüedades de España*, t. II, escritura 26.

ses de dominio, segun el origen de su propiedad y las condiciones con que hubiese sido establecida; y esta co-participacion en el disfrute de la tierra de las diferentes clases sociales, con variedad de derechos, y esta especie de identificacion entre la condicion de las tierras y la de las personas, era uno de los caractéres esenciales de la propiedad en aquel tiempo, no sólo en España sino en toda la Europa.

CAPITULO II

Propiedades alodiales y behetrías.

I.

DIFERENTES CLASES DE PROPIEDADES ALODIALES QUE NACIERON DE LA RECONQUISTA.

Toda la propiedad territorial en los primeros siglos de la reconquista traia su origen ó de posesiones anteriores á la invasion, ó de *presuras* verificadas después en tierras incultas ó heredades abandonadas más ó ménos forzosamente por sus antiguos dueños ó de mercedes de los príncipes. Veamos ahora cómo cada uno de estos distintos títulos de adquisicion originaba diferentes clases de dominio y de obligaciones y derechos reciprocos.

Los antiguos propietarios godo-romanos de las provincias en que primero se organizó la resistencia ó en que fué ménos duradera la dominacion musulmana, si conservaron sus heredades ó formaron otras nuevas en tierras baldías, para contribuir á la defensa de la patria, eran sin duda los más independientes. No viviendo en territorio sujeto á los emires, no les prestaban obediencia, y si se sometieron á los reyes y caudillos de Astúrias, fué tan sólo en cuanto lo exigia la necesidad de tener un jefe que ordenase y dirigiese la guerra. A no haber sido por esta circunstancia y el temor al comun enemigo, habria habido en España como en otros paises, muchos propietarios, soberanos independientes dentro de sus tierras, sin vínculo ninguno de vasallaje con la corona, por no haber aceptado de ella cosa alguna que lo estableciese. Sin aquella necesidad peculiar de España, habria habido en ella muchos dueños de tierras que no se hubieran levantado ^{la} dasar el rey como cuentan que hizo el señor de un lugar ante el emperador Francisco I, á fuer de propietario libre.

Mas en la Península estos antiguos propietarios se vieron obligados á agruparse bajo la monarquía de Astúrias, y así lo verificaron, si no inmediatamente, desde que Alfonso I extendió sus confines. Unos le ofrecieron tan sólo sus servicios personales; otros los de sus gentes y asalariados, y de aquí resultaron diversas órdenes de relaciones sociales y clases diferentes de propiedad. Todos hubieron de considerar limitadas sus obligaciones con el jefe supremo á las que de buen grado habian contraído; mas al paso que unos ateniéndose á ellas, mantuvieron en todo lo demás su independencia y su autonomía, otros, confundiéndose con los vasallos comunes, olvidaron su origen y mudaron de condición. Las tierras de los primeros, segun las ideas de la época, no debian nada á la corona porque no procedian de ella.

Verdad es que si bajo el régimen anterior habian estado apropiadas, podian haber sido adquiridas con ciertas cargas, pero faltando aquel régimen y rotos todos los lazos que unian al soberano con los súbditos, nadie tenia derecho á exigirlos. Aunque en las montañas de Astúrias, y quizá en otros lugares simultáneamente, se intentara la restauracion de una monarquía semejante á la de los godos, fué después de algunos años de no haber en España otro gobierno que el de los emires, y sin éxito durante mucho más, puesto que los primeros reyes de Astúrias, más bien que monarcas, como los Recesvintos y los Egicas, eran meros caudillos de escasas, aunque aguerridas huestes. Así es, que después de un no muy corto intervalo, lo que se restableció en Astúrias no fué el mismo gobierno godo con sus derechos, sus garantías y sus tradiciones, sino un Estado nuevo ó más bien una especie de cuartel general de las tropas cristianas ó base de sus operaciones, semejante al que Teodomiro estableció en Murcia, y otros capitanes en Sobrarbe y Cataluña. Los súbditos de este nuevo Estado conservaron su antiguo derecho civil, pero no la organizacion política de una monarquía antigua, pues la que la nueva necesitaba entónces debía corresponder al fin principal de aquella voluntaria asociacion, que era la guerra permanente.

Por lo mismo no se obligaron los individuos del Estado nuevo á gravar sus propiedades con cargas, odiosas ya bajo el antiguo régimen, ni á menoscabar sus derechos de propietarios, sino á ayudar al establecimiento de una monarquía cristiana y servir al rey de su eleccion con lo que fuera su voluntad. De aquí tuvo origen la exencion de tributos forzosos que gozaron siempre las personas y las propiedades de aquellos conquistadores primitivos y sus descendientes, el derecho de *desnaturalizarse* ó *desvasallarse* que

también disfrutaron, y otros privilegios de que trataré oportunamente. Si algun pacto hubo entre los asturianos que se levantaron contra la dominación sarracena, no fué con sacrificio ni menoscabo de las libertades y privilegios que bajo el antiguo régimen disfrutaban los nobles godos, uno de los cuales era la inmunidad de tributos. Por eso las propiedades anteriores al establecimiento de la monarquía cristiana eran un sagrado inviolable, á donde no alcanzaban las leyes ni los príncipes, al ménos para alterar su condicion primitiva.

Eran, sin duda, más numerosas, aunque no de condicion más libre, las propiedades adquiridas por *adprision* ó *apresura*. Inculta entónces la mayor parte del territorio, y con una poblacion harto escasa, los azares de la guerra, que llevaban frecuentemente á los habitantes de unas á otras comarcas, obligaban, ya á abandonar las tierras cultivadas, ya á poner en cultivo las eriales, ocupándolas sin ninguna formalidad ni ceremonia. Los diplomas contemporáneos dan noticias, ora de un matrimonio que emigrando con sus hijos y siervos de las provincias dominadas por los musulimes se estableció en un lugar yermo fundando en él una villa ó casa de labor; ora de varios eclesiásticos parientes ó amigos, que allanando otro erial, fundaban un monasterio y llamaban á su alrededor numerosos pobladores, asentando así los cimientos de una ciudad importante; ya de alguno de los muchos obispos refugiados en Astúrias, que habiendo recibido para su sustento una pobre iglesia, la dotaba y engrandecía con villas y heredades de presura; y aunque en rigor de derecho no podian hacerse estas adquisiciones sin real licencia, porque todo el territorio no apropiado pertenecía al soberano ó al señor del lugar, esta licencia se concedía fácilmente ántes ó después de la ocupacion, y aún solía otorgarse en general á todos los que iban á poblar una comarca.

La ciudad de Oviedo debió su origen á un eclesiástico llamado Máximo, el cual, segun refiere una escritura de 790, habia ido á aquel lugar en 770 con sus siervos y con su tio el abad Fromista; y haciendo en él *presura*, porque nadie lo poseia ni poblaba, lo desmontó y fundó la basilica de San Vicente. Esto sirvió de estímulo á que otros devotos se le juntaran al poco tiempo, los cuales poniendo en comunidad sus bienes, erigieron un monasterio bajo la regla de San Benito (1). Alfonso III confirmó al presbitero Beato y á Cesáreo Caubello la villa de Avelicas, que en el reinado anterior habian ocupado como yermo, y además al último, otra villa que recientemente

(1) *España Sagr.*, t. XXXVII, apénd. 6.

habiapuesto en cultivo (1). Ordoño II, en un privilegio á favor del monasterio de Samos, refiere que habiendo venido de los confines de España, en tiempo del rey Fruela, un abad sacerdote, llamado Argerigo, y su hermana Sarra, aquel monarca les dió el lugar ocupado después por el monasterio referido, y les permitió tomar las villas de Succo con sus términos é iglesias (2). Reinando el mismo Fruela, fué de tierra de moros á Galicia un caballero llamado Egila, con su mujer é hijos, y ocupó un lugar que del nombre de uno de estos hijos se denominó después villa del señor Adilano, lo desmontó y labró, y construyó en él un monasterio, que quedó al fin unido al de Samos, segun refiere otra escritura de Alfonso III (3). El abad de San Roman de Dondila, Pablo, presbítero, Juan y el clérigo Nuño declararon en una escritura de 775 «haber por sus propias manos allanado aquel lugar (el de Dondila), edificado casas y tomado presuras en montes y fuentes» (4). En un diploma de 804 refiere el obispo Juan que fué al lugar de Valpuente, donde halló una iglesia desierta, la cual reedificó: que hizo presuras con los criados y servidores (*gasalianibus*) que moraban con él: que después de edificar otra iglesia se dirigió con ellos á otro lugar llamado Potancre, donde tomaron presuras desde lo alto de un monte hasta el rio; que allí encontró varias iglesias antiguas que hizo suyas; y que con los mismos servidores construyó un monasterio que poseia pacíficamente bajo la potestad del rey D. Alfonso. Concluye este documento ordenando el obispo que todos los moradores de aquellas tierras, aunque fueran pobres ó forasteros, partieran con él sus productos (5).

Pudiéranse agregar á estos ejemplos otros muchos de fueros y privilegios para hacer presuras concedidas por los reyes á los habitantes de ciudades ó comarcas cuya población querian fomentar. Alfonso VI, en 1095, otorgó á los vecinos de Logroño el derecho de hacer suyas las tierras que ocuparan, y en 1099 concedió este mismo derecho á los de Miranda, cuyos fueros gozaron además otras muchas poblaciones (6). Alfonso VII, en 1140,

(1) *España Sagr.*, t. XXXIV, ap. 4.

(2) *España, Sagr.*, t. XIV, ap. 3.

(3) Sandoval, *Cinco obispos*, pág. 142.

(4) Berganza, *Antigüedades de España*, t. II, ap. 4, sec. 1.^a

(5) «Tam pauperes quam peregre advenie talem portionem accipiant qualem et ego,» son las palabras del documento que, entre otros, publicó la *España Sagr.*, t. XXVI, ap. 2.

(6) Fueros de Logroño y de Miranda, en Llorente, *Provincias Vascongadas*, t. III, núms. 81 y 82.

permitió á los pobladores de la iglesia de Sigüenza romper y poseer por juro de heredad todas las tierras incultas de la diócesis (1). Este mismo permiso concedió Alfonso VIII, en 1187, á los vecinos de Santander, aunque imponiéndoles un corto censo por las tierras que ocuparan y limitando la concesion á las comprendidas en la circunferencia de tres leguas (2).

II.

ORÍGEN DE LAS BEHETRÍAS.

Presuras de otro género fueron tambien las que dieron origen á las *behetrías* de lugares, cuyos principios referia Pedro Lopez de Ayala en el siglo XIV, de esta manera: «Debedes saber que segund se puede entender, é lo dicen los antiguos, magüer non sea escripto, que quando la tierra de España fué conquistada por los moros, en el tiempo que el rey D. Rodrigo fué desvaratado é muerto, quando el conde D. Julian fizo la maldad que traxo los moros en España, é despues á cabo de tiempo, los christianos comenzaron á guerrear, venianles ayudas de muchas partes á la guerra: é en la tierra de España non avia si non pocas fortalezas, é quien era señor del campo era señor de la tierra: é los caballeros que eran en una compañía cobraban algunos lugares llanos dó se asentaban é comian de las viandas que allí fallaban, é mantenianse, é poblabanlos, é partianlos entre si; nin los Reyes curaban de el, salvo de la justicia de los dichos logares, é pusieron los dichos caballeros entre si sus ordenamientos, que si alguno dellos toviere tal logar para le guardar, que non recibiese daño nin desaguizado de los otros, salvo que les diese viandas por sus precios razonables: é si por aventura aquel caballero non los defendiese é les hiciese sin razon, que los del logar pudiesen tomar otro de aquel linaje, qual á ellos ploguiese, é quando quisieren para los defender..... E sobre esto ovo entre los caballeros sus posturas é condiciones; ca los unos logares fueron conquistados de omes extraños de otros Reinos, que se tornaron despues á sus tierras, é aquellos son llamados de mar á mar, é toman defendedor qual quieren..... é otros logares fueron ganados de linajes ciertos é segund aquellos toman señor, é pusieron más los caballeros naturales de las behetrías, que puesto que el logar aya defendedor señalado, que esté en posesion de lo guardar é

(1) Muñoz, *Coleccion*, etc., p. 529.

(2) Fuero de Santander, en Llorente, *Prov. vasc.*, t. IV, núm. 173.

tener empero que los que son naturales de aquella behetría ayan dineros ciertos en conocimiento de aquella naturaleza cada un año, porque non se olvide la naturaleza, é el que los recabda por ellos prenda á los de los logares de las behetrías quando non ge los pagan» (1). Otro escritor del siglo xv, Alfonso de Cartagena, atribuye á las behetrías el mismo origen, aunque con ménos seguridad, sin duda por no hallarlo tampoco escrito. Dice pues: «Y la causa y comienzo que ovieron (las behetrías) non se sabe de cierto; mas bien se puede pensar que fué la muchedumbre de los fijos-dalgo puestos en pequeña tierra al tiempo que se ovieron de retraher, quando entraron en España los moros. Ca ordenarian esta manera de vassallaje por aver todos parte en el señorío» (2).

Si la opinion de los antiguos en el siglo xiv sobre el origen de las behetrías era la que indica Lopez de Ayala, y si no hay ningun hecho histórico conocido que lo contradiga, y ántes por el contrario, existen algunos que lo corroboran, bien se puede asegurar que presuras de cierto género fueron el principio de aquella singular institucion. Encerrada la autoridad de los monarcas cristianos en los estrechos límites de Astúrias, mal segura aún después que los traspasó, en los territorios de Leon, Galicia y Castilla, y siendo la guerra un deber sagrado de todos los españoles hábiles para hacerla, natural era que algunos pueblos ó distritos extraviados ó escondidos en las montañas se eximieran igualmente de la invasion, quedando al amparo de los más poderosos de sus vecinos, y que otros sacudieran el débil yugo de la lejana autoridad del walid, por sus fuerzas propias, sin poder después ampararse, por la situacion geográfica, ú otras circunstancias, de los reyes de Astúrias. Estas poblaciones que no habian sido conservadas, ni ganadas por los ejércitos reales, ni en representacion del soberano, debieron quedar como aisladas y desprendidas de la corona. Ningun pacto las habia unido á ella: ni habia mediado ningun acto de los que, segun el derecho público vigente, constituían el dominio. Si álguien podia tener sobre ellas, segun las leyes de la guerra, algun derecho eran los caballeros que las habian conservado y defendido, ó librado después de los moros. Verdad es que el rey tenia fundada su intencion al territorio de la monarquía visigoda, pero en tanto que con sus armas lo retrajese del poder de los infieles, pues faltando esta circunstancia, era menester otro título que la supliese, como la incorporacion voluntaria á la corona por medio del homenaje.

(1) Crónica del rey D. Pedro, año II, cap. 14.

(2) *Doctrinal de Caballeros*, lib. IV, tit. V, introduccion.

Las tierras en que el rey no mantenía ninguna fortaleza, que si no siempre protegía eficazmente á los pueblos de su distrito, era el signo convenido de la potestad real sobre ellos, y sin embargo, no cayeron en poder de los conquistadores ó se libraron de él con la ayuda de algunos caballeros naturales ó extranjeros, de los que hacían la guerra por su propia cuenta, no podían pertenecer á la corona en propiedad ni en señorío. Estas tierras, ó habían de constituir Estados soberanos é independientes, ó habían de reconocer el señorío más ó menos limitado de aquellos con cuyo auxilio habían mantenido ó recobrado su independencia. Ya lo dice el cronista del rey D. Pedro; como no había en ellas castillos que mantuviesen la soberanía real, quien era dueño del campo era dueño de la tierra, es decir, que quien arrojaba al enemigo de una comarca, era dueño de los frutos de la misma. En su virtud, los caballeros que se asociaban para defender ó para recobrar estos lugares llanos, es decir, en que no existía aquel signo de la potestad real, y lograban su intento, fijaban su residencia en ellos, los poblaban con vasallos suyos ó con otros hombres, se mantenían á su costa y repartían entre sí los productos. Estos caballeros, pues, adquirirían por su presura un señorío igual al de la corona en las tierras de su conquista, ó sea el dominio alodial de las tierras no apropiadas, y cierta participacion en los frutos de los que tenían dueño. Por eso dice Lopez Ayala que los reyes no se cuidaban de ellos, y aunque añade, salvo de su justicia, esto ha de entenderse de los tiempos posteriores, en que la jurisdiccion real logró sobreponerse á la de los señores, porque en los precedentes, mal podía alcanzar la justicia del rey allí donde no solían penetrar sus armas.

Hubo, sin duda, en España más behetrías en los orígenes de la reconquista, que las que se hallaron existentes al hacerse pesquisa de ellas en tiempo del rey D. Pedro. Quizá lo fueron en los siglos viii y ix ciertos señoríos, cuyos principios oscuros desdeñó la historia y después ha recogido la fábula, para hacerlos impenetrables á la sana crítica. Los territorios de las provincias vascongadas que, ó no invadieron, ó no dominaron los moros, se dividieron probablemente en behetrías, una vez extinguido el ducado de Cantabria, de que formaban parte. Faltos de gobierno, y abandonados á sí mismos, cada comarca ó distrito hubo de proveer á su propia conservacion y defensa, bien eligiendo señor que la mandase, ó bien aceptando por tal al más esforzado y poderoso que por su voluntad se adelantara á hacerlo. Vizcaya, en los primeros siglos de la reconquista, fué una especie de behetría de las llamadas de mar á mar, ó sea de las que podían elegir señor entre los naturales de cualquiera de las provincias de España,

desde el Mediterráneo al Océano. Zuria, uno de sus primeros señores, cuya existencia no contesta la crítica, fué elegido por el pueblo. También lo fué Iñigo Lopez Esquerra, con exclusion de los menores hijos de su antecesor Sancho Lopez. Luego, en el siglo xi, hubo aquel señorío de cambiar de naturaleza, convirtiéndose en behetría de linaje ó hereditaria, aunque con las interrupciones y accidentes que señala la historia (1).

Las Encartaciones de Vizcaya revelan un origen semejante, aunque oscurecido por la fábula, si han de tomarse en cuenta el sentido legal de aquella denominacion y las especies de autonomia que siempre disfrutó su territorio (2).

La provincia de Alava, aunque desde Alfonso I tuvo sus condes, que en ocasiones fueron hereditarios y casi independientes de los reyes de Leon, comprendia territorios que, desde su incorporacion al reino de Castilla en el siglo xu, hasta D. Alfonso XI, tuvieron señores de su eleccion. De ellos dice el autor de la crónica de aquel monarca que «siempre ovo señorío apartado: et este era qual se lo querian tomar los fijos-dalgos et labradores naturales de aquella tierra de Alava. Et á las veces tomaban por señor alguno de los fijos de los reyes, et á las veces al Sr. de Vizcaya, et á las veces al de Lara, et á las veces al Sr. de los Cameros. Et en todos los tiempos pasados ningun rey ovo señorío en esta tierra, nin puso sus oficiales para facer justicia, salvo en las villas de Vitoria, et de Treviño, que eran suyas: et aquella tierra sin aquestas villas llamaban confradia de Alava. Et aquel á quien ellos daban el señorío, dábanle servicio muy granado, demás de los otros pechos foreros, que decian ellos el semoyo et boy de Marzo» (3).

Si, pues, habia diferencia tan esencial entre las tierras de Vitoria y Treviño, y las de la cofradía de Alava, como que aquellas eran del rey y éstas no le pertenecian: si por efecto de esta circunstancia, los naturales de aquellas villas eran vasallos inmediatos de la corona, y los de la cofradía elegian

(1) Henao, *Antigüedades de Cantabria*, lib. II, cap. XVIII.—Llorente, *Noticias históricas de las provincias vascongadas*, t. I, cap. XII.

(2) Encartacion, segun las leyes 12 y 13 del Ordenamiento de Alcalá, se llamaba á tierra cuyos moradores reconocian á uno por señor hereditario, obligándose á acudirle con algo para que les defendiese y gobernase, conforme á sus fueros ó pactos escritos, y con reserva del derecho de elegir otro señor, si el actual los quebrantase. El rey de Leon Ordoño II hubo de conferir á Iñigo Lopez Esquerra, señor de Vizcaya, el alto señorío de los nueve valles que constituian el territorio de las Encartaciones; mas esto se verificó, al parecer, sin perjuicio de su autonomia, puesto que nunca se incorporaron por completo al señorío de Vizcaya. (Henao, *Antigüedades*, etc., lib. III, cap. X.)

(3) Nuñez de Villarán, *Crónica del rey D. Alfonso XI*, cap. C.

señor, tomando unas veces al de Vizcaya, otras al de Lara, ó al de Cameros, y otras á algun hijo del rey, claro es que este último territorio formaba una behetría de las llamadas de mar á mar, la cual probablemente tuvo el mismo origen que las otras, por no haber proveído á su defensa y gobierno los antiguos condes ó los reyes de Castilla, Navarra y Aragon, que alternativamente poseyeron aquella tierra. Por último, aunque quedan aún ménos noticias de la primitiva organizacion de Guipúzcoa, la de haberse entregado voluntariamente los de su tierra á Alfonso VIII, que parece cierta, por más que algun autor moderno la contradiga, prueba que los guipuzcoanos tenían tambien la facultad de darse señor, y estaban organizados en forma de behetría (1).

La circunstancia característica y distintiva de las behetrías de mar á mar era, pues, segun dice el mismo Lopez de Ayala ántes citado, «que los vecinos y moradores en los tales logares pueden tomar señor á quien sirvan é acojan en ellos, qual ellos quieran é de cualquier linaje que sean.... si quier de Sevilla, si quier de Vizcaya ó de otra parte;» así como lo que caracterizaba las behetrías de linaje era la obligacion de tomar señor de uno determinado. Estas eran de dos especies: unas que debían elegir su señor entre los individuos de una sola familia, y otras que debían escogerlo entre los de varias familias naturales de la tierra. Pero era circunstancia comun á todas las behetrías, segun el mismo escritor, la de poder «tomar é mudar señor siete veces al dia; é esto quiere decir quantas veces las ploguiere é entendieren que las agravia el que las tiene.» Las behetrías de linaje pasaban á ser de mar á mar cuando se extinguían ó se ausentaban del reino las familias á quienes correspondia el señorío. Hallábanse en este último caso, cuando escribia Ayala las de Becerril, Avia, Palacios, Meneses y Villasilos (2).

III.

DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES Á LAS BEHETRÍAS.

Mas estas diferencias entre las behetrías nacieron después de los ordenamientos y condiciones que pusieron entre sí los caballeros que tomaron las primeras presuras, ó de costumbres ó circunstancias locales que más

(1) Llorente, que califica de apócrifa la escritura de 1200, por la cual parece que Guipúzcoa se entregó voluntariamente al señorío de Castilla, y que hasta niega el hecho á que este documento se refiere, considera, sin embargo, probable el de que formase en lo antiguo una behetría el territorio de aquella provincia, con exclusion de los pueblos fortificados que allí tenia la corona.

(2) Crónica del rey D. Pedro, año 2.º, cap. XIV.

tarde sobrevinieron. Lo esencial y característico de tales adquisiciones era que por ellas la tierra se hacia, como dice una ley de Partida, «suya é quita de aquel que la vive, el cual puede recibir en la misma por señor á quien quisiere que mejor le haga» (1). La tierra de behetría no debia, pues, nada al rey, como que no era suya; si al cabo se sometió á su justicia y le reconoció como soberano fué para el efecto de acudir á él cuando sus agravios no hallasen remedio en el señor inmediato, del mismo modo que acudian al rey los de las tierras de señorío solariego: si los moradores contribuian á la corona con algun corto tributo, no era por razon de sus propiedades, sino en reconocimiento de su alto, supremo y eventual señorío, y como en recompensa de la proteccion que les prestaba. La tierra era propia y exclusiva de los sucesores de aquellos que primero la ocuparon, pero las condiciones de esta propiedad eran distintas, segun las posturas y ordenamientos que entre sí pusieron sobre la manera de disfrutarla y regirla, por tratarse de un dominio comun. Estas mismas condiciones hubieron forzosamente de alterarse con el transcurso del tiempo, ya porque los linajes de los primitivos pobladores se extinguian ó perdian su derecho, ya porque las antiguas posturas caian en desuso y eran reemplazadas por otras, y ya, en fin, porque las frecuentes discordias entre los diviseros ó co-participes acababan con el régimen establecido y alteraban las relaciones entre ellos y los vasallos. Por eso lo que fué la propiedad de behetría en su origen no es lo que aparece en su último y más conocido estado, pero este nos sirve para averiguar por induccion el primero.

Dice Pedro Lopez de Ayala que los caballeros que cobraban el lugar, por su propia cuenta lo poblaban y partian. Esta particion ha de entenderse no precisamente de todo el territorio del lugar y con despojo de sus habitantes, sino de aquello que segun las ideas y costumbres del tiempo se estimaba ganado por el que se hacia señor de una tierra, esto es, toda la parte de ella que no estaba legitimamente poseida, una participacion en los frutos de la que lo estaba, la potestad pública y los productos y emolumentos de su ejercicio. Todo esto debia dividirse, pero solamente entre los caballeros de las presuras, pues los demás pobladores antiguos ó futuros eran meros vasallos que habian de sujetarse á las condiciones y ordenamientos por aquellos establecidos. Habia, sin embargo, una cosa de difícil division, que era la potestad y direccion suprema del gobierno y defensa del lugar; y como todos tenian igual derecho á ella, hubo de arbitrase el

(1) Lib. III, tit. 25, Part. 4.^a

establecimiento de señores electivos, nombrados ya por los mismos diviseros y entre sí ya por todos los vecinos, ya con limitacion de linajes entre los mismos que tenian el derecho, ya, en fin con otras condiciones inspiradas por circunstancias locales ó por el interés preponderante de determinadas personas.

Establecida la sucesion en el señorío del lugar, era menester asegurar los intereses de los diviseros, y para ello solia pactarse que el que lo tuviera en su guarda no recibiria daño ni agravio de los otros, que estos serian proveidos de viandas por sus justos precios: que cuando el señor no defendiese ó agraviase al pueblo podrian los vecinos deponerle y nombrar otro en su lugar, tomándolo de entre los elegibles: que los naturales ó co-partícipes en la behetria percibirian todos los años una renta cierta en reconocimiento de su dominio, en vez de la eventual que por su parte debia caberle, y que el mismo señor cuidaria de hacerla efectiva de los vasallos, apremiando á los morosos, en lugar de verificarlo por sí los mismos diviseros que habian de percibirla. Si todas estas condiciones subsistian en el siglo XIV, puesto que las refiere Lopez de Ayala, necesario es inferir de ellas que ántes y tambien en aquel mismo tiempo, solian ser inquietados y agraviados los jefes electivos de las behetrias por los naturales y partícipes de las mismas, que estos abusaban de su derecho de ser mantenidos en ellas, sin que tal vez cumplieran tampoco con su deber los vasallos que debian proveerles de las viandas indispensables: que muchos de los mismos jefes abandonaban la defensa de sus vasallos ó les causaban vejaciones injustas: que la particion de las rentas entre los naturales ocasionaba contiendas y desavenencias, y que muchos para evitarlas, se habian concertado con el señor respectivo allanándose á percibir del mismo ó de los vasallos una cantidad cierta; y por último, que el entenderse cada partícipe con todos los vasallos para el cobro de su haber era tan embarazoso y difícil, que fué menester encomendarlo al que tenia más autoridad y medios de hacerlo.

La propiedad del divisero, que en su origen era un derecho vago y casi indeterminado, no podia realizarse sino á condicion de determinarse, y por la ineficacia consiguiente á su naturaleza colectiva, no podia determinarse sin reducirse. Dos géneros de propiedad concurrían en las behetrias: la del divisero y la del vasallo; pero la primera camina constantemente á su reduccion y á su fin, al paso que la segunda se ensancha y asegura más cada día, hasta confundirse con el dominio comun. A la realizacion de este fenómeno contribuyen primero los pastos y las posturas ántes referidos y des-

pués las leyes que los monarcas tuvieron que dictar, en uso de su soberanía, para mantener la paz de su reino, siempre perturbada por aquella institución anárquica.

Por pactos, costumbres y leyes, quedó, pues, reducida la propiedad primitiva del divisero al derecho de percibir una parte de los tributos y servicios con que contribuían los vasallos de las behetrías. Estos servicios y tributos no eran los mismos en todas partes, mas en unas y en otras cobraban los diviseros ó naturales el *yantar*, la *martiniega*, la *infurcion* por el ganado, la *divisa* en dinero, la *naturaleza*, que era probablemente el mismo impuesto, aunque con distinto nombre, y variable en su cuota, segun que el que lo cobrase fuera rico-hombre, hidalgo ó escudero, y la *mañería* (1). Cada behetría contribuía á sus naturales con algunos de estos tributos, segun los pactos ó costumbres que desde antiguo regían en ella; mas su exacción hubo de dar lugar á tantos abusos, que los reyes, á pesar de no ser *suyas* aquellas tierras, tuvieron que intervenir para remediarlos. En su consecuencia, las leyes determinaron la época en que los vasallos debían llevar la infurcion al natural ó heredero, las viandas que como *yantar* habían de

(1) Asso y Manuel, *Fuero Viejo*, pág. 33. nota 1.^a Estos tributos se pagaban tambien al rey ó á los señores respectivamente, en los pueblos realengos y los de señorío.

Yantar era la cantidad de vianda ó dinero con que debía acudir el vasallo al señor cuando éste iba al lugar. Comprendíase en él tambien el derecho de posaren cualquier casa que tuvieran los naturales de las behetrías, el cual regularizó después la ley determinando que no se usara más de tres veces al año y por tres dias en cada una: que se pudieran tomar en este tiempo pienso para sus caballos, un vaso de vino del mediano, una capa y hortaliza de todas las huertas, y que los que moraran en la villa y tuviesen caballo de guerra, pudieran tomar además dos haces de mies en cada era. (*Fuero Viejo*, lib. X, tom. VIII, l. I, *Ordenamiento de Alcalá*, tit. XXXII, l. 19.)

Martiniega era un censo fiscal con que contribuían los vasallos por los fondos que poseían procedentes del señor. En el siglo XVIII se pagaba todavía en Castilla la Vieja y consistía en doce maravedises por hogar. (Gallardo, *Rentas de la Corona*, tom. III, página 11.)

Infurcion era otro tributo predial, semejante al anterior, que casi siempre se pagaba en especie, y tambien por razon de la tierra que se cultivaba. Infurcion y martiniega eran probablemente dos nombres distintos de un mismo impuesto. Con el primer nombre es más frecuente en lugares solariegos que en los de behetría.

Divisa se llamaba la cantidad cierta de dinero con que contribuía el vasallo al natural de la behetría, en lugar de los demás tributos que por este se entendían conmutados. *Naturaleza* era probablemente otro nombre de este mismo tributo.

Mincio ó *Nuncio* se decía al derecho del señor para tomar de la herencia del vasallo cabeza de familia un buey, un caballo ú otro animal de los que hubiera dejado aquel por su muerte.

Mañería era el derecho del señor á heredar al vasallo que moría sin sucesión.

darle, su cantidad y precio, el modo de entrar los diviseros en sus lugares y las ropas que tomarían en las casas de sus vasallos (1). Todo esto fué menester describirlo y tasarlo con tal prolijidad, que no hay otro ejemplo semejante en las leyes de Castilla.

La propiedad del divisero se transmitía naturalmente por linaje: al padre sucedía el hijo legítimo, no el de ganancia, como en cualquiera otra propiedad alodial, sin ninguna preferencia por razón de primogenitura. Disfrutábalo el marido cuando la tenía su mujer como divisera. Si un hijo tenía este derecho, disfrutábanlo sus padres mientras vivían. La divisa podía enajenarse ó transmitirse por acto entre vivos, ó por testamento; pero no á quien no fuese hidalgo natural de la behetría. El que sin tener este requisito la tomaba, era condenado á perderla, á fin de que la recuperase aquel de quien la hubiera (2).

El señorío total de la behetría tampoco podía enajenarse á otro señor por la mera voluntad de sus naturales. Así consta que en algunas ocasiones los vasallos de behetrías impidieron las enajenaciones de estas á otros señores. Habiendo enajenado Sancho V de Aragón en 1079 á Bermudo Gutierrez las villas de Redecilla, Villareina y Vilaeneco, en las montañas de Burgos, tres de sus vecinos reclamaron contra este acto, alegando que no podía verificarse por ser lugares de behetría. Siguióse con tal motivo un juicio, y averiguada en él la falsedad de la causa de nulidad alegada, se llevó á efecto la enajenación (3).

Tampoco podía el divisero renunciar la infurción, la martiniega, ni ninguno de los otros tributos á que tenía derecho, so pena de perder para siempre la behetría. El motivo de esta disposición no fué sin duda, como imaginó Padilla, según la cita de Asso y Manuel, «que no hubiera pasión entre los diviseros, y que no se acabasen los linajes quedando libres los pueblos,» sino la necesidad de preservar el derecho de la corona á la mitad de aquellos tributos, según disponía una ley de Partida, por más que de él no se haga mención en el *Becerro de las behetrías*.

Por último, así como el que no era natural no podía adquirir divisa de quien lo era, así éste no podía tampoco tornar en vasallos de behetría á

(1) *Fuero Viejo*, tom. VIII, l. 1, 2, 3 y 7, y *Ordenamiento de Alcalá*, tít. XXXII, l. 28 y 29.

(2) *Ordenamiento de Alcalá*, tít. XXXII, l. 18 y 31.—*Córtes de Valladolid de 1312 y 1351*.

(3) Asso y Manuel. *Fuero Viejo*, nota á la l. 1.^a, tom. VIII, lib. I.

los que fueran solariegos (1). Solamente con el beneplácito expreso del rey podía constituirse en behetría un lugar que no lo fuera (2). Y para incorporar en el que no lo fuese una heredad solariega, se necesitaba que el vasallo que la tuviese la perdiera por abandono (3). Por eso había algunos lugares que en parte eran de behetría, y en parte de solariego. Tampoco el lugar de behetría podía tornarse en solariego, á ménos que heredando el señor á todos sus vasallos por razon de mañería, y haciéndose así dueño absoluto de todas las heredades, volviera á repartirlas con aquella calidad. Esto no obstante, hay algunos ejemplos de personas extrañas que adquirieron naturaleza en behetrías ajenas, por compra ó por consentimiento de los naturales; mas estos actos ó pasaron ántes que la ley que los prohibía, ó se verificaron con infraccion manifiesta de ella. Tambien hubo lugares que á solicitud suya, y con otorgamiento del rey, se convirtieron de behetrías en solariegos. Tal fué entre otros, Salas de Barbadillo, que siendo behetría de la casa de Velasco, pidió á D. Juan II en 1458, que le hiciera solariego de la misma casa, por recibir así de ella mayor beneficio. El rey otorgó esta pretension, cediendo en su virtud á D. Pedro Fernandez de Velasco el solariego referido, con jurisdiccion, vasallaje, nombramiento de justicias, términos y rentas, excepto la alcabala, tercias, pedidos, encomiendas y justicia suprema, que se reservó la corona (4). La ley comun de las propiedades de behetría era, pues, no salir nunca de linajes determinados así en cuanto á los diviseros como respecto á los vasallos. Ni aquellos eran reemplazados por otros de familias diversas, ni estos se renovaban jamás. Tales circunstancias bastan para explicar cumplidamente el no interrumpido decaimiento y la extincion final de aquella institucion.

Conocidos los derechos del divisero, se comprende fácilmente los que constituian la propiedad del vasallo. Consistia ésta, pues, en la posesion de sus heredades y la facultad de disponer de sus productos, con exclusion de la parte que correspondia á los diviseros y con las demás restricciones que les imponian las leyes ó las costumbres. Así es, que los vasallos, después de pagar al señor los tributos dichos, debian contribuir al rey con el de *moneda*, en reconocimiento de su soberania. Este impuesto se pagaba en dinero, pesaba únicamente sobre los que tuviesen cierta fortuna y solia re-

(1) *Ordenamiento de Alcalá*, tit. XXXII, l. 25 y 26.

(2) *Lib. III*, tit. XXV, parte 4.^a

(3) *Ordenamiento de Alcalá*, tit. XXXII, l. 13.

(4) Muñoz, *Coleccion de Fueros*, etc., pág. 145.

novarse cada tres años (1). También estaban obligados los mismos vasallos al servicio militar y aún había algunos lugares que sólo con él contribuían. Podían enajenar sus solares, pero la enajenación era nula como no se hiciera á favor de otro vasallo de la behetría (2). También podían vender su hacienda al hidalgo, pero con tal que fuese divisero en la misma behetría, y que la enajenación no se verificase como dice la ley á *fumo muerto*, ó sea de todo el heredamiento del labrador (3). Por lo demás gozaban el estimado derecho de abandonar la behetría y disponer de su persona. «El hombre de behetría, decía el fuero de Leon de 1020, puede marcharse libremente á donde quiera con todos sus bienes y heredades.» Una ley del ordenamiento de Alcalá prohibía adquirir behetrías con la condición de que ninguno de sus hombres hubiese de abandonarlas, so pena de perderlas quien así las tomase, juntamente con las rentas que produjeran mientras que en su poder estuviesen (4).

Había además otras behetrías que no comenzaron por presuras voluntarias, ni en los tiempos primeros de la reconquista. Aceptada y generalizada esta institución, hubo de aplicarse después á objetos análogos y en circunstancias semejantes á las que le dieron origen. Si en los primeros siglos de la guerra hubo compañías de caballeros que se apoderaron por fuerza de lugares llanos, para defenderlos y conservarlos de su cuenta, y muchos pueblos encontraron ventajosa esta ocupación, después hubo también muchas villas y lugares, que careciendo de medios eficaces de defensa en circunstancias difíciles, se entregaron como behetrías á señores poderosos por sus armas y vasallos.

Hubo asimismo hombres libres, que reconociéndose también sin fuerzas para ayudarse en tiempos de tanta inseguridad personal, y no habiendo tampoco en concejos organizados para defenderse, se encomendaron á la protección de otros señores, declarándose sus vasallos de behetría; de donde se originaron las individuales ó de un solo vasallo, muy semejantes á los contratos de recomendación de que trataré más adelante. Hubo en fin, otros lugares habitados por siervos de la gleba ó por vasallos solariegos, que para mejorar de condición civil, recibieron de su señor el beneficio de una constitución ó fuero de behetría.

(1) Gallardo, *Rentas*, etc., t. III, p. 1 y sig.

(2) *Ordenamiento de Alcalá*, t. XXXII, l. 37.

(3) *Fuero Viejo*, 1, 1, t. I, l. 4.º

(4) *Concilium legionense*, núm. 13 en *Córtex de Castilla* publicadas por la Academia de la Historia. *Ord. de Alcalá*, t. XXXII, l. 23.

Por estos contratos se obligaban los vasallos á contribuir al señor que elegían y á sus sucesores con ciertos tributos y servicios, y el señor á defender á los vasallos y á sus descendientes. A veces entregaban estos al señor la propiedad de sus bienes, reservándose el usufructo, y obligándose á contribuir con una parte de sus rentas. Tales compromisos no duraban sin embargo más tiempo que el que quisiera el vasallo, porque cuando éste creía ó alegaba que el señor no le favorecía ó le causaba agravio, se apartaba libremente de su patrocinio y si le habia entregado sus bienes, podia exigir la devolucion de ellos.

Háanse conservado en los archivos algunas cartas de behetría, que comprueban estos asertos. Una de ellas es la que otorgó en 1162 D. Rodrigo de la Fuentes de Pereda con su mujer Gerolda, en la cual y estando en su heredamiento de behetría, declaran que careciendo él de señor, tomó por tal en su nombre y en el de sus sucesores á Pedro Moñiz de Arcas para que este amparase y defendiese á él y á todos los que moraran en el otro heredamiento, mediante el pago de un par de lomos, una emina de cebada, seis panes y una canatela de sidra. A su vez Pedro Moñiz se obligaba por sí y sus descendientes á amparar y defender á su vasallo en todo derecho (1). Era esta, pues, una behetría individual de las instituidas á imitacion de las de pueblo.

Otra carta de behetría otorgada por Alfonso IX de Leon en 1228, da á conocer cómo se empleó tambien este medio para la emancipacion de los siervos. Eranlo, sin duda, los moradores de Aguiar, en el reino de Leon, y así dice el rey en aquel documento, que manumite y liberta á los hombres y mujeres de dicha tierra de la servidumbre á que para con él estaban sujetos, y les concede que en adelante «sean de behetría de mar á mar,» con la condicion de pagarle cada año dos sueldos de fonsadera (2). Este modo de emancipar venia ya usándose desde mucho tiempo ántes, puesto que el obispo de Mondoñedo Rudesindo, en una escritura de donacion al monasterio de Almerezo, otorgada en 867, comprendió entre otros muchos bienes, unos libertos á los cuales puso bajo el patrocinio del donatario, pero declarando, que si fueran por él oprimidos ó maltratados injustamente, podrian ellos abandonarle y ponerse bajo la potestad de otro. En 1074, Gun-

(1) Hállase este documento en el archivo del monasterio de Benevívera y lo publicó Muñoz en su *Coleccion de Fueros*, p. 141.

(2) «Concedens etiam eis ut sint de benefactria de mare usque ad mare.» Gonzalez, *Coleccion de documentos de Castilla*, t. V, p. 153.

tordo Osoris hizo otra donacion á la iglesia de Oviedo, en la cual mandó que una familia, que anteriormente habia emancipado, sirviera al obispo *non jure servili sed ut benefactiat illis* (1), esto es, no como siervos, sino como vasallos de behetría.

De pueblos de señorío que obtuvieron el beneficio de behetría de linaje, hay tambien muchos ejemplos. Los hermanos Diego y Domingo Alvarez, pobladores de Escalona, le dieron en 1130 el fuero de Toledo, y al mismo tiempo le otorgaron para después de su muerte la facultad de elegir señor entre los hijos de los mismos otorgantes al que quisiera y más bien le hiciese (2). D. Manrique de Lara dió fuero á Molina en 1154, otorgándole entre otros beneficios, el de elegir señor á uno de sus hijos ó nietos, aquel que les pluguiera y más bien les hiciera (3). Verdad es que en los citados documentos no se llaman behetrías los lugares á que se refieren; ¿mas qué importa la falta del nombre si se encuentra en ellos la circunstancia más esencial y característica de la institucion?

IV.

DECADENCIA Y EXTINCION DE LAS BEHETRÍAS.

Pero como las behetrías tenían su origen en una necesidad pasajera de la guerra y del poder público, y no eran de suyo sino un remedio momentáneo, peor á veces que la enfermedad misma, no pudieron vivir sino á costa de desnaturalizarse, y ni aún así duraron tanto como otras instituciones de la misma época. Los lugares llanos se fortificaron con el tiempo, los apartados al principio del centro de operaciones de los ejércitos cristianos llegaron á encontrarse en medio de ellos, cuando se ensancharon los límites y el poder de la monarquía de Asturias; los que faltos de proteccion se sometieron resignados á la de caballeros poderosos, juzgaron no necesitarla cuando creyeron poder recibirla del rey. Con todo esto ya no podian subsistir las behetrías de lugares más que como un derecho antiguo, fundado en pactos ó costumbres, pero que no respondia á una necesidad actual y reconocida de la sociedad. Más tiempo necesitaron del patrocinio ajeno los individuos y las familias aisladas, que no viviendo en pueblos fortificados, ni for-

(1) Ambas escrituras publicó Muñoz en su *Coleccion de fueros*, p. 141.

(2) „Post mortem nostram ex filis nostris cui volueritis et melior vobis fecerit, ipse servite cum omnia vestra bona.“ *Fuero de Escalona*, coleccion de Muñoz, p. 485.

(3) Fuero de Molina en Llorente, *Noticias de las provincias vascongadas*, t. IV, núm. 127.

mando parte de ningún concejo, estaban expuestos siempre, no ya sólo á los azares de la guerra con los moros, sino á los de las luchas interiores y privadas que mantenian entre sí los caudillos y señores cristianos, y á los despojos y violencias de los bandidos y aventureros. Por eso hubieron de aumentarse tanto las behetrías de personas, al paso que disminuía el número de las de los lugares. Y sin embargo, con ser este el mejor, no era el único recurso de los hombres desamparados, pues tenían siempre el de hacerse vasallos solariegos de los mismos señores, ganándose tambien de este modo su defensa y su amparo.

Pero la deposicion de unos señores y la eleccion de otros por los vasallos, el repartimiento de las rentas entre los diviseros, el alojamiento de estos en sus lugares respectivos, la exaccion del yantar ó conducho, y la distribucion del producto de los impuestos entre el rey y los diviseros ocasionaban tales reyertas y conflictos de los hidalgos partícipes entre sí y los pecheros, y de unos y otros con los recaudadores del fisco, que si la tradicion y la historia no dieran de ello testimonio, lo ofrecerian muy cumplido las leyes que fué menester dictar sobre esta materia; desde el siglo xiv. El gobierno de señores expuestos siempre á dejar de serlo por el capricho ó mala voluntad de los vasallos, debia ser ó débil y flojo, ú opresor y tiránico, y su administracion codiciosa y rapaz cuando no abandonada y desatendida. Confundidos los tributos reales con los señoriales, perdida la memoria de algunos de ellos, introducidos otros nuevos por abusos, conmutadas por dinero gabelas y prestaciones antiguas, resistido aquí el pago de un impuesto, negada allí á ciertos diviseros su participacion en otros, fué forzoso al rey D. Alfonso XI ordenar una pesquisa general de todas las behetrías á fin de averiguar cuáles y cuántas eran, quiénes las poseian como naturales y diviseros, qué impuestos las gravaban y cómo debian distribuirse.

Estas mismas circunstancias explican cómo aún no acabada aquella pesquisa pidieron que se acelerase su conclusion las Cortes de Valladolid de 1351, añadiendo que por cuanto las behetrías eran causa de contiendas, peleas, y homicidios entre los hidalgos, mandase el rey dividir las entre los naturales de ellas, dando á cada uno su parte en calidad de solariego, con los derechos y jurisdiccion que en las mismas tenia la corona. Pedro Lopez de Ayala, refiriendo este suceso en la crónica del rey D. Pedro, dice que se hizo la peticion por consejo de D. Juan Alfonso de Alburquerque, dueño de muchas behetrías, debidas á su privanza, y á su mujer Doña Isabel, que las habia heredado de su padre D. Tello de Meneses, y que los caballeros de Castilla no consintieron en el reparto por temor de que no se veri-

ficase con igualdad, habiendo sobre ello grandes porfías entre el D. Juan Alfonso y D. Juan Rodriguez de Sandoval, natural tambien de behetrias y otros caballeros, y quedando éstas por último sin partir y como estaban. Pero aunque tal fué el resultado de aquellas gestiones, en las Córtes no hubo de prevalecer la opinion de Sandoval, puesto que no sólo se formuló la petición en los términos referidos, sino que D. Pedro respondió, que á pesar de tener en las behetrias la justicia parte de las martiniegas y otros derechos, por evitar las contiendas, daños y muertes que ocasionaban, y por acrecentar el patrimonio de los hidalgos con nuevos solares, otorgaba lo pedido, mandando hacer la pesquisa y el reparto con toda igualdad, atendido el estado y el derecho de cada uno (1). La pesquisa se concluyó en efecto, consignándose en el *Becerro*, que aun guardan nuestros archivos; pero la distribucion no llegó á verificarse, sin duda porque después de acordada por el rey, surgió la oposicion á que alude su cronista. Posteriormente en las Córtes de Toro de 1571 se renovó esta pretension, mas los celos y rivalidades entre los hidalgos, temerosos siempre de ser perjudicados en el

(1) Córtes de Valladolid de 1351. Ordenamiento de fijosdalgo núm. 13. Otrosí á lo que dizen que veyendo ellos quelos omiciellos e muertes e peleas e contiendas que entre ellos han acaecido fasta agora, que lo mas dello fué e es por las behetrias que ovieron, e que agora por se partir de las dichas peleas e contiendas e por venir en paz e en asosiego, así como cumple a mio servicio é á ellos, que acordare que las behetrias sean partidas entre los naturales dellas é que las ayan cada uno de los naturales lo que le y copiere por solariegos, faciendoles yo merced o dandoles el derecho que en ellas he, que escoja perlados e fijosdalgo é algunos omes de villa, los que entendiere que serán sin sospecha, é que non ayan parte en las dichas behetrias, é que les mande que vayan á todas las behetrias, é sepan quales é quantas son e en que comarcas, é que desde que esto sopieren así que las parta é iguale entre los naturales dellas, é dando á cada uno la parte que oviere á aver, segun la naturaleza que y oviere....

A esto vos respondo que bien sabedes e saben todos los fijosdalgo de mi señorío como yo he en las behetrias la justicia e parte de las martiniegas é otros derechos; pero por en facer merced e por vos partir de contiendas e de omiciellos e muchos dannos e muertes de omes, é otros muchos males que se acaescian e facian entre vos por la contienda que avedes sobre las behetrias, é porque ayades en que bivre vos mantener mas abundantamente, é seades heredados vos e los que de vos venieren, e los solares de cada unos de vos finquen fechos para adelante, é porque tengo que es mio servicio, otorgovos lo que en esta razon me pedides. E para esto tengo por bien escoger e tomar para lo facer algunos perlados e cavalleros fijosdalgo e algunos otros de las villas, tales que sepan esto facer e ygualarlo en aquella manera que mas cupliere, por que todos é cada uno de vos ayades segun los estados é los solares, el derecho que cada uno de vos avedes de aver; e de aquí fasta pascua de cinquesma primera que viene, ó ante si ser podiere, yo mandaré saber las behetrias quales é quantas son, é quales é quantos son los naturales della, é cataré omes bonos para esto, é mandarlo he partir é igualar entre vos.

reparto, impidió también que se verificase, según refiere López de Ayala en la crónica de D. Enrique II.

Si el reparto hubiera llegado á verificarse, habrían sin duda conservado, aunque en otra forma los diviseros, aquella disputada propiedad. Entónces habria adquirido cada uno cierto número de solares con sus vasallos correspondientes, los habria mantenido y fomentado como se mantiene y fomenta lo que se posee exclusivamente, y convertidas de una vez todas las behetrías en señoríos solariegos, se habria remediado algo el desorden inherente á aquella forma de gobierno, mucho peor sin duda que la de los señoríos solariegos, por más que ésta fuese también opresora y viciosa.

La abandonada administracion de los lugares de behetría daba también lugar á otro abuso, que contribuyó en gran manera al sucesivo aniquilamiento de aquella institucion. A pesar de las prohibiciones antiguas, muchos hidalgos, extraños á las behetrías, compraban heredades en ellas, y haciendo valer su inmunidad de tributos, dejaban de contribuir con ellos, lo cual menguaba considerablemente las rentas de los naturales. Contra esto reclamaron las mismas Cortes de 1351, mandando en su virtud el rey que los hidalgos que hicieran tales compras pecharan por las heredades que adquiriesen los tributos correspondientes. Hacian también semejantes compras y con igual quebrantamiento de las leyes, hombres de villas, eclesiásticos y otros no hidalgos, que siendo exentos del vasallaje que los demás debian á los señores, eran en aquellos lugares, elemento constante de perturbacion. Los eclesiásticos, sobre todo, con motivo de la peste asoladora de 1350, hicieron grandes adquisiciones, á pesar de las leyes que limitaban su facultad de adquirir bienes raices. Solicitado el rey D. Pedro por las mismas Cortes, declaró que los señores podian ocupar las propiedades enajenadas, privando de ellas á sus nuevos dueños (1). Pero en vano se dictaron estas leyes, las enajenaciones en favor de extraños y de iglesias continuaron, y con ellas fueron perdiéndose los lugares de behetría.

Entre tanto se extinguian muchos linajes de los que tenian derecho á ellos, y más aún los de los vasallos entre quienes podian comunicarse los heredamientos. Sus señores convertian en solariegos los que venian á su poder por confiscacion ó por materia, á causa de convenirles más este título de dominio; los señoríos solariegos y jurisdiccionales se extendian y acrecentaban con nuevas mercedes reales, y así al mediar el siglo xv, eran pocos los lugares de behetría y ménos aún aquellos en que los heredamien-

(1) Cortes de Valladolid de 1351. Ordenamientos de fijo-dalgo, núms. 4, 5 y 6.

tos de esta especie no estaban mezclados con otros realengos y solariegos. Entonces D. Juan II, hallando esta institucion enflaquecida de suyo y desacreditada en la opinion, le dió el golpe de gracia, no suprimiéndola de repente, sino sujetándola á condiciones tales, que causaron su inmediata ruina. Gravados primero los pueblos de behetría con la obligacion de proveer de galeotes á la armada, y redimido después este servicio mediante un impuesto de 9 millones de maravedís, D. Juan, fundándose en la conveniencia de facilitar la exaccion de este servicio y en la necesidad de asegurar el sosiego de aquellos pueblos, perturbados siempre por bandos y discordias, ordenó en 1454, que ningun caballero, escudero, dueña, ni hidalgo poseyera ni edificara en ellos, casas fuertes, ni habitaciones, ni adquiriera, ni poseyera tierras ó heredamientos por ningun título, ni habitara en tales lugares declarando nulas cuantas adquisiciones se hicieran en contravencion á esta ley, confiscando los bienes adquiridos y mandando expeler de los mismos lugares á los hidalgos que en ellos moraran (1). Verdad es que esta ley no hubo de ejecutarse del modo riguroso que en ella se expresa, puesto que ni los hidalgos fueron arrojados de las behetrías, ni confiscados los bienes adquiridos en sus tierras, pero respetando los tribunales los derechos existentes en aquella fecha, para el efecto de no molestar á los hidalgos que habitaban en las behetrías, trataron como pecheros á todos los que después de la ley fijaron su residencia, ó adquirieron bienes en ellas, y esto bastó para que las abandonasen todos sus vecinos hidalgos y aún aquellos que aspiraban á serlo. Desde entonces no residió en las behetrías más que gente plebeya y menesterosa, y así unas desaparecieron del mapa y otras se convirtieron en lugares de señorío ó realengo.

Las behetrías individuales ó de personas se extinguieron aún más calladamente. Multiplicándose los concejos y creciendo su poder, fueron el refugio de todos los hombres libres que necesitaban el amparo de otros para vivir seguros. Y como la potestad señorial en tales behetrías no duraba más tiempo que el que queria el vasallo, claro es que cuando los de esta clase estimaron no necesitar la proteccion especial de nadie, ó cuando juzgaron preferible la de los comunes se acabarían por sí mismas todas estas behetrías.

(1) Ya en tiempo del rey D. Pedro habia, segun el *Becerro*, muchos lugares mixtos. Camesa en la Merindad de Aguilar del Campo, era behetría y abadengo; Moranzas era behetría y mitad solariego; Requero era behetría, solariego y abadengo, y Riaño tenia heredamientos de estas tres clases y además de realengo.

CAPITULO III

Tierras de repartimiento y dominio de juro de heredad.

I.

REPARTIMIENTO DE TIERRAS POR DIFERENTES TITULOS.

He dicho en los capitulos precedentes que el rey, como dueño y señor del territorio conquistado, no sólo ponía en él condes y señores que lo poblaran y rigieran, sino que lo concedía tambien con igual fin á sus vasallos de inferior categoría, á las iglesias y á los monasterios por títulos y con condiciones diferentes, de los cuales resultaba diversidad de dominios y de derechos. Cúmpleme ahora investigar estos títulos y examinar los derechos que provenian de ellos.

Daba el rey y daban tambien los condes, puesto que ejercian toda su autoridad, ya lugares yermos para su poblacion y cultivo, ya villas pobladas con todos los derechos que la corona tenia en las mismas ó una parte de ellos, ora castillos con las tierras y poblaciones adyacentes, ora iglesias ó monasterios con sus heredades, vasallos y siervos. Más adelante, cuando se empezó á separar el señorío jurisdiccional del dominio privado, y la corona tuvo más medios de administrar y regir por sí sus propios pueblos, se introdujo la costumbre de otorgar á los vasallos una participacion determinada en las rentas de ciertos lugares, la cual conservó la denominacion antigua de *tierra*, como cuando se entregaba la propiedad y posesion de ésta. Dábanse, pues, *en tierra* las rentas ó una parte alicuota de las rentas de un pueblo, ó bien una cantidad cierta del producto de ellas. Asimismo cuando se tasó el estipendio que debian recibir los caballeros que servian al rey, se llamó *caballería* la porcion de tierra que se juzgaba necesaria para satisfacer la soldada de un caballero, ó una parte de la renta de tierras determinadas, que se adjudicaba en pago del mismo servicio. Daba, pues, el rey ó las tierras mismas, con reserva de algun derecho ó sin ella, ó los tributos, censos y emolumentos de ciudades, villas, castillos ó iglesias en *tierra* ó como tierra, segun el lenguaje de la época.

Resultaron de aquí dos especies de dominio ó señorío, el no enajenado ni entregado á particulares, que se llamó realengo ó propio del rey, y el enajenado ó poseído por personas privadas ó corporaciones, que se llamó de señorío. Los realengos eran tambien de dos clases: los que la corona se habia apropiado y utilizaba en beneficio del Erario ó del público, y los que aún no tenían un destino determinado. Los primeros ó eran vastas here-dades que se explotaban por cuenta del rey, ó montes y aguas, cuyo apro-vechamiento disfrutaban los vasallos onerosa ó gratuitamente, ó caminos y terrenos de uso público: los segundos eran baldíos eriales de que iba dispo-niendo la corona, segun las necesidades de la poblacion y de la monarquía. El dominio llamado de señorío era de tres especies: de señorío seglar, de abadengo y de behetría. Habiendo tratado ya de este último en el capítulo anterior, los dos primeros serán objeto del presente.

Dominio de señorío se llamaba el que ejercían los particulares ó corpo-raciones seglares, cualquiera que fuera su origen ó la extension de sus de-rechos. Éralo por consiguiente así el desprendido de la corona, como el que procedía de tiempos anteriores á la conquista: tanto el de los indivi-duos como el de los concejos organizados é independientes. Dominio de abadengo era el que ostentaban las iglesias y monasterios, cualquiera que fuese su procedencia.

Daba el rey estos dominios, como he dicho ántes, para la poblacion de los yermos ó la repoblacion de lugares devastados en premio de servicios militares, después de la conquista de algun territorio importante, ó sin este motivo, para galardonar servicios de otro orden ó fomentar el culto. Porque aunque no era obligatorio el reparto de las tierras conquistadas entre los que ayudaban á ganarlas, excepto el de una casa á cada uno de los tres caballeros que primero entraran en villa ó ciudad cercada, la costumbre llegó á introducirlo, sobre todo desde el siglo xi, y tal vez no se generalizó hasta el xii, en el cual empezaron las conquistas de las más ricas provin-cias de España, fué ménos insegura la dominacion de lo conquistado y toma-ron las tierras un valor que no tenían cuando la mayor parte de los caballeros acudían al ejército con el propósito de volver á sus casas lo más pronto po-sible y sin ánimo de residir en los nuevos territorios, que como fronterizos, estaban más expuestos que otros á caer en poder del enemigo. Así, cuando Alfonso VI conquistó á Toledo en 1085 y trató de poblarla con más cristianos que los mozárabes allí avecindados, no se limitó á dar he-redades á los conquistadores que las quisieron, sino que convocó á todos los que desearan habitar dentro de sus muros, lo cual equivalía á ofrecer-

les alguna participacion en su tierra (1). El mismo monarca, para reedificar las ciudades de Segovia, Ávila y Salamanca, encomendó su poblacion en 1088 al conde D. Ramon de Borgoña, el cual para ejecutarla hizo un llamamiento á todos los del reino, nobles y plebeyos, ofreciéndoles tierras, viñas, prados y posesiones. Concurrieron, en efecto, muchos pobladores que fabricaron casas y templos y contribuyeron á fortificar las arruinadas murallas (2), y tres años después se hizo entre los vecinos de Ávila un nuevo repartimiento de tierras (3). D. Alfonso el Batallador, para poblar á Alfaro, que entonces pertenecía á la corona de Aragon, tuvo que repartir sus tierras y casas entre los mozárabes que habia traído de Andalucía (4). Los reyes tambien cuando los caudillos musulmanes les prestaban algun servicio extraordinario reconociéndose sus vasallos, solian darles en premio heredades y tierras. Así lo verificó Alfonso VII con Zafadola, alcaide de Roda en la Mancha, el cual como temiese que los Almoravides de Córdoba trataran de matarle, entregó la villa al rey en 1151, y le rindió vasallaje, recibiendo en cambio castillos, lugares y honores de la tierra de Toledo (5).

Algo contribuia entre tanto á dificultar la poblacion de los nuevos lugares ó de los antiguos destruidos, la resistencia que solian oponer los pueblos inmediatos, por el temor de que los abandonasen muchos de sus vecinos para disfrutar las ventajas que se les ofrecian en los otros. Así cuentan las crónicas que habiendo Fernando II de Leon encomendado la repoblacion de Mirobriga á un caballero leonés llamado D. Rodrigo, y la de Bletisa á otro que no nombran, sintieron tanto esta resolucion los de Salamanca, en cuyo territorio estaban aquellos pueblos, que se sublevaron contra el rey, llamando en su ayuda á los de Avila, y no se sometieron sino después de derrotados (6). Sabido es tambien que uno de los agravios que alegaron los ricos-hombres rebelados contra Alfonso X era haber éste dispuesto ciertas pueblas, tan ventajosas para los vecinos, que los vasallos abandonaban á sus señores y sus propios lugares por acudir á ellas.

(1) Roderici, *De rebus Hispaniae*.

(2) *Anal. Tolet. Pelagii Chron.* Roderici, obr. cit.

(3) Sandoval, *Historia de Alfonso VI*.

(4) Ferreras, *Sinopsis de la Historia de España*, t. 5.º, p. 283.

(5) Sandoval, *Chron. del Emperador*.

(6) Apénd. á los *Anales Complutenses*. Mirobriga se llamó desde entonces Ciudad-Rodrigo, y Bletisa, Ledesma.

Pero cuando San Fernando extendió sus conquistas á las fértiles campiñas y ricas ciudades de Andalucía, organizó y regularizó hasta cierto punto el sistema de los repartimientos, más codiciados ya sin duda por la gente de guerra. Hizolos inmediatamente después de la conquista en Jaen, Córdoba y Baeza, heredando en esta última ciudad á 500 caballeros. En Sevilla, que era á la sazón una de las ciudades más ricas y populosas de España, los encomendó á su confesor y á cuatro caballeros de su confianza, dando desde luego por sí mismo ciertas casas y heredamientos á algunos de los caballeros que le acompañaban, y á la iglesia catedral, los diezmos de toda la diócesis con exclusion de los del Alxarafe y ribera de Sevilla, que se reservó, y además vasallos y heredades con algunas villas y aldeas. Tambien designó para que fuesen heredados en la misma ciudad 200 caballeros de las principales familias del reino. No pudieron los partidores concluir su obra en vida del santo rey, pero su hijo y sucesor D. Alfonso X la llevó á efecto en 1253, y es por cierto un ejemplo señalado de la liberalidad del aquel monarca y de la propiedad que traia su origen de la guerra. Empezó el repartimiento por las personas reales, dándose á la reina doña Juana, viuda de San Fernando, varios heredamientos y entre ellos las casas de baños que los reyes moros temán en la ciudad, y bienes de diferentes clases á la reina doña Violante, á los hermanos y tío del rey, á los infantes D. Alonso de Aragon y D. Pedro de Portugal, al conde de Urgel, al hijo del rey moro de Baeza y á D. Rodrigo, hermano ilegítimo de San Fernando. Siguieron después los prelados y entre ellos el arzobispo de Santiago y los obispos de Astorga, Cartagena y Palencia, tres monasterios de Toledo, San Isidro de Leon y otras iglesias y conventos. No salieron peor libradas las órdenes militares: la de Santiago obtuvo la alquería de Villanueva, dos castillos y otras heredades con 1.600 aranzadas de olivar, mediante la obligacion de mantener perpétuamente una galera armada: la de Calatrava, dos villas importantes; la de Alcántara, una villa y grandes heredades: la de San Juan, otra villa inmediata á la ciudad, y la del Temple, una alquería y todas las casas necesarias para la habitacion de sus maestros, familiares y criados. Tras las órdenes militares vinieron al repartimiento muchos ricos-hombres, á cada uno de los cuales se dieron 60 aranzadas de tierra; después los mesnaderos ó servidores particulares del rey, 14 alcaldes reales, que con dos adalides, fueron heredados en una alquería, seis prebendados y 24 canónigos, heredados todos en otra alquería, y dos de ellos además con 620 aranzadas, mediante la obligacion de mantener una galera armada; 50 racioneros de la iglesia metropolitana, y

por último, los 200 hijos-dalgo de linajes ilustres del reino que había designado San Fernando ántes de su muerte. Cada uno de estos últimos obtuvo una casa principal en la ciudad, 20 aranzadas de olivar, seis de viña, dos de huerta y seis yugadas de tierra calma, todo con la condicion de tener en Sevilla sus casas mayores, poblarlas dentro de dos años, no venderlas sino á plazo de doce y prestar todo su servicio con el concejo. Diéronse tambien á éste muchas alquerías para que las partiese entre los pobladores por caballerías y peonías y las casas abandonadas por los moros, de que no se había dispuesto en el repartimiento, todo con la condicion de no enajenarlo en cinco años. Otros partidores hicieron después, en efecto, esta nueva division entre los vecinos, y por cierto que tambien lograron en ella nuevos lotes muchos de los caballeros é hidalgos ya heredados. El rey concedió todas estas alquerías por *juro de heredad* y con la condicion de contribuir por ellas con lo que el fuero general mandaba y además la trigésima parte del aceite que produjeran. Por último, hasta fueron heredados en aquel repartimiento muchos moros y judíos, tanto de los que se hallaban en la ciudad como de los que vinieron con los conquistadores, sólo con la condicion de seguir pagando al rey los mismos tributos que satisficieran al Kalifa (1).

El mismo monarca D. Alfonso, después de conquistar á Murcia, concedió grandes heredamientos á las iglesias parroquiales, al obispo electo, á los canónigos, á las órdenes de Santiago y del Temple, á la reina y sus damas y á otros caballeros particulares por servicios señalados. Además repartió tierras y casas entre 333 caballos y 2.200 peones, en lotes desiguales, mayores, medianos y menores segun las circunstancias de cada partícipe. Dió á los vecinos estas casas y heredamientos con la condicion de que los tuvieran poblados con sus mujeres é hijos y de que fueran vasallos suyos y de sus sucesores y en el supuesto de haberlos de perder como dejaran de prestar su servicio. Además, los que tales heredamientos obtuvieran por caballerías, habian de mantener caballo y armas, y los que por peonías, las ballestas y armas correspondientes. Por último, prohibió enajenar hasta después de cinco años las tierras y bienes repartidos y que ni aún entónce comprara ningun poblador más de un heredamiento de otro (2).

El rey Sábio ganó tambien á Jerez de la Frontera, y para poblarla y defenderla puso en ella 40 caballeros, á cada uno de los cuales dió una casa,

(1) Ortiz de Zúñiga, *Anales de Sevilla*, lib. 2.º, año 1253.

(2) Cascales, *Hist. de Murcia*, discurso 2, caps. 8 y 18.

tierras cultivadas (1) y doscientos maravedís de renta cada año. En cambio les impuso las mismas condiciones que á los vecinos de Murcia en cuanto al vasallaje, residencia y armamento, y les mandó no vender sus heredamientos sino por gran necesidad, con licencia del rey y á otro hijo-dalgo. Este repartimiento se hizo además con una condicion que no suele hallarse en otros, la de haberse de mantener la integridad de los heredamientos señalados, heredándolos como mayorazgo aquel de los hijos varones que designara el poseedor y en defecto de hijos, el pariente que eligiera el mismo poseedor, siempre que fuera hijo-dalgo y pudiera prestar el servicio á que estaba obligado su causante (2).

Las tierras de repartimiento se daban por el rey en dominio alodial ó en mero señorío. El primero de estos títulos originaba las propiedades llamadas *divisas*, el segundo las *solariegas*. Eran de dominio alodial las propiedades adquiridas por título perpétuo ó irrevocable, y con facultad de disponer de ellas por herencia ó acto entre vivos. Estas adquisiciones se llamaban *de juro de heredad* ó hereditarias. Eran de señorío las propiedades en que sólo se tenía el gobierno de los habitantes, con la parte de frutos que señalaran el fuero ó la costumbre. Cuando el dominio alodial ó el señorío no era perpétuo, absoluto ó hereditario, tomaba diferentes nombres, que indicaban el carácter temporal ó la limitacion de los derechos de la propiedad significada. En los diplomas de Castilla suenan los nombres de *tenencia*, *prestimonio* ó *prestacion*, *encomienda*, *honor* y aún *feudo*, todos los cuales significan eventualidad y cargas del dominio, ó la participacion en él de otras personas. La infanta doña Elvira, hija de Ramiro II, decia en una escritura de 970 que el rey, su padre, habia enriquecido al presbítero Vincemalo, dándole «muchas riquezas y prestaciones ó señorios (*multas opes et præstationes seu mandationes*), y entre ellas varias villas. Fernando, hijo del conde Asur, confesaba en otra escritura de 976 haber recibido del rey Ordoño «muchas cosas de la corona, tanto en señorío como en heredad (*tam de mandatione quam etiam de hereditate*), y en este último concepto varias villas que nombra» (3). Distinguirse, pues, cuidadosamente en los documentos estas dos clases de propiedad.

(1) Estas tierras eran seis aranzadas de viña, dos de huerta, quince de olivar, seis para majuelos y seis yugadas para sembradio.

(2) Privilegio conservado en el archivo del ayuntamiento de Jerez, publicado en la *Historia de Jerez* por D. Adolfo de Castro.

(3) Escalona, *Historia de Sahagun*, escrituras 45 y 50.

Todas las cosas podian otorgarse por heredamiento, incluso el señorío, aunque unas se diesen con más frecuencia que otras. Las tierras incultas y los lugares para edificar ó poblar se daban generalmente con aquel título. Los castillos y las villas pobladas se concedian con más frecuencia en senorio, tenencia, encomienda, feudo ó prestimonio. Pero aún el dominio alodial se daba á veces con prohibicion ó con restricciones de la facultad de enajenarlos, y siempre con la condicion de tener pobladas las tierras concedidas con tal objeto. Ordoño II dió al obispado de Mondoñedo el lugar de Vallelabrada, con sus villas, iglesias, familias que en él moraban y ganados y además con el señorío; pero sin la facultad de enajenarlo por ningun título (1). Del mismo modo dió Aldegastro, hijo del rey Silo, en 780, las heredades de su dotacion al monasterio de Obona (2). Alfonso IX, en las Cortes de Leon de 1188, dió una ley general mandando que ningun hombre que tuviera heredad por la cual contribuyese á la corona, pudiera enajenarla (3), sin duda porque estas heredades, procediendo del realengo, debian entenderse concedidas con aquella prohibicion. Por eso decia D. Alfonso X en las Partidas que las heredades que pertenecian al reino se guardaban de dos modos; por heredamiento y por tenencia; que los que las tenian por heredamiento debian poblarlas y proveerlas de hombres y de todo lo necesario para que no se perdiesen ni sufriera daño el rey ó el reino, y no enajenarlas en vida ni en muerte á quien no fuera vasallo de la corona, ni á otro que pudiese hacer guerra con ellas: que si alguno quisiera venderlas ó cambiarlas habia de hacerlo saber al rey para que pudiera tantearlas; y que aunque tales restricciones no apareciesen en las escrituras de donacion otorgadas por la corona, no habia de entenderse que los donatarios podian disponer de sus heredades en menoscabo del rey ó del reino (4).

Pero los mismos monarcas que promulgaban estas leyes y autorizaban tales documentos, expedian otros muchos en que concedian tierras por heredamiento, con la facultad de enajenarlas, considerando sin duda necesario este estímulo para llamar pobladores á los lugares que más carecian de ellos. Fernando I, en 1043, dió al monasterio de Cardena las villas de Villafria y Orbaneja, con sus montes, aguas y habitantes, y con la ju-

(1) *Esp. Sagr.*, t. 18, apénd. 10.

(2) *Esp. Sagr.*, t. 37, apénd. 5.

(3) *Córtes de Castilla*, publicadas por la Real Academia de la Historia, "Curia habita apud legionem," núm. 14.

(4) L. 1.^a, t. 18, Part. 2.^a

jurisdicción, autorizándole al mismo tiempo para enajenarlas (1). Alfonso VI dió en 1095 á los pobladores de Logroño muchas tierras en su término, con la calidad de libres y la facultad de enajenarlas si fuera necesario. El mismo monarca en igual fecha dió á los pobladores de Miranda de Ebro solares, casas, iglesias, aguas y montes, con idéntica libertad de enajenación (2). Disfrutaban ésta facultad asimismo los vecinos heredados en el primer repartimiento de Toledo, los pobladores y vecinos de La Guardia, San Vicente de la Sosierra, Labraza y otras villas que usaban el fuero dado por Sancho VII de Navarra á la primera de las nombradas en 1164 (3), así como otras muchas, pobladas al fuero de Logroño. Alfonso VII, en 1140, dió á la iglesia de Sigüenza, por derecho hereditario, los hombres que habitaban en su término, con sus casas y heredades, le permitió traer nuevos pobladores, facultó á todos los vecinos para hacer *presuras* en los eriales y poseerlas por juro de heredad; concedió á la misma iglesia el señorío y jurisdicción del lugar, y autorizó á sus habitantes para enajenar cuantas heredades poseían ó adquirieran (4). El mismo D. Alfonso en 1135 concedió á los pobladores de Guadalajara que obtuviesen casas y heredades, la facultad de venderlas después de habitarlas y poseerlas durante un año (5). Igual derecho concedió á los pobladores á quienes dió tierras en el castillo de Oreja, después de ganarlo de los moros en 1129 (6), á los de Escalona mediante el fuero que le dieron de su orden los dos caballeros ántes nombrados (7): á los de Catalifa (8) y á los de Oviedo (9). Iguales privilegios concedieron á otros pueblos Alfonso VIII, San Fernando y Alfonso X; pero sería inútil enumerarlos, porque los indicados bastan para hacer ver como á pesar de las antiguas restricciones progresaban las libertades del dominio.

Dábanse, como he dicho, en heredad toda clase de bienes y derechos, así las meras tierras de labor, como los señoríos de las villas, las ren-

(1) Berganza, *Antigüedades*, etc., t. 2.º, escritura 65.

(2) Fueros de Logroño y Miranda en Llorente, *Provincias Vascongadas*, t. 3.º, números 81 y 82.

(3) Véanse otros fueros en Llorente, etc., t. 4.º, núm. 137.

(4) Muñoz, *Colección de fueros*, etc., p. 529.

(5) Id. id., pág. 507.

(6) *Colec. de doc. de las Prov. Vasc. y Castilla*, t. 5.º, núm. 11.

(7) Muñoz, *Colección de fueros*, pág. 485.

(8) Idem id., pág. 532.

(9) Fuero de Oviedo en Llorente, *Provinc. Vascong.*, t. 4.º, núm. 121.

tas reales y los castillos y fortalezas. Verdad es que los reyes propendían á no dar estos últimos sino en tenencia, á fin de tenerlos más seguros á su servicio; pero como muchos se edificaban á costa de los particulares, y no siempre hallaba el rey quien quisiera tener los de la corona con aquel título precario, eran siempre muchos los castillos poseídos por heredamiento. Alfonso el Casto hubo de dar algunos en este concepto, que se conservaron muchos siglos después en los descendientes de sus poseedores primitivos (1).

Dábase el señorío por *heredamiento* siempre que el rey concedía la propiedad de lugares poblados ó para poblar con aquella expresion, ó sin ella, no reservándose la jurisdiccion, las rentas ni los derechos que constituían su dominio, desprendiéndose, por el contrario, de todo cuanto poseía en el término del lugar, ó reteniendo cuando más, alguno, poco cuantioso, como la *moneda* ó un ligero tributo, signo de la soberanía. Cuando todo esto se daba sin cláusula de reversion, ni otra cortapisa que impidiera transmitirlo en vida ó en muerte, como no fuese por tiempo limitado, ganaba el adquirente un señorío por heredamiento, digérase ó no en la escritura que se enajenaba *jure hereditario*. De esta especie fué la donacion de Adegastro á Santa María de Obona, ántes mencionada, puesto que por ella se enajenaron *para siempre* las heredades, familias, villas pobladas, montes y aguas de cierta comarca, con exclusion de una heredad dada ántes á doña Elo, y muchos ganados, muebles, utensilios y ornamentos, con la condicion de que los hombres de aquellas familias, recibirían *prestimonios* del abad, en el lugar que éste señalara, le servirían en cuanto les mandase, estarían sujetos á su jurisdiccion, pagándoles las multas en que incurrieran por sus delitos, aunque sin perder por causa de ellos sus propios prestimonios, y no se someterían nunca al señorío ó encomienda de otro (2). A este género correspondia igualmente la donacion de Alfonso II el Católico, á la iglesia de Valpuerta, de ciertos términos, villas, montes, iglesias y monasterios, con inmunidad de la jurisdiccion real y de todo tributo y servicio, expresando que la Iglesia poseería aquellos bienes con *libertad plenísima* (3). Fué de la misma clase la donacion que Fernando I hizo en 1043 al

(1) Carvallo, en sus *Antigüedades de Astúrias*, Part. 2.^a, tit. 17, pár. 4.º, hace mencion de una casa fuerte en el sitio de Llamas del Mouro, que todavía en el siglo XVII se conservaba en poder de la familia de los Sierras, sucesores del primer castellano.

(2) *Esp. Sagr.*, t. 37, apénd. 5.º

(3) *Colec. de priv. de las Prov. Vasc. y Castilla*, t. 6.º, p. 1.º

monasterio de Cardena, de las villas de Villafria y Orbaneja de que ántes hicé mencion. El rey dió estas villas con sus montes, aguas y habitantes, declarando que no se reservaba en ellas ningun derecho, que el abad ejerceria en las mismas toda la potestad pública y otros muchos privilegios y monopolios feudales, y que sus vasallos no contribuirían á la corona con los tributos y servicios acostumbrados, porque habian de hacerlo al monasterio (1). La donacion ántes citada de Alfonso VII á la iglesia de Sigüenza, fué tambien de igual especie, puesto que el rey otorgó, segun expresa el diploma *jure hereditario*, los hombres poblados en aquel término con sus casas y heredades, les mandó «servir únicamente á la iglesia,» lo cual en el lenguaje del tiempo, significaba contribuir tan solo á ella, eximiéndoles de pechos y tributos reales, y ordenó que ni el merino ni el sayon del rey tuvieran autoridad sobre aquellos hombres, por cuanto habian de ejercerla toda los oficiales que nombrase el obispo» (2).

II.

CONDICIONES DEL DOMINIO DE JURO DE HEREDAD.

Era condicion comun de todas las adquisiciones provenientes de la corona, cualquiera que fuese su titulo, la de guardar fidelidad al rey, sobreentendiéndose que la falta de ella daba lugar á la confiscacion de todo lo adquirido, aunque fuese por heredamiento perpétuo. Uno de los más antiguos y más notables ejemplos de señoríos hereditarios es el de Tuy, confirmado por Alfonso VII al obispo de la diócesis, y anteriormente otorgado por los abuelos y padres de aquel monarca. Dijo el rey en la escritura de confirmacion que todas las casas de realengo, que se hallasen en la ciudad ó su término, habian de pertenecer perpétuamente al obispo, con integra potestad sobre ellas y sus habitantes, los cuales no tendrian nunca otro señor y contribuirían al prelado con yantares y multas: que la justicia real no entraria en la ciudad ni en su término por razon de ningun delito, como no fuese llamada por el obispo y que éste pondria sus jueces que conocieran de todas las causas conforme á las costumbres del reino. Dió además D. Alfonso al

(1) Berganza, *Antigüedades*, etc., t. 2.º, escritura 85.

(2) Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 529.

mismo prelado con igual perpetuidad y *jure hereditario*, un castillo en la propia ciudad, edificado para su defensa, el realengo comprendido en los términos llamados de Benevivere y en otros de la diócesis, cultivado é inculto y el castillo de Santa Elena, con todos sus términos y pertenencias, declarando, por último, que hacia todas estas donaciones para que tanto el obispo, como los canónigos fueran sus fieles súbditos y de los reyes sus sucesores, así con la ciudad de Tuy como con los castillos mencionados (1). Fernando II de Leon trasladó después la ciudad de Vigo á un lugar más fuerte y defendido, propio de su iglesia, por cuya ocupacion dió á ésta la de San Martín de Burreiros, con todos sus derechos reales y pertenencias perpetuamente y le restituyó varias heredades que le habian sido usurpadas, concediéndole al mismo tiempo el dominio de la ciudad, por derecho hereditario; pero con retencion de «la fidelidad y reverencia debidas al dominio del rey.» La Iglesia dió á la corona por la confirmacion de esta escritura doscientos maravedís de oro (2). Más adelante veremos lo que se entendia por fidelidad y reverencia y las obligaciones que llevaban consigo.

Era consecuencia de este deber de fidelidad, segun he dicho, que quien á él faltara, perdiese todos los bienes procedentes de la corona que poseyera, aunque fuese por heredamiento; mas no bastaba para ello una falta cualquiera: era menester que fuese muy grave y calificada. Segun las antiguas leyes de las Cortes de Nájera, compiladas en el Fuero viejo de Castilla, el rey que desterraba á un rico-hombre, no sin causa legitima, podia privarle de sus solares y heredades, aunque el rico-hombre le declarara la guerra: sólo le era licito en tal caso devastar las demás propiedades que aquel poseyese y no fueran de la clase expresada. Cuando el rico-hombre era desterrado por hacer daño en la tierra (malfetria) podia el rey, sin embargo, confiscarle cuanto tuviese. Fuera de este caso, si le quitaba el rey su tierra, podia el rico-hombre abandonarle y hacerle la guerra con sus propios vasallos, sin que estos incurriesen por ello en la confiscacion de sus solares y heredamientos, á no ser que usurparan algo de la corona (3).

Segun las leyes de Partida, faltaba tambien á la fidelidad é incurria en

(1) "Hoc autem facio pro remedio animæ meæ..... et ut vos episcopo Domine Pelagi et cuncti successores vestri, tam episcopi quam canonici Tudenses, sitis fideles subditi mei et cunctorum successorum meorum, tam de Civitati Tudensi quam de Castello prædicto." *Esp. Sagr.*, t. 22, apénd. 10.

(2) *Esp. Sagr.*, t. 22, apéns. 14 y 15.

(3) *Fuero viejo*, l. 1.^a, t. 4.^o, lib. 1.^o

confiscacion el señor de castillo por merced del rey que no venia á prestarle homenaje dentro de treinta dias, ó desaforaba á sus vasallos, ó no venia al juicio del rey, negándole su señorío, ó no acudia á la hueste cuando era llamado, ó no recaudaba el tributo de *moneda* debido á la corona, ó denegaba la justicia á sus vasallos, impidiéndole al rey hacerla por sí, ó acogia malhechores en su tierra, ó no guardaba las condiciones de su adquisicion. Cuando el castillo no procedia de la corona, ó se poseia en feudo, tenia el señor plazo más largo para prestar su homenaje, y si lo perdía por faltar á este deber, podia el rey devolvérselo ó darle otro en cambio, aunque tambien habia algunos cuyos dueños estaban expresamente exceptuados de aquella obligacion. El homenaje debia repetirse cada vez que sucedia en la corona un nuevo rey ó en el castillo un nuevo señor (1).

Tambien modificó un tanto el autor de las Partidas las leyes de Nájera, ántes indicadas, acerca de los derechos de los ricos-hombres en sus heredamientos, cuando eran desterrados. Después de señalar las causas que podian dar lugar á esta determinacion, que eran la venganza ó malquerencia del rey, los daños causados en la tierra por el rico-hombre, ó la traicion de éste, declaró los derechos del mismo en cada uno de los tres casos. Cuando el extrañamiento tenia lugar por malquerencia del rey, y el rico-hombre no volvía á su merced, después de pedirla tres veces, una en secreto, otra ante testigos y otra por justicia, debia ausentarse el desterrado con sus vasallos dentro de treinta dias, y podia hacer con ellos la guerra al rey, pero sin hurtar, quemar ni entrar por fuerza en villas ni castillos, á ménos que el rey le hubiera privado de alguna cosa suya, en cuyo caso podria tomar castillos ó villas que él ó sus vasallos no hubiesen tenido y que no valiesen más que lo confiscado, aunque con la obligacion de conservarlos en su poder para restituirlos, cuando el rey le devolviera lo que le tomara. Los vasallos que con el rico-hombre hicieran al rey la guerra, habian de conservar tambien el botin que ganaran en ella para devolverlo en su caso á la corona: sus criados y compañías podian tambien salir con él y defender su persona, pero no tomar parte en la guerra contra el rey. Cuando el rico-hombre era desterrado por malfetría podia ausentarse igualmente con sus vasallos y permanecer con ellos hasta treinta dias, pero no hacer guerra al rey ni ocupar nada de su señorío, aunque si tomaba vasallaje con otro monarca, le

(1) Leyes 22, 23 y 24, tit. 13, Part. 2.*

era lícito hostilizar en su servicio al que le desterrara, y si quebrantaba cualquiera de estas prescripciones, incurria en la pena de confiscacion. Cuando el rico-hombre era desterrado por traidor ó alevé, no estaban sus vasallos obligados á seguirle, y si lo hacian y no regresaban, ú hostilizaban al rey, incurrian en la misma pena que su señor (1).

Las crónicas y los documentos contemporáneos ofrecen ejemplos numerosos de confiscaciones de heredamientos por causa de infidelidad. Ordoño III dió á San Rosendo en 955, además del gobierno ó mandacion de un territorio, las heredades que dos sobrinos suyos, Gonzalo y Bermudo, habian disfrutado y perdido por su infidelidad, y las que aún debiesen heredar de sus parientes, facultándole para disponer de ellas á su arbitrio (2). D. Lope Diaz de Haro se rebeló contra Alfonso X por haberle éste confiscado, no sólo la *tierra* que habia tenido su padre, sino las *heredades* del mismo en que habia sucedido. El rey le envió mensajeros, que le demostraran la sinrazon de su queja, los cuales alegaron para justificar la confiscacion las mismas causas que señalan las leyes de Partida ántes citadas. Dijéronle, pues, segun el razonamiento que le atribuye la crónica: «El rey nunca vos desheredó, que si desheredado sodes, desheredáronvos aquellos en cuyo poder vos dexó vuestro padre D. Diego; ca trayéndoos ellos consigo después que partistes de casa del rey, le robastes la tierra y mandastes poner fuego en muchas partes, y fueron quemados y robados y estragados muchos lugares. E lo que decides que Orduña debe ser vuestra, é que la dió el rey D. Fernando, padre del rey D. Alonso nuestro señor, en donacion á D. Lope y á doña Urraca, vuestros abuelos, verdad es; mas vos guerreástele della é desde allí hecistes mucho mal en la tierra, y fuero es de Castilla que si de la donacion que el rey da le hacen guerra ó mal en la tierra, que la pueda tomar con fuero y con derecho. Y lo que decides de Valmaseda, bien sabedes que siendo allí vos con vuestra madre, y vuestros vasallos y tíos y hermanos, robastes dende la tierra y hecistes mucho mal, y por esto que el rey ovo de poner algunos de sus vasallos para guardar la tierra. Y si vos dexastes á Valmaseda, el rey la cobró y la tiene por las malfetrías que vos e vuestra madre hecistes en la tierra: el rey non vos desheredó, mas vos mismo vos desheredastes y aquellos que vos tenían en poder y en guarda: ca el rey non pudo excusar de hacer lo que era fuero y

(1) Leyes 10, 11 y 12, tít. 25, Part. 4.^a

(2) *Esp. Sag.*, t. 18, apénd. 16.

derecho» (1). D. Lope Díaz se desnaturalizó del rey de Castilla y le hizo la guerra al servicio del de Aragon, y aunque ajustadas las paces entre ambos monarcas volvió á la gracia de D. Alfonso y fué restituido en el señorío de Vizcaya, nunca lo fué en el dominio de Orduña y Valmaseda.

Una carta real del rey D. Pedro, conservada en el archivo del ayuntamiento de Sevilla, refiere la historia del señorío de otra villa y da bastante á conocer las vicisitudes de este género de propiedad. Aguilar de la Frontera habia sido dada en heredamiento á Gonzalo Ibañez de Oniñan, cuyo hijo D. Gonzalo la heredó é hizo guerra con ella á Fernando IV, aliándose con los moros de Granada. Después la heredó otro D. Gonzalo, hijo del anterior, el cual hostilizó con ella al rey Alfonso XI. Aquellos reyes no confiscaron la villa, como debian, segun dice el documento, porque los cuidados de la guerra no se lo permitieron. Pero después, por falta de sucesores legítimos del linaje de Ibañez, pasó la villa al dominio de la corona. Entónces el rey D. Pedro la dió á D. Alfonso Fernandez Coronel por juro de heredad y con la cláusula de que «me feciere de la dicha villa guerra é paz é me acogiere en ella yrado é pagado, é guardare mio servicio é mio señorío, é nunca dello me deserviese é si contra ello fuese, que perdiese la dicha villa é que fuese mia.....» D. Pedro recibió el pleito homenaje de D. Alfonso, le hizo rico hombre y le dió pendon, fundándose en que su padre, el rey Alfonso XI, le habia criado, y galardonado, héchole caballero y nombrándole oficial suyo é individuo de su consejo. D. Alfonso Fernandez, sin embargo de estas obligaciones, se desnaturalizó del rey D. Pedro y le hizo la guerra, por lo cual el rey le declaró traidor, puso cerco á su villa, la confiscó y aplicó á la corona juntamente con los demás bienes de su dueño, y dijo que no la despoblaba y yermaba, segun lo habia merecido, porque estando frontera á los moros, podria resultar daño; pero le mudó el nombre y las armas y mandó confiscar las casas de los vecinos que hubieran defendido el pueblo hasta el día de su rendicion (2). Por cuyo documento se ve que las leyes que penaban la infidelidad de los poseedores de señorío se aplicaban con más ó ménos rigor, segun lo permitian las circunstancias de la época y la severidad ó el poder de los reyes.

(1) *Crónica de D. Alfonso el Sábio*, cap. 28.

(2) Publicóse este documento en la *Revista de Ciencias, Literatura y Artes de Sevilla*, año de 1860, entrega 3.ª, t. 6.º

III.

CONVERSION DE LAS PROPIEDADES COARTADAS EN PROPIEDADES DE JURO DE HEREDAD

En los primeros siglos de la monarquía castellana, la mayor parte de las propiedades hereditarias se hallaban en poder de los nobles y caballeros poderosos que, además de ser los más favorecidos de los reyes, eran también los que tenían más medios de defenderlas y conservarlas. Por eso en el siglo XIII escribía el infante D. Juan Manuel en su *Libro de los estados* (1): «Et la mayor partida de la tierra que han (los duques) es suya por heredamiento.» Los pecheros y plebeyos habitaban generalmente en casas que fabricaban ellos mismos en suelos de los nobles y cultivaban las tierras de estos, mas tenían unas y otras con condiciones tan onerosas que no podía decirse de heredamiento la mayor parte de su propiedad. Sólo cuando los progresos de la reconquista hicieron sentir más vivamente la necesidad de fomentar la población y de utilizar la tierra, entrando en competencia para atraer pobladores á las suyas respectivas, los reyes, los señores, las iglesias y los concejos, fué cuando se generalizó la costumbre de dar y ofrecer propiedades perpétuas en heredamiento, para mayor estímulo de los que vinieran á cultivarlas y defenderlas. Ya era el rey, dueño de un lugar habitado por antiguos siervos de la gleba, sujetos á condiciones onerosas, descontentos de su señorío é inclinados á abandonarlo, quien procuraba contener su despoblación y atraer nuevos vecinos, dándoles sus solares por heredamiento y tasando y reduciendo sus tributos y servicios. Ya eran los señores quienes, temerosos de que sus lugares quedaran despoblados por pasar sus habitantes á otros de realengo, donde se les ofrecían aquellas ventajas, otorgaban á sus vasallos otras mayores ó parecidas. Ya, en fin, eran los obispos y los abades, cuyas iglesias y villas sufrían continuos despojos de los señores seglares y de los oficiales del rey, cuando no tenían una población numerosa que las defendiese, los que se esforzaban por acrecentar el número de sus vasallos, concediéndoles cada vez mayores derechos sobre las tierras que tenían de ellos.

De este modo y por tales causas fueron haciéndose hereditarias muchas propiedades que ántes no lo eran, aunque con una diferencia esencial entre ellas y las que siempre lo habían sido, porque éstas, como que se daban á

(1) Part. 1.^a, pár. 86.

nobles y caballeros exentos por su calidad de pechos, no contribuían á la corona con ningún tributo, y aquellas, como adquiridas por pecheros, debían acudir al señor de quien procedían con algún censo ó servicio. La ventaja del plebeyo que así convertía en hereditarias sus heredades, consistía, pues, en disponer más libremente de ellas y en la reduccion y fijeza de las cargas que ántes fueran arbitrarias ó más gravosas. Fijar los tributos y servicios con que habían de contribuir al señor los vecinos de un pueblo, y los derechos de estos sobre sus propiedades era lo que originariamente se llamaba *darles fuero*. Estar á tal *fuero*, pagar tal *fuero*, ó poblar á tal *fuero* significaba principalmente tener tal especie de dominio en la tierra que se poseía y satisfacer por ella al señor, cualquiera que fuese, determinados tributos y servicios. Por eso son los fueros y cartas-pueblas los que empezaron á convertir en hereditaria y perpétua la propiedad pechera.

Sólo con limitar y determinar los censos é impuestos que ántes fueran arbitrarios ó eventuales, la propiedad sujeta á ellos se determinaba y delindaba y adquiría un valor cierto de que ántes careciera. Porque si el señor no podía exigir de sus vasallos más que una cantidad fija, toda la restante que produjesen las heredades era verdadera propiedad de los que las cultivaban y recogían sus frutos; y si el señor no tenía más derechos que los consignados por escrito, el vasallo había de tener todos los otros de que no se hiciera mencion en la escritura. Estos derechos que el señor se reservaba constituían otras tantas restricciones del dominio de los pecheros, las cuales, si al principio solían ser gravosas en extremo, fueron después moderándose y limitándose con el trascurso del tiempo, hasta llegar á convertirse en un ligero gravámen.

Los fueros y cartas-pueblas ofrecen ejemplos numerosos de estas transformaciones de la propiedad pechera. Fernán Armentales, señor de Melgar de Suso y otras villas, fijó en 950 lo que sus vasallos habían de pagarle por infurcion, por mañería y por las calumnias, eximiendo al mismo tiempo de facendera y hospedaje durante un año á los nuevos pobladores (1). El señor de Palenzuela fijó también la infurcion, eximió de ella y de facendera durante un año á los nuevos pobladores, á los recién casados y á las viudas, y para siempre á los que no tuvieran casa poblada, y dispensó á todos de *anubda*, *fonsadera*, *rauso*, *mañería* y *nubso*, que eran los tributos más odiados (2). Los vecinos de Villavicencio obtuvieron en el siglo xi ventajas se-

(1) Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 27.

(2) *Idem id.*, p. 273.

mejantes (1). Poblada la ciudad de Logroño por el conde D. García, Alfonso VI, para que no fuese abandonada por sus habitantes, le dió un fuero de los más libres que entónces se conocían, y con él varias sernas, casas, tierras, viñas, huertos y molinos de su término con expresion de que los poseyeran ellos, sus hijos y descendientes, sin pagar más que dos sueldos por infurcion al señor de la tierra y con exencion de los fueros malos de sayonia, fonsadera, anubda y mañería (2). Una concesion semejante hizo el mismo monarca á Miranda cuando en 1099 le dió fuero (3). Alfonso VII dió á los vecinos de Llanes las heredades realengas de su término, encargándoles que las dividieran entre ellos, reduciendo todos sus tributos reales á 18 dineros ánuos, y prohibiéndoles enajenar sus heredades ántes de fabricar casas en ellas (4). El mismo monarca concedió á los de la Puebla de Arganzon la libertad de sus heredades y la exencion de todo tributo, mediante el pago de 12 dineros ánuos por cada casa (5). D. Manrique de Lara, señor de Molina, otorgó fuero á esta villa en 1154, declarando que «los que en aquel lugar poblaran que lo hagan ellos en hereditat et los hijos dellos con todo su término yermo é poblado con montes et con aguas et molinos:» que los vecinos que mantuvieran caballo y armas de fuste no pecharan nada, y aquellos que sin este requisito tuvieran su casa poblada dentro de la villa contribuyeran solamente para las obras de la muralla: que no se pagase más tributo que el *pedido* una vez al año, en el supuesto de que ninguno lo contradijera, y una cantidad alzada de dinero y de granos que se repartiria entre los aldeanos y pecheros (6). El obispo de Búrgos, D. Pedro, dió á poblar su villa de Madrigal en 1168, renunciando á sus portazgos, pontazgos, fonsados y fonsaderas, aunque sin perjuicio de las tercias y alcabalas que correspondian al rey, reservándose una dehesa y declarando que pagado el censo al señor, fuera toda la heredad de los vecinos (7). El fuero dado á Santander en 1187 concedia á los pobladores *jure hereditario* todas las tierras incultas que rompiesen en la circunferencia de tres leguas, si pagaban al señor el censo correspondiente (8). Alfonso VIII eximió al

(1) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escritura 440.

(2) Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 334.

(3) Llorente, *Prov. Vascong.*, t. 3.º, p. 82.

(4) *Colec. de docum. de las Prov. Vascong. y Castilla*, t. 5.º, núm. 18.

(5) *Idem id.* t. 5.º, núm. 26.

(6) *Idem id.* t. 4.º, núm. 127.

(7) *Idem id.* t. 4.º, núm. 140. «Censum habeat dominus, et omnem hæreditatem suam habeant vicini.»

(8) Llorente, *obr. cit.*, t. 4.º, núm. 173.

concejo de Pampliega de contribuir al que fuera su señor con fozandera, mañería, boda, rauso y otros tributos, incluso el censo, reduciendo sus cargas al yantar y tres días de facendera al año (1). D. Pedro Fernandez, maestre de Santiago, al dar fuero á Ucles, decía á sus vecinos: «Os concedo vuestras casas y vuestras heredades para siempre: el señor no os tomará ninguna casa, sino por venta, y no tendreis mañería» (2).

El rey D. Alonso X, hizo numerosas pueblas y mejoró notablemente la condicion de los propietarios. A los de Cuenca concedió que fueran sus vasallos y les contribuyesen con pechos y facenderas, todos los que moraran en sus heredades, no pechando ellos sino para los muros, y ni aun esto si mantenian caballo de valor de 30 maravedises (3). A los infanzones de Treviño otorgó la libertad de sus heredades, y de las que tomaran por presura, salvo los derechos reales, mediante el pago de 12 dineros ánuos por cada casa, con exencion de los tributos de sayonia, mañería, anubda y vereda (4). La misma libertad de dominio, con exencion de mañería y de la multa por homicidio casual, concedió á los vecinos de Aguilar de Campo (5): declaró igualmente libres de toda gabela las heredades que comprasen los cristianos á los moros de Arcos (6): dió á poblar su Alcázar de Requena, mandando repartir todo lo realengo de ella por caballerías y peonías: permitió á los caballeros y escuderos comprar heredades de moros que no excedieran de cierto valor: declaró libres y hereditarias cuantas heredades adquiriesen los pobladores, aunque con prohibicion de venderlas ántes de los diez años, y les eximió de pechos y fonsaderas (7). El mismo D. Alfonso refiere en otro diploma cómo los del concejo de Lena le pidieron los cilleros y realengos de este lugar y de Huerna para poblarlos, ofreciéndole 900 maravedis ánuos, 25 por razon de yantar al señor que tuviera la tierra, y otros 25 al merino, y como aceptó la oferta, dando á aquellos vecinos sus realengos y cilleros de Parayas, con reserva del patronato de las iglesias y de los portazgos y con exencion de facendera, mañería, boda y otros tributos (8).

(1) *Colec. de docum. cit.*, t. 5.º núm. 31.

(2) Llorente, *Prov. vascong.*, t. 4. núm. 159.

(3) *Colec. de docum. cit.*, t. 6.º núm. 262.

(4) *Memorial histórico español*, publicado por la Real Academia de la Historia, t. 1.º p. 44.

(5) *Memor. hist.*, t. 1.º p. 57.

(6) *Id. id.* p. 81.

(7) *Id. id.* p. 115.

(8) *Colec. de docum. de las prov. vasc. y Castilla*, t. 5.º núm. 55.

Las nuevas poblaciones y los privilegios de población concedidos por el rey Sábido, hubieron de privar sin duda á los señores de algunos de sus vasallos, y dieron motivo ó pretexto á la sublevación de los ricos-hombres, pero también ofrecieron vivo estímulo á otros señores para mejorar la condición de sus pueblos, otorgando á los poseedores de sus tierras, libertades de que ántes carecían, y reduciendo y fijando sus tributos. Por eso datan desde el siglo XIII la mayor parte de los fueros y cartas pueblas de los vasallos de señores. En 1217 la abadesa del monasterio de Vega la Serrana permitió á aquellos de sus vasallos que se ausentaran por nueve días, vender sus solares á otros vecinos, sin perder mas que una parte de la labor (1). En 1228 D. Pedro Ruiz dió un solar al hospital de Carrion, con todos los hombres que en él moraban, los cuales habian de dar solamente al nuevo señor medio maravedí por infurción, cinco sueldos por mañería y 20 sueldos por multa de homicidio. D. Pedro Gonzalez, comendador del mismo hospital, dió fuero á sus vasallos de Quintanilla de Osoña en 1242, permitiéndoles vender sus solares á otros labradores, si podian hacerlo en el término de nueve días, y llevarse toda su hacienda y fijando el censo, la martiniega, el yantar, las facenderas, la mañería y las *vessas* (2) con que habian de contribuir (3). Doña Sancha y sus hijos dieron en 1221 á Juan y su mujer un solar en dominio perpétuo con condición de vasallaje, un sueldo de censo y cinco de mañería, facultad de desmontar los eriales pagando un quinto del grano que produjeran, y licencia para vender y aún para buscar otro señor sin perder el solar, cuando la donante ó sus descendientes no pudieran defender al donatario ó los suyos (4). El abad de Sahagun tuvo que dar en 1221 nuevo fuero á sus vasallos de Villavicencio, reduciendo el censo con que contribuian al monasterio y autorizándoles para someterse á otro señorío y vender sus heredades (5). El comendador del hospital de Carrion dió en 1278 carta puebla á Villaturde fijando la infurción, la facendera, la mañería, las *vessas* y el laudemio, y facultando á los vasallos para enajenar sus solares á otros (6).

Muchos de estos privilegios se convirtieron en el siglo XIV en leyes gene-

(1) Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 133.

(2) Llamábase así el fuero con que contribuian al señor las mujeres tributarias cuando se casaban, y particularmente las viudas.

(3) Muñoz, *Colec. cit.* p. 136.

(4) *Idem id. cit.* p. 169.

(5) *Id. id.* p. 178.

(6) *Id. id.* p. 167.

rales, por haber sido consignados ya en las de Partidas entónces promulgadas, ya en el Ordenamiento de las Córtes de Alcalá de 1348. El primero de estos códigos permitió á los vasallos abandonar á sus señores cuando quisieran y llevarse sus bienes muebles, siguiendo lo que por disposiciones parciales se observaba ya en casi todos los pueblos de la corona de Castilla, pero les prohibió al mismo tiempo vender sus solares declarando el derecho que en tal caso tenían los señores para recobrarlos, sin abonar las mejoras hechas en ellos. El Ordenamiento de Alcalá fué más liberal con los solariegos, pues les concedió el derecho de no ser privados de sus solares miéntras pagasen sus tributos á los señores y la facultad de venderlos á otros vasallos, aunque manteniendo la prohibicion á los solariegos de llevar sus bienes á otro señorío, como no fuese behetría del mismo señor, ó por razon de casamiento (1). Esto sin embargo, no hubo de ejecutarse frecuentemente, como se infiere de las peticiones de las Córtes del mismo siglo, que ó se quejaban de la facilidad con que los vasallos disponian de su hacienda, ó tendian á favorecer las enajenaciones de ella. Las Córtes de Medina del Campo de 1318 decian al rey que muchos de sus pecheros se trasladaban á otros señoríos y no contribuian por las heredades que dejaban en lo realengo. Las de Valladolid de 1325 pedian que los solariegos de abadengo que fueran á morar al realengo no perdieran sus bienes muebles y raices, y que miéntras permanecieran en el realengo pudiesen cobrar ó vender las heredades que tuvieran en el abadengo, pagando en todo caso sus derechos á los señores. Las Córtes de Leon de 1349 se quejaban de que algunos señores de abadengo y behetría despojaban á sus solariegos, cuando en virtud de una costumbre antigua, se trasladaban á otros señoríos, pagando la infurcion del solar que abandonaban. Las Córtes de Valladolid de 1351 reclamaban contra la inobservancia de una ley de D. Alfonso XI que mandaba vender dentro de tres años, á vasallos solariegos, las heredades enajenadas por algunos de estos á hombres de villas é iglesias, y pedian que los señores ocuparan los solares de sus vasallos que fueran á residir al realengo ó al abadengo. Otras Córtes de Valladolid de 1385 se quejaban de los señores y concejos que tomaban los bienes de los vecinos que iban á morar á otros pueblos ó les oprimian con exorbitantes tributos. Las Córtes de Segovia de 1386 para impedir que los vasallos de realengo se trasladaren á lugares de señorío, obligándose á residir en ellos, bajo ciertas penas, pedian que los que tal hicieren pecharan por lo

(1) L. 3, t. 25, Part. 4.ª, y Ordenamiento de Alcalá tit. 32, leyes 13 y 14.

que en el realengo dejasen, y pudieran volver á él exentos de toda pena, Por todo lo cual se ve que en el siglo xiv tenian ya de hecho los vasallos solariegos la libre disposicion de sus heredades, sin más restricciones que las que prohibian enajenarlas á ciertas clases de personas, siempre que quedaran á salvo los ya reducidos derechos fiscales de los señores ó de la corona.

CAPITULO IV

Propiedad coartada.—Prestimonios y encomiendas.

I.

ORÍGEN, NATURALEZA Y OBJETO DE LOS PRESTIMONIOS.

Al enumerar los diferentes títulos con que la corona solia distribuir las tierras conquistadas, dije que unos conferian el dominio perpétuo y hereditario y otros el temporal ó el vitalicio y precario más ó menos restringido en sus facultades y derechos. Examinados en el capítulo anterior los de la primera especie, su origen, sus variedades y sus vicisitudes, cúpleme ahora exponer y examinar los de la segunda, sus diversas clases, sus semejanzas y sus diferencias, y las obligaciones y derechos que de cada uno nacia, sirviendo de vínculo entre la corona y sus vasallos y entre los varios partícipes en los frutos de la tierra.

Los documentos más antiguos posteriores á la conquista, escritos en los siglos vii, ix y x, hacen mencion de tierras dadas por los reyes y los magnates en *mandacion* (*in mandationem*), en *prestimonio* (*in præstimonium*) y en *encomienda* (*in commissum*). Todos estos títulos significaban el carácter precario ó temporal de la enajenacion y la limitacion de los derechos que por ellos se trasmitian, aunque con circunstancias que los diferenciaban unos de otros.

El prestimonio, que algunos diplomas llaman tambien *prestacion* y *prés-tamo*, era el título en cuya virtud adquiria el vasallo una porcion de terreno dentro de la demarcacion señorial, para cultivarlo y utilizarlo en su provecho, contribuyendo por ello al señor con alguna pension ó servicio. Empleábase en su origen principalmente este título de enajenacion para constituir un peculio con que viviesen los siervos ó libertos u hombres no enteramente libres, sujetos á la potestad de un señor. Así se lee en la es-

critura de dotacion del monasterio de Obona otorgada en 780, que el infante Adegastro, hijo del rey Silo, dió á aquella iglesia varias familias que nombra (*criationes*), mandándoles que la sirvieran en cuanto les mandara y que tuvieran por ello «la heredad de *Perella* y prestimonios en la heredad del mismo monasterio, donde el abad se los diera,» y que aunque cometiesen faltas ó delitos que merecieran las penas que señala, «no dejaran sin embargo de permanecer en sus prestimonios y en el servicio inherente á ellos» (1).

Diéronse después tierras en prestimonio á toda clase de personas. Los obispos emigrados de sus diócesis y refugiados en Astúrias por causa de la invasion sarracena, obtuvieron con este título, para proveer á sus necesidades, iglesias en aquella provincia. Esto hubo de hacerse por acuerdo de un concilio celebrado en Oviedo en tiempo de Alfonso III, con asistencia de este monarca, de su mujer Ximena y de los magnates y señores que á la sazón pudieron reunirse. Dice un antiguo diploma que D. Ermegildo, arzobispo de Oviedo, por consejo de aquel rey y de las potestades del reino, dió heredades de su iglesia á los obispos españoles para su subsistencia, añadiendo que al de Leon entregó la iglesia de San Julian, al de Astúrias la de Santa Eulalia, al de Iria la de Santa María Tiniana, y así otros muchos (2). Otra escritura de autenticidad ménos dudosa que la anterior, hace mencion de aquel concilio, afirmando que la iglesia ántes mencionada de San Julian fué dada al obispo de Leon en prestimonio (*in præstamine*), miéntras la Sede de Oviedo fué superior á las demás y que después volvió al realengo, de donde habia salido (3). De lo cual debe inferirse que todas las demás iglesias que refiere el primero de estos diplomas, se darian con igual título.

Así como cuando el prestimonio se daba á libertos y vasallos, no llevaba consigo más obligacion que la de prestar por él ciertos servicios, así tambien se solia conferir por precio cuando se otorgaba á personas independientes. Alfonso Tellez dió en 1201 por juro de heredad su villa de San Mancio «con todo lo que tenia en Augriellos, al monasterio de Sahagun, y este le otorgó en cambio con título de prestimonio y para toda su vida» la casa de Canalejas, con su iglesia y pertenencias y 200 maravedís cada

(1) "Et habeant illa hereditate de Perella et patrimonio in hereditate sanctæ Mariæ, ubi abbas..... dederit..... Si forte..... eum occiderit reddat 160 solidos et 500 flagellas accipiat: tamen in suo præstimonio et in servitio sibi inuncto, permaneat....." *Esp. Sagr.*, t. 37, apénd. 5.

(2) *Esp. Sagr.*, t. 14, apénd. 11.

(3) Id. id. t. 38. Nota preliminar.

año, pagados por terceras partes (1). El obispo y canónigos de Lugo dieron en 1155 á D. Miguel, canónigo y tesorero de la misma iglesia, en prestimonio, durante su vida (*in præstimonio, in vita vestra*), cierta parte de la Cortina de Pedanco, y como donacion perpétua, una iglesia que el mismo tesorero había edificado en suelo de la catedral, y otras heredades y solares, con sus habitantes, todo en remuneracion de 120 sueldos mergulienses que D. Miguel había dado al cabildo para que se mantuviera durante una época de carestía y hambre, que hubo en la diócesis (2). D. Pedro, obispo de Leon, con la vénia de su cabildo en 1206, dió á Isidoro, llamándole hermano, la villa de Avelgas en *prestimonio durante su vida* (3).

Es notable este documento porque da á conocer las condiciones con que solia adquirirse aquella especie de propiedad. En él concedió el obispo á Isidoro la villa referida con sus derechos y pertenencias (*in præstimonium in omnibus diebus vite vestre*) encargándole que mantuviera los hombres de ella á su fuero y pagara á la iglesia 40 maravedis de oro, 20 por Páscoa y 20 por San Miguel: que tuviera, poblara y ampliara dicha villa lo mejor que pudiese, sin permitir que ningun hombre entrara ni adquiriera propiedad en ella, salvo con permiso del prelado: que no la enajenara, hipotecara ni diera en prestimonio: que cuando las vacas del obispo ó de los canónigos fueran á pacer á la villa, las mantuviera y defendiera: que cuando el mismo obispo fuese al lugar le tratara como á señor, y que después de la muerte de Isidoro, volviese libre la villa á poder del obispo y su iglesia. Isidoro á su vez otorgó que recibia del prelado la villa referida con estas condiciones, y que si no las cumpliera, le pagaria 500 maravedis de multa. El precio y las multas por via de sancion, eran sin duda circunstancias accidentales de este contrato, pero su calidad vitalicia, la reversion por muerte del prestimonista, el defender y conservar las heredades, objeto de la estipulacion y el reconocimiento del señorío á favor del que daba el prestimonio, eran condiciones propias de su naturaleza. El adquirente tenia derecho al usufructo vitalicio de las villas ó heredades que pasaban á su dominio, entendiéndose comprendidos en él los censos, tributos y servicios con que debian contribuir al señor del lugar los hombres que lo poblaban y cultivaban; pero en cambio debia reconocer por señor á aquel de quien recibia la propiedad, servirle y defen-

(1) Escalona, *Histor. de Sahagun*, escritura 213.

(2) *Esp. Sagr.*, t. 41, apénd. 11.

Id. t. 36, apénd. 41.

derle de toda agresion injusta, pagar las pensiones y soportar las cargas á que se hubiere obligado, y no enajenar ninguna parte de su dominio, á fin de que no resultase menoscabado al tiempo de la reversion. El señor tenia derecho á exigir las pensiones y servicios convenidos y recobrar su heredamiento, con las mejoras que tuviera á la muerte del prestimonista, pero en cambio renunciaba durante la vida de éste á todo su derecho en los bienes, tierras y hombres cedidos, y á todas las ventajas de su señorío, excepto las prerogativas honoríficas.

Hubo de suscitarse alguna duda acerca de si en las heredades de abadengo dadas en prestimonio á caballeros ó personas de otro estado, conservaria el rey la autoridad y derechos que le correspondian en los señoríos de aquella especie. Tambien hubo de dudarse qué fuero haria ó cómo contribuiria la heredad de caballero que se diera en prestimonio á persona de abadengo. Alfonso IX resolvió estas dudas en las Córtes de Benavente de 1202, ordenando que en las heredades de abadengo tenidas en prestimonio por caballeros, se guardara el señorío del rey como en los demás abadengos, y que las heredades de caballeros, que pasaran por el mismo título á personas de abadengo, se sujetaran á la condicion que tuvieran las otras de caballeros (1).

Uno de los últimos prestimonios de que hacen mencion los antiguos diplomas, es el que Alfonso X concedió á su hermano D. Sancho, arzobispo de Toledo, del lugar de Caspuenes en 1255, dando á este contrato el nombre de *préstamo*, por estar el documento escrito en castellano. Dióle el rey en *préstamo* el lugar referido «para toda su vida» con los derechos que en él tenia la corona y los que habia disfrutado y cedido por cambio Garci Martinez, pero con la condicion de que si D. Sancho dejara el arzobispado, pasaria á su iglesia el dominio del lugar (2). Infírese de este documento que el préstamo ó alguna parte del dominio de Caspuenes pertenecia á Garci Martinez, y que deseando el rey darlo á su hermano íntegramente, tuvo que adquirirlo por permuta ó precio del prestamero ó dueño.

La Iglesia fué quien desde el principio, hizo más frecuente uso de este

(1) «I. Si vero isti vel alii (miles, civis, vel burguensis) aliter tenuerint ipsas hereditates de abadenguis in *prestimonium*, videlicet *ad tempus*, vel in *pignus*, debet currere vox regis in illis, sicut in aliis abadenguis. II. Item si aliquis de abadenguis vel de ordine tenuerit hereditatem militis in *pignus* vel *prestimonium ad tempus*, faciat de ipsa tale forum quale faciunt alie hereditates militum.» *Cort. de Castilla*, t. 1.º, *Cort. de Benavente de 1202*.

(2) *Memorial histórico*, t. 1.º, p. 56.

título de enajenacion limitada. Abandonado después por los propietarios seglares, ó sustituido con otros semejantes, hubo de emplearse únicamente en algunas diócesis, para transmitir á los clérigos los bienes que habian de constituir su cógrua sustentacion. Llamáronse entónces *prestameras* ciertos beneficios eclesiásticos y *prestameros* á sus servidores, concluyendo de este modo los antiguos prestimonios.

II

ORÍGEN Y NATURALEZA DE LAS ENCOMIENDAS

Titulos de enajenacion aún más precarios, pero no ménos codiciados, eran los llamados de *encomienda* y de *mandacion*. Los antiguos diplomas hacen referencia de muchos lugares poblados con circunscripcion señalada, más ó ménos extensa, que el rey daba á sus magnates y grandes vasallos, ó á las iglesias, para que los gobernasen y percibieran todas las rentas y emolumentos que la corona disfrutaba en ellos. Llamábanse estas circunscripciones territoriales en el lenguaje de la época, *commenda* ó *commissio* y *mandatio* y se daban á los adquirentes para toda su vida, ó por la del rey donante, ó por el tiempo que fuera su voluntad. Unas veces se daban estos lugares con alguno de los dos primeros nombres referidos, y otras con el último, pero sin que pueda hoy determinarse la diferencia esencial jurídica que habia entre ellos, al ménos en los primeros tiempos de la monarquía castellana. Hasta el siglo XII parece que la encomienda y la mandacion eran títulos semejantes, si no idénticos. Así es que algunos diplomas, que comprendian ambos títulos de enajenacion, atribuian á los adquirentes por uno y por otro iguales derechos. Ramiro III, por escritura de 978, concedió al monasterio de Santa María de Cartavio en Astúrias, la villa de Cartavio en *encomienda* y la *mandacion* de Miudes, disponiendo que en los términos de una y otra percibiera todas las multas y tributos fiscales el sayon del monasterio, y que los hombres que en ellos habitaran, estuvieran al mandado y servicio de su abad (1). Si pues tanto en la mandacion como en la encomienda referidas, habia de ejercer su jurisdiccion y de percibir las rentas reales la iglesia de Santa María, es claro que la diversidad de aquellos nombres no argüia una diferencia en los derechos transmitidos. En el siglo XII fué cuando ambos títulos empezaron á cambiar de naturaleza,

(1) *Esp. Sagr.*, t. 38, apénd. 4.º

significando entónces modos de adquirir distintos de los que expresaban ántes.

Eran tambien á veces una misma cosa encomienda, mandacion y condado. Así sucedia cuando, por ejemplo, se daba á un conde algun territorio en mandacion ó en comienda; porque entónces solia tener la denominacion de condado; y si después permanecia en la misma familia hereditariamente, de hecho ó de derecho, quedaba confirmada aquella calidad.

Con uno ó con otro nombre era este uno de los medios que empleaba la corona para premiar á sus servidores y gobernar y defender sus Estados. El dueño de la encomienda ó la mandacion tenia el señorío del territorio comprendido dentro de sus límites; si era conde, se llamaba *conde de....* tal ó cual pueblo; si no disfrutaba este título, se denominaba *señor en....* el lugar que daba nombre á la demarcacion. Por eso se hallan tantos diplomas suscritos á la vez por varios *condes* de pueblos y por *señores en lugares* determinados (*Dominus in....*) y algunos en que todas las comarcas designadas como propias de condes y señores pertenecian á la vez á grandes condados, como el de Castilla, el de Alava ó el de Galicia. Así se explica cómo habia condes principales y subalternos, á que aluden los historiadores, pues dentro de aquellos grandes condados habia señoríos particulares, con facultades más ó ménos soberanas, que, ya eran un heredamiento alodial y libre, anterior á la conquista ó posterior creada por privilegio, ya una encomienda otorgada por el rey, ó ya una mandacion simple ó un título de condado.

La encomienda, á la vez que cargo público de gobierno, era un patrimonio temporal de la familia á quien se conferia. En su territorio era el comendador ó encomendero quien ejercia toda la jurisdiccion del rey; á él debian obedecer y acudir con sus censos, tributos y servicios todos los vasallos de la corona que habitaban en su comarca, á fin de que, reteniendo la parte que le correspondiese en ellos, entregase la restante al Erario. Consérvase el título, que en 929 expidió Alfonso IV, confiriendo á su tío D. Gutierre la encomienda de Carioca (hoy Quiroga) y otros lugares, en el cual decia el rey que se la daba «para su gobierno, de modo que el pueblo de la misma obedezca sus mandatos en bien y utilidad de la corona, sin excusa de ningun género, y sin que nadie le perturbe en el ejercicio de esta autoridad» (1).

(1) «Ordinamus vobis ad imperandum Comisso de Carioca, Cartelion, Laure medio, Sabiniano et Loserio et Orticaia, Ita ut omnis ipse populus ad vestram concur-

Las encomiendas eran por su naturaleza temporales, mas consideradas desde el principio como patrimonio de familia, que no debía perderse sin causa, fueron haciéndose vitalicias de hecho, y aún hubo de ser frecuente su trasmision de padres á hijos por mercedes especiales de los reyes. A veces, cuando el hijo heredero no podia desempeñar el gobierno por su menor edad, le daba el rey, sin embargo, la encomienda de su padre, con condicion de que mientras llegaba á ser mayor, ejerciese los cargos de ella alguno de sus parientes. Así es que, muerto el D. Gutierre, de que se ha hecho mencion, dejando un hijo de menor edad, llamado Froilan Gutierrez, Ramiro II, en 942, le dió, «para que la rigiese bajo la potestad de su madre Ildaura, la encomienda de Caldelas, del mismo modo que la habia tenido su padre, y la mitad de la misma de Carioca y Laura, que tambien habia poseido Arias Menendez, y otras *decanias* (1) y heredades,» todo con cláusulas iguales á las que se leen en el título expedido por Alfonso IV (2). Infírese de este documento que la encomienda de Carioca se habria ántes dividido, tal vez al ascender al trono Ramiro II, entre D. Gutierre y Arias Menendez, y que la parte de éste habia revertido á la corona, quizá por su muerte, pues, aunque la participacion anterior de Arias resulte del documento con suma confusion y oscuridad, se menciona en él claramente la mitad de Carioca y Laura, lugares que, como queda dicho, componian con otros la encomienda dada á D. Gutierre.

El comendador percibia, como he dicho, los frutos, rentas y emolumentos con que debian contribuir á la corona los habitantes de su territorio, segun fuera su condicion, la cual no podia alterarse haciendo de los siervos, solariegos, ó de los solariegos ingénuos. En las tierras de las encomiendas vivian todas estas clases de personas, pero cada una contribuia segun su estado, y no más. A veces se reservaba el rey una parte de las ren-

«rat ordinationem pro nostris utilitatibus peragendis. Et quid quid injunctum vel ordinatum acceperint, inexcusabiliter omne illum adimpleant atque peragant. Neminem vero ordinamus, nec permittimus qui vobis ibidem perturbationem faciat vel in modicum.» *Esp. Sag.*, t. 18, apénd. 14.

(1) Esta palabra, que se encuentra repetida en muchos diplomas antiguos de Castilla, no significaba ya como entre los godos, mando militar ni compañía de diez soldados, sino granja, predio ó caserío con collazos, segun Ducange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, verb. *Decania*.

(2) «Ordinamus tibi ad imperandum sub manus matris tuae, tiae nostrae, Ilduaræ, «Commissum de Caldelas, sic quomodo obtinuit pater tuus, sive et Arias Menendez «medictate de Lauræ et Carioga..... Ita ut per manus vestras ipse populus nostram «fidelem exhibeat rationem,....» *Esp. Sag.*, t. 18, apénd. 15.

tas, á veces las cedia todas al comendador. D. Sancho, intitulado rey de Galicia, refiere en una escritura de 927, que su bisabuelo Ordoño I, su abuelo Alfonso III, y su padre Ordoño II, habia dotado la iglesia de Santiago, no sólo con poblacion plebeya, sino con *encomiendas ingénuas*, para que el tributo con que contribuian á la corona lo pagasen al santo apóstol, no como siervos de la Iglesia (*non ut plebs ecclesiarum*), sino como los demás habitantes libres: que su tio, Fruela II, no habia querido confirmar estas donaciones y habia gravado con impuestos fiscales á los siervos de la Iglesia; y que él, para remediar tal injusticia, confirmaba tanto la propiedad de aquellos siervos, como las villas y encomiendas que nombra, segun los habian obtenido Lucio Vimarano y Nuño Gutrici (1). Quizá no hizo aquella confirmacion el rey Fruela por haber concedido á la misma iglesia en 924 la encomienda de Montanos, conforme la haba tenido Sigeredo Egicaz, desde el Tambre hasta Neudos, con la condicion de que los pueblos de su territorio sirvieran á la Iglesia, no como siervos, sino como ingénuos, con lo que ántes pagaban á la corona (2). En iguales términos confirmó Ramiro II en 934, á la misma iglesia, la encomienda de Pistomarcos, «segun la habia tenido Lucio Vimarano, para sostener con ella el alumbrado de los altares, y á los sacerdotes y pobres de la hospedería» (3). Con idénticas cláusulas otorgó Ordoño III en 952, á la propia iglesia, la encomienda de Cornado, «del mismo modo que la habian tenido muchos condes por orden del rey,» y para que se sustentaran con ella los clérigos y demás personas que servian á altar (4).

Dábanse en encomienda, no sólo villas y heredades, sino castillos y monasterios, como que unos y otros necesitaban gobierno y producian renta. Bermudo II, en 992, dió en encomienda á la iglesia del Salvador, de Oviedo, el castillo de Miranda, con todos sus términos y con las villas comprendidas en ellos, segun lo habian tenido el obispo Bermudo y el conde Ecta Sarraciniz, y el monasterio de Santa Eugenia de Morata, tambien con anchos términos. Dióle además otras villas, algunas de las cuales habian sido confiscadas por delito de infidencia, expresando en la escritura que respecto á ellas se entenderia la enajenacion perpétua, y no en encomienda (5).

(1) *Esp. Sag.*, t. 19, pág. 359.

(2) *Idem id.*, t. 19, pág. 118.

(3) *Idem id.*, t. 19, pág. 362.

(4) *Idem id.*, t. 19, pág. 364.

(5) *Esp. Sag.*, t. 38, apénd. 5.º

Desde el siglo XI, por lo ménos, empezó á introducirse la costumbre de dar la iglesia sus bienes en encomienda á caballeros poderosos, que los defendiesen y amparasen. En aquellos aciagos tiempos nada estaba seguro de la usurpacion y de los desmanes de la fuerza, ni aún las cosas sagradas de la iglesia, por cuya causa derramaban su sangre todos los dias, en los campos de batalla, los mismos usurpadores. Ni las excomuniones, ni las ligas de los prelados, ni las cartas de proteccion del rey bastaban para defender los bienes eclesiásticos contra la rapacidad de magnates codiciosos ó de villanos turbulentos. En vano los reyes tomaban las iglesias bajo su amparo y custodia: ellos mismos eran á veces los primeros á despojarlas y oprimir las. El antiguo monasterio de Sahagun, tan favorecido por nuestros monarcas, fué despojado de sus bienes en muchas ocasiones, á pesar de haberlo tomado bajo su proteccion Alfonso VI, Fernando II y Alfonso VII. Este último monarca, en los primeros años de su reinado, ocupó á los monjes varias propiedades que, arrepentido más tarde, hubo de restituirlas.

El estado de la sociedad en el siglo XI explica suficientemente la situacion precaria de la propiedad. Aún no estaban reducidas las poblaciones á forma de concejo con sus justicias correspondientes: las de los obispos tampoco existian ó no tenian medios bastantes para imponer la obediencia; el brazo del soberano apenas alcanzaba más allá del lugar donde establecia su córte; el poder local residía casi todo por lo tanto, en los magnates y caballeros que habitaban con sus gentes en las fortalezas y en los castillos diseminados por el territorio. A ellos acudieron, pues, las iglesias, entregándoles en encomienda sus villas y heredades, para ponerlas á salvo, por más que no lo lograran muchas veces, ya por la negligencia del patrono elegido, ó ya por usurpar éste á su vez, lo que debia guardar de otros usurpadores.

La iglesia dió sus encomiendas á estos señores, en los mismos términos que los reyes daban las suyas á los vasallos, aunque con condiciones algo más determinadas. Tales eran, segun el texto de un antiguo documento «que sejades bono á nos é á nosa iglesia en lo que acaesciere, é que guardedes é amparedes la encomienda en quanto en vos fuere» (1); de lo cual hacian los tales caballeros pleito-homenaje en manos de algun hidalgo, prometiendo cumplirlo y acudir con sus personas y algunos hombres de sus mesnadas, al obispo cuando saliera con gente en servicio del rey. Un Alvar Perez de Osorio recibió en encomienda del obispo de Oviedo, por el tiempo

(1) Carvallo, *Antigüed. de Astur.*, part. 3.^a, t. 41, pág. 14.

que fuera su voluntad, la tierra de Rivadeo y de Grandra con estas condiciones: 1.^a Que Alvar Perez seria vasallo del obispo y le haria pleito-homenaje de servirle cuanto pudiese, contra todos los hombres, menos contra el rey y su hijo, y de guardar y hacer pagar las rentas con que contribuian los vasallos de la encomienda, entregándolas oportunamente á la iglesia. 2.^a Que defenderia y ampararia las personas y bienes de los moradores de la encomienda, y especialmente los de la puebla de Castropol, donde el obispo, como señor, tenia la justicia. 3.^a Que llevaria y guardaria el pendon del prelado cuando el rey llamase á la hueste, sirviendo en ella con seis hombres de á caballo, cuatro por Rivadeo y dos por Grandra. 4.^a Que acudiria al llamamiento del obispo como vasallo ó señor y obedeceria sus órdenes. 5.^a Que no exigiria de los vasallos, por razon de la encomienda, más tributos que los acostumbrados hasta entónces. 6.^a Que si faltase á alguna de estas condiciones, seria tenido por perjuro y perderia la encomienda (1). Estas condiciones eran, como recordará el lector, las de las cartas de feudo en toda Europa. Constituia, pues, segun se vé, un verdadero feudo, aunque sin el nombre, la encomienda de Rivadeo.

Otras iglesias cuando juzgaban amenazada su libertad, ó en peligro sus bienes, por la arbitrariedad de los señores, ó la rapacidad de los villanos, acudian al rey, entregándose á él en encomienda, para que las defendiese y amparase. Así lo hizo, entre otras, la iglesia de Obona, la cual, para librarse de un caballero poderoso de Tineo, llamado García Garcies, que pretendia tomar por fuerza su patronato, se dió á Alfonso VIII en aquel concepto (2).

El servicio de los comendadores no solia ser gratuito. Ellos ejercian toda la potestad temporal y recaudaban los tributos correspondientes á la Iglesia, mas reservándose una parte, ó percibiendo en su lugar la retribucion convenida. Habia sobre este punto costumbres diversas en los pueblos encomendados. Cada uno tenia sus fueros y tributos, que no podia alterar el comendador, y con arreglo á ellos, se pagaba éste á si mismo sus propios servicios. Dá á conocer algunas de aquellas costumbres una informacion oficial practicada en 1580, para hacer constar los tributos y servicios con que desde antiguo, contribuian los vecinos de la encomienda de Quirós, que el obispo de Oviedo, dueño de aquel concejo, habia dado á Gonzalo Bernal-

(1) *Esp. Sagr.*, t. 39, apénd. 3.^o

(2) Carvallo, *Antigüed.*, part. 3.^a, t. 36, par. 10.

do, y por muerte de éste á su hijo Gutier Gonzalez. Resulta de este documento que los vecinos de Quirós, al morir, pagaban las *fonsaderas*, y si no dejaban hijos, las cuatro quintas partes de sus bienes muebles, y once maravedís además, por disponer de los inmuebles, todo á título de *mañería*: que por *infurcion* pagaban una *hemina* de trigo, los que tenían dos bueyes, y tres celemines los que tenían sólo uno y los cavadores: que algunos, que no estaban sujetos á este tributo, no podían casar á sus hijas sin «facer fuero cierto de boda» ó pagar en su defecto once maravedís y cuarto: que unos y otros daban al encomendero *yantares* de dos carneros por cada seis sesmas de tierra y un puerco y medio cada año, por el uso de los montes; y que los contribuyentes por *infurcion* (pues había algunos que no pagaban este impuesto), estaban al mandado del encomendero en todo lo que tenía á bien ordenarles. Contribuía, además, el concejo con dos pares de abarcas y cinco panes, para el castillo de Genestazo, que solía estar poblado por el obispo, con un caballero armado, que sirviera tres meses en tiempo de guerra, con setenta maravedís por *fonsadera*, dos para el merino y con *facenderas* ó corveas en los desmontes que hacía el encomendero (1).

Estas dos clases de *foreros*, los que pagaban *infurcion* y los exentos de ella, revelan el doble origen de las propiedades en aquella tierra. Las sujetas al tributo procedían, sin duda, de los antiguos colonos y siervos de la gleba, que cultivando al principio las heredades del señor, vinieron con el tiempo á ser dueños alodiales, aunque censatarios. Por eso dice de ellos el documento citado que «venían á facer todo lo que lles mandaban Gutier Gonzalez y Pedro Bernaldo, que eran comenderos.» Los vecinos que no pagaban *infurcion* por sus propiedades, eran al parecer los dueños de aquellas que, ó no estuvieron nunca en manos serviles, ó salieron de ellas por actos ó contratos particulares, que las libertaron de toda servidumbre. Así no dice de ellos el documento, como de los otros, que estuvieran al mandado de los encomenderos.

Estas encomiendas hubieron de ser también al principio temporales, como las de la corona; pero á imitación suya, fueron haciéndose igualmente vitalicias, por costumbre, y muchas se transmitieron de padres á hijos por concesión expresa, aunque no siempre espontánea, de los prelados. Así Gutier Gonzalez, hijo del encomendero de Quirós, sucedió á su padre

(1) *Esp. Sagr.*, t. 39, apénd. 13.

Gonzalo Bernaldo, en esta encomienda, por habérsela conferido el obispo á instancia del rey D. Enrique II (1). Otras varias encomiendas aparecen tambien poseidas en diferentes tiempos por personas de una misma familia, sin duda porque los señores solian darlas á los hijos, cuando eran hábiles para servirlos y no hacian cosa por que merecieran perderlas.

III.

ABUSO Y FIN DE LAS ENCOMIENDAS.

Generalizadas las encomiendas y convertidas en negocio de lucro y granjería, dióse lugar á abusos gravísimos, tanto en su distribucion, por parte de los que las daban, cuanto en su desempeño, por los que las recibian. Algunos prelados las dieron á sus parientes en utilidad suya y con perjuicio de la Iglesia: no pocos caballeros las tomaron por fuerza de las iglesias que codiciaban; muchos comendadores se apropiaron ó malversaron los bienes eclesiásticos confiados á su custodia. El abad de San Claudio de Leon decia en un instrumento de 1081, que siendo poseedor hereditario de otro monasterio en la misma ciudad, llamado de San Adrian, lo encomendó, para su gobierno, á ciertos parientes, los cuales lo invadieron, unos para mantenerse con sus rentas, y otros para habitar en él, repartiéndose sus propiedades: que al tener noticia de estos abusos, después de algunos años, se arrepintió de su yerro, y para remediarlo, convino con sus parientes en permitirles posar en las heredades de fuera del monasterio, siempre que ellos devolvieran lo usurpado, pero entendiéndose que este derecho no habia de ser hereditario (2).

Otras veces se daban en encomienda las iglesias y sus bienes, no porque necesitaran defensa y amparo, sino como precio de adquisiciones más cuantiosas. El abad de Sahagun otorgó en este concepto en 1267, á la infanta doña Aldonza, el Priorato de Saclices de Mayorga y otros varios bienes y vasallos, con la condicion de que ella mantuviera dos monges y un capellan en el mismo Priorato, y pagase cada año, diez maravedis á la cestería de Mayorga, cinco al hospital de Sahagun y 4.500 al contado. Doña Aldonza se obligó además á no enajenar ni empeñar los bienes que recibia,

(1) *Esp. Sag.*, t. 39, apénd. 12.

(2) *Esp. Sag.*, t. 36, apénd. 31.

para que á su muerte volvieran íntegros y con sus mejoras al monasterio: á mantener los vasallos en su fuero y derecho; á conservar reparadas las casas, reponiendo las que se derribasen; á cuidar el monte y labrar las viñas, y á pagar las deudas del Priorato (1). Otro abad electo de Sahagun dió en 1284, á doña Juana Gomez, el priorato de Nogal, con iguales cláusulas que el anterior, por precio de 35.000 maravedis al contado, 5.000 después de la muerte de la adquirente, y la condicion de someterse ésta á las resultas de cierto pleito, en que era demandado el monasterio (2). En términos semejantes concedió éste á doña Teresa Alfonso el priorato de San Salvador de Villagarcia, por 15.000 maravedis, y además con la condicion de que la adquirente construiria un palacio, repararia las casas, mantendria el culto de la Iglesia, y daria posada y alimento al abad y á los monges cuando allí fuesen una vez cada año (3).

El obispo de Oviedo, poco tiempo después de conferir la encomienda de Rivadeo, ántes mencionada, á Alvar Perez, mandó que los vecinos no le contribuyeran con nada más que sus derechos, por cuanto él, faltando á lo estipulado, había exigido y cobrado además, so pretexto de yantares, 1.200 maravedis: condenó al pago de esta suma á los *fieles* que habían consentido la exaccion; declaró que las viudas estaban exentas de pechos y pedidos, y que lo estaban asimismo de *yantar*, las personas que pagasen *martiniega* y las de calidad hidalga que viviesen en sus heredades (4). D. Juan I, refiriéndose á una peticion de las Cortes de Soria de 1380, decia en otro documento «que algunos ricos-omes, caballeros é escuderos, atrevidamente, sin razon é sin derecho, non catando el servicio de Dios, nin el peligro de sus almas, que ocupaban é tomaban los logares, aldeas é vasallos de los dichos monasterios é iglesias, en nombre de encomiendas, levando de ellos dineros, é pan é otras cosas, é faciéndoles servir por sus cuerpos, así en la labor de sus heredades, como de castiellos é fortalezas que facian, e así toda servidumbre, como si fuesen los vasallos exemptos.... Por la qual razon los dichos monasterios é iglesias eran venidos en gran pobredad....» (5)

Tales desmanes hicieron necesaria la intervencion del legislador: pero estaba tan arraigada la costumbre de cometerlos, que fueron desobedecidas

(1) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escritura 260.

(2) Idem id., escritura 267.

(3) Idem id., escritura 269.

(4) *Esp. Sag.*, t. 39, apénd. 6.

(5) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escritura 311.

sus providencias. Una ley del Fuero Viejo de Castilla, aunque no de las antiguas, comprendidas en esta compilación, puesto que parece copiada del Ordenamiento de Alcalá de 1348, prohibió al que tuviera una encomienda, tomar otra por premia (1). Otra ley del mismo ordenamiento dispuso que ninguno más que el rey tuviese encomiendas en lugares de abadengo (2); lo cual consta que no se observó por los mismos hechos referidos en este capítulo. Las Cortes de Madrid de 1329 pidieron que las villas y pueblos de realengo no se diesen en encomienda á ninguna persona (3). Las de Búrgos de 1338, quejándose de que los ricos-hombres tomaban en encomienda las aldeas de las ciudades y villas, para no guerrear ni pechar con ellas, y pidiendo que tales lugares no tuviesen más comendero que el rey, obtuvieron respuesta favorable á su petición, aunque también quedó sin efecto (4).

Las Cortes de Búrgos de 1373 se querellaron de que algunas aldeas pertenecientes á las ciudades ó villas y sujetas á su jurisdicción, en que la iglesia tenía vasallos solariegos, con ciertos tributos por sus solares, se daban en encomienda por las mismas iglesias á hombres poderosos, los cuales embargaban la justicia real y exigían yantares y pedidos, cuando ni tenían derecho más que á una cuantía cierta de maravedis, ni los lugares realengos podían tenerse en encomienda más que por el rey. En su virtud pidieron aquellas Cortes que no se usaran tales encomiendas; mas el rey les contestó ambigualmente, diciendo que dispusiera cada uno de lo suyo y se sirviera de sus propios vasallos (5). D. Juan I, en las Cortes de Soria de 1380 y en las de Medina del Campo de 1381, para llevar á efecto la ley de Alfonso XI prohibiendo á los hidalgos tener encomiendas en el abadengo, nombró jueces, que oyendo á los interesados, decidieran sobre la validez de las concedidas. Cumpliendo estos jueces su cometido, declararon la invalidez de tales encomiendas (6). Como en las Cortes de Guadalajara

(1) Fuero Viejo, l. 12, t. 8.º, lib. 1.º, y Ord. de Alcalá, t. 32, l. 16.

(2) Ordenamiento, etc. t. 32, l. 52.

(3) Pet. 49.

(4) Pet. 24.

(5) Pet. 17.

(6) El rey mandó comparecer á los prelados que tenían dadas encomiendas y á los caballeros que las poseían, para que cada uno mostrase sus títulos y alegase su derecho. Nombró por jueces de estos litigios á Pedro Lopez de Ayala, Juan Martines de Roxas y á los doctores oidores Alvar Martines y Pedro Fernandes. En los *Apéndices* á la *Historia de Sahagun*, escritura 311, se inserta una real carta de D. Juan I, expedida en 1380, en la cual se dice que compareció el abad de Sahagun, querellándose de que

de 1590, se quejasen los prelados de que no eran obedecidas estas sentencias por muchos hidalgos y ricos-hombres, el mismo monarca las confirmó y mandó ejecutar bajo ciertas penas, disponiendo además por ley comun, que los que tuviesen encomiendas de abadengo las devolvieran en el término de tres meses (1). También las Cortes de Burgos de 1512 reclamaron contra la costumbre de dar encomiendas en lugares realengos á los grandes señores y prelados, fundándose en que con ellas se perdía el señorío y la jurisdiccion del rey y se originaban muchos gastos y desavenencias (2).

Al cabo fueron extinguiéndose las encomiendas de una y otra clase, merced á la insistencia con que desde el siglo xv, procuraron los reyes aminsonar el poder de la nobleza, privándola de los medios que servian para sostenerlo. Sólo en las órdenes militares perseveró aquel título de propiedad, sin duda porque constituía una de las bases principales de su organizacion. En ellas eran las encomiendas beneficios eclesiásticos, que se conferian por los maestros, con institucion y colacion canónicas y servian no sólo para el sustento de los caballeros consagrados á su servicio, sino para mantener entre ellos los vínculos de union y dependencia que constituian su fuerza y les habilitaban para cumplir los fines de su institucion. Divididas sus tierras y rentas en encomiendas, cada una de estas tenia su casa, á veces su castillo, donde moraba el comendador con algunos caballeros que estaban á sus órdenes y á los cuales proveia de todo lo necesario para su subsistencia. Era obligacion de los comendadores mantener reparadas y defendidas estas casas y en buen estado los demás bienes de su dotacion, residir en aquellas durante cierto período del año y acoger y hospedar en las mismas á los caballeros que fuesen á su territorio. Ninguno podia poseer más de una encomienda, pero ésta se conservaba hasta la muerte, á no hacer cosa por que debiera perderse. Al morir el caballero, se trasmitia la encomienda por eleccion del maestre, á otro de la ór-

doña Teresa de Cisneros tenia en encomienda, contra la voluntad del monasterio, el lugar de Miñanes, del cual sacaba como comendadora, anualmente, 40 cántaras de vino, cuatro cargas de pan y 300 maravedís: que los jueces en vista de los documentos presentados y de no haber comparecido doña Teresa en los tres meses, fallaron contra ella, mandándole dejar libre el lugar y devolver á sus vecinos y al monasterio todo lo que habia exigido á título de encomienda, desde la publicacion del ordenamiento de las Cortes de Soria de 1380, y que el rey confirmó esta sentencia y la mandó llevar á efecto.

(1) Pet. 8. Ordenam. de Prelados.

(2) Pet. 8.

den, que no tuviese ya otra y fuera de los más antiguos (1). De modo, que la encomienda era un elemento necesario en la organizacion militar de la órden, era la base de sus relaciones con el Estado y el fundamento de su material existencia. Si aquellas propiedades hubieran desaparecido como las demás que llevaban su nombre, habrian desaparecido tambien las órdenes militares ó habrian quedado reducidas, como se hallan hoy, á una mera representacion histórica.

CAPITULO V

Propiedades coartadas.—Mandaciones.—Tenencias.—Señorios.

I.

ORÍGEN Y NATURALEZA DE LAS MANDACIONES.

Cuando las encomiendas se daban sólo por el rey para guarda del territorio y premio de servicios, se confundian con las *mandaciones y tenencias*, puesto que todos estos títulos originaban, al parecer, derechos y obligaciones semejantes. La *mandacion* era, como la encomienda, el título en cuya virtud conferia el rey todos sus derechos territoriales, jurisdiccionales y fiscales sobre alguna villa, fortaleza ó comarca determinada, por el tiempo que fuese su voluntad, y con reserva á veces, de algunos de aquellos mismos derechos. Dábanse las mandaciones ya á los prelados, en beneficio de sus iglesias ó monasterios, ya á las personas reales ó magnates y ya á los simples caballeros, vasallos de la corona. A veces se calificaba en la escritura con el nombre propio de *mandacion* el objeto de la merced; á veces se omitia el nombre y se expresaba su sentido (*ad imperandum*). Luégo se confundió el nombre del título de adquirir con la cosa misma adquirida, llamándose *mandacion* la circunscripcion territorial, que sucesivamente habia sido dada en tal concepto, á personas distintas, del mismo modo que se llamaron encomiendas los pueblos y territorios que se conferian con esta denominacion.

(1) *Establecimientos y reglas de la órden de Santiago. Definiciones y reglas de las de Calatrava y Alcántara.*

Uno de los más antiguos títulos de mandacion que se hallan en nuestros archivos, es el que Alfonso III expidió en 904, dando al monasterio de Sahagun la villa de Calzada, llamada entónces *Zacarias in locum Calzata*. En ella dice el rey al abad y monjes: «Os establecemos para que gobernéis, en nombre de la iglesia, á los habitantes de dicha villa y á los que en adelante vengan á morar en ella, de modo que obedezcan vuestras órdenes sin escusa alguna y acudan á la misma iglesia con todos sus servicios» (1). Ordoño III en 955 dió á su pariente el obispo San Rosendo «para gobernarla y defenderla, toda la mandacion de su padre Gutierre Menendez, desde Gueurres (Valdehorras) hasta el rio Cálido, tanto lo que en la misma mandacion habia tenido su pariente Jimeno Diaz, como lo que poseyeron y perdieron por su infidelidad, sus malvados sobrinos Gonzalo y Bermudo» (2). Es de notar que la *mandacion* á que alude este documento era la misma *encomienda* de Carioca, ó Quiroga, que Alfonso IV habia dado en 929 á D. Gutierre, segun se ha visto en el capitulo anterior, parte de la cual habia conferido después Ramiro II á Froilán Gutierrez, bajo la tutela de su madre Ildaura, con la encomienda de Caldelas. De modo que el llamado ántes *commissio*, aparece ahora convertido en *mandationem*, con reintegro de ciertas heredades que le habian segregado. Añade después el rey á la misma mandacion lo que de ella habia dado ántes al obispo San Rosendo, á los dos sobrinos ántes nombrados y á un tal Rodrigo, y lo que por encomienda, habia recibido el prelado del mismo rey (*et quæ per nostros commissorios vos dudum obtinuistis*); de donde se infiere que la circunscripcion de las mandaciones solia variar á voluntad del rey, cuando pasaba de unos á otros poseedores. Concluye el documento, diciendo D. Ordoño: «Todas estas cosas habeis de regir por nos, pagando siempre por todas ellas y en favor nuestro los derechos reales y entendiéndose la concesion firme é irrevocable» (3). Esta frase ambigua del instrumento, que traducida así alude á lo que debia pagar á la corona el poseedor de la mandacion, que hacia suyos los tributos reales de los vasallos, pudiera tambien interpretarse en el sentido de significar la obligacion de cumplir los deberes del rey en la gobernacion del territorio, descargándole de este cuidado; pero me parece

(1) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 1.^a

(2) *España Sagr.* t. 18, cap. 16.

(3) «Cuncta sint vobis á nobis regenda, et nostris utilitatibus, de omnia regalia debita persolvenda perenniter sanctione firmata.....» Apend. 16 citado del t. 18 de la *España Sagr.*

más aceptable la primera interpretación, por cuanto en otras mandaciones posteriores, era costumbre general la de pagar los vasallos al señor dos clases de derechos, unos para él y otros para la corona. Es de creer, por lo tanto, que lo que D. Ordoño quiso decir en la cláusula citada, fué que San Rosendo le satisfaría fielmente los tributos de esta última clase, con que contribuían los vecinos de aquellos lugares.

Las mandaciones, aunque temporales por su naturaleza, tendieron desde el principio á perpetuarse, sobre todo cuando se daban á las iglesias y monasterios, como parte de su dotacion, que exigia perpetuidad. Favorecian tambien en gran manera aquella tendencia los privilegios concedidos por los reyes á muchos establecimientos religiosos para adquirir todo cuanto los vasallos de la corona quisieran darles, con lo cual dejaban de revertir al Estado muchas propiedades que, usando de esta libertad, se daban á la iglesia. De este modo fueron trasformándose de temporales en perpétuas muchas mandaciones, hasta constituir señorios hereditarios, que han durado hasta nuestros dias.

Digno es de estudiarse en los antiguos diplomas, cómo se verificaba esta trasformacion. Hubo en tiempo de Ramiro II, segun cuenta uno de estos documentos, un caballero muy rico, llamado Vincemalo, que recibió de aquel rey muchas riquezas, *prestaciones y mandaciones* y entre ellas las villas de Villamudarra, Villavicencio y otras; mas se hizo presbítero y con dos sobrinos suyos, diáconos, abrazó la vida monástica en Sahagun, perdiendo en su consecuencia las villas referidas, que el rey hubo de dar entónces, con el mismo título de mandacion, á su hija doña Elvira. Así poseía esta señora aquellas propiedades, cuando en 970 las dió al monasterio de Sahagun, por órden de su padre, del mismo modo que ella las habia recibido, para poblarlas, con sus términos y cuantos bienes muebles é inmuebles contenian, expresando que todos sus habitantes presentes y futuros habian de obedecer al abad y sus monges y declarando que esta donacion seria perpétua (1). Así hubieron de cambiar de naturaleza las mandaciones que, para fomentar la poblacion, concedió D. Ramiro á Vincemalo.

El distrito de Miudes, en Astúrias, constituía ya una mandacion, aunque no se sabe á quién habia pertenecido, cuando Ramiro III la dió en 978, al monasterio de Santa Maria de Cartavio, juntamente con la encomienda de este lugar y los derechos expresados en el capítulo anterior, todo con ti-

(1) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 45.

tulo de perpetuidad. De modo que la jurisdiccion, los tributos fiscales y las multas, que hasta entónces percibian temporalmente los señores que tuvieran aquella mandacion, quedaron enajenados para siempre de la corona.

Del mismo modo se convirtió en mandacion perpétua otra llamada de Perpera, en Astúrias, cuando Bermudo III la dió, con aquel carácter, en 1031, al conde Pinnolo Jimenez, á su mujer Ildoncia y á su iglesia de San Juan en Caurias. Era su territorio muy extenso, segun parece por los términos que la escritura le señala, y sus habitantes no habian de contribuir al rey con multas, ni con fosaderas, ni con tributos, ni con servicio de hueste, ni habia de entrar sayon á embargarles ó sacarles prendas, porque los impuestos todos habian de ser para el conde, asi como no habia de correr otra justicia que la suya. Dice, por último, el rey en este documento, que da hombres y heredades, montes y aguas corrientes (que es todo lo que solia tener la corona en lo realengo), á perpetuidad, por el servicio que el conde le habia hecho, diciéndole la verdad y siendo contrario á sus enemigos, y declara haber recibido, por la confirmacion de la carta, un caballo bayo (1). Fué esta, por tanto, una de las más ámplias enajenaciones que podia hacer la corona. Nada reservó para sí D. Bermudo, ni siquiera el servicio de hueste, que era uno de los que más frecuentemente retenia el monarca. Si, pues, el conde Pinnolo habia de disfrutar para siempre las heredades realengas, los montes, las aguas, la jurisdiccion, las multas, los tributos y los servicios, la mandacion dejaba de serlo y se convertia en señorío territorial y jurisdiccional hereditario.

Una vez convertida la mandacion en hereditaria, entraba en el patrimonio particular del concesionario y se trasmitia de él á otros, como propiedad privada. Los mismos reyes solian adquirirla después en este concepto, por contrato ó por herencia, y darla como cualesquiera otros bienes de su patrimonio personal. Alfonso VI dió en 1075 á la iglesia de Oviedo la mandacion de Lagneo, en Astúrias, diciendo que habia sido de su antepasado, el conde D. Sancho y de su abuelo el rey D. Alfonso, y mandando que todos los hombres y mujeres comprendidos en sus términos, sirvieran perpétuamente al obispo, como señor, ó á aquel á quien éste los encomendara, y que ningun sayon les exigiera prendas, multas ni fosaderas (2). Mas quizá

(1) *España Sagr.*, t. 38, apénd. 10.

(2) *Idem id.*, t. 38, apénd. 21.

los antepasados de aquel monarca no hubieron de mantener constantemente la posesion de sus derechos, cuando, apénas otorgada esta donacion, reclamaron contra ella veintidos infanzones, moradores de aquel territorio, alegando que sus heredades y villas habian sido poseidas por sus abuelos y padres sin ningun tributo ni servicio fiscal, y que, por lo tanto, debian ellos continuar disfrutándolas de la misma manera. Salió al pleito el rey Alfonso, fundando su derecho en que las villas y heredades de la mandacion, con sus familias, habian pertenecido á su cuarto abuelo el conde don Sancho, á su bisabuelo el rey D. Alfonso, á su abuelo el rey D. Bermudo, á su padre el rey D. Fernando, á su hermano el rey D. Sancho y á él últimamente. Nombrados inquisidores que comprobaran la verdad de los hechos alegados, descubrieron, al decir de la escritura, que los infanzones llamados propietarios por heredamiento, habian tenido sus propiedades desde el tiempo del conde D. Sancho, de mano del merino real y no por título hereditario, que habian pagado cada año al rey las calumnias y fosaderas y que los que dejaban de hacerlo dimitian sus heredades y salian del territorio. En vista de tales testimonios tuvieron que reconocer los infanzones que carecian del título alegado y que, por lo tanto, no podian impedir la donacion del rey (1). Tal vez no fué esta confesion tan espontánea como aparece del documento; quizá no fué tan continuada como dijeron los inquisidores la posesion de aquellos monarcas; pero de cualquier modo ofrece aquel juicio una prueba concluyente de que todavía en el siglo xi, las tierras tributarias no dejaban de serlo por pertenecer á hidalgos, y de que las alodiales y hereditarias no se estimaban comprendidas en la mandacion, aunque estuviesen materialmente dentro de su comarca.

Pero aquí debo hacer notar cómo las mandaciones perpétuas y hereditarias dieron origen á nuevas especies y nuevas denominaciones de títulos de propiedad. Habia tanta diferencia entre poseer como cosa propia, perpétuamente, el señorío y dominio realengo de un lugar, y tenerlo por delegacion temporal y á la merced del rey, que no era ya posible equiparar, ni confundir con el mismo nombre, cosas tan diversas. Por otra parte, ocurriendo esta novedad precisamente cuando el latin bárbaro de los siglos medios se trasformaba en inculto romance, la ocasion no podia ser más oportuna para dar á cada título de dominio, nuevo y distinto nombre. Asi es que las mandaciones que conservaron su antiguo carácter temporal y transitorio, se llamaron *tenencias*, y las que se hicieron perpétuas y heredi-

(1) *España Sagr.*, t. 38, apénd. 22.

tarias ó se crearon de nuevo con esta calidad, se denominaron *señorios*. Entónces pudieron distinguirse tres clases de dominio con jurisdiccion y soberanía real, la encomienda, la tenencia y el señorío: el primero vitalicio, el segundo sin tiempo determinado, á voluntad del rey, y el último perpetuo é irrevocable.

II.

ORÍGEN Y NATURALEZA DE LAS TENENCIAS.

Daban los reyes en tenencia lugares y villas y especialmente los castillos y fortalezas, porque dependiendo de estos la defensa del reino, juzgaban que la corona no debía desprenderse de su posesion, de un modo permanente. No quiero decir que dejase de haber castillos de propiedad hereditaria, segun se ha visto en el capítulo V, sino que la mayor parte de los que pertenecian á la corona se daban en tenencia, juzgándose peligrosa su concesion á perpetuidad. A peticion de las Cortes de Valladolid de 1322, mandó el rey D. Alfonso XI que los castillos situados en villas realengas, de las cuales no se hiciera homenaje, se diesen en tenencia á caballeros y hombres buenos de los mismos lugares. Pero no siempre habia caballeros para poblar y defender todas aquellas fortalezas, sobre todo las de las fronteras, cuya guarda era más difícil y costosa, y entónces, tenia el rey que estimular con grandes ventajas y privilegios á sus defensores. Esto sucedió en el castillo de Badajoz, que segun las cortes últimamente citadas, era «una de las más bonas cosas é sennaladas del regno», y sin embargo estaba yermo y necesitaba estar poblado de mucha gente; pues para conseguirlo, fué menester que el rey ofreciese exencion del diezmo y de los derechos de importacion y exportacion á los que fueran á morar en él, con sus familias y tuviesen casa poblada continuamente (1).

Dábanse en tenencia así los pequeños lugares, como las ciudades más ricas y pobladas. San Fernando dió á D. Nuño, uno de los ricos hombres que despues se rebelaron contra su hijo D. Alfonso el sábio, la *tenencia* de Sevilla, que segun dice la crónica de este rey, «era una de las más honradas de todo su reino, con muy grandes *retenencias*.» El mismo D. Alfonso, siendo todavía infante, le dió á Ecija *para que la tomase por él*, contra la voluntad de su padre San Fernando. Posteriormente, siendo ya rey don

(1) Cortes de Valladolid de 1322, núm. 37 y 40.

Alonso, le dió á Jerez de la Frontera, y como esta ciudad fué luego tomada de moros, indemnizó á D. Nuño con una renta igual á la que aquella tenencia le producía (1).

El poseedor por tenencia de villa ó castillo, ejercía toda la jurisdiccion del rey en el territorio de su demarcacion, cobraba los tributos, multas, rentas y derechos de la corona, y disponia más ó ménos libremente, de los yermos, montes, aguas y demás bienes de uso público. Procedía en todo esto como delegado del rey, al cual debía entregar las rentas que cobraba, después de pagar los gastos del gobierno. Percibía por su servicio ó una parte de las mismas rentas que recaudaba, ó un sueldo directo del rey, ó ciertos tributos y derechos de los mismos vasallos, que se llamaban *retenencias*. Mas debieron de cometerse en la exaccion de estas, grandes fraudes, cuando Fernando IV, á peticion de las córtés de Valladolid de 1299, trató de suprimirlas, mandando que todos los que tuviesen castillos recibieran su salario directamente de la corona (2). Esto, sin embargo, no hubo de cumplirse en todas partes, puesto que en las córtés de Valladolid de 1522, se dispuso que los perjuicios indebidos, que causaran los tenedores de castillos, se resarcieran con sus retenencias. Pero en todo caso solía ser de cuenta de ellos pagar á los jueces, merinos y sayones, que entendían en la administracion de justicia, á los mayordomos y recaudadores, que cuidaban los intereses del fisco y á los caballeros y peones encargados de la defensa del lugar, así como mantener reparadas las murallas y fortalezas y proveerlas de las armas y utensilios necesarios. A veces no alcanzaban las rentas de la tenencia para cubrir todos estos gastos, y entónces era menester que el tesoro supliera la falta, lo cual no solía hacerse siempre con la regularidad necesaria y originaba por parte de los alcaides, extorsiones escandalosas ó gravísimos conflictos entre las gentes de guerra.

El autor de las Partidas recopiló en este código las varias costumbres que regían en Castilla respecto á las tenencias de la corona. Segun ellas, los que poseían por este título tierras del monarca, estaban aún más obligados á conservarlas, que los que las poseían por heredamiento; como que no las tenían por otra razon, sino para guardarlas y devolverlas cuando el rey se las pidiese. En su consecuencia no podían enajenarlas, ni perderlas, sin incurrir en delito de traicion (3).

(1) Crónica de Alfonso X, cap. 27.

(2) Córtés de Valladolid de 1299 n. 11.

(3) L. 1, t. 18, Part. 2.^a

Para hacer más estrecha y solemne esta obligacion que contraia el vasallo al recibir la tenencia, no permitia la ley conferirla sin ciertas formalidades, que acreditasen en todo tiempo aquel compromiso. Así es que los castillos propios del rey no podian recibirse en tenencia, sino por su órden, ante su persona y por mano de portero, que fuese «su natural, es decir, su súbdito.» Sólo podia omitirse este procedimiento en casos de suma urgencia ó cuando el vasallo no recibiese el castillo voluntariamente, por temor de no poderlo defender. Como las tenencias eran á la vez cargos lucrativos, que se daban tanto para la defensa de la tierra, como para aumentar el patrimonio de los vasallos, los que las disfrutaban podian poner en ellas alcaldes ó delegados que, bajo su responsabilidad, los guardasen. Por eso solian darse á obispos, á monasterios, á menores de edad y á personas incapaces de defenderlas por sí mismos, siendo éste uno de los pocos casos en que podian recibirse los castillos por apoderado. El alcaide ó tenedor del castillo debia ser de buen linaje y no pobre, á fin de que pudiese cumplir su obligacion de repararlo, cuando estuviese ruinoso y el señor no lo hiciera por algun embargo. Ni los hidalgos se escusaban de trabajar en estas obras de reparacion. Un alcaide podia tener á la vez varios castillos. Al que moria sin encomendar á nadie su alcaidia, debia suceder el pariente más próximo que se hallara presente, y, en su defecto, el que entre sí eligiesen los hombres de la guarnicion (1).

Como las tenencias estaban á la merced del rey y era de tanto interés la seguridad de su restitution, así como la de que no se verificase con peligro de la tierra, la ley que requeria formalidades para la entrega de los castillos á los vasallos, las exigia tambien para su devolucion á la corona. Esta devolucion se intimaba por medio de mandadero, al cual debia el tenedor hacer personalmente la entrega, bajo pena de traicion, á ménos que estuviese enfermo, ó el castillo en peligro de perderse. El rey no debia ordenar su entrega sin que el mismo tenedor viniera á su presencia y le pidiese portero á quien hacerla, preguntándole ante testigos si estaba pagado de él. Tampoco el portero nombrado debia recibir el castillo, sino delante del alcaide que hubiera de tomarlo, y juntamente con las armas y los utensilios del rey que en él hubiese. Por iguales razones no podia el tenedor de castillo abandonarlo, sino en casos señalados y con ciertas formalidades. Primero debia comunicar al rey ó señor su propósito, y si el señor no queria recibirlo, sabiendo que el vasallo no podia conservarlo, debia éste repetir hasta tres veces su de-

(1) Leyes 4, 5, 6, 8, 15 y 16, t. 18, Part. 2.^a

manda, dándole plazo de nueve días para que viniera á tomárselo. Si trascurrido este tiempo y tres días más, no viniese, podía el vasallo hacer el abandono en presencia de testigos caballeros, labradores y eclesiásticos, á quienes mostraria los efectos que en el castillo dejaba, saliendo él después de su gente, llevando la llave al rey ó arrojándola dentro de las murallas y notificando su abandono á las villas próximas. Esto mismo podía hacer el tenedor del castillo, aunque con plazos más largos, para abandonarlo, cuando el señor no daba para su tenencia, aquello en que habia convenido (1).

El tenedor de castillo, cuyo alcaide faltaba á la fidelidad debida al rey ó maltrataba á sus vasallos, perdía inmediatamente su tenencia. Alfonso VI dió el castillo de San Salvador al obispo de Oviedo, cuyo alcaide cometió traición, entregándolo á García Gomez, que habia tomado partido con los moros. Recuperado después por fuerza de armas, volvió á la corona; y habiendo pedido su restitucion el obispo, se lo dió el rey graciosamente en 1012 «con sus mandaciones,» agregando los monasterios del territorio (2). En otro documento de 1016 refiere el mismo monarca que un malvado, de nombre Formarigo Sendinis, autor de dos homicidios y otros delitos, que se habia refugiado por ellos en el castillo de su tío D. Sancho, no sólo obtuvo el perdon, por instancia de los de su palacio, sino tambien la tenencia de los realengos de Leon, para regir á sus barones y villas y las mandaciones de Luna y Vadavia: que este hombre indigno, perseverando en sus malas costumbres, violó á muchas vírgenes, mató á una de ellas, prendió y despojó á uno de los barones, desheredando á su mujer y á sus hijos: y que en justo castigo de estos crímenes, le habia despojado de todas las villas que ántes le diera (3). Las crónicas y documentos hacen mencion de muchos castillos entregados y abandonados con las formalidades prevenidas, y de tenencias ya acumuladas en una persona y ya conferidas á eclesiásticos y menores de edad.

Tambien eran circunstancias esenciales en las tenencias, si bien comunes á otras posesiones de otra clase, la de no poderse entrar en ellas sin prestar ántes el debido homenaje al señor y la de entenderse finalizadas á la muerte de éste ó á la del concesionario. En el primer caso, dice la ley de Partida, deben los vasallos venir (al nuevo rey) para conocerle honra de señorío, confesándose tales vasallos, prometiéndole fidelidad, besándole el

(1) Leyes 18, 20, 21 y 22, t. 18, Part. 2.^a

(2) *España Sagr.*, t. 36, apénd. 9.

(3) *Idem*, id., t. 36, apénd. 11.

pié y la mano de hecho; y «entregándole de los oficios et de las tierras á que
 »llaman honores, así como cilleros et bodega, et ganados é otras rentas de
 »cualquier manera que sean,» pena de traicion; y los que tengan villas, cas-
 tillos y fortalezas, recibidos ó no por portero, deben devolverlos, para que
 el nuevo rey los entregue á quien quiera que le preste homenaje. De esto
 solia otorgarse la carta correspondiente, en la cual se consignaban las obli-
 gaciones del tenedor. Existe la del homenaje, que Nuño Gonzalez hizo al
 obispo de Oviedo, por el castillo de Cancio, en 1321. En ella prometió «de
 »lle facer guerra é paz del castiello de Cancio, que agora *tiene* é de lo non
 »entregar á ninguno nin dar sinmandado del dicho señor obispo... E des-
 »to fizo homenaje á Sancho García Escudero, en nombre del obispo, de
 »entregar el dicho castiello, segun fuero del reino de Leon... Otrosí: Suer
 »Gonzalez, hermano de Nuño Gonzalez, otorgo é prometeo al dicho señor
 »obispo, de entregar á él ó á su mandado, el castiello de Buron, quando gelo
 »demandase, é de lo acoger en él, con poca gente ó con mucha, irado é
 »pagado, cada que viniese, é delle facer del guerra é paz; é para esto así
 »cumplir, fizo homenaje al dicho Sancho García en nombre del señor obis-
 »po» (1). Este prelado era, pues, señor alodial y hereditario de ámbos cas-
 tillos, y segun se vé por el documento referido, los había dado en tenencia
 á los dos hermanos Gonzalez, con los mismos términos y condiciones acos-
 tumbradas en las tenencias inmediatas de la corona.

III.

ORÍGEN, NATURALEZA Y DERECHOS DE LOS SEÑORÍOS.

Tal era el último estado de las antiguas mandaciones, que no cambiaron
 su calidad de temporales: veamos cuál fué el de las que la cambiaron, con-
 virtiéndose en perpétuas. Desde el siglo x empezaron, como se ha visto,
 nuestros reyes á otorgar con aquel carácter y por heredamiento, el gobier-
 no, señorío y jurisdiccion de muchos lugares y villas, sobre todo, cuando
 el concesionario era algun establecimiento eclesiástico, que por su naturaleza
 y régimen especial, no podia tener posesiones efímeras. Esta práctica fué
 generalizándose más cada día, tanto por lo que se acrecentaba el patrimonio
 de la corona con los nuevos territorios conquistados y la necesidad de bus-
 car señores que los tuviesen y conservasen, cuanto por la tendencia gene-

(1) *España Sagr.*, t. 39, cap. 1.

ral de todos los hombres á fijar y asegurar para el porvenir, aquello que al presente constituye su bienestar. Una posesion efimera, sujeta no sólo á las eventualidades de la guerra, sino al capricho, ó si se quiere á la vida del monarca, no era suficiente estímulo para que caballeros poderosos; capaces de procurarse mayores ganancias en las aventuras de la reconquista, se dedicaran á poblar los yermos, á repoblar las villas arruinadas por el enemigo y abandonadas por sus naturales, y á proveer por su cuenta á las necesidades de su defensa y gobierno. Si los obispos y los abades habian de concurrir con su autoridad y con su hacienda á esta obra de restauracion tan costosa, empleando en ella á caudillos de fama, á sus vasallos y á sus siervos, era necesario ofrecerles ventajas duraderas y ni las encomiendas, ni las mandaciones, segun al principio se conferian, llenaban esta condicion. Los padres de familia aspiraban á fundar el patrimonio de sus hijos: los prelados á asegurar la dotacion de sus iglesias y monasterios y para lo uno y lo otro era indispensable que las mercedes de la corona fuesen irrevocables y hereditarias.

De la necesidad en que á veces se veían los reyes de dar en heredamiento muchos señoríos, hallamos un ejemplo en las Cortes de Madrid de 1329. Habiéndose quejado los procuradores de que muchos lugares de realengo pasaran á ser de señorío hereditario, contestó el rey D. Alfonso XI: «Yo non di si non Belver é Belmes: et Belver que lo di á Ramir Florez, por que estaba en perdimiento per que non fallaba á quien me lo quisiera *tener*, é él tienelo muy bien bastecido é muy bien guardado para mio servicio: et el castillo de Montalvan, que por servicio muy granado é muy senalado que me fizo... é Belmes dilo á Garcia Melendez de Xodar, por que estaba en perdimiento, por que non fallaba quien me lo quisiera *tener*... et el castillo de Montalvan que lo di á Alfonso Fernandez Coronel, mio vasallo, por muchos servicios que me ficiera...»

Los títulos de señorío, que en el siglo x y en el xi, se limitaban á trasferir de un modo general á los señores los derechos de la corona en el territorio respectivo, determinaron ya en el siglo xii y en los siguientes, con más precision, aquellos derechos, sus limites y la forma de su ejercicio. Y era esta determinacion muy necesaria, porque la vaga expresion de las concesiones antiguas daba frecuentemente origen á graves abusos y lamentables excesos, las más veces por parte de los señores, algunas por las de los vasallos. Los señores del lugar, donde un monje llamado Paterno habia reedificado en 1042, la iglesia de Santa Maria del Puerto, (Santoña), después de reconocerle por abad, intentaron arrojarle del país y apoderarse de la

iglesia, como de señorío propio; y para evitarlo, y mantener su independencia, tuvo Paterno que entregar su fundacion al rey. Tratábase, en efecto, de una *presura* hecha por aquel monje en tierra yerma, que puso en cultivo, con sus propias manos y las de sus devotos compañeros, y por lo tanto ningun derecho señorial podian alegar sobre ella, los que no representaban en la misma, sino los de la corona, que reconocia la *presura* como uno de los títulos de adquisicion por heredamiento (1). Alfonso X para poner término á graves discordias y ruidosos pleitos entre los obispos de Mondoñedo y los condes del lugar, los cuales pretendian imperar sobre los vasallos de la iglesia, que componian la mayor parte de los moradores de aquel territorio, y andaban con este motivo casi siempre excomulgados por el obispo, ordenó un nuevo apeo y deslinde de las tierras que correspondian á los contendientes, declarando las facultades respectivas de estos y mandando restituir al abadengo y al realengo lo usurpado por los señores (2). Deslindes semejantes tuvieron que hacer San Fernando en 1233, Alfonso X en 1255 y Alfonso XI en 1340, originados casi siempre por la necesidad de contener los abusos de los señores jurisdiccionales. Por último, los contratos de recomendacion ó incomunión, por los cuales entregaban los dueños alodiales de tierras la propiedad de ellas y aún su persona, á algun monasterio ó señor poderoso, reservándose el usufructo vitalicio, no sólo tenian por objeto eludir el pago de justos tributos, sino ampararse contra las usurpaciones y tiranías de otros señores, que abusaban de su poder. Os entrego mis bienes presentes y futuros, decian los desdichados propietarios en aquellos contratos, y os serviré por mi persona, con la condicion de que mientras viva conserve el usufructo de todo lo que os doy y no podais disponer de ello hasta después de mi muerte.

Para fijar y asegurar en lo posible los respectivos derechos, no sólo ordenaron los reyes los apeos ántes indicados, sino que al confirmar las antiguas mercedes de señorío, procuraron determinar mejor las facultades de los señores. Alfonso VII en 1180, expidió carta de confirmacion del señorío de Tuy, á favor del obispo de la diócesis, segun anteriormente se lo habian otorgado sus abuelos, declarando que le concedia todo lo perteneciente al señorío real dentro de sus términos, á saber: la potestad sobre todos sus habitantes, las multas que estos devengaran, yantares moderados, prohibicion á los vasallos de enajenar sus propiedades á otros santuarios, ca-

(1) *Colec. de documentos de las prov. Vasc. y de Castilla*, t. 6.º, núm. 222.

(2) *España Sagr.*, t. 18, apénd. 21.

balleros, ú hombres de más calidad que ellos, igual prohibicion á los merinos reales de entrar en el territorio, excepto cuando fueran llamados por el prelado, y de sacar prendas sin la intervencion de su mayordomo, facultad de nombrar jueces, que en la ciudad y en su término administraran justicia, segun las costumbres del reino, los derechos de portazgo, la propiedad de una parte del Miño, el derecho exclusivo de tener en este rio naves de trasporte y el dominio de dos castillos, y de todas las tierras realengas de ciertas comarcas comprendidas en su jurisdiccion. Dice, por último, el rey en esta carta, que dá todo aquel señorío perpétuamente y para que el obispo y los canónigos sean siempre sus fieles súbditos (1).

Pero ni la distincion con que se consignaron en este documento los derechos señoriales, ni otras confirmaciones posteriores del mismo privilegio, bastaron á impedir graves abusos, que al fin ocasionaron contiendas terribles entre el obispo y sus vasallos. Alzáronse estos en el siglo xiii, contra su señor y los canónigos, ofendiéndolos con los más graves denuestos, entraron en la iglesia con armas, encerraron los clérigos detrás del altar, vertieron las lámparas y cometieron otros mayores desacatos. No se sabe lo que el prelado y el cabildo habrian hecho para provocar esta insurreccion; pero sí consta por la misma real sentencia, que refiere el suceso, «que ficieran algunas cosas malas é desaguisadas contra el concejo.» Versaba la cuestion sobre reconocimiento del señorío confirmado por Alfonso VII. Los del concejo de Tuy lo negaban, fundándose en un privilegio de D. Fernando II de Leon, que, además de no contener cláusula alguna directa respecto al señorío, parecia escrito de dos manos y estaba enmendado y entrerenglonado de un modo sospechoso, y en otro privilegio de Alfonso IX, dando poder á personas señaladas de la villa para hacer justicia en hombres poderosos de la misma, ó sus parientes, de lo cual deducian que el señorío habia sido devuelto al concejo y al rey. El obispo fundaba su derecho en el diploma de Alfonso VII citado y en otros posteriores que lo confirmaban. Fueron los contendientes con sus querellas á San Fernando, que á la sazón reinaba, conviniendo en someterse á su decision, y el rey, después de mandar hacer la correspondiente pesquisa y de oir el parecer de sus consejeros, multó al concejo en 1.000 maravedis, por los excesos antes referidos, y condenó al alcalde y otros dos vecinos, cabezas del motin, á presentarse en un dia festivo en la iglesia profanada, vestidos de lino, descalzos y con soga al cuello á recibir del obispo la debida penitencia; pero advirtiendo al mismo tiem-

(1) *España Sagr.*, t. 25, apénd. 10.

po, que habria dado mayor pena á los del concejo, á no haber enténdido que el obispo y el cabildo hicieran tambien lo que no debian. En cuanto al señorío declaró el rey que no debía entenderse abolido ni trasladado por el privilegio de su padre D. Alfonso IX, puesto que se limitaba á delegar el derecho de la corona á hacer justicia, cuando el obispo no podia, no queria ó no sabia hacerla en hombres poderosos, que era en todo caso una facultad que el rey se reservaba, y confirmó los privilegios presentados por la iglesia, mandando que los del concejo reconocieran por señor al prelado y le rindieran homenaje como vasallos, del mismo modo que lo habia prestado el obispo al rey, prometiéndole hacer con él guerra y paz y darle moneda y conducko como en tiempo de los anteriores monarcas. Concluye el rey confirmando, y reproduciendo los fueros que Fernando II diera á Tuy, en los cuales se determinan los tributos y gabelas, así como las libertades y franquezas de los vasallos, y por consecuencia los limites de la potestad del señor (1).

A la propiedad señorial iban por último anexos ciertos privilegios y derechos, de los cuales, unos eran consecuencia del dominio de los señores sobre todas las cosas de su territorio, que no tenían dueño determinado, y otros de su potestad originaria sobre las personas de sus vasallos. Estos privilegios eran propios del rey cuando el rey era dueño de la tierra, y se comunicaban al señor, cuando ésta le era transmitida temporal ó perpétuamente con título de señorío.

Efecto del dominio del señor sobre todo lo no apropiado en su territorio, era el de las aguas que nacen ó corrian por el mismo. En su consecuencia, la pesca, la navegacion interior y el aprovechamiento de las mismas aguas, correspondian al señor, como no las hubiera concedido al uso público de sus vasallos. Por eso se lee en muchas cartas-pueblas que nadie podrá pescar en tales rios ó disponer de sus aguas sino el señor ó aquel á quien éste conceda tal derecho, ó bien que nadie sino el mismo señor podrá tener barcos de trasporte en los rios ó costas de su territorio. La infanta doña Teresa dió al obispo de Tuy en 1125, el rio Miño, desde su boca hasta la villa de Lozairo, de modo que nadie osara pescar en él sin permiso del mayordomo del prelado, ni tener en su puerto nave de trasporte (2). El obispo y canónigos de Palencia, como señores del territorio, disfrutaban el derecho de pescar en todas las aguas del mismo, aunque se

(1) *España Sagr.*, t. 22, apénd. 18.

(2) *España Sagr.*, t. 22, apénd. 4.

hallaran en heredades ajenas (1). Otros muchos fueros otorgaban á los vecinos como un beneficio, el derecho de pescar y de aprovechar las aguas en riegos ó molinos, ó de navegar en ellas, lo cual demuestra que ántes no tenían los pueblos aquel derecho, por corresponder al señor ó príncipe que otorgaba el fuero.

Tenia el mismo origen y fundamento el dominio de los yermos, montes y tierras incultas, que tambien se consideraba inherentes al señorío. El rey en lo realengo, disponia de ellos, bien utilizándolos en su provecho, ó bien concediéndolos para que los rompiesen y aprovecharasen los vecinos como estímulo y recompensa á los nuevos pobladores.

Cuando era menester un grande estímulo para atraerlos, concedia el rey los terrenos eriales en propiedad al primero que los ocupase, labrase ó rompiese. Cuando la necesidad era ménos urgente, otorgaba el derecho de pastar en los montes, cortar las maderas que cada uno necesitase para edificar sus casas y la leña que hubiera menester para su uso. Al disponer el rey del señorío de un territorio, ó declaraba reservados al concesionario estos privilegios, mandando que ninguno sino él, edificase casas, aprovechase los montes ó rompiese los yermos, ó por el contrario, otorgaba desde lúego á los pobladores estos derechos, á fin de que el señor no pudiese nunca menoscabarlos (2).

Fundábanse más bien en el dominio originario sobre las personas serviles, que en el del territorio, otros muchos privilegios de diversas clases, que disfrutaban el rey y los señores en su caso. Tales eran el exclusivo de tener molinos, hornos y tiendas de ciertas clases, ó de vender vino, plantar viñas y ejercer otros comercios. «Todos los vecinos cuezan su pan en el »horno del rey, pagándole un pan por cada hornada,» dice el fuero de Logroño de 1095, á pesar de ser uno de los más liberales, otorgados en el siglo xi. «Nadie tenga horno sino el abad» decia Alfonso VI en el fuero que dió á

(1) Fuero de Palencia. Llorente, *Prov. Vascong.*, t. 4, núm. 162.

(2) Fuero de Villafria y Orbaneja de 1043.—Berganza, *Antigüedades*, etc. t. 2.º, escr. 85.—Fuero de Logroño de 1095.—Llorente, *Prov. Vascong.* t. 3.º, núm. 85.—Fuero de La Guardia de 1164 en dicha obra, t. 4.º, núm. 137.—Donacion á la iglesia de Sigüenza de las tierras y habitantes de su término en 1140.—Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 529.—Fuero de Miranda de Ebro de 1099.—Llorente, obra cit., t. 3, número 82.—Carta-puebla de Arganzon de 1191.—*Colec. de docum. de las Prov. Vascongadas*, t. 5.º, núm. 26.—Fuero de Balbas de 1135 en dicha colec., t. 6.º, núm. 254.—Fuero de Navarrete.—Llorente, obra cit., t. 4.º, núm. 185.—Fuero de Treviño de 1254, en el *Memorial histórico*, t. 10, p. 44. Aún pudieran citarse otros muchos fueros y documentos en que ó se reservan al señor ó se otorgan á los vecinos del señorío por el rey, todos los privilegios citados en el texto, ó parte de ellos.

Sahagun en 1084. En las villas pobladas al fuero de Jaca, tenían los vecinos el privilegio de moler su trigo en el molino que quisieran, excepto los judíos y los panaderos (1). En las pobladas al fuero de La Guardia, disfrutaban los vecinos el de construir molinos en las orillas del Ebro, pagando al rey cinco sueldos, y en sus tierras propias, gratuitamente. Este mismo privilegio de hacer molinos y hornos en heredades propias, se otorgó á la Puebla de Arganzon, á Catalifa, á un tal Alfonso de Leon, alfarero de la reina doña Berenguela, mujer de Alfonso VII, á la villa de Haro en 1187, á la de Castroverde en 1197, á la de San Sebastian en 1180 y á otros muchos pueblos. El monasterio de Sahagun tenia el privilegio de que mientras vendia su vino, no pudieran vender el suyo los vasallos, y de que cuando hubiera de comprar paños, pescado ó leña, no los compraran á la vez aquellos. El obispo de Palencia tenia tambien el monopolio de la venta del vino en cierto periodo del año, el de las tiendas y el privilegio de que nadie vendimiara ántes que él, en los pagos en que tenia sus viñas. Alfonso X hubo de reservarse en Murcia el monopolio de las carnicerías y otras tiendas, puesto que en 1272, las dió á censo.

Todos estos privilegios y monopolios, tan conformes con los que á la sazón se usaban en otros reinos de Europa, daban á la propiedad de señorio en Castilla un carácter feudal muy señalado. Mas para que no faltase ninguna de las circunstancias que distinguían la propiedad feudal en otros Estados, hasta hubo señores con la alta prerogativa soberana de batir moneda. La reina doña Urraca la concedió en 1116 al monasterio de Sahagun para subvenir á los gastos de la guerra, que sostenia con su marido el rey de Aragon, mandando que sus productos se dividieran por terceras partes entre el abad, la corona y las monjas de San Pedro. Alfonso VII confirmó después este privilegio, disponiendo que el producto de la acuñacion se dividiera por mitad entre la corona y el monasterio (2). Alfonso VI otorgó igual derecho á la iglesia de Santiago, en los últimos años de su reinado (3). Tal vez lo tendria tambien algun otro señor castellano, más estos dos ejemplos bastan para hacer ver cómo no hubo costumbre feudal en Europa, que bajo una ú otra forma, y en una ú otra provincia no penetrase en España. No anticipemos, sin embargo, conceptos que han de resultar demostrados tan claramente, con lo que ha de decirse más adelante.

(1) Fuero de Jaca en Llorente, obra cit., t. 2.º, núm. 78.

(2) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 149.

(3) *España Sagr.*, t. 19, p. 234.

CAPITULO VI

Propiedades coartadas.—Tierras.—Honores.

Daban tambien los reyes segun ántes se ha dicho, bienes de todas clases *en tierra*. Era este un título de enajenacion diferente de todos los demás, aunque en su origen hubo de confundirse con algunos de ellos. El prestimonio ó préstamo, la encomienda, la mandacion y la tenencia obligaban sin duda á los que recibian algo por cualquiera de estos conceptos, á guardar fidelidad y prestar servicio al rey ó señor que le hacia la merced; pero todos estos títulos llevaban consigo generalmente cargo público de gobierno, y no eran sino por consecuencia ó accidente, remuneracion de servicios futuros. La *tierra*, por el contrario, no suponía necesariamente el ejercicio de funciones públicas, aunque alguna vez las llevase consigo, y su adjudicacion tenia por único y principal objeto, mantener y pagar á los caballeros que, aceptándola, contraian la obligacion de servir en la guerra al rey. Era la *tierra* el sueldo ordinario de los vasallos consagrados al servicio de las armas, el cual tuvo al principio este nombre, porque tierra conquistada era generalmente la remuneracion de tales servicios, y lo conservó aún después, cuando en lugar de tierras, se dieron con tal objeto, parte de las rentas de ellas ó de otros bienes de la corona.

En los primeros siglos de la reconquista, los diplomas no hablan de tierras, sino en el sentido natural y directo de esta palabra; pero desde el siglo xiii empieza á tomarse la voz *tierra* como sinónimo de renta de cualquiera especie, dada por sueldo á los vasallos. Por eso decia el rey Sábio en su inmortal código que «tierra es maravedís quel rey pone á los ricos homes et á los caballeros en lugares ciertos» (1): esto es, una participacion fija en las rentas que correspondian á la corona en pueblos determinados. Cuando la merced comprendia cosas señaladas que pertenecian exclusivamente al señorío real, como por ejemplo, todas las rentas de una villa ó castillo, entre las cuales se hallaban algunas de las que segun la ley, eran esenciales á la soberanía, como la moneda y los yantares, la tierra tomaba el nombre de *honor*. Por eso añade la misma ley ántes citada que «*Honor*

(1) L. 2, t. 26, Part. 4.^a

»es maravedís que les pone (el rey á los ricos hombres y caballeros) en cosas señaladas, que pertenecen tan solamente al señorío del rey; et dages los él por les facer honra, así como todas las rentas de alguna villa ó castiello.» De modo que la diferencia entre uno y otro título, consistía en que la *tierra* era un libramiento de cantidad cierta á cargo de rentas especiales, y el *honor* era la posesion de todas las rentas de lugares determinados. Decíase por lo tanto, en Castilla, aunque ménos que en Aragon, donde los honores (1) eran más numerosos, que tal caballero tenia el *honor* de una villa, para dar á entender que era dueño ó usufructuario de todas sus rentas reales, con jurisdiccion ó sin ella; pero cuando se decia que tenia *tierra* en tal lugar, dábase sólo á entender que sobre sus rentas tenia consignado el pago de una pension ó salario cierto.

Honor era tambien denominacion comun á todos los cargos públicos lucrativos con que el rey recompensaba los servicios de sus vasallos. Así se llamaban además honores los condados, las mandaciones, las encomiendas, las tenencias y los empleos de palacio. Por eso se lee muchas veces en las crónicas y en los diplomas que acudian al llamamiento del rey, ó intervenian en ciertos actos, todos los que tenian honores del monarca, para comprender en una denominacion comun, todos los que recibían ó habían recibido de él alguna merced, con cargo de servicio público. Alfonso VI decia en el fuero de Logroño, que las calumnias ó multas, por daños causados en las heredades, se dividirían entre el rey y el señor que tuviera el honor de la villa (*et illo senior cui est illa honore*). La crónica latina de Alfonso VII, cuenta que este monarca hizo caballero suyo á García Ramirez, rey de Navarra, mediante promesa de servicio y le otorgó *dádivas y honores*. El arzobispo D. Rodrigo refiere que el conde D. Pedro Ansures, habiendo pasado á Castilla, para verse con el mismo Alfonso VII, «le hizo homenaje con la mano y con la boca, por la tierra que habia recibido de él en *honor*.» Por cuyos ejemplos se ve que esta denominacion se aplicaba lo mismo al gobierno de Logroño, que á los regalos entre reyes y príncipes ó á los feudos, puesto que no otra cosa era el de Ansures.

Llamábase honor, en fin, el galardón que hacia al rey ó señor el que recibía de él alguna merced en tierra ó gobierno, como en reconocimiento de las obligaciones que contraía, aceptándola. Fernando, hijo del conde Aiur, en la escritura de donacion de varias villas, que otorgó á favor del monas-

(1) En Aragon era *honor* nombre femenino que se aplicaba en el sentido que indica el texto. En Castilla se usaba generalmente como masculino.

terio de Sahagun en 976, declaró haber recibido algunas de aquellas mercedes del rey D. Ordoño, y que él, con su mujer Tota, habían dado al rey *onorem*, esto es, un mulo, dos caballos, dos vasos de plata de valor de 120 sueldos y una piel de *zingabe* (1). Ejemplos semejantes se encuentran en multitud de escrituras de los siglos x, xi, y xii.

Pero si la *tierra* se convirtió con el tiempo en salario de maravedís, no fué en un principio, como he dicho, sino propiedad territorial verdadera, y bajo este concepto suponía un título especial de trasmisión, que importa conocer, por cuanto sus condiciones y circunstancias propias fueron las mismas en su último estado que en el primitivo. Además, en el mismo siglo xiii en que los autores de las Partidas declaraban que la *tierra* consistía en maravedís, no se había perdido por completo la antigua costumbre de hacerla consistir en tierra verdadera, por más que prevaleciese ya lo primero. El infante D. Juan Manuel escribía en el mismo siglo su *Libro de los estados*, en el cual hablando de la *tierra*, decía: «Este bienfecho es segund
»las costumbres de la tierra; ca en unas tierras usan en dar los señores
»todo aquello que se avienen en rendas señaladas, que los señores han en
»lugares señalados, et á esto llaman *quantia cierta*, et en otros lugares usan
»de las dar, una partida en *tierra* cierta et la otra ponengela en sí mismos
»et en otras maneras muchas que se usan» (2). En otro lugar de la misma obra decía: «Son sus vasallos (del señor) por la *tierra* é por los *dineros* que
»el señor les da,» distinguiendo de esta manera los dos modos de retribuir los servicios del vasallo. A este mismo hecho de darse todavía alguna vez tierra por soldada, alude sin duda otra ley de Partida que dice: «Vasallos
»son aquellos que reciben honra et bienfecho de los señores, así como ca-
»ballería, ó *tierra*, ó *dineros* por servicio señalado, que las hayan de
»tener» (3).

Era, pues, la merced de tierra, en una ú otra forma, uno de los modos de constituir el vasallaje y uno de los vínculos que determinaban las relaciones entre el vasallo y el señor. Así dice otra ley del mismo código, que los vasallos están sujetos á sus señores «por razon de bienfecho ó de honra
»que dellos reciben» (4). Cuando el Cid tomó á D. Alfonso VI el conocido juramento de no haber tenido parte en la muerte de su hermano D. San-

(1) Escalona, *Hist. de Sahag.*, escr. 50.

(2) Parte 1.^a, pár. 27 y 86.

(3) L. 1, t. 25, Part. 4.^a

(4) L. 2, t. 25, Part. 4.^a

cho, cuentan las crónicas que le dijo el rey: «Baron Rui Diaz, ¿por qué me afincades tanto? que hoy me conjurades ó cras me besarades la mano.» Y el Cid respondió: «Como me ficiereades algo, que en otras tier-ras, soldadas dan á fijosdalgo; é así fara á mí quien me quisiere por va-sallo» (1).

La tierra y el honor se solian dar sin *posturas*, esto es, sin expresion de las condiciones á que se obligaba el vasallo, porque segun la ley, lleva-ban necesariamente consigo estas mercedes la condicion implicita de ser-vir el vasallo al señor en los términos que prescribiera el fuero ó costumbre de la tierra (2). Este servicio era principalmente el militar, y de su forma y circunstancias trataré más adelante. El infante D. Juan Manuel decia que desde que el vasallo besaba la mano al señor y pronunciaba la fórmula del vasallaje «es tenido del servir lealmente contra todos los homes del mun-do» (3). Las demás obligaciones del vasallo que tenia tierra de la corona, eran: 1.ª Presentarse al nuevo rey para reconocerse por tal vasallo, pro-metiéndole fidelidad y besándole de hecho el pié y la mano. 2.ª Devolverle «los oficios é las tierras á que llaman honores, así como cilleros et bodegas et ganados et otras rentas de cualquier manera que sean» (4). 3.ª Amar, honrar y guardar al señor, procurar su bien y evitar su daño, sirviéndole siempre lealmente (5). 4.ª Permanecer en su servicio un año al ménos, si por él hubiere sido armado caballero, sin perjuicio de poderle abandonar en cualquier tiempo, cuando no hubiese mediado aquella circunstancia, ó á pesar de ella, en casos señalados (6). 5.ª No hacerse vasallo de otro sin despedirse ántes del antiguo señor en la forma que la ley prescribia, devol-viéndole la tierra y todo cuanto de él hubiera recibido, excepto las solda-das servidas ó devengadas (7).

(1) Berganza, *Antigüedades*, etc., lib. 5.º, c. 14.

(2) L. 2, t. 26, Part. 4.ª

(3) *Libro de los Estados*, part. 1.ª, pár. 86.

(4) L. 20, t. 13, Part. 2.ª

(5) L. 6, t. 25, Part. 4.ª

(6) L. 7, t. 25, Part. 4.ª

(7) L. 8, t. 25, Part. 4.ª, y l. 4, t. 13, lib. 3.º, *Fuero real*. Entre el texto de esta ley del *Fuero real* que publicó la Academia y el más antiguo que insertó Cartagena en su *Doctrinal de caballeros*, hay una variante que importa hacer notar. El texto de la Academia dice: «Toda cosa que el vasallo recibiere de su señor por donadio, quier en lorigas, quier en otras armas, quier en cavallos, hayalo todo por suyo,» etc. El texto, segun Cartagena, que es anterior á la correccion mandada hacer por los Reyes Católicos, dice: «Toda cosa que el vasallo recibiere del señor por donadio, quier en

Los derechos del vasallo eran: 1.º Conservar toda su vida la posesion de la tierra miéntras no cometiera falta por la cual debiese perderla, á juicio de árbitros ó del tribunal de la córte (1). 2.º Percibir en las guerras á que asistian la parte de botin correspondiente, segun su calidad de caballero ó peon y las armas de que iba provisto (2). 3.º Recibir heredades con que vivir honradamente, en galardón de servicios señalados, tales como el de aprehender al caudillo enemigo ó librar al señor de prision ó muerte, dándole su caballo, ó entrar uno de los primeros en villa ó castillo sitiado (3). 4.º Despedirse del señor y ponerse al servicio de otro con las restricciones ántes expresadas (4). 5.º Hacer la guerra con el nuevo señor aún contra el antiguo, si bien absteniéndose de causarle ciertas ofensas graves, que eran lícitas á los que no hubieran sido sus vasallos. Estos derechos eran comunes á todos los hombres de aquella clase, cualquiera que fuese el título de donde procediese su estado, y correspondian por lo tanto á los vasallos por razon de tierra.

Era este título de adquisicion vitalicio, salvo que mediasen justas causas para hacerlo caducar. Tales eran: 1.º No prestar el poseedor vasallaje al nuevo rey con devolucion de la tierra, en el término señalado (5). 2.º Cometer cualquiera de las faltas por las cuales se perdian los castillos, cuando se tenia alguno de éstos por tierra (6). 3.º Incurrir en delito de traicion ó alevé. 4.º Causar daños en la tierra, que dieran lugar al extrañamiento (7). Por eso decia el infante D. Juan Manuel en el libro ántes citado: «El señor

"lugar ó en loriga, quier en caballo, quier en otras armas," etc. Por donde se ve que hubo de suprimirse la palabra *lugar* tal vez por no ser ya tan frecuente, como lo era en tiempo de D. Alfonso X, dar tierras ó lugares por donadio.

(1) L. 2, t. 26, y l. 7, t. 25, Part. 4.ª

(2) L. 28, t. 26, Part. 2.ª

(3) Ley 4, 6 y 7, t. 27, Part. 2.ª

(4) El infante D. Juan Manuel, después de reconocer la facultad del vasallo para despedirse de su señor en la forma que prescribe la ley de Partida, añade: "mas non lo deven facer si el señor non les toma la tierra, ó aquel bienfecho que puso con él de facer quando fue su vasallo, ó por tuerto ó deshonor ó desaguizado que el señor les faga. Et aun per ninguna de estas cosas non se deve dél partir, si el señor está en guerra ó en algun peligro." (*Libro de los Estados*, part. 1.ª, pár. 87).

(5) L. 20, t. 13, Part. 2.ª

(6) Estas faltas eran: 1.º No hacer guerra y paz por mandado del rey. 2.º No acogerle en el castillo. 3.º No dejar correr la moneda del rey. 4.º No pagar el tributo de moneda. 5.º Desaforar á los vasallos. 6.º No venir al juicio del rey. 7.º Denegar la justicia á los vasallos, impidiendo al rey hacerla. 8.º Acoger malhechores. 9.º No guardar las posturas. (L. 22, t. 13, Part. 2.ª)

(7) Ley 10 y 11, t. 25, Part. 4.ª

»non gelo debe quitar (la tierra al vasallo) por achaque, ni por antojo, »sinon por tal merescimiento, ó por tal yerro, que entiendan todos que lo »face con razon é con derecho» (1). Estos yerros eran sin duda aquellos por los cuales, segun el mismo autor, incurria el vasallo en la pena de traicion, la de aleve, la de falsedad, la de valer ménos, la de no ser par de hidalgo y la de infamia.

No era costumbre dar tierra á los hijos en vida de los padres. Así lo asegura la crónica de D. Alfonso el Sábio, puesto que segun ella los mensajeros del rey dijeron á D. Nuño, uno de los ricos hombres sublevados: «Y »en vuestro tiempo dio el rey *renta y tierra* á vuestros hijos Juan Nuñez y »Nuño Gonzalez, lo qual antes nunca fue hecho en tiempo de ningun rey, »que en vida del padre diese tierra á los hijos» (2). Como la tierra era patrimonio de la familia, que sólo debia poseer el cabeza de ella, del mismo modo que los feudos, no se daba tampoco á los hijos en vida de los padres.

Con la muerte del rey ó señor que habia dado la tierra, cesaba de derecho la posesion de ella, como que segun se ha visto, debia el vasallo presentarse á devolverla al sucesor en el reino ó señorío. Tal era el derecho antiguo de España, de que dan testimonio algunos documentos de los primeros siglos de la reconquista. El obispo Gomezano dió á un D. Garcia la tierra en que habia estado el monasterio de Jubera, para que lo poblase y poseyese durante su vida, añadiendo: «mientras que yo viva no te inquietaré; »mi sucesor, si quisiere, te mantendrá en tu *honor*, y si no lo hiciere, podrás trasladarte á otro lugar, con todo lo tuyo, devolviendole á él lo que »le corresponda» (3). Pero como el nuevo rey ó señor, al devolverle las tierras sus leales vasallos, recibia su homenaje y tenia tan conocido interés en no enajenarse su voluntad, pronto fué tambien costumbre general la de confirmar aquellas propiedades á los mismos que las tenian, siempre que renovaban su promesa de fidelidad y vasallaje, si no hubiesen dado motivo por que debieran perder la merced.

Por muerte del vasallo tambien debia volver la tierra á poder del rey para que este la diese á quien la pudiera servir; pero si entre los hijos y parientes cercanos del difunto habia alguno con esta circunstancia, solia ser preferido. Más tarde, en el siglo xiii, hubieron de darse ejemplos con-

(1) *Libro de los Estados*, part. 1.^a, pár. 87.

(2) Crónica de D. Alfonso X, cap. 27.

(3) *Colec. de docum. de las prov. Vasc. y Castilla*, t. 6.^o, núm. 237.

trarios á esta doctrina. Los mismos mensajeros de D. Alfonso el Sábio, de quienes hice mencion, dijeron á D. Fernan Ruiz, otro de los ricos hombres sublevados: «Bien sabedes que vos crio el rey é hizo á su padre que vos »diese la *tierra* que tenia dél Rui Gutierrez vuestro padre, seyendo vos »de quatro años: lo que non solia hacer á ningun rico home, porque la »*tierra* del que muere, dabala al que era en tiempo para poder luego servir» (1). Estos ejemplos hubieron de repetirse, y así fué lentamente reduciéndose á mera formalidad la devolucion de las tierras á la corona por muerte de sus poseedores, y acreditándose en cambio la costumbre de confirmarlas casi siempre á los hijos, sin consideracion á su edad y sexo. En las Córtes de Búrgos de 1367, se hizo mencion de una María Alfonso Cervatos, hija de Gonzalo y viuda de Juan Gonzalez de la Fuente Almexar, la cual tenia en tierra 4.300 maravedis: los 3.000 en la Judería de Toledo y los 1.500 restantes en las tercias del arzobispado; y D. Enrique II, reconociendo su derecho, consignó esta última suma sobre la misma Judería.

Los fueros y libertades municipales, más aún que los favores personales de los reyes, contribuyeron á esta gran mudanza. Para atraer pobladores á los lugares más desamparados, ó que necesitaban mayor número de ellos, solia la corona otorgarles el privilegio de la sucesion más ó menos restringida, en las tierras que disfrutaban ya ó habian de disfrutar en adelante. Alfonso VII en el fuero que dió en 1118 á los muzárabes de Toledo, dispuso que los hijos del caballero que muriese teniendo armas ó caballo de rey, continuaran disfrutando con su madre *el honor* del padre, hasta que pudieran cabalgár, y que la viuda, á falta de hijos, conservara tambien *el honor* de su marido (*sit honorata in honore mariti*) (2). El mismo monarca dió por fuero á Guadalajara en 1133, que al que tuviera caballo ó armas ó alguna otra cosa de *l'emprestado* del rey, le heredara en todo esto su hijo ó su hermano (3). D. Alfonso X concedió á los caballeros pobladores de Alcantar en 1252, el mismo privilegio que Alfonso VII habia otorgado á los de Toledo (4).

La opinion pública era, por otra parte, favorable á esta novedad, como lo fué siempre en Castilla á la sucesion hereditaria forzosa de los hijos. El infante D. Juan Manuel decia en otra de sus obras: «Et porque despues »que cada uno dellos (de los vasallos) finare, habredes de poner otro vasallo

(1) Crón. de D. Alfonso X, c. 29.

(2) Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 363.

(3) Muñoz, *ibid.*, p. 507.

(4) *Colec. de docum. de las prov. Vasc. y Castilla*, t. 6.º, núm. 257.

»en su logar, ruegovos que si fijo dejare, non lo mudedes por otro, nin le
 »tiredes lo que su padre tenia, salvo si por su ocasion fuese tan mengua-
 »do, que todos los de vuestra casa entendiesen que faciades sin razon en le
 »mantener en aquel estado. Pero por mengua que en el haya, siemprél
 »mantened lo mejor que pudieredes, por guardar el galardón del bien que
 »ficeron aquellos onde el viene» (1).

Las Córtes vinieron luego en apoyo de esta costumbre. Las de Ocaña de 1422, y las de Palenzuela de 1425, expusieron en una de sus peticiones que era antigua costumbre la de dar las tierras por muerte del vasallo que las tenia, á su hijo mayor legítimo, y en su defecto, al hermano del padre, y pidieron que así se proveyese por ley general. No habiendo accedido el rey á esta pretension, la reprodujeron las Córtes de Valladolid de 1440 y 1442, y ya entónces respondió D. Juan II que proveeria las tierras que vacaran en los hijos mayores legítimos, segun lo habia acostumbrado, y que retendria las mercedes vitalicias que no debieran proveerse y no haria otras nuevas, sino cuando lo requiriera el galardón del servicio. Todavía quisieron más los procuradores de las Córtes de Valladolid de 1451, pues, desechando la tradicion que negaba á los ascendientes toda herencia, segun los principios del derecho feudal de Europa, pidieron que á falta de hijos heredaran las tierras los padres, y en defecto de éstos, los hermanos. Mas el rey denegó resueltamente esta solicitud, diciendo que ya estaba ordenado que el hijo mayor heredara las lanzas del padre, y que lo demás, ni las Córtes lo podian pedir, ni él otorgar.

En las mercedes de tierras solian, en fin, ponerse condiciones especiales relativas á las circunstancias que las ocasionaban, pero sin que esto alterase su naturaleza. Así D. Fernando IV, al cambiar varios pueblos realengos por otros que poseia D. Juan Nuñez, transigiendo un pleito suscitado entre ambos, convino en que haciendo Nuñez homenaje de servir contra todos al rey, le daria su soldada cumplida y su tierra, y además aseguraria á D. Pero Ponce su tierra y su heredad (2). D. Alfonso de la Cerda se otorgó por vasallo de D. Alfonso XI, renunciando al derecho que pretendia tener á la corona, mediante haberle dado el rey parte de las rentas, «asi como daba á cada uno de sus otros vasallos,» es decir, que le concedió tierra.

El repartimiento de estas tierras fué muchas veces ocasion de amargas quejas y graves disturbios entre los vasallos. Las Córtes de Madrid de 1529

(1) *Libro de los castigos ó consejos que fizo.... para su fijo*, cap. 9.

(2) *Crón. de D. Fernando IV*, cap. 45.

se querellaron de que muchos tenían tierras del rey, cuando sus iguales nunca las tuvieran; que otros tenían más de las que merecían, cuando algunos de tan buenos solares como ellos, no poseían ninguna, ó disfrutaban tan poca, que no podían mantenerse; que otros robaban para vivir, y que los más se tenían por agraviados. En su consecuencia pidieron al rey que averiguara el estado de sus rentas, viera cómo estaban repartidas, y que, después de tomar lo que necesitara para mantener su casa, distribuyera el resto con igualdad entre los naturales, de manera que todos cupiesen en la merced y tuviera cada uno lo que mereciese. El rey prometió examinar el asunto y ordenar lo que procediera; y en efecto, en su tiempo los más de los hidalgos hubieron de tener *tierras* y *quantías*, según reconocieron las Cortes de Valladolid de 1351. Pero con la epidemia y la guerra ocurridas por aquel tiempo, hubieron de quedar arruinados y despoblados muchos lugares de los que suvenían á aquel gasto, por lo que disminuidos sus rendimientos, las mismas Cortes pidieron al rey D. Pedro que se acrecentasen, las *tierras* para poderlas dar á los hidalgos que no las tuviesen, y que no se imputaran por más de su verdadero valor las rentas destinadas á satisfacerlas. Todo lo prometió el rey, y por cierto que estas y otras promesas semejantes sirvieron de fundamento, en ocasiones posteriores, á la más escandalosa dilapidacion del Tesoro público.

Pero los abusos no se cometían solamente en la distribucion y señalamiento de las tierras, sino también en la manera de cobrarlas y servir las. Muchos hidalgos que las tenían consignadas en determinados lugares, se atribuían la facultad de apremiar por sí mismos á su exaccion, decretando embargos y sacando prendas en ellos (1). Otros poseían á la vez tierra del rey y acostamiento de señor, por lo que, cuando eran llamados al servicio, faltaban necesariamente á alguna de sus obligaciones, no pudiendo militar simultáneamente con el rey, como vasallo inmediato, y con el señor, como uno de los hombres con quienes éste debía contribuir al soberano (2). En el reinado de D. Juan I se pagaban 14 millones de maravedis por tierras; y según decían las Cortes de Bribeasca de 1387, eran en gran parte perdidos, porque siendo muchos á cobrar, nunca se juntaba la gente necesaria para la guerra. Así tuvo el rey que adoptar disposiciones muy severas con el fin de evitar las burlas que se hacían en los alardes, según se dirá más extensamente al tratar de la tierra como sueldo militar.

(1) Cortes de Toro de 1369.

(2) Ordenamiento de los alardes, 4.

CAPITULO VII.

Propiedades coartadas.—Los feudos, segun la legislacion y la historia de Castilla.

Tambien en Castilla daba el rey algunas tierras en feudo, por más que lo hayan negado escritores de fama. Aunque no sonara esta palabra en ninguno de los antiguos documentos de este reino, seria una afirmacion temeraria la de que el sistema feudal no habia sido en él conocido ni practicado. Porque, ¿qué otra cosa son sino feudos, más ó ménos disfrazados, las encomiendas, las mandaciones, los señoríos, los honores y las tierras? Compárense sino las condiciones de estos distintos titulos de dominio con el de feudo, segun vamos á exponerlo, y se verá que todos ellos, más bien que instituciones esencialmente diversas, eran formas distintas y nombres diferentes de una institucion, destinada á trasferir el dominio de la tierra juntamente con la potestad, más ó ménos limitada, de regir y gobernar á los hombres que vivian en ella. Eran ciertamente más generales las enajenaciones de estas tierras con los nombres de *encomiendas*, *mandacion*, *honor* y otros que, con el de feudo, mas sin que por eso dejaran de hacerse algunas con esta denominacion, ni faltara una legislacion que las reglamentase.

El feudo era, segun las Partidas, «manera de bienfecho que dan los señores á los vasallos por razon de vasallaje,» ó «bienfecho que da el señor á algunt home porque se torna su vasallo ó le face homenaje de serle leal.» El feudo, por lo tanto, tenia el mismo objeto y producía iguales resultados que la *tierra* y el *honor*, pues todos eran medios de asegurar y remunerar los servicios de otros hombres, y maneras de constituir el señorío y el vasallaje. Así como la *tierra* podia consistir en tierra verdadera ó en dinero, así el feudo era de dos clases: los de villas, castillos ó cosas raíces, y los de *cámara*, que consistian en maravedís consignados sobre el Tesoro público. Habia, además, la diferencia entre ambos, de que los primeros no podian quitarse, á ménos que el vasallo faltara á las condiciones estipuladas ó cometiera ciertas faltas ó delitos, y los últimos podian ser quitados á voluntad del rey (1).

(1) *Introd.* y l. 1.^a, t. 26, Part. 4.^a

Entre la tierra y el feudo habia una diferencia importante. La primera, como ántes he dicho, solia darse sin postura ó condiciones, porque, segun la ley, llevaba siempre sobrentendidas la del servicio y la de su inamovilidad; el segundo se otorgaba con posturas, esto es, prometiendo el vasallo servir á su costa, con cierto número de caballeros, ú hombres, ú otros servicios señalados, y mediante la ceremonia del pleito-homenaje. Esta se verificaba hincando el vasallo las rodillas delante del señor, poniendo las manos entre las suyas y prometiéndole con juramento serle siempre leal, darle buen consejo cuando se lo pidiere, no descubrir sus secretos, ayudarle contra todos los hombres del mundo, hacer su pró y evitar su daño, y guardar las demás condiciones estipuladas. Hecho este juramento, el señor, con una vara en la mano, investia al vasallo de la cosa ofrecida en feudo, bien entregándole una sortija, un guante ú otro objeto, como simbolo de la posesion, ó bien poniéndole materialmente en ella por sí ó por mensajero (1). Tal era tambien la ceremonia con que se investian los feudos en las demás naciones. No debe tampoco olvidarse que con estas mismas promesas y juramentos se entregaron á los vasallos muchas encomiendas, señoríos, tierras y honores, de que he hecho mencion en los anteriores capítulos.

Podian constituir feudos el rey y los grandes señores, pero solamente de las cosas que poseian libremente y por heredamiento, y no de las demás que disfrutaban por tiempo y con sujecion á ciertas condiciones resolutorias. Los prelados, sin embargo, tenian facultad para conceder en feudo aquellas cosas de la Iglesia que sus antecesores acostumbraban otorgar de este modo. Sólo podia recibir feudos el que de otro señor no fuera ya vasallo, porque ninguno podia serlo á la vez de dos señores (2); pero entendiéndose esto del vasallaje que se constituia especialmente por otro feudo, tierra ú honor, pues el de los naturales con el soberano, sin prenda de merced, era compatible con el que se constituia por aquel otro concepto.

El vasallo quedaba obligado á prestar los servicios prometidos, y cuándo estos no se señalaban, entendiase que debía ayudar al señor en todas las guerras ofensivas ó defensivas á que asistiese. A su vez el señor debía amparar al vasallo en sus derechos cuanto pudiese, librándole de todo daño (3).

(1) L. 2 y 4, t. 26, Part. 4.^a, y l. 68, tit. 18, Part. 3.^a

(2) L. 3, t. 26, Part. 4.^a

(3) L. 5, t. 26, Part. 4.^a

Eran ya en Europa los feudos perpétuos cuando fueron conocidos en Castilla con su denominacion propia. Así el señor en este reino no podia quitarlos al vasallo sino por alguna de las causas señaladas en la ley. Tales eran: 1.º No cumplir el servicio prometido. 2.º Causar daño ó desamparar al señor en una batalla. 3.º No evitar ú ocultar el daño que al señor amenace, ó procurárselo por cualquier medio. 4.º No librarle de prision, pudiendo hacerlo. 5.º Matar al hermano, al hijo ó al nieto del señor. 6.º Yacer con su mujer, su hija, su nuera ó su nieta. A su vez el señor perdía la propiedad del feudo, ganándola el vasallo, cuando cometía las mismas faltas en daño de éste. Tambien perdía el vasallo su feudo cuando lo enajenaba sin licencia del señor, cuando al heredarlo de su padre no acudia dentro de un año, á rendir por él pleito-homenaje, y cuando tampoco se presentaba á hacerlo al nuevo señor, que por herencia ó contrato, sucedía en la propiedad feudal (1).

Los feudos de Castilla eran hereditarios, aunque no por las reglas del derecho comun, sino por las establecidas en consideracion al origen, carácter y objeto especial de estas propiedades. Sucedian en ellos los hijos, cuantos fuesen, y nunca las hijas, quedando todos obligados al servicio del señor. A falta de hijos varones lo heredaban los nietos y descendientes por linea masculina, y en su defecto revertia el feudo al señor para que lo volviera á dar á quien quisiese. Pero el hijo ciego é incapacitado de servir las armas, el monge ó el clérigo, que tampoco podian hacer profesion de ellas, no sucedian en el feudo del padre, aunque fuesen hijos únicos. Tampoco heredaban nunca los ascendientes el feudo del descendiente, conforme á la regla del derecho comun feudal. Sólo podia heredar el hermano del vasallo que moria sin hijos, cuando habia sido comprado el feudo con dinero de ambos. Los condados, los marquesados y las dignidades realengas no eran sin embargo hereditarias, y devolvianse á la corona por muerte del poseedor, como en el título de su concesion no se dijese otra cosa (2). Las Partidas contienen la fórmula que debia usarse en las cartas feudales, y era el resumen de todas las obligaciones y derechos que, según la doctrina expuesta, mediaban entre el señor y el vasallo (3).

Nacia, por último, del feudo cierta jurisdiccion, aunque muy limitada. Los pleitos entre el señor y el vasallo, relativos al feudo, debian librarse

(1) Leyes 8, 9 y 10, t. 26, Part. 4.ª

(2) Leyes 6 y 7, t. 26, Part. 4.ª

(3) L. 68 t. 18, Part. 3.ª

por árbitros, que de acuerdo ambos litigantes, habian de nombrar entre los demás vasallos. Las contiendas de estos entre sí, sobre el mismo feudo, debian decidirse por el señor comun. Las que se suscitaban entre vasallos de distintos señores eran de la competencia de los jueces ordinarios, cualesquiera que fuesen su objeto y la materia sobre que recayeran (1). Mas esta jurisdiccion era independiente de la que por otros conceptos, solian tener los señores de vasallos, segun se verá en su lugar correspondiente.

Tal era la legislacion sobre feudos, que tomada de las leyes comunes de Europa y de las costumbres de España, recopiló D. Alfonso el Sábio. Sin embargo, ha habido quien crea que estas disposiciones no se insertaron en las Partidas, sino á prevencion y para cuando hubiese feudos en Castilla, que hasta entónces no eran conocidos. Pero contra esta asercion hablan los hechos y los documentos que no hubieron de tener presente los que la afirmaron. Prescindiendo, como ántes he dicho, de las muchas propiedades que sin el nombre, tenian todos los caractéres feudales, los documentos contemporáneos más auténticos hacen mencion de *feudos* constituidos en Galicia y en Castilla en los siglos XII y XIII. La *Historia compostelana* refiere que el arzobispo de Santiago en 1126, compró á la reina Doña Urraca el castillo de Cira: que habiéndose suscitado después pleito entre ambos, pidió la reina al prelado que le diera el castillo *en feudo* (*Regina castrum illud á D. Archiepiscopo in pheodum petivit*), y que el arzobispo accedió á ello, con la condicion de que cuando él ó sus sucesores quisieran recobrar el castillo, podrian hacerlo (2). Este mismo prelado en aquel año, y segun la misma historia, dió tambien *en feudo* la iglesia de San Anastasio y dos heredades propias de la de Santiago á cierto cardenal suyo, llamado Pedro Fuleon, por haber trabajado mucho en su servicio y en el viaje que hizo á Roma (3). Todavía hace mencion la misma *Historia* de otro feudo, aunque impropio por sus condiciones excepcionales. Dice que el conde Rodrigo dió en 1150 á la iglesia de Santiago el castillo de Faro con todas sus pertenencias, y la condicion de que durante su vida lo conservaria y tendria como *en feudo* del arzobispo: que á su muerte volveria libre á la iglesia con título de perpetuidad, y que si no llegase á tener hijos legítimos, la misma

(1) L. 11, t. 25, Part. 4.^a

(2) Lib. II, cap. 81, en *Esp. Sag.*, pár. 20.

(3) Idem id. cap. 82. "Supradictam ecclesiam et illas duas hereditates quidam suo cardinali Petro Fulconis in pheodum, ipse compostellanus munifica manu tradidit, quia ipse cardinalis in ejus servitio et in itinere romano multum et fideliter laboraverat."

iglesia le sucedería en el castillo de Spelunca, que también poseía (1).

Los documentos y los escritores del siglo xiii hacen igualmente mención de los feudos de Castilla, como títulos especiales de dominio usados á la sazón. La *crónica general* escrita en aquel tiempo, refiere que D. Fernando II de Leon recibió malos informes acerca de algunos de sus ricohombres, y creyéndolos, tomó al conde D. Ponce «las tierras é los feudos que tenía de él,» por lo que éste y los otros ricos-hombres, cuando se vieron sin tierra, se pasaron al rey D. Sancho de Castilla. Y para que no quedase duda de lo que el rey había quitado al conde, añade que «feudo es tierra ó castiello que home tenga de señor en guisa que gelo non tuelga en sus dias, ó non faciendo por qué» (2).

El infante D. Juan Manuel, testigo no ménos irrecusable de lo que pasaba en el mismo siglo xiii, que el autor de la *Crónica general*, decia hablando de los duques: «Hant muy grant tierra et muy grandes gentes et muy grandes rendas, et son vasallos et naturales de los emperadores et de los reyes en cuyas tierras viven.... Et la mayor partida de la tierra que han es suya por heredamiento: et han algunas tierras que tienen de otros á feo: et las tierras que á feo tienen han á facer aquel comenzamiento á que la tierra es obligada por ello, segunt las condiciones del feo, á aquellos de quien las tienen» (3). Pudiera tal vez decirse que estos duques á que se refiere el infante no eran españoles, ni sus feudos de España, porque desde el tiempo de los godos hasta el siglo xiv, no se usó en el reino aquella dignidad. Pero de que no hubiese duques españoles en el siglo xiii no se infiere que los duques extranjeros no tuviesen feudos en España; consta, en efecto, lo contrario, pues precisamente en aquel tiempo muchos príncipes extranjeros se hicieron vasallos del rey de Castilla, mediante los feudos que de él adquirieran en este reino. Ni tampoco puede asegurarse que el infante aludiese únicamente en el pasaje citado, á los duques de otras tierras, pues él mismo lo era de Peñafiel (4) y vivía á fines del siglo xiii, como hijo que era del infante D. Manuel, hermano de D. Alfonso el Sábio. Así no es tampoco exacto lo que afirman algunos escritores de haber sido Beltran Duguesclin, capitán del rey D. Pedro, el primer duque español, después de la restauración de la monarquía.

D. Alfonso X dió á D. Alfonso III de Portugal, su yerno, y á su nieto

(1) Lib. 3.º, cap. 19, *España Sagr.*, t. 20.

(2) Parte 4.ª, cap. 7.

(3) *Libro de los Estados*, parte 1.ª, pár. 86.

(4) Mondexar, *Memorias históricas de D. Alfonso X*, lib. 2, capítulos 14, 15 y 16.

D. Dionis, para sí y sus sucesores en feudo, las tierras de Algarve, conquistada de los moros, con su dominio y jurisdiccion, previniéndole que no hiciera novedad en sus fueros, ni en la distribucion de sus tierras, reservándose las alzadas, y con la condicion de que el portugués habia de servirle con seiscientas lanzas. Verdad es que este feudo fué de corta duracion, porque al poco tiempo renunció D. Alfonso X á todas las condiciones estipuladas, excepto las cincuenta lanzas que se le aseguraron, dándole en prenda los castillos del Algarve, y después dispensó tambien de esta obligacion á su nieto D. Dionis, quedando desde entónces incorporado enteramente á Portugal aquel territorio (1). El mismo monarca, con motivo de sus pretensiones al imperio de Alemania, dió muchos feudos de *cámara* de renta cierta en maravedis, á cargo del erario español, á varios principes extranjeros, que de este modo se hicieron sus vasallos. D. Alfonso, pues, no como emperador y rey de romanos, sino como rey de Castilla, dió tales feudos de 10.000 maravedis con las ceremonias prescriptas en las leyes de Partida ántes citadas, al duque de Borgoña y al conde de Flandes, á los vizcondes de Bearne y de Limoges, y á los condes de Eu, de Belmonte y de Monforte (2). Porque es de notar que con los extranjeros se usaba, aún más que que con los naturales, este título de merced, sin duda por ser más conocido de ellos que los de *tierra*, *honor*, *encomienda* y otros que producian, sin embargo, los mismos efectos.

Y para mayor comprobacion de que los feudos no fueron tampoco una novedad improvisada y frustrada en el reinado de D. Alfonso X, basta saber que en el siglo xv los habia aún en Galicia y se regian por las mismas leyes de Partidas ántes citadas. Ofrece de ellos irrecusable testimonio el sínodo de Tuy de 1497, en el cual se dice que por cuanto Pay Belloso, escudero y regidor de Bayona, y forero de la iglesia, habia tratado de despojarla de sus bienes y jurisdicciones, dejaba perder sus rentas y le habia inferido otros agravios, el Sínodo le condenaba á no tener él ni sus descendientes hasta la cuarta generacion beneficios, honras, rentas ni fueros de la misma iglesia, y á que «en quanto á los fueros, tenencias é bienes é *feudos*» que de la nuestra iglesia tiene, que se proceda contra él por todo rigor «de derecho, é que sea dellos privado é amovido é quitado, segun se fallare «por derecho» (3). Por donde se ve que Pay Belloso, dueño de foros, tenen-

(1) Mondejar, *Apend.*, al lib. 8.º, capítulos 1, 5, 6, 8, 9 y 10.

(2) Idem *Memorias históricas de D. Alfonso X*, libro 8.º, cap. 1.º

(3) *Esp. Sagr.*, t. 23, apénd. 3.º

cias y feudos de la iglesia de Tuy, habia caído en uno de los casos en que, segun la ley de Partida, perdía su feudo el vasallo, y para que fuese legalmente privado de los suyos, mandó el Sinodo someterle al correspondiente juicio.

Alfonso de Cartagena, escritor del siglo xv, hace tambien mencion de estos feudos de Galicia. Decia en verdad que esta «non era fructa de este reino de Castilla,» que se practicaban en el imperio de Alemania, en Sicilia y en otras partes, «mas en este reino non la veo usar.» Pero añade en seguida, «ca magüer que algunos cuydan que en el reino de Galicia en la tierra de la iglesia, se usan estos feudos, porque algunos caballeros tienen tierras della é facen omenage á los arzobispos en su nombre, que por tiempo son é han de servir con cierta gente cada uno, segund que primeramente le fue empuesto; pero segund los títulos antiguos é los que hoy se facen, non pasan en heredero, é aún en vida se pueden revocar á sola voluntad del arzobispo que á la sazón es. Por ende mas parece tal contrato aquel que los legistas llaman precario, que feudo» (1). De modo que el mismo Cartagena reconoce la existencia en su tiempo de los feudos de Galicia, solamente que los ve reducidos á las tierras de la iglesia, y porque no encuentra en ellos la calidad hereditaria, le parece su denominacion impropia.

Quizá tenia razon este escritor en cuanto á no usarse ya aquel título sino en las tierras de abadengo; pero cómo no advirtió que la misma circunstancia de no trasmitirse estos feudos por herencia, que sirve de fundamento á su juicio sobre la impropiedad de aquella denominacion, es la que los hace más conformes con la legislacion por que se regia este género de propiedad? La ley de Partida ántes citada prescribia que no se diesen en feudo las cosas de la iglesia, excepto aquellas que los prelados anteriores acostumbraran otorgar de esta manera, porque segun los preceptos canónicos no podian tales cosas enajenarse perpétuamente ni arrendarse por muy largo tiempo. Así es que, segun hemos visto, el arzobispo de Santiago no concedió á Doña Urraca el castillo de Cira en feudo, sino con la condicion de poderlo recobrar en cualquier tiempo, ni permitió que el conde don Rodrigo poseyera como en feudo el castillo de Faro, sino por cuanto era esta la condicion con que el mismo conde lo dejaba por su muerte á la iglesia. Así, pues, los feudos de Galicia eran como podian ser los de la iglesia, segun las leyes, y cualquiera que fuese su semejanza con el precario,

(1) Cartagena, *Doctrinal de cavalleros*, lib. 4.º, t. 3.º, *Introd.*

es lo cierto que se denominaban tales feudos, y que los instrumentos de la época los distinguían de los otros títulos parecidos de adquisición.

Cierto es que en los reinos de Leon y Castilla era esta denominación de uso poco frecuente; pero alguno hubo de tener, cuando aparte de los ejemplos ya citados, el mismo Alfonso de Cartagena, después de afirmar que en su tiempo no se usaban los feudos en Castilla, añade: «E pues que entre las leys (de Partida) esta mataria se puso, é es tal que *se platica* mas é debe platicar, entre caballeros é fijosdalgo que entre los otros omes, así en el dar como en el reciblr, segundt el servicio é lealtad é el homenaje que requiere, bien es que en lugar de fructa que nace en otra parte, é en este tierra, non la hay..... oyamos las leys de los feudos»..... (1). En otro lugar, hablando de los vasallos dice: «Ca non solamente los señores que dan la tierra é los feudos, mas los vasallos que los reciben, por la mayor parte, son caballeros é fijosdalgo é omes que viven por las armas.» Si, pues, la materia de los feudos se *platicaba más entre caballeros que entre otros omes*, y si eran caballeros los que daban y los que recibían los feudos, claro es que por más que su uso no fuera muy frecuente, se practicaban algo. Por todo lo cual me inclino á creer que el citado escritor más bien que negar en absoluto la existencia de los feudos en Castilla, quiso significar que eran una institución de origen extranjero, de la cual se hacía poco uso, al ménos con su denominación originaria.

Mas prescindiendo de nombres y ateniéndonos á la realidad de las cosas, ¿toda propiedad que no era alodial no participaba más ó ménos de los caracteres esenciales del feudalismo? Esto se verá aún más claramente cuando determinemos aquellos caracteres y los veamos resaltar en todas las propiedades no alodiales.

CAPITULO VIII

Propiedades coartadas.—Tierras censales y tributarias.

I.

TIERRAS DE SIERVOS Y DE SOLARIEGOS.

Hemos examinado hasta aquí las propiedades de distintas clases que solían poseer los hombres libres de toda servidumbre personal, comprendiendo en este número, así los de más alta gerarquía, como los meros hi-

(1) *Doctrinal*, etc. lib. 4.º, t. 3.º introd., y t. 4.º introd.

dalgos, vasallos de otros señores, que á pesar de esta circunstancia, no decaian de su estado. Ahora corresponde dar á conocer las propiedades tributarias ó censatarias, que con derechos más reducidos, disfrutaban las personas no libres, sujetas por su estado á cierta especie de servidumbre, y que en los primeros siglos de la dominacion sarracena, formaban quizá la mayoría de la poblacion.

Los numerosos esclavos que habia en España al verificarse la conquista no desaparecieron inmediatamente con ella. Así en los lugares sujetos á la ley de Mahoma, como en los que conservaron su independencia, continuaron los siervos bajo la dominacion de sus propios señores ó de los que vinieron á ocupar su puesto, excepto aquellos que pudieron ganar su libertad en el desórden de la guerra, en el saqueo de las poblaciones ó por la disolucion de las familias propietarias. Los que hereditariamente y de generacion en generacion venian adscriptos al cultivo de la tierra, ó á otros oficios y faenas personales, siguieron prestando sus servicios como ántes, toda vez que los musulmanes admitian la esclavitud y la necesitaban aún más que los españoles, porque sin ella no habrian podido aprovechar las vastas heredades que se les repartieron. Así es que las tierras ganadas por fuerza de armas, las de las iglesias, y las de los emigrados, se distribuyeron entre los conquistadores con sus siervos respectivos, que sabian la manera y tenian la obligacion de cultivarlas, imponiéndoseles la de contribuir al propietario musulman con las cuatro quintas partes de sus productos. Las que permanecieron en el dominio del Estado, que fueron muchas, siguieron cultivándose del mismo modo, pero con la diferencia de que los siervos adscriptos á ellas hacian suyas los dos tercios de sus frutos. Luego, cuando una parte de estas tierras se distribuyó por lotes entre los árabes y los syrios que posteriormente entraron y se establecieron en España, los siervos cristianos que las cultivaban quedaron sujetos á los nuevos propietarios, contribuyéndoles con la misma porcion de frutos que ántes debian pagar al fisco (1).

En las provincias cristianas que ó no sometió nunca ó abandonó pronto el enemigo, y donde continuaron rigiendo las leyes y las costumbres visigodas, subsistieron los siervos sujetos á ellas, y por consiguiente en el estado en que los describimos en el capítulo 2.º Eran verdaderas cosas: su muerte y sus ofensas se redimian pagando el señalado precio, y sus señores demandaban y respondian por ellos en juicio. Unos eran personales y otros de la gleba, aunque desde el siglo xii empiezan á desaparecer los primeros

(1) Dozy, *Hist. des Musulmans d'Espagne*, t. 2, II, p. 39 cita á Maccari, t. 2, p. I.

y apenas se halla mención más que de los últimos. La mayor parte fundaba su estado en el nacimiento, por cuanto la esclavitud se transmitía como entre los romanos, por la generación. Algunos lo debían á contratos ó actos voluntarios, bien de enajenación de su libertad, como refugio contra la miseria, ó bien de matrimonio con persona esclava: otros habían caído en la esclavitud para redimir deudas procedentes de delitos ú obligaciones civiles; muchos, en fin, la sufrían como moros cautivos hechos en la guerra y su condición era aún más dura que la de los demás esclavos. Cada familia servil estaba perpétuamente destinada á uno ó más oficios mecánicos, que se transmitían de padres á hijos. Algunos de estos siervos no tenían más cargo que el de su oficio, y podían emplearse en utilidad propia, el tiempo que no necesitaban invertir en él: otros tenían obligación de hacer todo el servicio que les mandaba el señor. Entre los destinados al cultivo unos estaban adscriptos perpétuamente á la tierra, y otros trabajaban en ella á voluntad del señor. Podían adquirir bienes, pero no disponer de ellos, excepto los siervos fiscales, que podían dar la quinta parte á la iglesia. Muchos siervos personales aspiraban á ser adscriptos, á fin de no ser enajenados sino con la tierra que cultivaban, y solían conseguir aquella ventaja, bien por merced del señor ó bien por casarse con esclava adscripta.

Luégo los siervos adscriptos fueron convirtiéndose en verdaderos colonos, aunque forzosos, que cultivaban por su cuenta, dando al señor una parte del fruto, mayor ó menor, según el pacto ó la costumbre y otros tributos y servicios personales. Pero estos gravámenes y servicios eran respecto á unos fijos, y respecto á otros arbitrarios y á merced del señor. De esta diferencia resultaba otra muy señalada en la condición de los colonos. Ni unos ni otros, sin embargo, podían disponer de los bienes que adquirían sin consentimiento del señor, ni casarse sin su licencia y si lo hacían con sierva ajena, debían dividirse sus hijos entre los señores de ambos conyuges. Su manumisión se verificaba con patronato ó sin él. En el primer caso solía continuar el siervo en el servicio del señor, durante su vida, ó por cierto tiempo, sin disponer de su peculio, dando al señor alguna parte del producto de la tierra que cultivaba, lo cual constituía un derecho, que el mismo señor podía enajenar, y enajenaba á veces, sobre todo á favor de las iglesias. Los siervos de ésta no debían ser emancipados sino con la condición de quedar perpétuamente bajo su patronato, so pena de perder el peculio que tuviesen (1).

(1) En comprobación de lo que queda dicho sobre el estado de los siervos en las

De la trasformacion de gran número de esclavos personales en siervos de la gleba, de la fijacion y tasa de los tributos y servicios de muchos de ellos, de las manumisiones con patronato, y de la facilidad con que los mismos esclavos cristianos de las provincias musulmanas sacudian el yugo de sus señores, resultó un estado medio entre la libertad y la servidumbre, que fué el de la mayor parte de los hombres no libres durante la Edad Media. El influjo del cristianismo, y las ventajas necesariamente ofrecidas á los siervos que abandonaban las tierras enemigas ó venian á poblar los lugares fronterizos, aumentaban cada día el número de los emancipados. Una guerra civil sangrienta y casi permanente entre las varias razas musulmanas que poblaban la Peninsula en los siglos ix y x, además de la general con los cristianos del Norte, ofrecian á los esclavos ocasiones frecuentes de recobrar su libertad, ya tomando parte con los enemigos de su señor, ya desapareciendo en la destruccion y saqueo de los pueblos tomados á viva fuerza, y ya perdiéndose en los tumultos y revueltas, que ocurrían á cada paso en las ciudades y villas más populosas. Todos estos hombres que, ó no podían ocultar su origen servil, ó no ganaban nada con ocultarlo, porque no conocían otro modo de procurarse el sustento, que servir á algun señor con su persona ó su oficio, formaban una clase numerosa con los ya establecidos como siervos de la gleba, de donde salieron los que después se llamaron vasallos *solariegos*.

Los siervos de la gleba, que labrando á sus espensas, consiguieron tasar sus tributos y prestaciones, y hacer suyos los demás frutos de su trabajo; los libertos que al amparo de sus patronos cultivaban un pedazo de tierra con iguales condiciones; los esclavos fugitivos y los hombres libres, pobres y desamparados, que del mismo modo libraban su subsistencia en las faenas de la agricultura, formaban pues, con el nombre de solariegos la clase infima de los propietarios del suelo, si propiedad puede llamarse el derecho que la ley ó la costumbre les reconocia. Todos contribuian al señor cuya tierra labraban, con una porcion del fruto que producía y muchos, ó la mayor parte, con servicios personales: todos tambien tenían coartada su libertad personal y la facultad de disponer de sus bienes. Aquellos gravámenes y estas restricciones, exorbitantes y rigurosos al principio, fueron

provincias cristianas, puede consultarse el opúsculo de D. Tomás Muñoz y Romero, *Del estado de las personas en los reinos de Asturias y Leon*. En este excelente opúsculo se citan muchos diplomas y documentos que justifican nuestras aserciones, conforme en esta parte con las de aquel malogrado escritor, por lo cual escuso reproducirlos.

lentemente suavizándose y disminuyéndose, y este lento progreso del derecho y de la libertad del colono, á costa de la autoridad y del derecho del señor, es lo que constituye á la vez la historia de la propiedad y de las clases sociales durante la Edad Media.

Solariego, segun las Partidas «era ome que es poblado en suelo de otro» con sujecion ó pactos especiales convenidos entre ellos, ó á la costumbre general de la tierra (1). Todos pagaban como era justo, puesto que el suelo no les pertenecia, una renta por su disfrute, conocida con distintos nombres y de muy diversa cuantía, segun los lugares. Llamábase en unos *censo*, en otros *infurcion*, en otros *martiniega*, ó bien se dividia en varias porciones, que con estos diferentes nombres, pagaban todos los tributarios en distintos tiempos. El estado primitivo de este colonato consistia, al parecer, en no ser determinada y fija la participacion en frutos correspondientes al señor, sino arbitraria y á su voluntad. De ello ofrece un señalado ejemplo la escritura por la cual el conde Munio Nuñez, en 824, dió á cinco pobladores, con sus familias, el lugar de Brañosera, previniendo que los que de otras partes fuesen allí á poblar, no pagasen *anubda*, ni *vela de castillo*, pero «sí el tributo é infurcion, en cuanto pudieran, al conde que fuere en el reino» (*nisi dent tributum et infurcione quantum potuerint, ad comite qui fuerit in regno*) (2). Y como no serian los nuevos pobladores los que habian de fijar los límites de esta *posibilidad*, es claro que los condes que mandaran en el territorio, serian los que señalasen á su arbitrio la cuantía de la infurcion.

A esta clase de solariegos aludia sin duda la ley de las Córtes de Nájera, recopilada en el Fuero viejo de Castilla, segun la cual «el señor puede tomar el cuerpo é todo quanto en el mundo ha sin que él pueda decirse á fuero» á los solariegos que no fueran de los poblados en Castilla del Duero hasta Castilla la Vieja (3). De modo que segun esta ley, todos los solariegos, con exclusion de los del territorio indicado, eran de los que no tenian fuero que tasara sus tributos y fijara sus derechos, ó si lo tenian, era ineficaz, porque tanto sus bienes como sus personas estaban siempre á la merced del señor.

(1) L. 3, t. 25, Part. 4.^a

(2) Sandoval, *Cinco obispos*, p. 292.

(3) *Fuero viejo*, l. 1, t. 7, lib. 5.^o Esta ley es una de las 110 que comprendia dicho código, antes de su refundicion y publicacion en tiempo del rey D. Pedro, segun el código que con el título de *Ordenamiento de las Córtes de Nájera*, se conserva en la Biblioteca real de Madrid, Est. D. núm. 61.

Háse dudado de la autenticidad de esta ley por la escasa autoridad del código en que se halla y por la antinómia que resulta entre ella y otros muchos fueros municipales de los siglos xi y xii. Pero aunque fuera cosa averiguada que el Fuero viejo no tuvo nunca autoridad legal, que fué obra de persona privada y no anterior al siglo xiv, y que el prólogo que le precede es supuesto y apócrifo, todo esto no probaria que las leyes que contiene fueron inventadas por el compilador y mucho ménos las que evidentemente están tomadas, como la presente, del Ordenamiento de las Cortes de Nájera, que es el más antiguo de sus orígenes. Sólo demostrando que los códigos de este Ordenamiento, que subsisten, fueron todos falsificados é inventados por autores desconocidos, podria darse por probada la falsedad de las leyes que contienen, una de las cuales es la referida. Verdad es que muchos fueros municipales, que declaran el derecho de los solariegos á conservar sus solares mientras no hacian cosa por que debieran perderlos, ó á abandonarlos, y salir de la potestad de sus señores, no guardan conformidad con esta ley. Pero tal objecion se desvanece luégo teniendo en cuenta que la ley de Nájera siendo general, no tenia aplicacion sino como supletoria á falta de pactos ó privados convenios. Los solariegos estaban en primer lugar sujetos á las condiciones con que el señor les hubiera otorgado sus solares, y no habiéndolas á la costumbre de la tierra. Citanse muchos fueros y cartas-pueblas en que se concede á los vasallos la facultad de mudar de señor y de solar; pero justamente la repeticion con que se otorgaba esta ventaja es indicio seguro de que ó carecian de ella, ó por lo ménos no la tenían asegurada. Si esta hubiera sido la costumbre general de la tierra, si la libertad del solariego para dejar de serlo, hubiera sido un derecho reconocido é inconcuso, no se hubiera ofrecido como un favor y un estímulo á los nuevos pobladores. Así pues, la ley de Nájera es perfectamente conciliable con todos los documentos que se citan para contradecirla, sin dejar de ser auténtica. Quiere ella decir que en la parte de Castilla á que se refiere, y en la época remota de su promulgacion, era costumbre de la tierra, á falta de fuero ó postura en contrario, la de que los señores dispusieran, sin restriccion alguna, de la persona y bienes de sus solariegos, así como en las demás tierras del mismo reino tenia limitaciones ciertas aquel derecho. Sucedia, pues, en Castilla algo semejante á lo que pasaba en Aragon, donde al lado de colonos hasta cierto punto libres, por cuanto tenian derechos que limitaban los de sus señores, existian otros llamados de *signo servicio*, sobre los cuales ejercian los señores una *potestad tan absoluta* que les facultaba hasta para *matarles de hambre, de sed ó de frio*, segun se verá más adelante.

II.

LIBERTADES DE LOS SOLARIEGOS.

Entre estos solariegos y los antiguos siervos habia en verdad poca diferencia; pero su estado empezó á mejorar desde el siglo xi, y como precisamente desde entónces tambien abundan los documentos que tratan de ellos, no es extraño que sean más conocidos en esta situacion que en la precedente. Fijar la parte de frutos y los demás impuestos y servicios con que habian de contribuir al señor, era la aspiracion constante de todos los solariegos que cultivaban la tierra sin posturas ni condiciones estipuladas, y lo que por tanto era objeto de todos los fueros y cartas-pueblas con que los señores intentaban favorecerles. La cuantía de esta participacion del señor en los frutos de la tierra era al principio muy crecida: en reducirla consistió desde entónces la mejora del estado de los vasallos.

Alfonso II otorgó en 852 á favor de la iglesia de Lugo una escritura de donacion de varias tierras, y entre ellas, los villares de Cervaria y todo el valle de Aran, los cuales dice «habia poblado con *sus familias*» que nombra, y «la iglesia de San Juan de Parada con sus habitantes, así de su *familia*, como otros vecinos ó extraños, aunque partenecieran á los condados,» y añade que todos estos hombres no darian á la corona ningun censo, tributo ni servicio, pero que pagarian á la iglesia los obsequios legitimos y como censo la mitad de los frutos de las heredades que cultivaban de la misma iglesia, si así agradare á su prelado (1). Pero si en el siglo ix ó no eran todavia fijas las cargas de la propiedad solariega, ó se fijaban tan exorbitantes, en el x y en el xi se redujeron considerablemente. Fruminio, obispo de Leon, dió á su iglesia en 917 varias heredades, y entre ellas una villa con sus habitantes, los cuales habian de continuar prestando á dicha iglesia los mismos obsequios con que hasta entónces habian contribuido al donante y pagarle además en cada año doce panes de cebada y cierta cantidad de vino (2). Fernan Armentales, señor de Melgar de Suso y otras villas, señaló por infurcion á sus vecinos una fanega de trigo, otra de cebada, cuatro orzas de vino y un cerdo (3). Las córtes de Leon de 1020 redujeron el censo de los que tuvieran casa en solar ajeno, á diez panes de

(1) Huerta, *Anales de Galicia*, t. 2, apénd. escr. 20.

(2) *Esp. Sagr.*, t. 34, apénd. 11.

(3) Manuel, *Memor. Histor. de San Fernando*, p. 523.

trigo, media canatela de vino y un lomo. El fuero de Villavicencio, otorgado poco después, declaró libres á los siervos cristianos que se ampararan en el lugar y ejercieran ciertos oficios mecánicos, y fijó el mismo censo de Leon con poca diferencia (1). El fuero de Logroño de 1095, y otros muchos, que con él concuerdan en esta parte, después de eximir á los solariegos de varios tributos odiosos, redujeron á un sueldo anual el censo de cada casa. El fuero de Miranda de Ebro de 1099 ordenó pagar al señor que mandara por el rey en la villa, dos sueldos al año por cada casa y uno por cada heredad (2). Muchos solares y heredades de Vizcaya pagaban censo fijo al señor, y contribuyeron después con el colectivo de cien mil maravedis de pension, al cual quedaron al fin reducidos los antiguos tributos (3). Otras veces consistia el censo en una parte alicuota de los frutos, pero mucho menor que la señalada á los solariegos de las tierras que el obispo Fruminio dió á la Iglesia de Leon en el siglo ix. Léese en un documento de 1065, que otro prelado, de nombre Gomez, confirmó una carta de emancipacion, otorgada ántes por el rey García de Navarra, á los moradores de San Anacleto, diciendo que los donaba á la iglesia de San Martin, conservándoles su fuero, segun los habia comprado al rey D. Sancho, y que consistia en pagar el diezmo de los granos, de los ganados y de las gallinas (4).

Semejantes á estos eran casi todos los fueros de los siglos xii y xiii, otorgados para favorecer á los solariegos y promover la repoblacion de los lugares. Los más fijaban el que llamaban censo en cierto número de sueldos ó dineros, y la *infurcion* y la *martiniega* en cierta cantidad de granos, de vino, de carne ó un número de animales. Algunos mandaban pagar tantos censos cuantas fueran las fracciones en que se dividieran los solares, y reducen á uno solo el de los solares que se juntaran. Otros señalaban diferentes cuotas, segun el número de yuntas ó de aperos que tuviera el labrador, y aún habia alguno, como el de Pampliega, que eximia á los colonos de todo censo.

Juntamente con la fijacion y reduccion de estas cargas, progresaba la libertad del colono respecto al prédio y á su señor. No abandonar el solar y transmitirse con él, siendo como una parte integrante del mismo, era la ley comun de los siervos de la gleba, ó de los solariegos en su estado primitivo. Adegastro, al dar en 780 al monasterio de Obona varias heredades,

(1) Muñoz, *Colec. de fuer.*, p. 141.

(2) Llorente, *Prov. vascong.*, t. 3, núms. 81 y 82, y t. 4.º, núm. 137.

(3) *Fuer. de Vizc.*, l. 4, tit. 1.º y l. 2, tit. 30.

(4) *Docum. de las prov. vasc. y Cast.*, t. 6, núm. 23

con sus familias de *criacion*, mandó que éstas permanecieran siempre en sus prestimonios y servicios, y que no pudieran tomar otro señor, ni encomendero (1). Los solariegos de Castilla, á quienes el señor podia tomar el cuerpo y la hacienda, segun la ley de Najera ántes explicada, se hallaban en el mismo caso. Pero desde el siglo x, para favorecer y atraer á los colonos, se introdujo en la mayor parte de los fueros y cartas-pueblas la novedad importantísima de facultarles ya para mudar de señor, aunque perdiendo, en beneficio del antiguo, el todo ó parte de su hacienda, ó ya para enajenar sus heredades á otro vasallo del mismo señorío y cambiar su domicilio. Los que alcanzaban este favor quedaban así convertidos en colonos libres de derecho, por más que de hecho les hubiera de ser costoso el uso de su libertad. Pero al fin se rompió el vínculo que sujetaba perpétuamente el hombre á la tierra, ó por mejor decir, á otro hombre, por medio de la propiedad, y se reconoció el principio de que los descendientes de los antiguos esclavos tenían el derecho de emanciparse ó de elegir dueño, aunque fuese á costa de algun sacrificio.

Del mismo siglo x quedan algunos ejemplos de estas nuevas libertades. En la escritura de 917, ántes citada, en que el obispo de Leon, Fluminio dió á su iglesia varias heredades, fijando el censo de sus pobladores, reconoció á estos el derecho de mudar de domicilio, perdiendo el solar y la mitad de sus bienes en beneficio de la misma iglesia. En el siglo xi no sólo se declaró este derecho en multitud de fueros y privilegios, sino que se confirmó por leyes generales. Las Córtes de Leon de 1020 otorgaron á los solariegos la facultad de trasladarse de un señorío, á otro con la condicion de habitar la heredad solariega que hubiesen comprado; y si no querian habitarla deberian residir en cualquier villa libre, conservando entónces tan sólo la mitad de la heredad abandonada, con exclusion del solar y el huerto. Tambien declararon las mismas Córtes que los solariegos no podrian ser obligados á comenzar sus labores ni á vender sus casas, pero podrian enajenarlas voluntariamente, siempre que las apreciaran dos cristianos y dos judíos y se ofrecieran por la tasacion al dueño del solar, para que pudiera comprarlas con preferencia á cualquiera otro. Aún á los nobles y hombres de behetría podian enajenar los solariegos la mitad de sus heredades rústicas. Un derecho semejante reconoció á los solariegos de Castilla la ley de las Córtes de Najera, ántes citada. Segun ella, los solariegos de Castilla del Duero podian despoblar sus solares y buscar otro señor, sin que al

(1) *Esp. Sagr.*, t. 37, apénd. 5.

abandonarlos, tuviese este otro derecho que el de tomarles sus bienes muebles, si les aprendia fugitivos, y recuperar sus solares, y si les prendia despues ó causaba algun daño, el rey deberia castigarles. Además, cuando un solariego de señorío pasaba á tierra del rey, el señor jurisdiccional de la que procedia podia ocuparle el solar, y hasta que no trascurriese un año y un dia, no debia restituirlo al señor particular abandonado por el mismo solariego ó al que lo fuese divisero ó hereditario del lugar (1).

Estas leyes generales eran eco y expresion de multitud de fueros y costumbres locales que otorgaban la misma facultad. El de Villavicencio, citado ántes, permitia á los solariegos vender sus solares, aunque dando al señor el derecho de tanteo, y mandaba que nunca los perdieran por cualquier daño que causaran. El fuero de Sahagun de 1084 reconocia á los solariegos la misma facultad de vender sus solares á otros vasallos del monasterio (2). Los fueros de Logroño y de Miranda, comunicados á otras muchas poblaciones, declararon sin limitacion alguna la facultad de enajenar y aseguraron con la prescripcion, las heredades que los vecinos poseyeran tranquilamente año y dia. El fuero de Santa Cristina de 1062 facultaba á los vecinos para abandonar su casa y llevarse lo suyo dentro de ocho dias. El de Sepúlveda de 1076 les permitia mudar de señor cuando quisieran (3).

Los fueros del siglo XII, así los otorgados por el rey como por señores, reconocian por lo general las mismas libertades. El de Yanguas de 1045, consentia al vecino agraviado vender lo suyo y marcharse á otro lugar. El del Hospital de Santa María de Fuente de 1160, concedia la misma licencia al ofendido por el señor, permitiéndole llevarse lo suyo en el término de nueve dias y vender su casa á otro vecino ó llevarse el techo. Igual disposicion contenia el fuero de Pozuelos de 1197, que era tambien como el anterior, pueblo del señorío del monasterio de Sahagun (4). Los burgueses de este mismo monasterio, segun su fuero de 1152, con pagar una multa de 60 sueldos podian buscar otro señor (5). Lo mismo podian hacer, sin pena alguna, los pobladores del barrio de San Martin de Madrid, siempre que vendiesen sus casas al prior, su señor, ó á otro vecino, si aquel no la quisiese (6), y los de Castrotarafe, segun concordia que celebraron con el

(1) *Fuero Viejo*, leyes 1.^a, t. 7.^o y 2.^a, t. 1.^o, lib. 1.^o

(2) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 118.

(3) Muñoz, *Colec. de fueros*, págs. 222 y 281.

(4) *Idem id.*, pág. 135.

(5) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 168.

(6) Yepes, *Cron. de la órd. de S. Benito*, t. 4.^o, pág. 458.

maestre de Santiago (1). El obispo de Orense, señor del territorio, concedió á sus vasallos en 1155, por juro de heredad, todo lo que edificaran ó cultivaran, permitiéndoles venderlo á vecino que no fuese siervo, prócer ni realengo, si el prelado ó los canónigos no quisieran comprarlo, aunque con la obligacion de pagar en todo caso, un décimo del precio por laudemio (2). Tanto el fuero de Molina dado por su señor D. Manrique de Lara en 1154, como el de Haro concedido por Alfonso VIII en 1187, permitian á los respectivos pobladores ir donde quisieran, vendiendo sus casas y heredades sin ninguna limitacion (3).

Otros fueros, para evitar sin duda que aquellos á quienes se hacian repartos de tierras dejasen de poblarlas ó traficasen con ellas, en perjuicio del interés comun, señalaban un plazo más ó ménos largo, ordenando que hasta que trascurriese, no habian los pobladores de abandonar el lugar ni vender sus heredades ó edificios. El fuero de Escalona de 1150, el de Guadalajara de 1155, el de Madrigal de 1168 y el de Uclés de 1179 señalaban para ello un año de plazo; el de Murcia de 1266, cinco años; el del alcázar de Requena, diez años, y así otros, particularmente los del siglo xiii. Con estas limitaciones de la facultad de enajenar los solares, solia concurrir la prohibicion de hacerlo en favor de forasteros, de nobles é infanzones, de iglesias ú ordenes, ó de personas que no se sometieran al fuero del lugar.

Mas por comunes que tales libertades fuesen, todavía en el siglo xii y aún al principio del xiii, eran privilegios locales que sólo alcanzaban á determinados vasallos de los lugares respectivos, es decir, á los de los señores que otorgaban los fueros, porque los demás seguian sujetos á su ley, excepto en el territorio de Leon y en el de Castilla del Duero, á que eran aplicables las dos leyes ántes mencionadas. Así es que con estos fueros y leyes coincidian otros que mantenian el derecho antiguo en cuanto á la prohibicion de abandonar y enajenar los solares. Villafria y Orbaneja fueron dados por Fernando I en 1045 al monasterio de Cardena, con sus habitantes, diciéndole en la escritura que los villanos no venderian sus casas y heredades sin licencia del abad, pagando por ella el correspondiente laudemio, ni se pondrian bajo el dominio de otro señor (4).

(1) Muñoz, *Colec. de fueros*, pág. 484.

(2) Idem id., pág. 499.

(3) Llorente, *Prov. Vascong.*, t. 4.º, núms. 127 y 162.

(4) Berganza, *Antigüedades*, t. 2.º, escr. 85.

No son muchos en verdad los fueros escritos que contienen prescripciones semejantes, porque cuando tales documentos solían escribirse, era para conceder privilegios en contrario; pero en cambio varias leyes generales del siglo XII y principios del siguiente, recuerdan el primitivo derecho, que con tantas excepciones particulares, caía ya en desuso. Alfonso IX decía en las Cortes de Leon de 1188: «Prohibo que cualquiera que me haga »fuero por su heredad, la dé á otro hombre» (1). El mismo monarca, en otras Cortes, también de Leon, cuya fecha no es conocida, ordenaba que los solariegos (*serviciales*), que sin licencia del rey, hubieran pasado de los *casares* de éste á los de los señores y no volviesen á aquellos, perdieran todo cuanto tuviesen de la corona: que quien tuviera por vasallo á hombre del rey sin licencia de quien por él tuviese la tierra, incurriría en la multa de 100 maravedís; y que ninguno adquiriera solar de vasallo realengo, sin someterse á su fuero. Otras Cortes de la misma ciudad, celebradas en 1208, dispusieron que los vasallos de abadengo que pasaran á morar en villa realenga ó señorío, volvieran dentro de tres meses á sus solares ó los perdiesen en beneficio de sus señores (2). De modo, que el precepto absoluto de las Cortes de 1188 venía á derogar el de las de 1020, que permitía vender con más ó menos restricciones las heredades de los solariegos. Esto hubo tal vez de parecer injusto y violento y por eso se apresuraron á reformarlo las otras Cortes, sin derogar por completo, pero modificando también los derechos reconocidos á los solariegos en 1020, puesto que ántes podían estos cambiar de señor, sin perder todo lo que tuviesen del antiguo, y ahora ya no podían hacerlo sino con este sacrificio.

Reconocíanse, pues, en unos ó en otros de los fueros citados, dos clases de derechos que á veces estaban unidos y á veces separados: el de abandonar al señor perdiendo el solar, y el de vender el solar más ó menos libremente. Lugares había en que los solariegos disfrutaban tan sólo el primero de estos derechos, al paso que en otros gozaban de ambos. El de mudar de señor había llegado á considerarse como consecuencia necesaria de la libertad propia de todos los hombres no sujetos á legal servidumbre: el de enajenar se estimaba por gracia, que no debía alcanzarse sino á aquellos que lo hubiesen logrado de quien podía denegarlo, por su participación en el dominio de la cosa enajenable. Además, el primero de estos derechos

(1) "Defendo etiam quod nullus homo qui hereditatem habet, de qua mihi forum "faciat, non det ea alicui hominis" (Curia habita apud legionem sub Alphonso IX) 14, *Coleccion de Cortes de Castilla* publicadas por la Academia de la Historia, t. 1.º.

(2) Véanse unas y otras Cortes en la coleccion de la Academia citada, t. 1.º

era mucho más comun que el segundo, como que se apoyaba en leyes más generales. Por estas consideraciones, sin duda los autores de las Partidas al recopilar los fueros más usados en Leon y Castilla, reconocieron á los solariegos el derecho de abandonar sus solares, pero no el de enajenarlos. «Este a tal, dijeron del solariego, puede salir quando quiera de la heredad, con todas las cosas muebles que hi oviere, mas non puede enagenar aquel solar, nin demandar la mejoría que ai oviere fecha, mas debe fincar al señor cuyo es; pero si á la sazón que el solariego pobló aquel lugar, rescibió algunos maravedís del señor, ó ficiéron alguna postura de so uno, deben ser guardadas entre ellos, en la guisa que fueron puestas» (1).

Transaccion justa y prudente entre los diversos derechos que á la sazón regian en España fué la consignada en esta ley. Reconocióse en ella la libertad del solariego para disponer de su persona, como lo exigia el espíritu de civilizacion, contrario ya á toda servidumbre; y en vez de hacer casi imposible su uso, despojando al colono que la invocara, de todo cuanto habia adquirido, segun lo permitian ciertos fueros, daba lugar á que el vasallo trabajador y económico, que juntase un corto capital con que ayudarse después, pudiera establecerse por su cuenta ó buscar señor que le hiciera mejor partido. No permitia aquella ley enajenar los solares sin licencia del señor directo, porque reconocido su dominio, no era justo obligarle, contra su voluntad, á recibir por colono á quien disminuyera sus rendimientos; pero una vez disuelto el contrato que mediaba entre el señor y el solariego, y faltando su causa y objeto, no habia razon para que quien dejaba de ser vasallo, continuara disfrutando los bienes ó dineros que con el solar, hubiera recibido por razon del vasallaje. Sin embargo, esta transaccion fué más bien propuesta que realizada por el rey Sábio. Eran conformes con ella los fueros dados en la última mitad del siglo xiii y en todo el xiv; pero las Partidas no estaban aún en observancia, y cuando se ordenó por primera vez su promulgacion, fué modificando, entre otras, la ley referida.

Las Córtes de Alcalá de 1548, en su célebre Ordenamiento, reconocieron que el señor no podia tomar el solar á su vasallo mientras le pagara sus derechos, ni el vasallo venderlo sopena de confiscacion en beneficio del dueño; pero al mismo tiempo declararon que el solariego que desamparara su solar, no podria llevarse ningunos bienes, excepto cuando se trasladara á alguna behetría propia del mismo señor ó á otro cualquier

(1) L. 3, t. 25, Part. 4.^a

lugar por razon de matrimonio, y dejando poblado el solar antiguo, para que el señor no perdiera la infurcion ni los demás derechos (1). Con esto quedaba subsistente el impedimento gravísimo que las costumbres antiguas ofrecian á la libertad práctica de los solariegos, que con tanta razon, aunque sea prematuramente, habia intentado favorecer el Sábio legislador del siglo xiii. Todavía impusieron aquellas Córtes otra restriccion á la independencia de tales vasallos y que por cierto no he hallado consignada de un modo terminante en ninguna de las antiguas cartas-pueblas, aunque esto no sea motivo para dudar de su ejercicio. Tal era la de que todo cuanto un solariego adquiriese de otro ó de algun hidalgo, ó en montes no realengos ni abadengos, se tuviera como parte de su solar y como emanado de su señor, para todos los efectos del vasallaje.

No dice la ley si por estos bienes deberia pagarse tambien infurcion al señor de quien no procedian, por serlo del vasallo; pero, aunque así no fuese, lo cual es sólo dudoso, si tales bienes habian de *correr al señor*, como dice el texto, es claro que por lo ménos, se tendrian en cuenta para señalar la cuota de los demás tributos de los solariegos; que éstos prestarian por ellos homenaje y servicios al señor, y que los perderian siempre que incurriesen en la pena de perdimientos de bienes. Pero de cualquier modo que esto fuese, es indudable que la ley citada tenia por principal objeto asegurar más la dependencia de los vasallos solariegos respecto á sus señores, no permitiéndoles el uso del estado de hombres ingenuos, que pudiera darles la adquisicion de tierras exentas y libres.

Mas, como en compensacion de tales gravámenes, los legisladores de Alcalá favorecieron por otra parte á los solariegos, fijando las causas que únicamente podian dar lugar á la confiscacion de los solares y reconociéndoles, aunque de un modo indirecto, la facultad de enajenarlos á otros solariegos. Era este un derecho importante, consignado ya, segun se ha visto en multitud de fueros, mas no reconocido en las Partidas, y cuya declaracion por ley general, tan autorizada como las de aquellas Córtes, fué un verdadero progreso en el estado de los solariegos. Conforme á esta ley, no debian tales vasallos perder sus solares sino por algunas de las causas siguientes: 1.ª, cuando dejaran de pagar al señor la infurcion ó los demás derechos; 2.ª, cuando vendieran alguna cosa de su solar á hombre que no fuese solariego del mismo señor; 3.ª, cuando despoblase el solar. En este último caso, debia el señor dar el solar á otro de sus vasallos natura-

(1) *Ordenam. de Alcalá*, tít. 32, ley. 13 y 14.

les, y en su defecto, á quien no fuese de ellos, ó erigirlo en behetría. No dice esta ley que el solariego pudiera enajenar á otro que tambien lo fuese, todos sus solares sin licencia del señor; pero al eximir de confiscacion y de nulidad la enajenacion de *cosa de aquello que fuese del solar*, á favor de otro solariego, daba implícitamente licencia para verificarla, áun sin aquel permiso.

Estas disposiciones eran aplicables á todos los solariegos, ora fuesen de señorío particular, ora de behetría; pero, como la libertad que gozaban estos últimos en la eleccion de señor diera lugar á muchos abusos, la misma ley de Alcalá tuvo que prescribir el modo de evitarlos en cuanto al abandono de los solares. Cuando el señor de behetría agraviaba á su vasallo, exigiéndole tributos no acostumbrados, podia éste desvasallarse, pero no sin requerirle hasta tres veces para que enmendara el yerro; y si no lo hiciere, añade la ley, «saque el labrador la cabeza por una finiestra (ventana) de aquella casa en que mora, é traya testigos clérigos é fijosdalgo é le»
«gos, é diga que renuncia é se parte del sennorio de aquel que le fizo el»
«tuerto, é que se torna vasallo con todo lo que ha, de otro sennor, que sea»
«natural de aquella behetría, do es el solar en que el vive, é sea vasallo de»
«aquel á quien se torno, é el otro non sea osado de le facer mas danno.» Los vasallos de señorío no disfrutaban, al parecer, el mismo derecho, ni se desvasallaban con igual solemnidad, puesto que la ley no se refiere á ellos, y por lo tanto, debian buscar el remedio á sus agravios en los recursos de que trataré en otro capítulo. En algunos señoríos, sin embargo, era costumbre que el solariego anunciara su resolucion de partirse de su señor, tocando una campana para señalar el momento desde el cual debia contarse el plazo de nueve dias, en que habian de vender su solar y llevarse lo suyo (1).

Las causas señaladas en el Ordenamiento de Alcalá para privar á los solariegos de sus solares, eran las que ya venian establecidas desde el siglo xi en muchos fueros locales. El de Sahagun de 1084, imponia esta pena al vasallo que no poblara dentro de un año ó despoblara después, y al que no pagara su infurcion quando se le apremiara á ello, quitando á su casa la puerta y el techo, segun costumbre; el del Hospital de Carrion,

(1) Frey Pablos, comendador del hospital de D. Gonzalo de Carrion, en el fuero que dió á sus solariegos del lugar de Vega de doña Limpia, en 1302, decia: «Et el que quisiere desaseñorarse del nuestro señorío, que tanga la campana et que haya nueve dias á que venda el solar et á que lieve lo suyo.» (Muñoz, *Colec. de fueros*, pág. 137.)

de 1228, al solariego que no pagase la infurcion, la mañería y el homicidio que señalaba; el de Villaturde, de 1278, al que abandonaba su solar, y todos en general confiscaban el de cualquiera que cometiese ciertos delitos, particularmente los de traicion y aleve. Tambien castigaban con la misma pena algunos fueros al que enajenaba su solar sin licencia del señor. Todas estas leyes locales, cuya observancia trabajosa daba lugar á muchos abusos y vejaciones, se refundieron entónces en el Ordenamiento general y fueron como una garantía de los vasallos contra sus señores.

III.

TRIBUTOS Y SERVICIOS DE LOS SOLARIEGOS.

Pero no eran sólo las que van referidas todas las cargas que pesaban sobre los solariegos, que otras muchas aún hacian su suerte más rigorosa. Además de la infurcion ó censo y de la martiniega, de que he hablado, contribuian tales vasallos con los yantares, esto es, el hospedaje y manutencion del señor, cuando iba á posar en su casa, ó bien un tributo tasado en representacion de tal servicio. Fernan Armentales, en el fuero que, como señor, dió en 950 á Melgar de Suso, eximió de *hospedaje* á los clérigos, y á las viudas durante el primer año de viudez; lo cual es prueba inconcusa de que los demás vasallos debian contribuirle con este servicio (1). Fernando I, en 1062, eximió igualmente de él á los caballeros de Santa Cristina (2), y Alfonso VII, en 1135, á las viudas de Balbás (3). Los vecinos de Quintanilla de Osoña tenian tasado el yantar en ocho maravedís al año (4); los del concejo de Lena en 50 maravedís, 25 para el señor y otros 25 para el merino (5), y así en otros pueblos.

Los solariegos contribuian tambien al rey con el servicio de moneda, segun indiqué al tratar de las behetrias, porque, como dice una ley de Partida, en ellos «non ha el rey otro derecho ninguno si non solamente moneda» (6). Pagábase este tributo en reconocimiento de la soberanía del rey, aunque con excepciones por privilegios locales: consistia, segun las

(1) Muñoz, *Colec. de fuer.*, p. 27.

(2) Idem id., p. 222, not. 3.

(3) *Colec. de doc. de las prov. Vasc. y Castilla*, t. 6.º, p. 254.

(4) Muñoz, *Colec. de fuer.*, p. 136.

(5) *Colec. de doc.*, etc., t. 5.º, núm. 55.

(6) L. 3, t. 25, Part. 4.ª

Córtés de Palencia de 1286, en un diez por ciento de la cuantía ó caudal de los que poseían diez ó más maravedís, excluidas las ropas, y un cinco por ciento de las haciendas menores, pero que no bajasen de cinco maravedís, porque las de inferior cuantía se hallaban exentas de impuesto (1).

Pagaban además estos vasallos á su señor el tributo llamado *Mincio*, *Nuncio* ó *Luctuosa*, que consistía en un caballo, cabeza de ganado ó cantidad de dinero, segun los lugares. Esta contribucion se pagaba solamente cuando moría el cabeza de familia (2). Contribuían tambien muchos vasallos al tributo de *fonsadera*, contribucion de guerra que solía pesar sobre los que no iban á ella, aunque al parecer mucho más general entre los vasallos realengos que entre los solariegos. En los primeros siglos, al ménos, todos estaban sujetos además á la *mañería*, ó sea á la ley en cuya virtud heredaba el señor todos los bienes del vasallo que moría sin hijos. En algunos lugares contribuían asimismo los solariegos con el llamado *fumage* ó *fumalga*, que era tributo impuesto sobre cada una de las casas en que se encendía fuego. El lugar de Cardenaxemeno pagaba por este concepto cuatro sueldos y medio de cada casa (3). Aparte de estas contribuciones ordinarias, solían los señores exigir otras extraordinarias con el nombre de *pedido*, cuando alguna necesidad de aquella índole podía cohonestarlo. A veces se daba por fuero y privilegio á los vasallos, el de no imponer tales tributos sin su consentimiento (4). En algunos pueblos vino á ser el pedido un tributo ordinario á fuerza de repetirse su exaccion (5).

Con los nombres de *homicidios*, *rausos* y *calumnias*, percibían los señores las multas de los delitos que se cometían en sus términos, pagadas por los mismos delincuentes, y en su defecto por las villas de que eran ó se presumían que eran vecinos. Esta exaccion, que traía su origen de las costumbres germánicas, tenía por objeto interesar á los pueblos en la conservacion de la paz pública (6). Pero tanto llegó á abusarse de ella, que Alfonso VI tuvo que limitar la práctica de exigir estas multas á aquellas villas de las

(1) Véanse dichas Córtes, pet. 10.

(2) *Fuero Viejo*, l. 2, t. 3, lib. 1.º

(3) Saez, *Monedas de Enrique III*, pág. 382, 394, 432, da noticias circunstanciadas de estos tributos.

(4) D. Manrique de Lara, señor de Molina, dió por fuero á sus vasallos el de no pagar pedido más que una vez al año, y en el supuesto de que todos lo consintieran.

(5) Así sucedía en Palencia, donde el pedido era uno de los derechos ordinarios del obispo su señor.

(6) Berganza, *Antigüedades*, etc., t. 2, pág. 150.

cuales ni aún por las pruebas jurídicas del agua ó del fuego, ó del juramento, se podía justificar que fuesen la residencia del autor del delito (1). En muchos lugares era la mitad de estas multas para el señor del solar y la otra mitad para la corona (2); en algunos se partían entre el señor, el juez, los alcaldes, el concejo y el ofendido (3). Su cuantía variaba según las costumbres ó el fuero de cada pueblo (4), y aún había algunos que gozaban el privilegio de no pagarlas (5).

Otra de las cargas más pesadas de los solariegos era la del trabajo personal, conocida con los nombres de *facendera*, *serna* y otros. Los siervos, al mejorar su estado, convirtiéndose en colonos forzosos de determinadas heredades, solían quedar obligados, sin embargo, á servir al señor en lo que les mandara, sin más limitación que su prudente arbitrio. Así es que al dar Adegastro en 780 varias heredades al monasterio de Obona, previno que los hombres de *criacion*, que cedía con ellas, sirvieran al monasterio en cuanto les mandase, sin más derecho que el de ser mantenidos el tiempo que se ocuparan en su servicio. Después, cuando los colonos lograron alguna independencia, obtuvieron la fijación y determinación de estos servicios, así como, el alimento que habían de recibir del señor, cuando los prestasen. El conde Garci Fernandez, en el fuero de Castrojeriz, limitó el trabajo personal de sus vasallos á un día de barbechar, otro de sembrar y otro de segar (6). Fernando I al dar á San Pedro de Cardeña las villas de Villafria y Orbaneja, limitó los servicios de los colonos á labrar con bueyes, dos veces al mes las tierras del monasterio, y á traer á éste todos los años el vino de sus viñas y la madera de sus montes. D. Sancho el Mayor, al hacer puebla en Villanova, redujo la serna de sus collazos á dos días de arar y dos de cabar en cada año (7). El abad de Sahagun, en el fuero de Pozuelo de 1197, se reservó para sí un día de serna al mes, y dió á los dueños de heredades, sus vasallos, tres días de trabajo de campo y dos de vendimia, de sus particulares solariegos (8). Otros fueros eximieron de toda *facendera* ya

(1) *España Sagr.*, t. 35, p. 109.

(2) Cortes de Leon de 1020.

(3) Fuero de Molina de 1154.

(4) Los solariegos que D. Pedro Ruiz dió al hospital de Carrion en 1223 pagaban veinte sueldos por cada homicidio.

(5) Alfonso IX eximió de homicidio y rauso al lugar de Castroverde en 1197. Llorente, *Prov. Vasc.*, t. 4, núm. 189.

(6) Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 37.

(7) *Colec. de doc. de las Prov. Vasc. y Castilla*, t. 6, p. 220.

(8) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 208.

á los nuevos pobladores durante el primer año de su residencia, ya á los que no mantuvieran casa, y ya á los recién casados, á los clérigos y á las viudas en el primer año de su viudez (1). Después se convirtió en servicio con animales de labranza, el que algunos vasallos prestaban ántes con sus personas, ó bien se conmutó éste por una cantidad cierta de dinero, que se pagaba por repartimiento entre todos los contribuyentes (2).

Todavía se agregaban á estas, otras prestaciones personales, como el servicio militar, que será objeto de otro capítulo, las *velas* y *sobrevelas*, *rondas* y *escuchas*, que consistían en guardar los castillos de los pueblos ó sus avenidas, vigilando de día y de noche en ellos (3), trabajar en la reparación de sus murallas, sus puentes, sus caminos ó sus iglesias, y otras obras de pública utilidad que estaban á cargo de los señores. Agravaba además la condicion de los vasallos el monopolio, que en perjuicio de ellos, solían tener los señores de ciertas industrias ó del comercio de determinados artículos de primera necesidad, segun se ha visto en el capítulo VIII.

Pesaba, en fin, sobre los vasallos, además de otras vejaciones, que sería prolijo enumerar, la de no casar sus hijas sino á gusto y con licencia de sus señores. Este derecho era en su origen una consecuencia del dominio de aquellos sobre los hijos de sus colonos, al cual quedaban también sujetos los maridos de las hijas de estos. Así decía el fuero de León que quien casara con mujer de señorío debía servir por la heredad que ésta tuviese en él: y el Fuero Viejo declaró que la heredad libre de dueña hidalga se tornaría en tributaria cuando aquella se casase con hombre pechero (4). Habiendo, pues, de servir el marido al señor de su mujer, tenía éste un interés conocido en tales matrimonios, el cual se satisfizo reconociéndoles el derecho de casar á sus vasallas. Así es que en el Fuero Juzgo, traducido por orden de San Fernando, y dado por ley á muchas provincias, se disponía que «si el vasallo moriere e huviere fija é non fijo, la fija.... finque en poder del señor é que la dé por casamiento á home conveniente.»

Mas esta especie de servidumbre se redimió después con un tributo, que

(1) Fueros de Melgar de Suso de 950, de Palenzuela, de incierta fecha, de Ballas de 1135, de los mozarabes de Toledo de 1118, y otros varios.

(2) Carta de poblacion de Villaturde, dada por el comendador del hospital de don Gonzalo de Carrion en 1278. (Muñoz, *Colec. de fuer.*, p. 167.) *Esp. Sag.* 36, p. 67. El consejo de Lena redimió por 900 maravedis ánuos la facendera de manerías y otros tributos. (*Colec. de docum. de las Prov. Vas. y Castilla*, t. 5, núm. 55.)

(3) Saez, *Monedas de Enrique I*, p. 433.

(4) L. 17, t. 5, lib. 1.º



por la licencia de casarse, pagaban al señor las hijas de sus vasallos, el cual fué conocido con los nombres de *ossas*, *bessas* ó *bodas*. Por eso se dió por fuero y privilegio á muchos pueblos ya la fijacion y reduccion de este impuesto, y ya su exencion absoluta. El fuero que Fernando I dió á Santa Cristina en 1062, señaló á los vasallos por razon de *ossas*, medio maravedí para el rey y medio para el señor (1): el de Pozuelo, ántes citado, un sueldo para el abad de Sahagun, señor del territorio: el de Quintanilla de Osaña, dado por el comendador del hospital de Carrion en 1242, cuatro maravedís al señor y cuatro sueldos al merino (2): el nuevo de Santa Cristina, dado por Alfonso IX en 1212, mandó que la viuda que se casara diera por *ossas* el mejor de sus bueyes (3) y así otros muchos. Entre tanto los fueros de Llanes, Palenzuela, concejo de Lena y algunos otros, absolvian del tributo. Por último, D. Alfonso el Sábio lo abolió en las Córtes de Valladolid de 1258; pero no sin que quedara por muchos años el vivo recuerdo de aquella mala costumbre en la que tuvieron los reyes de ordenar el matrimonio forzoso de algunas mujeres con personas determinadas, puesto que reclamaron contra ella las Córtes de Madrid de 1539 y las de Alcalá de 1548.

Otras varias reliquias de su primitiva condicion servil conservaban aún los solariegos después de convertidos en colonos libres. Así es que no podian fiar á ningun hombre contra otro, como no fuese este judío, ó diera su licencia el señor, y cuando recibian agravio no podian querellarse á sus señores más de una vez (4). Las leyes no protegian su vida como la de los hidalgos. Alfonso XI en las Córtes de Alcalá de 1548 prohibió matar á los labradores que no se defendieran por armas, lo cual solia hacerse segun dice esta ley, ya por saña contra sus dueños, ya para espantar á los demás solariegos propios de los mismos y obligarles á dejar sus solares, acogiéndose á los del homicida. Y, sin embargo, tanto debió ser el poder de las antiguas ideas, que las Córtes no se atrevieron á castigar este crimen con otra pena que una multa de 6.000 maravedís, excepto en las tierras que tuvieran por fuero el de matar por justicia á quien mataba sin ella (5). Las *Ordenanzas viejas* de Toledo, por cuanto algunos solariegos dejaban de labrar sus solares, por tomar en arrendamiento otras tierras en lugares

(1) Muñoz, *Col. de fuer.* p. 222.

(2) Id., id. p. 136.

(3) *Bullarium Ord. Alcántara*, edic. de 1779, p. 204.

(4) *Fuero Viejo*, l. 4, t. 6, lib. 3.º, y l. 2, t. 7, lib.

(5) *Ordenamiento de Alcalá*, l. 26, t. 32.

que no pertenecian á sus señores, dispusieron que en tanto que estos tuviesen tierras que pudieran labrarse por renta, por vallasaje ó por terrazgo, no tomaran en arrendamiento los vasallos ningunas otras, so pena de perder lo que sembraran (1).

IV.

DE LA RECOMENDACION Ó INCOMUNION DE TIERRAS Y PERSONAS.

Mas es digno de notarse que á pesar de todas las cargas, menoscabos y vejaciones de los vasallos solariegos, solia ser preferible su condicion á la tristisima de los hombres libres de escasa fortuna, sobre todo, en los cinco primeros siglos de la monarquía castellana. Los que se llamaban hombres de otro renunciaban á su independencia y á muchos de sus derechos, pero ganaban en cambio un protector poderoso, que por interés y por obligacion, les amparase contra la fuerza y la violencia, ya que la autoridad del rey era impotente para mantener el orden y el respeto á las leyes. El hombre que se llamaba independiente, por no estar ligado á ninguno otro con los vínculos del vasallaje, no lo era sin embargo de hecho, como careciese de una clientela numerosa, capaz de defenderle de otras agrupaciones semejantes dispuestas á absorberle por la fuerza y á disputarse luégo entre si la presa. Quien no elegia señor á su gusto estaba siempre expuesto á tenerlo mal su grado y á perder su escasa hacienda y su peligrosa libertad.

El estado inseguro y precario de estas personas dió lugar á un nuevo género de vallasaje, nacido del contrato llamado de *recomendacion* ó *incomunion*. En su virtud, las familias libres, pero desamparadas y pobres, ó de fortuna escasa, entregaban sus cuerpos, y á veces su hacienda, á algun señor poderoso, iglesia ó monasterio, con promesa de servirle como vasallos en cambio de su patrocinio, y reservándose, ora el derecho de ser alimentadas y mantenidas á costa del mismo señor, ora una pension vitalicia, ó el usufructo temporal del todo ó parte de los mismos bienes cuya propiedad trasferian. De este modo proveian á su seguridad en cuanto era posible en tiempos de tanta violencia, y si el patrono á quien se encomendaban era eclesiástico, además de tener á su favor la inmunidad de la iglesia, conseguian los bienes y gracias espirituales ofrecidos á los cristianos, que contribuian con su hacienda al esplendor del culto. Guntino y su mujer Idlo, dieron á Fernando Didaz la mitad de ciertas heredades en 1051, di-

(1) *Cótes del reino*, t. 16. Colec. manuscrita.

ciendo en la escritura: «Os damos esto porque no podemos prestaros ser-
»vicio... y para que nos hagais bien y nos dispenseis de los trabajos peno-
»sos á que están sujetos otros hombres vuestros y nos asegureis las villas
»que nos dáis á poblar...» Pelayo, Genosinda, Emilo y Menindo dieron al
monasterio de Celanova en 1063 la mitad de ciertos bienes, diciendo en la
escritura que lo hacian «para obtener de vos defensa, proteccion y guarda»
(*ut habeamus de vos defensionem, et moderationem, et tuitionem*) (1).

Tenianse por más afortunados los que lograban encomendarse al rey ó
á algun príncipe de la familia real, como que podia ser más eficaz su pro-
teccion que la de los particulares. Entre otros muchos ejemplos de reco-
mendaciones de esta especie, puede citarse la estipulada en una escritura
de 1195, en que Alfonso IX de Leon dice: «Recibo en mi encomienda y
»defensa á Pedro Franco, canónigo de Astorga.... mi clérigo y vasallo: re-
»cibo en custodia su hósptal, que edificó en honor de Santo Tomás de
»Cantorbery..... con sus casas, heredades y demás bienes muebles é in-
»muebles que posee ó poseyere: eximo á dicho canónigo de pecho, pedido,
»fonsado, fonsadera y de todo fuero y facendera; aseguro al hospital contra
»toda fuerza ó despojo que se intentare hacerle, y prohibo la enajenacion de
»sus bienes» (2).

Las más frecuentes recomendaciones eran las que se hacian á la
iglesia, por cuanto eran ellas uno de los medios de que se servian los legos
para formar hermandad con los monges y participar de sus beneficios
temporales y espirituales. Pedro Braoliz y su mujer en 1170, dieron al
monasterio de Sahagun todas sus heredades con promesas de obediencia,
y el abad en cambio les concedió participacion en todos los beneficios de
la comunidad espirituales y corporales y alimento y vestido durante su
vida. Domingo, Juan y su mujer entregaron en 1240 sus personas y bienes
al mismo monasterio con la condicion de ser vestidos y alimentados
durante su vida con las ropas y manjares que menudamente señala la es-
critura, ofreciendo procurar en todo, el bien del convento, ir donde el
abad les mandase, y trabajar cuanto pudieran en su provecho (3).

Mas no siempre se hacian con fin lícito tales contratos, pues si unas
veces se otorgaban para librarse de fuerzas y despojos, ó para ganar la
vida eterna, otras no tenian más objeto que asegurar la impunidad de los

(1) Muñoz, *Del estado de las personas en los reinos de Asturias y Leon, etc.*, pá-
gina 45.

(2) *Esp. Sagr.*, t. 16, apénd. 33.

(3) Escalona, *Hist. de Sahag. escr.* 184 y 239.

delitos y burlar la acción legítima de la justicia. Muchos criminales, temerosos de la autoridad que les perseguía, ó de la venganza privada del ofendido, se entregaban con sus bienes al patrocinio del algún señor ó de algún pariente del agraviado con derecho á reclamar su castigo, y así ponían á salvo, no sólo sus personas, sino aún la hacienda usurpada ó mal adquirida. En ocasiones se entregaba el delincuente al mismo señor ó al rey que debía castigarle, á fin de aplacar su saña ó su justicia, y convertirle en protector solícito. Tal era la miserable condición de aquella sociedad desventurada: tan viciado estaba en ella el criterio de la conciencia: tan pervertido el sentimiento de la justicia. Unos vasallos de Gutierre Muñio, Arias Muñio y su hermana Munia, cometieron tres homicidios y arrancaron ciertos edictos fijados por la autoridad real: estos señores, «temiendo la ira del rey D. Alfonso y del conde D. Mendo,» que debían castigar aquellos delitos, dieron á uno y á otro los solares de los vasallos delincuentes con otros bienes, para que poseyesen sus rentas y obsequios, por juro de heredad, é hiciesen bien á los mismos vasallos, los cuales á su vez se obligaron á servir al rey y al conde con los propios solares y bienes mientras vivieran y á que por su muerte quedaran estos íntegramente suyos (1). En 1022 cometió adulterio un tal Altamiro con una prima suya, por lo cual Gontoi y Senda, padres del delincuente, dieron á Vimara Kagitiz la mitad de cierta heredad y unas casas de su pertenencia, para que les protegiese contra cualquiera que intentara perseguirles en juicio; y Vimara las aceptó obligándose á mantenerles á salvo de toda molestia, protegerles y defenderles de palabra y de obra y con sus consejos, y á dejarles en *tenencia* (*ad perhabendum*) durante su vida, la mitad de la heredad cedida (2). En otros muchos casos no se estipulaba expresamente tal protección contra la justicia, por no ser quizá los delitos tan notorios; mas ya era sabido que el señor debía amparar siempre á su vasallo, y defender lo suyo, y esto era bastante para que procurase hacerlo en todas circunstancias, por el interés de utilizarse del uno y de conservar lo otro.

Las recomendaciones fueron cayendo en desuso á medida que la autoridad pública cobró fuerza, y desaparecieron cuando la dependencia inmediata del rey ó la vecindad en las villas y concejos libres fué un estado más seguro que el del vasallaje solariego. Los reyes para aumentar y consolidar su potestad, y los señores para mantener la suya, entraron en com-

(1) Muñoz, *Del estado de las personas*, etc., p. 45.

(2) Id., id.

petencia á fin de atraer vasallos, ofreciendo cada cual ventajas á los suyos y procurando quitarlos á los otros. Las ventajas más codiciadas eran la independencia personal y la reduccion de los tributos, de lo cual resultó que como el rey era el señor más poderoso del reino, y el que más libertad á ménos costa podia ofrecer á sus vasallos, los señores fueron vencidos en la contienda, y aquellos crecieron en número, mejorando á la vez su estado como hombres y como propietarios. Así en los siglos xiv y xv, léjos de recomendarse al patrocinio de los señores las personas libres, entregándoles su cuerpo y su hacienda, los solariegos usando del derecho que la ley les reconocia, abandonaban á sus señores para disfrutar en las villas y ciudades realengas las franquezas y libertades ofrecidas á los vasallos de la corona.

Las peticiones y acuerdos de las Córtes en aquellos siglos dan á conocer demasiado la lucha empeñada entre la corona y los señores, para aumentar respectivamente el número de sus vasallos. Habíase ántes dispuesto que los de realengo que pasaran á algun señorío, se obligaran con fianza á morar cierto número de años en la tierra del señor; pero D. Fernando IV, á peticion de las Córtes de Valladolid de 1307, mandó que no valieran estas obligaciones, y que á pesar de ellas, pudieran tales vasallos volver por su voluntad al realengo. Para facilitar el tránsito á tierras de esta especie á los demás vasallos, pidieron las Córtes de Valladolid de 1325 que los de abadengo que lo verificasen, no perdieran sus bienes muebles ni raices, y que pudieran continuar labrando ó vender las tierras que dejaran en el mismo abadengo; y D. Alfonso XI mandó que se hiciese así, siempre que tales vasallos no omitiesen pagar á la iglesia de que procedieran estas tierras, sus derechos foreros. Con cuya providencia desapareció respecto á los vasallos de abadengo el principal obstáculo que embarazaba de hecho el ejercicio de su libertad. Las Córtes de Valladolid de 1331 se quejaron de que algunos señores, desconociendo el derecho de sus vasallos para mudar de domicilio, conservando los solares que abandonaban, mediante el pago de la infurcion, les tomaban los solares, so pretexto de que no moraban en ellos; y el rey D. Pedro mandó proveer en justicia cuando se querellaran los agraviados. Las mismas Córtes reclamaron contra los labradores de realengo y de abadengo que se hacian vasallos de hombres poderosos, para excusar los pechos, y el rey mandó que no valiese tal vasallaje. Otras Córtes de Valladolid de 1385 pidieron remedio al abuso que cometian algunos señores gravando con tributos insoportables los bienes que dejaban los vasallos que iban á morar á otros lugares, cuando no osa-

ban ocuparlos paladinamente. Pero como algunos señores se esforzaran en prometer grandes ventajas á los vasallos, y hubiese pueblos de realengo donde no eran estos, sin embargo, bien tratados, las Córtes de Burgos de 1430 se quejaron de que muchos vasallos de realengo pasaban todavía á pueblos de señorío; y entónces mandó el rey que los que tal cosa habían hecho desde el año anterior ó hicieran en lo sucesivo, pagaran por los bienes que habían dejado ó dejaran en el realengo, pedidos, monedas y todos los demás pechos. Así fué reduciéndose el número de los vasallos solariegos y mejorándose la condicion de todas las propiedades tributarias, hasta convertirse en propiedades de juro de heredad, gravadas con ciertos censos ó cargas, en dinero ó frutos, únicas reliquias de su estado primitivo.

CAPITULO IX

Del servicio militar de los propietarios de tierras.

Conocidas ya todas las clases de propiedad que existian en Castilla, cúpleme averiguar ahora si concurrían en ellas las cualidades distintivas de la propiedad feudal, segun se hallaba ésta organizada en Europa. Ya he indicado en el capítulo primero que estas cualidades eran: 1.^a la obligacion del propietario al servicio militar; 2.^a la jurisdiccion del dueño superior de la tierra sobre los hombres que vivian en ella; 3.^a las restricciones de la facultad de enajenarla en beneficio del Estado ó de las familias. Al exponer en los capítulos precedentes la condicion de todos los partícipes en el dominio de la tierra, no he podido omitir algunas indicaciones alusivas á esta materia, porque lo exigía la claridad del asunto allí tratado; pero ahora la daré á conocer más á fondo y con todos sus pormenores, y así quedará más completa la descripcion de la propiedad territorial en España durante la Edad Media.

Restablecida en lo posible la legislacion visigoda en los reinos de Astúrias y de Leon debia considerarse el servicio militar en los nobles como obligacion propia de su estado, y en los clientes, libertos, colonos y siervos fiscales como condicion de las tierras y de las otras donaciones recibidas de los señores ó de la corona. Pero la menguada autoridad de los primeros monarcas, la escasez de sus recursos y la nueva situacion de los cristianos de Astúrias, no permitian organizar desde luego los servicios públicos con la regularidad prescrita en las leyes visigodas. Los romanos y los godos,

absueltos de todo vínculo con la extinguida monarquía, intentaron formar otra nueva con las pocas reliquias que de aquella quedaban, pero al hacerlo no podían ménos de tener en cuenta un elemento novísimo, que debía prevalecer en sus instituciones, el carácter voluntario de la nueva sociedad. Porque habiendo para los cristianos dos estados posibles, el de súbditos de los emires de Córdoba, y el de vasallos de los monarcas de Astúrias, y pudiendo elegir entre ambos, natural era que al optar por este último, se reservaran algunas ventajas que no tenían bajo la dominacion visigoda.

Siendo la de Astúrias una monarquía guerrera, consagrada casi exclusivamente á libertar el territorio del imperio de sus conquistadores, era consecuencia natural que todos los que se asociáran á ella lo hiciesen con la condicion implicita de servir las armas, bajo la direccion de su jefe. Para satisfacer esta necesidad podian aplicarse las leyes de Wamba que mandaban acudir á la hueste á todos los hombres libres capaces de servir en ella, siempre que el rey la convocase: pero esta obligacion, mucho más gravosa en el estado de guerra permanente en que se hallaba la nueva monarquía, necesitaba mayores recompensas y galardones más señalados. Los reyes asturianos no tenían para darlos las riquezas de los monarcas godos, pero en cambio se ofrecian á su vista vastos territorios que conquistar y los ricos despojos del enemigo; por lo que recordando sin duda que los clientes, los libertos y los siervos fiscales en la antigua monarquía, poseian tierras y otros bienes de la corona ó de los señores, con la obligacion de servirles en la guerra, extendieron esta costumbre á las clases superiores del Estado. De este modo, sin renunciar á aquel antiguo y comun deber, un tanto indefinido respecto á la generalidad de los súbditos de la corona, procuraron los nuevos monarcas asentarlos en relaciones más íntimas y eficaces, confiriendo á sus vasallos el dominio de muchas tierras conquistadas con una parte de los demás despojos del enemigo, fundando tales mercedes una obligacion de servir en la guerra, más estrecha y determinada que la general inherente al estado de los meros súbditos. Dividieron, pues, con sus vasallos, además del botin, los nuevos territorios, dándoles parte en ellos ya en propiedad absoluta, ya en prestimonio, mandacion ó encomienda; pero siempre con la condicion precisa de acudir á la hueste, como consecuencia necesaria del nuevo vínculo de vasallaje, que por efecto de tales adquisiciones, se establecia entre el monarca y el súbdito. Y como, segun hemos visto, la mayor parte de las nuevas propiedades emanaban inmediata ó mediatamente de la corona, las más de las tierras apropiadas por particulares debian llevar consigo aquella obligacion.

La de dar *tierras* á los vasallos no era obligacion estrictamente legal de la corona en Castilla, como lo era la de repartir entre ellos las cuatro quintas partes de los despojos del enemigo; pero estaba tan recomendado el uso de aquellas mercedes por las mismas leyes, y se practicaba tan constantemente, que tenia la fuerza de una inveterada costumbre. Los servicios extraordinarios, como aprehender al caudillo enemigo ó librar la persona del rey ó señor en una batalla, exigian forzosamente galardón señalado en tierras ó rentas con que el vasallo pudiera «siempre vevir honradamente» (1). Tambien debian obtener una recompensa semejante los tres combatientes que primero entraban en villa ó castillo cercado. Pero además era costumbre recibida, que recopiló en su código D. Alonso el Sábio, la de que el rey «á los que le ayudaren á ser heredado en lo de sus enemigos, puedelos heredar de mayores heredamientos et de mejores, et franqueallos tambien en las heredades que son de los otros en su señorío como en las de su realengo» (2), y la historia testifica, en efecto, cómo usaron y aún abusaron los reyes de este derecho, dando heredades y tierras en lo reconquistado del enemigo, no sólo á los que habian ayudado á ganarlo, sino á otros muchos que ningun servicio señalado prestaron en la guerra.

Daba el rey todos aquellos bienes en *heredamiento*, ó *en tierra*, ú honor, que eran segun se ha visto en otro lugar, los tres modos de poseer las cosas del reino, ó que no pertenecian libremente al rey. Cualquiera de estos títulos con que la merced se hiciese, constituia al agraciado en vasallo, y por lo tanto le imponia la obligacion del servicio militar, no como la tenian todos los naturales por serlo, sino como era propia de todos los que recibian de la corona algun beneficio. Hé aquí cómo el dominio territorial de todas clases emanado de la corona, que con el tiempo vino á ser el de la mayor parte de las tierras del reino, era base y fundamento del servicio militar, y por consiguiente el vínculo más poderoso del Estado en una sociedad esencialmente guerrera.

Las mismas relaciones que la propiedad creaba entre la corona y sus vasallos inmediatos, se establecieron luego entre estos y sus vasallos particulares. Los hidalgos y caballeros á quienes el rey galardonaba para sujetarlos á su servicio, necesitaron atraer al suyo á otros hombres que cultivarían sus tierras y las defendieran mediante una participacion en sus productos, ó recompensas señaladas. Y como eran vasallos «todos los que re-

(1) L. 4, t. 27, Part. 2.^a

(2) L. 6, t. 27, Part. 4.^a

«cibian honra et bienfecho de los señores, así como caballeria, ó *tierra*, ó «dineros por servicios señalados que les hayan de fazer,» y los vasallos debían entre otras cosas «servir lealmente á los señores por el bienfecho que «resciben dellos» (1), todos los partícipes en el dominio y disposicion de la tierra quedaron obligados por este concepto á servir en la hueste.

Tenian tambien una obligacion semejante los meros *naturales*, es decir, los que vivian en tierra del rey ó heredamiento de señor, sin recibir de él ninguna merced especial; pero su servicio era más limitado que el de los otros vasallos. Estos eran hombres de su señor, estaban enteramente á su mandato y debian seguirle en toda clase de expediciones militares, so pena de perder cuanto de él hubieran recibido. Los naturales debian forzosa-mente tomar las armas cuando ocurría levantamiento ó incursion de enemigos en el reino, ó asedio de castillo, y tambien cuando eran convocados para dar alguna batalla campal ó sitiar alguna fortaleza fuera del reino; pero si el rey convocaba á los suyos para invadir en algarada y dañar la tierra enemiga, no era, al parecer, obligatoria la asistencia, sino para aquellos que hubiesen recibido beneficios de la corona, puesto que el llamamiento debia hacerse segun la ley, á fin de que concurrieran *los que tienen por bien*, y la falta habia de castigarse con la pérdida de los beneficios recibidos (2).

Mas la principal diferencia entre naturales y vasallos respecto al servicio militar, consistia al principio en su remuneracion y despues en las varias restricciones con que costumbres generales ó privilegios locales lo limitaron. En los primeros siglos de la monarquía hubieron de servir á su costa y sin soldada tres dias á lo ménos los naturales que no poseian tierras ni heredamientos de la corona. Así resulta no sólo de memorias antiguas, cuya autenticidad pudiera no estar bien averiguada, sino de los primitivos fueros, en que se daba por privilegio y favor á los hidalgos, el no servir sin soldada del rey ó señor. El conde soberano de Castilla D. Sancho García fué, segun una memoria antigua del monasterio de Oña, quien primero concedió á los nobles el beneficio de no servir á sus expensas (3), mas si esto no fuese prueba bastante de haber sido anteriormente gratuito el servicio de los hidalgos, que no tenian tierras de la corona, la suministrarían muy cumplida muchos fueros locales. El de Castrojeriz dado por

(1) Leyes 1 y 6, t. 25, Part. 4.^a

(2) Leyes 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, t. 19, Part. 2.^a

(3) Berganza, *Antigüedades*, Part. 1.^a lib. 4, c. 16.

el conde de Castilla Garci Fernandez, padre de D. Sancho y confirmado despues por éste, permitia al caballero que no tuviese prestimonio ó tierra no ir á la hueste sin que el merino le proveyera de todo lo necesario, y limitaba este servicio á las dos terceras partes de los peones hábiles (1). El fuero de Nájera dado por D. Sancho el mayor en 1001, ordenaba que los infanzones recibieran por sus salidas á campaña doble soldada que los peones (2). El de Jaca, otorgado en 1090, y extendido á muchos pueblos de la provincia de Guipúzcoa, decia dirigiéndose no sólo á los hidalgos, sino á todo el comun de vecinos: «No vayais á la hueste sino con comida para tres dias, y cuando la lid sea campal ó esté el rey cercado por enemigos» (3). Segun el fuero general de Vizcaya se debia ir en hueste con el señor, sin soldada, sólo hasta el árbol Malato en Lujanedo, pues no podia exigirse de los vasallos que pasaran adelante sin anticiparles dos ó tres meses de sueldo, segun que hubieran ó no de atravesar los puertos (4). Alfonso IX concedió á los caballeros de Castroverde en 1197 por las siete cabalgadas que podrian hacer en el año siete pares de calzas, dos espuelas y sendos mantos de color (5). El fuero de Haro dado por Alfonso VIII en 1187, concedió á los caballeros el derecho de no ir al fonsado sin el debido estipendio (6). De todo lo cual se infiere que la ley del conde de Castilla don Sancho, si existió no se observaba en todas partes, puesto que todavia en el siglo XII se otorgaba por privilegio, ó más bien que en este punto como en tantos otros, eran varias y muy diversas las costumbres.

Peero con el tiempo no sólo se dió soldada á los que no tenian tierra, sino tambien á muchos que la disfrutaban. Así se infiere del pasaje de la crónica de D. Alfonso X, en que se dice que aunque en aquel tiempo cada uno iba á servir por lo que tenia de la corona, ordenó el rey hacer alardes en la Extremadura y que «cualquier ome que mantuviere caballo é armas fuese excusado de la martiniega y fonsaderas y eximiese de los mismos tributos á sus paniaguados, quedando todos sujetos por ello á servir sin más estipendio tres meses en la frontera, siempre que el rey los llamase (7).

(1) «Caballero de Castro qui non tenuerit prestamo, non vadat ni fonsado, nisi de-derit ei espensas et sarcano illo merino.» Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 37.

(2) Muñoz, *Colec. de fuer.*, p. 287.

(3) Llorente, *Prov. Vasc.* t. 3, n. 74.

(4) *Fuero de Vizcaya*, l. 4, t. 1.

(5) Llorente, *Prov. Vasc.* t. 4, n. 189.

(6) *Idem id.*, t. 4, n. 171.

(7) Crón. de Alf. X, c. 12.

También refiere la crónica de D. Sancho IV, una frase de este rey en el mismo sentido cuando dijo á Nuño Gonzalez «¿sodes mi vasallo? ¿Tenedes buena tierra é buena soldada?» á lo cual respondió Nuño afirmativamente (1). Sin embargo, no hubo esta costumbre de generalizarse á todo el reino, puesto que D. Alfonso XI, al fijar en las Córtes de Búrgos de 1338 las soldadas y los servicios que por ellas habian de prestar los vasallos, declaró que su ordenamiento no era aplicable á los de la frontera, que no recibian soldada en dinero y debian servir por la *tierra* que disfrutaban.

Aun habia mayor variedad en cuanto á las restricciones que desde muy antiguo tasaban y limitaban este servicio. Habia comarcas que estaban exentas de él absolutamente, como la de Santa Juliana, segun su fuero de 1045 (2), la de Sahagun, por privilegio de 1078 (3), Santa Cristina, por su fuero de 1062 (4), los nobles de Miranda de Ebro, por privilegio de 1147 (5) y otros varios pueblos (6). Mas en el siglo XIV debieron caer en desuso estos privilegios, puesto que habiendo pedido su confirmacion de 1345 las Córtes de Búrgos, D. Alfonso XI léjos de otorgarla, declaró la nulidad de todos los concedidos por sus antecesores, fundándose en que «quanto al fonsado todos son tenudos de ir con nusco... é que non lo pue-» de quitar un rey por otro;» y sólo prometió guardar las exenciones de esta especie que él mismo hubiera concedido, si se justificaban. Esta doctrina hubo al fin de prevalecer en la práctica y con ella concluyeron casi por completo los privilegios ántes referidos.

Era muy comun en las cartas-pueblas la condicion de no haberse de exigir el servicio de hueste á los vecinos, más que cuando el rey en persona saliese á campaña ó convocase á lid campal, ó estuviese cercado, ó se pusiese asedio á alguno de sus castillos. Así lo disponian los fueros y privilegios de Nájera, Sahagun, Jaca, Vizcaya, Puebla de Arganzon, Búrgos, Oviedo, Santander, Vitoria y otros varios (7). Muchos fueros limitaban á

(1) Crón. de Sancho IV, c. 7.

(2) *Colec. de doc. de las Prov. Vasc. y Castilla*, t. 5, n. 4.

(3) *Idem id.*, t. 5, n. 6.

(4) Muñoz, *Colec. de fueros*, pág. 222.

(5) *Colec. de doc. de las Prov. etc.* t. 5, n. 15.

(6) Entre ellos pueden citarse además San Sebastian por fuero de 1180, Entrena por privilegio de 1218: el consejo de Amaya por privilegio de 1221 y otras varias comarcas.

(7) Véase el fuero de la Puebla de Arganzon en la *Colec. de doc. de las Prov. Vasc. y Castilla* t. 5, n. 26; el de Santander en *Llorente, Prov. Vasc.* t. 4, núm. 73 y los demás en las colecciones ántes citadas.

tres dias cada servicio, como el de Sahagun de 1084 y el de Búrgos de 1124: otros á un servicio cada año, como el de los Mazárabes de Toledo de 1118, y el de Alicante de 1252: ó á un tercio ó dos de los vecinos hábiles para tomar las armas, como el de Guadalajara de 1133 y el de Uclés de 1179: y otros á territorio determinado ó el que pudiera recorrerse dos veces en un dia, como el de Durango de 1180 y el de Riva de Sil de 1225 (1).

Mas es de advertir que todas estas limitaciones de la obligacion de servir las armas solian entenderse con los naturales, que no tenian tierras, honores ó feudos de la corona ó del señor, con carga de vasallaje especial y servicios determinados. Tales privilegios consistieron en no prestar aquel servicio á pesar de ser los privilegiados naturales del rey, y de haber recibido de él para poblarlos, los lugares donde moraban, por cuyos dos motivos deberian quedar sujetos á aquella obligacion. Pero los que además tenian tierras en el sentido estricto de esta palabra, es decir, como soldada y remuneracion de su servicio, ó feudos ú honores que tambien obligaban á prestarlo, no creo que quedaran excusados de hacerlo, como no lo fuesen de un modo especial y determinado.

CAPITULO X

La jurisdiccion como fruto de la propiedad.

I.

CLASES Y GRADOS DE JURISDICCION OTORGADOS CON EL DOMINIO.

Tambien se halla en la propiedad territorial de Castilla otro de los caractéres distintivos de la feudal, el de ser inherente á ella una parte mayor ó menor de la jurisdiccion y potestad públicas. Al exami-

(1) Fuero de Búrgos en Muñoz, *Col. de fueros* p. 266. Privil. de Alicante en *Col. de doc. de las prov. Vasc.* etc. t. 6, n. 257. Fuero de Guadalajara, en Muñoz, *obr. cit.* p. 507. Fuero de Uclés en Llorente, *prov. Vasc.* t. 4, núm. 159. Fuero de Durango en Llorente id. t. 4, núm. 161. Fuero de Riva de Sil en *Col. de doc.* cit. t. 5, núm. 39.

nar los diferentes títulos con que la corona solia enajenar sus tierras, observamos cuán frecuentemente lo hacia con renuncia de su autoridad y de casi todos los derechos que gozaba en ellas. Ahora debo añadir, que tal costumbre no debe atribuirse á mero capricho de los principes ni á extravío de las ideas reinantes: tampoco se debió exclusivamente á la necesidad de proveer de gobierno inmediato á muchos lugares, á donde no alcanzaba la débil accion del supremo. Esta última circunstancia contribuyó mucho sin duda á juntar el dominio con la jurisdiccion; pero la que más hubo de influir en ello, fué el estado económico de la propiedad territorial. Con una poblacion escasa, aglomerada en las alturas de las montañas, al amparo de sus castillos y que apenas podia cultivar las tierras más inmediatas á ellos, ¿qué valor habian de tener las otras incultas ó lejanas, que no podian beneficiarse sino con grave riesgo del capital que se emplease en ellas y tal vez de la vida de los colonos? No habia brazos, ni capital, ni seguridad suficientes para poner en cultivo todas las tierras sujetas más ó ménos eficazmente á los cristianos, y cumpliéndose en ellas la ley económica de la renta, no podian producirla las tierras de última clase, entre las cuales debian contarse todas las incultas, y todas las que por hallarse lejanas de las villas y fortalezas, no se podian cultivar sin peligro. Asi es, que estas tierras se hallaban siempre á la disposicion del primer ocupante, que con licencia del rey ó sin ella, la tomaba por *presura*, como en efecto lo hicieron tantos, segun consta de los antiguos documentos en otro lugar mencionados.

Tierras que por si mismas, é independientemente del trabajo y del capital empleado en ellas, no producian renta, no podian tener valor alguno, no representaban ninguna riqueza. Para que valiesen algo, era necesario agregarles alguna parte al ménos del capital de produccion, como instrumentos ó aperos de labranza ú hombres que con sus brazos, sus utensilios y su industria pudieran y debieran cultivarlas. Asi es que cuando se enajenaban tales tierras se entendian comprendidas en ellas todos éstos adherentes, cuyo valor era el que en realidad venia á trasmitirse. Y como los reyes y señores no hacian donaciones de cosas inútiles, porque ni habrian cumplido su objeto, ni las hubieran aceptado sus vasallos, eran frecuentísimas las mercedes de tierras con los hombres, colonos ó habitantes, que les daban valor. Las que se daban sin ellos eran generalmente las que estando ya en fácil y abundante cultivo, solian estimarse como de primera ó segunda calidad y podian por sí mismas producir alguna renta.

Los hombres que se daban con las tierras no habrian tenido tampoco

valor alguno, si como colonos libres, hubiesen podido á su arbitrio trabajar ó no en ellas ó hacerlo mediante la retribucion que ellos fijasen segun el precio comun de los jornales. Dar colonos era, pues, transmitir á otro el derecho de recoger el fruto del trabajo forzoso de ciertos hombres, prestado á voluntad del propietario, y con menor retribucion que la del trabajo libre. Este derecho supone en quien lo ejerce dominio y potestad sobre aquellos hombres, pues no de otro modo habria seguridad de hacerles producir y mantener con sus obras el valor de las tierras adquiridas. El dominio y la potestad sobre los hombres, para el efecto de obligarles al trabajo, conducia naturalmente al de mantenerles en paz, corregirlos, defenderlos, ampararlos, obteniendo los provechos consiguientes á estos beneficios, segun las costumbres de la época. De aquí el darse las tierras no sólo con la potestad necesaria sobre sus colonos para obligarles á hacerlas producir del modo más adecuado, sino tambien con imperio y jurisdiccion en ellos y los emolumentos consiguientes al ejercicio de esta autoridad, como lo eran en la Edad Media las multas y los impuestos debidos al soberano por razon de gobierno. De este modo, por consecuencia rigurosa de la necesidad de dar las tierras sin valor, con hombres que se lo prestasen, vino á ser circunstancia inherente al dominio de gran parte de ellas el ejercicio de la potestad pública, más ó ménos limitada, segun la participacion que en la misma tenia á bien reservarse el soberano. Rara vez la confirió toda, como se verá luego, pero la inmediata y local sobre los vasallos de las tierras que enajenaba, iba casi siempre unida al dominio de las mismas tierras, sobre todo, en los primeros siglos de la monarquía castellana.

Daba, pues, el rey tierras con jurisdiccion así á los hidalgos y caballeros, como á las iglesias y monasterios. Unas veces era la tierra lo principal y la jurisdiccion lo accesorio, y otras sucedia lo contrario. Verificábase lo primero, cuando se daban villas ó heredades por juro de heredad, en *tierra* ó en *honor* ó *feudo*; tenia lugar lo segundo cuando se daban aquellas en *encomienda*, en *prestimonio* ó *préstamo*, ó en *mandacion* ó *señorío*; pues con la potestad que el soberano delegaba, se entendia por tales títulos conferido el derecho á disponer de los terrenos incultos de la demarcacion respectiva. En las mercedes de tierra se entendia comprendida la jurisdiccion, no sólo cuando se expresaba en el privilegio, que se daba aquella *con la justicia*, sino tambien siempre que decia el rey que la daba *con sus hombres*, ó con la condicion de que merinos ni sayones entraran en ella, ó la de retener la corona la misma justicia, si el señor no la hiciese, ó con la cláusula de darse el lugar *íntegramente* ó con *todo el poderío y señorío*, ó como al

señorío real pertenece, ó con cualquiera otra expresion ó circunstancia de donde pudiera inferirse que el monarca renunciaba á su potestad en el territorio enajenado (1).

Mas esta potestad comprendia grados y derechos diferentes, de los cuales unas veces se trasmitian más, otras veces ménos. La parte menor de ellos que se concedia era la jurisdiccion civil necesaria para obligar á los vasallos á prestar al señor los debidos servicios pecuniarios ó personales. Cuando el rey daba un lugar *con todos sus derechos* se entendia conferida la jurisdiccion civil, con las rentas, pechos y multas ó penas de cámara, segun se llamaron después, pero no la jurisdiccion criminal. Cuando hacia la enajenacion expresando que en ella iban comprendidos el mero y mixto imperio, ó con cualquiera de las cláusulas indicadas en el párrafo anterior, estimábase concedida la jurisdiccion criminal. A veces retenia el rey par; si los impuestos de *moneda forera* y *yantar*, las *alzadas* y otros derechos, pero aun cuando hiciese la merced sin reservarse ninguno, por costumbre ó por ley, se debian entender retenidos el de mandar hacer paz y guerra del lugar donado, el de administrar justicia, si el señor la menguase y el de exigir la contribucion de moneda (2). Algunas leyes generales como el Fuero viejo y las Partidas comprendian entre los derechos inalienables la *fonsadera*, las *minas* y los *yantares*; pero la verdad es que unos y otros fueron mil veces objeto de enajenacion, y que el Ordenamiento de Alcalá, cuyas prescripciones tuvieron siempre más aplicacion que aquellos códigos, no dejaron á salvo más que los tres derechos primeramente mencionados.

Al tratar de las encomiendas, condados, mandaciones, tierras y feudos vimos cómo iba unida la jurisdiccion á estos diversos títulos de dominio: ahora expondré la forma en que se verificaba igual union respecto á los heredamientos.

La donacion hecha al monasterio de Obona en 780 por el infante Adegastro, varias veces citada, comprendia, como se ha visto, diferentes heredades con sus familias y toda la jurisdiccion civil y criminal sobre ellas, puesto que facultaba al abad ó su vicario para castigar en justicia las ofensas que cometiesen sus hombres, y mandaba que ninguno más que él ejerciera potestad en el monasterio. Ordoño I, á mediados del siglo ix, dió al abad Ofilon, al presbítero Vicente y la monja María, emigrados de Córdoba, el monasterio de Samos, con otras iglesias y tierras, encargando al

(1) Ordenamiento de Alcalá, t. 27, l. 3.

(2) Ordenamiento de Alcalá, ley 2 y 3, t. 27

abad que castigara con penitencia á los homicidas, ladrones, apóstatas y hechiceros y otros delincuentes de su territorio, y que si alguno fuera contumaz le aprehendiera y enviara á su real presencia para servir de escarmiento (1). Alfonso VI, en 1075, concedió privilegio al Cid para que en todas sus heredades y behetrías hereditarias no entrasen los sayones ni merinos del rey á cobrar tributos, exigir servicios ó castigar delitos, lo cual equivalía á darle la jurisdiccion completa por juro de heredad, puesto que la exencion alcanzaba tambien á los hijos y descendientes de Rui Diaz (2). Fernando I dió en 1045 al monasterio de Cardena las sillas de Villafria y Orbaneja con sus habitantes, sin retener en ellas ningun derecho y con expresion de que nadie sino el abad ejerceria potestad en las mismas (3). Alfonso VI en 1087 confirmó al monasterio de Sahagun *toda la jurisdiccion real* en su villa y coto, que ya ántes le habia sido otorgada, *íntegra y perpetuamente*, encargando á sus sucesores en la corona que no permitiesen á sus oficiales entrar en aquel territorio para exigir tributos ó ejercer autoridad, á fin de que su gobierno todo dependiese del abad y se desempeñase por sus propios ministros (4). Alfonso VII dió á la iglesia de Sigüenza en 1140 las casas y heredades de su término con los hombres que moraban y viniesen á morar en ellas, y la cláusula de que ni el merino ni el sayon del rey tendrian potestad sobre tales hombres, porque habia de corresponder toda á los oficiales nombrados por el obispo (5). Fernando II en 1197 dió al monasterio de San Pedro de Gumiel de Yzan solares yermos y poblados con sus vasallos, *con mero y mixto imperio* y la alcaldía, escribanía, merindad y demás oficios públicos (6).

Los reyes no conferian solamente esta potestad á los hidalgos y á las iglesias, sino tambien á las mismas villas, consideradas como personas jurídicas. Desde el siglo xi al ménos se empezaron á erigir muchos concejos en corporaciones independientes de todo señorío local, atribuyéndose al comun de vecinos los mismos derechos y facultades que correspondian á los señores dueños de otras villas. Los monarcas autorizaron esta novedad, tanto por hacer con ella gran beneficio á los mismos pueblos, cuyos servicios necesitaban, cuanto por oponer algun contrapeso al creciente poder

(1) Huerta, *Anales de Galicia*, escr. 27.

(2) *Colec. de doc. de las prov. vasc. y Castilla*, t. 5, n. 5.

(3) Berganza, *Antigüedades*, t. 2, escr. 85.

(4) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 119.

(5) Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 529.

(6) *Colec. de doc. de las prov. etc.*, t. 5, n. 28.

de los nobles. Estas villas, que se llamaban *sobre sí* por la autoridad que ejercían sobre sí mismas, poseían colectivamente las tierras no apropiadas y los montes y aguas de sus términos, disponían de ellos como solían hacerlo los señores particulares, nombraban sus propias justicias, administraban sus caudales públicos por medio de sus propios delegados, dependían inmediatamente del rey y contribuían á él con sus impuestos.

No era, sin embargo, igual la condición de todas estas villas, pues había entre ellas graves diferencias, según la mayor ó menor autoridad depositada en el comun de vecinos. Así es que algunas no carecían de señor, es decir, de un delegado de la corona que dentro de ellas representase la persona del rey é hiciese efectivos sus derechos; pero no todos estos delegados tenían la misma autoridad. Las villas de La Guardia, San Vicente de Sosierra, Labraza y otras, sujetas al fuero de la primera, tenían señor delegado de la corona que nombraba la justicia y recaudaba los derechos; pero los vecinos disfrutaban el inconcebible privilegio de que si el merino ó el sayon entrasen en sus casas para tomarles algo por fuerza ó exigirles tributos contra su voluntad, podían matarlos sin incurrir por ello en pena alguna ó pagando á lo más una multa levisima (1). Vitoria tenía también señor, que nombraba los merinos y sayones; mas por su fuero de 1181 disfrutaba el privilegio de que aquellos cargos recayesen en sus moradores, y de que si alguno de tales ministros entrando violentamente en alguna casa y extrayendo algo de ella, fuera muerto en la misma, no pagaría el matador multa alguna por tal delito. Gozaban además aquellos vecinos la facultad de nombrar los alcaldes y de deponerles cuando no cumplieran bien en su oficio (2). Un señorío semejante tenía la villa de Haro, y sin embargo, por su fuero de 1187 poseía colectivamente las tierras realengas que le había dado Alfonso VIII; sus alcaldes, adelantado y sayones eran elegidos cada año por todo el concejo, y su señor no debía recibir hospedaje cuando iba á la villa, sino por mano del sayon, lo cual quiere decir que no podía escoger alojamiento ni por sí tomarlo (3). Alfonso IX en 1231, dió aún mayor autoridad al concejo de Cáceres, pues además de concederle todas las tierras de sus términos, con aguas, montes, aldeas y minas, le de-

(1) Si el merino ó sayon entraba en la casa y tomaba algo por fuerza, dice el fuero de La Guardia, dirigiéndose á los vecinos, *occidatur et non pectent nisi tres meajas*: si el merino ó sayon del señor hacia fuerza ó exigía tributos contra la voluntad del vecino, *occidatur et proinde non pectent homicidium*. Llor., *Prov. vasc.*, t. 4, n. 137.

(2) Llor. *Prov. vasc.*, t. 4, n. 164.

(3) Llor., *Prov. vasc.*, t. 4, n. 171.

claró la calidad de *por sí y sobre sí*; prometió no dar nunca la villa á las Ordenes que ántes la poseyeran y mandó que no hubiese en ella más que dos jurisdicciones, la del rey y la del obispo, excluyendo así la del señorío (1).

Aún creció más en el siglo xiv el número de estas villas libres. Enrique III hizo tales á las de Colmenar, Ladrada y Candelada, otorgándoles la facultad de elegir sus alcaldes con jurisdiccion civil y criminal, y dándoles otros privilegios, y como los señores andaban á competencia con los reyes en cuanto á otorgar franquezas á sus vasallos, tambien solian alguna vez eximir de su propia jurisdiccion á las villas de su pertenencia, haciéndolas *sobre sí*, facultándolas para nombrar sus justicias, y reduciendo todo su propio derecho á la exaccion de un tributo. Esto hizo entre otros, el obispo de Búrgos D. Pedro, señor de Madrigal, en 1168. Dió á poblar esta villa, renunciando á los fonsados, fonsaderas y portazgos; prohibió la entrada en ella de merinos forasteros, salvo los que fueran á cobrar los tributos reales; se reservó una dehesa, un censo sobre las heredades, y la mitad de las multas, y dió al concejo la facultad de nombrar cada año y de destituir cuando le pareciese, al juez y al alcalde, y de percibir la otra mitad de las multas (2).

Habia tambien muchos propietarios que sin ningun título escrito de merced de la corona, ejercian la más amplia jurisdiccion. Tales eran los duques, condes y marqueses, de quienes dicen las Partidas que «han señorío por heredamiento et poder de facer justicia en su tierra, en todas las cosas que han ramo de señorío, et esto segun los privilegios que tienen de los reyes que se los dieron ó segun la antigua costumbre que usaron» (3). D. Alfonso X, reconociendo y manteniendo esta jurisdiccion de los señores de título en sus propias tierras, aunque no constase la legitimidad de su adquisicion, quiso suprimir la de los meros infanzones ó hidalgos, que no hubiera sido conferida expresamente, y así dice de ellos otra de sus leyes, que aunque posean grandes heredamientos, no tienen señoríos, como no sea por privilegio (4).

Aunque las Partidas y el Fuero real declaraban que la jurisdiccion no se adquiria por tiempo, la disfrutaban por mera costumbre muchos propie-

(1) *Colec. de doc. de las Prov. Vasc. y Castilla*, t. 6, n. 256.

(2) *Llor. Prov. Vasc.*, t. 4, núm. 140.

(3) L. 12, t. 1, Part. 2.^a

(4) L. 13, t. 1, Part. 2.^a

tarios, sin título de adquisición ni tampoco de superior nobleza. Así D. Alfonso XI, al poner en observancia el primero de aquellos códigos, no se atrevió á desconocer el derecho de estos propietarios, declarando en su consecuencia que la jurisdicción civil podía adquirirse por prescripción de 40 años y la criminal por prescripción de 100 (1): con lo cual y con no alcanzar otras disposiciones restrictivas de la misma ley, sino á las adquisiciones recientes de la jurisdicción señorial, continuaron disfrutándola todos los señores, titulados ó no, que la habían usado de antiguo.

II.

ORGANIZACION DE LAS JUSTICIAS SEÑORIALES.

Hallábase organizada la jurisdicción señorial de modos diferentes, según su clase y las diversas costumbres de los lugares. Los meros dueños de collazos ejercían por sí mismos y sin formas judiciales la potestad de apremiarles y compelerles al pago de los tributos, y á la prestación de los servicios debidos. Según el fuero de Palencia de 1181, nadie debía embargar ni sacar prendas sino por medio del sayon del obispo, excepto el dueño de collazos, que podía prenderlos por sí mismo (2). Pero los señores de jurisdicción más extensa, como eran todos los que la ejercían sobre un territorio y la generalidad de sus moradores, la organizaron de un modo semejante al de la jurisdicción real. Esta se desempeñaba ordinariamente en los lugares por jueces, merinos, alcaldes y sayones, y estos mismos oficiales, con los propios nombres é idénticas funciones, pusieron los señores á su servicio. Los jueces y alcaldes conocían en primera instancia de las causas, los merinos prendían á los reos y ejecutaban las sentencias de los jueces, como jefes de la fuerza pública, y los sayones eran ministros subalternos encargados de la ejecución material de las providencias de los jueces, alcaldes y merinos. De todas estas sentencias podía apelarse al señor, el cual conocía de la instancia por sí mismo ó por su lugar-teniente. Del señor podía recurrirse en alzada á los tribunales del rey.

Mas aunque este fuese el sistema de organizacion y competencia más general de los señoríos, había sin embargo entre ellos diferencias numerosas de que no se puede dar hoy cumplido conocimiento. Baste, por lo tanto

(1) *Ordenanzas de Alcalá*, t. 27, l. 2.

(2) *Llor., Prov. Vasc.* t. 4, núm. 162.

señalar algunas, segun resulta de fueros y antiguos diplomas. En el señorío de Molina, segun fuero de 1154, habia para cada collacion un juez y un alcalde que ejercian la jurisdiccion *con la ayuda del señor y del concejo* y eran nombrados por suerte. La gerarquía del juez era superior á la del alcalde. Habia además otros oficiales llamados *caballeros de la Sierra*, nombrados del propio modo y al mismo tiempo, los cuales ejercian cierta jurisdiccion inferior.

El señor no conocia de los juicios sino cuando excedia su cuantía de diez *mencales*, y para eso solia, como el rey, celebrar audiencia los viernes. Los alcaldes juzgaban reunidos. De la sentencia del conde no se daba recurso ante él mismo. Los jueces y los alcaldes hacian la pesquisa de los homicidios, y en su defecto, el señor cuando venia á la tierra. El homicidio de hombre forastero debia juzgarse por jurados, y la parte que no se conformaba con su sentencia podia apelar al señor (1).

Teniase por abuso la concurrencia del señor á los juicios con los alcaldes, fuese por temor al influjo que podia ejercer sobre ellos, ó por el que pudiera tener un fallo dictado con su acuerdo en el de segunda instancia. Por eso, sin duda, ordenaba el fuero de Uclés de 1179, que el señor de la villa no se sentase á juzgar con los alcaldes en la audiencia del viernes, que si se sentase se abstuvieran estos de juzgar las causas y que si lo hicieran fuesen penados por ende (2). Ya he dicho que en Palencia ejercia la jurisdiccion el merino del obispo con el auxilio de sus sayones y porteros. El fuero de Haro de 1187, como el de Uclés, prohibian á los alcaldes juzgar en presencia del señor, y el primero mandaba que las últimas instancias de todos los juicios se terminaran en Logroño (3). En Santander ejercia la jurisdiccion un merino nombrado por el abad de San Emeterio, señor de la villa, con beneplácito del concejo. Este merino debia ser morador del lugar y vasallo del monasterio. El concejo debia conocer por lo ménos de ciertas causas graves como las de traicion y robo. El abad percibia las multas y hacia suyos los bienes confiscados (4). En Navarrete habia merino, alcalde y sayon nombrados por el señor, que mandaba en la villa, y debian ser tambien vecinos de ella. En muchos pueblos era salario de los jueces el noveno de todo lo que se litigaba ante ellos; mas en Navarrete el señor

(1) Llor. *Prov. vasc.* t. 4. n. 127.

(2) *Id. id.*, t. 4. n. 159.

(3) *Id. id.*, t. 4. n. 171.

(4) *Id. id.*, t. 4. n. 173.

cobraba el noveno y el *arenzazgo* y con su producto pagaba sueldo fijo á los ministros de justicia (1). El señorío de la villa de San Ander fué dado por D. Alfonso X á su hermano D. Sancho mientras fuese abad del monasterio de aquel nombre, autorizándole para poner alcaldes, merinos, escribanos y otros «aportillados» ú oficiales, y mandando que juzgaran los alcaldes, que de sus sentencias se apelara al abad D. Sancho, y de éste al rey (2). En Sahagun por el fuero de 1255, debía haber un merino y dos alcaldes nombrados por el abad entre los vecinos y amovibles á su discrecion. El merino hacia justicia con arreglo á lo que hubieran juzgado los alcaldes. De las sentencias de estos se apelaba al abad ó á su lugar-teniente y de éste al rey. El merino debía prender á los pregonados por criminales, á los malhechores, y á los que mandasen detener los alcaldes, pero no podia sin orden de estos soltar á los presos (3).

A esta múltiple variedad de formas de la justicia oponíase un sólo elemento de unidad, que era el recurso al rey, cuando los señores denegaban ó menguaban su derecho á los querellosos. Los reyes hubieron de mantener siempre con gran teson esta eminente prerogativa, llamada mayoría de justicia, y gracias á ella, se pudo al cabo de tiempo introducir algun orden en aquel inmenso caos de instituciones incongruentes y anárquicas. Consigóse este principio en no pocas leyes generales y en multitud de fueros y costumbres, y á esto se debió sin duda el que nunca lograran prevalecer del todo contra él los privilegios particulares. Alfonso IX ordenó en las córtes de Leon de 1188, la ley siguiente: «Quien reciba alguna ofensa que-
»jese á mí, ó al señor de la tierra, ó á las justicias puestas por mí, por el se-
»ñor ó por el obispo, y si diere fiador ó prenda de la verdad de su querella se
»le hará justicia, sin causarle ningun daño conforme á su fuero; si no fuere
»oido por el señor de la tierra ó las justicias, insista el agraviado en su que-
»rella, y si tampoco fuere atendido, denúncieme el hecho con testimonio
»del obispo y de hombres buenos y yo le haré justicia» (4). Las Partidas reservaron en todo caso las apelaciones al rey y aún permitieron el uso de este recurso sin pasar por los grados inferiores de la jurisdiccion (5); con lo cual hasta se habria privado de la suya á los señores en muchos casos, si

(1) Llor. *Prov. vasc.* t. 4. n. 185.

(2) *Memorial histórico de la real Academia*, t. 1, p. 80.

(3) Escalona, *Hist. de Sahag.* escr. 250.

(4) *Curia habita apud legionem*, 4. *Colec. de córtes* publicada por la Academia de la Historia, t. 1.

(5) L. 18. t. 23. Part. 3.^a

se hubiera ejecutado tal ley en su rigoroso y literal sentido. El Ordenamiento de Alcalá declaró como ántes he dicho, inalienable la *mayoría de justicia* «que el rey ha por la mayoría é sennorio real, por comprir la justicia, si »los sennores menores la menguasen:» mandó que si algun señor no guardase las leyes en él contenidas, el rey cumpliría la justicia en el lugar donde se menguase, y estableció el modo de recurrir los vasallos al monarca cuando se sintieran agraviados por sus señores (1). Las córtés de Búrgos de 1345 se quejaron al rey de que los vasallos solian querellarse de sus señores tan sólo para hacerles perder su señorio y pidieron que no fuesen escuchados como lo eran, siempre que para ello llevaran cartas de los alcaldes de emplazamientos. Mas el rey se limitó á responder que si bien no se darian tales cartas sin su mandado, continuaria oyendo todas las querellas que debieran ser oidas, apartando tan solo las maliciosas.

Los vasallos solian tambien recurrir á las chancillerías para que los protegiesen contra la autoridad abusiva de sus señores, poniendo tregua y seguro entre ellos; y otorgada esta solicitud, quedaba como suspendida la jurisdiccion señorial. Las mismas córtés de Búrgos reclamaron contra esta práctica; pero el rey respondiendo que no se usaria como recurso ordinario, y que revocaba las treguas á la sazón concedidas, declaró al mismo tiempo que si alguno se querellase de su señor, diciendo que se recelaba tanto de él que no se consideraba seguro, pareciendo este temor fundado, mandaría al señor que asegurase á su vasallo bajo penas ciertas.

Pero si nunca dejó de reconocerse la procedencia del recurso al rey, hubo por lo ménos métodos muy distintos de introducirlo y de proveerlo, que debieron influir bastantè en su eficacia. En el siglo xiii habia dos diferentes. Los recursos y apelaciones de Leon, Extremadura, Toledo y Andalucía iban directamente de las villas señoriales ó realengas, á tres hombres buenos «sabedores de los fueros,» los cuales si no se avenian en la sentencia, llamaban para dirimir la discordia á algunos alcaldes de córte que no hubiesen entendido en el pleito; y si tampoco se ponian de acuerdo, acudian al rey para que fallase. En Castilla se apelaba del alcalde de la villa al adelantado del alfoz, de éste al alcalde del rey, de éste al adelantado mayor, y por último al rey, que celebraba audiencia tres dias á la semana, acompañado de algunos de sus alcaldes (2). Despues D. Fernando IV, en las Córtés de Valladolid de 1512, prometió oir las

(1) Ordenamiento de Alcalá, t. 27, ley 2, y t. 28 ley 2. y t. 32 l. 13.

(2) Córtés de Zamora de 1274, 19 y 20.

causas de los presos, de los rieptos y las querellas contra oficiales públicos un día á la semana acompañado de seis hombres buenos, dos de Leon, dos de Castilla y dos de Extremadura: estableció en la corte dos alcaldes de las alzadas mayores, uno para Castilla y otro para Extremadura y mandó que los adelantados anduviesen con poca gente haciendo justicia en los malhechores, con alcaldes y escribanos: que no mataran, atormentaran, ni soltasen á los presos, sin sentencia de alcalde; y que cuando llegaran á los pueblos convocaran á los querellosos y sentenciaran sus causas con dichos alcaldes. En el reinado de Alfonso XI, segun las Cortes de Toro de 1371, venian á los alcaldes de corte las alzadas de los alcaldes de los señoríos, las querellas contra ellos por mengua de justicia, los pleitos de las viudas, huérfanos, pobres y personas miserables y los recursos por desobediencia á las cartas reales, ó falta de justicia en los pueblos de señorío. D. Enrique II mandó en las cortes de Búrgos de 1377, que todos los señores admitieran las apelaciones al rey, que ante ellos se interpusiesen, excepto en los lugares que pertenecian al señorío de la reina. Mas como esta disposicion encontrara tenaz resistencia y los señores léjos de obedecerla, mataban, herian y encarcelaban á los apelantes, segun dijeron las cortes de Guadalajara de 1390, mandó D. Juan I que de las sentencias de los alcaldes de señorío, se apelara para ante el señor ó su lugar-teniente, sin perjuicio de que las ciudades y villas que acostumbraban oir apelaciones de otros lugares, continuaran en su derecho, y que de la sentencia del señor ó su lugar-teniente se apelara al rey ó á sus alcaldes: que el señor que matare ó hiriese á algun apelante perdiera la jurisdiccion, además de incurrir en otras penas, y si le castigara de cualquier otro modo, fuese penado con 10.000 maravedis.

Lo que de todos estos hechos se infiere, es que si el recurso extraordinario al rey por mengua de justicia, fué siempre y en todas partes admitido, el ordinario de apelacion á la corte en última instancia, no llegó á establecerse de un modo general, sin vencer grandes dificultades, ya porque no hubo de conocerse en muchos antiguos señoríos, ya porque en todos quebrantaba y reducía notablemente la autoridad señorial. Así es que las indicaciones que de esta prerogativa de la corona se hallan en los más antiguos documentos, se refieren en general, con pocas excepciones, al recurso extraordinario por denegacion de justicia, y no al ordinario de la alzada. Cuando la historia compostelana refiere cómo Alfonso VIII otorgó libertades á los ciudadanos de Santiago, dice que confirmó un edicto del conde D. Ramon, por el cual se ordenaba que no fuesen aquellos nunca

multados ni embargados por los oficiales del rey, sin juicio previo y sin que primeramente hubiera denegado su justicia el arzobispo, señor de la tierra (1). Los fueros de Molina y de Haro, ántes nombrados, al determinar el orden de las instancias, no hacen mencion alguna de la alzada á la corona, y el de Haro, por el contrario, mandó seguir la última instancia ante la justicia de Logroño. En el siglo xiii fué cuando empezaron los reyes á reservarse expresamente en algunas cartas de señorío, y sobre todo en las de abadengo, el conocimiento de las últimas apelaciones, y en el mismo tiempo tambien comenzó la lucha que sobre este punto mantuvo la corona con muchos señores, y á la cual puso término la ley de D. Juan I, de 1390, ántes referida.

Algo hubo de contribuir tambien á este resultado la pretension, siempre sostenida por nuestros monarcas, de conocer de uno ú otro modo, de ciertos delitos muy graves y de los pleitos de las personas desvalidas, llamados en la antigua jurisprudencia casos de córte. Era doctrina corriente entre los jurisconsultos del siglo xiii, que debian librarse por los tribunales del rey las causas de homicidio calificado, violacion, quebrantamiento de tregua ó seguro, incendio de casa, salteamiento de camino, traicion, alevosia y riepto. Así lo dispusieron ya las Córtes de Zamora de 1274. Tambien se habia considerado necesaria una proteccion especial en sus causas, á las viudas, los pobres y los huérfanos, fundada en la incapacidad de defenderse cumplidamente estas personas, que el derecho llamaba miserables, y en la suposicion de que los tribunales del rey podian hacerles justicia más fácilmente contra los poderosos, que los jueces de las villas. Pero á favor de esta doctrina, se fué apoderando la jurisdiccion real del conocimiento de muchas causas que por las personas interesadas en ellas correspondian á los señores, ó se reservó por lo ménos las apelaciones de las mismas, aún en los señoríos que disputaban al soberano esta prerogativa en las causas comunes.

Otras restricciones de la jurisdiccion señorial habian establecido las leyes ó las costumbres en beneficio de los vasallos. En las córtes de Valladolid de 1299 ordenó D. Fernando IV que los ricos-hombres y caballeros que tuvieren las tierras, no las embargasen ni ocupasen por su propia autoridad, sin que el alcalde lo hubiese sentenciado con arreglo á derecho. No podian tampoco los señores dictar nuevos fueros, esto es, agravar los impuestos ó menoscabar la condicion de las personas ó de las propiedades,

(1) *Hist. Compost.*, lib. I, c. 23; *Esp. Sagr.*, t. 20.

sin el consentimiento de sus vasallos; lo cual, aunque muchas veces dejase de observarse, era una garantía importantísima de los pueblos (1). El infante D. Juan Manuel escribía en el siglo xiii que el señor no podía matar á sus vasallos ni tomarles sus bienes sin oírles y sentenciarles en juicio.

Pero el mismo infante dá á conocer en otro lugar una doctrina importante, que no se halla escrita en ninguna de las leyes de aquel tiempo, y que es del mayor interés en la materia de que se trata. Dice que los reyes y señores juzgaban los pleitos, segun lo que entendían por verdad, es decir, segun su conviccion, pero que los jueces delegados de ellos, no debían juzgar por lo que vieran ó supieran, sino por lo que resultare de lo alegado y probado y conforme á las leyes y fueros, de cuya observancia debían dar cuenta; y que como los reyes y señores no la daban sino á Dios, debían juzgar por la verdad que supieran ciertamente (2). Hé aquí cómo aquel escritor ilustre, uno de los primeros magnates de su tiempo, señor jurisdiccional de muchas tierras, y muy desavenido casi siempre con el rey y la corte, igualando en cuanto á su independencia la jurisdiccion real y la de señorío, sostenía la pretension de los que negaban á la corona la prerogativa de las apelaciones, pues lo único que cabía dentro de su doctrina, era el recurso al rey en el caso extremo de una completa denegacion de justicia. La diferencia que establecía entre los señores y sus jueces delegados en la manera de fallar las causas, atribuyendo á los primeros la facultad de hacerlo sin sujecion á las formas establecidas, y á las leyes anteriores, cuando los otros no podían prescindir de unas ni de otras, dá bien á entender cómo habían penetrado ya entre los sábios de España, las doctrinas imperialistas, que consideraban al monarca como ley viva del Estado y explica cumplidamente la justicia que en aquellos tiempos hacían nuestros reyes con muchos de sus vasallos, por sí mismos, sin las formas ordinarias del procedimiento y sin tener en cuenta para nada las leyes preestablecidas. D. Fernando IV, D. Alfonso XI, D. Pedro y tantos otros reyes, pudieron con arreglo á la doctrina del infante D. Juan Manuel y de los jurisconsultos de su tiempo, condenar á muerte por la ley de su voluntad y la prueba de su conviccion íntima, á todos los ricos-hombres, caballeros é hidalgos que de su órden perecieron en el cadalso ó en las cárceles. Hay al parecer cierta contradiccion entre esta doctrina y la otra que en distinta obra expone el infante, la cual no permite al señor matar á sus vasallos, ni tomarles sus

(1) L. XII, t. I, Part. 2.^a

(2) *Libro de los Estados*, Part. 1.^a y *Libro del Caballero y el Escudero*, c. 45.

bienes, sin previo juicio; pero quizá se desvanece advirtiéndole que él no tanto dispensaba de todo juicio y de toda audiencia al rey y al señor para sentenciar á sus vasallos, cuanto de sujetarse á las reglas ordinarias del procedimiento. De cualquier modo no es ahora mi objeto conciliar opiniones contradictorias; basta darlas á conocer, como prueba irrecusable de la vacilación de los ánimos y de la inseguridad de las convicciones, durante el siglo xiii, en cuestión tan importante como la de la extensión y límites de la autoridad pública y de los derechos de los vasallos.

CAPITULO XI

De la facultad de enajenar las tierras.

I.

INALIENABILIDAD PRIMITIVA DE MUCHAS PROPIEDADES.

Al examinar en los capítulos IV y siguientes los varios títulos de enajenación, por los cuales salían las tierras del dominio originario de la corona, hemos visto que una de las diferencias fundamentales entre las otorgadas por juro de heredad y las transmitidas por los demás títulos consistía en la mayor ó menor libertad para disponer de ellas. El título de juro de heredad llevaba consigo en su origen la facultad de enajenar y de transmitir á los herederos la cosa adquirida, á menos que alguna condición expresa y legítima derogara ó limitara este derecho. Los títulos de prestimonio, encomienda, mandación ó señorío, tierra, honor, tenencia y feudo, así como los que transmitían á los solariegos y colonos las tierras tributarias, suponían originariamente también la prohibición de enajenar tales propiedades su reversion, dentro de un tiempo más ó menos largo á aquel de quien procedían, y su no transmisión por lo tanto á los herederos del adquirente. También se ha visto cómo á pesar de ser tales en su origen las circunstancias características de aquellas dos clases de propiedad, había muchas de la primera, que por condiciones impuestas á su adquisición, no eran libremente enajenables, á la vez que con el trascurso del

tiempo fueron ganando esta cualidad casi todas las propiedades de la segunda clase. En vano dijeron las Partidas que las cosas procedentes de la corona, que se adquirieran por heredamiento, no podrian enajenarse sin licencia del rey, pues no hay el menor indicio de que esta prohibicion llegase á tener efecto en tales bienes cuando el rey no se hubiera reservado aquel derecho ni ninguno otro análogo ó de igual resultado. La verdad es que los hombres libres, que por razon de su estado, no se hallaban sujetos á condicion alguna que les impidiese tratar y contratar á su albedrío, si adquirian bienes de la corona ó de cualquiera otro por juro de heredad, ó sea por heredamiento, sin cláusula que limitase su dominio, podian disponer de él libremente, sin pedir licencia al soberano. Verdad es que las tierras de realengo por las cuales se pagaba tributo á la corona, podian enajenarse segun la ley de las córtés de Leon de 1188, citadas ántes, pero tales tierras no eran en rigor de heredamiento, sino tributarias y sujetas por lo tanto á las condiciones inherentes á esta clase de propiedad.

Los heredamientos no eran, pues, enajenables cuando se adquirian con esta condicion. Tampoco lo eran los prestimonios ó préstamos, las encomiendas, las mandaciones, las *tierras* y las *tenencias*, porque como se ha visto en otro lugar, ó eran revocables al arbitrio del que los daba ó debian revertir á él ó sus sucesores por muerte del poseedor. Los feudos y las tierras tributarias podian ordinariamente enajenarse, mas á personas determinadas y con restricciones que dejasen á salvo todos los derechos del señor directo. Después hubieron de adquirir esta misma cualidad las encomiendas, las mandaciones convertidas en señorios hereditarios y las *tierras*, pero en tanto que la corona autorizara la enajenacion y no prefiriera rescatar los bienes que fueran objeto de ella.

Mas esta alienabilidad restringida de las propiedades que no eran heredamientos, puede decirse que no empezó hasta el siglo xi. Ántes de este tiempo, no solamente los prestimonios, las encomiendas, las mandaciones y las *tierras* eran inalienables por su calidad precaria, sino que tambien lo eran de un modo absoluto la mayor parte de los solares de los solariegos, por lo muy general que era el fuero llamado de *mañería*. En virtud de él tenian derecho los señores á la herencia de aquellos de sus vasallos que morian sin descendientes, y así la inalienabilidad era consecuencia y garantía de este derecho. Sólo con licencia del señor que habia de heredarle podia el mañero enajenar sus bienes. Así se lee en una escritura de venta de ciertas heredades, otorgada en 1064 á favor del monasterio de Cardena, que Ziti Memes y su mujer Gotina habian obtenido licencia del rey don

Fernando I para esta enajenacion por ser mañero (1). Pero cuando los reyes y señores empezaron á otorgar franquezas y libertades á sus vasallos para fomentar la poblacion de sus estados y acrecentar su poderio, era la supresion de aquel fuero y la consiguiente facultad de enajenar, aunque restringida, una de las mercedes más comunmente otorgadas.

Las restricciones de aquel derecho, que constituian uno de los caracteres distintivos de la propiedad feudal, lo eran pues tambien de una parte muy considerable de la de los reinos de Leon y Castilla, al ménos durante los tres primeros siglos de la reconquista. Y no fué esta una circunstancia accidental y contingente del dominio territorial en la civilizacion de la Edad Media, sino un fenómeno necesario, dada aquella organizacion social. Era imposible restaurar de una vez la monarquía visigoda; hubiérase necesitado para ello una sociedad fuertemente constituida, capaz de poner en pié de guerra un ejército numeroso y disciplinado, y nunca lo fué la sociedad visigoda, mucho ménos después de quedar reducida á algunos pocos millares de montañeses y á un número mucho menor de nobles y eclesiásticos emigrados. Era menester por lo tanto proceder lentamente, formando, ya que no era posible un estado único, de constitucion bastante vigorosa, para resistir al enemigo é invadir su territorio, grupos sociales adecuadamente organizados, que aunque no tuvieran unos de otros la dependencia conveniente, fuesen cada uno de por sí una máquina poderosa de guerra y en su día un elemento activo de otra organizacion social más vigorosa. Estos grupos sociales no hubieran podido constituirse sólidamente, si sus individuos no hubiesen tenido entre sí más vínculos que los del interés general, que es siempre una idea abstracta, poco al alcance de la inteligencia del vulgo y mucho ménos en una sociedad ruda y naciente. Necesitábase otra cosa más material que sirviera de vínculo entre los que habian de mandar y los que debian obedecer, mayormente cuando ni la autoridad moral de los primeros estaba consagrada por el tiempo ni los segundos tenian arraigado el hábito de la obediencia. Este vínculo fué la tierra, cuya conservacion y defensa era interés inmediato de los que habian de habitarla; pero no poseida con la libertad de la civilizacion moderna, sino con restricciones tales, que por ella, viniera á quedar sujeto el hombre al hombre, base esencial de toda disciplina. Para conseguirlo no bastaba siquiera exigir de los poseedores de las tierras ciertos servicios, pues si los vasallos hubiesen dispuesto libremente de ellas, si las tierras por lo tanto hubieran á cada paso

(1) Berganza, *Antigüedades*, t. II, escr. 119.

mudado de dueño sin intervencion, conocimiento ni licencia de los caudillos, los individuos de cada grupo habrian sido elementos tan mudables y contingentes, que no habrian llegado á contraer nunca un fuerte vínculo de union con la misma tierra, ni el hábito de la obediencia ni la costumbre de la disciplina. Mas si por el contrario se lograba fijar y arraigar á cada familia en su heredad respectiva, quitándole toda esperanza de cambiar de señor y de patrimonio, era natural que concluyesen por identificarse con el uno y con el otro, resultando de aquí mayor cohesion y más perfecta correspondencia entre los elementos de cada grupo y un conjunto de relaciones de dependencia fundado más bien en el hábito y la tradicion, que en obligaciones efímeras ó en el imperio mutable de la fuerza. La inalienabilidad de la tierra, su reversion al señor cada vez que moria el vasallo y su nueva y casi forzosa concesion á alguno de los hijos de éste, respondian perfectamente á aquella necesidad.

Las leyes y las tradiciones de la monarquía visigoda favorecian por otra parte este propósito. En ella los *curiales* y *privados de corte*, que formaban una clase intermedia entre los nobles y los libertos y siervos, carecian tambien de la facultad de enajenar sus bienes, para que el estado no perdiese los servicios ó los emolumentos con que contribuian. Los colonos y los libertos no podian tampoco disponer libremente de sus tierras ó peculios, segun hemos visto en el capítulo II. Era, pues, natural que siguiesen aplicándose las antiguas leyes, si no á las mismas personas, porque su condicion habia desaparecido, ó se habia modificado con la caida de la monarquía visigoda, á aquellas que en la de Astúrias disfrutaban un estado parecido, aunque ménos por razon de sus propios bienes hereditarios y de familias, que ya eran del todo libres, que por causa de los nuevamente adquiridos de la corona, con cargas semejantes á las que pesaban en tiempos antiguos sobre los primeros.

II.

RESTRICCIONES DE LA FACULTAD DE ENAJENAR.

Mas la inalienabilidad de las tierras, que tanto contribuia á la más perfecta organizacion de los grupos sociales, era muy difícil de conservar en medio de una guerra que ofrecia á cada paso nuevos y ricos territorios á la industria y actividad de los cristianos, y ocasiones frecuentes de mejorar de estado y de fortuna. Cada vez que se hacian nuevas pueblas y se repar-

tian tierras con condiciones más ventajosas que las ordinarias, según era menester hacerlo para atraer nuevos pobladores, sentíanse estimulados los antiguos á abandonar sus pobres heredades. Los que en los azares de la guerra ganaban nuevas tierras ó se procuraban mejor fortuna, desdeñaban naturalmente el triste solar que les viera nacer en pobreza y servidumbre. Así, en España, á las demás causas generales que en Europa contribuían á la libertad del dominio, se juntaban otras especiales, nacidas del estado permanente de guerra en que vivían los cristianos. Por eso duraron ménos ó no se desarrollaron tanto en Castilla las instituciones feudales.

Empezóse por moderar el rigor de la prohibicion absoluta de enajenar las tierras solariegas, sustituyéndola con el recorocimiento del derecho del vasallo para abandonarlas en beneficio del señor. Después se abolió ó se redimió con tributos fijos el fuero de la mañería. Luego se permitió la venta de las mismas tierras solariegas, siempre que se hiciese á otro vasallo del mismo señor y que éste la autorizase, aunque reconociéndole frecuentemente el derecho de laudemio y casi siempre el de tanteo. Por último, se permitió enajenar los solares á cualquier persona que hiciese por ellos el fuero acostumbrado, aunque ya con exclusion de los ricos-hombres, infanzones, iglesias y monasterios que pudieran no cumplir esta obligacion, ya con prohibicion de verificar tales enajenaciones en un plazo determinado, para que los primeros adquirentes de tierras por repartimiento no prefiriesen lucrar con ella, á poblar y fomentar con su industria los lugares repartidos. No se verificaron estas trasformaciones por orden rigurosamente cronológico, que en la Edad Media andaban siempre mezcladas y confundidas las instituciones más heterogéneas; pero las concesiones y confirmaciones de tierras, con las condiciones de más ó ménos libertad referidas se repitieron más frecuentemente por el orden sucesivo ántes indicado.

Todas estas limitaciones de la facultad de enajenar que subsistieron después de alzada la prohibicion absoluta de ejercitarla, tenían por objeto mantener en lo posible el vínculo de dependencia de cada grupo social con su jefe. Como la propiedad constituía por sí misma un vasallaje mas concreto y determinado que el que procedía de la vecindad y la naturaleza, su trasmision no podía ser indiferente para aquel á quien tocaba el señorío. Si el comprador del solar enajenado había de ser su vasallo con todas las obligaciones inherentes á esta condicion, ¿cómo negar al señor, si no el derecho de elegirlo, por lo ménos el de excluir á aquel de quien no esperaba buen servicio ó de quien tal vez podía temer daño? Si el señor fué el

dueño primitivo de la tierra y nunca cedió su dominio absoluto y había prohibido enajenarla, ¿cómo al alzar esta prohibicion no reconocerle el derecho de cobrar por laudemio alguna parte del precio de las enajenaciones y de recobrar pagándolas, las mismas cosas enajenadas? Los ricos-hombres, los caballeros y los infanzones poderosos ni rendian fácilmente vasallaje á otros hidalgos, por razon de señorío territorial, ni podian ser apremiados al pago de tributos y servicios de que eran ó se pretendian inmunes. Las iglesias y los monasterios, con los mismos privilegios, tenian además á su favor el de la inmunidad personal, que no se compadecia de modo alguno con la contribucion y el vasallaje. Quien tenia vasallos y jurisdiccion y gran poder, era siempre un vecino temible y peligroso entre los vasallos de otro señor y un elemento heterogéneo y perturbador en cualquier grupo social de que formase parte sin ser cabeza. Por eso desde que empezaron á caer las prohibiciones de enajenar, comenzaron tambien las de hacerlo á hombres poderosos y á corporaciones eclesiásticas.

D. Sancho el Mayor, al dar fuero á Nájera, en los primeros años del siglo XI, permitió á sus vecinos vender sus heredades y dejarlas, si morian sin hijos, á quien quisieran, excepto á infanzones. Alfonso V en las córtes de Leon de 1020, al autorizar con ciertos requisitos la enajenacion de los solares, prohibió que los adquiriesen los nobles y hombres de behetría, si bien permitiéndoles por privilegio especial, comprar la mitad de los que los solariegos poseyeren en despoblado. D. Fernando I al dar al monasterio de Cardeña en 1043 las villas de Villafria y Orbaneja, prohibió que adquiriesen en ellas casa ni heredad las personas reales, los condes, los caballeros y aún los ciudadanos. El fuero de Jaca de 1090, decia dirigiéndose al comun de vecinos: «No-deis ni vendais vuestros honores á iglesias ni á infanzones» (1). Alfonso VI decia en 1101, en el fuero de los mozárabes de Toledo; «Venda» el poblador sus heredades al poblador, pero no á conde, ni á potestad» (2). Alfonso IX en las córtes de Leon, dispuso por ley general que los solariegos no enajenaran sus heredades más que entre sí, y dijo en el fuero de Cáceres, «que así como las órdenes monásticas prohibian que sus heredades pasaran» á los seglares, así las de estos no debian trasmitirse á aquellas» (3). En Castilla, segun el fuero viejo, el hidalgo no podia poblar ni comprar en lugar en que no fuera divisero, esto es, propietario por herencia, y aún al

(1) Llorente, *Prov. vasc.*, t. 2, n.º 78.

(2) *Colec. de doc. de las pro. vasc. y Castilla*, t. 5, n.º 8.

(3) *Colec. de doc. id.*, t. 6, n.º 256.

divisero estaba prohibido comprar todo el heredamiento de un labrador (á *fumo muerto*) debiendo dejarle por lo ménos, si era de behetría, un solar con casa, una era y un huerto (1). Los fueros de algunos pueblos limitaban la cuantía de la propiedad que los pobladores podrian adquirir de los nuevos sometidos, ó de los villanos (2). El comendador del hospital de D. Gonzalo de Carrion decia en 1278, en la carta-puebla de Villaturde: «Podreis enajenar vuestros suelos, con tal que sea á otros vasallos, y no á caballeros, ni á órdenes, para que no perdamos nuestros derechos» (3). Otra multitud de fueros que pudieran citarse contenian iguales disposiciones.

Ni insistieron ménos las córtes en pedir y obtener leyes generales en igual sentido. En las de Palencia de 1286 ordenó D. Sancho IV que los ricos-hombres y los infanzones no adquirieran ni poseyeran heredades pecheras en tierras del rey. Después, en las de Haro de 1288, mandó volver á la corona todas las tierras realengas que habian pasado á iglesias, ricos-hombres, infanzones, caballeros, hidalgos, hospitales y cofradías, con las pueblas hechas en ellos y los frutos percibidos, y á las behetrías, señoríos y abadengos, las heredades que respectivamente hubieran pasado de ellos á la corona.

El mismo monarca respondiendo á una peticion de las córtes de Valladolid de 1293, repitió en cuanto á los prelados y á los ricos-hombres, la prohibicion establecida en las de Palencia, si bien declarando que no era necesaria para los infanzones, siempre que hicieran el mismo fuero que los demás vecinos, y mandó que desde luego lo hiciesen por lo que habian comprado, ó que de lo contrario vendieran cuanto habian adquirido. Fernando IV volvió á ordenar que los bienes realengos no pasaran á señorío eclesiástico, en las córtes de Valladolid de 1299, y en las de Búrgos y Zamora de 1301. Los tutores de Alfonso XI en las de Palencia de 1313 y en las de Búrgos de 1315 mandaron que los ricos-hombres é infanzones no adquirieran heredades en las villas, á no ser por razon de casamiento y que vendieran las adquiridas, si los vecinos les dieran su precio y que se restituyese á la corona lo que hubiese pasado á señorío de abadengo. Don Alfonso XI siendo ya mayor de edad, templó un tanto el rigor de estas leyes, disponiendo su aplicacion para lo futuro y mandando respetar los privile-

(1) Fuero viejo de Castilla, leyes 2 y 10, t. 1, lib. 4.^o

(2) Fuero del Alcázar de Requena dado por Alfonso X en 1257. Fuero de Murcia dado por el mismo monarca en 1266. Fuero de Arcos de 1256 por el mismo don Alfonso.

(3) Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 167.

gios de adquirir que tenían algunas corporaciones eclesiásticas, á pesar de las apremiantes reclamaciones de las córtes de Medina del Campo de 1518 y de las de Valladolid de 1525. Sin embargo, no por eso dejó de ordenar la venta de ciertas heredades que indebidamente habian dejado de ser realengas, así como la de los bienes sitos en tierras de señorío comprados por hombres de villas ó de órdenes; aunque ni lo uno ni lo otro hubo de llevarse á efecto, segun dijeron las córtes de Valladolid de 1551, al reclamar su observancia. El rey D. Pedro mandó guardar en estas córtes la ley de las de Nájera prohibiendo que pasaran al realengo ó al abadengo las heredades solariegas ó de behetría, los condados y los infanzonazgos, y en este sentido se dictaron después otras muchas disposiciones que tampoco llegaron nunca á tener cumplida observancia.

No es de extrañar que así sucediese. Desde que la autoridad real acrecentó su poder y su eficacia, haciendo posible otro sistema de organizacion social que el de grupos aislados y casi independientes, y la propiedad con las libertades dadas á sus poseedores, dejó de ser un vínculo social tan poderoso, no habia en verdad bastante razon para sacrificarla á las necesidades de una rigurosísima disciplina. Por otra parte, hacian ménos necesarias aquellas trabas del dominio dos hechos importantes, que lentamente venian desenvolviéndose y modificando el estado social. Tales eran la dependencia mayor cada dia de los vasallos meramente *naturales* respecto á sus señores, y la remuneracion en dinero ó rentas de los servicios militares. Los que no tenían con el señor del territorio más vínculos que los de la llamada *naturaleza*, ó sea la vecindad en sus dominios, no estaban en su origen bastante sujetos á la disciplina, que para su conservacion y defensa habia menester cada grupo social: para obligarles enteramente á ella habia necesidad de *darles algo*, como decia el Cid á Alfonso VI cuando le tomó el célebre juramento. Pero la independencia de los vasallos *naturales* no podia conservarse mucho tiempo en medio de una guerra constante y asoladora que les obligaba á vivir siempre apercebidos para la defensa, y por consiguiente, organizados y disciplinados bajo el gobierno de un caudillo. Tampoco era posible hacerlos á todos vasallos *propios*, no pudiendo disponer los jefes sino de las tierras más inmediatas á las poblaciones y fortalezas defendidas. De aquí resultó que por interés y por hábito fué cada dia más estrecha la sumision de los *naturales* al señor, hasta el punto de escribir el infante D. Juan Manuel en el siglo xiii que «son mas tenidos de guardar al su señor natural que los vasallos, por la naturaleza que han con él. Ca aunque todos los otros fallezcan al señor, los naturales non le

»pueden fallere et le han de defender et guardar el cuerpo et lo que
»ha...» (1).

A la vez que se acreditaba esta doctrina, haciéndose de los naturales soldados y vasallos, crecian las rentas de la corona con sus conquistas y su riqueza mueble con la general del Estado, lo cual introdujo y generalizó la costumbre de dar dinero y frutos en lugar de tierra para constituir el vasallaje. De modo que si por una parte los naturales venian á prestar casi el mismo servicio que los vasallos, y por otra podian éstos tenerse sin darles tierra de que dependiera su condicion, la propiedad territorial no era un vínculo tan necesario entre el Estado y el individuo, ni su inalienabilidad un elemento tan indispensable de la constitucion y disciplina de los grupos sociales. Por eso vemos que á medida que tomaba incremento la autoridad real y se consolidaban las relaciones de dependencia entre los grupos sociales y el poder supremo, se iba quebrantando el rigor de las antiguas leyes que procuraban mantener las propiedades realengas, las de señorío y las de abadengo en sus poseedores respectivos.

Entónces tambien aquellas leyes perdieron su carácter político, conservando tan sólo el económico y fiscal. Un interés de esta especie es el que desde el siglo xv les sirvió de principal fundamento. Puesto que todo el mal de aquellas adquisiciones consistia en la mengua de los tributos de las propiedades pecheras, que pasaban á poder de exentos, fácil era remediarlo mandando que tales propiedades continuaran gravadas con los impuestos correspondientes, cualesquiera que fuesen sus poseedores. Así llegó á ordenarse en efecto; pero los nobles reclamaron su inmunidad, los plebeyos alegaron que con no poder vender sus bienes libremente perdian éstos parte de su valor y no tenian ellos con qué satisfacer sus tributos; y D. Juan II en las Cortes de Zamora de 1452, fundándose en que la propiedad que se trasmitia á la Iglesia quedaba amortizada y no la que adquirian los hidalgos, reformó el ordenamiento indicado, disponiendo que continuasen tributando los bienes pecheros que pasaran á abadengo, pero no los que se transfiriesen á hidalgos. Cumpliósse esta ley en cuanto favorecia á los nobles, pero no fué más eficaz que las anteriores para impedir que la Iglesia adquiriese nuevas propiedades. Así es que el mismo D. Juan II, olvidándose de lo que sobre la amortizacion eclesiástica habia dicho en las Cortes de Zamora, transigió con ella en las de Valladolid de 1447, permitiendo que quedasen tambien exentas de tributos las heredades que adquirieran las

(1) *Libro de los Estados*, Part. 1.ª

iglesias, con tal de que al tiempo de su adquisicion se pagase al erario la quinta parte de su precio. Pero ni aún esto hubo de llevarse á efecto; y en el siglo xvi, olvidados ya completamente el origen de la mayor parte de las propiedades y los ordenamientos antiguos que limitaban su libre disposicion, y predominando las doctrinas más favorables á la inmunidad eclesiástica, juzgaron los reyes que nada podian disponer, en el sentido de lo que sobre esta materia seguian pidiendo las Córtes, sin el asentimiento del pontífice; y como no hubiera tampoco facilidad de alcanzarlo, la amortizacion eclesiástica siguió tomando incremento hasta el extremo de todos conocido. Mas este punto es demasiado importante para no dedicarle un capítulo aparte.

Hallábase tambien limitada la libre disposicion de los bienes por intereses de otro órden, y principalmente el de conservacion de las familias. Cuando no era el señor quien tenia derechos más ó ménos eventuales á la reversion de los bienes, y en tal concepto facultad para impedir ó para utilizar su enajenacion: cuando estos bienes eran *de divisa* ó herencia de abolengo, atribuíase á los parientes más próximos en la línea del ascendiente de quien procedian, el derecho de retraerlos, á fin de que no pasaran á poder de extraños. Habia, pues, una especie de co-propiedad en las familias sobre las heredades de todos sus individuos, tan respetada por la costumbre, que ante ella cedia hasta el derecho á la reversion de los señores, mantenido por el fuero de la mañería. El señor, por lo tanto, no tenia derecho á los bienes del vasallo sino en el caso de que éste muriera sin hijos. La mayor parte de las escrituras de enajenacion de los primeros siglos de la monarquía castellana apárecen otorgadas por los que se dicen dueños de los bienes en union con sus mujeres y sus hijos, si los tenian. La concurrencia de éstos á tales contratos no era una simple formalidad, sino un acto de renuncia implicita del derecho que tenían para impedirlos ó para impugnarlos después. «Si alguno de mis hijos ó de mis parientes tratare de invalidar esta donacion ó esta venta, dicen casi todas las antiguas escrituras, sea maldito y no tenga parte en el paraíso,» con otros anatemas semejantes. Todo lo cual es prueba cumplidísima del derecho que se suponía en las familias á que no salieran de ellas los bienes de sus individuos.

Los fueros particulares y las leyes generales dan tambien testimonio de esta primitiva costumbre. El fuero de Nájera facultó para disponer de su hacienda sólo á los que carecian de descendientes. En Castilla existia desde muy antiguo el retracto llamado de abolengo, aunque después redujeron su uso las leyes del Fuero real y las de Toro, fijando para ejercitarlo un plazo

brevisimo y sujetándolo á otras restricciones. Mas en Vizcaya se estableció y conservó con grande amplitud así como en Aragon y en Navarra. Segun el fuero de aquel señorío nadie podía vender bienes inmuebles sin anunciarlo primero en la iglesia tres domingos consecutivos, en presencia de un escribano, á fin de que llegara á noticia de los parientes que tenían derecho á adquirirlos, no por lo que otro diera por ellos, como en Castilla, sino por la cantidad que estimaran peritos. Si esta no excedía de mil maravedís debía ser pagada al contado; mas en otro caso podían los parientes hacer el pago en un año, dando la tercera parte al contado y el resto de seis en seis meses. Eran preferidos los parientes más próximos en la línea de donde procedían los bienes; y si estos eran adquiridos por el marido, por la mujer ó por ambos, tenían aquel derecho los parientes más próximos sin distincion de líneas. Cuando se enajenaban bienes en pública subasta para el pago de deudas y no habia pariente ni extraño que los adquiriera con la condicion de abonar su precio en el plazo de nueve dias, la anteiglesia debía comprarlos por los dos tercios de su tasacion y conservarlos un año y un dia, si el deudor tuviera hijos ó descendientes, á fin de que pudieran retraerlos por el mismo precio. Los parientes podían en igual término reclamar la nulidad de las enajenaciones que se hicieran sin estos requisitos y solemnidades, y si juraban haberlas ignorado tenían hasta tres años para deducir su accion. El marido no podia enajenar sus bienes propios ni los de su mujer sin consentimiento de ésta; solo de los gananciales podia disponer por sí, sin aquel requisito (1).

CAPÍTULO XII

De la herencia de las tierras.

I.

DE LA HERENCIA DE LAS PROPIEDADES DE JURO DE HEREDAD.

Consecuencia del derecho eventual del señor á suceder en los bienes del vasallo y del de la familia para impedir que salieran de ella los bienes de sus ascendientes, eran las limitaciones de la facultad de disponer de la

(1). *Fuero de Vizcaya*, ley 1, 3, 5 y 6, t. 17 y l. 9, t. 20.

propiedad para después de la vida. Pasaba por ley general en Castilla que los hijos sin distincion de sexos, heredasen á sus padres; mas faltando descendencia, así el derecho de los testadores para disponer de sus bienes, como el de los parientes á heredarlos, fueron muy diversos, segun los lugares y tiempos.

Al principio las propiedades que no eran de juro de heredad volvian á la corona ó al señor de quien procedian: mas si el vasallo su poseedor, dejaba hijos que le heredasen, el señor debia trasferirles, en virtud de nueva merced, las heredades revertidas por la muerte de su padre. Así sucedia en los prestimonios, las encomiendas, las tierras, las tenencias, los feudos y las heredades solariegas. Donde se observaba el fuero de la manera tenian igual destino las propiedades por juro de heredad de los solariegos que morian sin hijos. Entre los nobles, y en los lugares en que no existia aquel fuero ó habia sido redimido, estas propiedades pasaban á los parientes colaterales en defecto de hijos y nunca á los ascendientes.

En el mismo tiempo se solia hacer poco uso de los testamentos, sin duda porque las costumbres y los fueros más generales lo limitaban en extremo. El hombre que no tenia hijos podia dar en vida sus bienes á quien quisiera, pero en la última enfermedad sólo podia disponer del quinto de ellos en favor de su alma, porque todo lo demás debia pasar á sus hermanos, y lo que era de abolengo al pariente más próximo en la línea de su procedencia. Si con los hermanos del difunto concurrían sobrinos, hijos de otro hermano, sólo tenían derecho á heredar la propiedad de la legítima que habria correspondido á su padre si viviese, porque el usufructo vitalicio de ella pertenecia á los otros, y aún por muerte de estos, todavia no entraban los sobrinos en el usufructo, pues habian de partirlo con los hijos que aquellos dejasen. Esto era ley de Castilla, segun la compilacion del Fuero Viejo, anterior á la reforma del rey D. Pedro, siendo de advertir que la disposicion que así lo declara, llama á estas herencias á los hermanos y á los parientes respecto de los bienes troncales, y nunca á los padres y descendientes. El hijo monje ó religioso era llamado á la herencia del padre como los seglares, á pesar de no poder disponer de ella en vida, sino por causas determinadas, y de estar excluido de la herencia de los parientes. Y no solamente el mañero estaba impedido de testar en su última dolencia, sino que ningun hombre por regla general podia testar más que del quinto de su hacienda después de estar enfermo, por ser condicion precisa para disponer de mayor parte de bienes, ir al concejo ó á la iglesia por su pié y sin toca. Era tan riguroso el derecho de los hijos á la herencia paterna, que no se permitia

al padre dejar mejoría á ninguno de ellos, y solamente los hidalgos tenían el privilegio de poder mandar al varon primogénito el caballo y las armas de su cuerpo para que sirviera al señor, del mismo modo que ellos lo habían hecho (1). Ejemplo señalado de esta costumbre ofrece el testamento de un caballero de Astúrias llamado Juan Díaz de Nava, que teniendo dos hijos y una hija, dejó á aquellos sus armas, lorigas, capellinas, caballos y mulas, y á ésta sus vacas, sus sortijas y un *lignum crucis* (2).

Con tales fueros y costumbres claro es que los testamentos debían ser de uso poco frecuente, resultando de aquí otra restriccion importante del dominio en beneficio de las familias. Por eso entre la multitud de antiguos diplomas que encierran nuestros archivos, hay tantas donaciones entre vivos, tantas enajenaciones de todas clases y tan pocos testamentos en el sentido que hoy damos á esta palabra.

Pero al lado de tales costumbres, que eran las más generales, existían muchos y muy diversos usos y fueros locales, que respectivamente las modificaban y estatúan modos diferentes de suceder en las heredades no alodiales. Con la ley que no permitía al padre disponer de sus bienes ni de ninguna parte de ellos, competía en algunos lugares la costumbre de dar á los extraños una participacion igual á la de los hijos, por medio de la prohibicion ó adopcion, que confería al adoptado el mismo derecho que á aquellos. Potencio y su mujer otorgaron en 952 escritura de prohibicion á favor del monasterio de Sahagun, expresando que lo hacían para que desde aquel día entrase á la parte con sus hijos en el goce de su hacienda (3). En una escritura de venta de ciertas heredades de fecha muy remota, declara el vendedor Silo que un sobrino suyo llamado Munio, le había otorgado carta de prohibicion «para que recibiera de sus bienes inmuebles y muebles una parte igual á la de uno de sus hijos,» y que en efecto, había recibido por ella heredades que nombra y enajena (4). A veces se otorgaba la prohibicion por los que no tenían hijos, para que un extraño ó cierta iglesia recibiese íntegra la herencia, con exclusion de todos los parientes. Munio y su mujer Flores, en 947, prohibieron á la iglesia de San Andrés y á su presbítero D. Félix, en toda su herencia de bienes inmuebles y muebles que habían ganado y en adelante adquirieran, para que á su muerte los to-

(1) Fuero Viejo, leyes 1, 2, 4 y 6, t. 2, lib. 5.

(2) Carvallo, *Antigüedades de Astúrias*, Part. 3.^a, tit. 37.

(3) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 16.

(4) «Ut talem rationem accepisse.... qualem unum de filiis suis tam mobilem quam immobilem»..... (Sota, *Crónica de los príncipes de Astúrias* apénd. 2.

mara dicho presbítero ó sus parientes (1). Oficia, que debia ser una señora soltera ó viuda, prohió en 950 á la abadesa María en todos los bienes que poseia, como divisa de sus parientes. Ni en este caso ni el anterior tenian hijos los otorgantes, pues habrian hecho mencion de ellos, como era costumbre, y sobre todo, no hubieran podido hacer la prohibicion de toda la herencia.

En el reino de Leon, ó al ménos entre los hidalgos del mismo, podian los cónyuges prohiarse recíprocamente al tiempo de contraer matrimonio, en los bienes que cada uno aportaba y en los que en adelante adquiriera, y de este modo hasta la muerte de ambos, no tenian derecho á heredar su legítima los hijos que procreaban. Esto equivalia al usufructo de viudedad que siempre usaron los aragoneses, aunque disfrazado en Leon con el nombre de prohiamiento, por respeto sin duda al derecho de los hijos sobre la herencia de sus padres. La carta de arras del Cid ofrece una insigne prueba da esta costumbre. En ella el Cid, después de advertir que otorga este instrumento conforme al fuero de Leon, y de señalar los bienes que da en arras á su mujer Jimena, declara haber convenido con ésta en prohiarse recíprocamente, y en su consecuencia le dá todos los demás bienes que poseia y en adelante adquiriera, con la condicion de que si él muriese ántes, ella permaneciendo viuda, continuaria disfrutando toda su hacienda, sin que sus hijos pudieran reclamar cosa alguna hasta después de su muerte. Doña Jimena á su vez otorgó al Cid igual derecho en el caso de que ella falleciese primero, aunque sin la condicion de permanecer viudo (2).

Eran tambien frecuentes las prohibiciones á favor del rey. Asi es que uno de los agravios alegados por los ricos-hombres que se rebelaron contra D. Alfonso X, fué que con las adopciones que hacian los de su clase para dar parte en sus herencias al rey ó á los infantes, quedaban desheredados sus parientes. Mas hubo de ser esta costumbre tan admitida, que D. Alfonso pudo responder «que fuero era é costumbre de prohiar los hombres á quien quisieran, é que en esto non podia el toller el derecho que sus fijos habian, mas quanto á sí mesmo, que non tenia por bien que ningun rico home lo prohiase» (3).

(1) Berganza, *Antigüedades*, escr. 41 y 46.

(2) Sota, *Cron. de los principes de Asturias*, escr. 23. Aunque la carta de arras del Cid no fuese auténtica, no dejaria de ser un documento antiquísimo, y quien lo inventara no trataria de hacer patente su falsedad, suponiendo un modo de proceder contrario á la ley y á la costumbre.

(3) *Cron. de D. Alfonso X*,

Todos estos hechos prueban que en los orígenes de la monarquía castellana la herencia de los padres pertenecía exclusivamente á los hijos, y que la institucion voluntaria de herederos no constituía un derecho bastante seguro, pues de otro modo no se habria acudido para hacerla, á tales ficciones. Y siendo esto así, debemos suponer que las leyes visigodas que autorizaban al padre para disponer de una parte de su hacienda, y fijaban la porcion legítima de los hijos, no hubieron de penetrar mucho en las costumbres, al ménos en Castilla, puesto que lo que aquí prevaleció en esta materia fué el derecho germánico, que consideraba á los hijos como coparticipes en la propiedad del padre. Si en Castilla se hubieran observado las leyes visigodas á que aludo, seguramente no habria sido necesario fingir la filiacion para llamar á los extraños á la herencia de los padres de familia.

La oblacion de los hijos á las iglesias era otro medio de que solian valerse los padres para que éstas participaran de su herencia, con exclusion ó con mengua al ménos, del derecho de aquellos. Ansur, uno de los señores principales de la corte del rey D. Ramiro III, entregó sus hijos Pelayo y Pedro al abad de Sahagun, para que les instruyese y confiriera el hábito de monje, dándole con ellos todos sus bienes muebles, dos villas y un monasterio, y mandando que si tales oblatos abandonasen la vida monástica, no pudieran reclamar aquellos bienes. Esta disposicion era sin duda contraria al derecho recibido, por lo que el abad pidió al rey que la confirmara, dándole el valor de que carecia; y D. Ramiro en 976 la confirmó, pero modificándola, á fin de que no chocase tanto con el derecho vigente. Ordenó, pues, el rey, que si los hijos de Ansur abandonasen el convento ó vida monástica, podrian disponer de la mitad de sus bienes muebles y raices; pero con exclusion del monasterio que el padre habia edificado á su costa (1).

En Vizcaya prevaleció el mismo derecho que en Castilla respecto á heredar los hijos toda la hacienda de los padres y por iguales partes, hasta el punto de estar prohibida la confiscacion de los bienes raices, cualquiera que fuese el delito que cometiera su dueño, porque, como dice el fuero, aquellos bienes son troncales y deben pasar á los hijos del culpable. No habiendo hijos ni descendientes, los bienes raices que cada cónyuge haya aportado al matrimonio, vuelven al tronco de su procedencia, y los muebles al cónyuge, que los aportase con la mitad de los gananciales; mas si el superviviente hubiese traído dote ó capital á la casa del muerto, puede permanecer en ella un año y un día, si conserva su estado

(1) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 51.

de viudez. Esta especie de usufructo se parece más al de Cataluña que al de Aragon. Pero lo que en Vizcaya vino á modificar profundamente el antiguo derecho de Castilla, fué la facultad reconocida al padre para dar en vida y á muerte toda su hacienda raiz y mueble á cualquiera de sus hijos ó descendientes, siempre que reservase algun *tanto de tierra poco ó mucho* para los otros hijos (1).

Al observar que esta misma ley regia en Aragon y en Navarra, es decir, en las provincias que más tenazmente conservaron sus costumbres primitivas, me inclino á creer que tal fué tambien la de España en materia de sucesiones, desde ántes de la invasion romana: que este derecho de la libre testamentificacion paterna entre los hijos pugnó largo tiempo, primero con el derecho imperial, que fijaba la legítima de aquellos, y después con el germánico que les atribuía por igual toda la herencia de los padres; y que de la fusion y transaccion entre estos derechos antinómicos, resultaron las distintas costumbres de las provincias de España, de las cuales unas tomando más de lo antiguo dejaron al arbitrio del padre el señalamiento de la legítima, otras fijaron su cuantía en una parte proporcional de la herencia, y otras adoptando la ley germánica, la dieron toda entera á los hijos, aunque inventando ficciones para que los padres pudieran menguarla, cuando así lo estimaran conveniente.

De la lucha entre estos sistemas diversos, dan testimonio los usos varios que mencionan los antiguos documentos y los ejemplos de todas clases que ofrecen los archivos de los siglos xi y xii. Lo es de la observancia de la ley visigoda que facultaba al padre para disponer libremente del quinto de sus bienes, el testamento que en 1087, otorgó García Velasco dejando al monasterio de Sahagun la quinta parte de ciertas villas, con la cláusula de que si sus hijos fallecieran, heredase tambien aquel la parte de éstos. Mas para que se vea cuán poco fijo era en este punto el derecho, baste advertir que en el mismo testamento manda el testador del monasterio otra villa con sus huertos, prados, molinos y casas integramente y sin la cláusula *si filii defuerint* que habia usado respecto á los otros bienes (2). Otras veces disponia el padre del quinto en favor de alguna iglesia, y mandaba que si sus hijos morian sin sucesion, pasasen á la misma iglesia las cuatro quintas partes que ellos hubiesen heredado. Así lo verificó la condesa Tusta, segun refiere el obispo de Leon D. Pelayo en una escritura de 1073, pues dejó la

(1) *Fuero de Vizcaya*, leyes. 1, 2 y 11, tit. 20 y 1. 25, tit. 11.

(2) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 62.

quin'a parte de ciertas villas á aquella iglesia con la condicion de que si sus hijos morian sin descendientes, pasasen todas íntegramente á la misma (1).

Al lado de estas costumbres que en Castilla y en Leon reducian el antiguo derecho de los hijos, fijando al mismo tiempo los limites de la libertad de los padres, prevalecia en Oviedo la costumbre primitiva de la libre testamentacion, como en Aragon y en Vizcaya. El fuero que dió á aquella ciudad Alfonso VII en 1145, declaraba válido el testamento que se hiciera, tanto en plena salud como en la hora de la muerte, á pesar de no serlo este último segun las costumbres de Castilla, y que todo poblador podia disponer libremente de sus bienes raices ó muebles, aunque tuviere hijos, siempre que les diera cualquier cosa á la mano, de modo que no quedaran desheredados del todo (2). El fuero de Palenzuela permitia dejar á la iglesia todo lo que se quisiera, sin limitacion alguna, y sin distinguir entre los que tenian hijos y los que carecian de ellos (3). El de Pampliega permitia al padre hacer donaciones á un hijo en perjuicio de los demás (4). Entre tanto prevalecia en Palencia la costumbre germánica, puesto que segun su fuero de 1181, solamente los que no tenian hijos podian disponer con libertad de sus bienes (5). Aún más estrictamente se seguia aquella costumbre en Sahagun, cuyo fuero dado por su abad D. Diego en 1110, disponia no sólo que los hijos fueran herederos necesarios de los padres, sino que por su falta, lo fuesen los nietos, en su defecto, los hermanos, después los sobrinos, luego los primos, y que sólo cuando faltasen todos estos parientes pudiese el testador disponer de sus bienes en favor de extraños (6). En Guadalajara segun su fuero de 1155, tenian los parientes el mismo derecho, pero limitado á los cuatro quintos de la herencia, porque del restante podia disponer el testador en todo caso á favor de la iglesia, así como podia dejar á ésta toda su hacienda, cuando carecia de parientes que le heredasen (7).

Estas diferentes costumbres y otras varias resultaron de la supresion de la mañería, pues adquiriendo con ella los propietarios el derecho de testar y los parientes el de heredarlos, ambos derechos fueron generalmente reconocidos con diversas limitaciones. Así es que muchos fueros, al abolir aquel

(1) *España sagr.*, t. 36, apénd. 26.

(2) Llorente, *Prov. Vasc.*, t. 4, núm. 121.

(3) Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 273.

(4) *Colec. de doc. de las Prov. Vasc. y Castilla*, t. 5, núm. 31.

(5) Llorente, *Prov. Vasc.*, t. 4, n. 162.

(6) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 141.

(7) Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 507.

gravámen, determinaban como consecuencia, quiénes en lugar del señor, habían de suceder en los bienes del vasallo. El fuero de Sahagun últimamente citado, llama mañería el derecho de sucesion reciproca que reconoce á las familias. El fuero de Sepúlveda de 1076 y el de Lara de 1145, al declarar abolida la mañería, mandaban que heredasen los parientes y que en su defecto tomase el concejo los bienes del difunto y los diera por su alma (1). El fuero de Uclés de 1179, decia tambien «no tengáis mañería y heredaos unos á otros hasta la sétima generacion, y el que no tenga parientes podrá dejar sus bienes á la Iglesia» (2).

Los fueros, al declarar el derecho hereditario de los parientes, ó los designaban de un modo general y sin limitacion de grados, ó con esta limitacion, y entónces solian ser conformes las leyes con las costumbres locales, en cuanto al órden de su llamamiento. Sólo habia alguna variedad respecto al de los padres, y sobre la sucesion en los bienes troncales. La costumbre más general en Castilla era la antigua germánica, que excluía á los ascendientes de la herencia de sus descendientes, y atribuía los bienes troncales á los parientes de las líneas de su procedencia; pero los fueros de muchos lugares adoptaron después sobre esta materia, usos muy diversos. El fuero de Sahagun citado últimamente, establece como reciproca la sucesion entre padres é hijos, aunque después parece contradecirla llamando á falta de estos, á los nietos y á los hermanos. En Molina era tambien reciproca la sucesion entre padres é hijos, pero volviendo los bienes troncales á sus líneas respectivas, y dándose preferencia al hermano sobre el ascendiente, respecto á los bienes no partidos entre los mismos hermanos y conservados en *hermandad* (3). En Castroverde, segun su fuero de 1197, cuando el hijo mantenía á sus padres y moría ántes que ellos, su herencia se dividía en dos mitades, de las cuales una era para el cónyuge superviviente, y otra se distribuía por partes iguales, entre el señor el alcalde y el concejo. Habiendo testamento, eran válidas siempre las mandas entre marido y mujer (4). Parece, pues, que aquella disposicion tenia por objeto, si no relevar al hijo que mantenía á su padre, de la obligacion de instituirle heredero, privar al padre del derecho hereditario, que sin aquella circunstancia tendria en caso de morir el hijo abintestato. Los legisladores del siglo xiii aspiraban sin

(1) Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 281 y 558.

(2) Llorente, *Prov. Vasc.*, t. 4, n. 159.

(3) Id. id., t. 4, n. 127.

(4) Id. id., t. 4, n. 189.

duda á generalizar este derecho de los padres, y sin embargo, debían de estar tan arraigadas las costumbres contrarias, que D. Alfonso X no se atrevió á reconocerlo y proclamarlo en el Fuero real, sino para el caso en que los hijos murieran sin testamento, declarando que quien no tuviera descendientes podría disponer de lo suyo como quisiese, siempre que no perjudicara los derechos reales (1). En vano las Partidas señalaron á los ascendientes su porción legítima, y determinaron las causas por las cuales únicamente podían ser desheredados (2); la costumbre contraria fué más poderosa, y el nuevo derecho no llegó á ser admitido en Castilla hasta que lo confirmaron las Cortes de Toro de 1505, las cuales sin embargo mandaron respetar, donde existiese, la costumbre de tornar los bienes troncales á su raíz (3).

Estos bienes podían, no obstante, en algunos lugares no volver íntegros á los parientes que tenían derecho á ellos. El fuero de San Sebastian de 1180 declaraba la inalienabilidad de tales bienes, ordenaba que volvieran al tronco de su origen, y sin embargo, permitía legar á un hijo una viña, una tierra ó una casa, cuando hubiera dos ó más en la herencia, y mandar á la iglesia una parte indeterminada de la heredad de abolorio, aunque no hubiese más que una (4). La ciudad de Vitoria, deseando conciliar en lo posible el antiguo derecho de los parientes á los bienes troncales, con el espíritu moderno que prefería á los padres en concurrencia con aquellos, pidió á D. Alfonso X que cuando los hijos murieran abintestato y sin descendencia, heredasen los padres el usufructo de todos los bienes, siempre que afianzaran su devolucion á los parientes que debieran heredarlos como troncales. Mas el rey que había promulgado el Fuero real y procuraba extender su uso, respondió á esta petición: «que así como hereda el fijo todos los bienes del padre é de la madre, que ellos que hereden otrosí todos los bienes del fijo, segunt que el mio libro del fuero manda» (5). D. Alfonso, por lo tanto, no quiso aceptar la especie de transaccion propuesta entre el antiguo y el nuevo derecho, aunque sin derogar por eso el primero, cuando á falta de padres, procediese la sucesion por troncalidad.

El derecho de los cónyuges, ya sobre los bienes gananciales, ya á alguna participacion en sus herencias respectivas, limitaba también el de sucesion

(1) L. 1, t. 6, lib. 3.º Fuero real.

(2) L. 11, t. 7, y l. 4, t. 13, Part. 6.ª

(3) L. 4 de Toro.

(4) Llor. *Prov. Vasc.*, t. 4. núm. 160.

(5) *Nue.º fuero de Vitoria*, Landazuru, *Hist. de Vitoria*, Part. 3.ª c. 2.

de los parientes. La ley visigoda que atribuía á los cónyuges una parte de la propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, proporcionada al capital que hubiese aportado cada uno, fué observada casi generalmente en Castilla, aunque con la modificación importante de haberse de dividir siempre por mitad tales bienes entre los cónyuges, sin consideracion al haber propio de cada uno. Muchas escrituras, que datan desde el siglo xi, dan testimonio de la práctica de este derecho (1). Las cortes de Nájera lo declararon expresamente (2). Los fueros de Oviedo, Cuenca, Plasencia, Alcalá, Fuentes, Cáceres y otros varios lo establecieron del mismo modo. En Leon es donde hubo de conservarse la ley gótica, sin la modificación ántes indicada, puesto que allí hay ejemplos hasta el siglo xv, de gananciales divididos entre los cónyuges proporcionalmente á los haberes aportados por cada uno (3). Pero de cualquier modo que la division se hiciese, el derecho del cónyuge superstite en los gananciales limitaba considerablemente el de la familia del difunto.

Otra limitacion semejante producian las donaciones permitidas entre los cónyuges y los derechos reservados al superviviente en alguna parte mayor ó menor de la herencia. En Castilla podian los hidalgos dar en arras á sus mujeres la tercera parte de sus heredamientos, y como donacion esponsalicia, ciertos efectos muebles ó en su lugar hasta mil maravedis; pero tambien era costumbre eludir la eficacia de esta ley, simulando el marido la venta de algunos de sus bienes, con pacto de retro, á fin de que volvieran á su poder en virtud de esta condicion y ya con el carácter de gananciales, de cuyo modo adquiria la mujer la mitad de su valor. Además la viuda, mientras lo era y vivia honestamente, tenia derecho al usufructo de sus arras, ó en su lugar á 500 sueldos, si no se las dejaban disfrutar los herederos del marido. Las heredades adquiridas por ambos cónyuges en usufructo continuaban tambien disfrutándose enteramente por el superstite, sin participacion de los hijos (4). Segun el fuero de San Sebastian, la viuda podia disfrutar, mientras lo era, toda la herencia de su marido, y aún enajenar la

(1) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 83 y 137.

(2) Fuero viejo, l. 1, t. 1, lib. 5.º

(3) El testamento de Yañez de Ulloa, consejero de D. Juan II, otorgado en 1442, comprende bienes en Castilla y en Leon y declara la existencia de hijos de dos matrimonios. El testador manda repartir entre estos los gananciales de cada consorcio, los de Castilla con arreglo á las leyes de este reino y los de Leon conforme á su fuero. Dice en una de sus cláusulas: «El qual fuero (el de Leon) es que quando algunos casan, que lo que ganaren que lo partan segund que cada uno truxo.»

(4) Fuero viejo, l. 1, 2, 3 y 6, t. 1, lib. 5.º

correspondiente á sus hijos, en caso de necesidad y con conocimiento de sus parientes ó vecinos. Cuando no eran suyos los hijos y si de su marido, tenia tambien derecho al mismo usufructo, aunque sin la facultad de enajenar, y con exclusion de los muebles que debian desde luego partirse (1). El fuero que Alfonso VIII dió á Pampliega en 1208, declara válidas las donaciones entre cónyuges y los pactos que estos hiciesen, para que el superviviente conservara el usufructo de todos los bienes de ámbos.

II.

HERENCIA DE LOS BIENES QUE NO ERAN DE JURO DE HEREDAD.

Tales fueros, costumbres y leyes regian en Castilla, en cuanto á disponer para después de la muerte sólo de los bienes de juro de heredad, pues respecto á los otros y muchos de los que tenian en parte aquella cualidad limitada, existian leyes y costumbres diferentes. Las tierras que daba la corona con los títulos de condados, encomiendas, mandaciones, prestimonios, tierras y honores, ya he dicho en otro lugar que volvian al Estado por muerte de los donatarios, como no dispudiese otra cosa la escritura de su enajenacion. Tambien se convertian indirectamente en perpétuas estas propiedades vitalicias ó temporales en su origen y por su naturaleza, cuando se daban á alguna iglesia, monasterio ó corporacion que siempre habia de subsistir como persona juridica. Ordoño III dando en 952 al apóstol Santiago y al obispo Sisnando, el condado de Ventosa integramente, conforme lo habian poseido varios condes, para sustentacion del culto de su iglesia, de los clérigos, de los peregrinos y de los pobres (2), convirtió sin decirlo en perpétua una propiedad que no lo habia sido hasta entónces.

Mas era tan natural que si habia hijos capaces de prestar los servicios debidos por tales propiedades, fuesen preferidos á los extraños, en la nueva concesion de ellas. La opinion y el ejemplo de la Europa feudal influian tan eficazmente en este sentido, que pronto vino á ser costumbre, la de dar los reyes á los hijos de sus vasallos que morian los condados, encomiendas, prestimonios, tierras, honores ó feudos que dejaban vacantes sus padres. Desde el siglo x datan los documentos que dan testimonio de esta costumbre. Ramiro II en 942 dió á Froila Gutierrez la encomienda de Caldelas que habia disfrutado su padre, y no siendo hábil por su menor edad para go-

(1) Llor., *Prov. Vasc.*, t. 4, n. 160.

(2) *España Sagr.*, t. 19, p. 146.

bernarla, la puso bajo la tutela de su madre. El mismo monarca en 955 dió á San Rosendo obispo, una mandacion que habia tenido su padre Gutierre Menendez. Fernando hijo, del conde Asur, declaró en una escritura de 976, que su padre habia sido fidelísimo al rey D. Ramiro y que él le habia sucedido en todos sus bienes (1).

Hé aquí cómo refiere un documento de 1015 la historia y vicisitud es de ciertas heredades: «Hubo, dice, un tributario de la corona llamado Munio, »que poseyó su heredad propia de tierras y viñas en Kastrello y tuvo dos »hijos, por nombre Salvador y Julian, que le heredaron á su muerte. Poco »tiempo después invadieron los ismaelitas el reino de Leon y llevaron cautivos á Córdoba á los dos hijos de Munio; y como su heredad quedase abandonada, la ocuparon los mayordomos de la corona.» Entónces Nuño Dominitz se presentó al rey D. Bermudo II pidiéndole aquella heredad y la obtuvo en efecto, tan sólo por su vida. Muerto Nuño pidió la misma heredad Doña Auria con sus dos hijos menores, llamados Vita Xab y Citi Xab, fundándose en algun vínculo de parentesco con los propietarios primitivos, y el rey D. Bermudo le contestó: «Si temeis que os inquieten »adquiriendo por tal título (*si per gente multi inquietant vos*) y si estais seguros con una donacion mia, id y tomad la heredad y poseedla para siempre como tal donacion. Apoderada de ella Doña Auria, empezó á venderla, así á cristianos como á judíos, á pesar de la protesta de sus hijos, »quedando en efecto enajenada una porcion de tierra, que los nuevos dueños plantaron de viña. Al cabo de algun tiempo comparecieron Vita y Citi »ante el rey D. Alfonso V y dijeron: Señor estamos despojados de una »parte de la heredad que nos dió vuestro padre D. Bermudo, la cual se »halla, hace años, en poder de judíos: somos vuestros siervos por tal merced, ayudadnos á recuperarla, concednos la mitad de ella y que quede la »otra mitad en beneficio del erario. El rey aceptó la proposicion, hizo comparecer á los judios dueños de la heredad, los cuales reconocieron el derecho de los demandantes y sentenciado el pleito á favor de éstos, los mayordomos del rey dividieron la heredad y adjudicaron á cada uno su »parte» (2). De modo que la heredad de Kastrello fué alodial en poder del tributario Munio, y de sus dos hijos, se hizo realenga por falta ó abandono, tuvo el carácter de prestimcnio ó de *tierra* vitalicia en manos de Nuño, la dió el rey por juro de heredad á Doña Auria y sus hijos, como patrimonio de

(1) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 50.

(2) *España Sagr.*, t. 36, apénd. 10.

familia, que no podía enajenarse sin el acuerdo de todos sus individuos, y la parte de ella ilegalmente vendida no fué recuperada sino á condicion de dar una mitad al rey y de recibir los despojados la otra mitad de él y como gracia de su mano. Todas estas vicisitudes sufrió aquella propiedad en menos de 33 años, pues Bermudo II no empezó á reinar hasta 982 y el documento referido se otorgó en 1015.

Donde por el fuero de la mañería, los señores heredaban los bienes alodiales de sus vasallos, con más razon debian sucederles en los de calidad ménos libre. Si tales vasallos dejaban hijos, éstos heredaban los bienes que poseian con calidad de hereditarios, pero no los vitalicios ó temporales, que independientemente de la mañería tornaban al señor. Si no tenian descendientes, toda su heredad y toda su posesion, sin excluir parte alguna para sus herederos, ni para su alma, pasaban integras al palacio del señor. Esto mismo sucedia cuando los hijos que quedaban, al morir cualquiera de los padres, fallecian ántes que el superviviente. Así resulta del privilegio en que Alfonso IV eximió á Búrgos, en 1073, de la mañería (1). Por lo tanto, miéntras subsistió este gravámen, no pasaba de los hijos el derecho de las familias á la herencia de los bienes no vitalicios de los padres, ó por mejor decir, el señor sustituia á la familia en el uso de este derecho. Los hidalgos solamente estaban exentos de aquel gravámen, al ménos en Castilla, donde las leyes y las costumbres les autorizaban para disponer de sus bienes con ciertas restricciones, aunque fuesen mañeros.

Este derecho del señor sufria, sin embargo, algunas limitaciones. Tal era, por ejemplo, la de no extenderse á la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, porque pertenecian como ganancial, al cónyuge superviviente. Así dice una escritura de 1006 que habiendo muerto Ablavel Gudestriz, tomó todas sus villas y heredades el rey D. Bermudo, porque no habia dejado hijos, pero como la viuda Gontroda reclamase contra esta determinacion, fundándose en que todos aquellos bienes eran gananciales, el rey mandó devolverle la mitad de ellos (2). En algunos lugares se permitia al mañero mandar por su alma alguna corta porcion de su herencia, como en Villafria y Orbaneja, donde, segun su fuero, correspondia al abad de Cardeña todo el haber del vasallo que fallecia sin hijos, menos un tercio de maravedí que podian ellos dejar á la Iglesia. Al fin, en unos lugares se

(1) Véase el texto de este documento en Muñoz, *Estado de las personas en Asturias*, p. 51.

(2) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 74.

commuló este gravámen por un corto tributo en dinero, y en otros desapareció del todo, hasta el punto de no hallarse apenas memoria de él en los documentos posteriores al siglo xiii.

No contribuyeron ménos quizá á hacer hereditarias muchas propiedades que no lo eran, las usurpaciones á que daban ocasion los desastres de la guerra y la falta de gobierno. Las antiguas escrituras ofrecen de ellas ejemplos numerosos. Ecta Rapinadiz ocupó con sus hijos muchas villas y heredades en el territorio de Astorga, propias de su Iglesia, para poseerlas como hereditarias, quemó las escrituras, y después, aprovechándose de la ignorancia de un obispo nuevo, cambió algunas de las mismas heredades por una villa de la propia Iglesia. A su muerte heredaron estos bienes su mujer Marina y sus hijos, pero descubierto el engaño y hecha pesquisa judicial, confesó la viuda en 1028, que no poseía tales bienes con justo título y reconoció tenerlos como de la Iglesia, que era sin duda la forma en que los poseía su marido cuando quemó las escrituras que así lo declaraban (1). Una usurpacion semejante revela el proceso de los infanzones de Lagneyo, reseñado en otro lugar. Segun refiere otra escritura de 1112, Alfonso, obispo de Tuy, dió en prestimonio á su alumno y pupilo Nuño, que había criado y amaba con extremo, una villa que éste poseyó en efecto durante la vida de su protector. Muerto el obispo, ocurrieron grandes disturbios y guerras en la diócesis que no permitieron nombrar otro en mucho tiempo, con lo cual Nuño continuó poseyendo la villa, y aun por su muerte la dejó á sus cuatro hijos como propiedad hereditaria, que ellos dividieron entre sí. Pero muerto uno de estos hijos, el obispo que á la sazón era de Tuy, reclamó su divisa en la villa mencionada y obtuvo su restitution, logrando después la de las otras tres divisas adjudicadas á los demás hermanos (2). Usurpaciones semejantes hubieron tambien de cometerse en encomiendas, *tierras* y mandaciones, que no habiendo sido reclamadas como las anteriores ó habiéndolo sido sin resultado, convirtieron estos títulos en señorios hereditarios.

La costumbre de dar el rey y los señores las tierras de los vasallos que morian, á los hijos que dejaban, tenia tambien sus excepciones. Cuando el vasallo moria fuera de la gracia del rey, ó cuando el hijo que dejaba era infiel ó inhábil para el servicio que la propiedad requeria, el rey solia concederla á otro vasallo en uso de su derecho. Ramiro III, segun refiere

(1) *España sagr.*, t. 16, apénd. 14.

(2) *Id.*, t. 22, apénd. 2.

una escritura de 981, otorgó á la iglesia de Leon cuatro villas, que habian sido de su *fidelísimo* Fortun Garceano (muerto al parecer sin hijos), diciendo que las daba con sus prestimonios y habitantes, para que lo que estos debian dar á la corona lo dieran á la iglesia. Por el mismo documento concedió Ramiro á la propia iglesia, otra villa, diciendo que aunque su padre la diera ántes á los hermanos Asiulfo Fortun y García, habia revertido después á la corona, por no haber acudido Asiulfo á prestar por ella el debido homenaje (*non acquievit in nostro exhibitio*) incurriendo así en infidelidad, y por haber muerto sin hijos su hermano García (1). Las tierras, monasterios y oficios, que por muerte vacaban en Vizcaya debian darse á otro vecino del señorío: las mercedes de lanzas que vacaban por la misma causa, debian proveerse por el señor en el hijo primogénito, legítimo del difunto, y en su defecto en otro vecino (2). D. Diego Lopez de Haro no sucedió á su padre D. Lope en el señorío de Vizcaya, por haber negado al rey D. Sancho IV la entrega de los castillos que el mismo D. Lope habia recibido en tenencia. Muerto D. Diego, tampoco le sucedió su hermana doña María, mujer del infante D. Juan, sino el infante D. Enrique, llamado el senador, tio del rey. D. Alfonso XI hubo de reconocer sin embargo, algun derecho en doña María, cuando le compró el señorío, después de estar ella viuda. Verdad es que esto le sirvió de poco, pues que habiéndose alzado después con aquella tierra D. Juan Nuñez de Lara, en nombre de su mujer doña María Diaz de Haro, hija del difunto D. Juan, tuvo que conquistarla de nuevo; pero más tarde se la dió con expresa condicion de servicio y vasallaje como se usaba hacer con los demás lugares realengos.

La costumbre de suceder los hijos á los padres, en lo que estos tenian de la corona, se generalizó más cada día y aún se consiguió en muchos fueros y repartimientos de tierras de conquista. Dábanse muchas de estas tierras, segun en otro lugar se ha visto, con cargo de gobierno ó de servicio, por lo cual participaban del carácter de feudales en el sentido general de esta palabra; pero al mismo tiempo solian otorgarse en dominio perpétuo, irrevocable y trasmisible sin limitacion, á todos los parientes, lo cual les atribuía cierto carácter alodial. Los fueros de las poblaciones recién conquistadas daban generalmente á los hijos el derecho de heredar las tierras repartidas á sus padres, con la obligacion de prestar el mismo servicio que ellos. El fuero de los mozárabes de Toledo de 1118, llamaba á la herencia

(1) *España Sagr.*, t. 34, apénd. 21.

(2) *Fuero de Vizcaya*, l. 6, t. 1.º

del caballero que moria «teniendo caballo y armas del rey» á sus hijos ó parientes, mandando que si eran menores, conservaran con su madre el *honor* del padre, hasta que pudieran cabalgar: que tambien retuviera este *honor* la viuda sin hijos; y que no alcanzara la confiscacion á la porcion legitima de la mujer é hijos del culpado. Tener caballo y armas del rey significaba en el lenguaje del tiempo, poseer tierras ó rentas de la corona con que mantenerlo ó como remuneracion de servicios, y la posesion de estas tierras ó rentas era uno de los *honores* que disfrutaban los vasallos. El abad de Sahagun, en el fuero que dió á Pozuelo en 1197, confirmó á los solariegos la costumbre en que se hallaban de heredar los solares de sus padres (1). D. Alfonso concedió en 1252 á los caballeros pobladores de Alicante los mismos derechos hereditarios que D. Alfonso VII habia otorgado á los mozárabes de Toledo, declarando en otro privilegio de 1257, que los que murieran dentro de los cinco años, en que no debian enajenar sus heredades podian mandar á la iglesia lo que quisieran por su alma, que los herederos legitimos sucederian en sus heredamientos, con la obligacion de prestar por ellos el mismo servicio que sus causantes, y que si no dejaban herederos ni mandas, debia el concejo guardar su hacienda durante un año, pasado el cual, sin que nadie la reclamara, dispondria el rey de ella (2).

En los feudos propios no sucedian las hijas, pero si todos los hijos, segun he dicho en otro lugar, y á falta de éstos, los nietos por linea masculina quedando todos obligados á servir al señor. Los ascendientes no eran nunca llamados á esta herencia. El hermano sólo podia optar á ella cuando el feudo habia sido otorgado al padre ó al abuelo, ó él mismo habia contribuido á comprarlo con su hacienda. No habiendo descendientes, ni hermanos con estas circunstancias, debia revertir el feudo al señor. Aún los hijos estaban excluidos de la sucesion cuando eran mudos, ciegos ó inhábiles para el servicio (3). No es posible averiguar hoy si estas disposiciones consignadas en las Partidas, tuvieron aplicacion á los pocos feudos propios que existieron en la corona de Castilla, mas si no como ley viva, al ménos como doctrina de un libro de tanta ciencia, debió de tener algun influjo sobre la opinion pública en materia de sucesiones.

A veces procuraban tambien los reyes mantener la indivision de los he-

(1) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escr. 208.

(2) *Colec. de doc. de las Prov. Vasc.*, t. 6, n.º 257.

(3) *L. 6 y 7, t. 26, Part. 4.ª*

redamientos que daban á sus vasallos, por convenir así para su defensa y al lustre y poder de las familias que debían conservarlos. El conde don Manrique, señor de Molina, en el fuero de esta villa, ya ántes citado, ordenó á sus hijos, nietos y parientes no partir nunca sus castillos. D. Alfonso X, que como en otro lugar he dicho, dió heredamientos en Jerez á cuarenta caballeros de la conquista, mandó tambien que nunca se dividiesen, que pasaran íntegros á aquel de los hijos que eligiera el padre, y que los caballeros que sólo tuvieran hijas, dejaran tales heredamientos á uno de los parientes, que fuera hidalgo y capaz de mantenerlo y de hacer el debido servicio.

Tampoco se dividian las tenencias, que como otros bienes procedentes de la corona, adquirian la calidad de hereditarias. Dábanse éstas á uno de los hijos, fuese ó no el primogénito, repartiéndose entre los demás los otros bienes del padre. Una memoria publicada por Carvallo, que contiene la particion de la herencia de Rodrigo Alvarez y su mujer Sancha de Estrada entre sus hijos, dice que á Pedro Alvarez cupo el señorío de Noreña; á su hermano Ordoño la *tenencia* de Gijon, que fué tambien condado, á Arias el señorío de Omaña, á Alvaro el castillo de Rou, á Juan el señorío de Nava, á Alfonso los bienes de Carvallo, Cibeá y Cangas, á Eva y á Inés respectivamente, los bienes de Navia y de Alzada, tal vez porque ya los poseian por dote recibida de sus padres, y las tierras de Orbigo se dividieron en quñones que se repartieron entre todos, sin duda para igualarlos en cuanto al valor de sus legítimas (1).

Eran asimismo indivisibles las *tierras* y rentas que daba el rey en pago de servicios, como que si se hubiesen partido, habrian dejado de ser remuneracion suficiente. Muerto el poseedor de estas tierras, las daba el rey á alguno de sus hijos varones que estuviese en edad y actitud de servirlos, y si no lo habia, á otro cualquiera de sus vasallos. Esta regla se quebrantaba, sin embargo, algunas veces en favor de los cortesanos. Por eso uno de los cargos, que por ingratitud, hicieron los mensajeros de D. Alfonso X al rebelde D. Fernan Ruiz, fué haberle dado San Fernando la *tierra* que habia tenido su padre Ruiz Gutierrez, á pesar de no contar entónces Fernan más que cuatro años; «lo que no solia hacer á ningun rico-home, por »cuanto la tierra del que muere dábala al que era en tiempo para la poder servir» (2).

(1) Carvallo, *Antigüedades*, etc. Part. 3.^a tit. 37, pár. 4.

(2) Crón. de Alfoso X, c. 29.

Pero la opinion era cada dia más favorable á la herencia de las tierras en beneficio de las familias, como lo daba bien á entender el infante don Juan Manuel, cuando en su libro *De los castigos* aconsejaba que no se quitasen las tierras á los hijos de los vasallos que morian y se les mantuviera en el estado de sus padres, á ménos que todos los de la casa del señor entendieran que se hacia sin razon. Luego como las tierras eran indivisibles y la eleccion de uno entre los hijos, diera ocasion á quejas é inconvenientes, hubo de adoptarse la costumbre de preferir siempre que era posible, al varon primogénito. Asi lo atestiguaron las Córtes de Ocaña de 1422 y las de Palenzuela de 1425, cuando pidieron al rey que se guardase la antigua costumbre de dar al hijo mayor las *tierras* que dejara el vasallo, y en su defecto al hermano mayor del difunto. Pero el rey no hubo de querer entónces convertir esta costumbre en ley escrita, puesto que respondió que lo proveeria como mejor cumpliera á su servicio. Sin embargo, no pasaron muchos años sin que lo hiciese del modo pedido, pues habiendo repetido la peticion las Córtes de Valladolid de 1440, declaró que proveeria las tierras que vacaran en los hijos mayores legitimos de los que las dejasen, segun lo acostumbrado. Las Córtes de Valladolid de 1451 pretendieron aún mayor novedad en esta materia, pidiendo que las lanzas que vacaran se dieran, á falta de hijo, al padre del vasallo muerto, y en su defecto al hermano. Los procuradores obedecian en esto al poderoso influjo de la opinion, que favorecia decididamente el derecho de los padres á la herencia de los hijos contra el de los demás parientes. Mas el rey contestó: «Ya está ordenado que el hijo mayor herede las lanzas del padre; lo demás ni vosotros lo podeis pedir, ni yo otorgar.»

Cuando las tierras eran de derecho hereditario no podian tener otra condicion los señoríos, así los antiguos como los que se concedian de nuevo. Ni obstaba siquiera la inaptitud de que por razon del sexo ó de otras circunstancias, pudiera adolecer el heredero, pues para ello se habia ya adoptado el uso de desempeñar por delegacion ó representacion la autoridad ó el servicio, y de este modo nadie era inhábil para tales sucesiones. D. Enrique IV dió en 1466 á su adelantado Pedro Fajardo, con el título de condado, la ciudad de Cartagena con jurisdiccion plena, rentas y derechos, y habiendo muerto dejando sólo varias hijas, la mayor de ellas casada con D. Juan Chacon, le sucedió en el adelantamiento y tambien en el señorío, por decision de los Reyes Católicos, á pesar de haber muerto ya su mujer y de vivir aún las otras hijas del Adelantado. Por lo demás, las Partidas habian declarado que las mujeres podian en ciertos casos ejercer

jurisdiccion, y aunque sus leyes no fuesen todavía de uso muy frecuente en el foro, siempre servian de apoyo á falta de otro derecho.

Así, pues, obedeciendo la propiedad á la ley del tiempo y de la civilizacion, que tendia á difundirla entre todas las clases, á libertarla de las trabas que embarazaban su libre circulacion, y de los vínculos que la unian con la cosa pública, aunque sin debilitar las relaciones que la identificaban con el Estado y con la familia, se hizo hereditaria en todos sus grados y manifestaciones, en provecho exclusivo de los parientes. Cesó la lucha entre los principios favorables á la testamentificacion libre y los que consagraban el derecho exclusivo y absoluto de los hijos y de los allegados de todas clases. Una transaccion prudente entre estas dos contrarias tendencias fué lo que al fin le puso término, y las leyes de Toro vinieron á confirmarla y esclarecerla. Todos los derechos y todas las aspiraciones fueron tomados en cuenta, pero en su lugar oportuno y con su correspondiente medida. Hubo una porcion legítima para los hijos y para los padres; hubo medios de favorecer á parientes y á extraños, y la esperanza de las sucesiones intestadas para todas las familias. La propiedad territorial quedó, pues, organizada en interés casi exclusivo de éstas, como lo exigia la opinion general, pero á costa de romper sus vínculos con el Estado, y de un cambio profundo en la organizacion social. No desaparecieron, sin embargo, en el siglo xvi los señoríos ni las encomiendas, ni las llamadas tierras; pero se modificaron de tal modo sus condiciones interiores, que ni los señoríos significaban ya una verdadera propiedad territorial, puesto que eran más bien privilegios que una consecuencia de ella, ni las encomiendas llevaban apenas consigo cargos de gobierno, ni las *tierras* lo eran en realidad. El país entónces dejó de estar regido casi exclusivamente por los propietarios territoriales, lo cual daba á su gobierno el carácter de una federacion, si no por la fuerza que le comunicaba el monarca en union con la iglesia. Este poder era sin duda más ilustrado y más civilizador que el que residia ántes en los señores de villas y en los poseedores de los castillos; pero como todo sistema, por bueno y por necesario que sea, tiene sus escollos, el de la centralizacion monárquica dió en el de desvirtuar considerablemente los caracteres sociales de la propiedad territorial.

LIBRO IV.

De la propiedad territorial en el reino de Navarra.

CAPÍTULO I

De las diferentes clases de propiedades alodiales, en el reino de Navarra.

Cualesquiera que fuesen los primeros reyes ó jefes militares de Navarra y los oscuros y disputados orígenes de su monarquía, es lo cierto que la falta de noticias y documentos para resolver este problema difícil de nuestra historia, no permite descubrir claramente el estado de la propiedad y de las personas en aquel territorio durante los primeros siglos de la reconquista. La misma falta de noticias y documentos da lugar á presúmir que aquel estado seria variable é irregular en extremo, puesto que indica confusion y desorganizacion lamentables de todos los elementos sociales y una cultura ménos adelantada que la de otras provincias de España. La civilizacion romana no habia penetrado apenas en la antigua Vasconia: los godos vencieron muchas veces á sus habitantes, pero no llegaron á dominarlos tranquila y permanentemente. No es, pues, extraño que al caer la monarquía visigoda tardasen los vascones mucho más en constituirse y organizarse socialmente que los otros pueblos de la península, á quienes romanos y godos habian comunicado los elementos de su civilizacion.

Si al verificarse la invasion sarracena se hubiera establecido en Navarra algun régimen de gobierno central, ordenado y estable, aunque fuese tan imperfecto y tan militar como el de Astúrias, ó una organizacion qualquiera de las fuerzas sociales, seguramente no se habrian perdido por completo todos sus vestigios ó tendríamos noticia cierta de algo de lo que hicieron los vascones desde su última rebelion contra los godos, al darse la batalla de Guadalete, hasta fines del siglo ix, en que de un modo auténtico se reanuda su historia. No debe sin embargo, deducirse de aquí que no hiciera nada aquel pueblo en tan largo é interesante periodo, pero si que hubo de adelantar muy poco en su organizacion social y política, que talvez permaneció en el estado semibárbaro en que le habian encontrado y de que no habian logrado sacarle los romanos ni los godos, y que no adoptó hasta mucho después las instituciones sociales de los demás pueblos civilizados.

Pero sea de esto lo que fuese, Navarra siguió al fin el movimiento de la civilizacion europea por las sendas del feudalismo, con instituciones semejantes á las de otros países, si bien ménos completas y caracterizadas y con más color de primitiva rudeza. El sistema feudal, que en aquellos tiempos fué un verdadero progreso, no pasó allí de su infancia á pesar de no carecer el país de ninguno de sus elementos, y así permaneció algunos siglos, sin desenvolverse más y sin ser sustituido tampoco por un régimen monárquico más poderoso. Hubo en Navarra ricos-hombres é infanzones, pero no con tantos derechos políticos como los de Cataluña y Aragon, ni con tanta hacienda como los de Castilla: hubo señores y vasallos, pero no con derechos y deberes tan claramente deslindados, como los de los vasallos y señores catalanes y aragoneses: hubo jurisdicciones señoriales, pero ménos regulares que las de aquellos antiguos reinos: hubo tierras alodiales y libres, pero en corto número, por no ser muchos los nobles é infanzones capaces de poseerlas: hubo tierras feudales, ya con el nombre de *honores* ya con el de señorios, pero cuyo estado legal no se hallaba tan fijamente determinado por disposiciones generales como el de las tierras semejantes de Aragon y Castilla: hubo, en fin, tierras tributarias, que eran la mayor parte de las cultivadas, pero cuyos gravámenes andaban casi siempre confundidos con los que pesaban sobre los colonos por razon de su estado personal.

El origen de todas estas propiedades era el mismo que el de sus semejantes en los otros reinos de España. En Navarra tambien se consideraba el rey dueño primitivo del territorio por derecho de conquista, con cuyo carácter, ó lo repartía á sus vasallos en propiedad absoluta, en honor ó á

censo, segun la calidad de las personas ó el apremio de las circunstancias, ó reservaba para si la parte que creia conveniente, á fin de percibir sus frutos, ó hacer en adelante nuevas mercedes á sus vasallos.

Eran en Navarra tierras alodiales las que no devengaban *pecha* al rey ni al señor del lugar, por razon de censo, ni de reconocimiento de señorío, aunque se tomaran en cuenta para graduar los impuestos de otro género con que debian contribuir sus dueños: eran aquellas heredades, en cuyo dominio no se habia reservado la corona participacion alguna. Sin duda habria muchas propiedades de este género en aquel oscuro periodo de la historia, cuyos hechos son casi desconocidos, en el cual se sabe sin embargo que conservaron su hacienda los cristianos *mozárabes* sometidos, y los que mantuvieron su independencian en lugares nunca conquistados. Mas estas antiguas propiedades hubieron de desaparecer casi por completo, cuando ninguna memoria ha quedado de ellas en los documentos de la reconquista, y léjos de eso existen muchos testimonios de la dura servidumbre á que en general estaban sujetas todas las tierras. En aquel ignorado periodo de la historia de Navarra, en que probablemente no se escribieron documentos, y del que no hubieron de tener noticia los escritores contemporáneos ó poco posteriores de los reinos limítrofes, ¿qué otra cosa es de presumir que hubiese en aquella pobre y limitada comarca, sino esclavitud y tiranía en los lugares conquistados, y desgobierno y anarquía en los lugares libres? Los fueros, privilegios y cartas-pueblas de los siglos ^xⁱ y ^{xi} ofrecen testimonio irrecusable de la triste condicion de las personas y de las propiedades en los tiempos precedentes, y esto es indicio seguro de la falta de una organizacion social, siquiera fuese imperfecta ó injusta, sobre todo cuando al mismo tiempo no existe, como no hubo de existir en Navarra en los primeros siglos de la reconquista, una aristocracia militar ordenada y poderosa, semejante á la de Aragon ó á la de Astúrias. Es de presumir por lo tanto que las antiguas propiedades libres dejaran de serlo, ya por los accidentes de la guerra, ya porque para defenderlas, las recomendasen sus dueños á caudillos poderosos, de cuya costumbre quedaron después en Navarra muchos vestigios.

Eran tambien tierras alodiales las adquiridas por primera ocupacion, que los documentos de la época llamaba en Navarra *presenes*, como en Castilla *presuras*. En aquel reino tenian tambien los vasallos el derecho de ocupar y labrar las tierras incultas de que no habia dispuesto el rey. No era como en Aragon, privilegio general aunque exclusivo de los infanzones, pues si bien se halla consignado en los fueros municipales, lo disfrutaban al

parecer todos los hombres capaces de adquirir propiedad en los lugares respectivos. La propiedad así adquirida se perdía por el no uso como en otros reinos, pero sólo después de 10 años de abandono. El rey D. Sancho Ramirez decía en el fuero de Arguedas de 1092 dirigiéndose á los vecinos: «Romperéis y cultivareis los yermos que querais..... En vuestras *presenes*, »non entredes unos sobre otros ata el cabo de diez aynos» (1).

Estimábanse estas adquisiciones como de juro de heredad, se verificaban sin ningun contrato escrito, y por lo tanto no llevaban consigo gravámen alguno las cosas así adquiridas. Mas la libertad de estas tierras, no suponía necesariamente la personal de sus poseedores, pues cualquiera que fuese la dependencia del estado del propietario de la condicion de su propiedad, nunca fué tan estrecha que la posesion de una heredad libre absolviere á su dueño de toda obligacion para con el Estado. Así los dueños de *presenes*, lo mismo que cualesquiera otros vasallos poseedores de tierras por otros títulos, estaban obligados á acudir á la guerra con sus armas en determinadas circunstancias. El mismo fuero de Arguedas, declara expresamente esta obligacion general, juntamente con la de pagar los cabezas de casa ciertos tributos al señor de la villa sin excepcion alguna.

Considerábanse tambien alodiales las tierras que el rey daba voluntariamente, sin gravámen de censo ni servicio, ya para renta de los ricos hombres, ya para que las poblasen sus vasallos. Estas tierras, aunque en su origen fueran numerosas, hubieron de disminuirse mucho después, por haberlas trasmitido los infanzones que las adquirieron directamente de la corona, á otros poseedores con la calidad de tributarias.

Pero la mayor parte de las propiedades alodiales en tiempos posteriores, eran en Navarra como en otros reinos, las que siendo en su origen censatarias, habian recibido su libertad de mercedes especiales de los reyes. Otorgábanse estas unas veces á particulares en tierras determinadas, y otras á todos los vecinos de alguna villa ó comarca. El rey D. García concedió en 971 á dos caballeros la libertad de ciertas casas que habian heredado de su padre, declarando que ellos y sus sucesores no pagarían por las mismas «ningune *scusatia* (tributo de redencion) ni fuero malo de pecha, y »podrían disponer de su dominio para siempre así en vida como en muerte» (2). Igual merced otorgó el rey D. Sancho Ramirez en 1086 (3), á Leo-

(1) Yanguas, *Diccionario de las antigüedades de Navarra*, t. 1.º p. 52.

(2) *Docum. de las Prov. Vasc.*, t. 6, núm. 213.

(3) Zuaznavar, *Ensayo sobre la legislación de Navarra*, t. 2, p. 27.

gar Iñiguez, poblado de Arguedas, por otras fincas que poseía en esta villa.

En el siglo XII se extendieron estas concesiones ya á todos los vecinos de varias ciudades y villas, cuya repoblacion y defensa interesaba al Estado, ya á ciertas gerarquías sociales que importaba estimular á que poblasen en determinados lugares. Así decía D. García VI á los infanzones, villanos y francos de Peralta en el fuero que dió á esta villa en 1144: «Os hago ingé-
nuos y francos de todos los malos usos, azofras (servicios personales) y
»pechas malas. Os concedo que tengais vuestras casas salvas y seguras, sin
»ninguna sayonia, facendera, mañeria ni fonsadera» (1). Igual libertad otorgó D. Sancho VII en 1164 á los vecinos de Estella, cuyas heredades eximió hasta de reivindicacion, cuando hubieran sido poseídas por ellos un año y un día (2). D. Sancho VIII, en 1219, libertó de la *pecha de reconocimiento* las tierras de los vecinos de Viana (3).

De las exenciones concedidas á clases enteras de personas ofrece notable ejemplo el fuero de Los Arcos de 1175, en el cual declaró D. Sancho VII que las heredades pecheras que los infanzones compraran en aquella villa, quedarían por este solo hecho infanzonas (4), y por consiguiente libres de los censos y tributos que ántes pagaban al rey. Privilegio tanto más importante, cuanto que derogaba la ley general que prohibía á los infanzones, y determinadamente á los llamados *de abarca*, adquirir esta clase de heredades (5), á fin de que no dejaran de contribuir al erario con los tributos correspondientes.

No se crea, sin embargo, que en virtud de este privilegio debieran quedar los particulares, señores directos de heredades, privados de los réditos á derechos que tuvieran en ellas. Así el rey D. Sancho Ramirez, que en el fuero de Arguedas habia declarado que el «infanzon podria comprar de los
»labradores, et los labradores del infanzon,» habia al mismo tiempo prevenido que esto se entenderia sin perjuicio de los derechos que el dueño superior ó directo, si lo hubiese, pudiera tener en la heredad (6). Con igual restriccion se debería entender concedido, por lo tanto, el privilegio de los infanzones de Los Arcos.

(1) Muñoz, *Colec. de Fueros*, F. de Peralta, p. 546.

(2) Zuaznavar, *Ensayo*, etc., t. 2, p. 167.

(3) Moret, *Anales de Navarra*, lib. 20, c. 10.

(4) Zuaznavar, t. 2, p. 204.

(5) *Fuero de Navarra*, c. 1, t. 6, lib. 3.

(6) «Et quiero que haya salvo cada uno dominio é de seynor,» dice el texto del fuero en Muñoz, *Colec. de Fueros*, p. 329, cuyas palabras interpreta Yanguas, *Diccionario de Antigüed.*, t. 1, p. 52, del modo expresado en el texto.

CAPÍTULO II

Del estado de las personas con relacion á las tierras.

I.

INFANZONES.

Los poseedores de las tierras exentas podian, sin embargo, no ser del todo libres, por razon de su estado personal. Los tributos y servicios no se prestaban solamente por la tierra recibida del soberano, sino tambien, y muy principalmente, por el estado civil y político de cada uno. En Navarra habia tambien, como en los demás reinos de España, clases diferentes de personas exentas de tributos, ó más ó ménos gravadas con ellos, segun el lugar que ocuparan en la gerarquía social. Y como mediaban íntimas relaciones de dependencia entre el estado de estas personas y las condiciones de la propiedad, conviene dar á conocer aquel desde luégo, para que éstas sean mejor comprendidas.

Dividíanse originariamente las personas en hidalgos é infanzones, villanos y siervos, como en los otros reinos; pero cada una de estas clases se subdividia después en estados diferentes, cuyo número y circunstancias constituian la especialidad gerárquica de cada uno de los mismos reinos. La calidad de infanzon era comun en Navarra á los ricos-hombres, á los señores solariegos, á los infanzones de abarca, á los caballeros y á los meros infanzones. Los villanos se dividian, como en Castilla, en realengos, abadengos y solariegos; pero estos últimos se subdividian después en collazos, encartados, caseros, de *cosiment* ó comida, y de soldada. Siervos eran los moros del rey ó de señores particulares, y aún muchos cristianos en quienes continuaba siendo hereditaria la servidumbre.

Habia además otra clase de personas llamadas *ruanos* ó *francos*, á la cual pertenecian los extranjeros y los forasteros que no tenian con la corona vínculos de particular dependencia, y vivian sin embargo entre los demás vasallos, con más libertad que ellos y aún con ciertos privilegios. El rey D. Felipe I decia en el capítulo 25 de su *Amejoramiento*: «Entendiendo que en el regno de Navarra ay muitos fueros et diversos et contrarios, »dont se siguen muitos males et daynos á los del Regno..... mandamos

»que segun las *tres condiciones de gentes*, que son en el Regno, es á saber, »Fidalgos, Ruanos et Labradores, se han ordenado tres Fueros: uno es »clamado de Fidalgos: el otro de los Ruanos: el otro de los Labradores, et »que todos los otros Fueros del Regno de Navarra sean reductos á estos, »salvando á cada uno sus franquezas et libertades» (1). Cuando esto escribía D. Felipe, ó no debían quedar ya en Navarra verdaderos siervos, ó quedarían tan pocos que no formarían clase, y por eso sin duda no los hubo de mencionar entre las *condiciones de gentes*. Los ruanos ó francos no importan á mi propósito, pues si en el comercio tenían alguna representación, carecían por completo de ella en cuanto á la propiedad territorial, porque no estaban autorizados para adquirirla. Formaban una clase separada, con autoridades propias y especiales, mas se gobernaban por el fuero general de la tierra en que residían.

Eran ricos-hombres aquellos infanzones poderosos á quienes había dado el rey *en honor* villas ó castillos para su administracion y gobierno, ó rentas equivalentes en premio de sus servicios. Con sus consejos se debían decidir los negocios más áridos del reino: formaban el tribunal de Côte en que debían ser juzgados los navarros; proclamaban á los nuevos reyes, levantándoles sobre el escudo y tomaban parte en su eleccion cuando falta sucesor legítimo á la corona. No podían ser privados de sus cargos y haciendas sino cuando cometían ciertos delitos, y disfrutaban en los lugares de sus honores ciertos derechos y prerogativas feudales.

Señores solariegos eran, como en Castilla, los dueños de villas ó heredades pobladas de collazos ó vasallos, con jurisdiccion más ó ménos limitada sobre ellos, y de quienes recibían pechas y diferentes servicios.

Infanzones de *abarca* se llamaban los hombres de linaje que se ocupaban en la labranza y poseían tierras de la corona con facultad de trasmitirlas hasta su tercera generacion y aún de enajenarlas á otros infanzones de su clase (2).

Decíanse caballeros los infanzones que habiendo recibido órden de caballería de manos de algun rico-hombre ó caballero, se ponían á su servicio ó al de otro señor para hacer la guerra á sus órdenes y con su sueldo. Sus obligaciones y sus derechos eran los de las personas de su clase en Castilla. Cuando no eran puntualmente pagados por el señor á quien servían,

(1) Estos tres fueros que mandó coleccionar D. Felipe no hubieron de llegar á publicarse, puesto que no hay más noticia de ellos que la que ofrece el capítulo 25 de su *Amejoramiento* citado en el texto.

(2) F. lib. 3, t. 6, c. 1 y 2.

podían dejarlo, llevándose las presas que hubieran hecho. Si por enfermos no podían servir personalmente, debían poner en su lugar algún pariente ó escudero. Si cometían delito que menoscabara su dignidad debían ser depuestos y degradados por el señor de la tierra con cierta ceremonia pública y solemne (1).

Eran, por último, simples infanzones todos los demás hombres que por linaje pertenecían á este estado, aunque no fuesen ricos-hombres, señores solariegos, infanzones de abarca ni caballeros. Disfrutaban esta condición los hijos de padre y madre infanzones, ó por lo ménos de padre infanzon, aunque la madre fuese villana, con tal de que no hubiese pagado pecha personal (2). Los infanzones formaban las mesnadas de los ricos-hombres y solían tener de su mano los castillos que estos poseían por juro de heredad ó en honor del rey. Todos ellos, cualquiera que fuese su gerarquía, estaban exentos no sólo de pecha personal, cuyo pago era la señal distintiva del villano, sino también de satisfacer portazgos por las mercaderías que compraran ó vendieran y de contribuir al reparo de las murallas y otras obras públicas (3). Podían beneficiar libremente las minas de hierro que hallaran en sus tierras (4). Sus palacios servían de seguro asilo á los reos que se acogían á ellos, siempre que no fuesen ladrones ó traidores (5). Tenían el singular privilegio de poder hacer dehesa para sus caballos en cualquier lugar realengo (6) y disfrutaban en los montes públicos doble porción de leña que los villanos (7). Acusados de hurto por alguno de estos, quedaban absueltos por la primera vez, jurando su inocencia (8). Si de noche se acogían á alguna cabaña por no poder hacerlo en poblado, el pastor debía recibirle y alimentarle á sus expensas (9). Disfrutaban además el privilegio

(1) F. lib. 5, t. 2, c. 1 y t. 11, c. 1. y lib. 1, t. 5, c. 7 y 8. «Damos por fuero que quando algun cavaillero tan gran mal querra facer (robar ó facer muytos males, por esto que non han vergüenza de deshonorar su dignidad) que de su dinidad deva ser depuesto, eill mismo se cinga su espada é quando esto aya hecho el seinor de la tierra prenga un cuchiello, é sobre sus regnas (riñones) taje la correya de la espada, assí que la correya taxada, caya la espada en tierra, assí que fué ante cavaillero por su locura sea dainado é depuesto por jamás.»

(2) F. lib. 3, t. 8, c. 4.

(3) F. lib. 1, t. 5, c. 4 y 6.

(4) F. lib. 1, t. 5, c. 5.

(5) F. lib. 3, t. 1, c. 3.

(6) F. lib. 6, t. 1, c. 1.

(7) F. lib. 6, t. 2, c. 1 y 2.

(8) F. lib. 5, t. 6, c. 1 y 3.

(9) F. lib. 5, t. 10, c. 5.

odiosísimo de no quedar obligados con los villanos al cumplimiento de sus promesas, como no las hubiesen hecho por necesidad ó en remuneracion de servicios (1). No podian ser juzgados sino por el tribunal del rey y con ciertos requisitos (2): ellos, sus viudas y sus hijas doncellas podian tener *claveros excusados*, esto es, caseros ó criados, villanos del rey, exentos de servicio y pechos (3). Solamente los de *abarca* pagaban pechas reales á manera de censos por las heredades que poseian del rey y esto con sujecion á una tasa módica establecida en el Fuero (4).

II.

VILLANOS Y SOLARIEGOS.

Los villanos de Navarra eran como los de Castilla, descendientes de los antiguos siervos de la gleba, convertidos en tributarios por convenios particulares con los señores, por las nuevas costumbres originadas de las necesidades de la guerra, por mercedes reales ó por transacciones arrancadas á la fuerza. Aunque el estado civil de esta clase numerosa, en los primeros siglos de la reconquista, dependiese exclusivamente de su adscripcion á la gleba, vino con el tiempo á ser independiente de la propiedad territorial, bastando para constituirlo la generacion y el nacimiento. Todo hijo de padre y madre villanos, ó de padre villano, aunque la madre fuese infanzona, era villano pechero (5). Tambien lo era el hijo de infanzon y villana ó cuya madre hubiese pechado al señor del pueblo de su residencia (6). Así, pues, no era sólo villano el poseedor de tierras pecheras, sino todos los que nacian de padres plebeyos y que por este solo hecho pertenecian al dominio de un señor á quien pagaban tributo. Si además el villano tenia alguna participacion en el dominio, en la posesion en el uso ó en el cultivo de la tierra, esta circunstancia modificaba hasta cierto punto su estado, haciéndolo de mejor ó peor condicion relativamente á los tributos y cargas, pero siempre

(1) F. lib. 3, t. 19, c. 6. «Si alguno promete á otro alguna cosa et si es infanzon el que lo prometió, si non quiesere non dara; mas si villano es é promete, deve dar, maguer ad aqueill qui prometió por cuyta ó por servicio que ovieron mestier sil prometieron develi dar.»

(2) F. lib. 2, t. 1, c. 8.

(3) F. lib. 1, t. 1, c. 3, t. 5, c. 1 y 2, lib. 3, t. 8, c. 2.

(4) Los infanzones de *abarca* pagaban por sus heredades realengas mientras no salian de su poder ni del de sus sucesores legítimos hasta el grado de primos hermanos un cahiz de trigo, otro de avena y una *coca* de vino (F. lib. 3, t. 6, c. 1 y 2.)

(5) F. lib. 3, t. 8, c. 3.

(6) F. lib. 3, t. 8, c. 5.

dentro de los límites del vasallaje. Imprimía este tal carácter en la persona, que las leyes no contaban, como en Castilla, entre las facultades del soberano, la de otorgar la hidalguía y castigaban severamente al rico-hombre que armara caballero al hijo de algún villano (1).

Por su calidad personal estaban sujetos los hombres de esta clase á tributos y servicios, ciertos y tasados unas veces, arbitrarios é indeterminados otras. La tierra primitivamente repartida habia dado origen, sin duda, á todos ellos; pero así como unos habian conservado su naturaleza real, así otros la habian perdido por completo, convirtiéndose en tributos personales y confundiéndose de tal modo con aquellos, que parecian todos de esta última especie, cuando los más habian sido reales en su origen.

Organizada la sociedad feudal, principalmente para la guerra, era obligación comun de todos los vasallos, que vivian en tierra de señor servirle con sus armas, darle hospedaje y alimento cuando pasaba por ella y proporcionarle bagajes y trasportes. Estos servicios eran originariamente reales, puesto que se prestaban por el disfrute de tierras cuyo dominio directo se habia reservado el señor, pero siendo por su naturaleza eventuales y de incierta cuantía, dieron ocasion á graves abusos por parte de los que podian exigirlos y á la empeñada resistencia de los que debian prestarlos. Fué menester regularizarlos, tasarlos, reducirlos ó conmutarlos para contener tales excesos y de este modo fueron perdiendo su carácter personal. Fijóse, pues, el tiempo del servicio de guerra: el hospedaje debido al rey se conmutó en los tributos llamados *cena de rey*, *cena de salvedat*, *torta y arinzada* y *petición de cebada*, los cuales consistian en cierta porción de granos, carne, vino y dinero que los villanos pagaban anualmente á la corona, aunque nada poseyeran de ella, en reconocimiento de su soberanía, y tales impuestos de capitación fueron después los conocidos con el nombre general de *pechas* (2).

(1) F. lib. 3, t. 3, c. 5.

(2) A la *cena de rey* contribuía cada pueblo con trigo y cebada ó pan y dinero, segun la costumbre. Dos mujeres solteras pagaban por ella tanto como un jornalero, y dos jornaleros tanto como un labrador pechero, dueño de una yunta (F. lib. 3, t. 4, c. 1.) La *cena de salvedat* se pagaba al rico hombre-cuando posaba en el lugar que tenia en honor, y consistía en cierta cantidad de pan, avena, vino y carne, mayor ó menor segun el número de las casas y la época del año en que verificaba su visita. (Id. id. c. 2.) *Torta y arinzada* se llamaba una cierta porción de carne y vino que el villano pagaba al rey cuando era quito suyo ó al señor solariego cuando estaba bajo su potestad. (Id. id. c. 6.) Llamábase *petición de cebada* una cierta porción de avena que los villanos del rey debian pagar á su señor solariego, cuando lo tenian. (Idem idem c. 3.)

Con ellas contribuían como he dicho todos los villanos, pero la cuota de las mujeres y de los menores era la mitad de la señalada á los varones mayores de edad. Cuando se casaban, seguía cada cónyuge pagando la suya por razón de *torta* y *arinzada*, pero no más de una sola cuota por *corvea* y *fonsadera*. Tampoco satisfacía más de una pecha el hijo que compraba una heredad aunque después heredase otra de su padre; pero si el collazo partía sus heredades entre hijos ó parientes, cada uno de estos debía pagar íntegra su pecha respectiva, con la diferencia ántes indicada por razón del sexo. Por último, el que en distintos lugares poseía heredades de un mismo señor contribuía con una sola pecha, á ménos que alguna de ellas fuese *pleiteada*, es decir, especialmente pactada con el señor (1).

Otros tributos pesaban además sobre los villanos, distintos según la calidad del señorío á que pertenecían. Los vasallos realengos, ora fuesen quitos del rey, ora dependiesen inmediatamente del rico-hombre que tenía el honor de su lugar, pagaban las multas llamadas *homicidios* y *colonias* y los *pedidos*, que eran contribuciones extraordinarias que exigía el soberano cuando casaba á alguno de sus hijos ó necesitaba hacer grandes gastos para la defensa del reino (2).

Había, sin embargo, pueblos exentos de estos tributos, así como había lugares en que los villanos realengos pagaban otros diferentes. Los de Tudela no sufrían más carga que la del servicio militar (3); los de San Vicente de Sosierra y los de La Guardia no daban al rey más que un sueldo anual por cada casa (4); los de Larraun pechaban sólo cuatro sueldos al año (5); y los de Mendigorria pechaban por todo impuesto 3.640 sueldos anuales (6). Mas al lado de estos exentos había otros villanos gravados con tributos especiales, como los de Orcoyen y de la cuenca de Pamplona que pagaban por fonsadera cierta fuerte porción de trigo, cebada, vino y avena (7), y los de otras comarcas sujetas á la pecha de *azaguerri*co, consistente en «cuanto

(1) F. lib. 3, t. 5, c. 11, 13, 15 y 18.

(2) F. lib. 3, t. 19, c. 11.

(3) Fuero de Tudela dado por D. Alfonso el Batallador en 1117, en Zuaznavar, *Ensayo*, etc., t. 2, p. 109.

(4) Fuero dado á otros pueblos por D. Sancho VII, en 1164 y 1172, en Zuaznavar, *Ensayo*, etc., t. 2, p. 135 y 190.

(5) Fuero dado á Larraun por D. Sancho VII, en 1192, en Zuaznavar, *Idem* idem, p. 196.

(6) Fuero dado á Mendigorria por D. Sancho VIII en 1208, en Moret, *Anales*, lib. 20, c. 6, not. F.

(7) F. lib. 3, t. 5, c. 10.

«un ombre puede levar en el ombro» segun la expresion del fuero (1), á las de *Escuranyna* y *Crisuelo*, que se pagaban de noche por ciertos pecheros que se tenian por infanzones y eran en realidad villanos (2), y á otras varias (3). Otros villanos habia llamados *Escancianos* que habitaban en Urroz y otros lugares y tomaban su nombre de la obligacion en que estaban de dar de beber al rey y á sus gentes cuando salian á campaña (4); otros, por último, se denominaban *Cazadores*, porque cuando el rey iba en hueste debian contribuirle con las pechas llamadas *vaca corta* y *asadura*, que algunos interpretan por buey cebado y contribucion sobre la cria de ganados (5).

Todos los demás villanos que no pertenecian al señorío del rey como vasallos suyos inmediatos, ó con dependencia inmediata del que tenia el honor del lugar, eran solariegos, pero con la diferencia de que unos llevaban sólo este nombre por pertenecer á señores seglares y otros se denominaban de abadengo por ser propiedad de iglesias ó monasterios. Estos últimos, si pagaban pecha de reconocimiento cada vez que se mudaba el prelado su señor y contribuian con otros tributos comunes, tambien disfrutaban ciertas franquezas que no conocian los solariegos. Así es que sus hijos, á imitacion de los vasallos realengos no pagaban más que una pecha, mientras conservaban indivisa la herencia paterna, y aún después que dividian los bienes raices de ella, en tanto que no salieran de los parientes dentro del cuarto grado del tronco comun (6). Por privilegio que les otorgó don Sancho el Bueno, podian tambien estos villanos testar en su última enfermedad de los bienes muebles, lo cual les estaba ántes prohibido, porque el señor tenia derecho á heredarles, cuando ellos no los habian legado ó mandado previamente (7). Y por último, la heredad que cualquiera de estos villanos dimitia no quedaba como la solariega á merced del señor, sino que debia ser dada al pariente más próximo del dimitente y en su defecto á otro vasallo (8).

(1) F. lib. 3, t. 7, c. 2.

(2) F. lib. 3, t. 7, c. 7.

(3) Puedo citar entre otras la *alfonsadera* que consistia en cierta cantidad de trigo variable, segun los lugares y la del *basto* que en unos pueblos era de 8 sueldos, en otros de 1 y en otros de 6 dineros. (F. lib. 3, t. 7, c. 3 y 4.)

(4) F. lib. 3, t. 7, c. 5.

(5) F. id. c. 6.—Yanguas, *Diccionario de los fueros de Navarra*; v. Pecha.

(6) F. lib. 3, t. 4, c. 11.

(7) F. lib. 3, t. 5, c. 3.

(8) F. lib. 3, t. 5, c. 12.

Los que peor condicion disfrutaban eran los villanos solariegos. Habíalos de diferentes clases, como indican sus distintos nombres. Llamábanse *collazos*, como en Castilla, los que habían recibido del señor cierta extensión de tierra que no señalaba el fuero, mas se cree fuese una yugada (1). Los que poseían una porción menor se denominaban *encartados*. Tanto aquellos como estos, si disfrutasen al ménos seis robadas de tierra, equivalentes á la décima parte de la yugada, y casa, gozaban derechos de vecindad; en cuyo caso tenía su señor el privilegio tan estimado en Navarra de ser fiador y testigo en el lugar (2). La facultad de poseer collazos en sus heredades libres, era comun á todos los infanzones (3).

Llamábanse villanos *caseros* los que cultivaban heredades del señor, poniendo éste la semilla y ellos los instrumentos de labranza y su trabajo. Los mismos villanos del rey podían ser *caseros* de señores privados, siempre que conservaran bien las casas que tuvieran de la corona, mantuviesen en ellas fuego encendido y pagaran la pecha correspondiente. De este modo quedaban sujetos á un doble vasallaje, pero se eximían de hueste, cabalgada y corveas en las obras públicas (4).

Villanos de *cosiment* ó comida se decían los que contribuían al señor con la mitad de cuanto ganaban, y de *soldada* los que debían entregarle todo el fruto de su trabajo. A unos y á otros debía alimentar su señor en la forma tasada por el fuero.

Los villanos solariegos en general, debían contribuir al señor con la mitad de la *cena de rey*, y á la corona con la otra mitad. Satisfacían además al rey la *cena de salvedad*, al señor la *torta arinzada* y á ambos por mitad, las *fosnaderas*, los *homicidios*, y las *colonias* ó multas. Pagaban igualmente la *petición de cebada*, como los villanos realengos, pero dividiéndola entre el rico-hombre que tuviera el honor del lugar, su prestamero y el señor. Contribuían, por último, á los *pedidos*, cuya mitad era para el rey, pero sin que éste pudiera exigir por tal concepto más que á sus propios collazos (5).

Era obligacion comun á todos los villanos la de trabajar personalmente en las obras públicas y en las heredades que cultivaban por su cuenta el rey y los respectivos señores. Ni las mujeres se excusaban de este servicio;

(1) *Pechas de Navarra*, por el P. S. Francisco Javier, pár. 2.º

(2) S. Francisco Javier, obr. cit. pár. 2.º

(3) F. lib. 2.º t. 5, c. 1.

(4) F. lib. 1.º t. 5, c. 2, lib. 3.º t. 4, c. 4, y t. 8, c. 2.

(5) F. lib. 3.º t. 4, c. 8.

todos debian acudir á él con sus animales é instrumentos de labranza, conducidos por el sayon al paso que señalaba el fuero. Su único estipendio era el alimento del dia que tambien tasaba el fuero con la prolijidad más exquisita (1). Los villanos realengos que pertenecian tambien á señorío solariego debian dar cada año cinco dias de trabajo, tres para el rey y dos para el señor; pero además los solariegos por serlo debian trabajar un dia de cada semana en la heredad del señor, sin que se eximiesen de ello ni aún los clérigos, como labrasen personalmente sus tierras propias (2).

Debían, por último, los villanos dar hospedaje al señor y á su prestamero, para lo cual se designaba por la suerte todos los años en cada lugar la casa que habia de prestar este servicio, así como el de recibir en depósito las prendas que sacara la justicia por pena ó apremio. El vecino á quien tocaba esta carga, quedaba exento durante el año de todas las demás, excepto la de homicidio (3). Esto no obstante, cuando el señor ó el rico hombre dueño del honor del pueblo daba solar á algun villano para que fabricase casa, no podia éste excusarse de darle alojamiento siempre que se lo pidiese. El villano que hospedaba al rico-hombre, debia alumbrarle mientras cenaba. Este hospedaje no podia exceder en ningun caso de 50 dias; pero durante este tiempo no sólo era mantenido el señor, sino todas las caballerias de su séquito, y podia mandar cortar en los montes cierta cantidad de leña, la cual debia ser trasportada por los villanos ó á sus expensas (4).

Tal era la triste condicion de esta desgraciada clase al compilarse en el siglo xiii el código de los *Fueros de Navarra*. La prolijidad extremada con que el legislador tasó en él los tributos y la participacion que habian de tener en ellos los dueños de honores, sus delegados y los señores solariegos, la infinita variedad de impuestos y servicios, la desigualdad de su repartimiento, la pueril minuciosidad con que señalaron las leyes la especie y cuantia de los alimentos que debian suministrarse á los hombres y á los animales sujetos á corvea y hasta el paso á que habian de llevar los sayones á los villanos obligados á prestarla, prueban demasiado que ántes de aquella época habia sido aún más dura la condicion de tales vasallos: que si estos resistieron á veces la prestacion de servicios debidos, los señores

(1) F. lib. 3.º, t. 4, c. 6, y t. 5, c. 16.

(2) F. lib. 3.º, t. 5, c. 17.

(3) F. lib. 3.º, t. 4, c. 6.

(4) F. lib. 3.º, t. 4, c. 7.

los exigieron tambien en ocasiones con arbitrariedad ó injusticia; y que aquellas disposiciones legales se dictaron para poner término á graves conflictos y quizá á rebeliones temerosas. De esto ofrece algun indicio cierta ordenanza de 1465 (1), en la cual refiere D. Juan II que con motivo de las guerras civiles de aquel tiempo entre los bandos feroces de Agramonteses y Viamonteses, muchos pecheros derribaban, quemaban ó abandonaban sus caseríos, para fabricar y adquirir otros en tierras libres, y pretestando no tener obligacion de pechar sino como poseedores de las destruidas fincas, se excusaban de pagar cosa alguna al erario. En su virtud declaró el rey que la pecha en cuestion, que era la llamada *urdea*, no se fundaba solamente en las cosas inmuebles, sino tambien en la condicion de las personas, y en los bienes muebles, y mandó que los tales pecheros á pesar de su cautela, siguieran contribuyendo en la forma acostumbrada por las caserías abandonadas, [y que además se les impusiera pecha por las que hubiesen adquirido de nuevo. ¡Cuán duros é insoportables serian los gravámenes de estos vasallos, cuando hallaban ventaja en renunciar á su propiedad para librarse de ellos! ¡Qué oprimidos estarían cuando no pudieron emplear este desesperado recurso sino al amparo de una rebelion triunfante! Así la fijacion, reduccion ó conmutacion de los pechos y gabelas de los villanos, era entónces la medida más exacta de su progreso moral y material. Por eso cuando los reyes necesitaron de ellos para la poblacion y defensa del Estado, no hallaron más medio de ganar su voluntad que eximirles de las cargas más onerosas, quitándoles malos fueros, segun la expresion del tiempo, reduciendo ó suprimiendo tributos y servicios ó convirtiendo en rentas fijas en especie ó dinero, las que ántes eran exacciones arbitrarias. Esto último sobre todo fué como disposicion obligada de la mayor parte de los fueros de los siglos XI y XII.

III.

SIERVOS Y MUDEJARES.

Inferior al de los villanos era aún el estado civil de los siervos. Hubieron estos de ser muy numerosos en los primeros siglos de la dominacion sarracena, pues aunque la trasformacion que con la reconquista sufrió la propiedad territorial, favoreció la independencia de los hombres ads-

(1) *Ordenanzas del Consejo real de Navarra*, cap. 14, tit. 8, lib. 2.º

criptos á la tierra, no les libertó desde luego de la servidumbre y fué por otra parte á la vez origen de ella. La lucha entre las dos religiones que por espacio de ocho siglos dominaron en la Península, si por un lado aceleró la emancipacion de los siervos cristianos, merced á la necesidad de servirse de ellos en la guerra y al saludable influjo del Evangelio, por otro dió lugar á una nueva clase de siervos, la de los moros cautivos y sus descendientes, á los cuales fué menester aplicar la ley antigua que declaraba á los vencidos despojo legítimo de los vencedores, bien porque como enemigos de la fé no se juzgaba dignos á los sarracenos de optar á los beneficios de la doctrina cristiana, bien porque su servidumbre se estimase represalia indispensable, ya que ellos reducian á cautividad á los fieles aprendidos en la guerra.

Habia, pues, en el siglo xi, no sólo siervos moros, sino tambien siervos cristianos, descendientes de padres libres y en quienes era la servidumbre condicion hereditaria. D. Pedro I de Aragon dió á la catedral de Huesca, entre otros muchos bienes, «un siervo llamado Galindo Iñigo con toda su «descendencia» (1). El mismo monarca dió carta de libertad á quince siervos de Caparros, cuyos nombres no eran ménos españoles ni por lo tanto ménos cristianos que el precedente (2). El rey D. García emancipó á los vecinos de San Anacleto, que eran siervos, enajenándolos después como vasallos, segun se lee en una donacion que posteriormente hizo de ellos el obispo Gomesano (3).

Pero á medida que desaparecian los vestigios de la antigua servidumbre crecia y se aumentaba la nueva. A ella pertenecia en los siglos xii y xiii la mayor parte de los siervos. «Todos los moros é todas las moras, ó que sean «ó de quien sean, son propios especiales del rey, excepto los que el infanzon hubiere traido de otra tierra.» «Como los judios sean cosa nuestra «propia...» dice otro fuero (4). Y en prueba de este dominio del rey sobre los judios y los moros, el hidalgo que mataba á alguno de ellos quedaba sujeto á la multa del homicidio, aunque estaba exento de ella cuando el muerto era algun hombre de su misma clase. La causa de esta diferencia

(1) *Unun mezquinum qui nominatur Galindo Eneconis*, dice el documento publicado por Zuaznavar, *Ensayo*, etc., t. 2.º, p. 113.

(2) Llamábanse estos siervos Sancho, Domingo, Sebastian, Domencos, Martin, Iñigo de Tafalla, García Pede, Juan de Unse, Basalo, Blasco Febrero, Julian, Eriz, Aznar Iñiguez y Galindo Zuria. F. de Caparros en Muñoz, *Coleccion*, etc., p. 390.

(3) *Privileg. de las Prov. Vascong.*, t. 6.º, n.º 239.

(4) F. lib. 3.º, t. 8, c. 6, y *Amejoramiento* de D. Felipe, c. 12.

era que por la muerte del hidalgo no sufria el rey ningun menoscabo en sus tributos (1).

No por eso eran, sin embargo, todos los moros y judíos siervos de la corona, sino vasallos inmediatos suyos con dependencia más ó ménos inmediata. En los primeros tiempos de la reconquista quedaban por esclavos todos los prisioneros de guerra; mas ensanchándose después los límites de la monarquía cristiana, y siendo más difícil mantener poblados todos los lugares reconquistados, hubo necesidad de mayor tolerancia con los vencidos. Así muchos principes y caudillos infieles lograron conservar sus dominios y sus gobiernos, reconociéndose vasallos y tributarios de monarcas cristianos. De este modo, por efecto de honrosas capitulaciones, vino á alternar con las otras clases sociales reconocidas, una nueva llamada de los *mudejares*, que conservó su libertad civil, el ejercicio de su religion, sus leyes y costumbres, aunque con obligacion de pagar ciertos tributos. No dejó de haber, sin embargo, y á la vez, moros esclavos, ya porque lo eran los descendientes de los antiguos cautivos, ya porque las leyes imponian en muchos casos la esclavitud como pena, y ya porque no todos los pueblos ganados á fuerza de armas obtenian capitulaciones ventajosas. Así debia ser tan general la servidumbre entre los musulmanes vencidos, que en el lenguaje comun moro y esclavo eran voces sinónimas, así como en el órden legal los esclavos y los animales eran cosas idénticas. Por eso se lee en el fuero que si «moro ó bestia» hiriere á alguno y su dueño lo negare el herido deberá probar el hecho con dos testigos cristianos, y que si no lo hiciere el dueño, se podrá salvar con juramento, ó deberá entregar por indemnizacion el moro ó la bestia (2). En otro lugar autoriza el mismo fuero al dueño de moro ó mora que huyeren, para registrar en su busca hasta tres casas de otros moros de la misma villa (3). Otro fuero condenaba al que aprehendiera y soltara después al moro ajeno fugitivo y al que favoreciera su fuga, á dar en su lugar otro cautivo semejante (4). De modo que la esclavitud de los sarracenos conservaba todavía el mismo estado legal que en los tiempos del paganismo.

La emancipacion, que continuaba siendo tambien el único modo legitimo de librarse de la servidumbre, no solia otorgarse sino á los que recibian el bau-

(1) F. lib. 5.º, t. 3, c. 1, 2 y 3, y en el *Indice* palabra homicidio.

(2) F. lib. 5.º, t. 1.º, c. 11.

(3) F. id., t. 11, c. 6.

(4) F. lib. 5.º, t. 11, c. 8.

tismo, y aún entonces no era obligatoria como en otras provincias. La reina doña Mayor, mujer del rey D. Sancho el Mayor, manumitió en su testamento á todos sus esclavos moros que se habían convertido al cristianismo (1). En la misma forma se otorgaron otras emancipaciones de que hay memoria: pero todas prueban que aún no habia verdadera incompatibilidad legal entre la servidumbre y la profesion de la fé cristiana, por más que la opinion se inclinase mucho á reconocerla.

Muy superior al de los siervos era el estado de los *mudejares*; pero no igual en todas partes, puesto que dependian de las capitulaciones estipuladas en la recuperacion de los lugares, y por lo tanto de los azares de la guerra. De ello tenemos ejemplo insigne en la capitulacion de Tudela, convenida en 1115 por el rey D. Alfonso el Batallador con los moros de aquella villa. Estipulóse en ella que los moros conservarian las casas que ocupaban dentro de las murallas por espacio de un año, trascurrido el cual, saldrian con sus bienes muebles, mujeres é hijos á habitar en los barrios extramuros; que conservarian tambien entre tanto su mezquita mayor, que serian mantenidos siempre en la posesion de sus heredades de dentro ó fuera de la villa, pagando tan sólo el diezmo; que podrian enajenar estas heredades en todo tiempo, así como mudar su domicilio y marcharse á otras tierras, aunque fueran de moros, con sus mujeres, hijos y bienes; que tendrian por jueces á sus propios alcaldes y alguaciles, sometiéndose siempre el actor al fuero del reo, cuando versare el litigio entre moros y cristianos; que no serian condenados criminalmente por prueba testifical, sino cuando los testigos fueran tambien sarracenos; que no serian obligados por fuerza á servir en la guerra, ni á hacer corveas por sí ni con sus animales; que el cristiano que violara el domicilio de algun moro seria castigado con arreglo á la ley del Zunna, que era la musulmana; que el gobierno superior se ejerceria siempre por un buen cristiano de fidelidad y de buena estirpe, y el inmediato por el *Alfabil* ó la persona que éste nombrara, y por los alcaldes, como ántes de la conquista; que podrian usar sus armas y cultivar sus tierras y que disfrutarían otras libertades y privilegios.

Tal era la condicion de los mudejares de Tudela, ó más bien tal debió haber sido si estos pactos se hubieran guardado fielmente por una y por otra parte. Pero no lo consintieron los ódios de religion y de raza, la soberbia de los vencedores y la desesperacion de los vencidos. La capitulacion no se llevó, pues, á efecto, sino en escasa parte. Los mudejares no fueron tan

(1) Zuaznavar, *Ensayo*, etc., t. 1, p. 208.

libres ni tan independientes como tenían derecho á serlo, por más que su estado fuese siempre muy superior al de los otros sarracenos. Apremiados á convertirse á la religion cristiana, tratados siempre con parcialidad é injusticia por los vencedores, despojados frecuentemente de los bienes que pactos solemnes les aseguraban, sospechados constantemente de rebeldes y traidores, y no más seguros ni ménos despreciados los que se convertían al cristianismo, cayeron en todas las flaquezas y en todos los vicios característicos de los pueblos largo tiempo subyugados por la tiranía. Sus descendientes formaron con el tiempo la clase numerosa de los *moriscos*, que tantas veces pusieron en peligro la paz interior y la seguridad del Estado. No cayeron en la servidumbre como tantos de sus hermanos, durante la reconquista; pero la tiranía los envileció, y envilecidos vivieron también esclavizados.

CAPÍTULO III

De los honores de villas y tierras.

Expuestos en los anteriores capítulos el estado de las propiedades libres y el civil y político de todas las gerarquías de personas que existían en Navarra, será más fácil dar á conocer ahora el estado de las demás propiedades gravadas con condiciones de carácter feudal. Entre las tierras no alodiales figuraban en primer lugar las de *honor*, que los reyes daban allí como en Castilla, á los ricos-hombres é infanzones, para que las defendieran y gobernaran, percibiendo para sí alguna parte de las rentas que en ellas correspondían al Estado. Dábanse en este concepto los castillos con los territorios de su dependencia, las villas y los lugares poblados, en recompensa de servicios, ó como salario debido á los caballeros é infanzones que habían de estar siempre dispuestos á defender la tierra, á seguir al rey á la guerra, y á ayudarle con su gente, con su hacienda y con su persona.

Al rescatar los monarcas navarros el territorio sometido á los infieles, daban á sus caballeros alguna parte de él en dominio absoluto, pero la mayor, y principalmente las villas y castillos más poblados, los distribuían á título de *honor* entre los ricos-hombres. Así debían hacerlo en observancia del juramento que prestaban ántes de ser levantados sobre el escudo,

de «partir el bien de cada tierra con los hombres de la tierra convenientes, á ricos hombres, á cavailleros, á infanzones et á hombres bonos de las villas, et non con estrainos de otra tierra» (1).

Era este además un medio necesario para la defensa y conservación del Estado, por cuanto de otro modo no habría habido ejército que asegurase su independencia, ni caudillos que gobernaran sus pueblos. Disponía en su consecuencia el Fuero general que por el servicio que el rico-hombre debía prestar con todos sus caballeros, era obligación del rey «tenerle casa, y si no.... darle *honor* entegrament, con los homicidios et con todas las calonias, porque pueda tener casa cuando fuere á servir al rey» (2). Además «si el rey daba tierras yermas á hombre extraño, habiendo al rededor infanzones vecinos, pobladores, atendiéndose á los yermos, se tenían éstos por desheredados del rey» y en su consecuencia sin obligación de prestarle los servicios propios de su estado. Había, pues, dos medios de recompensar á los ricos-hombres, uno «tenerles casa» y otro «darles *honor*». La diferencia entre ambos consistía en que el vasallo, pagado del primer modo, recibía heredades en pleno dominio (*casa*), tal vez sin jurisdicción ni derechos soberanos, al paso que el galardonado del otro modo, obtenía desde luego estos derechos en el territorio de su gobierno. Sin embargo, cuando se daban villas ó heredades pobladas ó para poblar y los adquirentes eran ricos-hombres ó infanzones, entendiase comprendido en la merced el señorío jurisdiccional de la tierra, que era objeto de ella, aunque no se hiciese mención en la escritura de semejante circunstancia. Muchos pueblos tenían además el privilegio de que aquel de sus vecinos que conquistara algún castillo lo hiciese inmediatamente suyo (3), y como los castillos y fortalezas, por ser cosas necesarias para la conservación del Estado, no se poseían generalmente á título de alodios, es de presumir que los que disfrutaban de aquel privilegio, poseerían en *honor* los castillos que ganaran en la guerra.

No había ley en Navarra, como la había en Aragón, que obligase á los ricos-hombres á repartir á título de *honor* entre los infanzones y caballeros, sus vasallos, las tierras que en igual concepto recibían de la corona, mas debía de ser costumbre hacerlo, puesto que el Fuero hace mención muchas

(1) F., lib. I, t. I, c. 1.

(2) F. lib. I, t. IV, c. VIII.

(3) Tal es el privilegio que D. Alfonso I dió á los vecinos y pobladores de Casada en el fuero que otorgó á este pueblo en 1129. Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 474.

veces de los caballeros que tenían en *honor* lugares y heredades de los ricos-hombres. Una de sus leyes, al tasar el tributo de *petición de cebada*, señala distinta cuantía, según que quien visite el lugar del honor sea el mismo rico-hombre ó su *prestamero* (1). Dábase este nombre al que por delegación del señor, más ó ménos permanente, ejercía las funciones y cobraba los derechos señoriales en lugares propios ó de los *honores* de los ricos-hombres. Otras veces equipara el Fuero los derechos de estos en los lugares de su honor á los del caballero del mismo rico-hombre que tuviera por él en *honor* alguna heredad ó villa. Es de creer, pues, que así como los *honores* del rey eran el salario que los ricos-hombres recibían por sus servicios, así los *honores* de los ricos-hombres eran la recompensa que recibían muchos caballeros por los servicios que prestaban á los mismos ricos-hombres, sus señores.

El dueño de lugares por título de *honor*, disfrutaba en ellos casi todos los derechos de la soberanía. Los vecinos y moradores de tales lugares eran sus vasallos y en su virtud debían acudirle con los censos, tributos y servicios que los vasallos realengos solían pagar á la corona, tanto por sus heredades, cuanto por su calidad de pecheros. Esto, no obstante, cuando el rey quería favorecer á algun lugar, aunque perteneciese á *honor* de rico-hombre, fijaba y moderaba aquellos tributos, quedando así éste privado de exigirlos mayores, y tal vez de la facultad de imponer otros nuevos. Esto hizo entre otros D. Sancho VII cuando en 1185, eximió á los vecinos de Navascués de todo *pedido* del señor que tuviese en *honor* el pueblo, con tal que le pagasen dos sueldos por cada casa y las *colonias*, y á los infanzones avecindados, de la pecha de reconocimiento (2).

Los tributos y rentas de los pueblos dados en honor se dividían generalmente entre el rey y el infanzon que había obtenido esta merced, con arreglo á fuero ó según la calidad de los vasallos pobladores. El dueño del honor percibía por entero las multas y composiciones en dinero llamadas *homicidios* y *colonias* (3), la *cena de salvedat* y la *petición de cebada*, según se ha visto en el capítulo anterior. Hacía igualmente suyos los tributos y pechas que debían á la corona los villanos, pero con la obligación de dar á ésta una parte de sus productos, según puede inferirse de varios documen-

(1) F. lib. 3, t. 4, c. 3.

(2) Moret, *Anales*, lib. 19, c. 8, núm. 9.

(3) En algunos casos sin embargo, se partían también estas multas entre la corona y el rico-hombre dueño del honor. Así sucedía en Viana, según el fuero de esta villa, de que da noticia Moret en sus *Anales*, etc., lib. 20, c. 10.

tos. Así es que cuando el rey conmutaba estas cargas por una renta fija, solía señalar la parte que á él y al señor habian de corresponder en ella, siendo siempre la de este último la más considerable. Por eso de los 3.640 sueldos á que redujo D. Sancho VIII todos los tributos de Mendigorria, no se reservó más que los 640, segun ántes se ha visto, y de los 7.000 á que redujo los de Artajona, abandonó los 6.000 al rico-hombre que tuviera en honor la villa (1). No causará admiracion tanta desigualdad si se considera que el dueño del honor tenia á su cargo todos los gastos de administracion y defensa de la tierra.

Desde el 15 de Agosto podia el dueño de honor exigir las pechas y los tributos debidos cada año, á no ser que el rey ántes de aquella fecha le vedase hacerlo (2). Mas es de notar que aunque el rico-hombre no debía exigir derechos desaforados «si robaba, facia algun embargo et perdia la honor» no estaba obligado á responder ni á indemnizar á ningun querellante (3). No quiere esto decir que el rico-hombre fuere en tal caso, del todo inviolable, sino que su responsabilidad estaba limitada á la pérdida de su honor, con la cual redimía todas sus faltas.

Las corveas á que los villanos estaban obligados, segun he dicho en el capítulo precedente aprovechaban tambien al rico-hombre. Prestábanse trabajando en los castillos, puentes y muros de las villas; y como el que las tenia en honor estaba obligado á mantenerlas reparadas y en estado de defensa, claro es que cedia en su provecho la parte que tomaban los villanos en estos trabajos.

Ya se ha visto en el capítulo precedente cómo disfrutaban estos señores el derecho de hospedaje; ahora añadiré que el primer día que comian en algun pueblo de su honor debía bendecir su mesa el párroco, acompañado del sacristan; que en los días no festivos debian los clérigos tocar tres veces á

(1) Moret, *Anales*, lib. 20, c. 7.

(2) F. lib. 1, t. 2, c. 3.

(3) F. lib. 1, t. 2, c. 4, dice textualmente: «Empero el Rich hombre si robare ó ficiere algun embargo et perdiere la honor, no es tenuto de dar enmienda ningun querellant. Otrosi, el Rich hombre, si á caballero honor diere, et maill llevare ó robare algo et perdiere la honor no es tenuto de dar enmienda á ningun querellant....» Tan exorbitante hubo de parecer este privilegio á D. José Yanguas, que interpretó en su *Diccionario de los fueros de Navarra* el texto citado en el sentido de que «los ricos hombres no son responsables de los robos que cometieren los caballeros á quienes «dieren algun gobierno y los destituyeren de él.» Mas el fuero dice mucho más, pues que empieza por declarar esta irresponsabilidad al rico hombre «que robare ó ficiere embargo» por sí, y despues la extiende al caso en que el delito sea cometido por el caballero que tuviere el honor de mano del rico-hombre.

nisa para que el señor pudiese si quería, llegar, puntualmente á ella, y que si en la casa de su albergue, caía gotera que le manchase el vestido, todos los villanos labradores debian contribuir á indemnizarle de este perjuicio (1).

No parece que estos dueños de honores tuviesen tantos derechos como los de Aragon en los montes, yermos y otros bienes de uso público. Sin embargo, las mismas leyes que los limitaron en beneficio de los pueblos, revelan un estado anterior, en el cual era inherente á la soberanía real y á la señorial el aprovechamiento de todas las tierras, que por títulos legítimos, no fuesen de propiedad privada. Pero la nobleza navarra, ménos prepotente que la aragonesa, no pudo conservar tanto tiempo la plenitud de aquel dominio. Fuese otorgando á los pueblos primero por privilegios especiales y después por el Fuero general el disfrute de los montes, pastos, aguas y canteras, pero con ciertas limitaciones que descubren la existencia de un dominio anterior en la corona ó en los señores. Era como cláusula obligada de todos los fueros la que señalaba términos y concedía á los vecinos el disfrute de los pastos, maderas y leñas, sin pagar por ello *herbatico*, el uso de los caminos, veredas y puentes sin satisfacer portazgo, y en muchos casos el aprovechamiento gratuito ó mediante un cánón módico, de aguas navegables y flotables. El antiguo barrio de San Saturnino de Pamplona recibió del rey en 1129, montes y prados con exención de peages (2). La villa de Marañon quedó exenta por merced de «portazgo de rey y de herbatico» (3). Los vecinos de Tudela obtuvieron en 1117 el aprovechamiento de pastos y leñas de los montes, el derecho de pescar, hacer molinos, azudes y presas sin perjuicio de la navegacion en el Ebro y la facultad de construir hornos, torres y baños dentro de la villa. A los diez años se ampliaron en parte y en parte se restringieron estos derechos, ya concediendo á los mismos vecinos el aprovechamiento de arbustos y canteras, ya gravando el uso de la pesca con la obligacion de reservar los sollos para el rey (4) en reconocimiento del dominio que ántes tuviera en los rios. Igual facultad de construir molinos en el Ebro, aunque mediante un cánón de cinco sueldos, otorgó después Sancho VII, en 1172, á los de La Guardia y otros pueblos, juntamente con la de cultivar las tierras yermas, pacer gratuitamente en los montes, aprovechar las aguas en riegos y cortar las ma-

(1) F. lib. 3, t. 1, c. 2.

(2) Fuero de San Saturnino, en Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 478.

(3) Fuero de Marañon en id. id., p. 495.

(4) F. de Tudela, en Zuaznavar, *Ensayo*, t. 2, p. 109 y 111.

deras necesarias para fabricar edificios (1). Los vecinos de Antoñana y Ber-nedo no obtuvieron el derecho de levantar molinos en heredades realengas sin partir con el rey sus productos (2), ni los de Viana el de construirlos en el Ebro, sin pagarle cinco sueldos ánuos (3). Todos estos derechos que ahora se concedían por merced á los vasallos más ó menos gratuitamente, habían pues formado parte de la soberanía territorial y se trasmitían del monarca á los señores ó á los pueblos.

De los fueros locales pasaron luego estos privilegios á formar parte de la ley comun; pero no sin llevar á ella también vestigios numerosos de su antiguo origen. Así es que según el Fuero general, los labradores y peche-ros de pueblos realengos podían cortar leña en sus montes, pero no más de la mitad de la que aprovecharían los infanzones (4) y mucho menos de la que podía utilizar el rico-hombre y el señor solariego (5). En los mismos lugares realengos se podían fabricar libremente hornos y molinos, pero no en los de señorío sin licencia del señor (6); lo cual da á entender que si el rey había renunciado al antiguo monopolio de esta industria importante, lo conservaban en su provecho los señores territoriales. Podían los pueblos aprovechar en comun los pastos de sus términos, pero los infanzones goza-ban el privilegio de hacer en ellos dehesas para sus caballos, vedadas para los villanos durante cierto periodo del año; y aunque todos los vecinos qui-sieran roturar estas dehesas ó las boyales, no podían hacerlo como un solo infanzon lo contradijese (7).

En las dehesas de bueyes no podían pacer los ganados de los villanos que no vivieran y labraran en el lugar, pero sí los de los infanzones aunque tuvieran su labranza en otros lugares (8). Los pueblos podían dar las tier-ras incultas de sus términos á infanzones ó villanos, pero no cuando el rey lo prohibiese en uso de su derecho (9). Todos podían cazar en terrenos públicos, pero no perdices con redes, porque este género de caza no era permitido más que al rey y á los infanzones. La razón de esta diferencia

(1) F. de La Guardia y de San Vicente de Sosierra, en Zuaznavar, *Ensayo*, t. 2, p. 190 y 135.

(2) F. de Antoñana, en Zuaznavar, *Ensayo*, t. 2, p. 160.

(3) F. de Viana, en Moret, *Anales*, lib. 20, c. 10.

(4) F. lib. 6, t. 2, c. 1 y 2.

(5) Id. lib. 3, t. 4, c. 7.

(6) Id. lib. 1, t. 3, c. 2.

(7) Id. lib. 6, t. 1, c. 1.

(8) Id. lib. 6, t. 1, c. 3.

(9) Id. lib. 3, t. 19, c. 10.

era, según el Fuero, que «los reyes ni los otros señores non faillarian so-
 »laz de aves ni de canes, si el pueblo hoviese á tomar las cazas menores
 »con ingenios.» Tampoco podían los villanos salir á cazar con provision
 de comida, á no ser que fuesen á matar osos, javalies, ciervos ó cor-
 zos (1); de lo cual se infiere que sólo los infanzones podían ocupar un día
 entero ó más en la caza menor. Por último las minas de hierro, que per-
 tenecían al infanzon cuando nacían en sus tierras, eran propiedad del rey
 cuando se hallaban en las de los villanos (2). Privilegio importante que da
 á conocer por una parte la independencia de las tierras alodiales de los
 nobles y por otra las restricciones con que las demás iban ganándose por
 los plebeyos.

Los honores eran por su naturaleza perpétuos, puesto que el rey no
 podía quitarlos á los ricos-hombres sino por robo ú otro delito grave que
 cometiesen, según se infiere de la ley foral ántes citada, que les eximía de
 responder á ningún querellante por robo ó estafa que le hubiera hecho
 perder su honor. El rey, dice otro fuero, no quite tierra ni honor á rico-
 hombre sino por sentencia del tribunal de córte, y cuando lo hagaen esta
 forma, concédale un plazo de diez días para salir de sus dominios y em-
 bargarle sus bienes (3). Durante este tiempo no debía el rico-hombre ser
 agraviado y podía enmendar los daños por él inferidos ó dar fiadores de
 repararlos, en cuyo caso debía el rey devolverle su honor. Perdiase éste
 también cuando el rico-hombre faltaba al servicio ofrecido y á sus obligacio-
 nes feudales. Así se lee en la carta de concesion de diez caballerías de honor
 en la villa de Roncesvalles, otorgada por D. Theobaldo II á favor de D. Ar-
 naldo Guillen, que el rey no se las quitaria ni menguaria mientras que él
 cumpliese lo pactado y su servicio.

Tampoco podía el rey retener el honor del rico-hombre más de treinta
 días, y si lo hiciese podía éste despedirse ante testigos y después de diez
 días querellarse del rey «como si algo le oviese tollido de lo suyo pro-
 »pio» (4). Prueba evidente de que las tierras y lugares de los honores eran
 como cosas propias de los ricos-hombres.

No se sabe si disfrutarían la misma perpetuidad los honores que los
 ricos hombres daban á los caballeros é infanzones de su servicio, ó por lo

(1) F. lib. 5, t. 9, c. 8.

(2) Id. lib. 1, t. 4, c. 5.

(3) Id. lib. 1, t. 2, c. 6.

(4) Id. lib. 1, t. 2, c. 5.

ménos no hay ley que lo declare como la habia en Aragon. Si por analogi hubiera de juzgarse, se podria afirmar que estos honores se rigieron por las mismas leyes que los inmediatos de la corona; mas si así fué, es muy extraño no encontrar de ello ningun vestigio ni memoria en los documentos de la época.

Los hombres de linaje en Navarra, disfrutaban como los nobles de Castilla, el privilegio de poder pasar al servicio de otro rey y aún de hacer con él la guerra al propio, sin perder por eso sus bienes, á no ser que hostilizaran sus villas ó castillos fuera de la compañía del nuevo señor, ó que tomaran parte de los despojos de las algaradas que se hicieran en tierras del antiguo. De la generalidad con que se expresa la ley que de esto trata, pues dice que el rey «non deve desheredar al hombre de linage que »fuere á otro regno por buscar su pro;» pudiera inferirse que comprendia la inmunidad no sólo á los bienes alodiales y rentas de la corona que el caballero poseyese, sino tambien á las villas y castillos que tuviera en honor (1), mas no es probable que así fuera, porque entónces habrian quedado indefensas y sin gobierno las tierras dadas en aquel concepto, lo cual era tambien causa para que sus poseedores las perdiesen. Así en Navarra no quedaban desnaturalizados los caballeros, que sin incurrir en delitos ni en faltas de servicio, ni en los casos de guerra ántes señalados, abandonaban el reino y buscaban su provecho en otras tierras, sino que quedaban siendo vasallos del rey, aunque sin servirle.

Esta inmunidad estaba limitada sin embargo, por una restriccion importante. Los caballeros ausentes del reino por su voluntad, no estaban exentos de acudir á la hueste cuando el rey los llamase para servir en ella nueve dias y si faltaban perdian su derecho á obtener del soberano «alcal-des, mercados y *cautenedor*,» segun la expresion del Fuero (2). Aunque á primera vista parezca inconciliable esta obligacion con el derecho de hacer la guerra al rey en servicio de otro, quizá se concordaban entendiéndose que este derecho no debía ejercitarse sino después de haber prestado al rey de Navarra el servicio de los nueve dias á que todo infanzon estaba obligado. Si cumplido este tiempo, el infanzon podia lícitamente abandonar la hueste real, nada le impedia volver entónces á la del nuevo señor y ayudarle en la misma guerra.

Otra restriccion de la inmunidad á que me refiero era que si el infanzon

(1) F. lib. 1, t. 4, c. 8.

(2) Id. lib. 1, t. 1, c. 4.

puesto al servicio de extraño monarca, dañaba ó robaba durante la guerra, á alguno de sus compatriotas estaba obligado á indemnizarle cuando volviera á su patria (1).

Los infanzones verdaderamente desnaturalizados, que eran aquellos á quienes el rey extrañaba y confiscaba sus bienes, y los que abandonaban el reino por haberles retenido el rey sus honores más de treinta días, no estaban obligados á prestarle ningún servicio en tanto que no volvieran á su gracia y se les restituyese su hacienda. Léjos de eso, las leyes autorizaban al caballero desnaturalizado por el rey, para causar en su tierra todo el daño que pudieran y aún para retener los castillos y villas de que se hubiera apoderado ántes de su desnaturalización. Pero si el rey le ofrecía su perdón y la devolución de su hacienda, y él resistiese servirle ó restituirle las tierras apresadas, incurria en traición y hacia suyos la corona todos los bienes muebles embargados (2).

Estas franquezas no alcanzaban probablemente al caballero que tenía honor de rico-hombre, pues si éste podía no desempeñar por sí mismo el gobierno superior de sus estados, era poniendo en su lugar un infanzón navarro que le representase con el título de prestamero ú otro semejante, y el cabal desempeño de este cargo no se compadecía con el servicio de otro señor. En Navarra regían disposiciones semejantes á las de Castilla en cuanto á la tenencia y devolución de los castillos; lo que hoy no sería fácil averiguar es en cuál de estos reinos estuvieron primero en uso (3).

CAPITULO IV

De las tierras de señorío.

Daba también el rey á los infanzones tierras en señorío por razón de servicios y con expresa condición de prestarlos. El dominio así adquirido era el que se llamaba señorío solariego, y tenía no sólo todos los caracteres esenciales, sino también los accidentales del feudo. Verdad es que no suena esta palabra en las escrituras de tales concesiones de tierras, ni en

(1) F. lib. 1, t. 5, c. 3.

(2) Id. lib. 1, t. 2, c. 5 y t. 1, c. 3, 4 y 5.

(3) Id. lib. 1, t. 4, c. 1.

toda la legislación foral; pero ¿qué importa no oír el nombre cuando se está viendo la cosa? Daba el rey el señorío de villas y castillos con sus respectivos territorios á hidalgos y caballeros que se ponían por ello á su servicio, rindiéndole homenaje como vasallo á señor, con las formalidades y requisitos acostumbrados en la Europa feudal. En su virtud, los que hasta entónces habian sido vasallos inmediatos de la corona, pasaban á serlo del nuevo señor del lugar y éste adquiría el dominio directo y la jurisdicción del territorio, con sus rentas y emolumentos, quedando obligado á servir al rey con todo lo que de él recibía y con su propia persona. Tanto el señorío así adquirido por el rico-hombre, como el que todavía se reservaba el monarca sobre su inmediato vasallo, podía cederse y enajenarse á otro, resultando así una verdadera subinfeudación. A veces el que era dueño absoluto de algun lugar, sin deber por él nada al rey, buscaba la protección de la corona, rindiéndole vasallaje y reconociendo que lo que ántes tuviera como suyo propio no lo tendría en adelante sino como emanado de ella. A veces el noble extranjero que buscaba en nuestra tierra hospitalidad y provecho, se hacía vasallo del rey y se obligaba á servirle como tal, recibiendo por ello el señorío solariego de alguna villa ó castillo. Ya un infanzon de linaje se sometía á igual servidumbre, con la esperanza tan sólo de recibir algun día la debida recompensa, ya otro noble caballero contraía los mismos compromisos, á cambio, no de villas ni castillos, sino de rentas señaladas sobre el tesoro del rey.

La historia de Navarra ofrece ejemplos numerosos de tales infeudaciones. Sancho Garcés poseía en 1096, como emanado de la corona, el castillo y villa de Fanianar, y el rey D. Pedro I los donó en el mismo año á la catedral de Huesca, con sus términos y hombres en cuanto le perteneciesen, pero entendiéndose que dicho Garcés y sus descendientes tendrían en adelante «por Jesus Nazareno, San Pedro y el obispo, lo que hasta entónces habian tenido por el rey, sirviendo al prelado del mismo modo »que debían servir al monarca, y que no perderían su derecho, como no »hicieran contra el obispo cosa por que lo mereciesen». En iguales términos donó el rey á la misma iglesia la villa y castillo de Tabernas, que tenía por la corona Fortun Lopez y habian de heredar sus hijos y descendientes (1). La iglesia no adquirió, pues, por esta donación, sobre las villas

(1) Zuaznavar, *Ensayo sobre la legislación*, etc., t. 2, pág. 113, inserta este documento. Dice en él el rey: «Addo quoque... castrum et villam quæ dicitur Fanianare... hoc tenore, ut Sancio Garces et posteritas habeat ibi pro Jesu Nazareno, et pro

y castillos nombrados, más que el señorío directo y feudal que hasta entonces tuviera la corona, quedando en su consecuencia sujeta aquella propiedad á tres dominios distintos: el del rey, el del obispo y el de Garcés ó Lopez, en lugar de los dos que ántes tuviera. Resulta también de este documento, que el señorío inmediato de aquellos caballeros en los lugares nombrados era perpétuo y hereditario; que no podía perderse sino por causa legítima, y que obligaba á prestar servicios al señor superior de quien dependía, los cuales eran además transmisibles por medio de la infeudación. Esta mutación de dominio exigió sin duda que Sancho Garcés y Fortun Lopez prestaran juramento de fidelidad y vasallaje al obispo de Huesca, pues aunque no haga mención de ello el documento citado, era condición indispensable para que fuera reconocido su derecho por el nuevo señor, como se probará con otros ejemplos y con la misma legislación foral.

Un caballero llamado D. Bibiano, dueño del castillo de Agramont se entregó con él en 1205 á D. Sancho VIII de Navarra, otorgándole carta de vasallaje, cuyo contenido es la suma de las obligaciones y derechos que mediaban en este género de transacciones. En aquel documento declara D. Bibiano que se hace «vasallo del rey con su cuerpo y con su castillo;» que en todo tiempo haría guerra y paz por el rey contra todos los hombres del mundo, y reconocerían su señorío, él, sus descendientes y cualquiera otro que poseyera el expresado castillo: que haría homenaje á D. Sancho de cumplir lo convenido, so pena de quedar por traidor si no lo hiciera y que si causara daño ó agravio á algun vasallo realengo ó á cualquiera otro, se sometería al juicio del tribunal del rey. Este prometió á su vez defender á D. Bibiano contra todo hombre; veintisiete caballeros que intervinieron en el acto y cuyos nombres inserta el documento, juraron hacer cumplir sus promesas al nuevo vasallo, y en señal del dominio real á que se sujetaba el castillo, enarboló D. Bibiano sobre sus torreones la bandera del rey de Navarra (1). Sesenta y tres años después aparece un Arnalt Guillen rindiendo homenaje al rey D. Theobaldo II por el mismo castillo, con igual obli-

«Santo Petro et episcopo prædictæ Sedis, quod hactenus pro me habuit, serviatque
«eis quemadmodum mihi servire debuit, nisi ipse vel aliquis successorum suorum
«tale quid contra episcopum egerint, quod illud perdere debeat. Adicio quoque
«huic donationi castrum vel villam quæ dicitur Tabernas.... ut teneat illud For-
«tunio Lopez et posteritas sua eodem modo quo supra dictum est.... de Sancho
«Garcés.....»

(1) Moret, *Anales etc.*, lib. 20, c. 6, nota F, publicó traducida y compendiada esta carta de homenaje.

gacion de servirle contra todo hombre del mundo y además con las condiciones siguientes: 1.ª, que cualquiera que fuese señor de la fortaleza la entregaria al rey cuando la pidiese para hacer guerra ó paz; 2.ª, que el que sucediese en aquel señorío, ó la tuviese al vacar la corona, prestaria en el término de treinta dias su juramento y homenaje al rey que á la sazón reinára; 3.ª, que los señores de Agramont no harian ni aconsejarian hurtos, ni robos, como no fuese á enemigo conocido, y que si lo hicieran, quedarian á merced del rey en cuanto al castillo, y sus casas, si el robo fuera manifiesto, y si no lo fuera, se someterian al juicio del tribunal del rey; y 4.ª, que tomando el rey el castillo habia de devolverlo dentro de los cuarenta dias siguientes al en que se hiciese la paz (1).

Los que siendo dueños absolutos de villas ó fortalezas importantes, se sometian con ellos al dominio feudal de la corona, lograban por lo comun algo más que su proteccion, pues como vasallos del rey entraban después á la parte en la distribucion de los honores y rentas reales. Así, el mismo rey D. Theobaldo, al año siguiente de recibir de D. Arnalt Guillen el homenaje de Agramont, le hizo merced de diez caballerías de honor en Roncesvalles, para él, sus hijos y los que sucediesen en aquel castillo (2).

Las cuestiones entre la corona y sus vasallos sobre la propiedad de tierras ó villas, se transigian á veces mediante la infeudacion de éstas. D. Sancho VIII disputaba con D. Bartolomé Jimenez de Rada, que fué después arzobispo de Toledo y escritor famoso, y con sus hermanos, sobre el señorío de Castejon, y aunque el D. Bartolomé se dió por tan agraviado que trató de desnaturalizarse pasando á otro reino, transigió su pleito en 1222, recibiendo aquella villa como de merced del rey y rindiéndole por ella pleito-homenaje. En la carta que de ello otorgó, prometió servir al monarca «con todo lo que habia y con todo lo que él le diese; amar todo que él amase y desamar todo lo que él desamase; hacer paz y guerra contra todos los hombres del mundo, con sus casas y fortaleza de Rada, recibiendo en ellas al rey y á los que por él fuesen enviados, y entregar estas mismas casas en rehenes, para garantir el cumplimiento de lo pactado» (3).

En iguales términos devolvía á veces el rey las tierras alodiales confiscadas por delitos de sus dueños. Así la villa de Ostavales confiscada á Pedro Arnalt, su dueño, le fué restituida en 1228 por D. Sancho VIII, mediante

(1) Moret, *Anales* etc., lib. 22, c. 6, nota B.

(2) Id. id., lib. 22, c. 6, nota B.

(3) Id. id., lib. 20, c. 11, nota D.

la renuncia que hizo de su derecho y el homenaje que rindió al rey de ayudarle contra todos los hombres del mundo (1). El mismo monarca, para castigar la sedicion de la villa de Sadava, propia á la sazón de D. Fertaner de Alarcon, menor de edad, obligó á la madre de éste, que en su nombre la poseia, á renunciarla en favor de la corona. Tres años después el rey D. Theobaldo I la mandó devolver al mismo D. Fortaner por intercesion de los condes de Bearne y el pago de 20.000 maravedis que importaban los daños causados por la sedicion; pero como él no pudiese entónces pagar esta suma, en su lugar rindió homenaje al rey por el señorío de la villa, prometiéndole «servirle como los ricos-hombres que tenian honores en »Navarra» (2).

Era cláusula esencial en estos contratos la promesa de servir al rey, pero no siempre «contra todos los hombres del mundo,» segun la frase de los diplomas y sin excepcion alguna, pues pudiendo un mismo vasallo tener á la vez más de un señor, el homenaje que rendia al último de ellos solia comprender salvedades á favor de los anteriores. Hay de esto muchos ejemplos particularmente cuando el nuevo vasallo recibia del monarca un estipendio fijo en dinero en lugar de tierras. Así D. Ramon Guillermo, vizconde de Sola, que en 1245 se hizo vasallo de D. Theobaldo I, por sesenta libras de buenos sanchetes, prometió servirle contra todos los hombres del mundo, «salvo contra aquella tierra que el rey de Anglaterra tiene quitament en so mano» á ménos que éste monarca, dueño á la sazón de las tierras vecinas de Francia, invadiese las de Navarra, pues que en este caso, tambien ayudaria á combatirlo, á pesar del vínculo anterior de vasallaje que le ligaba con el monarca británico (3).

Otras veces al constituir el caballero su segundo vasallaje prometia, para el caso de guerra entre sus dos señores, no servir al uno contra el otro sin devolverle préviamente las tierras que de él tuviera. Así Arnalt Raimundo, vizconde de Tartax, que siendo vasallo del vizconde de Bearne, hizo en 1196 carta de homenaje á D. Sancho VIII, le prometió en ella servirle, aun contra su primer señor, pero devolviendo á éste previamente el *honor* que de él habia recibido (4). Mas esta no era tampoco obligacion ineludible, puesto que admitida tambien la facultad de servir en la hueste por sustituto, podia el vasallo cumplir á la vez con todos sus señores en el caso de haber guerra

(1) Moret, *Anales*, lib. 20, c. 12.

(2) Id. id., lib. 21, c. 5, nota C.

(3) Id. id., lib. 21, c. 5, nota D.

(4) Id. id., lib. 20, c. 2, nota A.

entre ellos. Así D. Remon Arnalt, sucesor de D. Arnalt Raimundo en el vizcondado de Tartax, era tambien vasallo del rey de Inglaterra, y al rendir homenaje á D. Theobaldo I en 124 por Villanueva y otras tierras, declaró que en el caso de haber guerra entre ámbos monarcas, pondria un caballero que sirviera en su lugar al de Navarra, por cuanto «él debía ayudar con su cuerpo al de Inglaterra» (1).

Aquel á quien concedia el rey el señorío solariego de un territorio, se hacia señor, como en Castilla, de todos los villanos que moraban en él, á excepcion de los que fueran collazos de la corona. En su virtud percibia de ellos, además de la pecha de reconocimiento, el tributo de *torta y arinzada*, y la mitad de los de *cena de rey*, *peticion de cebada*, *fonsadera*, *homicidios*, *colonias* y *pedidos* (2); heredaban sus bienes de todas clases cuando no dejaban parientes cercanos; y los muebles cuando no hacian testamento ántes de su última enfermedad; les exigian corveas en los términos expresados en el anterior capítulo; cortaba en los montes tanta leña como el rico-hombre que tuviera el honor de la comarca, y siendo varios en un pueblo los señores solariegos, podia cortar cada uno tantas cargas cuantos fuesen sus particulares vasallos (3). Estos derechos ejercia el señor en los pueblos en que habia además collazos del rey, pues en los que eran de su propiedad exclusiva no se pagaban más tributos que los que él exigia, aunque en su producto tuviese la corona la participacion ántes señalada (4).

En los montes, pastos, aguas y demás cosas de uso público, tenian los señores solariegos los mismos derechos que los de honores, puesto que unos y otros poseian los que primitivamente correspondian á la corona, segun se ha dicho en el capítulo precedente. Suyos eran, pues, los peajes, las *leztas* ó impuestos de aduana, y los demás monopolios de que se ha hecho mencion.

Cuando el señor no utilizaba inmediatamente el dominio de sus tierras, las daba á otros hidalgos para que las rigieran y beneficiaran como en sub-feudo, ó las dividian entre collazos para que las poblaran y cultivaran con ciertas condiciones. Así muchas escrituras antiguas aparecen autorizadas por caballeros que expresan *dominar* en tales lugares, ó *tenerlos por*

(1) Moret, lib. 21, c. 6.

(2) F. lib. 3, t. 4, c. 1, 2, 3, 8.

(3) F. lib. 3, t. 5, c. 14, t. 4, c. 5, t. 5, c. 3, t. 4, c. 6, t. 5, c. 17, t. c. 7.

(4) Esto es lo que significa la frase del Fuero cuando dice que estos lugares en que el rey no tenia collazos, «ni por consiguiente era vecino, no podia demandar á ningun hombre por su villano.» Lib. 6, t. 5, c. 7.

mano de otro. En el testamento de D. Jimeno Aznares y su mujer doña Elvira, otorgado hácia el año de 1145, se hace mencion de un D. Sancho Iñiguez, que *tenia* á Peñalen, y además, *por mano* del obispo D. Lope, el castillo de San Estéban de Montjardin (1); lo cual queria decir que habia recibido del rey la tenencia ó señorío de aquella villa, y del obispo el subfeudo ó sub-señorío de este castillo.

Era fuero de la tierra que el infanzon dueño de heredad libre, que con ella hiciere verdaderos collazos, tuviera en ellos los mismos derechos que el señor de *honor* en sus villanos, y que el que hiciera con las mismas heredades *villanos encartados*, tuviera en ellos los derechos del señor solariego en los suyos (2). De este modo, sin concesion especial de la corona, y solamente por el hecho propio y ministerio de la ley, podia el infanzon propietario adquirir autoridad y jurisdiccion y constituir con sus tierras un verdadero estado feudal.

El señor solariego, cualquiera que fuese el origen de su título, percibia de sus vasallos una renta fija ó una participacion en los frutos, segun lo pactado ó lo establecido por la costumbre local. Pero cuando de los colonos hacia collazos ó villanos encartados, dando á cada cual la tierra necesaria para lo uno ó para lo otro, cobraba además de la pecha real, los tributos personales inherentes al vasallaje y disfrutaba el privilegio tan estimado en Navarra, de poder ser en el lugar fiador y testigo (3). Si el señor daba á cultivar sus heredades á villanos *caseros*, recibia una parte alicuota de la cosecha, y la *pecha real* ó parte de ella, cuando los colonos eran excusados de dar tributo al rey, lo cual solia ser frecuente (4). Si la heredad se ponía en manos de vasallos llamados de *cosiment* ó comida, percibia el señor la mitad integra de todo el fruto (5). Siendo los colonos vasallos de *soldada* ó

(1) Moret, *Anales*, lib. 18, c. 6, nota A.

(2) F. lib. 3, t. 5, c. 1.

(3) San Francisco Xavier, *Pechas de Navarra*, pár. 2.º F. lib. 3, t. 7, c. 8.

(4) F. lib. 1, t. 5, c. 2, lib. 3, t. 4, c. 4 y t. 8, c. 2.

Los hombres de linaje, sus viudas, y sus hijas, doncellas que tenian vecindad y los abades seglares, hijos de caballeros y de dueñas, disfrutaban el privilegio de eximir de tributos á sus jubereros, claveros, caseros y mancebos de soldada, hijos de villanos. Mas si eran pecheros conocidos, con tierras de la corona, no se eximian de la *cena de rey*, la *cena de salvedat*, la *peticion de cebada* y el *homicidio*. Los hombres de linaje no concedian sin embargo estas exenciones sino á cambio de rentas ó servicios con que les contribuian sus excusados, y por eso llegó á crecer tanto el número de éstos, que fué menester reducirlo y tazarlo por disposiciones generales.

(5) F. lib. 1, t. 5, c. 9.

siervos, percibía el señor todos los productos, así como eran suyos todos los gastos.

No es conocida la proporción en que solían estar las pechas reales con los productos de las heredades que las devengaban, aunque sobre este punto hubo costumbres varias, según los lugares y las circunstancias y antecedentes de sus vecinos. En unas partes se pagaba por pecha una cantidad fija por heredad, y en otras un tanto por cada robo ó medida de tierra, que era lo que llamaba el Fuero pagar por *piertega* (1). Había heredades que pagaban pecha *pleiteada* ó pactada, en vino ó dinero, la cual era inmutable, aunque se partiesen aquellas entre varios dueños, así como había otras que cuando se dividían, devengaban tantos tributos cuantos eran los partícipes en su dominio (2). Pero el señor que daba á su vasallo dos ó más heredades, no podía exigirle sin embargo más pecha que la acostumbrada en el lugar de su domicilio, á ménos que la otra fuese *pleiteada*, en cuyo caso tenía derecho á ambas (3). Por último, la pecha era exigible aunque se perdiese la mayor parte del fruto por caso fortuito, siempre que el recogido no fuese menor que la carga que un villano podía llevar al hombro (4).

Estas circunstancias arguyen al parecer cierta contradicción en la calidad de la pecha, porque si el vasallo no debía pagar más que una, cualquiera que fuese el número de sus heredades, el tal tributo era más personal que real: y si perdido todo el fruto no debía pechar el vasallo, claro es que ésta se pagaba más por la heredad que por la persona. Pero lo que de estas disposiciones heterogéneas se infiere, es el origen servil de la pecha y la mudanza que con el trascurso del tiempo iba experimentando su naturaleza. Siendo la pecha en su principio la contribución personal del siervo que vivía en la heredad del señor y con sus frutos, era natural que su cuantía no dependiese de la de las heredades que cultivara. La ley que así lo declaró convenía, pues, con el antiguo estado de los villanos. Mas éste se fué mejorando con el tiempo; de siervos que eran vinieron á convertirse en vasallos solariegos, y por consiguiente los tributos que en aquel concepto pagaban, debieron de experimentar en su naturaleza un cambio semejante que consistió en venir tomando lentamente la calidad de reales los que

(1) F. lib. 3, t. 5, c. 20.

(2) *Amejoramiento del rey D. Felipe*, c. 33.

(3) F. lib. 3, t. 5, c. 18.

(4) F. lib. 6, t. 3, c. 5.

antes eran personales del todo. Mientras que esta trasformacion se verificaba, tuvieron, pues, las pechas un cierto carácter mixto de real y personal que fué causa en tiempos posteriores de graves dudas y reñidas disputas entre los eruditos y los jurisconsultos; porque coleccionados entre tanto en un solo código fueros de épocas diversas, resultó haber entre ellos leyes que atribuian á las pechas carácter personal, al lado de otras que se lo concedian real é independiente de la persona. Reales eran, sin duda, las pechas *pleiteadas*, y por eso deseaban tanto todos los villanos convertir en tales las suyas. En el *Amejoramiento* del rey D. Felipe se lee que habiendo acudido los labradores con esta pretension á la corona, se dió comision al tesorero del reino para que *pleitease* por vino, dinero ó trigo las pechas de todos los vasallos que lo solicitaran (1).

El dominio señorial era, como el de los *honores*, perpétuo y hereditario y se perdía solamente por faltas ó delitos contra el rey ó por no cumplirse las obligaciones del vasallaje. Así estaba ordenado por ley y así se practicaba segun las escrituras y cartas de homenaje. Estas obligaban y favorecian tanto al que las otorgaba como á sus sucesores, y la cláusula de no haberse de perder la tierra infeudada sino por faltas ó delitos era comun en muchos de aquellos instrumentos. De ello ofrecen ejemplo la escritura de homenaje de D. Biviano á D. Sancho VIII por el castillo de Agramont, la del que prestó después por el mismo castillo, Arnalt Guillen á D. Théobaldo II; la de D. Bartolomé Jimenez por sus casas y castillo de Rada y otras muchas.

No dicen claramente las leyes si la pena de perdimiento de bienes de señorío por causa legítima debia imponerse por el tribunal de córte, ó se podia decretar gubernativamente por el rey. Inclínome á lo primero, porque si el señorío de honor no podia perderse sino prévio juicio y en virtud de sentencia de tribunal competente, con más razon deberia suceder lo mismo respecto al señorío solariego que era por su naturaleza más estable é independiente de la corona. Además al exigir el Fuero aquel requisito para que los honores fueran legalmente confiscados, comprendió sin duda bajo esta denominacion aquellos otros señoríos otorgados por la corona con cláusulas y ceremonias feudales, pues aunque en realidad hubiera diferencia entre ellos, confundíanse muchas veces, no sólo en el lenguaje vulgar, sino tambien en el oficial de las leyes, llamándose *honor* todo lo que se recibia del rey á título de recompensa noble y con obligacion de prestar algun ser-

(1) Cap. 23.

vicio público propio de caballeros. Y había motivo en verdad para esta confusión, siendo tan parecidos el estado legal de unos y el de otros señores, y debiéndose acudir para conocerlos al *Fuero general de Navarra*, que es quizá el monumento de legislación más incorrecto de cuantos nos ha legado la edad media en España.

CAPÍTULO V

De las tierras pecheras.

Conocidos los derechos de los dueños de *honores* y de señoríos solariegos respecto á sus vasallos, fácilmente se comprende el estado de las tierras tributarias. Eranlo en Navarra todas las que poseían los villanos, puesto que las alodiales ó libres estaban sólo en poder de los infanzones, y por el mero hecho de trasferirse á aquellos perdían esta cualidad. Dependía, pues, del estado de las personas el legal de las tierras, aunque con el tiempo fuera preciso admitir excepciones de esta regla, para que no vinieran á ménos los derechos señoriales.

Eran tierras pecheras aquellas cuyo dominio y posesión habían ganado los villanos por mercedes de los reyes ó de sus señores, ó por prescripción de largo tiempo y por las cuales pagaban las pechas acostumbradas. Ya he dicho en los anteriores capítulos cuáles eran estas pechas, su origen personal y sus vicisitudes. Básteme, pues, ahora añadir algunas noticias para dar á conocer mejor la naturaleza y variedad de las propiedades tributarias.

Los villanos de todas clases disfrutaban en general tierras de realengo, de abadengo ó de señorío, pero también había algunos que no las poseían de los señores de quienes se decían vasallos. Esto sucedía á los solariegos que disfrutaban heredades de sus señores, y pagaban pecha al rey á pesar de no poseer nada de la corona. Este doble vasallaje hubo de deber su origen á aquellas mercedes en que el rey se reservaba ciertos tributos de los villanos y les mandaba contribuir al señor con otros, procedentes de las tierras que cultivaban. De lo que no hallo ejemplo alguno es de villanos que poseyendo heredades de algún hidalgo, no le pagasen pecha ni le reconociesen por señor. Así es, que podía haber vasallajes sin tierra, pero no merced de tierra sin vasallaje.

Eran, pues, tierras tributarias las de los *collazos*, y las de los villanos

encartados, porque pagaban *pecha* real: eranlo tambien las de los villanos *caseros* y las de los vasallos de *cosiment*, porque contribuian con una parte alicuota de los frutos; pero no lo eran las de los vasallos de *soldada*, pues correspondiendo al señor la cosecha entera de estas tierras, no tenia en ellas el colono ningun género de propiedad. Tambien solian ser tributarias las tierras de moros y judios, puesto que unos y otros cultivaban las de la corona con servidumbre y obligaciones semejantes á las de los villanos, ó bien eran aparceros, por mitad de frutos, en heredades de particulares. Asi consta que habiendo ocupado los cristianos las tierras que quedaron abandonadas en Tudela, después de la conquista de 1129, se quedaron los moros en muchas de ellas como colonos aparceros, por cuya razon no pagaron los dueños en mucho tiempo más que la mitad del diezmo eclesiástico (1). Eran últimamente, aunque por excepcion, tributarias las tierras de los infanzones de *abarca*, aunque sus *pechas* estaban rigurosamente tasadas por la ley y eran más reducidas que las de los villanos.

La heredad infanzona no se hacia *pechera* sino cuando pasaba al dominio de algun villano, ó perdia su dueño el estado de infanzonería. Esta pérdida tenia lugar como pena, cuando el caballero cometia perjurio, deponiendo en pleito de hidalguía, ó cuando incurria en delitos que daban lugar á la degradacion, mediante la ceremonia prescrita por la ley (2). Pero rarisima vez enajenaba el infanzon á villanos el dominio pleno de sus heredades, pues para que éstas no perdieran su inmunidad, no se solia transmitir más que su dominio útil ó su usufructo á los hombres de aquella condicion.

Las heredades *pecheras* tampoco se hacian infanzonas sino en casos muy señalados. Para ello habria sido menester que fuesen enajenadas á infanzones, y semejante enajenacion estaba rigurosamente prohibida; pues aunque no habia ley general expresa que así lo determinara respecto á las heredades *pecheras*, se infiere tal prohibicion, de la análoga respecto á los infanzones de *abarca*, que contiene el fuero, y de otros documentos antiguos. Los vecinos de algunas villas y lugares obtuvieron por fuero y privilegio especial, la facultad de «comprar y vender libremente á otras cualesquiera personas» las tierras recién pobladas, lo cual prueba que ántes tal libertad no existia. D. Sancho Ramirez otorgó á Argueda el privilegio de que los infanzones pudieran comprar sus heredades á los labradores, y estos las de aque-

(1) Moret, *Anales*, lib. 17, c. 7.

(2) F. lib. 3, t. 3, c. 1.

llos, aunque quedando á salvo en todo caso los derechos del señor (1). Igual beneficio concedian los fueros de Nájera y La Guardia, usados en tantos pueblos de Navarra. Aún fué más expícito el fuero de Los Arcos, declarando que el infanzon que en aquella villa comprara heredad de villano, la haría infanzona, como si la hubiese adquirido de otro infanzon (2). Si, pues, los villanos hubieran tenido el derecho de enajenar libremente sus heredades á los infanzones, no se les habria otorgado como un privilegio y un estímulo para el fomento de la poblacion.

Debieron, pues, estar por regla general prohibidas tales enajenaciones, y si el fuero no hizo mencion de ellas, seria tal vez porque al tiempo de recopilarlo, habria ya caído en desuso la prohibicion por privilegios particulares. Seria además inconcebible que hubiese sido lícito á los infanzones adquirir y libertar de tributos las heredades de villanos, y que al mismo tiempo les estuviese rigurosamente prohibido, como lo estaba, adquirir las de infanzones de abarca, que estaban ménos gravadas. Si los infanzones comunes podian comprar libremente las heredades pecheras, ¿cómo justificar la prohibicion de que las adquiriesen los infanzones de abarca que no estaban exentos de pechar, como los otros?

Las heredades pecheras del rey no podian pasar á la iglesia ni á manos de francos ó extranjeros, sin real licencia. «Villano que dé peita al seínor, » dice una ley, ninguna órden non le deve rescibir... nin mueble suyo si » non fuere con amor del seínor. » Y la razon es óbvia, pues recibiendo la órden al villano por vasallo, alteraba su condicion y con ella la de las heredades que poseyera. Por eso habiéndose litigado sobre la legitimidad de la adquisicion de cierta casa por el convento de Fuenmayor, de la órden de San Juan, declaró el rey D. Theobaldo I, que los forasteros no podian adquirir bienes raices de los labradores de su reino, ni aún de los francos, á no ser con real licencia (3). Tambien la necesitaba la iglesia para enajenar sus heredades pobladas de collazos, aunque no las otras (4). Luego fué relajándose la prohibicion de enajenar tierras á los francos ó extranjeros, mediante la costumbre de habilitarlos para adquirirlas, con la condicion de quedar sujetas á las mismas cargas que bajo el dominio de los naturales tuvieran. Así fué ley general que «si algun franco de villa com-

(1) Muñoz, *Colec. de fuer.*, p. 287.

(2) Zuarnavar, *Ensayo*, etc., t. 2, p. 204.

(3) Moret, *Anales*, lib. 21, c. 5, n. 4.

(4) Estas son las que el Fuero denomina heredades *planas* porque carecian de collazos, Lib. 3, t. 12, n. 13.

»pra heredad en villa realenca ó de fidalgo ó de órden, deve oir el fuero de »la villa dont la heredat es» (1); lo cual quiere decir que tal extranjero quedaba sujeto en cuanto á la heredad adquirida, al fuero del lugar.

Habia sin embargo, algunos casos en que con arreglo á fuero se podia convertir la heredad pechera en infanzona, pero excepcional y muy poco frecuente. Cuando faltaba el vasallo solariego sin sucesor legítimo, recobraba el señor su heredad aun teniendo por ella solamente la parte de un villano en pastos y roturas, pero su heredero ó causa habiente, después de poseerla un año y un día, la hacia infanzona, adquiriendo en su consecuencia por ella en los derechos de vecindad mencionados, la participacion correspondiente á dos villanos claveros ó caseros (2). Aun habia otros medios legales de mejorar la condicion de las heredades pecheras.

Tenia derecho el señor á que el villano le mostrase todos los años estas heredades y á que las apeara cuando surgiese cualquier duda sobre su identidad, cabida ó linderos. Por eso dice una ley: «Si el señor solariego disiere »al villano solariego, ensiname mi heredat por la qual me debes peita, »vel ensinar cada anno toda su heredat entegrament; et si dixiere el »ñor solariego al villano, toda la heredad non me has mostrado entegrament, el villano, infanzones et con labradores vecinos de la villa devela »apear toda la heredat.» Y añade la misma ley, que si el señor reclamase aun algo, que no resultara del apeo, podria el villano conservar la heredad apeada, dando fiador infanzon y vecino de responder de la parte que se le reclame, si después fuere encontrada, que en tal caso volveria esta parte á su poder como infanzona; y que siempre haria el villano los gastos del apeo (3). Así facilitaba la ley á los señores la conservacion de las tierras cuyo dominio directo se habian reservado. Los villanos no tenian en ellas más que una especie de dominio útil coartado. La costumbre local y la ley eran su único escudo contra la arbitrariedad y la codicia del señor. Allí donde no se acostumbraba pagar más que ciertas pechas, no podia el señor exigir otras diferentes, pero la ley y la costumbre eran á veces demasiado flexibles para que los señores no abusasen de su autoridad.

Cuando los villanos eran todavía más bien siervos adscriptos á la gleba que vasallos, no podian abandonar sus tierras rompiendo el vinculo señorial. Dan testimonio de este vestigio de la antigua servidumbre los mis-

(1) L. 3, t. 12, c. 3.

(2) F. l. 3, t. 4, c. 5 y 10.

(3) F. lib. 3, t. 4, c. 9 y 10.

mos fueros y cartas-pueblas que concedían á los vecinos como merced y privilegio, la facultad de mudar de domicilio, con pérdida de sus heredades ó sin ella. Al recopilarse el libro de los fueros, no estaban ya los villanos absolutamente adscriptos á la tierra, pero tampoco habían adquirido por completo la facultad de emanciparse del dominio señorial. Hábiase adoptado pues, entre los derechos de los señores y las pretensiones de los vasallos, un cierto temperamento favorable á la libertad de estos y que no derogaba enteramente aquellos derechos. El villano solariego podía mudar su domicilio á otra villa ó casa de distinto señorío, pero dejando en su lugar otro villano casero que encendiera fuego en la casa que abandonaba, cuando el rey, el rico-hombre ó el señor solariego fuesen á ella para albergarse ó pedir sus derechos. Mas si el villano solariego se fugaba para eludir el pago de sus pechas, el señor debía pedir al rey ó rico-hombre que se la exigiese, y aún podía prenderle por sí mismo después, si esta solicitud no tuviera efecto. Sin embargo, como el villano así preso manifestase no poder pagar la pecha y diese fiador infanzon por la heredad, satisfaciendo-á la vez la *torta* y *arinzada*, quedaba libre para residir donde quisiera. Entónces el señor recuperaba su heredad convirtiéndola en infanzona (1).

El villano casero del rey podía tambien abandonar el solar realengo para habitar en otro de señorío, pero no sin dejar fuego encendido en el primero y pagar la pecha íntegra á la corona. Eximiase, pues, solamente este vasallo de las corveas del rey y de las huestes y cabalgadas. Mas no debían disfrutar este beneficio los villanos simples y los moros del rey, cuando una ley mandaba prender y confiscar sus bienes al que tratara de ausentarse y pasar al señorío de algun infanzon. Esto mismo podía hacer en su caso el hidalgo, dueño de moros ó villanos que intentaran pasar á heredad del rey; mas para que la aprehension fuera legítima habia de verificarse ántes que el fugitivo pisara el territorio de que se amparase, porque una vez en él se hallaba en asilo seguro (2).

Los villanos de Larraun disfrutaban sobre este punto un fuero singular, pues podían mudar de domicilio, llevándose sus bienes muebles y aún la techumbre de su casa, con sólo dejar en ella un lecho sobre cuatro piertegas (3). No estaban por lo tanto obligados como los villanos de otros lu-

(1) F. lib. 3, t. 4, c. 5.

(2) F. lib. 3, t. 8, c. 6.

(3) F. lib. 3, t. 7, c. 1. Los villanos quando quisieren cambiarse dun lugar á otro deven levar el mueble y el cubierto de la casa, maguer deven deissar en el casal una leitera sobre quatro piertegas...

gares, á continuar pagando todas sus pechas ó algunas de ellas, ni á poner en su lugar quien hiciera sus veces para hospedar al señor, ni corrian el riesgo de ser presos y embargados como los villanos y moros fugitivos. El lecho sobre las cuatro piertegas estaba probablemente destinado al señor, si queria albergarse en la casa abandonada por el vasallo.

El estado de los villanos era pues, de transicion de la servidumbre á la libertad, así como sus relaciones con los señores revelaban una especie de transaccion entre ellos. Esto significaban la facultad del villano para mudar del señor, pero sin romper enteramente los vínculos que le unian al primero: la inmunidad de que gozaba cuando no era aprehendido ántes de tomar asilo en tierra de otro señorío; y el recurso, que aun preso por su fuga, le quedaba para disponer de su persona, dando fiadores por su heredad y pagando un ligero tributo. No eran todavía hombres libres, pero ¡cuán distinto era su estado del que tenian cuando como siervos adscriptos, hacian parte de las heredades, viviendo y muriendo en ellas y legando esta triste condicion á sus hijos y descendientes!

CAPITULO VI

Del servicio militar inherente al dominio de la tierra.

Era tambien en Navarra el servicio militar obligacion inherente al dominio ó posesion de la tierra. Ricos hombres, infanzones, caballeros, villanos, si por cualquier título, ocupaban en propiedad ó en usufructo total ó parcial, cualquier parte del territorio, debian servir al rey en su caso y lugar por un tiempo más ó ménos limitado. Los que por presura ó por merced real adquirian propiedades alodiales, quedaban por ello obligados á servir al rey en la guerra. Los ricos hombres que tenian en *honor* villas ó castillos y los caballeros, señores solariegos de lugares ó de heredades, debian prestar el mismo servicio con seis vasallos. Los villanos de todas clases, pecheros del rey ó de señores solariegos, debian acudir con aquel ó con estos á las huestes y cabalgadas. «Los Navarros, dice el Fuero general, siervan al »rey como buenos vasaillos á buen seignor: el seignor que les faga bien como »buen seignor á buenos vasaillos» (1).

(1) F. lib. I, t. I, c. 3.

Todos los navarros tenían con el rey vínculos de vasallaje personal más ó ménos directo, pero no sin que en el origen ó constitucion primitiva de su estado personal, hubiese mediado de algun modo el dominio ó posesion de la tierra. ¿Eran ricos hombres? pues el rey debia darles ó les habia ya dado «casa ó honor entegrament con los homicidios é todas las colonias, porque pueda tener casa» como dice el Fuero. ¿Eran infanzones señores solariegos? pues el solar era el fundamento de su estado político y el origen de todas sus obligaciones públicas. ¿Eran villanos? pues el villano era vasallo directo del rey ó de algun infanzon su señor solariego, en cuyo lugar vivia ó cuya heredad cultivaba y disfrutaba, ó habian cultivado y disfrutado sus mayores, como siervos adscriptos y colonos. Por lo tanto, cualquiera que fuese la gerarquía social de los hombres obligados á prestar el servicio de las armas, mediaba siempre en ella, si no como fundamento actual, como origen, la posesion de la tierra.

Mas aunque todos los navarros tuviesen esta obligacion, no era igual para todos, que variaban mucho sus condiciones, segun la calidad de la persona ó los privilegios del lugar de su residencia. Los simples infanzones ó caballeros, dueños de tierras alodiales y libres, y aunque á la sazón no lo fuesen, si eran convocados para resistir una invasion de enemigos en el reino, debian acudir al llamamiento acompañados de sus hombres, con provisiones para tres dias. Si trascurrido este término, prolongaba el rey su expedicion, ó en cualquier tiempo intentaba atravesar los rios Ebro ó Aragon, fronteras del reino, no podia obligar á los infanzones á que continuaran en su servicio más de nueve dias, y aún eso, manteniéndoles á su costa. Pero si entre tanto cercaba el enemigo castillo ó villa del reino, debian los infanzones ayudar á defenderlo, siempre á costa del erario, todo el tiempo indispensable, hasta que el rey lo cobrara ó lo abandonara por perdido (1). Fuera del caso de asedio de villa ó fortaleza, no estaban, pues, obligados los meros hidalgos á servir más de nueve dias en cada guerra, y de ellos tres solamente á su costa. Los infanzones, de abarca debian salir á campaña siempre que lo hacia el rey, y á su propia costa (2). Esta diferencia entre unos y otros infanzones, y la que tambien existia entre ellos por razon de los tributos, revelan otra muy importante, por más que no sea bien conocida, en cuanto al origen histórico de ambas clases de personas. Los caballeros que al publicarse una guerra se hallaban

(1) F., lib. 1, t. 1, c. 4, 5.

(2) F., lib. 3, t. 6, c. 1.

fuera del reino al servicio de otro señor, debían, como ántes he dicho, devolver á éste lo que de él hubieran recibido, acudir al llamamiento del rey y servirle nueve días por lo ménos. Solamente se eximían de esta obligacion los caballeros extrañados del reino y desnaturalizados por el rey, con pérdida de su patrimonio, miéntras que no fueran reintegrados por él y vueltos á la gracia del monarca.

Cuando los pueblos tomaban las armas en su propia defensa, en contien-
das locales ó de parcialidad, que es lo que se llamaba *salir en apellido*, de-
bían presentarse con sus armas y caballos todos los caballeros de los luga-
res contendientes, con los escuderos y vecinos que tuviera armas. Los pue-
blos, en remuneracion de este servicio, daban á los dueños de caballos pra-
dos en que mantenerlos (1). Esta obligacion era independiente de la que
tenían los vasallos de acudir á las huestes y cabalgadas generales, cuando
eran llamados por el rey.

Los ricos hombres y los caballeros que tenían *honores* del rey, debían ser-
virle con los hombres y recursos que les proporcionaran las villas, lugares
ó rentas que poseyeran de la corona, y al parecer sin limitacion de tiempo,
puesto que no se conoce disposicion alguna que lo señalara. Por cada 300
sueldos de renta que cobraran, debían poner á servicio del rey una *caballe-
ría* ó *cavería*, como se decia en Navarra, que era un ginete armado y man-
tenido. El *honor* de un rico-hombre se componia por lo ménos de diez
caverías, aunque habia algunas de doble número y aún de más. Los ricos-
hombres solían ascender de las inferiores á las superiores, segun sus mé-
ritos ó el favor que disfrutaban en la corte. D. Sancho VIII, al reducir las
cargas de los vecinos de Artajona á 7.000 sueldos, los 6.000 para el rico-
hombre, disminuyó las rentas y el servicio de la villa á veinte caballe-
rias (2). Los dueños de *honores* no se eximían de tales servicios, aunque no
pudieran prestarlos personalmente. El rico-hombre que al ser llamado á la
guerra estaba enfermo, debia enviar á ella sus gentes con su mayordomo: el
caballero que se hallaba en igual caso debia enviar las suyas con un pariente
ó con su escudero.

Los señores solariegos, además de la obligacion de servir las armas, que
tenían como infanzones, les correspondia la de hacer la guerra contra toda
clase de enemigos, con las villas y castillos de su señorío, cuando el rey se
lo mandase, manteniendo para este fin, los hombres y recursos necesarios.

(1) F., lib. I, t. 1, c. 7.

(2) Moret, *Anales*, lib. 20, c. 7.

Ejemplos se han visto de ello en las cartas de homenaje que hicieron, don Bibiano por Agramont, D. Bartolomé Jimenez por Rada, Pedro Arnalt por Ostavales, y Fortaner de Alarcon por Sadava (1).

Este servicio no era limitado á tiempo cierto como el de los meros infanzones, sino en cuanto fuese menester, como el de los caballeros que tenían honores de la corona. Así en el homenaje por la villa de Sadava, prometió Fortaner de Alascón «prestar servicio de caballero como cualquiera de los ricos-hombres que tienen honores en Navarra.» Tampoco era limitado en tiempo el servicio que debían prestar á la corona sus propios villanos y los solariegos, cuando el rey salía en hueste ó cuando el enemigo cercaba alguno de sus castillos ó villas. En estos casos podia el rey mandar á los villanos que llevaran provisiones «para siete dias, ó para quince ó para un mes ó para ó más ménos» segun dice el fuero (2). El villano del rey que pasaba al servicio de algun caballero, como casero excusado, se eximia de acudir á las huestes y cabalgadas, pero cuando el enemigo invadia la tierra, ó sitiaba villa ó castillo (3), todos los demás villanos debían acudir á la guerra á ménos que adolecieran de enfermedad, ó que la padecieran sus padres, sus hermanos ó algun pariente próximo á quien mantuviesen. Los que prestaban este servicio con el rey no podían ser embarcados entre tanto, ni hasta diez dias después de su regreso (4).

Mas estas disposiciones generales concernientes al servicio militar sufrían después en la práctica diferentes excepciones y modificaciones introducidas por fueros y privilegios locales. Así los vecinos de Argueda y Caparros, tanto infanzones como villanos, segun sus respectivos fueros, no estaban obligados á servir las armas sino en lid campal y con provisiones para tres dias (5). Sólo una tercera parte de los caballeros y peones de Carcastillo, debía acudir al *fonsado* y esto con provisiones para el mismo tiempo, y únicamente cuando estuviera sitiado el rey (6). Igual privilegio disfrutaron los pobladores de Caseda y los de Marañon, después de eximirse de todo servicio militar durante los siete primeros años de su residencia en la

(1) Véase cap. IV de este libro.

(2) F. lib. 1. tit. 1. c. 7, y lib. 3, t. 4, c. 6.

(3) F. lib. 1, t. 5, c. 2, y lib. 3, t. 8, c. 2.

(4) Id. id. lib. 1, t. 1, c. 6.

(5) F. de Arguedas de 1092, en Yanguas. *Diccion. de las antigüed. de Navarra*, p. 329. F. de Caparros, en Muñoz, *Colecc. de fuer.*, p. 469.

(6) F. de Carcastillo, en Muñoz, *ibid.*, p. 469.



villa (1). Los pobladores de Tudela y de Estella no debían más servicio al rey que el de hueste en lid campal ó sitio de castillo ó de la real persona, y esto con provisiones para tres días solamente (2). En Larraga, en el valle de Imoz y en Mendigorria sólo debían acudir á la hueste un hombre de cada casa y al apellido todos los que pudieran llevar las armas, eximiéndose de dar alojamiento los que tuvieran caballo, celada de hierro y escudo (3). Según el fuero de Nájera, tan extendido en Navarra, de cada cuatro vecinos, tres debían tomar las armas y uno servirles el bagaje; los infanzones y los villanos no estaban obligados á más de un servicio al año y con estipendio: los primeros sólo cuando el rey salía á campaña y los segundos en las batallas campales solamente (4). Los vecinos de Los-Arcos disfrutaban el singular privilegio de no acudir á huestes ni cabalgadas, ni aún en lid campal, como el rey no estuviese cercado en algún castillo (5). En cambio, ni aún los clérigos estaban exentos de tomar las armas en las lides campales, según los fueros de Viana y San Vicente de Sosierra (6).

Los que faltaban á la hueste incurrian en una pena, variable según la calidad de la persona. La de los meros infanzones es buen indicio de los débiles vínculos que en su origen tenía esta clase con el jefe del Estado. El rey debía dar á los hidalgos mercados para su comercio, alcaldes para sus litigios y claveros excusados de quienes pudieran ser señores y fiadores (7), y esta obligación era el fundamento de la que ellos contraían de servir en la guerra. De aquí hubo de deducir el legislador por consecuencia que quien faltara á aquel servicio no debía incurrir en más pena que la de perder su derecho á las cosas que debía darle el rey: «quí esto non quisiere facer, dice el Fuero, el rey non li debe dar alcalde ni mercado, ni cantenedor »por sí ni por otro» (8). Privar á un hombre del derecho de contratar en los mercados públicos, denegarle la justicia cuando la solicitaba, y no admitir su testimonio en abono de sí mismo ni de otro, que es lo que signifi-

(1) F. de Caseda de 1129, en Muñoz, *ibid.* p. 474, F. de Marañón dado por Alfonso I, en *ibid.* p. 495.

(2) F. de Tudela de 1117 y F. de Estella de 1164.

(3) Fueros del Valle de Imoz y de Larraga de 1193, en Zuaznavar, *Ensayo*, etc. t. 2, p. 143 y 194. F. de Mendigorria de 1208 en Moret, *lib.* 20, c. 7.

(4) F. de Nájera, en Zuaznavar, etc. p. 236.

(5) F. de Los-Arcos de 1175, en Zuazn, t. 2, p. 204.

(6) F. de Sosierra, en Zuazn., t. 2, p. 135, F. de Viana, en Moret, *Anal.*, lib. 21, c. 10.

(7) F., *lib.* 1, t. 1, c. 3.

(8) F., *lib.* 1, t. 1, c. 4.

can las palabras citadas de la ley, equivalia á excluirle de los beneficios de la sociedad y á no tenerle por miembro del Estado. No se imponia en rigor una pena directa al infanzon que faltaba á la hueste; pero se le consideraba como muerto para la sociedad y sin derecho alguno á su proteccion.

Los hidalgos, que además de la obligacion general de su estado, tenian la especial de servir al rey ó á algun otro señor por razon de estipendio, debian restituirlo si faltaban á su servicio (1). En esta pena incurrian tanto los que disfrutaban honores de la corona, como los que habian recibido de ella señoríos solariegos ó rentas señaladas; pues aunque el fuero dice: «Todo »fidalgo que tomare soldada.... et non la sirve, torne la soldada,» no ha de entenderse esta palabra en su sentido restricto de sueldo ó estipendio en metálico, sino en el de precio ó recompensa del servicio, ya consistiera en numerario ó ya en tierras de *honor* ó de señorío solariego, puesto que la obligacion y la falta eran iguales en todos los casos. Los villanos que no acudian á la hueste real siendo llamados, incurrian en multa de 60 sueldos, la cual percibia el rey cuando el villano era suyo, y se dividia entre el señor y el rey cuando el villano era solariego (2). Los vecinos poblados al fuero de Nájera tenian, sin embargo, el privilegio, cuando faltaban á la hueste, de no pagar más que cinco sueldos, si eran meros infanzones, y dos y medio si villanos.

CAPÍTULO VII

De la jurisdiccion inherente al dominio de la tierra.

En Navarra fué tambien la jurisdiccion atributo inherente al dominio de la tierra, pero con circunstancias especiales que distinguieron la propiedad en aquel antiguo reino de la que reconocian las leyes en los otros de España. El rey al ser proclamado y levantado sobre el escudo como en Asturias, juraba, entre otras cosas, «desfacer las fuerzas de sus vasallos», esto es, administrarles justicia, como fuente y principio que era de toda jurisdiccion. Ejercia esta suprema potestad en el tribunal de córte, cuya cabeza era, y del que formaban parte un alcalde con algunos ricos-hombres, y un mayordomo y un portero como auxiliares. En las ciudades y villas ejercia

(1) F., lib. 1, t. 5, c. 8.

(2) F., lib. 3, t. 4, c. 6.

el rey su autoridad por medio de alcaldes, bayles y merinos. Los ricos-hombres no podían ser privados de sus honores, según antes he dicho, sino en virtud de sentencia de aquel tribunal: por el mismo (formando parte de él de tres á siete ricos-hombres), debían ser juzgados los infanzones en todas sus causas criminales y en las apelaciones de las civiles (1), aunque litigaran con villanos. En este caso disfrutaban además el privilegio importante de que cuando les favorecía la sentencia apelada, debía ayudarles el juez que la había dictado á obtener su confirmacion en la corte (2).

Los alcaldes eran nombrados por el rey ó elegidos por los pueblos que tenían este derecho con arreglo á sus fueros especiales. Habíalos tambien nombrados por otros alcaldes, sin duda para que como delegados suyos ejercieran alguna parte de su jurisdiccion. A ellos alude al parecer el fuero general cuando supone la existencia de alcaldes *mayores* y *menores*. Los nombrados por el rey juzgaban los pleitos de los labradores realengos (3), y los llamados *mayores* conocían de las apelaciones de las sentencias dictadas en causas entre villanos por los alcaldes *menores* respectivos, porque estas causas no podían ser llevadas á la corte (4). Juzgaba á los francos ó extranjeros un alcalde llamado *forano*, pero acompañado del ordinario ó *ruano*, el cual debía asistir á su juzgado, sentándose en la parte interior del portal en que aquel administraba justicia (5).

Los merinos eran como los alcaldes, ó de nombramiento real, ó electivos, ó nombrados por otros merinos. Estos últimos fueron los que se llamaron después *tenientes de merino*, de los cuales podia haber hasta tres en cada merindad. El merino intervenia en los juicios entre villanos, asistiendo con el párroco al alcalde para recibir en la iglesia las declaraciones de los testigos presentados por los litigantes (6); ejecutaba las sentencias del mismo alcalde cuando eran dictadas contra villanos (7); recaudaba los derechos y pechas del rey, tomando posada para este efecto en las casas de los vasallos (8); era juez de pesas y medidas y hacia el reclutamiento de los hombres de guerra (9).

(1) F. lib. 2, t. 1, c. 1.

(2) F. lib. 2, t. 9, c. 8, y t. 8, c. 2 y 3.

(3) F. lib. 2, t. 5, c. 11.

(4) F. lib. 2, t. 8, c. 2 y 3.

(5) F. lib. 2, t. 2, c. 5.

(6) F. lib. 2, t. 5, c. 9.

(7) F. lib. 2, t. 1, c. 8.

(8) F. lib. 3, t. 4, c. 4.

(9) *Recopilacion de leyes de Navarra*, lib. 2, t. 6.

Los sayones eran elegidos por suerte entre los vecinos de cada jurisdicción. Sus funciones en los juicios eran las de los alguaciles modernos; notificaban las providencias de los alcaldes, ejecutaban las pesquisas y citaban á los testigos. En el orden administrativo, al cual tambien correspondian, cobraban los pedidos del rey y conducian á los villanos á prestar sus corveas en las obras públicas y en las heredades realengas (1).

En los lugares dados en *honor* correspondia al rico-hombre que lo disfrutaba el nombramiento de los alcaldes y merinos, excepto cuando su eleccion pertenecia por privilegio á los vecinos. La justicia se administraba en ellos del mismo modo que en los pueblos sujetos inmediatamente á la corona y por funcionarios análogos; pero la ejecucion de las sentencias de los alcaldes contra hidalgos ó infanzones no correspondia al merino sino al rico-hombre (2).

En algunos lugares se hallaba la autoridad pública tan limitada, no sólo por garantías razonables contra sus abusos, sino por libertades peligrosas, que hasta era lícito á los vecinos emplear contra ella el uso discrecional de la fuerza. D. Alfonso el Batallador decia en el fuero de Tudela, dirigiéndose á los vecinos: «Si alguno os agravia en cualquier lugar de mi tierra, prendedle y obligadle á que os satisfaga sin esperar otra justicia; mas si alguno quisiere prenderos dadle fiadores y que vaya á demandaros á Tudela.... No dejéis que nadie os haga fuerza ó quebrante este fuero; y si alguno lo intentare, todos reunidos destruid sus casas y cuanto tuviere fuera de Tudela, y yo mismo os ayudaré á ello.» Don Sancho el Sábio decia á los vecinos de Antoñana y Bernedo en sus fueros: «No os sometais á los juicios del agua, fuego ó duelo. El que agravie al señor que tenga la villa por la corona, no será preso dando fiadores; si el merino entrare por fuerza y le matareis, no pagareis por ello homicidio; si el alcalde que nombrareis no fuere bueno y fiel elegid otro.» Segun el fuero de Estella de 1164, el merino no podia sentenciar á pena de calumnia sin el parecer de seis hombres buenos; y el dueño de casa podia resistir y exigir veinticinco sueldos de multa al que intentase allanársela, y aún matar impunemente al que de noche se introdujera en ella. El mismo Don Sancho el Sábio decia en el fuero de La Guardia: «Si el merino ó el sayon entrare en vuestra casa y os quitare algo por fuerza, podeis matarle sin pagar por el homicidio más que tres *meajas*; si el señor que por mano del

(1) F. lib. 2, t. 5, c. 11, lib. 3, t. 4, c. 6, y 8, y t. 7, c. 10.

(2) F. lib. 2, t. 1, c. 8.

«rey mandare en la villa, os hiciere fuerza, matadle sin pagar porfello homicidio (*occidatur et proinde non pectent omicidium*); y si el merino ó sayon que nombrareis fuere malo ó soberbio contra los vecinos, matenle tambien sin pena alguna.» A tales contratiempos estaban sujetos los señores y los jueces en aquella desgraciada edad, en que no siendo bastante defensa para el individuo la fuerza del gobierno supremo, tenian que buscar los pueblos garantías más eficaces á sus derechos en la resistencia armada, consignando el de usarla en sus fueros, como uno de sus privilegios más estimados.

Prueba indudable de las relaciones íntimas que existian entre la jurisdiccion y la propiedad territorial, es que el nombramiento de las justicias correspondia generalmente al dueño del suelo, ora lo fuese el rey, ora algun noble infanzon, ora los mismos vecinos. Asi es que solamente tenian el derecho de elegir sus propios alcaldes y merinos los lugares, y villas que por merced real ó por prescripcion de largo tiempo, habian ganado el dominio colectivo de sus términos y el particular de sus heredades. Por eso se nota en la mayor parte de los fueros y cartas-pueblas que no concedia el rey á los vecinos la propiedad de los lugares, sus términos, sus montes y sus aguas, sin otorgarles al mismo tiempo la facultad de nombrar sus alcaldes y justicias, y el derecho de no ser demandados sino ante ellos. Y como tales nombramientos eran verdaderas delegaciones de una jurisdiccion propia, que si no se tuviese no podria comunicarse, menester es que esta potestad se confiriese con el dominio de la tierra, asi en los lugares de señorío como en los que gozaban mayores libertades.

Los ricos-hombres que tenian lugares en *honor*, ejercian en ellos la propia jurisdiccion real, aunque con las restricciones consignadas en los fueros respectivos. No solian desempeñarla personalmente; pero nombraban las justicias, á ménos que los vecinos tuvieran el privilegio de hacerlo, y ejecutaban en todo caso las sentencias dictadas por los alcaldes contra los infanzones de su territorio (1). Tenian asimismo el mero y mixto imperio ó la facultad de ejecutar las penas corporales graves, y por eso dice una ley del fuero general: «Todo infanzon ó otro hombre que non tenga *honor* ó vaillia por el rey et face justicia ó estema de algun hombre del rey, por lo que fezo contra el Fuero, peite mil sueldos de colonia, ó sea en mercé del rey, quar justicia et estema al rey partaynece sabridament ó á sus vailles» (2). Y como á los dueños de honores se trasmitian todos los dere-

(1) F. lib. 2, t. 1, c. 8.

(2) F. lib. 2, t. 1, c. 3.

chos de la corona en los lugares respectivos, y entre ellos el dominio más ó ménos limitado del territorio, venian á ser inseparables de este dominio la jurisdiccion y el imperio.

De la jurisdiccion señorial propiamente dicha hay en el fuero y en las escrituras antiguas numerosos vestigios; pero sin las noticias suficientes para conocerla en todos sus pormenores. La adquisicion de un lugar con sus pobladores suponía siempre la de la jurisdiccion sobre los mismos. El señorío solariego de vasallos llevaba siempre consigo la misma potestad. D. García V dió en 1050 ciertas villas y lugares al monasterio de Santa María de Nájera, disponiendo en la escritura que los hombres que se sometieran á él libremente, con sus personas y bienes, quedarian exentos de toda otra potestad y sujetos por sus delitos tan sólo al juez que nombrase dicho monasterio (1). D. Alfonso I dió á poblar el barrio de San Saturnino de Pamplona con sujecion al fuero de Jaca, otorgándole carta-puebla en 1129, por la cual donó la nueva poblacion á la iglesia de Santa María, prohibiendo enajenarla y mandando á los vecinos que no obedecieran sino al obispo ó su vicario, el cual debia ser también nombrado por el prelado, á propuesta en terna del pueblo (2). D. Sancho VII confirmó en 1181 la fundacion y dotacion de ciertos monasterios de monjas en Marcilla, diciendo en la escritura que para que no pudiese dañarles la astucia de los hombres malos, ponía bajo su señorío y servidumbre á los labradores de aquel pueblo, con todos sus heredamientos, para que no sirviesen á otro principe sino á Dios y á las monjas, á las cuales habian de acudir con su homenaje y sus tributos (3). Dábase, pues la jurisdiccion como consecuencia necesaria del dominio territorial y para asegurar sus frutos, ya que la autoridad del soberano no era bastante para mantener á todos en su derecho.

Si no bastasen los ejemplos citados para la comprobacion de este aserto el fuero general lo justificaria con testimonios numerosos. El infanzon que con su heredad libre fundaba collazo, esto es, la daba á villanos para su cultivo, de modo que resultase tener cada uno cierta porcion de tierra y no ménos, adquiria sobre ellos todos los derechos que pertenecian á las autoridades puestas por el rey, y además los que le correspondian como

(1) *Coleccion de documentos de las Provincias Vascongadas y de Castilla*, t. 6, n. 228. "*Nec cuiquam pro alicujus scilicet calumnia, nisi Sanctæ Mariæ advocato respondeat.*"

(2) Fuero de San Saturnino. Muñoz, *Coleccion de fueros*, etc., pág. 478.

(3) Moret, *Anales*, etc., lib. 19, c. 8, n. 4.

señor solariego (1). Transmitíanse, pues, al señor de collazos por ministerio de la ley y por el mero hecho de la comunicacion del dominio incompleto de la tierra, los derechos del soberano; y como la jurisdiccion era uno de ellos, no necesitaba para adquirirla carta de merced real ni escritura pública que la otorgase expresamente, pues estaba á la disposicion de todos los grandes propietarios. Quien pudiera dar á cada villano una yugada de tierra (2) (si como presume el padre San Francisco Xavier, era esta la cantidad necesaria para hacer un collazo), adquiria desde luégo el señorío jurisdiccional, sin intervencion alguna de la corona. Estos señores tenían, al parecer, plena jurisdiccion sobre sus collazos, pues que no se halla en el fuero ninguna ley que la limite, ni en el órden civil, ni en el criminal. Penábase al que sin delegacion del rey juzgaba á los vasallos de la corona; pero reconociéndose, por otra parte, la jurisdiccion de los señores sobre sus propios vasallos. «Si el señor de la villa, dice el fuero, reprendiere á algun vasallo, «este no le debe responder *car seínor es et decir puede lo que querra*, sobre todo si no estuviera presente el querellante.» Tampoco podía el señor representar en juicio al ofendido, sino que este se debia querellar por sí mismo, y el señor juzgarlos á todos por su fuero (3). De cuya disposicion se infiere que los señores no debían proceder contra ninguno de sus vasallos sino á instancia de la parte ofendida, que no habiéndola era su potestad paternal y disciplinaria; pero que siempre que mediase querella, cualquiera que fuese la causa ó el delito, debían administrar justicia con arreglo al fuero de cada uno. Siendo ésta la jurisdiccion de los dueños de honores y de las autoridades delegadas del rey en sus comarcas respectivas, igual debia ser la de los señores de collazos en sus lugares, puesto que tenían idénticos derechos. Véase, pues, cómo concuerda con la ley últimamente citada la que atribuía á tales señores los derechos de los que tenían la *seinal*, ó sea la jurisdiccion del rey.

Mas si el señor no lo fuera de collazos, sino de villanos *encartados*, que como he dicho en otro lugar, eran los que poseían ménos tierra que la necesaria para ser collazos, su jurisdiccion se limitaba á juzgar los pleitos que se suscitasen sobre las heredades de los mismos villanos. Así parece inferirse del texto de una ley, que tratando de la posesion de las hereda-

(1) F. 1. 3, t. 5, c. 1. Dice el texto que debe haber en los collazos «quanto pertaiene al que ha la seinal,» y entendemos por seinal como el Sr. Yanguas, el rico-hombre que tenia en honor el pueblo.

(2) De 60 á 70 robadas.

(3) F. lib. 2, t. 1, c. 10.

des dice: «Si el rey ó su villano tuviere pleito con villano encartado de hidalgo debe responder al señor cuyo es el villano y no á otro ninguno.» Hallándose este precepto en el título de las *tenencias* y bajo el epígrafe «de como no valen las tenencias entre el rey y el hidalgo y como sin querellante no debe proceder el rey,» por más que sea absoluto en sus términos, no parece que debiera extenderse su aplicacion á otros pleitos que á los que versaran sobre heredades solariegas. Tampoco dice el mismo texto si tal jurisdiccion alcanzaba á todos los villanos encartados ó solamente á aquellos que por poseer al ménos seis robadas y casa, tenían sus señores ciertos privilegios de vecindad, que no disfrutaban aquellos, cuyos vasallos poseían menor espacio de tierra; mas es de suponer que fuese común á todos, puesto que la ley citada no contiene limitacion alguna, al paso que otras que declaran los derechos de los señores de villanos encartados, establecen entre éstos aquella distincion.

Los que sin tener semejante señorío, eran dueños de censos sobre casas ó heredades, ejercian tambien cierta jurisdiccion aunque mucho más limitada, pues se reducía á la necesaria para compeler al pago de los réditos. «El que hubiera dado casa ó heredad á censo, dice una ley del Fuero y no fuese pagado del rédito, puede sacar de ella prendas vivas con que cobrarse y cerrar ó derribar sus puertas, y si aún con ésto no fuese pagado en dos años, puede recobrar la heredad perpétuamente» (1).

Tales son los vestigios que de la antigua jurisdiccion señorial nos ofrecen los fueros y diplomas navarros. No son quizás bastantes para darle á conocer con todos sus pormenores y circunstancias, pero si para justificar su procedencia del dominio territorial que es lo que más importa para mi propósito.

CAPÍTULO VIII

De la facultad de enajenar.

Hallábase tambien sujeta la propiedad navarra á graves restricciones, tanto en interés de los señores del dominio directo, como en el de las familias de los colonos. Según la ley primitiva de la tierra, sólo de las heredas alodiales se podia disponer libremente; las demás no podian ser ena-

(1) F. lib. 3, t. 9, c. 1 y 4.

jenadas por sus inmediatos poseedores sin previa licencia del señor del lugar, ora lo fuese á título de solariego ó de dueño del *honor*; y tanto uno como otro no solían otorgar su permiso sino á cambio de tributos onerosos. Los fueros y cartas-pueblas que con exención de ellos, permitieron disponer de las tierras de los respectivos lugares, dan bastante á conocer el estado anterior de la propiedad en ellos. Las heredades que devengaban ciertas pechas no podían generalmente enajenarse. Así se lee en cierto diploma que un D. García y su hermano, poseedores de una casa en Morquero, comprada por su padre, no pudieron enajenarla, hasta que el rey D. Sancho García les otorgó escritura de libertad (*cartam ingenuitatis*), facultándoles para disponer libremente de ella en vida y en muerte, así como de cualesquiera otras fincas que adquiriesen (1).

En algunos fueros y cartas-pueblas del siglo xi, aún solía establecerse la prohibición de enajenar las tierras, pero en otros del mismo siglo y en los más del siguiente, se otorgaba ya á los vasallos como una de sus más codiciadas franquezas, la facultad de disponer de sus heredades. La reina doña Estefanía en la carta-puebla de San Julian de Sojuela de 1059, dió á los vecinos varias sernas para que por ellas sirvieran al señor de la casa de Sojuela con seis dineros y seis obradas anuales, el diezmo y las primicias, prohibiéndoles á la vez enajenarlas y empeñarlas (2). Los infanzones de Argueda no pudieron vender sus heredades á los labradores, ni éstos las suyas á los infanzones, hasta que el rey D. Sancho Ramirez se lo permitió en 1092, con tal de que dejaran á salvo el dominio directo de los señores (3). D. Alfonso I dió el barrio de San Saturnino de Pamplona á la Iglesia de Santa Maria con expresa prohibición de enajenarlo (4). D. Sancho VII permitió á los vecinos de San Vicente de Sosierra, en 1172, enajenar sus heredades, sin pagar los tributos gravosísimos de *mortura* y *vereda* que hasta entónces devengaron tales enajenaciones (5). Los lugares poblados á los fueros de Nájera y La Guardia obtuvieron las mismas libertades. Prueba evidente de que, ó no existía ántes la facultad de enajenar, ó estaba de tal modo restringida y gravada que venia á sér ilusoria.

El fuero general, aunque compilado cuando la mayor parte de los pueblos habían obtenido por privilegio aquella facultad importante, ofrece sin

(1) *Colec. de docum. de las Prov. Vasc.*, t. 6, núm. 213.

(2) Muñoz, *Colec. de Fuer.*, p. 220.

(3) F. de Arguedas, Muñoz, etc. p. 329.

(4) F. de San Saturnino, Muñoz, etc. p. 478.

(5) Zuaznavar, *Ensayo. F. de San Vicente de Sosierra*, t. 2, p. 135.

embargo algunos vestigios de la antigua prohibicion. Nótase cierta incongruencia entre las leyes de este código que tratan del derecho de los villanos para abandonar á sus señores. Así la que mandaba prender y confiscar los bienes al villano ó moro que abandonase su heredad por otra, no se compadecia bien con la que le permitia abandonar la casa del señor solariego dejando en ella casero que tuviera fuego encendido (1). Pero estas disposiciones discordantes, á la vez que significan un temperamento ó transaccion entre la libertad y la servidumbre, segun ántes he dicho, dan á conocer los grados por que iba adelantando la emancipacion de los villanos. Al principio unia tan estrecho vínculo al vasallo con su tierra, que si la abandonaba podia el señor compelerle por la fuerza á volver á ella: luégo fué suavizándose el rigor de esta prescripcion con excepciones y cortapisas que debilitaron gravemente aquel antiguo vínculo.

Los monasterios fundados y dotados en su mayor parte por la corona, reconocian su señorío y no podian al principio sin sulicencia, enajenar las tierras que de ella habian recibido. Mas como después adquiriesen otros muchos bienes de particulares, alodiales algunos, hubo de suscitarse la duda de si seria extensiva á ellos la prohibicion de enajenar. En su consecuencia se dictó una ley declarando que los monasterios podian vender libremente sus heredades alodiales, pero no las de collazos sin licencia de la corona (2). Ya he dicho en otro lugar que los moros y los judios, como vasallos del rey no tuvieron licencia para vender y comprar heredades, hasta que se la concedió en el siglo xiv D. Felipe II de Navarra (3).

La facultad de enajenar las tierras estaba asimismo limitada en provecho de las familias de los colonos. Con la libertad de testar concedida al padre, establecia la ley numerosas restricciones de la de enajenar, en vida, los bienes que abintestato debian heredar los parientes. Los hidalgos no podian vender sus propiedades sin hacerlas pregonar en la iglesia, tres domingos seguidos, por si se presentaba á retraerlos algun pariente de los que tenian este derecho (4). El viudo ó la viuda no podian enajenar la herencia de sus padres sin consentimiento de sus hijos, ántes de partir con estos el caudal hereditario del cónyuge premuerto (5). Las heredades dadas por razon de matrimonio no podian enajenarse, sin afianzar la inversion de su

(1) Véase el cap. V de este libro.

(2) F. lib. 3, t. 12, c. 13.

(3) Amejoramiento, c. 17.

(4) F. lib. 3, t. 12, c. 14 y 15.

(5) F. lib. 2, t. 4, c. 3.

precio en otras semejantes, para asegurar su restitución al donador ó á los herederos, en el caso de morir sin hijos los cónyuges (1). Los padres mantenidos por sus hijos no podían enajenar en vida las tierras que estos hubieran de heredar por su muerte (2). Solamente el rey disfrutaba el privilegio de permutar sus heredades por las de los infanzones, siempre que estos juraran no hacerlo en fraude de los parientes que tuvieran derecho á re-tracerlas (3).

Otras restricciones del dominio territorial afectaban principalmente al derecho de disponer de él para después de la muerte. Muchos fueros y cartas-pueblas otorgaron este derecho como un nuevo privilegio, que ántes no gozaban los vecinos, porque la *mañería*, en cuya virtud heredaban los señores á sus vasallos, era costumbre general. Así D. Alfonso I eximió de ella á los habitantes de Carcastillo, concediéndoles el privilegio de que les heredasen sus parientes (*suas gentes*) (4). D. Sancho VII concedió en 1185 á los vecinos de Navascues que no tuvieran hijos, la facultad de nombrar herederos á sus parientes más próximos (5). El fuero de Nájera permitió á los que morían también sin hijos, disponer de sus bienes libremente, excepto á favor de infanzones. El abad del monasterio de Leyre renunció á su derecho á suceder en los bienes de sus vasallos de Jesa, disponiendo que los de aquellos que murieran sin hijos, se diesen á sus parientes más cercanos ó se repartieran entre todos los vecinos (6).

En el fuero general aparece la *mañería* muy reducida y modificada, pero no abolida. «Villano solariego, dice una ley, si muere ó se pierde sin «creaturas ó sin parient prosmano (de abuelo hasta primo hermano) el (se-
ñor) solariego deve haber la heredad sin el rey et la seinal» (7). Es decir, que ni el rey, ni el dueño del *honor* heredaban los bienes raíces del villano solariego, porque este derecho pertenecía ya en aquel tiempo á los consanguíneos más próximos y en su defecto al señor solariego. En este caso podían los hijos, y por su falta los nietos, pedir al señor la heredad pechera que hubiese tenido su ascendiente, y tenían derecho á obtenerla, como pagaran anticipadamente la *opilarinda* y dieran fianza respecto á las

(1) F. lib. 3, t. 12, c. 21 y *Amejoram.*, c. 3.

(2) F. lib. 3, t. 12, c. 19.

(3) F. lib. 1, t. 1, c. 8.

(4) F. de Carcastillo.

(5) F. de Navascues.

(6) Moret *Anales*, lib. 22, c. 5.

(7) F. lib. 3, t. 4, c. 5.

demás pechas (1). Los mismos hijos del villano eran parte de la herencia paterna, puesto que permanecían en el dominio del señor del padre; y así es que cuando éste había estado sujeto al doble señorío del solariego y del dueño del *honor* del lugar, disponía la ley que se partiesen los hijos entre ambos señores, adjudicándose, si eran dos, al señor del honor el primogénito y al solariego el segundo. También debían dividirse entre los hijos «los cuerpos y las tierras» de los villanos encartados, que pertenecerían a la herencia del padre difunto (2).

En cuanto á los bienes muebles era antiguo fuero, como en Castilla, que los villanos no dispusieran de ellos, sino por testamento otorgado ántes de su última enfermedad, y que no habiéndolo, heredase el señor. Mas como esto diese lugar á que los parientes de los villanos muertos fuesen apremiados y aún embargados por los señores, para hacerles entregar lo que á veces no había dejado el difunto, el rey D. Sancho el Bueno, compadeciéndose de ellos, autorizó á los villanos de la corona y á los de sus monasterios, para disponer en todo tiempo de sus bienes muebles, y privó á los señores de los lugares de la sucesión á que tenían derecho (3). Desde entónces sólo en los señoríos solariegos se conservó este importante vestigio de la más remota antigüedad feudal. También traía origen de ella la facultad de los señores para recobrar sus heredades, cuando desaparecían ó se *perdían*, segun dice el fuero, con hijos ó sin ellos, los villanos que las ocupaban (4). Este derecho hubo, sin embargo, de modificarse más tarde por otra ley inserta en el fuero, que exceptuó de aquella reivindicación los bienes de los villanos del rey y los de los monasterios, disponiendo que cuando alguno de tales villanos se perdiese, se diera su heredad al pariente más cercano, y que si ningun pariente quisiera recibirla, se repartiese en collazos (5).

Cuanto más se reducían las limitaciones del dominio territorial en provecho de los señores, tanto más se ampliaban las establecidas en interés de las familias de los colonos. Era natural que así sucediese siendo este inte-

(1) F. lib. 3, t. 4, c. 11.

(2) F. lib. 2, t. 4, c. 17.

(3) F. lib. 3, t. 5, c. 3.

(4) F. lib. 3, t. 4, c. 11.

(5) F. lib. 3, t. 5, c. 12, dice: «Fagan collazos de sus collazos,» lo cual daba á entender que en el caso de no haber pariente que recogiera la heredad y pagara sus pechas, todavia no podia el señor disponer libremente de su heredad, pues que debía darla á collazos.

rés el fundamento de todas las libertades y franquezas otorgadas á los vasallos. Las leyes navarras sobre sucesiones y testamentos, tendian, como las de Aragon y Cataluña, á conservar la integridad de los patrimonios, reconociendo en los hijos y parientes derechos hereditarios, que limitaban las facultades del dominio. No regian sobre esta materia las mismas disposiciones entre los infanzones que entre los villanos, ni las concernientes á la sucesion en las heredades y castillos eran aplicables á la de los bienes muebles. Reconociase en principio la libertad de testar, pero con restricciones tanto en favor del Estado como en interés de las familias.

El padre infanzon podia repartir desigualmente su herencia entre sus hijos, pero con tal de que ninguno quedara enteramente desheredado y con exclusion de los bienes llamados de *abolorio* que correspondian á los mismos hijos por muerte de su abuelo aún vivo. La misma ley que admitia el principio de la desigualdad en la distribucion de la herencia paterna, suponia por otra parte, que no era lícito desmembrar ningun patrimonio que pudiera bastar para la conservacion de una familia, pues dice que cuando algun rico-hombre ó infanzon tuviere dos ó más hijos, y heredades en dos ó más reinos ó villas, podria dar á uno todo lo que tuviese en un lugar y á otro todo lo que poseyera en lugar diferente, sin consideracion á su cuantía; porque á lo que habia de atenderse era á que ninguno de los hijos quedara del todo desheredado (1). Por lo tanto, hasta en la manera de reconocer la libertad de testar, obedecia la ley al influjo de los principios feudales, que para conservar la organizacion política y judicial del Estado, no permitian dividir los feudos, aunque sí distribuirlos entre los hijos, cuando dejaba el padre varios de unos y de otros.

Esta limitacion de la facultad de testar tenia un carácter feudal más señalado respecto á los castillos, que eran los feudos por excelencia, y cuya sucesion se regia por las mismas reglas que la de la corona. Muerto el rico-hombre ó infanzon dueño de un solo castillo, lo heredaba el hijo primogénito exclusivamente: si éste habia fallecido, le reemplazaba el mayor de sus hijos, y á falta de éstos, el mayor de sus hermanos, todos en el supuesto de haberse de mantener la integridad del castillo. Cuando eran varios los castillos ó villas, podia el testador distribuirlos entre sus hijos y si moria sin hacerlo, estos mismos podian repartírselos por suerte (2). De modo que

(1) F. lib. 2, t. 4, c. 4.

(2) F. lib. 2, t. 4, c. 2.

la facultad del testador estaba reducida en estos casos, á determinar en cuál de los castillos habia de suceder cada uno de sus descendientes, sin desmembrar ni alterar la cuantía de ninguno; y ni aún esto tenia que hacer, cuando dejaba un solo castillo ó villa, ó varios pero no más de un descendiente, puesto que entónces por ministerio de la ley, lo heredaba todo el primogénito en el primer caso, y todo el único descendiente en el segundo. Era singular el modo de distribuir la herencia de los infanzones entre hijos de distintos matrimonios. Dábase á los de cada uno la mitad de los gananciales adquiridos durante el consorcio de que procedían y los bienes inmuebles restantes se distribuían entre todos, tomando la mitad los hijos del primer enlace, la mitad de la otra mitad los hijos del segundo, y así en progresión descendente, dividiendo la última mitad en tantas partes como matrimonios. Los bienes muebles se dividían siempre por igual entre todos los hijos (1).

Tampoco podia el padre preterir ni desheredar sin causa legítima á ninguno de los hijos, porque como dice una ley del fuero «quien de todo deshereda de todo hereda.» Otras leyes señalaban taxativamente las causas de la desheredación, pero declarando al mismo tiempo que el padre infanzon podia sin embargo, «dar más del mueble á un hijo que á otro,» ó alguna pieza de tierra ó viña (2) por razon de matrimonio, pero no dos heredades; ni siendo dos los hijos y las heredades, dar en vida la mejor á uno de ellos (3).

Los villanos tenían en este punto ménos libertad que los infanzones. Estábanles prohibido dar perpétuamente por contrato ó última voluntad más hacienda á un hijo que á otro. Lo único que se les permitia era repartir desigualmente entre ellos los bienes muebles y semovientes, y dar heredad á alguno por causa de matrimonio, pero sólo durante su vida (4). Fundábase esta diferencia al parecer, en que así como interesaba al Estado mantener la integridad de los patrimonios familiares de la nobleza, consagrada al servicio público, ni la corona ni la nobleza sacaban provecho alguno de que conservase los suyos la clase plebeya, si es que no tenían en ello un interés contrario.

Inspiradas por el mismo interés de familia, pero con señalados caracteres feudales, parecen las disposiciones que determinaban el orden de suceder

(1) F. lib. 1, t. 2, c. 3.

(2) F. lib. 2, t. 4, c. 8.

(3) F. lib. 3, t. 19, c. 2.

(4) F. lib. 3, t. 19, c. 2.

abintestato. Así como de la sucesion de los feudos estaban excluidos los ascendientes, y aún entre los descendientes y consanguíneos solian preferirse los varones á las mujeres, y entre unos y otros respectivamente, los de mayor á los de menor edad, así en Navarra no sucedian tampoco los padres á los hijos, dándose preferencia á los hermanos: estaba admitida la sucesion por troncalidad, y eran asimismo preferidos los varones á las mujeres y los de mayor á los de menor edad. Según el Fuero, en las heredades del peculio del hijo, aunque procedieran de donaciones de los padres, no sucedian nunca estos ni aún por testamento, sino los hermanos del hijo difunto, y en su defecto los parientes colaterales más próximos. Tampoco podia el hijo dar á su padre ó madre más que bienes muebles, y esto por acto entre vivos, pues por testamento nada podia mandarles ni trasmittirles (1).

Conociase, sin embargo, un usufructo llamado de *fealdat*, idéntico al denominado de *viudedad* en Aragon. En su virtud el viudo infanzon que tuviera hijos, podia mientras no se volviera á casar, retener con las suyas propias, las heredades y los demás bienes de la mujer difunta. El mismo derecho tenia la viuda, mientras no pasaba á segundas nupcias, respecto á los bienes del difunto marido. Cuando la mujer moria sin hijos, podia tambien el viudo conservar sus bienes en *fealdat*, mientras que no contrajese nuevo matrimonio, y aún podia vender algunos de ellos si fuese necesario, lo cual estaba prohibido habiendo hijos. Pero como no era de tanto interés para el Estado mantener la integridad del patrimonio de las familias plebeyas, la ley no concedia este usufructo á los viudos villanos, sobre todo cuando no habia hijos á quienes reservar la propiedad de los bienes (2).

Excluidos los ascendientes de la sucesion del descendiente que moria sin hijos, no seguia ésta tampoco entre los parientes colaterales el órden del parentesco y del cariño establecido por Justiniano, sino otro encaminado más directamente á conservar la integridad de los patrimonios. Según el fuero de Estella de 1164, muerto el hijo de viuda en la menor edad, debian heredar sus bienes procedentes del padre, los parientes de la misma línea y nunca la madre, ni sus consanguíneos (3). El fuero general ampliando la aplicacion de este principio, dispuso que los bienes de todo el que muriera sin hijos tornaran á los parientes de quienes por naturaleza procedieran (4).

(1) F. lib. 2, t. 4, c. 6.

(2) F. lib. 4, t. 2, c. 3 y 5.

(3) Zuaznavar, *Ensayo*, etc., t. 2, p. 173.

(4) F. lib. 2, t. 4, c. 16.

Por la misma razon los bienes dotales de la mujer que moria sin hijos, debian volver á aquel que hubiera dado la dote ó sus herederos (1). Mas si los bienes no eran troncales, ó si ántes que el padre infanzon, moria alguno de los hijos, la porcion que habria correspondido á éste si hubiera vivido, la heredaba el mayor de sus hermanos varones. Si una hija moria ántes que el padre ó madre, heredaba su legitima la mayor de sus hermanas vivas. Si todas las hijas morian sin descendencia, las heredaban el mayor de sus hermanos. A falta de hermanos, heredaba la hermana mayor. Pero si entre hermanos hidalgos mancomunados por grupos de dos, de tres ó más de ellos, se habian repartido por suertes divididas del mismo modo, heredades de abolorio ó de patrimonio, sólo el mayor de los que formaban el grupo del difunto, tenia derecho á sucederle. Al que moria sin hijos ni hermanos, sucedia en primer lugar el varon hijo mayor de su hermano mayor, y á falta de hijos varones, la hija mayor del mismo hermano. No habiendo varones hijos de primos hermanos, heredaba el hijo mayor de la hermana mayor y en su defecto la hija mayor de la misma hermana.

A la mujer que moria sin hijos ni hermanos, sucedia la prima hermana, hija de la mayor de sus tias. Tambien heredaban los hijos naturales á falta de legitimos, mas entre ellos no tenian preferencia alguna los de mayor edad, y se repartia la herencia por iguales partes (2). Aun concurriendo con hijos legitimos, podian los naturales heredar por igual con ellos, la mitad de lo que quedara de la herencia del padre, después de sacar para los primeros exclusivamente las dotes y arras, la mitad de todas las heredades del padre y de la madre, y la mitad de las que quedaran del padre (3).

Las reglas de la sucesion entre los villanos eran diferentes. Muerto el padre en este estado, los hijos debian partir por mitad con la madre, sacando esta además unos vestidos de su uso (4). Cuando moria primero la madre, los hijos mayores de siete años podian desde luego pedir al padre su herencia. No habiendo hijos, tenian este derecho los parientes más cercanos de la mujer difunta (5). Cuando hermanos villanos habian partido entre sí, por suertes, en grupos de dos ó más, y moria alguno de ellos, los

(1) *Amejoramiento*, c. 3.

(2) F. lib. 2, t. 4, c. 10 y 12.

(3) F. lib. 3, t. 20, c. 8.

(4) F. lib. 2, t. 4, c. 21.

(5) F. lib. 2, t. 4, c. 19.

que pertenecian al grupo del difunto no heredaban sino la mitad de su legitima, porque la otra mitad debia repartirse por igual entre todos los hermanos (1). Los hijos naturales de los villanos heredaban los bienes raices del padre ó madre muerto, no habiéndolos legitimos, y la mitad de los gananciales, quedando la otra mitad para el cónyuge superviviente; mas si concurrían con hijos legitimos, todos debían partir por igual, si bien los naturales no podían exigir su legitima, hasta que los de matrimonio hubieran reclamado la suya (2).

Estas diferencias en el orden de suceder, ya entre hidalgos y villanos, ya entre bienes raices y bienes muebles, y ya entre varones y mujeres pruebaban hasta la evidencia el origen feudal de aquella legislacion. Recuérdese si nó que los feudos estaban en poder de los nobles, que consistían en bienes raices ó sus equivalentes, que las mujeres no sucedían por lo comun en ellos ó sucedían sólo á falta de varones y que entre estos solía darse la preferencia al de mayor edad, y se verá cuánta semejanza hay entre las restricciones que imponía el feudalismo y las que señalaba la legislacion navarra á la facultad de disponer para después de la muerte de la propiedad territorial.

(1) F. lib. 2, t. 4, c. 18.

(2) F. lib. 2, t. 4, c. 22.

LIBRO V.

De la propiedad territorial en el reino de Aragon.

CAPITULO I

De los diferentes estados de las tierras y de las personas.

I.

TIERRAS ALODIALES.

Hubo en el antiguo reino de Aragon las mismas tres clases de propiedades que en el resto de la Península y en Europa. Las tierras ó eran alodiales y libres, ó feudales en el sentido riguroso de esta palabra, ó censatarias. Con esta clasificacion de las propiedades estaba íntimamente enlazada la de las personas, cuyos varios estados se hallaban allí mejor definidos y deslindados que en otros reinos.

Eran libres las tierras que los mozárabes habian poseido y conservaron después de la reconquista, aunque tal libertad no fuese absoluta ni permanente. No era absoluta, porque si bien aquellos cristianos no estaban sujetos á las cargas y gabelas de los vasallos señoriales, quedaron obligados como vassallos naturales del rey á los mismos tributos que ántes satisfacieran á los emires y califas. No fué tampoco permanente aquella libertad, porque las tierras que la gozaron cambiaban frecuentemente de condicion, ya recomendándose, ó ya rindiendo vasallaje sus dueños á señores poderosos.

La tierra del condado de Rivagorza se mantuvo en poder de cristianos no obstante la invasion sarracena, y conservó su independencia de los mo-

narcas de Sobrarve y de Aragon, hasta que los condes para mejor defenderla, se reconocieron vasallos y feudatarios de la corona (1). Por eso no gozó aquel Estado los fueros de Aragon y se rigió por costumbres especiales; pues aunque no sucediese lo mismo en otros lugares que tuvieron igual principio, fue sin duda por su menor extension y escasa importancia.

Fueron tambien alodiales muchas tierras de las que los reyes ganaron para sí en la reconquista y dieron después á sus vasallos para poblarlas y defenderlas con este y otros privilegios consignados en cartas y fueros particulares. D. Alfonso I pobló á Mallen con cristianos mozárabes, á quienes dió fuero en 1132, concediéndoles para sí y sus descendientes todas las tierras que pudieran labrar, y exencion de los tributos de *lezda*, *peaje* y *herbaje*, asi como de ir en hueste contra cristianos (2). El mismo monarca dió carta de poblacion á Artasona en 1154, declarando libres las heredades de caballeros y de peones, y concediendo además á los vecinos las tierras que pudieran poblar y labrar libres de «todo fuero malo y censo malo» (3). E conde de Barcelona, D. Ramon Berengüer, dió fuero á Daroca en 1142, declarando á los pobladores libres con sus casas y bienes, y exentos de los tributos de portazgo y montazgo, y ofreciéndoles en plena propiedad para sí y sus descendientes, los castillos que ganaran de los moros y las tierras que obtuvieran de la corona, salvo el derecho y la fidelidad debida al soberano (4).

Debían ser tambien tierras libres las que por mera ocupacion solian adquirir los infanzones en los pueblos de que eran vecinos. Uno de los fueros que D. Jaime el Conquistador declaró en las Córtes de Huesca de 1247, autorizaba á los infanzones que residieran en lugares del rey, para roturar las tierras incultas y baldías que hallaran en ellos, poniéndoles una señal que manifestase su ánimo de ocuparlas y hacerlas suyas. Por este medio adquiria legitimamente el infanzon la propiedad de tales tierras; pero si las abandonaba después de señaladas, no arándolas en el término de cuarenta días, debía perderlas y cualquiera otro podia del mismo modo ocuparlas y adquirirlas (5). Obtenidas estas tierras sin pacto ni condicion expresa de carga, ni servicio, y sin que las leyes generales impusieran por

(1) Briz, *Historia del Monasterio de San Juan de la Peña*, pág. 347.

(2) F. de Mallen, en Muñoz, *Coleccion*, etc., pág. 503.

(3) Carta-puebla de Artasona, en Muñoz, *Coleccion*, etc., pág. 512.

(4) F. de Daroca. Muñoz, etc., pág. 534.

(5) F. de Aragon, lib. 3, t. *De scaliis*, y lib. 7, t. *De expedition. infantion*.

razon de ellas ningun gravámen especial, debieron considerarse como aldeales y libres de todo tributo, fuera del que personalmente y por razon de su estado civil y político, debiese prestar el propietario.

Pero adviértase que cuando se habla de tierras libres en la Edad Media, no se entiende siempre tierras absolutamente exentas de toda contribucion general ó local de las que solian pagar todos los vasallos para subvenir á los gastos públicos, sino propiedades de las que en Castilla se llamaban de juro de heredad, porque se poseian en pleno dominio, no dependian del directo y no prestaban por tal concepto gabelas ni servicios. Pero la inmunidad más ó ménos completa de estas tierras, no solia depender tanto del título de su adquisicion, cuanto de la calidad personal de sus dueños.

En cuanto á su estado político, formaban los aragoneses clases distintas y numerosas, de las cuales resultaba una complicada gerarquia social. Habia en primer lugar dos grandes categorias fundamentales: la de los *infanzones* y la de los *hombres de servicio* ó de *signó servicio* (1). Los infanzones se dividian después en *ermunios*, ó libres é inmunes desde tiempo inmemorial de todo tributo y servicio, y *francos por carta* y gracia de señor, otorgada en fecha conocida. Los infanzones *ermunios* se subdividian á su vez en *ricos-hombres* ó *barones*, *mesnaderos*, simples *caballeros* y meros infanzones. Eran ricos-hombres ó barones los *mesnaderos* á quienes el rey habia concedido tierras en honor con el cargo de sostener cierto número de soldados. *Mesnaderos* se llamaban los descendientes de ricos-hombres en cuya ascendencia directa no hubiese habido ningun vasallo de señor. Estos moraban con los ricos-hombres y recibian de ellos el sustento, pero no á título de vasallos, sino como amigos y compañeros, á semejanza de los *liti* y *antrustiones* germánicos. Simples caballeros eran los que habian recibido la investidura militar ó de caballeria, haciéndose vasallos de algun señor que no fuera el rey, su hijo ó prelado eclesiástico. Eran simples infanzones los que descendiendo por linea recta de otros infanzones, no habian sido armados caballeros, aunque estaban en aptitud de serlo.

Todos los infanzones *ermunios* eran tan exentos de tributos y servicios personales y reales, que si adquirian legitimamente heredades pecheras, las hacian inmunes, á ménos que la adquisicion se hubiese verificado en fraude de alguna ley que la prohibiera (2). Luego se limitó este privilegio al caso en que el infanzon comprara á la vez toda la hacienda de algun va-

(1) Vidal de Canellas in Blancas, *Rerum. Aragonensium comentarii*, pág. 305.

(2) Fuer. de Arag., lib. 7, t. *De inmunit. milit.*

sallo, quedando sujeto á pechar por las adquisiciones parciales que hiciese, y siempre para los gastos de guerra y para la reparacion de fosos, puertas y muros de los castillos (1). Los infanzones francos por carta no disfrutaban inmunidad de servicios y pechos, sino con relacion á los señores de quienes habian recibido la gracia de su libertad.

Los hombres de servicio, que eran propiamente los pecheros, se dividian tambien originariamente en tres clases numerosas: la de los *ciudadanos*, la de los simples *villanos* y la de los *villanos de parada*. Llamábanse ciudadanos los habitantes de las ciudades y villas equiparadas á ellas, que no eran infanzones; pero si desempeñaban oficios manuales ó profesaban la abogacia, la medicina, el comercio por mayor ú otras artes análogas, se denominaban *burgueses*. Eran simples villanos ó *payeses* los vecinos de las villas y lugares propios del rey ó de la Iglesia. Llamábanse, en fin, villanos *de parada* los antiguos siervos de la gleba, que habiéndose rebelado en tiempos remotos contra sus señores, habian transigido al fin con ellos, cambiando su servidumbre por la condicion de tributarios. Todos los hombres de servicio menos estos últimos villanos estaban sujetos á los pechos generales del rey y á los particulares de sus señores, además de lo que debian satisfacer por razon de las heredades que disfrutaban. Sin conocer bien los varios estados de personas, no se comprenderia lo que me queda que decir acerca de la varia condicion de las tierras:

II.

DE LAS HONORES.

Tenian todos los caractéres de feudales las tierras dadas con la denominacion de *honores* ó en *honor*, *caballerias de honor* y *caballerias de mesnada*, así como las concedidas con el propio nombre de *feudos*. Una de las primitivas leyes de Sobrarve que la tradicion atribuye á los primeros soberanos de aquel reino, disponia que el monarca partiese con los ricos-hombres, los caballeros y los infanzones naturales del mismo, las tierras que con ellos conquistase del poder de los mōros (2). Dábanse estas tierras en

(1) *Observant. regni Aragon. lib. 6, t. De privil. milit.; lib. 4, t. De emptione, 6 y lib 9, t. De salva infantion., 7 y 12.*

(2) Aunque es por lo ménos harto dudosa la autenticidad de estas leyes, y deba tenerse por fábula la mayor parte de la historia que se cuenta de la promulgacion de

honor, lo cual, segun el obispo Canellas, recopilador de los fueros, queria decir que las villas y lugares ganados á los sarracenos, con sus territorios respectivos, se entregaban á los ricos-hombres, como estipendio de sus servicios pasados y futuros, para que los gobernasen y percibiesen sus rentas ó parte de ellas (1). Cualquiera que sea el origen fabuloso de las llamadas leyes de Sobrarve, es lo cierto que la citada se halla confirmada y corroborada por otras posteriores y por costumbres, cuya autenticidad es indisputable. Así el rey D. Jaime I dispuso en 1265, que no se dieran tierras y *honores*, sino á los naturales del reino, que fueran de linaje de los ricos-hombres (2).

No solamente era deber del rey repartir las tierras así adquiridas entre los barones, sino que estos tenian á su vez igual obligacion respecto á sus mesnaderos y vasallòs particulares. El *Privilegio general*, confirmado por D. Pedro II en 1283, mandaba á los ricos-hombres dividir entre los caballeros las tierras y honores que recibieran del rey, bajo la pena de perderlas (3). La porcion de tierra asignada, ó que debia repartirse á cada caballerero, era lo que se llamaba una *caballeria*. Y aunque esta ley hubo de ser en parte modificada por la que en 1501, promulgó D. Jaime II, á peticion de los barones, permitiéndoles reservar una caballeria al que tuviese de 10 á 20, dos al que poseyera de 20 á 50, tres al que disfrutara de 50 á 40, y en igual proporcion al que tuviera más, siempre que no se perjudicase el servicio de la corona (4), no dejó de observarse constantemente, segun testifican los documentos y los escritores contemporáneos.

D. Alfonso el Batallador, después de ganar á Zaragoza del poder de los

los famosos fueros de Sobrarve, no puede dudarse que desde la antigüedad más remota disfrutaban los próceres y nobles de Aragon derechos y privilegios, que á la vez que sostenian su independencia y su autoridad, limitaban la del rey ó caudillo. Tampoco hay motivo para negar que entre estos privilegios figuraran todos ó la mayor parte de los contenidos en el texto de las llamadas leyes de Sobrarve, que escrito con la ridícula pretension de imitar el estilo y la forma de las leyes de las XII Tablas, corre impreso desde el siglo xvii. Este texto fué obra sin duda de algun letrado ó erudito, de moderna fecha, mas las disposiciones que contiene de seguro no fueron inventadas por el que redactó el escrito, sino tomadas de la historia, de la tradicion y de la práctica. Hé aquí entretanto la ley á que se refiere el texto: *E Mauris vindicabunda dividuntur inter ricos homines non modo, sed etiam inter milites ac infanciones: peregrinus autem homo nihil inde capito.* (Blancas, *Rerum Aragonensium comentarii*, pág. 25.)

(1) Blancas, *Rer. Arag.*, pág. 306.

(2) F. lib. 7, t. *De cavalleriis*. Observantie, lib. 6, t. *De conditione infantionum*, 4.

(3) F. lib. 1, t. *De privileg. general.* y lib. 7, t. *Quod barones*.

(4) F. lib. 7, t. *De baronibus quot.* Observ. lib. 6, t. *De condit. infant.*

moros, la repartió entre cuatro ricos hombres de los que le habían ayudado en la conquista, dando en *honor* á Gaston, vizconde de Bearne, la parroquia del Pilar; á Roton, conde de Alperche, un barrio cerca de la Iglesia mayor, y el resto de la ciudad á dos personas cuyos nombres no ha relevado la historia (1). Los cristianos mozárabes que habitaban en la parroquia dada á Gaston pidieron al rey entrar también en el reparto, alegando la ayuda que le habían dispensado para la conquista, y después de una reñida controversia, obtuvieron la villa de Mallen en recompensa de sus servicios (2). El mismo Gaston, según cierto documento del *Cartulario* de la Iglesia del Pilar, dió á un caballero su súbdito que le había ayudado á la conquista, ciertas casas y tierras que habían pertenecido al alcalde moro Aben Alimen, con cargo de guardarle fidelidad y de quedar á salvo la debida al rey Alfonso *qui nobis ea dedit* (3).

No se daban ordinariamente estas tierras en propiedad absoluta, ni todo lo comprendido dentro de ellas pasaba siempre al dominio privado, ni aún al usufructo del adquirente. Lo que el rey, y en su caso los ricos-hombres otorgaban al conceder las caballerías de honor, era el derecho á percibir las rentas ó una parte de las rentas que la corona cobraba en las tierras en ellas comprendidas, de sus vecinos y pobladores. Mas estas rentas representaban por una parte cierto dominio directo originario sobre las mismas tierras, y por otra la jurisdicción y potestad sobre los habitantes de los respectivos lugares, siendo como el fruto del uno y de la otra. Pertenecían al señor del lugar bajo el primer concepto cierto tributo, que con el nombre de *precario* en unas partes y de *novenario* en otras, se pagaba en granos ó en dinero por las heredades que cultivaban los moradores, cuya prestación, tanto por su forma cuanto por su nombre, dá á conocer claramente que traía origen de una concesión primitiva del dominio útil, no perpétuo de las tierras por quien se atribuía el señorío de ellas. También correspondía al señor el tributo personal, que con el nombre de *deveria* pagaba anualmente cada familia en pan, aves ú otros frutos y que según Canellas, era reliquia de la antigua condición de los villanos de *parada* (4). Otras rentas y tributos solían recibir también los señores de sus lugares

(1) Blancas, *Rer. Aragonen. comentar.* pág. 136, y Briz Martínez, *Hist. del monaster. de San Juan de la Peña*, pág. 756.

(2) Blancas, *ibid.*, pág. 129.

(3) Blancas, *ibid.*, pág. 322.

(4) Vidal de Canellas en Blancas, *Rerum Aragonem. comentar.* pág. 306.

con los nombres de *pechas*, *questias*, *lezdas*, *pedidos*, *censos*, *ejércitos*, *cabalgadas*, *monedaje*, *zafra*, *acémilas*, *fonsaderas* y *cenaz*. No me detendré á explicar en lo que consistia cada una de estas prestaciones, ni tal vez sería fácil hacerlo respecto á algunas de un modo cumplido; pero baste saber que todas traian origen ó de la posesion de las tierras ó de la condicion de vasallaje inherente á la circunstancia de habitar en tierras de señorío particular, que era tambien á su vez una especie de posesion. En muchos lugares, sin embargo, no pertenecian al señor todas estas prestaciones, por haberse reservado el rey algunas de ellas. Así, por ejemplo, los censos, que eran rentas exclusivamente territoriales y las *cenaz*, que eran tributos puramente señoriales, equivalentes á la obligacion de albergar y mantener al señor en su tránsito por los lugares del señorío, se hallaban frecuentemente reservados á la corona.

Como fruto de la jurisdiccion que tenian los señores sobre sus vasallos, les correspondian asimismo las penas pecuniarias llamadas *calumnias*, que no excedieran de cierta cuantía y que se impusieran por delitos ménos graves. Segun Canellas las multas ó calumnias que se pagaban en sustitucion de penas personales, hasta lo que él llamaba *media mortificatura y fractio cutelli*, y que podriamos traducir por pena de mutilacion de miembro, pertenecian á los señores, y las que se satisfacian por penas de delitos más graves, al rey. Las multas hasta 60 sueldos eran propiedad de los señores, menos en la parte que correspondia á los querellantes: las de homicidios pertenecian á la corona (1), excepto cuando se cometia el delito en lugar de señorío, y el muerto era vasallo de infanzon, ó en lugar realengo y tambien por el mismo vasallo, porque en estos casos debia partirse la multa entre el señor y el rey (2).

Correspondia, por último, á los dueños de caballerias de *honor* el dominio de todas las tierras comprendidas dentro de sus límites y no cultivadas ni apropiadas. Así en Aragon, lo mismo que en Castilla y en Navarra, los montes y las aguas pertenecian originariamente á la corona ó al infanzon señor del lugar y se trasmitian en igual forma los infanzones á quienes este pasaba dividido en caballerias. En virtud de este dominio originario disponia el dueño de la *honor* de los pastos, yerbas, maderas y leñas, exigiendo por su disfrute los tributos de *herbage* y *boalage*: ejercia por sí ó con licencia de la corona el tiránico derecho de negar el paso por los caminos

(1) F. lib. 9, t. *De divisione pecunie penal.*

(2) F. lib. 9, t. *De homicid.*

á hombres, ganados y mercancías que no le pagasen gravosos tributos (1); y por último se reservaba, aunque sin perjuicio de los vecinos infanzones, el monopolio de la pesca, de los molinos y de los hornos. Así cuando el rey daba lugares en honor solía expresar que los daba con sus aguas, términos, montes, yerbas, calumnias, homicidios, hombres y todas las demás cosas que pertenecían al señorío de la corona (2). Por la misma razón, allí como en Castilla, cuando el rey deseaba atraer moradores á lugares desiertos solía ofrecerles para estimularlos estas mismas cosas que pertenecían al real patrimonio (3). Pero la ley general en esta materia eran por una parte la del *Fuero* que prohibía hacer hornos y molinos de agua sin licencia del señor y por otra la costumbre autorizada por las Observancias que declaraba no alcanzar á los infanzones semejante prohibición, ni la de aprovechar yerbas, leñas y aguas (4).

Tal era en general el dominio de los ricos-hombres en los lugares de sus honores, pero no todos percibían todas las rentas y obenciones que quedan referidas, ni aunque los vecinos las pagasen todas, era siempre para el rico-hombre la totalidad de sus productos. Partíanse estos con el rey ó con los mismos pueblos, ó gravaba sobre ellos el pago de muchos servicios públicos como en Navarra y Castilla.

Las caballerías llamadas de *honor* eran las que se daban á los nobles de linaje, consignadas en tierras y vasallos ó en rentas públicas. Las caballerías denominadas de *mesnada* eran las que el rey daba á los mesnaderos y caballeros en rentas que no se acostumbraba dar á los nobles por caballerías de honor. De esta definición de las caballerías, que se lee en el texto

(1) El tributo que pagaban los caminantes se llamaba *peage*; el de los ganados *carnage* y el de las mercancías *lezda*.

(2) El rey D. Sancho Abarca dió al monasterio de San Juan de la Peña la villa de Alastrue, *cum lezdis, caloniis, cursibus aquarum et cum omnibus terminis*, y otras varias villas *cum hominibus, feminis, aquis, montibus, herbis, pratis, paludibus, pascuis et cum omnibus juribus, caloniis, homicidiis*..... Blancas, obr. cit. p. 82 y 74.

(3) El rey D. Sancho Ramirez dió fuero á Alquezar en 1069 eximiendo á los pobladores de *vias & carnales* (peages de hombres y ganados) *et de todas azofras malas*, de *lezda* y de toda prestación por las tierras que labraran, excepto el diezmo que darían al señor. D. Alfonso I permitió á los pobladores de Calatayud en 1131 tener hornos, tiendas, molinos y canales. El mismo monarca cuando pobló á Mallén en 1132 con cristianos mozárabes les concedió leñas, maderas, pastos, aguas y todas las tierras que pudieran labrar y les eximió de *lezda*, *herbage* y *peage*. Muñoz, *Colección de Fueros*. p. 246 y 503.

(4) *Foror. in usu non habitor.* lib. 5, t. *De rivis* etc. *Observant.* lib. 9, t. *Actus curiar.* 6.

de las Observancias, se infiere al parecer, que las de mesnada no consistian en tierras, sino en rentas señaladas, de las que formaban el patrimonio de la corona, lo cual confirma Blancas, hasta cierto punto, asegurando que tales caballerías eran las que el rey daba libremente de su propio patrimonio á los hombres de su casa, sin decir de ellas como dice de las de honor, «que consistian en frutos, en dinero, ó en *campos yermos*» (1). Hay, pues, fundamento para creer que si las caballerías de honor solian llevar consigo el dominio más ó ménos completo de lugares, heredades ó yermos, las de mesnada carecian por lo general de esta circunstancia, consistiendo solamente en dineros ó rentas, y eran por lo mismo más dependientes de la corona y de menor influjo en la organizacion social y política del Estado. Ni constituian siempre la caballería de honor todas las tierras, rentas y derechos del lugar de su nombre. A veces se daba únicamente en tal concepto, una parte alicuota de estos derechos ó rentas, mayor ó menor, segun el número de soldados con que habia de acudir el concesionario á la guerra, á razon de uno por cada 500 sueldos de renta.

El dominio de *las honores* experimentó en cuanto á su duracion las mismas vicisitudes que el de los feudos en todo el imperio de Carlo-Magno. Así como allí los beneficios fueron primero temporales ó vitalicios, y después, con el nombre de feudos, hereditarios, así *las honores* fueron en su origen amovibles y después perpétuas. Segun Vidal de Canellas, el rey podia en los primeros tiempos recobrarlas cuando quisiese «mandando de palabra ó por escrito su incorporacion á la corona» (2); de cuyas palabras infiere Blancas que *las honores* no se perpetuaban en las familias, por cuanto el rey las trasmitia libremente de unas á otras, á fin de que todas turnasen en su disfrute y no quedase ninguna privada enteramente de ellas, como no fuese por causa legitima. Tambien procuraba el rey, segun el mismo autor, que este turno se verificase siempre entre los infanzones de la misma gerarquia, no dando las caballerías de los ricos-hombres á los mesnaderos, ni las de estos á aquellos, á fin de que no recibiese cada familia por este concepto más de lo justo (3). Y los ricos-hombres no descuidaban ciertamente el uso de este derecho, cuando además de ser obligacion del monarca tener siempre re-

(1) Observ. lib. 9, t. *De privil. gener.* 23 y 24.

(2) Blancas *Rer. Arag.* p. 335.

(3) «Conditio autem Regis circa Ricos-homines dignoscitur esse talis ut quomodo-cumque sibi placuerit, et quotiescumque eos destituat. Quæ destitutio fit quam cito ipse rex verbotenus vel per suas litteras honorem, quem pro ipso tenet Ricus-homo restitui, sibi petat.» Canellas in Blancas, obr. cit. p. 332.

partidas *las honores* entre ellos, sabían que los que quedaban privados de su disfrute descendían al estado de mesnaderos. Pero su derecho no consistía en poseer *una honor* determinada, sino una cualquiera de las que acostumbraban disfrutar los hombres de su clase, á voluntad del rey. Por eso cuando los ricos-hombres eran ejecutados por deudas podía embargárseles las rentas de *las honores*, pero nunca la propiedad de ellas (1).

Igualmente temporal y precaria debía ser la porción de los caballeros vasallos de los ricos-hombres, en las caballerías de honor que tenían de estos; pues aunque no hallo autoridad que expresamente lo atestigüe, se infiere así de la regla general que asimilaba en un todo tales caballerías á las concedidas directamente por la corona. Teniendo unas y otras el mismo origen y produciendo iguales obligaciones y derechos, no puede presumirse que se diferenciaban en punto tan importante.

Pero luego que en Europa se hicieron hereditarios los beneficios y nacieron los feudos, en Aragon se hicieron tambien perpétuas *las honores*. Muerto el rey D. Alfonso II en 1196, convocó Córtes en Daroca su hijo don Pedro II, ante ellas se ciñó la corona á pesar de faltarle tres años de edad para los veinte que este acto requería, y de no estar casado y armado caballero, y con su concurso quitó *las honores* á los ricos-hombres, distribuyéndoselas otra vez del modo que estimó conveniente, pero no ya con la calidad de temporales que habían tenido hasta entónces, sino con la de perpétuas y á cambio de renunciar los agraciados á muchas de sus antiguas prerrogativas políticas, que ó pasaron al Justicia ó recuperó la corona (2). «De este modo, dice el historiador Abarca, empezaron los ricos-hombres á procurar estados fijos, cuidando más de sus personas y sucesores que de sus oficios y grados, y los reyes se fueron haciendo más dueños y disminuyeron las caballerías..... y empezaron á formar otros ricos-hombres dichos de mesnada (ó de las caballerías del rey) para tenerlos «más suyos y sujetos» (3). Y en efecto, los ricos-hombres que segun las leyes de Sobrarve formaban por derecho propio el consejo necesario del rey para administrar justicia, declarar la guerra, hacer la paz y decidir todos los asuntos importantes (4), siendo más bien sus compañeros que sus

(1) Blancas, *ibid.*

(2) Blancas, p. 154.

(3) Abarca, *Los reyes de Aragon en anales históricos*, t. 1.º, p. 220.

(4) Hé aqui las llamadas leyes de Sobrarve que declaraban estas facultades de los nobles:

«Jura dicere regi nefas esto, nisi adhibito subditorum consilio.

súbditos, se despojaron entónces de estas eminentes facultades, consintiendo que se arribuyeran en gran parte al Justicia y tolerando que esto se hiciese por un monarca sin la edad necesaria para reinar, á trueque de perpetuarse ellos en la posesion de sus estados y propiedades. Pero tan preparada debia de estar la opinion pública para esta reforma, por la autoridad de ejemplos extraños y la necesidad de evitar las inquietudes y perturbaciones interiores, á que daba origen la inestabilidad de *las honores*, que bastó un rey niño para llevarla á cabo sin resistencia, cortando así los vuelos á la nobleza y á la oligarquía.

Desde entónces fueron los nobles celosísimos por conservar en sus familias las tierras y los derechos que á título de honores poseían; y como el medio de asegurarlos fuese mantener su preponderancia en las cosas del gobierno, no hubieron de ser igualmente escrupulosos en observar por su parte lo estipulado con D. Pedro II. Así es que al acudir en 1283 al rey D. Pedro III para que les restituyera los derechos y prerogativas de que se creían despojados, este monarca accedió en parte á sus ruegos, otorgándoles el Privilegio general á manera de tabla de derechos, en la cual quedaron consignados los que de antiguo pertenecian al reino, y entre ellos los siguientes: «Item las honores de Aragon que tornen á las cavallerias segun eran en el tiempo que el señor rey D. Jayme fino..... Item, que todas las ciudades é las villas de Aragon que solian seyer honor de ricos-hombres, que lo sian aquellas que del señor rey son agora, segund que acostumbrado era antiguamente. Item que honor non sia tollida ni emparada por el señor rey á ningun richo-hombre de Aragon; si doncas el richo-hombre non ficiesse por qué; encara que este primerament sea visto, juzgado por córt general..... é aquesto mesmo de los mesnaderos.... E otrosí, que los ricos-hombres non puedan toller tierra ni honores que dados habrán á leires cavalleros, si doncas el cavallero non ficiesse por qué; é encara que aquesto primerament sia conocido por cort, por los vasallos de aquel mismo richo-hombre de aquellos que ternan tierra por él» (1).

No hubieron de tener cumplido efecto todas estas disposiciones, y particularmente las que se referian á la devolucion de las antiguas *honores*,

«Bellum aggredi, pacem inire, inducias agere, remve aliam magni momenti pertractare, caveto rex praeterquam seniorum annuente consensu.» Blancas, *Rer. Aragon. coment.* pág. 205.

(1) F. lib. 1.º, t. *Privil. gener.*

cuando los nobles volvieron á quejarse á D. Jaime II en 1525 de que no se les guardaban sus fueros y privilegios y le pidieron que las honores que á la sazón eran de la corona, volvieran á las caballerías á que ántes correspondieran, así como los lugares procedentes de honores que el rey había recibido en cambio de otros dados á los barones. D. Jaime accedió á esta pretension, mandando que se cumpliese el privilegio general; que tanto los lugares recibidos por permuta, como los antiguos de la corona que estuviesen temporalmente dados ó hipotecados, volvieran á las caballerías cuando quedaran libres; y que se restituyeran desde luego todos aquellos de que á la sazón pudiera disponerse. También solicitaron los nobles quejosos que no se privase de las caballerías de mesnada á los mesnaderos infanzones sino por causa probada; y el rey lo otorgó asimismo, añadiendo «que las asignaciones se farán por el señor rey á ellos por sus mesnadas, que se faga simplement así como se dan las honores á los ricos-hombres, no diciendo que las asigna *mientras que á el placera*, é que así se fagan las cartas; é aun que las asignará en lugares ciertos con que se trobe do.» El rey confirmó por último, en virtud de otra petición, el privilegio ántes referido de no poder los ricos-hombres quitar á sus caballeros las tierras que les hubieran dado, sino por justa causa (1). De todo lo cual se infiere que antiguamente se concedían *las honores* con la cláusula *mientras que al rey placera*; que esta cláusula desapareció cuando *las honores* se hicieron hereditarias; que no obstante esta novedad hubieron de otorgarse ó de entenderse otorgadas con la limitación dicha muchas caballerías de honor y de mesnada y que los nobles reclamaron enérgicamente contra este desafuero.

Perdida por la corona y por los ricos-hombres, en su caso la facultad de disponer arbitrariamente de las tierras dadas á sus vasallos como caballerías, no salían éstas de las familias á quienes una vez habían sido concedidas, sino por alguna de estas tres causas: abandono voluntario del poseedor, *emparamiento* ó sea reversion forzosa, ó enajenación libre.

Uno de los privilegios que D. Pedro II reconoció á los infanzones en el general de que he hecho mención, era el de abandonar el reino cuando lo tuviesen á bien, para vivir con otro señor, dejando entretanto bajo la encomienda y especial protección del rey á sus mujeres, sus hijos, sus bienes, sus vasallos, y las mujeres, hijos y bienes de los vasallos que fueran con ellos (2). Pero para este efecto debían dimitir previamente *las honores* que

(1) F. lib. 1.º, tit. *Declaratio Privil. gener.*

(2) Id. id. tit. *Privil. gener.*

del rey tuviesen; y si después el señor á cuyo servicio pasaran, entrase con él en guerra, aún podían lícitamente tomar parte en ella, siempre no pusiesen fuego en las tierras del rey, ni le hicieran perder la posesion de ninguno de sus castillos, ni dejaran de pasar á su servicio en el caso de que los llamasen á lid campal (1). La *honor* era el vínculo principal de union entre el infanzon y el rey. Una vez roto este vínculo mediante la reversion de la *honor* á la corona, no quedaba entre ellos más lazos de dependencia que el personal, y este lo era tanto, que si por una parte obligaba al monarca á recibir en encomienda la familia y los bienes del vasallo, por otra permitia á éste hostilizar á su propio rey, siempre que excusase el desacato y otros actos de depravacion y vandalismo.

El caballero vasallo del rico-hombre podia tambien despedirse de su servicio dimitiendo las caballerias que de él tuviera, mas no sin ponerse en seguida al servicio de otro (2). Tampoco podia rendir vasallaje á otro señor, mientras viviera con el primero y en perjuicio suyo, bajo pena de desheredamiento y multa de 100 sueldos (3). Si pasar al servicio del rey, á ménos que el rico-hombre cometiera falta por la cual debiera perder su *honor*.

Las faltas que podian hacer perder sus honores tanto á los ricos-hombres como á los infanzones eran: 1.ª, no tributar al rey la reverencia debida; 2.ª, no observar ó no hacer cumplir los fueros; 3.ª, no repartir entre los caballeros las tierras recibidas en *honor*; 4.ª, jurar en falso sobre la infanzonia; 5.ª, incurrir en algun delito; 6.ª, no prestar el servicio correspondiente á la caballeria; 7.ª, ausentarse sin real licencia de los dominios del rey para servir á otro señor; 8.ª, armar caballero á hombre no infanzon; 9.ª, no tener bien poblados los lugares ó recargarlos excesivamente de tributos (4). Mas en todos ó en la mayor parte de estos casos no podia proceder el rey á recobrar las *honores* por sí solo, sino mediante un juicio, de que debia conocer el Justicia en las Córtes generales de los cuatro brazos, con consejo de los ricos-hombres y de los hombres honrados de las villas, segun lo establecido en el *Privilegio general*.

No refieren las leyes ni las escrituras tan minuciosamente las causas por

(1) F. lib. 7, *De expedit. infantion. t. De baronib.* Observ. lib. 6.º t. *De privli. milit.*

(2) Blancas, ob. cit. p. 330.

(3) F. lib. 9, t. *De vasall. non mutand.*

(4) Obs. lib. 6, t. *De condit. infant.* 6, 9, 10 y 11.—Salanova in Blancas, *Arag. rer.* p. 311, y Blancas *obr. cit.* p. 331.

las cuales podían ser privados los caballeros de las rentas y tierras que disfrutaban, como caballerías de los ricos-hombres. Tres solamente señaló el rey D. Pedro I en el Privilegio de los infanzones: las mismas por cierto que en otros reinos daban lugar á la pérdida de los feudos. Tales eran dar muerte al señor de la caballería, cometer adulterio con su mujer, y ponerse á servicio de otro señor (1). Estas caballerías no podían tampoco ser *emparadas* sino mediante juicio, del cual conocía, segun el Privilegio general y los escritores contemporáneos, un tribunal compuesto de vasallos del mismo señor, ó sea los *pures* del procesado (2).

Nada diré ahora acerca de la enajenacion libre de *las honores*, última causa por la cual podían aquellas salir de las familias que las disfrutaban, porque esto ha de ser asunto de posterior capítulo.

III.

DE LOS FEUDOS PROPIOS.

Las tierras y rentas que constituían *las honores* se daban, como dice Blancas, *quasi in feudum honoratum*; mas otras se concedían con la propia denominacion de *feudos*, si bien este título de merced fuese ménos usado que el primero. Feudo era sin duda el condado de Rivagorza, que existiendo ya en tiempo de los Godos se salvó de la invasion sarracena, entregándose en aquel concepto á los reyes de Francia, que lo defendieron y conservaron como feudo propio, hasta que por los años de 1015 lo conquistó e incorporó á la corona el rey D. Sancho el Mayor (3). «Rey de Rivagorza» se llamó entónces tambien este monarca; pero tal vez para asegurar su conquista, ó cumpliendo capitulaciones solemnes, no varió el estado político de aquel territorio, limitándose á recibir de sus condes el mismo homenaje que ántes prestaban á los reyes de Francia. La famosa escritura canónica de San Pedro de Tabernas, sea ó no auténtica, da testimonio por lo ménos de la antigüedad y la subsistencia, á pesar de la invasion sarracena, de aquel pequeño Estado cristiano (4). Las antiguas leyes del reino y los escritores

(1) Molino, *Repertor. foror.* verb. *Privilegium*, p. 265.

(2) Salanova in Blanc. p. 317, y Fuero, lib. 1, t. *Privil. gener.*

(3) Briz, *Hist. de San Juan de la Peña*, lib. 2, c. 19 y 20.

(4) Segun este controvertido documento, existia al tiempo de la invasion de los moros, en el monasterio de San Pedro de Tabernas, sito en lo más enriscado de las montañas de Rivagorza, un monje llamado Balastuto, el cual habiendo llegado á edad muy avanzada y hallándose próximo á la muerte, fué rogado por los monjees para que

de los siglos xv y xvi acreditan sobradamente la calidad y la denominacion feudal de sus tierras (1). El rey de Aragón D. Juan II, que lo poseia en 1468, lo dió entónces en feudo á su hijo natural el maestre de Calatrava D. Alfonso de Aragon, con ciertos pactos y condiciones, y así permaneció, hasta que después de graves turbulencias y de una larga y encarnizada guerra civil entre vasallos rebeldes y leales al señor, Felipe II lo incorporó á la corona, indemnizando al poseedor previamente.

D. Juan II promulgó en 1500 el fuero conocido con la rúbrica *Quod Ricapurtia*, en el cual declaró que Rivagorza, Sobrarve, los Valles y Litera estaban sujetos al fuero de Aragón, excepto en los feudos, y que los ricos-hombres habian tenido siempre en *honor* estas tierras; y fundándose en que habian causado muchos agravios en ellas los *paciaros* y *vicarios* de Cataluña, ignorantes de los fueros y costumbres locales, nombrados para gobernarlas, dispuso que en adelante se establecieran *sobrejunteros* de Aragón en aquellos lugares, y que tanto ellos como los demás oficiales juzgaran en juicio y fuera de él, por los fueros de Aragón, excepto en los feudos. De modo que no sólo el condado era feudo de la corona, sino que dentro de él habia otros muchos feudos, en los cuales no regia la legislacion foral. Ilando de Bardaxi, comentando en el siglo xv este fuero, cita entre aquellos feudos los lugares de Atenza, Arcin y Miravet, que Jaime Maull tenia en tal concepto del conde de Rivagorza, añadiendo que habia otros muchos. Y como prueba de que en los lugares feudales no regia el fuero de Aragón, dice que en Atenza se habia dado algunas veces tormento, lo cual prohíbe aquel fuero rigurosamente; que en los lugares de la misma clase no era conocido el fuero de *viudedad*, y que habiéndose movido pleito entre el conde y el rey, por haber éste *emparado* el condado de Rivagorza, en la suposicion de haberse extinguido el feudo del mismo, se suscitó la cuestion de si deberían conocer del asunto los *pares de curia*, como en los feudos, ó el Justicia (2).

escribiese ántes de morir los graves sucesos de que habia sido testigo. Accediendo á ello Balastuto, se supone que dictó la escritura canónica llamada de San Pedro de Tabernas, en la cual, después de referir cómo se refugió en su monasterio el obispo de Zaragoza, Bencio, con las reliquias de su iglesia para librarlas de los infieles, cuenta que él mismo, Balastuto, fué enviado por su abad al rey de Francia, á fin de implorar su ayuda contra los moros que ya habian ocupado una gran parte del condado, y que, en efecto, obtuvo de aquel monarca la promesa de venir á España con un gran ejército, para arrojar de ella al enemigo. (Blancas, *Rer. Arag.* p. 6.)

(1) F lib. 1, t. *Quod Ricapurtia*.—Molino, *Repert. v. Feudum*.

(2) Bardaxi. *Commentarii in quattuor Aragonensium Fororum libros*, l. 1, t. *Quod Ricapurtia*.

Esta competencia, que estaba pendiente de apelacion cuando Bardaxi escribía, hubo de decidirse en favor del Justicia, puesto que el litigio se falló en el fondo por este magistrado, declarando que la posesion del feudo correspondia al conde, salvo el derecho del fisco y de los vasallos en cuanto á la propiedad.

Habia tambien otros lugares feudales fuera de Rivagorza. El jurisconsulto Miguel Molino escribía en el siglo xv, que eran entónces feudos de la corona los lugares de Ariza y Ververgal (1). Un instrumento que tengo á la vista en que Alaman de Gudal hizo pleito-homenaje á Doña Isabel, hija de D. Jaime I, por los castillos de Aguer y Monclus, es una verdadera carta de feudo con todas sus fórmulas y accidentes (2). D. Pedro IV en 1364 dió en feudo honroso á su consejero D. Pedro Boil, el castillo y lugar de Boil (3).

Nada dicen las leyes y poco los documentos contemporáneos acerca de la legislacion que, en vez de los Fueros, regian en estos lugares de feudo. Del de Rivagorza se sabe únicamente que sus vasallos no eran *hombres de servicio*, sino meros feudatarios, con fueros y privilegios particulares, que limitaban la autoridad de los oficiales del conde. Sus lugares y villas nombraban procuradores que se reunian una vez al año en «Consejo general» en que trataban de los intereses públicos del condado, se daban y se satisfacian las quejas (*greuges*), que los vecinos tuvieran de los oficiales del señor y se nombraban dos síndicos que representaran al condado y defendieran sus privilegios. Por lo demás, aquel pequeño estado feudal se hallaba organizado de esta manera. El conde nombraba un procurador y un justicia, un baile general que ejercia el cargo de merino, un sobrejuntero, dos notarios para las dos audiencias, un archivero, un tesorero que recaudaba las rentas, un procurador fiscal y un *advogado* fiscal. El procurador y el justicia nombraban sus porteros: el baile general establecia otros bailes subalternos, y el sobrejuntero nombraba sus tenientes (4). Estos oficiales y ministros conocian de los asuntos de su respectiva competencia con sujecion al fuero de Aragón, excepto en aquello que estaba decidido por leyes y privilegios particulares del condado, ó por la costumbre en los feudos dentro de él establecidos.

(1) Molino, *Repertor. V. Feudum*.

(2) *Memorial histórico de la Academia de la historia*, t. 3, p. 423.

(3) Privilegio del Archivo real de Barcelona citado por Madramany en su *Nobleza de la corona de Aragón*, c. 8.

(4) Biblioteca de Salazar, vol. 37, citado por Pidal en su *Historia de las alteraciones de Aragón*, t. 1, p. 119.

IV.

DE LAS TIERRAS TRIBUTARIAS DE VILLANOS.

Eran tierras tributarias como ántes he dicho, las que en su origen cultivaban los siervos adscriptos á la gleba que habian redimido después su servidumbre, mediante el pago de tributos y la prestacion de servicios señalados: las que poseian los sarracenos sometidos, considerados tambien en su origen, como siervos de la guerra; y las que disfrutaban los simples villanos ó pecheros. La historia de los antiguos siervos adscriptos se halla brevemente referida en las Observancias. Léese en ellas que los villanos de *parada*, llamados antiguamente *collati tendelli*, habian estado sujetos á servidumbre, tanto que se repartian por fuerza, entre los hijos de sus señores; pero que en cierto tiempo, apremiados por su situacion, se levantaron contra estos, logrando por último una transaccion, en cuya virtud se obligaron por sí y sus descendientes, á pagar á sus señores ciertos tributos, y cumplir otras condiciones (1). Ni este texto, ni los cronistas y escritores antiguos dan más noticia de aquel importante suceso. Vidal de Canellas, que tambien lo refiere casi en los mismos términos, añade solamente que una de las condiciones del convenio fué que los vasallos prestarian fianza por sus señores cuando estos la necesitaran, pero que mientras no fueran reintegrados de lo que desembolsaran por ellos, no tendrian obligacion de volver á fiarlos (2). Ignórase, pues, la fecha de aquel levantamiento, los lugares en que se verificó, quiénes fueron sus caudillos y las demás condiciones de la capitulacion que le puso fin. Fué semejante sin duda á la insurreccion de los *paísanos* de Francia en el siglo xii, á la de los villanos de Navarra, cuyos indicios hice notar en el libro anterior, y á la de los vasallos de *remensa* de Cataluña, de que hablaré después, en las cuales sacudieron el yugo los antiguos siervos. Tampoco fué aquel levantamiento el último de los que en Aragon hicieron correr abundantemente la sangre de los se-

(1) Observ. lib. 6, t. *De privilegiis Domine Infantionæ*, 9. *Collati tendelli..... erant servitute subditi, ut etiam inter filios dominorum suorum, ducebantur gladio dividendi, quia quodam tempore, urgente conditione pestifera eorum, contra suos dominos insurgent, tandem composuerunt cum eis, communi consensu, certo tributo et conditiones super se et suis filiis assignantes, ad quæ facienda remanent astricti, et pro hujusmodi compositione, tam ipsi quam ipsorum filii sunt vocati, eo quod cum dominis suis pacta talia paraverunt.*

(2) Blancas, *Arag. rer.* p. 309.

ñores, y así por la historia de los que ocurrieron en el siglo xvi, puede formarse un concepto aproximado de lo que serían los anteriores.

Había solamente villanos de *parada* en las tierras alodiales cuyos dueños siendo nobles, ó infanzones, ejercían en ellas el pleno dominio y lo que en Aragón se llamaba la *potestad absoluta*. Como los antiguos siervos adscriptos, hacían parte en cierto modo de las tierras que cultivaban, teniendo el dueño sobre ellos el mismo poder que sobre éstas. En las no alodiales, como lo eran las dadas en *honor*, al ménos cuando las *honor*es no eran hereditarias, en las propiamente feudales y en las concedidas en encomienda ó por cualquier otro título de dominio ménos pleno, no eran de *parada* los villanos que las habitaban ó cultivaban, sino simples vasallos llamados de *signo servicio* en quienes no tenía el señor potestad absoluta. Lo mismo sucedía en las tierras realengas, en las de iglesias y en las de órdenes religiosas, porque en las primeras había renunciado la corona á tan omnimoda autoridad, y en las otras tenía el rey ciertos derechos, como el llamado *monedage*, que le daban participacion en el fruto del dominio, la cual podría menoscabarse por el abuso de la potestad absoluta. No obstante estas exenciones, como eran muchos los lugares de dominio particular, sobre todo después que se perpetuaron las *honor*es, y este dominio llevaba consigo el señorío de todos los vasallos de *signo servicio* que moraban en los mismos lugares, debieron de ser también necesariamente muchas las tierras tributarias por este concepto.

A pesar de las ventajas conseguidas con el levantamiento ántes indicado, los villanos de *parada* no eran legalmente capaces de adquirir y ejercer los derechos de la propiedad verdadera. Las *Observancias* dicen de ellos que «nada poseían por sí, fuera de lo que tuvieran en los bienes de » los infanzones, y que moraban en las casas ó en las heredades de estos » con el pacto de permanecer siempre en ellas» (1). Lo que tenían en los bienes de los infanzones solía ser alguna heredad para cultivarla y pagar con sus frutos, los censos y gabelas con que estaban gravados: *censos malos*, segun les llamaban los documentos de la época, porque traían origen de la *pestífera condicion* de la servidumbre. Así calificaba Canellas la especie de capitación llamada *deveria* que se pagaba á los señores en algunos lugares, consistente en cierta cantidad de aves ó de frutos (2). Por eso cuando los reyes daban fueros y privilegios á los pueblos solían eximirlos de los

(1) Lib. 6, t. *De privilegiis militum*, 7.

(2) Blancas, *Arag. rer.* p. 307.

malos censos y de las *malas costumbres*, declarando libres sus propiedades. El conde D. Galindo, en el fuero que dió á Jaca en el año de 800 y que confirmó en 1064 el rey D. Sancho Ramirez, prometió á los vecinos que poseerian sus heredades libres de toda *mala costumbre*, y podrian moler sus grãos donde quisieran (1). D. Pedro I dió fuero á Barbastro en 1100 eximiendo á los pobladores de *todo censo malo*, y disponiendo que no pagaran por sus heredades más que el diezmo y las primicias (2). D. Alfonso I en 1134 dió carta-puebla á Artasona, ofreciendo á los vecinos que harian suyas las tierras que poblaran y labraran, con exclusion de todo *fuero malo* y *censo malo* (3).

Las tierras tributarias no eran propiedad de los villanos de *parada*, sus colonos, sino de los infanzones, señores de estos. Los villanos las labraban y recogian su fruto, pero con la obligacion de entregar al señor, como censo ó servicio, la parte que el mismo tuviera á bien exigirles, y aun sin estar seguros de coger para sí parte alguna puesto que su vida y su hacienda estaban siempre pendientes de la voluntad del señor. La ley en efecto autorizaba á éste para despojar de todos sus bienes á tales vasallos, sin conocimiento de causa, y lo que es más, sin que por los abusos que en el ejercicio de tal derecho se cometiesen, pudiera llevarse queja al rey (4). De lo cual se infiere que los censos y tributos de estos villanos debieron de ser arbitrarios, pues no se concibe que pudiera el señor despojarles de todos sus bienes y no de parte de ellos, en concepto de nuevos pechos ó gabelas. Verdad es que la costumbre autorizaba á los pecheros para recurrir al Justicia contra el consejo y oficiales de cualquier lugar que exigieran más de lo debido, por razon de impuestos ó censos (5); mas los pecheros á quienes se reconoció primeramente este derecho, no eran los vasallos de *parada*, sino los que no estaban sujetos á la potestad absoluta. En el siglo xv fué cuando por jurisprudencia se hizo extensivo aquel recurso á todo género de

(1) Huesca, *Teatro histórico de las iglesias del reino de Aragon*, t. 8. Apénd. 1 — Muñoz, *Colec. de fueros*, p. 235.

(2) Huesca, *Teatro*, etc. t. 9, apénd. 13. — Muñoz, *Colec.*, p. 354.

(3) Muñoz, *Colec.*, p. 512.

(4) Observ. lib. 9, t. *De privil. gener.* 1, 9. «*Domini locorum.... suis vasallis servitutis possunt.... bona eis auferre, remota omni appellatione: et in eis dominus rex non se potest in aliquo intromittere.*»

(5) Observ. lib. 9, t. *De appellationibus*. *Si aliqui se dicant gravatos ultra debitum in tallis seu collectis.... et firmaverit de directo, de solvendo quidquid per Justitiam fuerit cognitum et pronuntiatum.... non debere lite pendente, pro illo residuo seu immoderato pignoriari....*

vasallos, pero no sin limitarlo al caso de imponerse nuevos y exorbitantes tributos, ni sin que los señores reclamaran contra esta novedad, fundándose precisamente en su derecho á privar de toda su hacienda á los vasallos de *signo servicio* (1).

Eran tambien tierras tributarias las que conservaron los moros sometidos, á quienes se permitió continuar morando en ellas, después de la reconquista, y vivir con sujecion á su ley, aunque en un estado muy semejante al de servidumbre. En Aragon era muy considerable el número de estos habitantes, conocidos allí como en Navarra, con el nombre de *mudejares*. En muchos pueblos formaban la mayoría del vecindario; en otros no habia más vecinos ni moradores que ellos.

Los sarracenos eran considerados como cautivos: «sus cuerpos pertenecian al rey, excepto aquellos que los infanzones trajeran de tierras extrañas» segun declaraba una antigua ley (2). No podian constituirse siervos de ningun señor, porque lo eran de la corona; y aún cuando ésta no podia venderlos en uso de su *potestad ordinaria*, sino cuando cometian algun delito, por virtud de su *potestad absoluta*, ántes de que la renunciase, podia disponer de ellos como de verdaderas cosas (3). Aún los señores de lugares, segun la opinion de varios jurisconsultos, tenian la facultad de vender como cautivos á sus sarracenos, porque si bien la ley no se la concedia expresamente, juzgábasela comprendida en la potestad más amplia que disfrutaban de «tratarlos bien ó mal, y de matarlos de hambre, sed ó frio» segun veremos más adelante (4).

De tan miserable estado personal puede inferirse el que soportarian los *mudejares*, como poseedores de tierras. Los que vivian en lugares realengos no podian vender sus heredades á los cristianos sin dar á la corona la tercera parte del precio (5), como indemnizacion de los censos que ella no podia exigir de los nuevos poseedores. Estos censos debian consistir en la novena parte de los frutos, puesto que las leyes solian llamar á los sarracenos *novenarii* ó *tributarii Dominis Regis*. Pagaban además el diezmo de las heredades que poseian procedentes de cristianos (6), sin contar los tributos generales de *monedage* y otros. Si intentaban ausentarse del lugar en

(1) Molino, *Repert.* verb. *Vassallus*.

(2) Foror. *in usu non habitor*. lib. 7. *De sarracenis fugitiv.*

(3) Observ. lib. 7. *De judæis et sarrac.* 4.

(4) Molino, *Repert.* foror. verb. *Captivus*.

(5) Foror. *in usu non habit.* t. 7. — *De non alien. possess. tribut. y t. De judeis etc.*

(6) Id. t. *De decimis judæor.*

que moraban, debian ser presos y pagar su mal propósito con la pérdida de todos sus bienes (1). Solamente los vasallos de las iglesias, ya fuesen moros ó judíos ó ya cristianos, se eximian de tan dura servidumbre y podian abandonar libremente sus lugares (2). Además los moros cautivos podian ser presos por las deudas de sus señores, aunque no se hubieran obligado por ellos: los no cautivos estaban sujetos á esta vejacion solamente cuando se constituian sus fiadores (3). Prender á un sarraceno por deudas del señor era lo mismo que embargar á éste sus ganados y sus cosas para responder al acreedor con ellas. Así un antiguo glosador de los fueros que cita Molino, al comentar la ley que castigaba los daños causados por animales cuadrúpedos, opinaba que debian comprenderse entre estos los sarracenos cautivos, fundándose en que dicho título «*Si quadrupes tractatur de damno dato per bestias*, y en que así como el dueño de un animal que causa daño, se libra de toda responsabilidad dándolo *en noxa* al agraviado, así podia hacer lo mismo el señor del sarraceno cautivo (4).

Poseian por último tierras tributarias los ciudadanos y los simples villanos de *signo servicio*, vasallos tambien del rey ó de señores que no ejercian la potestad absoluta. Estos hombres carecian de todo privilegio, pero disfrutaban un estado muy superior al de los villanos de *parada*. Estaban sujetos á la potestad limitada de sus señores, mas podian disponer de sus personas y bienes con arreglo á las leyes ó á los pactos que determinaban sus obligaciones (5). Si eran vasallos del rey podian vender sus heredades á los caballeros ó á los infanzones, sin que el comprador quedase obligado á pechar por ellas (6). Si pertenecian á alguna iglesia ó monasterio, podian variar de domicilio, sin temor de ser presos y embargados, como sucedia á los vasallos del rey y de los señores seglares (7). Los mismos vasallos realengos no podian ser dados en encomienda á ningun noble, mesnadero ni caballero (8); y si bien tanto estos vasallos como los de señorío podian ser embargados por las deudas de sus señores ó por las fianzas que hubieran prestado por ellos, unos y otros libraban de esta vejacion sus bienes inmuebles (9).

(1) Observ. lib. 7, *De judæis*, etc. 2.

(2) Id. lib. 9, *De judæis*, etc. 3.

(3) *Foror. in uso non habit.* t. 9 *Quod de cætero sarrac.*

(4) Molino, *Repert. v. Captivus*.

(5) Molino, *Repert. v. Vasallus*.

(6) Observ. lib. 6, t. *De privil. milit.*

(7) Id. lib. 7, t. *De judæis*, 3.

(8) F. lib. 7, *De omnib. locis*.

(9) Observ. lib. 1, t. *De pignorib.* lib. 4, t. *De rerum testatione*.—Molino. v. *Vasallus*.

Pero todas las heredades de estos vasallos estaban sujetas á los pechos y servicios reales y señoriales de que se eximian los infanzones. Y era tan dependiente la condicion de las tierras del estado de sus dueños, que cuando eran tributarias y se vendian á algun infanzon, se convertian en exentas, y cuando eran exentas y se enajenaban á algun villano, quedaban reducidas á tributarias (1). Las heredades de la mujer villana que casaba con infanzon, continuaban siendo pecheras, pero se hacian libres cuando pasaban á los hijos, porque estos eran como su padre, infanzones (2). El villano del rey que residia en lugar realengo, pero en heredad propia de infanzon, como labrador ó en otro concepto, pechaba al rey por todos sus bienes, excepto por la heredad infanzona, y prestaba los servicios correspondientes, si además poseia heredad del rey. Pero cuando el villano era propio del infanzon cuya heredad cultivaba, aunque residiera en lugar realengo, no pagaba tributo por los bienes muebles que en la misma heredad poseyera, mas si por los inmuebles que tuviese fuera de ella (3).

Pagar tributo era sólo condicion de los villanos, así como no pagarlo y si recibirlo, era calidad esencial de los infanzones (4). Pero los tributos se satisfacian con la hacienda y por eso todas las tierras que componian la de un pechero eran tributarias. Sólo se diferenciaban en la cuantía y regularidad del impuesto que soportaban, las cuales dependian de la clase de villanos en que figuraba el propietario. Si éste era vasallo de *parada*, los censos, gabelas y servicios no tenian más limite que el que les fijara la voluntad del señor, sin que tribunal alguno pudiera moderar su codicia, ni castigar sus excesos. Si el villano era realengo, de iglesia ó de señor que no tuviera la potestad absoluta, como sucedia á los dueños de feudos, encomiendas ó cualquiera otro dominio que no fuera absoluto, estaba sujeto solamente á los censos, tributos y servicios acostumbrados ó que se exigian con arreglo á las leyes (5).

(1) Observ. lib. 4, t. *De emption. et vend.* 6 y lib. 6, t. *De privil. milit.* 1, 2, 3, 4.

(2) Id. lib. 6, t. *De privil. milit.* 2.

(3) Salanova in Blancas, *Obr. cit.* p. 314.

(4) Observ. lib. 6, t. *De privil. milit.*

(5) F. lib. 7, t. *Ut Barones*. Esta ley prohibe á los señores que tienen honores ó castillos en encomiendas «imponere aliquas petitiones insolitas sive novas, vel commprimere, affigere seu in aliquo aggravare.» Molino en su *Repert. verb. Domini locorum*, dice que segun la jurisprudencia establecida, los vasallos que no sean de *parada* y se vieren maltratados en sus personas ó gravados con tributos no acostumbrados por sus señores, pueden acudir en queja al Justicia por el proceso de la *juris firma*.

No eran en verdad territoriales todos los servicios con que contribuian los villanos, ni seria fácil hoy distinguir los que tenian esta calidad de los meramente personales; pero todos debieron ser en su origen de aquella especie, puesto que la riqueza territorial era casi la única en aquel tiempo. Aunque fuese ley del reino que los villanos contribuyeran por razon de sus bienes, en los lugares en que se avencindaran (1), tambien lo era que el villano que comprara heredad en pueblo de que no fuera vecino, pechara por ella como si lo fuese (2); lo cual da á entender que se consideraba el tributo como carga real del inmueble en tanto que su poseedor fuera peche-ro. Era territorial sin duda el impuesto llamado *precario* que se pagaba en frutos ó dinero, dado que, segun Canellas, su importe crecia ó menguaba con el de la riqueza de los pueblos. Tambien lo eran el diezmo, que cristianos y moros pagaban de sus heredades, ó el *novenario* de que ántes hice mencion: la *pecha* que satisfacian las tierras de los villanos; y el *monedage* que consistia en un maravedí (3) con que contribuia cada casa de siete en siete años (4). Los demás impuestos ó pesaban sobre los muebles, ó no son bastante conocidos para determinar su calidad, ó si eran carga de las fincas, procedian como los *treudos*, de haber dado la corona con este título y gravámen las heredades realengas, en vez de arrendarlas y percibir sus rentas, como hubo de verificarlo con las casas de los moros después de la conquista (5).

Las varias clases de propiedad conocidas en Aragon, aunque con diversos nombres y accidentales diferencias, eran, pues, sustancialmente las mismas que en Navarra y en Castilla, y las mismas que en otras tierras donde el feudalismo echó hondas raices. Como en ellas la condicion de cada una dependia principalmente de la personal del dueño. De la propiedad alodial podia disponerse libremente, mas por eso mismo no podian tenerla los villanos de parada ni los sarracenos. Esta misma propiedad en manos del infanzon ermunio era enteramente exenta: en poder del ciudadano ó del villano era pechera. Propiedades feudales eran *las honores* y las caballerías, pero ni aquellas podian darse más que á los ricos-hombres, ni éstas podian poseerse más que per iufanzones. Las mismas caballerías de *honor* pasaban

(1) Observ. lib. 2, t. *De foro compet.* 24.

(2) F. lib. 4, t. *De muneribus agnoscendis*, l.

(3) Igual á 7 sueldos jaqueses.

(4) F. lib. 9, t. *De confirmatione monetarum*, t. *De secunda confirmat. monet.*

(5) Asso, *Hist. de la economia política de Aragon*, c. 6.

á ser de *mesnada* cuando se trasmitian de los ricos-hombres á los mesnaderos, y las de *mesnada* se hacian de *honor* cuando pasaban de los mesnaderos á los ricos-hombres (1). Por último, hemos visto cómo la condicion de las tierras tributarias dependia tambien del triste estado de sus dueños. Falta ahora ver cómo además de estas circunstancias propias del dominio feudal, concurrían en la propiedad territorial aragonesa todos los caracteres esenciales del feudalismo.

CAPITULO II

Del servicio militar de los poseedores de tierras.

En Aragon como en toda la Europa feudal, el dominio y posesion de las tierras llevaban tambien consigo la obligacion de prestar por ellas al Estado servicios militares, más ó menos gravosos, segun el titulo y calidad del propietario. De la diferente condicion legal de las tierras, nacia otra diferencia análoga respecto á la cuantia de los servicios de guerra á que estaban obligados sus dueños.

Las tierras alodiales, en su origen, estaban poseidas solamente por los infanzones, dado que ellos eran los únicos súbditos capaces de la libertad que semejante propiedad suponía. Los villanos, y aún los ciudadanos de lugares no inmunes, si con el trascurso del tiempo lograron un estado más libre, eran al principio miserables vasallos, incapaces de propiedad verdadera, puesto que sus bienes estaban á la merced de señores codiciosos, que por lo ménos no les permitían disponer libremente de ellos. Los infanzones, segun el fuero que les otorgó el rey D. Alfonso I después de la conquista de Zaragoza, si no poseían *honores* de señor, estaban obligados á servir al rey tres dias á su costa, pero sólo en las guerras campales y cuando veían sitiados los castillos de la corona (2). Tres dias de campaña era por lo tanto el servicio que se exigía de esta clase de vasallos, como carga á primera vista, de origen puramente personal de su estado y condicion, más en realidad como gravámen de sus derechos, entre los cuales se contaba el de adquirir y poseer una parte de las tierras que ganaran con sus armas. No dicen en

(1) Blancas, p. 335.

(2) Molino, *Repert.*, verb. *Privilegium*.

verdad las leyes que sólo ellos fueran capaces de tales adquisiciones, ni que aquel servicio fuese carga directa de sus propiedades; pero esto resultaba del uso de sus privilegios y de la distribucion forzosa de las tierras. Los infanzones eran hombres libres por linaje, de todo servicio personal y real, como descendientes de aquellos antiguos godos, que disuelta la sociedad cristiana, se asociaron para reorganizarla bajo la conducta de nuevos caudillos, pero sin contraer con ellos más obligaciones que las que voluntariamente quisieron imponerse. Fué la principal de ellas, sin duda, servir las armas contra los infieles, puesto que tal era el objeto de su asociacion; mas como este servicio, léjos de ser gratuito, tenia por necesaria recompensa las mismas tierras que se recobraran, vino naturalmente á estimarse como gravámen de ellas.

Debe aquí advertirse que no se repartian á título de *honores* todas las tierras reconquistadas; pues muchas, la mayor parte tal vez, en los primeros tiempos de la reconquista, se dieron en pleno dominio, aunque todas con la obligacion de servir en la guerra más ó ménos tiempo. Tal vez no se hallaba bien determinada esta diferencia entre unas y otras tierras, cuando D. Alfonso I, queriendo premiar el valor y constancia de los infanzones, les dió por fuero, segun he dicho, el no servir más de tres dias á su costa. Si pues sólo ellos pudieron adquirir desde el principio tierras alodiales, y con tales adquisiciones contraian ó tenian ya contraida la obligacion de servir las armas, natural era que ésta se mirase como una consecuencia de aquellas.

Mas los vínculos que ligaban á los infanzones con la corona, cuando de ella no poseian *honores*, eran en su origen tan frágiles, que si rehusaban prestar el debido servicio, no podía el rey imponerles ninguna pena, ni una simple multa, pues el fuero no autorizaba otro medio de apremio que cerrarles los mercados reales, prohibiendo venderles y comprarles nada, y mandar á los alcaldes que no les hicieran justicia cuando viniesen á pedírsela (1). Considerábase por lo tanto al infanzon rebelde al llamamiento á las armas, no como súbdito desobediente y criminal digno de castigo, sino como hombre libre que apenas se excedia de su derecho al desligarse del pacto feudal, puesto que voluntariamente renunciaba á sus beneficios y dejaba en liber-

(1) Dice el primer privilegio de D. Alfonso I: "Ut nullus infantio qui ibi (ad litem "campale) non quesierit ire, no habet (rex) super illum nullam caloniam, nisi quod "vetet rex de terra suos mercatos quod non ibi comparet nec vendat, et suos alcaldes, "quod non illum judicent." Molino, *Repert.*, verb. *Privilegium*.

tad al monarca para privarle aún de los de la sociedad, no teniéndole en adelante por súbdito, ni aún por miembro del Estado.

Después se limitó aún más esta obligacion de los infanzones. Al confirmarla D. Jaime I en 1247, declarando que deberían prestar su servicio en los asedios de los castillos sitos en tierras de la corona, añadió que tanto en este caso como en el de lid campal, se entendiese limitada su obligacion á asistir á la hueste que mandara el rey en persona (1). Así practicaron el servicio militar los ciudadanos de Zaragoza, que por serlo, disfrutaban los privilegios de los infanzones, y de quienes dice una *Observancia*, que «sirven al rey donde esté en persona y dentro de su reino..... y que no van en hueste ni á la lid campal, con ningun caudillo delegado del rey» (2). Tampoco estaban obligados los vasallos á seguir al rey allende el mar (3).

Todavía eran más privilegiados en este punto, en virtud de fueros particulares, los vecinos de algunas ciudades y villas. Los de Jaca, si no querian acudir á la lid campal ó sitio de castillo, cumplian con poner en su lugar peones que sirvieran los tres dias de fuero (4). De los vecinos de Calatayud sólo la tercera parte tenia obligacion de servir las armas con el rey, bajo pena de un sueldo al que faltase (5). Los cristianos mozárabes que poblaron á Mallen en 1132, estaban exentos de ir en hueste contra otros cristianos (6). Verdad es que, segun cierto antiguo glosador del Fuero, los infanzones que moraban en pueblos de señorío, estaban obligados á defender el castillo y lugar del señor, y á salir á campaña dentro del término señorial, cuando oyeran la campana que convocaba á la hueste (7), lo cual suponía la obligacion militar sin vínculo de tierra ni vasallaje. Pero sobre no haber texto legal que apoye esta doctrina, el servicio á que la citada glosa alude, no es el ordinario de tres ó más dias que podía exigir el rey, sino el de la propia defensa contra el enemigo, en invasiones repentinas, el cual era por su naturaleza extraordinario y no sujeto á otra ley que la suprema de la necesidad. Así es que la misma glosa declara que la prestacion de semejante servicio no suponía reconocimiento de superioridad en el señor, y lo corrobora aña-

(1) F. lib. 7, t. *De conditione infantion*. 1.

(2) *Observ.* lib. 6, *De generalib. privileg.* 31.

(3) F. lib. 1, t. *Privileg. gener.*

(4) Fuero de Jaca, dado en 800 por el conde D. Galindo y confirmado en 1064 por el rey D. Sancho Ramirez. Muñoz, *Colec.* pág. 285.

(5) Fuero de Calatayud dado por D. Alfonso I en 1131. Muñoz, *Colec.* etc.

(6) Fuero de Mallen, dado por D. Alfonso I en 1132. Muñoz, *Colec.*

(7) F. lib. 1, t. *Privileg. gener.*

diendo que éste á su vez debia auxiliar del mismo modo al infanzon morador de su territorio que tocase la campana para llamar á la defensa de su casa ó castillo, repentinamente atacada por sus enemigos.

Los ricos-hombres dueños de caballerías de mesnada y los caballeros sus vasallos que tenian caballerías de ellos, estaban obligados á servir las armas un mes cada año, por lo ménos, contándose en este tiempo el que se empleaba en el camino de ida y vuelta (1). Mas los simples caballeros no tenian obligacion de mantenerse á su costa, como los meros infanzones en los tres dias de fuero, sino que el rey debia proveerles de todo lo necesario para su subsistencia. Los ricos-hombres debian costearse durante este servicio con el producto de las *colonias* ó multas de 60 sueldos ó ménos que cobraran de sus vasallos, las cuales, por lo mismo, no se computaban entre las rentas de las caballerías, al señalar por su cuantía el número de hombres que debia poner cada uno en pié de guerra (2). Tenian además derecho los ricos-hombres á sacar acémilas ó bagajes, cuando caminaban por razon de este servicio, tomando una por cada una de las caballerías que disfrutasen, ó 40 sueldos en equivalencia.

Pero entre las caballerías de honor que los caballeros disfrutaban de los ricos-hombres, habia una diferencia que notó Blancas, aunque las leyes no hacen mencion de ella. Estas caballerías se denominaban unas *antiguas* y otras *modernas*. Las primeras obligaban á servir al rey sólo el mes dicho, por lo que las antiguas escrituras llamaban este servicio *hacer la mesada*. Las segundas extendian esta obligacion á tres meses cada año (3). No hallo en los autores ni en los documentos contemporáneos suficientemente explicado el motivo de esta novedad. Blancas se limitó á decir que nuestros mayores con las caballerías *nuevas* habian tratado de poner en armonía los derechos del rey respecto á los ricos-hombres, con los de éstos en cuanto á los caballeros, aludiendo sin duda á que los ricos-hombres debian servir las armas tres meses con sus caballeros, cuando éstos no estaban obligados á prestar tal servicio, sino durante un mes. Mas cualesquiera que fuesen las dificultades y conflictos á que en la práctica diera lugar aquella incongruencia, no hubieron de ser muchas las caballerías *nuevas* que se concedieran, puesto que ninguna mencion hacen de ellas los fueros del reino.

Los mismos ricos-hombres por razon de *las honores* que inmediata-

(1) Observ. lib. 6, t. *De conditione infantionatus*, 15, y lib. 9, t. *De privileg. gener.* 25.

(2) Observ. lib. 9, t. *De privileg. gener.* 21.

(3) Blancas, *Arag. rer. comm.*, pág. 336.

mente poseian del rey, estaban obligados á servirle en la guerra tres meses cada año, segun queda dicho, con la restriccion tambien de no salir en tal servicio de los dominios de la corona, ni pasar la mar (1). Mas aunque esto dice el texto de las *Observancias*, Vidal de Canellas, que no merece quizá ménos fé, y que escribia lo que pasaba en su tiempo por ley ó costumbre, asegura que los ricos-hombres, por razon de *las honores* que disfrutaban, no tenian obligacion de servir más de dos meses á sus expensas cada año (2). Contradiccion tan palpable entre textos tan autorizados y auténticos, no puede explicarse sino suponiendo que el redactor de las *Observancias* comprendió en los tres meses de servicio, además de los dos á que *las honores* obligaban, el mes que como caballeros debian servir los ricos-hombres, por las *colonias* ó multas, cuyo producto recaudaban en sus lugares, y que Canellas no contó este servicio por no ser propiamente carga de *las honores*.

Pero de cualquier modo que esto fuese, es lo cierto que el rico-hombre debía distribuir las tierras, que en *honor* recibia de la corona, á fin de procurarse por este medio soldados con que servir al rey, á razon de uno por cada 500 sueldos de renta que disfrutase de tales tierras: que estos soldados habian de estar prontos al servicio cuando el rey los llamase, dentro de sus dominios y no allende el mar: y que trascurridos los dos ó los tres meses del servicio del año, podia el rico-hombre retirarse con su gente, á no ser que el rey le diera víveres con que mantenerla, en cuyo caso podia exigirle que continuara sirviéndole, aunque fuera todo el año.

Era tambien obligacion del rico-hombre defender las tierras del rey y especialmente las que en honor le estaban confiadas; así como las iglesias, los monasterios y aun los habitantes de fuera del término de *la honor*, que no vivieran á mucha distancia de sus limites (3).

Como no son bien conocidas las leyes y costumbres que regian en los lugares de feudo, donde no se observaban los fueros de Aragon, no es posible determinar seguramente los limites y condiciones del servicio militar, que en ellos debian prestar los vasallos. Pero nada se aventuraria asegurando que los poseedores de estas tierras tenian obligacion de acompañar á la guerra á sus señores, del mismo modo que lo hacian los vasallos de su especie en otros reinos. Y puesto que allí no regian los fueros, ó sea los privilegios, de los cuales era uno de los más importantes el que limitaba, en

(1) *Observ. lib. 6, t. De generalib. privileg.* 31.

(2) In Blancas, *Arag. rer.* pág. 307.

(3) Vidal: in Blancas, *Arag. rer.* p. 307 y 308.

cuanto al lugar y al tiempo, el servicio militar de los infanzones y el de los ricos-hombres, debe presumirse que el de los feudatarios seria ilimitado é incondicional, ó sin otras limitaciones que las del derecho feudal comun, ó las especialmente pactadas en las cartas de feudo.

Tambien los poseedores de tierras tributarias estaban obligados á servir en la milicia. Poseian estas tierras, como he dicho, los vasallos de *parada* ó los villanos, vasallos tambien, aunque de condicion superior, llamados de *signo* servicio. Los primeros no estaban obligados á acudir á las cabalgadas del rey, que así se llamaban las cortas expediciones militares, porque ningun vínculo tenian con la corona. Eran hombres que pertenecian exclusivamente á sus señores, especie de siervos de la gleba que nada tenían de comun con los vasallos del rey; y que por lo tanto no pechaban como ellos, segun dice una *observancia*; *neque pro cavalgatis, neque pro ali-quibus* (1). Pero si el rey no podia pedir nada á estos vasallos, en cambio sus señores, como dueños que eran de sus cuerpos y árbitros de sus haciendas, podian exigirles cualquier servicio y especialmente el militar, que era el consiguiente al estado de vasallaje. No dicen las leyes, ni los antiguos escritores, los términos en que los vasallos de *parada* debian prestar este servicio; pero no poseyendo más bienes que los de los infanzones, cuyas heredades poblaban, y siendo ley fundamental del reino que todo el que disfrutara tierras de un señor estuviese obligado á servirle en la guerra, no puede dudarse que tales vasallos estaban sujetos á ella; y puesto que su condicion era tan miserable, que respecto á los señores carecian casi de todo derecho, tambien puede asegurarse que aquel servicio no estaba sujeto, como el de los hombres libres, á ninguna limitacion de lugar ni de tiempo (2).

Aunque los otros villanos no podian ser promovidos á la dignidad de la caballeria, sino por el rey y sobre el campo de batalla, tenian obligacion de servir con las armas á sus señores ó al rey de quien fuesen vasallos, por razon de las tierras ó del estipendio que recibian de ellos. Los vasallos de *signo* servicio del rey debian acudir á su llamamiento luego que oyesen el pregon convocándoles á la guerra; y dice una ley de D. Jaime I, que si tenían sus heredades en diversos lugares de la corona, debian salir á campaña desde la primera vez que oyesen el pregon (3). Sólo se excusaban las

(1) Obs. l. 6, t. *De privileg. militum*.

(2) Fuer. l. 7, t. *De creatione milit.* 1, 2 y 3.

(3) Fuer. l. 7, t. *De expeditionibus*, 2.

viudas, aquel cuya mujer estuviese de parto ó cuyos padres se hallaran enfermos en peligro de muerte, y los ausentes. El que sin ninguna de estas excusas dejaba de acudir al llamamiento ó no ponía en su lugar un sustituto, debía pagar una multa de 60 sueldos (1). Estaba sin embargo exento de este servicio el vasallo del rey que establecía su domicilio en casa de algún infanzon, por más que no se eximiese de los otros que debiera por razón de las heredades que tuviese de la corona, si no las dimitía oportunamente (2). Estaban igualmente exentos los *juveros* ó colonos de los nobles é infanzones; lo cual estimaban éstos en mucho, porque así no se privaban del fruto de su trabajo, ni aun en tiempo de guerra (3).

Como ni el rey ni los nobles tenían sobre estos vasallos la potestad absoluta que en los de *parada*, no debió de ser absolutamente ilimitado ó sin condiciones el servicio militar que podían exigir de ellos. No hubo sin embargo de estar sujeto á las restricciones de tiempo y de lugar, que limitaban el de los ricos-hombres y el de los infanzones, dado que éstas se consideraban como privilegios de una clase, á que tales vasallos no pertenecían. Si el infanzon, por serlo, no estaba obligado á servir más que tres días á su costa y dentro del reino, claro es que los villanos debían servir en cualquiera parte y todo el tiempo que fuera menester. Y en efecto, debían estos villanos acudir á las *cabalgadas* y á las *huestes*, que eran dos clases de servicio militar, á las cuales se llamaba por distintos pregones. El servicio de cabalgada era, según Blancas, el que se prestaba un solo día, en la región ó provincia en que se hallaba el rey, y tenía por objeto resistir las invasiones repentinas y violentas de los enemigos. El servicio de hueste, según el mismo autor, duraba más tiempo y se prestaba en cualquiera parte, aunque no estuviese del rey (4). Y pues que tanto uno como otro servicio debían prestar los villanos al rey, su obligación no tenía otros límites que los de las necesidades de la corona.

Todas las clases de propiedad conocidas en Aragón contribuían, pues, de un modo ó de otro al servicio de las armas. Desde la tierra servil que daba albergue miserable y no seguro alimento al villano de *parada*, hasta la tierra alodial, todas servían de vínculo entre el individuo y el Estado para la comun defensa. El villano era soldado del señor del lugar en que moraba,

(1) F. lib. 6, t. *De expeditionibus*, 1, 3.

(2) F. lib. 4, t. *De muneribus agnoscendis*, 3.—Observ. lib. 6, t. *De privileg. militum*, 5.

(3) Blancas, *Arag. rer.* p. 324.

(4) Blancas, *Arag. rer.* p. 324.

ya lo fuese el rey ó ya algun noble, por el solo hecho de vivir con el producto de sus tierras y disfrutar las aguas, los pastos, los caminos y las demás cosas hoy comunes, pero que en la Edad Media pertenecian al dueño del territorio. El infanzon, por serlo y tener en su consecuencia casa privilegiada y los otros derechos territoriales que le reconocia el fuero, era soldado del rey á su propia costa, durante tres dias al ménos cada año. El rico-hombre, que percibia las multas de los vasallos de sus lugares y las demás rentas territoriales del rey, y el poseedor de caballerías, estaban obligados á un mes de servicio, el primero á sus expensas, y el segundo á las de la corona. A su costa tambien debia militar con el rey dos ó tres meses cada año el noble poseedor de *honores*. El feudatario, en fin, debia prestar los servicios militares acostumbrados; y así toda la propiedad territorial estaba gravada con esta carga propia y esencial del feudalismo.

CAPÍTULO III

De la potestad inherente á la propiedad territorial.

I.

DE LA POTESTAD Y JURISDICCION DEL REY.

Así como el dominio territorial solia llevar consigo en Aragon el señorio sobre los pobladores respectivos, así tenia igualmente por atributo necesario ó la plena jurisdiccion ó cierta potestad, que si no era conocida con aquel nombre, producía semejantes efectos. He dicho ántes que sólo los infanzones y nobles eran hábiles para poseer tierras en honor, y que en ellos tambien podia únicamente reconocerse la propiedad alodial y libre, ya que no podia darse este nombre á la que disfrutaban los villanos, tan sobrecargada de censos y gabelas, tan precaria en su ejercicio y tan sujeta á la voluntad y al capricho de los señores. Los infanzones eran tambien los únicos que podian ser dueños de lugares y tener vasallos y participar en este concepto de la potestad pública, como fruto de la propiedad territorial, que era otro de los caracteres del feudalismo.

Cuando los reyes de Aragon, en cumplimiento de la ley fundamental de Sobrarve, repartian entre los infanzones las tierras reconquistadas, ó las daban expresamente con jurisdiccion sobre sus pobladores, ó se sobreentendia que la otorgaba de este modo. Alfonso I, segun se ha visto en el capitulo I de este libro, concedió á los vecinos de Calatayud entre otros derechos, el de ejercer jurisdiccion sobre los moros, judios y cristianos que tuvieran en sus heredades. Otras muchas mercedes de tierras hicieron los reyes en iguales ó parecidos términos.

Pero aunque las escrituras de enajenacion no lo dijesen, la antigua jurisprudencia enseñaba que debia entenderse trasmitida la jurisdiccion con el dominio de las heredades realengas. Así lo aseguraba Miguel Molino, fundándose en cierta antigua glosa del *Privilegio general*, que declaraba no ser conocido en Aragon el mero y mixto imperio del monarca, ó sea su potestad absoluta, por hallarse todos sujetos al fuero, costumbre, privilegio ó *carta de donacion ó cambio*, segun se venian practicando, y deberse entender por donaciones ó cambios, segun los antiguos foristas, los contratos en que trasmitia el rey con la tierra la jurisdiccion, aunque no la nombrase expresamente (1).

Verdad es que esta jurisprudencia se modificó después en provecho de la autoridad real, fundándose los innovadores en que el mismo Molino y el compilador de las *Observancias* calificaran de usurpada la jurisdiccion de muchos señores, dueños de tierras procedentes del rey, y otros jurisprudencistas posteriores sostuvieran que las mercedes reales de tierras no trasmitian jurisdiccion, como no se hiciera de ella mencion expresa (2). Pero si esta doctrina pudo ser patriótica y conveniente en el siglo xvii para fortalecer la monarquía, de seguro no era la más conforme con la tradicion y la historia. Ni lo de ser usurpadas muchas jurisdicciones particulares se decia en el sentido de que fueran ilegítimas, cuando el Justicia Martin Diego de Aux recopilaba las *Observancias* y Molino escribia su *Repertorio*, pues lo que uno y otro quisieron decir fué que la mayor parte de estas jurisdicciones no habian sido expresamente otorgadas por el rey, sino adquiridas por costumbre y en tal concepto usurpadas en su origen, pero legitimadas con el transcurso del tiempo, dado que la prescripcion era uno de los títulos por los cuales se ganaba la jurisdiccion, segun las leyes. Y si

(1) *Repertor. foror.* v. *Jurisdiction.*

(2) *Id. id.* v. *Domini locorum.*—*Observ.*, lib. 6.º t. *De privil. milit.*—Callisto Ramirez, *Tract. de lege regia.*

en efecto debía ésta entenderse otorgada con las tierras del rey, aunque la escritura de merced no hiciera mencion de ella, segun afirmaban los antiguos glosadores, ni aún en su origen habrian sido usurpadas otras jurisdicciones que aquellas que se ejercieran en lugares que nunca pertenecieran á la corona, ó cuyo dominio se le hubiera á la vez usurpado.

En el siglo xv luchaban empeñadamente por prevalecer en el régimen del Estado las tendencias monárquicas de los modernos juristas, que bebían sus doctrinas en las fuentes de la jurisprudencia imperial, con las tradiciones aristocráticas y los privilegios de clase, á que habian dado origen la flaqueza del poder supremo, la anarquía feudal y el estado permanente de guerra en que vivían los pueblos. Los que comprendían las necesidades del país y los que cultivaban el estudio de las leyes imperiales, modelo á la sazón de sabiduría jurídica, buscaban remedio á los males públicos en la centralización del poder supremo. Los que interesados por el antiguo régimen aspiraban á mantenerlo, conciliándolo con el espíritu de las doctrinas modernas, incurrian en graves contradicciones, sin lograr siempre su objeto. Decían los primeros, apoyados en la autoridad de Bartolo y otros glosadores: el rey tiene su intencion fundada á la jurisdicción en todo el reino, la cual le pertenece como atributo inseparable de la soberanía: si enajenó alguna parte de ella no se desprendió de todos sus derechos, ni aún en la misma porción de territorio enajenada, y en particular de cierta potestad eminente que sólo puede ejercer la corona. Así las jurisdicciones señoriales, que carecían de título de adquisicion escrito, no tenían origen legítimo, segun aquellos jurisconsultos, porque no se fundaban en un acto voluntario y auténtico del soberano, y segun otros juristas más radicales, ni siquiera habian perdido con el transcurso del tiempo, tales jurisdicciones su calidad de usurpadas, porque hacían parte de la soberanía y ésta no era prescriptible. Los políticos más conservadores afirmaban que aunque el rey tuviera su intencion fundada á toda la jurisdicción, era de derecho y no de hecho, ó *in habitu* y no *in actu*, segun la frase escolástica, y que las jurisdicciones enajenadas ó se fundaban en mercedes que el rey habia podido otorgar en uso de su soberanía ó en actos que la prescripcion habia convalidado, puesto que ésta era título legítimo para adquirir hasta las cosas de mala fé poseídas.

Pero la verdad era que ni las doctrinas de los regalistas modernos cabían dentro de las instituciones antiguas, incompatibles con toda centralización y establecidas para una sociedad que vivía constantemente en guerra, ni las doctrinas de los conservadores lograban conciliar aquellas institu-

ciones con los nuevos principios de predominio monárquico y centralización política. Lo cierto era que la corona había distribuido la mayor parte de las tierras conquistadas, porque así lo exigía en Aragón la ley constitucional de Sobrarbe, y en los otros reinos de España, la necesidad y la costumbre: que la conquista era en los primeros siglos de la Edad Media un título con que se ganaba no sólo la potestad pública, sino el dominio privado del territorio conquistado, del cual podía disponer el conquistador como de sus bienes propios; que cuando el monarca concedía alguna porción de este territorio, sin reservarse derecho alguno, se entendía que la daba con todo lo que en ella le correspondía, del mismo modo que hoy cuando se enajena una finca se entiende enajenada en pleno dominio y con todos los derechos que en ella tenga el enajenante, excepto aquellos que se reserve expresamente; y que siendo la jurisdicción coherente con el territorio, según la máxima de derecho, que reconocían todos los juriscultos foristas, y además un medio necesario para asegurar los productos y utilidades de la tierra en tiempos en que la autoridad pública no podía dispensar á todos los súbditos la protección que requería su derecho, era natural y aún justo que se entendiese comprendida en toda merced de territorio poblado ó que hubiera de poblarse de hombres capaces de hacerlo valer, bien como hacienda productiva, bien como fortaleza contra los enemigos del Estado. Era también indudable que por más que este sistema de reorganización política no fuera necesario, ni estuviera justificado desde el momento en que concluida la reconquista, pudo la autoridad pública mantener el derecho de todos, se sostuvo aún mucho tiempo, como sucede á todas las instituciones antiguas, por la inercia de unos, por el interés de otros y por el respeto que á todos infunde lo acostumbrado y lo tradicional. Duraba, pues, este sistema no sólo en el siglo xv cuando Martín Diego de Aux recopilaba las *Observancias* y Miguel Molino las completaba con su *Repertorio de fueros*, sino en los siglos xvi y xvii en que escribían sobre ellos en sentido regalista Ibandó Bordaxi, Sesé, Ramírez y otros juriscultos; pero luchando en uno y otro tiempo con las nuevas doctrinas monárquicas que pugnaban por transformarlo y que en efecto consiguieron destruirlo.

Mas aunque no fuese tan conocido por la historia el origen de las jurisdicciones señoriales, las leyes de Aragón, vigentes hasta la abolición de los fueros políticos, reconocían y declaraban su procedencia de la propiedad territorial. Uno de los capítulos comprendidos en el *Privilegio general del Reino*, que D. Pedro III confirmó en las Cortes de Zaragoza de 1283, á peti-

cion de los barones y ricos-hombres, y que venia establecido, aunque no siempre bien guardado, desde tiempos muy remotos, decia de esta manera: «Que el señor rey no meta justicias ni haga judgar en ninguna villa ni en ningun lugar que propio suyo no sia» (1). De modo que era ley general del reino, dictada en provecho de los nobles y de los barones, esto es, de las personas que ejercian jurisdiccion señorial, la de que el monarca no juzgara ni pusiera jueces en los lugares que no le pertenecian en propiedad. Es, pues, evidente que donde el soberano no ejercia dominio territorial, no tenia tampoco derecho para administrar justicia; y la razon de esto no podia ser otra sino que la jurisdiccion competia únicamente al dueño del territorio. Y como las villas y lugares que no eran propios del rey, pertenecian á los nobles y barones, bien en propiedad absoluta, ó bien á título de *honor*, es claro que á ellos correspondia tambien exclusivamente el derecho de *juzgar y de meter justicias* en tales lugares y villas. Si los nobles se mostraron tan celosos por la observancia de aquella ley no fué ciertamente tanto para mantener la competencia limitada de la corona, cuanto para conservar ellos la suya propia en el territorio de su particular dominio. Si el fundamento de la jurisdiccion no hubiera sido la propiedad privada, no se habria limitado la potestad judicial del rey á los lugares suyos propios; y si en todas las demás villas y lugares no hubiese pertenecido á los nobles el pleno ejercicio de esta potestad, no habrian estos reclamado á D. Pedro III contra la inobservancia del privilegio y obligádole á su confirmacion.

Pertenecian al dominio de la corona las ciudades, aunque con las graves restricciones, que suponian los numerosos privilegios y exenciones que disfrutaban sus vecinos, y todas las villas, pueblos y despoblados que no habian sido repartidos ni enajenados á los infanzones á título de donacion, venta, permuta ó caballeria de honor. La jurisdiccion del rey se extendia á todas estas tierras, como suyas propias que eran, y se ejercia en el órden judicial, propiamente dicho, por medio de «zalmedinas, bayles, sobrejuntos y jueces especiales de moros y judios», y en el órden económico por los mismos *zalmedinas* y *bayles*, que acumulaban atribuciones judiciales y administrativas. Llamábanse *zalmedinas* los que hacian las veces del rey ó de los señores en las ciudades y grandes villas (2); eran, segun Blancas, como pretores urbanos que puso D. Alfonso el Batallador con sus

(1) F. lib. I, t. *De priv. gener.*

(2) Canellas in Blancas, obr. cit. p. 414.

propios nombres arábigos, después de conquistar á Zaragoza (1). En las mismas ciudades y villas populosas habia además «jueces ordinarios» ó «alcaldes» instituidos tambien por el rey, los cuales juzgaban las causas de los vecinos infanzones y villanos que no se hallaban sujetos á otra potestad, y no podian ser removidos sino en virtud de causa legitima (2). Y como no es probable que en una misma villa hubiese dos jueces con iguales atribuciones y distinto nombre, creo que el zalmedina seria superior al juez en el orden gerárquico. A unos y á otros auxiliaban en el desempeño de su oficio los *merinos*, que ejecutaban las sentencias y los mandatos del rey, hacian los embargos, sacaban prendas á los deudores y á los procesados é intervenian en todos los actos de los juicios, menos en la discusion de la causa y el pronunciamiento de la sentencia (3).

Los sobrejunteros eran unos oficiales instituidos por el rey para convocar y dirigir las juntas ó asociaciones que formaban los vecinos de ciertos pueblos para la persecucion de malhechores. Habia estas juntas en Zaragoza, Alcañiz, Montalvan, Huesca, Jaca y Sariñena. Los sobrejunteros tenian sus tenientes distribuidos por los pueblos y sus notarios. Eran meros ejecutores de las sentencias civiles y criminales y de las providencias del rey, sobre todo cuando se les requeria para llevarlas á efecto por la fuerza; perseguian y aprehendian á los malhechores; y por todo ello recibian salario de las villas de su territorio y otros derechos que devengaban por sus ejecuciones (4). Los jueces especiales de los moros eran el *Zavalachen*, que conocia de sus causas, cuyo importe no excediera de dos sueldos, con apelacion al juez cristiano, y el *Alamin*, que entendia en las mismas causas y desempeñaba oficio de sayon ó alguacil del *Zavalachen*. De las causas de los judios por más de cinco sueldos, podia conocer un oficial llamado *Daien*, y de las que excedian de esta suma, otro denominado *Hedin*. Entre judios y cristianos era juez el ordinario de estos; pero si su sentencia condenaba al judío, al *Hedin* tocaba ejecutarla (5).

Los *bayles* que juntamente con los zalmedinas ejércian la autoridad real en el orden económico, eran á la vez recaudadores y administradores de las rentas y bienes de la corona y jueces de la real hacienda (6). Habia-

(1) Blancas, *ibid.* p. 131.

(2) Canellas, *ibid.* p. 414.

(3) *Id. id.*

(4) Canellas in Blancas, p. 416. F. lib. 1, t. *De suprajunctariis* 1, 4, 7,

(5) Canellas, *ibid.* p. 415.

(6) Molino. *Repert. v. Bajulus.*

los en las ciudades y villas realengas importantes (1), en las cuales cobraban los tributos del rey, ejecutaban á los contribuyentes morosos, se apoderaban de los tesoros hallados sin dueño y de los bienes vacantes, detenian y prendian á los monederos falsos y á los sarracenos prófugos, cobraban las *colonias* y multas, capbrevaban las rentas y emolumentos del fisco y conocian de las cuestiones sobre peajes y de todas las causas del real patrimonio (2).

Cierto es que además de esta jurisdiccion, que en los lugares *suyos propios* tenia el rey como tal propietario, ejercia otra general sobre personas que no residian en estos lugares, ni tenian tierras de la corona. Pero esta jurisdiccion, aunque independiente al parecer de todo dominio territorial, traia, sin embargo, origen de él, ó tuvo con él estrecha relacion de dependencia en los primeros siglos de la reconquista. Tenia, en efecto, el rey sobre los infanzones que habitaban en lugares de señorío, jurisdiccion criminal acumulativa con el *regente el oficio de gobernador* y con el Justicia (3). Ejercia además jurisdiccion civil sobre ellos en las cuestiones relativas á castillos sitos en el reino, á la declaracion del estado de infanzonía, y en todo género de litigios, cuando el infanzon moraba en lugar de señor no jurisdiccional, ó cuando aunque habitase en lugar de señor jurisdiccional, fuera él á su vez dueño de castillo ú otro lugar de aquella especie, con señorío de vasallos (4). Los que además de infanzones eran ricos-hombres, barones ó caballeros, si delinquian, no podian ser penados en sus cuerpos, ni aún por el rey. La única providencia que podia éste en tal caso adoptar contra ellos, era la de mandar prenderlos y tenerles detenidos todo el tiempo que fuera su voluntad (5). Salva esta inmunidad, los ricos-hombres, los señores de vasallos, las *universidades* ó pueblos y las *aljamas* de

(1) Ximenez de Argues, *Discurso del oficio del bayle de Aragon*, pár. 26. Habia bayles en Daroca, Calatayud, Huesca, Tarazona, Borja, Jaca, Albarracin, Teruel y Exea.

(2) Ximenez Argues, Obr. cit., párrafos 1, 4, 13, 14, 15, 17 y 19.

(3) Observ. lib. 2, t. *De for. competent.* 7.

(4) Observ. lib. 2, t. *De fort. compet.* 10, 21, t. *De salva infantion.*, 10, 11. F. lib. 4. t. *De probationib.*

(5) Observ. lib. 7, t. *De pace*, 2. «De consuetudine regni nobiles non puniuntur pro delictis, paenis temporalibus.»—F. lib. 1, t. *Quod regens officium gubernatoris sit miles.*—Lib. 9, t. *De confirmatione pacis.* Es una carta de paz y tregua expedida por D. Jaime I en 1247, y en ella es donde por primera vez se lee que si en el noble caballero que cometiere homicidio, robo ó fuerza sin desafio previo, no se pudiere hacer justicia corporal, «nos (el rey) debemus eum capifacere et captum detinere dum «voluerimus ad voluntatem et mercedem nostram.»

judíos y moros estaban sujetos á la jurisdiccion civil y criminal del rey ó de su hijo primogénito, ó del «regente el oficio de gobernador» ó del Justicia (1), excepto en los juicios por acciones reales, cuyo conocimiento competia siempre al juez ordinario del lugar de la cosa litigiosa (2).

Mas esta jurisdiccion no se ejercia siempre acumulativamente por el rey y el Justicia. Las leyes señalaban á veces á cada uno los casos de su respectiva competencia, como que el ser juzgados por aquel magistrado singular, cuya jurisdiccion reducía á limites tan estrechos la potestad monárquica, era uno de los privilegios que más estimaban los nobles, tan frecuentemente enemistados con la corona. Conocía ésta privativamente de las causas de estado de infanzonía ó nobleza, de las que se formaban por abandono del servicio militar, ó por no acudir á la hueste los que disfrutaban honores y de las que tenían por objeto ó por resultado la degradación ó la rehabilitación de algun caballero (3). También conocía el rey en iguales términos de las causas sobre espera de deudores, creación de notarios y división de términos (4); pero con la circunstancia de no poder delegar su conocimiento ni aún en su hijo primogénito. El de las causas de infanzonía solamente podía delegarse en el Justicia (5). Estaban, pues, reservadas por punto general al monarca las cuestiones que afectaban á las relaciones entre él y sus vasallos inmediatos, por razón del estado civil y político de estos, el cual traía origen de los bienes recibidos de la corona, con obligación de señalados servicios. Tales cuestiones se llamaban en otras partes feudales, y por lo tanto, competía siempre su conocimiento al señor del feudo, ya lo fuese el monarca ó ya cualquiera otro hidalgo.

De las demás causas en que era parte el rey, contra infanzones ó nobles ó contra cualesquiera otras personas, y de las de *emparamiento* ó embargo de honores, conocía el Justicia, pero con el concurso de los ricos-hombres y caballeros reunidos en Cortes (6). También conocía el Justicia, con igual concurso ó sin él, de las causas entre caballeros é infanzones (7), de las de

(1) Observ. lib. 2, t. *De for. compet.*, 2, 3.

(2) Id. id.

(3) Observ. lib. 6, t. *De conditione infantionatus*, 6, 8, Canellas in Blancas, *Arag. rer.* p. 413.

(4) Observ. lib. 2, t. *De for. compet.* 16.

(5) Observ. lib. 9, t. *De salva infantion.* 1.

(6) F. lib. 1, t. *De officio Justitiæ*, l. Molino, V. *Justitia Arag.* F. lib. 1, t. *Privil. gener.* Observ. lib. 6, t. *De privil. milit.* 12, t. *Interpretat. qualiter*, 10.

(7) F., lib. 1, t. *De off. Just.* 1.

oficiales públicos (1), de los agravios y desafueros que se denunciaban á las Córtes (2), de los causados á particulares por oficiales públicos, cuando se empleaban los recursos de *manifestacion* ó *firma de derecho*; y por último, y esto era lo más importante, de toda cuestion sobre interpretar las órdenes del rey ó de sus delegados, declarando si eran conformes ó contrarias á los fueros, y suspendiendo su ejecucion en este último caso (3).

No haré mencion de las vicisitudes de esta singular magistratura, pero sí es digno de notarse que si su jurisdiccion no procedía de la tierra, tenía por objeto reprimir y precaver los abusos de la que traía origen de ella. Establecida como mediadora entre el rey y los nobles, hubo de vivir oscurecida en los siglos de mayor feudalismo y en que más poder tuvo la nobleza; pero cuando aquel régimen empezó á decaer, la institucion del Justicia cobró nueva vida y sirvió de freno y contrapeso tanto á la autoridad del monarca, como á la de los nobles. Entónces fué cuando D. Pedro II, «to-»mando de su mano la jurisdiccion ordinaria y extraordinaria,» segun dice Zurita, redujo á 150 caballerías las 700 que á la sazón se contaban, las repartió entre los ricos-hombres con la calidad de hereditarias, cuando ántes sólo habían sido temporales y vitalicias, y á cambio de esta novedad incorporó á la corona ó dió al Justicia las preeminencias y facultades de que los nobles quedaron despojados (4). También contribuyó á engrandecer la autoridad de aquella magistratura la derogacion del famoso *privilegio de la Union*, por cuanto al decretarla D. Pedro IV no tomó de su mano, pero si dió al Justicia muchas de las facultades que tuvieran los ricos-hombres. Por eso dice Zurita de esta jurisdiccion que era «como muro y defensa contra toda opresion y fuerza, así de los reyes como de los ricos-hombres.»

Verdad es que se podia apelar al rey no sólo de los señores y jueces locales, sino tambien del Justicia (5), mas la jurisdiccion de la corona en tales recursos, tratándose de sentencias de los jueces ordinarios, era acumulativa con la de aquel magistrado, y tan reducida, cuando era este el autor de la providencia apelada, que residia en él una parte mucho mayor de la potestad judicial que en el rey. Los más de los acuerdos del Justicia no eran en

(1) Observ. lib. 2, t. *De for. comp.* 5.

(2) F. lib. 1, t. *Priv. gen.* lib. 9, t. *Quod aliq. monet.*

(3) F. lib. 1, t. *De juram. præst. per official.*, 1.

(4) Zurita, *Anales*, lib. 2, c. 64. Véase el cap. I de este libro.

(5) Por el recurso de *firma de agravios* se reclamaba al Justicia de los que cualquiera autoridad causara, quebrantando los fueros. Más tarde se introdujo en la práctica y por analogía, el uso de las apelaciones al mismo magistrado.

efecto apelables y de los jueces podia el litigante agaviado llevar á aquel magistrado dos recursos, el de apelacion y el de *firma de agravios*, cuando sólo el primero, podia interponer ante el rey (1). Quedaban tambien á la corona los recursos de *avocación* y *perhorrecencia*, el primero para avocar el conocimiento de las causas, cuando se hallaban en estado de sentencia, y el segundo para hacer lo mismo en cualquier estado de la causa, si el juez se hacia sospechoso; mas ni aquel tenia lugar en las causas criminales y en muchas civiles de que conocia el Justicia, ni el último podia interponerse en las que pendian de los señores de lugares, segun la jurisprudencia recibida, por lo ménos hasta el siglo xvi (2).

II.

DE LA POTESTAD Y JURISDICCION SEÑORIALES.

Sin descender á más pormenores sobre la organizacion de los magistrados reales, examinaré ahora la jurisdiccion enajenada de la corona que ejercian los señores del suelo. Gozábala, segun he dicho, los ricos-hombres y los infanzones dueños de lugares poblados, cualquiera que fuese el título de su dominio. Asi como el rey «tenia su intencion fundada» á la potestad y jurisdiccion en todo el reino, asi el propietario de un lugar «fundaba» la suya al dominio y jurisdiccion del mismo y su término, segun la doctrina y frase de los antiguos foristas. Podia haber y habia en los lugares señoriales tierras alodiales y libres é infanzones dueños de ellas más ó menos exentos de la potestad señorial, pero todas las que notoriamente no se ha-

(1) No eran apelables ante el rey las sentencias del justicia en causas contra oficiales públicos ó contra notarios ó sobrejunteros acusados de falsedad, ni sus resoluciones á consultas de los jueces y otros oficiales sobre la interpretacion de los fueros, ni otras varias providencias (Molino, v. *Appellatio*, F. lib. 1, t. *Quod in dubiis*, lib. 7, *De consultat*, 4.)

(2) La avocacion no podia decretarse por el regente gobernador en las causas de que conocia el Justicia ni por el rey mismo, en las criminales por delitos graves, en los procesos llamados de *aprehension*, ni en los de *firma de derecho*, ni en los seguidos á oficiales públicos, ni en otros varios, de que cónocia aquel magistrado (Molino, v. *Evocatio*, F. lib. 9, t. *De forma et modo procedendi*, lib. 4. *De apprehensionibus* 25, lib. 7, *De firmis juris*, 5.) Aunque no hay ley expresa que declare no proceder la *perhorrecencia* en las causas de que conocian los señores, Molino asegura haber leído cierta glosa antiquísima escrita al márgen del *Privilegio general*, en la cual se decia que reinando D. Juan I y D. Pedro IV, las córtes de Zaragoza, á instancia de los señores de lugares, prohibieron la avocacion en las causas de su competencia. En los siglos xvi y xvii es cuando esta prohibicion hubo ya de quebrantarse.

llaban poseídas por álguien en plena propiedad y con justo título, estaban sujetas al dominio directo del señor, al cual debían rendir homenaje sus terratenientes ó colonos en calidad de vasallos. Este sistema de poblacion era adecuado para mantener la disciplina interior de los lugares señoriales, pues la potestad señorial no habria alcanzado el fin de su institucion si no se hubiera extendido por lo general, á todos los moradores del territorio respectivo. A este principio obedecian sin duda las leyes que prohibian á los vasallos de un señor residir en lugar de otro (1), y las que restringian la facultad de adquirir bienes raices, en lugares de señorío, por los que en ellos no fueran vasallos.

Tres clases de jurisdiccion solian ejercer los dueños de tierras pobladas: la civil y criminal, con mero y mixto imperio, la civil solamente y la que en Aragon se denominaba *potestad absoluta*. La primera atribuia competencia para juzgar civil y criminalmente á los vecinos del lugar, no infanzones, y civilmente tan sólo á los infanzones, que no fueran á su vez señores de vasallos, con sujecion en todo caso á las leyes y fueros del reino. Los que ejercian esta jurisdiccion castigaban no sólo los delitos cometidos en su territorio, sino tambien los perpetrados fuera, por malhechores aprehendidos dentro de él (2). Ultimamente, D. Fernando el Católico, en las Córtes de 1510, extendió su potestad áun á los infanzones, cuando delinquieran gravemente y eran aprehendidos en lugares de señorío, quedando así reducido el privilegio que los individuos de esta clase disfrutaban, de no ser juzgados en lo criminal, sino por el rey (3). Verdad es que en Aragon era máxima de derecho público que sólo el monarca y sus bayles pudiesen imponer castigos corporales (4); mas esto debia entenderse, segun los foristas y la jurisprudencia, sin perjuicio de la potestad que por usurpacion, por costumbre ó por privilegio, tenian para aplicarlos en muchos pueblos, los señores llamados de *horca y cuchillo* (5).

Los señores que gozaban solamente la jurisdiccion civil ó el *mero imperio*, segun decian los juristas, conocian de todos los pleitos de los veci-

(1) Observ. lib. 2, t. *De Præscriptionibus*.

(2) F. lib. 9, t. *De delinquentibus in locis dominorum*, Observ. lib. 6, t. *De privilegiis militum*, 9.

(3) F. lib. 9, t. *De delinquentibus*.

(4) F. id. t. *De homicidiis*, 4. «Quia omnes justitiæ aut stemæ corporales spectant ad dominum regem vel suos bajulos.»

(5) Observ. lib. 6, t. *De privilegiis militum*. «Usurpatum est (el derecho de imponer penas corporales) in Aragonia per quosdam, quia in aliquibus locis habent furcas et dictas jurisdictiones exercent.»

nos de sus lugares, aunque fueran infanzones (1). Competiales asimismo el conocimiento de todos los juicios relativos á heredades sitas en su territorio, aunque los litigantes fueran ricos-hombres ó señores de vasallos y tambien de las causas de eviccion y saneamiento, aunque los demandados gozaran de la misma noble calidad (2).

Habia, por ultimo, lugares cuyos señores no tenian jurisdiccion criminal propiamente dicha, ni quizá civil, pero disfrutaban la llamada potestad *absoluta*, de que ántes he hecho mencion. En virtud del fuero ya citado, que prohibia al rey administrar justicia en los lugares que no fueran *suyos propios*, no habia nadie que pudiera hacerlo en aquellos cuyos señores territoriales carecian de jurisdiccion. Asi cuando se cometia en ellos algun delito, que debiera ser castigado con pena corporal, lo único que podia hacer el señor era prender al delincuente y ponerlo á disposicion de los jueces, que residian fuera de sus dominios (3). Estos jueces procedian entónces al castigo del culpable, mas no podian ejecutarlo dentro del territorio señorial, sin licencia del señor. Si un lugar de señorío debia ser embargado por deuda ó delito de su dueño, no podia el rey decretar la aprehension ó embargo, sino el Justicia, porque decian los foristas, que no siendo permitido á la corona juzgar en tales lugares, tampoco le era lícito ocuparlos por actos de justicia (4). De modo que en el lugar poblado, propio de señor particular, la jurisdiccion ó correspondia al propietario, ó no existia de modo alguno. Tan inherente se consideraba al dominio de la tierra, que apenas se concebía posible que la de un lugar correspondiese á quien no fuera su dueño. Por eso decian los jurisconsultos que quien no poseía la tierra no podia adquirir jurisdiccion en ella, sino por privilegio expreso y nunca por prescripcion, no obstante ser este uno de los títulos en cuya virtud se ganaba el dominio (5).

Pero esta independencia casi absoluta, que de derecho gozaban los lugares en que nadie podia administrar justicia, estaba neutralizada en la práctica por la potestad *absoluta* del señor, la cual sin llamarse jurisdiccion, en el sentido de los jurisconsultos foristas, surtía los efectos de ella. Debo aquí recordar que si bien no todos los señores tenian plena jurisdiccion en sus estados, todos los que eran dueños absolutos de tierras pobladas de vi-

(1) Observ. lib. 9, t. *De salva infantion.*, 10.

(2) Observ. lib. 2, t. *De for. compet.* 2, 10, 13.

(3) Observ. lib. 6, t. *De privil. milit.* 9.

(4) Molino, *Repert. verb. Domini locorum.*

(5) Molino, verb. *Jurisdictionis.*

llanos, vasallos suyos, ejercian sobre ellos aquella potestad. Solamente carecian de ella los meros usufructuarios, los dueños *útiles*, los encomendados, los feudatarios, las iglesias, los monasterios y las órdenes militares, pero ordinariamente solian tener en cambio la jurisdiccion civil. La causa segun los juristas, de esta diferencia entre el dominio pleno y el limitado, confirma con nuevos indicios, el origen territorial de aquella potestad. Decian que pudiendo menguar con el mal uso de ella, el valor y las rentas de los lugares de señorío, no debia ejercerse en aquellos en que el mismo mal uso pudiera perjudicar el derecho que un tercero tuviese en dichos lugares. Y como en las tierras de propiedad ménos plena habia siempre un tercero que participaba actualmente ó habia de participar más tarde de sus frutos, este derecho resultaria perjudicado, cuando por el mal uso que el poseedor inmediato hiciera de su autoridad, se disminuyese el número de los vasallos ó viniese á ménos su hacienda. Cuando el dominio estaba dividido, los actos de autoridad del dueño del útil podian en efecto resultar en daño del señor del directo. En los lugares de iglesias, monasterios y órdenes militares percibia el rey el tributo de *monedage*, cuyo importe dependiendo del número de los vasallos, se disminuiria por los abusos de que resultase la pérdida de algunos de ellos (1). Era, pues, la *potestad absoluta* consecuencia directa é inmediata del dominio pleno de las tierras pobladas, como lo era la libre disposicion de sus frutos. La propiedad era fuente de la jurisdiccion, á la vez que de sus más importantes limitaciones.

Consistia la potestad absoluta en el derecho que disfrutaban los nobles, señores de lugares para *tratar bien ó mal* á sus vasallos de parada, y despojarles de sus bienes, sin responsabilidad alguna. Ni el rey podia revocar los actos ejecutados en uso de esta potestad (2). Como las penas corporales no podian imponerse sino por el monarca, para conciliar con este principio el uso de la antigua potestad señorial, se reconoció en los señores la facultad de castigar á sus vasallos, siempre que no produjeran efusion de sangre. Interpretando, pues, farisáicamente aquella regla de derecho, los señores que no tenian jurisdiccion criminal propiamente dicha, se atribuyeron la necesaria «para matar de hambre, de sed ó de frio» á los hombres suje-

(1) Molino, v. *Domini locorum* y v. *Vassallus*: dice haber leído esta explicacion en una glosa del antiguo comentador de los fueros Juan de Patos.

(2) Observ. lib. 9, t. *De privil. gener.* 19. «De consuetudine regni, nobiles Aragonum et alii domini locorum, qui non sunt ecclesie, suis vassallis servitutis possunt bene vel male tractare, pro eorum libitu voluntatis, et bona eis auferre, remota omni appellatione: et in eis dominus rex non se potest in aliquo intromittere.»

tos á su dominio, sin forma alguna de juicio (1). Así cuando un vasallo cometia por ejemplo un homicidio, su señor, porque carecia de jurisdiccion, no podia formarle causa y condenarle á muerte, ni á perdimiento de miembro, pero sí matarle de cualquiera de los modos dichos, prendiéndole y teniéndole encarcelado todo el tiempo que para ello fuera necesario (2).

Gozaban tambien estos señores la facultad importante de prender y asegurar á los criminales á quienes no podian castigar de aquel modo. Así cuando un vasallo realengo ó un extranjero cometia homicidio en lugar de señorío no jurisdiccional, el señor del mismo y sus vasallos debian perseguirle, aprehenderle y entregarle al bayle del rey, aunque el muerto fuera algun vasallo del mismo señor. Tenia éste la misma obligacion cuando su vasallo mataba al del rey ó á otro hombre en lugar propio de la corona y cuando el homicidio se cometia en su propio lugar, por infanzon ó caballero, que por su estado, no estaba sujeto á la jurisdiccion del rey ó del Justicia, si bien entónces debia ser entregado el delincuente á los oficiales del rey en el término de veinticuatro horas (3).

Tambien tenian estos señores sin jurisdiccion, el poder necesario para compeler á sus vasallos á la prestacion de los servicios ó al pago de las rentas y tributos debidos. Así no les era lícito pedir justicia al rey sobre esta materia, en atencion á que ellos por su mandó, podian tomársela, ni de tales actos era permitido á los vasallos interponer recurso alguno (4).

Era la potestad absoluta en cierto modo, más que la jurisdiccion, porque al fin, ésta debia ejercerse con sujecion al fuero, cualquier abuso de ella era penable por el justicia, y en todo caso, la limitaban y contenian las apelaciones y los recursos de los agraviados; mas la potestad absoluta era enteramente arbitraria en su ejercicio: ni el fuero la regulaba, ni la autoridad superior del monarca podia reprimir sus excesos. Por ella, estaba facultado el señor para matar de hambre, de sed, ó de frio, y confiscar los bienes á cualquiera de sus vasallos sin forma ni solemnidad de juicio y «sin que el señor rey pudiera mezclarse en el asunto» como decia el fuero (5). El señor podia hacer todo cuanto quisiera de sus vasallos, ménos

(1) Observ. lib. 6, t. *De privil. milit.* 11. «Quilibet dominus habet hanc jurisdictionem necandi fame, frigore et siti in suo loco, licet nullam aliam jurisdictionem criminalem habeat.»

(2) F. lib. 9, t. *De homicidio*, 4.

(3) Observ. lib. 2, t. *De for. compet.* 14, lib. 9, t. *Actus Curiar.*, 5.

(4) Molino, *Repert. verb. Domini locorum*.

(5) Observ. lib. 9, t. *De privil. gener.* 19.

derramar su sangre. Y no sólo era esto lícito con omision de toda forma de proceso, sino que no podía el señor hacerlo de otro modo, porque seguir procedimientos judiciales equivaldria á usar alguna jurisdiccion, ó aplicar los fueros á actos que no estaban sujetos á ellos.

Los señores que al dominio y la potestad absoluta de sus lugares juntaban la jurisdiccion civil y criminal, se creian además autorizados para ejercer esta última con la independencia y arbitrariedad propias de la primera. A ellos no se referia la prohibicion de imponer penas de sangre, porque la jurisdiccion, que por privilegio ó costumbre ejercian, era ilimitada en cuanto á los castigos y porque tampoco necesitaban sujetar sus procedimientos á las leyes, dado que de ello les dispensaba la potestad absoluta. Ninguna ley autorizaba, sin embargo, esta acumulacion de atribuciones, ni mucho ménos el ejercicio de las unas con las circunstancias propias de las otras.

Cierto es que ni á la letra ni al espíritu de los fueros se oponia la acumulacion en una persona de ambas potestades; mas ampliar la absoluta á aquello para lo cual autorizaba solamente la jurisdiccion, ó ejercer esta última sin sus condiciones esenciales, y con la libertad propia únicamente de la potestad absoluta, no era conforme con el espíritu, ni con el objeto de ninguna de las dos instituciones. Si la ley permitia á los señores ejercer jurisdiccion, era en el supuesto de haberse de sujetar á los fueros del reino y á la autoridad superior del rey y del Justicia, que podian revocar sus providencias. Si la misma ley reconocia la potestad absoluta de los dueños de lugares, era tambien con la limitacion de no habersé de imponer, en virtud de ella, penas de sangre.

Mas aplicar estas penas usando de la potestad de jurisdiccion, y hacerlo sin forma de juicio, ni doble instancia, usando de la potestad absoluta, era ejercer una autoridad superior á la del rey, lo cual no se compadecia con la justicia, ni con el espíritu de la ley escrita. Esto sucedia, sin embargo, en Aragon, aunque no siempre con la aquiescencia del monarca ni de los vasallos. En la causa seguida á D. Diego de Heredia, con motivo de las alteraciones ocurridas en aquel reino en 1591, se le hizo cargo de haber mandado ahorcar á uno de sus vasallos y dar garrote á otros dos. El procesado para desvanecerlo satisfactoriamente en su concepto, respondió que uno de aquellos hombres habia cometido en su presencia un homicidio y lo habia mandado ahorcar á instancia de parte: que otro habia soltado á un preso, grave delincuente: que no habia formado proceso á ninguno de ellos porque los señores de Aragon no lo necesitaban

para castigar á sus vasallos de servicio; y por último, que los de que se trataba eran moriscos (1).

Ni siquiera con la abolición de los fueros políticos, decretada en 1591, dejó enteramente de estar en práctica aquella potestad monstruosa. Reinaba ya D. Felipe III cuando el duque de Híjar, conde de Belchite, mandó azotar y dar garrote á varios vecinos del pueblo de aquel nombre, sin formarles proceso ni oír su defensa, con motivo de haber sido apaleado y herido un alcalde; y por cierto que, según el sacerdote que les auxilió, murieron á inocentes (2). Doña Victoria Pimentel, mujer de D. Martín de Alagon y señora de la villa de Calanda, hizo ajusticiar públicamente en el siglo XVII á un catalán llamado Salaverte, que había estado á su servicio para ejecutar la expulsión de los moriscos, por haberse resistido á cumplir una orden de destierro que dictó contra él, á instancia de los vecinos de dicho pueblo (3). Los nobles que tales castigos impusieron juntaban al parecer en su mano la jurisdicción y la potestad absoluta, puesto que la una les estaba reconocida y la otra era consecuencia forzosa de su dominio territorial y de su condición de infanzones. Por eso se atrevieron á matar sin juicio, y no de hambre, de sed, ni de frío, sino de garrote y horca, á sus vasallos culpables, aunque no ya sin escándalo, porque ni el texto expreso de la ley, ni las ideas y costumbres de la época autorizaban tan crueles actos.

No era la potestad absoluta un privilegio de que disfrutaban solamente ciertos señores, por costumbre ó por abuso, sino atribución ordinaria de todo señor lego de lugar de vasallos, inherente á esta calidad y dependiente de ella. Por eso decían los foristas que cuando uno de estos lugares cambiaba de dueño, pasando del que no tenía aquella potestad, como el rey ó la iglesia, á otro capaz de ejercerla, como el infanzón ó el caballero, empeoraban de condición los vasallos, quedando sujetos á la voluntad y arbitrio del nuevo señor; así como mejoraban los vasallos su estado, cuando el dominio del lugar pasaba de los infanzones á la iglesia ó á la corona (4). De modo que la calidad del vasallaje dependía de la condición del dueño de la tierra, y de la especie de dominio que ejercía en ella, lo cual era precisamente una de las señales características del régimen feudal en Europa.

(1) Procesos de Zaragoza: M. S. citado por Pidal en su *Historia de las alteraciones de Aragón*, t. 1, pág. 36.

(2) *Biblioteca de Salazar*, Letr. K, 41, M. S. citado también por Pidal, p. 36.

(3) *Del feudalismo en Aragón*, por D. Manuel Lasala: artículos publicados en la *Revista de Legislación y Jurisprudencia*, t. 16, p. 23.

(4) Molino, *Repert. verb. Domini locorum*.

Ha extrañado algun escritor que no teniendo el rey esta potestad absoluta en sus lugares de vasallos, y procediendo de la corona todos los de señorío particular, pudieran los dueños de estos lugares adquirir legítimamente un derecho de que carecia el enajenante. De aquí se ha pretendido deducir que la potestad absoluta no tenia más origen ni fundamento que la usurpacion y era abiertamente contraria á los fueros del reino. Mas este es grave error, fácil de desvanecer. La potestad absoluta traia origen de la costumbre, segun dicen las *Observancias*, que tratan de ella: era una institucion anterior á la promulgacion de los fueros, que estos respetaron y áun reconocieron explicitamente. D. Jaime I, en las Córtes de Huesca de 1247, declaró el derecho de los señores para «matar de hambre, de sed ó de frio al vasallo que cometiera homicidio en la persona de otro» (1). El rey no tuvo esta potestad en sus propios vasallos, porque la renunció para llamar pobladores á las ciudades y villas de realengo y contrarestar de este modo el influjo preponderante de los nobles. Entónces, para alentar el espíritu y acrecentar el número de sus vasallos de parada, les otorgó la corona muchas inmunidades, y entre ellas el privilegio de no ser castigados arbitrariamente, sino con sujecion á ciertas reglas generales, protectoras de la inocencia. Mas áun suponiendo que el monarca no hubiera tenido nunca la facultad de *tratar bien ó mal* á sus vasallos, no debe extrañarse que la gozaran los infanzones, correspondiéndoles tal derecho de un modo general, por razon de su estado de infanzonia y señorío, y no porque el rey se lo trasmitiese sobre cada uno de sus lugares, al tiempo de enajenarlo por repartimiento, donacion, venta ó permuta. Este derecho existia desde mucho ántes que se formara la primera compilacion de leyes escritas; y como en virtud de estas quedara reducida ó anulada la potestad absoluta del rey, mediante las garantías otorgadas á los vasallos realengos, y no la de los nobles, que constituia un privilegio de su clase, si no declarado expresamente, tampoco derogado, y ántes bien reconocido por las *Observancias*, que tenian fuerza de leyes, resultó la anomalía de disfrutar los señores de lugares una autoridad que el rey no habria podido trasmitirles, porque él mismo no la gozaba en sus pueblos. Así como cuando un lugar pasaba del dominio de la iglesia al de algun caballero, quedaban sus moradores villanos sujetos á la potestad absoluta del adquirente, por más que áun fuesen libres, segun el testimonio irrecusable de los jurisconsultos fueristas, sin que lo impidiese la circunstancia de no poderle trasmitir el enajenante

(1) F. lib. 9, t. *De homicidio*, 4.

aquella autoridad; así el no tenerla ya la corona no debió ser obstáculo para que la ejercieran los infanzones en los lugares que de ella habían recibido.

Del uso de este singular derecho ofrece la historia numerosos ejemplos. Perteneciendo al rey la villa de Ariza, fué enajenada por D. Pedro IV á un caballero catalán, llamado D. Guillen de Palafox, mediante permuta por un castillo sito en el Ampurdán y 50.000 florines, que se invirtieron en la reconquista de Sicilia. De sus resultas descendieron los vecinos villanos de Ariza de su condicion de hombres libres, aunque vasallos, á la de vasallos de parada; y aún parece que vivieron resignados con su servidumbre bajo la potestad de D. Guillen y de sus hijos y sucesores naturales. Pero extinguida esta familia y pasando la villa, por matrimonio, á D. Rodrigo de Rebolledo, en el reinado de los Reyes Católicos, movieron pleito sus vecinos en solicitud de que se tuviese por concluido el feudo, por falta de sucesion masculina del primer señor, se anulase la enajenacion del pueblo, y se declarase que sus señores carecian de la potestad absoluta, por ser puramente feudal su dominio. Rebolledo contradijo estas pretensiones, alegando que las mujeres no estaban excluidas de la sucesion en los feudos: que la enajenacion de Ariza se habia verificado para recuperar un reino, que era precisamente uno de los casos en que estaban permitidas tales enajenaciones, y que segun los fueros y observancias, los vasallos de caballeros seglares lo eran de *servicio*, y por lo tanto estaban sujetos á su potestad absoluta. Estas razones hubieron de estimarse concluyentes en la córte del rey Católico, de Carlos V y de Felipe II, puesto que suscitado el pleito tres veces por los vecinos de Ariza, con tanto empeño como demuestra la circunstancia de haber estos cometido entre tanto grandes desmanes, sublevándose varias veces contra su señor y matando á uno de ellos, los tres citados reyes lo fallaron siempre á favor de los señores, declarando que les correspondia la potestad absoluta, y restableciéndoles á mano armada, en la posesion de la villa (1).

Así como el derecho de vida y muerte sobre los esclavos y el de disponer de los siervos, se fundaban en el dominio que atribuía sobre ellos al señor, el derecho de gentes de la antigüedad, así la potestad absoluta de los señores aragoneses traía su origen de las costumbres establecidas cuando se formaba el reino, arrancando pedazo á pedazo su territorio de la mano de los infieles. Entónces los nobles é infanzones tenían derecho de vida y

(1) Blasco de Lanuza, *Historias eclesiásticas y seculares de Aragon*, t. 2, c. 52, 53 y 54.

muerte sobre sus siervos ó vasallos de condicion inferior, y este derecho es el que después subsistió como consuetudinario, aunque con algunas modificaciones. Subsistió la facultad de castigar sin limitacion de penas en los señores, que por costumbre ó por privilegio, habian adquirido jurisdiccion criminal, y con tal limitacion, en aquellos que continuaron siendo tan sólo señores territoriales de sus pueblos. Hubo esta limitacion de consistir en no aplicar penas de sangre, y si solamente aquellas que privando de la libertad de delinquir, bastaran para mantener el orden en los lugares en que no tenia entrada la justicia del rey. Tal vez interpretando luego los juristas esta facultad restringida de castigar sin efusion de sangre, marcaron su extension, señalando sus limites extremos con la frase hipérbolica de *tratar bien ó mal*, y por lo tanto, *prender* y dejar morir en la prision al reo, de hambre, de sed ó de frio. Tal es, á mi juicio, el sentido y origen verdadero de este tremendo derecho, tan defendido y disputado por los señores aragoneses, hasta cuando ya no lo toleraba la opinion pública, como combatido por los vasallos, que al fin lo redimieron con su sangre.

Y para concluir este asunto, diré que era tambien diferente la organizacion interior en los señoríos jurisdiccionales y en los de potestad absoluta, como que no eran las mismas las funciones públicas en unos que en otros. Los señores de jurisdiccion la ejercian en las ciudades por medio de zalmédinas y en las villas por bayles ó alcaldes. Unos y otros oficiales presidian la curia ó concejo local respectivo en nombre del señor, y recaudaban las multas y demás derechos señoriales (1). Los señores de mera potestad absoluta no ponian en sus pueblos zalmédinas ni bayles, pero sí sayones y otros agentes subalternos. Los que disfrutaban solamente jurisdiccion civil la ejercian por medio de jueces, sus delegados, conocidos con distintos nombres.

(1) Canellas in Blancas, *Arag. rer.* p. 306.

CAPÍTULO IV

De la facultad de enajenar la propiedad.

I.

DE LA FACULTAD DE ENAJENAR EN VIDA.

La facultad de disponer, así en vida como en muerte, de la propiedad territorial, tenía también en Aragón sus restricciones en provecho de la autoridad pública y de las familias, aunque no tantas como en Castilla, ni en otros reinos de la Península. Los aragoneses de la Edad Media se distinguían por el sentimiento de independencia individual, que predominaba en ellos más que en casi todos los otros pueblos contemporáneos, no obstante el triste ejemplo que al parecer, ofrecían de lo contrario, los hombres sujetos á la llamada potestad *absoluta*. Digo al parecer, porque si la subsistencia de esta clase de vasallos hasta el reinado de Felipe V, puede hacer pensar á primera vista, que no sería muy poderoso aquel noble sentimiento, esta misma circunstancia, si bien se considera, conduce á la conclusion opuesta. No habría durado en Aragón, cuando había ya desaparecido en todas las naciones civilizadas de Europa, aquella clase degradada y abyecta de villanos, á no haber sido tan fuerte y vigoroso el poder individual de los infanzones y caballeros interesados en conservar y defender la potestad absoluta que les daban las leyes y las costumbres. Merced sin duda á este individualismo poderoso, fué siempre allí más libre el dominio de la tierra que en los otros Estados contemporáneos. En Aragón, más que en ninguna otra parte, cuadraba al dominio la definición antigua de «derecho de usar y abusar de las cosas.»

El propietario alodial aragonés era dueño tan absoluto de su propiedad, que para trasmitirla no necesitaba como el castellano, ni como el germánico, significar su resolucion por los actos materiales de la entrega natural de la cosa enajenada, ó la ceremonia solemne de la tradicion simbólica; bastábale expresar su voluntad por escrito, esto es, de un modo que pudiera acreditarse, y por el mismo hecho quedaba en el momesto trasmitido

el dominio (1). Coincidencia singular, por cierto, del antiguo derecho de una provincia de España, con lo que en la mayor parte de los nuevos Códigos de Europa pasa por adelante de la civilizacion moderna, y por consecuencia de lo que llaman las nuevas escuelas «el espiritualismo del derecho.» Pero si convenida de palabra una venta, no llegaba á redactarse el contrato por escrito, ni se daban de ella arras, ni fiador, podia revocarla cualquiera de los contrayentes, pagando al otro cinco sueldos (2). Tan libre quiso la ley que fuese el propietario, que no le obligaba á más cuando contrataba verbalmente y sin las garantías expresadas, la enajenacion de sus cosas.

Tampoco reconocian en el Estado las leyes aragonesas el derecho de expropiacion por causa de utilidad pública, admitido ya en Castilla. No habia derecho superior al derecho individual del propietario. Hasta la confiscacion, que era una pena universalmente establecida en todas las legislaciones de la Edad Media, estaba expresamente prohibida en Aragon, excepto en dos ó tres casos extraordinarios (3). La propiedad infanzona estaba además exenta de todo tributo, segun en otro lugar he dicho. Los palacios de los infanzones eran asilo sagrado, no sólo para sus dueños y habitantes, sino hasta para los malhechores que se acogian á ellos. El rey, en fin, no podia, segun se ha visto, poner justicias en los lugares de dominio privado, por respeto al derecho omnímodo del propietario para disponer de sus tierras y de cuanto habia en ellas.

De la trasmision del dominio por simple contrato escrito, no dejaban de seguirse algunos graves inconvenientes. Sucedia con frecuencia que muchos compradores no tomaban posesion de las fincas que adquirian, conservándose en ellas los vendedores, quienes como continuaran pasando por dueños, solian enajenar más de una vez su derecho, en fraude del legítimo propietario. Mas á esta necesidad acudió la reina regente doña Maria en las Cortes de Zaragoza de 1442, disponiendo que los que tuviesen otorgadas á su favor escrituras de venta de inmuebles ó de imposicion de treudos, y no los poseyeran corporalmente, presentaran sus títulos á los respectivos jueces dentro de un año, con citacion de los vendedores ó detentadores de los mismos bienes; que estos contratos se inscribieran «en el libro ó registro

(1) Observ., lib. 6, t. *De privil. gener.* 39, «In contractibus habitis cum carta, sine traditione, transfertur dominium quod habet alienans.»

(2) Observ. lib. 6, t. *De privil. gener.*

(3) F. lib. 4, t. *Privil. gener.*

de los ditos judges ordinarios. E las vendiciones, que dentro del dito tiempo no se exhibiran, sian habidas, ipso facto, por no feytas; é no hayan eficacia ni valor» (1). De modo que un siglo ántes que D. Cárlos y doña Juana lo estableciesen para Castilla, existia ya en Aragon el registro de la propiedad, y no como en otros países en interés exclusivo del fisco, sino para hacer público el estado civil de los bienes inmuebles y evitar los fraudes consiguientes á su ocultacion.

Pero aunque el principio predominante en la organizacion de la propiedad de las tierras, fuese generalmente la libertad del dominio privado, no por eso dejaron de conocerse en Aragon algunas limitaciones de la facultad de disponer de él, establecidas unas en favor de la autoridad señorial y otras en el de las familias. No eran tantas, sin embargo, como en otros reinos, y muchas de ellas estaban neutralizadas por amplias libertades.

La facultad de enajenar estaba, pues, más ó ménos limitada, segun la calidad legal de las propiedades. Las alodiales ó de infanzones, que ninguna dependencia tenian de los señores, podian enajenarse libremente, en vida y en muerte, sin restricciones favorables al derecho de estós. Las únicas que limitaban tal facultad en cuanto á aquellos bienes, eran las establecidas en interés de las familias, segun se verá después.

Las heredades poseídas á título de *honores ó caballerías de honor*, tanto de la corona como de los ricos-hombres, no fueron enajenables, miéntras se dieron á voluntad ó durante la vida del rey. Pudiendo éste entónces «tomar de su mano» tales *honores* para trasferirlas de unas á otras familias, segun solia hacerse al principio de cada reinado, claro es que no habian de poder enajenarlas los que las poseyeran. El rey D. Sancho Ramirez, en el fuero de Santa Maria de Alquezar y en el que después (1069) dió á San Juan de la Peña, prohibió dar honores ó heredades sin licencia de la corona, comminando al que las tomara, con la pena de perderlas y una multa de 1.000 sueldos (2). Asi, cuando los infanzones eran ejecutados por deudas, no se les podian embargar los bienes de sus *honores*, sino las rentas solamente (3). Mas cuando D. Pedro II cambió la naturaleza de estas propiedades, haciéndolas perpétuas y hereditarias, faltó el motivo de la inalienabilidad y desde entónces pudieron los infanzones disponer libremente de ellas, como de bienes alodiales, vendiéndolas, donándolas, ó dándolas en prenda pretoria

(1) F. lib. 4, *De insinuationibus venditionum*.

(2) Briz, *Hist. de San Juan de la Peña*, pág. 563.

(3) Blancas, *Arag. rer.* pág. 332.

para pagar sus deudas. Sin embargo de esta grave mudanza en la indole de su dominio, todavía conservaron los infanzones el privilegio de que no se embargaran ni enajenaran forzosa ni judicialmente sus bienes, sino cuando estuvieran especialmente hipotecados (1). Tanto respetaba la ley la inviolabilidad del dominio privado, que no permitia quebrantarla, ni aún para satisfacer obligaciones personales del propietario; y solamente autorizaba la expropiacion judicial, "cuando él mismo se hubiera obligado expresa ó tácitamente á pasar por ella, constituyendo para este efecto una hipoteca especial. Por las mismas consideraciones no podia ningun caballero ó infanzon ser privado de sus honores y caballerías, sino cuando mediaba alguna de las causas taxativamente señaladas en la ley y previo juicio, segun he dicho en otro lugar.

Las heredades propiamente feudales estaban sujetas en cuanto á su enajenacion, á las condiciones comunes de los feudos, salvo en aquello que estuviesen modificadas por las costumbres de los respectivos lugares, las cuales no son bastante conocidas. Las propiedades tributarias ó poseidas por vasallos de servicio, estuviesen ó no sometidos á la potestad absoluta, eran las que se hallaban sujetas en su enajenacion, á más graves restricciones. Los vasallos ó pecheros del rey, que como he dicho, estaban exentos de aquella potestad, disfrutaban el privilegio de poder vender sus heredades á los infanzones, sin quedar éstos obligados á pechar por ellas, aunque comprasen toda la hacienda de algun villano (2); pero los vasallos de barones ó de señores no tenían esta facultad: y aún los del rey no podian enajenar á los infanzones, que habitaran en lugares de señorío ó de órdenes, las heredades sitas en ellos, bajo la pena en uno y otro caso, de quedar sujeto á pechos el infanzon que hiciese tales adquisiciones (3). Restriccion importante del dominio, que introducía una grave diferencia entre la condicion de unos y de otros vasallos, y que no tenía más objeto que conservar el derecho de los señores á las rentas y tributos de sus lugares: por cuanto este derecho quedaba muy perjudicado, cuando los exentos de su jurisdiccion y de contribuciones adquirian bienes que ántes poseyeran vasallos tributarios. El rey D. Pedro I dió en 1100, por privilegio, á los nuevos infanzones pobladores de Barbastro, recién conquistada, la facultad de comprar bie-

(1) Salanova in Blancas, *Arag. rer.* p. 313.

(2) Observ. lib. 6, tít. *De privileg. militum*, 2.

(3) Observ. lib. 4, tít. *De emptione*, 6, y lib. 9, tít. *De salva infantion.*, 7, 12.

(4) F. de Huesca. *Teatro histórico de las iglesias de Aragon*, t. 9, apénd. 13; y Muñoz, *Coleccion de Fueros*, pág. 354.

nes de los villanos de la corona hasta la cantidad de 500 áureos (4). De cuyo privilegio se infiere, que si en el siglo xiv estaba ya reconocida á los vasallos del rey la facultad de enajenar sus bienes á infanzones, debió de ser ésta una de las muchas libertades que otorgó la corona á sus vasallos villanos, después del siglo xu, para aumentar su número á costa de la nobleza. Tampoco podían los vasallos de servicio imponerse *censales*, ó sea constituir censos sobre sus bienes y personas, sin permiso de sus señores. Y aunque en el siglo xiv hubo de disputarse esta prohibición, por no haber ley general que la estableciese, Miguel Molino después, fundándose en glosas antiguas de los fueros, aconsejaba que no se impusieran *censales*, sin obtener previamente el consentimiento del señor de los vasallos que hubieran de reconocerlos (1).

Los vasallos sujetos á la potestad absoluta, y los sarracenos y judíos que en cierto modo se equiparaban á ellos, estaban sometidos á condiciones más onerosas en el ejercicio de lo que sólo con gran impropiedad, podía llamarse su dominio. Los judíos y sarracenos *novenarios*, ó sea tributarios á la corona de la novena ó la décima parte de sus frutos, no podían enajenar sus heredades sin licencia del rey (2). Los vasallos de parada sujetos á la potestad absoluta, que podían ser despojados de sus haciendas, al arbitrio de sus señores, sin que les fuera lícito quejarse al rey, y que no podían abandonar sus lugares, sin quedar por el mismo hecho despojados de todos sus bienes, debían someterse, por lo ménos en cuanto á la enajenación de sus propiedades, á las mismas condiciones que los *novenarios* del rey, y por lo tanto, claro es que no podrían verificarla sin licencia de sus señores. Aquellos que poseían tierras señoriales, con la obligación de pagar al señor una parte alicuota de sus frutos, tenían la misma razón que los *novenarios* para no poder enajenarlas, sin consentimiento del mismo señor, por cuanto no podía ser á éste indiferente que sus tierras fueran cultivadas por unos ó por otros colonos, cuando de esta circunstancia podía depender el valor de las fincas y el importe de sus rentas. Pero las heredades dadas á censo ó tributo cierto, á moros ó judíos, tenían la singularidad de poder ser enajenadas libremente y aún sin licencia del señor; siempre que éste no perdiese su fadiga ó luismo (3), si estuviese pactado, pues no estándolo, tampoco había obligación de pagarlo, por no ser esta carga condicion sustancial del contrato de enfiteusis. Ejemplo notable del

(1) *Repert. verb. Vassallus.*

(2) *Fororum in usu non habitor, t. De non alienand. possessionib. tributar.*

(3) *Observ. lib. 6, t. De gener. privil. 23.*

espíritu de libertad que predominaba en la organización de la propiedad aragonesa, puesto que no ofrece quizá otro semejante ninguna de las legislaciones contemporáneas, según las cuales no se podía enajenar la propiedad enfiteútica, sin el consentimiento del señor directo.

La facultad de enajenar en vida estaba también limitada en interés de la familia; mas no reconociéndose en Aragon el derecho de los hijos á una cierta legítima, no nodian ser muchas ni muy rigurosas estas restricciones. Las que existían eran, sin embargo, á favor de los hijos y de los parientes de las líneas descendentes, únicas que, como en el primer libro se ha visto, eran las llamadas á la sucesion feudal. Por eso ninguno de los cónyuges, ni ambos juntos podían vender las heredades dotales, ni las de *axovar* (1), ántes de tener hijos, sin afianzar competentemente su importe á favor de los que pudieran nacer (2). Tampoco podía ninguno de los cónyuges, cualquiera que fuese la clase social á que perteneciera, enajenar sus heredades, sin el consentimiento del otro. Ambos de comun acuerdo, si, estaban autorizados para otorgar tales enajenaciones, y entónces podían hacerlo válidamente, aunque no hubiesen cumplido la edad de veinte años, que en los demás casos requería la ley para ejercer estos actos de dominio. Mas como el fundamento de aquella prohibicion fuese evitar el perjuicio que tales enajenaciones podían ocasionar al cónyuge superviviente, con derecho al usufructo de viudedad, era la práctica que el marido enajenara cuando quisiera sus heredades, reservando á la mujer aquel usufructo, y que sólo se pidiese á ésta su consentimiento, cuando se hubiera de hacer la enajenación sin tal reserva (3).

No eran tampoco enajenables las heredades vinculadas, nombre con que eran conocidas las gravadas con *sustituciones*. Los bienes que el padre usando de su libertad de testar, dejaba al hijo, con la condicion de que si éste muriese sin descendencia legítima, pasaran á un tercero, no podían tampoco enajenarse mientras que el hijo no cumpliera los 20 años; y aunque después eran enajenables, si el mismo hijo moría *ab intestato* y sin haberlos enajenado, debía cumplirse la voluntad del padre (4). Estas vinculaciones, las únicas que autorizaban

(1) Llámase así en Aragon lo que como herencia da el padre á la hija por razon de matrimonio, y la cantidad que en el mismo concepto de herencia suele asegurar con hipoteca especial el marido á la mujer. (F. lib. 3, t. *Ne vir sine uxore*, Molino, *Repert.* verb. *Vir et uxor.*)

(2) F. lib. 7, t. *De jure dotium*, 7.

(3) *Observ.* lib. 5, t. *De jure dotium*, 26.

(4) F. lib. 6, t. *De rebus vinculatis*.

las leyes forales, eran como se vé, sustituciones pupilares de corto término, muy diferentes de los mayorazgos verdaderos, y no producian por lo tanto sino una inalienabilidad temporal. Mas como en Castilla prevaleciese la tendencia á asegurar con vinculaciones perpétuas el bienestar de las familias nobles, cundió este ejemplo á otros reinos, y entónces las *observancias*, interpretando y explicando el fuero que trata de los bienes vinculados por sustituciones, limitaron su aplicacion de modo, que no fuera obstáculo á la fundacion de mayorazgos perpétuos. Considerando sin duda que los hijos no tenían derecho sino á una legítima indeterminada, salva la cual, podia el padre disponer libremente de todo lo suyo, hubo de reconocerse como práctica constante, que los vínculos de sustitucion pupilar no concluyeran al cumplir el hijo 20 años y fueran perpétuos, cuando el padre hubiera señalado y dejado á salvo al mismo hijo, alguna cantidad por vía de legítima (1); y como la ley no fijaba de modo alguno el importe de ésta, cualquiera podia vincular perpétuamente casi toda su hacienda raiz y aún la mueble, siempre que la detallase, y hasta la legítima de sus hijos por término de veinte años. De este modo llegaron á ser inalienables, por vinculados, así los bienes de los ricos-hombres, barones y caballeros principales, como muchos de los meros infanzones y simples caballeros. Conforme con estas prácticas, una ley de Carlos V prohibió á los señores de las ocho casas principales del reino gravar sus haciendas con dotes ó donaciones á favor de sus hijas y en perjuicio de sus sucesores, por más de 12.000 ducados (2).

Pero además de estas vinculaciones, en su origen voluntarias, existían en Aragon otras forzosas y por ministerio de la ley. Hubo un tiempo en que la heredad de abolengo, si era única en la familia, no podia enajenarse, por más que pudiera darse alguna parte de sus frutos á la iglesia y á los parientes, y que habiendo varias heredades de la misma especie, se pudiera dar alguna de ellas á un hijo ó hija, por razon de matrimonio (3). De modo que el fundo paterno se hallaba, por lo general, perpétuamente vinculado en las familias. Mas esta restriccion importante del dominio dejó de estar en uso cuando se generalizó el de las vinculaciones voluntarias, y llegó á no ser conforme con las amplias libertades que habia ido adquiriendo sucesivamente la propiedad. Entónces, abolido ya aquel fuero, vino á ser lícita la

(1) *Observ.* lib. 5, t. *De rebus vinculatis*, l. 2.

(2) *F.* lib. 7, t. *De jure dotium*, 8.

(3) *Foror. in usu non habitor*, lib. 5, t. *De immensis et prohibitis donationib.*

donacion universal, aún á favor de extraños, siempre que el donante reservara algo para sus hijos, no pudiendo anularse sino cuando estos, ya fueran vivos ó ya póstumos, quedaran absolutamente privados de la herencia paterna (1).

Pero la más importante limitacion del dominio en favor de la familia y que todavía subsiste, era la que resultaba del uso del retracto llamado de abolengo. La tendencia de la antigua legislacion aragonesa conforme en este punto con la de Castilla y la de otros reinos, á conservar en las familias los bienes de sus respectivos ascendientes, no sólo se revelaba por la inalienabilidad del fundo paterno, cuando era único, sino tambien por otros derechos concedidos á los parientes para recuperar los bienes de esta índole, cuando se enajenaban á personas extrañas. Un fuero que tampoco se observaba ya en el siglo xvi, pero que habia estado en uso muchos siglos, disponia que si alguno demandaba la restitution de heredades que hubieran pertenecido á sus mayores, y el poseedor de ellas no pudiera defenderse, presentando los títulos de su adquisicion y alegase solamente la posesion de largo tiempo, se decidiera el litigio á favor del demandante, siempre que jurase que las heredades demandadas habian pertenecido en efecto á sus ascendientes (2). Pero aún abolido este fuero, quedó siempre á los parientes el derecho de retraer por el tauto, los bienes inmuebles de abolengo, que otros parientes suyos enajenaran, siempre que dedujeran esta accion dentro de diez dias, si estaban presentes y dentro de un año y un dia, si ausentes (3). Llamábase este derecho en Aragon el *beneficio de la saca* y se daba á los consanguíneos por la línea de que procediesen los bienes enajenados. Pero la ausencia ó la presencia de los retrayentes no se entendia en la práctica, en el sentido natural de estas palabras, pues sólo se consideraban presentes, para el efecto de hacer uso de su derecho dentro de diez dias, aquellos que habian intervenido en el contrato, y pasaban por ausentes y tenian por lo tanto un año para rescindir la enajenacion verificada, todos los que no hubiesen mediado en ella (4). Vendida, pues, una finca que pudiera estar sujeta al retracto, no tenia el comprador facultad para enajenarla á otro libremente, mientras no trascurriera el término

(1) F. lib. 8, t. *De donationibus*, 4.

(2) *Foror. in usu non habitor*, lib. 2, tit. *De prescriptionibus*, pár. *Si aliquis infantio*.

(3) *Observ. lib. 6, tit. De privileg. generalib.* 21.

(4) Molino, *Repert. verb. Avolorium*.

señalado para ejercitar aquel derecho (1). Habiendo hermanos estaba aún más restringida la facultad del vendedor. Entónces consistía el retracto en la prohibicion de enajenar toda heredad de abolengo, sin ofrecerla primero á los hermanos que la pudieran retraer. La que se vendiera sin este requisito, aunque fuese á otros parientes, podía ser retraida por los Lermanos en el plazo ordinario (2).

II.

DE LA FACULTAD DE ENAJENAR POR CAUSA DE MUERTE.

A más restricciones y cortapisas estaba sujeta la facultad de disponer de los bienes para después de la muerte. Las establecidas tenían por objeto, como las anteriormente indicadas, ó el interés de la autoridad pública representada por los señores, ó el de las familias de los propietarios. En interés de los señores, regia en Aragon, como en Castilla y en casi toda España, la antigua costumbre llamada de la *mañería*, de que ántes he hecho larga mención. En su virtud tenía el señor el derecho de heredar á aquellos de sus vasallos que murieran sin hijos. Los textos que á esta costumbre se refieren en Aragon no dicen claramente si los señores eran llamados á la herencia sólo cuando el vasallo moria abintestato, ó si por efecto de tal derecho, estaban privados los vasallos estériles de la facultad de testar. Pero atendida la escasa libertad que disfrutaban los villanos en la disposicion de sus bienes, sobre todo durante los primeros siglos de la Edad Media, y lo poco generalizado que se hallaba entre ellos el uso de los testamentos, creo que en aquellos tiempos, por lo ménos, el vasallo estéril ó mañero, segun entónces se decía, no tenía derecho á disponer de sus bienes para después de la muerte, á fin de que el señor usara del suyo heredándole. A no haber sido así, los vasallos estériles habrían eludido fácilmente el derecho señorial, haciendo testamento y entónces habría sido más comun la testamentifaccion entre esta clase de personas que entre los nobles.

Disfrutaban mañería así los señores particulares, respecto á sus vasallos de signo servicio, como el rey en su calidad de señor de vasallos de la misma índole. En cierta escritura de donacion, á favor del monasterio de San Juan de la Peña, otorgada en el año de 1095, se dice que muerto

(1) Observ. lib. 3, t. *De consortibus*, pár. *Item si aliquis*.

(2) F. lib. 3, t. *De communi dividundo*, 4.

Fortunio Mauxones de Mauxones sin hijos, revirtió á la corona la villa de Rota con su iglesia y sus diezmos, que poseía el difunto, y que en su consecuencia el rey D. Ramiro II cedió al indicado monasterio el derecho que tenía á la reversion de aquellos bienes (1). De cuyo texto se infiere que este derecho traía origen de otro, que antiguamente tuviera y enajenara el monarca, aunque no de un modo absoluto: que tales enajenaciones hubieron de verificarse tan sólo á favor de los primeros adquirentes y su descendencia; y que faltando ésta, era el señor el regulador supremo de la propiedad de sus vasallos.

Debió de ser tan general el uso de la mañería, que sólo se libraban de ella los que expresamente estaban exentos. Así, una de las exenciones que solía conceder el rey á los nuevos pobladores de los lugares y villas, para estimularles á que los habitaran y defendieran, era la de aquella impopular costumbre. Cuando Alonso I dió nuevos fueros á Calatayud, en 1151, concedió varios privilegios á sus vecinos y entre ellos, el de no estar sujetos á mañería (2). El conde de Barcelona, D. Ramon Berenguer, entre los varios fueros que concedió á Daroca, plaza fronteriza con los sarracenos, en 1142, fué uno el de que si algun vecino moria estéril y sin parientes en la villa, se invirtiesen sus bienes en la reparacion de las murallas (3). De modo que, segun este fuero, no sólo heredaban los hijos, sino tambien los parientes que habitaran en Daroca, y á falta de estos, era cuando debía invertirse la herencia en un objeto de utilidad comun.

Después hubo de quedar reducida la carga de la mañería á los sarracenos, que habitaban en lugares de señores seglares, puesto que de ellos es de quienes dice una *Observancia* que si «*decesserint sine filiis, potest Baro vel ipse infantio occupare omnia bona; et ipse debet habere omnia bona villa*» (4). Interpretando después la jurisprudencia literalmente esta disposicion, consideraba exentos de la mañería á los vasallos cristianos, aunque lo fueran de potestad absoluta, y á los sarracenos mismos, cuando eran vasallos del rey ó de la Iglesia (5). Mas de muy poco debía servir á los primeros esta exención, si por otra parte, en virtud de la potestad absoluta, podian sus señores despojarles, sin apelacion, de todo cuanto en el mundo

(1) Briz, *Historia de San Juan de la Peña*, pág. 449.

(2) Muñoz, *Coleccion de fueros y cartas-pueblas, Fuero de Calatayud*, pág. 461.

(3) Muñoz, *Obr. cit. Fuero de Daroca*, pág. 542.

(4) Observ. lib. 7, tit. *De judeis et sarracenis*, l.

(5) Molino, *Repertor. verb. Vassallus*.

hubieran. Así, pues, aún abolida por privilegios particulares, la antigua manera, en la mayor parte de los lugares poblados de vasallos cristianos, todavía duró hasta el siglo xvii, por lo ménos, respecto á los desdichados moros.

Eran ménos en Aragon que en otras partes las restricciones, en interés de la familia, de la facultad de disponer de los bienes para después de la muerte. El antiguo fuero de Jaca confirmado por el rey D. Alonso II en 1187, aunque de fecha muy anterior, y cuyas disposiciones fueron adoptadas en otros muchos lugares, aún de Castilla y Navarra, segun se lee en su propio texto, declaraba que todo vecino de aquella ciudad podia ordenar lo que quisiera de sus heredades y bienes, tuviese ó no hijos, y que en el caso de que nada dispusiera, le sucederian sus parientes más cercanos, y en su defecto, los pobres. La misma libertad de testar habian de tener los forasteros; mas en caso de que no la usaran, sólo heredarian sus parientes las dos terceras partes de la hacienda, invirtiéndose la restante en sufragios por su alma (1).

Una legislacion algo semejante hubo de regir tambien en otros lugares no poblados al fuero de Jaca, puesto que muchos diplomas de los siglos xi y xii dan testimonio de cierta libertad de testar en los padres. D. Ramiro I, que tuvo cuatro hijos legítimos y uno natural, otorgó dos testamentos: el primero en 1059 y el segundo en 1071, y en ambos instituyó por único heredero de sus bienes patrimoniales á su hijo primogénito D. Sancho, si bien legando á los demás alguna porcion de su hacienda. En el primero encargó á D. Sancho que pusiera monja á su hija doña Urraca, dándole por dote el lugar de Arrensa y el monasterio de Santa Eulalia, y que casara á su hija doña Teresa, y si no podia hacerlo pronto, le mandase tambien entrar monja. En el segundo testamento dispuso D. Ramiro que su hijo mayor D. Sancho «heredase toda su honor con sus tierras y »sus hombres» y una parte de sus ganados, y que otra parte de éstos, los bienes muebles y ciertos monasterios los heredara San Juan de la Peña. Encargó al mismo D. Sancho que diese estado y todo el bien posible á su hermano menor D. García, y pagase cierta cantidad, que aún debia, por la dote de su hija doña Sancha, ya casada. Legó, por último, á su hijo natural D. Sancho los lugares de Aybar y Xavierre de Latre, pero con la condicion de poseerlos *por mano*, esto es, como honor ó feudo de su heredero y con sujecion á su autoridad (2). Y no eran solamente los reyes los que dis-

(1) Blancas, *Arag. rer.*, pág. 38, Muñoz, *Coleccion de fueros*, pág. 243.

(2) Briz, *Hist. de S. Juan de la Peña*, pág. 438.

frutaban de tanta libertad, pues ejemplos semejantes ofrecen los testamentos de los próceres y caballeros de aquella época. D. Lope Garcés, señor de Alagon y fundador de la casa de este nombre, y su mujer doña María, otorgaron juntos su testamento en 1120, y teniendo varios hijos dejaron la tercera parte de su hacienda y el lugar de Grosin á San Juan de la Peña, al Hospital de Jerusalem y al Santo Sepulcro, y mandaron dividir entre los hijos las dos partes restantes, pero dando al primogénito todas las armas por via de mejora (1). Otros testadores distribuyeron sus herencias de modo diferente, segun su voluntad, mas sin que hubiera ley ó costumbre que señalara por legítima de los hijos ninguna parte determinada del caudal paterno.

Entiéndese que este derecho de testar estuvo limitado á los bienes alodiales, pues mientras que *las honores* fueron vitalicias, el rey ó señor era quien disponia de ellas por muerte de sus poseedores. Cuando éstas se hicieron hereditarias debieron entrar en la condicion de los demás bienes libres; mas como por su indole y objeto no fueran divisibles, hubo de reservarse á los padres la eleccion del hijo, y á los dueños que no tuviesen hijos, la del pariente que habia de heredarlas. A esta costumbre alude, sin duda, el texto, algo oscuro por cierto, de un fuero que el rey D. Pedro II otorgó á los infanzones y confirmó más tarde D. Alfonso el emperador. Dicese en él, refiriéndose á la obligacion en que estaban de servir al rey los que tuvieran honores de la corona, que «lo mismo que ellos deberian »hacer sus hijos y parientes á quienes hubieren destinado tales honores» (2). De cuya frase, por incorrecta que en su original sea, no se puede ménos de colegir claramente que el padre podia elegir el hijo ó pariente que hubiera de heredar y servir *las honores*. Y en efecto, dice Blancas, que la rico-hombría, es decir, *la honor* que constituia este estado, puesto que sin la una no era posible la otra, la heredaba el hijo que habia designado su padre, y no se dividia jamás entre varios: que cuando concurrían en una casa rico-hombría y baronía podia dejarse la una á un hijo y la otra á otro; y que cuando el rico-hombre moria sin descendencia le heredaba el pariente más próximo (3).

Con los fueros y costumbres que permitian disponer libremente de toda

(1) Briz, pág. 766.

(2) Molino, Verb. *Privilegium*: «Et sic deveniat de istos suprascriptos tenitores de illas honores, et de suos parentes, ad cui illa eum destinasset.»

(3) Arag. rev. pág. 333.



la herencia, aún en perjuicio de los hijos, y los que sólo autorizaban para distribuirla con igual libertad entre estos, concurrían otros, sin embargo, que limitaban más estrechamente la facultad de testar. En Daroca y su término se observaba el fuero citado de 1142, según el cual, no sólo los hijos debían heredar á los padres y éstos á aquellos, sino que no podían los padres dar á unos hijos más que á otros: debían estos dividir la herencia paterna por iguales partes: los cónyuges no tenían derecho á la mitad de gananciales (*recipere in medietatem*), sino cuando no tuvieran descendencia; y el abuelo no podía legar al nieto más de seis maravedis en bienes muebles (1). En Teruel y en Albarracin, que comprendían dos extensas comunidades de pueblos, regia el Fuero de Sepúlveda, que señalaba á los hijos porción legítima. De modo que en Aragón, lo mismo que en Castilla en los siglos XII y XIII, había gran diversidad de leyes y costumbres en materia de sucesiones. Es de creer sin embargo, que prevalecieron al fin de aquella época las que mandaban distribuir por igual entre los hijos la herencia paterna, cuando en el siglo XIV, tanto los nobles é infanzones, como los del estado llano solicitaron del rey la facultad de testar libremente.

Mas no debo referir esta pretension sin recordar ántes otras, que con ella señalan un periodo importante de la historia de la aristocracia aragonesa, aquel por cierto, en que fué mayor su poderio. Los nobles, después de haber conseguido el dominio perpétuo de sus honores, á trueque de una parte de su autoridad legal y de su influencia política, aspiraron también á recuperar lo que habían perdido: la corona á su vez, después de haber aceptado el cambio, no respetó ni guardó siempre fielmente los derechos reconocidos á los nobles. De aquí provino una larga y empeñada contienda, que después de haber turbado la paz, en los reinados de D. Pedro III, D. Alfonso III y D. Jaime II, se prolongó todavía con varia fortuna, hasta los tiempos de D. Felipe III. Los nobles pretendieron la restitución de *los honores* que antiguamente poseyeran, y detentaba en su concepto, la corona, y que se les guardasen sus privilegios, que suponían frecuentemente violados por los oficiales reales. La corona resistió cuanto pudo estas pretensiones; pero como al fin el Estado necesitaba los servicios de los nobles, y era su poder tan grande, D. Pedro III, tuvo que reconocerles y otorgarles el *privilegio general*, en que por primera vez hubieron de escribirse y recopilarse los derechos de la nobleza respecto á la corona. Todavía con esto no se calmaron los disturbios del reino, ni se satisficieron los nobles, y así, pocos

(1) Muñoz, *Coleccion de Fueros*, pag. 534.

años después, D. Alfonso III tuvo que otorgarles el monstruoso *privilegio de la union*, en el cual se les reconoció y declaró el derecho de levantarse contra el rey cuando, no les guardase sus libertades y franquezas. No tardaron mucho los nobles en hacer uso de este derecho perturbador. En los primeros años del reinado de D. Jaime II se pusieron ya en rebelion abierta, para obtener los dineros que se les adeudaban de sus caballerías; y sin la prudencia del rey, que sometió el asunto á la decision del Justicia, y la confianza de los nobles en la justificacion de este alto magistrado, no habria terminado la contienda sino por fuerza de armas.

Persistiendo al mismo tiempo la nobleza en el natural empeño de conservar su patrimonio, en el cual veia con razon uno de los más sólidos fundamentos de su influencia, y entendiendo que contribuian á quebrantarlo las desmembraciones á que estaba sujeto, por las herencias y sucesiones forzosas, «los barones, mesnaderos, caballeros é infanzones congregados en las Córtes de Alagon de 1507, para conservar en buen estado sus patrimonios, los cuales se destruian fácilmente cuando se dividian entre los hijos» (1), pidieran á D. Jaime II que les facultara para instituir por heredero á un solo hijo, entre varios, con la única condicion de dar algo á los otros, segun su voluntad. D. Jaime no podia denegar esta pretension á una nobleza levantisca y tan poderosa, con los privilegios exorbitantes recién otorgados, y así vino á ser ley general del reino, en cuanto á los nobles, la libertad de testar entre los hijos.

Aquí debo llamar la atencion sobre una coincidencia importante. En la misma época y por iguales motivos, la nobleza castellana pedia á los reyes, y obtenia de ellos, la facultad de vincular sus bienes. Ella tambien, así como los barones de Aragon, «procuraba conservar en buen estado sus patrimonios, excusando su division entre hijos, que solia destruirlos.» Pero los medios empleados por una y otra nobleza para lograr este objeto, fueron diferentes. La aragonesa más independiente é *individualista*, si así puede decirse, y con precedentes históricos favorables á su propósito, se encomendó á si misma el cuidado de mantener la integridad de su patrimonio, usando de la libertad de testar. La nobleza castellana careciendo en gran parte de aquellas circunstancias y confiando ménos en si misma, quiso obligar á sus sucesores con vinculos legales, á la conservacion de sus propios bienes. Pero salva esta diferencia, los mayorazgos castellanos y la libertad de testar en

(1) Palabras del fuero, 1 t. *De testamentis nobilium*, lib. 6.

Aragon fueron instituciones contemporáneas y encaminadas al mismo objeto.

Tambien se nota singular semejanza en el desenvolvimiento y progreso de ambas instituciones. Los mayorazgos de Castilla vulgarizándose y generalizándose entre todas las clases, dejaron de cumplir su objeto político, segun se ha visto en otro lugar: la libertad de testar en Aragon tambien trascendió muy pronto á las clases populares, dejando de ser privilegio de la aristocracia. En efecto, cuatro años después de otorgada á los nobles, los procuradores de las villas en las Córtes de Daroca de 1311, acudieron al mismo D. Jaime II en solicitud de igual franquicia; y el rey, tal vez con el propósito de aminorar el valor de la concedida á la nobleza, otorgó la misma libertad de testar «á los hombres de las villas y villares, con excepcion de las universidades de Teruel y Albarracin, que habian de conservar el fuero especial ántes indicado (1). Entónces quedó establecido como fuero general en la legislacion aragonesa, la facultad de los padres para señalar á su arbitrio la legitima de los hijos, debiendo éstos conformarse con cualquier cosa que se les diera en tal concepto.

Otra analogía, por último, entre las dos instituciones que voy comparando. Asi como en Castilla la jurisprudencia, interpretando latamente los textos é introduciendo nuevas prácticas, contribuyó á vulgarizar y *demonstratizar*, si así puede decirse, las vinculaciones, así en Aragon la jurisprudencia dió mayor extension de la que permitian los textos de los fueros citados, á la libertad de testar en perjuicio de los hijos. Segun la letra de estos fueros, la facultad del testador se extendia solamente hasta dejar á un hijo casi toda la hacienda y cualquier parte de ella, sin limite mínimo, á todos los demás; pero no fué así como se entendió y practicó por los antiguos foristas. Molino, invocando el testimonio de éstos, á quienes dice haberlo oido muchas veces, además de leerlo en sus escritos, asegura que segun la costumbre, podian los padres instituir herederos á los extraños, siempre que dejasen á los hijos cualquiera cosa cierta, por más que algunos juristas modernos impugnaran ya esta doctrina, sosteniendo que los padres no tenian tal libertad. Fundados en la misma costumbre, opinaban unánimemente los antiguos foristas que habian sido derogados por los nuevos fueros de D. Jaime II, acerca de la testamentifaccion, los anteriores que prohibian desheredar á los hijos sin causa, y señalaban taxativamente las que podian justificar la desheredacion; y en efecto, Molino asegura que estos fueros no estaban en uso en su tiempo, que en su consecuencia, po-

(1) F. lib. 6, t. *De testamentis civium*.

dian los padres desheredar libremente á sus hijos, sin expresion de causa, con tal que les dejasen algo por razon de legitima, y que lo único que no podian hacer era preterirlos, no señalándoles por herencia, ninguna cosa cierta (1).

Pero si estas libertades dejaban un tanto abandonados los intereses de familia, sacrificándolos tal vez á la conservacion de los patrimonios ó al capricho quizá de algun padre desnaturalizado, en cambio otras leyes y costumbres limitaban el ejercicio del dominio, en consideracion tan sólo de aquellos intereses, y como para compensar á los parientes de su escasa participacion en la herencia familiar. Al contraer matrimonio debia el marido infanzon dar en dote á su mujer infanzona tres heredades, si las tuviese, ó dos por lo ménos. Si muerta la primera mujer, pasaba el viudo infanzon á segundas ó posteriores nupcias, debia dotar á su nueva esposa con una de aquellas mismas tres heredades, que por la disolucion del primer matrimonio, debian haberle sido restituidas (2). La mujer *franca* que no era infanzona ni villana, debia ser dotada en 500 sueldos al ménos (3). La villana debia recibir en dote una casa techada de doce vigas, por lo ménos, una aranzada de viña, un campo en que pudiera sembrarse una arroba de trigo, sus joyas, sus vestidos, una cama y los dos mejores animales de labranza (4).

Disuelto el matrimonio por la muerte de alguno de los cónyuges, no se disolvía, sin embargo, la familia, por cuanto el superviviente, mientras permanecia en estado de viudez, continuaba disfrutando la hacienda conyugal, con la obligacion de mantener á los hijos, si los hubiese (5). La viuda infanzona que los tenia, no podia disponer libremente de las tres heredades dotales recibidas de su marido; pero durante su vida ó su viudez, le era permitido dar una de ellas á alguno de sus hijos, otra á la iglesia en que estuviese la sepultura de su familia, y otra á todos los demás hijos, por iguales partes. Además tenia derecho, al dividirse la herencia de su difunto marido, á sacar para sí, con el nombre de *aventajas*, sus joyas y ropas, una esclava, dos animales de labranza, una cama, una mula de cabalgar, un vaso de plata y la mitad de los muebles (6).

(1) Molino, *Repertor. foror.* verb. *Testamentum et exheredatio*.

(2) F. lib. 5, t. *De jure dotium*, 2, 7.

(3) F. id. id., 3.

(4) F. id. id., 4.

(5) F. id. id., 1, y t. *De alimentis*.

(6) F. lib. 5, t. *De jure dotium*.

La viuda franca y la villana no podían disponer de sus dotes recibidas, ni aún durante su vida ó su viudez, y tampoco podían reclamar las que les hubieran sido ofrecidas, como tuvieran ó hubiesen tenido hijos de su matrimonio (1). El viudo también podía sacar por *aventajas*, al dividirse la herencia de su mujer, sus caballos ó cabalgaduras, sus armas, sus vestidos, sus libros, una cama y dos animales de labranza (2).

Cuando el cónyuge superviviente intentaba contraer segundas nupcias, debía convocar á los parientes más próximos de sus hijos por la línea del cónyuge difunto, dividir con su intervencion, toda la hacienda que hubiera poseído en comun con el mismo cónyuge, y entregar en el acto la mitad á los hijos, deduciendo las *aventajas* y los gastos de entierro. Si así no lo hacia, quedaba obligado á partir con los mismos hijos del primer matrimonio las utilidades lucradas durante el segundo (3). Los hijos tenían derecho á heredar la dote de su madre; mas si un padre viudo era infanzon y contraía segundas nupcias, no teniendo heredad propia con que dotar á su nueva esposa, podía hacerlo con la peor de las tres heredades que hubiese dado en dote á su difunta mujer (4).

El derecho de los hijos á heredar la dote de su madre, estaba, sin embargo, limitado por el mismo interés á que obedecía la libertad casi absoluta de testar otorgada á los padres. Las mujeres solían estar excluidas de la sucesion feudal, porque no eran hábiles para servir los feudos y para que éstos no salieran por los matrimonios, de las familias que los poseían. Pues por iguales motivos, el rey D. Jaime II, después de facultar á los padres para instituir heredero á uno solo de sus hijos, dispuso en las mismas Cortes de Alagon de 1307, que el infanzon que tuviera hijas de su primer matrimonio ó hijos varones del segundo, pudiera legar á aquellas únicamente alguna de las heredades con que hubiera dotado á su madre, ó una cantidad cierta de maravedises, dejando todos los demás bienes á sus hijos varones; que solamente no habiendo tales hijos, heredaran íntegras las hijas las dotes de sus madres respectivas, y que en estos mismos términos sucedieran al padre que muriese *ab intestato*, los hijos y las hijas. Esta ley no se hizo extensiva á los no infanzones, como la que habia establecido la libertad de testar entre los hijos; pero ¿cómo no ver en la preferencia concedida á

(1) F. lib. 5, t. *De jure dotium*, 3, 4.

(2) Id. id., t. *De reb. qua mortua*, etc., t. *De adelantagiis*, t. *De reb. sive adelantag.*

(3) Id. id., t. *De secund. nupt.* 1, 2.

(4) Id. id., *De jur. dot.*, 7.

los varones sobre las mujeres, tanto en la sucesion testada como en la intestada, una reliquia indudable de la sucesion feudal? La exclusion forzosa, aunque no absoluta de las hijas, en la sucesion paterna, cuando concurrían con hijos varones de distintos consorcios, ¿no revela claramente el propósito de mantener los patrimonios en las familias de que traían origen?

Ni da ménos á conocer esta tendencia el órden de suceder *ab intestato* establecido por las leyes de Aragon. A esta sucesion eran llamados por igual, primeramente los hijos, sin más distincion que la señalada respecto á las hijas, en el caso que acabo de indicar; pero á falta de hijos no entraban á heredar los padres, sino los parientes más próximos de líneas determinadas, segun la procedencia de los bienes. En tal caso, lo mismo que en los feudos, sucedían los colaterales más próximos, descendientes de las mismas líneas de que procedían los bienes de la sucesion (1). Verdad es que luego D. Jaime II en las Córtes de Daroca de 1311, y D. Juan II en las de Calatayud de 1461, reformaron en parte este antiguo derecho, disponiendo que lo que el intestado hubiera recibido en vida ó heredado de sus padres con cláusula de sustitucion, ó adquirido de sus hermanos por cualquier título, volviera á los ascendientes de quienes procediese, y en su defecto á los colaterales; pero aún entónces habian éstos de heredar tambien solamente los bienes que procedieran de sus antecesores respectivos (2). Los que el difunto hubiese adquirido por su industria ó de personas extrañas, no pasaban en ningun caso á los ascendientes, sino á los colaterales más próximos de ámbas líneas, por estirpes é iguales partes (3).

(1) F. lib. 6, t. *De bonis vincularis*.

(2) Id. id., t. *De successor. ab intest.*

(3) Observ. lib. 5, t. *De testam.*, 7.

| | Págs. |
|--------------|-------|
| Prólogo..... | 5 |

LIBRO PRIMERO

Nociones generales acerca de los orígenes y principales vicisitudes de la propiedad territorial en los pueblos antiguos y en la Europa moderna.

| | |
|--|-----|
| CAPÍTULO I.—La propiedad en los antiguos pueblos de Oriente. | 8 |
| I.—La India y Egipto | id. |
| II.—El pueblo hebreo..... | 12 |
| CAP. II.—Relaciones de la propiedad territorial con la religion primitiva y la constitucion de la familia..... | 19 |
| CAP. III.—Constitucion de la propiedad territorial en Grecia | 24 |
| CAP. IV.—Propiedad romana, sus clases, su trasmision..... | 31 |
| I.—Orígen de las diversas clases de propiedad en Roma.—Dominio quiritario..... | id. |
| II.—Sucesion hereditaria y testamentifaccion..... | 36 |
| CAP. V.—Propiedad romana: sus vicisitudes y su fin. | 41 |
| I.—Vicisitudes de las propiedades públicas y de las no quiritarias..... | id. |
| II.—Fin de la propiedad quiritaria y condicion de la privada bajo el Imperio..... | 46 |
| CAP. VI.—La propiedad en Europa bajo la dominacion de los bárbaros..... | 52 |
| I.—Estado de la propiedad territorial inmediatamente despues de la conquista..... | id. |
| II.—Los beneficios y su influencia en el régimen del Estado.... | 57 |
| III.—Modos de transmitir la propiedad entre vivos y por causa de muerte..... | 64 |

| | |
|--|-----|
| CAPÍTULO VII.—De los feudos y sus efectos en el régimen de la propiedad..... | 69 |
| I.—Naturaleza de los feudos y de los derechos feudales..... | id. |
| II.—Modos de suceder en los feudos y sus consecuencias en el orden social y político..... | 74 |
| III.—Cómo contribuyó la herencia de los feudos á crear la soberanía territorial..... | 80 |
| IV.—Influencia de la propiedad en las instituciones políticas nacidas del feudalismo..... | 82 |
| V.—Influencia de las vicisitudes de la propiedad en la decadencia del feudalismo..... | 87 |
| VI.—Institucion de los mayorazgos y sustituciones en Francia, Inglaterra y Alemania..... | 93 |
| CAP. VIII.—Desamortizacion de la propiedad civil en Inglaterra.. | 102 |
| I.—La desvinculacion y la desamortizacion de la propiedad privada ántes del siglo XVIII..... | id. |
| II.—La desvinculacion de la propiedad privada desde el siglo XVIII..... | 108 |
| III.—Desamortizacion de la propiedad municipal | 114 |
| CAP. IX.—Opiniones de los filósofos y de los políticos de la escuela del siglo XVIII acerca del origen, naturaleza y extension del derecho de propiedad..... | 117 |
| CAP. X.—Estado de la propiedad en Francia ántes de la revolucion de 1789..... | 126 |
| I.—De la propiedad privada sujeta á vinculacion..... | id. |
| II.—Estado de la propiedad municipal..... | 131 |
| CAP XI.—Estado de la propiedad territorial en Francia durante la revolucion de 1789..... | 133 |
| I.—Vicisitudes de la propiedad privada en este período..... | id. |
| II.—Desamortizacion de la propiedad municipal..... | 140 |
| CAP. XII.—Vicisitudes de la propiedad civil en Francia despues de la revolucion de 1789..... | 143 |
| I.—Estado de la propiedad privada y restablecimiento de los mayorazgos..... | id. |
| II.—Restablecimiento de la propiedad municipal..... | 152 |

LIBRO II.

Estado de la propiedad territorial en España bajo la dominacion de los visigodos y de los árabes.

| | Págs. |
|--|-------|
| CAPÍTULO I.—De los caracteres feudales de la propiedad territorial. | 155 |
| CAP. II.—Estado de la propiedad territorial bajo la dominacion visigoda..... | 159 |
| I.—Tierras libres y tierras gravadas con servicios públicos..... | id. |
| II.—Tierras de la Iglesia..... | 167 |
| III.—Del colonato y el precario entre godos y romanos..... | 174 |
| IV.—Del servicio militar y de la jurisdiccion inherentes al dominio territorial..... | 179 |
| CAP. III.—Estado de la propiedad territorial en España bajo la dominacion de los árabes..... | 183 |
| I.—Conquistas de los sarracenos.—Estado de los mozárabes... | id. |
| II.—Repartimientos de tierras entre las tribus conquistadoras. | 189 |
| III.—Tributos y exacciones..... | 195 |
| IV.—Modos de adquirir, trasmitir y utilizar las propiedades.... | 200 |

LIBRO III.

La propiedad territorial en los reinos de Leon y Castilla durante la Edad Media.

| | |
|---|-----|
| CAPÍTULO I.—Repoblacion y reconstitucion de la propiedad territorial..... | 204 |
| I.—Primeros tiempos de la Reconquista..... | id. |
| II.—Condados y presuras..... | 209 |
| III.—Relaciones de los condes con la corona y con los pueblos. | 218 |
| CAP. II.—Propiedades alodiales y behetrías..... | 223 |
| I.—Diferentes clases de propiedades alodiales que nacieron de la Reconquista..... | id. |
| II.—Origen de las behetrías..... | 227 |
| III.—Derechos y obligaciones inherentes á las behetrías..... | 231 |
| IV.—Decadencia y extincion de las behetrías..... | 239 |
| CAP. III.—Tierras de repartimiento y dominio de juro de heredad.. | 244 |
| I.—Repartimiento de tierras por diferentes títulos..... | id. |
| II.—Condiciones del dominio de juro de heredad..... | 253 |
| III.—Conversion de las propiedades coartadas en propiedades de juro de heredad..... | 258 |

| | |
|---|-----|
| CAPÍTULO IV.—Propiedades coartadas.—Prestimonios y encomiendas..... | 264 |
| I.—Orígen, naturaleza y objeto de los prestimonios..... | id. |
| II.—Orígen y naturaleza de las encomiendas..... | 268 |
| III.—Abuso y fin de las encomiendas..... | 275 |
| CAP. V.—Propiedades coartadas.—Mandaciones, tenencias y señorios..... | 279 |
| I.—Orígen y naturaleza de las mandaciones..... | id. |
| II.—Orígen y naturaleza de las tenencias..... | 284 |
| III.—Orígen, naturaleza y derechos de los señorios..... | 288 |
| CAP. VI.—Propiedades coartadas.—Tierras.—Honores..... | 295 |
| CAP. VII.—Propiedades coartadas.—Los feudos segun la legislacion y la historia de Castilla..... | 304 |
| CAP. VIII.—Propiedades coartadas.—Tierras censales y tributarias.. | 311 |
| I.—Tierras de siervos y de solariegos..... | id. |
| II.—Libertades de los solariegos..... | 317 |
| III.—Tributos y servicios de los solariegos..... | 326 |
| IV.—De la recomendacion ó incomunion de tierras y personas. | 331 |
| CAP. IX.—Del servicio militar de los poseedores de tierras..... | 335 |
| CAP. X.—De la jurisdiccion como fruto de la propiedad..... | 341 |
| I.—Clases y grados de jurisdiccion otorgados con el dominio... | id. |
| II.—Organizacion de las justicias señoriales..... | 348 |
| CAP. XI.—De la facultad de enajenar las tierras..... | 355 |
| I.—Inalienabilidad primitiva de muchas propiedades..... | id. |
| II.—Restricciones de la facultad de enajenar..... | 358 |
| CAP. XII.—De la herencia de las tierras..... | 365 |
| I.—De la herencia de las propiedades de juro de heredad..... | id. |
| II.—De la herencia de los bienes que no eran de juro de heredad. | 375 |

LIBRO IV.

De la propiedad territorial en el reino de Navarra.

| | |
|---|-----|
| CAPÍTULO I.—De las diferentes clases de propiedades alodiales en el reino de Navarra..... | 384 |
| CAP. II.—Del estado de las personas con relacion á las tierras.... | 389 |
| I.—Infanzones..... | id. |
| II.—Villanos y solariegos..... | 392 |
| III.—Siervos y mudejares..... | 398 |
| CAP. III.—De los honores de villas y tierras..... | 402 |
| CAP. IV.—De las tierras de señorío..... | 410 |

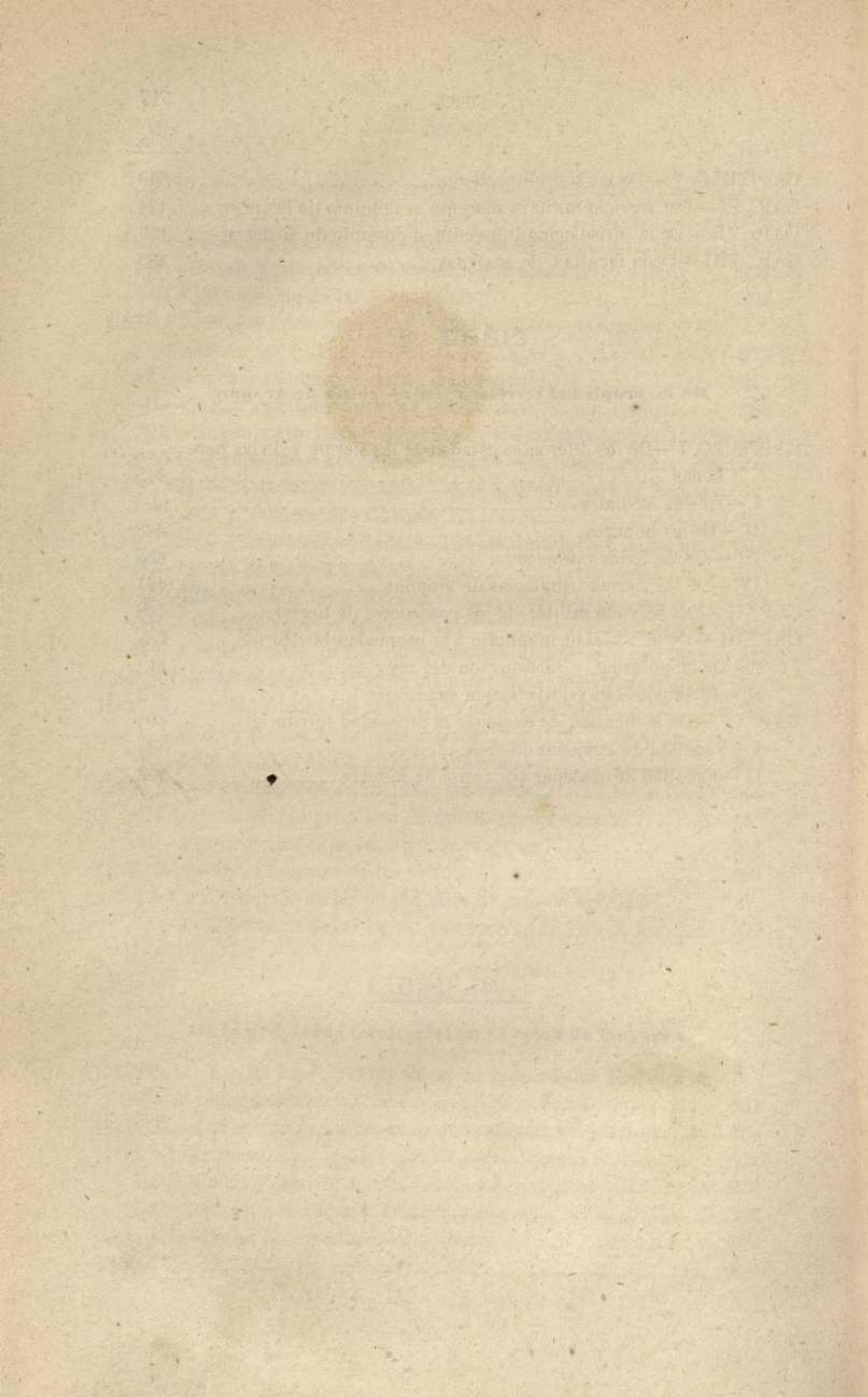
| | Págs. |
|--|-------|
| CAPÍTULO V.—De las tierras pecheras..... | 419 |
| CAP. VI.—Del servicio militar inherente al dominio de la tie ra .. | 424 |
| CAP. VII.—De la jurisdiccion inherente al dominio de la tierra.... | 429 |
| CAP. VIII.—De la facultad de enajenar..... | 435 |

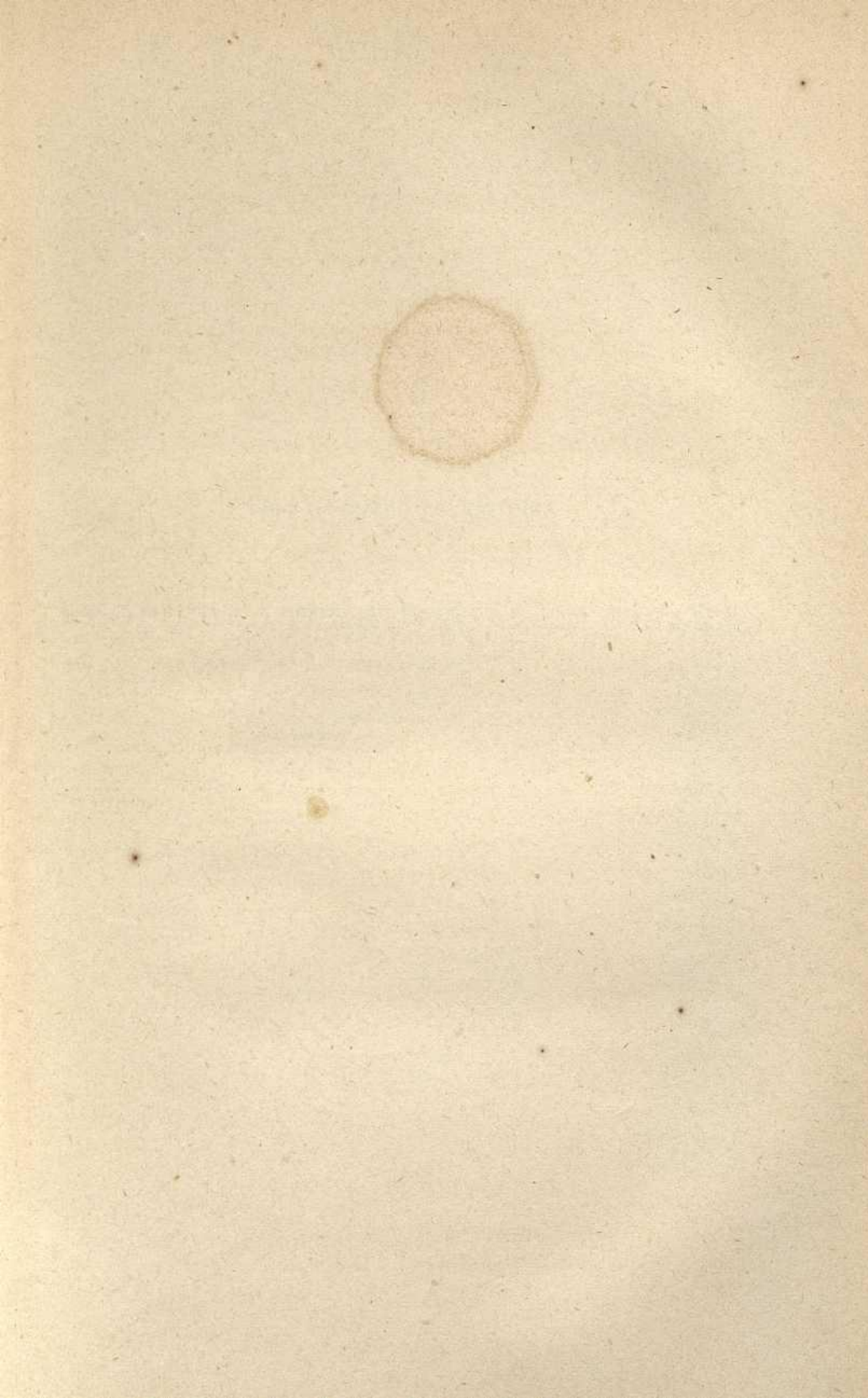
LIBRO V.

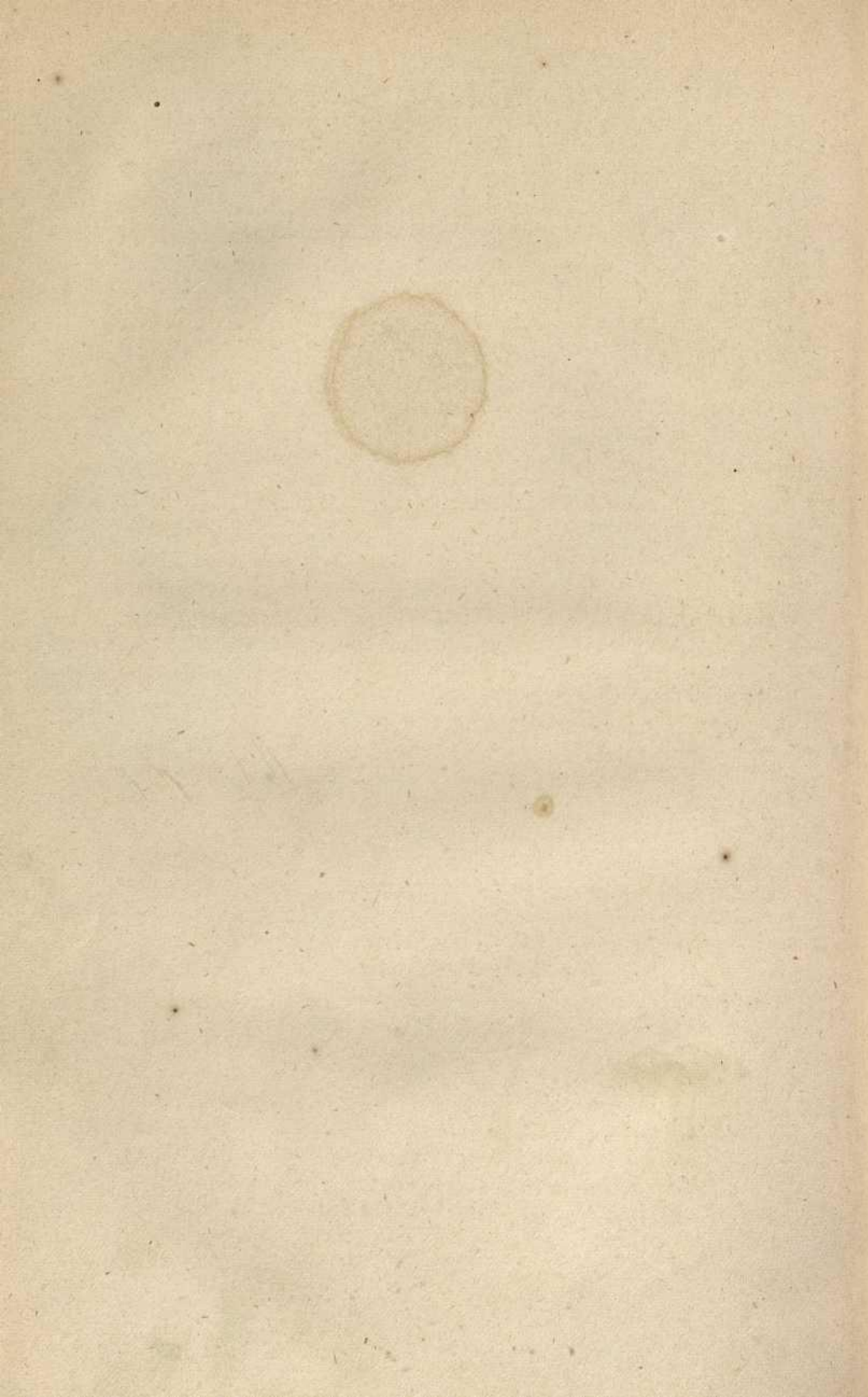
De la propiedad territorial en el reino de Aragon.

| | |
|--|-----|
| CAPÍTULO I.—De los diferentes estados de las tierras y de las per- sonas..... | 445 |
| I.—Tierras alodiales..... | id. |
| II.—De las honores..... | 448 |
| III.—De los feudos propios... .. | 458 |
| IV.—De las tierras tributarias de villanos..... | 461 |
| CAP. II.—Del servicio militar de los poseedores de tierras | 468 |
| CAP. III.—De la potestad inherente á la propiedad territorial..... | 475 |
| I.—De la potestad y jurisdiccion del rey..... | id. |
| II.—De la potestad y jurisdiccion señoriales..... | 484 |
| CAP. IV.—De la facultad de enajenar la propiedad territorial..... | 494 |
| I.—Facultad de enajenar en vida..... | id. |
| II.—Facultad de enajenar por causa de muerte..... | 502 |









ENSAYO SOBRE LA HISTORIA

DE LA

PROPIEDAD TERRITORIAL EN ESPAÑA

ENSAYO SOBRE LA HISTORIA

DE LA

PROPIEDAD TERRITORIAL EN ESPAÑA

TOMO II

MADRID

IMPRESA DE LA CATEDRAL, 1884

DE LA CATEDRAL, 1884

ENSAYO SOBRE LA HISTORIA

DE LA

PROPIEDAD TERRITORIAL EN ESPAÑA

POR

D. FRANCISCO DE CÁRDENAS

DE LA

Academia de la Historia y de la de Ciencias morales y políticas

TOMO II

MADRID

IMPRENTA DE J. NOGUERA, Á CARGO DE M. MARTÍNEZ

CALLE DE BORDADORES, NÚM. 7

PROPIEDAD TERRITORIAL EN ESPAÑA

Por

D. FRANCISCO DE CÁDIZ

Madrid

Academia de la Historia y de la Geografía, 1882

TOMO II

MADRID

Imprenta de A. GARCÍA Y GARCÍA, 1882

CALLE DE MONTECASSINO, 12

LIBRO VI.

De la propiedad territorial en el principado de Cataluña.

CAPÍTULO I.

Constitucion de la propiedad territorial bajo la dominacion de los reyes francos.

I.

REPARTIMIENTOS DE TIERRAS Y SUS CONDICIONES.

Carlo-Magno y Ludovico Pio, despues de arrojar á los moros de Cataluña, extendiendo su dominacion sobre esta nueva provincia, la sometieron al mismo régimen político, militar, judicial y económico, establecido por sus antepasados y perfeccionado por ellos, en el imperio de las Galias. Como Pipino había procedido para organizar el gobierno de la Galia gótica, así procedieron aquellos ilustres príncipes para ordenar la administracion y régimen de la *Marca hispánica*, segun se llamaba entónces lo que hoy es Cataluña, con una pequeña parte del territorio fronterizo, que despues ha pertenecido á Francia. En las ciudades y en algunos distritos rurales, pusieron condes francos que administraran justicia y cuidaran de la cosa pública. Esta institucion era ya conocida en el país, puesto que existia desde la época de los godos, y no habia desaparecido enteramente en el breve período de la dominacion sarracena, por más que fuese cosa nueva la de erigir condados fuera de las ciudades y en comarcas meramente rurales, como entónces hubieron de establecerse, y aún en mayor número que los urba-

nos (1). Los condes tuvieron sus *Vicarios*, que eran ó *generales*, porque hacian sus veces en todo el condado, ó *especiales*, porque las hacian tan sólo en algun distrito señalado. Muchas tierras, comprendidas ó no en las demarcaciones condales, y particularmente las cercanas á las fronteras, fueron dadas en beneficio á los *leudes* ó vasallos inmediatos á la corona (*vassi dominici*), en premio de sus servicios militares, y con la obligacion de seguir prestándolos en adelante. Estos vasallos, llamados despues en los Usages de Barcelona, *comitores* y *barones*, repartieron á su vez las mismas tierras entre sus clientes ó *fideles* y entre los indigenas, ya á censo ó ya en beneficio, y con las obligaciones inherentes á tales títulos de adquisicion. Así se formaron los vasallos de segundo grado, que las leyes llamaron despues *valvasores* (2).

Además de los francos y de los catalanes indigenas, participaron de aquellos repartimientos muchos españoles originarios de otras provincias, que anhelando sacudir el yugo musulman, y sabiendo que Cataluña habia vuelto á poder de cristianos, aunque extranjeros, abandonaron su pátria y buscaron otra nueva en aquella comarca, bajo el patrocinio de sus reyes, á los cuales pidieron tierras para su morada y sustento. Carlo-Magno y Ludovico Pio las otorgaron generosos, como que les interesaba mucho acrecentar la poblacion cristiana de sus nuevas provincias; Cárlos el Calvo confirmó más tarde estas mercedes; y los diplomas que de ellas se conservan, dan á conocer cumplidamente la organizacion primitiva de la propiedad territorial despues de la reconquista. Tales son un rescripto de Carlo-Magno, dos de Ludovico Pio y otro de Cárlos el Calvo, en los cuales se fijaron y determinaron, con no pocos pormenores, el estado civil y político, y los derechos y las obligaciones de los españoles de Cataluña, sobre todo, en lo concerniente á sus propiedades.

Acudieron á Carlo-Magno treinta y nueve de estos españoles en queja de varios condes, que por sí, ó por medio de sus ministros, se apoderaban de las tierras que ellos venian cultivando por merced de la corona, ó les exigian tributos por heredades que ellos habian formado, reduciendo á cultivo tierras estériles. El emperador cometió la averiguacion de los hechos que dieran lugar á estas reclamaciones, á su hijo Ludovico Pio y al arzobispo Juan, su delegado (*missus dominicus*), y oido su informe, expidió en 812 el primero de los rescriptos mencionados, dirigido á ocho de sus condes.

(1) *Marca hispánica*, lib. 3, c. 7.

(2) *Ibid.*, lib. 3, c. 8.

Por él prohibió á estos dignatarios ocupar ó gravar con censos ó tributos las heredades que los españoles habian reducido á cultivo; mandó que tanto éstos como sus descendientes y herederos, fueran siempre mantenidos en la quieta y pacífica posesion de las tierras que hubieran disfrutado durante treinta años, miéntras no faltaran á la fidelidad debida á la corona, y ordenó la restitucion á sus dueños de todas aquellas de que habian sido injustamente despojados (1).

Vése por este documento que los reyes francos dieron á los españoles las primeras tierras libres de todo tributo, ó sin más gravámen, al parecer, que el de la *fidelidad*, si bien ésta no consistia entónces solamente en abstenerse de todo lo que perjudicara al señor, sino que comprendia además servicios positivos, particularmente los militares. A la *fidelidad* estaban obligados los *fideles*, que eran, como ántes he dicho, los clientes y vasallos que estaban al servicio de sus patronos.

Infírese además del mismo documento, que en virtud de otros diversos títulos, y particularmente el de la ocupacion ó *presura*, poseian tambien los españoles otras muchas tierras, las cuales solian ser presa de la desatentada codicia de los magnates. Resulta, por último, que estas tierras fueron desde el principio hereditarias en las familias de sus poseedores primitivos.

Mas toda la autoridad de Carlo-Magno no bastó para librar aquellas propiedades de la usurpacion ó de injustas exacciones, puesto que á los dos años, en 814, tuvo que promulgar Ludovico Pio su primer rescripto, confirmando las libertades anteriormente declaradas, y prescribiendo ya en términos más precisos, las obligaciones y los derechos de los vasallos. En él ordenó que los españoles que voluntariamente se habian sometido al imperio y patrocinio de la corona, y los que despues lo hicieran, fuesen tratados como los hombres libres de su reino, esto es, como Francos ingénuos, y exentos de todo tributo y servicio, salvo el militar, cuando á él fueran llamados por sus condes, sirviendo en tal caso á sus expensas tres meses á lo más, cada año: que hicieran guardias ó velas en las marcas ó territorios fronterizos; y que dieran bagajes y verederos, mediante la debida retribucion, á los condes, ministros reales y legados naturales ó extranjeros que pasaran por sus tierras en servicio del rey. Determinadas estas obligaciones, declaraba en seguida el rescripto los derechos de los propietarios, autorizándoles para hacerse vasallos de los condes, cuando recibieran de ellos

(1) *Histoire du Languedoc*, t. 1, dipl. 16.

tierras en beneficio, mediante la promesa de prestar los servicios que otros hombres hacían á sus señores, y para dar á censo sus propias heredades á colonos del estado servil, los cuales quedarían en tal caso sujetos á su potestad, aunque con derecho á eximirse de ella, cuando devolviesen al señor todo lo que de él hubieran recibido (1).

Mas tampoco hubieron de bastar estas disposiciones terminantes para que los condes y los señores poderosos dejaran de abusar de su autoridad. Unos obtenían provisiones reales, autorizándoles para tomar á sus vasallos las tierras libres que habían puesto en cultivo, si no les pagaban por ellas pensiones y tributos no estipulados. Otros despojaban por autoridad propia á sus colonos, de las tierras tributarias, bien para retenerlas en su poder, ó bien para darlas á nuevos vasallos con mayor provecho, por cuanto las habían entregado yermas y estériles y ahora las recuperaban pobladas y fructíferas. Y como los vasallos se quejasen de tales excesos y usurpaciones, Ludovico Pio dictó en 816 su segundo rescripto, por el cual mandó que los poseedores de tierras, que las hubiesen cultivado con sus colonos, las conservaran como adquiridas por merced de la corona: que los demás españoles que hubiesen venido con ellos, y sus sucesores, poseyeran tranquilamente los lugares yermos que hubieran cultivado, siempre que sirvieran al rey, á las órdenes de los vasallos inmediatos de la corona, en los términos prevenidos en el anterior rescripto; y que los que en adelante se encomendaran á los condes ó á los mismos vasallos reales, recibiendo tierras de ellos, las poseyeran con las condiciones que libremente hubiesen estipulado (2).

Por último, Carlos el Calvo confirmó y completó estos ordenamientos, bien para restablecer su observancia, tal vez quebrantada por la fuerza de los poderosos, ó bien para cumplir con la costumbre de ratificar y renovar como nuevo señor de su reino, los beneficios y mercedes de sus antecesores que disfrutaban sus vasallos. Con este objeto publicó en 844 otro rescripto ofreciendo á los españoles constituidos bajo su patrocinio, la misma protección que les habían concedido los reyes sus antepasados, siempre que como los demás francos, acudieran á la guerra con sus condes, hicieran guardias y velas en las marcas ó territorios fronterizos y diesen aposento, bagajes y verederos á los legados régios. En el mismo documento declaró el monarca la responsabilidad

(1) *Marca hispan.*, lib. 3, c. 19.

(2) *España Sagr.*, t. 43, apénd. 2.

que contraían los que se sirvieran de tales verederos y no los devolviesen oportunamente á sus señores; confirmó la exención de censos y tributos que pretendían exigir algunos condes, mandando que no se tuvieran por tales, ni fueran obligatorias las cortas ofrendas que solían hacer á sus señores algunos vasallos: reconoció la facultad que tenían ya los poseedores de tierras, de darlas á colonos, que las cultivaran mediante censo ó servicio, y salvo su derecho para abandonarlas á su voluntad, eligiendo otro señor y renunciando á todo lo que hubieran recibido del primero: otorgó á los mismos españoles la facultad de apropiarse y cultivar las tierras yermas, haciendo por ellas al rey los servicios acostumbrados, así como la de disfrutar pastos, leñas y aguas en todo el Principado, conforme á la antigua costumbre; y les ratificó por último el derecho que tenían como los demás francos, de encomendarse á los condes en calidad de vasallos, pero con la condicion de que si recibían de ellos algun beneficio, les prestarían por él «los mismos obsequios y servicios que nuestros hombres (dice el rey) á los señores de quienes son vasallos» (1).

Infiérese por lo tanto de estos cuatro rescriptos que desde la dominación de los primeros reyes francos, quedó constituida en Cataluña la propiedad territorial del mismo modo que en Francia y que en los otros reinos de España. Había pues, tierras alodiales, repartidas por el rey á sus vasallos, libres de todo gravámen, salvo el servicio militar acostumbrado: tierras beneficiarias, procedentes de los mismos repartimientos ó de los vasallos inmediatos de la corona; y tierras tributarias ó serviles, dadas á colonos para su cultivo, con cargas pecuniarias y personales de distintas especies.

II.

DE LAS TIERRAS ALODIALES.

Eran generalmente alodiales las tierras dadas por Carlo-Magno y por Ludovico Pio, tanto á los francos que les ayudaron á la conquista, como á los españoles naturales de Cataluña ó emigrados de otras provincias, que se pusieron bajo su patrocinio. Los poseedores de estas tierras debían prestar ciertos servicios, pero su obligación no nacía aún directamente de ellas, sino del vasallaje que habían tenido que reconocer, para morar en aquel territorio y disfrutar la protección que dispensaba el rey á sus pro-

(1) *España Sagr.*, t. 29, apénd. 11.

pios vasallos. Porque si bien la concesion de tierras era ya frecuentemente condicion del contrato personal, en que el vasallo prometia ayudar al señor defendiendo y beneficiando sus lugares, y el señor, favorecer al vasallo, proporcionándole en ellos morada y sustento, era todavia esto último circunstancia accidental, que podia fácilmente sustituirse con cualquiera otro beneficio. Pero generalizándose la necesidad y la costumbre de dar tierras á los que se recibian por vasallos, y siendo constante la obligacion de estos, de prestar á sus señores servicios militares y aún civiles, vino con el tiempo á entenderse, como si fuera regla universal de derecho, que la prestacion de tales servicios era carga necesaria y directa de toda propiedad territorial.

Las escrituras del siglo ix y de los siguientes, hacen mencion de muchas concesiones de tierras libres, con la obligacion de prestar por ellas los concesionarios, servicios militares á los cedentes. Cárlos el Calvo en 843 concedió á su vasallo Sicfrido en plena y absoluta propiedad ciertas tierras, «con sus colonos de ámbos sexos, por el servicio que le prestaba» (1). Los condes de Barcelona acostumbraban garantir, ya á individuos determinados, ya á todos los vecinos de un pueblo, la posesion de sus tierras, mediante la obligacion que ellos contraian ó confirmaban, de servirles en la guerra. Así el conde Borrel en 986 confirmó en sus alodios á los vecinos de Cardona, encomendándolos al vizconde Ernesindo y sus sucesores, y mandándoles que «acudieran á su llamamiento y le siguieran á cualquiera parte que fuese» (2). El abad de San Félix, que debia de tener el dominio directo feudal del territorio de Gixols, con los derechos consiguientes, otorgó á sus vecinos la libre disposicion de sus propiedades, con exencion de ciertos tributos, obligándose ellos en cambio á tener preparadas sus armas para ir en hueste ó cabalgada, á las órdenes del mismo abad (3).

A veces el servicio prometido á cambio de la libre propiedad se limitaba á defender, en caso de invasion de enemigos, el lugar propio ó la comarca respectiva. Así D. Ramon, conde de Barcelona y D. Ermengaudó,

(1) ... «cum mancipiis suis utriusque sexus... ob devotionem servitii sui compendium...» *Marca hispánica*, apénd. 15.

(2) Villanueva, *Viaje literario á las iglesias de España*, t. 8.º apénd. 30.

El conde de Barcelona Berenguer concedió en 1025 á los propietarios de tierras libres, que le jurasen fidelidad y prestasen á los condes los auxilios acostumbrados, la tranquila posesion de sus heredades, con libertad de censos y tributos. (*Marca hispan.*, apénd. 198.)

(3) Ibid. apénd. 477.

que de él tenía el condado de Urgel, dieron en alodio franco y absoluta propiedad á los vecinos de Lérida, el territorio interior y exterior de la ciudad, eximiéndoles de salir á campaña, mas no sin que ellos prometieran ayudarles á conservar y defender la comarca (1).

Tambien habia diferencia entre las tierras alodiales, por razon de la mayor ó menor libertad del dominio que se ejercia sobre ellas. Cárlos el Calvo, en el rescripto de 814 citado anteriormente, facultó á los españoles para apropiarse las tierras incultas y les aseguró su propiedad, mientras que las labraran y prestasen á la corona los servicios acostumbrados. Este modo de adquirir, que en Castilla se llamaba *pressura*, denominábase en Cataluña *adprision*, y no era derecho comun de todos, sino privilegio de algunos vasallos. Asi el abad del monasterio Arulense se quejó en 852 al conde Borrel, de que los payeses del lugar intentaban hacer *adprisiones* en las tierras de su término (2). Los documentos de la época suelen tambien distinguir entre estas adquisiciones y las de diverso origen, contraponiendo las tierras adquiridas por donacion ó compra y cultivadas de antiguo, á las ocupadas y desmontadas por primera vez, y poseidas por solo este título (3).

El derecho de *adprision* se ejercia generalmente en las tierras de la respectiva comarca; pero algunos grandes vasallos disfrutaban el privilegio de adquirir alodios de este modo en todo el territorio sujeto á la corona. Asi el mismo conde Borrel autorizó al monasterio de San Saturnino para hacer *adprisiones* en todas partes y en cualesquiera lugares incultos y despoblados, cerca ó lejos, y llevar á ellos labradores que los habitaran y redujeran á cultivo (4).

Estas tierras de *adprision* se podian enajenar y se trasmitian por herencia, mas no hubieron de poseerse y comunicarse con tanta libertad como los alodios primitivos, cuando los dueños de ellas solian acudir á los principes para que les otorgaran el privilegio de tenerlas como alodios propios. Aunque exentas de todo censo ó tributo, y aunque su dominio era seguro

(1) *Marca*, apénd. 409.

(2) "Veniebant pagenses loci illius et volebant aprisionem facere in ipso ejus termino" (Ibid., apénd. 5).

(3) Ibid., apénd. 1, 22, 35 y 68.

(4) "Ut faciant perprisiones ubicumque voluerint vel potuerint, longe, lateque, per universa loca eremis solitudinis ædificent, et Ecclesias faciant munificentis in congruis locis, et adducant laboratores qui ipsas eremitas reducant ad culturam...." Ibid., apénd. 15.

á los treinta años de posesion, segun el rescripto de Cárlos el Calvo, no hubieron de ser enteramente libres estas propiedades, puesto que los condes, accediendo á aquellas pretensiones, solian mejorar su estado legal, equiparándolo al de las tierras adquiridas, no por ocupacion, sino por contrato ó herencia. La causa era, sin duda, que la corona conservaba sobre ellas una especie de dominio eminente, cuyas facultades no estaban quizá bien definidas, pero que no existia sobre los bienes de dominio propiamente alodial.

Así se infiere de los diplomas en que los reyes y los condes otorgaban á algunos de sus vasallos, en premio de sus servicios, el derecho de convertir en propiedades libres y francas ó alodiales, las que tenian solamente por *adprision*. El emperador Lotario en 834, concedió ciertas heredades en el Rosellon á los hermanos Rodon y Wimar, que el padre de ambos habia puesto en cultivo, declarando que se las daba en propiedad, para que pudieran dejarlas á sus sucesores y hacer lo que quisieran de ellas (*propietario jure possidere valeant... suisque hæredibus, hæreditario jure conferre*) (1). Cárlos el Calvo en 847, otorgó á su vasallo Alfonso y á Gomesindo y Duranno, nietos de éste, la propiedad de ciertas tierras, en el pago Narbonense, que el padre del primero y sus hijos habian tenido por *adprision*; y para significar el efecto de esta gracia, declaró en su escritura que «así como dichos ascendientes habian poseido tales tierras por *adprision*, así Alfonso y sus nietos las tuvieran en propiedad, para lo cual las transferia solemnemente del derecho de la corona, al derecho y propiedad de los donatarios, á fin de que pudieran desde aquel dia disponer de ellas á su voluntad» (2). Igual concesion y con parecidos términos hizo el mismo monarca á los godos Sumnoldo y Riculfo de ciertas propiedades que habian heredado de su padre y de su abuelo y que éste habia adquirido por *adprision*, dando despues en beneficio una parte de ellas á otros hombres (3).

III.

TIERRAS BENEFICIARIAS.

Eran tierras beneficiarias las que de los condes y otros señores, recibieron tambien los españoles, en virtud de la facultad que les otorgó Ludovico

(1) *Marca*, apénd. 7.

(2) "...ad proprium concedimus et de nostro jure in eorum jus ad proprietatem villarum, solemnī donatione transferimus." *Ibid.* apénd. 20.

(3) *Ibid.*, apénd. 25.

Pio, para recomendarse á aquellos y obtener sus beneficios. Debiendo poseerse estas tierras con sujecion á las leyes de los francos, segun el precepto de Cárlos el Calvo ántes referido, es evidente que sus poseedores debian prestar por ellas *fidelidad* y servicios militares, en la forma prescrita por las *capitulares* de los reyes de aquel pueblo. Los diplomas de los siglos ix y x hacen mencion, como el de los godos Sumnoldo y Riculfo, de tales beneficios. En una escritura de 1046, un obispo de Ausona llamado Guillermo, refiere que al casarse con su tia doña Ingilberga, habia recibido de ella la iglesia de San Quirico y otros alodios, tierras y censos que tenia en los condados de Vich, Barcelona, Gerona y Urgel; que despues, á ruego de la misma Ingilberga y en su presencia, habia recibido todos estos bienes de mano del conde Berenguer, para poseerlos como beneficio suyo; que muerto Berenguer, recibió los mismos bienes de mano del conde D. Ramon, su hijo; que habiendo fallecido Ingilberga los devolvió al dicho conde, para que los diera á la iglesia y monasterio de San Juan, como efectivamente lo hizo, entregándolos al obispo Guifredo, y recibiendo de éste en el mismo acto y para poseerla en su nombre, ó sea como beneficio suyo, la iglesia de San Pedro de Sora; que habiendo obtenido Guillermo el arcedianato de la iglesia de San Juan, se recomendó al obispo Guifredo, *haciéndose su hombre*, recibiendo en tal concepto de él la referida iglesia de San Quirico, con los demás bienes ántes expresados, los cuales volvió á poseer en nombre de dicho prelado, ó como beneficio suyo; y que nombrado, por último Guillermo obispo de Ausona, declaraba delante de testigos, tener aquellos bienes de mano del abad de San Juan, y prometia estar toda su vida con ellos á servicio del monasterio, á fin de que por su muerte, pasaran á éste integros y libremente (1).

No dice el documento relacionado cómo habia adquirido Ingilberga los bienes que dió á su sobrino Guillermo, aunque de los nombres de *alodios*, *tierras* y *censos* que usa, se infiere que procederian de títulos legales diferentes; pero ofrece un ejemplo notable de las vicisitudes de la propiedad en aquellos tiempos. Guillermo, no considerando segura la posesion de estos bienes, á pesar de ser alodiales algunos de ellos, los entregó al conde Berenguer, para recibirlos luego de él en beneficio, y ganar su proteccion. Este beneficio, muerto aquel príncipe, no pudo subsistir sin ser confirmado por su sucesor, como en efecto lo fué, segun la costumbre de la época. Siendo Guillermo único beneficiario, despues de la muerte de Ingilberga, quiso

(1) *España Sagr.* t. 28, apénd. 15.

donar sus bienes á la iglesia de San Juan, más no podia hacerlo directamente, porque los beneficios no eran de libre enajenacion, y por eso los devolvió al conde, para que éste á su vez, los transfiriera á dicha iglesia. El conde D. Ramon no estipuló gratuitamente este nuevo contrato, pues exigió del obispo, tambien á título de beneficio, la iglesia de San Pedro de Sora, viniendo á ser de este modo á la vez señor directo y beneficiario de la iglesia de San Juan. Guillermo entónces hubo de tomar las sagradas órdenes, y nombrado arcediano de esta iglesia, se *recomienda* á su obispo, se declara su vasallo y vuelve á recibir en beneficio los mismos bienes que ántes habian sido suyos, pero dejando tambien de ser vasallo inmediato de conde. Quizá no fué solo un sentimiento de devocion ó liberalidad el que movió á Guillermo á hacer este donativo, pues ciertas palabras de la escritura dan lugar á presumir que alguna parte de aquellos bienes habia tal vez pertenecido á la iglesia de San Juan y que por no ser muy justificados los títulos de Ingilberga, se creyó su sobrino en el deber de restituirlos en la forma simulada que á la sazón solian emplear los príncipes y magnates para devolver á las iglesias los bienes de que habian sido despojadas en los siglos ix y x. Tal era la que usó D. Ponce, conde de Gerona, el cual poseyendo un alodio usurpado en otro tiempo á la iglesia de Vich, se lo restituyó en 1062; pero recibéndolo otra vez de ella, juntamente con otro alodio, en feudo vitalicio, y prestando homenaje por ambos á la misma iglesia (1).

Los condados ó gobiernos de los varios distritos en que se dividia el Principado de Cataluña, á los cuales era inherente la facultad de percibir las rentas y emolumentos propios de la soberanía, fueron dados tambien á título de beneficio por Carlo-Magno y Ludovico Pio, experimentando así todas las vicisitudes de la propiedad beneficiaria. Como ella, fueron los condes al principio amovibles, siendo en efecto removidos y reemplazados varias veces, hasta que Cárlos el Calvo en 877, concedió por punto general la herencia de los beneficios. Entónces Wifredo hizo hereditario en su persona el condado de Barcelona, con los de Urgel, Besalú, Gerona y Cerdaña, que ó poseia ya tambien ó adquirió luego por conquista. Desde entónces fueron casi independientes de hecho los condes catalanes de los reyes de Francia, pues que estos no ejercieron despues más actos de soberanía de que haya quedado memoria, que algunas confirmaciones de inmunidades y privilegios de iglesias y monasterios. Aquella independencia no fué, sin embargo,

(1) *España Sagr.* t. 28, apénd. 149.

legalmente reconocida ni absoluta hasta que por la concordia de 1258, renunciaron el rey San Luis á sus derechos en los condados de Barcelona, Urgel, Gerona y Ampurias, y Jaime I á los suyos en Carcasona, Agde, Narbona y otras comarcas (1).

Eran tambien propiedades beneficiarias muchas de las que, dentro de los condados, poseian con el título de *dominicaturas*, los mismos condes, el monarca ú otros señores particulares. En ellas tenian estos, independientemente del gobierno y la jurisdiccion local, el derecho á todos los frutos de la tierra que por pacto ó costumbre, no correspondieran señaladamente á los colonos. Los condes y señores utilizaban sus *dominicaturas* dándolas en beneficio á sus vasallos inmediatos, ó á censo, á colonos de condicion inferior (2). Guillermo, conde de Besalú, dió en 1055 al obispo de Gerona «los tributos, el derecho de hospedaje y todo lo que justa ó injustamente poseia en su *dominicatura* de Baschara» (3). El conde D. Ramon Berenguer dió en dote á su mujer Almodís el condado de Gerona, con sus pertenencias y *dominicaturas*, y los castillos, *dominicaturas* y tierras que la condesa Ermesinda, su abuela, habia tenido en los condados de Vich y de Barcelona, excepto la *dominicatura* de San Baudilio (4). Asi lo que el conde D. Ramon se reservó en estos condados fué el gobierno con sus rentas y emolumentos, cediendo tan sólo las propiedades ó señoríos particulares (5).

Las tierras beneficiarias, que despues fueron feudales, llevaban consigo como carga real, el servicio de las armas, pues aunque éste obligaba tambien á los propietarios alodiales y en general á todos los súbditos del rey, tenia en estos últimos un carácter más personal y era más reducido. Cuando el soberano daba en beneficio ó feudo algun territorio, sus habitantes trocaban aquella obligacion general por otra especial de la misma índole, á favor del

(1) *Marca hisp.*, apénd. 83, 85, 91, 108, 129, 130, 101, 137, 504 y 523.

(2) Ducange, *Glossarium ad scriptores medice et infime latinitatis*. Verb. *Domini-catura*.

(3) *Marca hisp.*, apénd. 143.

(4) *Ibid.*, apénd. 145.

(5) La condesa Ermesinda vendió á su nieto D. Ramon Berenguer en 1056, los condados de Gerona, Barcelona y Vich, expresando que los enajenaba con las *dominicaturas condales* que existian en ellos. Los reyes D. Pedro I y D. Jaime I, en sus constituciones de paz y tregua de 1200 y 1225, hicieron expresa mencion de las *dominicaturas reales*, juntamente con las de los obispos y monasterios, poniendo á sus habitantes, con sus bienes, bajo la especial proteccion de las leyes penales contenidas en las mismas constituciones. (*Marca*, apénd. 145, 492, núm. 20, y 502, núm. 3.

beneficiario ó feudatario, la cual solia despues determinarse con más precision, sobre todo respecto á aquellos á quienes el nuevo señor otorgaba tierras en la misma comarca. Los vecinos de pueblos de realengo debian acudir al llamamiento del conde: los de pueblos infeudados, al llamamiento del señor; y aunque en los siglos ix y x no habia para unos ni para otros, leyes expresas que señalaran las condiciones de esta obligacion, fijáronse en el siglo xi, ya en las cartas de feudos particulares, ya en las *Costumbres generales* y en las *Pragmáticas reales* promulgadas por los principes.

Consérvanse numerosas cartas de feudos catalanes en que se fijaron las condiciones del servicio militar. D. Guillermo, obispo de Vich, dió en 1063 á los hermanos Bernardo, Riculfo y Miron los castillos, honores y feudos de Balsiarnego ó Balsarén, Goya ó Galiano, Cornet y Oristan cerca del Llobregat, obligándose los feudatarios á hacer al obispo todo el servicio que el vasallo debe al señor y entendiéndose que acudirian con 50 caballos á *huestes* y *cabalgadas* (1).

Cuando nada se habia estipulado acerca del número de hombres con que habia de acudir el vasallo, estabase á la costumbre de la tierra. Aimerico, vizconde Narbonense, al recibir en feudo de su hermano, el conde de Barcelona D. Ramon, ciertos castillos y tierras, le ofreció defenderle, especialmente contra el vizconde Biterrense, su mujer é hijos, guerreando contra todos, sin paga alguna (2). D. Pedro Ramon, vizconde de Castrobon, tenia del conde de Barcelona varios castillos y feudos del vizcondado de Cerdaña, con la condicion de hacer en su servicio huestes y cabalgadas con su persona y las de los caballeros de dicho vizcondado, y en caso de guerra, con el conde de Urgel, enviándole además su hijo y cinco caballeros proce-

(1) *España Sagr.* t. 28, pág. 149. Los juriscultos catalanes del siglo xiv no están conformes en el sentido histórico de estas palabras. Segun Montejudaico y Vallesica *hueste* ú *hoste* era la congregacion de gente de armas, que convocaba el rey por tiempo largo y para expediciones lejanas ó indeterminadas: *cabalgada* era la misma congregacion, però convocada por cualquier señor de vasallos, para un solo dia y una empresa y lugar ciertos. Calicio y otros juriscultos posteriores sostienen que *hueste* se llamaba la congregacion, por órden del rey, de todos sus naturales y vasallos sin distincion de grados, para cualquier empresa militar y cualquiera que fuese su duracion; y que *cabalgada* se decia aquella á que eran convocados ciertos hombres de armas por algun baron, señor de feudo ú oficial de la Corona, para una empresa determinada, como la toma de un castillo señalado, una ejecucion de justicia ú otra cosa semejante: (*Antiquiores Barchinonensium leges, quas vulgus Usaticos appellat, cum commentariis Jacobi a Montejudaico, Jacobi et Guillelmi Vallesici et Jacobi Calicii, Barcelona, 1544, fols. 16, 95 y 96.*)

(2) *Marca hisp.*, apénd. 329.

dentes de otros feudos, sin más limitacion de tiempo que la del que durase la campaña (1). Otro vizconde de Castrobon, llamado Arnaldo, recibió en 1185 del conde de Urgel, Ermegaud, los castillos y honores de Caboced, sin más obligacion que la de ayudarle con aquel servicio que prestaban desde antiguo los *comitores* del lugar (2).

IV.

TIERRAS TRIBUTARIAS.

Llamábanse tierras tributarias, serviles ó censales aquellas cuyos poseedores eran siervos de la gleba ó traian de ellos origen, pagaban censos generalmente en especie, de cantidad fija ó variable, á voluntad del señor y prestaban además servicios personales de calidad humilde. No merece apenas el nombre de propiedad la parte que en el dominio de tales tierras, tenian estos desdichados vasallos: era más bien un usufructo reducido, gravado con las cargas más onerosas y sujeto á innumerables eventualidades de disminucion ó de completa pérdida. Los miserables colonos de estas tierras, conocidos en Cataluña con el nombre de vasallos de *remensa*, debian hacer cuanto les mandara el señor directo de ellas, y así estaban á su servicio tanto en guerra como en paz, trabajaban en la reparacion de las murallas y fortalezas, y en la de los caminos públicos, servian de verederos y de acénilas y prestaban otras obras llamadas *malos usos*, de que habré de tratar más adelante, y cuya abolicion definitiva á fines del siglo xv, costó tanta sangre á señores y vasallos.

Las obligaciones que llevaba consigo el disfrute de estas tierras, no se hallaban por lo general consignadas en ningun documento: conservábanse las más por tradicion y costumbre: solamente algunas, que eran comunes á todos los vasallos de esta clase, fueron reducidas á escritura, al redactarse los *Usajes* y las *Costumbres*. Así es que los diplomas de los siglos x y xi no suelen hacer mencion de tales tierras, sino para referir cómo los señores y príncipes las libraban de censos y gabelas en todo ó en parte, elevando su condicion á la de alodios ó feudos. Vivan, obispo de Barcelona, concedió en 974, carta de libertad á sus colonos de Monte Macelo, eximiéndoles para siempre de toda servidumbre y de censos y gabelas, excepto el diezmo y la

(1) *Marca*, apénd. 385.

(2) *Ibid.* apénd. 481.

primicia, y facultándoles para enajenar entre sí sus casas y heredades (1). A merced semejantes debieron su libertad otras muchas tierras, cuyos colonos no gemían ya en servidumbre, cuando el rey D. Fernando II de Aragón abolió los malos usos.

CAPÍTULO II.

Estado de la propiedad territorial bajo la dominacion de los condes soberanos de Barcelona.

I.

SERVICIO MILITAR Y OTRAS CARGAS DE LOS PROPIETARIOS.

Con la publicacion de los *Usajes*, verificada á mediados del siglo XI, la reduccion á escritura de las antiguas costumbres, y las Constituciones reales promulgadas con el concurso de las Córtes, se fijó un tanto el estado del derecho, que los documentos y noticias anteriores presentan en el de irregularidad y confusion más lamentable, y se deslindaron y determinaron mejor las diferentes clases de propiedad nacidas de la conquista, regularizándose y generalizándose las cargas, obligaciones y derechos inherentes á ellas. Organizado completamente en el mismo siglo XI el régimen feudal, desaparecían unos tras otros los alodios, al paso que se aumentaban las propiedades feudales y las tributarias. Hubo de contribuir mucho á esta mudanza, no sólo la necesidad de *recomendarse* á señores poderosos, que sentían los propietarios, para ampararse contra la usurpacion y la fuerza, lo cual sucedía en todas partes, sino también una regla de derecho especial, no promulgada expresamente por ningún legislador, pero introducida y autorizada por la costumbre y acatada por el pueblo. Así como en otras naciones y en otros reinos de España, en tiempos más modernos, la presuncion legal en caso de duda, era favorable á la libertad del dominio, así en Cataluña todas las tierras que poseían los vasallos, dentro del término de cualquier castillo ó feudo, se consideraban propias del señor de éste, en

(1) «Non alium censum persolvant nisi solas decimas et primitias quas Deo reddituri sunt... non parafreda, non asinos in onera, non mansionaticos, non porcos, non verberices, non agnos, nec pernas... Sed tam isti habitatores... quam filii filiorum ipsorum usque in eternum sine ullo jugo servitutis, permaneant sub protectione atque defensione nostra.» (Marca, apénd. 118.)

cuanto al dominio directo, y por consiguiente feudales ó censales, á ménos que sus poseedores inmediatos probasen que las disfrutaban como alodios, mas sin que para esta justificacion les sirviera de título, la prescripcion del más largo tiempo. Tal fué la autorizada declaracion de Pedro Albert en su *Compilacion de las costumbres generales*, que hacen parte de las *Constituciones y derechos de Cataluña* (1). Esta costumbre, en un tiempo en que tan poco uso se hacia de la escritura para la celebracion de los contratos, y en que una nobleza prepotente avasallaba y oprimia á su placer á los villanos y payeses, basta para explicar el predominio de la propiedad feudal en aquel antiguo reino.

Reducido el número de los propietarios alodiales, subsistió y aún se estrechó la obligacion, que no por razon de sus tierras, sino por la de súbditos naturales del príncipe, tenian de servir en la guerra todos los hombres libres. Era ley general consignada en un usaje (2), que cuando el rey ó el Conde soberano ponía cerco al enemigo ó era por él asediado, ó necesitaba defenderse contra otro príncipe que amenazara invadir su tierra, podia convocar á todos los hombres de ella, así caballeros como peones, hábiles para salir á campaña. Los que no acudian á este llamamiento perdian cuanto tuviesen de mano del rey ó conde, y si nada poseian de él, debían pagarle una multa y prestarle juramento de homenaje. Esta obligacion, aunque general para todos, era limitada á casos y tiempo determinados. El rey no podia exigir su cumplimiento sino en las grandes necesidades del Estado y para su propia é interior defensa, pues si se trataba de invadir otros reinos ó de una guerra ofensiva, ya no estaban obligados á seguirle los que de él no habian recibido tierras ni feudos, ni eran sus inmediatos vasallos. Así el rey D. Fernando II de Aragon, confirmando y explicando el usaje referido, declaró en 1471, que esta obligacion general de servir en los ejércitos reales sólo era exigible cuando hubiese guerra dentro de Cataluña y mientras durase, ó en tanto que estuvieran abiertas las Córtes y dos meses despues á lo más (3).

Era tambien común á todos los propietarios alodiales ó feudales de masías, heredades ó fortalezas situadas en el término jurisdiccional de algun castillo, la obligacion de defenderlo, trabajar en las obras que para ello fuesen necesarias y hacer guardias y velas en tiempo de guerra. Si en estas

(1) *Constitutions de Cathalunya*, lib. 4, tit. 27, Const. 13.

(2) *Ibid.*, lib. 10, tit. 1, usage 3.º

(3) *Ibid.*, lib. 10, tit. 1, Const. 7.

circunstancias sospechaba el señor del castillo de la fidelidad de alguno de aquellos moradores, podía ocupar sus casas y heredades, manteniéndolas secuestradas hasta que se hiciera la paz ó cesase el peligro de su posesion por el vecino sospechoso (1).

Los vasallos servian generalmente en la guerra á sus propias expensas; mas esta regla tenia varias excepciones, favorables algunas á los propietarios libres. Los vecinos ricos militaban á su propia costa, con el rey, cuando la hueste era general y mientras que no salian de Cataluña: los pobres en todo caso, debian ser mantenidos y pagados por el monarca. Esta era costumbre recibida, segun los jurisconsultos catalanes, por más que no hubiese ley escrita que la autorizara (2). Los barones y caballeros disfrutaban el mismo derecho, juntamente con el de ser indemnizados de las pérdidas que sufrieran en el servicio, fuesen ó no feudatarios de la corona (3).

Fuera del servicio militar limitado en la forma dicha, ninguna otra obligacion general tenian los propietarios alodiales, como no se cuenten como tal las gabelas especiales, que eran consecuencia de vivir en lugares de particular señorío. A este número correspondia la obligacion en que estaban los que no eran caballeros, de contribuir al señor del lugar con la tercera parte de las indemnizaciones pecuniarias que devengaban por razon de los delitos que se cometian contra ellos. Este tributo era como recompensa de la proteccion que el señor dispensaba á todos los habitantes de su territorio jurisdiccional, aunque no fuesen sus inmediatos vasallos.

Tambien pesaban sobre los propietarios libres las consecuencias de ciertos privilegios feudales, que disfrutaban los señores. El exclusivo de caza y pesca, que gozaban la mayor parte de los barones en sus territorios respectivos, y el monopolio de hornos y molinos, que muchos tambien tenían, gravaban del mismo modo á los feudatarios y colonos, que á los propietarios libres, puesto que ni unos ni otros podian cazar, pescar, moler su trigo ni cocer su pan, sin obtener licencia del señor, mediante el tributo correspondiente (4).

Las propiedades feudales se multiplicaron en poco tiempo, mas no sin que hubiese entre ellas graves diferencias, por razon del servicio á que quedaban obligados sus poseedores. El militar era tan inherente al feudo, que

(1) *Const. de Cathal.*, lib. 4, tít. 27, Const. 16.

(2) Peguera, *Repetitio in cap. Item ne super laudemio*, vers. 8, núm. 22.

(3) *Const. de Cathal.*, lib. 10, tít. 1, usaje *Alium namque*, y Const. 1.ª

(4) *Cancer. Var. Resolut.* Pár. 2.º, c. 2, núms. 83 y 84.

ninguno dejaba de prestarlo; pero su extension y condiciones variaban en extremo. Todos los antiguos jurisconsultos catalanes convenian en que la simple concesion feudal de una propiedad convertia al concesionario en vasallo del cedente y le obligaba á servirle por su persona en la guerra, aunque nada hubiese ofrecido ni estipuiado. Este servicio debía prestarse en la forma que prescribiera la costumbre del lugar, y no habiéndola establecida, segun fuera la cuantía del feudo (1). Pero como esta indeterminacion tuviese graves inconvenientes, otorgábanse y redactábanse tambien cartas de feudo en que se enumeraban y describian los servicios que habian de prestar los feudatarios, expresándose el número de caballeros y de peones con que habian de contribuir en tiempo de guerra. El rey D. Pedro II ordenó en 1285, que estos servicios se estipularan con igualdad en todos los feudos que hasta entonces no los tuvieran señalados en sus respectivas cartas (2).

Ofreciase el servicio militar unas veces contra cualquiera enemigo del señor, sin excepcion alguna, y otras contra todos los enemigos en general, pero con excepciones determinadas. Esta diferencia solia tambien depender de la calidad del vasallo promitente. Si éste era de los llamados en Cataluña *soliu* (equivalentes á los *ligios* del derecho feudal comun, por cuanto habian sometido principalmente sus personas y además todos sus bienes, aún los no feudales), no podia tener más que un señor, al cual debia servir contra todos sus enemigos, excepto el rey, y aún contra el rey, cuando mediara agravio sin derecho, como el despojo de alodios ó feudos (3). Si el vasallo era de los llamados *non soliu* (los cuales prestaban homenaje únicamente por los bienes de sus feudos, y sólo con las obligaciones inherentes á ellos), ó si se habia reservado expresamente el derecho de no hacer la guerra á personas señaladas, podia tener tantos señores cuantos fueran sus feudos y excusarse de servir á unos contra otros, si lo habia estipulado así, y á todos contra aquellos que estuviesen comprendidos en la reserva (4). Estos vasa-

(1) Peguera, *Repet. in cap. Ne super laudemio*, vers. 8, núms. 66 y 67.

La proporcion que debiera guardar la cuantía del servicio con la del feudo era en Cataluña objeto de muchas y muy graves cuestiones. Calicio asegura, sin embargo, fundándose en sentencias de los tribunales, que por cada ochenta cuarteras de trigo que produjera el feudo, debia el vasallo poner en campaña una bestia con sus arreos correspondientes (*Antiq. Barchinon. leges cum comment...* Jac. Calicii. In usat. *Qui solidus est.* p. 104, edic. de Barcel. 1544.)

(2) *Const. de Cathal.*, lib. 4, tit. 27, Const. 2.

(3) Peguera, obr. cit. vers. 8, núm. 104. *Const. de Cathal.*, lib. IV, t. 27, usag. *Qui solidus*, y const. 38 y 43.

(4) *Const. de Cath.*, lib. 4, t. 27, Const. 43.

llos, cuando sus diversos señores estaban en guerra, debían ayudar personalmente á aquel á quien primero hubieran prestado homenaje, y por sustituto, á todos los demás (1). Igualmente se consideraban exentos todos los vasallos de servir contra el rey, aunque con la limitación expresada, contra el Papa, la patria, los ascendientes y descendientes y el patrono propio (2).

Los feudatarios debían servir al señor en cualesquiera guerras interiores, pero no todos los señores tenían facultad para llevarlos á tierras lejanas. A esta clase pertenecían las ocupadas por los sarracenos. A ellas podían exigir les acompañasen sus vasallos, solamente aquellos señores, que como rajes ó príncipes, tenían por costumbre inmemorial de sus antepasados, el derecho de declarar la guerra á los infieles, pero no los otros señores feudales que no habían heredado semejante facultad. Pedro Albert da testimonio de esta costumbre en el Código catalán (3), deduciéndose de sus palabras que solamente los señores que eran soberanos independientes, podían declarar la guerra á los moros.

Mas dentro del Principado por lo ménos, debía el vasallo servir á su señor tanto en las guerras generales, á que éste debía acudir, sin tiempo ni lugar señalados, como en las parciales y privadas que hiciera en su propio nombre y por su cuenta, ó en cualquiera otra empresa de fuerza. Los que faltaban á tales llamamientos, incurrian en la pena de prestar doble servicio é indemnizar al señor de los perjuicios y daños originados por su ausencia (4). El vasallo que dejaba á su señor vivo en la batalla, pudiendo todavía ayudarle, perdía todo cuanto de él tuviese (5). Era doctrina recibida, segun Pedro Albert, que el vasallo debía preferir la vida del señor á la suya propia, y así cuando el señor era acusado de algun delito, del cual necesitara purgarse por el duelo, podía obligar al vasallo á batirse por él (6). En cambio debían los señores indemnizar á los barones y á los caballeros de las pérdidas que sufrieran en su servicio (7) y dar alguna ayuda de costa á los demás vasallos inferiores, proporcionada á la cuantía de los feudos que de ellos tuvieran (8).

(1) *Cost.* 32. *Const.* t. 27, lib. 4.º

(2) Peguera, obr. cit. vers. 8, núms. 105 y sig.

(3) *Const.* lib. 4, t. 27, cost. 37.

(4) *Usag. Qui fallierit*, *Const.* lib. 4, t. 27.

(5) *Usag. Qui seniore*, *ibid.*

(6) *Costum.* 43, *ibid.*

(7) *Usag. Qui fallierit*, *ibid.*

(8) Peguera. *Obr. cit.* vers. 8, núm. 72.

Además del servicio militar, tenían los feudatarios otras obligaciones, unas prescritas por las leyes y costumbres generales, y otras voluntariamente estipuladas. Entre las primeras, se contaban en Cataluña, así como en Castilla, la de alimentar al señor cuando venia á extrema pobreza (1): darle entrada y hospedaje en el castillo ó la heredad feudal (2): no intentar contra él ninguna accion judicial infamante, ni apelar en juicio sin su venia (3), y pagarle señalados tributos, el de bodas entre otros (4).

Tampoco podia el vasallo dejar de serlo á su albedrío, por más que renunciara el feudo, origen de su condicion. Aunque el hijo de caballero no se estimaba vasallo del señor de su padre, miéntras que éste viviese (5) y aun podia no llegar á serlo despues, absteniéndose de aceptar su herencia, si la aceptaba, quedaba obligado á rendir homenaje al señor del feudo, que de ella hiciera parte y no le era lícito renunciar á su posesion, sino por motivos muy calificados (6). Era, pues, más dura en este punto la condicion de los feudatarios catalanes que la de los de otros paises sujetos al derecho feudal comun, pues éste permitia renunciar libremente los feudos que no estaban gravados con un servicio cierto, siempre que esto no se hiciese en tiempo de guerra ó en perjuicio de parientes á quienes correspondiera la sucesion (7).

II.

CARGAS DE LAS TIERRAS TRIBUTARIAS.

Estas tierras, poseidas en su mayor parte por los antiguos siervos y colonos, llamados despues campesinos ó payeses, hombres todos de humilísimo estado, daban origen á obligaciones mucho más gravosas que las de los meros feudatarios. Es de presumir que al principio no se prestase homenaje por las tierras de esta clase, pues que semejante acto suponía cierta libertad en el compromiso del vasallaje, impropia de hombres sujetos forzosamente á la gleba, de generacion en generacion. Aunque la posesion de tierras tributarias fuera el fundamento de este género de servidumbre, no sólo los cabezas de familia poseedores de ellas, sino tambien sus hijos y

(1) Costum. 43, Const. lib. 4, t. 27.

(2) Usag. *Si quis contradixerit*, ibid.

(3) Costum. 43, ibid.

(4) Vilaplana, *De brachio militari*, cap. 4, núm. 59.

(5) Costum. 35. Const., lib. IV, t. 27.

(6) Costum. 7 y 42, ibid.

(7) Peguera, *Obr. cit.* núm. 51.

descendientes solian á veces estimarse vasallos, por el mero hecho del nacimiento; y en efecto, nada era menester que estipularan ni prometieran ellos, si las leyes y las costumbres ofrecian en su nombre todo lo que al señor conviniese. Trasmitiéndose estas tierras sin homenaje, faltábales la condicion más esencial de los feudos, pero no dejaban por eso de llevar consigo las mismas obligaciones feudales y otras mucho más onerosas. Verdad es que se llamaban igualmente vasallos los poseedores de feudos y los de tierras censales, mas aquellos se *hucian* y éstos *nacian*: los unos eran hidalgos, los otros plebeyos: los primeros eran hasta cierto punto hombres libres, los segundos casi siervos.

Los poseedores de estas tierras eran por lo general vasallos *solin*, los cuales no podian tener más que un señor, segun ántes he dicho, ni poseer nada libremente por sí, en su nombre propio. En todo el territorio del antiguo obispado de Gerona, en la mitad del de Barcelona, allende el Llobregat y en la mayor parte del de Vich, los hijos de los vasallos payeses eran desde su nacimiento vasallos del señor del padre; y sólo se libraban de serlo viviendo un año y un dia sin contradiccion del señor, en lugar realengo ó de señorío ajeno. En el resto del Principado los hijos de tales vasallos no quedaban sujetos al señorío del padre hasta que sucedian á éste por muerte. Si tal era la regla de los feudos de payeses adquiridos y conservados por homenaje, con cuanta más razon no lo seria en las tierras tributarias, á que estaban adscritas determinadas familias.

Mejorándose despues, aunque lentamente, la condicion de estos vasallos, hubo de equipararse en cierto modo á la de los meros feudatarios, en cuanto á la obligacion del homenaje, mas entonces se introdujo otra diferencia entre ellos, nacida probablemente del origen diverso de sus propiedades. Todos podian abandonar sus solares y al señor, devolviéndole los bienes inmuebles que poseian ó vendiéndolos á otro vasallo del mismo; pero unos necesitaban además redimir su persona, ó sea comprar su libertad por precio alzado, y otros estaban exentos de esta obligacion. Los primeros, descendientes de los antiguos siervos, eran los que se llamaban vasallos de *re-mensa*, ó redencion. Los reyes procuraron desde época muy remota librarlos de tan dura servidumbre, pero respetando al mismo tiempo el derecho de los señores. D. Pedro II ordenó en 1283 que los vasallos que acostumbraban redimirse, no pasaran, sin hacerlo previamente, á vivir en lugares de la corona: que los que moraban ya en ellos, se redimiesen; y que los demás vasallos no sujetos á tal costumbre, pudieran á su arbitrio cambiar de domicilio, devolviendo al señor ó enajenando con su permiso, las here-

dades que de él tuviesen (1). Los jurisconsultos de la época y aún los posteriores del siglo xv, consideraban justificada la redencion, porque estimaban tales vasallos como verdaderos colonos adscritos á la gleba. Así subsistió tanto de derecho como en la práctica, esta degradante costumbre, hasta que en 1486, D. Fernando el Católico permitió á todos los vasallos abandonar las tierras señoriales y llevarse sus bienes muebles, pagando ántes á sus señores lo que les debieran, y confirmó á éstos el derecho de ocupar los solares abandonados y disponer de ellos á su arbitrio, pasados tres meses desde el abandono (2).

También se equiparaban los vasallos colonos á los feudatarios, en cuanto á la obligacion de prestar á los señores el servicio de armas. Como vasallos *solii* que eran, debían seguir solo á su señor y defenderle contra todos sus enemigos, sin excepcion alguna. Las leyes escritas no determinaban la forma y condiciones de este servicio, pero cada vasallo prestaba el que por costumbre probada de treinta ó cuarenta años, estaba en uso en su respectiva jurisdiccion. La más general era que el vasallo acudiese á huestes y cabalgadas por su propia persona, con su caballo, arneses y armas, y manteniéndose, si podia, á su costa (3).

Pero no era el servicio militar la carga más pesada de la propiedad tributaria. Los vasallos que la poseían estaban además sujetos á los malos usos, los cuales correspondian tan exactamente á su denominacion, que nunca los estableció peores la tiranía feudal en los países más dominados por este régimen. En virtud de ellos, además de la redencion y de otros gravámenes de que trataré despues, sufría el vasallo el de no poderse casar sin licencia del señor, y si era viudo ó viuda, mujer no virgen ó doncella heredera de bienes raices, costábale alcanzarla la tercera parte de su hacienda ó una fuerte suma, y si doncella no heredera, otra cantidad menor (4). La mujer adúltera perdía sus bienes propios: pero el señor ganaba la mitad y aún el todo, cuando el marido había tolerado el adulterio (5). Otro de los malos usos obligaba á las mujeres de tales vasallos á servir de nodrizas á los hijos del señor

(1) Const. 1.^a, lib. 4, t. 29.

(2) Const. 2.^a, lib. 4, t. 29.

(3) Calicio. *Antiq. Barchinon. leges*, "In usat. Qui solidus est."

(4) *Usantie et Consuetudines civitatis Gerundensis*, Rub. 2.^a De statu hominum y Rub. 32, De redemptionibus hominum et mulierum, c. 1 et 2, citados por Pujades. *Chronica de Cathalunya*, lib. 6, cap. 152.

(5) Usag, *Similiter et de rebus*, y *Si autem mulieres*, Const. lib. 4, t. 29.

Este mal uso se llamaba *cugucia*.

cuando á ello eran requeridas (1). Pero el más repugnante de todos estos derechos, el más infame, el más inverosímil, aunque no el ménos comprobado, era el que se llamaba *firma de spoli forzada*. En su virtud podia el señor, como precio de la licencia necesaria para el matrimonio de su vasallo, yacer con la desposada ántes que su marido, ó si renunciaba á este derecho, pasar sobre el lecho conyugal, en testimonio de su señorío (2).

Eran además innumerables las exacciones á que estaban sujetos estos desdichados vasallos. El que moria, siendo cabeza de familia, no era enterrado hasta que se llevaba al señor la mejor manta de su casa. Si el señor decidia comerciar en algun artículo de general consumo, como vino, trigo, cebada ú otro, empezaba por evitar toda competencia y asegurar su ganancia, prohibiendo la venta al pormenor de las mismas especies (3). Pagaban además estos vasallos innumerables tributos y gabelas, los más de origen servil, que en unos lugares eran conocidos con los nombres extravagantes de *huevos de mochuelo*, *pollos de azor*, ó *pan de perro*, y en otros se llamaban *pierna de carne salada*, *calabaza de vino*, *haz de paja*, *aro de tonel* y otras denominaciones no ménos extrañas. Y como si aún tantas exacciones no oprimieran bastante á los vasallos, todavía estaban estos obligados á pagar á sus señores, como impuestos territoriales de sus heredades, diezmos, primicias, censos, *tascas*, *quintos*, *cuartos* ú otros derechos (4) que representaban ó pretendian representar la participacion que los señores primitivos se habian reservado en los productos de las tierras repartidas entre colonos.

Esta desdichada condicion de vasallaje fué haciéndose más insoportable á medida que con el trascurso del tiempo, los vasallos fueron olvidando su origen servil, reconociendo sus fuerzas colectivas y sus derechos naturales y aprendiendo en el ejemplo de sus hermanos de otras tierras, el modo de sacudir el yugo de la servidumbre. No dice la historia cómo empezaron á procurar su independencia. Indicios hay de que intentaron conseguirla por la fuerza ántes del siglo xv, aunque con mala fortuna. Lo que se sabe de

(1) Pujades (*Cron.* lib. 6. c: 152) llama *arcia* este derecho. Solsona opina que se daba este nombre á la multa que pagaba el vasallo, cuando por su culpa, se quemaba la masía; pero parece más justificada la otra opinion. (Sentencia arbitral de D. Fernando II. Const. vol. II, lib. 4, t. 13, n. 9.)

(2) Hé aquí las palabras relativas á este punto en la sentencia arbitral del rey don Fernando, inserta en tit. 13, lib. 8.º, vol. II de las Constituciones: "Ni tampoc (los señores) pegan la primera nit que lo pages pren muller, dormir ab ella ó en senyal de senyoria, la nit de las bodas, apres que la muller sera colgada en lo lit, passar sobre aquel sobre la dita muller."

(3) Sentencia arbitral citada.

(4) Ibid.

cierto es que á mediados de aquel siglo se levantaron contra sus señores, y unas veces apoyados por los partidos, que á la sazón hacían armas contra el rey, y otras alentados por éste y sus parciales, lograron al fin su propósito, aunque no sin turbaciones profundas, largas guerras y mucho derramamiento de sangre.

Tuvo principio aquella reñidísima contienda acudiendo los vasallos de remensa al rey D. Alfonso IV, cuando se hallaba en Nápoles, en solicitud de que les eximiese de doce gravámenes llamados *malos usos*, que en su concepto, pesaban injustamente sobre ellos. El rey emplazó á los señores para que fueran ante él á defenderse, y como no comparecieran, alegando el privilegio que disfrutaban, de no ser citados á juicio, ni llamados á la corte, fuera de la tierra, D. Alfonso sentenció la causa en rebeldía, suspendiendo la exacción de los doce gravámenes ó *malos usos* reclamados. Pero la reina doña María, que como gobernadora á la sazón del Principado, debía ejecutar esta sentencia, no la llevó á efecto, sino en cuanto á seis de los gravámenes abolidos, dejando subsistentes los otros. Así quedaron ambas partes agraviadas: los señores porque estimaban nula la sentencia condenatoria; los vasallos porque se les denegaba arbitrariamente su cabal cumplimiento, al cual se consideraban con perfecto derecho.

Tal hubo de ser el origen de los últimos levantamientos de los payeses de remensa contra sus señores, á cuyo éxito final, después de una encarnizada lucha, hubieron de contribuir, sin embargo, otros sucesos contemporáneos, ajenos hasta cierto punto á ellos. Coincidió con aquella desastrosa guerra de clases, la terrible sublevación de nobles y burgueses catalanes contra el rey D. Juan II de Aragón y á favor de su hijo D. Carlos, príncipe de Viana, el cual como primogénito fué proclamado, contra la voluntad de su padre, sucesor á la corona, y en tal concepto, gobernador general del Principado, según la antigua costumbre. Los vasallos ya levantados, ofrecieron sus servicios al príncipe, acogiendo su causa con entusiasmo, porque esperaban de él su libertad é independencia; mas como los parciales de D. Carlos eran, juntamente con otros muchos, los mismos barones y caballeros contra quienes peleaban los de remensa, no hubieron éstos de lograr su propósito, ya porque el príncipe no llegara á prometérselo, ó ya porque prometido no se lo cumpliese, limitándose á ordenar la ejecución de la sentencia de Nápoles, con las restricciones establecidas por la reina doña María. Entonces la reina doña Juana, mujer de D. Juan II, que organizaba en Cataluña la resistencia contra los partidarios de D. Carlos, entró en tratos con los payeses y los atrajo á su causa, mandando suspender la exacción de los

seis malos usos que habian quedado subsistentes y prometiéndoles negociar con los señores su abolicion definitiva. Con el auxilio de estos vasallos continuó, pues, el monarca aquella terrible guerra; y así como antes no habia bastado para hacerla cesar la muerte del príncipe rebelde, cuyos parciales lejos de abatirse con este rudo golpe, cobraron al parecer mayor atrevimiento, así tampoco lograron aplacarla las negociaciones y condescendencias de la reina, llegando los insurgentes hasta el extremo de destronar á D. Juan y de proscribir su dinastía, buscando nuevo soberano en extrañas tierras. Pero los de remensa á su vez, pelearon tambien entónces con más esfuerzo, y con su auxilio logró al fin el anciano monarca reconquistar palmo á palmo la mayor parte del territorio dominado hasta entónces por sus enemigos.

Mas á D. Juan sorprendió la muerte ántes de premiar estos servicios, con las libertades prometidas á sus vasallos. Su hijo y sucesor D. Fernando el Católico tampoco pudo desde luego hacerlo: ántes al contrario, tuvo que ceder á las instancias de los caballeros, que en las Córtes de Barcelona de 1481, le obligaron con la negativa del subsidio, á revocar, como árbitro nombrado por ellos, la sentencia de D. Alfonso IV. Mas como el rey hubiese accedido mal su grado á esta revocacion, y los malos usos no se satisficiesen de hecho á pesar de ella, trató de influir en el ánimo de los barones, á fin de que voluntariamente vibiesen á concordia con sus vasallos. Los barones se negaron á todo avenimiento, y entónces el monarca, para apremiarles, tomó bajo su proteccion á los de remensa, dándoles salvaguardia que les eximia de ser maltratados por sus señores, y aun determinó armarlos caballeros, á fin de que levantados á esta honrosa condicion, mediante el pago de una certa suma, que ya en tiempo de D. Alfonso IV habian ofrecido por su rescate, quedaran exentos por el mismo hecho, de toda servidumbre. Pero los señores resistieron, como era de suponer, esta providencia, los payeses cobraron con ella nuevo aliento, y así volvieron á romper ambas partes encarnizada guerra, con estragos horribles y muertes sin cuento, lo mismo en los campos y en las aldeas humildes, que en las ciudades y en los nobles castillos. Empeñada de nuevo la guerra duró con varios sucesos y terribles accidentes, hasta que en 1486, cansados y estenuados de fuerza los beligerantes, comprometieron sus diferencias en el rey D. Fernando, para que las decidiera como árbitro y como soberano. En su virtud dictó éste la sentencia que puso término á tan grandes turbaciones y excesos, declarando en ella que aunque los malos usos se fundaban en costumbres y leyes, se prestaban á grandes abusos y maldades, que no podian tole-

rarse sin pecado (1); derogó por completo la redencion personal (*remensa*), la sucesion *ab intestato* de los vasallos atribuida al señor (*intestia*); la participacion de éste en la dote confiscada por causa de adulterio (*cugucia*); la sucesion forzosa de los vasallos que morian sin descendientes, atribuida tambien al señor (*xorquia*) (2); el servicio de nodrizas que debian prestar las vasallas (*arcia*), y la infame prestacion de la primera noche de boda, segun ántes fué descrita (*firma de spoli forzada*), con los demás tributos y servidumbres dependientes de los malos usos ó relacionados con ellos. Para resarcir en lo posible los perjuicios y menoscabos de los señores, mandó además el rey que por cada uno de dichos malos usos, pagase cada vasallo sujeto á ellos, sesenta sueldos ó un censo sobre las respectivas heredades, equivalente al 5 por 100 de este capital, redimible al mismo tipo, facultando á los que ya habian convenido particularmente en conmutar aquellas servidumbres por rentas perpétuas, para redimirlas en iguales términos. Prohibió á los señores maltratar á sus vasallos, declarando que si alguno lo hiciese, seria responsable civil y criminalmente ante las justicias reales, aunque sin entenderse por eso menoscabada la jurisdiccion señorial en aquellos que la tuvieran. Prescribió á los vasallos el juramento de fidelidad y homenaje á sus señores, siempre que fueran requeridos á reconocer que tenian de ellos sus casas, masías y heredades, aunque sin quedar obligados por este acto, á pagar tributo, ni á prestar servicios, ni á contribuir con préstamos extraordinarios ni donativos forzosos, á ménos que ellos los otorgaran voluntariamente, y conservando en todo caso la facultad de abandonar el solar y la tierra del señor, en los términos ántes indicados. Eximió finalmente á los vasallos de todos los demás impuestos y servicios personales ántes referidos, dejando tan sólo subsistentes los censos, diezmos, primicias, tasas y otros gravámenes reales, cuya ilegalidad no se probara con documentos auténticos, y aún los personales, cuando hubieran sido reconocidos por escrito ó cabrevados, á ménos que la cabrevacion se hubiera verificado por fuerza ó fraude ó sin título legítimo, y esto se justificara en el término de cinco años (3).

Mas era tal el furor con que se peleaba en aquella guerra, que ni el ajuste del compromiso, ni la sumision ofrecida por ámbas partes al laudo régio, bastaron para que entretanto suspendieran los payeses sus hostilida-

(1) Sent. arbitr. cit.—Zurita, *Anal.*, lib. 17, c. 19, 34 y 35, y lib. 20, c. 52 y 67.

(2) Del *Intestia* y del *Xorquia* se tratará mas extensamente en otro capítulo.

(3) Sent. arbitr. n.º 1 al 15.

des; ántes al contrario, las renovaron entónces con mayor encarnizamiento, entrando por fuerza en los lugares de la corona, degollando á muchos caballeros y señores, usurpando la enseña y la jurisdiccion del rey, invadiendo, robando y quemando no pocos castillos é iglesias y cometiendo otros atentados gravísimos. Por eso el rey, para que no quedaran impunes tantos crímenes, determinó castigarlos en la misma sentencia, condenando á muerte y confiscacion de bienes á todos los cabezas de la rebelion é imponiendo á los demás rebeldes una multa de 50.000 libras pagadera en plazos, la cual suma habia de considerarse tambien como descargo de la mayor que los payeses habian prometido á D. Alfonso IV por la remision de los malos usos. Condenó además el rey á todos los vasallos, sin distincion entre rebeldes y leales, á satisfacer á los señores, que habian demandado el resarcimiento de los daños y menoscabos sufridos en sus bienes, la suma de 6.000 libras, la cual habia de distribuirse á prorata entre todos los perjudicados: mandó á los señores soltar sin pena ni obligacion alguna, á los vasallos que aún tenían presos por rebeldes: señaló un breve plazo para loar y homologar esta sentencia, así por los que firmaron el compromiso, como por los que dejaron de hacerlo; y ofreció perdon y amnistia á todos los culpables, que no hubieran sido cabezas en la rebelion, los cuales fueron nominalmente excluidos, sin perjuicio de las responsabilidades expresadas (1).

Tal fué el término de aquella reñidisima contienda entre la nobleza feudal y el pueblo sujeto á su dominacion, entre el régimen de la igualdad legal y el de los privilegios, entre los propietarios libres y los poseedores esclavos de la tierra. Pero si aquella sentencia corrigió los más graves é intolerables abusos del feudalismo catalan, no acabó del todo con este régimen, puesto que no libró á la propiedad de sus cargas esencialmente feudales. Los vasallos de remensa fueron desde entónces más libres, pudiendo disponer de sus personas de modos ántes no permitidos. Con eximirse de los *malos usos*, se libraron hasta cierto punto, de la servidumbre personal, quedando convertidos en censatarios; pero no dejaron de estar sujetos á la jurisdiccion señorial, ni pudieron disponer libremente de todos sus bienes, ni quedaron dispensados de la obligacion de acudir á campaña al llamamiento de sus señores, que eran las circunstancias características del feudalismo. Este régimen sufrió con aquella guerra y con la sentencia que le puso término, una modificacion importante respecto á sus demasías y abusos, pero no en sus esenciales elementos.

(1) Sent. arbitr. cit. n. 19 al 27.

CAPÍTULO III.

De las restricciones del dominio territorial.

I.

DE LA ALIENABILIDAD DE LAS TIERRAS.

Restricciones de la facultad de enajenar así en vida como en muerte, para conservar las familias y los vínculos de dependencia entre señores y vasallos, eran en Cataluña, como en otros reinos, circunstancias características de la propiedad territorial. Estas restricciones constituían además una de las principales diferencias entre el alodio y el feudo, puesto que del uno se podía disponer más libremente que del otro. La lenta y sucesiva desaparición de las que mantenían el predominio señorial y la progresiva liberación de la tierra, mediante la conversión de los feudos en alodios, son justamente circunstancias, que entre otras, fueron señalando en el curso de los siglos, la decadencia y el término del feudalismo.

Ludovico Pio en su rescripto de 814, declaró que los españoles de Cataluña que habían obtenido tierras por merced de la corona, podían repartirlas entre otros hombres de estado inferior, que de cualquiera parte fueran á cultivarlas, los cuales quedarían por este mero hecho, sujetos á la potestad del donante, aunque sin perder su derecho de ausentarse y buscar otro señor, renunciando los bienes que hubieran recibido del primero (1). Carlos el Calvo en su rescripto de 844, declaró que estos españoles deberían disfrutar sin contradicción los servicios de los hombres de otras razas, á quienes hubieran dado alguna parte de sus tierras; que podrían asimismo vender entre ellos, cambiar, donar y dejar á sus descendientes las tierras de *adpersion* que poseían; y que si muriesen sin hijos ni nietos, les sucedieran los demás parientes, por el orden prescrito en sus leyes propias, que eran las visigodas, pero con la condición de seguir prestando los servicios á que estaban obligados sus antecesores (2). Estas disposiciones importantes encerraban el germen de la constitución de las dos clases de propiedad,

(1) Marca hisp. lib. 3, c. 19.

(2) *E.p. sag.* t. 29, apénd. 11.

regularizadas después, y justifican en su origen el grado de libertad otorgada á cada una.

Las tierras ocupadas por los españoles eran alodiales, aunque las de *adprision* tuviesen cierta dependencia de la corona, segun en otro lugar he indicado. Por razon de su misma índole alodial, podian tales tierras ser enajenadas, cambiadas, donadas y trasmitidas por muerte, con arreglo á la ley personal de sus dueños. Esta libertad no era sin embargo absoluta. El propietario español podia enajenar sus heredades, mas no á un comprador cualquiera, sino á otro hombre de su raza: podia disponer de ella en vida, mas no para despues de su muerte, porque entónces tenía derecho á heredarlas el hijo ó el pariente, si ofrecia continuar prestando los servicios á que venia obligado su causante.

Las tierras repartidas por los mismos españoles entre colonos *de cualquier parte venidos*, como dice el rescripto, ó dadas á estos mediante vassallaje reconocido á los condes ú otros señores, de que habla tambien el mismo documento, eran beneficiarias ó censales, y en ninguno de ámbos casos podian ser libremente enajenadas por sus poseedores inmediatos, puesto que debian volver al señor, cuando ellos muriesen, se ausentasen ó incurrieran en confiscacion de bienes. Las restricciones del dominio casi alodial de los españoles en las tierras de *adprision* fueron luego desapareciendo, ya por costumbre ó ya por privilegios y mercedes reales, que convirtieron tales propiedades en alodios perfectos, mediante la facultad otorgada á sus poseedores para disponer de ellas sin limitacion alguna, siempre que quedaran á salvo los servicios debidos á la corona. Las colecciones diplomáticas ofrecen numerosos ejemplos de estas mercedes, de algunas de las cuales he dado ántes noticia. Las que tardaron mucho más tiempo en desaparecer, fueron las restricciones de la facultad de enajenar las propiedades beneficiarias y feudales.

Entre las restricciones de esta facultad, que tenían por objeto mantener la dependencia de los vasallos, contábase en primer lugar la prohibicion de enajenar los bienes feudales, sin licencia del señor inmediato. El feudo enajenado sin este requisito, podia ser *emparado* por el señor, segun los Usages (1). *Emparar* era despojar al señor al vasallo, por su propia autoridad, del feudo que de él tuviera, ocupándolo de hecho, percibiendo sus rentas, y disfrutándolo hasta que el vasallo reparara el daño causado por su falta y pagara los gastos de la ocupacion y conservacion del mismo feudo (2).

(1) Usag. *Si quis suum fevum*.

(2) Cancr. *Var resolut.* Pars. 1.^a c. 12.

Mas si éste era vendido á sabiendas, como alodio libre y en fraude del señor, caía irrevocablemente en comiso, consolidándose con el dominio directo, segun la doctrina de los jurisconsultos (1).

La prohibicion de enajenar los feudos sin licencia del señor, aunque en su origen tuviera otro objeto, vino á ser con el tiempo la garantía de dos derechos importantes del dominio directo, el de tanteo ó fadiga y el de luismo. En virtud del primero debia el vasallo denunciar al señor inmediato la venta del feudo ó de la cosa feudal, presentándole el instrumento del contrato, á fin de que si le conviniese adquirirlo para sí, pudiera hacerlo, ofreciendo en el término de 30 dias, el mismo precio dado por el comprador. Si el señor no hacia uso oportunamente de este derecho, quedaba firme la venta, á ménos que el adquirente fuese hombre de calidad inferior á la del vendedor, en cuyo caso podia ser aquella revocada en cualquier tiempo. Este derecho podia ser cedido á un tercero por el señor, que no era á su vez vasallo de otro, por razon del mismo feudo. En el obispado de Gerona los bienes que por tales causas caian en comiso, debian ser infeudados á otros vasallos, á ménos que los señores los necesitaran para sus usos propios (2).

Luismo ó *laudemio* se llamaba el derecho que por cada enajenacion cobraba el señor, en remuneracion de la licencia que para hacerla otorgaba y de la investidura que concedia al adquirente. Devengaban este tributo hasta las ventas que quedaban revocadas, por usar el señor su derecho de retracto, por más que faltase entónces el fundamento con que se pretendia justificarlo. Su importe no era como en las enfiteusis de Castilla, el dos por ciento del precio de la enajenacion, sino el tercio del mismo en las traslaciones de dominio por título oneroso, el décimo en las verificadas por título gratuito y el vigésimo del importe del capital en las constituciones de censo y en los contratos de hipoteca (3).

El rigor de la prohibicion de enajenar fué después moderándose, á medida que se mejoró la condicion de los vasallos. Permittióse primero á estos enajenar libremente alguna parte de sus bienes feudales á otros vasallos, cuyos señores no tuviesen sobre ellos, más que la potestad honorífica, ó sea el derecho de ser reconocidos como tales y admitidos en sus tierras, y siempre que el feudo no consistiese en castillos, sino en campos, viñas ú

(1) Guillermo de Vallesica. "In usat. *Si quis suum fevum*. Antiq. Barchin. leg." —Peguera. *Repet. in usat. "Ne sup. laudem."* Vers. 8, n. 70.

(2) Peguera, *ibid.* vers. 6, n. 27 y sig.

(3) Const. vol. I, lib. 4, t. 28, II.

otros bienes, por los que se prestara solamente homenaje y algun servicio en tiempo de guerra y tambien cuando la enajenacion no perjudicara al dominio señorial (1). Luego D. Pedro III ampliando estas libertades en 1359, permitió á los vasallos enajenar sus feudos entre vivos ó por causa de muerte, siempre que los adquirentes fueran hábiles para poseerlos y quedaran á salvo los derechos señoriales de fadiga y laudemio, y aún reconoció como válidas hasta cierto punto las enajenaciones que verificaran á favor de personas inhábiles, disponiendo que los feudos así adquiridos, se vendieran dentro de un año, á sugetos capaces de poseerlos (2). Por último, hasta los payeses, con la famosa sentencia de los *malos usos*, alcanzaron la libertad de enajenar, tanto sus bienes muebles, con las restricciones en otro lugar expresadas, como los inmuebles. Entónces, si bien continuó la prohibicion de transmitir á persona extraña la masía señorial y sus tierras contiguas, quedaron autorizados los payeses para enajenar sin licencia del señor, y salvo estipulacion en contrario, los bienes que hubieran adquirido con su industria (3).

Entre las restricciones de la disposicion del dominio entre vivos, que tenian por objeto la conservacion de las familias, era la más importante, así en Cataluña como en Castilla, la que resultaba del retracto de abolengo. Esta institucion germánica, admitida en el derecho feudal de toda Europa, y que aún dura en España, es reliquia venerable de la primitiva organizacion social, en que el dominio de la tierra era colectivo en las familias. El vasallo podia generalmente, con licencia del señor, enajenar el feudo, segun queda dicho; mas si este era de los *antiguos*, en que venia ya establecida y regularizada la sucesion, ó de los llamados *ex pacto et providentia* (que eran los instituidos á favor de una persona y sus hijos y sucesores naturales) necesitaba además la enajenacion, el consentimiento de aquellos á quienes pudiera perjudicar, si habia de ser estable. La que se verificaba sin este requisito no era sin embargo nula de derecho, pero los agnados más próximos, que deberian suceder en el feudo, podian revocarla, devolviendo ó no al comprador el precio que hubiera desembolsado, segun que hicieran uso de esta facultad en vida del vendedor, ó después de su muerte (4).

(1) Const. vol. 1.º lib. 4, t. 27. Costum. gener. 18.

(2) Ibid. t. 28, II.

(3) Ibid. vol. 2.º lib. 4.º t. 13, II. n. 12, 13.

(4) Peguera. "Repet. in Const. *Ne sup. laudem.*" Vers. 6, n. 3 al 14.

II.

DE LA TRASMISION POR HERENCIA DE LAS TIERRAS.

La facultad de disponer de los bienes alodiales para despues de la vida, estaba y continúa aún sujeta en Cataluña á ménos restricciones que en Castilla. Testábase libremente de aquellos bienes, dejando á salvo la legítima de los hijos, que era la porcion reservada por la ley á las familias. Pero la legítima no era antiguamente igual en toda Cataluña. En unos lugares se observaba la ley romana, anterior á la de Justiniano, que señalaba como porcion legítima divisible por igual entre todos los hijos, la tercera parte de los bienes del padre y de la madre (1). Guardabase en otros lugares la ley visigoda que asignaba por legítima á los hijos, ocho partes de las quince en que se dividia la herencia, facultando á los padres ó abuelos para mejorar á cualquiera de los hijos, en cinco de las siete partes restantes, y para disponer de las otras dos libremente (2). Entre tanto regía por privilegio en Barcelona la Novela de Justiniano, que señalaba por legítima á todos los hijos la cuarta parte de la herencia paterna (3). Deseando luego don Alfonso III uniformar en este punto la legislacion del Principado, derogó en 1333 la ley visigoda referida, mandando que en su lugar, rigiera la romana anterior á Justiniano de que queda hecha mencion (4). Por último, Felipe II derogó tambien esta ley en las Córtes de Monzon de 1585, mandando guardar en toda Cataluña la costumbre especial de Barcelona, que reducía á la cuarta parte de la herencia, tanto la legítima de los hijos, segun queda dicho, como la de los ascendientes (5).

Así fué progresando la libertad de disponer de los bienes alodiales, como compensacion quizá de las numerosas restricciones que limitaban el uso y la comunicabilidad de las propiedades feudales. El orden de suceder en estas era el determinado previamente en la carta feudal respectiva: en su defecto, por la costumbre del lugar; y últimamente por el derecho escrito. Mas las reglas sobre la materia establecidas, aunque tendian generalmente á conservar los feudos en la mismas familias, no designaban siempre

(1) Const. de Cathal. Superfl. lib. 6, t. 1.º, Consuet. 1.ª

(2) Const. ibid. Consuet. 2.ª

(3) Ibid. lib. 6, t. 5, I.

(4) Ibid. t. 1.º I.

(5) Const. vol. I, lib. 6, t. 5.º II,

los individuos de ellas que en cada caso, habian de heredarlos. En los feudos *antiguos*, que eran los que habian pasado ya de la cuarta generacion del primer feudatario, sucedian los hijos y descendientes, segun las condiciones de la investidura. A la misma regla se sujetaban los feudos llamados *paternos*, que eran los poseidos por los hijos, nietos ó biznietos del primer feudatario. En los de *pacto* y *providencia* sucedian únicamente los hijos y sucesores naturales del primer llamado á su disfrute. En los *mixtos*, que eran los establecidos á favor de los hijos y herederos, sucedian tan sólo los que reunieran estas dos cualidades. Los feudos en que segun la expresion de los jurisconsultos contemporáneos, «se vivia *jure Francorum*» se trasmitian necesariamente al hijo varon primogénito. Solamente en los feudos *hereditarios*, ó instituidos simplemente á favor de una persona, y sus herederos, podia el feudatario elegir sucesor. En los *nuevos*, que aún no habian pasado del primer vasallo llamado á su disfrute, tenia éste la misma facultad, aunque no podia ejercerla sin licencia del señor directo (1).

Mas entre los llamados á la sucesion y que en cada vacante tenian á ella igual derecho, podia el vasallo elegir su sucesor por acto entre vivos ó por testamento. Los antiguos usages reconocian, aunque indirectamente, esta facultad á todos los feudatarios, sin más excepcion que la de aquellos en cuyos feudos se sucedia por derecho de primogenitura, que eran generalmente los condados. Los vizcondes, los comitotes, los valvasores, los caballeros y todos los demás vasallos inferiores, podian disponer de sus feudos, por causa de muerte, pero sólo en favor de alguna de las personas, que segun las condiciones de la investidura, tenian derecho á suceder en ellos. Esta facultad que suponian los *Usages* y que reconocieron las *Costumbres* (2), fué después expresamente confirmada por la constitucion de 1359 ántes referida (3), declarando lícita la enajenacion de los feudos á personas hábiles para poseerlos, siempre que quedaran á salvo los derechos señoriales de fadiga y laudemio. Esta constitucion habria ampliado considerablemente el derecho de testar, si hubiera sido interpretada latamente en la práctica. Mas los jurisconsultos, explicándola del modo más conforme á las antiguas costumbres, enten tieron que la facultad concedida en ella á los feudatarios, si limitaba el dominio del señor, no debía ceder en perjuicio de los parientes llamados á disfrutar el feudo, segun la

(1) Peguera, obr. cit. Vers. 6, n. 1 al 24.

(2) Usag. «*Si á Vicocomitibus*,—Costum. gener, 21 Const. t. 27, lib. 4.—Const. t. 28, II.

(3) Const. lib. 4, t. 28, II.

carta del mismo, la costumbre local ó la ley, y que por lo tanto se limitaba á elegir sucesor entre los que tuvieran igual derecho á la vacante. Así la prohibicion de testar de los feudos prescrita en la legislacion feudal comun, no fué nunca admitida en Cataluña, sino con graves limitaciones en favor de las familias feudatarias.

Tampoco era lícito al vasallo dividir el feudo sin consentimiento de señor. Cuando en Alemania, en Italia y en otras naciones se habia ya moderado el rigor de esta prohibicion, permitiéndose al padre dividir el feudo entre sus hijos, en Cataluña permanecia éste indivisible, como en los primeros tiempos del feudalismo. El vasallo que tenia varios feudos, podia repartirlos entre sus hijos, pero sin desmembrar ninguno de ellos (1). Así el sucesor en bienes feudales no podia ser obligado á satisfacer con ellos la legitima de sus hijos, ni las deudas de su antecesor, aunque hubieran sido contraídas en beneficio del mismo feudo. Si éste era de los *antiguos* ó de *pacto y providencia*, y el sucesor era hijo y heredero, ni siquiera se le imputaba en pago de su legitima (2).

Cuando el vasallo moria sin testamento, su facultad para disponer del feudo se trasmitia al señor con iguales restricciones. En este caso debian suceder en primer lugar los hijos y descendientes, en su defecto los padres y ascendientes, á falta de éstos los hermanos y agnados, y en último lugar los herederos extraños. Mas como los feudos no podian dividirse, no sucedian á la vez en ellos todos los hijos, ni todos los hermanos ó parientes, sino aquel que elegia el señor. Este acto se llamaba *gratificacion* en el tecnicismo feudal (3).

Tampoco sucedian indiferentemente los hijos y las hijas, pues aunque las mujeres no estaban, por regla general, excluidas de la posesion de los feudos, puesto que segun la costumbre, podian disfrutarlos, poniendo un hombre armado que sirviera por ellas (4), debian ser preferidos los descendientes varones á las hembras, siempre que concurrieran en el mismo grado. Cuando el vasallo no dejaba más que hijas, una de ellas sucedia en el feudo, si soltera, prestando el tutor el homenaje, y si casada, el marido; mas habiendo hijo varon, aunque fuese de menor edad, debia ser preferido á sus hermanas mayores (5). Sólo á falta de hijos, hijas y parientes varones,

(1) Const., lib. 4.º, t. 27. Costum. gener. 9.

(2) Cancr. Var. Resol. pars. 1.ª, c. 11, n. 40 al 68.

(3) Usag. Si a vicecomitibus.—Costum. gener. 21, Const. lib. 4.º, t. 27.

(4) Costum. gener. 36, Const. lib. 4, t. 27.

(5) Costum. gener. 22, ibid.

podía ser *gratificada* con el feudo la mujer del feudatario difunto (1).

En los ducados, marquesados y condados, que llevaban aneja cierta jurisdicción soberana, aunque con alguna dependencia del conde de Barcelona, sucedía siempre por costumbre, el hijo ó nieto varon primogénito, y en su defecto los hermanos del difunto (2). El ducado de Cardona, el marquesado de Pallars, los condados de Gerona, Besalú, Cerdania, Ausona y otros, se trasmitían así, tanto por testamento como *ab intestato*. Sin embargo, no estaban las mujeres tan rigurosamente excluidas de la posesion de tales Estados, que no pudieran alcanzarla por contrato y aún por testamento, segun se ve en la historia, pero nunca en concurrencia con hermanos varones. En 1056 dió el conde D. Ramon en dote á su mujer Adalmodis el condado de Gerona y otros lugares, con la condicion de que por su muerte pasaran á uno de sus hijos varones, el que ella eligiera, y en su defecto, ó no habiendo más que hijas, volviera el condado al que disfrutara el de Barcelona (3). Y aunque en este caso parece que D. Ramon no hubo de tener en cuenta el derecho de primogenitura, puesto que autorizó á Adalmodis para dar la sucesion á *cualquiera* de sus hijos varones, no es ménos cierto que aquel acto fué contrario á la costumbre general, que entonces, como mucho despues, otorgaba la sucesion en tales feudos al hijo primogénito.

De este órden de suceder en los feudos mayores, ofrece un ejemplo notable el mismo condado de Barcelona, hasta su incorporacion á la corona de Aragon. A Wifredo, primer conde propietario, sucedió su hijo Wifredo II, al cual por no tener hijos, heredó su hermano Miro. Dejó éste cuatro hijos, y el mayor Seniofredo fué su sucesor en el condado de Barcelona. Cuando los demás condados se acumulaban en un solo poseedor, solían repartirse á la muerte de éste, entre sus hijos menores. Así Wifredo I dejó á su segundo hijo Miro, que despues sucedió á su hermano, los condados de Besalú y Cerdania, y al tercero, Suniario, el condado de Urgel. Habiendo dejado Miro en 929, dos hijos menores que Seniofredo, les adjudicó ciertos condados, y les dió por tutor á su hermano Suniario, que gobernó en tal concepto los Estados de sus pupilos. Murió el conde de Barcelona Seniofredo en 967, y le sucedió su primo Borrel, hijo de su tío Suniario, no obstante haber dejado hermanos, al parecer, con mejor derecho. Borrel dió á su segundo hijo Ermengaud el condado de Urgel, y habiendo muerto

(1) Peguera, *ibid.* vers. 4.

(2) Peguera, vers. 6, n. 60.

(3) *Marca hisp.* apénd. 246.

en 995, le heredó su hijo mayor Ramon Borrel. Por derecho de primogenitura, sucedieron tambien Berenguer y Ramon Berenguer. El rey D. Alfonso III otorgó su testamento en 1355, instituyendo por heredero á su hijo D. Pedro, con la cláusula de que si éste moria sin hijos legítimos varones, le sustituyera su hermano D. Jaime, y si éste hubiese ya fallecido, aunque fuera con descendientes varones, el infante D. Fernando.

A falta de hijos y descendientes, fueron al fin llamados á la sucesion los ascendientes, en lo cual se separó el derecho catalan del feudal comun, que deferia en tal caso la herencia al pariente colateral que designara el señor, fundándose sin duda en que los feudos estaban instituidos para la prestacion de ciertos servicios personales, que ordinariamente no eran propios de los ancianos. Conforme á la ley feudal comun, cuando el vasallo no dejaba hijos, revertia el feudo al señor, para que lo adjudicase á alguno de los parientes del finado. Asi hubo de suceder tambien en Cataluña en los primeros tiempos; pero las costumbres modificaron sucesivamente aquel primitivo derecho, hasta que quedó enteramente derogado por la sentencia de los malos usos. Hé aquí cómo se verificó esta mudanza importante.

Segun el derecho antiguo de Cataluña, el hidalgo que no tenia hijos, aunque fuera casado y aunque estuviera en edad de poderlos tener, estaba por regla general privado de la facultad de disponer de todos sus bienes por testamento, puesto que en una parte de ellos al ménos, habia de sucederle el señor de quien fuera vasallo. El que no tenia sucesion se llamaba *exorc* en la lengua de la tierra, y así se dió el nombre de *exorquia* ó *xorquia* á la porcion hereditaria correspondiente al señor. El principe soberano, segun cierto antiguo usage, tenia derecho á las *xorquias* de los nobles, ya fueran caballeros ó ya burgeses; lo cual significaba que debia heredar todos sus alodios cuando morian sin hijos, no pudiendo ellos disponer en este caso más que de los bienes muebles á favor de sus parientes, de sus almas ó de la Iglesia (1). Y como en el tiempo en que regia este usage, no habia sido aún autorizada la libre disposicion de los feudos por causa de muerte, es indudable que el vasallo noble *exorc* no podia testar de ningunos bienes raíces.

Mejor era, por lo tanto, la condicion de los vasallos no nobles, pues estos al ménos podian testar de sus alodios, por más que algunos juriscultos contemporáneos pretendieran negarles tal derecho, fundándose en

(1) Usag. Statuerunt in Const. Superf. lib. 10, t. 1°

que no debían ser más privilegiados que los nobles (1). Sin embargo, cuando estos vasallos morían sin testamento, tenía el señor un derecho indisputable á cierta parte de la herencia, mayor ó menor, según los casos. Si dejaba mujer é hijos, debía heredar el señor la tercera parte de todos los bienes: si dejaba hijos y no mujer, ó mujer y no hijos, la mitad, pero repartiéndose en este último caso la otra mitad entre los parientes; y á falta de éstos sucedía el señor en toda la herencia, salvo lo que por derecho de viudedad correspondiera á la viuda. Igual derecho tenía el señor en la herencia de las mujeres, sus vasallas (2).

Más limitada hubo de ser en su origen la facultad de testar de los vasallos payeses. Un usage antiguo disponía que al hombre de esta calidad, que no tuviera hijos, sucediese el señor en la porción hereditaria que á los hijos habría correspondido si existiesen (3); y como éstos eran herederos forzosos de las ocho décima-quintas partes, de la tercera ó de la cuarta de la herencia, según los tiempos, el señor que les sustituía, tuvo probablemente en su origen, iguales derechos, no pudiendo entónces, por lo tanto, el vasallo payés testar en ningún caso, de esta especie de legítima. Mas la jurisprudencia, interpretando después este usage de un modo más favorable á aquellos vasallos, entendió que se refería únicamente á los que murieran sin hijos y sin testamento, y aún limitó en este caso la porción legítima del señor á la tercera parte de su herencia (4).

Con el trascurso del tiempo cayeron en desuso los usages que atribuían al soberano las *xorquias* de los nobles, y los que concedían á los señores las de los payeses fueron derogados por la sentencia de los *malos usos*. Entónces fué cuando se regularizó, puesto que ya de ántes venía introducida, aunque no generalizada, la sucesión á favor de ascendientes. Los padres y abuelos fueron llamados por falta de hijos y nietos á la herencia de los feudos; pero como éstos continuaban siendo indivisibles, se dió al señor la facultad de elegir entre aquellos el que bubiera de recibir la investidura (5). También fueron llamados en el mismo caso los ascendientes á suceder en los alodios, mas no por iguales partes, sino defiriéndose los troncales procedentes de la línea paterna, á los parientes más próximos de ella, dentro

(1) Gloss. ad usat. *De intestatis* in Antiq. Barchinon. leg.

(2) Usag. *De intestatis* in Const. superfl., lib. 4, t. 11.

(3) Usag. *De rebus* in Const. ibid.

(4) Gloss. ad usat. *De rebus* in Antiq. Barchin. leg.—Consuet. I, t. 11, lib. 4.º, Const. Superfl.

(5) Peguera, obr. cit. vers. 6, n. 61.

del cuarto grado, y los adquiridos por el difunto y los procedentes de su madre, á los ascendientes y parientes de la línea materna (1). Y con tal rigor se guardó este orden de suceder, que el padre no podia sustituir pupilarmente á su hijo, sino designando por substitutos para los bienes de cada línea, á los parientes que correspondian á ella (2).

A falta de ascendientes, sucedian así en los alodios como en los feudos, los hermanos, juntamente con los sobrinos carnales, y en su defecto los demás parientes, pero con la diferencia de que en los feudos elegia el señor su vasallo, entre los colaterales del mismo grado (3) y los alodios se distribuian entre éstos, como queda dicho, segun su procedencia. A falta de parientes, debia suceder en los feudos el heredero instituido para los bienes libres, aunque fuera extraño; en lo cual diferia tambien el derecho catalan del feudal comun, que autorizaba entónces la reversion del feudo al señor. Si los herederos eran varios, podia el señor *gratificar* con la investidura á cualquiera de ellos (4).

La viuda, por lo tanto, nunca era llamada á la sucesion del marido; mas en interés de la conservacion de las familias, se le reconoció desde antiguo un derecho importante sobre la herencia del cónyuge difunto. Tal era el de usufructuar durante su vida, ó mientras permaneciese viuda, viviendo honestamente en la casa conyugal, toda la hacienda del marido, á fin de criar y educar con ella á sus hijos (5). Así lo disponia un antiguo usage, conforme en un todo con la ley de Aragou, que tambien establecia este usufructo de viudedad. Mas D. Pedro III, en las córtes de Perpiñan de 1351, redujo notablemente este usufructo en Cataluña, mandando que las viudas lo gozaran solamente un año, y que trascurrido este período no hicieran suyos los frutos de los bienes dejados por sus maridos, sino hasta que fueran reintegradas de sus dotes y donaciones esponsalicias, y esto en el caso de que no estuviera garantido de otro modo dicho reintegro (6). Así quedó abolido el usufructo de viudedad, en daño seguramente de la unidad de las familias, mas con el fin político quizá de favorecer los derechos señoriales que resultaban un tanto menoscabados, cuando los feudos de que los señores recibian servicios estaban largo tiempo poseidos por mujeres.

(1) Const. I y II, t. 2, lib. 6.

(2) Const. III, *ibid.*

(3) Costum. 41, t. 27, lib. 4.º, Const.

(4) Peguera, obr. cit. vers. 6.

(5) Usag. *Vidua*.

(6) Const. I, t. 3, lib. 5.

CAPÍTULO IV.

De la jurisdiccion inherente á la propiedad territorial. sus orígenes y forma primitiva.

En Cataluña, como en la mayor parte de Europa, toda jurisdiccion y potestad pública traían su origen y eran atributo inseparable del dominio de la tierra. Los reyes francos fueron los señores de más autoridad en su reino, del cual formó parte el Principado en cierto tiempo, porque eran los mayores propietarios alodiales, dado que disfrutaban como alodios propios y por juro de heredad, todas las tierras de su imperio no poseidas señaladamente por sus naturales y vasallos. Por eso no podia ningun individuo establecerse en ellas sin prévia licencia del monarca, ni sin haber reconocido su potestad soberana. Equiparándose el dominio ganado por conquista al adquirido por títulos jurídicos privados, para fijar domicilio en cualquier territorio realengo, lo mismo que para hacerlo en otro de dominio particular, era indispensable adquirir algun pedazo de él, ó por lo ménos el derecho de disfrutar en él, albergue y sustento, prestando al señor del suelo determinados servicios. Así los que se establecian de nuevo en tierras realengas ó señoriales, ocupaban materialmente alguna porcion de ellas, por cualquiera de los títulos que reconocia el derecho ó la costumbre, ó entraban al servicio de alguno de los propietarios ó poseedores ya establecidos en las mismas tierras, para vivir á su costa; pero cualquiera que fuese el título que autorizase el nuevo domicilio, los que lo disfrutaban quedaban sujetos, por este mero hecho, á la jurisdiccion del dueño del lugar.

Admitidas estas costumbres *francas* en Cataluña, el dominio de la tierra fué allí, como lo era ya en Francia, el título originario de toda jurisdiccion, hasta de la real, en cuanto á los pobladores que se establecieron en el Principado despues del primer repartimiento de la conquista. Por eso los españoles que huyendo de la dominacion sarracena, se refugiaron y establecieron en Cataluña en los siglos ix y x, no pudieron hacerlo sin permiso de Carlo-Magno ó Ludovico Pío, ni sin someterse á su autoridad soberana (1).

(1) Así decia Ludovico de aquellos españoles en su rescripto de 816, que "ad nostran, seu genitoris nostri fidem se contulerunt..... et locum desertum quem ad habitandum, occupaverunt per præceptum domini et genitoris nostri."

Todos los demás poseedores de tierras ó eran antiguos propietarios indígenas, cuyo derecho habian respetado los conquistadores, ó traían su título de repartimientos de conquista ó de mercedes posteriores de la corona. Los primeros no conservaron lo que les pertenecía, sino á cambio de reconocer obediencia y sumision al soberano, del mismo modo que los españoles refugiados; y por lo tanto, la autoridad del rey sobre unos y otros, tuvo un origen semejante, si no idéntico. Los poseedores por repartimientos de conquista ó mercedes posteriores, prestaron con mayor razon igual reconocimiento, por el mero hecho de aceptarles, pues al vínculo de fidelidad que ántes tuvieran con el rey como súbditos naturales, se juntaba el de la trasmision de una parte de sus tierras, con promesa jurada de lealtad y servicios.

La autoridad acumulada en el rey, ya como propietario alodial inmediato del territorio, ya como señor directo de la parte enajenada del mismo, fué delegada á los condes en sus respectivas comarcas. La potestad correspondiente al soberano por el primero de aquellos conceptos sobre una parte de las tierras, fué transmitida á los que las adquirieron como alodios ó beneficios, y por lo tanto perpétua ó temporalmente. Los condes, aunque amovibles á merced del rey hasta fines del siglo ix, ejercieron desde luego su autoridad delegada con no poca independencia, administrando justicia, acaudillando ejércitos y recaudando impuestos y derechos fiscales en sus demarcaciones respectivas. Sólo se eximieron de su potestad, y eso no tampoco de un modo absoluto, los lugares de vasallos, cuyos dueños tenían en ellos jurisdiccion inmediata, por merced expresa ó antigua costumbre.

En Cataluña, lo mismo que en los otros reinos, los reyes donaron pueblos, términos y heredades á sus servidores y cortesanos y á las iglesias y monasterios, con la jurisdiccion correspondiente sobre los hombres que habitaban en ellos y exencion de la del conde. Entendiase otorgada esta exencion, no sólo cuando así se expresaba en la carta de merced, sino tambien cuando se prohibia la entrada de los sayones y agentes de la justicia ordinaria en los lugares enajenados. Y era tan de rigor esta inmunidad, que aunque no se expresara en la escritura de donacion, debía presumirse concedida, segun afirman los antiguos jurisconsultos del país, como consecuencia necesaria de ella (1). Cuando se transferia el dominio con tal

(1) "Si princeps qui habet castrum cum jurisdictione, concedit alicui ipsum castrum simpliciter, tunc eo ipso videtur etiam concedere jurisdictionem quam ibi

expresa exencion, no era necesario decir quién habia de administrar la justicia en el territorio cedido, pues se daba por supuesta y sobrentendida la competencia del adquirente, y sólo para garantirsela y evitar la ocasion de que fuese menoscabada en la práctica, se prohibia la entrada en tales lugares á los agentes de la autoridad real. Cuando se enajenaban villas, heredades y términos, con sus actuales pobladores y los que despues fueran á morar en ellos, tambien se entendia trasmitida la jurisdiccion, por creerse, con razon tal vez, atendida la debilidad é insuficiencia del poder supremo, que sin cierta jurisdiccion inmediata sobre los colonos y arrendatarios de las tierras, no era posible conservar su dominio, defenderlas de enemigos y asegurar el cobro de las rentas y servicios que constituian su fruto.

Mas aunque todos los naturales y moradores del reino fueran súbditos del rey, no ejercia éste igualmente sobre todos la plenitud de su potestad, pues habia entre ellos grandes diferencias, ya por razon del título que cada uno tenia para habitar en tierras realengas ó para poseer sus heredades, y ya tambien por razon de su origen y procedencia. Los condes, los vizcondes, los barones y los demás señores jurisdiccionales, que directamente habian recibido de la corona sus posesiones, estaban sujetos inmediatamente y en todo, á la jurisdiccion real; pero si además disfrutaban tierras procedentes de otros condes ó barones, quedaban, por este mero hecho, sujetos tambien á su fuero, en las cuestiones que á aquellas se refiriesen. Asi la condesa Ermesinda, madre y tutora de Berenguer, conde soberano de Barcelona, demandó en 1019 á Hugo, conde de Ampurias, ante Bernardo, conde de Besalú, para que le restituyera un alodio de que se habia apoderado por fuerza (1). Pero con la herencia de los beneficios vinieron á ser los condes, como propietarios de sus condados, independientes de los reyes francos, refundiéndose en ellos casi toda la potestad que estos habian ejercido hasta entónces.

Todos los demás vasallos reconocian por jueces á los condes, mas no siempre por igual título, ni sin distincion de juicios. En las tierras del condado, respecto á las cuales eran los condes, en tiempo de los reyes francos, meros beneficiarios, ejercian la jurisdiccion delegada del soberano, que los jurisconsultos llamaban general, y se reducía á administrar justicia con las

"habet, nisi sibi exprese retineat." (Mieres, *Apparatus super Constitutionibus Curiarum Cataloniae*, t. 1, collat. 2, c. 42, n.º 49.)

(1) *Marca hisp.* apénd. 181.

limitaciones que exigía la condicion personal de cada vasallo. En las tierras de las *dominicaturas* enclavadas dentro ó fuera de los mismos condados, de las cuales eran los condes propietarios alodiales, ejercían estos una jurisdiccion propia, sin otras limitaciones que las aceptadas por los vasallos ó las prescritas por ley ó costumbre. Los condes de Barcelona, desde que fueron independientes, administraron justicia sin restriccion alguna, tanto á sus vasallos propios, como á los que no lo eran de señores particulares, ejerciendo sobre los vasallos ajenos tan solo el *mero imperio*, y eso cuando sus señores no lo disfrutaban. Tambien continuaron los mismos condes en el ejercicio de la plena jurisdiccion sobre los barones, vizcondes y señores jurisdiccionales, aunque lo fueran por juro de heredad, reservándose en algunos casos las apelaciones de sus sentencias.

No es hoy posible determinar con exactitud los limites de la jurisdiccion de los condes, segun el vario estado de las personas sujetas á ella, sobre todo en los primeros siglos de la Edad Media, en que ninguna institucion pública funcionaba con la regularidad y uniformidad acostumbradas despues.

Sábese, sin embargo, que en el órden de la familia y de las relaciones privadas, vivia cada hombre segun la ley civil de su raza, ó segun el compromiso que voluntariamente habia contraido con otro para su seguridad ó su bienestar; y esta diversa multitud de estados y derechos no podia ménos de determinar y alterar la competencia de los jueces. Entre los francos establecidos en Cataluña regia la ley propia de ellos: entre los españoles, la civil de los godos, y ambas leyes podian modificarse por los pactos que el recomendado, el beneficiario ó el colono hubiese convenido con el señor de quien recibiera tierra ó á quien rindiera homenaje. Así el hombre libre pedia justicia al conde ó á jueces árabitos, segun fuese franco ó español, y aún siendo español, segun la naturaleza y la gravedad de la causa: el hombre no libre debia acudir con sus demandas á su señor ó al conde, conforme fuese la calidad del demandado y la naturaleza de la acción deducida.

Los rescriptos de Ludovico Pio y de Cárlos el Calvo, en otro lugar reseñados, ofrecen de todo lo dicho cumplida demostracion. En el de 814 dispuso Ludovico que los españoles, sus nuevos súbditos, estuvieran bajo la jurisdiccion del conde, en todas las causas civiles y criminales en que fuesen actores ó reos, excepto las de menor cuantía, las cuales podrian decidirse por jueces elegidos de comun acuerdo entre las partes. Verdad es que esto no obstante, cree Pedro de Marca que de las causas menores co-

nocian los magistrados municipales (1); mas sobre no ser conforme tal opinion con el texto indicado, no puede tampoco asegurarse que aquellos magistrados subsistieran en Cataluña despues de la invasion sarracena. Lo probable y lo probado es que en tales casos, hicieran de jueces los patronos de los demandados, ó los caudillos elegidos por los mismos españoles, para el gobierno de sus negocios privados, que no eran de la competencia de la autoridad pública, ó los árbitros nombrados por las partes, con arreglo á la legislacion visigoda.

Como la ley era personal en los pueblos germánicos y los condes y los jueces que juzgaban con ellos, eran en los primeros tiempos, por lo general, francos, versados á lo más, en sus leyes y costumbres propias, no hubieron de ser estos tribunales los mejores intérpretes, ni los más cumplidos ejecutores de la legislacion visigoda, que era la única aplicable á los españoles. Este inconveniente se propuso sin duda remediar el rey Cárlos cuando reformó el rescripto de su antecesor, ordenando que los españoles no estuviesen sujetos á la jurisdiccion del conde, sino en las causas graves por los delitos de homicidio, raptó é incendio, y que en todas las demás fueran juzgados *segun su ley y por otros hombres* (2); esto es, segun las leyes visigodas y por jueces que eligieran con arreglo á ellas, los mismos litigantes, entre los hombres de su nacion, ó por los señores bajo cuya dependencia estaban constituidos. Esta jurisdiccion señorial se hallaba por lo demás, plenamente confirmada, tanto por el rescripto de 814 que la atribuyó á los españoles, que diesen tierras á los hombres de condicion servil, y á los condes que las otorgaran á título de beneficio, cuanto por el de 816 que declaró que los que se recomendasen á los condes ú otras personas, poseerian las tierras que de ellos recibieran, con las condiciones que estipularan (3).

Los documentos catalanes de los siglos ix, x y xi dan suficientemente á conocer la forma en que los condes ejercian su jurisdiccion, tanto entre sus vasallos, como entre estos y los ajenos. Lástima es que no pueda decirse otro tanto de los juicios entre españoles no sujetos inmediatamente á la jurisdiccion civil de los condes, que ó por no haber sido reducidos á escritura, ó por la incuria del tiempo, no han dejado al parecer ninguna memoria fehaciente. El exámen de los primeros arroja mucha luz sobre la

(1) *Marca hisp.* lib. 3, c. 19, n. 6.

(2) *España sagr.* t. 29, apénd. 11.

(3) *Marca hisp.* lib. 3, c. 19.—*España sagr.* t. 43, apénd. 2.

historia de las instituciones judiciales en el Principado, revelando desde luego, cómo los francos introdujeron en él las formas de su organizacion judicial y de su procedimiento, áun en casos en que hubiera debido aplicarse la legislacion civil visigoda.

Sabido es que en Francia el rey juzgaba á los condes, antrustiones y vasallos principales en el tribunal de la corte, con el concurso de los Pares, ó en la Asamblea general del *campo de Mayo*; y que los condes, en las Asambleas particulares del condado ó del canton (*mallus*), que se celebraban tambien periódicamente, con igual concurso, juzgaban á sus vasallos propios, á los inmediatos de la corona y á los hombres libres. Pues esta misma práctica hubo de prevalecer en Cataluña, puesto que hay memoria de muchos *mallus publicus* celebrados en los siglos ix, x y xi. Componian estas asambleas el conde ó su vicario, los vizcondes, algun obispo ó eclesiástico de categoria, cierto número de jueces nombrados en tal concepto por el conde, algunos vasallos señoriales, el sayon y los hombres libres que asistian voluntariamente. Ante ella se presentaba el actor, por sí ó por medio de procurador, proponiendo su demanda. Citado el reo, comparecia alegando sus excepciones. Ambos eran en seguida requeridos á manifestar sus respectivas pruebas. Examinados los documentos y los testigos presentados por una y otra parte, se preguntaba á los litigantes si tenian alguna tacha que oponerles; y oidos sobre este punto, los jueces solos ó en union con el conde ó su vicario, ó el vizconde y con los vasallos señoriales, ó los *pares*, pronunciaban la sentencia.

Hé aquí un ejemplo de aquellos juicios, segun lo refiere un diploma de 843:

«El conde Adalarico (godo por el nombre, aunque no habria muchos de esta nacion) en compañía con Gundemaro, obispo de Gerona; Wadimiro, Carpion y Leuchiriano, vasallos señoriales; Assemundo y Hemano, vicarios; Trosoario, siervo de Dios; Obasio, Geruntio, Salomon, Ildesindo, Sanson, Sentrario, Benerello y Daniel, jueces nombrados para fallar causas; Forte, sayon y otros muchos hombres que estaban con ellos, se constituyeron en la ciudad de Ampurias en el *mallum publicum* para oír y decidir muchas causas.» Ante esta asamblea se presentó un hombre llamado Ansulfo, con poder del obispo de Gerona, quejándose del mismo conde Adalarico, porque disputaba injustamente á la iglesia de aquella ciudad cierta participacion que le correspondia en los derechos de las aduanas, en los pastos y en los productos de los condados de Ampurias y Peralta. Los tres vasallos señoriales, los dos vicarios y los nueve jueces an-

tes nombrados, preguntaron entónces á un tal Scluvan, apoderado del conde, lo que respondia á esta demanda; y como negara el derecho de la iglesia, mandaron al apoderado del obispo Ansulfo que lo probase. Entónces presentó éste un privilegio de Ludovico Pio y varios testigos acaudalados, que declararon haber visto á todos los obispos de Gerona poseer los derechos disputados. Preguntado despues Scluvan si tenia alguna tacha que oponer á estos testigos, ó si podia contradecir é invalidar su testimonio con otros mejores y en mayor número, contestó negativamente. Ordenósele en seguida poner esta manifestacion por escrito firmado de su puño, miéntas se escribían las declaraciones de los testigos, con los juramentos de cada uno. Hecho así, los tres vasallos señoriales, los dos vicarios y los nueve jueces, invocando dos textos del Espiritu-Santo y la ley visigoda que manda exigir pruebas, tanto del actor como del reo y fallar á favor del que las suministre mejores, á juicio del juez, pronunciaron su sentencia, condenando al conde á devolver al obispo la posesion é investidura de los derechos litigados (1).

El conde y en su defecto el vizconde, nombraba los jueces y presidia el *mallus*, segun he dicho, y autorizaba la sentencia, pero no la dictaba materialmente. Los jueces y los pares eran los que en realidad decidían todas las cuestiones. El conde se reservaba, sin embargo, cierta facultad extraordinaria, de que usaba raras veces, para rever por sí las causas, ó hacer confirmar por los jueces que las dictaran, las sentencias cuya justicia estimaba dudosa.

Los diplomas de aquella época ofrecen algunos ejemplos del uso que hacían los condes de esta facultad. Hugo, conde de Ampurias, requirió á la condesa Ermesinda, para que le restituyese un alodio enajenado en su concepto, con vicio de nulidad, y ofreció fiadores de estar á derecho. Hugo no los admitió y propuso que se ventilara la cuestion por medio de un duelo entre dos caballeros, puestos uno por cada parte, á lo cual no accedió la condesa, porque la ley gótica no reconocia esta forma de juicio. Siguiose luego el pleito ante el conde de Besalú, acompañado de un obispo,

(1) *Marca hisp.* apénd. 16. — For. judic. l. 6, t. 2, lib. 2.

Un *mallus*, compuesto de dos vizcondes, siete jueces y muchos hombres libres, conoció de otro pleito entre un tal Leon y el obispo de Gerona, sobre reivindicacion de ciertas fincas, hácia el año de 850. Un conde Mirón, siete jueces y muchos hombres buenos formaban el *mallus*, que en 874, conoció de otro pleito, en que el mismo conde reclamaba como siervo, á uno que se decia libre. *España sagr.* t. 43, apénd. 9. — *Marca*, apénd. 34.

tres jueces, veinticuatro nobles y otras personas de calidad, y los jueces lo fallaron á favor de Ermesinda. Mas el conde de Besalú, que habia presidido el *mallus*, no se conformó con esta sentencia y mantuvo pendiente el pleito, hasta que excogitó, segun dice el documento que lo refiere, «una cosa inaudita,» que fué ordenar á los jueces sentenciadores que confirmaran su fallo con un juramento, ante el altar de San Ginés. Hicieronlo así, y entónces quedó firme aquel fallo y tranquila la conciencia del conde (1).

Los jueces y los pares del *mallus* fallaban al principio y hasta el siglo xi por lo ménos, sobre el hecho y el derecho; mas desde el siglo xii aparecen redactadas casi todas las sentencias con una fórmula semejante á la del pretor romano. Con ella decidia el tribunal la cuestion de derecho, en el supuesto de que se justificaran despues los hechos alegados que le daban origen. Léese en un documento de 1145, que un tal Guillermo compareció ante el conde D. Ramon y su curia, demandando á cierto Poncio, porque siendo su vasallo *soliu*, habia rendido homenaje á otro señor. Poncio negó su calidad de tal vasallo. Los jueces fallaron que si Guillermo probaba sus asertos con documentos ó testigos, debia desistir el demandado de su nuevo vasallaje y prestar á aquel señor los servicios debidos (2). Otros muchos ejemplos pudiera citar del uso de esta fórmula en las sentencias, que arguye, como se ve, una alteracion importante en el sistema de procedimientos. Hay gran diferencia entre el modo de enjuiciar que revelan los documentos más antiguos, ántes mencionados, en que los jueces con los pares, en presencia del *mallus*, recibian la demanda y la excepcion, oian los testigos, reconocian las pruebas y dictaban sentencia, todo las más veces, en un solo acto, y este otro sistema en que se distinguia cuidadosamente la

(1) *Marca*, apénd. 181.

(2) Bofarull, *Colec. de documentos inéditos del Archivo general de la corona de Aragon*, t. 4.º, doc. 40.

Esta coleccion ofrece otros ejemplos análogos. En 1151 demandó Guillermo de Aquilon al arzobispo de Tarragona, ante el conde D. Ramon y su curia, entre otras cosas, porque le habia despojado de ciertos derechos que le correspondian en la ciudad; y como el arzobispo negara el hecho, los jueces le condenaron á indemnizar al actor de los derechos de que éste probara haber sido privado. (Doc. 61, t. 4.º) Un sugeto llamado Pedro de Podio Viridi demandó en 1157 al vizconde de Barcelona, ante el conde D. Ramon y sus jueces, porque habiendo ido con él en hueste á Narbona y á Aragon, donde sufrió muchas pérdidas, no habia sido indemnizado de ellas, ni pagado su servicio. El vizconde respondió que habia satisfecho al demandante, segun su propia estimacion y como era justo. El tribunal condenó al demandado á abonar á Pedro la cantidad que éste probase faltarle para el completo resarcimiento de sus pérdidas, (Doc. 99, t. 4.º)

cuestion de hecho de la de derecho, dando el tribunal la fórmula para resolver la primera y abandonando á otros jueces inferiores la investigación de los hechos y la calificación de las pruebas en que habia de fundarse el fallo. ¿De dónde pudo venir esta innovacion importante? En España no tenia precedentes que en el siglo xii pudieran recordarse. Probablemente vendria de las provincias del Mediodía de Francia, donde como es sabido, se conservaba el uso del derecho romano.

CAPÍTULO V.

De la jurisdiccion señorial y de la real, segun la antigua legislacion de Cataluña.

Examinadas la organizacion judicial y la competencia de los tribunales, segun el derecho general escrito posterior al *mallus publicus*, obsérvase que lejos de separarse la jurisdiccion de la propiedad territorial, se une más íntimamente á ella y no se rompe esta alianza, hasta que en el siglo xv logra sobreponerse la autoridad real á las potestades locales nacidas del feudalismo. Los *Usages* publicados en el siglo xi, las *Constituciones* de los reyes de Aragon, promulgadas la mayor parte en las Córtes de Cataluña, y las *Costumbres* que el canónigo Pedro Albert redujo á escritura, y merecieron tener fuerza de ley escrita en todo el Principado, reconocieron de consuno en el dominio de la tierra, la fuente principal de toda jurisdiccion, por más que procuraran al mismo tiempo conciliar en lo posible este principio con los derechos de la soberanía, de los cuales era á la vez una limitacion importantísima. Estos derechos subsistian en concepto de los juriscultos, no obstante la regla general que atribuia al señor, ya lo fuera el rey ó ya algun vasallo, el gobierno de sus tierras propias, cualesquiera que fuesen por otra parte, la autoridad del uno sobre los naturales y moradores del reino y la de los otros sobre sus vasallos, segun la calidad y la naturaleza de la causa litigada.

Era regla fundamental del procedimiento que todos los hombres debian comparecer en juicio ante su respectivo señor, empezando por prestar una fianza llamada *firma de derecho*. La cuantía de esta fianza era proporcionada á la calidad de la persona que debia prestarla y al número de castillos, feudos ó caballerías de tierra que poseyera. Su objeto en cuanto al

actor, era garantir su asistencia al juicio en el término de dos meses, y el pago de una multa igual á la décima parte del importe de la demanda, en el caso de ser vencido en el pleito: y en cuanto al demandado, asegurar el cumplimiento de la sentencia, si le era contraria. Los condes, los vizcondes y los *comitores*, como sujetos á la inmediata jurisdiccion del soberano, debian *firmarle derecho* con una fianza de cien onzas de oro por cada castillo de los que poseyeran: los caballeros debian *firmar* á sus respectivos señores afianzando diez onzas de oro por cada caballería de tierra y por cada castillo y una suma proporcionada al valor de los feudos menores que disfrutaran: los vasallos labradores ó colonos afianzaban sólo por cinco sueldos, y los vasallos sin tierra, ni más vínculo con el señor que el personal del homenaje, cinco onzas de oro (1). Era tan inherente esta obligacion al dominio de la tierra, que los reyes de Aragon *firmaban derecho* al obispo de Vich, por ciertos feudos que de él tenían (2).

Los límites de la jurisdiccion variaban, como he dicho, segun la naturaleza de la causa y la calidad de las personas que intervinieran en ella. Unos poseian la jurisdiccion plena, alta y baja, con mero y mixto imperio: otros la jurisdiccion civil, con el mixto imperio, llamada *baja*, y otros solamente la simple jurisdiccion civil. La plena facultaba para conocer de todas las causas é imponer todos los castigos, incluso el de muerte; la *baja* autorizaba para conocer de todos los pleitos civiles, cualquiera que fuese su cuantía, de los negocios llamados hoy de jurisdiccion voluntaria y de ciertos delitos menores, que se castigaban con multa; la simple jurisdiccion civil no daba competencia sino para conocer de ciertas faltas penadas con multas, que no excedieran de cinco sueldos, ó azotes sin efusion de sangre, de los juicios verbales y de los *emparamientos* de feudos, ó sea el secuestro temporal de ellos, cuando el vasallo cometia ciertas faltas (3).

Al rey correspondia la jurisdiccion plena en las tierras de la corona, y el mero imperio solamente en las de señorío, excepto aquellas cuyos dueños disfrutaban tambien esta potestad por privilegio ó costumbre. Tales eran el conde de Urgel, el de Ampurias, el de Pallars y otros condes y barones (4). Los señores feudales no tenían, pues, en virtud de este título, me-

(1) Usag. *Omnes homines*. Constit. vol. 1.º lib. 3, t. 1.

(2) Calicio. In usat. *Omnes homines*. Antiq. Barchinon. Usatici, etc.

(3) Cancer. *Var. Resolutiones*, pars 2.ª, c. 2, n. 46 al 55.

(4) Montejudaico In Usat. *Ex magnatibus*. Este usage prohibe á los *magnates*, que eran los vizcondes, comitores y valvasores, imponer la pena de muerte. El usage *Qui*

ro imperio, ni alta jurisdicción criminal, ni podían imponer penas de sangre; pero si disfrutaban jurisdicción baja en los pleitos y causas de sus vasallos *soliu*, que no dieran lugar á tales penas, ni afectaran á feudos ajenos (1): en todos los pleitos de sus vasallos *non soli*, sobre bienes de sus feudos, ó con ocasion de éstos: y en los de sus colonos labradores ó enfiteutas, por razon de sus tierras. Si uno de los litigantes era hombre libre y otro vasallo, el señor de éste debía conocer de la causa. El que tenia feudos de distintos señores, estaba sujeto á la jurisdicción de aquel de quien era vasallo *soliu*; y no siéndolo de ninguno, á aquel de quien tenia el mayor feudo (2). Lo que no podía ningun señor era hacer comparecer en juicio al vasallo, fuera de sus tierras propias.

Ni dejaba de ser juez competente el señor, aunque fuera parte en la causa de su vasallo, siempre que ésta versara sobre cuestiones relativas al feudo, ó sobre hechos ejecutados en desprecio ó menoscabo de su autoridad; mas entonces debía cometer el conocimiento del asunto á los *pares* de su contendiente, ó sea á jueces elegidos entre sus iguales en estado y condicion. El rey mismo no estaba exento de ofrecer á sus vasallos, en los pleitos en que era parte con ellos, esta garantía importantísima de independencia é imparcialidad judicial. Así decia D. Pedro II en una Constitucion de 1285: «Todas las causas feudales que tengamos con los barones ó con los caballeros de Cataluña, las haremos juzgar por los pares; esto es, los barones por los barones, los caballeros de un escudo por los caballeros de otro escudo; y que los dichos pares puedan elegir asesores no sospechosos» (3). Mas si el vasallo de quien habia algo que reclamar, era adscrip-
ticio, podia el señor, cualquiera que fuese el motivo y el objeto de la causa, nombrar juez de ella á cualquier persona, ó sentenciar por sí mismo, sin forma de juicio, porque segun decia un jurisconsulto contemporáneo, es-

justitiam reserva á las *Potestades*, que eran segun los intérpretes, los condes soberanos, tales como el de Barcelona, el de Urgel, el de Ampurias, el de Pallars y algunos barones, la facultad de hacer justicia en los homicidas, adúlteros, envenenadores, ladrones y traidores.

(1) Usag. *Placitare vero*, el cual dispone que los vizcondes, comitotes, valvasores y caballeros litiguen ante el conde, en los pleitos que con él ó entre sí tuviesen, y que por regla general litigue cada uno ante el señor de quien sea vasallo *soliu* (Calicio, comentario á dicho usage. Costum. 43, t. 27, lib. 4, vol. 1, Const.) Jaime II declaró en 1291 que nadie seria obligado á litigar por los honores que poseyera, sino ante el señor de quien los hubiera recibido. (Const. 6, t. 2, lib. 3, vol. 1.º)

(2) Glosa á dicho usage *Placitare* y comentario de Calicio al mismo.

(3) Const. 3, t. 27, lib. 4, vol. 1.º

tos desdichados vasallos podían ser tratados en su persona y bienes al libre albedrío de sus señores (1).

No se crea, sin embargo, que la jurisdicción feudal, propiamente dicha, dependía también en algunos casos, de la calidad de las personas, y su categoría. Si alguna duda pudiera caber en este punto, la desvanecería una Constitución promulgada por D. Jaime II en 1311, en la cual se declaró que cuando un castillo ó lugar poblado de vasallos se transmitiera por cualquier título, á persona inferior á la que ántes lo hubiese tenido, como de un caballero á un simple ciudadano, ó á un villano, se entendiera transmitida también al nuevo dueño, la jurisdicción competente para conocer de todas las causas feudales de los mismos vasallos (2). Esta jurisdicción se transfería, pues, como se transfieren hoy los derechos reales constituidos sobre los bienes inmuebles.

La jurisdicción civil en las causas no feudales y la criminal no eran atributos esenciales del dominio de los feudos, y por eso aunque fuesen también unidas á cualquiera especie de dominio, solían depender de otros títulos, como el privilegio ó la costumbre. Cuando en un lugar de feudo, ganaba el señor por merced ú otro título, la jurisdicción ordinaria, cesaban todas las limitaciones propias de la feudal, confundiéndose ambas en una sola (3), y en virtud de ella conocía entonces el señor de todas las causas civiles y criminales, que no excluyera la especie de jurisdicción ganada. Las mercedes reales y la prescripción inmemorial eran los títulos que más frecuentemente contribuían á ampliar de este modo las jurisdicciones feudales y á poner casi toda la autoridad pública en manos de los propietarios. En vano los jurisconsultos, interpretando estrictamente los textos legales, sostenían que el mero imperio no era prescriptible contra el soberano, si era comunicable á su voluntad y podía prescribirse contra otros particulares que ántes lo hubieran poseído, y si eran, á no dudarlo, prescriptibles por más ó ménos tiempo, el mixto imperio y la simple jurisdicción (4). Con estas facilidades para la prescripción, con la doctrina jurídica que declaraba privativa y no acumulativa con la ordinaria, toda jurisdicción desprendida de

(1) "Sine iudicio poterit (dominus) eos ad libitum tractare, et bonæ ejusdem Montejudaico, In usat. *Omnes homines*.

(2) Const. 4, t. 27, lib. 4, vol. 1.º

(3) Calicio, In usat. *Placiture*.

(4) Usag. *Hoc quod juris est* y su glosa ordinaria con el comentario de Montejudaico y de Guillermo Vallesica.

la corona (1), y con la opinion comun ántes enunciada, que estimaba otorgada con jurisdiccion, toda tierra concedida por el rey, salvo reserva expresa en contrario, vinieron á conocer los señores feudales de una parte muy considerable, la mayor quizá, de los pleitos y causas del Principado.

Correspondian á la jurisdiccion ordinaria del rey todas las causas civiles y criminales de sus vasallos propios y muchas de los vasallos ajenos, cuyos señores no tenian la necesaria para conocer de ellas. Tambien disfrutaba el rey cierta potestad eminente sobre todos los habitantes de su territorio, á fin de mantener entre ellos la paz y la justicia. Era juez único de sus propios vasallos en todas las instancias, por el doble título de señor y de soberano: éralo asimismo tambien en todas las instancias de los vasallos ajenos, pero sólo en determinadas causas, y por el mero título de soberano del territorio, aún en aquellos lugares en que habia perdido ó nunca habia ganado la plenitud de la soberanía. Como cabeza ó señor de los principes, magnates y caballeros con quienes compartia su potestad, era el regulador supremo de la justicia, puesto que se habia reservado la facultad de conocer de las apelaciones y quejas de sus jueces delegados y de la mayor parte de los señores jurisdiccionales.

Ejercia el rey su jurisdiccion en primera instancia por medio de los *requeres* ó *vicarios*, segun su denominacion latina, y de los *bayles*; y en segunda ó última, por medio de sus *jueces de córte*, ó de la Real Audiencia, ó por si mismo. Para este efecto se hallaba dividido el territorio de Cataluña en distritos llamados *veguerias*, de vária extension, segun que comprendian ciudades ó villas. Dentro de las *veguerias* se encontraban á veces, aunque con grande irregularidad, otras demarcaciones menores, llamadas *baylias*, en las cuales ejercian los bayles casi toda la jurisdiccion. Fueron estos probablemente en su origen los delegados del rey, para el ejercicio de su jurisdiccion civil, en las causas sobre feudos de la corona y para la exaccion de los derechos y servicios feudales, asi como los *vegueres* ejercian la jurisdiccion real en todas las demás causas que eran de su competencia. Mas confundiéndose con el transcurso del tiempo las dos personalidades del monarca, como señor territorial y como soberano, se confundieron tambien las potestades que de cada una de ellas emanaban, y por lo tanto las atribuciones de los delegados que las ejercian. Asi tuvieron muchos bayles la misma jurisdiccion que los *vegueres* en sus respectivas demarcaciones.

(1) *Cancer. Var. Resolut.*, pars 2, c. 2.

Hallábase Cataluña á la sazón poblada de castillos, nombre que se daba á cualquiera fortaleza con su término jurisdiccional, en que habitaba una poblacion, á veces muy numerosa y con vastos terrenos de labor y de pasto. Pertenecian al castillo todos los que tenian su domicilio en esta demarcacion territorial, los cuales por este solo hecho, se constituian en cierta dependencia más ó ménos estrecha, del caudillo que tenia á su cargo la fortaleza, ora fuese dueño alodial, ora señor feudatario ó simple alcaide ó delegado amovible y temporal del monarca. Pero de cualquier modo que los castillos se posesesen, debian depender de alguna *vegueria*, para los efectos de la potestad que segun los casos, correspondia en ellos á la corona. Segun era el título en cuya virtud poseia el castillo el que lo tenia á su cargo, así era más ó ménos estrecha esta dependencia del veguer y la de los habitantes del distrito. Si el jefe de la fortaleza era señor alodial del término, con jurisdiccion no feudal, la autoridad del veguer era excepcional y limitadísima, al paso que si la tenia como feudo de la corona, sin más jurisdiccion que la propia del mismo, ó en tenencia ó encomienda, y por lo tanto sin jurisdiccion feudal, era respectivamente la del veguer mucho más extensa. Los bayles dependian tambien de los vegueres, en cuanto al ejercicio de la jurisdiccion criminal, y estaban sujetos á ellos en sus pleitos, como particulares (1).

Habia además en algunas parroquias y villas de las que formaban las veguerías, sub-vegueres y sub-bayles, que eran, como lo indica su título, unos delegados de los bayles y de los vegueres. Estos nombraban los sub-vegueres, pero solamente allí donde la antigua costumbre les autorizaba á ello, porque en otras partes correspondia su nombramiento al rey (2). Los sub-bayles eran á su vez, nombrados por los bayles, bajo cuya responsabilidad debian actuar (3). El rey nombraba los vegueres y los bayles, excepto el veguer de Vallés, cuyo nombramiento correspondia al de Barcelona, y dependia de él, por especial privilegio (4).

Los vegueres ejercian su jurisdiccion civil y criminal con el auxilio de asesores letrados, que nombraba el rey y se renovaban cada tres años (5).

(1) Mieres, *Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathalonie*, part. 2.^a, Collat. 6.^a, cap. 23 y Collat. 9.^a, c. 35.

(2) Mieres, obr. eit., part. 1.^a Collat. 9.^a c. 10. — Const. 13, t. 43, lib. 1, vol. 1.

(3) Const. 13, ibid.

(4) Const. 2, t. 23, lib. I, vol. 2. D. Alfonso II en 1289.

(5) Los asesores del veguer de Barcelona eran, sin embargo, nombrados por éste y los *Concelleres* de la ciudad. Const. 1, 2 y 6, t. 44, lib. 1, vol. 1, D. Jaime II en 1284.

Conocian sin forma de juicio y sin apelacion, de las causas que no excedian de 50 sueldos, y en juicio verbal, de las de ménos de 20 libras (1). Eran jueces ordinarios, así en lo civil como en lo criminal, de los barones, de los nobles, de los caballeros, de los hombres llamados de *parada* y de todos los que ejercian alguna jurisdiccion señorial y no estaban sujetos á la de otro señor, pues si la tenian en tierra enclavada dentro de algun condado ó baronía, no era el rey su juez, sino el conde ó el baron (2). Los huérfanos, las viudas y los pobres estaban bajo su proteccion especial. Su autoridad, así como la de los bayles, conservaban de tal modo el carácter de delegadas, que cuando el gobernador general ó su teniente se hallaba en alguna veguería ó baylia, podia conocer de todas las causas pendientes en ella (3).

Las facultades judiciales de los vegueres respondian cumplidamente á los fines principales de la jurisdiccion real en tiempos de feudalismo, que eran: primero, administrar justicia en todas las instancias á los hombres no sujetos á señores; segundo, procurar que los señores la administraran rectamente; y tercero, castigar los grandes crímenes, para cuya represion solia ser la jurisdiccion señorial insuficiente. Al primero de estos fines correspondia la jurisdiccion civil de los vegueres para conocer de los pleitos no feudales entre vasallos, cuyos señores tenian únicamente jurisdiccion feudal: de las acciones personales entre señores y enfiteutas ó censatarios: de las cuestiones de estado, en que se disputaba el de vasallaje: de los pleitos sobre deudas de barones y caballeros, y de la ejecucion de las sentencias de árbitros ó delegados (4).

Al otro fin de la jurisdiccion real, de procurar se hiciera recta justicia en los hombres no sujetos inmediatamente al rey, correspondia la competencia de los vegueres para requerir á los señores á que juzgasen á sus vasallos, cuando éstos se quejaran de denegacion de justicia: para entrar y hacer represalias en tierras cuyo señor, despues de requerido por el veguer, rehusara conocer de alguna causa entre sus vasallos, ó de alguna demanda, que por deudas, dedujese contra él algun vasallo del rey; y para conocer de algunas apelaciones de sentencias dictadas por los señores (5).

(1) Const. 2, D. Pedro III en 1363 y Const. 3, D. Fernando II en 1493, t. 1, lib. 3, vol. 1.

(2) Mieres, *Apparatus sup.* Const. Pars 1.^a, Collat. 2.^a, c. 55.

(3) Const. 2, t. 37, lib. 1, vol. 1, D. Pedro III en 1358.

(4) Montejudaico, In usat. *Omnes homines*. Const. 4, t. 2, lib. 3, vol. 1.^o D. Pedro II en 1283. Calicio, In usat. *Placitare vero*. Mieres, obr. cit. p. 1.^a Collat. 3.^a c. 14.

(5) Calicio, In usat. *Placitare*, Mieres, obr. cit. p. 1.^a Collat. 2.^a c. 43.

Tales eran las que decidían en primera instancia y con el concurso de los pares, causas feudales, si no había señor superior á quien apelar, ó causas por acciones personales no feudales, entre el señor y el vasallo, ó por daños ocasionados en bienes de feudo (1).

Al último fin de la real jurisdicción, de reprimir los grandes crímenes, correspondía la jurisdicción criminal ordinaria y extraordinaria de los vegueres, de que trataré más adelante. Pero no concluiré este asunto sin hacer notar que la jurisdicción civil de los vegueres hubo de ser ejercida en su origen y en parte al ménos, por jueces nombrados para cada caso por los mismos litigantes. La antigua jurisprudencia catalana atribuía á dos ó más de estos jueces el conocimiento de las causas llamadas *comunes*, que eran todas las que no debían ventilarse ante la jurisdicción señorial. Así un usage que determinaba las instancias que habían de tener los juicios, dice expresamente que «pronunciada la sentencia por los jueces elegidos por ambas partes...» podrá revocarse, etc. (2) Mas como en el siglo xiv no solía practicarse ya esta elección, dió aquel usage lugar á dudas entre los glosadores. Calicio, sin embargo, lo consideró acertadamente como reliquia de la legislación visigoda, de la cual se conservó gran parte en la catalana. Y en efecto, según la ley 13, tít. 1.º, lib. 2.º del *Forum judicum*, podían los litigantes elegir sus jueces, nombrándolos en escritura firmada por tres testigos. Pero lo que no hubo de advertir Calicio, y da más autoridad á su opinión, es que Ludovico Pio en su rescripto de 814, y Carlos el Calvo en el suyo de 844, confirmaron la ley visigoda, ordenando el primero que las causas menores de los españoles se decidieran por jueces elegidos por las partes, y el segundo que todas las causas, excepto las de homicidio, incendio y rapto (cuyo conocimiento pertenecía á los condes), en que fueran parte los españoles, se decidieran con arreglo á sus leyes, por ellos mismos (3).

No es fácil hoy comprobar el uso que hicieran los españoles de este derecho en los tiempos anteriores á la publicación de los usages, pues aunque las sentencias que de aquella remota edad se conservan, aparecen dictadas «por jueces mandados para dirimir las causas,» según la expresión de

(1) Calicio, In usat. *Placitum judicatum*.

(2) Usag. *De omnibus causis*. «Et judicia data a iudicibus ex utriusque partibus electis.»

(3) *Liceat eis (Hispaniis) secundum eorum legem de aliis hominibus judicia terminare.* (*España sagr.*, t. 29, apénd. 11.—*Marca*, lib. 3, c. 19, n. 6.)

los diplomas (*qui jussi sunt dirimere causas*), juntamente con el conde, los *pares* y otras personas, esta frase parece indicar más bien el nombramiento de tales jueces por los condes, para fallar todas las causas que habian de verse en una audiencia ó sesion del tribunal, que el hecho de haber sido aquellos designados para una sola causa, por las partes en ella contendientes. Esto se infiere tambien de las sentencias que se conservan de los siglos xi y xii, las cuales aparecen ya dictadas por jueces elegidos por los respectivos condes, cuando éstos no las pronunciaban por sí, acompañados de prelados y de otras personas, á quienes no se daba el dictado de jueces. Mas aunque en el siglo xi no estuviere derogado este derecho, puesto que hacen mencion de él los usages publicados entónces, hubo despues de caer en desuso, cuando los juriseconsultos catalanes de los siglos xiii y xiv no acertaban á explicar satisfactoriamente las palabras del usage que á él se referia. Sólo Calicio, que era el más docto de ellos, le atribuyó el origen ántes indicado, añadiendo que en su tiempo se presumia que los litigantes nombraban y aprobaban para sus respectivas causas, á los jueces ordinarios, cuando no los recusaban por sospechosos, ni procuraban sustituirlos con otros (1).

CAPÍTULO VI.

Preominio de la jurisdiccion real sobre la señorial.—Paces y treguas del señor.—Procesos de somaten.

Aún más extensa que la civil era la jurisdiccion criminal de los vegueros, pues comprendia el mero y mixto imperio, al cual estaban sujetos no sólo los vasallos directos del rey, sino todos los naturales, cuyos señores no tuvieran sobre ellos igual potestad. En su virtud, juzgaban aquellos funcionarios en primera instancia, todos los delitos que cometian dentro de su territorio, los hombres no sujetos por ellos, á la jurisdiccion de sus señores particulares. Y como el mero imperio no era inherente al dominio feudal, puesto que correspondia de derecho al rey, y no lo tenian más que algunos señores por privilegio ó costumbre, no eran pocos los hombres sujetos en lo criminal al fuero del veguer. Extendíase además esta jurisdic-

(1) In usat. *De omnibus causis*.

cion, lo mismo que la civil, en casos determinados, á vasallos no sujetos ordinariamente á ella, mediante los procesos llamados de *paz y tregua* y de *somaten*, cuyo origen y circunstancias recordaré brevemente, para dar á conocer mejor su influjo en la decadencia de la jurisdiccion señorial.

Cuando la autoridad pública no logra asegurar y proteger suficientemente los derechos de la comunidad y de los individuos, la sociedad misma inventa medios ingeniosos, independientes del gobierno, con que proveer á su seguridad y su conservacion. Así los pueblos germánicos, en quienes un sentimiento de exagerado individualismo impidió durante muchos siglos organizar la autoridad pública de un modo adecuado á su fin, idearon suplir su insuficiencia, entre otras instituciones, con la llamada de *paces y treguas*. Era este un procedimiento encaminado á garantir con una proteccion especial á determinadas personas, sus familias y sus propiedades, privando al mismo tiempo de todo derecho y de toda garantía social á las excluidas de semejante beneficio. Los que de él participaban, los *asegurados*, vivian al amparo de las leyes y debian ser ayudados y defendidos por todos los que disfrutaban igual favor; los *excluidos* eran aquellos que por haber quebrantado la paz, cometiendo algun delito en daño de hombres ó de bienes protegidos por ella, se veian arrojados de la sociedad, podian ser impunemente ofendidos y muertos por cualquier persona, perdian todos sus derechos civiles como padres y como maridos, sus cabezas eran pregonadas y puestas á precio por aquellos contra quienes habian delinquido, sus bienes eran confiscados, y al morir quedaban sus cuerpos privados de sepultura (1).

Conocian los germanos diferentes clases de *paces y treguas*. Habíalas públicas y privadas. Las primeras eran generales y de derecho comun ó especiales. Las generales aseguraban la proteccion de las leyes á los hombres de una misma nacion residentes en determinados territorios, negándola á los extranjeros que moraban ó venian á mezclarse con ellos. Especiales eran las que se daban á favor de los que concurrían á las asambleas políticas (2) ó á los ejércitos, las que garantían la inviolabilidad del domicilio, prohibiendo quebrantarlo, aún para aprehender delincuentes, las que favorecian los tra-

(1) Du Boys, *Histoire du droit criminel des peuples modernes*, liv. 1, ch. 4 et 5. Los efectos de la exclusion de la *paz y tregua* fueron despues suavizándose hasta quedar reducidos al destierro temporal, por cuanto éste era un medio legítimo de evitar toda persecucion.

(2) Llamábase ésta *Pax del Ding* ó del tribunal.

bajos agrícolas, prohibiendo toda demanda judicial contra los labradores en ciertos períodos del año, y las que amparaban las iglesias, los palacios reales, los caminos públicos ó los lugares de ferias y mercados, castigando con penas extraordinarias los delitos que se cometían en ellos. *Paces* privadas eran las que otorgaba el rey, á los que se las pedían, y las aceptaban para poner término á sus discordias particulares. El que despues de haber convenido por la mediacion del rey, en suspender ó terminar hostilidades privadas, volvía á ofender á su enemigo, así como el que cometía cualquier delito grave en daño de los protegidos por las paces y treguas públicas, quedaban igualmente privados de toda proteccion social, no podían habitar en poblado y se veían reducidos á vagar por montes y desiertos en la triste condicion de *foragidos*. La sociedad fulminaba contra ellos un terrible anatema: les lanzaba de su seno.

Esta institución germánica hubo de ser introducida también por los francos en Cataluña, puesto que allí la hallamos desde los tiempos de la reconquista, y no fué por cierto de las que ménos contribuyeron á la consolidacion del orden social y de los poderes públicos. De casi todas las clases de paces y treguas conocidas entre los germanos, se encuentran ejemplos en los documentos catalanes de la Edad Media. No sólo debían observarse las paces privadas, convenidas entre enemigos, segun queda dicho, sino que se presumía de derecho su existencia por ciertas señales exteriores, y se castigaba en tal caso su quebrantamiento, aunque en realidad no hubieran sido concertadas. Así el que saludaba ó besaba á alguno, entendiase que le daba tregua, y que incurria en la pena del quebrantamiento de ella, si le causaba algun daño durante el día (1). El que se hospedaba en casa de alguno ó comía á su mesa, le otorgaba tácitamente, por este solo hecho, una tregua de siete días (2). El que se hallaba en compañía de una persona en el momento de recibir ésta alguna ofensa, debía ayudarle contra el ofensor, aunque fuera su señor propio, á ménos que prévia y solemnemente le hubiese el mismo señor requerido para que no anduviera en compañía del agraviado (3).

Habia además otras paces y treguas públicas llamadas *del Señor*, las cuales se convenían y estipulaban entre los obispos, prelados y señores jurisdiccionales de un territorio, y reducidas á escritura pública, se confir-

(1) Usag. Statuerunt et prefati.

(2) Usag. Similiter nempe.

(3) Usag. Constituerunt igitur.

maban y autorizaban por el conde soberano del mismo. Estas constituciones de paz comprendian como las otras, varias prescripciones criminales, cuyo quebrantamiento mandaban castigar con penas más graves que la ordinaria de indemnizacion y multa, tales como la excomunion y la exclusion de la misma paz. Así disponia un usage, por punto general, que los delitos cometidos durante las treguas del Señor se castigaran con doble pena, excepto aquellos en que el agraviado fuera algun hombre excluido de la misma tregua, porque éste, segun escribe Guillermo de Vallesica, glosando el dicho usage, «puede ser maltratado impunemente» (1). Los obispos y prelados contribuian siempre con su autoridad á estas constituciones, ya excitando á los condes y barones á publicarlas de comun acuerdo, ya lanzando contra sus infractores los anatemas de la Iglesia, ó ya reservándose, como señores jurisdiccionales ó como prelados, la facultad de juzgarlos, segun los casos y dentro de los limites de su autoridad respectiva. Los condes soberanos debian, por disposicion de la ley, confirmar estas constituciones, guardarlas en todo tiempo y hacerlas obedecer por los próceres, los caballeros y todos los hombres que moraban en sus territorios (2).

Definian y penaban las constituciones de paz y tregua todos los delitos públicos contra las personas y propiedades, más frecuentes en aquellos tiempos. El modo de proteger especialmente á los eclesiásticos, los huérfanos, las viudas, los labradores, los injustamente acusados, los caminantes, los señores de vasallos, los mercaderes, las iglesias, los cementerios, los caminos, la agricultura y otros objetos respetables era señalar los delitos que en su daño solian cometerse y castigarlos como quebrantamiento de paz y tregua. Dióse, por lo tanto, esta calificacion á los daños causados en las iglesias no encastilladas, ó en las personas ó bienes de los clérigos, monjes, viudas y villanos que no llevaran armas, los embargos de ganados ó animales de labranza verificados ántes de mediar el año, el robo de los mismos durante la tregua, el incendio de casas de payeses, la usurpacion de señoríos y dominicaturas de eclesiásticos ó caballeros, ó de masías ó bienes muebles de villanos, el cultivo de tierras litigiosas, los homicidios, aunque fueran involuntarios, la edificacion de nuevos castillos durante la tregua, el acaudillamiento de gente armada para causar daños, los embargos de los aperos de labor por razon de fianzas que hubieran hecho sus dueños, los daños causados en caminos ó calles á los transeuntes, los robos de todas

(1) Usag. *Omnia malefacta in Antiq. Barchinon. leges, etc.*

(2) Usag. *Item statuerunt.*

clases, la traicion al señor, que no fuera juzgada segun costumbre, las exacciones indebidas de alojamiento, comida ú otros efectos en las masías de rey ó de los villanos, los incendios de mieses, el uso de hondas y de ciertas máquinas de guerra, la falsificacion y la acuñacion de moneda, las ofensas causadas á los que llevaban salvo conducto del rey, la ocultacion de los desterrados por quebrantadores de la paz y tregua y otros delitos semejantes (1).

Para hacer efectiva la responsabilidad de todos estos crímenes, adoptaron las constituciones de paz y tregua muy atinadas precauciones. Los próceres y caballeros, debian responder civilmente de los daños causados por sus hijos. El señor sospechado de haber dado consejo ó ayuda á su vasallo para la ejecucion de algun delito, podia purgarse por el juramento; pero si el vasallo no pagaba la pena, debia ser arrojado de su tierra (2). Cuando el delincuente tenia castillo ó tierra del rey y requerido, no indemnizaba desde luego, ni daba fianza de hacerlo, el rey debia embargarle lo que de la corona poseyera, reparar el daño y conservar la posesion de lo embargado hasta reintegrarse de lo que por él hubiera satisfecho. La misma obligacion que el rey, tenia el señor feudal, cuyo vasallo incurriera en igual falta, y si no pagaba por él, debia entregar á la corona los feudos embargados, á fin de que ella anticipara la satisfaccion, reteniéndolos en su poder hasta que fuera reintegrada de lo que adelantase (3). Por último, para dar mayor eficacia á estas prescripciones, mandó D. Jaime I en 1214 que todos los caballeros, ciudadanos y villanos mayores de 14 años, juraran obedecer y cumplir las constituciones de paz y tregua que promulgó en aquella fecha (4).

A la pena ordinaria de multa doble de la señalada á cada delito en

(1) *Usages Cunctis pateat y Dels Prelats*. Const. de Cathal. vol. 1, lib. 10, tit. 8.—Carta de paz de 1068. *Marca hisp.* apénd. 269.—*Tregua de nostre senyor* de 1163. Const. de Cathal. id. id. Paz y tregua de 1173. *Marca hisp.* apénd. 466 y Const. de Cathal. id. idem—Paz de 1192. Const. de Cathal. id. id. 2.—Paz de 1198 por D. Pedro I. *Marca hisp.* apénd. 490 y Const. id. id. 3.—Paz de 1200 por D. Pedro I. *Marca hisp.* apénd. 492 y Const. id. id. 4.—Constituciones de D. Pedro I de 1202. *Marca id.* apénd. 493 Const. id. id. 5.—Constituciones de D. Pedro I de 1207. *Marca id.* apénd. 495 y Const. id. 6.—Paz de 1214 por D. Jaime I, *Marca id.* apénd. 502.—Paz de 1228 por el mismo. *Marca id.* apénd. 506 y Const. id. 7.—Paz de 1234 por el mismo. *Marca id.* apénd. 513 y Const. id. id. 11.—Respuestas de D. Jaime I al veguer del Rosellon en 1236. *Marca id.* apénd. 524.

(2) Carta de paz de 1068. *Marca hisp.* apénd. 269.

(3) Const. de D. Pedro I de 1207. *Marca hisp.* apénd. 495.

(4) *Marca hisp.* apénd. 500.

las leyes comunes, añadían las constituciones de paz alguna otra extraordinaria en casos particulares, concluyendo todas además con la excomunion y el terrible anatema de la exclusion de la paz pública. La promulgada por el conde D. Ramon y el obispo de Elna para el condado de Cerdaña y Conflent, á favor de los labradores y sus ganados, castigaba á los infractores con una multa de 60 sueldos, cuya tercera parte habia de percibir el obispo (1). La publicada por el arzobispo de Narbona y los obispos de Gerona y de Elna con los condes de Rosellon, Ampurias, Besalú y Cerdaña á favor de las iglesias, de las personas eclesiásticas, de los villanos y de sus bienes, limitaba la pena á la simple reparacion del daño, siempre que se satisficiera en los quince primeros dias; pero trascurrido este término, imponia la doble reparacion, con el juicio del agua fria; y si tampoco pagaba el reo en los quince dias siguientes á la presentacion de la querella, quedaba excluido de la paz y excomulgado, y podia ser maltratado por cualquiera impunemente. El homicida, sin embargo, debia ser condenado en todo caso á destierro perpétuo; y si el homicidio habia sido involuntario, á destierro temporal (2). La constitucion de 1175, promulgada por D. Alfonso II, declaró tambien que el quebrantador de la paz que no pagara su pena en el plazo últimamente señalado, pudiera ser ofendido impunemente, excepto en sus ganados y aperos de labranza, y que quien causara daño á algun caminante, además de satisfacer la reparacion doble, fuera tratado como reo de lesa majestad, á ménos que estuviera en guerra con el ofendido ó que fuera éste su vasallo (3). La constitucion de D. Pedró I, publicada en 1202, mandó derribar las casas de los que quebrantaran la paz, incendiando mieses ajenas. La del mismo monarca de 1207 dispuso que al vasallo del rey que no satisficiera la pena en que incurriera por quebrantamiento de paces, no dieran los barones asilo ni ayuda y que por el contrario, le hicieran la guerra cada uno por sí ó á las órdenes del rey (4).

Las treguas del señor duraban por regla general desde la puesta del sol del miércoles de cada semana, hasta el amanecer del lunes de la siguiente: desde el Adviento hasta la octava de la Epifania: desde el lunes de Carnaval hasta el lunes siguiente á la octava de Pentecostes, y los dias en que la Iglesia celebra las fiestas de la virgen y de ciertos santos (5).

(1) Usag. *Cunctis pateat*. Const. de Cathal. vol. 1, lib. 10, tit. 8.

(2) Usag. *Dels Prelats*. Const. id. id.

(3) *Marca hisp.* apénd. 466.

(4) *Ibid.* apénd. 495.

(5) Usag. *Dels Prelats*. Const. de Cathal. vol. 1, lib. 10, t. 3.

Regian por lo tanto estas constituciones una gran parte del año, y aunque en la restante se castigaran los delitos ménos severamente, hubieron de contribuir no poco á moralizar aquella sociedad semi-bárbara, amenazada siempre en su existencia por los excesos de la fuerza. Fué uno de sus principales beneficios contener un tanto la anarquía á que daba origen la multitud de jurisdicciones particulares, independientes ó sujetas á la corona por lazos debilísimos, extendiendo y consolidando la autoridad del monarca sobre los mismos señores jurisdiccionales. Con los procesos de paz y tregua, sin quedar despojados de su potestad los magnates, barones y caballeros, lo cual era entonces imposible, logró sobreponerse á ella la del rey, supliendo sus negligencias, corrigiendo sus abusos en la administracion de la justicia criminal y asegurando hasta cierto punto la persecucion y castigo de todos los delitos graves, que es la primera necesidad de los Estados.

El quebrantador de las paces no comparecía desde luego ante los jueces reales, sino ante su propio juez, aunque lo fuera el señor territorial ó el obispo. Eralo este último en los más de los casos, por razon del anatema que habia de fulminarse contra el reo, y cuando nó, alguno de los príncipes, prelados, barones ó caballeros que habian autorizado y promulgado la constitucion infringida. Mas si el reo no prestaba la debida reparacion en los quince dias siguientes al de la ejecucion del delito, ó fianza segura de satisfacerla (1), cesaba el juez señorial en el conocimiento de la causa, y desde entónces quedaba sujeto el acusado á la jurisdiccion real, dándose principio al proceso de paz y tregua. En su virtud era requerido el reo á comparecer ante el veguer ó el bayle, para satisfacer al agraviado, y si no lo verificaba, se le declaraba excluido de la paz de Dios en su persona y bienes. Aunque el veguer recibiera primero la querella del ofendido, debia abstenerse de proceder y remitirla al juez señorial, á quien competia su conocimiento, requiriéndole á hacer justicia; pero trascurrido el término de quince ó de treinta dias, segun los lugares, sin darse la reparacion debida, aunque fuera por negligencia del acusador, se devolvía la competencia á la jurisdiccion real ordinaria (2). Desde este momento cualquiera podia impunemente maltratar al reo y los cabezas de familia debian salir en su per-

(1) En algunos condados y obispados era este término de treinta dias.

(2) Carta de paz de 1068. *Marca hisp.* apénd. 269. *Usag. Dels Prelats*. Paz de 1173. *Marca*, apénd. 466. Id. de 1200, apénd. 493. Id. de 1225, apénd. 502. Idem de 1234, apénd. 513.

secucion ó poner en su lugar quien la ejecutase (1). Los barones debian declarar la guerra y el veguer podia aprehenderle y juzgarle (2), y aún solia derribar sus casas y castillos, á ménos que constituyesen feudo de señor no complicado en el delito (3). Era regla general no proceder contra ninguno por paz y tregua, sino á instancia de parte; mas cuando el delito cedia en daño de caminantes ó de extranjeros, tambien podian proceder de oficio el veguer y el obispo en sus respectivos casos (4).

Merced á esta institucion saludable lograron penetrar los ministros del rey en las tierras y en los castillos de los barones, iglesias y señores jurisdiccionales, á pesar de las prohibiciones comunes que lo impedian (5), si bien con la restriccion de juzgar en tales casos por la constitucion de paz del lugar, y no por la ley comun (6). Tambien lograron los vegueres la facultad de declarar la guerra y hacer represalias á los dueños de castillos y jurisdicciones que ofendieran á los vasallos del rey ó les denegaran la justicia, para lo cual podian entrar en sus tierras y tomar en ellas cualesquiera prendas, aunque pertenecieran á sus vasallos (7). Hasta los eclesiásticos y los caballeros, generalmente exentos de la real jurisdiccion, quedaron sujetos á los vegueres en las causas de paz y tregua (8); y como estas debian formarse por la mayor parte de los delitos, tomó así grande incremento la potestad real, con mengua de las jurisdicciones feudales.

Sin embargo, estos procesos no llenaron cumplidamente su fin, porque si bien una vez comenzados, quedaba libre y expedita la accion de la justicia sobre el delincuente, no podian empezar hasta quince ó treinta dias despues de la perpetracion del delito, y entre tanto solian desaparecer sus pruebas y sus autores, si los jueces señoriales, como sucedia frecuentemente, no actuaban con la diligencia necesaria ó no empleaban los oportunos medios de coaccion. Para remediar tan grave inconveniente, se adoptó un nuevo procedimiento llamado de *via fora somatent*, contra los malhechores y bandidos, mediante el cual podian las justicias reales perseguir y castigar sin dilacion alguna, los delitos graves que tenian señalada pena perso-

(1) Paz de 1192. Const. de Cathal. vol. 1.º lib. 10, t. 8, II.

(2) Paz de 1200. *Marca*, apénd. 492.

(3) Const. de D. Pedro III de 1382 en Const. de Cathal. vol. 1.º lib. 10, t. 8, XXI.

(4) Const. de D. Pedro II de 1273. Ibid. XII y XV.

(5) Const. de D. Jaime I de 1228. Const. de Cathal., lib. 1.º t. 33, II.

(6) Const. de D. Alfonso II de 1288. Ibid. lib. 3, t. 2, V.

(7) Mieres, *Apparat. sup. Const.* t. 1., collat. 2.ª c. 1.

(8) Ibid. Collat. 3.ª c. 27

nal, ó que no se redimian con la composicion pecuniaria, los cometidos en caminos públicos y los llamados *in fraganti* (1). Perpetrado alguno de estos delitos, el ofendido ú otro cualquiera podia en el acto de su ejecucion ó en el de tener noticia de ella, lanzar el grito de *somaten*, el cual repetian y continuaban todos los vecinos, hasta que llegaba á oídos del veguer. Este debia admitir inmediatamente una informacion sumaria sobre el hecho denunciado, y su autor, dando cuenta en seguida de lo que resultara á los *concelleres* ó concejales del lugar, para deliberar y decidir con ellos, si procedia dar la voz de *vía fora somatent*. Siendo afirmativo el acuerdo, pronunciaba el veguer aquella fórmula, la cual era repetida por los sayones y agentes de la autoridad, tocando una campana designada al efecto, y á su clamor acudian todos los vecinos á fin de acompañar y ayudar al veguer en la persecucion del reo denunciado (2). Estaban obligados á este servicio, no solamente los oficiales del rey y los hombres sujetos á su jurisdiccion, sino tambien los vasallos particulares, aunque á éstos no se les podia exigir más de un día de faena (3). Un vecino de cada pueblo, á quien se daba el título de *capitan de somaten*, tenia el cargo de acaudillar la gente del mismo y conducirla á las órdenes del veguer.

Organizada así la hueste, marchaba al lugar donde se ocultaban ó amparaban los delincuentes, y entraba llanamente en él, aunque fuera de señorío particular ó de orden religiosa. El veguer hacia entonces cuantas pesquisas juzgaba necesarias, si bien para entrar por fuerza en los castillos y registrarlos, habian de preceder varios requerimientos, con señalados intervalos (4) y una informacion sumaria de hallarse en el lugar los reos perseguidos (5). Si éstos eran capturados debian entregarse á su juez natural, aunque fuese de señorío, siempre que tuviera la jurisdiccion necesaria para castigarles, y hubiera sido ejecutado el delito dentro de su territorio, pues en cualquiera otro caso era siempre competente el veguer aprensor, para continuar conociendo de la causa (6). Así los procesos de paz y tregua por una parte, y los de somaten por otra, fueron ensanchando los límites de la potestad real á costa de las jurisdicciones particulares, cuya muchedumbre

(1) Const. de D. Jaime II de 1291. Const. de Cath. lib. 9, t. 22, l. Olivan ad usat. *Alium namque*, c. 14, n. 53. Ripoll, *Regalium tractatus*, c. 12, n. 4 y 18.

(2) Ripoll, obr. cit. c. 12.

(3) Const. de Cath. vol. 1, lib. 9, t. 22, III y vol. 2, lib. 9, t. 14.

(4) Ibid. vol. 1, lib. 9, t. 22, III.

(5) Ripoll, obr. cit. c. 12.

(6) Const. vol. 1, t. 22, III.

menguaba la eficacia de la administracion pública y fomentaba la impunidad de los malhechores.

Tambien ejercia el rey su jurisdiccion en primera instancia por medio del bayle general, que era su delegado en toda Cataluña, para la recaudacion y administracion de las rentas de la corona y del real patrimonio, y para sustanciar y decidir todos los pleitos á que dieran origen, entre los cuales figuraban en primer término, los ocasionados por los feudos que la misma Corona poseia (1). El titulo originario de esta jurisdiccion era, pues, en su mayor parte territorial, por cuanto se fundaba en el dominio que se habia reservado el monarca sobre las tierras no repartidas y enajenadas despues de la conquista. Verdad es que con el tiempo se extendió fuera de estos límites, quedando sujetos á ella todos los agentes y auxiliares del real patrimonio, sin distincion de causas; pero la reina doña Maria la redujo en 1422 á los negocios propios del fisco (2).

Las atribuciones de la real jurisdiccion hasta ahora referidas, cuyo objeto era procurar se hiciera recta justicia á los hombres no sujetos inmediatamente á ella, limitaban, como se ha visto, los efectos de la jurisdiccion dominical, constituyendo una excepcion de ella, fundada en la necesidad y en los buenos principios de gobierno. No la restringian ménos otras facultades de la misma jurisdiccion real, que por delegacion, ejercian ciertos magistrados superiores al veguer y al bayle, tales como el gobernador, ó lugarteniente general del rey, la audiencia y el real consejo. Por su medio ejercia la corona otra parte importantísima de su jurisdiccion, dirigida á remediar las faltas y prevenir ó corregir los abusos que cometieran en el desempeño de su cargo, así los jueces reales inferiores, como los señoriales de cualquier gerarquía. Tal era el objeto de los tres recursos, el de *avocacion*, el de *apelacion* y el de *perhorrecencia*, con que podian acudir al monarca los agraviados por aquellos jueces.

Era regalia de la corona la facultad de avocar, por medio del lugarteniente y de la audiencia, el conocimiento de las causas pendientes en primera instancia, en las veguerías ó en las bayllías, siempre que excediera su valor de 500 libras y fueran parte en ellas los pobres, los pupilos, las viudas, los pueblos, los hospitales, los monasterios ó los religiosos. Las

(1) Ripoll, obr. cit. c. 25 y 39.

(2) Una Constitucion de esta reina ordenó que no se sustraieran á la jurisdiccion ordinaria los deudores y los arrendadores de las rentas del fisco en las causas por delitos comunes, y en los pleitos en que la corona no tuviera un interés directo é inmediato. Const. vol. 1, lib. 1, t. 40, 1.

causas de ménos de 500 y de más de 100 libras, podian tambien avocarse, aunque no fueran parte en ellas dichas personas, siempre que se ventilaran en la misma veguería en que residiera el lugar-teniente ó la audiencia. Estaban igualmente sujetos á avocacion, como excedieran de 500 libras, los pleitos de comercio, los de cabrevaciones, las competencias entre barones y jueces reales, las causas sobre opresion de vasallos por sus señores, aquellas en que se disputara sobre la inteligencia de privilegios reales y otras varias. Verdad es que no eran avocables los pleitos propiamente feudales ni los de pago de censos, de los cuales conocian los señores respectivos por medio de sus delegados, pero en cambio no se eximian de la posibilidad de aquel trámite todas las causas en que entendian los mismos señores, no en virtud de su jurisdiccion rigurosamente feudal, sino de la que gozaran por privilegio ó costumbre (1).

El recurso llamado de *perhorrecencia* (2), semejante al conocido en Aragon con el mismo nombre, tenia por objeto la defensa de los desvalidos que obligados á litigar con personas poderosas, abrigaban el temor de que no se les hiciera justicia. Los pobres y desamparados que se hallaban en tan triste caso, si justificaban sumariamente el fundamento de su temor, podian llevar sus causas á los tribunales superiores del rey, arrancándolas al conocimiento de los jueces inferiores, aunque fueran de señorío. Usábase principalmente este recurso en las causas criminales, así como en las civiles era el de avocacion el que se empleaba con más frecuencia (3).

Pero el recurso que al fin llegó á ser más general y el que más contribuyó á extender y fortalecer la potestad del rey, fué el de apelacion. De las sentencias de los jueces reales, se apelaba directamente al rey: de las de los jueces señoriales, á los señores de quienes eran delegados: de éstos podia llevarse una segunda apelacion al rey, en cualquier parte en que se hallara. Advierto esta circunstancia, porque era de fuero que no conociera el rey de las primeras apelaciones, cuando se hallaba fuera de la tierra, por lo cual delegaba su conocimiento á la audiencia ó á letrados de la veguería en que se habia sustanciado la primera instancia (4). Tambien podia apelar al monarca el vasallo injustamente despojado por su señor, del feudo que de él tuviese (5). Mas es digno de notarse que de las sentencias definitivas

(1) Peguera, *Praxis criminalis et civilis*. Rubr. 4. *De evocatione causarum*. Ripoll, *Regal.* c. 26.

(2) Palabra derivada del verbo latino *perhorrescere*, tener miedo.

(3) Rip. *Regal.* c. 5.

(4) Const. vol. 1, lib. 3, t. 2, II y XVIII.

(5) Usag. *Similiter et si senior*.

en causas criminales no se daba tal apelacion. Hasta 1599 no se dictó la constitucion que permitia suplicar de las sentencias del real consejo (que era el tribunal criminal superior), á otra sala de la audiencia, y de las de los jueces inferiores, reales ó señoriales, á ellos mismos, acompañados de otros asesores: y aún entónces quedaron excluidos de este beneficio los ladrones famosos y salteadores, los homicidas alevosos, los reos de lesa majestad, los monederos falsos, los herejes, los simoniacos y otros delinquentes. Si de los excesos cometidos en la ejecucion de las sentencias dictadas en procesos de paz y tregua se admitia apelacion, era, segun los jurisconsultos, porque si bien recaian sobre delitos, el procedimiento tenia carácter civil, en atencion al origen convencional de la pena, cuya imposicion tenian por objeto. Negábase tambien toda apelacion al señor directo, que en pleito con su enfiteuta, sobre el mismo enfiteusis, era condenado por el juez en quien habia delegado su jurisdiccion. Tampoco se daba este recurso en las causas por valor de ménos de 50 sueldos, aunque sí el de súplica: ni en las que en ciertas ciudades y villas, se decidian por sentencias de prohombres ú hombres buenos; ni por último en las causas del fisco, en que habia sido parte el procurador fiscal. Mas como á pesar de tantas excepciones quedaba siempre á los agraviados el recurso de queja al rey, fué grande la preponderancia que por tales medios adquirió la potestad real, asi como fué borrándose más cada dia el carácter dominical de la jurisdiccion.

LIBRO VII.

De la propiedad territorial en los reinos de Mallorca y Valencia.

CAPÍTULO I.

Repartimiento de tierras y constitucion de la propiedad despues de la reconquista de ambos reinos.

Tanto como en Cataluña, y más que en las otras provincias de España, prevaleció en Mallorca y en Valencia el régimen feudal de la propiedad. Conquistados ambos reinos en breve tiempo y en época no remota, de la cual han quedado memorias numerosas, son hoy bien conocidos los procedimientos por los cuales se reorganizó la sociedad y se fundó en ellos un nuevo Estado, con arreglo á los principios que á la sazón predominaban en materias de gobierno, dejando á las edades futuras una muestra interesante y un ejemplo luminoso de cómo se habian conquistado y reconstituido anteriormente otras provincias cristianas. Jaime I de Aragon, señor de Cataluña, despues de librar de la dominacion sarracena á Mallorca y Valencia, les dió leyes y gobierno, consultando los antiguos usos y costumbres, y tomando por modelo en todo lo posible, el régimen establecido en el Principado. En otros reinos y provincias habia sido necesario modificar un tanto el régimen feudal para conciliar intereses creados ó derechos anteriormente adquiridos, que no estaban con él de acuerdo; pero en los de Mallorca y Valencia no sucedió así, porque los más de sus conquistadores, y no pocos de sus nuevos pobladores, fueron catalanes familiarizados con las instituciones y prácticas del feudalismo. No habiendo de ser tenidos en

cuenta los derechos ni los intereses del pueblo vencido, y siendo los vencedores hijos de la tierra más feudal de España, D. Jaime pudo dar á sus reinos una organizacion de la misma índole, más pura que la de Aragon, donde preponderaban ciertas costumbres y graves intereses poco conformes con ella.

Prescindiendo de estas diferencias, que afectaban más al grado que á la esencia del feudalismo, la recuperacion y la reconstitucion de los reinos de Mallorca y Valencia ofrece ejemplos concluyentes de la primitiva organizacion de la propiedad territorial en todos los países recién conquistados de la morisma. Como pudiera verse en la narracion de un hecho contemporáneo, se refiere en la historia de aquellas dos empresas, el modo de constituirse el dominio territorial, sus obligaciones y derechos, la parte que en él se reservó el Estado, sus relaciones con la cosa pública y con el soberano; y por último, todos los caracteres esenciales de la propiedad feudal, según el derecho comun de este nombre.

Cuentán, pues, las crónicas y diplomas, que cuando D. Jaime I acordó conquistar á Mallorca, consultó esta empresa con las Córtes de Barcelona de 1228, y les pidió su ayuda: que el arzobispo de Tarragona le ofreció 1.000 marcos de oro, 500 cargas de trigo, 100 caballeros y 1.000 peones, mantenidos á su costa, hasta el fin de la guerra: que el obispo de Barcelona ofreció con su persona, 100 caballeros, 1.000 infantes armados y una galera: que D. Guillen de Moncada, vizconde de Bearne, ofreció, en nombre de su Estado, volver á pagar al rey el tributo llamado de *bovage*, que sólo debía satisfacerse una sola vez en cada reinado, y en su nombre propio, acudir en persona con 400 caballeros y muchos peones, pero suplicando al mismo tiempo que se premiase este servicio con la debida participacion en los despojos: que D. Nuño Sanchez, conde de Rosellon, tio del rey, ofreció 200 caballeros, muchos donceles ó hijos de caballeros, muchos peones y el *bovage* de sus Estados: que Ponce Hugo, conde de Empurias, ofreció su persona con 80 caballeros, 20 ballesteros á caballo y 1.000 peones: que la ciudad de Barcelona ofreció todos los bajeles que fueran necesarios, y que otros prelados y ricos-hombres hicieron ofrecimientos semejantes (1). Otorgóse de todo un instrumento público, en el cual se estipuló que don Jaime daría á los prelados y caballeros que le sirvieran y acompañaran, una

(1) El obispo de Gerona ofreció ir con 30 caballos y 300 peones; el abad de San Feliu de Guixols ofreció su persona y cinco caballeros; el pavorde de Tarragona una galera, cuatro caballeros y su persona; el arcediano de Barcelona su persona, 10 caballeros y 200 peones.

parte de las tierras, castillos, ciudades, villas, rentas y muebles que ganara en la guerra, proporcionada al número de hombres que cada uno llevara á ella, así como él tomaria la suya en igual proporcion, reteniendo además las alquerías y estancias reales: que este reparto se haria por el obispo de Barcelona, el conde de Empurias, los vizcondes de Bearne y de Cardona y Guillermo de Cervera, los cuales asignarian tambien á las iglesias la dotacion competente: que los bienes repartidos se poseerian en nombre del rey con cargo de guardarle fidelidad y de ponerlos en su poder cuando él quisiera, segun la costumbre de Barcelona: que dichos bienes podrian enajenarse sin perjuicio de la fidelidad y del dominio reservados á la corona, y que todos los hombres de la tierra que desearan ayudar á la conquista, con sujecion á este pacto, tendrian en sus despojos una participacion semejante (1).

Ganada Mallorca, y despues de graves desavenencias entre los conquistadores sobre la distribucion del botin, se otorgó escritura del repartimiento de las tierras en 1252. Segun ella, tocaron al prevoste de Tarragona 5.644 caballerías de tierra; á los templarios 525, con obligacion de servir con cuatro caballos; á D. Guillen de Moncada 276, con obligacion de dos caballos; al obispo de Barcelona 875 y media, con la de siete caballos; al conde de Empurias 849, con igual obligacion, y así á los demás conquistadores, repartiéndose entre todos 15.446 caballerías de tierra. Diéronse otras además á las ciudades y villas cuyos vecinos habian concurrido á la guerra, tales como los de Barcelona, Zaragoza y Tortosa. Consta asimismo el reparto que se hizo de las villas, casas y heredades, con expresion de su cabida. La ciudad de Mallorca se dividió en ocho partes, de las cuales tomó cuatro el rey, y las restantes se dividieron entre ricos-hombres. Despues de este primer repartimiento, hizo otro el rey de las tierras regables y huertos que le habian correspondido fuera de la ciudad, dando á cada partícipe una cuarterada, con la obligacion de no enajenarla dentro de un año y de habitar constantemente en la isla (2).

Del mismo modo procedió despues el rey D. Jaime en la conquista de

(1) Véase este instrumento en Dameto, *Historia del reino baleárico*, t. 1, lib. 2, pág. 203.

(2) Dameto, *Historia del reino baleárico*, lib. 2, inserta completo todo el repartimiento, en el cual se advierte que de las heredades sitas en poblado ó junto á poblado, llamadas en el dialecto del país *rahales*, dice solamente el nombre de su dueño, y de muchas de las fincas rústicas distantes de las poblaciones, denominadas *alquerías*, añade que son del rey que las habia dado á N., ó bien que N. las tiene por el rey,

Valencia, acordada en las Cortes de Monzon de 1232. La anunció en un documento otorgado en Lérida, en el cual prometió á Dios, si le daba la victoria, fundar y dotar una catedral y varias iglesias sufragáneas, y á los obispos, clérigos y caballeros que le ayudaran en la empresa, la indemnizacion de los daños que sufriesen y una parte de las tierras que conquistara, haciéndose esta distribución con el consejo del arzobispo electo de Tarragona y los maestros de la milicia y orden del Hospital. En el mismo documento confirmó el rey las leyes contra la usura, que poco ántes habia promulgado, y concedió á los que salieran á campaña el privilegio de no ser demandados por deudas mientras estuviesen ausentes de sus casas (1).

Conquistada al fin Valencia, comenzó el reparto por las casas de la ciudad, muchas de las cuales fueron dadas á prelados, ricos hombres, caballeros y concejos, á medida del gasto que cada uno habia hecho, y del número de hombres que trajera consigo. Tratóse luégo de repartir los campos y huertas; pero como el rey se hubiera anticipado á ofrecer más *jovadas* de tierra que las que habia disponibles de la conquista, ideó un recurso ménos leal que ingenioso, de cumplir su compromiso. Tal fué el de reducir á seis cahizadas la cabida ántes mayor de las jovadas, usando de la facultad que tenia como soberano para establecer el sistema de pesos y medidas. De esta manera logró dar á cada partícipe la cantidad nominal de tierra ofrecida ó á que tenia derecho según sus servicios, dejando en realidad burlada su promesa. Así quedaron heredados en la ciudad de Valencia 380 caballeros, además de los ricos hombres (2), y del mismo modo lo fueron otros 600 que concurrieron después á la conquista de Játiva.

No se dieron, sin embargo, estas propiedades á los conquistadores sin algunas cargas. D. Jaime les impuso la de defender el reino, en los términos que después diré, y la de poblar dentro de cierto tiempo sus heredades recién adquiridas, so pena de perderlas, y de darlas á otros moradores. Pero como no cumpliesen estas condiciones los caballeros anteriormente vecindados en Aragon ó Cataluña, y no quedaran en Valencia más que algunos pocos heredados tan sólo en este reino, el rey emplazó á los ausentes para que en el término de tres meses se presentaran en Sallent, donde se hallaba acampado el ejército contra los moros de Játiva: ellos no comparecieron personalmente, ni enviaron en su lugar á otros que les reempla-

(1) El instrumento original fué publicado por Branchat en su *Tratado de los derechos del real patrimonio en el reino de Valencia*, t. 2, Privil. 1.

(2) Escolano, *Historia de Valencia*, 1.^a par., lib. 3, c. 6, núms. 9 y 10.

zasen, y entónces D. Jaime les ocupó sus tierras y las repartió entre otros vasallos (1).

Fué tambien al principio, carga de muchas de las heredades repartidas el reconocimiento de señorío y la cabrevacion á favor de la corona. Pero el mismo D. Jaime las eximió poco después de este gravámen por privilegio de 1271 (2).

Todas las demás tierras y heredades del reino, que no se dieron á los soldados de la conquista, quedaron como propias del rey, quien las utilizó, bien destinándolas al uso público, ó bien dándolas á censo, á parte de frutos ó en feudo. «En el principio, dice el rey conquistador en una de sus leyes, todas las cosas, esto es, las casas, huertas, campos, viñas y otras heredades fueron de nuestro señorío» (3). Por eso toda la propiedad territorial procedia originariamente de la corona: por eso todo propietario poseia con las condiciones que el monarca habia impuesto al desprenderse de su propiedad. Estas condiciones fueron generalmente al principio estrechas y gravosas, pero luego fueron modificándose y suavizándose hasta desaparecer por completo en beneficio de los poseedores inmediatos.

Así las aguas del mar fueron de uso público, pero como su dominio pertenecia al rey, éste exigió, como en reconocimiento de su derecho, el diezmo de la pesca. Los rios navegables y las aguas estancadas no navegables, que nacia en tierras de particulares, pertenecian igualmente á la corona por razon de conquista; pero el rey D. Jaime dió á los prelados y á los ricos-hombres todas las que nacia en los términos de sus lugares propios ó corrian por ellos, reservándose tan sólo la propiedad de las públicas ó privadas que traian su origen de términos realengos. Por eso fué necesario un real privilegio para navegar, conducir maderas por los rios, tomar agua de ellos para riego, tener barcos, pescar, construir puentes, y hacer otras cosas que son hoy de derecho comun (4).

Tambien pertenecian á la corona todas las tierras incultas: las realengas, como adquiridas por derecho de conquista, y las enclavadas en términos de señorío, por haberse reservado D. Jaime el derecho de recobrar las heredades que no se hubieran puesto en cultivo fuera de los términos de Valencia y Játiva, á fin de poderlas dar á otros vasallos que las cultivaran.

(1) Testamento de Jaime I, en Branchat, obr. cit., t. 1, p. 49 y t. 2 privil. 7.

(2) Branchat, ibid., t. 2, privil. 6.

(3) *Fori regni Valentie*, for. 6. *De jurisdict. omni. judic.*

(4) Branchat, t. 1, c. 6.

Librábanse sin embargo de esta confiscacion los propietarios que hubieran dejado de cultivar por su extrema pobreza, los menores de edad y los que tuvieran embargadas sus tierras por razon de tributos, ó destinadas á pastos (1).

Fundado en el mismo dominio universal, adquirido por la conquista, concedió D. Jaime á los pobladores de la ciudad de Valencia el derecho de pastar con sus ganados en todo el reino, aún en los pueblos de señorío de caballeros ó de eclesiásticos, y el uso con igual extension, de las leñas, veredas y aguas que necesitaran los mismos ganados, excluyendo tan sólo de esta servidumbre los terrenos que para su uso exclusivo podrian reservarse, con el nombre de *boalares*, los vecinos de cada pueblo. Tambien prohibió á los dueños de lugares, cualquiera que fuese su título, hacer dehesas sin real licencia. De este modo conservó la corona en aquel reino la propiedad de los pastos de todos los pueblos de realengo, y los utilizó exigiendo por su uso los derechos de *carnage* y *herbage* y arrendando esta renta. Por la misma razon en los lugares de señorío, pertenecian los pastos á los señores; mas si eran enajenados ó arrendados, entendíase con la condicion de dejar á salvo el derecho, ántes indicado, de los vecinos de Valencia y los *boalares* de los pueblos (2).

Tambien se reservó el rey por los mismos títulos y siguiendo las costumbres feudales de otros reinos, el monopolio de los hornos y molinos; por lo cual se consideró desde entónces, la facultad de establecerlos, como regalia de la corona. Ni los señores territoriales disfrutaban de ella, como no les hubiera sido expresamente otorgada por el rey. El real patrimonio utilizaba estos monopolios, enajenando ó dando á censo sus hornos y molinos ó el derecho de establecerlos (3).

Al tiempo de la conquista hubieron de darse muchas tierras á censo de diez sueldos por jovada; mas sin duda no hubo de ser fácil su cobranza, por la perturbacion económica que produjo aquel gran suceso, cuando ya en 1271 tuvo el mismo rey conquistador que eximir á los censatarios de la obligacion de pagarlo. Asi resulta del privilegio de esta fecha, ántes citado, en que D. Jaime libertó á los poseedores de tierras alodiales del reconocimiento y cabrevacion á la corona (4). Llamo alodiales

(1) Branchat, t. 2, privil. 6.

(2) Ibid., t. 1, c. 4.—Fuero 1, lib. 1, rubr. 2.

(3) Ibid., t. 1, c. 5.

(4) Ibid., t. 2, privil. 6.

estas tierras, no porque en rigor lo hubieran sido hasta entónces, sino porque, segun el mismo privilegio, las exenciones en él concedidas, no alcanzaban á los caballeros ó infanzones, clérigos y religiosos, ni tampoco á los que como censatarios, aparceros ó feudatarios de la corona, hubieran defraudado las rentas de sus hornos, molinos y artefactos. Los caballeros, los clérigos y los religiosos tenian dependencia inmediata de la corona, los unos por razon del servicio que debian prestarle, los otros por causa del real patronato, y no habria sido cuerdo libertarles de toda obligacion de reconocimiento y cabrevacion por los bienes que disfrutaban. Por eso el privilegio se concedió sólo á los simples ciudadanos, que aunque poseian tierras realengas, no tenian más compromiso con la corona que el del mero vasallaje. Por la misma razon no debia alcanzar la merced á los que utilizaban los hornos y molinos del real patrimonio á censo, en feudo ó en aparcería; puesto que tales títulos les constituian en una dependencia más inmediata del rey que la de los meros ciudadanos.

Con las propiedades alodiales y libres rivalizaban en número y en importancia, las feudales, en el sentido propio de la palabra. D. Jaime I y sus sucesores en el trono, además de conceder á sus vasallos, como queda dicho, el dominio más ó ménos completo de las casas y heredades ganadas en la conquista, les otorgaron en feudo expreso, multitud de lugares, castillos, heredades y rentas. En el archivo del real patrimonio se custodiá un libro llamado de *Enajenaciones*, que bajo el epígrafe de *Feudataris del regne de Valencia*, contiene un copioso inventario de lugares, castillos, heredades, tierras, hornos y molinos, con expresion de los nombres de sus poseedores y del concepto en que los disfrutaban. De estos bienes, unos aparecen dados en rigoroso feudo, otros á censo y todos con reserva de derechos jurisdiccionales ó reales á favor de la corona. Léese, por ejemplo, en este interesante documento, que «el Señor Rey dió á Pedró de Moncada la torre de Moncada con sus alquerías, al *uso de Barcelona*;» esto es, en feudo, pues tal era la costumbre de aquella ciudad; »que dió á D. Ladron el castillo y villa de Ares, retenida paz y guerra y señorío;» esto es, reservándose la corona el derecho de hacer paz y guerra del mismo, y la jurisdiccion suprema: que «dió á Berenguer, obispo, el castillo de Almona-cir, retenida paz y guerra y señorío,» sin expresion del feudo; »á Franciscó Perez de Pina, la torre Berganza con 20 cahizadas de tierra en término de Almenar, retenida la señoría» solamente: »á Guillermo Romeu la valle de Artana, retenida paz y guerra,» sin la señoría; y »á Bernar-do de Benasch el castillo y villa de Sahu,» sin ninguna limitacion expre-

sa (1). Mas, á pesar de esta diversidad de fórmulas, todos los poseedores nombrados eran igualmente feudatarios, puesto que así se denominan en un documento cuyo único objeto era dar á conocer las cosas en que el real patrimonio conservaba el dominio directo feudal, y las personas obligadas á prestar los servicios de este nombre.

Descúbrese por este inventario, que Ramon Berenguer de Ager tenia el castillo y villa de Villafames, con los hornos y molinos, reteniendo la corona la jurisdiccion suprema y el servicio de los caballeros «segun el valor» de dicho feudo, con arreglo á la costumbre de Barcelona; que Pedro March poseia la escribania de apelaciones de Valencia, mediante el pago de 20 morabatines; que Guillermo Loarre Portero tenia dos molinos en el término de Planes, con la obligacion de dar al rey la mitad de los derechos; que Blasco de Alagon disfrutaba la torre y heredad de Morella por el censo anual de 12 cahices de trigo, y los molinos y hornos del término, por el de 20 sueldos reales, y que otras muchas personas tenian hornos, molinos, obradores, solares, tierras y salinas, pagando censo á la corona, en frutos ó en dinero (2).

De otros instrumentos comprendidos en el mismo libro de *Enagenaciones*, resulta que el duque de Gandia, conde de Rivagorza y Denia, en 1412, poseia en feudo *honrado* (*in feudum honoratum*), segun los *usages* de Cataluña, el castillo de Sauxet, el mero imperio y jurisdiccion alta y baja de Calpe, Benisa, Altea, Teulada é Ifach, y las mismas jurisdicciones con el derecho feudal en los lugares de Sella, Covera de Berig, y en los castillos y villas de Azubeba y Tarbena, y que el mismo duque tenia en simple feudo los castillos y lugares de Confrides, Gallinera, Calpe, Rolleu, Ayora, Xalans y Confrontes con sus términos y pertenencias. En el año de 1593 el

(1) Branchat, obra citada, t. 2, núm. 35 inserta íntegro este interesante documento, que empieza así:

FEUDATARIIS DEL REGNE DE VALENCIA.

La torre de Muncada.

«Primerament: lo dit Senyor Rey dona an Pere de Muncada la torre de Muncada ab les sues alqueries a Costum de Barcelona. Item: dona á Don Ladron lo castell «é vila de Ares, en feu, retengut pau é guerra e Senyoria, etc., etc.»

Hállase registrado este instrumento al fólío 28 del lib. 3 *De enagenaciones*, archivo del real patrimonio, *armario 12*. Contiene 38 feudos de diferentes clases.

(2) Concluida la relacion de los feudatarios en el libro 3 citado *De enagenaciones*, sigue otra que se titula: «Dels forns atributats, segon fou atrobat en los registres del «archiu del Senyor Rey.» Contiene 31 fincas entre hornos, molinos, obradores, solares, etc.

infante D. Martin, hermano del rey D. Juan, disfrutaba tambien en feudo la ciudad de Segorbe y el lugar de Alcoy.

A estos documentos sigue otra larga relacion de castillos y villas dados tambien en feudo, sin expresion de los nombres de los feudatarios, pero sí con la de algunas de las condiciones de su otorgamiento. Así eran feudos el castillo y villa de Azubella, segun la costumbre de Barcelona, con retencion de la potestad (1), paz y guerra y prestacion de homenaje; el castillo de Carbonera con igual retencion, el mero y mixto imperio y los servicios de hueste y cabalgada; el castillo y villa de Burriol, con la carga de poner un caballero que sirviera al rey en Valencia, segun el fuero de Aragon; el castillo y lugar de Crevillent, sin ningun servicio; el castillo de Montixervo, segun el fuero de Valencia, con reserva de la potestad, fádiga y laudemio de la décima del precio; el mero imperio y toda la jurisdiccion civil y criminal de los lugares de Onil y Cabanes; la villa de Novelda con sus fortalezas, con el mero imperio y sin ninguna prestacion de servicio; el castillo y las villas de Torres-Torres, Serra y Polop con residencia personal en el reino; el castillo de Trasmos con retencion del tributo de *monedaje* y del mero imperio; el castillo y villa de Albaida, con servicio de cuatro caballeros armados y reserva de la potestad y fádiga, y otra multitud de pueblos y castillos, de que además hace mencion el expresado documento, calificándolos de feudos (2). Dábanse tambien, como tales, no solamente los castillos, villas y lugares, sino otras cosas que tenian la consideracion de bienes inmuebles, como los artefactos de molinos y hornos, las rentas, los oficios públicos de provision real y las jurisdicciones (3).

(1) Llamábase *potestad* el derecho del rey á entrar en la villa ó castillo de feudo y servirse de él cuando lo necesitara, lo cual consentido por el feudatario, equivalia á reconocer su dependencia y la soberanía y dominio directo de la corona.

(2) Contiene esta relacion 61 feudos de lugares, villas, castillos y jurisdicciones. en esta forma:

«Castrum et villam de Azubella.—In feudum ad consuetudinem Barchinonæ, cum retentione potestatis et pacis et guerræ et præstatione homagii.

«Castrum de Penacadell.—Tenetur in feudum honoratum ad consuetudinem Cathalonie, retenta potestate et cum certis conditionibus.» (Véase Branchat, obr. cit., t. 2, pág. 118.

(3) No fué solamente en los primeros tiempos de la conquista cuando se constituyeron feudos en Valencia. Habían pasado ya cerca de cinco siglos despues de aquel acontecimiento y todavia se otorgaban nuevos feudos de lugares y villas. Felipe V queriendo recompensar los servicios del duque Berwick en la guerra de sucesion, le dió en feudo en 1707 las villas de Liria y Xerica, con la jurisdiccion alta y baja, el mero y el mixto imperio. (Branchat, t. 1.º, p. 78.)

Celoso de su autoridad el rey D. Jaime prohibió, bajo pena de la vida, tener como de señor, que no fuera el rey, casas, huertos, honores, castillos, villas, alquerías ó cualquiera otra cosa del reino de Valencia (1), lo cual, sin embargo, no excluía la práctica de otorgar los nobles y caballeros feudos á sus vasallos, sino el reconocimiento de señoríos en que no tuviera el rey la potestad suprema, como señal de soberanía. Tampoco impedía aquella prohibición, y esto sí es más notable, el establecimiento de feudos, en que el mismo rey fuera feudatario. Por efecto de la concesión que el papa Alejandro II había hecho al rey D. Sancho Ramirez de las iglesias de las tierras que él y sus sucesores conquistaran de los moros, confirmada después por Gregorio VII y por Urbano II, con la facultad de distribuir las nuevas iglesias, excepto las episcopales, el rey D. Jaime I se estimó dueño de los diezmos de Valencia. En cumplimiento de la promesa que había hecho ántes de la conquista, adjudicó á la fundación y dotación de la catedral y á otras muchas iglesias, los bienes y edificios de las mezquitas; mas como después se hubiese reservado entre estos últimos, los que pudieran servir de fortalezas, reclamó el clero contra esta excepción. Siguieronse largos y reñidos debates, y al fin tuvo que transigir el rey dando al obispo, con un capital de 10.000 *besantes*, todas las mezquitas y los cementerios, excepto el de Valencia, en el cual se había erigido un mercado público, y cediendo á cada parroquia una casa, un huerto, las primicias y dos tercios del diezmo. El obispo á su vez dió en feudo al rey un tercio del diezmo propio de la iglesia, con exclusion del procedente de caballeros, eclesiásticos, lugares religiosos y collazos de la corona. Así fué don Jaime á la vez señor alodial de la tercera parte de todo el diezmo y poseedor feudatario del tercio de las dos terceras partes del mismo pertenecientes á la iglesia, obligándose en tal concepto á ser leal defensor de ésta y á sostener sus derechos. Por último dispuso sin embargo tanto de unos como de otros diezmos, dándolos á barones, caballeros y concejos en premio y pago de servicios como en los días de la conquista (2).

Al lado de los feudos propios veíanse también en Valencia algunos señoríos y propiedades de los que en Aragon se llamaban *honores*. Los ricos-hombres y caballeros de este reino, que contribuyeron á la conquista con el

(1) *Fori regni Valent.*, lib. 4, rubr. 23, for. 1.

(2) Branchat, *ibid.* t. 1, c. 10, n. 1.—Tarazona, *Institucions dels Furs y privilegis de Valencia*, lib. 1, t. I y 14. El rey dió además al obispo las villas de Xullella y Gargio.

quinto de sus bienes, pretendieron que se agregase á Aragon la tierra conquistada y se les permitiese poseerla con arreglo á su fuero, que estimaban más favorable que el valenciano. Querian, pues, que las nuevas tierras fuesen divididas en *caballerías de honor* y distribuidas entre ellos en tal concepto. D. Jaime accedió en parte á la demanda, constituyendo, en efecto, algunas caballerías de aquella clase y mandando que se rigiesen por las leyes aragonesas. Por eso hubo en Valencia dos géneros de caballerías de tierra, las primitivas, llamadas de *conquista*, y las de *honor* introducidas posteriormente. Jerica, Corbera y otros lugares estuvieron bajo el dominio de señores de honor aragoneses. Por la misma causa hubo tambien en Valencia como en Aragon, ricos-hombres de *natura* y de *mesnada*.

Mas estas excepciones del derecho comun fueron mal recibidas por los valencianos. Los reyes D. Juan I y D. Martin intentaron su abolicion, y aunque no llegaron á decretarla, toleraron que no las guardasen algunos de sus ministros. De esta inobservancia se quejó agraviado al Justicia de Aragon el vizconde de Chelva, cuando D. Martin se coronó en Zaragoza. El Justicia admitió la querella, embargó los bienes que llevaban consigo los embajadores valencianos que asistieron á la coronacion, y el rey tuvo que reconocer el privilegio reclamado por el vizconde. El uso de los fueros aragoneses hallábase ya, sin embargo, muy reducido, y quedó al fin del todo abandonado. Regian solamente en Alcalaten, Arenoso y Almazora, cuando el jurisconsulto Belluga escribia su *Speculum Principis*, hácia el año de 1440 (1).

He dicho que el rey solia utilizar las tierras dándolas á censos ó en aparcería de frutos, y de ello ofrece varios ejemplos el documento ántes citado del archivo del real patrimonio. Tenian estas tierras censatarias, en su mayor parte al ménos, los moros y los judíos que habian quedado en el reino despues de la reconquista. Estos eran, segun Belluga, «siervos del rey tolerados por misericordia, cuyos bienes estaban siempre á merced del señor» (2). Eran, pues, una especie de siervos de la gleba que forma-

(1) Escolano, *Hist. de Val.*, par. 1.^a, lib. 3, c. 7 y lib. 5, c. 27.

(2) *Speculum Principis*, rubr. 39. «Sunt solidi vassalli regii et rincipis servi.... «est principis servus, misericordia conservatus et bona ut pæculium relicta et sic ad «nutum domini.» Pedro Belluga, valenciano, autor de este interesante libro, floreció en el siglo xv. Estudió en Bolonia, donde tomó los grados de doctor en ambos derechos. Fué desterrado de Valencia por haber defendido en las Cortes una interpretación de cierto fuero, que suponía la facultad de hacer pesquisas generales en los juicios de residencia de los ministros del rey, y probablemente por haber censurado du-

ban parte del patrimonio real. Enajenando el rey sus dominios transmitia sus derechos sobre los censatarios, puesto que de otro modo no hubieran sido de ningun provecho para los adquirentes. Las mismas tierras de conquista repartidas en pleno dominio, no habrian podido utilizarse si sus nuevos dueños no hubieran empleado en su cultivo á los sarracenos que las poseyeran ántes, puesto que la poblacion cristiana de los campos era harto escasa. Por eso los caballeros heredados hubieron de entregar sus tierras á labradores moros, mediante una pension cierta y con las demás gabelas propias del enfiteusis, ó en aparceria de frutos. Habia en su consecuencia multitud de pueblos cuyos vecinos eran todos moros censatarios de algun señor ó de la corona. A veces no pesaban estos censos separadamente sobre las propiedades individuales, sino mancomunadamente sobre todas las del pueblo, pagándose sus réditos por todos los vecinos, á prorata de sus haciendas. Habia tambien lugares de moros que pagaban censo á quien no era su señor. Esto sucedia cuando el del lugar en uso de su derecho, exigia á sus vasallos algun pedido extraordinario que no podian satisfacer y les daba licencia para tomarlo de un tercero, en aquel concepto.

Lo que hizo más desastrosa la expulsion de los moriscos de Valencia, fué precisamente el excesivo número de vasallos censatarios que habia entre ellos. Por eso quedaron tantos lugares despoblados, tantos campos sin cultivo, tantos señores arruinados, tantos cristianos reducidos á la indigencia. Y en vano para llamar nuevos pobladores, ofrecian los antiguos propietarios el reparto de las tierras abandonadas por los expulsos, pues gravadas con pesadimosos réditos á favor de terceros acreedores, temíase que no produjesen bastante para satisfacerlos, y así faltaba quien quisiera tomarlas. Entre tanto los meros censualistas no cobraban sus pensiones, á pesar de subsistir las fincas acensuadas, y de haberlo sido con licencia de los mismos señores, que se aprovecharon de los capitales impuestos. Los señores á su vez tampoco podian pagarlas, por no tener con qué hacerlo desde que quedaron improductivas sus tierras, y pedian que pues era universal el daño, alcanzase alguna parte á los censualistas, reducién-

ramente la administracion valenciana. Así es que al tratar en su obra de lo que se acordaba en las Cortes, no ocultaba su desaprobacion. Se muestra muy favorable á la nobleza, desprecia á la plebe y no tiene compasion de los moros y judíos. Ejerció la abogacia en Valencia. El rey D. Alfonso IV, á quien dedicó su obra, le mandó poner el título que lleva. Escribió en 1441. Defendió vigorosamente la regalía de amortizacion y combatió la mudanza de la moneda con tan buena y sólida doctrina como pudiera hacerlo el mejor economista de nuestros días,

dose los réditos á que tenían derecho. El rey encargó á dos regentes del consejo de Aragon que arbitrasen algun remedio, y en tal concepto se dictó la pragmática de 1614, despues de tres años de vicisitudes, vacilaciones y desastres. Confirmandose por ella á los señores el pleno dominio, que ántes se les habia otorgado sobre las heredades de los moriscos, se dispuso que cuando las de una comunidad ó pueblo fueran suficientes, al tiempo de la expulsion, para pagar los censos colectivos impuestos sobre ellas, con licencia del señor que entónces tuviera el mero imperio, si el actual no gravase á los nuevos pobladores con la obligacion de pagarlos, quedara sujeto á satisfacerlos; que si fueran insuficientes las heredades moriscas de la comunidad ó el pueblo censatario, pagara el señor tan sólo seis dineros por cada libra de rédito; y que si el lugar careciera absolutamente de dichas heredades, pagará el señor un sueldo solamente: que cuando habitaran en el pueblo censatario algunos cristianos viejos, pagasen estos su parte, y el señor la correspondiente á los moriscos; y que se tuvieran por nulos y extinguidos los censos impuestos sin licencia de los señores del mero imperio, aunque hubiera dado la suya el de la jurisdiccion *alfonsina* (1), excepto aquellos que se hubiesen impuesto especialmente sobre fincas determinadas de moriscos (2). Con esto no se remediaron en verdad las pérdidas inmensas que produjo la expulsion, aunque se repartieran ménos desigualmente entre los perjudicados, ni se evitó tampoco que muchos lugares y muchas tierras quedasen largos años sin poblacion y sin cultivo. Al fin pasó la terrible crisis que á causa de la expulsion y por tanto tiempo afligió á Valencia: muchos censualistas quedaron enteramente arruinados, algunos pueblos desaparecieron para siempre y los más se empobrecieron; pero en los nuevos contratos que los propietarios celebraron con los pobladores, salieron estos mejor librados que los antiguos vasallos, quedando como censatarios, pero de condicion mucho más libre.

(1) Llámase así la jurisdiccion que el rey D. Alfonso I concedió á los caballeros dueños de lugares de quince casas, como se verá más adelante.

(2) Escolano, *Historia de Valencia*, lib. 10, cap. último. Bas. *Theatrum jurisprudentiæ Valentiniæ*, pars. 1.ª, cap. 13, núm. 152.

CAPÍTULO II.

Tributos, cargas y servicios militares de los propietarios.

Conocidos los orígenes y las clases diferentes de la propiedad valenciana, expondré brevemente ahora la condicion legal, los derechos y las obligaciones de cada una, en cuanto al Estado y á la familia. Los dueños de heredades alodiales procedentes del reparto de la conquista, tenian por este hecho, obligaciones con el monarca, aunque no tantas ni tan estrechas, como los demás poseedores de tierras. D. Jaime I les impuso las de tenerlas pobladas, no enajenarlas, residir en el reino y defenderlo; pero entendiéndose cumplida esta última obligacion, por los 380 caballeros heredados en la ciudad de Valencia, siempre que ciento de ellos asistiesen personalmente al rey, relevándose de cuatro en cuatro meses. Ya se ha visto anteriormente como no habiendo cumplido algunas de estas condiciones los primeros caballeros heredados en Valencia les privó el rey de sus tierras, dándolas á otros vasallos. Los propietarios alodiales estaban dispensados de prestar á la corona reconocimiento, cabrevacion y censo, desde que D. Jaime les otorgó esta inmunidad en 1271, pero no del juramento de fidelidad al soberano, ni de la *firma de derecho*, cuando ante él comparecian demandados (1). Ambas obligaciones eran comunes á todos los vasallos, respecto al señor del lugar de su domicilio, aunque no tuvieran de él ningunos bienes y por el hecho solo de morar en su tierra. Así, los dueños alodiales de heredades enclavadas en el término de algun castillo ó villa señorial, debian jurar fidelidad al señor de la tierra y guardar todas las cosas comprendidas en la fórmula de este juramento (2), segun disponia un fuero de D. Jaime, tomado del título *De constitutione feudorum* del libro de los feudos (3).

Los inmuebles alodiales estaban ó no exentos de tributos, segun el es-

(1) F. 17 y 19, lib. 9, rubr. 21.

(2) El juramento de fidelidad comprendia la promesa de no dañar al señor, ni descubrir su secreto, ni menoscabar su jurisdiccion, ni yacer con su mujer, su madre ó su hija, ni hacer en su casa cosas deshonestas, ni hacer difícil ó imposible lo que para el señor fuera posible ó fácil, ni tenerle secreta cosa alguna de que pudiera resultarle perjuicio. (F. 2, lib. 9, rubr. 13.)

(3) F. 1, lib. 9, rubr. 13.

tado de sus poseedores. Los caballeros de todas clases (1) contribuían como los simples ciudadanos, por los bienes muebles en que comerciaban por ser el comercio cosa impropia de su clase, según el jurisconsulto Tarazona, y tampoco estaban exentos de las cargas y derramas vecinales, que decretara el concejo para defender los fueros y privilegios de la tierra. En este último caso los caballeros y los eclesiásticos de su clase debían pagar por los bienes realengos que poseyesen, y los eclesiásticos no caballeros por sus bienes de toda especie, sueldo ó libra, pero doble por los inmuebles que por los muebles. Las villas reales contribuían con la *questa*, que era un tributo de cuota fija que pagaban aquellas todos los años. Játiva satisfacía en este concepto 8.000 sueldos; Murviedro, 7.000; Castellón, 5.000, y así otras villas. También pagaban muchos pueblos los tributos de *maridage*, *coronacion* y *nuevo regimiento*, de origen puramente feudal, los cuales quedaron convertidos al fin en una cantidad cierta de metálico (2). Mas los caballeros no contribuían al pago de estos impuestos por los bienes alodiales que disfrutaban, aunque fueran vecinos de las villas tributarias.

El impuesto más general era el *monedaje*. Con este nombre pagaban un tributo de un maravedí cada siete años, los que poseían más de 15 maravedís de hacienda. Estaban, sin embargo, exentos también de él los caballeros y los eclesiásticos, aunque poseyeran bienes realengos, y los habitantes de la ciudad de Valencia, pero no los infanzones que no fueran caballeros y pagaran pechos vecinales (3), ni los ricos-hombres, caballeros y generosos, por los bienes que compraran en lugares propios de la corona ó de los hijos ó hermanos del rey (4). Los vecinos de Valencia alcanzaron aquella exención, porque habiendo defendido valerosamente su ciudad, cuando la sitió un numeroso ejército de Castilla, el rey D. Pedro les re-

(1) Los caballeros eran de tres clases: *nobles*, *generosos* y simples caballeros. Llamábanse generosos los que fundaban su nobleza en la antigüedad y esplendor de su familia: meros caballeros, los que habían recibido del rey la investidura de la caballería; y nobles los que reuniendo las circunstancias de unos y de otros, usaban el *Don* antes del nombre. Cuando se reunían las tres clases de caballeros en los Estamentos, los generosos usaban *En* y los simples caballeros *Micer* antes del nombre. (Mateu, *De regimini regni Valentie*, c. 3.º, pár. 1, núm. 57.) Gozaban además los privilegios de la caballería «los ciudadanos honrados,» los doctores y licenciados, y los que habían desempeñado oficios de justicia, excepto en cuanto á las cargas reales y personales. (Tarazona, *Instit. dels Furs*, etc. lib. 1, t. 15.)

(2) Tarazona, obr. cit. lib. 1, t. 15.

(3) Ibid. pár. *Son Franchs*.

(4) F. 12, lib. 4, rubr. 19.

compensó el servicio, facultándoles para adquirir bienes raíces de caballeros y de eclesiásticos, y poseerlos con las exenciones que los disfrutaban sus anteriores dueños, excepto de la hueste y cabalgada (1). Pagaba monedaje cada jefe de casa, no exento, que tuviera los 15 maravedís de hacienda, y así es que mientras no se separaban los individuos de una familia, no contribuían sino con una sola cuota. En circunstancias extraordinarias, ó como recompensa de señaladas mercedes de la corona, solía aumentarse este impuesto. Así D. Jaime I, habiendo otorgado varias exenciones á los valencianos, recibió por monedaje en 1271, de los que tenían de 15 á 100 maravedís, siete sueldos por cada maravedí; de los que tenían de 100 á 300 maravedís, dos maravedís, y de los que tenían mayor caudal, tres maravedís. El rey, dirigiéndose entonces á los contribuyentes, declaró haber recibido este impuesto *pro bonis vestris*, de lo cual se deduce que era de naturaleza real. Era de la misma especie el *tercio-diezmo* que consistía como ya he dicho, en la parte del diezmo que por privilegios apostólicos se reservó el conquistador. Este impuesto era también el más general de todos, puesto que de él no estaba exento ningún propietario.

Pagábanse además en el reino otros muchos tributos más ó menos territoriales, de que no se eximían los poseedores de alodios, que no disfrutaban el estado ó los privilegios de la caballería. Tales eran entre otros, la *cena de presencia* y la de *ausencia* y la *pecha vecinal*, tributos de cuota fija, por pueblos, que los ayuntamientos repartían entre los contribuyentes. La *cena de ausencia* se pagaba cada año al rey solamente, y la de *presencia* al rey ó al príncipe heredero. La *pecha* se pagaba por los terratenientes, para satisfacer la *cena de rey*, y los salarios de los jueces y funcionarios públicos de las ciudades y villas (2). No hablo de otra multitud de gabelas que pagaban los valencianos, porque no afectaban directamente á la propiedad territorial, sino á las mercancías y á los ganados y deberían calificarse como derechos de aduanas, consumos, puertas y portazgos, según el lenguaje moderno.

Como la calidad tributaria de los bienes dependía en gran parte de la condición personal de los propietarios, dispuso el rey D. Jaime en 1246 que los caballeros, clérigos y religiosos que habían comprado ó compraran en Valencia ó su término heredades de ciudadanos, contribuyeran y sirvieran con tributos, huestes y cabalgadas, como los demás contribuyentes.

(1) F. 14, lib. 4, rubr. 19.

(2) Tarazona, obr. cit., lib. 1, tit. 15.

y que pecharan del mismo modo, por los bienes dotales de sus mujeres, los caballeros que se casaran con villanas (1). Era, sin embargo, permitido á los propietarios exentos cambiar sus heredades por otras de villanos, poseyendo las adquiridas tan inmunes como las suyas propias, y comprar de los mismos villanos alguna casa para habitarla, aunque no para utilizar su renta (2). La ley citada de 1246 fué, sin embargo, modificada después en 1529 por D. Alfonso I, el cual dispuso que los ricos-hombres, generosos y caballeros pudieran comprar bienes en lugares de la corona, ó de los hijos ó hermanos del rey, y poseerlos, sin pagar en ningun tiempo por ellos, *questa, cena, hueste, cavalgada* ó su equivalente, ni ningun servicio real ó personal, de los que se prestaran en el lugar al rey ó principe, exceptuando tan sólo de esta merced el *tercio-diezmo*, el *monedaje* y los censos, particion de frutos y cargas que estuviesen impuestos, especialmente sobre los mismos bienes comprados (3). Cuando las propiedades exentas de caballeros ó eclesiásticos pasaban á ciudadanos pecheros, seguian la condicion del nuevo dueño. Por eso fué un privilegio tan estimado el que, segun ántes he dicho, concedió á los vecinos de Valencia el rey D. Pedro, de comprar y poseer bienes de aquella especie, sin más cargas que la de hueste y cabalgada.

Tampoco estaban exentos los propietarios alodiales del servicio de las armas. Ya se ha visto cómo los caballeros de la conquista se obligaron á defender el reino, por razon de las tierras que en él adquirieron. Tambien se habrá notado en la escritura del repartimiento de Mallorca, de que hice ántes mencion, que la medida de tierra señalada á cada partcipe guardaba proporcion con el número de caballos que debía poner en campaña. Esta proporcion no era igual en todos los casos, pero siempre resultaba á razon de mucho más de 100 caballerías por cada caballo. D. Jaime y sus sucesores repartieron entre los barones y las universidades ó pueblos una gran parte del tercio-diezmo que se había reservado la corona, con la obligacion de prestar en las guerras que ocurrieran en adelante, el mismo servicio que en las pasadas (4).

Pero además de los nobles y caballeros obligados á acudir á la hueste acompañados ó solos, por razon de las heredades realengas que poseían, tenian una obligacion semejante, si bien mucho más limitada, todos los

(1) Branchat, obr. cit., tít. 2, privil. 3.

(2) F. 11, lib. 4, rubr. 19.

(3) F. 12, lib. 4, rubr. 19.

(4) Escolano, obr. cit., par. 1, lib. 3, c. 7.

ciudadanos aunque no disfrutaran bienes del rey. Este servicio no podía exigirse de los valencianos sino dentro del reino, ó contra los enemigos de la frontera, cuando el rey fuese en la hueste, ó cuando los enemigos invadieran su tierra. Así D. Pedro II, habiéndolos llamado á las armas en Gerona, tuvo que revocar esta orden, por no pertenecer aquella ciudad al reino de Valencia, aunque era propia de la corona. Los gobernadores no podían obligar á las villas á salir en hueste ó cabalgada, sino en los casos permitidos por el Fuero, y áun entonces no debían convocar más que el número de hombres necesario, segun el objeto de la expedicion, prefiriendo los de los lugares más cercanos á aquel á que hubieran de dirigirse. Tampoco podían ser obligados los hombres de las villas á salir á campaña sin que se les asegurase la paga de su servicio, la cual había de satisfacerse con los bienes de los rebeldes, á razon de cinco sueldos diarios por cada caballo armado, tres por cada caballo ligero, un sueldo por cada ballestero, dos dineros por cada lancero y dos sueldos por cada hombre montado en mula. Los salarios se devengaban desde la salida de la casa de cada uno hasta la vuelta (1).

Los dueños de honores estaban tambien obligados á servir al rey en la forma y con las condiciones prescritas en el fuero de Aragon, segun quedan expuestas en el capítulo 2.º del libro V, y excuso, por lo tanto, repetir las.

La propiedad feudal llevaba, pues, consigo el servicio militar, como una de sus cargas más esenciales. En el catálogo de los feudatarios de la corona, en el reino de Valencia, de que he dado noticia en el capítulo anterior, se ve que los dueños de lugares ó heredades, los poseían unas veces con arreglo á la *costumbre de Cataluña*, que era, como ántes dije, el régimen feudal en todo lo que hacia relacion á las condiciones del dominio, y otras veces con la condicion expresa de acudir á la hueste con cierto número de caballos. Así el castillo y villa de Villafamés se dieron por el rey «con el servicio de los caballeros, segun el valor de dicho feudo, con arreglo á la costumbre de Barcelona:» el castillo de Carbonera con los servicios de hueste y cabalgada: el castillo y villa de Burriol con el servicio de un caballero: el castillo y villa de Albaida con el servicio de cuatro caballeros armados, y así otros muchos lugares y fortalezas. Mas aunque el servicio no estuviese tasado en la carta feudal, entendiase siempre que el feudatario había de prestarlo al señor en campaña, por lo ménos con su persona. Así

(1) Tarazona, obr. cit., lib. 3, t. 23, pár. *Los jurats*.

dice una ley del conquistador D. Jaime, que «siendo propio de la naturaleza del feudo que el vasallo sirva á su señor, guarde y defienda su persona, no debe abandonarle en la batalla campal, y si lo hace, pierde todas las cosas que de él tuviere» (1).

El feudo se constituía y se confirmaba por el señor con las ceremonias conocidas de la entrega de la espada, la prestacion de homenaje, el juramento de fidelidad y la investidura. Puede verse esta fórmula en varios antiguos documentos, y entre ellos dos cartas de confirmacion de ciertos feudos, expedidas por el rey D. Fernando en 1412, á favor del duque de Gandía, de los cuales se dice que éste habia prestado juramento al monarca sobre la cruz y los cuatro evangelios, y rendido homenaje con la mano y con la boca, segun los *usages* de Barcelona y las *costumbres generales* de Cataluña, que en su virtud prometia guardar y cumplir todas las cosas á que por dichos feudos habian estado obligados sus predecesores, segun las cartas de infeudacion, y que el rey, accediendo á la súplica del duque, le investia personalmente de los mismos feudos, mediante la entrega de su propia espada, en los términos en que los habian tenido sus antecesores (2). Con esta misma fórmula daban y confirmaban los feudos á sus vasallos los señores particulares, pero era condicion indispensable que mediase entre ellos la entrega de alguna cosa feudal, para que fuera licito el homenaje. El rey D. Jaime, considerando acto exclusivamente propio de su soberanía la recepcion del vasallaje personal, prohibió aceptar homenaje de ningun ciudadano ni caballero á quien no se diera algo en feudo, so pena de quedar los contraventores á merced de la corona (3).

El que poseía en feudo tierra, lugar ó castillo, entendiase que tenia en ellos «potestad, paz y guerra, luismo y fadiga,» como en la carta de infeudacion no se hubiera convenido cosa en contrario. *Potestad* se llamaba la posesion y mando, el cual, tratándose de castillo ó villa, se extendia á todo su término. El señor del feudo podia recobrarla habitando algunos dias en el castillo ó pueblo feudal, como en reconocimiento de su dominio, ó apoderándose del feudo para apremiar ó castigar al vasallo rebelde ó moroso en el cumplimiento de sus promesas (4). Cuando el señor ocupaba el castillo sólo en reconocimiento de su señorío, debia devolverlo á su vasallo á

(1) Fuero 11, lib. 9, rubr. 21.

(2) Branchat, obr. cit. t. 2, p. 115.

(3) F. 8 y 9, lib. 9, rubr. 20.

(4) F. 23 y 24, lib. 9, rubr. 21.

los diez dias, con los frutos entre tanto percibidos, ménos el importe de los gastos, que para su conservacion hubiera hecho (1). Cuando lo tomaba como pena ó apremio al vasallo, podia retenerlo hasta que éste satisficiera lo que debiese. Si el feudatario negaba la *potestad* al señor, cuando se la exigia en señal de reconocimiento del señorío, ó si le rehusaba la *firma de derecho* en reconocimiento de su jurisdiccion, cometia un delito de traicion, y el señor podia tomarle la tierra y retenerla hasta que fuera reconocido su derecho y competentemente indemnizado de todos los gastos, daños y perjuicios (2).

Las tierras censatarias eran las más gravadas, pero con cargas diferentes segun la calidad personal de sus poseedores. Las dadas á labradores sarracenos participaban de la miserable condicion de éstos, y por lo tanto apenas constituian una propiedad verdadera. Aquellos desdichados colonos solian no hacer suyos los frutos que producian, sino en la parte que el mudable arbitrio del señor tenia á bien abandonarles. Estaban exentos por privilegio de D. Pedro III de pagar á la corona los 12 ó 20 sueldos y los demás tributos que pesaban sobre los hombres de su raza (3); mas era porque debian contribuir con ellos ó cón otros mayores ó equivalentes á los señores de sus lugares. Eran, pues, casi siervos de la gleba.

Mejor condicion disfrutaban los censatarios cristianos, que poseian y cultivaban sus tierras mediante pension ó parte cierta de frutos, pues en pagando á sus señores lo convenido y cumpliendo las condiciones propias del enfiteusis, segun la legislacion valenciana, no podian ser obligados á más. Eran hombres libres por naturaleza, y así no podia exigírseles sino aquello á que se habian comprometido por contrato. Entre los feudatarios de la corona, de que varias veces he hecho mencion, se encontraban muchos terratenientes, con expresion de las heredades que poseian y del censo que por ellas pagaban, y á veces con la cláusula de no exigírseles ningun otro servicio. En 1275 dió el rey á Guillermo Amiguet, letrado, un huerto cerca de Sollana, por censo de 10 sueldos; á Guillermo Loarre, dos molinos á mitad de frutos; á Arnaldo Arenis, un pedazo de tierra á censo de una masmodina, y de este modo otros muchos hornos, molinos y heredades.

Así como los feudatarios estaban obligados á dar la *potestad* de sus feu-

(1) F. 4, lib. 9, rub. 21.

(2) F. 1, 25, 26, 27, lib. 9, rub. 21.

(3) Una de estas cargas era tomar y pagar la sal que forzosamente se les repartiese. Branchat, obr. cit., t. 1, p. 14.

dos á los señores, cuando éstos se la pidieran, en reconocimiento de su dominio, así los poseedores de tierras censatarias tenían la obligación de cabrevarlas, esto es, de mostrarlas á su señor y presentarles su título cada cuatro años ó cuando el señor se lo exigiese fuera de este plazo, si pagaba los gastos de la cabrevacion (1). De este modo averiguaba el señor si la heredad se conservaba sin menoscabo ni deterioro, reclamaba en caso contrario la indemnización correspondiente y mantenía vivo su derecho contra las usurpaciones á que pudiera dar lugar el abandono del terrateniente.

Las pensiones no guardaban igual proporcion con el valor de las fincas censatarias. Ya he dicho que á veces consistían en una parte alicuota de los frutos, y á veces en cantidad cierta de éstos ó de dinero, pero en la fijación del tanto, no había más regla que lo estipulado, y esto dependía de las circunstancias en que respectivamente se hallaran los señores que impusieron y los vasallos que aceptaron las constituciones censales. Ni tampoco eran estas pensiones primitivas las únicas cargas de los censatarios, pues además de pesar sobre ellos todos los tributos generales y municipales con que estaban gravados los hombres de su condicion, contribuían al pago de los censos colectivos, que los señores jurisdiccionales solían imponer sobre sus pueblos, á favor de aquellos que les suministraban los capitales que habían menester para reparar sus haciendas ó proveer á sus necesidades. Si el censatario dejaba de pagar cuatro años su pension, podía el señor despojarle de su finca y disponer á su arbitrio de ella (2). Las corporaciones perpétuas y las manos muertas poseedoras de censos, pagaban además al señor el tributo llamado *quindenio*, ó sea una especie de laudemio cada quince años.

La propiedad tributaria ostentaba también en Valencia otro signo característico de su primitiva servidumbre. Tal era la obligación de los terratenientes de no abandonar los lugares de sus heredades, so pena de perderlas. En la ciudad de Valencia era la obligación de residir condicion expresa prescrita á muchos pobladores enfiteutas. Si un sarraceno labrador adscrito á heredad de cristiano, la abandonaba, mudando de domicilio, podía el señor confiscarle todos los bienes que poseyese dentro de su demarcación jurisdiccional. Cuando un moro vasallo de cualquiera se trasladaba á lugar de otro señor, sin pagar al primero lo que le debiese, quedaba el

(1) Bas, obr. cit., part. 1.^a cap. 30, núm. 70.

(2) F. 38, lib. 4, rubr. 23.

que le recibia en su tierra, obligado á pagar su deuda dentro de un mes, ó á restituir el moro á su primitivo dueño, á fin de que le prendiese y tuviera en la cárcel hasta que satisficiese su débito. Si partian de cualquier lugar cuatro ó más moros juntos, sin licencia del señor, además de perder sus bienes, quedaban esclavos *ipso jure et facto*, con sus mujeres é hijos, y vendidos como tales, se dividia su precio entre el rey y el señor del lugar (1). Los judíos que se ausentaban de los lugares realengos pasando á los de señorío, quedaban á la merced del rey, á ménos que el señor, á quien fueran á servir, tuviera el privilegio de hacerlos suyos (2).

Mas al lado de estos vestigios indudables de la servidumbre antigua, ofrece la legislación valenciana señalados testimonios de la tendencia de los monarcas á abolirla. Si no lo consiguieron por completo, debióse á la fatal circunstancia de sufrir aquella triste condicion hombres de otra ley y otra raza que, si eran necesarios para la prosperidad material de la tierra, tambien era menester sojuzgarlos como enemigos peligrosos. Así D. Jaime I facultó á todos los hombres del reino para vender sus bienes y llevar libremente su precio á donde quisiesen. D. Pedro I declaró que los poseedores de heredades no estarían obligados á residir en ellas, no obstante cualesquiera condiciones estipuladas en contrario. Mas como se prevaliesen de esta libertad muchos vasallos de señorío para mudar su domicilio á Valencia, á fin de disfrutar las franquezas concedidas á esta ciudad, dejando despoblados muchos lugares, con grave perjuicio de sus señores, quejáronse de ello en las Cortes de Morella de 1370, el brazo militar y el eclesiástico; y en su vista, mandó el rey D. Pedro IV que no se pusiera impedimento á los vasallos que mudaran de domicilio, llevándose sus bienes muebles y semovientes, pero con tal de que vendieran los inmuebles en el término de cuatro meses, con las mismas condiciones y cargas con que ellos los poseyeran, y en el supuesto de que transcurrido este plazo, podria el señor ocuparlos y disponer de ellos á favor de otros vasallos (3). Habia además ley expresa que permitia á los sarracenos abandonar sus lugares y trasladarse con sus bienes muebles á Castellon de la Plana, pero con tal de que vendiesen sus inmuebles (4). El vasallo de otro señor que fuera á habitar á Valencia, quedaba libre del vasallaje, siempre que desamparara lo que de su señor tuviera. De modo que la libertad de re-

(1) F. 24, 25, 26 y 77, lib. 6, rubr. 1.

(2) F. 3, lib. 3, rubr. 8.

(3) Fueros 1, 6 y 7, lib. 1, rubr. 5.

(4) Tarazona, obr. cit. lib. 1, tit. 2 y 15.

sidir en cualquier lugar del reino declarada á los vasallos, no tenía generalmente más limitacion que la de no perjudicar con su uso á los señores territoriales, lo cual habria sucedido, si los vasallos hubieran conservado sus tierras, y eximido sus personas de los servicios á que estaban obligados. Desamparando el ausente sus propiedades á favor de otro que cargara con sus obligaciones, nada perdía el señor, puesto que sólo cambiaba un vasallo por otro. Esto no obstante el emperador D. Carlos renovó en el siglo xvi, respecto á los vasallos de la Baronia de Córtes, la antigua prohibicion de mudar de domicilio. Habiendo asesinado estos vasallos á su señor D. Luis Pallars, porque les exhortaba de orden del rey, á hacerse cristianos, fueron condenados á pagar al hijo de D. Luis 5.000 ducados en doce años; y como muchos de ellos abandonaran la baronia, para eximirse de la multa, mandó el rey, á peticion de los tres brazos, que no cambiasen de domicilio hasta que cumplieran su empeño (1).

Los derechos adquiridos de la corona en los lugares y tierras de su patrimonio, no eran tan irrevocables como parecen á primera vista, por los instrumentos de enajenación. Juntamente con las leyes que atribuian al monarca la facultad de disponer á su arbitrio de las tierras de la corona, para las necesidades de la república, nació la doctrina que fijaba límites, aunque indeterminados, á este derecho, fundada en la conveniencia de mantener la integridad del territorio, para conservarlo y defenderlo, en la obligacion de no defraudar á los sucesores en la corona del patrimonio que les estaba reservado, y en la ventaja que hallaban los pueblos en no estar sujetos á otro señorío que el del rey. Así, á la vez que los monarcas enajenaban lugares y jurisdicciones para premiar servicios ó levantar fondos con que remediar sus necesidades, otorgaban á muchas villas y pueblos la promesa de no enajenarlas, protestaban contra las mismas enajenaciones que ellos habian hecho, y mandaban incorporar á la corona muchos castillos y lugares anteriormente enajenados. Fué en ocasiones tan precaria la suerte de los nuevos propietarios, que el mismo conquistador D. Jaime y su hijo y sucesor D. Pedro tuvieron que tranquilizarlos, confirmando los por ley general sus dominios, y desistiendo de las demandas interpuestas en nombre de la corona contra muchos de ellos (2).

Esto no obstante, D. Jaime II, D. Alfonso I y D. Pedro II, incorporaron perpétuamente al real Patrimonio muchos pueblos y castillos (3). Aún hizo

(1) *Fuero Dels cassals de la baronia*, etc., in *Extravaganti*, fol. 84.

(2) Branchat, obr. cit., t. 2, privil. 8 y 9.

(3) *Ibid.* privil. 10, 11, 12, 13 y 14.

más el último de estos monarcas, pues en documentos reservados, que no publicó sino cuando lo creyó conveniente, protestó contra varias enajenaciones á título oneroso, que dijo haber otorgado para hacer la guerra al rey de Marruecos y al de Mallorca y proveer á otras necesidades públicas, mandando revocarlas, sin indemnizar á los poseedores del precio desembolsado (1). Luego al poco tiempo, ordenó la venta de varios lugares y villas, encargando que se dieran por cualquier precio (2). Verificáronse, en efecto, estas nuevas enajenaciones; pero como hubiesen sido objeto de ellas algunos lugares que habian obtenido la promesa y disfrutaban el privilegio de no ser desmembrados de la corona, reclamaron las Córtes contra su venta, y aquel mismo monarca tuvo que ordenar al gobernador de Valencia, que cuando acudieran á él los síndicos del brazo real ó los pueblos á pedir la incorporacion de villas, castillos ó lugares, enajenados contra el tenor de los privilegios, hiciera justicia breve y sumariamente, con arreglo á ellos (3). D. Juan I siguiendo estos ejemplos, mandó en 1387 ocupar todas las jurisdicciones y derechos enajenados de la corona, si bien con la devolucion previa á los poseedores del precio desembolsado (4). La reina doña María, mujer del rey D. Martin, pronunciando sentencia en 1397 como gobernadora del reino, mandó tambien devolver á la corona muchos bienes enajenados de ella, con igual restitucion del precio. El mismo rey D. Martin ordenó otras varias incorporaciones, mandando al bayle general que recorriese personalmente el reino y reintegrara á la corona en los bienes enajenados, del modo que mejor pudiera (5). Los monarcas posteriores, unas veces espontáneamente y otras á peticion de las Córtes, dictaron con el mismo objeto otras muchas disposiciones. De tan deplorable historia, puede inferirse la seguridad que disfrutaban en aquellos aciagos tiempos, las propiedades de todas clases adquiridas de la corona.

(1) Ibid. privil. 15 y 16.

(2) Branchat, privil. 17.

(3) Ibid. obr. cit., t. 2, privil. 19.

(4) Id. id. id. privil. 22.

(5) Id. id. id. privil. 24, 25, 26 y 27.

CAPÍTULO III.

De las restricciones del dominio.

El dominio de la tierra estaba limitado en Valencia como en otros reinos con graves restricciones de la facultad de enajenarlo en vida y en muerte, fundadas unas en el interés del Estado y otras en el de las familias. Estas restricciones afectaban así á las propiedades alodiales como á las feudales y á las censatarias, pero no en igual grado, puesto que las primeras eran más libres que las segundas, y éstas más que las últimas. Como al principio, segun decia en sus diplomas el rey conquistador, «pertenecian » todas las tierras al señorío de la corona, » pudo ésta constituir su dominio del modo que juzgó más adecuado, para que fuese el principal elemento de fuerza y conservacion del nuevo reino. Siendo entonces la primera necesidad de éste promover su repoblacion, asegurar su defensa y procurar que sus moradores contribuyesen con su hacienda á levantar las cargas públicas, á todo proveyó el rey D. Jaime, imponiendo condiciones determinadas á los nuevos dueños del suelo, segun la calidad de sus propiedades.

Fué condicion expresa del primer reparto de tierras, que los nuevos propietarios, tanto alodiales como de otra especie, no las enajenarian en el término de cinco años, y las dejarían á sus hijos y parientes para que continuaran habitándolas. Verdad es que los más de ellos faltaron, como ántes he dicho, á esta penosa obligacion; pero si el mismo D. Jaime tuvo que eximirles de su cumplimiento en 1245 y aprobar las enajenaciones ilegalmente verificadas, en cambio impuso á los ciudadanos la prohibicion de enajenar sus bienes raíces de toda especie, á eclesiásticos, religiosos y caballeros (1). Tal fué el precio de aquella casi forzosa gracia, pues si por una parte consintió el rey en que las propiedades de conquista salieran de las familias que las ganaron por tan glorioso título, hizo por otra que conservaran aquellas propiedades su calidad realenga, á fin de que no gozaran las exenciones perjudiciales á la corona que disfrutaban los bienes señoriales y eclesiásticos. Con este mismo objeto dictaron después los monarcas valencianos otras muchas disposiciones, en cuya virtud la ley de amortizacion fué más rigurosa y mejor observada en aquel reino que en otros de la Península.

(1) Branchat, obr. cit. t. 2, privil. 4.

Era fuero primitivo de Valencia que la heredad enajenada por contrato ó última voluntad á iglesia ó lugar religioso, se vendiera en el término de un mes. Después se prorogó este plazo hasta un año (1), pero prohibiéndose dejar bienes raíces, por testamento, á clérigos ó religiosos, y ordenándose que los que les legasen los testadores pasaran á los herederos legítimos (2). Luego quedó vedada toda enajenacion entre caballeros, clérigos y religiosos, de las heredades que por cualquier título poseyeran (3). Mas el espíritu religioso del tiempo, que pugnaba por sobreponerse al interés fiscal y político que dictara tales prohibiciones, logró pronto modificarlas con excepciones importantes. Así el mismo D. Jaime tuvo que facultar á los caballeros para dar por sus almas á la iglesia en venta, legado ó donacion, sus heredades alodiales, con lo cual quedó reducida la prohibicion anterior á las heredades que los caballeros tuvieran por el rey á tributo cierto, ó con condiciones señaladas. También corrigió D. Jaime otro de sus fueros, que prohibia constituir censos á favor de la iglesia, permitiendo hacerlo para costear sufragios ó fundar capellanías (4). Después don Jaime II declaró en 1514, que segun los Fueros del reino era lícito á los eclesiásticos comprar á los caballeros las propiedades que no poseyeran á título de feudo ó con ciertas condiciones, ó mediante determinados servicios (5). Más adelante el rey D. Martin declaró en 1405, por regla general, que los clérigos particulares podrian adquirir por cualquier título bienes realengos, siempre que los destinaran á usos propios, pagaran las cargas reales y vecinales, se sometieran en todo lo concerniente á ellos, á la jurisdiccion real, y los dejaran por su muerte á personas seglares (6). Por último, cuando ya la ley de amortizacion no reconocia otro fundamento que el interés del fisco, se introdujo la práctica de conceder á las iglesias y corporaciones religiosas licencia para adquirir bienes inmuebles, mediante el pago de un impuesto, que en el siglo xv era de cuatro sueldos por cada libra del precio estipulado, y un sueldo por derecho de sello, y en el siglo xvii se aumentó á seis sueldos por libra, cinco por derecho de amortizacion, y el mismo sueldo por sello (7).

(1) F. 5, lib. IV, rubr. 19.

(2) F. 47, lib. VI, rubr. 4.

(3) F. 8, lib. IV, rubr. 19.

(4) F. 6, 7 y 9, lib. IV, rubr. 19.

(5) Branchat, tom II, cap. III, privil. 20.

(6) F. 15, lib. IV, rubr. 19.

(7) Belluga, *Speculum Principis*, rubr. 14, vers. *Restat- Carta de Carlos II a arzobispo de Valencia* en Branchat, tom. II, cap. III, privil. 57. D. Fernando VI.

Entre seglares estaba tambien restringida la facultad de enajenar, por razon de la calidad de las personas, ó de las propiedades. Las alodiales podian venderse á ciudadanos, mas no las feudales ó censatarias, cuyo señorío directo correspondia á la corona. Antiguamente tampoco podian venderse propiedades realengas alodiales á ricos-hombres y caballeros, como no pertenecieran á esta misma clase los vendedores; pero Alfonso III en 1329 alzó tal prohibicion, permitiendo vender á los caballeros las tierras realengas y las de señorío del príncipe heredero ó de los hermanos del rey y sus sucesores, facultándoles para poseerlas con exencion de los tributos de *questa*, *cena*, *hueste*, *cavalgada*, y de todo servicio real y personal, quedando tan sólo á salvo para la corona el *tercio-diezmo*, el *monedaje* y los censos impuestos sobre los mismos bienes (1). Los ciudadanos de Valencia disfrutaban el codiciado privilegio de poder comprar sus heredades á los caballeros y religiosos y poseerlos con iguales exenciones que los vendedores, excepto la de hueste y cabalgada. Los caballeros de la misma ciudad podian vender sus bienes á personas del estado llano, aunque no con aquella libertad de tributos, pero los que recuperaban despues de enajenados, volvian á su poder con las mismas inmunidades que ántes tuvieran (2). No les era permitido comprar heredades de los vecinos de las villas, pero sí permutarlas por otras suyas y aún comprarles alguna casa para su morada (3).

La enajenacion de los bienes feudales estaba sujeta á más graves restricciones. El feudatario no podia vender ni obligar el feudo sin licencia expresa del señor: si lo verificaba, era nulo el acto y no podia el adquirente ampararse de la prescripcion. Tampoco podia el señor enajenar su dominio directo ni su potestad sobre los vasallos á otra persona de menor calidad, ó á *más bajo señor*, como dice el fuero, sin consentimiento de los mismos vasallos (4). El feudatario que vendia su feudo con la competente licencia, debía pagar al señor por *luismo*, la décima parte del precio, y el que lo empeñaba debía satisfacer por el mismo concepto la vigésima parte de la cantidad recibida en préstamo. El señor, sin embargo, no podia retener el feudo enajenado sin su consentimiento ó sea por causa de *fúdiga*,

D. Carlos III mandaron que hasta nueva orden no se concedieran más privilegios de amortizacion.

(1) F. 26, lib. 8, rubr. 8, y F. 12, libr. 4, rub. 19.

(2) F. 14 y 10, lib. 4, rubr. 19.

(3) F. 11, *ibid.*

(4) F. 7 y 8, libr. 9, rub. 21.

porque como dice el fuero, ninguno puede ser á la vez señor y vasallo de sí mismo, por razon de una misma cosa.

Los censatarios no podian tampoco enajenar ni obligar las heredades enfitéuticas, sin expreso permiso del señor directo, ni darlas á censo mayor ni menor, ni reconocer por ellas el señorío de otro, sin igual permiso; y si lo hacian, no sólo era nula la enajenacion, sino que recobraba el señor su finca y podia disponer libremente de ella. Concedida la licencia para vender, tenia el señor *fúdiga* de treinta dias, esto es, derecho para optar en este plazo por la adquisicion de la finca, entregando el precio que otro hubiera ofrecido por ella. Tambien tenia derecho al *luismo*, computado del mismo modo que en los feudos. Estos derechos eran inherentes al contrato, y por lo tanto, los disfrutaba el señor directo, como no se hubiera estipulado lo contrario.

La facultad de disponer de los bienes para despues de la muerte, tenia tambien sus limitaciones, ya á favor del Estado, ó ya en utilidad de las familias. Del primer género eran las contenidas en las leyes que prohibian dejar bienes por última voluntad á caballeros generosos, que no vivieran al fuero de Valencia; sin duda porque los que disfrutaban del fuero de Aragon no estaban tan dependientes de la corona, por razon de sus heredades como los que se regian por la legislacion valenciana. Tampoco era permitido, segun ántes se ha visto, dejar bienes inmuebles por herencia ó legado, á iglesias, eclesiásticos y religiosos, aunque si su precio.

El derecho de testar se hallaba tambien limitado en beneficio de las familias, por las leyes que señalaban la legítima de los hijos y descendientes; pero estas leyes no hubieron de ser bien recibidas por los primeros pobladores y fueron pronto reformadas, para favorecer la libertad de los testadores. Tomado en su mayor parte el Fuero valenciano de las leyes catalanas y las aragonesas, prevaleció en unos puntos el derecho de Aragon y en otros el de Cataluña. Optó por este último el legislador D. Jaime en cuanto al derecho de testar, señalando en su consecuencia á los hijos una porcion legítima, de la cual no podrian ser privados, sino mediante desheredacion expresa. Segun los primitivos fueros de aquel monarca podian disponer libremente de sus bienes por testamento, los que no tuvieran hijos de legítimo matrimonio; mas los que los tuviesen habian de reservarles por lo ménos, una tercera parte del caudal, si eran los hijos ménos de cinco, ó

(1) F. 11, *ibid.*

(2) F. 7 y 8, lib. 9, rubr. 21.

una mitad, si excedían de este número, pudiendo distribuir á su arbitrio todo lo restante. Era lícito desheredar á algun hijo, pero no sino por alguna de las siete causas que determinaban las leyes (1). La madre debía distribuir su dote entre los hijos, por partes iguales ó desiguales, aunque aquellos fuesen de distintos matrimonios, y sus donaciones *propter nuptias*, sólo entre los hijos del padre de quien procediesen. Igual obligacion tenia el padre para con los hijos de diferentes matrimonios, respecto á lo que hubiere adquirido de sus distintas mujeres. A falta de hijos, debía el testador reservar á sus padres, como porcion legítima, la tercera parte de su hacienda. En defecto de hijos y de padres tenian derecho los nietos, si los hubiese, á la misma legítima (2).

Nótase sin embargo al parecer cierta antinomia entre estas disposiciones y una ley del mismo conquistador D. Jaime, que facultaba aún á los padres con hijos legítimos, para disponer por testamento ó entre vivos de todos sus bienes (3). Pero como esta ley se halla comprendida en el mismo código en que se insertaron los fueros concernientes á las legítimas, debe considerarse la declaracion que contiene como un principio general restringido después en su aplicacion, por dichos fueros. Quiso pues D. Jaime establecer por regla general la libre comunicacion del dominio, pero reservando á los descendientes y ascendientes, cuando los hubiese, alguna parte en la herencia. Tal fué tambien, el principio adoptado en Cataluña.

Mas esta legislacion no hubo de ser bien acogida, segun ántes he dicho: la aragonesa que permitia testar libremente, con tal de que los hijos no fuesen preteridos, dejándoseles cualquiera cosa en el testamento paterno, hubo de hallar más favor entre los pobladores del reino valenciano, y por eso no llegó á arraigarse la primera. Cediendo al fin D. Pedro II al influjo del derecho aragonés, corrigió los fueros citados de D. Jaime, permitiendo á los testadores disponer libremente de todos sus bienes entre hijos, parientes ó extraños, sin la obligacion de reservar ninguna parte cierta por razon de legítima (4). Luego el rey D. Martin, tomando en cuenta las instancias de los que estimaban extremada esta libertad, la restringió un tanto, ordenando en 1405, que los testadores que tuviesen hijos ó padres, no pudiesen sin desheredarlos expresamente en su testamento, ó sin dejarles cualquiera

(1) F. 47, 46, 49 y 31, lib. 6, rubr. 4, y F. 15, libr. 6, rubr. 9.

(2) F. 48, lib. 6, rubr. 4.

(3) F. 25, lib. 6, rubr. 4.

(4) F. 51, lib. 6, rubr. 4.

cosa, aunque fuese con gravámen de sustitucion ó vínculo, disponer libremente de toda su hacienda (1). Esta prescripcion tomada del derecho aragonés, se completó más tarde, con la jurisprudencia del mismo origen, que consideraba nulo el testamento del padre en que no se dejaran á algun hijo cinco sueldos por lo ménos, de legitima. Luego se admitió tambien en la práctica una regla de igual origen, que no permitia á la mujer casada en segundas nupcias, legar á su marido mayor parte de herencia que la que dejara al ménos favorecido de los hijos del primer matrimonio. En la misma forma se introdujo la prohibicion de instituir heredero al hijo natural, habiéndolo legitimo. Entre los eclesiásticos se consideraba obligatoria la costumbre, si hacian testamento, de dejar en él alguna cosa al arzobispo de Valencia (2).

La ley concedia al cónyuge sobreviviente derechos que limitaban tambien la facultad de disponer en testamento. El viudo y la viuda nobles podian exigir alimentos al heredero del cónyuge difunto, mientras que no pasaran á segundas nupcias, y en tanto que la viuda viviese honestamente. El hombre que no vivia del trabajo de sus manos, si enviudaba, podia retener la dote de su mujer, mientras que no contrajese nuevo matrimonio, y si lo contraia, no estaba obligado á restituir más que la mitad de la dote á los herederos de la primera mujer, afianzándoles para despues de su muerte, la restitution de la otra mitad. Las arras y donaciones esponsalicias podia tambien conservarlas la viuda durante su vida, si dentro de un año, no contraia segundo matrimonio y vivia honestamente (3).

Por último, de la edad y condiciones que la ley exigia para hacer testamento, resultaba otra limitacion de este derecho. Nadie podia testar ántes de cumplir 15 años, pero el que lo hacia ántes de los 22, estaba obligado á dejar á los parientes más próximos las cuatro quintas partes de su herencia, no pudiendo disponer sino de la quinta restante. La hija casada, cuyos padres se hallaran en la ciudad ó en su término, no podia testar legitimamente, sino en su presencia, si bien lo que disponia de este modo era válido, aunque los padres lo contradijesen (4). Por donde se vé, que si al fin prevaleció la costumbre aragonesa, en cuanto á la libertad de testar, fué con algunas restricciones inspiradas por la legislación de Cataluña.

(1) F. 52, lib. 6, rubr. 4.

(2) Bas, obr. cit. pár. 1, c. 26.

(3) F. 39, lib. 6, rubr. 4. F. 25, lib. 5, rubr. 5: 11, lib. 6, rubr. 6: lib. 5, rubr. 2.

(4) F. 5 y 11, lib. 6, rubr. 3.

El orden de suceder *ab intestato*, se acomodaba en su mayor parte al establecido por Justiniano, pero mezclado con algunos vestigios del sistema feudal. También era diferente según que los bienes tenían la calidad de alodiales ó feudales. En los primeros sucedían, muerto el padre, los hijos legítimos, por iguales partes, con exclusion de los naturales; en su defecto, los nietos y descendientes más próximos; por su falta, los padres ó ascendientes más cercanos, sin distinción entre los paternos y los maternos. Pero si con éstos concurrían hermanos enteros del difunto ó sus hijos, heredaban unos y otros con igualdad, si bien los sobrinos no tomaban más parte entre todos, que la que habría correspondido á su padre, si viviese. No habiendo descendientes ni ascendientes, sucedían los hermanos por iguales partes, así los de padre y madre como los de padre ó madre solamente; pero con la singularidad de que en este caso no concurrían con ellos los sobrinos, hijos de un hermano premuerto, cualquiera que fuese el tronco de donde descendieran los bienes. En defecto de hermanos sucedían los parientes más próximos, sin limitación de grados: no habiéndolos, el cónyuge superviviente, y por su falta los lugares pios, según la distribución que los tribunales, con el consejo de hombres buenos, hicieran de los bienes. En ningún caso había diferencia entre varones y mujeres para el efecto de estas sucesiones (1). Al menor de 15 años, nacido después de muerto su padre y que no podía testar, sucedían los más próximos parientes del padre en los bienes que de éste tuviese, y los más próximos de la madre en los que dejara procedentes de ella, pero quedando á salvo la legítima de ambos y la dote y arras; y si el tal hijo moría después de los 15 años y sin testamento, sucedían la madre ó los parientes más próximos. Cuando el puer moría dejando bienes vinculados paternos ó maternos, los sustitutos heredaban solo las dos terceras partes de ellos, por cuanto la restante era legítima del menor. De ésta debían tomar el padre y la madre el tercio, por razón de su legítima y los otros dos tercios correspondían á los parientes más próximos en la línea de que procedían los bienes (2). La viuda sin dote, ni hijos, cuyo marido moría sin testamento, podía reclamar el 7 por 100 de la herencia y si tenía hijos, le correspondía optar entre este derecho ó vivir en compañía de ellos, con los bienes del marido (3). Por antigua costumbre, el arzobispo de Valencia sucedía á los eclesiásticos que morían in-

(1) F. 1 y 2, lib. 6, rubr. 5.

(2) F. 9 y 10, lib. 6, rubr. 5.

(3) F. 14, lib. 5, rubr. 1.

testados, en todos los bienes muebles, acciones y derechos, no quedando para los parientes más que los inmuebles (1).

En cuanto á los feudos, conservó la legislación valenciana el orden de suceder establecido por el derecho comun feudal. El señor de un feudo podía libremente nombrar sucesor en su testamento; mas si moria sin hacerlo, correspondia al rey confirmar en la sucesion del feudo á aquel de los herederos legítimos del difunto que más fuese de su agrado. Si el feudatario no dejaba hijos varones, podia el rey, sin embargo, otorgar la sucesion á alguna de las hijas, siempre que se obligara á prestar el servicio propio del feudo. Cuando moria el vasallo sin hijos, elegia el señor entre sus parientes más próximos el que hubiera de sucederle en la posesion de los bienes feudales. Si moria el señor, debian los vasallos presentarse ante su sucesor en el término de un año, á fin de rendirle homenaje como hombres suyos, con la *mano y con la boca* y recibir de él los bienes que tuvieran de su causante. Los vasallos que no cumplian este deber, si eran mayores de 20 años, perdian sus feudos. El sucesor del vasallo debia tambien presentarse ante el señor en el mismo término y bajo igual pena, á fin de pedirle la investidura del feudo y rendirle homenaje. El señor debia dársela en tal caso, mas sin perjuicio de tercero de mejor derecho (2). Por lo tanto, el orden de suceder en los feudos dependia principalmente de la voluntad de los señores, por el interés que estos tenian en que tales propiedades estuviesen siempre en manos fieles y capaces de prestar los servicios debidos. Se reconocia hasta cierto punto, en esta sucesion, el derecho de los hijos y aún el de los parientes, pero dando siempre á los señores el de elegir entre ellos.

A los vasallos sarracenos sucedian en primer lugar sus hijos y en segundo sus propios señores. Verdad es que D. Pedro II les dió privilegio para que entre ellos, como entre los cristianos, sucedieran los parientes más próximos, aunque fueran unos vasallos de la corona y otros de señorio particular. Pero el rey D. Martin, á petición de los brazos militar y eclesiástico, que se quejaron de que el bayle de Valencia demandaba las herencias de los moros de los señores para otros de diferentes lugares, proveyó en 1403 que el privilegio de D. Pedro no se entendiera concedido en perjuicio de la corona, ni de los individuos de aquellos brazos (3). Esto

(1) Bas, obr. cit. part. 1.^a cap. 26, n.º 90.

(2) F. 12, 13, 14, 15, 16 y 22, lib. 9, rubr. 21.

(3) F. *Quod per privilegium*, In extrav. fol. 29.

bastó para que los señores continuaran heredando á sus vasallos moros, como lo hacian anteriormente. Así en el mismo siglo xv, al escribir Belluga, se disputaba en los tribunales sobre quién debia ser preferido en la sucesion de tales vasallos cuando morian sin hijos, si el rey, como señor supremo, ó el señor inmediato; pero segun aquel jurisconsulto, tenia el señor inmediato mejor derecho, excepto en los pueblos en que habia la costumbre de dividir estas herencias entre ámbos señores (1). Vestigio clarísimo de la antigua servidumbre y consecuencia necesaria de la triste condicion de estos vasallos; porque si los sarracenos eran, como se ha dicho, «siervos de la corona á quienes se habia dejado la vida por misericordia de los conquistadores, y el peculio para que quedara á merced de sus amos,» no es extraño que estos les heredasen, sobre todo cuando, muriendo sin hijos, no dejaban en su lugar otro vasallo que prestase el mismo servicio que ellos. Tal fué el régimen á que estuvo sujeta la propiedad en el antiguo reino de Valencia, hasta que al comenzar el último siglo perdió sus fueros y quedó sometido en un todo á la legislacion castellana.

CAPÍTULO IV.

Jurisdiccion y potestad inherentes al dominio.

Las infeudaciones y los censos daban origen en Valencia y en Mallorca, como en los otros reinos de la Península, á la jurisdiccion y potestad del señor feudal y del directo, sobre sus feudatarios y censatarios, pero en ninguno se conservó más tiempo, ni fué más general este signo característico del feudalismo. Los barones, como señores de sus lugares, tenian en ellos mero y mixto imperio y jurisdiccion alta y baja, por merced expresa del rey, ó por inmemorial costumbre. Los que poseian castillos ó tierras en feudo, tenian en ellos la *potestad*, ó sea la jurisdiccion, y aún mixto imperio, por merced soberana. Los dueños de tres ó siete casas de moros ó quince de cristianos, tenian en ellas por ministerio de la ley, jurisdiccion y mixto imperio. Los dueños directos de heredades enfitéuticas

(1) Belluga, rubr. 24.

tenian tambien jurisdiccion sobre los censatarios, en las cuestiones relativas al enfiteusis. La jurisdiccion era por lo tanto uno de los frutos ordinarios de la tierra que se enajenaba con ella y andaba en el comercio, como los demás bienes inmuebles.

Veamos ahora lo que se entendia en Valencia por mero y mixto imperio y por jurisdiccion, y así se comprenderá mejor cómo estaba distribuida la potestad pública entre los dueños de tierras y la corona. Segun el jurisconsulto Belluga, ántes citado, comprendia el mero imperio la facultad de legitimar á los hijos ilegítimos, la de conceder la restitucion *in integrum* de las sentencias criminales, la emancipacion, las vénias de edad y otras dispensas y la de crear caballeros, nombrar escribanos, dar tormento, levantar horcas y condenar á muerte, confiscacion de bienes ó cárcel perpétua. El mixto imperio comprendia por derecho comun, los actos de jurisdiccion voluntaria, con la potestad coactiva suficiente para llevarlos á efecto; pero en Valencia iba siempre unido á la jurisdiccion civil y facultaba para todos los actos de la contenciosa y hasta para imponer pena de azotes, sin limitacion de número, aunque no las de muerte natural ó civil, mutilacion, extrañamiento, ni las personales con que se debian sustituir las pecuniarias (1).

En vano habia ordenado el rey D. Jaime que el mero imperio no se ejerciera por señores particulares, aunque fueran ricos-hombres ó barones (pues á esto equivalia la prohibicion de que nadie, sino el rey, ó sus delegados, hiciera justicia de sangre), declarando además nula cualquiera merced que se otorgara en contrario. El mismo monarca fué el primero que quebrantó esta prohibicion declarando por otra ley que los feudatarios de la corona podrian tener aquella potestad cuando expresamente les fuese otorgada por la corona. En vano los intérpretes modernos de los fueros procuraron conciliar ámbas leyes, suponiendo que la prohibicion indicada se referia á los propietarios alodiales y la facultad contraria á los simples feudatarios. Tal vez fuera la intencion del legislador impedir que, reuniendo los dueños de tierras libres este dominio con el mero imperio, disfrutaran una especie de soberania absoluta, que sólo podia reconocerse sin peligro, en los que tuvieran con la corona vínculos más estrechos de dependencia; pero es lo cierto que los sucesores de D. Jaime no lo entendieron así y concedieron el mero imperio por cartas reales á muchos barones y señores, sin tener en cuenta si sus lugares eran ó no feudatarios;

(1) Belluga, rubr. 23 y 24.

que otros grandes vasallos la usaron largo tiempo y sin contradiccion aparente; y que D. Alfonso I la reconoció y legitimó cuando trató de ordenar y regularizar un tanto las jurisdicciones señoriales (1). Asi quedó establecido, á pesar de la prohibicion antigua, que el monarca podia crear baronías con aquella altísima potestad, y que ésta podia prescribirse con el territorio á que fuera unido, mediante la posesion de treinta años, en perjuicio de otro particular ó la de cuarenta en daño del Estado, si existia algun título, aunque dudoso, ó por la posesion inmemorial, no habiendo ningun título. De este modo adquirieron tambien los barones y muchos caballeros la potestad de dar salvo-conductos para todo el reino, que segun el fuero, era atribucion exclusiva del soberano, amparando á veces con ellos en sus castillos, contra la justicia del rey, á muchos y muy grandes delincuentes.

Los barones ejercian, pues, el mero y mixto imperio en todos sus lugares, sin reservarse el rey más derecho en estos, que la potestad eminente, inseparable de la soberanía, aún en los tiempos de mayor feudalismo. En virtud de dicho imperio conocian los barones, por medio de sus jueces, de todas las causas civiles y criminales de los habitantes de sus respectivos territorios en primera y segunda instancia, imponian sisas sobre las vituallas y cargaban censales redimibles y vitalicios sobre los bienes comunales (2). Esta potestad no se limitaba, pues, á los vasallos que tenian de los barones algunos bienes, pues en lo civil se extendia á cuantos habitaban su territorio y aún á las cuestiones sobre heredades alodiales, sin distincion de propietarios. Exceptuábanse tan sólo de su jurisdiccion los delitos de lesa majestad, falsificacion de moneda, plagio de hombre y heregia, porque eran de la competencia de los jueces reales, aunque se cometieran por vasallos de señores. Tampoco estaban sujetos á aquella jurisdiccion, por estarlo á la del rey, los caballeros y generosos que habitaban en territorio señorial ó incurrian en delito que mereciese pena de mutilacion ó muerte (3).

En los lugares en que regia el fuero de Aragon ejercian los señores sobre sus vasallos de parada la potestad absoluta, además de la civil, en los términos expresados en otro lugar (4). No eran muchos los vasallos suje-

(1) Fueros 72 y 78, lib. 3, rubr. 5, y fuero 10, lib 9, rubr. 21. Matheu, *De regim. Regn. Valent.* c. 6, pár. 1.º

(2) Bas, *Theatrum jurispr. Valent.*, part. 1.ª, c. 13.

(3) Tarazona, obr. cit., lib. 1, t. 6.—F. 69, 68 y 80, lib. 3, rubr. 5.

(4) Véase el libro V, cap. 3.º, pár. 2.

tos en este reino á aquella cruel servidumbre; pero en cambio no estaban exentos de ella los de la iglesia, como sucedia en Aragon. Así el obispo de Tortosa, señor de Almazora, que era una de las villas sujetas y pobladas á aquel fuero, podia matar á sus vasallos de hambre, sed ó frio, sin perjuicio de la jurisdiccion del rey para imponer otras penas, y aún estaba facultado para levantar horcas con tal de que no fueran permanentes. También debia castigar el rey á cualquiera de los mismos vasallos que habiendo delinquido en Almazora fuese aprehendido en lugar realengo (1).

Tenian mixto imperio con jurisdiccion civil, todos los señores de lugares de cristianos en que hubiera quince casas por lo ménos, ó de lugares de moros, sitos en el término de alguna villa realenga y que contuviesen tres casas, ó que hallándose en el término de alguna villa señorial, contase siete edificios habitados. Alfonso I concedió este privilegio á los propietarios para favorecer el aumento de la poblacion, tan reducida despues de la conquista, y por eso se llamó *alfonsina* la jurisdiccion fundada en tales títulos (2). Las Córtes de 1626 la confirmaron y ampliaron despues en parte, extendiéndola á los lugares de señorío, aunque no contuviesen las quince casas, como estímulo á la repoblacion de aquellos que habian quedado desiertos por la expulsion de los moriscos (3). Los señores de estos lugares tenian, pues, todas las facultades del mixto imperio, segun la costumbre de Valencia; mas no podian por si solos dar tormento á los acusados, y así cuando lo estimaban necesario, lo decretaban para que lo ejecutase despues el juez real ó el que tenia el mero imperio del territorio, si lo juzgaba procedente. Su jurisdiccion en lo criminal se limitaba á los delitos cometidos dentro del término del señorío, por sus propios vasallos; pero aunque no era suficiente para imponer ciertas penas personales y de sangre, bastaba para ordenar la fustigacion, no muy grave, la prision como pena accesoría y otros castigos corporales arbitrarios. Aún en los casos en que estos señores no podian conocer del proceso, por exceder la pena de su competencia, percibian la mitad de las multas, reservando la otra mitad al rey ó al que en el lugar tuviese el mero imperio. Los señores de tres ó siete casas de moros, segun los casos ántes dichos, tenian en ellas toda la jurisdiccion civil y criminal, menos cuando el delito mereciera castigo de muerte ó mutilacion de miembro. Podian imponer la pena de azotes sin li-

(1) Tarazona, lib. 2, t. 13, *Lo Bisbe de Tortosa*.

(2) F. 78, lib. 3, rubr. 5.

(3) Bas, obr. cit., part. 1.^a, c. 13, n. 31.

mitacion de número, pero con acuerdo del alcalde ordinario ó del que tuviera en el lugar el mero imperio, y salvo el derecho del sentenciado para redimirla, pidiendo ser vendido como esclavo, á fin de que se dividiera su precio entre su señor y el rey (1).

La ley que estableció la jurisdiccion alfonsina, no tuvo sin embargo por objeto extender la de los señores; sino más bien restringirla, segun afirman sus más autorizados intérpretes. Antes de 1327, en que fué promulgada dicha ley, asegura el jurisculto Belluga, que los dueños de castillos y lugares tenian de hecho plena jurisdiccion y mixto imperio y cárceles en que encerraban á sus vasallos delincuentes, á pesar de no haberles sido concedida más que la jurisdiccion civil, sin consideracion al número de vasallos que hubiese en el lugar. Funda su opinion en que siendo esta ley de D. Alfonso declaracion y correccion de la anterior de D. Jaime y limitando la jurisdiccion señorial á los vasallos propios del señor y á los delitos cometidos dentro de sus lugares, debe inferirse que la antigua jurisdiccion así restringida, se extendia á vasallos ajenos y á delitos cometidos por los propios, fuera de la demarcacion señorial (2). Confirma esta opinion una ley de D. Alfonso II, en la cual se da á entender que los señores de moros, cualquiera que fuese el número de éstos, les administraban justicia en lo civil y en lo criminal, aplicando la ley musulmana llamada del *Zunna*, con consejo del alcalde moro, que debia haber en cada pueblo habitado por hombres de esta raza (3). Aquellos señores habian conservado su jurisdiccion, aún despues de hacerse cristianos los más de sus vasallos, y para remediar este abuso hubo de dictar D. Alfonso la ley citada (4).

Tenian jurisdiccion civil solamente los señores de castillos, villas y lugares, por el mero hecho de serlo y sin ningun otro título escrito, ni merced real. Los límites de esta jurisdiccion variaban segun la calidad de las personas sujetas á ella. El dueño ó poseedor de heredad alodial sita en el término de algun castillo ó villa de señor, no podia ser demandado sino ante éste en todas las cuestiones relativas á su propiedad (5). Los vecinos de la ciudad de Valencia ó su término y los señores de castillos y lugares del mismo, estaban sujetos á los tribunales del rey, por todas las acciones per-

(1) F. 78, lib. 3, rubr. 5.

(2) Belluga, rubr. 24.

(3) Tarazona, lib. 1, t. 2, pár. *Sien justiciats*.

(4) F. 91, lib. 3, rubr. 5.

(5) F. 69, lib. 3, rubr. 5.

sonales, civiles y criminales que se intentaran contra ellos, excepto las concernientes á bienes raices, que debian interponerse ante el señor del lugar en que aquellos radicasen. Mas los habitantes del término de Valencia, que dependiesen personalmente de otro señorío, estaban sujetos á él en todas sus causas civiles, y sólo cuando el señor no les hiciera justicia, podian acudir en queja á los jueces de la ciudad (1).

Disfrutaban igualmente la jurisdiccion civil los señores de feudos y los dueños directos de censos, pero con algunas diferencias, segun las circunstancias de las personas. Los caballeros que tenian feudo de otro, ó heredad á censo ó parte de frutos, estaban sujetos á sus señores, en las cuestiones que con ellos tuvieran sobre el feudo ó censo, y á la jurisdiccion real, en todos los demás litigios. Los feudatarios, sin distincion de personas, que tuvieran entre sí pleitos civiles de cualquiera especie, debian acudir á sus señores, en los lugares que les designaran, siempre que fueran seguros y dentro del reino (2). Pero ningun dueño de feudo tenia por esta sola calidad mero ni mixto imperio, como no los hubiese adquirido por otro título (3).

El dueño directo en el enfiteusis, tenia tambien jurisdiccion sobre el censatario, pero sólo en las cuestiones enfiteúticas, y segun la jurisprudencia moderna, que habia modificado algo la antigua, únicamente cuando se trataba de la cosa acensuada, como acensuada. Así es que todas las cuestiones entre el señor y el censatario, sobre el pago de pensiones y el uso ó abuso que uno ú otro hicieran de su derecho, eran de la competencia del señor y se ventilaban ante jueces letrados, que delegaba al efecto. Sólo se acudia á la jurisdiccion real, segun la jurisprudencia moderna, cuando se ponia en cuestion la calidad censataria del predio (4).

De la sentencia de primera instancia, podia apelarse para ante el mismo señor, el cual entónces nombraba otro delegado que conociera del recurso, dándole á veces, por acompañado, un oidor de la audiencia. De esta segunda sentencia podia tambien apelarse, y un juez distinto, nombrado igualmente por el señor, conocia de esta tercera instancia en la misma forma. Todavía de esta sentencia podia llevarse un recurso de injusticia notoria al lugar-teniente gobernador del reino (5).

(1) F. 71, lib. 3, rubr. 5.

(2) F. 20 y 28, lib. 9, rubr. 21.

(3) F. 10, lib. 9, rubr. 21.

(4) F. 15, 16 y 17, lib. 4, rubr. 23.—Bas, part. 1.^a cap. 30, núm. 39.

(5) Bas, part. 1, cap. 30, núms. 241, 245 y 149.

De las sentencias de los señores jurisdiccionales, no se daba por regla general, apelacion al soberano, sino para ante ellos mismos: sólo se permitian ciertos recursos extraordinarios, pero tan limitados, que no alcanzaban á corregir los abusos de la administracion de justicia en los pueblos de señorío. Habíase reservado el rey la facultad de avocar las causas de personas desvalidas, esto es, de los pobres, viudas y pupilos, pero sólo cuando él ó el príncipe heredero estuvieran en el reino, y nunca cuando se tratara de vasallos de caballeros y personas que formaban el estamento militar (1). Y como éste se componia de todos los nobles, generosos y caballeros del reino, que eran precisamente los que disfrutaban la mayor parte de las jurisdicciones, la avocacion no tenia lugar sino respecto de los vasallos de los eclesiásticos, ó de las personas que correspondian al estamento real.

Tambien podia acudir al rey con el recurso llamado de perhorrescencia, el vasallo á quien se intentaba juzgar sin forma de juicio, por delitos que merecieran pena de muerte, mutilacion de miembros ó azotes, y aquel que era llamado á comparecer en lugar no seguro, por razon de peste, enemigos ú otra causa (2). Admitido este recurso, avocaba el proceso el tribunal del rey y amparaba al vasallo, pero estaba tan limitado su ejercicio en el primer caso, sobre todo, que apenas correspondia al objeto de su institucion. La ley no lo concedia, como he dicho, sino cuando el juez procedia sin forma de juicio, y en casos que pudieran dar lugar á aquellas graves penas, de modo que no era admisible cuando el juez procediera arbitrariamente á la imposicion de otros castigos menores. Sólo podian interponerlo los vasallos de la Iglesia, ó de ciudadanos honrados, los vecinos de lugares realengos y las demás personas del estamento real, cuando eran oprimidos por sus señores ó jueces, y de ningun modo los vasallos de los nobles y caballeros que formaban el estamento militar. Por lo tanto, estos vasallos no podian ser amparados por el rey, aunque sus señores, sin formacion de causa, les condenaran á azotes, mutilacion ó muerte. Tampoco se admitia el recurso sin dar previamente 200 maravedis, en fianza de que se justificarian sus fundamentos; y el que no lograba hacerlo era corregido con una multa igual á aquella suma (3).

Contra los barones ó señores, que tenian mero imperio, podia interponer sin embargo, un recurso de queja al rey, el vasallo que se consideraba

(1) Fueros 57 y 62, lib. 3, rubr. 5.

(2) F. 10 y 9, lib. 3, rubr. 1.

(3) F. 11 y 13, lib. 3, rubr. 1, y F. 26, lib. 1, rubr. 3.

notoriamente agraviado por algun procedimiento judicial (1). Si la opresion era injusta y manifiesta, pues tal habria de ser el agravio causado, el tribunal del rey avocaba el proceso, para el solo efecto de alzar la fuerza y reparar la nulidad y la injusticia, devolviéndolo en cuanto á lo demás, al juez competente (2). Pero ni aún este recurso tenian antiguamente los vasallos de los señores y caballeros que componian el brazo militar, ni los sujetos á su jurisdiccion. El precepto de la ley ántes citada, que les negó los recursos de avocacion y perhorrescencia, fué general y absoluto, puesto que mandó no admitir *ningun recurso* que contra tales señores se intentase. Así lo declaró D. Alfonso III en las Córtes de Valencia de 1478, á peticion del brazo militar, cuando éste se quejó de que los gobernadores y sus lugar tenientes se entrometian á conocer, por via de recurso, de las causas de sus vasallos (3). Si estos lograron al fin que les fuese admitido el de queja, debieronlo solamente á prácticas toleradas y al favor interesado de la creciente potestad real.

Los barones y señores podian tambien avocar y decidir por sí las causas de que estaban conociendo sus propios oficiales ó delegados para la administracion de justicia, mayormente cuando eran estos amovibles á su voluntad. Porque es de advertir que los barones no ejercian su jurisdiccion en una misma forma. En todos los pueblos era elegido anualmente un juez ordinario llamado *Justicia*, pero no todos los Justicias tenian la misma jurisdiccion. Si en algunos lugares la disfrutaban con el mero y mixto imperio, en primera instancia, por privilegio ó costumbre, en otros conocian los mismos barones de todas las causas criminales y eran los Justicias meros ejecutores de sus mandatos.

Podian asimismo los barones citar á juicio en cualquier lugar de su pertenencia, aunque radicara en baronía ó señorío distinto de aquel en que tuviera su domicilio el citado ó se hubiera cometido el delito, siempre que estuviera dentro del reino de Valencia. Si en el territorio de una baronía se hallaba algun pueblo, en que otro señor tuviese sólo jurisdiccion civil ó mixto imperio, tocaba conocer al baron de las causas de mero imperio, que en él se promoviesen. Por último, para que ningun requisito faltara á la soberania de estos señores, gozaban hasta la eminente prerogativa de indulto, respecto á los delitos de su competencia (4).

(1) F. 8, lib. 9, rubr. 21; F. 34 de las Córtes de 1585 y F. 151 de las de 1604.

(2) Matheu, obr. cit. c. 6, pár. 1, sect. 2.

(3) F. 26, lib. 1, rubr. 3.

(4) Matheu, cap. 6, pár. 1, sect. 2 y F. 78, lib. 3, rubr. 5.

De las sentencias de los señores que tenían solo mixto imperio con jurisdicción, tampoco se apelaba antiguamente al rey, según las leyes forales. Andando el tiempo los jurisconsultos regalistas del siglo xvii, fundándose en que debía entenderse limitada á la primera instancia toda jurisdicción concedida sin expresión de grados, sostuvieron que estas apelaciones correspondían á los tribunales ordinarios (1). Pero ántes de que esta doctrina prevaleciese en la práctica, eran los señores, aunque con asesores distintos, los que fallaban en las tres instancias indispensables para causar ejecutoria, lo mismo en las causas de que conocían los barones, que en los pleitos enfitéuticos, ó en los de la competencia de los señores de mixto imperio. Los recursos de avocación, perhorrescencia y queja eran, pues, los únicos remedios del vasallo agraviado por actos del señor, si éste era miembro del estamento real ó del eclesiástico, porque si pertenecía al brazo militar, no tenía el vasallo por fuero recurso alguno. Solamente cuando se suscitaba entre el señor y el vasallo pleito civil que no versara sobre heredades enclavadas en la demarcación señorial, podían conocer del asunto los tribunales del rey, aunque el señor formase parte del estamento militar y aunque el coligante fuese su feudatario (2).

En las islas Baleares fué también la jurisdicción uno de los frutos del dominio territorial, y sobre todo del adquirido por razón de la conquista. Los prelados y magnates á quienes, según he dicho, se repartieron las tierras de Mallorca, tuvieron en ellas la jurisdicción consiguiente, con arreglo á las costumbres feudales de Cataluña. El obispo de Barcelona, á quien tocaron en el reparto cuatro villas, en pago de sus servicios militares, tenía plena jurisdicción en todas ellas; y como esto diese lugar á graves conflictos con los oficiales de la corona, celebró aquel prelado una concordia con el rey D. Sancho en 1525, en la cual se estipuló que alternarían ambas partes, por años, en el nombramiento de los bayles y jueces, en todas las parroquias de Mallorca. Extendíase esta jurisdicción del obispo en lo civil y en lo criminal, á todos los habitantes del territorio, con exclusión tan sólo de los generosos y ciudadanos, los cuales quedaron sujetos al rey (3). Los señores ejercían su jurisdicción por medio de los bayles, que nombraban y removían á su voluntad. Estos jueces conocían de todas las causas civiles de su

(1) Matheu, cap. 6, pár. 2.

(2) F. 8, lib. 9, rubr. 21.

(3) Moll, *Ordinacions del regne de Mallorca*, rubr. *Quod parochia*, pág. 142, *Dameto*, *Historia del reino baleárico*, tomo 2, lib. 3, cap. 6.

demarcacion, y de las criminales de los moros que habitaban en ella; pero con exclusion en uno y otro caso, de los vasallos de otros lugares. Sus providencias iban en apelacion al gobernador de la Isla, el cual tambien podia avocar las causas, cuando los señores ó sus delegados eran negligentes en administrar justicia (1). En todo lo demás se sujetaba el ejercicio de la jurisdiccion á los *Usages* y *Constituciones* de Cataluña, segun el privilegio que tenian los mallorquines, desde la conquista, y les confirmó el rey don Pedro III.

(1) Moll, obr. cit. *Sumari de privilegis*, etc., verb. *Bayle*.

LIBRO VIII.

**De la propiedad vinculada y de la civil amortizada y gravada
despues de la Edad Media.**

CAPÍTULO I.

Cómo perdió la propiedad territorial sus caracteres feudales.

I.

**CAUSAS QUE CONTRIBUYERON Á SEPARAR DEL DOMINIO DE LA TIERRA
EL SERVICIO MILITAR Y LA JURISDICCION.**

Los fueros municipales, las cartas pueblas y los privilegios, desvirtuaron y trasformaron en Castilla los caracteres primitivos del dominio territorial. Así al comenzar el siglo xvii se hallaba profundamente modificada en estos reinos la constitucion de la propiedad inmueble en sus relaciones con el Estado y con la familia. Conservábanse, en verdad, casi todos los nombres antiguos de sus diferentes especies, pero con significacion distinta. Las *encomiendas* eran más bien títulos lucrativos y honoríficos que cargos públicos; los *prestimonios* habian quedado reducidos á beneficios eclesiásticos: las *mandaciones* se conservaban como meras tenencias ó se habian convertido en señoríos perpétuos: las *tierras* habian degenerado en rentas á cargo del tesoro público ó en meras soldadas: las *heredades de solariegos* habian venido á ser predios enfiteúticos: los *feudos* propios no habian llegado á generalizarse. Con estas alteraciones en las formas y derechos del dominio, iban haciéndose cada vez más libres las personas y las pro-

propiedades, puesto que siempre ha sucedido que toda novedad en el estado de las unas ha ocasionado otra análoga en el de las otras. Así, á medida que los siervos se convertian en solariegos y éstos en vasallos, se iban aminorando las cargas de la propiedad y acrecentándose el número de las heredades alodiales; y como este influjo era reciproco, á medida que la propiedad se hacia más independiente, el estado de las personas se hacia más libre.

El efecto inmediato de estas variaciones en el estado y condicion de las personas y las propiedades, fué la desaparicion gradual y sucesiva de las tres cualidades que pueden considerarse símbolo y expresion compendiada del feudalismo territorial en toda Europa: el servicio militar como carga del dominio; la jurisdiccion como uno de sus derechos y las limitaciones de su libre disposicion. Las modificaciones indicadas en los diferentes títulos de posesion conocidos en Castilla durante la Edad Media, casi no tuvieron más objeto que libertar la propiedad de los servicios de guerra y de las demás cargas personales á que estaban sujetos sus poseedores, separar la potestad pública del dominio privado y remover los obstáculos que embarazaban la libre disposicion de las tierras, en interés de la república. Los fueros municipales y las cartas pueblas redujeron y limitaron aquellos servicios y conmutaron ó abolieron las prestaciones personales y los trabajos serviles de los vasallos. La potestad señorial quedó profundamente quebrantada, y la jurisdiccion fué separándose más cada dia del dominio territorial, con el establecimiento de los concejos libres; con la reversion á la corona de muchas villas y tierras enajenadas ó usurpadas; con los privilegios concedidos á multitud de poblaciones de no ser dadas nunca en encomienda ni en señorío ó de nombrar ellas mismas sus señores ó sus justicias; con las numerosas pueblas singularmente privilegiadas que fundaban los reyes, y á las cuales acudian en tropel los vasallos señoriales, en uso de su derecho; y finalmente, con las providencias adoptadas para mantener ó recuperar las prerogativas inalienables de la majestad real y particularmente la de hacer justicia por recurso de apelacion, en los pueblos de señorío. Por último, con la facultad reconocida á los vasallos para mudar de señor, abandonando ó vendiendo sus solares; con la abolicion de la *mañería*, que convirtió en hereditarias y perpétuas tantas propiedades vitalicias; con la prescripcion de año y dia ofrecida en muchos fueros, á los poseedores de tierras y con la amplitud concedida en unas partes á la libertad de testar, en otras á la sucesion hereditaria de los parientes, y en todas á los derechos del dominio en las tierras procedentes de la corona, se facilitó en gran ma-

nera la libre comunicacion de las propiedades, cesando ó aminorándose las restricciones que la limitaban en interés del Estado ó en el de las familias.

Cuanto más se generalizó y regularizó el uso de la soldada en dinero, tanto ménos dependió de la propiedad territorial la obligacion de servir las armas. Ya en el siglo xiv no debian quedar otras tierras gravadas con esta carga, más que las de la frontera, cuando D. Alfonso XI, en la Ordenanza de la milicia, que promulgó en las Córtes de Búrgos de 1338, al prescribir la distribucion que habian de hacer los caballeros de sus soldadas, declaró que éstas no las daba «á nuestros vasallos de la frontera, á quienes no damos soldada en dinero, ó han de servir por la *tierra* que tienen.» Esta Ordenanza prueba tambien la irregularidad con que prestaban ya aquel servicio los caballeros asalariados, puesto que fué menester señalar en ella la parte de sus sueldos que habian de invertir en armamento, el número de infantes y de caballeros que habia de llevar cada uno, segun la cantidad de maravedises que percibiera, la especie y calidad de sus armas, el valor de sus caballos, las penas gravísimas en que incurrirían los vasallos reales ó señoriales que no acudieran á la hueste ó se partieran de ella ántes de tiempo y el sueldo de los lanceros y ballesteros. Ni con estas severas y minuciosas disposiciones se logró regularizar el servicio de las huestes, puesto que D. Juan I tuvo que reproducirla en las Córtes de Valladolid de 1385, señalando las armas que habia de tener cada vasallo, segun la cuantía de su hacienda, y mandándoles hacer alardes con ellas ante las Justicias, cada dos meses.

Tampoco hubieron de surtir mejor efecto estas nuevas leyes. Las Córtes de Bribiesca de 1387, se quejaban de que los 14 millones de maravedis dados en tierra á los vasallos, eran en gran parte perdidos, porque aunque habia muchos á cobrar, nunca se juntaba la gente necesaria para hacer la guerra; y fundándose en esta consideracion, pidieron que se creara un número fijo de hombres de armas, cuyos nombres se inscribieran en un registro de todos los vasallos que tenian tierras de la corona, y «que non se fagan en los alardes las burlas que fasta aquí.» El rey no accedió á esta petición, pero ordenó una nueva distribucion del presupuesto de guerra, disponiendo que se repartiese entre los ricos-hombres, condes, caballeros y escuderos que constaban inscritos en las nóminas del Erario, á razon de 1.500 maravedis cada lanza, y 1.300 cada ginete, y que se les consignaran estas soldadas en lugares de sus comarcas, á fin de que las pudieran cobrar sin gasto. Con esta providencia se aumentó la remuneracion del

servicio, sobre todo á aquellos que tenían otras mercedes de la corona, pues ántes, segun el mismo texto de las Córtes, cada marqués servia con 300 lanzas por 200.000 maravedis; Pedro Manrique con 200, por 120.000 maravedis, y los demás caballeros y escuderos con una lanza por cada 1.500 maravedis, si no tenían otra merced del rey. Así vino á sustituir el sueldo en dinero á la tierra, como prenda y recompensa del servicio militar, aunque sin mejorarlo al parecer, ni hacerlo ménos gravoso.

Separar la jurisdiccion del dominio de la tierra, fué sin duda obra más lenta y difícil, como que la repugnaban y resistían clases muy poderosas. Habria sido imposible, á no haberla apoyado y favorecido con gran empeño otros elementos sociales, á la sazón en rápido y constante progreso, la monarquía y el estado llano. La monarquía no podia consolidarse ni constituir un poder central bastante fuerte para regir sus acrecentados dominios, sin que prevaleciera su autoridad en toda la extension de ellos: los hombres del estado llano eran ya demasiado libres para tolerar resignados las cargas señoriales que abrumaban á los vasallos. Entonces los reyes, para afirmar y extender su potestad, mejoran la administracion de justicia en los pueblos realengos, ordenan sus tribunales, envian por todo el reino sus pesquisidores para la averiguacion de los delitos, se reservan el conocimiento de las causas más graves y castigan con severidad á los delincuentes, á la vez que dan participacion á sus vasallos en el gobierno de las ciudades y villas, aligeran las cargas públicas que pesaban sobre ellos, se declaran protectores de los oprimidos y abren las puertas de los concejos á los vasallos descontentos, que pugnaban por sacudir el yugo señorial. En vano muchos señores intentan al principio competir con la corona ofreciendo á sus súbditos ventajas parecidas: tal competencia era insostenible entre quien, como el rey, poseia un número considerable de Estados y de vasallos, y los que no tenían á su devocion sino algunos pocos solariegos y subordinados, sobre todo cuando los ricos-hombres, divididos entre sí y aún muchos en abierta guerra, no podian concertarse para la resistencia. Así, lejos de seguir todos los señores el ejemplo de algunos que procuraron defender su poder mejorando la condicion de sus vasallos, los más adoptaron el camino opuesto, encomendando á la fuerza ó á la astucia el amparo de sus intereses. Abusaron, pues, de su autoridad los dueños de vasallos, no sé si más gravemente que en tiempos antiguos, ó lo mismo que entónces, pero hallando de seguro ménos resignados á los que teniéndose por más libres, se daban en su virtud por más ofendidos, aunque los agravios fueran iguales. Pero de cualquier modo, poseedores de tierras opri-

midos y vejados, y posesiones efímeras é inseguras acusaban graves vicios en la organizacion de la propiedad inmueble, al trascurrir el siglo xiv y debian precipitar la ruina de la potestad territorial de los señores.

Ni la creciente autoridad del rey, ni los fueros escritos, ni la resistencia desordenada de muchos vasallos, bastaban para defender la propiedad y los derechos individuales, contra tan graves abusos. Verdad es que en los siglos xiii y xiv no eran las mismas propiedades señoriales las ménos combatidas y violadas por toda clase de enemigos. Las de abadengo sobre todo, eran objeto á cada paso de los más inicuos y violentos despojos. Del testimonio irrecusable de las Córtes de la época aparece que los ricos-hombres y caballeros ocupaban por fuerza las tierras de las iglesias y monasterios; tomaban yantares de sus moradores; les exigian servicios á su albedrío, so pena de robarles la tierra, si se los negaban; vejábanles en el reparto de los tributos; tomaban violentamente las tercias de los templos y las rentas de los beneficios vacantes; embargaban á los labradores sus bueyes para el pago de los tributos ó les tenian presos sin darles alimento, hasta que los pagaban; ocupaban asimismo muchos bienes eclesiásticos, ó no permitian á sus vasallos tomarlos en arriendo, para obligar á los prelados á vendérselos por ínfimos precios, que ellos señalaban: hacian estatutos prohibiendo á los mismos vasallos comprar y vender á los eclesiásticos las cosas más necesarias ó labrar sus tierras; tomaban las cruces, cálices, ornamentos y campanas de las iglesias para venderlos ó empeñarlos; y hasta posaban en los hospicios y hospitales de los monasterios, arrojando de ellos á los pobres y enfermos y dejándoles morir en las calles. A su vez los señores de abadengo solian tambien incurrir en *graves malfetrías*, merecedoras de duro escarmiento, segun la expresion de don Alfonso XI, respondiendo á las quejas de los prelados (1). Algunos dejaban embargar los bienes y rentas de un concejo, por deudas de otro, á fin de no responder por los insolventes, segun era su obligacion. Otros, con el mismo propósito, dejaban embargar por deudas de sus vasallos, las rentas de las iglesias (2). Muchos ponian entredicho en pueblos en que no tenian señorío, porque so pretexto de poseer en ellos algunos vasallos, exigian yantares y pedidos indebidos, que los vecinos les negaban legítimamen-

(1) Córtes de Búrgos de 1315: Ordenamiento de prelados. Córtes de Valladolid de 1325: Ordenamiento de prelados. Córtes de Valladolid de 1385.

(2) Córtes de Valladolid de 1325: orden. de prel.

te (1). No pocos tenían á su vez usurpados lugares pertenecientes á ciudades y villas (2).

Así la opresion de los vasallos ajenos ó propios era achaque comun á toda clase de señores. La rudeza de las costumbres, la flaqueza y la division del poder soberano, y las libertades á que siempre da ocasion la guerra, conducian alternativa ó simultáneamente, á la rebelion y á la tiranía. Unos señores despoblaban sus lugares, segun decian las Córtes, exigiendo de sus vasallos pechos exorbitantes y nuevos, á que no tenían derecho (3): otros acogian y defendian en sus castillos á los que por fuerza llevaban y encerraban mujeres en ellos, á los homicidas y á los salteadores de caminos (4): muchos obligaban á los vasallos que no podian pagar los pedidos, á tomar para ello dinero á interés de los judios: otros *levantaban muchos achaques* á los acaudalados, para exigirles cohecho; y algunos obligaban á las viudas y doncellas de linaje, á casarse con escuderos ú hombres de menor estado que ellas (5). Era además costumbre recibida, contra la cual clamaron las Córtes en vano, la de tomar los señores dinero á préstamo, obligando como fiadores á sus vasallos; con lo cual si no pagaban al plazo, estos debian hacerlo ó purgar indefinidamente en la cárcel la insolvencia del señor y su propia pobreza (6). Por último, hasta llegó á ser frecuente entre caballeros desavenidos tomar venganza en los vasallos de sus enemigos, matándoselos ó robándoselos recíprocamente (7). Así vino á ser tan odiosa y tan combatida por todos la potestad señorial.

Desde que con el triunfo de las armas cristianas quedaron reducidos los musulmes á un estrecho rincon de la Peninsula, y cobró nuevas fuerzas la monarquía, y aprendieron los pueblos á organizarse en concejos independientes, dejó de corresponder al nuevo estado social de España su antigua organizacion política, inspirada por las necesidades de la guerra y la defensa del hogar doméstico. Así los castillos levantados para defensa de las poblaciones contra los infieles, sirvieron más bien entonces para oprimir á los vasallos cristianos ó para hacer la guerra al monarca: los señorios instituidos como cargos públicos y como medio de dar participacion

(1) Córd. de Búrgos de 1377.

(2) Córd. de Palenzuela de 1425; de Zamora de 1432; de Madrid de 1433 y 1438.

(3) Córd. de Búrgos de 1377.

(4) Córd. de Soria de 1380.

(5) Córd. de Vallad. de 1385 y de Segovia de 1386.

(6) Córd. de Madrid de 1573, pet. 94.

(7) Córd. de Guadalajara de 1390, pet. 3.

á los hombres distinguidos en la guarda y gobierno del territorio, fueron considerados más bien como meras propiedades lucrativas, destinadas exclusivamente al mayor provecho y utilidad de sus dueños. No es, pues, de extrañar que los vasallos se esforzaran por sacudir el yugo pesado de sus señores, que los concejos trataran de extenderse y de asegurarse á costa de los lugares de señorío y que los reyes procuraran, con más empeño cada día, debilitar el poder y la autoridad de los nobles, ya reduciendo sus derechos y prerogativas, y ya privándoles de sus tierras y propiedades. Ni tampoco pudo llegarse al cumplimiento de tan altos propósitos sin que los vasallos se levantaran en armas contra sus señores repetidas veces, ni sin provocar sangrientas guerras entre estos y los concejos y entre los ricos-hombres y la corona. Pero las Cortes clamaron enérgicamente contra tantos excesos, hasta que al fin los monarcas acometieron la árdua empresa de reprimirlos, ya tímida y lentamente, ya con sobrado apresuramiento.

El rey D. Fernando IV, fundándose en una antigua, aunque poco guardada prohibición de levantar castillos sin real licencia, á petición de las Cortes de Burgos de 1301, mandó derribar los que habían sido «edificados» en castellares viejos y en tiempo de la última guerra, y aquellos en que se «hubiera cometido alguna malfetría.» El mismo monarca, á instancia de las Cortes de Valladolid de 1312, mandó demoler también los castillos levantados en tiempo de D. Sancho IV, y devolver á los dueños las tierras que ocupaban. Esta providencia hubo de parecer, sin embargo, hartó severa, cuando, á petición de las Cortes de Medina del Campo de 1318, dispuso el rey que no se derribaran más fortalezas, sin oír previamente á sus dueños, por fuero, y que los que las poseyeran en los reinos de Toledo y Extremadura diesen fiadores de reparar los daños que se cometieran en ellas. Tampoco esto último hubo de llevarse en un todo á efecto, dado que poco después D. Alfonso XI eximió de tal fianza á los dueños de castillos que hubieran prestado homenaje por ellos, y dispuso que los alcaides repararan con su cuerpo y con sus bienes, el mal que hicieran, tomándoles las *retenencias* para darlas á los perjudicados; que se derribaran ciertas fortalezas levantadas en las orillas del Duero, y todas las labradas en suelos de realengo ó abadengo; que los concejos hicieran demoler las edificadas en terrenos de Propios, con daño de los pueblos, y que cualesquiera vecinos pudiesen comprar los castillos y villas que vendieran los nobles y señores (1). No

(1) Cortes de Valladolid de 1322 y 1325.

bastando, sin embargo, estas providencias para impedir ni remediar los daños que causaban tales fortalezas, el mismo D. Alfonso, accediendo á una peticion de las Córtes de Madrid de 1539, ordenó la demolicion de «los castellares viejos, peñas bravas y cuevas,» que se habian hecho y poblado sin real licencia.

Mas la facultad dada á los concejos para derribar ciertos castillos, los excesos que hubieron de cometerse en la ejecucion de estas demoliciones, y los agravios y rivalidades que se originaron de la designacion de las fortalezas que habian de desaparecer, dieron lugar á gravísimos disturbios. Así es que para ponerles término «é impedir las malfetrías que se causaban» en los castillos y no dar lugar á que los señores se los tomaran por fuerza »y se los derribasen unos á otros,» pidieron las Córtes de Burgos de 1538, que el rey los tomara en su guarda y defendimiento; y Alfonso XI lo acordó así «para que vivieran en paz los señores, y los malhechores no hallasen» en sus fortalezas amparo y estímulo,» mandando que quien las tomara ó derribara muriera por ello: que quien las expugnara pagase el duplo del valor del daño; y que castigasen los merinos á cuantos delinquieran en ellas.

Abusaban tambien los señores de su potestad imponiendo tributos nuevos á sus vasallos ó aumentando la cuota de los antiguos. Las Córtes habian reclamado diferentes veces contra éstos excesos, sin obtener respuesta favorable, hasta que D. Juan II, á instancia de las de Palenzuela de 1425, mandó que no se impusieran tales tributos nuevos sobre las heredades libres, que en tierras de señorío, adquiriesen los vasallos realengos, ni se aumentaran los establecidos sobre las heredades tributarias que los mismos vasallos adquirieran en las propias tierras. Mas estaba tan arraigado el abuso, que no hubo de tener cumplido efecto esta disposicion, y fué menester repetirla y confirmarla á instancia de las Córtes de Madrigal de 1438 y de las de Valladolid de 1451.

Otros muchos testimonios ofrece la historia de la lucha que en el siglo xv sostenia el estado llano con la nobleza. Para aislarla y contrarestar su influencia, pidieron las Córtes de Valladolid de 1442 que los señores que tuvieran más de 200 vasallos, no moraran en lugares realengos, ni tuvieran en ellos ningun oficio público; pero á esta peticion no accedió D. Juan II, considerándola tal vez inspirada por peligrosas rivalidades y odios de bandería. Al mismo fin iba encaminada, aunque no logró mejor éxito, otra peticion de las Córtes de Valladolid de 1447, para que no se permitiese vivir en ciudades ni villas principales, á los caballeros, escuderos y vasallos de señores que tuviesen tierras ó acostamientos: que á los que á la sazón ha-



bitaban en ellas y poseían tierras ó maravedís del rey, se les diera algo más, como lanzas, á fin de que dejaran los bienes que tuvieran de señores: que se diera también algun acostamiento á los que nada poseyeran de la corona, para que abandonasen del mismo modo los bienes señoriales que disfrutaban; y que ántes de ejecutar por fuerza estas expropiaciones, se ofreciera alguna renta á los vasallos que quisieran separarse del servicio de sus señores, para optar por el de la corona. Era, como se ve, el objeto de esta gravísima petición privar á los señores de sus vasallos y despojarlos sin ningun miramiento, de lo que se consideraba entónces como una propiedad legítima: era en suma acabar con los señoríos, como lo hicieron las Córtes de Cádiz cuatro siglos más tarde; y por eso, sin duda, aquel prudente monarca hubo de estimar aventurada la empresa. Pero en cambio no se negó á corregir con nuevas providencias los abusos de la potestad señorial, en defensa de la suya propia, mandando retener los bienes que disfrutaran en lugares realengos los señores que pusieran ó permitieran poner embargo en heredades del rey, sitas en lugares de señorío y prohibiendo las exenciones de pedidos y tributos que solían ofrecer muchos señores á los vasallos de la corona que fueran á morar en sus tierras (1).

No bastaron, sin embargo, todas las leyes dictadas desde principios del siglo XIV, para impedir la edificación de nuevos castillos, ni para remediar los daños que solían causarse en ellos. Así, las Córtes de Santa María de Nieva de 1475 tuvieron que reproducir las peticiones de los antiguos procuradores sobre esta materia, y Enrique IV se vió en la necesidad de repetir la prohibición de levantar fortalezas sin expresa licencia de la corona, y de mandar demoler las construidas en los diez últimos años.

Otro de los medios empleados por los monarcas para quebrantar la dependencia del dominio territorial en que yacía la potestad pública, fué impedir, en cuanto era posible, que anduviesen mezcladas y confundidas las propiedades de distinta naturaleza; esto es, los realengos con los señoríos. La concurrencia en una misma población ó término de heredades, sujetas á diferentes fueros, y de vasallos de distinta índole, sujetos unos á un señor y una ley, y otros á diversa ley y diverso señor, originaba graves conflictos entre ellos y los señores, dándose así ocasión á que los más fuertes despojaran y oprimieran á los débiles y estuviese siempre perturbada la paz del reino. Pero como el mal era inveterado y se juzgaba muy difícil curarlo de raíz, sobre todo en breve tiempo, tratóse tan sólo de aminorarlo lentamente

(1) Córtes de Valladolid de 1447 y 1451.

con providencias, que á la vez contribuyesen á reducir la potestad señorial en sus relaciones con la corona. Tal fué el objeto de las leyes dictadas en distintos tiempos para que los ricos-hombres, los caballeros y los eclesiásticos no adquiriesen heredades en lugares realengos, y de las cuales no hago aquí mencion más prolija, por haberla hecho ya en otro lugar de esta obra (1).

II.

REDUCCION DE LOS SEÑORÍOS DE ABADENGO: LEYES DE AMORTIZACION.

Reducir la potestad de los señores de abadengo, prohibiéndoles acrecentar sus tierras, sus riquezas y sus vasallos, era empresa aún más árdua y difícil que la reduccion de los señoríos laicales. Porque si bien la corona ejercia en las tierras de la Iglesia mayor autoridad que en las de señores seglares, por razon de su universal patronato, compensaba con exceso esta ventaja, la dificultad de cumplir aquel propósito sin menoscabo de la libertad canónica y de la inmunidad eclesiástica, cuyos progresos coincidian precisamente con la necesidad de poner limite á la potestad civil de los clérigos. No es, pues, extraño que la ley de amortizacion fuese desde el siglo xiii, tan repetida como inobservada. Las Cortés de Castilla, sintiendo su necesidad, la pedian, y los monarcas, reconociéndola, la otorgaban; pero la resistian tenazmente, no sólo el clero interesado, tan poderoso de suyo, sino los mismos seglares, que si como procuradores del reino, ó como funcionarios públicos, la reclamaban y aplaudian, como católicos y como pecadores arrepentidos no renunciaban á procurar su salvacion ofreciendo á Dios y al culto alguna parte de sus bienes.

Con haber prevalecido en el siglo xvi, la opinion de que tales leyes eran contrarias á la libertad de la Iglesia, quedaron definitivamente sin efecto, y así no tuvieron influjo alguno en la reduccion de los señoríos de abadengo. La Iglesia continuó, pues, adquiriendo bienes jurisdiccionales, pero no sin que desde el reinado de Carlos V, dejara de tratarse de privarla de gran parte de su potestad señorial, desposeyéndola de muchas de las propiedades que se la conferian. Las Cortés de Madrid de 1528 pidieron al emperador que las iglesias y monasterios dejaran de tener vasallos y jurisdiccion en sus lugares y se aplicaran á la corona los que poseian, alegando por fun-

(1) Véase el lib. III, cap. XI.

damento, que los clérigos gastaban en pleitos el tiempo que debían destinar á la oracion. A demanda, al parecer tan atrevida, segun las ideas del tiempo, respondió el piadoso monarca que no era justo despojar á la Iglesia de lo que poseia legitimamente en virtud de donaciones reales. Esto no obstante, apremiado despues D. Cárlos de graves necesidades, intentó remedianlas con aquel recurso; mas, aunque obtuvo para ello la bula correspondiente, al fin no llegó á hacer uso de ella. Quien se sirvió más tarde del indulto pontificio fué Felipe II, pues aunque asegurando su conciencia con un breve de Gregorio XIII, por si la bula otorgada á su padre no fuera suficiente, incorporó á la corona muchos señoríos, con la circunstancia notable de no haber dado por los más de ellos la indemnizacion cumplida que exigian los rescriptos pontificios. De esta falta hubieron de nacer los escrúpulos que atormentaron á aquel monarca en la hora de su muerte y le inspiraron la cláusula de su testamento que ordenó la restitution de los señoríos de abadengo ocupados á su antiguos dueños.

Hiciéronse, en efecto, algunas de estas restituciones en tiempo de Felipe III, á iglesias y monasterios expropiados; pero no tantas quizá como habian sido las expropiaciones, dado que la bula de 1604, de que más adelante daré noticia, no llegó á tener cumplido efecto. Si hubieran sido incorporados á la corona todos los vasallos de abadengo, que es lo que habian pedido las Córtes de 1528, todos habrian debido ser devueltos, segun la citada bula; pero como muchos fueron vendidos á otros señores, remediándose con su precio necesidades del Fisco, y para rescatarlos era menester dar su importe, no volvieron á los señoríos de abadengo, y así quedaron desde entónces tan disminuidos los dominios jurisdiccionales de la Iglesia.

Con la reduccion de la potestad señorial coincidian, segun ántes he dicho, las libertades y franquezas del dominio privado, no sólo en las tierras pecheras de villanos, sino tambien en las señoriales, cuyos vínculos con la jurisdiccion que le era accesoria, se iban lentamente quebrantando. Es un fenómeno histórico propio de todas las edades, que la posesion temporal de la tierra, como dure mucho tiempo, acaba por convertirse en hereditaria y perpétua. Obedeciendo á esta ley inflexible, tanto las tierras que los solariegos tenian de los nobles, como las que éstos poseian de la corona, vinieron á confundirse de hecho con las que siempre fueran alodiales y libres, porque á la vez que los fueros y cartas-pueblas otorgaban á los del estado llano el dominio perpétuo de sus heredades, los reyes introducian ó confirmaban la costumbre de ratificar las mercedes de sus antecesores á los del

estado noble, prorogándolas á sus hijos ó haciéndolas nuevas por juro de heredad, con lo cual se iba transformando el hecho en derecho.

Con la perpetuidad del dominio se adquiría como consecuencia, su libre disposicion, y estas ventajas compensaban hasta cierto punto, lo que los nobles perdían de su autoridad, para robustecer más y más la del monarca. Así era esta perpetuidad tan codiciada y particularmente de los nobles, que no perdían ocasion de exigirla cuando las circunstancias forzaban á los reyes á prodigarles su patrimonio. D. Alfonso el Sábio con sus pretensiones al imperio y sus desavenencias con los ricos-hombres, distribuyó en mercedes perpétuas gran parte de su hacienda. Con ellas se pagaron también los servicios de los vasallos en los reinados de menor edad y en las guerras civiles que despues siguieron. Entónces llegaron las larguezas reales á tanto exceso, que en 1312, no pasaban de 1.600.000 maravedís las rentas de la corona de Castilla, cuando los gastos importaban nueve millones (1). D. Alfonso XI, aunque mandó observar la ley de Partida que prohíbe enajenar perpétuamente los dominios del Estado, no pudo excusarse de otorgar algunos con este carácter. Las mercedes de D. Enrique II fueron tantas y tan considerables que han dejado nombre en la historia. Como que despues de haber destruido á su hermano D. Pedro, con el auxilio de vasallos rebeldes y extranjeros mercenarios, cumplió en la prosperidad, todo lo que su liberalidad desatentada habia prometido en la desgracia. En vano le pidió el reino la revocacion de estas ruinosas mercedes, como contrarias á la ley y al bien público; D. Enrique, más fiel á su palabra que al interés del Estado, desoyó sus quejas, prometiendo tan sólo no hacer más enajenaciones, sino cuando el servicio público las exigiera (2). Otros monarcas revocaron al fin las *gracias enriqueñas*, mandando que revirtiesen á la corona los bienes enajenados por ellas, mas no en tanto que hubiese descendientes con derecho á heredarlos, ni sin que continuaran siendo perpétuas y hereditarias las procedentes de otros reyes.

(1) Crónica de D. Alfonso XI, cap. 13.

(2) Córtes de Toro de 1371, pet. 3.

CAPÍTULO II.

Decadencia del régimen señorial.—Los mayorazgos.

I.

INSUFICIENCIA DEL RÉGIMEN SEÑORIAL EN EL SIGLO XVI.

Desvirtuados los caracteres feudales del dominio en la mayor parte de las tierras, los señoríos tan sólo conservaban en el siglo xvi las reliquias del feudalismo. En ellos únicamente corrían ya unidas la propiedad y la jurisdicción, ó alguna parte de ella, por costumbre ó por título escrito del soberano, si bien con exclusion de los derechos inalienables de la corona. Había sin embargo señores meramente solariegos, que como propietarios antiguos del suelo, percibían de los colonos ciertos emolumentos ó pensiones y disfrutaban prerogativas honoríficas sin la potestad judicial; pero los más eran á la vez jurisdiccionales y solariegos, así como algunos se reputaban meramente jurisdiccionales, por cuanto sin ser dueños de la tierra, ni haberla adquirido después, habían obtenido del monarca tan sólo la potestad y gobierno de ella, con el derecho de percibir las rentas y los impuestos que los vecinos pagaban al erario, en los lugares realengos.

En los señoríos solariegos continuaban reputándose propias del señor todas las tierras comprendidas dentro de sus términos y que los vecinos no poseyeran con justo título. En los lugares de señorío jurisdiccional no solían disfrutar los señores el mismo derecho, al menos en el siglo xvii, porque las tierras baldías se consideraban entonces generalmente propias de los concejos, pero podían disponer de alguna parte de ellas, siempre que fuera para la construcción de edificios (1). Las cargas de los vasallos eran de dos especies: unas procedían del solar, que disfrutaban por contrato ó merced del señor, y otras eran inherentes al estado de vasallaje jurisdiccional. Consistían las primeras en rentas, emolumentos y servicios variables,

(1) Castillo Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos*, part. 1, lib. 2, c. 16, núms. 52 y 53.

según los lugares, y las segundas en tributos y servicios, ya comunes á todos los señoríos, ó ya propios solamente de algunos.

No es posible distinguir por la naturaleza de las mismas cargas, las inherentes al solar, de las que traían su origen del mero vasallaje, pues las que en unos lugares se debían en un concepto, se prestaban en otros, por concepto diferente. Además, los gravámenes de vasallaje que no consistían en censos, ni rentas prediales, habían ido perdiendo, con el transcurso del tiempo, su carácter primitivo de obligaciones inherentes al suelo, convirtiéndose en cargas personales exigibles á todos los vecinos del pueblo señorial. Todavía los vasallos militaban con el rey ó con sus señores, á ménos que por privilegio estuvieran exentos de este gravámen, les pagaban portazgos y alcabalas, y les ofrecían regalos en Navidad ó cuando casaban á sus hijos, como recuerdo del antiguo derecho de *vesas* ó *boda*, que en otro tiempo disfrutaron. Todavía duraban los monopolios, en cuya virtud no podían los vasallos cocer su pan sino en el horno del señor, ni moler trigo sino en su molino, ni establecer posadas donde él las tuviese. Aún daban los vasallos sus carros y caballerías para conducir la leña, los trojes ó los aperos del señor y acudían á las sernas y corveas, como en los tiempos antiguos. En Galicia se pagaba aún la luctuosa en el siglo xvii. Podían también los señores, aún sin licencia del rey, echar entre sus vasallos derramas que no excedieran de cierta cuantía, y tomar su hacienda ó la de sus lugares, ya para redimirse de cautiverio ó remediar su pobreza, ya para subvenir á los gastos de una inminente guerra, ó á los del casamiento de alguno de sus hijos, ó ya para comprar á estos alguna alta dignidad, ó para adquirir otro señorío, ó para servir al rey ú hospedarle en alguno de sus lugares.

Los señores meramente jurisdiccionales disfrutaban en casi toda España el derecho de tomar de los montes de su comarca toda la leña que necesitaran, y en los demás aprovechamientos comunales, la parte de dos vecinos. Sus vasallos estaban obligados á guardar sus castillos y fortalezas, siempre que venían á peligro de ser combatidos ó asediados. Algunos de estos señores gozaban aún el derecho de hospedaje gratuito en las casas de sus vasallos, el de ocupar y adquirir los bienes abandonados ó mostrencos y el monopolio de la caza ó de la pesca en lugares determinados (1).

(1) Bobadilla, *Política*, etc. part. 1, lib. 2, c. 16, núms. 49, 117, 161, 162, 168, 198, 151, 121, 132 y 138.

Los mismos señores jurisdiccionales, aún en los últimos tiempos, publicaban ordenanzas y bandos de gobierno, confirmaban á los alcaldes elegidos por los concejos, nombraban y pagaban de su peculio alcaldes mayores que oyeran las apelaciones de los ordinarios, avocaban causas, cobraban penas de Cámara, proveían á la seguridad de los caminos y de los pueblos, residenciaban á los alcaldes, regidores y oficiales y aprobaban las cuentas de Propios (1). En los ducados de Alba y de Osuna existían tribunales de apelacion colegiados, compuestos de jueces, que se llamaban alcaldes mayores y oidores del duque. Un convento de monjas de Tordesillas, tuvo hasta principios del presente siglo el derecho de nombrar su alcalde mayor (2).

Estas facultades jurisdiccionales estaban ya sin embargo en Castilla hasta cierto punto limitadas: 1.º por la *mayoría de justicia* que defendía con empeño la corona; 2.º por la prohibicion impuesta á los señores de indultar de otras penas que las pecuniarias destinadas á su erario; 3.º por la prohibicion de dictar ordenanzas locales en derogacion de leyes generales; 4.º por la prohibicion de batir moneda; 5.º por el derecho otorgado á muchos vasallos de no ser enajenados á otro señor de ménos categoria, y á reclamar al rey contra la confiscacion de sus bienes, ó cualquiera otro agravio que les infriese el señor; y 6.º por la facultad de la corona para enviar pesquisidores á los lugares y nombrar quien ejerciera en ellos la jurisdiccion, cuando el señor era negligente en administrar justicia (3).

Mas aunque la propiedad conservase aún las formas exteriores de su primitiva organizacion feudal, la esencia de ésta apenas subsistia, porque confundidos ya los *naturales* con los vasallos, sujetos unos y otros á cargas semejantes y aún idénticas, reducidos á veces á igual condicion los que traian su estado de la tierra y los que fundaban el suyo en el nacimiento, la propiedad habia dejado de ser el vínculo más poderoso entre el individuo y la república. Confundidos además los señoríos meramente jurisdiccionales con los territoriales de jurisdiccion, cuando aquellos eran una delegacion voluntaria de la autoridad real, y estos una propiedad con los atributos de la soberanía, y teniendo facultades semejantes unos y otros

(1) Bobadilla, *Política*, part. 1, lib. 2, c. 16, núms. 58, 128 á 131; 133, 76, 100, 110, 49, 51.

(2) *Los principios de la Constitucion española aplicados á la legislacion de señorios*, p. 144.

(3) Bobadilla, *Política*, part. 1, lib. 2, c. 16, núms. 77, 80, 66, 99, 124, 128, 144, 12, 65, 82 y 87.

señores, naturalmente iba dejando de considerarse la tierra como el título principal y casi único de la potestad pública.

Coïncidia tambien con este cambio profundo en las antiguas condiciones del dominio, una señalada tendencia en la opinion de las personas más ilustradas del estado llano y de las más influyentes por su saber y su literatura, contra la division del poder público y las jurisdicciones señoriales, tanto por sus excesos y desmanes cuanto por lo que embarazaban el desarrollo y libre ejercicio de la autoridad real, en que consistia á la sazón el verdadero progreso.

Las obras de los jurisconsultos de fines de siglo xvi y principios del xvii, dan testimonio á cada paso de la repugnancia con que se toleraban ya entonces aquellas reliquias del antiguo feudalismo. D. Gerónimo Castillo y Bobadilla, eminente jurisconsulto de fines del siglo xvi, fulminó en sus escritos de derecho y práctica jurídica las más severas censuras contra el régimen señorial. Decia que los vasallos sujetos á este régimen, eran de peor condicion que los del rey; que en los lugares de señorío habia mal gobierno y poca justicia, porque los señores, en vez de residir en ellos ó visitarlos con frecuencia, los encomendaban á sus privados y servidores, en pago de salarios ó servicios, ó á mozos inexpertos que desempeñaban el cargo de gobernadores, mediante una retribucion mezquina; de lo cual resultaba que tanto unos como otros llevaban cohecho á sus administrados y descuidaban el cumplimiento de la justicia en todo lo que no devengaba honorarios. Añadia en otro lugar de su obra, que los señores trataban mal á sus jueces, y que sus exacciones, por llevar consigo la presuncion de haberse introducido tiránicamente y de tener su origen, ménos en costumbres legítimas, que en corruptelas punibles, eran odiosas y debian restringirse todo lo posible (1). Poco importa que hubiese en su tiempo un D. Juan Alvarez de Toledo, conde de Oropesa, que además de residir constantemente en sus Estados, nombraba todos los años una junta de teólogos y juristas, con encargo de residenciarle á él y á sus delegados, oyendo y sentenciando las querellas de los que recibian de ellos algun agravio, pues contra este único ejemplo de abnegacion y justicia, que el mismo autor refiere en prueba de su imparcialidad, existian y se citaban otros muchos de arbitrariedad y despotismo; y si los vasallos de Oropesa estaban satisfechos del buen gobierno de su señor, sábese de cierto que no lo estaban de sus señores los

(1) *Política*, etc., part. 1.^a lib. 2, c. 16, n. 12, 15, 97 y 117.

más de los vasallos. Verdad es, que segun Bobadilla, no era tampoco de admirar tanta opresion y desgobierno, habiéndose prodigado con imprudente liberalidad los títulos señoriales á gente sin nobleza y aún á mercaderes enriquecidos en menudos tráficos (1).

II.

ORÍGEN Y PROGRESOS DE LOS MAYORAZGOS.

Pero cuando con la desaparicion de la propiedad feudal y el descrédito de los señoríos se relajaban los vinculos entre el Estado y la tierra, obediendo ésta á la ley moral de su destino, se sujetó con lazos nuevos á otros intereses colectivos, que aunque imperfectamente, representaban tambien los de la sociedad. En la organizacion social antigua que se modificaba, tenia poco valor el individuo política y económicamente considerado; pero la familia era una entidad social importantísima, y por eso se procuraba conservarla, manteniendo su vigorosa constitucion. Era, en efecto, mucho más fácil defender y engrandecer un Estado compuesto de familias poderosas, que otro formado de individuos con igual poder, pues cuanto más subdividido y disperso se halla éste, tanto menos disfruta la eficacia y virtud que dá á toda fuerza su asociacion con otras. Mas con la perpetuidad y libre disposicion de los dominios, la division por igual de las herencias entre hijos y parientes, el poco uso de la sucesion por troncalidad y la inseguridad de las propiedades, iban perdiendo las familias el carácter de entidades políticas del Estado, que les daba su riqueza permanente, fundamento de su autoridad y de sus relaciones con la cosa pública. Interés suyo era recobrar ó mantener aquel carácter, y por eso sin duda, vemos á la nobleza, casi al mismo tiempo, acudir en Cataluña al derecho de primogenitura, en Aragon y Navarra á la libre testamentificacion con la *troncalidad* y el *cónsortio* de bienes, y en Castilla á los mayorazgos.

Reinaba todavía D. Alfonso el Sábio, cuando algunas familias trataron de perpetuar su noble estado, fundando con licencia del rey y nombre de *mayorazgos*, patrimonios inalienables, que habian de trasmitirse á los hijos y descendientes de ellas, por derecho de primogenitura. Con facultad de aquel monarca, fundó Garcí Ibañez en 1260, el mayorazgo de Magan, di-

(1) *Política*, n. 39.

ciendo en la escritura: «Mando que finquen estos heredamientos en mio linage, que sea de parte de mi padre... que quantos los han de heredar, que non los puedan vender» (1). En 1274 concedió privilegio el mismo rey D. Alfonso á D. Gonzalo Ibañez de Aguilar, para que su hijo mayor legítimo, en defecto de éste, su hija mayor y á falta de hijos el pariente más próximo heredasen las villas de Aguilar y Monturque, con obligacion de conservarlas íntegras y sin partirlas con otros herederos (2). *Mayorazgo* llamó el mismo rey Sábio al señorío de Vizcaya en una escritura de 1273, mediante la cual cambió con el señor de aquel territorio, D. Diego de Haro, las heredades de Valderejo y ciertos pueblos, por 40 pecheros realengos, pues fué condicion de aquel contrato que nunca habian de ser enajenados los 40 pecheros «é que anden en el mayorazgo de Vizcaya, é quien heredase á Vizcaya que herede á Valderejo» (3). Y en efecto, aquel señorío es buen ejemplo de los mayorazgos primitivos que á la sucesion por primogenitura, reunian la jurisdiccion dependiente de la corona. Era, pues, un señorío hereditario, indivisible é inalienable que fué la primera forma de aquella institucion. Mayorazgos, aunque irregulares, eran tambien los que fundó el mismo monarca, cuando otorgó heredamientos á los 40 caballeros de Jerez, segun he dicho en otro lugar (4), mandando que heredase á cada uno «el fijo que más quisiese, á quien dexare señaladamente el heredamiento.»

Estos hechos y otros semejantes que ocurririan probablemente en el mismo reinado, bastan para explicar por qué D. Alfonso, si bien no instituyó directamente en sus códigos los mayorazgos, introdujo una ley en las Partidas autorizando á los testadores para prohibir á sus herederos la enajenacion de sus castillos y heredades, siempre que «alegaran alguna razon competente.» La que pone la misma ley por ejemplo de su doctrina, se asemeja mucho á la fundacion de un mayorazgo, pues continúa «como si dixesse (el testador) quiero que tal cosa... non sea enagenada... mas que finque siempre á mi fijo ó á mi heredero, porque sea siempre más honrado é mas tenido» (5).

En los reinados siguientes fué en los que comenzó á fijarse la forma de

(1) Zúñiga, *Anales de Sevilla*, pág. 147, edic. de 1677.

(2) *Memorial ajustado en el pleito sobre secuestro de la ciudad de Montilla*, pág. 19.

(3) *Colecc. de doc. de las prov. vasc.* t. 5, n. 58.

(4) Véase el lib. III, c. 3.º, pág. 248 del tomo I.

(5) L. 44, t. 5, part. 5.ª

esta nueva institucion, con su propio nombre. D. Sancho IV dió privilegio en 1291, á su camarero mayor Juan Mathe, para *hacer mayorazgo* de las casas de su morada en Sevilla «con la barrera y barrio» de las mismas, sus franquezas y mercedes reales, sus castillos, heredamientos de Villalba, Nogales, Peñafior y Lapizar, el vado de las Estacas y otros lugares. Concedió el rey este privilegio á su camarero, segun se lee en el mismo documento, «habiendo voluntad de lo honrar é de *lo ennoblecer, porque su casa quede siempre hecha é su nombre non se olvide nin pierda...* é porque se sigue »ende mucha pro é honra á nos y á nuestros regnos en facer que aya muchas grandes casas de grandes omes...» (1) Es decir, que no bastando ya el régimen ordinario de la propiedad para la conservacion de las familias principales, y por lo tanto de una aristocracia respetable, juzgaba el rey necesario poner ciertas propiedades bajo el régimen excepcional de las vinculaciones.

D. Fernando IV dió la villa de San Lúcar de Barrameda en 1297 á don Alfonso Perez de Guzman «por siempre jamas, por juro de heredad, en tal »manera que la herede su fijo mayor... é si por aventura non oviere fijo, »que lo herede la fija mayor...» Esta donacion equivalia, como se ve, á la institucion de un mayorazgo regular, por más que no llevase su nombre. En 1325 fundó Alfonso Fernandez el mayorazgo de Cañete (2). D. Alfonso XI dió, en 1332 á su hijo, el infante D. Pedro, el estado de Aguilar de Campo, para que lo poseyera como *mayorazgo* (3). El mismo monarca, en 1349, vendió la villa de Bailén á D. Pedro Ponce de Leon, con facultad de fundar mayorazgo de ella (4). En el reinado de D. Pedro de Castilla, se fundaron los mayorazgos de Alvar Diaz de Sandoval y D. Juan Alfonso de Benavides (5).

(1) Hállase esta fundacion en el archivo de la catedral de Sevilla, cajon de *Nihil ad praesens* y la cita Ortiz de Zúñiga en sus *Anales*, año de 1291. Despues fué anulada la misma fundacion por haberse comprendido en ella indebidamente los bienes de la mujer de Juan Mathe.

(2) *Memorial* citado de Montilla.

(3) Sempere dice haber visto la fundacion de este mayorazgo en el archivo de la casa de Villena, *Hist. de los vínculos y mayorazgos*.

(4) *Disertacion histórico-jurídica sobre el pleito entre el duque de Arcos y el conde de la Coruña por el ducado de Arcos*, 1770. Cítala Sempere en la *Hist. de los vínculos*, etc.

(5) Sandoval, *Descendencia de la casa de Sandoval*, p. 209.—*Representacion sobre la antigüedad y calidad de la casa de Benavides*, por D. Diego Vicente de Vildania. Nápoles, 1609.

Por cuyos ejemplos se ve que ya en los siglos XIII y XIV se fundaban los mayorazgos de dos maneras: ó pidiendo el fundador licencia al rey para constituirlo con sus bienes propios, ó recibiendo del rey en merced algunas heredades ó villas con calidad de inalienables y sucesion forzosa, por derecho de primogenitura. La corona propendia á otorgar sus donaciones bajo esta forma, en el uso frecuente que hacia de su liberalidad, y así eran ménos perjudiciales al Estado que las de juro de heredad perpétuo.

Estos esfuerzos individuales para asegurar la conservacion de las familias, habian dado todavía escaso fruto, cuando D. Enrique II dictó en su testamento una providencia importantísima acerca de sus mercedes, que no habia osado adoptar en vida, y que contribuyó en gran manera á generalizar los mayorazgos. Aquel monarca tan pródigo de los bienes de la corona, y que tan pobre erario disfrutó por ello, no quiso acceder nunca á las repetidas instancias de las Córtes para que revocara sus mercedes perpétuas. Las Córtes creian, con razon, que abandonar para siempre el señorío de una parte tan considerable del territorio á vasallos poderosos, era crear una oligarquía peligrosa, incompatible con el bienestar y engrandecimiento de la república. D. Enrique juzgaba á su vez que revocar desde luego todas las mercedes de que estaban en posesion los favorecidos, además de ingratitud notoria, era una provocacion temeraria á la nobleza. Para resolver tan grave conflicto, imaginó, pues, una transaccion prudente entre el interés particular y el público, reducida á confirmar en su testamento todas las donaciones otorgadas, pero con la condicion, segun dice el texto, de que «las hayan (sus poseedores) por mayorazgo é que finquen en su fijo lexítimo mayor de cada uno dellos, é si moriere sin fijo lexítimo, que se tornen los sus logares del que así moriere, á la corona de los nuestros regnos» (1). De este modo entendió mantener el rey la integridad de los patrimonios enajenados de la corona, y conservar las familias de la nobleza que daban fuerza y esplendor al trono, reintegrando en su día al Erario público de la mayor parte de sus perdidos bienes, á medida que fuera desapareciendo la sucesion inmediata y directa de aquellas familias.

Mas los nobles, dándose por muy agraviados, reclamaron contra esta providencia á D. Juan I, en las Córtes de Guadalajara de 1390. Alegaron

(1) Campomanes, *Alegacion fiscal sobre la reversion á la corona de la jurisdiccion señorial y vasallaje de Aguilar de Campo*, 1783.

que la reversion de las mercedes privaba á sus parientes colaterales de un derecho adquirido y era contraria á las leyes que declaraban la irrevocabilidad de las donaciones; y que la sucesion por primogenitura en las mismas mercedes, derogaba los fueros y costumbres que daban á todos los hijos igual derecho á la herencia paterna. A estas razones opusieron los procuradores la prohibicion, nunca derogada por ley, de enajenar perpétuamente los bienes del Estado; pero fuese porque esta prohibicion no habia sido nunca respetada, ó porque se creyera peligroso en aquellas circunstancias, empeñar nueva lucha con la nobleza, cedió el rey á sus quejas, declarando que guardaria las mercedes de sus antecesores, segun los términos en que hubieran sido otorgadas (1).

Si los nobles hubieran aceptado aquella transaccion prudente, quizás habrian conservado para sus familias los cuantiosos bienes sobre los cuales tenian un derecho tan controvertible y tan disputado por las Cortes, y no habrian dado lugar á las providencias rigorosas de que más tarde fueron objeto. Pero la cláusula del testamento de D. Enrique no se cumplió, en cuanto á los bienes á que se referia, ántes al contrario sirvió de ejemplo y pauta para el otorgamiento de nuevas mercedes en forma de mayorazgo, sin impedir la concesion de otras muchas con la calidad de libres y perpétuas. Así, D. Juan I otorgó en 1389 al primer almirante Alfonso Enriquez la villa de Aguilar á título de mayorazgo, expresando que por su muerte, habia de pasar la merced á su hijo mayor legitimo, en su defecto á su hija mayor, y de igual modo despues á todos sus descendientes, pero con la condicion de que á falta de éstos, revertiria la villa á la corona, quedando excluidos de la sucesion los parientes colaterales de los últimos poseedores (2). D. Enrique III fué mucho más pródigo que su padre, sobre todo de las mercedes perpétuas, dando lugar á que las Cortes de Tordesillas de 1420 reclamaran contra ellas del modo más enérgico. No bastando ya las tierras y las rentas del Erario para saciar la codicia de los cortesanos y de los logreros, se crearon nuevos oficios, muchos inútiles y todos perpétuos, á fin de venderlos por lo que el tesoro real necesitaba para salir de los apuros de cada día. D. Juan II hizo de ellos y tambien de los bienes del Estado numerosas enajenaciones, por más que declarara su inalienabilidad en las Cortes de Valladolid de 1442. En su reinado, y con licencia de sus tutores, fundó la reina doña Leonor, mujer de D. Fernan-

(1) Crónica de D. Juan I, año 12, c. 14.

(2) Campomanes, *Alegacion citada*.

do I de Aragón, el mayorazgo de Saldaña, á favor de D. Sancho Roxas, obispo de Palencia, y de Diego Gomez de Sandoval. Este mismo caballero fundó en cabeza de su hijo, otro mayorazgo sobre varias villas, aldeas y vasallos que le diera el rey D. Juan en 1419. Otras fundaciones semejantes hicieron en el mismo año, Pero García de Herrera sobre las villas de Fuentepudia y Villacid, con sus fortalezas y jurisdiccion, y el citado obispo don Sancho sobre el lugar de Seron y un juro de 10.000 maravedís (1). Pero cuando hubieron de fundarse más vinculaciones, fué bajo el desastroso reinado de D. Enrique IV, que no sólo enajenó por precio, sino que dilapidó y dispó insensatamente las propiedades territoriales, los señoríos, las rentas y los oficios públicos de la corona. Las mejores villas y lugares pasaron entónces al dominio particular, las tercias y alcabalas se cedieron por título oneroso ó gratuito, y con el nombre de *juros*, se vendieron á vil precio, pingües rentas á cargo del tesoro público. Llegó á tal punto el abuso, que segun Hernando del Pulgar, cronista contemporáneo, podia comprarse, con un capital de 1.000 maravedís en dinero, otro tanto de renta anual en *juros* (2).

Los Reyes Católicos, queriendo remediar tan graves desórdenes, é instados por las Córtes de Toledo de 1480, mandaron averiguar el origen y los títulos de todas las mercedes reales, y en virtud de este exámen, confirmaron algunas, redujeron la cuantía de otras y revocaron muchas enteramente, disponiendo en cuanto á las de D. Enrique II, que se guardase la cláusula ántes citada de su testamento. Y sin embargo, aquellos mismos monarcas tuvieron no sólo que confirmar sino que otorgar de nuevo algunas mercedes de rentas y de lugares, que la reina arrepentida, revocó á la hora de su muerte (3). Otro tanto hizo el emperador D. Cárlos mandando en su testamento llevar á efecto esta cláusula del de su abuela doña Isabel, y revocando las mercedes que él mismo habia despues concedido (4). Pero ni aún entónces cesaron las enajenaciones de bienes realengos, que tanto contribuian á acrecentar las vinculaciones. Las Córtes de Toledo de 1560 y las de Madrid de 1590, volvieron á representar contra ellas; y aunque el rey prometió moderar su uso, las enajenaciones continuaron, con tanto más motivo, quanto que eran un recurso casi necesario para subvenir á los gastos que ocasionaban los aumentos y las guerras de tan extensa monarquía.

(1) *Memorial histórico*, t. 3, p. XXIII y XXV.

(2) Crón. de los Reyes Catól., part. 2.^a, c. 95.

(3) Dormer, *Discursos varios de historia*.

(4) Sandoval, *Hist. de Carlos V*, t. 2.

Hasta principios del siglo xvi era, como se ha visto, la fundacion de cada mayorazgo objeto de un privilegio especial de la corona, sin duda por no estar en uso la ley de Partida que facultaba á los testadores para prohibir por cierto tiempo, la enajenacion de sus bienes, y por no haber sido tampoco admitida en el foro la Novela de Justiniano, que permitia la sustitucion fideicomisaria por cierto número de vidas. Así la propiedad, para contribuir á la conservacion y esplendor de las familias, no tenia en su apoyo otra ley que la excepcional formada por aquellos privilegios. Pero tanto hubieron de repetirse los recursos al soberano en solicitud de licencia para fundar mayorazgos; con tanta irregularidad hubieron estos de constituirse, y tan graves dudas hubieron de ofrecer su trasmision y su régimen, que las Córtes de Toro de 1505 juzgaron necesario dictar reglas generales sobre esta materia. Así como el camarero mayor de D. Sancho IV, Juan Mathe, al obtener privilegio para fundar mayorazgo *de todos sus bienes*, entendió que podia incluir entre ellos los de su mujer, así hubieron de concederse ó ejecutarse otras mercedes semejantes, con grave perjuicio de herederos forzosos y menoscabo tal vez del ajeno dominio, dependiendo todo del capricho del fundador ó de su valimiento en la corte. Al mismo tiempo se suscitaban en los tribunales frecuentes y graves cuestiones sobre el modo de probar la existencia de los mayorazgos, la duracion de las licencias reales otorgadas para instituirlos, la facultad de revocar las fundaciones, el derecho sucesorio de los ascendientes y colaterales, el del sucesor inmediato á las mejoras y agregaciones de los bienes vinculados, y otros varios y difíciles puntos, sin que hubiese ley ni regla fija para resolverlas.

Las Córtes de Toro de 1505 proveyeron á esta necesidad, aunque de un modo que se ha prestado y con razon, á la más severa crítica. No autorizaron la fundacion de mayorazgos sin real licencia, ántes bien confirmaron su necesidad; mas permitieron gravar sin ella, con vinculos y sumisiones, las mejoras de tercio y quinto en favor de los hijos, y esta novedad fué de gravísima transcendencia. Segun la ley 27 de aquellas Córtes, no era lícito gravar con tales vinculos la legítima de los hijos ni la de los padres, pero si el tercio, cuando se dejaba á algun descendiente legítimo, en su defecto al ilegítimo ó por falta de todos á algun ascendiente, el quinto en todo caso, y la totalidad de los bienes cuando no hubiera herederos forzosos, entendiéndose siempre perpétuas tales vinculaciones, á ménos que el fundador dispusiera lo contrario. No haciendo mencion esta ley de la real licencia necesaria para fundar mayorazgos, aunque las 42 y 43 de

las mismas Cortes la exigian muy circunstanciada sin distincion de casos, entendieron los intérpretes que no era indispensable tal requisito, más que para las fundaciones que no tuviesen por objeto el tercio y quinto de los bienes y perjudicaran á herederos forzosos.

Así se convirtió en derecho general y comun el de vincular bienes, que fuera hasta entónces un privilegio concedido tan sólo á la nobleza. Por eso decia uno de los primeros comentadores de estas leyes, animado del espíritu democrático que prevalecia entre nuestros juriconsultos, que la ley 27 citada «deberia escribirse en letras de oro, pues á ella se debe »que no sólo los próceres, sino tambien los meros ciudadanos y los plebeyos puedan fundar mayorazgos del tercio y quinto de sus bienes» (1); y en efecto, desde que no fué necesaria la real facultad para fundar esta clase de vínculos, desapareció una de sus principales restricciones, y propietarios grandes y cortos, hidalgos y pecheros, traficantes y asentistas enriquecidos, se apresuraron á hacer uso del nuevo derecho, deseosos de transmitir á la posteridad su nombre preclaro.

La misma tendencia á favorecer las fundaciones de mayorazgos se nota en las demás leyes que sobre esta materia, hicieron aquellas Cortes. Resolviendo las dudas suscitadas sobre la sucesion de los descendientes de distinto grado, extendieron el derecho de representacion á los del último poseedor por la línea del primogénito, muerto ántes de suceder, prefiriéndole á los otros hijos vivos del mismo poseedor. Disputándose la subsistencia de algunos mayorazgos cuyas fundaciones no constaban por escrito, declararon ser bastante prueba de ellas la de la posesion inmemorial. Dudándose si la real licencia para vincular subsistia despues de la muerte del rey que la diera, aunque no se hubiese usado de ella en tiempo oportuno, decidió el estamento afirmativamente. Era muy controvertida la facultad de los fundadores para revocar sus fundaciones, y fué entonces denegada siempre que el mayorazgo hubiera sido instituido por contrato, ó con entrega al primer poseedor de los bienes vinculados ó de la escritura de fundacion. Suscitándose frecuentes cuestiones sobre la sucesion vincular entre los que se suponian con derecho á ella, las cuales solian dilatar la entrega de los bienes vinculados á los poseedores legítimos, se declaró que la posesion civil y natural de tales bienes se trasmitia por ministerio de la ley, muerto el poseedor, al inmediato, aunque otro los detentara materialmente. Habia, por último, graves dudas en los tribunales sobre la pertenencia

(1) Castillo, *Glossa super leges Tauri*, edic. 1553.

de las mejoras y aumentos que solian hacer los poseedores en los bienes vinculados, puesto que los reclamaban los sucesores inmediatos y los herederos. Las Cortes de Toro, favoreciendo una vez más la causa de los vinculistas, declararon que los edificios, obras y mejoras que se hicieran en lugares de mayorazgo, debian correr siempre en la sucesion, con ellos, sin que pudieran reclamar su importe los herederos del poseedor que los hubiese costado con caudal propio.

Fuera de los reinos de Leon y Castilla no se sintió tanto la necesidad de una institucion que mantuviera los bienes en las familias aristocráticas, y con ellos las relaciones de dependencia entre el Estado y sus más distinguidos individuos. «En Aragon, decia en el siglo xiv Miguel de Molino, no tenemos derecho de primogenitura, vulgarmente llamado derecho de mayorazgo, ni aún en las casas de los magnates, nobles, barones, infanzones y caballeros, excepto en los hijos del rey; mas como se puede instituir heredero á uno de los hijos, dejando cualquier cosa á los demás, suelen tales casas con sus castillos y baronías estar vinculadas por testamentos de los abuelos en los hijos y descendientes primogénitos» (1). De cuyas palabras se infiere que en Aragon no fueron las vinculaciones una institucion especial establecida por la ley, para suplir la falta de otras que desaparecian, ni tampoco objeto de privilegios y mercedes reales, sino condiciones impuestas por algunos propietarios á la trasmision y posesion de sus bienes, en uso del derecho comun que les facultaba para disponer libremente de ellos, dejando cualquier cosa á los hijos, por razon de legitima. No fué, sin embargo, el uso de las condiciones vinculares tan general como en Castilla, sobre todo miéntras que la testamentificacion libre era de hecho ó de derecho, privilegio exclusivo de los magnates é infanzones, mas aún despues que se extendió al estado llano, no solian vincularse, segun Molino, más que los lugares de señorío, los castillos y las baronías.

Aún fueron ménos necesarios los mayorazgos en Cataluña y en Valencia, donde la propiedad conservó sus caractéres feudales mucho más tiempo que en Castilla. En aquellos dos reinos subsistieron los feudos hasta mucho después de constituir con los otros de la Península, una sola monarquía, y por lo tanto no fué menester sustituirlos con otra institucion semejante. En Cataluña era lícita además la sustitucion fideicomisaria, sin la limitacion de vidas, con que la admitia el derecho romano. Asi, por cualquiera de estos medios, podian los nobles y caballeros mantener en sus

(1) Molino, *Repertorium fororum*, verb. *Primogenitus*.

familias los bienes de su patrimonio, sin apelar á la nueva institucion vincular de Castilla. Con sus feudos y con sus sustituciones fideicomisarias puede decirse que Cataluña y Valencia ántes dieron ejemplo á los mayorazgos de otras provincias, que lo tomaron de ellas.

No sucedió lo mismo en Navarra, donde si bien la libertad de testar era tan completa como en Aragon, no hubo de hacerse uso tan general de ella para vincular bienes en familias determinadas. Habia, sin embargo, algun gérmen de vinculacion en la manera de suceder en los castillos y villas, puesto que no se podian dividir por herencia, y el hijo primogénito debia suceder en el castillo del padre cuando era uno solo, aunque los demás hijos quedasen desheredados, segun en otro lugar he dicho (1). Mas este gérmen no se desenvolvió ni dió todos sus frutos hasta que, unida Navarra á Castilla, tomó de ella la institucion vincular con sus leyes y costumbres.

III.

CÓMO SE VULGARIZARON Y DESACREDITARON LOS MAYORAZGOS.

Las leyes de Toro por favorecer demasiado el uso y progreso de esta institucion, la desnaturalizaron torpemente, impidiéndole cumplir el fin para el cual habia sido establecida. Prodigando la facultad de vincular, sin consideracion al estado y posicion social de los vinculistas, rebajaron y vulgarizaron una institucion aristocrática de suyo, en provecho tan solo de la democracia. No contribuyó ménos á este resultado la jurisprudencia formada al amparo de aquellas leyes. Los tribunales al aplicarlas y al comentarlas los intérpretes, dieron por una parte á la facultad de vincular toda la amplitud posible, y por otra dejaron casi en desuso alguna disposicion que tendia á limitarla. Así las Córtes de Toro habian permitido vincular el tercio y quinto de los bienes en favor del heredero legítimo, por su órden y lugar (ley 27), y la jurisprudencia dedujo de aquí que era vinculable toda la hacienda de que cada uno podia disponer por testamento. Admitióse la prueba de la posesion inmemorial, para justificar la existencia de los mayorazgos (ley 41), contra la presuncion más fuerte de derecho, que supone libre, comunicable y trasmisible toda propiedad; y así se allanó el camino á los particulares y á los tribunales para convertir en vinculados

(1) Véase el lib. IV c. 8, t. I, pág. 440.

muchos bienes que ántes fueran libres. Extendido el derecho de representacion de los descendientes del fundador á sus parientes colaterales, sin limitacion de grados ni de generaciones (ley 40), se dificultó en gran manera la vuelta al comercio los bienes una vez vinculados. Con no haberse hecho mencion de la real licencia en la ley que autorizaba á vincular las mejoras, aunque otras la exigieran indistintamente (leyes 42 y 43), se dió lugar, como ántes dije, á que se entendiese no ser necesario aquel requisito, sino para fundar mayorazgos de más del tercio, y aún á que en estos, se prescindiera muchas veces de aquella formalidad. De la ley que declaraba que ni la viuda ni los herederos del poseedor podrian reclamar del sucesor inmediato las fortalezas, cercas y obras que aquel hubiese ejecutado en lugares de mayorazgo (ley 46), dedujo la jurisprudencia que el aumento y ensanche de las vinculaciones podia verificarse á costa de la legítima de los hijos, de los gananciales de las mujeres y tal vez del patrimonio del que prestó el capital necesario para las obras, si el deudor no dejaba bienes libres con que satisfacer su importe.

Esta interpretacion tan ámplia y extensiva de las leyes de Toro lisonjeaba grandemente el orgullo de la muchedumbre y el espíritu democrático de la nacion. Hacerse caballero, perpetuar su nombre, fundar una casa solariega, asegurar á su descendencia una posicion independiente y digna, y rivalizar con la antigua nobleza de sangre ó llegar con el tiempo á formar parte de ella, eran estímulos demasiado poderosos para que dejaran de surtir efecto en la vinculacion de la riqueza. El hidalgo sufría privaciones y acumulaba los ahorros de toda su vida para formar á la hora de la muerte un corto patrimonio vinculado. El comerciante enriquecido en el tráfico, el fabricante económico y hasta el menestral afortunado fundaban su orgullo en instituir un mayorazgo; aunque fuese mtezquino. Los que carecian de caudal bastante para dotarlos suficientemente, solian gravar á sus sucesores con la obligacion de aumentar su dotacion, ya con las rentas de algunos años, ó ya con el tercio y quinto de sus bienes libres. Tan general llegó á ser el uso de las vinculaciones, que en algunas provincias, cuando los testadores disponian del tercio y quinto de su herencia, los escribanos consideraban como fórmula necesaria y de cajon, una cláusula que los vinculaba perpétuamente. Así asegura el doctor Castro que sucedia en su tiempo, particularmente en Galicia, y de este modo, testadores poco versados en negocios, fundaban sin saberlo, muchos mayorazgos (1).

(1) *Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes*, t. 3.º, pág. 173.

Quizá las leyes de Toro que vulgarizaron esta institucion, fueron uno de los medios empleados por los Reyes Católicos para quebrantar el poder de la nobleza. Inclínome á creerlo así al observar que Cárlos V, que continuó la política de sus abuelos, publicó en 1554 una ley para impedir que los grandes mayorazgos diesen á los ricos-hombres un poder excesivo y peligroso, por más que digan otra cosa los motivos alegados en su preámbulo. Las leyes de Toro, *democratizando*, si así puede decirse, la institucion vincular, habian dado un rudo golpe á la aristocracia, pero sin impedir que por casamientos y sucesiones, se reuniesen en algunos pocos nobles, mayorazgos tan cuantiosos, que les permitiesen rivalizar en poder é influencia con el mismo soberano. Para evitar este peligro, que no habian previsto las Córtes de Toro, ordenó el emperador que cuando se hubiese de verificar la acumulacion de dos mayorazgos, uno de los cuales rentara dos millones de maravedís (1) ó más, no sucediese el primogénito sino en uno de ellos, y que el otro pasara á la hija mayor ó al hijo segundogénito (2). Alegáronse como fundamentos de esta trascendental disposicion el deseo de conservar la memoria y la fama de los fundadores, y la conveniencia de que no menguase el número de las familias nobles, que prestaban apoyo y servicios á la corona; pero la verdad es que el emperador recelaba de los poderosos ricos-hombres, y deseaba evitar, más bien que la pérdida de su memoria y nombradía, el peligro de que la adquiriesen nueva á costa de la autoridad soberana.

Confirmase aún más esta presuncion al observar desde entónces dos tendencias contrarias en el mismo progreso de las vinculaciones. Por una parte la corona favorecia al parecer, la fundacion de los mayorazgos cortos y la desvinculacion de los cuantiosos: por otra los nobles y las Córtes pedian la conservacion de los últimos y la reduccion de los primeros. Las Córtes de Madrid de 1552 representaron al rey que con darse tantas licencias para vincular, fundaban cortos mayorazgos personas de calidad inferior y no muy gruesa hacienda, en perjuicio de los otros hijos y de la república, pidiendo por lo tanto que no se dieran tales facultades sino á personas calificadas y prévia informacion de su caudal. El monarca no accedió á esta peticion, respondiendo que «se tenia en ello miramiento y se haria siempre lo que conviniese.» Las mismas Córtes se quejaron de la facilidad con que se autorizaba á los poseedores de mayorazgos para vender, acensuar é

(1) Equivalentes á 58.300 rs. de nuestra moneda.

(2) L. 7, tit. 17, lib. 10, Nov. Recop.

hipotecar, por las dotes de sus mujeres é hijas, los bienes vinculados, pidiendo que no se dieran en adelante tales facultades; á cuya peticion contestó el rey evadiéndola, con la conocida fórmula de que lo tendria en consideracion y se proveeria lo conveniente en los casos que ocurrieran. Mas con estas pretensiones de las Córtes coincidian otras en sentido opuesto. Formada en 1595 una junta de ministros que propusiera los medios de mejorar el deplorable estado de la Real Hacienda, adoptó los planes del consejero Gaspar de Pons, uno de los cuales era autorizar á los pueblos y á los poseedores de mayorazgos gravados con censos á favor del Erario, para vender sus fincas, en cuanto bastase para redimir con su precio, aquellas cargas (1).

Además, los mayorazgos así desnaturalizados, si por una parte no satisfacian cumplidamente el interés de la aristocracia, chocaban por otra con cierto espíritu de igualdad cristiana y democrática, que prevalecia entre los teólogos y jurisconsultos y con las doctrinas económicas y políticas de los estadistas de la época. Esta contradiccion que ya se reveló en el siglo xvi, se desenvolvió y tomó notable incremento en el xvii, hasta llegar á las proporciones de una grave cuestion social y política. Jacobo de Simancas, obispo de Ciudad-Rodrigo, censuraba en 1566 la institucion vincular, fundándose en que excluia del comercio una parte considerable de la riqueza, se practicaba sin tener en cuenta la utilidad pública, se oponia á la máxima de los sábios que hace consistir el bien de la república en la mediania de las fortunas, y condenaba á amortizacion perpétua la mejor parte de la propiedad territorial. A estas consideraciones económicas añadia aquel prelado otras religiosas y políticas, á su parecer de gran fuerza. Decia que el deseo de perpetuar la propia memoria por medio de las vinculaciones, era poco conforme con el espíritu cristiano, porque si el fundador se iba al cielo, no lo necesitaba, y si al infierno, no sacaba de ello ningun provecho. Por último, concluia demostrando que tampoco lograban los fundadores la perpetuidad que apetecian, porque siendo todo lo del mundo perecedero, no era posible impedir la extincion de los familias (2).

D. Tomás Cerdan, escritor de fines del siglo xvi, condenó tambien los mayorazgos por la desigualdad que introducian entre los hijos y los pleitos y malas pasiones que suscitaban, admitiéndolos únicamente para los almirantes, condestables, duques, marqueses y condes, por no ser mu-

(1) Puede verse este dictámen en Sempere, *Biblioteca económica*, t. 1.º, p. 50.

(2) Jacobus Simancas, *De primogenitis Hispanie*, lib. 4, c. 5, et seq.

chos y porque el daño de la excesiva acumulacion de riquezas podia remediarse observando la pragmática de Carlos V citada ántes, que prohibia se juntasen en una persona dos ó más vínculos de mayor cuantía (1).

Las opiniones de Simancas y de Cerdan tomaron vuelo en el siglo xvii, sobre todo cuando otros escritores más hábiles y afamados vinieron á acreditarlas con su autoridad y su ingénio. El licenciado Fernandez Navarrete publicó en 1621, su apreciable libro titulado *Conservacion de monarquias*, en el cual examinando las causas de la despoblacion de España, señaló como una de ellas la multitud de mayorazgos cortos (2). Citó en su apoyo la autoridad del rey Teodorico, que consideraba inicuo privar á un heredero de la sucesion á que tenia derecho, dejándole en la miseria, para que otro se hiciese á su costa, sobradamente rico (3). Pero su principal argumento contra la institucion, se fundaba en que los mayorazgos cortos favorecian la ociosidad, causa en gran parte, de la despoblacion del reino. «Estos vínculos, decia, no sirven más que para acaballarar la gente plebeyá, vulgar y mecánica, porque apenas llega un mercader, un oficial ó labrador y otros semejantes á tener con qué fundar un vinculo de 500 ducados de renta en juros, quando luego los vincula para el hijo mayor, con lo qual no sólo éste, sino todos los demás hermanos se avergüenzan de ocuparse en los ministerios humildes con que se ganó aquella hacienda; así llevándose el mayor la mayor parte della, quedan los otros con presuncion de caballeros, por ser hermanos de un mayorazgo y sin querer atender á más que á ser holgazanes.» Por estas y otras razones, concluia el autor proponiendo que se prohibiese fundar vínculos de ménos de 3.000 ducados de renta, á fin de que siendo pocos en número, no fuesen tantos los que para instituirlos, desamparasen la produccion; que estos mayorazgos se fundasen no en juros, sino en haciendas de labor ó capitales impuestos en los *erarios*, de cuyo establecimiento se trataba entónces, y que se impusiese tambien en estos forzosamente el producto de todos los bienes vinculados que se enajenaran con real licencia.

Estas mismas doctrinas profesaron casi todos los escritores políticos del siglo xvii, aunque ninguno trató la cuestion de las vinculaciones con más profundidad y conocimiento que Navarrete. Saavedra Faxardo atribuyó tambien á los mayorazgos el ser causa de la despoblacion, porque lle-

(1) Cerdan, *Veriloquium en reglas de Estado*, c. 19.

(2) Discurso II.

(3) Casiodor. lib. 1, epíst. 7.

vándose el primogénito toda la hacienda, no podían casarse los otros hermanos, y se hacían militares ó religiosos. Condenó asimismo las vinculaciones, porque mantenían, en su concepto, «la desigual repartición de la riqueza, peste de la república y origen de todos los daños.» Sin embargo, no dejó de reconocer la necesidad de mantener la nobleza por medio de los fideicomisos, concluyendo de todo que debían conservarse los mayorazgos antiguos y no permitirse fácilmente la fundación de otros nuevos á la nobleza moderna (1).

D. Mateo Lopez Brabo, escritor político del mismo tiempo, profesaba en esta materia doctrinas aún más radicales, pues para evitar desigualdades entre los ciudadanos, pretendía que se restringiese la facultad de testar, declarando herederos forzosos á todos los parientes. Decía que los mayorazgos fomentaban con la ociosidad, la disolución y la ignorancia, y aunque confesaba que sin ellos no se podría mantener la nobleza, que por interés propio conserva y defiende al Estado, quería que no se permitiese fundarlos más que á personas ilustres, con real licencia, en premio de servicios y con limitación á los descendientes de los fundadores hasta el cuarto grado, á ménos que se prorogaran por nuevos y señalados servicios de los poseedores (2).

D. Gaspar de Ciriales y Arce, en un escrito que dirigió al rey D. Felipe IV, le propuso, entre otros remedios de los males públicos, la promulgación de una ley que prohibiese fundar mayorazgos de ménos de 500 ducados de renta. Gerónimo de Cevallos, jurisconsulto famoso y político notable del mismo reinado, abogó por la creación de erarios públicos dotados con el 15 por 100 del capital de los mayorazgos que en adelante se fundasen, y con una parte considerable de las rentas de los existentes, constituyéndose censos á favor de los mismos vínculos, y condenó de paso esta institución, por lo que disminuía las alcabalas con la inalienabilidad de los bienes amortizados (3). Pedro de Peralta, en sus comentarios á las leyes del Digesto (4), indicó la conveniencia de limitar á los hidalgos la facultad de fundar mayorazgos, para que los pecheros no abandonasen por su causa los ministerios del campo ni de las artes. Los jurisconsultos Rodrigo Suarez (5) y Vazquez Menchaca, reprobaron también en sus escritos esta insti-

(1) Saavedra Faxardo, *Empresas políticas*, Empr. 66.

(2) *De Rege et regendi ratione*, lib. 3, pág. 17.

(3) *Arte real para el buen gobierno de reyes y príncipes*, documento 3, pág. 27.

(4) In leg. 3, pár. *Qui fideicomissum*. Dig. *De hered. institut.*, núm. 15.

(5) Proem. ad. leg. *Quoniam in prioribus*, Cod. *De inoffic. testam.*

tucion, por razones idénticas ó semejantes á las alegadas. Otros autores, que seria prolijo citar, escribieron en el mismo sentido, y aunque algunos la defendieron en principio, ninguno osó afirmar que fuesen útiles y dignos de proteccion los vinculos de corta renta.

Eran, pues, ya las vinculaciones en el siglo xvi y más aún en el xvii, una institucion frustrada casi por completo. No resultó tan ineficaz ni cayó tan pronto en descrédito, allí donde fué patrimonio exclusivo de la aristocracia. Los señoríos territoriales vinculados mantenian realmente á las clases inferiores en dependencia de las altas, y por eso en las tierras en que subsistieron, tardó mucho la sociedad en *democratizarse*. Mas como la nobleza española perdió tan pronto el privilegio exclusivo de fundar y poseer mayorazgos, y ni conservó siquiera todos los que le pertenecian, con la facilidad de desmembrarlos y partarlos por enajenaciones autorizadas, confundióse hasta cierto punto con el estado llano, en cuanto á la posesion de los elementos que constituian su poder, y no logró atajar el creciente predominio de los sentimientos democráticos en las costumbres y en las instituciones, el cual vino á ser con el tiempo, uno de los caracteres distintivos de nuestra nacionalidad. A las leyes de Toro, á la jurisprudencia que nació de ellas, á la ilimitada facultad de vincular y á la muchedumbre de los mayorazgos cortos, se debe que esta institucion no fuera en manos de la aristocracia española un elemento de influencia social y de preponderancia política tan poderoso y eficaz como en otros países. A los escritores políticos y juristas de los siglos xvi y xvii, cuyas doctrinas reprodujeron, confirmaron y ampliaron los estadistas del siglo xviii, se debe el fallo de la opinion pública, que al fin concluyó con las vinculaciones.

CAPÍTULO III.

Progresos de la desvinculacion en el siglo XVIII.

I.

PROGRESOS DE LAS DOCTRINAS CONTRARIAS Á LAS VINCULACIONES.

La vinculacion habia llegado á grande exceso en el último siglo, no tanto por la importancia cuanto por el número de los mayorazgos; pero

entonces fué tambien cuando los escritores políticos y los estadistas, aplicando las nuevas doctrinas económicas importadas de Francia, le hicieron más cruda é incansable guerra. Campomanes publicó en 1765 su célebre *Tratado de la regalía de amortizacion*, obra digna de su nombre y la más completa que se ha escrito hasta nuestros días sobre la amortizacion eclesiástica. No trató en ella, sin embargo, de los mayorazgos más que por incidencia (puesto que su principal objeto fué demostrar la necesidad de una ley que pusiera limite á la adquisicion de bienes raices por manos muertas y la competencia del soberano temporal para dictarla); pero recopiló y esforzó con singular maestria, todos los argumentos alegados hasta entónces contra las vinculaciones. Aquel docto jurisconsulto é insigne repúblico reconoció, no obstante, la necesidad de una nobleza dotada con ellas; pero condenó resueltamente la existencia de los mayorazgos cortos y solicitó su remedio.

La Sociedad Económica de Madrid ofreció un premio en 1783, al autor de la mejor Memoria en que se demostrasen los perjuicios de los mayorazgos, la necesidad de remediarlos y las providencias que convendria adoptar para ello, salvando los inconvenientes más graves que ofreceria su ejecucion. A este programa precedia un preámbulo, en el cual se indicaban los perjuicios más graves, genéricos y específicos que ofrecian las vinculaciones, á juicio de la corporacion (1). Presentáronse, en efecto, al concurso varias Memorias; pero ninguna hubo de merecer el premio ofrecido.

Casi al mismo tiempo un canónigo de la catedral de Lugo, D. Juan Francisco de Castro, publicaba el tercer tomo de sus *Discursos críticos sobre las leyes*, en el cual trató latamente la cuestion de los mayorazgos, demostrando los perjuicios que ocasionaban á la poblacion, á la agricultura, al comercio, á las artes y á las familias. Para remediarlos propuso varias providencias restrictivas de la facultad de vincular. Entonces tambien, el conde de Floridablanca escribió y presentó al rey D. Carlos III su célebre *Instruccion de Estado*, en la que despues de demostrar los graves daños de los mayorazgos en general y de los cortos en particular, indicó los remedios oportunos, manteniendo, no obstante, las vinculaciones necesarias para sostener la nobleza, que daba apoyo y esplendor al trono.

Pero uno de los escritos que más influjo ejercieron en la opinion sobre esta materia, fué el *Informe sobre la ley agraria* de D. Melchor Gaspar de Jovellanos, que en 1795 publicó la Sociedad Económica de Madrid; y ha

(1) *Gaceta de Madrid* de 31 de Octubre de 1786.

sido reproducido varias veces despues, como monumento imperecedero de gloria para su autor y para la nacion española. En una parte de esta obra resumió la docta pluma de Jovellanos los principales argumentos de otros autores contra las vinculaciones, esforzándolos con raro vigor de lógica y corroborándolos con doctrinas nuevas, no poco atrevidas para aquel tiempo, aunque por lo mismo un tanto embozadas.

No citaré otros escritos de menor importancia y nombradía publicados en la misma época sobre esta materia, porque los enunciados bastan para dar á entender cómo el principio individualista iba rápidamente prevaleciendo en la organizacion de la propiedad. Las doctrinas emanadas de este principio, no eran ya patrimonio de arbitristas ó reformadores visionarios: profesábanlas los más sábios repúblicos y los hombres de Estado más influyentes. Verdad es que el vulgo seguía entre tanto fundando mayorazgos cortos ó aumentando la dotacion de los existentes; pero no sin dolerse de la pobreza en que quedaban las familiás de sus poseedores, del deterioro de las fincas vinculadas y de los largos y numerosos pleitos que originaban las fundaciones.

Los escritores del siglo XVIII encontraban en los mayorazgos dos clases de inconvenientes: unos propios é inseparables de la institucion, y otros producidos por los vicios y defectos de las leyes que los regian en España. Entre los primeros contaban los siguientes: 1.º que es contraria á la naturaleza la facultad del hombre para disponer perpetuamente de sus bienes: 2.º que es contrario á justicia y al bien de la república hacer rico á un hijo, dejando á los demás en miseria: 3.º que los mayorazgos impiden el aumento de la poblacion, por cuanto favorecen la holganza de los poseedores y de sus inmediatos parientes y condenan al celibato á sus hermanos y á todos los hijos, menos el primogénito: 4.º que fomentan la estéril vanidad de los fundadores: 5.º que alejan de las profesiones útiles y de las artes á innumerables personas, inclinándolas á la disipacion y al lujo: 6.º que perjudican á la agricultura, porque con ser inalienables los bienes, ni los dueños ni los arrendatarios invierten en la tierra más capital que el absolutamente indispensable para recoger una mediana cosecha, y omiten toda labor que no haya de dar fruto inmediato, cuando este género de labores es el que más favorece á la produccion: 7.º que perjudican tambien al comercio, porque disminuido el número de las tierras en circulacion, es mayor su precio y se venden más caros sus productos, y porque menguando la produccion agrícola, se aminora la materia comercial y crece su precio, así como se reduce el número de las transacciones que se verifican sobre ella.

Los perjuicios específicos de los mayorazgos, según los autores á quienes me refiero, eran: 1.º que por consecuencia de la libertad de vincular el tercio y el quinto de la herencia, existían innumerables mayorazgos cortos, cuyas rentas ó no alcanzaban para sustentar á los poseedores, ó satisfaciendo escasamente esta necesidad, los hacían ociosos é inútiles para la producción: 2.º que mal entendidas y peor aplicadas las leyes que exigían real licencia para fundar mayorazgos, y habiendo caído en desuso la de Carlos V sobre incompatibilidad entre vinculaciones de cuantiosa renta, fundábanse éstas sin tasa ni medida, se aumentaban con nuevos bienes las existentes, en cumplimiento de obligaciones arbitrariamente impuestas por los fundadores y se creaban patrimonios excesivos que convidaban á sus poseedores á la disipación: 3.º que admitiendo las leyes sólo dos clases de pruebas de la existencia de los mayorazgos, la fundación y la costumbre inmemorial, sin determinar sus circunstancias, originábanse innumerables pleitos, tan largos y costosos por su naturaleza, como difíciles de decidir con acierto, por la insuficiencia del derecho escrito y la oscuridad de las fundaciones: 4.º que la ley 46 de Toro, que declaraba vinculadas las mejoras hechas por los poseedores en los bienes de mayorazgo, y la jurisprudencia que había interpretado ámpliamente esta disposición, empeoraban el estado de aquellos bienes, por cuanto los poseedores excusaban invertir en su reparación el caudal propio, á fin de que lo heredaran por igual sus hijos: 5.º que no pudiendo invertirse ninguna parte de los bienes vinculados en dotar á las hijas, ni en pagar las deudas del último poseedor, aquellas se casaban con dificultad y éstas quedaban sin satisfacer á falta de bienes libres; lo cual favorecía al fraude y perjudicaba en último resultado al tráfico: 6.º que no pudiéndose dar en enfiteusis, ni arrendar por más tiempo que el incierto de la vida, los bienes vinculados, no había quien invirtiera el capital indispensable para poner en cultivo las tierras incultas de los mayorazgos, ni para aumentar el producto de las cultivadas.

Poco más han podido decir contra las vinculaciones los modernos economistas y los políticos más avanzados del presente siglo. En lo que, sin embargo, difieren aquellos escritores de éstos, es en el radicalismo de las conclusiones prácticas que unos y otros deducen de sus doctrinas; y no porque estos últimos, en la esfera de las teorías políticas, vayan más lejos que sus predecesores. Ya se ha visto cómo Saavedra Faxardo profesaba con Platon, si bien sólo como ideal, la doctrina de la igualdad de fortunas. El doctor Castro, ántes citado, entendía que la testamentifacción no es conforme al derecho natural y procede exclusivamente de la ley positiva,

serviéndose para demostrar esta tésis, del mismo argumento que poco después usó Robespierre en la Convencion nacional de Francia, al proponer la derogacion de la facultad de testar. Aquel docto canónigo calificaba además de *paradoja* el propósito de limitar á la antigua nobleza el derecho de instituir mayorazgos, encareciendo, sobre todo, la nobleza hija del mérito, y proponiendo que el contraído en las armas, en las letras, en las ciencias, en la agricultura y hasta en el comercio, bastara para trasformar al plebeyo en noble y le diera el derecho de vincular sus bienes.

Pero con ideas y tendencias tan radicales y tan democráticas, y con opiniones tan desfavorables á los mayorazgos, los escritores del siglo xviii, si bien clamaban por la reforma de la institucion, no juzgaban necesaria ni conveniente su abolicion completa. Por los principios del derecho natural y las doctrinas de la economía política, condenaban absolutamente las vinculaciones; pero vivian en una monarquía, pensaban que esta forma de gobierno exige una nobleza, y juzgaban que sin mayorazgos, no puede ésta cumplir seguramente su destino. De lo cual inferian que la institucion vincular debia mantenerse, pero como institucion exclusivamente política y reformando las leyes y prácticas que originaban los inconvenientes específicos ántes enumerados.

Los escritores del siglo xvii se habian limitado á recomendar la prohibicion de fundar mayorazgos cortos: los del siglo xviii pidieron innovaciones más radicales; pero ninguno pensó que pudiera existir una monarquía sin nobleza, ó una nobleza sin patrimonio estable. Jovellanos fué quien, calificando esta clase de *estéril*, indicó, como de paso, la conveniencia de reducir el número de sus individuos, lo cual revela opiniones más radicales que las de sus antecesores en la discusion de esta materia, y, sin embargo, vino á parar en las mismas conclusiones que ellos (1).

Hé aquí ahora los remedios que, conforme á estas doctrinas, se recomendaban al soberano: 1.º que se prohibiera fundar nuevos mayorazgos que pasaran de la cuarta generacion del fundador: 2.º que se anularan las fundaciones otorgadas sin real licencia: 3.º que se permitiera vender bienes

(1) Entre los escritores aludidos pasaba por modelo de una buena ley sobre la materia la promulgada en Módena, por el duque Francisco III, en 1763. Disponiase en ella que sólo los nobles pudieran fundar mayorazgos; que las demás personas no pudieran instituirlos de ménos de 100.000 florines de renta; que los que se fundaran en adelante no pasaran de la cuarta generacion del fundador, y que sus bienes respondieran en todo caso de las deudas de los poseedores. (Campomanes, *Regalía de amortizacion*, c. 13.)

vinculados, cuando fuera necesario, para dotar á las hijas ó hacer donaciones *propter nuptias* á los hijos del poseedor: 4.º que las enfiteusis y arrendamientos de bienes inmuebles vinculados, otorgados sin fraude, obligaran al sucesor inmediato: 5.º que se revocara la ley 46 de Toro que declaraba vinculadas las mejoras hechas en los lugares de mayorazgo, ó se guardara por lo ménos su literal contexto: 6.º que se cumpliera la ley de D. Carlos I, que prohibía acumular los mayorazgos de gran cuantía: 7.º que se promulgara una ley semejante á la *Bula* llamada *de los Barones*, segun la cual, en los Estados pontificios, eran responsables los bienes vinculados de las deudas de sus poseedores, á ménos que éstos, ántes de contraerlas, hubiesen presentado y expuesto al público en ciertos archivos, las escrituras de fundacion de sus mayorazgos y el inventario de sus bienes (1): 8.º que se proponga fundar mayorazgos de ménos de 4.000 ducados de renta: 9.º que la dotacion de los nuevos mayorazgos consistiera principalmente en censos, juros, acciones de Banco ú otros valores semejantes, permitiéndose vincular en bienes raíces la cuarta parte de la respectiva dotacion: 10.º que se abonaran al poseedor ó á sus herederos las mejoras que hiciera en los bienes vinculados, cuando consistiesen en plantíos, donde no los hubiera, en nuevos riegos y en nuevos edificios: 11.º que cuando se pidiera real licencia para imponer censos sobre algun mayorazgo, se concediera en su lugar, la de vender alguna de sus fincas, con la condicion de emplar el sobrante que quedare, después de cumplido el objeto de la enajenacion, en réditos á favor del mismo vínculo: 12.º que concluyeran los mayorazgos cuando se extinguieran los linajes llamados á disfrutarlos, aunque en la fundacion se hubieran hecho sustituciones perpétuas á favor de establecimientos ó personas extrañas, en cuyo caso se venderian los bienes para subrogarlos en rentas del Estado ó censos y entregarlos en esta forma á los extraños llamados á disfrutarlos, con la calidad de vínculo perpétuo (2): 13.º que derogadas las leyes que permitian vincular los bienes raíces, sólo en casos muy excepcionales y por acciones muy gloriosas, concediera el rey privilegios de

(1) Castro, *Disc. crit.*, t. 3, p. 212.

La *Bula de los Barones*, expedida por Clemente VIII en 1595, declaró responsables pura y simplemente los bienes vinculados de las deudas de sus poseedores; mas como esto equivaliese á declararlos alienables indirectamente, Urbano VIII ordenó en 1623, que no tuviera efecto dicha Bula, sino en el caso de que por no presentarse al público las fundaciones é inventarios, se pudiera sospechar que el vinculista habia abusado de la buena fé del acreedor.

(2) Floridablanca, *Instruccion de Estado*.

nobleza y la facultad de establecer nuevos mayorazgos (1). Esta solución, recomendada por Jovellanos, fué la más radical de cuantas se propusieron en aquel siglo, y, sin embargo, no sólo respetaba todas las vinculaciones antiguas, sino que ni siquiera impedía absolutamente el establecimiento de otras nuevas.

II.

PROGRESOS DE LA LEGISLACION DESVINCULADORA.

La fundada opinion de tantos ilustres repúblicos fué al fin escuchada y en parte atendida por el gobierno. Ya en la *Instruccion de intendentes* de 1749 habia quebrantado Fernando VI el rigor del sistema vincular, permitiendo vender á censo y sólo con licencia del juez, las casas ruinosas de mayorazgo. Pero Carlos III fué quien dió mayor impulso á la desvinculación, movido por las instancias de sus sábios y celosos ministros. Entre éstos se discutió maduramente en 1784 sobre la necesidad de dictar alguna providencia que impidiese la acumulacion de los grandes mayorazgos, y aunque sus deliberaciones no produjeron al pronto ninguna resolución definitiva, nombró el rey una *Junta de Estado* que propusiera los remedios convenientes para contener el exceso de las vinculaciones, dictando entre tanto algunas providencias interinas que, si no reformaron todo lo que era menester, la legislación vincular, corrigieron algunos de sus vicios. Aquel monarca no aspiró tampoco á la completa extincion de los mayorazgos, sino á reducir su número y á remediar algunos de sus inconvenientes por los medios lentos y suaves que en tales casos aconsejan la experiencia y el arte del gobierno.

Notábase en la corte grande escasez de habitaciones; y atribuyéndola el rey al estado de abandono y de ruina en que se hallaban muchas casas vinculadas, porque sus dueños no las reedificaban ó reparaban, á fin de que no quedase vinculado el capital que en ellas invirtieran, nombró una junta de ministros del Consejo que propusiera el remedio oportuno. El resultado de sus deliberaciones fué la real provision de 20 de Octubre de 1788, por la cual se dispuso que en los solares ó casas bajas de mayorazgo, patronato ó capellanía, pudieran los poseedores ejecutar las nuevas obras que el arquitecto mayor de la villa juzgara necesarias, sin quedar vinculado el capital gastado en ellas, sino solamente las rentas que ántes de

(1) Jovellanos, *Informe sobre la ley agraria*, n. 205 y sig.

la ejecucion de las obras, produjeran las fincas; y que cuando los poseedores no ejecutaran por sí, dentro de un año, las edificaciones ó reparos indispensables, se les obligara á dar el edificio á censo redimible á cualquiera que quisiese adquirirlo, con la obligacion de hacer aquellas obras, sin acudir para nada á la Cámara, segun estaba mandado por punto general, para toda enajenacion de bienes vinculados. Esta disposicion importante, limitada primero á Madrid, se extendió después á todo el reino, por la real cédula de 14 de Mayo de 1789. Así quedó derogada en parte muy sustancial, la ley 46 de Toro, tan censurada por jurisconsultos y economistas, cesando con ella una de las causas que más contribuian al deterioro de la propiedad urbana vinculada. Tratóse luego de que participara de este beneficio la propiedad agrícola, cuya escasa produccion se atribuia tambien al interés de los vinculistas en no mejorarla á su costa. Se encargó al Consejo que informara sobre la conveniencia de dictar una providencia análoga respecto á las tierras abandonadas ó eriales, susceptibles de nuevos plantíos ó riegos; pero aunque se instruyó con este motivo un voluminoso expediente, no llegó el rey á dictar en él resolucion alguna.

En el mismo tiempo se adoptaron otras varias disposiciones para facilitar la division de los mayorazgos, á la sazón acumulados, entre los hijos de sus actuales poseedores. Pero la más importante que entónces se dictó, fué la de 28 de Abril de 1789, reinando ya Cárlos IV, aunque discutida y laboriosamente preparada bajo el reinado anterior. «Teniendo presente el soberano (eran sus palabras) los males que dimanaban de la facilidad que habia habido en vincular perpétuamente toda clase de bienes, abusando de la permission de las leyes y fomentando la ociosidad y soberbia de los poseedores de pequeños vínculos ó patronatos y de sus hijos y parientes, y privando de muchos brazos al ejército, marina, agricultura, comercio, artes y oficios» (1), adoptó varias providencias de las que con tanto empeño habian recomendado Campomanes, Floridablanca, Castro y otros escritores y repúblicos. Ordenó, pues, que no se fundaran nuevos mayorazgos, ni se prohibiera directa ni indirectamente la enajenacion de bienes raices, sin prévia real licencia ó consulta, de la Cámara, la cual no se concederia sino cuando el mayorazgo rentara por lo ménos 3.000 ducados, y la familia del fundador pudiera por sus circunstancias, aspirar á esta distincion, para emplearse en la carrera militar ó política, con utilidad del Estado: que las dotaciones perpétuas de los nuevos mayorazgos se si-

(1) L. 12, t. 17, lib. 10, Nov. Rec.

tuaran principalmente sobre efectos de rédito fijo, como censos, juros, efectos de villa y acciones de Banco, de modo que quedara libre la circulacion de los bienes raices, para evitar su pérdida ó deterioro; y que no se permitiera vincular estos bienes, sino en alguna parte muy necesaria ó por razones de evidente utilidad pública (1).

Mientras que se publicaban estos importantes decretos, la Junta de Estado y los Consejeros preparaban reformas más radicales. El mismo dia en que se promulgó el referido últimamente, mandó Cárlos IV pasar á aquella Junta la *Instruccion de Estado* de Floridablanca, de que ántes hice mérito, para que con arreglo á ella, propusiera las variaciones convenientes en la legislacion. Formóse expediente, en el cual habiendo sido oidas las Audiencias, tres de ellas, los fiscales de otra y la Sala de Alcaldes de Casa y Côte, opinaron por la prohibicion absoluta de instituir nuevos mayorazgos. Entre tanto se presentaron al gobierno diversos proyectos para reducir las vinculaciones existentes. Uno de ellos, que consistia en facultar á los vinculistas para dar en enfiteusis sus casas y tierras de labor, sin real licencia, se pasó al Consejo, por orden del rey, á fin que adoptándolo, propusiera el modo de evitar los abusos y fraudes en perjuicio de los sucesores futuros, que pudiera ocasionar su ejecucion. Otro de los proyectos no mal recibidos por el gobierno, proponia se facultara á los vinculistas para enajenar sus fincas, cuyo valor no excediera de 1.000 ducados, con licencia del juez ordinario únicamente y sin acudir al Consejo, como se hacia ya respecto á las casas ruinosas, en virtud de la ley citada de Cárlos III.

Pero ni la Junta, ni el Consejo, ni el gobierno adoptaron ninguna disposicion sobre los mayorazgos existentes, hasta que consideraciones de orden ménos elevado que las que habian prevalecido hasta entónces, vinieron á influir en su ánimo. Segun la opinion de muchos, bastaba por el momento, para contener los males de la institucion, el real decreto de 28 de Abril de 1789, que respetando todos los derechos existentes, reducía los mayorazgos futuros á lo que debian ser en una bien ordenada monarquía (2). Para promover la desmembracion y la extincion completa quizás, de los vínculos actuales, con menoscabo de los derechos adquiridos, no bastaba entonces la consideracion de sus daños políticos y de sus perjuicios económicos: era menester que se agregara la de la penuria del Tesoro y la necesidad de arbitrar recursos con que auxiliarlo, para que los

(1) L. 12, t. 17, lib. 10, Nov. Rec.

(2) L. 13, *ibid.*

hombres influyentes á sazón en el Estado, intentaran remedios más radicales y se atrevieran á buscarlos en la inmediata desvinculacion de una parte de los bienes de mayorazgo.

Por aquellos motivos y con esta engañosa esperanza, dictó Carlos IV el real decreto de 1795, gravando con un impuesto de 15 por 100 todos los mayorazgos instituidos desde ántes de 1789, siempre que sus poseedores vivieran en esta fecha, y los que despues de ella se hubieren instituido ó en adelante se instituyeren, exceptuándose tan sólo de este gravámen, los fondos que se vincularan, imponiéndolos en la real Hacienda. El producto de este nuevo impuesto fué destinado á aumentar el fondo de amortizacion de los vales reales (1). Así quedaron gravados no solamente los vínculos instituidos ántes de la promulgacion de la nueva ley, por fundadores que vivian á la fecha de ella, lo cual podia ya ofrecer algunos inconvenientes, sino tambien los instituidos mucho ántes, aunque los fundadores hubieran fallecido al verificarse aquella promulgacion y los poseedores actuales hubieran sucedido en ellos sin tal gravámen. Los vínculos que se hallaran en cualquiera de estos casos, no habian de pasar á los sucesores inmediatos, sin que se verificara préviamente el pago del impuesto.

Cuando no mediaban los intereses del fisco, solia, sin embargo, mostrarse el legislador más considerado con los derechos existentes. Habiéndose dudado si la prohibicion de fundar mayorazgos, sin ciertos requisitos, contenida en el real decreto de 1789, alcanzaba á los instituidos ántes de esta fecha por fundadores aún vivos, y cuyas fundaciones no habian producido todavía ningun efecto legal, se resolvió que aquel decreto no era aplicable á tales vínculos. Resolucion benévola en extremo, aunque equitativa en el fondo; porque si bien los sucesores de estos mayorazgos no habian adquirido ningun derecho verdadero, podia haber algunos que habiendo contraído matrimonio ú otras obligaciones con la esperanza fundada de suceder en ellos, sufrieran perjuicios graves, por no tener ya efecto las fundaciones. Pero como el decreto de 1795 se dictó más bien con una mira fiscal que política, no solamente se prescindió en él de estas consideraciones, sino que se quebrantó la regla de justicia, que prohibe retrotraer el efecto de las leyes, con mengua de los derechos adquiridos al amparo de ellas.

No hubieron de ser cuantiosos los productos de este nuevo impuesto, y creciendo más cada dia la necesidad de allegar nuevos recursos, abrió el

(1) L. 14, t. 17, lib. 10, Nov. Rec.

gobierno un empréstito voluntario y patriótico, que no devengaría interés, y habia de ser reembolsado en el término de diez años. Y como los capitalistas no acudiesen pronto á este llamamiento, se ideó estimularlos, combinando esta operacion con la desamortizacion de los bienes vinculados. Por real decreto de 19 de Setiembre de 1798, se autorizó á los poseedores de mayorazgos y patronatos de legos para enajenar los bienes de sus dotaciones, con tal de que invirtieran el producto de estas ventas en el empréstito patriótico. Los prestamistas recibirían por sus capitales, unas cédulas de igual valor, que habian de ser reintegradas por sorteo, en periodos fijos. Las enajenaciones habian de verificarse con intervencion judicial y en subasta pública. A medida que las cédulas fueran reintegrándose, los prestamistas habian de imponer su importe en la Caja de Amortizacion, á rédito de 3 por 100; y si fallecieran ántes del total reintegro, percibirían sus sucesores desde luego el mismo rédito de todo el capital no reembolsado. Para mayor estímulo de los vinculistas, se declararon exentas estas enajenaciones del derecho de alcabala. Así quedó permitida la desvinculacion para todos los que renunciaran por cierto tiempo, al producto de sus fincas, con la esperanza de utilizarlo más adelante; pero como no fuese grande la seguridad del reembolso ni el sacrificio poco costoso, y era de temer que muchos no aceptaran aquel método de enajenacion, el decreto proveyó tambien á esta eventualidad, permitiendo vender bienes vinculados á los que no tomaran parte en el empréstito, siempre que impusieran su precio en la real Hacienda, á rédito de 3 por 100 (1).

Carlos IV adoptó, como se ve, esta trascendental innovacion por un interés más bien fiscal que político, pero no sin tratar de justificarlo principalmente con razones de Estado. Su objeto era, segun decia el preámbulo del decreto, «hacer libre toda la riqueza amortizada hasta entonces, si era »posible, conservando íntegras no obstante las vinculaciones, y con ellas, »el lustre de las familias á quienes pertenecian.» Mas esto no era posible sin perjudicar derechos de tercero, y sin llevar la reforma mucho más adelante de lo que habian imaginado los más atrevidos políticos. Fué esta resolucion de grave trascendencia, quizá no tanto por el efecto que produjera en el estado de la propiedad del país, la cual no hubo de experimentar de hecho una alteracion muy sensible, cuanto por el precedente que estableció, acerca de las facultades del soberano para cambiarlo y modificarlo.

Tampoco hubieron de ser muy cuantiosos los recursos que obtuviera el

(1) L. 16, t. 17, lib. 10, Nov. Rec.

Tesoro de aquella combinada operacion, cuando al año siguiente tuvo que ofrecer aún mayores estímulos á la enajenacion y conversion en rentas públicas, de los bienes vinculados. Hasta entonces los vinculistas que vendieran sus fincas, debian entregar su producto al Tesoro, para recibir, bien desde luego, ó bien cuando venciera el plazo señalado al reintegro del empréstito patriótico, el rédito anual de 3 por 100; mas Carlos IV, por otro decreto de 1799 ordenó que los poseedores que enajenaran sus fincas para prestar su precio á la real Hacienda, recibieran al contado la octava parte del mismo, como premio del anticipo, sin perjuicio de reconocerles un crédito por todo el importe de la enajenacion (1), lo cual equivalia á un aumento de interés considerable. Por este mismo tiempo se mandaron vender las fincas de los establecimientos de beneficencia y obras pías; y para asegurar más su venta, se autorizó en 1802, á los poseedores de mayorazgos y otros vínculos, para enajenar las fincas de sus dotaciones situadas en pueblos distantes de sus respectivos domicilios y subrogarlas con otras análogas, procedentes de los establecimientos piadosos, las cuales quedarían afectas á las vinculaciones, depositándose en todo caso el producto de tales ventas en la Caja de Amortizacion, mientras que no se invirtiera en otras fincas (2).

A pesar de todas estas facilidades, todavía no hubo de marchar la desvinculacion tan rápidamente como se deseaba, y para darle mayor impulso, siempre en interés del Tesoro, Carlos IV en 1805, autorizó á los poseedores de mayorazgos, y de cualesquiera fundaciones en que se sucediese por el órden vincular de España, para comprar las fincas de sus propias dotaciones por el precio de su tasacion, sin subasta y con opcion al premio de la octava parte del producto, siempre que éste se impusiera con igual rebaja en la Caja de Consolidacion, con arreglo á las disposiciones vigentes. Para evitar los fraudes, que con el uso de semejante facultad, pudieran cometerse, se mandó que hicieran las tasaciones peritos nombrados por el poseedor y el sucesor inmediato ó un curador judicial, en su defecto, y con citacion del administrador de la real Caja de Consolidacion y del síndico, cuando el sucesor estuviera incapacitado para prestar su consentimiento, y que el rédito del capital imponible en la Caja no bajara en ningun caso del importe del producto líquido de los bienes vendidos. En cambio los

(1) L. 17, t. 17, lib. 10, Nov. Rec.

(2) L. 18; t. 17, *ibid.*

poseedores obtuvieron un plazo de cinco años para imponer en la Caja de Consolidacion el precio de sus propios bienes comprados (1).

Por consecuencia de estas leyes se restituyeron al comercio muchos bienes vinculados hasta entonces, creciendo en igual proporcion la deuda pública. Vinculistas disipadores ó agobiados de deudas, convirtieron en vales reales y en metálico sus propiedades, quedando despues arruinados, tan pronto como dejaron de satisfacerse los intereses de aquella deuda y ellos consumieron los pocos reales, importe de la octava parte del precio que sirvió de cebo á su codicia. Sin embargo, subsistió la mayor parte de los mayorazgos; porque como el público no tuviese sobrada confianza en el crédito del Estado, y los vinculistas que aprovecharon la ocasion de enajenar, lo hicieran más con el propósito de remediar urgencias pasajeras, que con el de cambiar la índole de sus patrimonios, fueron muchos los que vendieron y pocos los que liberaron todos sus inmuebles. De lo cual resultó que cuando las cédulas del empréstito patriótico y los vales reales dejaron de producir renta, perdieron parte de la suya muchos vínculos; y así, sin disminuirse el número de éstos, fué mucho mayor que ántes era el de los cortos. De modo que siendo estos mayorazgos los más perjudiciales y aspirando el gobierno á reducir su número, ya que no á extirparlos por completo, las providencias que dictó, por lo que tenian de fiscales, produjeron precisamente el efecto contrario.

Además, el propósito de Cárlos IV era irrealizable. Convertir en inscripciones de la deuda pública todo el capital territorial vinculado, obtener por este medio el Tesoro una suma considerable al módico interés del 5 por 100, y conservar las vinculaciones necesarias para mantener el lustre de la nobleza, sin los inconvenientes económicos de la amortizacion, eran fines laudabilísimos, pero inconciliables. No era posible obligar á todos los vinculistas á cambiar sus fincas por papel, sin cometer un despojo inicuo. Dejándolo á su arbitrio y haciendo todavía los más de ellos punto de honor el conservar y transmitir á sus hijos las propiedades heredadas de sus mayores, eran pocos los que voluntariamente renunciaban á ellas, aún cuando en realidad no perdieran en el cambio. Pero su repugnancia á admitirlo debía de ser más tenaz, considerando el escaso crédito del gobierno, la insuficiencia de sus recursos y la inseguridad del pago de los réditos.

Y aunque el proyecto fuera realizable, aunque las rentas públicas fue-

(1) L. 20, t. 17, lib. 10, Nov. Rec.

ran tan seguras como las territoriales, todavía no era conforme con el fin y naturaleza de los mayorazgos su dotación exclusiva en títulos de aquellas rentas. Si los mayorazgos debían formar el patrimonio de la nobleza, era porque se reconocía la necesidad de una clase independiente, que comunicándose á la vez con el trono y con el pueblo, sirviera de vínculo entre ambos, y que teniendo poder propio y empleándolo en servicio de la sociedad y del monarca, su representante, añadiera el peso de su autoridad á la que recibiera de las leyes, cuando, en uso de ellas, moderara los ímpetus del pueblo ó hiciera sentir su influjo en los consejos de la Corona. Esta clase no podía ser independiente sin ser rica, y la riqueza no podía darle tampoco los otros atributos, si había de depender del arbitrio del rey ó del capricho del pueblo. Y como si hubiera estado á merced del gobierno el pago de las rentas de todos los mayorazgos, habría sido él quien alimentara á la nobleza, es evidente que esta clase no hubiera tenido la independencia necesaria para el buen desempeño de su misión política.

Si esta consideración no hubiera sido bastante decisiva, porque al fin la Deuda pública es en las naciones modernas, una obligación sagrada, cuyo pago no puede suspenderse sin daño tan grave para el Estado, como para sus acreedores, había otra de mayor efecto en aquella época. El poder de la riqueza proviene en parte de los medios de influencia que su empleo y consumo proporcione, y en parte de su propia forma. Bajo el primero de estos aspectos cualquier género de riqueza era indiferente en la nobleza; mas no bajo el segundo. El dueño de grandes heredades, que las labra por sí ó las arrienda, emplea operarios, paga administradores, recoge y vende frutos, exige, perdona ó aplaza deudas, y renueva, termina, baja ó aumenta arrendamientos, ejerce, por lo ménos en determinados lugares, una influencia indisputable, á que no puede aspirar el que vive de la renta que le paga cada año el Tesoro y no tiene con el pueblo más contacto que el necesario para gastarla en el lugar de su domicilio. Si, pues, la riqueza no servía solamente á los nobles para vivir con ella, sino también, y muy principalmente, como instrumento necesario de influencia y poder, debían poseerla en la forma más adecuada para este objeto, la cual no revestían ciertamente los títulos de la Deuda pública.

Si se quería, pues, conservar una nobleza rica é independiente, era necesario que su riqueza fuera también independiente y sólida. Seguro es que con una nobleza exclusivamente rentista del Estado, habría desaparecido la aristocracia en todas partes, luego que los nobles y ricos-hombres perdieron el derecho de desnaturalizarse, de levantar ejércitos, de hacer la guer-

ra al rey, de poseer castillos y de mantener su preponderancia con la fuerza. Verdad es que muchos caballeros en la Edad Media tenían por único patrimonio *acostamientos* de rentas públicas, otorgados por la Corona, y que no pocos sufrían con el extrañamiento, la pena de confiscación; pero también eran dueños de su espada, y al frente de sus vasallos, que constituían el principal elemento de su poder, ó recuperaban los bienes perdidos, ó al servicio de otros monarcas, ganaban nuevos Estados. Pero luego que cambió el mecanismo de la sociedad, y se centralizó el poder, y perdieron los nobles aquellos exorbitantes privilegios, no les quedaron más medios de influencia que su riqueza, la autoridad de sus nombres y el poder de sus tradiciones. Si su patrimonio no hubiera sido estable é independiente, la aristocracia no habría sido en la sociedad un elemento importante. Así la decadencia de la aristocracia española data precisamente desde el tiempo en que los monarcas empezaron á examinar los títulos de sus propiedades para incorporarlas á la Corona; unas por suponerse que habían sido enajenadas contra la voluntad del rey, y otras por haber sido adquiridas en contravención á las leyes, que prohibían enajenarlas, por más que nunca hubieran sido fielmente guardadas. Si los reyes hubieran proseguido su obra con más perseverancia y rigor, quizás la aristocracia habría desaparecido mucho ántes por completo.

CAPÍTULO IV.

Fin de la propiedad feudal y de la vinculada.

I.

ABOLICION DE LOS SEÑORÍOS.

Pocas reliquias quedaban ya del feudalismo en España al comenzar el presente siglo. A la vez que la propiedad había ido perdiendo sus caracteres feudales, había ido menguando la participación de la nobleza en el gobierno del Estado y en el uso y disfrute de las cosas públicas. Con la reversión á la corona de lugares, rentas y oficios enajenados, se habían extinguido muchos señoríos y dominios feudales. Quedaban ciertamente al empezar nuestro siglo algunos señores de jurisdicción y territorio, pero

con facultades tan limitadas, que apenas eran sombra de lo que fueron. La opinion pública, más opuesta cada día á aquella institucion, prestaba siempre eficaz apoyo á la corona para recobrar sus bienes y derechos perdidos. Continuada esta obra laboriosa con vivísimo empeño en el último siglo, se recordaron y desenterraron las olvidadas leyes del Fuero Viejo, de las Partidas, de las Córtes y de los códigos y fueros municipales que prohibian enajenar las cosas del Estado, revocaban las enajenaciones gratuitas sin causa legítima y mandaban redimir los bienes vendidos por precio. En Castilla, merced á los reyes que desde Alfonso XI, revocaron pingües donaciones, rescatando multitud de jurisdicciones y lugares, tanto por sus providencias en vida como por sus testamentos, habian desaparecido en aquel tiempo infinitos señoríos. El mismo efecto habian producido en Aragon y Cataluña los decretos de sus reyes desde D. Alfonso II, en las Córtes de Monzon de 1289. Felipe V, Fernando VI y Carlos III, promoviendo aún con mayor empeño los juicios de reversion, lograron reintegrar á la corona de una buena parte de sus rentas y de su autoridad enajenadas. Bajo sus reinados se reconoció y acreditó como principio fundamental de derecho público, que « todos los efectos del Erario vendidos » por precio, pueden retraerse por la real Hacienda, devolviendo el precio « al comprador » (1), por cuanto estas ventas llevaban consigo la condicion tácita de quedar sujetas á un retracto semejante al de abolengo ó al de comuneros, y de mayor eficacia todavía que estos, por ser tan favorable á la causa pública; y aún se invocó el dominio eminente del Estado y la utilidad comun para justificar estas reversiones. Lo que no defendió nadie, sin embargo, fué que pudieran ser despojados los poseedores sin la indemnizacion correspondiente. El conde de Campomanes en el expediente del Consejo sobre incorporacion de los bienes de la corona enajenados, decia que los obtenidos de ella por donacion ó merced remuneratoria, no estaban sujetos al retracto por recompra, y que debian respetarse estas donaciones, á ménos que estuvieran comprendidas entre las revocadas expresamente por D. Juan II, D. Enrique IV ó los Reyes Católicos, en las Córtes de Valladolid de 1442, de Santa María de Nieva de 1475 y de Toledo de 1480; ó á no ser que lo enajenado fuera alguna isla, puerto marítimo ó pueblo fronterizo, y se indemnizara previamente al donatario de su valor actual;

(1) Campomanes en el Memorial ajustado del expediente promovido por el marqués de la Corona y D. J. Albalá, fiscales del Consejo de Hacienda, sobre reintegrarse la corona de los bienes enajenados de ella.

pero que las ventas verificadas de cualesquiera derechos propios del Estado, podian revocarse, siempre que se anticipara el precio de su egresion, cualquiera que fuese su valor presente.

Con estas doctrinas é invocando leyes antiguas y numerosos precedentes, lograron los primeros reyes de la casa de Borbon acabar con muchos señoríos y propiedades feudales; pero aún quedaban reliquias de ellos, que subsistieron, hasta que con la revolucion de 1808, se inauguró en España la era de las reformas políticas. La opinion de los españoles más ilustrados reclamaba sin duda la abolicion de los señoríos. Trataron de ella las Córtes en 1811 á excitacion del diputado Lloret, que propuso «se reintegraran á la corona todas las jurisdicciones, así civiles como criminales, sin perjuicio del competente reintegro ó compensacion, á los que las hubiesen adquirido por contrato oneroso ó causa remuneratoria» (1). Aspirando otros diputados á más radicales reformas, propusieron se añadiese «á la incorporacion de señoríos y jurisdicciones, la de posesiones, fincas y todo cuanto se hubiese enajenado ó donado, reservándose á los poseedores el reintegro á que tuviesen derecho» (2); y que «se desterrara del suelo español y de la vista del público el feudalismo visible de horcas, argollas y otros signos tiránicos é insultantes á la humanidad, que tenia erigido el sistema feudal en muchos cotos y pueblos...» (3). En el curso de la discusion se modificaron estas proposiciones diferentes y de ellas resultó la ley de 6 de Agosto de 1811, que procuró conciliar las pretensiones de los que deseaban acabar de un golpe con los señoríos jurisdiccionales y los solariegos, con las de aquellos que sólo aspiraban á abolir la jurisdiccion señorial, mediante la indemnizacion correspondiente.

Quedaron por esta ley incorporados á la nacion todos los señoríos jurisdiccionales, y abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, así como las prestaciones reales y personales que debian su origen á título jurisdiccional, excepto las que procedieran de contrato libre. Declaráronse al mismo tiempo propiedades particulares los señoríos territoriales y solariegos, si no eran de los que por su naturaleza debian incorporarse á la nacion, ni tampoco de aquellos en que no se habian cumplido las condiciones de su establecimiento, segun resultaran de los títulos. Tambien quedaron entonces abolidos los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos de origen

(1) *Diario de las Córtes*, t. 4, p. 426.

(2) *Diario, etc.*, t. 6, p. 145. Proposicion del diputado D. Manuel García Herreros.

(3) Discurso del Sr. Alonso y Lopez, diputado por Galicia.

señorial, como los de caza y pesca, hornos, molinos y aprovechamientos de aguas y montes, todo lo cual habia de quedar al libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho comun, pero no sin la indemnizacion correspondiente, cuando tales derechos hubieran sido adquiridos por título oneroso, ó por recompensa de grandes servicios.

Esta ley, aunque hubiera sido interpretada en el sentido más favorable á los señores, traspasó evidentemente los límites de la justicia. No podía en verdad censurarse la inmediata incorporacion á la corona de todas las jurisdicciones señoriales, mas no puede juzgarse de la misma manera la abolicion de las prestaciones de origen jurisdiccional, no estipuladas por contrato. Estas prestaciones constituian derechos adquiridos al amparo de las leyes y con la sancion del tiempo: representaban muchas de ellas, eminentes servicios hechos al Estado, y no pocas procedian de contratos libres, cuyos títulos habian consumido los siglos. Tal origen tenian las multas y penas de cámara, que percibian los señores en las causas y pleitos, que sustanciaban sus alcaldes, los portazgos y alcabalas que les pagaban sus vasallos y las derramas de ménos de 3.000 maravedis que podian imponerles. Y aunque una parte de estos ingresos debiera invertirse en el salario de los jueces y otros funcionarios públicos, de cuyo pago debian quedar exentos los señores, constituian el sobrante una renta más ó ménos cuantiosa, una propiedad que por lo ménos tenia á su favor el título respetable de la prescripcion, y no podia ser confiscada con justicia, sin indemnizacion prévia.

Hallábanse en el mismo caso los servicios personales de que fueron eximidos los vasallos, y cuya mayor parte traia origen de concesiones de tierras hechas antiguamente por los señores. Si esta especie de servidumbre no era ya compatible con la civilizacion moderna, tampoco permitia la justicia privar á los señores de su derecho, sin ninguna compensacion. Así en Inglaterra, donde existian muchos vasallos gravados con cargas personales mucho más onerosas, no fueron éstas remitidas graciosamente, pero se facilitó su conmutacion en servicios pecuniarios, á fin de conciliar el interés público con la justicia.

Ni fué ménos violenta la abolicion, sin prévio resarcimiento, de los privilegios exclusivos de caza y pesca, hornos, molinos y otros semejantes, cuando no se fundaran en títulos escritos de contrato oneroso ó en grandes servicios. En los remotos tiempos en que tales privilegios se establecieron, rara vez se cuidaba de consignarlos en escritura pública. Los señores daban tierras á sus vasallos, y como las demás de sus comarcas continuaban

en su dominio, claro es que tenían el derecho exclusivo de cazar en ellas, sin necesidad de reservárselo expresamente. Otros privilegios poseían los señores por haberlos impuesto á sus vasallos, en uso de su casi omnimoda potestad, ó por merced de los reyes, que se consignarian probablemente en escrituras públicas; ¿mas cuántas de éstas no ha devorado el tiempo? ¿Cuántas otras no omitian la causa de la merced otorgada en ellas?

Pero aún fué más injusta esta ley por las falsas interpretaciones á que dió lugar su mala redaccion, y por el espíritu revolucionario con que fué generalmente aplicada. Al pronto no se sintieron sus efectos, porque si bien los señores no fueron reintegrados en sus jurisdicciones, cuando en 1814 se anularon todos los actos de la Regencia y de las Cortes, tampoco se llevó á ejecucion la ley en todo lo demás, hasta el restablecimiento del régimen constitucional en 1820. Entónces, no sólo los señores jurisdiccionales, sino muchos de los solariegos, se vieron despojados de los frutos de su propiedad, á pretesto de que la ley de 1811 no distinguia con bastante claridad unos de otros señorios.

Introdujose asi tal confusión y variedad de prácticas en el modo de aplicarla, y se cometieron á su sombra tales desmanes, que las Cortes en 1821, juzgaron indispensable promulgar otra ley aclaratoria. Pero aquellos legisladores, no ménos apasionados que los de 1811, lejos de remediar la injusticia cometida por éstos, sólo consiguieron agravarla. La ley primera declaraba propiedades particulares los señorios solariegos: la de 1821 no atribuyó esta calidad sino á aquellos cuyos poseedores acreditaban con títulos escritos, que no eran de los incorporados á la corona, y que estaban cumplidas todas las condiciones de su establecimiento. Dispuso además esta ley, que mientras no recayera ejecutoria en los juicios que habian de entablarse, para determinar la calidad de cada señorio, se suspendiera el pago á los señores de toda renta ó censo: que aquellos cuyo dominio directo quedara subsistente despues del juicio de calificacion, no exigieran de los poseedores del dominio útil laudemio de más de 2 por 100, cualquiera que fuese el estipulado en el contrato, ni cobraran fádiga ó tanteo, ni ninguno otro derecho, cualquiera que fuese su origen; y que cesaran para siempre otras prestaciones pecuniarias, con que solian contribuir los poseedores de tierras señoriales, excepto los foros y los subforos, á ménos que trajeran origen de contratos probados, mas sin entender por tales las concordias, por cuyo medio se hubieran subrogado en las mismas prestaciones, derechos feudales anteriores.

Si injusta era, pues, la ley de 1811, lo fué más todavía la aclaratoria

de 1821. Despojar de sus derechos á todos los propietarios señoriales que no presentaran sus títulos, cuando era sabido que de posesiones tan antiguas, pocos podían conservarlos; sujetar á las eventualidades de un juicio ordinario la subsistencia de un derecho consagrado por la prescripción; abolir hasta las prestaciones reales fundadas en contratos, salvo que se probara no ser el objeto de éstos transigir cuestiones sobre derechos feudales antiguos, y todo sin compensación alguna para los perjudicados, más bien que proceder en justicia, parecía acto de venganza contra la tiranía feudal ejercida durante la Edad Media. En vano protestaron contra esta ley cuando se discutía, los diputados Martínez de la Rosa, Toreno, Garelly y otros ilustres repúblicos: la mayoría de las Cortes aspiraba á interesar por este medio á las poblaciones agrícolas en el afianzamiento del régimen constitucional: el diputado Calatrava hubo de procurar los votos de los americanos, que habrían podido hacer fracasar el proyecto, ofreciéndoles en cambio, su apoyo en las cuestiones de especial interés para las provincias ultramarinas, y así obtuvieron los autores de la ley una votación favorable. El monarca le rehusó al pronto su sanción, mas tuvo al fin que dársela bajo la presión de las circunstancias y las amenazas de las turbas dispuestas á la rebelión.

Aunque condenados á una misma suerte los señores jurisdiccionales y los solariegos, no llegaron por entonces á padecerla, puesto que la nueva ley y la de 1811 quedaron derogadas á los pocos meses, con la abolición del régimen constitucional. Unos y otros disfrutaron todavía durante algún tiempo los bienes de que no llegaron á ser desposeídos, á pesar de aquellas leyes; pero restablecidas éstas después de una nueva revolución, en 2 de Febrero de 1837, viéronse otra vez condenados al mismo despojo. Debo añadir, sin embargo, que reconociendo entonces las Cortes la injusticia de algunas de las disposiciones restablecidas, procuraron remediarla. Tal fué el objeto de la ley de 26 de Agosto de 1837, inspirada por sentimientos ménos revolucionarios que la de 1821, aunque insuficiente para corregir todos sus vicios. Declaróse en ella no ser necesaria la presentación de títulos para que los señores territoriales y solariegos continuaran disfrutando sus bienes, en los lugares donde ellos ó sus causantes no hubieran ejercido jurisdicción, y también los censos y prédios comprendidos en pueblos sujetos en algún tiempo á ella, siempre que les hubieran pertenecido como propiedad particular, sin ocurrir sobre esto duda ni contradicción alguna: que tampoco sería necesaria la presentación de tales títulos, cuando los señores hubieran obtenido una ejecutoria favorable en juicio de re-

version; y que los señores que en el término de dos meses presentaran sus títulos, continuaran disfrutando durante el juicio, las prestaciones y rentas á que segun los mismos, tuvieran derecho.

Mas estas disposiciones equitativas y reparadoras no remediaban, sin embargo, las dos más graves injusticias de la ley, que eran: 1.^a la expropiacion de derechos de un valor estimable, sancionados por el tiempo y la costumbre, sin indemnizacion prévia: y 2.^a hacer depender la subsistencia de otros derechos, cuyo origen pudo no ser jurisdiccional, de la contingencia de haberse ó no conservado los títulos de su adquisicion, como si la prescripcion de más de cien años no fuera título bastante para justificar cualquiera clase de dominio. Así por la nueva ley, quedaron definitivamente abolidos, como ya ántes lo estaban, todos los tributos ó prestaciones que denotaban señorío ó vasallaje, cualquiera que fuese su origen, y se mandaron secuestrar los bienes cuyos títulos deberian presentarse, cuando los señores no cumplieran esta formalidad en el plazo brevísimo de dos meses. Tal fin tuvieron en España las últimas propiedades feudales que habian resistido á los embates del tiempo, sin confundirse con los bienes alodiales, ni pasar por reversiones, al dominio del fisco. Desaparecieron, como en Francia, al soplo de la revolucion y con la misma falta de respeto que allí á los intereses creados y á los derechos adquiridos, aunque con menor efecto en la economía social y en la situacion política del reino.

II.

LEYES DE DESVINCULACION.

Al lado de los señoríos se deshacian los mayorazgos, pero no tan rápidamente como se arraigaban propagaban las doctrinas contrarias á ellos. Insistiendo el gobierno de Cárlos IV en su propósito de estimular y favorecer la desvinculacion, mandó al Consejo de Castilla formar vários expedientes sobre la manera de realizarla. Tratóse en ellos ya de abolir los mayorazgos cortos, ya de fijar un límite á la dotacion de los grandes y ya de reformar las malas leyes y viciosas prácticas que tanto habian contribuido al exceso de unos y de otros. Era tan general la opinion contraria á las vinculaciones, que la Sala de alcaldes de casa y córte, corporacion eminentemente conservadora y tradicionalista, informando en uno de estos expedientes, propuso en 1807, entre otras reformas, la prohibicion absoluta de fundar nuevos vinculos.

Pero ántes de acordarse resolucíon alguna, ocurrió el levantamiento de 1808 y con él un breve, pero fecundo período de trascendentales innovaciones, en el cual se extendieron más y se afirmaron las ideas favorables á la libertad del dominio. Diéronse entonces á conocer más todavía las doctrinas económicas de la escuela, que resolviendo todas las cuestiones sociales por el criterio de la libertad, habia adoptado por lema el célebre *laissez faire, laissez passer*; y armados con este principio y con las doctrinas y los ejemplos de la revolucion francesa, folletos y periódicos combatieron enérgica y libremente la amortizacíon de todo género de propiedad. Así los atrevidos reformadores de 1812, aunque encerrados en el estrecho recinto de Cádiz y bajo el fuego de las baterías enemigas, pusieron en tela de juicio todas nuestras antiguas instituciones, con la intencíon patriótica de demostrar sus vicios y preparar los oportunos remedios.

Las Córtes extraordinarias de aquella época, cuya mayoría profesaba candorosamente estas doctrinas políticas, no podían olvidarse de la necesidad de extirpar con mano vigorosa la plaga de la amortizacíon; pero como hubiese también en ellas una minoría poderosa, defensora acérrima de las instituciones antiguas, y cualquiera reforma eficaz sobre esta materia habia de lastimar multitud de intereses, ligados entonces con la noble causa de la independencía, los nuevos legisladores procedieron en esta materia con tanta lentitud y miramiento, que no llegaron á adoptar acerca de ella ninguna resolucíon definitiva. En la sesíon de 21 de Febrero de 1812 los diputados García Herreros y Calatrava presentaron una proposicíon pidiendo se dictara una ley para la extincíon de los mayorazgos cortos, sin perjuicio de los grandes, que debían conservarse como patrimonio de la nobleza. El diputado Castelló, juzgando esta reforma insuficiente, presentó en la sesíon inmediata otra proposicíon pidiendo «se prohibiese absolutamente la institucíon de vinculaciones de tierras, y se anularan todas las hechas anteriormente, quedando las tierras comprendidas en ellas, en poder de sus legítimos poseedores y en calidad de libre disposicíon.» Mas las Córtes, deseando hacer esta reforma con el menor daño posible de ciertos derechos é individuales intereses de clase, dignos también de respeto, no aprobaron sino la primera parte de la proposicíon, y desecharon desde luego la segunda, que suprimía de un golpe todas las vinculaciones de tierras existentes, nombrando una comisíon que informara sobre el asunto.

Esta comisíon discutió detenidamente las diversas soluciones de la cuestíon vincular, consultó los trabajos hechos anteriormente por el Consejo y por otras corporaciones ó particulares, y al fin presentó un dictá-

men sensato, prudente y bien razonado. Reconociendo que produciría en su concepto, más grave daño que los mayorazgos, la inmediata y repentina supresion de todos los existentes, grandes y cortos, y que la nobleza no podia conservarse sin el auxilio de esta institucion, opinaba que lo único que debia hacerse era reformarla, corrigiendo sus vicios y defectos. Partiendo de esta base proponia la comision que quedaran extinguidos todos los mayorazgos de ménos de 5.000 ducados de renta; que se conservaran los de los grandes de España, en cuanto no excedieran de 80.000 ducados, los de los títulos de Castilla, en cuanto no pasaran de 40.000, y los de particulares, hasta la suma de 20.000; que los vinculistas pudieran sacar las dotes para sus hijas de los bienes vinculados, cuando carecieran de otros libres; y que pudieran asimismo dar en enfiteusis perpétuo las tierras vinculadas incultas, prévia informacion de utilidad. A esto nada más aspiraba entonces aquella ilustrada comision, cuyos individuos rivalizaban en celo por la causa de las reformas, y á la cual pertenecia el mismo Calatrava, adversario tan decidido de las vinculaciones.

Todavía las Córtes no quisieron dictar en materia tan grave ninguna resolucion sin oir préviamente al Consejo de Estado, que acababa de organizarse, con arreglo á la nueva Constitucion. El Consejo discutió detenidamente el asunto, y al cabo de cerca de dos años, emitió sobre él un informe digno de llamar la atencion, como muestra de la rapidez con que avanzaba el espíritu reformador. Ya se ha visto la resolucion sensata y prudente que habia prevalecido en la comision de 1812, compuesta de diputados liberales: pues hé aquí ahora lo que en 1814 pensaba el Consejo de Estado, cuyos individuos debe suponerse que pertenecian á la fraccion más sesuda y moderada del partido liberal. En su concepto no era necesaria la nobleza en una monarquía, como la de España, y por lo tanto no hacia falta tampoco ninguna clase de vinculaciones. Convenia con la comision en cuanto á distinguir entre mayorazgos grandes y cortos, para el efecto de su inmediata extincion, mas proponiendo al mismo tiempo que los poseedores de unos y de otros pudieran disponer de sus bienes entre vivos y por causa de muerte, á favor de sus hijos y descendientes. De modo que segun este proyecto no habrian durado más tiempo las vinculaciones, que el que hubieran querido sus poseedores actuales ó los futuros. Ambos dictámenes pasaron á la Regencia del reino, la cual, después de considerarlos maduramente, optó por el de la comision de las Córtes, desechando, por excesivamente radical, el del Consejo. Mas en esto llegó el término de aquel primer periodo del régimen constitucional: Fernando VII publicó su famoso de-

creto de 4 de Mayo de 1814 revocando los actos de las Cortes, y éstas pusieron fin á sus tareas, sin haber decidido la cuestion de las vinculaciones.

Si las Cortes de 1812 hubieran tenido tiempo para realizar su pensamiento sobre este asunto, que era, al parecer, el de la comision, la opinion pública habria quedado satisfecha y quizá se habria evitado la solucion revolucionaria adoptada posteriormente. Nada adelantó en la práctica, como era de esperar, esta reforma, en el periodo de gobierno absoluto, que siguió al primero constitucional, no habiendo sido el interés de ella, sino el del Fisco, el que hubo de consultarse al aumentar en 1818 á 25 por 100 el impuesto de amortizacion; pero en cambio ganó mucho favor en la opinion pública. Y como es ley de la naturaleza que las reacciones de todos géneros traspasen los limites convenientes, la desamortizacion absoluta é inmediata de todas las propiedades, sin transigir con casi ninguno de los intereses que representaban las antiguas restricciones del dominio, vino á ser como uno de los dogmas de la escuela liberal.

Así, cuando volvió á dominar esta escuela con el restablecimiento del sistema constitucional, apenas se abrieron las Cortes de 1820, empezó á sonar en ellas la cuestion de los mayorazgos. En la sesion del 11 de Julio de aquel año indicó el diputado Moreno Guerra que debían desaparecer todas las vinculaciones. El diputado Isturiz presentó en seguida una proposicion para que se declarara enajenable toda la propiedad (1). Muchos particulares acudieron á las Cortes con representaciones y proyectos en el mismo sentido, pidiendo unos la reduccion y otros la supresion completa de todos los mayorazgos, si bien no faltó tampoco quien solicitara su conservacion, y particularmente la de los cortos. Las Cortes nombraron, por último, una comision que, sin levantar mano, se ocupara en redactar un proyecto de ley sobre la materia.

Entre tanto, algunos diputados, más impacientes por apresurar la reforma de que tanto bien esperaban, presentaron otras proposiciones de ley con el fin de que se conservaran las tierras vinculadas en poder de los colonos (2). Pero la comision, compuesta de los diputados más distinguidos, entre ellos Martinez de la Rosa, Calatrava, Manescau, San Miguel, Cano

(1) *Sesiones de las Cortes de 1820*, t. 1.º, pág. 57.

(2) *Sesiones*, t. 3.º En 23 de Agosto de 1820 propuso el diputado Gonzalez Allende que los vinculistas no disfrutaran, respecto á sus tierras, los beneficios concedidos á los propietarios por los artículos 5.º y 6.º del decreto de las Cortes de 1813, ni pudieran despedir á sus arrendatarios, fuera de ciertos casos señalados, aunque concluyera el tiempo de su arrendamiento.

Mañuel y otros, apresuró entonces su trabajo y presentó su dictámen en la sesion del 3 de Setiembre. La mayoría de las Córtes propendia, como se vió después, á la supresion absoluta é inmediata de todas las vinculaciones; pero una minoría no muy escasa, segun se ve por la única votacion nominal que hubo sobre este asunto, si bien deseaba reducir los mayorazgos, no queria abolirlos por completo. Los más de la comision siguieron las opiniones radicales de la mayoría; algunos no se conformaron con ellas en puntos muy graves, que impugnaron; pero uno tan solo, el diputado Hinojosa, formuló voto particular de su dictámen.

Fundó aquella mayoría su parecer en las doctrinas radicales, ya profesadas por el Consejo de Estado en 1814. Dejando entrever que no consideraba necesaria la nobleza en la monarquía española, sostuvo que los mayorazgos no le aprovechaban, pretendiendo demostrarlo con el hecho de haber existido gloriosamente sin ellos la nobleza romana y la antigua española, y de haberse extinguido, á pesar de ellos, multitud de familias, en otro tiempo nobilísimas y poderosas.

Jovellanos habia empleado ya este argumento en su *Informe sobre la ley agraria*, sin advertir que si la primitiva nobleza de Roma y la de España no conocieron las vinculaciones, poseian grandes riquezas territoriales, estancadas en sus manos por efecto de la constitucion política de la propiedad; sin recordar tampoco que cuando la nobleza no tenia mayorazgos disfrutaba perpétuamente grandes Estados feudales y mantenía y acrecentaba su poder conquistando nuevas tierras con la punta de su espada. Siguiendo tambien la comision las doctrinas de la revolucion francesa sobre el derecho de propiedad, no se limitaba á negar al hombre la facultad de señalar á su arbitrio y perpétuamente el destino de sus bienes, sino que hasta dudaba de la justicia y de la conveniencia del derecho de testar (1).

En cuanto á los perjuicios económicos de las vinculaciones, profesaba la mayoría de la comision las doctrinas más radicales de los economistas del último siglo. A sus ojos era un mal gravísimo la acumulacion de la riqueza, y ésta y la inalienabilidad de tantas propiedades amortizadas, la causa principal de la pobreza y de la decadencia de España. De aquí inferia que no debian tolerarse los grandes mayorazgos que, acumulando y haciendo inalienable mayor suma de riqueza que los cortos, eran en su concepto, los más perjudiciales.

«La institucion de los mayorazgos, decia, pugna con los progresos de

(1) *Sesiones*, t. 4.º, pág. 306.

»la poblacion y de la agricultura, introduce la pobreza y el desaliento, fo-
»menta las semillas del mal moral, entorpece los movimientos progresivos
»de la aplicacion y de la industria, divide los miembros de la sociedad, tur-
»ba la armonía y concordia de las familias, destruye el derecho de propie-
»dad y se halla en oposicion con todos los principios de sociabilidad y de
»justicia universal y con las leyes más sábias de los gobiernos primitivos y
»con las antiguas de nuestros reinos.»

Así juzgadas las vinculaciones, y admitida además la doctrina de que las reformas no deben detenerse ante los intereses, ni aún ante los derechos que lastimen, no es de extrañar que la comision dijera en otro lugar de su informe, con más calor de imaginacion que rectitud de juicio, que el remedio «más poderoso y eficaz era arrancar de raíz el árbol productor de frutos tan amargos; destruir, arrasar hasta los cimientos ese soberbio monumento consagrado al idolo del orgullo y levantar sobre sus ruinas el de la justa é igual propiedad» (1). Lenguaje en verdad más propio de tribunales que de graves y de circunspectos legisladores; pero no enteramente ajeno al espíritu y carácter de la obra que iba á realizarse. Acabar de un golpe con una de las instituciones más profundamente arraigadas en el país, prescindiendo de intereses respetables y de derechos legitimos, era un acto revolucionario que bien merecia justificarse con discursos en estilo demagógico.

En vista de estas consideraciones propuso la comision que se declarara libre desde luego toda la propiedad vinculada: que los poseedores, cuyos sucesores inmediatos no fueran sus hijos ó descendientes, reservaran para ellos la mitad de los bienes vinculados; que se conservaran las vinculaciones existentes dotadas con juros, censos, acciones de Banco ó créditos contra el Estado, y aún pudieran fundarse otras de la misma especie en adelante, con licencia de las Cortes, y rentas de cierta cuantía; y que las manos muertas quedaran inhabilitadas para adquirir en lo sucesivo bienes raices, rentas y capitales de censo impuestos sobre ellos. De modo que por este proyecto debian cesar desde luego todas las vinculaciones y restituirse al comercio las fincas vinculadas, excepto la mitad de aquellas que debieran pasar á sucesores inmediatos, extraños ó parientes trasversales de los actuales poseedores; en cuyo caso se hallaba sin duda el número menor de los mayorazgos.

Opuso á este dictámen su voto particular D. Martin de Hinojosa, que di-

(1) *Sesiones*, t. 4.º, pág. 305.

sintió, como he dicho, de sus compañeros de comision. En su concepto, la mayoría exageraba los inconvenientes de las vinculaciones, y estimaba sus ventajas en ménos de lo justo: la abolicion completa y simultánea de todas ellas iba á lastimar graves intereses, y aún derechos muy respetables, á ocasionar conflictos, dificultades de ejecucion casi insuperables y numerosos pleitos, y á producir un general descontento, perjudicial para el afianzamiento del sistema representativo. No se oponia, sin embargo, Hinojosa á una reforma prudente de los mayorazgos, pero hecha con lentitud, por grados y de manera que corrigiendo el mal presente, se evitara su reproduccion en lo futuro, dejando al tiempo su completa extincion (1).

En la sesion del 12 de Setiembre empezó la discusion del dictámen de la mayoría. Fué amplísimo el debate sobre el artículo 1.º, que declarando libre toda la propiedad vinculada, encerraba virtualmente el principio fundamental de la ley. Los oradores de la mayoría apuraron en él todas las razones alegadas contra los mayorazgos en los dos siglos anteriores. Vargas Ponce intentó demostrar que esta institucion era perjudicial á los vinculistas, destructora de las familias y contraria á la sociedad. En el mismo sentido y apoyando el dictámen de la mayoría de la comision, hablaron Calatrava, Vadillo, D. Marcial Lopez, La Santa, Gasco, Moreno Guerra y Giraldo. Excusado es decir que todos estos oradores exageraron los beneficios de la desvinculacion, prometiéndose de ella más ventajas políticas y económicas de las que racionalmente debian esperarse y despues ha acreditado la experiencia. Al argumento de que con su proyecto iban á quedar perjudicados derechos é intereses respetables contestaban: si por tales consideraciones hubiéramos de detenernos, deberiamos renunciar á toda reforma, pues cualquiera que se intente habrá de lastimarlos. Su propósito era extirpar de raiz las vinculaciones, cualesquiera que fuesen los intereses ó los derechos que quedaran lastimados.

El sistema de la desvinculacion sucesiva, con la subsistencia de algunos pocos grandes mayorazgos, contrario por lo tanto al de la comision, tuvo tambien elocuentes mantenedores. El conde de Toreno, Martinez de la Rosa, Lopez Cepero, Silves, Dolarea, Freire, Martel, Alvarez Guerra y Victoria hablaron más ó ménos en aquel sentido. Estos oradores consideraban indispensable la nobleza hereditaria, la cual en su concepto no podia sostenerse con las condiciones propias de su clase, sin algunos mayorazgos. Todos ellos propendian á aceptar el dictámen de la comision de las

(1) *Sesiones*, t. 4, p. 326.

Córtés extraordinarias de 1812. Negaban que las vinculaciones fueran funestas á la agricultura, como se suponía, probándolo con el ejemplo de Cataluña, Valencia y las Provincias Vascongadas, que á pesar de tener muchos mayorazgos grandes y pequeños, eran las más pobladas, las mejor cultivadas y las más industriosas, y también con el ejemplo de Inglaterra, que prosperaba más que ninguna otra nación, á pesar de haber en ella un número considerable de vinculaciones.

Estos diputados, sin embargo, no estaban entre sí de acuerdo, sobre la manera de resolver la cuestión pendiente, á lo cual debe atribuirse tal vez, el escaso fruto de su oposición. Conviniendo en sus apreciaciones generales, se dividían, en cuanto al modo de plantear la reforma, en tres grupos diversos: uno, de los que querían conservar cierto número fijo de mayorazgos: otro, de los que aspiraban á conservarlos sin limitación de número, aunque con ciertas restricciones; y otro, de los que sin abolir los existentes, deseaban promover su voluntaria y sucesiva desvinculación.

Figuraban en el primer grupo los diputados de opiniones liberales ménos exageradas en aquella época. Martínez de la Rosa, uno de los más ilustres entre ellos, demostró victoriosamente la inconsecuencia inexplicable y la injusticia notoria en que incurria la comisión, manteniendo los mayorazgos dotados con censos ó rentas públicas, contra los cuales podía decirse lo mismo que contra los dotados con fincas, y negando al hijo, como sucesor inmediato, el derecho á la reserva de la mitad de los bienes vinculados, cuando se concedía expresamente al sucesor extraño. Pidió que se conservara un cierto número de mayorazgos, aunque consistieran en fincas, para dotación de la nobleza, cuya existencia como clase, había reconocido la Constitución, en el hecho de llamar cuatro de sus individuos al Consejo de Estado (1). Abundando Cepero en el mismo parecer, quería que se conservara un número fijo de mayorazgos, igual al de los grandes de España que existían á la muerte de Carlos III, y que sus rentas no pudiesen exceder de cierto límite (2). Enemigo también de la desvinculación completa, el conde de Toreno opinaba por la conservación de los mayorazgos de la grandeza, cuyas rentas no excedieran de 60.000 ducados, y calificó de *ridículos* los dotados con frutos civiles, que proponía la comisión (3). Dolarea abogaba también por la conservación de ciertos mayoraz-

(1) Ses. del 12 Setiembre.

(2) Ses. del 13 Set.

(3) Ses. del 14 Set.

gos de determinada renta, pero queria al mismo tiempo que se permitiera al vinculista vender la parte de sus bienes que fuera necesaria para dotar á las hijas, y alimentar ó hacer donaciones *propter nuptias* á los hijos; que se derogara la ley 46 de Toro que declaraba vinculadas las mejoras hechas en lugares de mayorazgo; y que los bienes vinculados fueran responsables de las deudas de sus poseedores (1). Tales eran las opiniones de los diputados que formaban el primero de los grupos en que se dividia la oposicion.

En el segundo grupo, y en primer término, se hallaba el diputado Freire, que sostuvo opiniones singulares en una asamblea cuyos individuos, casi en su totalidad, no reconocian más fundamento justificativo del dominio que los preceptos de la ley positiva. Freire negaba á las Cortes la facultad de privar de sus derechos á las personas llamadas á la sucesion de los mayorazgos existentes. Sostenia además que no siendo dueño el Estado de los bienes vinculados, no podia transmitir el pleno dominio de ellos á sus poseedores actuales, que eran sólo usufructuarios. De todo lo cual concluia que la reforma debía limitarse á corregir algunas de las viciosas leyes que regian en materia de vinculaciones, y particularmente la 46 de Toro, y á prohibir para lo sucesivo, la institucion de nuevos mayorazgos (2). En el mismo grupo figuraba Alvarez Guerra, aunque con opiniones ménos radicales en su sentido. Este diputado propuso que quedara á la libre disposicion de los poseedores actuales el tercio de los bienes vinculados, y que de los dos tercios restantes pudieran disponer á su vez, los dos sucesores más inmediatos; de modo que á la tercera generacion quedara enteramente libre toda la propiedad entonces vinculada; pero queria al mismo tiempo que fuese en adelante lícito á todo propietario constituir mayorazgo sobre el tercio de sus bienes, el cual se iria tambien desvinculando por terceras partes en los tres primeros sucesores (3). Ambos oradores fueron oídos con suma extrañeza por la Asamblea; tan extravagantes y fuera de propósito hubieron de parecer sus opiniones, que apenas se creyó necesario refutarlas; y sin embargo, uno y otro, aunque en diverso sentido, expusieron ideas nuevas, que bien merecian algun exámen.

En el tercer grupo figuraba principalmente el gobierno, que por órgano del ministro de Gracia y Justicia, se manifestó adversario al proyecto de la comision y recomendó la subsistencia de los mayorazgos cuyas rentas no

(1) Ses. del 13 Setiembre.

(2) Ses. del 13 Set.

(3) Ses. del 14 Set.

bajaran de 8 á 10.000 ducados ni excedieran de 40 á 50.000; pero con la circunstancia de que los poseedores quedarian en libertad de enajenar sus bienes ó distribuirlos entre sus hijos en la forma que quisieran (1). Ezpeleta y Victoria sostuvieron tambien esta opinion.

Despues de tres dias de prolijas discusiones, se llamó á votar el artículo 1.º, base y fundamento de la ley. A este acto precedieron algunas explicaciones, sobre si se podrian presentar enmiendas al artículo 2.º que modificaran ó restringieran el sentido del anterior. Convinose en que así podria hacerse, siempre que las enmiendas no alteraran sustancialmente la disposicion del artículo 1.º En este supuesto, algunos oradores que lo habian impugnado, creyeron poder votario, con la esperanza de modificarlo, enmendando el artículo 2.º Así se explica cómo dieron su voto favorable al primero 128 diputados, y en contra sólo 24, habiendo sido tan criticado ántes por tantos otros. Verdad es que de todos modos habria pasado el artículo, atendido el espíritu dominante en la Asamblea, pero seguramente no habria obtenido tantos sufragios, si Martinez de la Rosa, Cepero, Perez, Costa y otros diputados hubieran sabido que las enmiendas que pensaban proponer, con el objeto de exceptuar de la ley ciertos mayorazgos de la nobleza, habian de ser rechazadas despues sin exámen, por suponerlas contrarias sustancialmente á lo votado.

Aprobado así el artículo 1.º, y no admitida despues, ni aún á discusion siquiera, ninguna enmienda que lo modificase, nada más creyeron poder hacer los impugnadores del proyecto que purgarlo de las faltas y contradicciones que encerraban los demás artículos. Martinez de la Rosa tomó á su cargo esta tarea, con mejor éxito que la precedente. A su instancia se enmendó aquella injusta disposicion por la cual no quedaban obligados los vinculistas á reservar la mitad de sus mayorazgos, cuando el sucesor inmediato fuera su hijo ó su descendiente, y si cuando fuera extraño ó pariente en línea transversal. Tambien logró con su elocuencia que no fueran aprobados los artículos que autorizaban la fundacion de nuevos mayorazgos sobre censos, acciones de Banco, inscripciones de la Deuda pública y otros frutos civiles. Contra el artículo del proyecto que prohibia á la Iglesia y á los establecimientos de beneficencia adquirir inmuebles, tributos y capitales de censo, que era uno de los más graves y en parte más cuestionables, no se levantó más voz que la del diputado Lobato. A su discurso demostrando que, segun la doctrina católica, no se puede

(1) Ses. del 12 y 13 Setiembre.

privar á la Iglesia del derecho de adquirir propiedades, contestó Giraldo con las doctrinas de los enciclopedistas; y sin más debate quedó aprobada esta disposicion gravisima. Concluida la discusion de la ley en 16 de Setiembre, se aprobó la minuta del decreto el 27 siguiente, y el 11 de Octubre le dió su sancion el rey.

III.

EFFECTOS Y VICISITUDES DE LAS LEYES DE DESVINCULACION.

Haciendo completa justicia á los legisladores de 1820, reconociendo sus rectas intenciones y su desinteresado patriotismo, la historia, examinando su obra á la luz de la justicia y aún de la conveniencia pública, en cuya armonía consiste la verdadera razon de Estado, no puede excusarles su censura. Si lo que se propusieron fué dar á la nobleza el golpe de gracia, acabando con lo que aún quedaba de este elemento político, necesario en las monarquías templadas, la ley llenaba cumplidamente su objeto; pero conseguido, nada ganaba la causa de la civilizacion y de la libertad. Si imaginaron conservar la nobleza privándola de toda propiedad vinculada ó estable, incurrieron en un error lastimoso. La monarquía que carece de una aristocracia que sirva de contrapeso al poder del trono y al del pueblo, suele caer fácilmente en despótica ó tal vez convertirse en república. Cuando dejó de existir la antigua aristocracia romana, comenzó el régimen arbitrario, y perecieron las libertades de Roma. Con la decadencia de la nobleza española desaparecieron las antiguas libertades de España. Francia dejó de ser monarquía, cuando el trono de Luis XVI, falto del apoyo de la nobleza que habia sucumbido con el antiguo régimen, se halló frente á frente con el pueblo.

Pensar que la nobleza para serlo y cumplir su destino político no necesita riquezas permanentes, es desconocer su naturaleza y condiciones esenciales. Búscase en esta institucion una clase que represente las tradiciones y defienda los intereses permanentes del país: que por sí misma y su virtud propia, sea acatada por el pueblo y considerada por el trono: que dispuesta siempre á desempeñar los altos cargos del Estado, lleve á ellos el prestigio de los grandes nombres, y los ejerza más por ambicion de gloria y deber de clase, que por necesidad de posicion y de lucro: una clase, en fin, que educada en la religion del honor, y animada por los elevados sentimientos que suelen inspirar las tradiciones gloriosas, el hábito del po-

der y la posesion inmemorial de las riquezas, influya en los negocios públicos conforme á estos sentimientos. Sin tradiciones de linage, que formando cierto espíritu de familia transmitido de generacion en generacion, enaltecen á los individuos, no hay verdadera aristocracia. Y aunque ya estén muy debilitados el poder de las tradiciones y el prestigio de los grandes nombres, todavía se les rinde algun culto, aún en los pueblos más democráticos. Ninguno renegó tanto de sus tradiciones como Francia, y sin embargo, al constituirse en república, despues de la revolucion de 1848, llamó para que la presidiese, no al hombre más sábio, ni al más valiente, ni al más poderoso, ni al más afecto á la democracia, sino al que simbolizaba en su nombre, las tradiciones más gloriosas.

Ni es condicion ménos necesaria á la aristocracia la de tener los hábitos de superioridad que engendra el goce permanente de cierta autoridad propia. El que nace y vive oscuramente, sin influencia alguna personal y sometido siempre á la de otro, rara vez despliega las cualidades de carácter necesarias para el buen desempeño de la autoridad pública. Estas cualidades se desenvuelven y se afirman con el ejercicio, y se quebrantan ó no aparecen cuando las adversidades de la vida las tienen en constante inaccion. Por eso abundaron tanto en la nobleza antigua los grandes caracteres.

Ahora bien, no es posible una clase con todas estas condiciones, si no tiene además la independencia de la perpetuidad y de la riqueza. Una nobleza vitalicia ó temporal ó que la corona pudiera suprimir á su antojo, seria imposible ó ridícula, porque careceria de tradiciones, de espíritu de familia y de autoridad propia, y no seria una clase influyente como tal, sino una coleccion de individuos, cada uno de los cuales no tendria más valor que el que por sí propio pudiera darse. No es sólo una preocupacion la que hace estimar en ménos la nobleza nueva que la antigua, sino que realmente ofrecen más seguridad de poseer las cualidades de una buena aristocracia las familias cuyos títulos y preeminencias consagra la prescripcion de los siglos, que aquellas que no fundan los suyos sino en la carta de merced del soberano. Así en ningun país ha habido verdadera aristocracia con las condiciones propias de esta clase, sin ser hereditaria.

Mucho ménos se concibe que estas condiciones puedan conciliarse con la pobreza, ni con la necesidad de trabajar para procurarse el sustento. Tampoco basta que la nobleza sea rica, si su riqueza no es tan antigua y permanente como sus títulos. Y si las familias pobres no han de entrar en su gremio, y sin embargo la clase debe ser perpétua, necesario es conser-

var las familias aristocráticas, cuya subsistencia constituyendo un interés público, no debe quedar á merced de cualquiera de sus individuos. Importa al Estado que ayude á su direccion, no una nobleza cualquiera, sino la mejor y más adecuada á su objeto, que es como queda dicho, la más antigua. La aristocracia no se improvisa ni es obra de los legisladores; nace, no se hace. Lo que sí puede hacer fácilmente el legislador es destruirla cuando ella no sabe ó no puede defenderse. Privado su patrimonio de toda estabilidad, dividiéndolo y subdividiéndolo hasta lo infinito en las sucesiones y herencias, puede reducirse á la pobreza ó á la necesidad de buscar en el trabajo ó en la industria los medios de subsistir, y así es como pierde la nobleza todas las condiciones esenciales de su clase, convierte sus títulos en vano y ridículo oropel, y al fin desaparece para dejar lugar á la gente recién ennoblecida y por lo mismo sin cualidades propias de la buena y legítima aristocracia.

Verdad es que la nobleza española venia ya en decadencia y no poseía desde mucho tiempo ántes, todas las cualidades propias de su clase; pero de aquí no se sigue, que admitida su necesidad, fuera prudente y sensato acabar de aniquilarla. Hubiera sido más acierto ayudarle á regenerarse, si aún tenía vitalidad para ello, con medidas adecuadas para estrechar sus relaciones con la república y fortalecer su autoridad y su independencia.

Pero aún adoptado el principio de la abolicion completa de los mayorazgos, pudieron decretarla las Cortes de 1820, sin lastimar intereses y aún derechos respetabilísimos, y sin dar lugar á la multitud de cuestiones que surgieron de su decreto. Discurriendo algunos oradores de los que tomaron parte en aquella discusion, sobre los intereses que podrian ser perjudicados, decian que los actuales poseedores quedaban favorecidos, pues que iban á disponer libremente de lo que ántes no disponian: que las familias en general tambien ganaban, pues sucederian en la mitad de todos los bienes vinculados: que la sociedad reportaria el beneficio de la desamortizacion de tanta riqueza estancada hasta entonces; y que sólo perderian algo los sucesores inmediatos, que no sucederian sino en la mitad de sus mayorazgos, pero que la ley no debia tomar en cuenta tales perjuicios, ya porque valian ménos que los beneficios que la nacion reportaria de la reforma, ya porque no afectaban á un derecho verdadero y sí á una mera *espectativa*. Y en efecto, no podian negarse las ventajas materiales que ofrecia la ley á los vinculistas y á los individuos de sus familias. Los primeros ganaron tanto como ganaria un usufructuario á quien la ley, por razones de conveniencia pública, regalara el dominio pleno: los segundos,

prescindiendo de su interés colectivo de linaje, alcanzaron tambien un derecho que no tenian: con la desvinculacion ganó en general la riqueza; pero todo lo que beneficiaron gratuitamente estos individuos y colectividades, lo perdieron, sin compensacion alguna, los inmediatos sucesores de las vinculaciones: la propiedad se consolidó con el usufructo á costa del propietario: el pariente heredó lo que debia haber disfrutado otra persona á quien la ley anterior y la fundacion daban este derecho: la sociedad reportó el provecho de la desamortizacion, á expensas del llamado á poseer la propiedad desamortizada.

Poco importa que el de los sucesores inmediatos no fuera un derecho en el sentido estricto y técnico de la palabra, si en su esencia reunia todos los requisitos de tal. La llamada *espectativa* por los juristas, era en la mayor parte de los casos, un derecho exactamente igual, al del señor directo de una finca, cuyo dominio útil debe consolidarse con el suyo á la muerte del usufructuario, ó al del hijo sobre el peculio adventicio que su padre usufructúa y debe entregarle cuando salga de la patria potestad. ¿Y puede decirse que no lastimaria ningun derecho la ley que privara en todo ó en parte de su propiedad al señor directo ó al hijo de familia, para atribuirlo al dueño del dominio útil ó al padre usufructuario? Los sucesores inmediatos tenian indisputable derecho á la posesion de los bienes vinculados, luego que faltaran sus actuales poseedores. Era aún más seguro su derecho que el de los hijos á heredar los cuatro quintos por lo ménos, de la fortuna que sus padres disfrutaban en vida, puesto que no estaba sujeto como éste, á la eventualidad de una enajenacion entre vivos. Con la seguridad de entrar un dia en posesion de su mayorazgo, el inmediato no se habia dedicado tal vez, á ninguna ocupacion lucrativa, ó habia contraido deudas, ó se habia casado y contaba una numerosa prole; privándole de la mitad de todo aquello que juzgaba por suyo, ¿se le causaba solamente un perjuicio en sus intereses? ¿No se violaba á la vez un derecho respetable? Ciertamente es que tambien habia sucesores cuyo derecho era ménos seguro, como el de los colaterales del poseedor, sin hijos, que dependia de que éste continuara sin ellos, lo cual en ciertas circunstancias, era muy contingente. Mas este derecho se hallaba sujeto tan sólo á la eventualidad indicada, y fuera de ella, era tan seguro y digno de respeto como el del hijo primogénito del poseedor. El hermano que debia suceder al hermano soltero en la posesion de un vínculo, sabia que casándose éste y teniendo hijos, perdía su derecho; pero tambien sabia que nadie podia privarle de él como su hermano muriera sin sucesion; y esta seguridad que la ley anterior y la fundacion le daban, quedó destruida

por la ley posterior. Los diputados que, como Martínez de la Rosa, convinieron con sus adversarios, en que la ley no lastimaba ningún derecho verdadero, porque el de los sucesores era sólo una expectativa, incurrieron en el error de atender más que á la naturaleza verdadera de las cosas, á las distinciones arbitrarias de los comentaristas, prescindiendo de la razón y de la equidad, para mantener las definiciones y clasificaciones teóricas de Molina y Roxas Almansa.

Aparte de esta injusticia fundamental, adolecía la ley de otros graves defectos. Así á los cinco meses de su promulgación fué menester corregirla, proveyendo al caso de no haber sucesor á quien reservar la mitad de los bienes de algún vínculo. También fué menester corregir el artículo que exigía precediese á la enajenación de cualquiera finca vinculada, la tasación y división de todas las del mayorazgo; porque esta diligencia, larga y costosa siempre, é innecesaria cuando el sucesor inmediato consentía en la enajenación, dificultaba y retardaba la desvinculación que era precisamente el objeto principal de la ley.

Otros inconvenientes no ménos graves se notaron al tiempo de su ejecución. Impugnábanse los mayorazgos, entre otras razones, por los muchos pleitos que originaban en las familias, y luego nacieron muchos más de la ley dictada para su abolición. Decía ésta, por ejemplo, que se dividieran con igualdad los bienes vinculados, ántes de su enajenación, y callaba quién había de señalar los que hubieran de reservarse: si el poseedor actual ó el sucesor inmediato. Atribuía al poseedor actual el dominio absoluto del mayorazgo electivo, cuando tuviera facultad ilimitada para elegir sucesor, y no reservó á éste derecho alguno, aunque su elección estuviese hecha y publicada al tiempo de promulgarse la nueva ley. Ordenó que no se hiciera novedad en los mayorazgos litigiosos hasta que se adjudicaran por ejecutoria, y que concluido el juicio de posesión, se entablara dentro de cuatro meses el de propiedad, y no dijo si este plazo había de correr cuando al publicarse la ley, estuviera terminado aquel primer juicio: si se podrían emprender nuevos litigios en reivindicación de vínculos ó derechos vinculares, y si en caso de que se entablaran, afectarían á los bienes de mayorazgo, ya ántes enajenados. Declaró responsables estos bienes al pago de las pensiones alimenticias á que solían estar obligados los vinculistas, y no dijo si esta responsabilidad sería primordial ó subsidiaria, si constituía un gravámen personal ó hipotecario, si pesaba sobre todos los bienes vinculados en general y á prorrata, ó sobre cada uno solidariamente. Mandó invertir en alimentos la sexta parte líquida de las rentas vinculares, y no declaró si esta parte

habia de sacarse de la mitad libre y de la reservada, ó solamente de esta última; y habiendo buenas razones para entender el precepto de la ley de ámbos modos, iba, como se ve, gran diferencia de una á otra interpretacion.

Estas y otras varias dificultades resultaron en la ejecucion de la ley de 11 de Octubre de 1820, á pesar de haber sido entonces su imperio harto breve, ménos quizá por los defectos de que adoleciera, que por formar parte de un régimen político pasajero. Restablecido Fernando VII en la plenitud de su soberanía, y anulados todos los actos del gobierno constitucional, quedaron derogadas tambien las leyes de desvinculacion. Fué menester entonces decidir sobre los diversos derechos é intereses creados por ellas, y consultado sobre este punto el Consejo de Castilla, propuso al monarca la Real Cédula de 11 de Marzo de 1824.

Si en la ley de 1820 el espíritu de partido se habia sobrepuesto al sentimiento de la justicia y áun al verdadero interés público, la de 1824 le excedió en injusticia é inconveniencia, aunque en sentido opuesto. La primera desconoció y lastimó derechos legítimos é intereses respetables de las personas llamadas á la sucesion de los vínculos; la segunda causó aún mayor agravio á los compradores de bienes que fueron vinculados. Repusieronse entonces todos los mayorazgos al estado que tenian ántes de la revolucion de 1820, restituyéndose á los actuales poseedores los bienes que ellos mismos habian enajenado. Verdad es que se declaró á los adquirentes por título oneroso el derecho de ser reintegrados del precio que desembolsaran y de las mejoras necesarias que hicieran en los bienes, todo á costa de los poseedores que los enajenaran, y en su defecto, de los sucesores que lo consintieran, sin tasacion prévia, y á falta de unos y otros con los frutos y rentas de los mismos bienes durante las vidas de ámbos; mas este derecho era ilusorio cuando el poseedor enajenante fuera insolvente y el inmediato se hubiera limitado á concurrir á la tasacion y division del vínculo, sin expresar su consentimiento, ó cuando el producto de los bienes vendidos durante las vidas del poseedor y del inmediato no alcanzara á cubrir el precio de la venta. Los adquirentes por título lucrativo no habian de tener derecho, sino á las mejoras necesarias que hubieran costado. De modo que la única responsabilidad favorable á los compradores recaia generalmente sobre personas cuyo único patrimonio eran los mayorazgos desmembrados ó los alimentos procedentes de ellos, puesto que los vinculistas que entonces enajenaron bienes vinculados fueron en su mayor parte los que carecian de otros libres. Y como por otra parte los más de los sucesores inmediatos, descontentos de la ley de desvinculacion, se habian abste-

nido de consentir las enajenaciones que tanto les perjudicaban, limitándose, por no poder evitarlas, á concurrir á la tasacion y division de los bienes, la mayor parte de los compradores no fueron reintegrados de sus desembolsos, ó porque el vendedor y su sucesor inmediato eran insolventes, ó porque el último no era legalmente responsable, ó porque muertos ámbos ántes de producir los bienes enajenados el importe de su precio, no tuvieron á quién reclamar la indemnizacion. Así el despojo inicuo de 1824 respondió á las injusticias de la ley de 1820.

En el último periodo del gobierno absoluto no se hizo otra novedad en los mayorazgos, pero entretanto continuaron propagándose con las ideas liberales, las doctrinas contrarias á toda amortizacion, y aún se enseñaron públicamente en las cátedras de economía política apenas toleradas en aquella época. Y aunque la mayoría de los españoles no aplaudiera entonces las innovaciones revolucionarias del gobierno constitucional, tampoco simpatizaba mucho con las vinculaciones, y condenaba la injusticia cometida con los compradores de sus bienes. Así uno de los primeros actos del gobierno constitucional inaugurado con el estatuto, fué reparar la injusticia de 1824, con ley de 6 de Junio de 1835. No fué su objeto resolver en el fondo la cuestion de las vinculaciones y mucho ménos en el sentido de su completa abolicion, pues creado el estamento de próceres, con una parte de sus miembros hereditarios, habria sido grave inconsecuencia privarles de aquel elemento de conservacion. Su objeto fué solamente reparar en lo posible, los perjuicios causados en 1824, pero transigiendo al mismo tiempo entre los intereses opuestos, cuando á unos y otros se podia dar satisfaccion, sin menoscabo de la justicia.

Conforme á este propósito, la nueva ley declaró á los compradores que habian conservado la posesion de bienes anteriormente vendidos, el dominio pleno de ellos: á los que habian sido desposeidos de tales bienes en virtud de la real cédula, concedió el reintegro del precio que desembolsaran con rédito de 5 por 100; y á los vinculistas que disfrutaban á la sazón bienes vendidos y devueltos, les permitió optar entre restituirlos ó reembolsar á los compradores de su precio, en el término de un año, pero entendiéndose que tales bienes quedarian desvinculados, aunque permanecieran en poder de los vinculistas. No estimando el legislador tan respetables los derechos no adquiridos por título oneroso, mantuvo las devoluciones de bienes desmembrados de los mayorazgos por herencias ó donaciones, á ménos que por haberlos vendido luego los adquirentes, resultara despojado el comprador y no el donatario ni el heredero. Si se hubiera adoptado por

punto de partida la legislación de 1820, se habrían debido restituir todos los bienes enajenados en virtud de ella por cualquier título, que hubieran sido devueltos á los respectivos mayorazgos. Esto es lo que en tal suposición exigía la justicia estricta. Pero como aquella legislación, aunque había creado derechos, no era equitativa, y la de 1824 los había también producido, por más que fuese injusta, el legislador obró muy cuerdamente transigiendo entre unos y otros derechos, á fin de reparar los perjuicios originados por las leyes reaccionarias, sin restablecer de pronto, las inspiradas por el espíritu exagerado de la revolución.

Mas apenas había transcurrido un año desde la promulgación de esta ley, una revolución nueva, la de 1836, cambió violentamente el Estatuto por la Constitución de 1812, y restableció con ella muchos decretos de las pasadas Cortes, entre los cuales fué uno de los más importantes el de desvinculación de 11 de Octubre de 1820. El nuevo gobierno, aspirando á una restauración completa del régimen abolido en 1823, restableció en 30 de Agosto de 1836 aquel decreto, reservando á las próximas Cortes la determinación de lo que juzgaran conveniente, sobre las desmembraciones de mayorazgos verificadas anteriormente, por donaciones ú otros títulos. De modo que según aquel gobierno, nada había que enmendar, ni reformar en la legislación de 1820 y para lo único que se necesitaba acudir al poder legislativo, era para dejar sin efecto las concesiones otorgadas por la ley de 1835 á los vinculistas, que por cualquier motivo disfrutaran bienes devueltos con arreglo á la legislación de 1824.

El espíritu y las preocupaciones de partido, la ignorancia de los principios de legislación y de nuestra complicada jurisprudencia en esta materia, y la precipitación y falta de estudio con que se dictó el decreto de 30 de Agosto, no bastan apenas para explicar cómo no previeron sus autores las dudas, las cuestiones y los conflictos que iban á originarse. Las distintas y contrarias leyes, que habían venido rigiendo en la materia, habían ido creando nuevos y diversos derechos é intereses, que al cabo llegaron á ser inconciliables. La primera cuestión que se suscitó fué la de la validez de las mismas leyes de desvinculación restablecidas, á causa de tener su origen en un decreto inelícito por su índole, para derogar una verdadera ley. Los jurisconsultos anduvieron divididos en pareceres, los tribunales dudaron y muchos interesados tuvieron que suspender el ejercicio de sus acciones, temiendo hacer valer su derecho conforme á una legislación que no estimaban definitiva. Aún ofrecía otras muchas dificultades la ejecución de la ley restablecida, que las Cortes de 1837 trataron de resolver, haciendo otra

nueva aclaratoria, que no obtuvo al fin la sancion de la corona. Pero sintiéndose más cada día la falta de esta ley, las Córtes acordaron por último la de 1841, aunque sin seguir las huellas de sus predecesoras de 1835. Estas habian transigido entre los intereses de los vinculistas y los de los compradores y adquirentes de los bienes: aquellas dejaron sin efecto esta transaccion en su mayor parte, con beneficio exclusivo de los mismos adquirentes y compradores. Tal fué el criterio con que resolvieron todas las dificultades que oponian á la desvinculacion las mismas leyes desvinculadoras, y por eso no fueron igualmente acertadas todas sus resoluciones. Pero con más ó con ménos justicia, así quedaron extinguidos todos los mayorazgos de España.

CAPÍTULO V.

De la propiedad municipal.

I.

ORÍGEN Y VICISITUDES DE LAS TIERRAS CONCEJILES HASTA FINES DEL SIGLO XVIII.

Entre las propiedades civiles amortizadas figuraban en España, como en toda Europa, los baldíos y realengos y los bienes de Propios y Comunes, los cuales, aunque no inalienables por su naturaleza, se hallaban de hecho fuera del comercio. Su origen es tan antiguo como el de los pueblos á cuyo servicio estaban destinados. Los municipios romanos disfrutaban este género de propiedad; y aunque los visigodos la invadieron y usurparon, repartiéndola con las tierras de los vencidos, como botín de guerra, dejaron indivisos los montes y bosques para aprovechamiento de las comunidades de vecinos, con igualdad y sin distincion entre conquistadores y conquistados (1). Bajo la dominacion de los árabes, volvieron á confundirse y perderse estas propiedades; mas al reconquistar nuestros reyes el territorio, repoblando ó fundando nuevos lugares y villas, les dieron tierras, egidos y montes con que atender á sus necesidades comunes; y donde más bienes de esta clase disfrutaban los vecinos, allí acudian más pobladores.

Al principio todas estas tierras eran de aprovechamiento comun; pero

(1) For. jud., l. 9, t. 1, lib. 10.

como muchos pueblos poseyeran más de las que necesitaban para este fin, y sus gastos crecieran con su vecindario y su labranza, utilizaron las sobrantes dándolas en arrendamiento y empleando sus productos en otros servicios públicos. Los concejos más ricos invirtieron despues el excedente de sus rentas en la adquisicion de nuevas fincas; muchos adquirieron otras además, por herencias ó donaciones de celosos vecinos; y así vino á formarse el caudal de Propios y Comunes.

No eran estos bienes inalienables de suyo: considerábanse como de libre disposicion de los pueblos, y su dominio, aunque colectivo, no se diferenciaba del privado en cuanto á la naturaleza y extension de sus derechos. Los concejos eran dueños de sus Propios, como cualquier particular de sus bienes, por más que no los enajenaran sino en circunstancias extraordinarias, ya porque en tiempos antiguos la propiedad circulaba poco, ya tambien porque las corporaciones perpétuas tienden forzosamente á conservar lo que poseen.

La utilidad de estas propiedades era evidente. Reducidas á dominio privado las tierras inmediatas á los pueblos y no poseyendo vastas heredas más que la iglesia y los señores, los vecinos no solian cultivar sino cortos terrenos, suficientes para su alimentacion, pero no bastantes para mantener sus ganados, y proveerse de leña, madera y otros objetos necesarios para la vida y la labranza. Si los antiguos concejos hubieran carecido de ellos, los vecinos habrian tenido que comprarlos de los propietarios de tierras destinadas á estos servicios, lo cual habria gravado la produccion agricola con un gasto insoportable entonces, atendida la escasez de sus rendimientos. Además, como en aquella época de constante guerra, no se beneficiaban ni podian defenderse otras tierras que las inmediatas á los pueblos y castillos, el que hubiera poseido el bosque ó el prado más próximo á su lugar, no habiéndolos de aprovechamiento comun, habria sido el único que pudiera vender á sus convecinos pastos, leñas y otras cosas indispensables, y semejante monopolio habria dado lugar á graves abusos. Ni es ménos cierto que con la descentralizacion administrativa de aquella época, y la dificultad de soportar los impuestos, si los pueblos no hubieran tenido más medio que los tributos para subvenir á sus necesidades, y hubieran carecido de rentas propias, ni habrian podido proveer como lo hicieron á su defensa, resistiendo las invasiones enemigas y salvando con sus fortalezas y sus milicias la religion y la monarquía, ni se habrian formado tantas espléndidas ciudades y ricas villas, cuya vecindad codiciaban los forasteros, y cuyos monumentos testifican todavia su pasada

grandeza. Así durante la Edad Media, eran los Propios y Comunes una necesidad indeclinable de las poblaciones y una consecuencia necesaria del régimen político y administrativo vigente.

Constituian entonces principalmente las rentas ordinarias del Estado los productos de los bienes de la corona, pues los servicios é impuestos no periódicos, eran medios extraordinarios con que se cubria el déficit de los ingresos. Otro tanto sucedia en las ciudades y villas, que formaban como pequeños Estados, por la independencia de su gobierno. Si eran de señorío ó behetría, los señores subvenian con su peculio á la parte de los gastos públicos que no cubrian las rentas de propios; si eran de realengo, los alcaldes y merinos atendian á todas las necesidades vecinales con las mismas rentas; mas en unos y en otros no se acudia á los repartimientos y arbitrios, sino cuando los ingresos ordinarios eran insuficientes. Y lo eran con mucha frecuencia, porque la corona no pagaba ningun servicio local, y los pueblos no obtenian su independencia, sino á costa de proveer á todas las necesidades de administracion, fomento y gobierno. Los Propios eran á los concejos, lo que el patrimonio de la corona al Estado.

Pero con alterarse la organizacion política del país, fué naturalmente modificándose la condicion de los bienes concejiles. A medida que se ensacharon los limites de la monarquía, fueron creciendo los gastos de la administracion central, hasta el punto de no cubrir las rentas de la corona, sino una muy escasa parte de ellos. Para satisfacerlos, se repitieron cada vez con más frecuencia los pedidos de servicios pecuniarios. Muchos pueblos, que ó no podian pagarles ó preferian satisfacer la necesidad presente á costa de las generaciones futuras, hubieron de desempeñarse con la corona, enajenando parte de sus Propios. Con tal precedente se creyó después autorizado este medio de obtener recursos, y aún se prefirió en muchos casos al impuesto, como ménos ocasionado á provocar resistencia; y así muchos monarcas dispusieron en sus apuros de los bienes de Propios, bien tomando por tributo alguna parte de ellos, ó bien mandando pagar con sus productos ciertos servicios públicos.

Estos ejemplos, sin embargo, no llegaron á constituir derecho: léjos de eso, nuestros reyes, desde el siglo xiv por lo ménos, velaron siempre por la conservacion de los bienes de Propios y Comunes. Alfonso XI ordenó en 1325, que fuesen inmediatamente restituidos á los concejos, ciudades y villas, las aldeas, fortalezas ó términos de que habian sido despojados (1).

(1) Ley 1, t. 21, lib. 7, Nov. Rec.

El mismo monarca, á peticion de las Córtes de Madrid de 1529, dispuso se restituyeran á los pueblos los egidos, términos, montes y heredamientos que les hubieran sido ocupados por cualesquiera personas, aunque fuera con cartas reales, y que los concejos no los labraran, vendieran ni enajenaran, para que los disfrutase precisamente el comun de vecinos (1). Por donde se vé que D. Alfonso estimaba haber procedido sin derecho los reyes que habian dispuesto de los bienes del comun; queria que estos fuesen desde entonces inalienables; y en vista de los abusos y usurpaciones de que eran objeto, si se juzgaba incompetente para transmitir su dominio, no creia serlo para asegurar su aplicacion á los usos de su instituto, adoptando para ello las providencias oportunas.

En esta doctrina hubo de fundarse tambien la legislacion posterior sobre la materia. D. Juan II, á peticion de las Córtes de Madrid de 1419, declaró nulas cuantas mercedes se hicieran en adelante de los bienes de Propios; y en 1455 revocó las otorgadas anteriormente de fincas situadas dentro de los pueblos, ó de oficios públicos que daban renta (2). Este mismo monarca, y luego D. Fernando y D.^a Isabel dictaron diferentes disposiciones para que se vigilara la administracion de las propiedades concejiles, asegurar la justa inversion de sus productos y mantener su integridad, confirmando la incompetencia de la corona para disponer de ellas (3).

Necesario es reconocer, sin embargo, que estas leyes no fueron siempre cumplidas. Carlos V hubo ya de infringirlas en los primeros años de su reinado, puesto que las Córtes de Madrid de 1528 le suplicaron que no hiciera nuevas mercedes de términos, Propios y baldíos, por el daño que de ello recibian los pueblos, y porque muchos de estos tenian privilegio para que sus bienes no fueran dados de aquella manera, así como para no cumplir las cartas reales que se expedieran contraviniéndolo. El emperador respondió á esta peticion benévolamente, pero sin reconocer de un modo explicito el derecho establecido, que le servia de fundamento. Dijo que en el otorgamiento de tales mercedes habia procedido con mucha moderacion; que tendria en consideracion lo expuesto, para lo sucesivo; que en cuanto á las mercedes ya hechas, proveyera el Consejo, con conocimiento especial de cada una, lo que fuera de justicia; y que los concejos no pudieran por sí hacerlas, ni valieran las hechas por ellos, sin real licencia (4).

(1) Ley 2, t. 21, lib. 7, Nov. Rec.

(2) L. 1, 2, t. 16, lib. 7, Nov. Rec.

(3) L. 3, 4, 5 y 6, t. 16, y 3, 4, 5, 6 y 8, t. 21, lib. 7, Nov. Rec.

(4) L. 9, t. 21, lib. 7, Nov. Rec.

Esto no obstante, hubieron de enajenarse tantas tierras concejiles y baldías, por los mismos pueblos, ya sin dicha licencia, ni causa justa y ya para satisfacer tributos ó servicios, que llegaron á faltar los pastos en algunas comarcas y se encarecieron extraordinariamente las carnes (1). Esto dió lugar á que el mismo emperador mandara restituir á los concejos las tierras concejiles y de baldío enajenadas, rotas ó acensuadas en los diez años anteriores, sin real licencia, y abrir juicio en el Consejo respecto á las enajenadas en época anterior, á fin de que, si lo estuvieran con facultad real y por término fijo, para pagar el servicio, volvieran, cumplido aquel, á los mismos pueblos, reduciéndose otra vez á dehesas de pasto (2).

Mas las Córtes insistían siempre en negar á la corona el derecho de disponer de tales bienes, y así llegaron hasta á hacer de ello una condicion para el otorgamiento de los tributos. Perdida la *grande armada* en las costas de Inglaterra, pidió Felipe II, á fin de repararla, un servicio de millones, y para obtenerlo tuvo que aceptar por condicion, la de que no se vendieran en adelante tierras concejiles, términos, ni baldíos que los pueblos hubieran tenido por Propios, y que si los vendidos se remidieran por cualquiera causa, quedaran las demasías que resultaran, por públicas y concejiles (3). Felipe III en 1609 y Felipe IV en 1632 no obtuvieron tampoco el servicio de millones, sin confirmar la condicion anterior y prometer por sí y sus sucesores, no enajenar tierras baldías, ni árboles ó frutos de ellas, á fin de que los pueblos los poseyeran en todo tiempo y tuvieran sus aprovechamientos, conforme á las leyes. Esto mismo confirmó la reina gobernadora en 1669 (4).

A pesar de todo, D. Felipe V, para remediar urgencias del Estado y so color de justas restituciones, mandó en 1738 incorporar á la corona las tierras que hubieran sido baldías y realengas en su origen y á la sazón se hallaran cultivadas y reducidas al dominio de concejos ó particulares. Al efecto erigió una Junta que practicara las averiguaciones correspondientes, y exigiera la devolucion de las tierras ó el pago de su valor, ó hiciera con los detentadores los arreglos y transacciones, que segun las circunstancias, conviniesen, y promoviera la enajenacion de los baldíos. Entonces se oyeron en España, dice un autor contemporáneo (5), clamores semejantes á

(1) Ley 6, t. 7, lib. 7, Nueva Rec.

(2) L. 6, *ibid.*

(3) L. 1, t. 23, lib. 7, Nov. Rec.

(4) L. 2 y 10, t. 21, lib. 7, Nov. Rec.

(5) Sisternes, *Idea de una ley agraria*, pár. 3.º

los de los patricios romanos cuando se publicó la ley agraria. La diputación del reino protestó contra esta resolución, como contraria á lo pactado en los servicios de millones y al derecho que por leyes antiguas, tenían los pueblos para aprovecharse de las tierras incultas; y aunque esta reclamación, repetida diferentes veces y apoyada por el Consejo real, no produjo efecto durante el reinado de D. Felipe V, fué al cabo atendida por don Fernando VI, que en 1747 suprimió la junta de baldíos, revocó sus acuerdos, anuló las enajenaciones y adjudicaciones otorgadas por ella, y mandó reintegrar á los pueblos y á los particulares en todas las tierras que disfrutaban en 1737 (1). Por todo lo cual se ve que nuestras leyes han reconocido siempre el dominio colectivo de los pueblos en las tierras municipales: que si esto no obstante, la corona ha dispuesto algunas veces de ellas, tales actos fueron considerados como una violación de aquel derecho; y que la única facultad reconocida en todo tiempo al soberano, ha sido la de vigilar é intervenir la administración de estos bienes, para asegurar su conservación y el cumplimiento de su destino (2).

Mas los baldíos y los Propios constituían en el siglo pasado una gran propiedad amortizada, sobre la cual no podían ménos de fijar su atención los economistas del reinado de Carlos III. Entonces, como en tiempo de los Reyes Católicos, se cometían en su administración graves abusos. Habíanse perdido muchos de estos bienes por negligencia de las corporaciones municipales; los existentes eran poco productivos; y como hubieran crecido mucho los gastos de la administración local, fué indispensable recargar hasta el extremo los arbitrios y repartos municipales, para suplir el déficit de los ingresos. Pero los contribuyentes agraviados hicieron oír sus quejas, y el gobierno entonces proveyó solicito, buscando el remedio desde luego, ya en las artes políticas, ya en las doctrinas económicas. Así, considerando que los mayores abusos se cometían por la falta de intervención de la autoridad central en las administraciones locales, y de un sistema general en la gestión de estos intereses, publicó Carlos III en 1760 un real decreto, poniendo el ramo de Propios bajo la alta dirección del Consejo de

(1) Ley 2 y not., t. 23, lib. 7, Nov. Rec.

(2) Según D. Guillen Barbon y Castañeda en sus *Provechosos arbitrios al consumo del vellon y otras razones convenientes al bien y conservación de esta monarquía*, el daño de los subidos precios de las cosas y de la despoblación del país, provenía entre otras causas, de haberse quitado y vendido á los pueblos montes, pastos comunes y terrenos baldíos. (Sempere, *Biblioteca económica*, t. 3, p. 60). Tal es el concepto que solían merecer aquellos actos del gobierno.

Castilla, y creando la «Contaduría general de Propios y Arbitrios» (1). En una instruccion que acompañaba á este decreto, se estableció el sistema de administracion y contabilidad á que habian de sujetarse las Justicias en el manejo del ramo, y se adoptaron todas las precauciones que parecieron convenientes para conservar el patrimonio de los pueblos y asegurar la recaudacion de sus productos y su inversion en beneficio comun.

Mientras que estas disposiciones se llevaban á efecto, hacia el gobierno ensayos parciales de otros remedios económicos, más activos, para extirpar los vicios de la administracion municipal. Tales fueron los repartos de tierras concejiles acordadas en 1761, 1766, 1767 y 1768 en ciertas provincias ó con limitacion á determinados aprovechamientos (2). Entre tanto ni el consejo de Castilla, ni la contaduria general de Propios lograban, á pesar de su celo, corregir los abusos de la administracion municipal: los repartimientos parciales indicados no surtian tampoco el efecto apetecido (3), y los estadistas y escritores políticos clamaban, cada vez con más energia, contra la inmensa amortizacion que cegaba las fuentes de la riqueza pública. Movido Carlos III por tales estímulos á acometer reformas más radicales en esta materia, mandó repartir en 1770 todas las tierras labrantías, propias de los pueblos, exceptuando tan sólo la senara ó tierra de concejo que se cultivara de vecinal. A este repartimiento habian de tener derecho, en primer lugar, los labradores que disfrutaran de una á tres yuntas, sin tierra en que emplearlas; en segundo, los braceros y jornaleros; en tercero, otra vez los mismos labradores y braceros ántes llamados; despues los labradores que poseyeran más yuntas de labor; y por último, si aún sobraran tierras, se rematarian entre los forasteros. Cada uno de los labradores llamados en primer lugar habia de recibir una suerte de ocho fanegas por yunta; cada bracero una suerte de tres fanegas; si aún

(1) Ley 12, t. 16, l. 7, Nov. Rec.

(2) L. 17, not. 11, t. 25, lib. 7, Nov. Rec.

(3) D. Manuel Sisternes, fiscal del Consejo, en su *Idea de la ley agraria española, Madrid 1786*, decia que el Consejo en los primeros repartimientos tiró á favorecer á los más necesitados, empezando la distribucion por ellos, «pero luego se experimentó lo poco ó nada que podia esperarse de una gente sin educacion, sin principios y sin espíritu ni facultades para mejorar su suerte. Repartir tierras á quien no puede cultivarlas no es aumentar la agricultura, sino disminuirla, pues se quitan á los que las pueden cultivar.» Añadia que por eso se habia invertido este orden en el repartimiento general de 1770, empezando por los labradores de una, dos, ó tres yuntas que son los que se hallan en mejor disposicion para abrir nuevas tierras y reducir las á cultivo. (Pár. VIII.)

sobrarán tierras, se haría entre unos y otros, de igual modo, un segundo reparto; y en el caso de tener cabida los labradores de más yuntas, se repartirían entre ellos las tierras sobrantes según sus necesidades. Todos los partícipes en estos repartimientos habían de pagar una pensión anual en frutos ó en dinero, según tasación de peritos. Las dehesas de Propios no habían de dividirse, mas sus frutos se distribuirían entre los vecinos, según las necesidades de cada uno (1).

Tales eran las principales disposiciones de aquella ley memorable, una de las obras más atrevidas que produjo en España, en el siglo XVIII, la escuela individualista. Verdad es que, según la legislación anterior, no estaba facultada la corona para decretar semejantes repartos; mas si tales tierras habían de enajenarse, no podía hacerse esto de un modo más adecuado á sus fines. Sin menoscabar los derechos comunales existentes, puesto que los vecinos habían de conservar todos los aprovechamientos que disfrutaban en comun, y sin disminuir las rentas municipales, porque las pensiones de los diviseros no habían de tasarse en ménos que aquellas, se entregaban las tierras concejiles al dominio particular, prefiriéndose en todo caso, á aquellos vecinos que más seguridades ofrecían de promover su cultivo, que no eran, ni los labradores más ricos, ni los más pobres braceros. Carlos III no adoptó, pues, ni el aristocrático sistema seguido en Inglaterra en estos repartimientos, de dar más al que más tenía, ni el democrático practicado en Francia, durante la revolución, de dividir las tierras por cabezas y con igualdad rigurosa, sino un sistema medio que sin tener todos los inconvenientes de los otros, era más conforme con los sentimientos moderadamente democráticos de la nación y con los principios económicos, que á la sazón prevalecían entre los hombres ilustrados.

No se crea, sin embargo, que aquella ley memorable carecía de defectos, ni de dificultades de ejecución: tenía desde luego la falta gravísima de ser ineficaz para cumplir uno de sus principales fines, que era dividir y mantener dividida la riqueza con igualdad calculada, puesto que no habían de conservar sus suertes los propietarios que las obtuvieran sin capital suficiente para cultivarlas. Su ejecución había de dar lugar, como lo dió, á abusos é injusticias, si es que no se frustraba en muchas partes el objeto del legislador, por la inerte resistencia de los pueblos enemigos de novedades y apegados á sus antiguos hábitos. Aquella obra adolecía de los mismos defectos de las doctrinas que la habían inspirado; prometía

(1) Ley 17, t. 25, lib. 7, Nov. Rec.

más de lo que se podía cumplir y era un tanto extemporánea y prematura. Así la mayor parte de las villas y concejos la recibieron con estóica indiferencia, sin apresurarse á participar de sus beneficios y sólo en pocos lugares tuvo cabal cumplimiento.

De este modo siguieron los pueblos en la tranquila posesion de sus Propios, y el gobierno continuó interviniendo en su administracion, sin cuidarse de la observancia de la nueva ley, hasta que Carlos IV volvió á poner la mano sobre sus bienes, aunque entónces no ya movido por los mismos sentimientos que su antecesor, sino por un interés fiscal y de circunstancias. Para subvenir á los gastos públicos, que habian crecido extraordinariamente, á la vez que se disminuian los ingresos, dispuso aquel monarca en 1792, que el sobrante de los Propios y Arbitrios, despues de cubiertas las obligaciones, se invirtieran por espacio de ocho años, en la extincion de vales reales, á ménos que ocurriera hambre ó grave necesidad pública (1). Mas pronto hubo de reconocerse la insuficiencia de este recurso, y así fué sustituido en 1794, con una contribucion de 10 por 100 sobre el producto integro de los Propios y Arbitrios del reino, hubiese ó no sobrante. No bastando tampoco este impuesto para remediar las urgencias del Erario, se aumentó en 1798, disponiéndose que la mitad de los sobrantes de las rentas de los mismos Propios, despues de cubiertos sus gastos y la contribucion del 10 por 100, se impusiera á censo en la Caja de Amortizacion (2).

II.

NUEVOS REPARTIMIENTOS DE TIERRAS CONCEJILES.

Al comenzar el presente siglo era ya generalmente conocido y admirado el célebre *Informe* sobre ley agaria, en el cual señalaba Jovellanos, como una de las causas del atraso de la agricultura, los baldíos y tierras concejiles, y pedia su reduccion á propiedad particular, por los medios que se juzgaran más adecuados, segun las circunstancias de las provincias y pueblos. La opinion de las personas ilustradas era tambien favorable á esta reforma; y así aunque el gobierno de Carlos IV no hizo nada para llevarla á efecto, las Cortes de Cádiz hallaron suma facilidad para decretarla. Diputados ilustres y ciudadanos celosos presentaron á aquella Asamblea diferen-

(1) Ley 20, t. 16, lib. 7, Nov. Rec.

(2) L. 52 y nota, 82 y 83, t. 16, lib. 7, Nov. Rec.

tes proyectos para reducir á propiedad particular las tierras baldías, realengas y de Propios, aplicándolas á la vez en parte, á premiar servicios de los soldados que defendían nuestra independencia contra la Francia. Encargada de informar sobre este asunto la comision de agricultura, presentó su dictámen favorable en 22 de Febrero de 1812, fundado en las sabidas razones de la mala administracion de los pueblos, la imposibilidad de remediar los fraudes y dilapidaciones de que eran objeto los bienes de Propios, y lo mucho que ganaria la agricultura, entregándose á la vigilancia del interés individual todas las tierras baldías y concejiles. No deducia, sin embargo, la comision de estas premisas, que el gobierno pudiera desde luego enajenar por sí y del modo que juzgara conveniente, todos los bienes municipales. Siguiendo á Jovellanos, reconocia no deberse adoptar un mismo sistema de enajenacion en toda la Península, pues en unas provincias convendria hacerla á censo redimible, en otras á venta real y en otras á foro; así como deberian variar, segun los lugares, las cabidas de las suertes repartibles. Tambien convenia con el ilustre autor del *Informe*, en dejar á las corporaciones locales la facultad de decidir acerca de la oportunidad y de la forma en que deberian hacerse tales enajenaciones (1).

Conforme con este dictámen, acordaron las Córtes el decreto de 4 de Enero de 1815, en el cual se dispuso que los terrenos baldíos, realengos y de Propios de España y Ultramar, excepto los ejidos de los pueblos, se repartieran y redujeran á propiedad particular plena y acotada, que nunca habia de pasar á manos muertas. En este repartimiento habian de ser preferidos siempre los vecinos de los pueblos usufructuarios de las tierras baldías ó dueños de las concejiles. Las diputaciones provinciales á quienes tocaba la ejecucion del decreto, deberian proponer á las Córtes, por conducto del gobierno, el tiempo y la forma en que podria hacerse el repartimiento en cada provincia, y los terrenos que para el servicio público, habian de conservar los pueblos. En el mismo decreto se dieron, sin embargo, algunas reglas sobre el modo de proceder á la division. La mitad de los terrenos baldíos y realengos habia de quedar hipotecada á la Deuda nacional, y con preferencia, á los créditos de suministros de guerra, posteriores á 1808 que tuvieran á su favor los vecinos y comuneros de los pueblos respectivos. Aquella mitad habia de enajenarse, admitiendo en pago estos créditos á los mismos vecinos y comuneros preferidos. Lo otra mitad de los baldíos debia repartirse dividida en suertes de valor igual, entre los soldados cum-

(1) *Sesiones*, t. 12, pág. 88.

plidos y los oficiales retirados ó inútiles, que hacian la guerra de la Independencia, procurando que cada suerte bastara para mantener á un individuo. Hecho el repartimiento entre los militares, se separarian de los terrenos baldíos y realengos sobrantes, los que fueran más adecuados para el cultivo, y dividiéndolos en suertes proporcionadas á la tierra repartible (que no habia de exceder de la cuarta parte del total), se distribuirian por sorteo entre los vecinos que las pidieran y no las tuviesen propias. Solamente en el caso de que los baldíos y realengos no alcanzaran para hacer el primero ó el segundo reparto, se acudiria para formar las suertes á las tierras sobrantes de Propios, las cuales se darian entónces con la obligacion de pagar por ellas un cánón ánuuo, redimible y no inferior al anterior rendimiento de la heredad respectiva.

Este decreto ofrecia gravísimas dificultades de ejecucion, y aún ejecutado, no habria correspondido á los fines de los legisladores de Cádiz. Aunque las diputaciones provinciales hubieran procurado con el más vivo celo la expropiacion de los baldíos, que una preocupacion arraigadísima consideraba necesarios para la cria de ganados; aunque hubieran combatido con el mayor empeño el interés de los pueblos en la conservacion de sus Propios y Comunes, la operacion, que segun el decreto debia preceder al reparto, exigia largo tiempo y cuantiosos gastos. ¿Cómo se distinguirian los terrenos baldíos y realengos sin hacer de ellos un apeo y deslinde general? ¿Cómo se partirian en dos mitades y cada una de éstas en suertes de valor igual, sin medirlos y tasarlos todos escrupulosamente? Pues sólo estas operaciones preliminares indispensables, que debian dar lugar á multitud de cuestiones de solucion difícil, exigian un plazo de muchos años y muchos millones de gasto.

Pero aún suponiendo que se hubiera consumado la distribucion, no se habria realizado el fin propuesto de crear una multitud de cortos propietarios labradores, que acrecentaran extraordinariamente la riqueza. ¿Con qué capital habian de cultivar sus heredades tantos militares cumplidos ó retirados, que nunca supieron, ó con el desuso, olvidaron las artes agrícolas, y que, ó carecian de todo patrimonio, ó no contaban sino con el indispensable para su material sustento? ¿Qué mejoras y adelantamientos harian en la labranza los pelentrines y braceros que trabajando todo el día en tierras ajenas, casi no ganaban lo necesario para mantener sus familias? Si tales planes se hubieran realizado, los nuevos propietarios no habrian sabido qué hacer con sus tierras, y los más se habrian apresurado á enajenarlas por cualquier precio á los ricos, ó las habrian dejado abandonadas é incul-

tas, si no hallaban quien se las comprase. Mucho más razonable fué el plan de Carlos III, pues al ménos eran en él preferidos para el repartimiento, los labradores dueños de una á tres yuntas, sin tierra propia en que utilizarlas; y en las nuevas poblaciones fundadas bajo los auspicios del mismo monarca, no sólo se dieron terrenos á los colonos, sino animales y aperos de labranza.

El decreto de 1815 quedó derogado y sin efecto con todos los de las Córtes, en 1814; pero el mismo Fernando VII, en el primer periodo de su gobierno absoluto, volvió á pensar en la enajenacion de los bienes comunales, aunque no ya con la mira generosa de las Córtes, sino con la fiscal é interesada de Carlos IV. Falto aquel monarca de recursos con que atender á todas las necesidades públicas, mandó vender por real cédula de 1818, todos los baldíos y realengos, é invertir su importe en el pago de los intereses y en la amortizacion de la Deuda pública. Al dictar en el año siguiente las reglas para llevar á efecto esta enajenacion, exceptuó de ella los terrenos arbitrados y apropiados con facultad real, los baldíos de aprovechamiento comun y los pastos que necesitaran los ganados trashumantes cerca de las cañadas y abrevaderos. Las tierras habian de dividirse, para su enajenacion, en suertes de distintas cabidas, con destino las menores á los braceros, y las mayores á labradores vecinos, dueños de yunta, pero sin bienes raices suficientes. Estas personas habian de ser exclusivamente admitidas en primer lugar al remate en venta de las suertes, y sólo cuando ellas faltaran, tendrían derecho á pujar, por su orden, los vecinos ricos, los comuneros y los forasteros.

Este sistema de enajenacion era por lo general frustratorio. No admitiéndose postura menor que la tasacion respectiva, los braceros y yunteros sin tierra propia, no tenían más derecho que el de comprar por todo su precio la finca subastada, con preferencia á los ricos, y eso cuando otro licitador de los preferidos no mejorara la postura; y como aquellos licitadores eran justamente los de medios más escasos, su preferencia era ilusoria, quedando abandonadas las subastas á los vecinos acomodados, con lo cual las tierras que se vendiesen, más bien que para formar patrimonio á los pobres, servirían para acrecentar el de los acaudalados.

Mas ni aún siquiera llegó este caso, puesto que la real cédula de 1818 no tuvo efecto, ya por falta de tiempo para instruir los expedientes y practicar las operaciones preliminares á la venta, y ya tambien por la resistencia de los ganaderos, enemigos declarados de toda reduccion de baldíos. Así se dió lugar á que, restablecida en 1820 la Constitucion de 1812, se es-

timase restablecido igualmente el decreto de 1813 y trataran las Cortes de su ejecucion. El gobierno constitucional ofreció desde luego los baldíos como hipoteca de la Deuda pública. Varios diputados pidieron la revision de aquel decreto, para que se simplificaran los procedimientos, cuya prolijidad dificultaba el reparto. Alguno otro propuso que se suspendiera inmediatamente su ejecucion, hasta que se pudiera determinar la parte de baldíos que debia destinarse al pago de la Deuda, conocidos el importe de aquellos y de ésta (1). Mas á unas y otras proposiciones se oponian el deber y la necesidad de satisfacer la deuda contraida con los militares de la última guerra, el deseo de dar al nuevo régimen político numerosos amigos y defensores, ligados á él por los vínculos del interés y la gratitud, y la conveniencia de no retardar más tiempo la desamortizacion de tan importante riqueza. Prevalciendo al fin estas consideraciones, las Cortes acordaron que el gobierno pusiera en ejecucion desde luego el decreto de 1813, extendiendo al ejército, que habia proclamado últimamente la Constitucion, los premios concedidos á los militares de la guerra de la Independencia; y aprobaron una proposicion que autorizaba al gobierno para determinar por sí la forma del repartimiento, con arreglo á ciertas bases, que las mismas Cortes habian de acordar, á propuesta de la comision de agricultura (2).

Impacientes los legisladores de 1820 por llevar á cabo una novedad, de que tantos bienes se prometian, votaron sin discusion y como resultado de la proposicion referida, la orden de 8 de Noviembre del mismo año. Al proponerla la comision de agricultura, declaró que era un mero reglamento para la ejecucion de la ley de 1813, pero en realidad alteró sustancialmente su espíritu y sistema. Esta ley confiaba á las diputaciones provinciales la ejecucion del repartimiento, por suponer en ellas más imparcialidad, ilustracion y garantías de acierto, que en las corporaciones municipales, inmediatamente interesadas en la operacion: la orden de 1820 encomendaba la propuesta de los repartos á los pueblos mismos y su aprobacion al gobierno, previo informe de las diputaciones provinciales. No solamente se simplificaron segun la misma orden las operaciones preliminares al repartimiento que exigia el decreto anterior, sino que se varió lo dispuesto en el mismo sobre la renta que deberian pagar los adquirentes de tierras de Propios, que no tuvieran derecho á serlo por título gratuito.

(1) Proposicion del diputado Lobato en la sesion de 19 de Julio de 1820. *Sesiones*, t. 1, p. 187.

(2) *Ses.* de 1.º Set., t. 4; y del 10 y 27 del mismo mes, t. 5.

Con todo esto no se llegaron á vencer, sin embargo, las más graves dificultades que ofrecia la ejecucion del decreto de las Córtes de Cádiz. Aún reducidas las formalidades preliminares á los repartimientos, las que quedaron, sin ser todas las necesarias para su objeto, tropezaban con grandes obstáculos, que no solian remover los ayuntamientos. Era tambien origen de no pocas dificultades la redaccion un tanto descuidada de las mismas leyes que habian de aplicarse, la vaguedad de algunos de sus preceptos y su silencio sobre puntos tan importantes como el repartimiento de los arbolados y de los terrenos pantanosos ó incultos. Por último, crecieron tanto estos inconvenientes, que las Córtes de 1822 juzgaron indispensable nombrar una comision que informara sobre ellos y propusiera la resolucion oportuna.

Justo es reconocer, sin embargo, que las principales dificultades de la empresa nacian, más que de la poca habilidad del legislador, de la naturaleza misma de las cosas. Queriase repartir todas las tierras baldías y concejiles, pero no inconsideradamente, ni sin bastante conocimiento de causa, lo cual obligaba á practicar operaciones largas y costosas. Pretendíase por otra parte verificar inmediatamente el repartimiento, lo cual no era conciliable con la práctica de aquellas operaciones. Deseábase que estos terrenos no salieran del poder de los vecinos y comuneros, que tenían derecho á aprovecharlos, y sin embargo se destinaba la mitad de ellos á la extincion de la Deuda pública, para lo cual era menester venderlos al mejor postor, aunque fuese forastero ó extraño. Así es que, convencida la comision de 1822 de la imposibilidad de conciliar fines tan opuestos, optó por lo que en su concepto era más importante, á saber, la enajenacion inmediata de los Propios y baldíos.

Propuso la comision con este objeto que se refundieran en una sola ley los decretos y órdenes dictados hasta entónces sobre la materia, reformando sus disposiciones, en cuanto fuera necesario para reducir inmediatamente al dominio particular las tierras municipales. El decreto de 29 de Junio de 1822, resultado de este dictámen, mantuvo el método de repartimiento adoptado en los anteriores, pero con alteraciones muy graves, más favorables á los partícipes que á los pueblos. Fué una de las principales aumentar la cabida de las suertes repartibles, á fin de que cada una tuviera la necesaria para mantener cinco personas, en lugar de una sola, segun ántes se habia propuesto. Así se quintuplicó la cantidad de tierras que forzosa y gratuitamente habia de repartirse entre militares y vecinos no propietarios. Extendióse además el derecho de obtener suerte gratuita á los vecinos,

que aunque tuvieran tierra propia ó ganados, no igualara su valor al de una de las suertes repartibles. Todos los militares y vecinos que tuvieran las condiciones referidas, habian de recibir su suerte de la cabida indicada, y si no bastaran para ello los realengos y baldíos, habia de echarse mano de las tierras labrantías de Propios, siempre que lo que de ellas se tomara, no excediera de la cuarta parte de las mismas. Así en este caso, podrian ser expropiados los pueblos de la cuarta parte de su capital productivo, contra su voluntad y sin compensacion alguna. Hecha esta primera distribucion gratuita entre las personas favorecidas, habian de repartirse las tierras de Propios sobrantes entre los que las solicitaran, pero con la obligacion de pagar por ellas un cánon del 2 por 100 de su importe. En el señalamiento y reparto de las suertes se habia de proceder breve y sumariamente y con omision de diligencias, que si algunas veces podian ser innecesarias, contribuian las más á impedir la dilapidacion y el fraude. Era imposible que los baldíos aplicados á la extincion de la Deuda pública, se enajenaran por su precio, si solamente habian de poder adquirirlos los vecinos y comuneros de los respectivos pueblos. Esta condicion frustraba el objeto de la subasta y abria el camino á confabulaciones inevitables. Por eso mandaron las Córtes que fuesen admitidos á esta pública licitacion los postores forasteros, si bien reservando á los comuneros y vecinos el derecho de tanteo, como condóminos.

Es de admirar que una ley de tanta trascendencia y que comprometia intereses tan respetables, no fuera objeto de discusion empeñada y detenida. La escasa que hubo versó sobre la necesidad de conservar los montes, ó sobre la conveniencia de dejar á salvo ciertos intereses locales. Algunos diputados se opusieron al repartimiento de las tierras de arbolado, fundándose en que éste, lejos de conservarse y prosperar, se destruye y desaparece bajo el dominio privado; por cuya consideracion se salvaron del reparto los montes altos, propios para la construccion naval. Otros diputados abogaron por los ganaderos de ciertas comarcas, cuyos rebaños, verificada la enajenacion de los baldíos, podrian, en su juicio, carecer de pastos. Y es aquí digno de notarse cómo muchos de aquellos ardientes reformistas, que tanta fé mostraban en sus teorías cuando tomaban parte en las discusiones generales, al tratarse de su aplicacion á determinados intereses, pedian excepciones á su favor, como si no estuvieran convencidos de la bondad de sus propias doctrinas. Sin discusion, y al parecer por unanimidad, adoptaron las Córtes el principio de reducir á dominio privado las tierras baldías y concejiles; mas al establecerse las reglas neces-

rias para su aplicacion, unos diputados pidieron que se conservaran los propios de sus provincias, otros los terrenos baldíos de las cuatro sierras nevadas, y otros las dehesas potriles, fundándose todos en razones especiales de localidad, que á ser admitidas, habrian dado por consecuencia la anulacion del principio de la ley. La teoría, sin embargo, prevaleció al fin sobre los intereses locales.

III.

DESAMORTIZACION Y ENAJENACION DE LAS TIERRAS CONCEJILES.

Abolido el régimen constitucional con todas sus leyes, cuando apenas habia empezado á ejecutarse la de 1822, no llegaron á sentirse sus efectos. Ni volvió á pensarse en la desamortizacion de las propiedades municipales, hasta que entrando otra vez el gobierno en el camino de las reformas, la Reina gobernadora, en 24 de Agosto de 1834, dictó una real orden autorizando á los ayuntamientos para enajenar sus bienes raices en venta real ó á censo. Mas respetando entonces el legislador el dominio de los pueblos, no les obligó á vender sus bienes, ni se apoderó de ellos para enajenarlos por su cuenta, ni aún siquiera dispuso que el producto de los enajenados voluntariamente se invirtiera en la Deuda pública, aunque persuadido de la conveniencia de que las corporaciones municipales no poseyeran propiedades de administracion costosa ú ocasionada á abusos, trató de promover y facilitar su enajenacion, sujetándola en virtud del alto patronazgo de la corona sobre ellas, á ciertas reglas que las defendieran contra confabulaciones y fraudes. Así la real orden citada se limitó á determinar el modo de instruir los expedientes necesarios para acordar las enajenaciones, la forma en que éstas habian de verificarse y la intervencion que habia de tener en ellas la autoridad local, la provincial y la suprema; disponiendo entre otras cosas, que no se adjudicaran las fincas por ménos de las tres cuartas partes de su tasacion: que se pagara el precio en dinero, en efectos de la Deuda pública por su valor de cotizacion, ó en créditos contra los mismos pueblos; y que el arbolado alto de los terrenos se vendiese y no se diera á censo, aunque el suelo se enajenara en esta última forma. Nada se determinó entonces acerca del destino que habian de dar los pueblos al capital que realizaran por estas ventas, y como se estimase necesario limitar en este punto el arbitrio de los ayuntamientos, se dictó la real orden de 5 de Marzo de 1835, mandando entre otras cosas, que el importe de las

ventas se invirtiera por su órden: 1.º en redimir censos y pagar deudas que devengaran intereses; 2.º en extinguir créditos y obligaciones de justicia, aunque no devengaran réditos; 3.º en acabar obras de utilidad pública, suspendidas por falta de medios; 4.º en adquirir billetes al portador de la Deuda con interés.

Mas estas providencias no podian ser tan eficaces para su objeto como deseaban los que las aconsejaron y la necesidad requería. Habiendo de decidir los ayuntamientos la venta de sus fincas, iba á depender esta resolución de quien más interés solía tener en excusarla. Ofrecían aún ménos estímulo estas enajenaciones por haberse señalado con poco acierto los objetos en que había de invertirse su producto. Pocos ayuntamientos querrian desprenderse de sus fincas con el solo objeto de pagar deudas antiguas, y ménos aún para adquirir billetes del Tesoro, que mal podían ser estimados donde apenas eran conocidos, como sucedía en la mayor parte de las provincias. Algun pueblo que hubiera comenzado obras de pública utilidad, vendería tal vez parte de sus Propios para concluir las; pero ¿cuál haría lo mismo sabiendo que no podía invertir su producto en una obra nueva, quizá más necesaria, y que por el contrario, se le obligaría á destinarlo al pago de deudas antiguas ó á comprar papel del Estado en que no tenía confianza?

Así es que con arreglo á esta nueva legislación, se enajenaron pocos bienes de Propios, y no siempre, en verdad, con beneficio de los pueblos. Pero como aunque ninguna de las leyes promulgadas desde el último siglo sobre esta materia, haya producido todo el resultado á que aspiraban sus autores, cada una había ido desmembrando algunos bienes del patrimonio municipal, hallóse éste al fin considerablemente disminuido, al paso que los gastos municipales habían ido acrecentándose. Por otra parte, la variedad y confusión de tantas leyes derogadas, restablecidas y reformadas, habían producido cierto estado de incertidumbre en las posesiones y derechos emanados de ellas, del cual hubieron de aprovecharse algunos pueblos para recuperar fincas que les pertenecían ántes. Esto dió lugar á que las Córtes resolvieran en 18 de Mayo de 1837 mantener en su posesión á los que tuvieran tierras de las repartidas en 1770, y pagaran un cánón por ellas; á los que las tuvieran procedentes de los repartimientos hechos por los ayuntamientos ó juntas durante la guerra de la Independencia ó en virtud del decreto de las Córtes de 1813, ó de otras órdenes superiores competentes; y á los que hubieran roturado terrenos arbitrariamente, siempre que los hubiesen mejorado y pagaran por ellos un cánón de 2 por 100 sobre el valor

primitivo de la finca. Llevando aún más adelante el propósito de dar cumplimiento á las anteriores leyes, el Regente del reino dispuso en 4 de Febrero de 1841, no ya sólo que se mantuviera en su posesion gratuita á los militares y braceros que adquirieron terrenos en virtud del decreto de 1815, sino que se les restituyeran los que hubiesen perdido á consecuencia de su derogacion, y se les reintegrara el valor de aquellos que hubieran sido despues enajenados.

Así vino preparándose por espacio de noventa años la ley vigente, que ha acabado al fin con casi toda la propiedad municipal. Hasta 1854 se habia respetado en cierto modo el dominio de los pueblos, pues si muchos de sus bienes se habian repartido y enajenado, casi siempre se habia procurado distribuirlos de manera que quedaran en poder de vecinos ó comuneros, partícipes en su propiedad. Ni aún en sus mayores necesidades se habia atrevido el gobierno á obligar á los pueblos á vender todos sus Propios para favorecer al Erario. Algo de esto se intentó en 1847, aunque con éxito desgraciado; volviósse á tratar de ello en 1852, pero consultados los pueblos, sólo 2.000 manifestaron su parecer, y de ellos 20 únicamente asintieron á la venta, siendo de notar que sólo seis de éstos poseian bienes de propios (1). En vista de lo cual, se limitó el gobierno de entonces á autorizar á los pueblos de dos provincias en que se iban á construir ferro-carriles, para vender sus Propios é invertir su importe en ellos (2). Y como de esta enajenacion resultaria perjudicado el Tesoro, porque transferidos aquellos bienes á particulares, dejarían de pagar el impuesto del 20 por 100, que satisfacían en manos de los ayuntamientos, se reservó el Estado la quinta parte de su importe, así como del de los demás bienes de igual procedencia, que se enajenaran por disposiciones ulteriores, á fin de aplicarla á la extincion de la Deuda amortizable (3).

Cuando al fin se decidió el legislador á convertir en forzosas las enajenaciones hasta entonces voluntarias, fué despues de la revolucion de 1854, época de gran penuria en la Hacienda y de pretensiones exageradas en cuanto á la desamortizacion de la propiedad. Para justificar esta novedad importante se convirtió en dominio de cierta especie el alto patronazgo del Estado sobre los bienes de las corporaciones municipales; se sostuvo como

(1) Discurso del diputado D. Cláudio Moyano, en la discusion de la totalidad del proyecto de la ley de desamortizacion sancionada en 1.º de Mayo de 1855.

(2) Reales decretos de 28 de Mayo y 28 de Agosto de 1852.

(3) Real decreto de 10 de Setiembre de 1852.

doctrina corriente, la de que el gobierno puede cambiar cuando lo tenga á bien, la forma de la propiedad colectiva; que sin faltar á las leyes, la corona habia dispuesto siempre de los bienes de los pueblos; que de la obligacion de éstos á contribuir con la quinta parte de la renta de los Propios, se seguia naturalmente el derecho del Estado para disponer á su arbitrio de la quinta parte del capital; y que la mala administracion de estos bienes era en derecho, causa bastante para que el gobierno los enajenara por sí, obligando á los pueblos á invertir su importe en títulos de la Deuda pública ó en bancos hipotecarios.

Véase cómo se tocan las exageraciones más opuestas. La teoría del dominio eminente del Estado fué inventada por los jurisconsultos del imperio y sostenida despues, aunque con distinto fundamento, por muchos de la Edad Media, para restringir las facultades del dominio privado; y en el siglo XIX vuelve á invocarse por los que pretenden *individualizar*, si así puede decirse, y hacer enteramente libre de vínculos con el Estado, toda la propiedad territorial. ¡Como si las máximas del despotismo se pudieran poner á servicio de la libertad! ¿Pero no es una de ellas tambien la de que el soberano puede cambiar á su arbitrio la forma de la propiedad en el sentido que se da á esta frase? Porque si tal cambio significa el despojo de los bienes propios, trocándolos por otros de distinta índole y de valor más ó ménos problemático, contra la voluntad del propietario, el derecho de propiedad es completamente ilusorio, puesto que no depende sino del legislador su entidad y su subsistencia. Lo mismo serviria esta doctrina para amortizar en provecho del Tesoro los bienes desamortizados, que ha servido para desamortizar los que no lo estaban. Verdad es que muchos reyes privaron á los pueblos de alguna parte de sus bienes Comunes, pero aunque para ello hubieron de alegar razones de circunstancias, al fin vinieron á reconocer siempre que las leyes no autorizaban tales actos, y muchas veces ordenaron la restitution ó el resarcimiento de lo ocupado ó vendido.

No era ménos infundada la suposicion de que el derecho al impuesto producía el derecho á una parte proporcional de la materia imponible. Si la contribucion del 20 por 100 de Propios hubiera tenido el carácter de censo redimible sobre los bienes concejiles, habria sido legítima aquella consecuencia; ¿pero es lo mismo el tributo que se discute y aprueba todos los años, y puede disminuirse ó suprimirse del todo, que la renta fija, no sujeta á tales eventualidades? Más de una vez, mientras existió aquel impuesto, se trató de su supresion ó reduccion, por razones que si entonces

no prevalecieron, habrian podido prevalecer más adelante, habiendo conservado los pueblos sus bienes. Si aquella doctrina era aplicable á los pueblos como contribuyentes por sus Propios, lo mismo debería serlo á los particulares contribuyentes por sus bienes privados; y consignada en nuestras leyes, podria el gobierno en sus apuros exigir de ellos una parte de su capital, en relacion con el impuesto que por él satisficieran. Y aunque éste al pronto quedara abolido, despues se sentiria la necesidad de restablecerlo, y así con el tiempo se podria apoderar el Estado de todas las propiedades. Verdad es que pudo estimarse como precedente de esta singular doctrina, la que en 1852 sirvió de fundamento para tomar á los pueblos que destinaron sus Propios á la construccion de ferro-carriles, la quinta parte de su precio; pero entre lo uno y lo otro habia gran diferencia. Tratábase entónces de pueblos, que acordando voluntariamente la enajenacion de sus fincas, quedarían exentos de todo impuesto, no pagándolo los ferro-carriles; pero en 1855 era el mismo legislador quien ordenaba la enajenacion, contra la voluntad de los pueblos, y habia de embolsarse la quinta parte de su producto.

Ciertamente no conviene al Estado que la dotacion de los pueblos consista en bienes raices: mejor es que estos bienes se hallen en manos de particulares, que suelen hacerlos más productivos; pero esta consideracion no basta para fundar el derecho del Estado á incautarse de los bienes legítimamente poseidos por los pueblos y darles en cambio, y contra su voluntad, efectos públicos sujetos á las eventualidades del crédito. Los menores, las mujeres y los incapacitados, no suelen tener tampoco bien administradas sus propiedades, y sin embargo, nadie se atreverá á sostener que pueda el gobierno tomárselas á cambio de otros bienes de administracion ménos complicada. Las leyes que reconocen y protegen la propiedad, no distinguen entre la individual y la colectiva, que no es más que la suma de varias propiedades individuales, sin otras limitaciones que las necesarias para garantir el derecho de cada condómino. Tan respetable en principio, es á sus ojos lo que pertenece á uno, como lo que corresponde á dos ó á ciento. El más ó el ménos en cuestiones de derecho, no altera la naturaleza de las cosas.

LIBRO IX.

De las cargas y menoscabos de la propiedad.

CAPÍTULO I.

De la expropiacion directa por causa de utilidad pública.

I.

HISTORIA DE LA TEORÍA DE LA EXPROPIACION.

A medida que la propiedad fué soltando los vínculos que por razon de su origen histórico, la sujetaban al interés del Estado ó al colectivo de las familias, comenzaron á pesar sobre ella otras cargas y servidumbres de utilidad comun, bien ó mal entendida, pero todas apoyadas no ya en privilegios de clase, sino en la necesidad de proveer á la salud de la república. Entre estas cargas y menoscabos del dominio, figura en primer término la expropiacion por causa de interés comun, puesto que los motivos que la justifican son los mismos que sirven de fundamento á las otras restricciones y gravámenes del derecho de propiedad. Si la expropiacion total de un inmueble es lícita por aquella causa, no puede dejar de serlo la parcial de bienes ó derechos que se funde tambien en ella. Así, ántes de historiar las otras servidumbres y gabelas que pesaron sobre los inmuebles so color del público interés, conviene conocer la historia de la expropiacion legal, sobre cuya teoría no siempre han andado conformes las opiniones, ni las leyes con la práctica.

La facultad de expropiar, no aparece consignada en ninguna de las legislaciones que son fuente de la nuestra. Los emperadores romanos no se la reservaron en sus códigos, aunque la practicaron con sobrada frecuencia. Los reyes visigodos tampoco necesitaron escribirla para usarla con grande arbitrariedad. En nuestra Edad Media las propiedades de juro de heredad, que eran las más completas y perfectas, gozaban tal independencia, que no debían servicio alguno al Estado, y mucho ménos el total sacrificio de su propio ser. El derecho canónico no tocaba este punto como ajeno á su competencia. Mas como el hecho era que los príncipes ordenaban la expropiación de sus súbditos, siempre que la juzgaban conveniente, los antiguos glosadores de las leyes imperiales no pudieron dejar de hacerse cargo de ella, admitiéndola como doctrina jurídica y determinando equitativamente sus reglas y condiciones. Prescindiendo de los textos de aquellas leyes que aludian al dominio universal del emperador, ó interpretándolos rectamente como alusivos á la potestad suprema, y no hallando otros más adecuados y explícitos, buscaron en las divinas letras el fundamento de su doctrina. Tal era aquel pasaje de la Historia Sagrada, en que se refiere cómo David pidió á Ornan su campo para levantar en él un altar, á fin de que cesara la peste que asolaba al pueblo, pero ofreciéndole su precio al mismo tiempo (1). Así, pues, era doctrina de los glosadores, resumida por Baldo, que el príncipe puede expropiar á sus súbditos, pero no sin causa, ni sin darles el precio de lo expropiado, y que toda costumbre contraria sería *diabolica consuetudo*, segun la enérgica frase de aquel famoso jurisconsulto.

Ni el Fuero Juzgo, ni el Fuero viejo de Castilla, ni el Fuero Real, ni los fueros provinciales; ni los municipales, adoptaron disposición alguna sobre esta materia. La primera que hubo de dictarse para hacer cesar la arbitrariedad con que se ejecutaban las expropiaciones, fué la consignada en las Partidas, tomada sin duda por los autores, de este código de los primeros glosadores del derecho romano, cuyas obras fueron tambien una de las principales fuentes de su doctrina. Y por cierto que la de la expropiación aparece expuesta de una manera tan cumplida en nuestras leyes alfonsinas, que poco más ha sido menester añadir despues á ellas. En la ley 2, tit. 1.º de la Partida 2.ª, enumera el legislador los casos en que el rey puede tomar las cosas de sus vasallos, que son por yantares y tributos

(1) «Da mihi locum auræ tuæ ut ædificem in eo altare Domino, ita ut quantum valet argenti accipias et cesset plaga a populo.» *Paralipom.*, lib. 1, c. 21, v. 22.

acostumbrados, por usar de ellos el propietario mal y contra derecho, por delito que merezca confiscacion, segun la ley, y «por razon que el emperador oviese menester de fazer alguna cosa en ello que se tornasse á pro comunal de la tierra;» mas en este último caso, añade, «tenido es por derecho (el príncipe) de le dar (al expropiado) ante buen cambio, que vala tanto ó mas, de guisa que el finque pagado á bien vista de omes buenos.» Explicando más estas condiciones la ley 31, tit. 18 de la Part. 5.^a, dice que seria contra derecho dar el rey á uno las cosas de otro; «Fueras ende si el rey las oviesse menester por fazer dellas ó en ellas alguna labor ó alguna cosa que fuesse á pro comunal del Reyno, assí como si fuesse alguna heredad en que oviesse á fazer castillo, ó torre ó puente ó alguna otra cosa semejante destas... Pero dandole cambio por ello primeramente ó comprandogelo segun valiere.» Exponiendo luego el legislador los fundamentos de este derecho soberano, dice en la ley primeramente citada, que «maguer los Romanos que antiguamente allegaron con su poder el sennorio del mundo, fiziessen Emperador, é le otorgassen todo el poder, é el sennorio que avian sobre las gentes, para mantener é defender derecho al pro comunal de todos, con todo esso non fue su entendimiento de fazerle sennor de las cosas de cada uno é que las pudiesse tomar á su voluntad, sino tan solamente por alguna de las razones que de suso van dichas.» Asi, pues, los sábios á quienes D. Alfonso encomendó la redaccion de su código, admitiendo con los jurisconsultos romanistas de la época, la famosa ley régia, como base del derecho público europeo, no concedieron al Estado la facultad de ocupar la propiedad privada, sino en los casos y con las mismas condiciones que lo han reconocido en los últimos tiempos, las legislaciones más escrupulosas en respetar los derechos individuales. Utilidad general reconocida é indemnizacion previa más que suficiente, á juicio de peritos ú hombres buenos, son hoy, como eran para D. Alfonso el Sábio, las condiciones esenciales de la expropiación forzosa.

Mas en tan largo periodo de intermedio, no las leyes, pues no se hicieron nuevas sobre esta materia, ni las antiguas estuvieron siempre en vigor, pero las doctrinas de los jurisconsultos han variado bastante en cuanto á la manera de entender y aplicar aquel principio. La contienda que en este periodo tuvo lugar entre el poder monárquico y los demás poderes públicos, más ó menos autonómicos que se dividian el imperio de la sociedad, no podia ménos de influir en una doctrina que tan de cerca tocaba á las facultades de la corona. En cuanto al poder directo del Estado sobre la propiedad privada, ninguno de nuestros jurisconsultos siguió la doctrina

tiránica de Séneca, que atribuía al César el señorío universal de todas las cosas (1), especie de dominio eminente que si dejaba á los vasallos el uso y posesion de sus patrimonios, era con absoluta sujecion al príncipe. Tampoco halló partidarios en nuestra tierra la interpretacion que Martín y otros jurisconsultos dieron del rescripto en que el emperador Antonino se declaró *dueño del mundo*, al ordenar el cumplimiento de la ley Rhodia (2), interpretacion que hizo exclamar á Tertuliano: *¿Quid erit Dei, si omnia sunt Caesaris?* (3). Al contrario, la impugnaron casi todos nuestros antiguos jurisconsultos, que tuvieron ocasion de referirla, sosteniendo con el autor de las Partidas (4), que el señorío del monarca sobre los bienes privados, era solamente de amparo y proteccion, y no le facultaba de modo alguno para disponer arbitrariamente de ellos.

Pero si todos convenian en que el Estado no tiene sobre las cosas privadas dominio verdadero, sin dejar de reconocer por eso su derecho á servirse de ellas en determinadas condiciones por motivos de utilidad pública, diferian bastante sus pareceres en cuanto á los límites de este derecho y las condiciones de su ejercicio. Los antiguos jurisconsultos castellanos ajustaban generalmente su doctrina á las leyes de Partida ántes citadas; pero en la manera de entender las condiciones de la expropiacion, unos limitaban y otros extendian el poder del Estado. A extenderlo propendian las doctrinas imperialistas de muchos glosadores del derecho romano, que tanto influyeron en las de nuestros pragmáticos: á limitarlo se inclinaban los que reconocian en el derecho natural de gentes los primeros fundamentos del dominio.

De esta doble tendencia ofrecen ya ejemplo los dos insignes glosadores del código alfonsino, Alonso Díaz Montalvo y Gregorio Lopez. Ambos reconocian en el monarca dos potestades; la *ordinaria*, que le sujetaba en su ejercicio á las leyes vigentes, y la *plena* que se sobreponia á ellas. Pero Montalvo (5) afirmaba que el rey no podía expropiar á nadie en virtud de la primera y que la segunda no bastaba para alterar los preceptos del derecho natural y de gentes en que se fundan los dominios, aunque si para ocupar alguno de ellos por causa legítima y con indemnizacion prévia, sin

(1) *De beneficiis*, lib. 7, c. 4. «Jure civili omnia regis sunt et tamen unaquæque res habet dominum et possessorem suum, ad reges potestas omnium pertinet.»

(2) Dig. l. 9, t. 2, lib. 14.

(3) Lib. de idolatria.

(4) Ley 2, t. 1, part. 2.^a

(5) *Glos. ad leg. 2, t. 1, Part. 2.^a et ad leg. 17, t. 6, lib. 3 del Fuero real.*

otras limitaciones. Gregorio Lopez (1) sostenia que la facultad de expropiar era atributo de la potestad ordinaria y limitaba sus restricciones, admitiendo con Decio y otros jurisconsultos imperialistas, que el dominio adquirido por títulos de derecho civil, tales como la prescripcion y la sentencia judicial, podia ser expropiado sin causa; que el dominio de la cosa expropiada se trasmite al Estado ántes de que se pague su precio; que este pago puede diferirse indefinidamente por utilidad comun; que el rey podia excusar tambien el cumplimiento de estas condiciones, cuando expropiaba, usando de la potestad *plena* y no de la *ordinaria*, y que era dudoso si podia excusarlas igualmente cuando expropiaba en virtud de su potestad ordinaria, de cosas públicas portenecientes á pueblos ó corporaciones, y aún de las privadas cuyo dueño hubiese tolerado su posesion por el príncipe ó por quien de éste las hubiese adquirido. Montalvo, aunque escribia un siglo ántes que Gregorio Lopez, y profesaba doctrinas más absolutas en el órden político y más anti-democráticas (2), reconocia en la propiedad mayor independencia del Estado.

La misma tendencia á restringir los derechos del dominio, en caso de expropiacion, mostraron otros jurisconsultos. El valenciano Pedro Belluga escribia en el siglo xv, que bastaba para la expropiacion *cualquier causa* justa, debiendo presumirse tal la que el rey alegara, cuando se pusiera en duda su justicia; que si bien no es lícito expropiar sin alguna causa, el dominio adquirido por títulos de derecho de gentes ó civil, se puede expropiar sin ella del que se funde en la costumbre, y prescindiendo de las leyes alfonsinas, no usadas en su pátria, hizo caso omiso de la indemnizacion de lo expropiado (3). Luis Mexía, fundándose en que «el príncipe y la república son señores de los bienes de los particulares,» les atribuía la facultad de expropiarlos por utilidad pública, sin mencionar tampoco la indemnizacion, á pesar de escribir en Sevilla, donde regian en su caso, ó como derecho supletorio, las leyes de Partida (4). Pedro Nuño de Avendaño, atribuyendo

(1) *Glos. ad leg.* 31, t. 18, Part. 3.^a

(2) Gregorio Lopez opinaba como muchos políticos y teólogos de su tiempo, que era lícita la deposicion por la fuerza del rey tirano. Montalvo habia impugnado esta doctrina un siglo ántes muy prolijamente, á propósito de cierta insurreccion ocurrida entónces contra el rey Valerio de Hungría, admitiendo cuando más el derecho de los pueblos á poner coadjutor al rey que corrompe y tiraniza á sus súbditos. (Véanse las *Glosas* de este autor últimamente publicadas.)

(3) *Speculum principis*, rubr. 32 y 46.

(4) *Laconismus pro pragmatica quo panis pretium taxatur*. Sevilla 1569, Conclus. 6, n. 80.

á la division de términos y á las mercedes reales de tierras el origen de todas las propiedades privadas y concejiles, y negando al rey la facultad de ocuparlas, confesaba, sin embargo, que podia hacerlo siempre que declarase proceder de *ciencia cierta y derogando privilegios*, por cuanto esta cláusula queria decir que obraba *ex plenitudine potestatis* (1). Vazquez Menchaca, invocando la autoridad de Baldo, Aymon, Socino y Alexandro, sostenia que para expropiar de los bienes donados por el rey, no se necesitaba causa alguna, á no ser que su adquisicion hubiese sido confirmada despues por contrato oneroso. Juan Matienzo profesaba la misma doctrina, aunque excluyendo de su aplicacion los bienes donados por la corona á los no súbditos (2). Jacobo Cancer y otros pragmáticos defendian con Gregorio Lopez, no ser necesaria causa de utilidad pública para expropiar de lo adquirido por títulos de mero derecho civil (3), fundándose en que este derecho, á diferencia del natural y del primario de gentes, pende sólo de la voluntad del soberano. Así, aplicando algunos juristas esta doctrina á los derechos procedentes de testamentos ó de fundaciones de mayorazgos, sostenian que era lícito al rey dejar sin efecto las disposiciones testamentarias ántes que el heredero aceptara la herencia; privar de su legitima á los hijos, autorizando la fundacion de mayorazgos; alterar en perjuicio de los sucesores inmediatos, el orden de suceder establecido en ellos, sobre todo en los instituidos con facultad real ó con bienes donados por la corona (4); y dictar providencias en daño de tercero, sin prévia indemnizacion, no siendo grande el perjuicio, ó leyes generales con igual efecto, cualquiera que fuese la importancia del daño.

La competencia del soberano se pretendia justificar en todos estos casos, con la llamada *potestad plena ó absoluta*, la cual no teniendo más límites que los de la voluntad y libre alvedrio del soberano, no podia ser resistida, ni residenciada por los vasallos. Así, segun los jurisconsultos á que aludo, todo aquello que el rey no debia hacer por su potestad ordinaria, podia hacerlo *ex plenitudine potestatis*, sin más regla ni norma que la que le dictase su razon, la equidad ó la conveniencia. No querian decir con esto, que lo que era injusto de suyo, dejara de serlo cuando el rey lo ordenase en uso de su potestad plena, ni que ordenándolo, dejase de co-

(1) *De exequendis mandatis regum Hispanie*, c. 12.

(2) *Comment. ad leg.* Recop. lib. 5, t. 10, glos. 1.^a

(3) *Var. resolut.* part. 3, c. 3, n.º 43 y c. 13, n. 215.

(4) Molina, *De primogeniis Hispanie*, lib. 2, c. 7 y lib. 4, c. 3. Cancer, *Var. resolut.* lib. 3, c. 3, n. 66. Gonzalez Salcedo, *De lege politica*, c. 14, n. 28.

meter pecado, sino que su competencia no estaba limitada por otras leyes que las naturales, y que así podía prescindir de las positivas en casos determinados, como resolver según su conciencia, en todos aquellos que no estuviesen previstos por las mismas leyes. Por lo tanto, el monarca podía privar de un derecho civil á cualquiera de sus vasallos; si lo hacia por causa bastante de utilidad pública, obraba rectamente; si lo hacia sin motivo justo, cargaba su conciencia; pero en ámbos casos era el acto legal y válido, y nadie tenia derecho á pedir cuenta de él en la tierra. Solamente cuando el derecho expropiado era alguno de los naturales que el legislador no crea, era su expropiacion, sin causa justificada é indemnizacion cumplida, un acto ilegal, improcedente y nulo.

Mas para honra de nuestra patria, debo decir que estas doctrinas de origen extranjero, encontraron en ella pocos adeptos, pues los más y los más graves de nuestros jurisconsultos escritores las impugnaron con energía. D. Diego Covarrubias, Gerónimo Cevallos, Juan Matienzo, Ario Pinelo, el portugués Luis Molina, Calixto Ramirez y otros varios defendieron en este punto la sana doctrina, ya negando al rey la *potestad absoluta*, por considerar *falsísima y absurda* la distincion inventada entre ella y la *ordinaria*; ya no reconociendo en el Estado la facultad de derogar las disposiciones testamentarias, por ser los testamentos actos de dominio fundados en el derecho natural (1); ya probando que traen su origen de este derecho los títulos de dominio llamados de derecho civil, y que por ello son tan dignos de respeto como los que pasaban por obra del derecho de gentes (2); ya atribuyendo la misma irrevocabilidad á todo derecho concedido por la corona, mediante precio ó en recompensa de servicios pasados ó futuros; ya defendiendo que la causa pública, necesaria en toda expropiacion, no debia presumirse, sino alegarse y probarse, y que la indemnizacion no podia diferirse ni menguarse *ex plenitudine potestatis*, por cuanto esta potestad no debia nunca emplearse en daño de tercero (3); ya, en fin, negando al soberano la facultad de alterar las fundaciones vinculares y los derechos adquiridos á poseer en lo futuro, á ménos de hacer lo uno ó lo otro por utilidad pública y con prévia indemnizacion (4). Con estas indis-

(1) Covarrubias, *Var. resolut.* lib. 7, c. 6. Pinelo, *De rescindenda venditione*, pars 1.^a, c. 2.

(2) Cevallos, *Speculum aurei opinionum communium contra communes*. Quest. 906. Matienzo, *Comment.* etc., lib. 5, t. 10, glos. 1.^a

(3) Matienzo, *ibid.*

(4) Molina, *De just. et jure*. Disput. 174, n. 26 y 31. Calixto Ramirez, *De lege regia*, pár. 28, n. 15 y pár. 30, n. 42 y sig.

pensables condiciones, ninguno desconocía en el Estado la facultad de disponer de los bienes ajenos; pero la potestad absoluta, en cuya virtud se creía que podía eximirse el monarca del cumplimiento de las leyes, privar de derechos adquiridos más ó ménos realizados, callando la causa ú omitiendo la indemnización y dejar sin efecto los contratos y las últimas voluntades, fué condenado por varios de nuestros jurisconsultos con la mayor severidad. Covarrubias sostenía que lo que el rey no puede hacer en virtud de su potestad ordinaria, es ilícito y no debe ser considerado sino como un acto irregular de fuerza, indigno de ocupar la atención del jurisconsulto; Pinelo y otros escritores afirmaban que la *plena potestas*, ó la potestad absoluta era «una tradición inhumana que debía ser llamada más bien *peccandi potestas* ó *absoluta tempestas* y tiranía,» y que no era admisible, ni aún con los temperamentos de que el perjuicio que cause sea leve y no tenga efecto en daño de tercero.

Pero como por más que la teoría se negase, se sentían tanto en España como en otros reinos los tristes efectos de esta potestad, otros jurisconsultos no osaban negarla en principio y trataban sólo de desnaturalizarla, fijándole ciertos límites. Así, Calixto Ramirez, entre otros, enseñaba que la potestad plena no tenía aplicación sino á falta de leyes positivas, y que aunque facultaba para prescindir de éstas alguna rara vez, mediante causa legítima, que debía presumirse, por más, que no se expresase, no había de tenerse por tal la llamada razón de Estado, ni había de entenderse que semejante potestad autorizaba para violar, por cualquiera otro motivo, contratos consumados, derechos de tercero ú otras obligaciones prescritas ó permitidas por la ley natural.

Vamos ahora cómo se han realizado en España las grandes expropiaciones y el juicio que en su tiempo han merecido.

II.

EXPROPIACION DE LOS INDIOS DE AMÉRICA.

Bajo el influjo de las doctrinas favorables á la potestad del Estado sobre la propiedad privada, y con el auxilio á veces de otros principios jurídicos, ó que pasaban por tales en su tiempo, se verificaron en los dominios de España grandes expropiaciones, sin indemnización alguna. La doctrina tan generalizada en la Edad Media, que confundía la autoridad territorial con el dominio de la tierra, y el comun interés de ensanchar los límites de la monarquía y asegurar en el nuevo mundo el triunfo del evangelio

sirvieron de fundamento ó de excusa á la expropiacion casi universal de los indios de América. Así, descubierto y conquistado aquel nuevo hemisferio, entendióse generalmente que los Reyes Católicos, como señores jurisdiccionales de él, se habian hecho dueños de toda la tierra, inclusa la porcion que poseyeran privadamente los indígenas. Por eso se repartieron en su nombre y por su mandado campos, heredades y edificios á los soldados de la conquista y á los nuevos colonos, ya en encomienda, ó ya por juró de heredad, sin tener en cuenta para nada el derecho y la posesion de los naturales.

Mas aunque fuese generalmente reconocida la potestad del Estado para obrar de esta manera, hubo ya entonces políticos y juristas que, animados de un espíritu más cristiano ó más conforme á las tendencias de la civilizacion, distinguian entre la jurisdiccion y el dominio, y defendiendo la libertad personal de los indios, sostuvieron que no habia derecho para despojarlos de sus propiedades. Esta diversidad de pareceres dió lugar á una interesante y famosa controversia sobre los límites de la potestad del Estado en las nuevas tierras de conquista.

La determinacion de estos límites dependia principalmente de la de otro punto, ántes ya muy debatido, entre juristas, teólogos y políticos, el de si era lícito llevar la guerra y el despojo á las tierras de infieles, sin otra causa que la de su propia infidelidad. El Hostiense, el Panormitano, Baldo, Oldrado, Torquemada, Santo Tomás y otros moralistas habian defendido la conclusion afirmativa. Decian, entre otras cosas, para justificarla, que si bien los infieles adquirieron válidamente sus dominios por derecho de gentes, pudieron ser privados de ellos, desde que constituido Cristo en monarca absoluto del mundo, trasmitió su potestad á San Pedro y sus sucesores, y con ella la de encargar á los reyes la sujecion de los pueblos no cristianos, á fin de asegurar en ellos el cumplimiento de la mision evangélica. Apoyados en esta doctrina Palacios Rubios, Sepúlveda, Gregorio Lopez, Borrel, Sandero, Marta, Cevallos, Bovadilla, Herrera y otros legistas, entendian que el papa Alejandro VI, por su célebre Bula de anexion de las Indias, habia otorgado á los reyes de España la jurisdiccion y el dominio de todo lo que en aquellas habian conquistado y conquistasen, con cargo de cuidar de la conversion de los indios y de la propagacion de la fé católica.

Para fundar más la justicia de la conquista y la necesidad del despojo, alegaban Sepúlveda (1) y Solorzano (2) que, siendo todos los indios bárba-

(1) Apologia pro libro *De justis belli causis*.

(2) *Politica indiana*, lib. 1.º, c. 9.

ros é idólatras, y muchos de ellos antropófagos, sodomitas, incestuosos, polígamos, blasfemos y dados á la embriaguez y á los sacrificios humanos, habia derecho en los cristianos para sojuzgarlos, á fin de que reconociesen la ley natural que quebrantaban con sus torpes vicios, y no impidieran la propagacion de la fé con sus persecuciones y sus escandalosos ejemplos: salvar las vidas inocentes que sacrificaban á sus falsos dioses; corregir sus malas costumbres y traerles al gremio de la iglesia. Sepúlveda admitia el uso indirecto de la fuerza para obligar á los infieles á recibir la fé; y contestando á los que decian que ántes de hacer la guerra á los indios debió intentarse disuadirlos de la idolatría, ponderaba las dificultades prácticas y la ineficacia definitiva de este plan. Solorzano reconocia que los mejicanos, los peruanos y los chilenos se hallaban en cierto estado de civilizacion, que no autorizaba el despojo de sus dominios particulares, aunque sí el de su soberanía; pero convenia en que siendo los demás indios bozales y silvestres, que andaban desnudos por los montes comiéndose unos á otros, era lícito reducirlos á la servidumbre y privarles de sus bienes, por cuanto sólo así podia civilizárseles y hacerles cristianos.

Otros escritores iban aún más lejos en la defensa de esta tésis, afirmando que los indios no eran dueños legítimos de sus bienes, ántes de la conquista, porque careciendo de la razon necesaria para gobernarse á sí mismos, eran siervos incapaces de dominio, y las que llamaban sus tierras debian pertenecer al primero que las ocupase. Ni faltaba siquiera, quien olvidando los anatemas del Concilio de Costanza contra los Valdenses y Wiclef, que atribuian al pecado el efecto de privar del dominio; invocando textos mal entendidos del Génesis y San Agustin; y recordando que la confiscacion era una de las penas de la heregía, opinaban que los indios por infieles, hereges y pecadores, no tenian derecho á conservar sus propiedades.

Pero otros teólogos y canonistas famosos, tales como Inocencio, Juan Andrés, Felino, Decio y Cayetano, habian defendido por el contrario no ser lícita la guerra contra infieles que no tuvieran noticia del evangelio ni ocuparan tierras usurpadas á los cristianos. Esta misma doctrina sostuvieron despues de la conquista, Belarmino, Covarrubias, Suarez, Menchaca, Navarro, Barbosa y otros escritores; y aplicándola al caso el insigne Las Casas, el sapientísimo Soto, el docto Victoria, Córdoba, Acosta, Molina, Valencia, Salas y otros jurisconsultos y teólogos, entendian que la bula de Alejandro VI habia encomendado á los reyes de España el cuidado del conversion y la proteccion de los indios, y su tutela y mantenimiento en

paz despues de convertidos; pero no les facultaba de modo alguno para privarles de sus bienes, como no incurrieran en delitos que mereciesen este castigo. A los que excusaban el despojo de los indios con su infidelidad, contestaba el padre Victoria (1) que los hereges conservan sus dominios mientras que no son condenados por la iglesia con las formalidades canónicas, y que los judios y los mahometanos poseian tranquilamente entonces los suyos. A los que negaban á los indios la capacidad jurídica para el dominio, por razon de su barbárie é ignorancia, oponia el ejemplo de los niños y los dementes á los cuales no priva la ley del carácter de propietarios.

Defensa más esforzada de la propiedad como institucion, aunque no de la de los indios, hizo Gerónimo Cevallos, sosteniendo que si bien los infieles pueden ser debelados y despojados, cuando no admiten predicadores cristianos, la mera infidelidad no es justa causa para declararles la guerra y despojarles de sus propiedades. Fundábase en que el dominio, obra del derecho de gentes, que tiene su raíz en la naturaleza y no en la gracia divina, pueden disfrutarlo los pueblos bárbaros é infieles, lo mismo que los civilizados y cristianos. Mas apoyándose luego en el hecho de haber los indios tratado de impedir la predicacion del evangelio y el tránsito y la morada á que los españoles tenian perfecto derecho, tanto en aquellas como en todas las regiones del mundo, concluia que fué lícito hacerles la guerra, sujetar sus personas y ocupar sus bienes, no á título de infieles, sino de enemigos. A esta guerra y á este despojo tenian igual derecho todas las naciones cristianas, pero Cevallos fundaba el exclusivo de los españoles en la prioridad del descubrimiento y de la ocupacion, con los riesgos y gastos consiguientes á tan árdua empresa; en que la concurrencia simultánea de varias naciones ocasionaria conflictos que perjudicarian al fin de la ocupacion; y en el privilegio pontificio, porque teniendo el Papa potestad sobre todas las cosas temporales que afectan á las espirituales, pudo dar á los españoles la mision exclusiva de llevar á las Indias el evangelio, venciendo la resistencia que opusieran los naturales á su predicacion.

A todos excedió, como es sabido, en la defensa de los indios el insigne Padre Las Casas, riñendo por ellos, ora con su acerada pluma, ora con su elocuente palabra, los más rudos combates contra adversarios poderosos. Disputando con ellos ante Carlos V como en justa literaria, para instruccion

(1) *Tract. de indis insularis.*

del emperador, sostenia que la religion cristiana, igual siempre en sus actos y acomodada á todas las naciones del globo, no roba á ninguna su libertad, ni viola ninguno de sus propios derechos, bajo pretexto de una supuesta servidumbre, fundada en la naturaleza. «Destierre V. M. de sus dominios, »decia, tan monstruosa opresion, en los principios de su reinado, para que »pueda hacerlo Dios largo y glorioso.» En sus escritos, á vueltas de juicios apasionados, y de exageradas y quiméricas relaciones, sostenia que la infidelidad religiosa no priva á ninguna nacion de sus derechos políticos: que la Santa Sede no habia concedido á los Reyes Católicos más derecho en el Nuevo Mundo, que el de convertir á los indios y mantenerlos en paz: que no era legítima ninguna autoridad que descansara en otros fundamentos; y que la regla más cierta y conveniente que los cristianos pueden dar á los infieles, es el buen ejemplo de obras virtuosas, para que juzguen que quien tales adoradores tiene no puede ser sino el bueno y verdadero Dios (1).

Con esta célebre controversia no recuperaron los indios sus justos dominios, pero alcanzaron por lo ménos nuevas leyes encaminadas á mejorar su suerte, las cuales si no al pronto, con el transcurso del tiempo, tuvieron aplicacion y buen suceso. Con ella tambien se pusieron de manifiesto nuevas ideas acerca de la independencian de la propiedad y su separacion de la soberanía, que germinaron después y han prevalecido al fin. Católicos tan fervientes como Las Casas, Victoria y Cevallos no podian impugnar la Bula de Alejandro VI, que otorgaba á nuestros reyes el imperio del Nuevo Mundo: ni españoles tan buenos como ellos habian de renunciar á aquella insigne merced; pero la interpretaron en el sentido más favorable á la libertad personal y los derechos del dominio, no obstante comprender su concesion «todos los señoríos de las Indias, ciudades, castillos, lugares, »villas, derechos, jurisdicciones y todas sus pertenencias.»

III.

EXPROPIACION Y EXPULSION DE LOS JUDIOS.

Los límites del poder del Estado sobre la propiedad privada dependian tambien, muy principalmente en la Edad Media, de la condicion política de las personas. El rey no podia disponer sino con las formalidades y restric-

(1) *Tratado de las treinta proposiciones.*—*Historia general de las Indias*, lib. 3, c. 116, M. S.

ciones ántes dichas, de los bienes de sus vasallos cristianos, nobles ó plebeyos, mas no se dispensaba el mismo favor á los de los hombres de otra ley, por razon de su diferente estado político, aunque fueran tambien vasallos. Los judíos y los mudejares vivian sujetos á condiciones especiales impuestas exclusivamente por convenciones particulares ó por las leyes civiles, y así el dominio que disfrutaban, más que del derecho de gentes, era obra del legislador ó de las circunstancias. Unos y otros, más bien que naturales y vecinos, eran huéspedes tolerados, que vivian entre los cristianos, pero no por derecho propio. Rigiéndose en el orden doméstico de sus relaciones privadas por el derecho civil de su respectiva raza, gobernados por sus propios jueces, y sujetos á una legislacion especial en sus relaciones con el Estado y con la comunidad cristiana, su propiedad no podía ménos de hallarse sometida tambien á condiciones excepcionales.

Reinando el rey Egica fueron acusados los judíos de conspiracion contra el Estado. Si esta acusacion hubiera recaído sobre un pueblo cristiano, el rey habria castigado y proscrito solamente á los individuos convictos ó sospechados al ménos de conspiradores; pero como los infieles no disfrutaban los derechos de ciudadanía, estando siempre su libertad y su hacienda, cuando no su vida, á merced de la corona, Egica, con aprobacion del concilio XVII de Toledo, creyó usar de su derecho, reduciendo á la esclavitud y confiscando por consiguiente sus bienes, á todos los israelitas españoles, sin distincion de sexos ni de edades. Cómplices en la pérdida de España, y viviendo después en ella segun su ley, así entre moros como entre cristianos, dedicados á la industria y al comercio, disponian libremente de sus capitales, dándolos á crecido logro, en uso de la libertad que su propio derecho les otorgaba, para prestar á usura sin limitacion alguna, á los hombres de otra religion (1). Pero como el permiso de usar sus propias leyes era más bien gracia que derecho, D. Alfonso el Sábio no tuvo reparo en limitarlo, sujetando á tasa el interés de sus préstamos, si bien el señalado como máximo no debiera descontentar al usurero más codicioso. Ordenó, pues, el rey Sábio que no excediera aquel interés de 1 por 5 al año ($33\frac{1}{3}$ por 100): que no devengaran ninguna los réditos vencidos, y que cualquiera que fuese el plazo de las deudas, no sobrepujara la usura del prestamista al importe del capital prestado (2). Siguiendo luego este ejemplo D. Sancho IV, no sólo confirmó la referida ordenanza de su padre,

(1) "Non faverabis fratri tuo ad usuram... sed alieno." Deuteronomio, c. 23.

(2) Cortes de Burgos de 1215, pet. 26.

quebrantada á la verdad frecuentemente, sino que perdonó la tercera parte de las deudas existentes á favor de judíos y moros, é inhabilitó á estos infieles para adquirir y poseer bienes raíces, excepto las casas de su morada, mandándoles enajenar dentro de un año los que disfrutasen (1). Esta incapacidad no habia sin duda pesado ántes sobre los judíos, puesto que San Fernando repartió heredamientos en Sevilla á algunos de ellos, que eran sus almojarifes, contadores ó criados.

Una vez admitida la jurisprudencia de que el Estado podia disponer á su arbitrio de la hacienda de los judíos, apenas se reunian Córtes en que no se pidiera alguna providencia contra ellos. Lamentábanse los procuradores de sus grandes usuras, y denunciaban los fraudes y simulaciones con que eludian las leyes dictadas para reprimirlas; pero como no discurrían otro remedio que el de nuevas tasas de los intereses y nuevos perdones y plazos de las deudas, agravaban cada vez más el daño. Así D. Alfonso XI no pudo rehusar á las Córtes de Madrid de 1529 una remision de la cuarta parte de las deudas á favor de los judíos, con espera para el pago del resto y la renovacion de la ley que inhabilitaba á los infieles para poseer bienes raíces (2). Tampoco negó el mismo monarca otra remision y otra moratoria semejantes á las Córtes de Alcalá de 1548, si bien adoptando además otras providencias á su parecer más eficaces para remediar el daño de la usura, aunque tampoco hubieron de surtir mejor efecto. D. Alfonso prohibió entonces á judíos y á moros prestar á logro á los cristianos, habilitándoles, como en compensacion, para adquirir y poseer, además de las casas de su morada, heredades en tierras realengas, cuyo valor no excediera, segun los lugares, de 20 á 30.000 maravedis (3). Conocida la ineficacia de esta ley, las Córtes de Valladolid de 1551 pidieron su derogacion á la vez que nuevos perdones y esperas de las deudas existentes, y la supresion del fuero especial de tener jueces de su ley, que siempre habian disfrutado los judíos. El rey D. Pedro no accedió á esta pretension, alegando excelentes razones (4); pero reproducida en parte por las Córtes de Búrgos de 1577,

(1) Córtes de Valladolid de 1293, pet. 24 y 26. D. Sancho habia dado esta misma ley á Leon en 1288.

(2) Pet. 52 y 57.

(3) 30.000 maravedis en las tierras realengas allende el Duero y 20.000 en las de aguede, además de los inmuebles que á la sazón poseyeran las juderías y los que con licencia de los señores, adquirieran en los lugares de abadengo, señorío ó behetría. (Ordenamiento de Alcalá, c. 56 y 57.—Córtes de Alcalá de 1348, pet. 18 y n. 54 y 55).

(4) Pet. 64, 66, 68, 75 y 76. D. Pedro fundó su resolucion negativa en que los cristianos renovaban sus deudas, reconociendo intereses exorbitantes, con la esperanza

D. Enrique II concedió el perdon y la espera ántes denegados, y prohibió á los judíos comprar ó vender á los cristianos cosa alguna (1). Otra reduccion y moratoria de sus créditos sufrieron además aquellos desgraciados sectarios, de unas Cortes de Segovia, reinando D. Juan I; y aún habrían experimentado otra más al poco tiempo si el rey no la hubiera negado á las Cortes de Valladolid de 1385, por estar la anterior tan reciente.

A estas expoliaciones decretadas por el soberano, en uso de su alto señorío sobre las personas y bienes de los infieles, siguieron las matanzas, saqueos y depredaciones populares de que tantas veces fueron victimas los desdichados judíos, hasta que los Reyes Católicos pusieron término á la encarnizada lucha de astucia y fanatismo, derechos é intereses, en que incesantemente vivieron con el pueblo cristiano, arrojándolos de España y obligándoles á abandonar sus bienes. Como vasallos cuyos derechos civiles se fundaban únicamente en la mudable ley positiva, segun las ideas del tiempo, nadie dudó de la facultad del legislador, no sólo para adoptar aquella providencia con los israelitas, sino tambien para confiscarles sus propiedades, ya que el fanatismo religioso y la animadversion popular aconsejaban su extrañamiento. Los Reyes Católicos no llegaron, sin embargo, en este punto, al limite de lo que creian su derecho. No se apropiaron los bienes de los expulsos, pero extrañándoles con la condicion de enajenarlos en el angustioso término de cuatro meses, sin permitirles sacar del reino su importe en metálico, les obligaron á malbaratarlos y les despojaron indirectamente de una parte muy considerable de su hacienda. Esta debió ser cuantiosa, no habiéndose guardado en Castilla la ordenanza de D. Alfonso XI, arriba citada, que le puso limite; y no habiéndolo tenido nunca en Aragon la facultad de adquirir bienes raices (2). Así cuenta un historiador contemporáneo (3) que se llegó á cambiar una casa por un asno, y una viña por un pedazo de paño ó lienzo, y que «los cristianos

de no pagarlas ó de lograr su reduccion; que con estos perdones andaban los judíos muy estragados y pobres; y que como eran estos *gente flaca* y los oficiales reales no solian hacerles justicia, y los cristianos litigaban maliciosamente con ellos, abusando de su debilidad y de su ignorancia de las leyes, lejos de privarles de su fuero les ponía *entregadores*, como los habian tenido antiguamente, que hicieran efectivos sus créditos, y les daba el privilegio de que contra los instrumentos que los justificase, no se admitiera otra excepcion en juicio, que la de falsedad ó pago.

(1) Pet. 1, 2 y 10.

(2) Sólo en Mallorca estaba prohibido á los judios adquirir bienes raices.

(3) El Cura de Los Palacios, *Historia de los Reyes Católicos D. Fernando y doña Isabel*, c. 110.

»compraron por muy poco dinero muchas buenas casas y muy ricos heredamientos,» porque «los judíos andaban rogando con ellos é no hallaban quien se los comprase.» A este quebranto se siguió otro no ménos grave. Obligados los expulsos á sacar sus caudales en letras de cambio giradas sobre el extranjero ó en mercancías de permitida exportacion, y no pudiendo hallar giro en breves días para grandes sumas de numerario en tiempos de tan escasas relaciones comerciales, y aumentándose con este motivo la demanda de las mercancías exportables, tuvieron los más que adquirir á precios excepcionales las que lograron extraer del reino. De modo que sin provecho del Estado y en beneficio tan sólo de algunos especuladores, sufrieron los judíos de Castilla una verdadera y muy cuantiosa expropiacion. La de los aragoneses fué aún más completa. Obligados muchos de ellos á iglesias y corporaciones, por razon de los censales que pesaban sobre los respectivos pueblos, no pudieron ni malbaratar sus propiedades, por haber quedado embargadas al cumplimiento de aquella obligacion (1).

No faltó quizá quien dudara de la equidad y de la conveniencia de aquel despojo; la misma reina católica vaciló mucho ántes de decretarlo, y entre los consejeros hubo tal vez alguno que lo desaprobase, aunque más por razon de Estado que por falta de autoridad en el monarca para acordarlo; pero la mayoría de los españoles lo aplaudió en ódio á la raza proscrita. Los jurisconsultos que no estimaban necesario indemnizar á los expropiados cuando la expropiacion se dictaba por ley general, consideraron el de los judíos arreglada á su doctrina. Los que fundados en textos expresos de las leyes de Aragon, Valencia y Navarra juzgaban á los judíos y sarracenos *hombres propios del rey* ó siervos de la corona, á quienes no favorecian los fueros de la tierra, no dudaron tampoco de la potestad del Estado para disponer de sus personas y propiedades en la forma en que los Reyes Católicos lo hicieron. Así quedó consumada á gusto de todos, menos de los proscritos, aunque para mal de España, aquella expropiacion memorable.

(1) Zurita, *Anales*, part. 5.^a, lib. 1, c. 6.

IV.

EXPROPIACION Y EXPULSION DE LOS MUDEJARES Y DE LOS MORISCOS.

Habia en España por el mismo tiempo otras propiedades de excepcion, pero en las cuales era más limitada la potestad del Estado, aún conforme á los principios de derecho entónces predominantes. Tales eran las de los moros llamados *mudejares*, que por pactos y convenciones particulares, moraban entre los cristianos. Eran vasallos de la corona, pero disfrutaban un estado civil y político especial, diferente del de los vasallos cristianos, parecido, aunque no igual, al de los judíos, por cuanto no se fundaba en leyes y ordenanzas discrecionales, sino en capitulaciones convenidas y juradas al rendirse las ciudades y villas en que residian. Así, los derechos emanados de ellas no estaban en estricta justicia, á merced del soberano, como los de los judíos.

En virtud de estas capitulaciones solian tener los mudejares el derecho de ausentarse libre y seguramente, llevándose todos sus bienes ó de quedarse por vasallos, sin pagar al rey más tributo que el que ántes exigian sus califas y emires, el de conservar sus propiedades, su culto y sus mezcuitas; el de regirse por sus propias leyes civiles, y el de ser juzgados y gobernados por jueces de su ley. Estas mismas condiciones eran, sin embargo, más ó ménos favorables, segun lo habian sido las capitulaciones en que se estipularan. Así los moros de algunos lugares no pagaban más tributo que el diezmo (1); otros no conservaron sus posesiones, sino á condicion de componerse con los señores á quienes se habia repartido el dominio directo de sus tierras (2), y algunos podian vender y comprar libremente sus heredades á otros moros, pero no á cristianos, y aún debian abandonarlas cuando se convirtieran á la fé, para que nunca perdiese el rey su derecho sobre las tierras de sarracenos (3). Los de Granada, además de todos los

(1) Capitulacion de Tudela en 1115. (*Diccion. histórico-geográfico de España*, t. 2, pág. 558.) Capitulacion de Tortosa en 1148. (*Janer. Condicion de los moriscos*, colec. diplom. n. 11.) Carta puebla de los moros de Eslida, Ayn, Pelves y otros pueblos. (Dicha colec. n. 15.)

(2) Capitulacion de Valencia. (Dicha colec. n. 14.)

(3) Carta puebla de los moros del valle de Uxó otorgada por D. Jaime I en 1250 privilegio del mismo monarca á los moros del arrabal de Játiva. (Dicha colec. n. 17 y 18.)

beneficios ántes expresados, obtuvieron el de no pagar durante tres años pechos ni rentas por las heredades realengas que disfrutaran, si bien reservándose el Estado el derecho de tanteo en las que enajenasen los que se ausentaran (1).

Pero los moros que no habian logrado estas capitulaciones ventajosas y aquellos que no habian podido mantener su observancia, vivian sometidos á las mismas incapacidades legales que los judíos, en cuanto á disponer de su persona y bienes. Así alcanzó á unos y á otros la prohibicion de adquirir propiedades en Castilla, por más que al fin ni unos ni otros la hubiesen guardado. Todos pagaban las *oncenas* de sus comercios y el diezmo eclesiástico. Comunes les eran las leyes que tasaron y las que prohibieron la usura. Las aljamas pagaban tributo al rey como las juderías. Moros y judíos cautivos, si se redimian, estaban obligados á contribuir con el diezmo de su precio. Unos y otros fueron á la vez inhabilitados por la reina doña Catalina (1412), para regirse por sus propios jueces, desempeñar cargos públicos, ejercer ciertas industrias, mudar de domicilio y salir del reino. La prohibicion de heredar á los cristianos y de comunicarse con ellos, alcanzaba á todos los infieles, así como la obligacion de vivir juntos en barrios separados, los de cada ley; la de surtirse en mercados especiales, y la de usar trages y distintivos por donde fueran conocidos. Verdad es que su estado de hecho no fué casi nunca conforme al legal, por cuanto muchas de aquellas odiosas ordenanzas no llegaron jamás á cumplirse ó se quebrantaron frecuentemente; pero ellas dan clara idea del concepto que los legisladores y los juristas tenian del poder del Estado sobre las personas y las propiedades de los infieles.

Para que la accion de este poder llegara casi á los últimos límites de su competencia, segun la entendian los políticos y los jurisconsultos más regalistas de la época, faltaba solo una ocasion plausible, y ésta la ofrecieron los moros del Albaicin y de las Alpujarras, levantándose una y otra vez contra los cristianos. Su primera insurreccion les costó la pérdida del derecho que tenian por las capitulaciones, de mantenerse en el reino sin abjurar de su ley. Pasaron los más por la humillacion de fingirse cristianos y recibir el bautismo; pero los de otras provincias quedaron tan resentidos é inquietos, que los Reyes Católicos se juzgaron libres de todo compromiso con ellos, y temiendo por la fé de los nuevos conversos y la seguridad de

(1) Capitulacion de Granada. (Marmol, *Rebelion y castigo de los moriscos*, y dicha colec. n. 44.

los cristianos viejos, extrañaron á todos los moros de Leon y Castilla, mandándoles abandonar la tierra y enajenar sus propiedades dentro de tres meses, sin permitirles sacar de ella el oro ni la plata ni las mercancías de prohibida exportacion. Sólo se exceptuaron de esta cruel medida los esclavos herrados y los niños que no hubieran cumplido la edad de la pubertad (1). Tampoco entonces se confiscaron los bienes á los expulsos; pero obligados á desprenderse de ellos en un plazo brevísimo, los mudejares de Leon y Castilla sufrieron el mismo despojo que habian experimentado los judíos diez años ántes. Así se borraron en un día las capitulaciones ventajosas con que aquellos desdichados vasallos habian creído asegurar sus personas y sus propiedades. Los moros de Aragon solamente lograron entonces mantener las suyas, aunque les duró no poco el temor de perderlas, puesto que en 1510 tuvo que tranquilizarlos el rey D. Fernando V, dando por fuero á los de Valencia la promesa de no expulsarlos y de mantenerlos en el derecho que disfrutaban de comerciar con los cristianos (2).

Iguales temores hubieron de concebir los moriscos conversos de Castilla, sabiendo cuánto se sospechaba, y no sin razon, de la sinceridad de su fé; y como se apresurasen por ello á enajenar sus propiedades, la reina católica, usando de la plenitud de su potestad, segun la entendian sus consejeros, y prescindiendo de anteriores promesas, les prohibió traspasar sus bienes y salir del reino por tiempo de dos años (3). Mas una nueva rebelion de los moriscos de Granada, seguida de una guerra larga y sangrienta convenció á Felipe II de la necesidad de expulsarlos de aquel nuevo reino. No los extrañó, sin embargo, de todos sus dominios, porque al fin llevaban el nombre de cristianos, y no desesperaba enteramente de su salvacion, pero los repartió como rebaños en las provincias de Castilla, Toledo y la Mancha, señalando á cada uno el lugar de su domicilio, é imponiéndoles otras restricciones y servidumbres (4). Así quedaron todos despojados sin compensacion alguna de las heredades que disfrutaban como dueños ó como colonos, é inhabilitados además para el ejercicio de ciertas industrias, de las cuales vivian muchos de ellos. Fué aquella, por lo tanto, una verdadera y directa expropiacion de cuantos bienes inmuebles y derechos rea-

(1) Pragmática de 2 de Febrero de 1502, comprendida entre las de los reyes don Fernando y doña Isabel, edic. de 1549, fol. 6.

(2) *Fori regni Valentie. Inextravaganti.*

(3) Pragmáticas citadas, f. 7.

(4) Real provision de 24 de Febrero de 1571.

les poseían los moriscos alpujarreños. Incorporadas sus casas y sus heredades á la corona, fueron repartidas entre cristianos viejos á censo ó renta, no sin algunas dificultades, para que éstos vinieran á poblarlas, que fué preciso vencer con exenciones y privilegios (1).

Despojados, perseguidos, hambrientos los miserables moriscos, fueron desde entonces, ó más que ántes, un elemento de grave perturbacion dentro de la sociedad española. Como vecinos industriosos y labradores expertos, quizás habrían sido tambien vasallos sumisos, á no haberse usado con ellos la política intolerante y contraproducente que tantos ódios y rencores engendró en sus pechos. Así no bastó su expulsion del reino de Granada para convertirlos en moradores pacíficos; hasta que acusados por fin, y no sin fundamento, de mantener tratos con los piratas berberiscos que infestaban nuestras costas, y con los moros de Africa que soñaban con volver á nuestra tierra, y perdida toda esperanza de hacer de ellos buenos católicos, D. Felipe III, usándo de la plenitud de su potestad, decidió extrañarlos para siempre de todos sus dominios. Esta expulsion se verificó entonces con condiciones más duras y circunstancias más vejatorias que las precedentes. La de los moriscos de Valencia efectuóse mandándoles salir del reino (1609) en el término de tres dias, y prohibiéndoles sacar otros bienes que los muebles de licita exportacion, que pudieran llevar con sus personas, á fin de que todos los demás vinieran á poder de los señores de quienes habian dependido (2). En vano se apresuraron los miserables proscritos á malbaratar sus heredades y cuanto poseían, pues fundándose los señores en que el rey les habia hecho merced de todos los bienes que ellos no pudieran llevar con sus personas, lograron se les prohibiese por bando de gobierno enajenar sus granos, ganados, aceites, casas, créditos, censos y derechos de toda especie. Aunque el rey mandó luego revocar este bando, reclamó su observancia el patriarca Rivera (3), que tanto ha-

(1) Diéronse las casas y edificios á los nuevos pobladores por un real de censo al año; las tierras labrantías por un diezmo de sus frutos además del diezmo eclesiástico; y los olivares y moreras por un quinto de frutos en los diez primeros años, y un tercio despues. (Pragn. de 27 de Setiembre de 1571).

(2) Solamente fueron excluidos de la expulsion los menores de cuatro años, si sus padres los dejaban voluntariamente al cuidado de cristianos viejos, y seis labradores moriscos en cada lugar de cien casas, á fin de que enseñaran á los nuevos pobladores las prácticas del cultivo. Los que fuéran encontrados despues de los tres dias, dentro del reino, podrian ser presos y despojados por cualquier vecino, y aún muertos si se defendian.

(3) Janer, *Expulsion de los moriscos*, colec. diplom., n.98, 100 y 110.

bia contribuido á la expulsion; y así por esto como por la imposibilidad de vender en cortos momentos tan grande masa de bienes, la expropiacion de los moriscos valencianos, fué una de las más completas que han tenido lugar en España.

Ni fué su propiedad la única violada, pues igual suerte sufrió tambien la de los cristianos viejos, señores directos de la tierra. Eran los más de aquellos moriscos colonos forzosos de las heredades en que estos señores tenían su directo dominio, y muchos eran además deudores á ellos por censos ó prestaciones de frutos ó servicios. Expulsados del territorio, no sólo perdieron los señores el derecho á que sus vasallos les cultivaran sus tierras con determinadas condiciones, sino el de percibir de ellos ó de los de otros señores, los censos ó los servicios estipulados. En compensacion de estos daños y quebrantos, les hizo el rey merced de los bienes que abandonaran los moriscos; pero si algunos ganaron trocando sus vasallos y sus derechos feudales por el dominio pleno de las tierras, en que sólo disfrutaban el directo, ó no tenían ninguno, no pocos hubieron de perder en el cambio, ya porque tardaron mucho en hallar colonos que cultivaran las heredades abandonadas, ya porque tuvieran que darlas á cristianos con condiciones ménos ventajosas, que no compensaban las pérdidas sufridas, y ya, en fin, porque muchos lugares se perdieron del todo, por no haber quien los repoblase.

A la expulsion de los moriscos valencianos, siguió la de los trasladados por Felipe II de Granada á Toledo, la Mancha y Castilla. Al saber los de estas provincias la triste suerte de sus hermanos de Valencia, se apresuraron á enajenar sus bienes; mas el rey mandó desde luego suspender estas enajenaciones, y á los pocos dias (28 de Diciembre de 1699) fulminó un decreto de expulsion contra todos aquellos que, á juicio de los obispos, no se hubieran conducido como cristianos viejos, prohibiéndoles enajenar sus bienes raices y dándoles un plazo de treinta dias para vender los muebles y semovientes. A este extrañamiento siguió el de los moriscos que aún quedaban en Castilla y en otras provincias, sin permitirles enajenar sus haciendas, más que á unos pocos que obtuvieron por gracia especial este permiso, ni sacar sus joyas, sin pagar al fisco por tributo, el otro tanto de su valor. Así quedó consumada la expropiacion directa y completa de toda la propiedad territorial que disfrutaban en España los descendientes de aquellos que en otro tiempo la invadieron y la habian dominado por espacio de ocho siglos.

¿V qué pensaban de estos crueles despojos los políticos y los juricon-

sultos de la época? No faltó quizá entonces quien dudara de su conveniencia, pero nadie osó negar al soberano la facultad de decretarlos. Eran los moriscos vasallos inquietos y peligrosos, y el rey, como señor de la tierra, podía mandarles salir de ella, no favoreciéndoles ninguno de los privilegios con que los vasallos cristianos hubieran podido resistir una providencia semejante, ya por razón de su hidalguía, ya por los fueros especiales que disfrutaban los lugares en que moraban. Podía el rey despojarles de su calidad de naturales y vasallos, y reducidos así al estado de extranjeros, negarles todo asilo en la tierra. Como extranjeros estaban inhabilitados por la ley, para poseer heredamientos y debían por lo tanto desprenderse de los que tuviesen. Tal era entonces la doctrina jurídica aplicable al caso. Los Reyes Católicos la aplicaron exactamente, permitiendo á los judíos y á los mudejares la enajenación de sus propiedades, por más que las condiciones que les impusieron para verificarlo, equivalieran á una parcial expropiación. Felipe II tampoco rehusó aplicar la misma doctrina, pues aunque confiscó sus bienes á los moriscos granadinos, fué en pena de su rebelión. Mas Felipe III prescindió ya de ella dando á los señores valedianos ó incorporando á la corona los bienes de los moriscos expulsados, no por vía de castigo, sino como medida de precaución dictada en uso de la potestad *plena y absoluta* que muchos jurisconsultos y moralistas negaban resueltamente. Así aquella expulsión, si fué para los fanáticos un acto piadoso y para los partidarios de la razón de Estado, ya un acto político conveniente, aunque un tanto maquiavélico, ó ya una providencia económicamente desastrosa, debió ser para los juristas, á causa del despojo que la acompañaba, un acto lícito ó ilícito según la doctrina que profesaran acerca de la potestad *plena* del rey, puesto que no cabía de modo alguno dentro de su potestad *ordinaria*. Si se hubiera entonces permitido escribir contra los decretos reales, no habría faltado de seguro quien desaprobase los de Felipe III sobre aquel importante suceso de su reinado.

V.

EXPROPIACION DE SALINAS.

Con las expropiaciones ántes referidas coincidieron en parte algunas otras directas también, de propiedades especiales pertenecientes á cristianos viejos y fundadas asimismo en motivos de bien común. Tales fueron las que ordenaron D. Alfonso XI y D. Felipe II de las salinas de dominio

privado. Hé aquí ahora cómo este ramo de la riqueza pública vino á caer bajo el monopolio del fisco.

El derecho feudal comun habia declarado propiedad exclusiva de los soberanos las rentas de las salinas de sus respectivos territorios (1). En su consecuencia, los señores feudales solian establecer alfolies, á donde hacian llevar y vender por sus dependientes, toda la sal de sus criaderos, prohibiendo á sus vasallos comprarla ó venderla fuera de la medida señalada por ellos; ó bien exigian un tributo á los mismos vasallos, por la libertad de este comercio. Sin embargo, los intérpretes del derecho calificaban de usurpacion este monopolio, por cuanto explicando el texto de la ley feudal por otros de Justiniano y las Pandectas (2), entendian que el primero se referia solamente á las salinas que no fueran de propiedad particular, y opinaban que por derecho comun, los dueños de las de propiedad privada podian vender libremente sus sales, así como todos podian comprarlas con igual libertad.

D. Alfonso el Sábio, prescindiendo de esta distincion en las Partidas, declaró (3) del dominio de los emperadores y los reyes, entre otras cosas, las «rentas de las salinas... para que oviesen con que se mantoviesen honradamente en sus despensas, é con que pudiesen amparar sus tierras, é sus reynados, é guerrear contra los enemigos, é por que pudiesen excusar sus pueblos de echarles muchos pechos é de facelles otros agravamientos.» No se sabe si ántes de este tiempo eran ya de hecho en España propiedad de la corona todas las salinas del reino ó su mayor parte. Inclino á pensar que pertenecian sin contradiccion al rey todas las que se hallaban en tierras realengas, y que de las existentes en tierras de señorío, las más serian propias de los señores, y algunas estarian bajo el dominio privado ó el de la corona. Consta, sí, que hasta D. Alfonso XI, las salinas reales surtian á los pueblos (4), enviándoles sus productos por medio de

(1) *Feudorum constitutiones*, lib. 2, t. 56.

(2) Andrés Isern, in cap. 1 verb. *Redditus. Quæ sint regalia in usibus feudor.* Hostiense, *In c. super quibusdam*, col. 1.^a *De verbor. signif.*

(3) Ley 11, t. 28, Part. 3.^a

(4) En las Córtes de Medina del Campo de 1318, se quejaron los procuradores de ciertas cartas reales que se habian expedido, para que no se vendiese otra sal que la de las salinas de Atienza, y pidieron que se trajera sal de otras partes, como se habia usado hasta entonces. Los tutores del rey D. Alfonso XI respondieron en su nombre, que averiguarian el caso por hombres buenos y mandarian guardar lo que se hubiera acostumbrado hasta entonces.

los *alvareros*, los cuales, habiendo incurrido en graves abusos y estafas, tuvo aquel monarca que suprimirlos y establecer alfolíes por cuenta del Erario, en los lugares en que habia abundancia de sal, obligando á los vasallos, no sólo á surtirse en ellos, sino á comprarla en cantidad cierta, muy superior á veces á la que podia consumirse. Asi, las Córtes de Alcalá de Henares de 1345 (1) pidieron la supresion de ciertos alfolíes nuevamente establecidos, por la extorsion que les causaba la obligacion de surtirse en ellos y no en otros lugares más cercanos. Así tambien las Córtes de la misma ciudad de 1348 (2), fundándose en que los salineros repartian á algunos pueblos mayor cantidad de sal de la que les correspondia, segun los últimos repartimientos, y á veces les movian pleitos y sacaban prendas, porque despues de pagar y no tomar de ellos la que se les habia repartido, compraban la que habian menester en lugares más cercanos, pidieron al rey que no se obligase á estos pueblos á pagar dos veces la sal que no habian consumido y que en adelante pudiesen todos surtirse libremente y sin repartimiento, en las salinas reales, de toda la que necesitaran. D. Alfonso XI respondió á la primera de estas peticiones que mandaria suprimir los alfolíes que no fueran necesarios; y á la segunda, que no se obligaria á pagar más sal que la señalada en los últimos repartos, pero que en cuanto al surtido libre y sin tasa, proveeria lo conveniente. Y se llevaba este repartimiento con tanto rigor, que solian hacerse de tiempo en tiempo visitas domiciliarias para averiguar la sal que tenia cada vecino en su despensa y se castigaba al que no guardaba en ella media fanega por lo ménos. Las mismas Córtes de 1348 (3) pidieron al rey que no se impusiese pena por este motivo, *do anda el escodrinno de la sal*, y D. Alfonso ofreció proveer sobre ello dentro de un año.

Mas á pesar de todas estas providencias las salinas reales no producian todo lo que debieran, por la competencia que les hacian las de propiedad particular. Siendo el rey señor del territorio, podia segun las costumbres feudales, monopolizar la venta de la sal y aún obligar á adquirirla por vía de tributo, mas este monopolio no podia ser completo, mientras que existiesen otras salinas que no le perteneciesen. Para evitar esta competencia hubieron de situarse los alfolíes reales en lugares adecuados á las necesidades del consumo; pero no siendo tampoco bastante esta precaucion, hizo

(1) Pet. 13.

(2) Pet. 49.

(3) Pet. 25.

uso el rey de la plenitud de su potestad, declarando por ley que le pertenecian las rentas de «todas las aguas é pozos salados que son para facer sal,» excepto aquellos de que hubiese dado por privilegio ó se hubiesen ganado por la posesion continuada del tiempo correspondiente (1). Consta, en efecto, que D. Alfonso expropió de varias salinas á las iglesias, á las órdenes militares y á los monasterios por consejo del maestre Gonzalo Martinez, y que aunque los ricos-hombres reclamaron entónces contra aquella expropiación y los prelados acudieron despues al rey D. Pedro en las Córtes de Valladolid (2) con igual solicitud, ni unos ni otros lograron su deseo. Así pues, D. Alfonso «tomó para sus menesteres, segun dice una peticion de las »Córtes de Búrgos de 1379 (3), las salinas de todos sus regnos, é mandó »facer alfolis de sal en ciertos logares, é mando facer repartimiento de la »sal por los logares, que le diesen por cada fanega cierta quantía de mara- »vedis ó otras quantías á los sennores de las salinas: é quier tomasen lo de »los logares la sal ó non, que pagasen las quantías de maravedis.» Estas Córtes representaron á D. Juan I contra los excesos que se cometian, repartiendo á los pueblos más sal de la necesaria y exigiendo por ella mayor precio que el acostumbrado. El monarca no pudo ménos de confesar el agravio que recibian muchos lugares en estos repartos, pero como estuviere arrendada la renta por tiempo cierto, no pudo entónces remediarlo.

Para asegurar más este monopolio del Erario, los Reyes Católicos prohibieron introducir sal de fuera del reino de Castilla, bajo pena de muerte de saeta, la cual habia de aplicarse sumariamente, como caso de Hermandad (4); y mandaron vender á los alfolies reales, por sólo su costo, la que viniese por mar á los puertos de Galicia y Astúrias, y toda la que se criase en ciertas salinas, que se habian eximido hasta entónces de la expropiacion. Por último, Felipe II dando libertad á los pueblos en 1564, para adquirir la sal que les correspondiese por reparto, en cualquiera de las salinas del reino, y so pretexto de existir algunas de dominio privado, con el monopolio del surtido en poblaciones muy distantes de ellas, con perjuicio de los consumidores, mandó incorporar á la corona todas las de propiedad particular, con exclusion de las de Andalucía y Galicia, en las cuales no habia de labrarse sal sino con real licencia y para venderla tan sólo á los alfolies

(1) Ordenamiento de las Córtes de Alcalá de 1348, cap. 121.

(2) Ordenamiento de prelados de dichas Córtes, pet. 5.

(3) Pet. 38.

(4) Pragmática de 3 de Setiembre de 1484.

reales (1). Al ordenar el rey esta incorporacion, ofreció indemnizar á los dueños expropiados, aunque sin indicar los términos, la forma, ni el tiempo en que habia de hacerlo. Así no fué conforme esta expropiacion con la ley de Partida ántes citada, que exigia el *buen cambio previo*, por más que lo fuese con la doctrina de su glosador Gregorio Lopez, que permitia diferir la indemnizacion, cuando el rey no tenia fondos disponibles para darla. Alguna hubo de darse después, aunque no cumplida y suficiente, en juros sobre la misma renta de la sal, cuyo valor, faltando el pago puntual de los intereses, quedó muy reducido con el tiempo.

Así no resultó ajustada aquella expropiacion ni á la doctrina de los jurisconsultos de la época, los cuales tratando de los derechos del soberano sobre las salinas privadas, enseñaban que no podian expropiarse sin la compensacion debida. Son notables, aunque breves, las frases que dedica á este asunto Alfonso de Azevedo en su comentario á las leyes de la Recopilacion (2). Despues de decir que los jueces justos no pueden aprobar la ocupacion de las cosas privadas, sin la debida recompensa, añade, citando á Rebuffo: «Hoy todo lo dan á los príncipes los jueces injustos; pero ¡ay de ellos! porque tendrán que dar estrecha cuenta de sus actos al juez supremo. Adviertan, pues, los consejeros de los reyes que si afirman que todas las cosas son de la corona, podrá decirse de ellos, con el evángelio, que su sal se desvanece, y no sirven para nada, sino para ser arrojados fuera y ser objeto del desprecio de los hombres.» Cita enseguida la pragmática para la incorporacion de las salinas, que dejó referida, y recuerda que en Francia habia dictado otra semejante el rey Felipe de Valois, para obtener recursos con que mantener la guerra en que estaba empeñado, contra el rey Eduardo de Inglaterra. La censura severa de aquella expropiacion que se desprende de estas palabras, es prueba evidente de que nunca faltaron en nuestra pátria escritores y jurisconsultos ilustres que mantuvieran la buena doctrina en punto á la independencia de la propiedad.

Igual suerte hubieron de correr en Aragon las salinas privadas, á pesar de que su dominio y aprovechamiento estaban garantidos por los fueros. Ya en el reinado de D. Jaime I hubo de intentarse reducirlos, cuando este monarca, á petición de las Córtes de Exea de 1265, tuvo que confirmar á los infanzones, dueños de salinas, el derecho de labrarlas y disponer de

(1) Ley 1, t. 19, lib. 9, Nov. Rec.

(2) 1.ª leg. 31, t. 18, lib. 6.

sus productos, segun lo habian usado hasta entonces (1). Esto, no obstante, muchas de ellas fueron poco despues vendidas por fuerza al rey don Pedro III, pagándose su precio; mas como los dueños se dieran por agraviados, mandó el rey devolvérselas, siempre que ellos restituyeran la indemnizacion recibida; les permitió usarlas como solian, y declaró á la vez que todos los aragoneses podrian comprar sal en cualquiera de las salinas del reino, segun lo habian acostumbrado, así como los que eran dueños de algunas de ellas, podrian vender sus sales como solian hacerlo antiguamente (2). De esta declaracion contenida en el Privilegio general del reino, se infiere que en los primeros tiempos de la monarquía aragonesa no se contaba el monopolio de la sal entre las regalías de la corona: que para que lo fuese, ocupó el Estado las de propiedad particular y señaló á todas las del reino las comarcas que necesaria y respectivamente habian de surtir de ellas; y que agraviados los vasallos de esta novedad, desistió el rey de su empeño, restableciendo la libertad antigua.

Mas pronto hubo de olvidarse esta favorable declaracion, y volviendo al anterior propósito, el rey D. Jaime II impuso cierto derecho sobre la sal, y mandó que todos los cabezas de casa y sus hijos mayores de siete años comprasen en los alfolíes reales *sendas pesas* ó arrobas de aquel artículo, á doce dineros cada una. En virtud de esta disposicion se reservó además la corona el derecho privativo de vender la sal de las salinas particulares, comprándola á sus dueños, por el precio medio que habia tenido en los siete años anteriores, ganando la diferencia entre este precio y el de la nueva tarifa. Por eso las Cortes de Zaragoza de 1325 se quejaron á aquel monarca, de que no se mantuviese á los aragoneses en el derecho de usar libremente la sal del reino, que les estaba reconocido por el privilegio general, y de que cuando prétendian hacerlo, eran perseguidos y castigados por los oficiales del rey. A lo cual contestó D. Jaime II por via de declaracion al Privilegio general, que tanto las salinas públicas como las privadas, habian sido restituidas á las antiguas demarcaciones de forzoso surtido, lo cual no era en su concepto opuesto al privilegio; y que si accediese á lo que se le pedia, perderia el Erario las rentas de sus salinas (3). Interpretacion á la verdad poco conforme con el texto de los dos fueros citados anteriormente, y sobre todo con el del Privilegio general, cuyas palabras son

(1) Fueros de Aragon, lib. 7, t. *De immunit. militum*.

(2) Ibid. lib. 1, t. *Privil. gener.* §. Item que todos los del regno.

(3) Fuero lib. 1, t. *Declarat. privil. gener.*, §. Item que puedan usar.

«que todos los del regno usen como solian, de la sal de qual se querran de los regnos é de toda la señoria del señor rey, de aquella que más querran.» No se compadece este derecho de usar la *sal que más querran*, con la obligacion de proveerse de ella en salinas determinadas, que es lo que significaba señalar demarcaciones ó límites á todas las existentes. Mas, sin embargo, esta interpretacion es la que prevaleció en la práctica y así se lee en las *Observancias*, redactadas en el siglo xv, que por lo que el Fuero dice del uso de la sal, «no se entendia que pudiese cualquiera comprarla donde quisiese, sino que habian de reducirse las salinas al estado en que se hallaban en tiempo del rey D. Pedro y ántes.» Interpretacion conforme ciertamente con la declaracion citada de D. Jaime II, pero no con el texto referido del privilegio general de D. Pedro III.

Este monopolio de las salinas reales en sus demarcaciones respectivas, se hallaba hasta cierto punto compensado por el que ejercian tambien los dueños de salinas privadas en sus propias demarcaciones, aunque sus beneficios estuvieran muy reducidos por los impuestos que en una ú otra forma, pesaron sobre ellos. Este privilegio era tanto más importante cuanto que fuera de las dos grandes salinas minerales de Remolinos y Castellar, que eran del Estado, todas las otras del reino pertenecian á los pueblos en cuyos términos se hallan, á monasterios ó á particulares, unas por merced de la corona, otras por costumbre inmemorial y otras por nacer en tierras de dominio privado, y guardarse allí la regla de derecho que atribuye al dueño del suelo la sal que en él se cria. Hasta veintiocho de estas salinas, casi todas con demarcacion propia y exclusiva, contaba en Aragon D. Gerónimo Jimenez de Argues (1) á principios del siglo xvii. Algunos pocos lugares solamente tenian por privilegio ó costumbre el derecho de proveerse de sal donde quisieran.

Tal era el estado de esta propiedad cuando Felipe V despues de la guerra de sucesion y de abolir los fueros aragoneses en todo lo concerniente á las relaciones de los vasallos con la corona, incorporó á ésta en su consecuencia, todas las salinas de propiedad particular, prometiendo á sus dueños la indemnizacion que fuera justa (2). No consta ciertamente la que se dió, aunque alguna se hubo de dar, puesto que se impusieron juro con tal motivo, sobre la misma renta de la sal.

(1) Discurso del oficio de Baile general de Aragon, publicado por primera vez en 1630, pár. 10.

(2) Ley 2, t. 19, lib. 9, Nov. Rec.

Así, cuando el feudalismo iba de vencida, cuando más esfuerzos se hacían para su completa extincion, triunfaba y se imponía en España el principio feudal que estimaba regalia de la corona el dominio y el monopolio de las salinas. En virtud de este principio se consideraron las de propiedad particular como bienes desprendidos de la corona, y fueron equiparadas para su incorporacion, á las alcabalas, los oficios públicos y las jurisdicciones que se hallaban bajo el dominio privado. Verdad es que los juriscultos españoles, negando la autoridad entre nosotros del Libro de los feudos, sostenian que el Estado no fundaba su intencion sino á las salinas existentes en terrenos públicos; pero las necesidades del Erario inclinaba á prescindir de esta doctrina y á adoptar la contraria de los feudalistas que ofrecia en la práctica frutos más pingües.

VI.

OTRAS VARIAS EXPROPIACIONES.

Aquí haria especial mencion de otras célebres expropiaciones, no ménos directas que las reseñadas, si no hubiera tratado ya de ellas en anteriores capitulos de esta obra, ó no debieran ser objeto de otros que vendrán más adelante. Así, me limitaré solamente á recordarlas, remitiendo al lector á los lugares en que doy noticia detallada de ellas.

No llamaré expropiacion, en el sentido jurídico de esta palabra, la que habrian sufrido las iglesias y señores, si se hubieran llevado á efecto las órdenes de nuestros reyes, mandándoles enajenar en breve plazo los bienes raíces que habian adquirido, contraviniendo á las leyes de amortizacion tantas veces repetidas desde las Córtes de Nájera. Mas expropiacion por utilidad pública, y harto justificada por cierto, aunque se verificase sin indemnizacion, fué la que tuvo lugar cuando en los siglos xiv y xv se mandaron demoler los castillos y fortalezas de propiedad particular, para evitar las *malfetrías* que se ejecutaban en ellos (1). Expropiaciones considerables fueron asimismo las incorporaciones á la corona de los bienes, lugares, castillos, jurisdicciones y oficios públicos enajenados, mediante titulos onerosos ó gratuitos, por monarcas cuya voluntad era ley más respetada y eficaz

(1) Véase el libro VIII, c. 1, pár. 1.

que la doctrina jurídica sobre la inalienabilidad de los bienes de la corona (1). Muchos de los derechos feudales que disfrutaban los señores territoriales, quedaron abolidos por expropiacion (2). Este mismo carácter tuvieron las leyes de Carlos IV, que permitieron vender en perjuicio de los sucesores inmediatos de los mayorazgos, los bienes raíces de su dotacion, con tal de que su precio se impusiera en el erario ó se prestase al Tesoro público gratuitamente (3). Las leyes de desvinculacion de 1820, expropiaron á los mismos sucesores de la mitad de los mayorazgos á que tenían derecho, y las que vinieron á derogarlas en 1824 expropiaron igualmente á los compradores de bienes desvinculados con arreglo á la legislación anterior (4). Algunas propiedades municipales fueron en lo antiguo ocupadas para servicio de los reyes, y expropiacion casi universal es la que recientemente han experimentado los pueblos y los establecimientos de beneficencia, al ser obligados á cambiar por fuerza, sus bienes raíces por títulos de la Deuda pública (5).

Son tambien muy antiguas las expropiaciones eclesiásticas. Sin hablar de las que con el con el nombre de extrañamiento y ocupacion de temporalidades se imponian en lugar de pena, á los eclesiásticos rebeldes á las órdenes del rey, son innumerables las que desde el siglo XII se verificaron en provecho del erario, así en Aragon como en Castilla, segun se verá en otro capitulo. En este último reino ocuparon bienes eclesiásticos bajo pretextos diferentes, la reina doña Urraca, y los reyes D. Alfonso VII, D. Alfonso IX, D. Enrique I, D. Fernando IV, D. Alfonso XI, D. Juan I, don Juan II, D. Enrique IV, los Reyes Católicos y D. Felipe II. En Aragon hicieron lo mismo D. Alfonso I, D. Ramiro II, y D. Pedro IV. Pero los más de aquellos monarcas se mostraron arrepentidos de sus yerros, pasadas las urgencias que les obligaron á cometerlos; muchos restituyeron ó indemnizaron á la Iglesia lo que les tomaron contra derecho, y alguno como Felipe II, no procedió á la expropiacion de señoríos y vasallos eclesiásticos, sin obtener ántes repetidos indultos pontificios. La expropiacion de la compañía de Jesús en el siglo pasado, más fué consecuencia del extrañamiento de sus individuos, fulminado por vía de pena, que ocupacion por causa de utilidad pública. Las grandes expropiaciones eclesiásticas comenzaron cuan-

(1) Véase lib. VIII, c. 2, pár. 2.

(2) Lib. VIII, c. 4.

(3) Lib. VIII, c. 3, pár. 2.

(4) Lib. VIII, c. 4, pár. 2 y 3.

(5) Véase el cap. 5 de este libro.

de Carlos IV, en 1798, ordenó la enajenacion de bienes raices propios de las casas de beneficencia, hermandades, obras pías y patronatos de legos, y la imposicion del producto de estas ventas en la Caja de amortizacion al interés del 3 por 100. A esta expropiacion, aprobada al fin por la Santa Sede, siguió la que con Bula prévia de Pio VII, empezó á tener efecto, mediante la enajenacion de bienes eclesiásticos por valor en renta de seis millones cuatrocientos mil reales, y cuyo precio habia de imponerse tambien al rédito de 3 por 100 en la Caja de consolidacion de vales reales. Suspendidas al poco tiempo todas estas enajenaciones durante la guerra de la Independencia, vino enseguida la expropiacion de bienes de regulares ordenada por el intruso rey José, la de los desdichados compradores de estos bienes despojados despues sin compensacion alguna, la dispuesta aunque no realizada por las Córtes de 1813, la de los conventos de regulares decretada en 1820, la de los que compraron sus bienes y fueron condenados á devolverlos en 1823, y por último, la más radical de las expropiaciones que han sufrido en nuestros dias las iglesias y corporaciones eclesiásticas de todas clases.

Al contemplar este largo catálogo de invasiones de la potestad soberana en el dominio privado, tal vez se ocurre preguntar si en España no ha reconocido nunca el legislador, en la propiedad, todos los derechos inherentes á su naturaleza. Yo responderia, que si así fuese, no tendria nada de extraño, siendo como es notorio, que tampoco han logrado igual reconocimiento los derechos inherentes á la personalidad humana. Cuando despues de tantos siglos de luchas y de tantas vicisitudes en el órden social, apenas han llegado á fijarse los limites de estos derechos, ¿por qué admirarnos de que hayan andado tan vacilantes é inseguros los de la propiedad individual y sobre todo los de la colectiva? Cuando el derecho de asociacion es una gracia, la propiedad colectiva que de él depende, apenas es un derecho. No es extraño que el Estado expropie de su dominio á aquellos á quienes puede expropiar de su libertad arbitrariamente.

CAPÍTULO II.

De la expropiacion indirecta por utilidad pública.

I.

DE LAS MUDANZAS EN EL VALOR LEGAL DE LAS MONEDAS.

El Estado no sólo ha hecho uso de su soberanía ocupando materialmente la propiedad privada por motivos de interés comun, sino que ha expropiado á veces indirectamente, de derechos constitutivos ó inseparables del dominio, ya afectando respetarlos por entero, ya suponiendo no menoscabarlos en su esencia. Del uso de esta facultad ofrece la historia ejemplos numerosos. Cuéntanse entre ellos las alteraciones arbitrarias en la moneda, las moratorias de las deudas, las servidumbres públicas á favor de la administracion, la agricultura, la ganaderia y las subsistencias, la tasa legal de los precios, la reduccion de los censos y otras providencias semejantes, que por utilidad pública verdadera ó pretendida, han privado á los dueños de una parte de su propiedad. No trataré en este capítulo sino de algunas de ellas y dejaré para los siguientes todas las restantes.

La regalía de acuñar moneda y señalar su valor pertenece únicamente al soberano; pero si éste usa de ella arbitrariamente, puede producir y ha producido en ocasiones, una verdadera expropiacion de dominio. Cuando se atribuye á la moneda un valor superior al que corresponde á su peso y su ley, todos los que tienen derecho á percibir una suma fija de dinero, se encuentran por el mismo hecho, expropiados de una parte de su fortuna, igual á la diferencia que haya entre el antiguo y el nuevo numerario. Estas mudanzas no afectan solamente á la propiedad mueble; son quizá de mayor trascendencia para la inmueble, pues de ellas resultan expropiados así los propietarios, que tienen dadas sus fincas en arrendamiento por tiempo más ó ménos largo, como los dueños de censos de todas especies pagaderos en metálico y cuantos tienen algun derecho real ó participacion en el dominio, por la cual deban percibir una renta ó un capital en numerario.

De esta especie de expropiacion ofrece nuestra historia, como la de otros pueblos, ejemplos numerosos, pero no sin que los límites de la potestad del Estado para ordenarla, dejara de ser tambien objeto de controversia entre nuestros juriconsultos, moralistas y políticos. D. Alfonso el Sábio substituyó

los *pepiones* con la *moneda burgalesa*, y luego ésta con otra peor, llamada *moneda negra*. D. Alfonso XI quiso introducir otra moneda inferior, con el nombre de *cornados* y *novenes*. D. Enrique II, para pagar á los que le sirvieron en la guerra contra su hermano D. Pedro, mandó acuñar reales y cruzados de más valor que el intrínseco, y tuvo al fin que reducirlo á dos tercios del señalado. D. Juan I creó la moneda *blanca*, cuyo valor tuvo tambien que reducir á la mitad. D. Enrique III, D. Juan II, D. Enrique IV, los Reyes Católicos y D. Carlos I alteraron tambien el valor de las monedas de su tiempo. D. Alfonso II de Aragon mandó fundir nuevas monedas de más baja ley que las antiguas. Felipe III aumentó el valor de las de vellon. Felipe IV lo redujo primero, y lo acrecentó después, y volvió á reducirlo luego.

El resultado inmediato é infalible de todas las alteraciones no era sólo quedar defraudados cuantos tenían derecho á rentas ó capitales en dinero, sino la carestía de todas las cosas comerciables, sin que bastaran á contentarlas las leyes con que se pretendia sujetar su precio á nueva y fija tasa. En vano procuró D. Alfonso el Sábio mantener con tales leyes, el crédito de su *moneda burgalesa*; las mercancías subieron de precio á pesar de ellas, y el descontento que estas novedades produjeron, contribuyó no poco á la rebelion de sus vasallos. En vano quiso D. Alfonso XI evitar la carestía originada por sus nuevos *cornados* y *novenes*, mandando que el marco de plata conservara el valor que ántes tenía, de 125 maravedís. En los reinados de D. Enrique II y D. Juan I no bajó tampoco el precio de las mercancías, hasta que convencidos aquellos monarcas de sus errores, redujeron el valor de las nuevas monedas. Con las de baja ley introducidas en Aragon por D. Alfonso II, dejó de circular toda la moneda antigua, y se causaron tan graves daños, que D. Pedro II, á pesar de haber prometido con juramento respetar aquel decreto de su padre, consultó al Papa Inocencio III si debería en conciencia dejarlo sin efecto (1). Con las alteraciones en el valor del vellon decretadas por D. Felipe IV, las monedas de oro y plata desaparecieron tambien, quedando reducidas á simples mercancías, cuyo precio en la nueva moneda, segun afirman escritores contemporáneos (2), equivalia al doble del que representaban.

(1) El Papa respondió á esta consulta que si el rey habia jurado mantener el valor de la moneda, sabiendo que estaba mermada, era nulo su juramento; y si no lo sabia, estaba obligado á recoger la nueva moneda cambiándola por otra de buena ley. (Decr. c. *Quante de jurejurando*.)

(2) Aingo de Ezpeleta, *Resoluciones morales y doctrinales sobre las principales dudas ocasionadas por la baja de la moneda de vellon*, 1643. Resol. 3.ª

En cuanto á la potestad del Estado para ordenar estos cambios en la ley y valor del numerario, habia entre los jurisconsultos y políticos españoles cierta variedad de doctrina, originada principalmente de la cuestion que les dividia sobre la esencia de la moneda. Los que hacian consistir toda su virtud y eficacia en su forma oficial, ó sea en el cuño y sello del soberano que lleva impreso, afirmaban que cualquiera materia, por vil y despreciable que fuese, podia servir de moneda; de lo cual inferian que el valor de este instrumento de cambio dependia exclusivamente de la voluntad del legislador. Los que juzgaban por el contrario que la esencia y virtud de la moneda consiste principalmente en la utilidad y estimacion de los metales que la constituyen, y que el soberano imprimiéndole su sello, se limita á garantizar el peso y la ley de cada una, opinaban que su valor en cambio no dependia del arbitrio del Estado. Entre los que daban al monarca la omnimoda potestad de fijar este valor arbitrariamente, unos la limitaban exigiendo para justificar su uso, el consentimiento del pueblo ó causa justa, y otros prescindian de esta formalidad.

En Aragon estaba vedado al rey por fuero, alterar el valor de la moneda, sin la unánime aprobacion de los cuatro estamentos que componian sus Córtes. Los jurisconsultos aragoneses, por lo tanto, cualquiera que fuese su parecer sobre la esencia de la moneda, negaban al monarca la facultad de alterarla. Pero en Castilla, donde no existia una prohibicion semejante, y donde el rey solia ejercer sin las Córtes, el poder legislativo, era muy general la opinion que le atribuia aquella facultad, con más ó ménos restricciones. D. Diego Covarrubias la reconocia no sólo con el concurso de las Córtes, sino aún sin él, cuando mediase causa justa, si bien con la obligacion de indemnizar á los perjudicados, siendo posible (1). Pero como las mudanzas en la moneda se decretaban siempre por escasear los recursos del Erario, ni faltaba nunca causa que las justificase, ni era menester autorizarlas con el voto de las Córtes, ni habia nunca con qué indemnizar á los perjudicados. Pinelo, fundándose en que la moneda no lo es por razon de su materia, sino de su forma, reconocia tambien en él príncipe la facultad de atribuirle por justa causa, mayor valor que el intrínseco, sin limitacion alguna; entendia por causa justa la conveniencia de impedir por este medio la extraccion del numerario (2). D. Juan Bautista Larrea (3), partiendo del mismo principio, deducia idéntica conclusion;

(1) *Veterum collatio numismatum*, c. I. *De mutatione monetæ*.

(2) *De rescindenda venditione*, l.^a pars, c. 3, n. 7 y 8.

(3) *Novæ decisiones Senatus granatensis*, pars I.^a, disp. 12.

pero aconsejaba á los príncipes con mucha prudencia, que no usasen de semejante facultad, porque para cumplir con su obligacion de regir sus pueblos en justicia, y facilitar el comercio y sobre todo el exterior, es menester que el valor legal de la moneda no sea superior al intrínseco. Asi es que, en su concepto, no debia el rey sin justa causa, hacer alteraciones en ella, y aún obraria más rectamente no haciéndolas sin el consentimiento de las Córtes ó del reino. No dudaba, pues, Larrea de la autoridad del monarca para fijar discrecionalmente el valor de la moneda, pero testigo de las perturbaciones económicas y de las asonadas y trastornos que habia ocasionado en su tiempo el uso arbitrario é ilimitado de esta facultad, la condenaba al fin como político, ya que el rigor de la lógica le obligaba á admitirla como jurisconsulto. Tambien la reconocia Alonso Carranza, al decir que el príncipe podia tasar el valor de la moneda con el mismo derecho y la misma libertad con que tasaba la seda, el paño, el trigo y el vino, pero queria que para ello mediase siempre alguna causa ó el consentimiento del reino (1). Pedro Aingo de Ezpeleta no dudaba de la facultad del monarca para dar á la moneda un valor superior al intrínseco en las necesidades públicas (2). Garcia Gironda, al dar por sentada esta facultad, prescindia de la intervencion del reino y de la indemnizacion, que Covarrubias pedia para los perjudicados (3).

Nótase á la vez en todos estos escritores el influjo de los hechos deplorables que presenciaban, inclinándoles á restringir la potestad del rey, y el temor de incurrir en desacato, defendiendo una doctrina que no estuviese de acuerdo con el uso que hacia el soberano de su prerogativa. Pero no faltaron tampoco políticos ilustres ménos escrupulosos y más independientes, que señalaran límites más estrechos á la autoridad del Estado en esta materia. Pedro Belluga enseñaba como doctrina universal, que la moneda, aunque reciba su virtud de la autoridad del príncipe que la acuña, debe valer por su materia, tanto cuanto represente, deducido el costo de la acuñacion, sino es que este gasto debe ser de cuenta del Erario, y que ninguna alteracion puede hacerse en ella sin el consentimiento del pueblo que haya de recibirla y emplearla (4).

La doctrina del padre Mariana sobre esta materia, era tan sólida y

(1) *El ajustamiento y proporcion de las monedas*, 2.ª parte, c. 3.—Madrid 1629.

(2) *Resoluciones morales y doctrinales de las principales dudas ocasionadas por la baja de la moneda de vellón*. Resol. 3.ª—Córdoba 1643.

(3) *De explicatione privilegiorum*. Quæst. 254, n. 1425.—Madrid 1617.

(4) *Speculum principis*. Rubr. 36.

completa, que la ciencia económica moderna no ha tenido nada que oponerle ni agregarle. Su teoría de la moneda es la misma que se enseña hoy en las escuelas (1). En su concepto, todo lo que exceda el valor legal al intrínseco de este instrumento de los cambios, «es un robo que el príncipe hace á sus vasallos» (2). Si el rey, dice, me toma la mitad de mi dinero, no repara el menoscabo que me causa duplicando el valor de la mitad restante, porque en la misma ó en mayor proporción sube en seguida el precio de todas las cosas. Demuestra con sólidas razones y elocuentes ejemplos, que la adulteración de la moneda paraliza y perturba el comercio, sin favorecer en último resultado al Erario. Solamente en el caso en que una alteración temporal en el valor del numerario fuera el único remedio de salvar la república, sería lícito en su concepto decretarla, pero con la obligación de retirar de la circulación la nueva moneda luego que pase el peligro, y no de otro modo que como se puede en el mismo caso, ocupar la propiedad privada. Gerónimo Salcedo opinaba que ántes de apelar á este recurso extremo, debía el príncipe exigir contribuciones extraordinarias, levantar empréstitos ó imponer cualesquiera arbitrios á sus vasallos (3).

Segun el P. Marquez (4), la estimación de la moneda depende de la materia de que se forja, más que de su forma, y así no puede el príncipe subirla de valor ni bajarla de peso, sino dentro de los límites de la común estimación, del mismo modo que debe atenerse también á la estimación común en la tasa de las mercancías. Sostiene que la institución y el uso de la moneda de materia útil y valor proporcionado, procede del derecho de gentes, que el soberano no puede alterar ni revocar; y de aquí deduce que si éste mandase labrar moneda de papel ó cuero, no obligaría tal ley en conciencia á los súbditos; y que por más que declarase igual esta nueva moneda á la metálica y apremiase á recibirla, nadie querría contratar con ella, y ó no se le daría el valor que representara, ó no sería recibida en pago de ninguna cosa. Digna es de ser admirada la previsión del P. Marquez, pues escribiendo cuando aún no era conocido el papel moneda (5),

(1) *De mutatione monetae.*

(2) *De rege et regis institutione*, lib. 3, c. 8.

(3) *De regimine principum*, lib. 2, c. 28.

(4) *El gobernador cristiano*, lib. 2, c. 39.

(5) No eran en realidad papel moneda sino promesas de pago en buena moneda de cantidades ciertas los billetes con que el conde de Tendilla, en momentos de grande escasez de numerario, pagó á las tropas que sitiaban á Granada por los Reyes Católicos, ordenando que entre tanto se hacían efectivos por el Tesoro, sirvieran como moneda en el campamento. (Nebrija. *Decada 2.^a*, lib. 3, c. ult.)

juzgó con tanto acierto los peligros y las consecuencias de su introduccion. Si fuera licito, decia, sustituir la moneda metálica con la de papel ú otra materia sin valor intrínseco, podria hacerse dueño el rey de casi todo el oro y la plata de sus vasallos, con buena conciencia, puesto que les obligaria á cambiar la moneda antigua de ley por la nueva ficticia, so pena de carecer de este elemento esencial de los cambios. No niega, sin embargo, este escritor, que como impuesto extraordinario y transitorio, pueda el soberano remediar necesidades públicas, atribuyendo á la moneda un valor algo superior al intrínseco, pero condenando muy severamente este género de tributos, y dando bien á entender que por respeto al monarca, no censuraba del mismo modo las alteraciones monetarias de su tiempo y las expropiaciones injustas que con ellas hubieren de causarse.

II.

DE LAS MORATORIAS OTORGADAS POR EL SOBERANO PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS.

Contábase además entre las prerogativas del soberano la de conceder moratorias á los deudores con grave menoscabo del derecho de propiedad. Justiniano la habia consignado en su código, sin que pareciera un abuso de poder, puesto que así en Grecia como en Roma, el perdon de las deudas ó de una parte de ellas, aunque medida de índole extraordinaria, no estaba fuera de la competencia del Estado. Solon la decretó al dar sus leyes á Atenas y despues siguieron su ejemplo, en Roma, Julio César y los tribunos Cayo Licinio y Lucio Sexto. Prorogar el plazo de las deudas en vez de abolirlas, era, pues, un beneficio y un progreso. El autor de las Partidas tomó esta ley como otras muchas, del código justiniano, y tanto por esta circunstancia, como por la autoridad que el derecho romano y sus intérpretes tuvieron en España, se vieron favorecidos nuestros monarcas con aquella peligrosa facultad.

Por tres razones podia el rey, segun las Partidas, prorogar los plazos de las deudas: la pobreza de los deudores, la necesidad de sus servicios en la hueste, y el «sabor de les facer merced» ó sea la mera gracia (1). De modo que la potestad real era discrecional é ilimitada en cuanto á determinar los casos en que la moratoria era procedente, y como la ley por otra parte no señalaba las condiciones con que hubiera de otorgarse, éstas dependian

(1) L. 33, t. 18, Part. 3.^a

tambien del arbitrio del soberano. La única obligacion que imponia la ley al deudor favorecido, era dar fianza al acreedor de su cumplimiento en el plazo prorogarlo, y aún de ella podia dispensar el monarca, segun los jurisconsultos, como lo hiciera usando en el privilegio la cláusula *no obstante derecho de tercero*, etc.

Para defender el uso de esta prerogativa, conciliándola con el principio universal de derecho que no permite al soberano expropiar á nadie de lo suyo, sin causa legítima y prévia indemnizacion, intentaban probar algunos legistas que con la próroga de la deuda no perdía nada el acreedor. ¡Como si de demandar ó no un crédito en dia señalado no pudiera depender en muchos casos la posibilidad de hacerlo efectivo ó el cumplimiento de otras obligaciones, cuya falta origine pérdidas y quebrantos considerables! ¡Como si prohibida la usura ó no constando en los contratos de préstamo el interés que estos devengaban, no quedase despojado el acreedor del fruto del capital prestado durante el plazo de la próroga! Asi es que entre los romanos no tenia esta prerogativa imperial más justificacion que la voluntad suprema del sumo imperante, la cual tenia fuerza de ley y se daba á sí misma las reglas de su accion; y en España el sesudo Antonio Gomez no le hallaba otro fundamento, sino el de que la ley humana positiva tiene su fuerza y autoridad del mismo Dios y obliga á los súbditos á su observancia, por cuanto dicen en los sagrados textos: *Per me reges regnant... Omnis potestas á Deo... qui potestati resistit, Dei orationi resistit...* (1). Y en efecto, los privilegios en perjuicio de tercero no tenian otra justificacion, sino la de que eran leyes que obligaban á los súbditos y de las cuales sólo á Dios debia dar cuenta el soberano.

Las moratorias solian expedirse tanto en provecho de determinados deudores que las solicitaban, alegando quebrantos de fortuna ó desgracias imprevistas, cuanto en el de todos los deudores de ciertos pueblos ó territorios, con motivo de calamidades públicas. Segun Alfonso de Azevedo, se daban frecuentemente por cinco años á los labradores que tenian malas cosechas (2). En 1625 se concedió moratoria á todos los vecinos de Sevilla, por haberse retardado el arribo de la flota de las Indias, hasta que ésta llegara con sus caudales (3). Pero otras muchas se otorgaban por motivos ménos legítimos, aunque no ménos legales, puesto que bastaba, segun la ley de Partida, la intencion de hacer gracia.

(1) *Ad leyes Tauri*, lex 2.^a

(2) *Commentarii in Hispaniae regias constitutiones*, lib. 4, t. 14, n. 34.

(3) Alvarez de Velasco, *De privilegiis pauperum*, para 1.^a quest. 44.

Examinando el uso de esta prerogativa, segun la doctrina de los juriscultos, se notan al lado de opiniones que la ampliaban en fuerza de la soberanía absoluta, que casi todos reconocian en el monarca, una señalada tendencia á restringirla, en cuanto la ejecucion de tales privilegios correspondia á los tribunales. Así cuando el rey la otorgaba, expresando que habia de llevarse á efecto, á pesar de cualquier derecho que se alegara en contrario, dicen los juriscultos que debia obedecerse desde luego, y que sólo en el caso de que fuera muy grave el perjuicio que á tercero hubiera de causarse, se podria suspender su cumplimiento, representando sus inconvenientes, si bien tampoco era lícito dilatarlo cuando recayese segundo mandamiento de ejecucion. Pero cuando la moratoria se concedia sin ninguna cláusula extraordinaria, disputaban los juriscultos sobre las condiciones con que habia de aplicarse á los interesados, y en este punto es en el que mostraban más su tendencia á restringir el uso de la prerogativa. Todos convenian generalmente en que el término de la moratoria, aunque la ley no lo señalaba, no podia exceder de diez años y los más aconsejaban que no se otorgase ninguna que pasara de cinco. Era tambien doctrina recibida que no debia darse á ningún deudor segunda moratoria, y que las dadas en debida forma no eran aplicables á las deudas ejecutoriadas por sentencia firme, ni á las confirmadas con juramento, porque la potestad secular no podia dispensarlo, ni á las dotales por razon de su privilegio, ni á las procedentes de alquileres, censos, compra de comestibles, delitos, depósitos, salarios y pensiones alimenticias, ni á las contraidas á favor de la iglesia, de pupilos ó del fisco, ni á las muy recientes, por ser sospechosas de fraude, ni á las mercantiles entre comerciantes, ni á las contraidas por concursados fraudulentos, ó por deudores cuyos acreedores no fueran ménos pobres que ellos. Verdad es que algunos escritores jurisperitos no admitían varias de estas excepciones, sosteniendo que la moratoria comprendia, por ejemplo, las deudas juradas, las procedentes de delitos, censos consignativos, alquileres, dotes, depósitos y otras; pero los más reconocian todas aquellas excepciones, á pesar de que la ley no las establecia, cuando en el rescripto del principe no aparecian expresamente excluidas. Tambien se disputaba si la moratoria concedida al deudor aprovechaba á su fiador. Los más opinaban afirmativamente, fundándose en que de otro modo, se frustraria la moratoria, porque el acreedor repetiría contra el fiador, y éste contra el deudor en virtud de una accion que como nacida despues de la moratoria, no estaba sujeta á ella; pero otros pensaban que siendo una misma la deuda, cualquiera que fuese el reclamañte,

podia exigirse durante la próroga del plazo, y que por lo tanto seria eficaz la gracia para el deudor, aunque el fiador no se aprovechara de ella y hubiese por el contrario de esperar el plazo de la moratoria para exigir su crédito (1).

Tambien andaban discordes las opiniones en cuanto á la calidad de la fianza que el deudor agraciado habia de ofrecer á su acreedor. La ley de Partida ántes citada exigia *fiador*, y cuando no se diese, declaraba ineficaz la moratoria. Pero como al mismo tiempo señalaba la pobreza entre las causas que podian dar lugar á la gracia, y los pobres no suelen encontrar quien les fie fácilmente, imaginaron los jurisconsultos que en tal caso, para que no quedara sin efecto la merced del soberano, debería admitirse la caucion juratoria, ó la obligacion general de bienes. Pero Gregorio Lopez, Castillo y otros no admitian esta interpretacion, sino cuando el fundamento de la espera alegado en el rescripto, fuese la pobreza del deudor (2), y Bobadilla queria además que no pasase de un año el tiempo de la próroga (3). Tambien era general la doctrina de que durante este tiempo debian correr los intereses, cuando aparecieran estipulados en la escritura de obligacion (4).

Asi fué restringiendo la jurisprudencia el uso de esta prerogativa, á pesar de la generalidad con que la habian declarado las leyes, hasta que al fin ha desaparecido por completo en nuestros dias, al saludable influjo de los principios que consagran la independendencia y la libre disposicion del dominio.

III.

DE OTRAS RESTRICCIONES DEL DOMINIO EQUIVALENTES Á LA EXPROPIACION.

Aunque los jurisconsultos españoles interpretaron siempre restrictivamente el axioma legal que atribuia al soberano el señorío de todas las cosas, *dominus omnium*, declarando que este señorío era tan sólo de proteccion y defensa, *quad protectionem et tuitionem*, esta misma potestad que reconocian en el Estado comprendia la de disponer de las cosas privadas,

(1) Alvarez de Velasco, obr. cit. pars 1.^a, quæst. 44.—Azevedo, obr. cit. lib. 4, t. 14.—Salgado, *Labyrinthus creditorum*, pars 2.^a c. 30.—Balmaseda, *De collectis*, quæst. 93.—Castillo, *De alimentis*, lib. 8.^o c. 12.

(2) *De alimentis*, ibid.

(3) *Política de corregidores*, lib. 3, c. 13, n. 20.

(4) Alvarez de Velasco, ibid.

siempre que fuese para proteger y fomentar los intereses públicos. Arbitró el soberano para apreciar estos intereses y escoger medios más adecuados de favorecerlos, era natural que lo hiciese conforme al concepto que de unos y de otros ha prevalecido en la sociedad.

Creyóse en un tiempo que la ganadería y la trashumacion necesitaban ser protegidas como fuente principal de nuestra riqueza, aún con el sacrificio de la propiedad privada, y el rey haciendo uso de su señorío sobre las cosas *quoad protectionem*, aprobó la hermandad de la Mesta, declaró á su favor la servidumbre de cañada y pastos, prohibió acotar las tierras y romper las dehesas, y otorgó á los ganaderos el privilegio de perpetuar su posesion en las tierras de pasto que llevaban en arrendamiento, por precios tasados. Adquirió despues mayor incremento la agricultura: era notoria la conveniencia de que abaratase la produccion agrícola, y el Consejo sujetó á tasa las tierras labrantías, del mismo modo que lo estaban ya las de pasto. Era interés público, sin duda, promover la baratura de todas las cosas necesarias para la vida, y considerando el legislador que no era menester para obtenerla señalar el precio de cada una, decretó la tasa, ordenó el registro prévio y la enajenacion forzosa de los granos, prohibió la reventa de los abastos, y concedió á los abastecedores el privilegio de tanteo en la adquisicion de los artículos de primera necesidad. Facilitar las comunicaciones y los trasportes era de conveniencia reconocida, y de aqui la obligacion impuesta á los dueños de prados y montes de contribuir con una parte de sus productos á la Real Cabaña de carreteros. La usura estaba condenada por las leyes canónicas y prohibida por las civiles, pues taseamos, dijo el legislador, lo que por lucro cesante ó daño emergente podrá exigir el capitalista de aquellos que se aprovechen de su fortuna. Los censos consumen las utilidades de la labranza, arruinan á los propietarios y producen intereses usurarios, pues nada más justo y conveniente que reducir una y otra vez sus réditos, aunque para ello sea necesario expropiar de una parte de su fortuna á los censualistas. Se ha cumplido el término de los foros de Galicia y Astúrias: los dueños del dominio directo reclaman la posesion del útil, para disponer de él como más les convenga; pero los foristas van á resultar muy perjudicados, porque habrán de pagar mayores rentas, ó tendrán que abandonar sus predios; y el Consejo por auto acordado, suspende las acciones entabladas por los señores y les obliga á mantener indefinidamente y bajo las mismas condiciones á sus colonos, en la posesion en que se hallaban.

Tal es el uso que hacia el Estado de su señorío de proteccion sobre las

cosas privadas, cuando la opinion dominante no le señalaba otro limite que el de la conveniencia, entendida segun las ideas dominantes. Así es que comparando los actos del poder en esta materia, con el juicio que de ellos formaban los contemporáneos, y las doctrinas y remedios imaginados por los escritores políticos, nótese en ellos la misma tendencia á reducir ó menospreciar los derechos del dominio, y aún más exagerada en los últimos que en el gobierno. Todas las servidumbres y cargas impuestas á la propiedad en favor de otros intereses colectivos, hallaron á vueltas de alguna leve contradiccion de tal cual jurisconsulto ilustre, defensores celosos y hasta ardorosos apologistas. Pero entre los políticos que trataban del fomento de la riqueza, se solia aún guardar ménos respeto á los derechos del dominio. Unos pedian que de real órden se mandase sembrar todas las tierras incultas, ya obligando á los dueños á hacerlo con sus propios recursos, ó ya auxiliándoles con un donativo, con que habian de contribuir todos los vasallos. Otros demandaban que se pusiese coto al plantio de viñas, reduciéndolo á lo más necesario, ó que se diese á los cosecheros y ganaderos el monopolio de los abastos de los pueblos y á los fabricantes el de las tiendas de telas, ó que se fijara el número de mercaderes y menestrales que habia de haber en cada lugar (1). Lope de Deza proponia en 1618 para fomentar la agricultura, varios remedios, y entre ellos, que no se permitiera á los labradores salir del reino, sin dejar encomendada la labranza de sus tierras, so pena de perderlas: que no se les permitiera tampoco tomar capitales á censo sobre sus heredades: que se les facultara para exigir el arrendamiento perpétuo ó temporal en las tierras que labrasen, pagando tres y tercio por ciento de su valor en la especie de fruto que produjeran, corriendo los dueños el riesgo del caso fortuito, y quedando obligados á perdonar las rentas en los años estériles; que ningun labrador pudiera tener más de un par de mulas: que los jornales se sujetaran en cada lugar á tasa de peritos, y que no se pusiera tasa al precio del trigo, pero sí al del pan (2). Para dotar los erarios públicos (especie de Bancos inventados á principios del siglo xvii, para tomar capitales á censo, á fin de prestarlos á interés más crecido), se pidió una ley que prohibiera dar dinero en ninguno de estos conceptos más que á aquellos establecimientos, y que para su primera dotacion, se obligara á todos los españoles á imponer

(1) Sancho de Moncada, *Restauracion política de España*.—*Memorial de Miguel Alvarez Osorio á D. Carlos II.*

(2) *Gobierno político de la agricultura*, part. 3.ª

en ellos á censo, una parte proporcional de su fortuna (1). D. Francisco So-
moza, para remediar los estorbos de la riqueza de Galicia, proponia que se
prohibiera anticipar á los dueños de tierras las rentas no vencidas que les
habian de pagar sus colonos: que fuesen declarados herederos forzosos los
parientes dentro del cuarto grado: que se redujeran todos los mayorazgos
á la clase de regulares: que se prohibieran las mejoras de tercio y quinto
entre labradores, y que las rentas fijas de los foros se convirtieran en partes
alicuotas de frutos, siempre que pudiese esto hacerse sin agravio de nin-
gun derecho (2).

Aún pidieron reformas más radicales en menoscabo de la propiedad
algunos de los que informaron en el expediente sobre establecimiento de
una ley agraria. Fueron entónces consultados acerca de los medios de
fomentar la agricultura, los tribunales superiores y sus fiscales, los in-
tendentes, el procurador general del reino, muchos ayuntamientos y
otras autoridades y corporaciones. Los más pidieron la tasa de los ar-
rendamientos de tierras; el privilegio de los colonos para continuar
indefinidamente en su posesion; la prohibicion de subarrendarlas, y
el derecho de tanteo á favor de los vecinos, así en las compras como en
los arrendamientos de las heredades de sus respectivos términos munici-
pales. Luego unos recomendaron la tasa de los jornales y de la cabida de
los predios que habia de poseer y cultivar cada labrador; otros la prohibi-
cion de adquirir más tierras que las que cada uno pudiese labrar por sí;
otros la anulacion de todos los subarriendos existentes, y otros la reduc-
cion de las rentas de todas las tierras á lo que montaban á principios de
aquel siglo. Algunos pretendian que los arrendamientos de heredades se
trasmitieran por sucesion como las propiedades, ó que fijara la ley los tér-
minos de su duracion máximo y mínimo; ó que los dueños no pudieran en
ningun caso desahuciar á los colonos que pagaran las rentas, como no
fuese para labrar ellos sus tierras.

No más respeto á los derechos del dominio que estos planes de ley
agraria revela la prohibicion de levantar el precio de los arrendamientos
decretada en 1785, á fin de que los propietarios no hicieran recaer sobre
los colonos la nueva contribucion de frutos civiles establecida entonces.
Pero contra aquellos planes y esta injusta providencia sonó tambien en el

(1) *Advertencias del estado en que están el patrimonio real y el reino, y de los me-
dios por donde se pudiera tratar de su reparo*, 1622. Anónimo. 1.ª parte, c. 14 y 15.

(2) *Estorbos y remedios de la riqueza de Galicia*, 1775, p. 34, 44, 48 y 193.

nismo expediente, efecto de otras doctrinas, á la sazón ménos populares, pero que eran el fruto de los progresos de la civilización, y han sido al cabo las de la sociedad moderna. Corporaciones respetables y sabios repúblicos impugnaron científicamente casi todas las restricciones del dominio propuestas por otros informantes, demostrando la injusticia y los inconvenientes, ya de tasa de las rentas y de la extensión de las tierras que había de poseer cada labrador, ya del derecho de tanteo en los arrendamientos de tierras, y ya de la limitación del comercio de granos y de la prohibición de los subarriendos. Jovellanos más que todos, abogó elocuentemente por los fueros del sagrado derecho de propiedad, hizo ver la injusticia y la ineficacia de los remedios propuestos por otros informantes, manifestó los obstáculos que la naturaleza, las costumbres y las leyes oponían al fomento de la riqueza agrícola, y demostró que el poder del Estado sobre las cosas de dominio particular tiene en buenos principios, límites mucho más estrechos que los que por lo general le señalaban muchas de nuestras antiguas leyes y los políticos y los arbitristas de los pasados siglos.

Desde entónces como ántes, se han señalado los progresos de la civilización en la mayor independencia del dominio privado. El paso de la primitiva comunidad de bienes á la división de las propiedades, fué el primero de la bárbarie á la civilización. Las limitaciones de la potestad del Estado para expropiar por causa pública, revelan un progreso de la justicia social y de la ciencia del gobierno. Desde el siglo xvii no se reconoce al soberano conquistador el derecho de despojar de sus haciendas á los súbditos del país conquistado. Tampoco encuentra defensores, ni aún entre los más entusiastas apologistas de lo pasado, el despojo que sufrieron los judíos y los moriscos, por la manera, al ménos con que fueron expulsados. Las alteraciones arbitrarias en el peso y ley de la moneda, no han hallado absolución ni disculpa ante las doctrinas modernas, por más que el papel-moneda de nuestros días se halla á veces en condiciones semejantes á las de las antiguas monedas alteradas. La abolición de las moratorias fué una de las primeras reformas del gobierno constitucional. Para libertar la propiedad de injustas trabas, cayeron al mismo tiempo los privilegios de la Mesta, la tasa de las mercaderías, las restricciones del comercio de granos y los privilegios de la cabaña de carreteros. Desde el reinado de D. Felipe V no se ha vuelto á poner mano en los censos para privar á los censualistas de sus derechos, á pesar de que apenas hay escritor que haya tratado de ellos sin condenarlos por perjudiciales, y el mismo Consejo de Castilla no se atrevió

á resolver en 1763 la cuestión de los foros, limitándose á dejar en suspenso provisionalmente las demandas entabladas sobre ellos. A los escritos de los políticos y arbitristas del siglo xvii, siguieron los de los políticos y economistas del siglo xviii, que demostraron la necesidad y la justicia de libertar á la propiedad individual de las trabas que la oprimían. De esta manera se han ido significando los progresos de la civilización en el estado y condiciones de la propiedad.

CAPÍTULO III.

De los antiguos impuestos considerados como fruto del señorío territorial.

Si el impuesto puede considerarse, segun las ideas modernas, como una expropiación parcial de la propiedad privada por causa de utilidad pública, cuya indemnización satisface el gobierno con los servicios sociales y administrativos que proporciona, en la Edad Media y en España era más bien el fruto de cierta co-participación reservada al Estado en la propiedad de las tierras y de las personas que lo pagaban. Por eso no he hecho figurar los tributos entre los diferentes géneros de expropiación de que he tratado en los anteriores artículos.

Dueños de España los visigodos por derecho de conquista, lo fueron igualmente, segun las ideas del tiempo, de todas las tierras que poseían los españoles. Si por un rasgo de su política cedieron la tercera parte de ellas á los naturales, fué con la condición de pagar al Erario público por su disfrute, cierto censo ó tributo. Los conquistadores, que segun las costumbres germánicas, no eran vasallos de un príncipe por cuya cuenta guerreaban, sino familias asociadas para pelear por su cuenta propia, bajo la dirección de ciertos caudillos, adquirieron inmediatamente de los vencidos, los otros dos tercios de las tierras, sin ningún gravámen, puesto que nadie tenía derecho para imponérselo. Así hubo desde entonces tierras pecheras y exentas; así la inmunidad de tributos fué patrimonio de la nobleza, descendiente de aquellos conquistadores, y los impuestos fueron carga tan sólo de la gente de condición servil y plebeya.

Conquistada después España por los sarracenos, no hubo de entenderse transmitido á ellos de la misma manera, el dominio absoluto de las tierras,

tanto porque segun las costumbres de aquel pueblo, no entraban los inmuebles en el botin partible entre los guerreros, cuanto porque para facilitar la ocupacion del país, se prometió á los rendidos cristianos respetar sus propiedades. Pero las abandonadas por las familias que emigraron y las que habian pertenecido al Estado, á los pueblos, á las iglesias y á algunos particulares que resistieron la invasion, no se trasmitieron directamente á las tribus invasoras, sino á su caudillo soberano, el cual distribuyó entre ellas una parte dividida en grandes términos, cuya propiedad era colectiva en las mismas tribus. Mas así como los kalifas para conservar sus propiedades á los cristianos les exigieron por censo ó tributo, el diezmo de sus frutos, así por repartir entre los múslimes las otras tierras que tomaron por suyas, exigieron de ellos la misma contribucion. El diezmo era por lo tanto en la España árabe, el impuesto más general de la propiedad inmueble, pues si se pagaba otro tambien, era de carácter personal y afectaba únicamente á los muzárabes y á los no musulmanes. De modo que los poseedores de tierras, en las provincias definitivamente ocupadas por los moros, cambiaron generalmente por el diezmo, la contribucion que ántes pagaban á los reyes visigodos. Pero en las comarcas donde no penetraron ó no afirmaron su planta los invasores, quedó libre la propiedad del antiguo tributo al faltar los príncipes que á él tenían derecho; y al darse los propietarios un nuevo régimen, tuvieron buen cuidado de no reconocer en nadie la potestad de gravarlas con forzosos pechos, que eran señal de sujecion y servidumbre.

Desde entónces comenzó y progresó la restauracion de la monarquia cristiana, organizándose pequeños centros de resistencia que fueron al poco tiempo pequeños Estados, y que reconquistaron con sus ejércitos, aunque muy lentamente, las provincias ocupadas por los infieles. Donde no dominaron las armas agarenas, los dueños de las tierras quedaron soberanos de ellas y no se pagaron más tributos que los censos y prestaciones con que les contribuian sus colonos y siervos. Pero luego que los reyes de Astúrias extendieron sus dominios, arrancando del poder de los moros los reinos de Leon y Castilla, considerándose dueños de sus tierras, las repartieron con los caudillos y los soldados que les habían ayudado á recuperarlas, y con la iglesia que les auxiliaba tanto con sus oraciones como con sus armis. El Estado se reservó en las más de ellas, los mismos censos y tributos de los antiguos poseedores visigodos, que al desaparecer la monarquia, no cayeron bajo la dominacion de los conquistadores. No dieron sin embargo los reyes heredades á los nobles y á los prelados con la obligacion de que

ellos mismos les pagaran directamente tributo, porque esto no habria sido conforme con su aristocrática condicion; pero se reservaron generalmente alguna parte de los censos ó emolumentos que los colonos solariegos debian pagar por su disfrute, concedieron directamente muchas tierras á sus propios vasallos de calidad pechera, y se atribuyeron el derecho de continuar percibiendo los diezmos que pagaban ántes á los kalifas y emires los muzárabes y los moros sometidos. Así los vasallos de señorío, lo mismo que los realengos, pagaban al rey el tributo de *moneda* que, segun en otro lugar he dicho (1), consistia en el 10 ó el 5 por 100 del caudal segun su cuantía. En muchos lugares la mitad de las multas por *homicidios, rausos y calumnias*, pertenecia á la corona, y la otra mitad al señor. En las tierras realengas contribuian los vasallos solariegos al rey, además de la *moneda* con el censo predial llamado *insurcion, martiniega ó marzazga*, la *fonsadera* ó tributo de guerra que pagaban los labradores, el *yantar*, los *pedidos empréstitos* ó servicios extraordinarios y los otros tributos de que he hecho mencion en varios lugares de esta obra (2). En ellos podrá verse cuán varia era, segun los lugares y los tiempos, la cuantía de estos impuestos, así como su procedencia del dominio originario del soberano sobre todas las tierras reconquistadas.

Confundida la soberania con la propiedad, era natural que se confundiese tambien la renta territorial con el impuesto. Cuando el dueño de la tierra es á la vez el soberano que personalmente la administra en ambos conceptos, no sabe el colono si lo que por ella se paga, es censo predial ó contribucion pública. Tal es el carácter indefinido y confuso que tuvieron en España los más de los impuestos, mientras que anduvieron juntas la propiedad territorial y la soberania. Pero de cualquier modo que fuese, sobre los inmuebles no gravaron en mucho tiempo otros tributos que los que pagaban los colonos solariegos al señor de su tierra, ya lo fuera el rey ó ya algun rico-hombre ó hidalgo, con excepcion, como dejo dicho, de la *moneda*, y aún de ésta se eximian muchos lugares por privilegios y todos los vasallos de muy corta hacienda.

Tampoco habia igualdad ni proporcionalidad en estos tributos. En unos lugares se pagaba un censo fijo, mayor ó menor, de tanto por heredad ó casa; en otros una parte alicuota de los frutos de las heredades, la cual variaba desde la mitad de todos ellos hasta la décima ó la vigésima parte, ó

(1) Véase el lib. III, cap. 8, par. 3.

(2) Ibid., cap. 2, pár. 3; cap. 8, pár. 2 y 3.

bien una suma proporcionada al número de yuntas y de aperos, ó cantidad cierta de granos, vino, carne ó animales.

La *pecha* era el tributo más general de Navarra, y sin embargo no la pagaban los infanzones, á no ser los llamados de *abarca*, que poseyeran heredades del rey. Cada *pecha* representaba en su origen un servicio que los villanos y solariegos debían prestar al señor de la tierra que disfrutaban, ya lo fuese el rey ó ya algún infanzon, el cual servicio se había conmutado con el trascurso del tiempo, por una cantidad cierta de frutos. Los villanos defendieron siempre la naturaleza real de estos tributos; el Estado y los señores que los cobraban les atribuyeron el doble carácter de real y personal; y en efecto, así fué reconocido cuando perdida la memoria de sus orígenes, se arraigó la costumbre de pagarlos sin tener en cuenta las heredades en que tuvieron nacimiento. Pero era tan desigual su cuantía, que al lado de pueblos enteramente exentos de pagarlos, había otros en que los pecheros quemaban ó abandonaban sus caseríos y fabricaban otros en tierras libres, para excusarse del impuesto. En unas partes, en las más tal vez, era la *pecha* de cantidad fija, y en otras guardaba proporción con la cabida de la heredad; aquí era inmutable la *pecha* de cada finca, aunque ésta se partiese entre varios dueños; allí se multiplicaba en caso de división de la heredad por el número de sus partícipes. En el libro IV de esta obra puede verse la infinita variedad de costumbres que regían sobre este punto y la odiosa irregularidad con que se pagaban estos tributos.

Tampoco en Aragón satisfacían pecho alguno los infanzones ermunios: el llamado *precario* ó *noveno*, la *pecha* ó *deveria*, el *monedaje* y los demás tributos conocidos en aquel reino, pesaban únicamente sobre los simples ciudadanos y los villanos de distintas especies (1). Unos conservaron siempre su naturaleza real como el *noveno*; otros se hicieron personales; pero todos se pagaban al señor de la tierra por razón de este título y cualquiera que fuese. Cuando no lo era el rey, tampoco tenía participación en ellos como no se la hubiera reservado previamente. Así en el *monedaje* que cobraban de sus vasallos las órdenes militares, la corona tomaba la mitad por una de estas reservas. Todos aquellos tributos procedían también del dominio originario que habían tenido los reyes sobre las tierras reconquistadas de los infieles. Ni es ménos evidente que en aquel dominio habían tenido origen los otros impuestos que cobraban los reyes de Aragón por el pasto de

(1) Véase el lib. V, cap. 1, pár. 2 y 4.

los ganados en los montes públicos (*herbaje*); por la trashumacion del ganado lanar de unos á otros lugares (*carneraje*), por el pasto del vacuno (*bovaje*); por treudo de las casas y mercados de los moros que primero ocupó la corona por derecho de conquista, y despues cedió mediante aquel contrato; por treudos tambien de tierras pertenecientes en otro tiempo á lugares destruidos y agregados despues por la corona á los lugares inmediatos (*pardinas*), y por otros títulos y derechos (1).

El mismo origen dominical tuvieron los tributos en Cataluña y Valencia. Allí tambien fueron ó la renta por el disfrute de heredades privadas ó el precio del uso de las cosas públicas, que se debía en todo caso al señor de la tierra. Los barones y señores, como partian con el rey este señorío, no tenian dentro de sus dominios á quien pagar pechos; pero los que cultivaban la tierra, utilizaban sus frutos ú ocupaban exclusivamente alguna porcion de ella, y los que se servian de los caminos públicos, montes, baldios, costas, rios y abrevaderos, pagaban este servicio al señor territorial en forma de tributo.

En Cataluña eran innumerables los pechos, pero todos se satisfacian por alguno de estos dos conceptos ó por ambos á la vez. Como renta de la tierra ó casa ó heredad que exclusivamente disfrutaban, contribuian los vasallos al señor, ora lo fuese el rey, ora algun conde ó baron, con el laudemio de las enajenaciones, que importaba, segun los casos, desde el tercio al diezmo del precio: una parte alicuota de los frutos, que solia ser la décima ú otra menor, conocida con el nombre de *tasca* (2); censos en comutacion de servicios; un impuesto de cuota fija é igual por cada casa ó fuego llamado *fogatge* (3); una prestacion agraria ó renta con el nombre de *terrazgo* (4); la *talla* (5), que era un tributo proporcional á la hacienda de cada contribuyente; el *albergue* y la *cena* (6) con que estaban gravadas las casas por razon de los servicios del mismo nombre, con que debian contribuir al señor; el *coronatge*, que era un impuesto de cinco sueldos y seis dineros con que debia contribuir cada hogar, cuando el rey ó la reina se coronaban; y el *maridatge*, que era otro de siete sueldos por casa tambien, con que debian servir los vasallos al rey, cuando casaba á su hija ó á su

(1) Asso, *Hist. de la economia política de Aragon*, cap. 6.

(2) Era, segun Ducange, una prestacion agraria semejante al diezmo.

(3) Const. de Cathal., lib. 4, t. 25, VIII.

(4) Id., lib. 10, t. 5, VII.

(5) Id., vol. 2, lib. 4, t. II.

(6) Id., lib. 10, t. 5, II.



hermana (1). Por el uso de los caminos públicos para el transporte de las mercancías y obtener los beneficios del comercio, se pagaban al señor, dueño de los mismos caminos, multitud de tributos llamados *del general*. Eran los principales el llamado *leuda* ó *lèzda*, que se devengaba por la entrada ó el mero tránsito de las mercancías en lugares determinados, y los *peages*, *portazgos* y *pontazgos*, que se satisfacían por el paso de las personas, caballerías y ganados (2). Por el disfrute de los pastos y abrevaderos, de los montes y terrenos públicos, es decir, propios del señor territorial, contribuían los vasallos con el *bovage* (3), el *herbage* y el *carnerage* (4) que devengaban los ganados de todas especies. Ultimamente, ya fuese por el doble concepto de poseedores exclusivos de porciones del suelo, y partícipes en las cosas de uso público, ó ya por el derecho de morar en tierra ajena, pagaban los vasallos el *monedage* como en Aragón, y probablemente en forma y cuantía parecidas; las *questias* ó sea los *pedidos*; según se decía en Castilla, á las cuales contribuían en proporción á sus heredades los que las poseían en los términos de los castillos (5); los *acaptas*, si como presumo, era este otro nombre del mismo tributo (6); las gabelas de la sal, el trigo y las vituallas (7); las multas por delitos (*calumnias*) ó por litigar temerariamente (*quinto*). No nombro aquí los gravámenes llamados *malos usos*, de que traté en otro lugar, porque la mayor parte traían su origen de la servidumbre y eran independientes de la propiedad. El llamado *exorquia*, ó sea aquel en cuya virtud heredaba el señor forzosamente al vasallo que moría sin hijos, es el único que tiene alguna relación con el dominio señorial de la tierra.

El reino de Valencia, conquistado por el rey D. Jaime y repartido entre la corona, la Iglesia y los caballeros, con cargas y condiciones diversas, pagó las mismas especies de tributos. En la porción de territorio que tocó á cada una de estas tres clases de partícipes, había heredades y fincas

(1) Const. de Cathal., vol. 2, lib. 10, t. 2, I.

(2) Id., vol. 1, lib. 4, t. 24, I, II, III y IV.

(3) Id., lib. 10, t. 4, I.

(4) Id., id., t. 5, VII.

(5) Id., vol. 2, lib. 4, t. 9, III.—Ducange verb. *Questia*.

(6) Id., lib. 10, t. 5, II. Aunque según Ducange, *accaptare* era dar algo por la adquisición de alguna cosa, como, por ejemplo, el reconocimiento de un feudo, creo que en Cataluña no era el *acapte* una dádiva de esta especie, por cuanto en la constitución citada se habla como de cosas que tenían entre sí alguna analogía, de *cenazas*, *albergues* y *acaptas*.

(7) Const., lib. 4, t. 24, V y VI.

productivas, montes y baldíos, caminos y veredas, aguas y ríos, y de aquí las distintas especies de contribuciones con que resultaron gravados los vasallos. Las heredades y tierras productivas fueron dadas en feudo, á censo ó en aparcería de frutos: los montes, los baldíos y las aguas, se destinaron al uso público no gratuito.

Los vasallos que utilizaban las tierras feudales contribuían con los laudemios y los demás tributos de que he hecho mencion en otro lugar (1). Los que obtuvieron las demás tierras, ó las mismas feudales de mano de los feudatarios, á título de censo ó aparcería, pagaban por tributo, la pensión ó parte alicuota de frutos que le habia sido señalada. Todos los vasallos en general, que no eran de los exentos por su estado noble, pagaban por disfrutar hacienda en tierra ajena, el *monedage*, segun en otro lugar queda explicado (2); la *questa*, el *maridage*, la *coronacion*, y el *nuevo regimiento*, como en Cataluña: la *pecha* ó cuota fija con que contribuía cada pechero para satisfacer la *cena de rey*, tanto la llamada *ausencia* como la de *presencia* y otros varios tributos. Como dueño de los mares costaneros, cobraba el rey el diezmo de la pesca; y por cuanto le pertenecian asimismo los ríos y las aguas que se derivaban de tierras realengas, cobraba pechas por navegar ó pescar en ellos, tomar aguas para riego y construir puentes. Como dueño de las tierras incultas concedió D. Jaime I á los vecinos de Valencia el derecho de pastar en todas las del reino, aunque fueran de señorío particular, y cobró de todos los demás vasallos que utilizaban pastos públicos, los derechos de *carnage* y *herbage*. Al rey tambien, como dueño de los caminos y de la tierra no poseida en dominio privado, se pagaban igualmente los derechos de entrada y salida, portazgos, pontazgos y peages.

El primer tributo importante que no se fundaba ó se fundó ménos en la propiedad señorial del suelo, fué la alcabala establecida por D. Alfonso XI para subvenir á los gastos extraordinarios del cerco de Algeciras, en 1341. Los impuestos hasta entonces, ó se confundian con la renta de la tierra, ó equivalian, como se ha visto, al pago de servicios individuales que recibian los vasallos de cosas propias del soberano: la alcabala fué el primer tributo de carácter general que se impuso á todos los vasallos sin excepcion y que no se fundó en ninguno de aquellos conceptos, sino únicamente en el deber comun de contribuir á las cargas del Estado: fué una

(1) Véase el libro VII, cap. 1 y 2.

(2) Ibid. cap. 2.

especie de expropiacion parcial por causa de utilidad pública, aunque en su forma guardase cierta semejanza con el laudemio acostumbrado en las enajenaciones de bienes feudales en Cataluña y Valencia. Por razon de este nuevo impuesto establecido transitoriamente, se pagó primero un 5 por 100 del precio de todas las ventas. El mismo D. Alfonso XI lo obtuvo luego como permanente de las Córtes de Alcalá de 1548, para atender á los gastos del sitio de Gibraltar. El rey D. Pedro lo aumentó despues al 10 por 400: D. Enrique II lo redujo luego á su tarifa primitiva y ha experimentado posteriormente otras alteraciones semejantes, asi en su cuantía como en las cosas sujetas á su pago.

Fué de igual especie otro tributo llamado de los *cuatro unos por ciento* que sucesivamente se impusieron sobre las ventas, permutas y constituciones de censos, en los mismos términos que las alcabalas. Reducido á la mitad este impuesto en 1686, fué restablecido por entero en 1705 y corrió siempre con las alcabalas.

Tambien fué tributo independiente del dominio ó señorío territorial originario, pero que pesaba tan sólo sobre la propiedad mueble, el servicio de millones otorgado á Felipe II en 1590, para reparar la pérdida de la grande armada. Establecido primero sólo por nueve años y por la suma de dos millones de ducados en cada uno, los cuales habian de imponerse sobre especies determinadas de general consumo, se prorogó despues diferentes veces por cantidades y con condiciones diversas. A la vez se repartía entre las provincias y pueblos la contribucion llamada *servicio ordinario y extraordinario*, compuesta de la antigua de *moneda*, reducida ya á 100 millones de maravedis en tiempo de los Reyes Católicos, y de otra de 50 que pidió por tres años Felipe II, aunque se perpetuó luego confundándose con la anterior. El cupo de este impuesto señalado á cada pueblo, se repartía entre los vecinos en proporcion á sus haciendas. Pagábanlo solamente los del estado llano, y con tan injusta desigualdad, que fué suprimido por estos motivos á fin del último siglo.

Todos los demás tributos que inventó en Castilla el ingénio de los arbitristas aguzado por el estímulo de las necesidades públicas, no afectaron directamente á la propiedad territorial. Redujéronse á simples derechos de consumo sobre determinados articulos ó al estanco de otros y su venta exclusiva por el Estado. Requeridas las Córtes á otorgar cantidades ciertas de dinero que el Erario habia menester en sus apuros, convenian siempre en darlas, y para obtenerlas, se señalaba ora un impuesto sobre la importacion ó el consumo de ciertas especies, ora el estanco del aguar-

diente, el tabaco, la azúcar, la pólvora, el plomo, las pasas, los naipes y otros artículos. La contribucion llamada de frutos civiles, establecida en 1785 sobre los bienes y rentas de los hacendados forasteros, y extendida después en 1794 á todas las fincas rústicas arrendadas y á las urbanas y á los derechos reales: la de *paja* y *utensilios* que se repartia entre todos los vecinos en proporcion de sus haberes; la *única* que á principios del último siglo se impuso en Cataluña (*catastro*), en Aragon y Valencia (*equivalente*) y en Mallorca (*talla*), fueron las primeras que, segun las modernas doctrinas económicas, recayeron sobre los productos liquidos de la propiedad y la riqueza. El impuesto de frutos civiles no debia exceder del 6 por 100 del producto de las tierras, ni del 4 por 100 del de las demás fincas y derechos; el *catastro* no debia exceder 10 por 100 de los inmuebles ni del ocho y medio de las utilidades del comercio y la industria; el *equivalente*, la *talla* y los *utensilios*, si no eran de cuota tasada á los individuos, eran de cuota limitada en cuanto á los pueblos, en cada uno de los cuales servia de norma para el reparto, el padron de su respectiva riqueza.

Tenian tambien estos tributos la circunstancia importante de ser los más generales, por cuanto la nobleza no estaba exenta de pagarlos, y áun la inmunidad del clero respecto de ellos, se hallaba muy reducida por bulas y concordatos. Pero habia otros ya locales ó ya de determinadas clases de personas, que pesaban tambien directamente sobre la propiedad. Entre los locales merece especial recuerdo uno que, aunque establecido á fines del siglo xvi, se impuso con el carácter de los antiguos censos prediales. No fué otra cosa la *renta de poblacion* que exigió Felipe II á los nuevos pobladores entre quienes repartió las tierras, heredades y edificios confiscados á los moriscos expulsados del reino de Granada por causa de su rebellion. La corona se reservó entónces una parte alicuota de los frutos de aquellas propiedades, del mismo modo que lo hacia en el siglo xiii con algunas tierras y alquerias de Valencia. Local y de la misma especie fué tambien el tributo llamado *regalia de aposento*, que exigió Felipe II y renovó Felipe IV, para subvenir á los gastos del Real palacio, equivalente al principio á la mitad de los alquileres de todas las casas de Madrid, aunque quedó muy reducido despues. Entre los tributos especiales de clases eran los principales los que pagaban la nobleza titulada y los eclesiásticos. Aquella contribuia con una suma anual, mayor ó menor, segun su grado honorífico, en representacion de los servicios militares á [que antiguamente estaba obligada, por lo cual llevaba este tributo el nombre de *lan-*

zas(1). En sustitucion de las otras gabelas feudales con que estaban gravados, contribuian por una vez los señores de título con la *media annata*, equivalente á la mitad de la renta de un año de los mayorazgos en que sucedian. El clero ayudaba á la corona con las *tercias reales*, el *excusado*, el *noveno extraordinario*, el *subsidio*, los *expolios* y *vacantes* y las *pensiones sobre mitras*. De los tres impuestos nombrados primeramente trataré en capítulo separado. El subsidio era la cantidad cierta con que contribuian alguna vez las iglesias, en virtud de indultos apostólicos, para subvenir á las necesidades urgentes del Estado. Los expolios de los obispos y las rentas de los obispados y de los beneficios eclesiásticos vacantes, cuya provision correspondia á la corona, entraban en el real Erario, en virtud de gracias pontificias. Por iguales títulos solian tambien los monarcas hacer merced de pensiones que gravaban sobre las rentas de los obispados. No digo más sobre esta materia, porque la inmunidad eclesiástica habrá de ser objeto de otro capítulo.

CAPÍTULO IV.

De los diezmos.

I.

ORÍGEN Y VICISITUDES DE ESTE IMPUESTO.

He dicho en el anterior capítulo que el diezmo de los frutos de la tierra era uno de los impuestos que moros y cristianos pagaban á los kalifas á quienes estaban sujetos. Tambien he citado en el curso de esta obra varios antiguos documentos en que se hace mencion del mismo tributo como uno de los que percibian algunos señores seglares de sus vasallos, por las tierras que estos disfrutaban de ellos. Hemos visto, por último, muchas escri-

(1) Suponiéndose que cada duque habia de acudir á la guerra con 20 lanzas, se calculó que éstas costarian 7.000 rs. anuales, y se le señaló esta cuota por tributo. Los marqueses y los condes por deber prestar su servicio con menos gente, quedaron gravados con menores cuotas.

turas en que no sólo los reyes, sino señores particulares fundaban iglesias y las dotaban con diferentes bienes de su patrimonio, y entre ellos la décima parte de los frutos que recogieran los labradores poblados en sus términos. De todos estos hechos debe deducirse que el diezmo fué uno de los principales gravámenes de la propiedad territorial y de los que más generalmente afectaron su existencia.

Fué este impuesto en su origen, al ménos en España, un tributo de índole puramente civil, porque se pagaba al señor directo del suelo como renta de la tierra, ó al gobierno musulman como tributo de redencion, ó al rey ó caudillo cristiano que al reconquistar el territorio de los moros, habia continuado percibiendo de sus habitantes fieles é infieles las mismas contribuciones que ántes pagaban á los emires. Si fué costumbre de los primitivos cristianos llevar á los templos como ofrenda voluntaria la décima parte de sus frutos y los Santos Padres la recomendaron y condenaron su inobservancia, las primitivas iglesias de España, por lo ménos, vivian de las rentas de sus propios bienes y de las ofrendas voluntarias y no tasadas de los fieles. Estas últimas hubieron de ser tan cuantiosas en los primeros siglos de la era cristiana, que el concilio II de Braga tuvo que condenar la perniciosa costumbre de edificar templos por grangeria y negocio profano, el cual consistia en pagar la edificacion, los gastos del culto y la dotacion de clérigos y apropiarse en cambio las oblaciones y emolumentos con que contribuian los fieles.

Pero como los fundadores de las iglesias solian ser los mismos reyes y señores, que en su calidad de dueños de la tierra, exigian de sus vasallos el diezmo de sus frutos, hubo de ser tambien costumbre muy antigua la de dotar con el todo ó parte de sus productos las nuevas iglesias que se levantaron despues de la conquista sarracena. Entonces, para resistir á los invasores se hicieron fuertes muchos hidalgos en las montañas de Vizcaya, Guipúzcoa y otros lugares, poniendo en ellos caudillos que los defendieran, á los cuales dieron por dotacion el diezmo de sus respectivos términos, con la obligacion de subvenir á los gastos públicos, mantener á los hombres del lugar, cuando los sacaran en hueste, y pagar un clérigo que les dijera misa y administrara los sacramentos. Así resulta del alegato que en defensa de su derecho á los diezmos hicieron los hidalgos en las Córtes de Guadalajara de 1390. Por lo tanto, segun esta antigua version, las iglesias que tuvieron aquel origen, adquirieron no los diezmos integros, sino la parte de ellos que fuera necesaria para costearse, á juicio de los caudillos, y ésta por una concesion meramente laical, y quedando así las

mismas iglesias bajo el dominio de los legos, contra lo dispuesto en el Sínodo de Braga.

Los diezmos eclesiásticos donde no tuvieron este origen, ántes del siglo xii al ménos, procedían de adquisiciones hechas por las iglesias, bien de las mismas tierras, cuyos colonos solían contribuir con ellos á sus señores, ó bien de los diezmos laicales cedidos directamente por el monarca ó señor que ántes los disfrutaba. En Francia fué el pago del diezmo á la iglesia obligacion canónica, desde que la impuso el concilio de Macon de 585, y obligacion civil además, desde que en el siglo viii, la confirmaron las capitulares de los reyes; y sin embargo, no hubo de introducirse con ninguno de estos caracteres en nuestra *Marca hispánica*, por más que en ella dominaran durante no corto tiempo, los reyes francos. Aunque Carlo-Magno respondiendo en 874 á una queja del obispo de Barcelona, Fródoino, contra un presbítero que le usurpaba cierta porcion del diezmo, mandó que se guardaran aquellas capitulares (1), hay graves indicios de que no se observaron uniformemente, ó sirvieron tan sólo de sancion á las diversas costumbres locales que regían sobre la materia. Así se hallan en los documentos de aquella edad, tantas donaciones de diezmos otorgados por reyes y señores particulares, que no habrían sido necesarias, si las iglesias favorecidas hubieran cobrado aquel tributo con arreglo á las capitulares citadas.

Varios caballeros, vecinos de Baltarga, en el condado de Ceritania, dotaron su iglesia en 890, al tiempo de consagrarla el obispo de Urgel, con diferentes bienes de su propiedad, y entre ellos «las primicias y dos tercios del diezmo,» declarando que «el otro tercio pertenecía á San Miguel, por haberlo dispuesto así doña Exclua, cuando edificó su iglesia» (2). El rey de Francia Luis VI, llamado el Simple, autorizó en 937 á Guifredo, hermano del conde Seniofredo, para dar á la iglesia de San German y San Miguel, en la diócesis de Elna, varias tierras é iglesias, «con los diezmos, primicias y oblaciones de los fieles» que habitaban en ciertos lugares (3). Prueba evidente de que los caballeros de Baltarga, doña Exclua y Guifredo, este último en nombre del rey, estaban en posesion de percibir los diezmos, las primicias y las oblaciones de aquellas comarcas, como los hidalgos que se hicieron fuertes despues de la invasion en las montañas de Guipúzcoa y Vizcaya.

(1) *Marca hispánica*, lib. 4.º

(2) Ibid. apénd. 52.

(3) Ibid. apénd. 73.

El mismo origen laical atribuyen las antiguas escrituras á los diezmos de Navarra. Una señora llamada doña Toda debia de cobrar el diezmo y las primicias de sus tierras de Ardennes, cuando las dió en 947 al monasterio de Labasal (1). El rey D. Sancho Ramirez era dueño de varios monasterios é iglesias, con sus diezmos, primicias y oblaciones, puesto que los donó en esta forma, en 989 (2). El rey D. Sancho el mayor, dió en 1015, al monasterio de Leyre, los diezmos de varios pueblos que habia reconquistado de los moros (3), los cuales diezmos no eran suyos por gracia alguna pontificia, puesto que aún no reinaba el Papa Alejandro II, á quien se atribuye la primera concesion de esta especie. Con la facultad de erigir iglesias, otorgó D. Sancho V al monasterio de Oña, en 1070, el derecho á percibir los diezmos de los pueblos ó términos en que las estableciesen (4). Una merced semejante habia hecho el rey D. Alfonso Ramirez de los diezmos de Estella, al monasterio de San Juan de la Peña (5).

Ejemplos semejantes de concesiones de diezmos hechas por los reyes á las iglesias, ofrecen los documentos de Aragon en los siglos xi y xii. D. Ramiro I, al trasladar en 1035 la Sede de Huesca á Jaca, dió á su iglesia entre otras muchas cosas que refiere un documento (6). «el diezmo del oro, »plata, trigo, vino y de las demás cosas que nos pagan los tributarios espontanea ó forzosamente, así los cristianos como los sarracenos de las aldeas, campos, montañas y llanos comprendidos en los términos preñados... »y la tercera parte de los diezmos de Zaragoza y Tudela.» D. Alfonso I de Aragon otorgó en 1133, á la iglesia de Zaragoza, el diezmo de los molinos y los baños de la ciudad y su comarca (7).

En los reinos de Leon y Castilla son innumerables los documentos que testifican el origen civil del impuesto decinal. El monasterio de Cardena obtuvo en 1050, del rey D. Fernando de Leon, la tercera parte del diezmo de los términos de varias iglesias que ya poseia y de las que adquiriere en lo futuro (8). D. Alfonso VI donó á la iglesia metropolitana de Toledo

(1) Moret, *Investigaciones históricas de Navarra*, lib. 2.º, c. 8.

(2) Ibid.

(3) *España Sagr.* t. 33, trat. 69, c. 14.

(4) Sandoval, *Crón. de Alfonso VI*, c. 65.

(5) Briz, *Hist. de San Juan de la Peña*, lib. 3, c. 9.

(6) Concilio de Jaca de 1063.

(7) Arruego, *Escrituras del archivo de Zaragoza*, c. 22 citado por Gallardo, *Origen de las Rentas de la Corona*, t. 3.º art. 3.º

(8) Berganza, *Antigüedades de España*, t. 2, escr. 92.

en 1086, despues de conquistar esta ciudad, la tercera parte de los diezmos con que habian de contribuir ó contribuian ya los vecinos de los términos de las iglesias que se consagraran dentro de la diócesis (1). El conde Patricio, cediendo á las exhortaciones del arzobispo Gelmirez, ofreció en 1115 á la iglesia Compostelana, multitud de lugares, y con ellos, el diezmo de todos sus estados (2).

Pero mientras que los reyes disponian de los diezmos del modo y por los títulos que quedan dichos, cundia y se acreditaba la doctrina, que fundándose en la ley mosaica, en textos de los Santos Padres, y en el dominio universal de Jesucristo, consideraba obligacion general de todos los cristianos, el pago de aquel tributo á la iglesia. Esta doctrina por una parte, y por otra la repugnancia que sentirian los muzárabes recién libertados de la dominacion sarracena, á continuar pagando á los príncipes católicos los mismos impuestos que satisfacian á los emires, hubieron de contribuir tal vez á que los monarcas procuraran facilitar su exaccion, aplicando el diezmo de los pueblos que conquistaban, á la dotacion de las iglesias que erigian en ellos. Si hubo dudas entre los que profesaban aquella doctrina, acerca de la potestad del soberano en esta materia; si el clero ó algunos de sus individuos no creyeron legitima la costumbre española que le reconocia el derecho de disponer de las iglesias y de los diezmos, la Santa Sede ocurrió á esta dificultad, al ménos en el reino de Aragon, transigiendo con los usos establecidos y los derechos creados, puesto que lejos de perjudicar, favorecian los intereses de la religion y del culto. Así Alejandro II, Gregorio VII en 1075 y Urbano II en 1095 no dudaron en conceder á los reyes y próceres de Aragon la facultad de distribuir las iglesias de las tierras que poseian ó ganaran en adelante, de los infieles (excepto las episcopales) y la propiedad de los diezmos y primicias de todas las que fundaran de nuevo, con tal de que proveyeran á los gastos del culto (3).

Las bulas de estos pontífices sirven para demostrar que si en el siglo xi no habia aún precepto general canónico que obligase á contribuir á la iglesia con el tributo decimal, era ya doctrina recibida y sustentada en Roma. Solo en la suposicion de que los fieles debieran acudir con este impuesto á sus

(1) Privilegio de fundacion y dotacion de la iglesia de Toledo en la *Historia de España*, por Mariana, edic. de Monforte, t. 5.º apénd. 1.º

(2) *Hist. Compostelana*, lib. 1.º c. 94 en *Esp. Sagr.* t. 20.

(3) La bula de Alejandro II no es conocida; pero está citada en la de Gregorio VII, cuyo texto así como el de la de Urbano II, publicó Beuter en su *Crónica general de España*, lib. 2.º c. 8.

respectivas iglesias, pudo la sede apostólica ceder á los reyes de España el derecho de percibirlo. Pero esta doctrina no hubo de convertirse en ley universal obligatoria hasta que el Concilio IV de Letran, celebrado en 1215, la consignó en uno de sus cánones, y aún entónces no como obligacion nueva, sino para dictar algunas reglas que impidieran eludir el cumplimiento de la antigua. En el siglo XII habian dictado los papas multitud de rescriptos, resolviendo las cuestiones á que daba origen en muchas diócesis, la exaccion de este impuesto, señalando las cosas y personas sujetas á él y prescribiendo el modo de deducirlo ó eximiendo de su pago en ciertos casos. Todas estas resoluciones suponian ya establecida y practicada la obligacion de satisfacerlo, pero no en todas las iglesias, sino en aquellas á que los mismos rescriptos se dirigian y los habia ocasionado. Los padres del concilio de Letran trataron sólo de remediar un abuso que cometian algunos propietarios arrendando sus tierras sin la obligacion de pagar diezmo, y resolver una duda sobre si éste habia de deducirse de los frutos ántes ó después de los censos con que estuvieran gravadas las fincas: pero al ordenar que nadie encomendase á otro el cultivo de sus heredades, sin la obligación de contribuir con el impuesto decimal, á cuya exaccion habia de compelerse con censuras eclesiásticas en caso necesario, y al declarar que la deduccion del diezmo debia hacerse ántes que la de los censos (1), como que quien resolvia así era un concilio ecuménico, no pudo quedar duda de que lo que ántes fuera doctrina eclesiástica realizada por multitud de costumbres locales diversas, desiguales y aún contradictorias, debia convertirse en precepto general canónico, de cuyo cumplimiento no podia excusarse ningun cristiano; y sin embargo, ni con los cánones conciliares, ni con todas las decretales dictadas sobre esta materia, quedó en la práctica regularizado el impuesto. Los mismos pontífices y concilios, que mandaban exigirlo con apremios, creyeron deber respetar las costumbres locales diferentes que determinaban su forma y cuantía, y así puede decirse que en ninguna nacion llegó á regir completamente el derecho consignado en las decretales sobre esta materia.

Entre tanto en España, si las más de las iglesias percibian diezmos, era porque habian adquirido este derecho de alguno de los modos ántes dichos, lo cual habia dado ocasion á grande irregularidad, por cuanto en unas partes los recibia el clero directamente de los fieles, y en otras continuaban en poder de legos. Esto no obstante, D. Alfonso el Sábio,

(1) Can. 53 y 54.

además de consignar en sus códigos el precepto general del diezmo, ordenó por su pragmática de 1294 (1), que todos los hombres de su reino, sin exclusion de los ricos hombres, caballeros y clérigos dueños de heredamientos, pagaran aquel tributo á Dios «cumplida y derechamente, como manda la iglesia, del pan, del vino, de los ganados y de todas las cosas que se debía dar segun los cánones.»

Hubieron de resultar de aqui graves conflictos, porque el clero que segun la antigua costumbre, no cobraba directamente el diezmo, sino la renta que habia menester para su sustento, de los patronos ó dueños de sus iglesias, pretendió exigirlo integro; los legos que venian en la posesion de percibirlo, resistieron una novedad que menoscababa su derecho; y los labradores contribuyentes se vieron apremiados por uno y por otros á pagar doble tributo. Los que utilizaban predios ó recogian frutos, hasta entonces exentos por privilegio ó costumbre, repugnaban el nuevo gravamen; los que ya pagaban diezmo laical no podian contribuir con otro eclesiástico sin grave daño; los que percibian de sus colonos, por renta, una parte alícuota de frutos, veian disminuida su hacienda, si conforme á lo mandado por el Concilio de Letran, habia de deducirse aquella porcion despues del diezmo. Asi se vieron amenazados de perturbacion gravisima el estado económico de la propiedad y el orden establecido para la distribucion de sus productos.

No pudiendo el clero dominar la resistencia de tantos intereses opuestos, hubo de pedir la cooperacion activa y vigilante de la potestad temporal, y para obtenerla más fácil y cumplidamente, la interesó en la recaudacion del impuesto decimal. Esta hubo de ser una de las causas que movieron á los pontífices, aunque no la alegaran, para conceder á nuestros monarcas la participacion considerable que tuvieron en los productos de aquel tributo. Resulta en efecto de una bula del Papa Honorio III, expedida en 1218, que varios seglares de la diócesis de Toledo poseian y aplicaban á sus propios usos, las tercias de los diezmos destinados á las fábricas de las iglesias, segun la disciplina eclesiástica. Consta además por el mismo documento, que el arzobispo primado de Toledo, movido quizá por el rey,

(1) Esta pragmática se insertó en la Nov. Recop. atribuyéndola en primer lugar á «D. Alonso en Burgos, 1355» por error manifiesto, pues en la coleccion de Pragmáticas de los Reyes Católicos, edicion de 1549, ley 17. fol. VIII, donde se halla íntegra y no mutilada, como en la Novísima, se lee claramente y en letra, la fecha de 1294. penúltimo año del reinado de D. Alfonso X.

había acudido á la Santa Sede en solicitud de que se le facultase para invertir una parte de las mismas tercias en el mantenimiento de los cruzados, que con él peleaban contra los moros. Tal vez temió el rey que con las novedades del Concilio de Letran acerca de los diezmos, se redujesen demasiado los recursos con que contaba para la guerra, y quiso procurarse alguna compensacion. El Papa accedió á los ruegos del prelado, concediéndole por término de tres años, la mitad de las tercias de su diócesis para que las repartiese entre los cruzados, que á su juicio necesitaran este socorro, siempre que bastara la mitad restante para la fábrica de los templos (1).

Pero la bula de más transcendencia que sobre esta materia se expidió, fué la de 1219 ampliando la concesion de los tercios diezmos á todas las iglesias del reino, y dándola no ya al primado, sino directamente al rey, aunque tambien por tiempo limitado (2). Trascurrido el que primero se señaló, continuó el monarca, que era entonces San Fernando, percibiendo las mismas tercias de la parte de diezmos asignada á las fábricas de las iglesias, lo cual dió motivo á un breve de Gregorio IX, dirigido en 1228, al arzobispo de Toledo, mandándole «amonestar al rey con prudencia para que desistiera de su usurpacion, y prohibiendo á los rectores de las iglesias «entregar parte alguna de dichas tercias á los recaudadores reales» (3). Mas esta disposicion hubo de ser poco eficaz, puesto que siguieron disponiendo de los diezmos conforme á las antiguas costumbres, tanto el monarca y las justicias locales, como las personas privadas que pretendian tener derecho á ellos, segun resulta de otro breve pontificio expedido en el mismo año, condenando aquellos excesos. Luego, al tratarse de la proyectada conquista de Sevilla y con motivo de ella, el mismo pontifice Gregorio IX, volvió á conceder las tercias á San Fernando, temporalmente tambien. La misma gracia fué despues renovada varias veces, ya por tiempo fijo, ya por la vida de los reyes que la solicitaban, y así continuó, aunque con interrupciones (que algunas veces originaron sérios conflictos y graves escándalos, por las censuras eclesiásticas á que dieron ocasion), hasta que Alejandro VI la perpetuó en los Reyes Católicos.

(1) Gallardo en su *Origen y progresos de las rentas de la Corona*, t. 3.º art. 3, n. 1, inserta el texto de este documento tomado del original que se conserva en el archivo de la iglesia de Toledo.

(2) Las tercias no eran la tercera parte del producto íntegro del diezmo, sino de las dos terceras partes del mismo que fué lo que primitivamente hubo de gravarse. Eran, pues, los dos novenos de dicho producto íntegro.

(3) Gallardo, *ibid.* n. 2.

Entre tanto no hubieron de sufrir sensible alteracion las costumbres locales antiguas que determinaban la cuota del diezmo y las especies á él sujetas. El mismo San Fernando, contra lo dispuesto en el cánón 54 del Concilio de Letran ántes citado, mandó en 1222, que el diezmo lego de la Puebla de Añover perteneciente á su patrimonio, se dedujese ántes que el eclesiástico (1), y esta práctica se observaria probablemente tambien en otros lugares. La pragmática de D. Alfonso X mandando ajustar el diezmo á las reglas canónicas, no hubo de ser bien observada, cuando tantas veces fué menester repro lucirla en los reinados posteriores, no obstante haber sido durante mucho tiempo, la única ley civil que dió en España fuerza y sancion á la eclesiástica. Ni aún los concilios provinciales celebrados en aquella época, excepto el de Peñafiel de 1302, mandaron guardar y cumplir los cánones lateranenses sobre esta materia.

Pero si el rey pudo juzgarse suficientemente compensado con la gracia pontificia, é interesado por ella en la rigurosa exaccion del diezmo eclesiástico, no pensaban lo mismo de si los contribuyentes y los otros partícipes legos en el impuesto. Interpretando rigurosamente algunos obispos el texto de las nuevas decretales, intentaron cobrar el diezmo para sus iglesias, con exclusion de aquellos partícipes, que desde tiempo inmemorial venian sin contradiccion percibiéndolo. Tal fué el origen de un pleito que sostuvieron los prelados contra los hijos-dalgos de las Provincias Vascongadas de que ántes he hecho mencion, y que decidió D. Juan I en las Cortes de Guadalajara de 1390. Fundándose los prelados en los preceptos de la ley antigua, y en los recientes del Concilio de Letran, pretendian que las iglesias todas cobrasen directamente sus diezmos, y que cesaran de percibirlos los hidalgos patronos, que desde tiempo inmemorial, venian haciéndolo. Los hijos-dalgos contestaban que ellos, como fundadores y patronos de las iglesias, habian adquirido aquel derecho á vista y paciencia del Papa y de santos prelados, poseyéndolo sin contradiccion hacia más de 400 años; lo cual es, segun los cánones, un titulo de adquisicion valdedero; y que la nueva legislacion decimal no debia tener efecto retroactivo, como no lo habia tenido tampoco la que habian ordenado tambien los padres lateranenses sobre la enajenacion y restitucion de los mismos diezmos y otros bienes elcesiásticos. El rey, segun dice su crónica, ordenó á los prelados «que en ninguna manera tal pleyto como este non levasen

(1) Carta puebla de Añover, en Manuel, *Memorias para la vida de San Fernando*, pág. 312.

adelante, ca entendia que podria por ello venir escándalo; pero que si algunos hidalgos llevaban diezmo de iglesias que sus mayores no hubieran ganado en la reconquista de la tierra, ni estuviera por lo tanto consagrada su posesion por el largo trascurso del tiempo, cesaran en ella inmediatamente. Esta resolucion, dice el cronista, plugo así á los prelados como á los caballeros, y de seguro fué la más prudente, pues siendo innumerables los partícipes legos de los diezmos, no ya sólo en las Provincias Vascongadas, sino en toda la península, no se les podia privar de su derecho sin dar origen á una perturbacion social peligrosísima. Así en el Ordenamiento de prelados dictado en las mismas Córtes, se prohibió usurpar los diezmos de las iglesias y se mandó que los legos que disfrutasen algunos, presentaran en el termino de 50 dias, el título de su adquisicion; pero advirtiéndose que esto habia de entenderse sin perjuicio del derecho que el rey y otros caballeros tenian en los bienes que habian pertenecido á la Orden del Temple, en los monasterios de Vizcaya, Encartaciones, Alava y otros lugares, y en los diezmos que de antiguo cobraban, sobre lo cual no se haria ninguna innovacion (1).

Ilizose, sin embargo, en las tierras de otras comarcas, por lo ménos respecto á la cuantía de la exaccion decimal, siempre que ésta se computaba en los términos generales y absolutos que prevenian las decretales y las leyes de Partida. Resultaba entonces tan exorbitante el impuesto, que más parecia abuso del clero, que literal cumplimiento de ley canónica. Así las Córtes de Madrigal de 1458 reclamaron contra este exceso; y si en efecto se hubiera siempre exigido el tributo del modo que ellas denunciaron, habria sido uno de los más ruinosos que hubieran podido inventarse. Decian aquellos procuradores que quien de una ó más heredades arrendadas cogia cien cargas de pan, pagaba diez por diezmo: que de las noventa restantes, debia satisfacer veinte, treinta ó más por renta al señor de la tierra, el cual á su vez pagaba otro diezmo de las mismas: que de aquel residuo, ya diezmado, tenia que pagar el labrador otras veinte ó treinta cargas por la soldada de los *paneros* y segadores que le ayudaban á recoger el fruto: que de ellas se sacaba otro nuevo diezmo, y así en lugar de las diez cargas que correspondian por las ciento de la cosecha, venian á pagarse diez y seis. Quejábase además de que se exigiera diezmo de las rentas de los molinos, de los alquileres de las casas y bodegas y de otras

(1) Córtes de Castilla.—Córtes de Guadalajara de 1390: Ordenamiento de prelados, 6.

cosas no acostumbradas á diezmar, y de que los clérigos, siendo jueces y partes, fatigaban á las gentes con pleitos y excomuniones por faltas livianas, causando costas que importaban á veces diez tantos más que el daño. Mas si este impuesto habia de sacarse del producto bruto, y debian pagarlo todos los que participaban de él, de lo que en realidad se quejaban las Córtes, era de la ejecucion literal del precepto que mandaba pagarlo, y de la novedad introducida por los cánones en el sistema de su exaccion. Así es que el rey D. Juan II considerándose tal vez sin autoridad para remediar el daño, respondió á esta peticion que escribiria sobre todo al santo padre (1).

No consta que llegara á pedirse tal remedio, aunque no es probable, pues desde que los reyes tuvieron interés en el acrecentamiento del tributo por sus tercias, se inclinaron á favorecerlo con todas sus providencias, no quedando más correctivo al exceso del gravamen que la facilidad de eludir su satisfaccion. Así, porque los diezmos estaban tambien «á servicio de los reyes y pró de su tierra,» mandó D. Alfonso el Sábio que nadie retirase su cosecha de la era sin pagarlo previamente. Para «refrenar las cautelas y malicias de algunos arrendadores de diezmos y de tercias,» dictó otras medidas preventivas D. Alfonso XI (2). Porque algunos recaudadores de tercias, «dan y pagan el pan mojado y mezclado con paja y polvo y piedra,» los Reyes Católicos penaron estos fraudes y mandaron dar limpio y enjuto el grano del diezmo (3). Porque «defraudaban las tercias y el real patrimonio,» los que obtenian hábito de San Juan, para eximirse de pagar diezmos, mandó Felipe II que de la validez de tales exenciones conociera el Consejo (4). «Considerando el interés del fisco real en las tercias y diezmos,» ordenó Felipe V que conociera el consejo de los recursos sobre nuevos diezmos, en los cuales se disputaba la extension del impuesto á tierras ó frutos ántes no gravados (5). Eran las Córtes las que de tiempo en tiempo solian arrancar á la corona alguna providencia favorable á los contribuyentes, tales como la de D. Carlos I y doña Juana á peticion de las de Toledo de 1525, para que no se hiciera novedad hasta que el consejo proveyera lo conveniente, en cuanto á la costumbre de no pagar diezmo de la renta de las yerbas, pan y otras cosas; y la de los mismos mo-

(1) Córtes de Castilla.—Córtes de Madrigal de 1438, pet. 45.

(2) L. 5, t. 6, lib. I, N. Recop.

(3) L. 6, ibid.

(4) L. 9, ibid.

(5) L. 10, ibid.

marcas, en las Cortes de Valladolid de 1518, para que tampoco se hiciera novedad, en cuanto á no pagar diezmo de lo que ya en otra forma lo hubiera satisfecho (1).

Aún creció más el celo del gobierno por la cumplida exaccion de este tributo, cuando en virtud de nuevas gracias pontificias, se fué aumentando la participacion en él de la real hacienda. San Pio V concedió á Felipe II, con el nombre de *Excusado* y para las guerras contra los hereges y los turcos, los diezmos de la casa que en cada parroquia pagase más por razon de ellos, excluidas las dos primeras en el orden de la cuantia del tributo; y no habiendo tenido efecto desde luego esta gracia apostólica, la renovó Gregorio XIII en 1571, extendiéndola por término de cinco años, no ya á la tercera, sino á la primera y mayor casa diezmera de cada parroquia (2). Fuése despues renovando esta merced de tiempo en tiempo, como todas las de su especie, hasta que en 1757 la perpetuó Benedicto XIV.

Tambien concedió Gregorio XIII á Felipe II en 1569 el aumento que tuvieran los diezmos y primicias por el mayor producto de las tierras que se regaran de nuevo y los diezmos llamados *novales*, que eran los de terrenos abiertos por primera vez al cultivo. Benedicto XIV confirmando y extendiendo esta gracia en 1749, otorgó á Fernando VI, los diezmos, primicias y novales de todos los frutos que produjera el cultivo de montes y bosques, así como el aumento de las cosechas de cualesquiera otras tierras, aunque no se debiera á nuevos riegos (3). Mas, fuese porque en la ejecucion de estos breves pontificios cometiera algunos excesos el juez encargado de su ejecucion ó porque se temiera la oposicion de alguna parte del clero, usando de la gracia en toda su amplitud, Carlos III la redujo considerablemente en la práctica, declarando que no percibiria los diezmos de las tierras regadas de nuevo, sino cuando sus aguas se derivaran por acequias construidas á expensas del Estado, ni los de nuevos rompimientos, sino cuando se verificasen en montes de la corona, aunque los disfrutaran los pueblos (4).

No imitó, por cierto, este ejemplo Carlos IV, aunque fué el monarca que al parecer llevó á más alto punto su celo por la contribucion decimal. A sus instancias expidió Pio VI en 1796 un breve anulando todas las exenciones de diezmos que á la sazón existian, cualesquiera que fuesen su origen y el carácter de las personas ó corporaciones que las disfrutaban, excep-

(1) L. 7 y 8. Nov. Recop.

(2) N. Recop. not. 1, t. 2, lib. 12.

(3) Ibid. not. 5 y 6, t. 6, lib. 1.

(4) L. 13, t. 6, lib. 1. Nov. Recop.

tuando tan sólo las adquiridas por título oneroso (1). Pero lo que principalmente procuró el gobierno del rey con esta gracia, fué más bien que acrecentar la dotacion del clero, aumentar el producto de las tercias y novales. Así dijo el monarca al publicar y mandar cumplir el Breve, que «trascendia á que la real Hacienda lograra su parte en las tercias, no sólo donde las poseia, sino en todas las villas, aunque estuviesen enajenadas ó cedidas (2). Siendo tambien insuficiente este recurso, mandó D. Carlos en 1800 aplicar á la consolidacion de vales reales, no ya sólo las tercias de los diezmos que habian de pagar los que dejaron de ser exentos, por el breve de 1796, sino el producto integro de estos diezmos, impetrando gracia para ello de la Santa Sede. Entre tanto Pio VII facultaba al nuncio para otorgar al rey la exaccion de un noveno extraordinario de todos los diezmos del reino, por término de diez años, y con aplicacion asimismo á la consolidacion de los vales (3), lo cual se llevó á efecto y aún se renovó y perpetuó la gracia posteriormente. Tambien otorgó el Pontífice en 1801 la pedida en el año anterior para disponer de la totalidad del diezmo de los exentos, aunque con la limitacion de que habia de quedar á salvo la parte correspondiente á los párrocos y edificios sagrados, y la que faltase para que no quedaran incóngruos los demás beneficios.

II.

DECADENCIA Y FIN DEL DIEZMO.

Con tantas concesiones pontificias, al empezar este siglo, habia subido á cerca de cuarenta por ciento, segun los cálculos más prudentes, la participacion del Estado y de los seglares en la contribucion decimal (4). Pero

(1) L. 14, t. 6, lib. 1. Nov. Recop.

(2) L. 15, *ibid.*

(3) L. 16 y not. 12, 13 y 14, *ibid.*

(4) Segun una Memoria anónima, escrita por persona muy competente, bajo el título de *Los diezmos, ó sea la contribucion de frutos* (1823), se distribuian los productos de este impuesto en 1816 del modo siguiente:

| | | | |
|-----------------------------|----|----|-----------------|
| Al clero. | 62 | 26 | cénts. por 100. |
| Al noveno. | 7 | 28 | id. |
| Al excusado. | 7 | | |
| A las tercias. | 4 | 5 | |
| A maestrazgos. | 2 | 8 | |
| A partícipes legos. | 17 | 33 | |

todo el celo del Fisco y todo el influjo del clero fueron ineficaces, no ya para aumentar sus productos, segun se prometian los partícipes en ellos, mas ni siquiera para contener su disminucion. Verdad es que no pudo llevarse á efecto el breve de 1796 derogatorio de las exenciones del diezmo, á pesar de los esfuerzos de Carlos IV y de sus consejeros y ministros; los cuales decian con harta razon en su apoyo, que si el diezmo era obligacion sagrada é indispensable para mantener el culto, nadie debia excusarse de satisfacerlo, pero que si uno se eximia por privilegio, todos podrian hacer lo mismo por motivos de justicia y de general conveniencia. Asi ni el impuesto decimal se extendió, y regularizó como deseaba el gobierno, ni sus productos tuvieron ningun aumento sensible. Notóse por el contrario, que cuanto más se acrecentaba la participacion en ellos del Fisco, por efecto de nuevos breves y bulas, tanto menor era su importe, sucediendo esto precisamente cuando se habia extendido el cultivo á nuevas tierras y habia tomado mayor incremento la riqueza nacional. Fenómeno singular, ciertamente, pero que se explica sin duda por la confusion lamentable de las cosas humanas con las divinas, que resultó de aplicarse á objetos profanos el tributo exigido en nombre y para servicio de Dios. Cuanto más parte se daba al Fisco en un impuesto que no se pagaba cumplidamente, sino por deber de conciencia, tanto más se disminuía el estímulo de los fieles á satisfacerlo. Era casi secularizar el diezmo, dar al Erario cerca de la mitad de sus productos, y así no extraño que considerado como un tributo medio profano, se discutiera y disputara como los de esta clase, y no tuviese en su apoyo más sancion efectiva que la de la fuerza. Por eso el principal correctivo de los inconvenientes del diezmo estuvo siempre en la inobservancia del precepto que mandaba pagarlo, ó en la irregularidad de su ejecucion. Fué más tolerable porque no alcanzaba de hecho á todos los productos de la riqueza, ni á todas las tierras, ni consistia siempre en la décima de los frutos, sino que variaba segun los usos y costumbres.

Pero todas estas circunstancias favorables para su duracion como hecho histórico, le perjudicaban sobre manera como hecho racional y científico. Los escritores políticos de los siglos xvii y xviii, no osaban todavía censurarlo claramente, mas al deplorar el atraso de la agricultura, señalando como una de sus causas, el exceso de los tributos, origen del alto precio de los mantenimientos, daban sobrado á entender que el diezmo era á sus ojos, una de las causas del daño que denunciaban. Hé aquí cómo se expresaba Jovellanos en su *Informe sobre la ley agraria*: «Pero nosotros,

«no contentos con gravar los productos de la tierra ó en una séptima parte, como sucede en las especies de *millones*, ó en una catorcena, como en la alcabala de yerbas, ó en un vigésimo quinto, como en los abastos de consumo ordinario, que pagan cuatro por ciento, hemos gravado la renta de la propiedad con una veintena á título de frutos civiles, y además hemos gravado directamente la misma propiedad con otra catorcena en su circulacion; todo lo cual, agregado al décimo, con que está también directamente gravada la propiedad, en favor de la iglesia, sin contar la primicia, hace ver cuanto las leyes fiscales se han obstinado en encarecer la propiedad territorial, cuando su baratura como tan necesaria á la prosperidad del cultivo, debiera ser el primero de sus objetos» (1). Otros escritores no confundían nominalmente el diezmo con los demás tributos que arruinaban la agricultura y secaban las fuentes de la riqueza; pero todos condenaban aquel sistema tributario, recomendando la necesidad de aligerar las cargas que pesaban sobre los vasallos; y los más, convenían en que no siendo el diezmo de derecho divino, podia reformarse con intervencion de la Iglesia. Y en efecto, teólogos y canonistas coincidían en reconocer que habiendo cesado con la ley antigua, la obligacion de pagar diezmo, no tenia ya éste más fundamento positivo que el precepto eclesiástico, limitándose los más celosos á recomendarlo como digno recuerdo de la antigua institucion mosaica.

Era además el diezmo un grave obstáculo para el establecimiento de todo impuesto territorial directo; como que siendo casi el único de esta especie, que á la sazón existía, no daba lugar á otros de la misma índole, generales y suficientes. A pesar de sus numerosas exenciones, era mucho más general que los tributos laicales, que pesaban solamente sobre los pecheros, pues como ante Dios no hay gerarquías, ni los nobles ni los eclesiásticos se eximían de pagar diezmo. Esta circunstancia agravaba más la necesidad de reformarlo radicalmente ó suprimirlo, si habia de establecerse un sistema tributario racional, como querían los políticos, que tuviese por base un impuesto directo y uniforme sobre la propiedad inmueble. Los antiguos pechos, que tenían el carácter de territoriales, más bien que tributos públicos, eran censos, que si subsistían en algunas partes, como la *infurcion* en Castilla y las *pechtas* en Navarra, su cuota habia menguado desproporcionadamente, atendido el incremento que habia alcanzado la riqueza. Eran como la *renta de poblacion* ó censo que pagaban al fisco las

(1) Informe, p. 161. Madrid. 1820.

tierras y heredades confiscadas á los moriscos con motivo de su expulsion y repartidas despues entre cristianos. Así, aunque desde el siglo xvii se establecieron diversos tributos reales directos, ó fueron parciales por recaer tan sólo sobre ciertos frutos, ó fueron especiales de determinadas provincias, ó fracasaron á poco de su establecimiento. De este modo pudo Felipe II imponer el enorme tributo de la regatía de aposento sobre las casas de Madrid, porque ni éstas ni las demás de España pagaban diezmo. El *catastro*, el *equivalente* y la *talla* de la corona de Aragon, eran contribuciones directas, pero no exclusivamente territoriales, puesto que se exigian en la triple forma de reales, personales é industriales, tomando en cuenta todas las utilidades liquidas del contribuyente. Un impuesto de 5 por 100 sobre los alquileres de todos los edificios del reino, establecido en 1705, no dió apenas resultado y fué menester derogarlo.

El establecimiento de la única contribucion que tanto recomendaban los aficionados á especulaciones científicas en materias económicas, aunque no hubiera ofrecido otras dificultades, propias de su índole, era irrealizable existiendo el diezmo. Decretada por Fernando VI á propuesta del marqués de la Ensenada en 1749, á pesar de reducirse su cuota á 4 reales y 2 maravedis por 100 sobre las utilidades liquidas de la riqueza territorial, pecuaria, industrial y mercantil de los seglares, y á 3 reales y 2 maravedis sobre las de los eclesiásticos, sucumbió por las dificultades de su ejecucion y la resistencia de los contribuyentes. Eusayada de nuevo por Carlos III, cuando mandó imponer sobre las utilidades liquidas de la tierra y de la industria los 158 millones que importaban las rentas provinciales, no tuvo mejor resultado. Reproducida últimamente en 1817 por Fernando VII, á propuesta de su ministro D. Martin Garay, que pretendió sustituir las mismas rentas provinciales y otras, con un impuesto directo de 250 millones de reales sobre las utilidades de todos los contribuyentes que no habitaban en las capitales de provincia ni en los puertos habilitados, encontró tambien dificultades insuperables. La única contribucion general directa que logró arraigar en los reinos de Castilla, fué la de *frutos civiles*, y esto porque pesaba únicamente sobre las rentas de las tierras y los alquileres de las casas que no pagaban tributo decimal.

Así cuantas veces se intentó la reforma fundamental de la Hacienda, otras tantas ocurrió la dificultad de hacerlo sin tocar al diezmo. Mas entre tanto iba propagándose y fortaleciéndose la opinion contra este impuesto á medida que se generalizaban entre los hombres estudiosos las doctrinas económicas de Adan Smith y su escuela, que lo condenaban como injusto

y perjudicial á la agricultura. Acusábasele de estos graves vicios porque recaía sobre el producto bruto y no sobre el líquido, afectaba solamente á los consumidores, disminuía los estímulos para la buena labranza y pesaba desigualmente sobre los labradores, no siendo iguales en todas las tierras los gastos de producción. Oponíasele también el inconveniente de ser su administración ocasionada á muchos abusos y su recaudación difícil y costosa.

Mas á pesar de todos estos vicios del diezmo y del concepto desfavorable que merecía, á unos por lo esencial de la institución y á los más por su forma y sus accidentes, si fué objeto de público debate fuera de las regiones oficiales durante el primer período constitucional, las Cortes de Cádiz no se atrevieron á suprimirlo, ni aún á reformarlo, por más que no se les ocultara la necesidad de hacer lo uno ó lo otro, cuando en 1815 discutieron el plan de Hacienda, del cual formaba parte una contribución directa de 517 millones sobre todo género de riqueza, en sustitución de otra de carácter progresivo ó sea de proporcionalidad creciente en razón directa de las utilidades líquidas de cada individuo, decretada en 1811, la cual había sido mal recibida y de escaso resultado. Lo único que sobre esta materia osaron hacer aquellas Cortes, fué aplicar á las urgencias del Estado y necesidades de la guerra la parte de los diezmos que no fuera necesaria para la subsistencia de los partícipes en ellos, pero como préstamo forzoso que había de devolverse con el producto de la contribución extraordinaria de guerra (1).

Las Cortes de Cádiz obraron prudentemente no tocando una cuestión sobre la cual tenían opiniones é intereses tan opuestos los hombres que necesitaban permanecer unidos para resistir eficazmente á los enemigos de nuestra nacionalidad. Mas concluida la guerra, y restablecido más adelante el régimen constitucional en 1820, cesaron aquellos respetos y se pusieron desde luego en tela de juicio esta y otras cuestiones delicadas y de resolución comprometida. Surgió la del diezmo apenas se trató en las Cortes de formar un presupuesto y mejorar el estado de la Hacienda.

Para realizarlo discutió y acordó aquella asamblea las bases generales de un nuevo sistema tributario, siendo una de ellas «modificar el diezmo» á fin de que fuera posible el establecimiento de una contribución directa sobre la propiedad y la industria. Esta modificación podía entenderse de diversas maneras, pues lo mismo podía consistir en regularizar el impuesto

(1) Orden de 30 de Mayo y decreto de 16 de Junio de 1812.

decimal, haciéndolo recaer sobre el producto líquido de todos los capitales sin excepcion alguna, que en rebajar simplemente su cuota, sin hacer novedad en el modo de computarlo y exigirlo. Si hubiera habido el propósito de mantenerlo, el primero de estos procedimientos habria sido el más acertado; pero si se pensaba suprimirlo por completo, era sin duda más prudente el segundo. Y como la mayoría de aquellas Córtes y la Comision parlamentaria que entendia en el asunto se inclinaban visiblemente á esto ultimo, una y otra convinieron en limitar la reforma por el pronto á la rebaja de la mitad del diezmo y establecer un nuevo impuesto de 150 millones sobre la propiedad rural. Calculábase entonces que aquel antiguo tributo, aunque reducido por fraudes y malas prácticas, producía en su totalidad y con las primicias 500 millones de reales, de los que 250 próximamente venia á percibir la Iglesia. Reducido á la mitad, se suponía que los contribuyentes tendrian un aborro de otros 250 millones y que no pagándose por razon del nuevo impuesto más que 150, reportaría la riqueza agricola un beneficio de 100. El Estado renunció por su parte á las tercias, al noveno, al excusado y á toda participacion en el diezmo, y ofreció indemnizar cumplidamente á los demás partícipes legos con los bienes del clero secular. Sin hacerse novedad alguna en cuanto á las especies y personas sujetas al impuesto, se mandó que su recaudacion y administracion corriera exclusivamente por cuenta de la Iglesia.

Hubo sobre esta ley en las Córtes una discusion larga y prolija, en la cual la institucion del diezmo tuvo celosos defensores, pero no su forma ni tampoco su pretendido origen divino. Algunos diputados combatieron su supresion por inoportuna, por ineficaz para su objeto económico, y por injusta, en cuanto regalaba á los propietarios, á costa del Estado, todo el mayor valor que adquiririan sus tierras. Ninguno defendió el diezmo como una contribucion justa en su forma, igual en su repartimiento y de fácil y segura cobranza. Ni siquiera se puso en duda la potestad del Estado para decretar su abolicion en parte, pues perteneciéndole ya casi la mitad de sus productos por gracias apostólicas, se consideró que tenia derecho para renunciar á ella por motivos de conveniencia pública, siempre que la Iglesia percibiera íntegra su porcion correspondiente. Y esto era así en concepto de las Córtes, porque el clero, segun la comision, confesaba no haber percibido del diezmo y de todos sus demás bienes más de 270 millones líquidos, y ahora iba á disfrutar más de 320, ó sea 250 como renta decimal y 70 por derechos de estola y renta de los predios rústicos y urbanos dejados á los párrocos: de modo que segun estas cuentas, el clero, lejos de

perder, ganaba con la supresion del medio diezmo. Estas opiniones y estos cálculos un tanto exagerados, prevalecieron al fin en las Cortes, las cuales por una considerable mayoría, dieron su aprobacion á la ley de 29 de Junio de 1821, conforme sustancialmente con el dictámen de la comision que la propusiera.

Llamo opiniones un tanto exageradas las que sirvieron de fundamento á aquella ley, porque si no puede negarse que habia gran fondo de verdad en ellas, tambien adolecian de errores graves de doctrina y de apreciacion de los hechos. El diezmo era ciertamente una contribucion desigual, y como desigual injusta. Baste saber que siendo su objeto hacer contribuir al culto á todos los que participaban de los frutos de la tierra, no pesaba sobre todos los frutos, ni sobre todas las tierras, ni era igual su cuota en todas las diócesis. Era tambien desigual, áun entre los que pagaban igual parte alicuota de frutos, porque pesando sobre el producto total, y no guardando éste siempre la misma proporecion con el liquido, resultaba tanto más gravoso el tributo cuanto menor era la utilidad de la industria agrícola (1). Está asimismo fuera de duda que la recaudacion del diezmo era ocasionada ó á fraudes con que se eludia su pago, ó á vejaciones odiosas, que tampoco lo aseguraban por completo, y siempre á abusos y manejos que reducian su producto. Pero en la misma desigualdad del impuesto y en la inexactitud de su cobranza, estaba hasta cierto punto su propio correctivo. Si el diezmo hubiera equivalido en realidad á la décima de todos los frutos agrícolas, habria producido, segun los cálculos de los hacendistas de aquella época, no 500 ó 600, sino 1.533 millones (2). Pero como ni todas las especies estaban gravadas con el impuesto, ni todos pagaban la décima de sus productos, debían fallar los cálculos que se fundaran en el supuesto de una contribucion del 10 por 100 sobre todos los frutos de la tierra. Esta es la razon por que el diezmo ni era tan perjudicial á la agricultura, ni su abolicion tan favorable á la riqueza como creian sus adversarios. Era un impuesto desigual, más propio de los pueblos primitivos y pobres que de los ricos y florecientes, no generalmente excesivo en la práctica y que en realidad no oponia grave obstáculo al desarrollo de

(1) Cien fanegas de trigo, producto total de una cosecha, pagaban diez; y como su produccion podia haber costado 60 ú 80, segun las circunstancias del lugar y la calidad de la tierra, resultaba que quien por haber invertido 60 fanegas, obtenia una utilidad de 40, contribuia con el 25 por 100 de sus productos líquidos, y quien por haber gastado 80, no tenia más utilidad que 20, pagaba el 50 por 100 de ella.

(2) *Los diezmos*, memoria anónima, etc., c. XI. Madrid. 1823.

la riqueza. Prueba es de ello que con el diezmo, que ántes pagaban tambien los árabes, llegó la agricultura española en su tiempo, á un alto grado de perfeccion: que con el mismo impuesto ha prosperado despues hasta nuestros días, la de Cataluña y Valencia, y que el diezmo no ha impedido que la de Inglaterra esté más adelantada que todas las que de él se hallan exentas hace muchos años.

Así se explica como se redujo primero y desapareció despues este tributo entre nosotros, sin efecto demasiado sensible en el estado de la riqueza. El más notable que debió producir era aumentar el valor de todas las propiedades, y aún éste quedó hasta cierto punto neutralizado con el establecimiento de una nueva contribucion territorial. No es verdad que el diezmo gravara exclusivamente á los consumidores, como sostenian algunos economistas; tampoco lo es que el beneficio de su supresion recayera únicamente y siempre sobre los propietarios, como afirmaban otros; pesaba más ó ménos sobre los consumidores, los labradores y los propietarios, segun las circunstancias económicas de la produccion y de los mercados. El diezmo, como los demás impuestos, se diluia generalmente entre todos los partícipes en la produccion, á ménos que desniveladas respectivamente la oferta y la demanda, resultara una crisis y durante ella, recayera principal ó exclusivamente sobre alguno de los mismos partícipes. El labrador no podía descargarlo todo entero sobre el consumidor, á ménos que el consumo se redujera al último límite, pues sólo dentro de él se soporta un recargo extraordinario en el precio de los alimentos, que supone casi siempre una grave y pasajera crisis. Tampoco podía el labrador hacer recaer todo el diezmo sobre el propietario, obligándole á bajar la renta tanto como menguaba su utilidad, porque mientras la hubiese, aunque menor, en el cultivo de la tierra, no faltaria quien la arrendase, si no por la misma, por otra más reducida renta. Pero ántes de llegar á estos extremos, habia otra solucion ménos aventurada, que era conformarse todos con una menor ganancia, repartiéndose la carga entre ellos. Así no podía decirse que pagaran exclusivamente el diezmo el propietario, el labrador, ni el consumidor, sino que todos á él contribuian; el primero por una disminucion de la renta de su tierra, el segundo por otra de la utilidad de su industria, y el tercero por un recargo en el precio de los artículos de general consumo. La cuantía de esta triple participacion era variable segun las circunstancias del mercado, la abundancia de tierras cultivables, el precio de los jornales, el interés del dinero, la escasez del numerario y todas las demás circunstancias que determinan la circulacion de la riqueza y el precio de

as cosas comerciables; pero nunca dejaba de contribuir con algo cada uno de los partícipes. Los propietarios debieron ser, sin embargo, los más favorecidos con la abolición del impuesto, dado que éste representaba un menor producto, con el cual habían adquirido sus tierras, origen de otra reducción en su renta, que debía desaparecer con el diezmo; pues aunque éste se diluyera entre los varios partícipes en la producción, iba á cesar desde luego la parte del tributo que recaía sobre el propietario. En tal supuesto, podía en verdad decirse que la abolición del diezmo equivalía á un regalo injustificado á los dueños de las tierras, á costa del erario público, ó de quien en adelante hubiera de satisfacer los gastos que se cubrían hasta entonces con aquella parte del impuesto decimal. Pero tampoco produjo la supresión este beneficio; pues aunque según las cuentas de algunos escritores contemporáneos, con la rebaja del medio diezmo ganaban todavía los propietarios cien millones de reales, esta diferencia, si la hubo, quedó por lo ménos compensada con otros tributos nuevos ó recargados que también afectaban á la propiedad más ó ménos inmediatamente.

Y así como no se notó apenas el beneficio de la supresión del medio diezmo bajo el régimen constitucional, así tampoco produjo su restablecimiento en el estado de la propiedad, ninguna alteración sensible. Uno de los primeros actos de la Regencia de 1823, fué mandar exigir el diezmo íntegro (1), en la misma forma en que se había pagado hasta 1821, fundándose en que bajo el régimen constitucional, ni se había aliviado al pueblo el peso de los tributos, á pesar de aquella reducción; ni se habían satisfecho las necesidades de la Iglesia, por más que se hubiese destinado exclusivamente á ella la mitad del diezmo. No se necesitó siquiera un grande esfuerzo para llevar á cabo su restablecimiento, porque la novedad había durado tan sólo dos años, sin llegar á acreditarse como positivo beneficio.

Volvióse, pues, al antiguo sistema, aboliendo los nuevos impuestos establecidos por las Cortes, exigiéndose íntegro el decimal y aplicándose al Estado otra vez las tercias, el excusado y el noveno. ¿Pero cómo impedir los fraudes y ocultaciones que cada año aminoraban más sus productos? Si en los tiempos antiguos la secularización competentemente autorizada de parte del diezmo había contribuido á su descrédito y á la inexactitud de su pago, ¿qué sería después de 1823, cuando ni el estímulo de la conciencia era tan activo, ni la vigilancia sobre la recaudación tan eficaz, ni tan poderoso el influjo del clero? Así cuando más debieron haber crecido los pro-

(1) Circular de 6 de Junio.

ductos de este impuesto, por haberse aumentado mucho la riqueza agrícola, fué precisamente cuando más se disminuyeron. En vano dictó el gobierno las disposiciones más severas para asegurar su recaudacion: en vano la celó y la activó el clero con providencias oportunas: el diezmo arrastró á pesar de ellas una existencia trabajosa, hasta que en 1837, por los mismos fundamentos que en 1821, dictaron las Córtes casi al mismo tiempo dos leyes; una aplicando á la nacion los bienes del clero secular y suprimiendo en principio aquel impuesto (1), y otra mandando cobrarlo íntegro aquel año, y destinando la mitad de su producto al culto y á los partícipes legos, y la otra mitad al Tesoro público (2). Así quedó el diezmo enteramente secularizado y convertido en tributo extraordinario; pues aunque la mitad destinada al clero habia de entregarse á las juntas diocesanas para que la distribuyeran canónicamente, ambas mitades fueron consideradas como una parte de las rentas públicas. En los mismos términos se prorogó despues la exaccion de este impuesto para el año de 1838, aunque aplicando entonces al Estado la tercera parte del producto y las dos partes restantes al culto y clero y al pago de las pensiones de los regulares exclaustrados y de las rentas de los partícipes legos (3). Perdiendo despues su nombre, y con el de contribucion de culto y clero, se exigió sólo la mitad del diezmo en 1839 (4); y así continuó hasta su abolicion completa, ó más bien, hasta su trasformacion en el impuesto territorial vigente. La propiedad entonces, como en 1821, no sufrió tampoco ninguna alteracion sensible: algunas tierras quedaron más gravadas que ántes; otras resultaron más favorecidas; fué ménos irregular el impuesto sobre ellas, pero sin que haya alcanzado hasta ahora la regularidad y la igualdad que requiere la justicia.

(1) Ley de 29 de Julio de 1837.

(2) Ley de 16 de Julio de 1837.

(3) Ley de 30 de Junio de 1838.

(4) Real decreto de 1.º de Junio y ley de 26 del mismo mes de 1839.

CAPÍTULO V.

De las antiguas servidumbres de la propiedad rural en beneficio de la ganadería.

I.

SERVIDUMBRES DE CAÑADA Y PASTO.

Pesaban sobre la propiedad territorial hasta nuestros dias muchas gabelas y servidumbres que no tenían su raiz en el feudalismo, pero que se fundaban en el predominio de determinados intereses económicos, favorecidos á la manera feudal, es decir, con monopolios y privilegios, ó en necesidades públicas apreciadas segun el criterio de cada época, ó en ciertas doctrinas morales y religiosas que ya no caen bajo el dominio de las leyes positivas. Libre la tierra de las ligaduras señoriales, no dejaron de gravarla, además de los vínculos de familia, que menoscaban en ciertos casos su libre disposicion por última voluntad, otras obligaciones, ya en interés de la ganadería, de la agricultura ó de ciertas industrias, ya por utilidad pública general ó local, ya en fin para sujetar á condiciones equitativas ó que pasaban por tales, la contratacion privada. Los privilegios de la Mesta; las leyes restrictivas de la facultad de disponer el cultivo y aprovechamiento de las tierras, ó de arrendarlas libremente; las que autorizan la expropiacion por causa de utilidad pública; las que reglamentaban el uso de los montes privados; las que preferian el interés de los inquilinos al derecho de los propietarios; las que otorgaban cierta participacion gratuita á los carreteros en el disfrute de los prados y montes particulares; las que tasaban el precio de los productos agrícolas y restringian el comercio de granos; las que perpetuaban de hecho los foros de Galicia y Astúrias; y las que tasaban, reducian y reglamentaban los censos, envolvian otras tantas limitaciones graves del derecho de propiedad en sus relaciones con el Estado, y por lo tanto su desenvolvimiento y vicisitudes tienen un lugar muy señalado en la historia de aquella institucion. Estas servidumbres, estos menoscabos del dominio han ido en su mayor parte desapareciendo al influjo del espíritu de libertad, que de un siglo á esta parte prevalece en la constitucion

de la propiedad de la tierra, y ya puede decirse que no pesan sobre ésta otras limitaciones que las que exigen indispensablemente nuestro estado social y la civilizacion, ¡pero cuánto no tuvieron que luchar nuestros padres para conseguirlo! ¡Qué narracion tan ejemplar y tan interesante la de aquella contienda, entre el espíritu antiguo y el moderno, las viejas y las nuevas doctrinas, los intereses comunes y los especiales de clase ó granjería!

Empezando por las servidumbres establecidas á favor de la ganaderia, recordaré que toda la de España formaba un inmenso gremio con el nombre de *cabaña real*, por que el rey la tenia bajo su proteccion, y en tal concepto disfrutaba privilegios enormes, á costa no sólo del Estado, sino tambien de los particulares, dueños de montes y heredades. Los ganaderos llamados de la *sierra*, que eran los residentes en Leon y en ámbas Castillas, formaban el *Honrado Concejo de la Mesta*, el cual por medio de sus funcionarios y delegados, con facultades judiciales y gubernativas, no sólo decidia todas las cuestiones entre los mismos ganaderos, sino tambien las de estos con los extraños, sobre arrendamientos, pastos, daños, conservacion de cañadas y abrevaderos, y todo cuanto fuera menester para la proteccion de la ganaderia. El Concejo además, usando ó abusando de sus facultades gubernativas, dictaba no sólo reglamentos de orden interior, sino disposiciones generales, que con la autoridad del uso y la costumbre, tuvieron fuerza de leyes. Aunque en 1608, á petición de las Cortes y para remediar graves excesos de los ministros de la Mesta, quedaron exentos de su jurisdiccion protectora los ganados *estantes*, que eran los que no salian á herbar fuera de sus términos, y componian el mayor número, todos continuaron perteneciendo á la cabaña real y disfrutando los mismos privilegios (1).

Era uno de los más importantes de estos privilegios, el que ya disfrutaban desde el tiempo de los visigodos, de entrar y pastar en tierra ajena. El

(1) Segun D. Miguel Caxa de Leruela, alcalde mayor entregador de Mesta en su *Restauracion de la abundancia de España*, que escribió para las Cortes de 1625, el número de ganados estantes que quedó exento de aquella jurisdiccion, era cuatro veces mayor que el de los trashumantes. A pesar de haber escrito este libro su autor en defensa de la Mesta, reconoce que los excesos de los ministros delegados de los alcaldes mayores entregadores, y las iniquidades de los achaqueros ó arrendadores de multas (que tambien éstas se contrataban como las rentas públicas), dieron lugar á aquella medida. Con haber quitado á la comision de alcaldes mayores entregadores el conocimiento de los agravios causados á los ganaderos estantes, que eran por lo general pequeños y numerosos propietarios "no se reparó, dice el autor, en que se destruia la mayor riqueza de España."

Fuero Juzgo, como código hecho para un pueblo más aficionado al pastoreo errante, que al penoso cultivo, «permitia á los caminantes descargar y »descansar, y hacer pacer á sus jumentos ú ovejas en las tierras abiertas »de pasto, con la condicion de no detenerse en ningun lugar más de dos »dias, sin licencia del dueño, y no arrancar de raiz los árboles grandes, »pero pudiendo en todo caso cortar ramas para pasto de los bueyes» (1). En esta ley, ó más bien en la costumbre antigua que ella sancionaba, tuvo su primer origen, no sólo el privilegio de la ganadería de pastar en terrenos abiertos, sino el de la misma especie que disfrutaban tambien los carreteros, segun diré más adelante.

No hubo de dejar de usarse esta ley en Leon y Castilla, en cuanto lo consintiera el estado de guerra durante la reconquista, cuando D. Alfonso el Sábio la tradujo casi literalmente en el Fuero real, donde recopiló todo el derecho más generalmente practicado en el siglo xiii. «Los viandantes, »dice el texto, puedan sus bestias é los otros ganados meter en los logares »que non sean cerrados, nin defesados é puedan y descargar é folgar un »dia ó dos al mas, si el dueño del logar non gelo otorgare: e guardese de »desarraigar nin de cortar árboles que lleven fruto ó otros grandes, que »son para lavores que non son de cortar» (2). Esta ley fué no obstante algo más restrictiva que la visigoda, por quanto extendia la prohibicion de cortar á los árboles que llevaran fruto, aunque no fuesen grandes, y omitia la cláusula peligrosa que permitia cortar ramas para pasto de bueyes.

No puede dudarse de que tanto por una como por otra ley, estaban sujetos á esta servidumbre, lo mismo las tierras comunales que las de propiedad particular, pues que así resulta de su contexto; mas ya en el mismo siglo xiii los autores de las Partidas pretendieron introducir alguna novedad en el uso de este derecho, con el propósito de limitarlo un tanto. Declararon, pues, el de todo vecino para usar y disfrutar los montes y dehesas del comun de su ciudad ó villa (3); mas luego en vez de reconocer el derecho «de todo viandante» á los pastos de todas las tierras abiertas, lo limitaron á aquellos que obtenian carta del rey para «andar salvos é seguros con sus ganados por todas las partes de sus regnos é pascen las yerbas é beber las aguas; é non faciendo daño en miesses, nin en viñas, nin »en otros logares acotados, que ninguno non fuera osado de gelos embar-

(1) For. jud. l. 2, t. 4, lib. 8.

(2) L. 4, t. 6, lib. 4.

(3) L. 9, t. 28, Part. 3.

«gar, nin gelos contrallar» (1). Pero aunque limitado este derecho á los que obtuvieran del rey aquel salvo-conducto, como se extendia á todas las tierras no acotadas, entre las cuales se comprendian las comunes de los pueblos, en que la ley anteriormente citada no otorgaba aprovechamiento sino á los moraderos del lugar, resultaba cierta antimonía entre ambas leyes, que si no se echó de ver en el mucho tiempo que no rigió el código de las Partidas y si el Fuero real, tuvo luego que resolverse con la interpretacion y la jurisprudencia. Así Gregorio Lopez, glosando esta última ley, en el siglo xvi, decia que disfrutaban de ella los *hermanos* de la Mesta y algunos monasterios, más que los pastos que podian aprovechar, eran únicamente los del tránsito, pues si se introdujeran en los concejiles y comunes de términos extraños, seria en perjuicio de los vecinos respectivos; y tales privilegios deben siempre interpretarse «en cuanto sea posible sin daño de tercero.» Esta interpretacion, sin embargo, aunque tan extensiva, no resolvía por completo la dificultad, dado que en el tránsito habia tambien tierras y montes comunes, pero dan bien á entender que Gregorio Lopez, así como la mayor parte de los jurisconsultos romanistas de la época, no eran favorables á un privilegio exorbitante, que no hallaba justificación en su ciencia.

Mas con cartas reales ó sin ellas, el mismo rey Sábio hubo de reconocer la existencia del gremio de ganaderos que llevaba el nombre de Concejo de la Mesta, puesto que mandó en 1275 tener abiertas las cañadas por donde pasaban los ganados trashumantes (2), declarando al mismo tiempo los aprovechamientos que podrian disfrutar los pastores en las heredades ajenas. Y por cierto que mostró en esta ocasion D. Alfonso más largueza que habia usado en el Fuero y en las Partidas, pues permitió á los ganaderos cortar una rama de cada árbol de los que viesén, corteza para curtir su calzado, palos para redes, mazos, tendales y estacas, leña para fuego y madera para hacer puentes, herradas y colodras (3). Pero este derecho no fué creado entonces; existia desde antiguo, tal vez con límites no bien determinados en la práctica, y quizá entonces no hizo el legislador más que fijarlos y regularizarlos.

(1) L. 19, t. 18, Part. 3.

(2) Un privilegio de 1273 va dirigido «al Concejo de la Mesta de los pastores del mio regno.»—Cuaderno de las leyes y privilegios de la Mesta. Antigüedad autorizada y utilidad de los ganados. Cap. único. Madrid, 1731.

(3) Libro de las leyes y privilegios del Honrado Concejo de la Mesta. Privilegios y confirmaciones. Fól. 49. Madrid, 1681.

Es muy de creer que siendo la riqueza pecuaria una de las principales del reino, y no habiendo seguridad en los campos, por causa de la guerra, necesitara la ganadería cierta protección especial. Así á la tradición que concedía á este ramo de industria tan señalados privilegios, se juntaba en los siglos xiii y xiv el interés actual del país en continuar dispensándole la protección más decidida. Y como el patrimonio de la corona era entonces y fué en todos tiempos la propiedad más favorecida y la más respetada, Alfonso XI dió el mejor seguro á los ganados de los reinos de Leon y Castilla, declarándolos parte de la cabaña real, tomándolos bajo su guarda y mandando que anduviesen seguros por el reino, paciendo las yerbas y bebiendo las aguas, con tal de que no hicieran daño en los sembrados de trigo, viñas, huertas, prados de guadaña y dehesas boyales acotadas (1).

Este privilegio, otorgado en 1547, fundamento del que por tantos años han ostentado los mesteros, amplió hasta cierto punto el antiguo derecho de la ganadería y lo aseguró con nuevos fundamentos. Ya se ha visto cómo las leyes de D. Alfonso X se referían á los que andaban por los caminos, y cómo fué menester interpretar la ley 19 de Partida citada, limitando el derecho de pastar, en ella reconocido, á las tierras abiertas del tránsito de los ganados; ahora el otro D. Alfonso los autoriza para pacer la yerba de todo el reino sin más excepciones que las taxativamente señaladas. Y así era menester que sucediese, desde que formó parte de la cabaña real toda la ganadería, pues tal era uno de los más importantes efectos de aquella declaración. El rey era dueño de todo el territorio no apropiado, y por lo tanto en él se apacentaba libremente su cabaña. El mismo derecho solía ejercer también en las tierras señaladas como términos de los pueblos, ya por habérselo reservado expresamente al concederlas, ó ya por antigua costumbre. Incorporada ahora á la real cabaña toda la ganadería del reino, vino á disfrutar de sus beneficios é inmunidades y á fortalecer con los de la corona, los fundamentos de su derecho. Contábase entre estos privilegios el de ser dado por enemigo del rey y por incurso en las graves penas del atentado contra su soberanía, el que hurtara, aprehendiera, maltratara ó grayara con tributos los ganados de la cabaña real. Siendo estos excesos y depredaciones muy frecuentes entre particulares, en aquellos turbados tiempos de anarquía feudal y de guerras y venganzas privadas, hubo de buscarse el remedio en cuanto á la propiedad pecuaria, haciéndola participe de los privilegios que disfrutaba la del monarca. Así fué confirmada

(1) Libro de las leyes de la Mesta, f. 50.

esta proteccion en uno de los períodos más turbulentos de nuestra historia bajo el reinado de D. Enrique IV, en el cual se mandó que ninguno tuviera cabaña fuera de la real, y que los ganados de ésta «anduvieran seguros en su guarda (la del rey) y defendimiento» (1).

La servidumbre de pastos en todas las tierras no exceptuadas por don Alfonso XI, vino á ser más gravosa á medida que se fué extendiendo el cultivo y aumentando el valor de los terrenos laborables. De aquí la frecuencia con que los propietarios y labradores escatimaban ó excusaban tan gratuito servicio, lo cual dió lugar que los Reyes Católicos confirmaran el anterior privilegio, declarando que los ganados podían andar libremente por todas partes, pasciendo yerbas y bebiendo aguas, sin más excepciones que las ya establecidas (2). No siendo aún bastante esta confirmacion para facilitar el libre uso de aquella gravosa servidumbre, lograron otra los ganaderos en 1552 de los reyes D. Carlos y doña Juana, los cuales declararon á favor de la Mesta el libre aprovechamiento de los pastos, abrevaderos, majadas, veredas, descansaderos, baldíos y terrenos comunes de todos los lugares por donde los ganados fueran, vinieran ó estuvieran, excepto los adehesados con real licencia (3). Por cuyas palabras se ve que nunca se consideró limitado el derecho de pasto á los cordeles y veredas que seguían los ganados para su trashumacion, puesto que seguía ejercitándose en el siglo xvi en todas las tierras de propiedad particular no comprendidas en las excepciones señaladas.

En el siglo xvii, léjos de restringirse, se extendió aún este derecho por interpretaciones más ó ménos fundadas, á terrenos expresamente exceptuados por las leyes anteriores. Estábanlo, sin duda, y de un modo absoluto, las viñas, y sin embargo el consejo distinguiendo allí donde la ley no hacia distincion alguna, declaró en 1655, que el ganado lanar podria entrar en las viñas y olivares, despues de alzados los frutos, donde hubiera costumbre de ello (4). Alzáronse contra esta providencia los clamores de las Córtes, y hasta se puso y aceptó por condicion del servicio de millones, la de promulgar una ley prohibiendo la entrada de los ganados en los olivares y viñas, aún despues dealzada la cosecha. Tampoco esta condicion hubo de guardarse mucho tiempo, y así siguió vigente el auto de Consejo,

(1) L. 1, t. 27, lib. 7, Nov. Recop.

(2) Privil. de la Mesta, f. 55 v.

(3) L. 5, pár. 28, t. 27, lib. 7, Nov. Recop.

(4) Not. 5. t. 25, lib. 7, Nov. Recop.

hasta que en 1776 la mandó llevar á efecto D. Carlos III. ¡Pero cuál sería el influjo y poder de la Mesta, cuando léjos de obedecer este decreto, logró al año siguiente su revocacion y el permiso para entrar con sus ganados en las heredades exceptuadas por costumbre de tal gravámen! (1).

¿Cómo llegó á desaparecer este importante privilegio y á quedar libre la propiedad territorial de tan pesada servidumbre? Tuvo la Mesta ardientes, aunque no muy desinteresados defensores. D. Miguel Caxa de Leruela, alcalde mayor entregador del gremio, en su *Restauracion de la abundancia de España*, que escribió para las Cortes de 1625, intentó probar que «la carestía intolerable de los precios, la necesidad comun de las cosas y la despoblacion general de España, que se sentian en su tiempo, eran efecto de la ruina de los ganados:» que estos eran el símbolo de la providencia y causa del ejercicio de las virtudes: que el principal establecimiento de la caballería del Toison de oro fué cuidar de la conservacion de los ganados; y que estas son riquezas tanto más excelentes que el oro y que la plata, quanto es lo vivo que lo muerto» (2). No obstante estas hipérboles, defendió Leruela con las mejores razones que permitia la debilidad de su causa, los beneficios de la Mesta, y la necesidad y conveniencia de sus privilegios, procurando extender cuanto era posible, el de disfrutar los pastos de las heredades ajenas. Confesó los abusos que los delegados de los alcaldes entregadores y los achaqueros ó recaudadores de multas solian cometer en el ejercicio de sus funciones, no sin lamentar como error funesto la ley que habia privado á aquellas autoridades de su jurisdiccion sobre los ganados estantes, segun arriba he dicho.

Mas esta institucion, como siempre sucede, no llegó á ser tan ardientemente defendida, sino despues de haber sido con empeño censurada. Como perjudicados la impugnaban los propietarios y los labradores, y entre los jurisconsultos y los políticos hallaba tambien poderosos adversarios. Ya se ha visto cómo Gregorio Lopez, aunque mero glosador del derecho constituido, dejó entrever su opinion contraria al privilegio universal de pasto. Alfonso de Acevedo, docto comentador de las leyes recopiladas á fines del siglo xvi, lo censuró de un modo más explícito y puso de manifesto los abusos que solian cometer los jueces de la Mesta. Glosando una ley que permitia á los ganados mesteños pacer en los campos indebidamente culti-

(1) L. 7, t. 27 y nota 8, lib. 7, Nov. Recop.

(2) Cap. 1, 2, 6, 9 y 12.

vados por sus dueños, decia: «Dura ley y que por lo mismo nunca he visto usada en este punto.» De los alcaldes entregadores aseguraba que á veces juzgaban por deposiciones de testigos interesados en las causas, ó de personas que llevaban consigo para testificar lo que se les ordenaba, cuando no prescindian tambien de este procedimiento y fallaban en virtud de declaraciones que los escribanos inventaban y atribuian á personas imaginarias. Decia, por último, que eran notorias las vejaciones y molestias que ocasionaban tales jueces, y particularmente las injusticias que de ellos recibian los labradores en su persona y bienes (1).

Entre los escritores del último siglo, uno solamente se mostró defensor acérrimo de los privilegios pecuarios á costa de la propiedad. Tal fué don Andrés Rodríguez, fiscal del Concejo de la Mesta, que escribió un tomo en folio sobre la posesion privilegiada de su corporacion (2); mas en cambio ningun escritor político ni economista trató de esta materia sin condenar tan exorbitantes privilegios. D. Manuel Sisternes, fiscal del Consejo, en su *Idea de una ley agraria española*, que publicó en 1786, sostuvo resueltamente que el dueño de la tierra lo es del abrevadero de ella y que por lo tanto nadie puede utilizarlo lícitamente sin su permiso (3). Mas donde se pusieron de manifiesto las injusticias, los excesos y los inconvenientes de tales privilegios fué en el expediente instruido en el Consejo en 1764 por representacion de D. Vicente Paino, diputado de Extremadura, dirigida á demostrar que el origen de los males de aquella provincia eran los ganados trashumantes y á proponer diferentes remedios. En él fueron oidas muchas autoridades y corporaciones, y se presentaron diferentes documentos que justificaban los graves abusos que á la sombra de los privilegios de la Mesta le cometian en menoscabo de la propiedad. Defendió la institucion el procurador general del Honrado Concejo, la impugnaron más ó ménos radicalmente el procurador general del reino y los fiscales del Consejo D. José Moñino y D. Pedro Rodríguez Campomanes (4). Ninguno osó entonces proponer la abolicion total de los privilegios pecuarios, porque habria lastimado graves intereses, pero casi todos los informantes pidieron su reduccion. Así no se discutió la conveniencia de privar á los ganados mesteños

(1) *In leges Recopilationis comentaria*, lib. 3.º, t. 14.

(2) *De privilegiata possessione Mistor*, Madrid 1748.

(3) Pág. XXX.

(4) Memorial ajustado del expediente promovido por la provincia de Extremadura sobre fomentar en ella la agricultura y cria de ganados y corregir los abusos de los ganados trashumantes.

de todos los aprovechamientos gratuitos que disfrutaban en las heredades ajenas, mas el diputado de Extremadura propuso con apoyo del procurador general del reino y de los fiscales, que se prohibiera á los pastores trashumantes la corta de maderas, leñas, *ramoneos* y casca, excepto en la forma que era permitido á los vecinos del término (1). El fiscal Campomanes denunció en su dictámen el monopolio que á la sombra de la Mesta ejercian unos pocos grandes ganaderos (2). Sostuvo que la despoblacion y la pobreza de Extremadura debían atribuirse tanto á los privilegios de aquella corporacion, como á los abusos de los labradores y ganaderos extremeños, y propuso acerca del punto en cuestion, que en el aprovechamiento de las tierras fueran siempre preferidos á los forasteros, los vecinos, dotándoles ántes de las necesarias para la labor y pastos por medio de repartimientos. Tambien indicó la conveniencia de suprimir los alcaldes entregadores, y de reducir la jurisdiccion de los otros jueces de la Mesta á las cuestiones entre sus *hermanos* (3).

Habia, á pesar de todo, entre estos privilegios, uno que justificaba la necesidad, aun á los ojos de sus más ardientes impugnadores. Si el disfrutar indistintamente todas las tierras de pasto, mientras que sus dueños no las destinaban á algun cultivo cerrado, era un privilegio odioso y monstruoso, el uso de las cañadas en la doble trashumacion desde las frias montañas de Leon á la tierra llana y caliente de Extremadura, era necesaria, en concepto de muchos, para la conservacion de rebaños tan numerosos como los que poseia la Hermandad. Y pues que desde la antigüedad más remota duraba aquella costumbre, y reducida á sus límites indispensables no perjudicaba graves intereses, era generalmente respetada y nadie pedia su derogacion. Jovellanos no la condenó tampoco en su inmortal *Informe sobre ley agraria*, á pesar de haber atacado tan duramente la institucion de la Mesta, sus fueros y privilegios. Mas la Sociedad Económica de Madrid, en cuyo nombre habia hablado aquel ilustre repúblico, no se limitó, como los otros informantes en el expediente, á proponer la reduccion de la Mesta y de sus derechos, sino que pidió resueltamente «la entera disolucion de Hermandad tan prepotente, la abolicion de sus exorbitantes privilegios, la derogacion de sus

(1) Expediente de Extremadura, núm. 392.

(2) En aquel tiempo habia 121 cuadrillas con 40.283 ganaderos trashumantes de la sierra y 56 entre comunidades y vecinos de Madrid; mas estos últimos poseian una cuarta parte del total de ganados, con corta diferencia (Exp. de Extremadura, número 17.)

(3) Exped. núm. 80 y final del dictámen de Campomanes.

»injustas ordenanzas y la supresion de sus juzgados opresivos. Desaparezca,
»decia, de la vista de nuestros labradores este concejo de señores y monges
»convertidos en pastores y grangeros, y abrigados á la sombra de un magis-
»trado público: desaparezca con él esta coluvie de alcaldes, de entregadores,
»de cuadrilleros y achaqueros que á todas horas y en todas partes los afli-
»gen y oprimen á su nombre, y restitúyanse de una vez su subsistencia a
»ganado estante, su libertad al cultivo, sus derechos á la propiedad y sus
»fueros á la razon y á la justicia.»

Fortalecidos los adversarios de la Mesta con el auxilio de autoridades tan respetables, ya que no pudiera tanto el clamor de los derechos desconocidos y de los intereses perjudicados, obtuvieron al fin el triunfo por que habian pugnado más de dos siglos. Las Córtes de Cádiz, en el decreto memorable de 8 de Junio de 1813, amparando á la propiedad violada por las leyes y costumbres que daban á los ganados el aprovechamiento gratuito de las heredades abiertas no sembradas, ni plantadas en los términos arriba expresados, declararon cerradas todas las tierras de dominio particular, cualesquiera que fuesen su destino y el estado de las cosechas. Así cesó el privilegio de pasto que desde la dominacion visigoda disfrutaban los ganados castellanos en todas aquellas tierras, sin otras excepciones que las cinco señaladas en el privilegio de 1547. Desde entonces los ganaderos no habian de disfrutar más pastos que los que les pertenecieran por adquisicion legitima, como requeria la justicia; mas pensando las Córtes como Jovellanos y la Sociedad Económica, que no debia suprimirse la trashumacion y que para ella era indispensable mantener los pasos por donde los ganados habian de transitar á los extremos, declararon al mismo tiempo que el cerramiento habia de entenderse sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos, caminos, travesías y servidumbres que para aquel tránsito eran indispensables.

Esta excepcion prudente no hubo de entenderse, sin embargo, por los émulos de la Mesta y los interesados en la abolicion de sus privilegios, tan fácil y prontamente como la regla general que modificaba. Así, restablecido en 1820 el decreto de 1813, tuvieron que explicarlo las Córtes por otro de 25 de Setiembre de aquel año, mandando que no se impidiera á los ganaderos trashumantes el paso por sus cañadas, ni pacer en los pastos comunes. Tampoco con esta declaracion se logró que fuese más respetado el derecho reconocido á los ganaderos, por lo cual tuvieron que dictar las mismas Córtes otra orden, en 8 de Abril de 1822, declarando que el decreto de 1813 no privaba á los ganaderos del uso de las veredas, cordeles y abrevaderos, ni del aprovechamiento de los pastos comunes en las tierras

de esta clase, no repartidas ni enajenadas. Restablecido por segunda vez este decreto, fué necesario volver á repetir aquellas declaraciones, advirtiéndole que el uso de las cañadas y cordeles era común á los ganaderos trashumantes, los estantes y los riberiegos, y que no habian de entenderse por pastos comunes los de propios ni los de baldíos arbitrados.

Con novedad tan importante y con la abolicion de otros privilegios pecuarios, de que trataré en seguida, hubieron de satisfacerse las Córtes de la primera y de la segunda época constitucional, dejando como abandonados á su propia suerte y virtud la Hermandad y el Honrado Concejo, y sin alterar su organizacion, trasformar su carácter, ni modificar sus atribuciones, sino en cuanto era la modificacion consecuencia necesaria de la derogacion de los privilegios. El gremio privilegiado, independiente y autonómico, no desapareció hasta esta última época de nuestras reformas políticas. El tribunal del Concejo de la Mesta, al cual correspondia la especial proteccion de las cañadas, quedó suprimido en 16 de Febrero de 1835 como incompatible con el régimen del derecho comun recién establecido. El Honrado Concejo cambió su nombre por el de Asociacion general de ganaderos en 31 de Enero de 1836. Restablecido despues el decreto de 8 de Junio de 1813, y dudándose si por él quedaban derogadas todas las leyes protectoras de la ganadería, declaró el gobierno en 21 de Julio de 1836, que estas leyes debian observarse hasta que se reformaran, ejerciendo entretanto las funciones administrativas y gubernativas del presidente del suprimido Concejo, el de la Asociacion general de ganaderos. Al fin quedó organizada esta corporacion en 31 de Marzo de 1854, aunque sin autoridad propiamente dicha, ni de ninguna especie, sobre los propietarios y labradores, que antiguamente estaban sometidos al Concejo, y sin los privilegios que no consiente el régimen constitucional.

II.

ACOTAMIENTO DE TIERRAS Y DEHESAS.

Los privilegios de la ganadería tenian entre sí íntima relacion y dependencia. Limitado el derecho de pastar á los campos abiertos, podria haber sido ineficaz é ilusorio si el cerramiento de estos campos hubiera quedado al arbitrio de los propietarios. Era menester, por lo tanto, evitar este peligro y para ello el único medio seguro que se ocurrió á los ganaderos, fué prohibir como delito todo acotamiento de tierras, que en cualquier tiempo ó

circunstancia, debiera prestar la servidumbre de cañada ó pasto. Asi este privilegio de la ganaderia vino á engendrar otro más odioso, la prohibicion de cerrar los campos, al ménos sin reallicencia.

Los visigodos, á pesar de haber reconocido el derecho de pastar en los campos abiertos, no intentaron garantizarlo con una violacion tan flagrante del derecho de propiedad. Sus leyes, por el contrario, declararon expresamente la facultad de cerrar con foso ó seto las heredades de dominio privado, siempre que no se embarazara con ello la vía pública. «El que tuviere junto á algun camino mieses, viñas ó prados cerrados, cérquelos de »seto,» dice una de aquellas leyes (1). Esto mismo podía hacer el que cultivaba tierras por donde transitaban los ganados (2). Mas el que cercaba su heredad con foso, cerrando camino público, no podia reclamar los daños que causaran en ella los transeuntes. Tampoco estaba permitido el cerramiento de las tierras vacantes ó baldías, y asi dice una ley que aunque el caminante las hallara cercadas de foso, podia entrar en ellas y aprovechar sus pastos, sin temor á que nadie se lo impidiese con derecho (3). El motivo que tuvieran los legisladores visigodos para dispensar más favor al cerramiento de seto ó cerca, que al de foso, no es hoy conocido; pero no hubo de existir ya en tiempo de San Fernando, puesto que las citadas leyes traducidas en el Fuero Juzgo castellano, no establecen diferencia alguna entre cercar «con valladares ó con otras defensas» (4).

Hasta el reinado de D. Alfonso X no se halla ninguna otra ley escrita sobre la materia, por más que la prohibicion del cerramiento de las tierras existiese por costumbre desde mucho ántes. Aquel monarca hubo de ser el primero, que para asegurar á la ganaderia el uso de los pastos ajenos que ya disfrutaba, mandó en 1275 que ninguna persona ni ningun concejo hicieran en sus lugares mayores dehesas de cuanto permitieran sus cartas de privilegio, á razon de tres aranzadas por cada yunta, penando despues en 1284 con 100 maravedis de multa al que labrara ó cerrara cañadas ó hiciera dehesas nuevas sin real licencia (5). Por donde se vé que D. Alfonso no fué quien estableció esta servidumbre, puesto que se limitó á confirmarla y reglamentarla, encargando la observancia de los privilegios de adehesar y penando su quebrantamiento. Existia, pues, la prohibicion desde mucho

(1) L. 22, t. 4, lib. 8, For. jud.

(2) L. 28, *ibid.*

(3) L. 9, t. 3, lib. 8, *ibid.*

(4) L. 9, t. 3, lib. 8, *ibid.*

(5) *Leyes y privilegios de la Mesta*, t. 49, edic. de 1681.

antes, y quizás no fué difícil introducirla, debiendo de haber sido en su origen poco gravosa, puesto que además de tener en su apoyo las tradiciones germánicas, como que con la guerra quedaban abandonados los campos despues de alzada la cosecha, lejos de convenir su cerramiento al colono, que nada guardaba en ellos, interesábase más bien la entrada de ganados que con sus abonos naturales los fertilizasen. Esto sucedia en la tierra llana de Leon y Castilla la Vieja hasta la conquista de Toledo, en Castilla la Nueva, la Mancha y parte de Andalucía hasta que San Fernando conquistó á Sevilla, y en las fronteras de Navarra, Aragon, Granada y Portugal hasta los Reyes Católicos. La servidumbre en cuestion no llegó á introducirse generalmente ni en las montañas, donde no solian penetrar los enemigos, ni en las tierras de riego donde nunca faltaban las cosechas, ni la presencia de los colonos. Es, sin embargo, digno de notarse, porque no se explica fácilmente, la omision que de ella se hace tanto en los códigos alfonsinos como en los Ordenamientos anteriores de leyes generales.

Siguió en observancia la prohibicion de acotar en los siglos xiv y xv, puesto que los Reyes Católicos dieron testimonio repetido de ella. Conquistado el reino de Granada, repartieron sus tierras aquellos monarcas con la condicion de que los nuevos dueños no las adehesaran sin real licencia, ni impidieran á los ganados de los vecinos aprovechar las yerbas y frutos naturales, mientras que no estuvieran plantadas ó empanadas. Y no fué ésta una novedad introducida por los reyes en aquel repartimiento, pues otorgadas primero las tierras sin aquella cláusula expresa, fué menester añadirla por haberse advertido que algunos de los nuevos propietarios habian «tentado de las dehesar... diciendo que lo pueden, como si fuesen dehesas» dehesadas por virtud de las dichas mercedes. Lo qual si assi passasse, «seria contra las leyes de nuestros reinos» (1). De modo que no fué un gravamen de la concesion impuesto por la corona, sino la condicion general de todas las tierras. Para excusarla babria sido necesario que las mismas cartas de merced ú otras posteriores hubieran dispensado de su cumplimiento. Un testimonio semejante ofrece otra pragmática de 1491, en que los mismos monarcas revocando cierta nueva ordenanza del concejo de Avila, que permitia al dueño de un terreno redondo cerrarlo á los ganados de sus vecinos, declararon que tal providencia era «contra derecho,» y que sus autores debian ser castigados, pudiendo en su consecuencia los vecinos

(1) *Pragmáticas y leyes hechas y recopiladas por los Reyes Católicos*. Madrid, 1549, L. 73, fól. 58.

y moradores de aquella ciudad pacer y rozar en los términos de ella (1). Estas disposiciones se limitaban, pues, á confirmar la prohibicion de acotar en favor de los vecinos ganaderos; mas luego el emperador D. Cárlos y doña Juana la reprodujeron en 1532, no ya sólo en beneficio de los vecinos, sino de todos los ganados mesteños, mandando que ninguna persona, ni concejo, ni comunidad hiciera dehesa sin real licencia, y que los alcaldes mayores entregadores mantuvieran libres los pastos, abrevaderos y veredas en todos los lugares por donde los ganados de la Mesta fueran ó vinieran ó estuvieran (2). Ni los olivares ni las viñas habian de cerrarse á estos ganados, despues de alzadas las cosechas, segun ántes he dicho.

Esta servidumbre de la propiedad rural, halló en los siglos xvi y xvii hábiles y apasionados defensores. No bastaba buscar su fundamento en la utilidad que de ella reportaban los ganaderos; el docto obispo D. Diego Covarrubias lo halló además en una máxima que él llamaba de justicia, segun la cual «cada uno puede hacer en el fundo ageno lo que le aprovecha y no daña al dueño del fundo» (3). De aquí deducia, con los doctores Avendaño y Rodrigo Suarez, que los dueños de heredades no debian impedir á los vecinos el aprovechamiento de los frutos naturales de ellas, despues de levantadas las cosechas, y que la ley de Avila, que no permitia hacer dehesas cerradas, era no sólo muy conveniente á la república, segun demostraba la experiencia, sino justisima y muy equitativa. En el mismo sentido escribia en el siglo xvii el doctor Hermosilla, anotador y comentador de las leyes de Partida. En su opinion, aunque todos los vecinos convinieran unánimemente en que se acotara algun terreno de su término, no valdria semejante acuerdo, como no obtuviera la aprobacion real (4).

Pero desde mediados del siglo xvi hubo de ser tan onerosa esta servidumbre, que contra las leyes que la imponian y contra los celosos é interesados agentes de la Mesta que procuraban mantenerla, todos los propietarios rurales pugnaban por eludirla. D. Miguel Caxa de Leruela, el apolo-gista apasionado de la ganaderia, de quien ántes hice mencion, denunció calorosamente como una de las causas principales de la decadencia de la real cabaña, los que él llamaba adehesamientos usurpados, por haberse

(1) *Pragm. de los Rey. Catól.* fól. 136.

(2) L. 5, pár. 28, t. 27, lib. 7. Nov. Recop.

(3) "*Quis potest facere in alieno fundo quod ei prodest, et domino fundi non nocet.*" Practicar. quest. c. 37.

(4) *Notæ additiones et resolutiones ad Glossas Legum Partitarum Gregorrii Lopetti.* Glos. 2, l. 5, t. 5, Part. 5.

hecho sin la licencia correspondiente, ya en movimientos populares, ya por los señores que pretendían haber recibido con la jurisdicción aquel privilegio y el dominio de las tierras concejiles, y ya como arbitrio para satisfacer la contribución de millones. Leruela en sus juicios apasionados sobre esta materia y en sus cargos contra los propietarios y los labradores, da bien á conocer cuán reñida era la lucha que en el primer tercio del siglo xvii sostenían ya la propiedad y la ganadería. Todas las dehesas que se poseen sin privilegio real son usurpadas, decía, aunque se defiendan con la inmemorial posesión «que es el título á que todos se arriman por la facilidad con que se prueba. Las que tienen los señores en sus lugares y »jurisdicciones son las más sospechosas de usurpación» (1). Quería que no se conservaran más dehesas que las boyales, porque eran las únicas necesarias y permitidas por las leyes de la cabaña real, siempre que no excedieran de tres aranzadas por cada yunta de las que hubiera en el término. Todas las demás, y muy señaladamente las que procedían de arbitrios de millones, eran á su parecer «odiosas y prohibidas por las leyes» (2).

Ignoro si en el mismo siglo xvii fueron contestados tan rudos ataques á la propiedad privada; mas en el siguiente halló ésta valerosos defensores que los rechazaron con energía. D. Manuel Sisternes en su *Idea de una ley agraria*, no pudo menos de reconocer que la facultad de acotar las heredades era consecuencia necesaria del derecho de propiedad. No había á sus ojos mayor injusticia que la de permitir al ganadero el disfrute de los pastos del propietario, sin pagar su precio, y verse obligado el labrador á no sembrar ó á consentir que el ganado ajeno se coma su cosecha, enriqueciéndose el ganadero á costa del colono (3).

En el expediente sobre fomento de la agricultura y de la ganadería en la provincia de Extremadura ántes citado, se dilucidó ámpliamente esta cuestión. Uno de los remedios propuestos por el diputado de la provincia, era permitir á los labradores cerrar las tierras que cultivaran, y si fueran ajenas tantearlas concluido el arriendo, sacando el importe de las cercas y mejoras que en ellas hubieran hecho. Verdad es que algunos de los informantes no aprobaron esta novedad gravísima, pero la apoyaron otros y sobre todo el procurador general del reino, aunque con la justa limitación de que el arrendatario no cercara la heredad arrendada sin consentimiento

(1) *Restaurac. de la abundanc. de España*, c. 18.

(2) *Ibid.* part. 2, caus. 2, c. 1.

(3) Pár. XXX.

del dueño, puesto que de otro modo no habria derecho para exigirle el importe de esta mejora (1).

En el expediente de ley agraria ántes referido, se ventiló tambien la cuestion del acotamiento, haciéndolo entre otros informantes con suma lucidez y fuerza de razones, el intendente de Sevilla. No se cobra amor á la tierra sin acotarla, decia aquel ilustrado funcionario; ni se pone en el cultivo de lo que es de todos la diligencia conveniente: ni se siembran semillas costosas en terrenos que las requieren, cuando han de quedar expuestas á la voracidad de los ganados. En su consecuencia, proponia que se mandaran cerrar todas las tierras de labor. El decano de la Audiencia de Sevilla, el Sr. Bruna, magistrado recto y sábio cuya memoria se conserva aún en aquella provincia con tradicional veneracion, apoyó tambien enérgicamente esta doctrina (2).

Pero quien con más empeño y pasion combatió la pésima servidumbre de que tratamos, fué Jovellanos en su célebre *Informe* dado en el mismo expediente. Calificóla de «costumbre bárbara nacida en tiempos bárbaros y »sólo digna de ellos.» Añadió que esta «bárbara y vergonzosa prohibicion» menoscababa la propiedad individual en su misma esencia: que era «no »sólo absurda y ruinosa, sino tambien irracional é injusta: que lejos de »estar autorizada en su origen por alguna ley general, se hallaba en con- »tradicion expresa con todos los principios de la legislacion castellana; y »que sólo la ignorancia de ellos, combinada con el interés de los ricos ga- »naderos, la habian introducido en los tribunales, elevándola al concepto »de derecho no escrito contra la razon y las leyes.»

Verdaderamente era esto más que cuanto hasta entonces se habia dicho y escrito contra la prohibicion de acotar. Si el libro de Leruela daba á conocer la pasion con que se defendian y atacaban á sus adversarios los mesteños, la impugnacion de Jovellanos, sin dejar de ser muy superior en todos conceptos á aquel oscuro opúsculo, revelaba tambien la viveza y aún la exageracion con que trataban esta materia los émulos de la ganadería. Jovellanos demostró con argumentos irrefutables que la prohibicion de que se trata era una violacion flagrante y manifiesta del derecho de propiedad, y uno de los estorbos más poderosos al progreso de la agricultura. Esto bastaba sobradamente para su propósito; mas implacable siempre con el error y con la injusticia, pretendió además hacer ver que la costumbre de

(1) Exped. de Estremad., núm. 489, 492 y 500.

(2) Ibid., núm. 792, 913, 1024.

permitir la entrada de los ganados ajenos en las tierras propias, áun despues de establecida con todos los requisitos legales, no privaba á los propietarios del derecho de cerrarlas; que tampoco reunia tal costumbre todos estos requisitos jurídicos, por no ser conforme á la ley, ni general en todo el reino; que la pragmática prohibitoria de los cerramientos de las tierras de Granada era especial de aquella comarca y limitada á explicar una condicion de las mercedes otorgadas de ellas; y, en fin, que la ley de 1491 no prohibió los cerramientos, sino los cotos redondos, por cuanto favorecian la acumulacion de las propiedades, y á los grandes en perjuicio de los pequeños labradores, porque establecian un monopolio vecinal más útil á los ricos que á los pobres, y pernicioso siempre para los forasteros, cuyos ganados que daban sin pasos y abrevaderos, y porque provocaban al establecimiento de señorios y á la ereccion de títulos y mayorazgos (1).

Todas estas consideraciones, ó envuelven conceptos equivocados ó no conducen al propósito que indican. Si la costumbre crea derechos, tambien origina obligaciones, y no podia, por lo tanto, decirse que la de que se trata no privara al propietario de la facultad de cerrar sus tierras. El ser tal costumbre contraria á las leyes que atribuyen á cada uno el libre ejercicio de su propiedad, no era causa bastante para invalidarla, pues es sabido que tambien pasa por legitima la costumbre contraria á la ley. Aun era más trivial la objecion de no ser general esta costumbre, pues no podia deducirse de ello sino que carecia de fuerza alli donde no se observase. Hay además error grave en la explicacion que daba Jovellanos de las dos pragmáticas de los Reyes Católicos, á fin de desautorizarlas y desvirtuarlas. Ni una ni otra podian invocarse como fundamento legal de la servidumbre en cuestion, sino como testimonio de la existencia del derecho no escrito que regia sobre esta materia. En la primera de estas leyes se decia, como ántes se ha visto, que adehesar las tierras propias sin real licencia «seria *contra las leyes* de nuestro reino:» en la segunda se declaraba que una ordenanza municipal que permitia á los dueños de cotos redondos «prender por todo »lo que hubiere en ellos;» es decir, estorbar que otro pudiera aprovecharlos, «era *contra derecho;*» y véase como estas leyes, aunque parciales y limitadas á territorios determinados, no dejaban de ser una prueba concluyente de la existencia de otra ley general no escrita que prohibia los cerramientos. Ni fué tampoco la ley de Granada mera interpretacion de las condiciones con que se habian repartido las tierras conquistadas á los nuevos pobla-

(1) Edic. de 1820, núm. 61 y sig.

dores, sino aplicacion de las leyes generales del reino, que como dice el texto, no permitian tales cerramientos y hubieron de ser quebrantadas por algunos propietarios. No es, por último, ménos arbitraria la explicacion que da Jovellanos de la ley de Avila. Fué ciertamente su objeto prohibir los cotos redondos, pero no por ninguna de las razones ántes indicadas, que carecen de todo apoyo histórico, sino porque eran cotos cerrados, que esto es lo que significan en la ordenanza revocada las palabras «prender por todo lo que hubiere en el coto.» Lo que la ordenanza revocada había dispuesto, innovando el derecho establecido, fué que «el lugar adhesionado de un dueño se llame término redondo y apartado sobre sí... y que el tal dueño pueda prender por todo lo que hubiere en él;» luego lo que la ley revocatoria quiso fué que el dueño de un lugar apartado y sobre sí no pudiera por este solo hecho sacar prenda al que aprovechara los frutos naturales ó de otra clase que en él se produjesen.

Pero como fuera de estas exageraciones habia tantos y tan justos motivos para condenar aquella pésima costumbre, Carlos III se decidió á hacerlo, si bien tímidamente y con escaso resultado. En vista de los expedientes ántes referidos, y á consulta del Consejo, concedió aquel monarca en 1778 «por punto general, á los dueños particulares de tierras y arrendatarios, la facultad de cerrarlas y cercarlas;» declaró cerradas las tierras de olivar ó viña con arbolado y las de huerta con frutales, mientras conservaran estos cultivos, y amplió á veinte años el término de seis señalado en 1748, para conservar cerrados los terrenos en que se criaran árboles silvestres (1).

Fué este sin duda un paso importante en el camino de la reforma, pero no remedio suficiente del daño. Podian cerrarse y cercarse ya todas las tierras, mas sin que esta condicion difícil y costosa ó imposible á veces se cumpliese materialmente, levantando defensas, solo las huertas y las viñas podian eximirse de la fatal servidumbre. Carlos IV, sin renunciar á la obra iniciada por su augusto padre, no le dió mayor impulso. Verdad es que al mandar repartir en 1792 los terrenos incultos de Extremadura, autorizó su cerramiento (2), y que reconoció como legítimo y necesario el de las rastrojeras y entrepanes; pero tambien ordenó el reconocimiento de los terrenos cerrados que contenian plantíos, á fin de que no se diera pretexto á la exclusion indebida de los ganados y permitió á los extraños en-

(1) L. 19, t. 24, lib. 7. Nov. Rec.

(2) L. 19, t. 25, lib. 7. Nov. Rec.

trar en los terrenos cercados durante veinte años, para criar en ellos árboles silvestres, siempre que los vecinos empezaran á aprovecharlos á los seis ú ocho años (1).

Fueron las Córtes de Cádiz las que completaron verdaderamente la reforma empezada por Carlos III. No bastaba la facultad de cercar, porque era inútil respecto á las grandes heredades, cuyo cerramiento ó no es siempre estorbo material suficiente para su preservacion, ó suele ser más costoso que el daño que se trata de precaver. Para restablecer el imperio del derecho hasta entonces desconocido, habia necesidad de reconocer la fundada intencion de todo propietario al disfrute exclusivo de su heredad, sin obligarle á manifestarla por otros signos exteriores, que el hecho de su posesion y el título de su dominio. Lo que en todo caso seria necesario probar y no suponer es la intencion del dueño de dar participacion á los extraños en el disfrute de las cosas que exclusivamente le pertenecen.

Fundadas en estos principios las Córtes de Cádiz empezaron por declarar cerrados y acotados perpétuamente, y no por veinte ni por seis años, como lo estaban por leyes anteriores, los terrenos destinados á plantíos cuyo suelo fuera de dominio particular, reconociendo en sus dueños la facultad de aprovecharlos á su arbitrio, siempre que dejaran libre el paso de los caminos, travesías, servidumbres, cañadas y abrevaderos y el disfrute de la caza y pesca (2). Las mismas Córtes expidieron, por último, el decreto de 8 de Junio de 1815, una de las leyes más importantes del siglo, entre las muchas que se han dictado de grave trascendencia, en la cual se declararon cerradas y acotadas perpétuamente todas las dehesas, heredades y demás tierras de cualquiera clase, pertenecientes al dominio particular, aunque no estuvieran cercadas; y confirmándose la facultad que ya tenían los dueños desde 1778, para hacer estas cercas, sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos, caminos y servidumbres, se les reconoció su derecho á disfrutarlas libre y exclusivamente dándoles el destino que les conviniese. Así llegó al fin á desaparecer por completo una de las más pesadas y de las más injustas servidumbres que gravaban la propiedad rural. Pero fué necesario casi un siglo de discusion y controversia para que quedara plenamente reconocido el carácter individual y exclusivo de estas propiedades, y el derecho de los propietarios para disponer de ellas como de cualesquiera otras.

(1) L. 11, párrafos 27, 28, 30 y 31, t. 27, lib. 7. Nov. Rec.

(2) Decreto de 14 de Enero de 1812.

CAPÍTULO VI.

De otras antiguas servidumbres de la propiedad á favor de la ganadería y de la agricultura.

I.

ROMPIMIENTO DE DEHESAS.

Pesaba tambien sobre la propiedad rural, á favor de la ganadería otra servidumbre más perniciosa y no ménos injustificada que la apertura forzosa de las heredades: tal era la que obligaba perpétuamente á no romper ni cultivar las tierras una vez destinadas al pasto de los ganados. Esta servidumbre era consecuencia de las otras con que estaba favorecida la industria pecuaria. Para que los ganaderos disfrutaran los pastos ajenos, no bastaba mantener abiertas las tierras que los producian, si sus dueños habian de poder labrarlas á su arbitrio, sembrándolas ó plantándolas de lo que no estaba á merced de los ganados, á fin de eludir por este medio la prestacion de aquel servicio. Y en efecto, á medida que con la poblacion fueron aumentándose el consumo y la seguridad en los campos, hubo necesidad de extender el cultivo á los montes y tierras eriales, y se fueron reduciendo las de pasto, con perjuicio de los mesteros que las disfrutaban. Este fenómeno económico, tan natural y tan justificado, no pareció solamente una desgracia pública, sino una violacion manifiesta del derecho que suponian tener los ganaderos para continuar aprovechando por título oneroso ó gratuito, las tierras que disfrutaban; y fué tal influjo de esta clase poderosa, que alcanzó del emperador D. Carlos y de su madre doña Juana en 1552, la resolucion injustísima de que se redujeran otra vez á pasto todas las dehesas rotas y puestas en cultivo en los ocho ó doce últimos años, segun que fueran propias para el ganado lanar ó para el vacuno (1). Si hasta entonces, segun es de creer, no estuvieron prohibidos

(1) L. 5, t. 25, lib. 7, Nov. Recop.

tales rompimientos, no se concibe cómo pudo justificarse una violación tan escandalosa del derecho de propiedad.

Ni fué quizá lo peor de esta providencia su injusticia con los que habían cultivado las tierras eriales en uso de su derecho, sino que sirvió luego de funesto precedente á otras semejantes, que so color de remediar la carestía de las carnes, las lanas y los paños, atribuida falsamente á la escasez de las yerbas, causaron grave perjuicio al aumento de la riqueza. Así Felipe II, por cuanto muchos dueños de dehesas cultivadas rehusaban volverlas á pasto, fundándose en que su rompimiento se había verificado en tiempo hábil, mandó en 1580 que no se rompieran ni labraran las tierras que no hubieran sido cultivadas en los veinte años anteriores, ni después de la ley citada de 1552 (1). Luego Felipe IV, llevando á mayor extremo su celo por la ganadería, mandó en 1633 reducir otra vez á pasto las tierras que desde 1590 se habían puesto en cultivo sin la licencia competente: que estas licencias se concedieran sólo por utilidad pública y por el Consejo, con las dos terceras partes de sus votos conformes; y por cuanto á su juicio habían crecido demasiado los plantíos de viñas en perjuicio de la labor y de la cría de ganados, que no se hicieran en adelante sin real licencia, la cual no había de ser dada por el Consejo sin particular exámen (2).

Mas á pesar de estas esquisitas precauciones, la ganadería menguaba ó los pastos se disminuían, acrecentándose los precios de las carnes y de las lanas; y como insistiesen los poderosos ganaderos en atribuir este fenómeno á las muchas dehesas que legal ó ilegalmente se reducían á cultivo, D. Fernando VI, siguiendo el triste ejemplo de sus predecesores, ordenó en 1748, que no se hicieran rompimientos en dehesas acotadas ó pastos comunes: que el Consejo no permitiera verificarlos en las otras tierras «sin urgentísima causa á que no pudiera subvenirse de otro modo:» que las dehesas propias de ciudades ó villas que se hubieran labrado sin licencia en los últimos veinte años, fueran reducidas otra vez á pasto: que las de dominio eclesiástico ó privado, rompidas con facultad temporal, tuvieran el mismo destino, concluido el término señalado, y si la facultad había sido perpétua, el Consejo viera si convenia volver á pasto las que primordialmente habían sido adquiridas en este concepto (3). Estos temperamentos

(1) L. 8, t. 23, lib. 7, Nov. Recop.

(2) *Privil. de la Mesta*, etc., f. 180 y siguientes.

(3) L. 11, t. 25, lib. 7, Nov. Recop.

y distinciones dan á entender que en la lucha terrible entre la agricultura y la ganadería, la propiedad inmueble y la semoviente, el legislador cedía al fin al influjo poderoso de los ganaderos, pero no sin dejar comprender que lo hacia apremiado por las circunstancias, ni sin reconocer hasta cierto punto el derecho individual violado.

Privilegio tan odioso tuvo en verdad escasos defensores. Para los políticos y los moralistas no tenia más fundamento que la necesidad pública: para los jurisconsultos una ficcion de derecho. Nuestro Leruela, que consideraba la subida de precios como la mayor de las calamidades, y veía que una oveja que treinta años ántes al en que él escribía, valia un real ó ménos, habia llegado á costar cinco y más reales, atribuía casi todo el daño á las muchas licencias que se daban para romper dehesas, ya por el Consejo de la Cámara, ya por el de Hacienda, ya por el de Ordenes. Intentó demostrar con este motivo (tal era su pasión por la ganadería) que los rompimientos no favorecian siquiera á la produccion, porque las tierras quedaban estragadas á los tres ó cuatro años de cultivo. Censuró duramente los que se verificaban en dehesas boyales y pastos comunes, para comprar exenciones de gabelas ú oficios públicos, ó para pagar el servicio de millones. Así pedía que se redujeran inmediatamente á pasto todas las dehesas del reino, fundándose en que, instituidas éstas para la ganadería, eran ilegales las labores hechas en ellas, ya por falta de real licencia ó ya por no constar el título ó haber espirado el término de las concedidas en otro tiempo, é invocando tambien en su apoyo la salud pública, ley suprema que en todos los siglos ha servido de excusa á la arbitrariedad y la tiranía (1). El libro de Leruela, aunque impreso más tarde, era ya conocido en las regiones oficiales ántes de 1633, fecha en que Felipe IV concedió tantos privilegios á la ganadería, y entre ellos el de la reduccion á pasto de las dehesas abiertas al cultivo en los cuarenta y tres años anteriores: razon hay por lo tanto para presumir que ejercería algun influjo en la promulgacion de esta interesante pragmática.

Los jurisconsultos encargados de comentar ó defender estas leyes en el terreno de la justicia y del derecho, lo hacian de la manera más ingeniosa. D. Pedro Gonzalez Salcedo, glosador complaciente de las leyes agregadas á la Recopilacion por Felipe IV, aplaudió con entusiasmo la de 1633 y para justificarla suponía la existencia de una servidumbre legal de pastos á favor de los ganaderos, sobre todas las tierras destinadas desde antiguo

(1) Part. 2, c. 1. y 4, pár. 2.

á este servicio; y como reduciendo á cultivo estas tierras se defraudaba aquel beneficio á los dueños de ganados, la prohibicion de hacerlo, era en su concepto, de rigurosa justicia. Esta teoria encerraba, sin embargo, una grave dificultad jurídica; pues subsistiendo las servidumbres mientras que existen los prédios sirvientes, no debía bastar, para extinguir la de pastos á favor de los ganaderos, el permiso de la corona para reducir á cultivo los prédios á ella afectos. Pero el ingenioso Salcedo, á fin de dejar á salvo esta régia prerrogativa, invocó la ficcion jurídica que suponía pertenecientes á la real cabaña todos los ganados del reino, deduciendo de ella que si el rey era la persona á cuyo favor estaba instituida aquella servidumbre, debía bastar su consentimiento para considerarla lícitamente suspensa ó extinguida en las tierras que con él se abrian al cultivo (1). Esta razon no dejaba de ser valedera considerados el monarca como la personificacion del interés público, y como parte tan esencial de éste el de los ganaderos en la conservacion de las dehesas, que debieran sacrificársele los derechos más importantes del dominio, sin la debida indemnizacion; pero el argumento flaqueaba por su base, porque ni el verdadero interés público exigía aquella universal servidumbre de las tierras, ni aunque la requiriese, podian sacrificársele los derechos del dominio privado sin indemnizacion suficiente.

No se hubieron de ocultar estas razones, ni á graves jurisconsultos que ya en el siglo xvi, y más en el xvii, tocaron esta materia, ni á los modernos políticos. Alfonso de Acevedo, el comentarista diligente de nuestra Recopilacion, dió bien claramente á entender cuánto desaprobaba las leyes que ya en su tiempo mandaban reducir á pasto las tierras puestas recientemente en cultivo. Falta el pan, decia, porque se labran pocas tierras: convendria permitir que uno ú otro año se sembraran los montes, ó se destinara á cultivo alguna parte de ellos, «hoy particularmente que todo parece poco para el pasto de los ganados» (2).

Otros jurisconsultos de la misma época trataron de limitar los efectos de aquellas leyes, sosteniendo que no eran aplicables allí donde los vecinos tuvieran por fuero especial el de romper y labrar los terrenos baldíos de sus respectivos términos, de cuyo privilegio disfrutaban infinitos pueblos, segun se ha visto en otros lugares de esta obra. D. Ignacio del Villar, abo-

(1) *Analecta juris, sive ad hispanas leges in Compilatione novissime auctas... collectanea et comenta*. Madrid 1633. *Ad leg.* 1, t. 14, lib. 3, c. 3.

(2) *In leges Recopilat. Comment.* lib. 3, t. 1.

gado de Alcaráz, una de las villas que gozaban aquel fuero, por merced de D. Alfonso VIII, escribió en su defensa, intentando probar que no había sido derogado por la ley que prohibía á los concejos labrar los baldíos; ni por la que mandaba restituir á pasto comun los términos, montes y baldíos enajenados, rompidos ó acensuados en los diez años anteriores. Sus argumentos no fueron en verdad de grande empeño, pero también sostuvo, aunque de paso, en apoyo de su tesis, que los rompimientos permitidos por los fueros locales no eran contrarios al bien público (1).

Fué en el siglo XVIII cuando esta cuestión, como tantas otras de legislación y economía pública, se dilucidó más profundamente. Hubo entonces algun escritor que no se mostró favorable á los rompimientos, como D. Andrés Rodríguez en su tratado encomiástico *De privilegiata possessione Mixtae*, citado ántes, y D. Francisco Somoza, que al tratar de los *estorbos y remedios de la riqueza de Galicia*, defendió la posesion inmemorial de los caballeros en los montes de aquella provincia, por voces ó suertes determinadas que se dividían entre las familias y se reivindicaban en los tribunales como las tierras laborables, y solían también cultivarse, é impugnó el proyecto de repartir estos montes entre los labradores. Fundábase en que eran hacienda ajena, que se perjudicaría con ello la cria de ganados «que eran la principal riqueza del reino, sobre todo en Galicia,» y que al fin ganaría poco la agricultura por carecer los adquirentes de tales tierras de los fondos necesarios para emprender desmontes y otras labores costosas (2). No es de extrañar que Somoza juzgara de este modo escribiendo en Galicia y para Galicia, donde no se sentían los estragos de la Mesta, ni por lo visto se guardaba la prohibicion de los rompimientos, dado que los caballeros dueños de los montes «no privaban á los labradores de cultivarlos,» segun el mismo autor dice. No defendió éste, sin embargo, los privilegios odiosos de la ganadería. En su concepto, la Mesta era perjudicial al Estado en cuanto no repartía por igual sus beneficios, haciéndolos recaer tan sólo en unos pocos.

Más severamente juzgaron en esta materia los escritores castellanos. D. Bernardo Ward, ministro de la real junta de comercio y moneda, escribía en 1762 que era necesario moderar la ley que prohibía abrir las tierras destinadas á pasto, y que en las ordenanzas de la Mesta había otros

(1) Sylva, *Responsorum juris*. Madrid 1614, lib. I. *Respons.* 7.

(2) *Estorbos y remedios de la riqueza de Galicia*. Santiago, 1775.

puntos como este que, por favorecer á los ganaderos, eran muy gravosos á la agricultura (1). D. Manuel Sisternes, el autor de la *Idea de una ley agraria*, citado ántes, se adelantó á decir que la generalidad con que se habian reducido á cultivo las tierras eriales á fines del siglo xvn, habia dado lugar á que se menoscabara el derecho de propiedad de muchos á quienes se habian tomado sus propias tierras, por lo que el Consejo habia tenido que contener estos excesos; pero censuró las leyes que preferian el pasto del ganado al alimento del hombre, y propuso que toda tierra erial pública se redujera á cultivo por repartimiento, y que los dueños quedaran en libertad de cultivar las propias ó de darlas á otros (2). Esto mismo propuso Campomanes en su informe en el expediente de Extremadura arriba citado. Quería aquel eminente repúblico que aquellas tierras se repartieran entre los vecinos de los pueblos, á fin de que ninguno careciera de 50 fanegas por yunta: que se redujeran á pasto y labor las dehesas de la misma calidad, y que ningun vecino careciera de la tierra necesaria para una yunta (3). En el expediente de ley agraria, el ilustrado intendente de Sevilla no se atrevió á proponer segun decia, que fueran obligados por ley los dueños de dehesas á romperlas y destinarlas á pasto y labor, pero sí que se les declarase en libertad de hacerlo, exceptuando las dehesas de potros y yeguas (4). Jovellanos, por último, informando en el mismo expediente á nombre de la sociedad económica, condenó aún con más energía las leyes vigentes sobre rompimiento de tierras, por cuanto violaban el derecho de propiedad y perjudicaban al adelantamiento de la agricultura (5).

Tantas quejas y reclamaciones no movieron, sin embargo, el ánimo del legislador. Tal vez la opinion vulgar auxiliaba en este punto á la interesada de los ganaderos, y juntas oponian á la reforma obstáculos poderosos. Así es lo cierto que ninguna se hizo en el reinado de Carlos III, en que tantas otras no ménos atrevidas se intentaron. Carlos IV fué quien, por consecuencia del expediente de Extremadura, segun es de presumir, declaró de pasto y labor todas las dehesas de aquella provincia, excepto las que hubieran sido de pasto exclusivamente desde el reinado de Felipe II, acreditándose este hecho con documentos y no debiendo aplicarse tal disposicion

(1) *Proyecto económico de varias providencias dirigidas á promover los intereses de España*. Madrid, 1779, part. 1, c. 10.

(2) Pár. 2, 3 y 31.

(3) Exped. de Extrem., núm. 80 y sig.

(4) Exped. de ley agr., núm. 917 y 918.

(5) Informe, etc., núm. 130.

sino á las dehesas que se arrendaran y no á las que disfrutaran sus dueños (1). Posteriormente, al suprimir los alcaldes entregadores de la Mesta, transfiriendo su jurisdiccion á las justicias ordinarias y moderando algun tanto el exceso de los privilegios pecuarios, encargó el mismo monarca á los subdelegados le informaran del perjuicio que los rompimientos ilegales, que llevaran más de diez años, podian ocasionar á la real cabaña, y que si se hubieran verificado en terrenos baldíos ó distantes de las cañadas, cordeles, descansaderos ó abrevaderos, se abstuvieran de todo procedimiento (2).

Al empezar el presente siglo, duraba, pues, todavía aquella servidumbre perniciosa, aquel tributo injustificado y odioso que pagaba la propiedad á la ganadería. Carlos IV se habia limitado á moderar un tanto el rigor de los procedimientos contra los propietarios, que sin recibir ordinariamente la visita de los trashumantes, se hallaban en posesion hacia tiempo, de cultivar sus tierras. Las Cortes de Cádiz fueron las que en éste, como en tantos otros puntos, volvieron por los derechos menoscabados de la propiedad, declarando en la tan célebre ley de 8 de Junio de 1813, que los propietarios podrian en adelante destinar sus tierras á labor ó pasto ó plantío ó al uso que más les conviniese, derogando por consiguiente las leyes que prefijaban la clase de disfrute á que las habian de dedicar. Con esta ley, hoy vigente, despues de las vicisitudes que sufrieran todas las del mismo origen, recobró la propiedad uno de sus más importantes derechos usurpados ó sacrificados al interés exclusivo de una industria.

II.

POSESION PRIVILEGIADA DE LOS GANADEROS DE LA MESTA EN LAS TIERRAS DE PASTO.

Competia además con tantos menoscabos del dominio, el que resultaba del derecho de posesion preferente atribuido á los ganaderos en los pastos que ocupaban ó intentaban ocupar. En el *Quaderno de leyes de la Mesta*, se halla una que dice así: «Si algunos ganados pacieren en cualquier dehesa ó pastos de invernadero, en paz y no se les fuere contradicho, hasta

(3) L. 19, t. 25, lib. 7, Nov. Rec.

(6) L. 11, t. 27, pár. 22, lib. 7, Nov. Rec.

»el primer concejo, ó en el mismo primer concejo que se hiciere en las
 »sierras, ganen la posesion de ella los dichos ganados en lo que cada ca-
 »beza hubiere menester y un tercio más» (1). Supónese, y no sin funda-
 mento, que esta ley monstruosa no fué en su origen más que una ordenan-
 za particular de la Mesta, hecha por los hermanos para su exclusivo pro-
 vecho; pero que andando el tiempo, y hallándose ya en observancia, fué
 confirmada entre otras por varios monarcas, y particularmente por don
 Carlos I y doña Juana en 1525. Bastaba, por lo tanto, ocupar algunos me-
 ses un terreno de pasto sin conocimiento de su dueño, para que éste que-
 dara privado perpétuamente del derecho de disponer de él, segun su con-
 veniencia.

Los términos generales de esta ley comprendian, segun los intérpretes
 y la jurisprudencia, confirmada al fin por otras leyes, todas las dehesas,
 así las formadas con real licencia temporal, como las que carecian de ella,
 las boyales, las de propios, las de pasto y labor en su totalidad, si la ma-
 yor parte de ellas estaba destinada á lo primero, los prados de guadaña,
 los sotos y los montes (2). El que entraba con su ganado en cualquiera de
 estas tierras, no necesitaba contrato precedente para ganar la posesion de
 ella, y el dueño tenia que sufrirla perpétuamente, como dejara trascurrir
 un invierno sin denunciar el deshaucio. No se necesitaba siquiera para
 adquirirla la ocupacion material de la heredad, pues segun otra ley de la
 Mesta, el hermano que ponía precio á cualquiera tierra de pasto, ganaba
 su posesion desde el momento en que era aceptado (3). Esta posesion du-
 raba tanto como el ganado en cuyo provecho habia sido adquirida, aunque
 mudara de dueño, mientras no fuera abandonada, y si el poseedor era
 despojado, debia ser inmediatamente restituido, constanding sólo el hecho
 de la posesion (4). Sucediéndose los ganados unos á otros, no tenia esta
 servidumbre tiempo limitado, y así habia algunos que llevaban ya de exis-
 tencia más de 300 años cuando Leruela escribia. Era su carácter *real* en el
 sentido que da á esta palabra el derecho, puesto que los hermanos de la
 Mesta podian enajenarla con los ganados que la disfrutaban, aunque no
 sin ellos (5). Hacia más odiosa esta posesion privilegiada la circunstancia

(1) L. 1, t. 6.

(2) Rodríguez, *De privilegiata possessione Mixta*, c. 1, n. 67.

(3) *Quaderno de la Mesta, etc.*, l. 2, t. 6.

(4) L. 5, t. 6, del *Quaderno, etc.*

(5) Felipe III en 1609, l. 4, t. 27, lib. 27, Nov. Rec.

de no participar de sus beneficios los ganaderos extraños á la hermandad, los cuales eran, como ántes he dicho, el mayor número. Ya reconocido por otros monarcas, Felipe II vino en su apoyo, prohibiendo en 1566 á los ganaderos ribereños arrendar los pastos que poseyeran los de la Mesta (1). Con el mismo fin dispuso Felipe IV en 1633, que en los arrendamientos de dehesas no perdieran los ganaderos su posesion privilegiada, que nadie pujara las dehesas en que disfrutaran este privilegio los hermanos de la Mesta, y que no fueran tenidos por tales los ganaderos riberiegos, para el efecto de ganar posesion en dehesas y pastos, ni aún contra otros ganaderos de su clase (2).

Así como la posesion privilegiada no se extendia sino á los pastos que cada ganadero necesitara para su cabaña y un tercio más, así no era tampoco lícito obtener por otros títulos la posesion ni el dominio de los mismos pastos. Estaba prohibido además todo tráfico y reventa de yerbas, á fin de que tuviese cada uno las que necesitara ó poco más, pero no mucho más ni nada ménos. Los Reyes Católicos en 1503 prohibieron á los que no tuvieran ganados comprar yerbas para arrendarlas ó revenderlas, y permitieron á los que los tuvieran comprar sólo las que necesitaran y un tercio más. Con objeto tambien de que no faltasen pastos, los mismos monarcas en 1507, prohibieron á los labradores tomar en arrendamiento más tierras de las que pudieran cultivar por sí. Esta prohibicion se extendió en 1515 á los que tomaban tierras á censo para revenderlas ó subarrendarlas (3).

Como el disfrute de las dehesas de pasto de dominio ajeno no habia de ser enteramente gratuito, el privilegio de posesion contra la voluntad del dueño, habria sido ineficaz y frustratorio, si éste hubiera conservado la libertad de fijar el precio de las yerbas, pues señalándolo excesivo habria tenido el ganadero que renunciar á su derecho. Era, pues, necesario otro privilegio que asegurara el uso del anterior, mediante otra nueva limitacion de las facultades del dominio, que obligara al propietario á ceder sus tierras por precio de tasacion. Así ordenó Felipe II en 1585, que si el ganadero y el dueño de la dehesa no se convinieran en el precio del arrendamiento, nombraran dos peritos que la tasaran y que los interesados pasaran por su aprecio. Felipe IV, con ménos miramiento á los derechos del domi-

(1) *Privil. de la Mesta*, fól. 145.

(2) L. 4, t. 27, lib. 7, Nov. Rec.

(3) *Privil. de la Mesta*, fols. 151, v.º, 152 v.º y 154.

nio, mandó en 1633 que se reconocieran, apearan y tasaran todas las dehesas del reino por las justicias respectivas y dos comisarios, nombrado uno por el concejo de la Mesta, á fin de fijar el número de cabezas de cada una, haciéndose inventario de todas para que no pudieran aumentar el precio de los arrendamientos, exagerando la cabida de sus tierras, ni ocultar los rompimientos ilícitos verificados en ellas.

Empresa de ejecucion tan difícil no llegó á tener efecto, como era de esperar. Con la tasa y las prohibiciones crecieron los precios de las yerbas, y esto dió motivo á otra nueva violacion del derecho de propiedad. Carlos II en 1680, ordenó á petición de los ganaderos, que los dueños de dehesas redujeran sus rentas á las que devengaban en 1633, al dictarse las disposiciones ántes reseñadas (1). Providencia injusta y absurda que sirvió despues de precedente funesto á otras semejantes, no ménos perniciosas. Felipe V en 1702, siguiendo este triste ejemplo, ordenó que los futuros arrendamientos de las dehesas se hicieran por los precios que tuviesen en 1692, y que los pendientes se regularan al mismo preeio, salvo que pidieran su tasacion el arrendatario ó el dueño (2). Un auto del Consejo de 1706, prohibió obligar á los ganaderos al pago anticipado de las rentas de las tierras, y mandó restituirles las antiguas posesiones de pastos de que les hubieran despojado los dueños, recibiendo de estos los precios que probaran haber percibido en 1692, y mientras que tal prueba se hiciese, los últimos precios que se les hubieran satisfecho, rebajada la tercera parte (3).

El privilegio de posesion y la tasa de los pastos no rigieron más que en Castilla. Pudiera dudarse, sin embargo, al leer en el *Quaderno de la Mesta* la ley 19 del título 6.º, que manda guardar las posesiones de los hermanos en los reinos de Aragon, Portugal y Navarra; pero el mismo Rodriguez, el comentarista diligente y defensor caluroso de los privilegios pecuarios, se admira de hallar tal ley, y confiesa que no sabe con qué derecho haya podido promulgarse. Segun el mismo *Quaderno*, la diputacion de Aragon solicitó se extendiera á este reino aquel privilegio; mas no consta que llegara á otorgarse. En él no rigieron las ordenanzas de la Mesta, puesto que Albarracin en 1693 obtuvo para sus ganaderos los privilegios de Castilla. Rodriguez presume, y es suposicion notable, que aquella ley se incluiría en

(1) *Privil. de la Mesta*, fól. 184.

(2) L. 11, t. 25, lib. 7, Nov. Recop.

(3) L. 13, *ibid.*

el *Quaderno* con la esperanza de obtener la extension del privilegio, pedida la cual, sin embargo, no llegó á alcanzarse (1).

Este doble privilegio de la posesion y la tasa, no hubo de hallar entre los jurisconsultos grande apoyo, dado que si bien lo expusieron friamente, tampoco le dedicaron los escritores de nota ninguna frase benévola, como hicieron con otros monopolios. Sólo aquellos que exprofeso escribieron en defensa de la ganaderia por deber ó agradecimiento y el glosador cortesano de las leyes de su tiempo, Gonzalez Salcedo, lo hallaron digno de elogio. Leruela, para quien el principal destino de la tierra era pagar tributo á la ganaderia, calificaba de utilisimas las posesiones que ganaban los ganados serranos en las dehesas de invernadero para la crianza de ellos, introducidas por causa pública y de ningun inconveniente á los señores particulares de las dehesas, como quiera que los posesioneros del herbaje paguen la pension justa convenida ó tasada. Hallaba asimismo justa y conveniente para la causa pública la prohibicion de pujar el precio que una vez ofrecieran por los pastos los hermanos de la Mesta y la de solicitar el arrendamiento de yerbas, que algun ganadero tratase de tomar para sí (2).

D. Pedro Gonzalez Salcedo, que elogió, más bien que comentó, las leyes añadidas á la Recopilacion en su tiempo, aprobó tambien el monopolio de los pastos que la pragmática citada de 1633 otorgaba á la ganaderia. Confesó que por regla general no podia privarse al dueño de la facultad de arrendar como quisiera sus tierras, pero agregando que esto debia entenderse sin menoscabo de la utilidad pública, y que la habia en no dejar en libertad á los dueños de dehesas de arrendarlas ó no á los ganaderos (3). D. Andrés Rodriguez, que como recordará el lector, era fiscal de la Mesta, escribia que sin la posesion privilegiada no estaba segura la subsistencia de los ganados, y que con ella podrian estos prescindir de los demás privilegios, los cuales á su vez serian sin ella insuficientes (4).

Pero en los expedientes de Extremadura y de ley agraria se pusieron ya de manifiesto, no sólo la injusticia de tal servidumbre, sino el daño que ocasionaba á la causa pública, que se invocaba en su apoyo, como único fundamento. Decia el diputado de Extremadura en la representacion origen del expediente, que al comenzar el siglo anterior no gozaba la Mesta la cuarta parte de las tierras que disfrutaba en 1764; que concluida la

(1) *De privil. possess. Mixta*, c. 19.

(2) *Restauracion, etc.*, part. 2, c. 2, pár. 1.

(3) *Analecta, etc.*, lib. 1, t. 14, lib. 3, c. 6.

(4) *De privil. possess. Proem.*

guerra de sucesion lo habian invadido todo los mesteños, no dejando en Badajoz más tierra laborable que un breve espacio sobre la raya de Portugal; que muchos pueblos pedian y obtenian por privilegio el disfrute de alguna parte de sus yerbas, y que los hermanos de la Mesta ganaban posesion en las dehesas de pura labor, á pesar de las leyes que lo prohibian, y luego se hacian amparar, sin audiencia del dueño, en los tales cuales pastos que habia en ellas, señalando al colono la parte que habia de cultivar; pero que como la labor exigia ganados, y los ganados pastos, quedaba inútil aquel señalamiento, y los más preferian abandonarlo todo á los ganaderos (1).

Segun informes consignados en el mismo expediente, los trashumantes se prevalian de sus privilegios para monopolizar los pastos á precio tasado y revender despues más caro el fruto (2). Así uno de los remedios propuestos por el diputado de Extremadura y apoyado por la generalidad de los informantes, era que los ganaderos de todas clases no tuviesen fuera de su vecindad otras posesiones que las de sus propias dehesas, y que si éstas ocuparan la mayor parte del término, se les obligara á ceder la tercera parte á los vecinos por su justo precio. Otros, adelantando más en este camino peligroso, proponian se otorgara á los naturales una tercera ó una cuarta parte de los pastos de sus respectivos términos, así en dehesas públicas como de Propios ó de particulares, sin distincion entre las que estuvieran ó no disfrutadas por sus dueños (3).

El fiscal D. José Moñino, informando en el mismo expediente, pintó con vivos colores los estragos del privilegio de posesion, atribuyendo á él gran parte de los daños y menoscabos que sufría la provincia de Extremadura. Hizo ver la extension que habia adquirido el monopolio de los pastos en los trashumantes, ya porque les bastaba hacer postura que fuera admitida en la subasta, para ganar la posesion y ser tantas las dehesas que debian arrendarse en licitacion pública, por pertenecer á Propios, iglesias ó corporaciones, ya porque los mismos ganaderos, cuando los dueños particulares les negaban sus dehesas, pedian su posesion al Concejo de la Mesta, lo cual bastaba para tenerla por adquirida. A estos y otros excesos de la hermandad, contra los que no pertenecian á ella, atribuía Moñino el grave inconveniente de haberse hecho ganaderos los grandes propietarios, las

(1) Exped. de Extrem. n.º 18, 19 y 21.

(2) Id. n.º 104.

(3) Id. n.º 404 y 573.

iglesias y los monasterios. También trató de desvirtuar la autoridad de los privilegios pecuarios, sosteniendo que las leyes de la Mesta no obligaban sino á los *hermanos*, y que por lo tanto, las que concedían la posesion privilegiada no obligaban á los dueños de dehesas que no pertenecían á la hermandad. Esta tésis no podía demostrarse con razones muy decisivas, porque la verdad era que no la comprobaban las confirmaciones reales de las leyes de la Mesta ni el texto de las que establecían aquel odioso privilegio. Por eso, sin duda, el sábio fiscal del Consejo no deducía de sus consideraciones que debieran abolirse inmediata y totalmente las posesiones privilegiadas, sino la necesidad de caminar hácia este fin, sin extender el privilegio á las ganaderías de todas clases, como pretendían otros informantes, ni limitarlo, dando preferencia á los vecinos en los pastos adhehesados, aunque tomando de cada uno de estos tres remedios lo que pareciese más útil para el objeto y ménos gravoso á los intereses y derechos existentes. En su virtud, proponía que se obligase á los dueños de pastos acotados á arrendarlos á los vecinos que los solicitaran, concediendo la posesion privilegiada á los ganaderos estantes ó riberiegos, en proporcion al número de yuntas que poseyeran; que se permitiera á los vecinos cultivar las dehesas de labor, y las de pasto y labor en la parte destinada á esta última, cuando el dueño ó el colono no las aprovechara; que se prohibiera subarrendar las tierras por más precio que el de su arrendamiento; que se prórogaran indefinidamente los contratos de esta especie, mientras que los dueños no abonaran á los colonos las mejoras que hubiesen hecho en sus fincas, ó cuando no se hubiere denunciado el deshaucio con la anticipacion conveniente; y que se concediera derecho de tanteo á los arrendatarios antiguos, y á los labradores vecinos, sobre los extraños y sobre los vecinos que no fueran labradores ó que tuvieran ya otra posesion, aunque libre de tasa en todo caso (1). Son dignas de notarse la timidez y la vacilacion del ilustre Moñino en la aplicacion de sus principios, al fijar las conclusiones de su dictámen. Hay hasta contradiccion entre algunas de éstas y las doctrinas sustentadas en el cuerpo del escrito, que se explica sin duda por su respeto á los intereses creados, y la magnitud de estos intereses.

Campomanes, informando en el mismo expediente, condenó, como es de suponer, la posesion privilegiada, pero tampoco pretendió su abolicion inmediata, sino modificarla con temperamentos protectores de los vecinos contra los extraños. Propuso, pues, que los trashumantes no pudieran to-

(1) Exp. n.º 33 y siguientes.

mar en arrendamiento tierras de labor, y que si las hubieran tenido y subarrendado á los naturales, devolvieran á estos el exceso de precio que sobre el pagado por ellos, les hubieran cobrado en los últimos diez años, y que sin estorbar á los poderosos la labranza de sus tierras, se les prohibiera acumular con inmoderada extension las públicas ó las labrantías arrendables, á fin de que no faltaran á los senareros.

En el expediente de ley agraria fué tambien señalada la servidumbre en cuestion como una de las causas del atraso de la agricultura. Propúsose en él por algunos informantes (1) que para la adquisicion y uso de las tierras, fueran preferidos los labradores del partido respectivo, y entre éstos los nuevamente establecidos, y que no se tantearan á los labradores las sobras de los pastos en las tierras que tuvieran arrendadas, quedando á su arbitrio el *acogimiento* de ganado en ellas. Otros informantes (2) pidieron se restituyesen á labor las tierras que ántes tuvieran este destino y se devolvieran así á los labradores, con privilegio de posesion, semejante al que disfrutaban los ganaderos en las tierras de pasto; que así como se habia retrotraido el precio de las yerbas al que tenian en 1692, se redujera el del arrendamiento de las tierras de labor al que tenian cuarenta años ántes, y que solicitando cualquier labrador alguna dehesa de labor y pasto en arrendamiento, se diera desde luego por precio tasado. Estas providencias reaccionarias, y que adolecian del mismo vicio que se trataba de corregir en los trashumantes (pues tanta era la pasion que habia engendrado la lucha entre los intereses agrícolas y los pecuarios), no fueron apoyadas por el procurador general del reino. El ilustrado intendente de Sevilla las combatió enérgicamente impugnando la tasa del precio de las tierras por ineficaz para producir la deseada baratura, aunque despues de haber sostenido esta tésis con las razones económicas más concluyentes, vino en cierto modo á contradecirla, solicitando que se mandara pagar en frutos los arrendamientos de las fincas rústicas, con sujecion á una cuota fija, establecida por el Consejo, y que los propietarios no pudieran deshauciar á los colonos ni subirles las rentas, en tanto que pagaran las convenidas y no dejaran de cultivar las tierras (3).

(1) Los diputados y personeros del Comun de Ciudad-Rodrigo, y esta ciudad con apoyo del procurador general del reino. Núm. 204 y sig.

(2) Los sexmeros, los procuradores generales de las tierras de Salamanca, Ciudad-Rodrigo y Ledesma y otros. Núm. 260 y sig.

(3) Núms. 768 á 773.

Oponer privilegio á privilegio era el remedio que en general se ocurría contra los excesos de la Mesta, á la mayor parte de los que informaron en el expediente de ley agraria. No así Jovellanos, á quien en su informe por la Sociedad económica no faltó un momento la guía de la lógica ni la luz de los principios. Condenó el privilegio de posesion, porque además de violar el derecho de propiedad robaba al propietario el de elegir colono, lo cual tiene un valor positivo, aún dada la igualdad de precios, y porque se oponía á la extension del cultivo de granos, esclavizando la tierra á una produccion ménos abundante. Anatematizó todo privilegio de tasa por injusto, anti-económico y anti-político, y porque, aplicado á las tierras de pasto, no tenía más objeto que alejar el equilibrio de los precios, en el único caso en que, faltando el privilegio de posesion, pudieran aquellos buscar su nivel. De las leyes que fijaban el valor de las yerbas por el que tenían muchos años ántes, dijo que habian envilecido la propiedad, cuyo valor progresivo no podia regularse con justicia, sino con respecto á sus productos, y que no podia ser fijo, y mucho ménos por tasa retrospectiva, el precio de los pastos, cuando el de las lanas era alterable y habia crecido tan enormemente. Impugnó, en fin, los tanteos tan fácilmente dispensados por nuestras leyes, como perniciosos á la propiedad, alegando que destruian la concurrencia y detenian la natural y justa alteracion de los precios, admirando la obstinacion y el descaro con que aún se sostenian éste y otros arbitrios dirigidos á envilecer el precio de las yerbas y hacer de ellas un horrendo monopolio en favor de los trashumantes (1).

Sin embargo pasaron los reinados de Carlos III y de Carlos IV, sin que se adoptara ninguna disposicion sobre esta materia. El decreto ya citado de las Cortes de Cádiz de 8 de Junio de 1815 fué el que concluyó con ésta y las demás injustas servidumbres que pesaban sobre la propiedad rural. Entonces se declaró por primera vez que ninguna persona ni corporacion podria alegar preferencia sobre otra en los nuevos arrendamientos; que estos se celebrarían libremente por el precio en que convinieran los contratantes, sin que en ningun tiempo fuera lícito pedir su tasacion para ajustarlos á ella, aunque sin perjuicio del remedio de la lesion, en el caso en que lo otorgan las leyes, y que los colonos no podrian alegar posesion para continuar en sus arrendamientos contra la voluntad de los dueños, cualquiera que hubiese sido la duracion de su contrato. Así perdió, al fin, la

(1) *Informe, etc.* Núm. 131 á 135.

ganadería uno de sus más importantes cuanto injustos privilegios, y recobró la propiedad uno de los derechos que más sin razón le estaban usurpados de antiguo.

III.

LIMITACIONES DEL DOMINIO Á FAVOR DE LA AGRICULTURA.

A todas estas limitaciones del dominio de la tierra á favor de la ganadería se juntaban otras no tan gravosas, inventadas para favorecer la agricultura. Tales eran las que, prescindiendo de todo interés pecuario, restringían la facultad de arrendar las fincas rústicas.

D. Alfonso X, en el Fuero Real, no permitió á los dueños de tierras lanzar á los colonos con contrato pendiente, á ménos que dejaran de pagar la renta de dos años (1), siguiendo en este como en otros puntos la legislación romana (2). En cuanto al arrendamiento estipulado por años, impuso al dueño la grave carga de prorogarlo indefinidamente, á no ser que el colono maltratara la finca (3). Ajustándose además el rey Sábío á principios históricos de la jurisprudencia romana, que carecian ya de sentido, introdujo tanto en el Fuero Real como en las Partidas la distincion entre el sucesor universal y el singular del dueño, para el efecto de obligarle en el primer caso y no en el segundo, á pasar por el arrendamiento que otorgara su causante (4). También prohibió dar predios en arrendamiento á los oficiales de la corte del rey y á los clérigos (5).

Así menoscabada la facultad de arrendar, alcanzó y extendió la Mesta su privilegio de posesion en las tierras que arrendaban sus *hermanos* con la tasa correspondiente del precio. En 1585, en 1633, en 1680 y en 1702 se mandó, como queda dicho, tasar y reducir las rentas de las tierras de pasto para favorecer la crianza de ganados: ¿por qué no habian de adoptarse providencias semejantes respecto á las tierras de labor, para fomento de la agricultura? Consecuencia rigurosa de aquel principio y fruto de aquel ejemplo fué, por lo tanto, un auto del Consejo de 1708, sujetando

(1) L. 4, t. 17, lib. 3, F. Real.

(2) Dig. l. 54. *Loc. et conduct.*

(3) L. 7, t. 17, lib. 3, F. Real.

(4) Inst., pár. últ. *Loc. et conduct.* Dig., l. 19, pár. 8. Cód., l. 10. *Loc. et conduct.*—L. 7, t. 17, l. 3, F. Real.—L. 2, t. 8, Part 5.^a

(5) L. 2 y 7, t. 17, lib. 3. F. Real, y l. 45, t. 6, Part. 1.^a

tambien á tasa las rentas de tales tierras é igualando en este punto, como era justo, á los labradores con los ganaderos. Mas esta novedad hubo de ofrecer sus dificultades en la práctica, segun se infiere de las vicisitudes que sufrió en su no larga vida. Asi la hallamos derogada en 1754, alegándose por motivo, la desigual condicion en que se colocaba al propietario y al colono, sujetando á tasa las rentas y dejando libre la contratacion de los frutos. Esté fundamento era concluyente y, sin embargo, no bastó á impedir el restablecimiento del auto de 1708 por real provision del Consejo, si bien entonces no llegó apenas á tener efecto, pues que el mismo Consejo mandó recoger á los pocos meses su propia obra, omitiendo publicar las consideraciones que le movieran á dictar tan contrarias providencias (1).

Algunas otras se promulgaron despues con el mismo ó semejante objeto, ya generales ó ya locales ó como decisiones en justicia de casos determinados, pero que revelan tambien la escasa libertad de los propietarios en el arrendamiento de sus tierras. Citaré entre otras la real provision que alcanzaron del Consejo en 1763 los sexmeros de la tierra de Salamanca para que los dueños de heredades no deshauciaran á sus colonos, ni subieran la renta á ningun labrador, y que los deshauciados fueran restituidos como pagaran las rentas que tasaran los peritos. Otra declaracion no ménos favorable obtuvieron del Consejo en 1766, los vecinos de la misma tierra, atribuyéndoles preferencia sobre los forasteros en el arrendamiento y venta de las heredades del término. En 1768 hizo extensivo el Consejo el privilegio ántes referido de los sexmeros de Salamanca á Ciudad-Rodrigo, Toro y Zamora. Mas esta providencia originó tantas reclamaciones, segun afirma Sisternes, que fué menester derogarla á los dos años, disponiéndose que, terminados los arrendamientos pëndientes, quedaran libres los dueños y los colonos para no continuar en ellos, excepto cuando hubiera alguna costumbre en contrario, como en tierra de Segovia, donde los hijos sucedian á los padres en el arrendamiento de sus heredades.

Mas no fué de larga duracion el buen efecto de esta providencia. Una real cédula de 1785 prohibió á los dueños de tierras hacer novedad en los arrendamientos pëndientes, alterar sus precios y hasta ejecutar los nuevos pactos que hubieran celebrado ántes con este objeto; les mandó acudir á las justicias en cuanto á los arrendamientos terminados, para que se regu-

(1) *Esped. de ley agr.*, pâr. 105.

lasen por peritos las rentas que en adelante habian de satisfacer los colonos, y declaró que los propietarios no estaban facultados para privar de sus tierras á los colonos, so color de haberlas de cultivar ellos por sí, á ménos que fueran tambien labradores con el ganado correspondiente y vecinos del pueblo (1). ¿Cómo es que providencias tan contrarias á la libertad de las transacciones privadas, se dictaron precisamente en el mismo reinado en que eran á la vez más combatidos los errores económicos que las engendraban, y en que tantas reformas se promovian basadas en las doctrinas más opuestas á ellos? A la real cédula de 1785 hubo de dar ocasion una circunstancia extraña á su aparente objeto. Establecióse en aquel año la nueva contribucion de *frutos civiles*, que consistia en el 6 por 100 de las rentas de las tierras, fincas y derechos reales arrendados, y el 4 por 100 de las de casas tambien arrendadas, que deberian pagar los propietarios. Y como se temiese que éstos intentaran hacer recaer el nuevo impuesto sobre los colonos, aumentando las rentas con daño de la agricultura, apelóse para evitarlo al remedio violento de la próroga forzosa y la tasa del precio de los nuevos arriendos. Queríase que el nuevo impuesto gravase tan sólo á la propiedad; temíase que hallara resistencia insuperable, si viniese á recaer sobre los colonos, clase mucho más numerosa y ya gravada con el diezmo y otras gabelas, y lo único que discurrió el Consejo para conjurar los peligros que recelaba, fué suspender indefinidamente el libre uso de la propiedad rural.

Tambien pudo ser causa de la inconsecuencia en que alguna vez incurrieron los ilustres legisladores de aquel célebre reinado, la lucha interior que entre ellos mismos y con vario éxito, sostenian las viejas con las nuevas ideas, los intereses antiguos con los modernos, sobre todo en materias económicas. Ni es de extrañar que en tal contienda venciese á veces el error, no contando todavia el gobierno con el apoyo de la opinion pública para combatirlo eficazmente. De ello dan testimonio, entre otros irrecusables documentos, el expediente de ley agraria mandado instruir en 1766, para averiguar las providencias que deberian adoptarse á fin de remediar los daños de la agricultura y fomentar la riqueza. En él fueron oidos muchos funcionarios públicos, corporaciones y particulares: todos convinieron en la gravedad del mal y en la necesidad del remedio; pero los más lo buscaron, no en la li-

(1) *Exped. de ley agr.* Núms. 37, 38, 42, 87, 88, 89, 1.065 y sig.—L. 3, t. 10, libro 10, nota 2, Nov. Rec.—*Teatro de la legislacion universal de España é Indias*. V. Arrendamiento.

bertad de las transacciones, sino en nuevas restricciones y cortapisas del derecho de propiedad. La ciudad de Sevilla pidió la tasa de los arrendamientos de tierras, y de la extension de ellas que habia de poder cultivar cada labrador. Varios vecinos de Medinasidonia solicitaron se justipreciaran por peritos, en dinero y no en granos, las rentas de todas las tierras (1). Los diputados y síndicos de Jerez de la Frontera pidieron se prohibiesen los subarriendos de tierras, bien no permitiendo á ninguno tomar en arrendamiento más de las que pudiera labrar y necesitara para sí, ó bien fijando á todas su justo precio, á lo cual ya habia accedido el Consejo respecto á los labradores de aquella comarca (2). Los síndicos de tierra del pan y vino y Sayago de Zamora reclamaron contra la costumbre que habia en esta tierra de poder el dueño de heredad ó casa admitir en todo tiempo la puja del cuarto de la renta, y deshauciar al colono ó inquilino, aunque no hubiera cumplido el término del contrato, y solicitaron además la tasa por justiprecio. El Consejo proveyó acertadamente derogando en 1752 aquella injusta costumbre y no accediendo á esta última pretension (3). Colonos de la provincia de Salamanca, que llevaban en arrendamiento tierras del cabildo y de otros dueños, hacia 150 años, acudieron en queja de haber sido deshauciados, por no haber querido pasar por un aumento de renta, y pidieron se les amparase en el concepto de que seguirian pagando la renta que tasarán peritos nombrados por ámbas partes (4). El corregidor y el alcalde mayor de Salamanca propusieron que en los arrendamientos que vacaran por muerte de los colonos sucedieran sus herederos; que fueran preferidos por regla general los vecinos á los forasteros, y que ninguno pudiera arrendar más tierra que la que necesitara (5). El síndico y el alcalde de Santa Fé y el corregidor de Granada solicitaron y obtuvieron del Consejo en 1766, el derecho de tanteo para los vecinos de aquella villa en los arrendamientos y ventas de las tierras de su término (6). El intendente de Búrgos propuso

(1) Exped. etc., n. 5.

(2) El Consejo proveyó en 1768, que en el distrito de Jerez no arrendase nadie más tierras que las que necesitara para su propia labranza, ni subarrendase lo arrendado; que los subarrendatarios fueran tenidos por arrendatarios y pagaran directamente al dueño la renta que éste hubiera estipulado con el primer colono; y que los vecinos fueran preferidos por el tanto á los forasteros, en todos los arrendamientos de tierras, (Exped. cit. n. 6).

(3) Exped. n. 25.

(4) Id. n. 25, 36.

(5) Id. n. 55.

(6) Id. n. 77 á 81.

la tasa de la tierra y de los jornales. El procurador general del reino apoyó tambien la tasa de las tierras labrantías, así como se hallaba establecida para las dehesas de los ganaderos. El intendente de Avila propuso se obligase á los dueños á reducir las rentas de sus tierras á las que eran á principios del siglo, y que no se permitiera á los dueños de montes deshauciar á los arrendatarios, ni subirles la renta (1). Con apoyo tambien del procurador general del reino, solicitaron los sexmeros de Salamanca, Ciudad-Rodrigo y Ledesma que se extendiese á los labradores el privilegio de posesion otorgado á los ganaderos. La ciudad de Sevilla abogó por la reduccion forzosa de las rentas á las que eran en 1750, y el justiprecio de las que entonces no estaban arrendadas, el señalamiento de un máximo de fanegas de tierras, del cual no habia de exceder ninguna labranza, la prohibicion de deshauciar al colono, á ménos que dejara de pagar la renta, ó el dueño tratase de labrar su finca, y el derecho de la viuda y herederos del colono para seguir en el arrendamiento de su causante, sin aumento de precio. El procurador síndico de la misma ciudad pidió tambien la tasa de la renta en frutos, que ésta fuera necesariamente la novena parte de los producidos, y que los vecinos tuvieran en todo caso derecho de tanteo en el arrendamiento de las tierras del término (2). Luego unos informantes querian que se prohibieran los subarriendos, otros que ningun labrador tomase en arrendamiento más tierra que la que pudiera cultivar por sí y un tercio más: otros que se fijase el máximo de lo que cada uno habia de cultivar; y los más pretendian el privilegio de posesion, con la tasa, en caso de no haber avenencia entre el dueño y el colono respecto al precio.

El expediente tenia tambien por objeto nada ménos que «establecer la justa proporecion de la renta.» Así, pues, unos informaron que ésta no pasara del 5 por 100 del capital invertido; otros que fuese dos fanegas por cada nueve de las producidas; otros que se fijara en la octava, novena ó décima parte de los frutos, ó más ó ménos, segun fuera la duracion del arriendo; y otros que consistiera necesariamente en una cuarta parte de los frutos que señalaría el Consejo.

Era tal el influjo de las ideas que inspiraban estos proyectos, que aún los individuos y corporaciones de principios económicos más avanzados, y que por otra parte daban muestras de quererlos aplicar á las cuestiones

(1) Exped. n. 170, 183, 188, 194.

(2) Id. n. 272, 281 y sig. 342.

presentes, solian despues olvidarlos para ceder á preocupaciones contrarias, que conducian á la violacion del derecho de propiedad. La Audiencia de Sevilla, que impugnó con excelentes razones la tasa de las tierras y el señalamiento del máximo que habia de permitirse poseer ó cultivar á cada labrador, propuso al fin que se prohibiese á los dueños despedir á los colonos, excepto para labrar ellos por sí ó cuando dejaran de pagar las rentas. La Junta general de comercio, que combatió tambien toda tasa y tanteo y defendió la libertad del tráfico, concluyó pidiendo para los colonos el privilegio de posesion otorgado á los ganaderos, con tasacion de precio en el mismo caso. El intendente de Sevilla, cuya ilustrada opinion he citado tantas veces, y el Sr. Bruna, decano de la Audiencia de la misma ciudad, que como él condenó la tasa, los monopolios y la indicada prohibicion de los subarriendos, concluyeron, sin embargo, por pedir tambien el privilegio de posesion, y el primero además, el pago en frutos de los arrendamientos de tierras por una cuota que fijara el Consejo (1).

Jovellanos fué quizá el único de los informantes, que partiendo siempre de sanos y justos principios, no cedió nunca al influjo de las preocupaciones ó de los intereses contrarios á ellos. Fundándose en que ningun precio es injusto, siempre que se fije por libre avenencia de las partes, y se establezca sobre los elementos naturales que lo regulan en el comercio, y explicando la verdadera causa de la carestia y de la baratura de los efectos comerciables, no sólo demostró la injusticia de la tasa, sino que no la admitió en ningun caso, ni bajo ninguna forma. Condenó igualmente la real cédula de 1785, que como ántes he dicho, habia prohibido deshauciar á los colonos actuales para que en los primeros arriendos no viniera á recaer sobre ellos la nueva contribucion de frutos civiles impuesta á los propietarios en el mismo año, y demostró que esta providencia seria inútil donde por haber tierras sobrantes, no pudieran los propietarios subir el precio de las arrendadas, ni echar sobre los colonos la carga del impuesto; y seria injusta donde por ser escasas las tierras y muchos los colonos que las necesitaran, viniera el tributo á aumentar su carestia. Ni aprobó siquiera la prolongacion forzosa de los arrendamientos que proponian algunos informantes, porque si eran favorables al cultivo, inferian agravio á la propiedad, y la justicia se debe á todos. Reconociendo que el medio más oportuno de asegurar la proporcion recíproca entre el interés del propietario y el del colono, seria constituir las rentas en granos y aún en partes alicuotas de

(1) Exped. n. 344 y sig. 370, 390 y sig. 800, 804, 637 y sig. 709, 768 y 773.

frutos, consideraba que cualquiera ley que así lo ordenase seria injusta y dañosa á la propiedad, y por resultado, tambien al cultivo. Impugnó, en fin, con no menor energia, todo cuanto habian propuesto otros informantes sobre tanteos y preferencias, prohibicion de subarriendos, extension ó reduccion de suertes y otros arbitrios, que con razon estimaba tan derogatorios de los derechos de la propiedad como de la libertad del cultivo. No hallaba justicia donde no viera esta libertad, que era á sus ojos el primero y único objeto de la proteccion de las leyes, y con la cual son incompatibles los privilegios que la derogan y toda proteccion parcial y exclusiva.

¿Qué diferencia entré este informe y los demás reseñados en el expediente de ley agraria! Jovellanos fué el único entre los informantes que no consintió sacrificar ningun derecho de la propiedad á los intereses de la agricultura. En el expediente de Extremadura ántes referido, se propusieron muchas providencias derogatorias del dominio. El diputado de la provincia pidió para los colonos el derecho de tanteo al terminar sus arrendamientos. El corregidor de Cáceres queria que los dueños de tierras, que no las utilizaran por si mismos, las arrendaran necesariamente en subasta pública judicial, admitiendo pujas hasta la mitad ó más del justo precio y prefiriendo primero al vecino, labrador ó ganadero, despues al pobre ganadero ó labrador de la sierra, y por último, al mejor postor, sin limitacion alguna, excepto la de no contratar en tal caso el arriendo por más de cinco años (1). Campomanes en el mismo expediente queria se limitase á los poderosos la extension de tierras públicas que habian de tomar en arriendo, porque en su concepto, «dañaba más la desigualdad de las labranzas, que la de los dominios» (2). D. Manuel Sisternes, que en su obra ántes citada pretendia arreglar los contratos prediales de modo que se conservaran ile-sos los derechos del dueño, y condenaba toda restriccion de la libertad en los arrendamientos, queria, sin embargo, dar al colono el derecho de tanteo despues de concluido el contrato, y lo que es peor aún, la tasa de la renta (3).

Estas vacilaciones é inconsecuencias explican suficientemente por qué si bien no llegaron á adoptarse todos los arbitrios injustos que se proponian por unos ó por otros en mengua de la propiedad para favorecer el cultivo,

(1) Exped. de Extrem. n. 585.

(2) Id. n. 86.

(3) *Idea de una ley agraria*, pár. 1, XLIII, nota.

tampoco fueron derogadas las leyes antiguas, dictadas con el mismo objeto é iguales inconvenientes, hasta que las Cortes de Cádiz dictaron el tan célebre decreto de 1813. Ya se ha visto cómo desaparecieron con él las tasaciones forzosas, las preferencias y tanteos y la posesion continuada de los arrendatarios, terminado el tiempo del arriendo. Las únicas limitaciones que desde entonces pesan sobre el dominio en el uso de este contrato, están justificadas, no sólo por la necesidad, sino por la más estricta justicia. Si el dueño permite al colono continuar en la finca, despues de concluido el arrendamiento, justo es considerarlo prorogado al ménos por un año, ó sea el tiempo de una cosecha, si no han de perjudicarse los intereses del colono que labró ó sembró entre tanto. Por igual motivo es conforme á justicia que el propietario que arriende sin tiempo determinado, no pueda deshauciar al colono, sin darle el término necesario para recoger la cosecha pendiente. Su derecho de libre disposicion no se menoscaba en uno ni en otro caso, puesto que ha podido preservarlo, no consintiendo la permanencia del colono en la finca, ó no arrendándola sino por tiempo señalado. Las Cortes de Cádiz tocaron en esta materia el limite de la libertad que era posible reconocer en los propietarios, sin mengua del derecho de los colonos y del interés público más notorio.

CAPÍTULO VII

Servidumbres en interés de las subsistencias y abastos públicos.

I.

DE LA TASA DEL PRECIO DE LOS GRANOS

Constituian una restriccion importante del derecho de propiedad, y por lo tanto una especie de servidumbre de las más gravosas, las leyes que sujetando á condiciones arbitrarias ó imposibles la libre contratacion de los frutos de la tierra, no permitian disfrutarla segun su naturaleza y el curso vario de los fenómenos económicos. No es dueño absoluto de su propiedad aquel á quien no se permite sacar de ella todo el fruto de que es susceptible; y si esta limitacion tiene por objeto favorecer á otro propietario ó á una determinada clase de individuos, constituye una servidumbre ó un tributo impuesto en su provecho.

La carestía de las subsistencias, resultado de las malas cosechas, ó del

aumento repentino y extraordinario del consumo, ó del incremento de la riqueza y del numerario en circulacion ó de otras causas económicas, ha sido considerada en todos tiempos como un mal social y político de la mayor trascendencia, al cual se ha intentado poner eficaz remedio con leyes que lo atacaban directamente, tasando y moderando los precios encarecidos. La república, decia Fr. Tomás Mercado, autor del curioso libro *Suma de tratados y contratos* (1), debe procurar que se venda lo más barato posible, porque le pertenece promover la utilidad de los vecinos, y de aquí la autoridad para «apreciar todas las cosas que sirven á la vida humana, las cuales de suyo no lo tienen (precio), ó si lo tienen no es justo ni conviene que se siga lo que ellas de suyo valen, sino lo que pueden servir y aprovechar al hombre.» Quien pudo escoger los metales que habian de regular el precio de todas las cosas, añade el mismo autor, bien puede fijar las condiciones de los contratos; y pues que una de ellas debe ser que los bastimentos y las demás cosas se vendan por lo que valen y la naturaleza no lo señala, menester es que lo haga la república, á quien corresponde suplirle con sus ordenanzas. Siendo, pues, la carestía un mal reconocido; creyéndose que la tasa puede remediarla, y atribuyéndose al Estado aptitud y facultad para señalar los precios, era lógica consecuencia establecer por leyes los de todas las cosas comerciabiles. Y como el mal de la carestía es tanto más sensible para el individuo y peligroso para la sociedad, cuanto más necesarias son las mercancías que la experimentan, los granos y los alimentos debian ser las primeras cuyo comercio intentaran regular y tariffar los legisladores.

Cuéntase del emperador Juliano, que, escaseando las subsistencias en Antioquía, puso tasa al precio de los cereales y de otras sustancias alimenticias. Tambien añade la historia que siguió á esta medida un hambre tan rigurosa, que fué necesario revocarla al poco tiempo. D. Alfonso el Sábio, siempre solícito para remediar con leyes los males públicos, fué en España el primer monarca de quien hay segura noticia que tasó los granos en algunos lugares de Castilla; pero tambien refieren las crónicas que esta providencia fué pronto revocada, por haber originado tan grande escasez de víveres en el ejército que á la sazón sitiaba á Niebla y conquistó el Algarbe, que esta patriótica empresa estuvo á punto de fracasar por causa de ella.

(1) Sevilla, 1587, lib. 2, c. 6.

Juzgando tal vez que por haber sido local aquella tasa logró tan desgraciado éxito, Alfonso XI la estableció en todos sus dominios, poniendo la fanega de trigo á 9 maravedis y á 5 la de cebada: mas en seguida vino el hambre y despues la peste á demostrar el error de sus cálculos. Estas tarifas hubieron de durar, al ménos escritas en las leyes, y merced á la facilidad con que solia eludirse su ejecucion, hasta que Enrique II, á peticion de las Córtes de Toro de 1371, subió el precio del trigo á 15 maravedis y á 10 el de la cebada. Pero como al mismo tiempo alzó aquel monarca la ley de la moneda tanto cuanto la habia ántes bajado, para cumplir sus compromisos de pretendiente á la corona, esto produjo una subida extraordinaria en el precio de todas las cosas, que neutralizó el efecto de las nuevas tarifas (1).

Con el aumento de la riqueza y del numerario, debido en parte al engrandecimiento interior de la monarquía y en parte á la adquisicion del Nuevo Mundo, crecieron mucho más rápidamente los precios en el reinado de los Reyes Católicos, lo cual obligó á estos monarcas en 1502, á tasar nuevamente el pan por término de diez años. Mas apenas promulgada esta ley, fué menester reformarla: tal era la rapidez con que menguaba entonces el valor del numerario. En 1503, los mismos Reyes Católicos expidieron dos pragmáticas, en que refiriéndose á otra por la cual habian mandado vender el trigo á *precios razonables*, dentro de cierto máximum, tasaron otra vez el pan y la harina (2). No debian ser, sin embargo, los verdaderos precios los que señalaban estas leyes, cuando segun se lee en ellas, solia eludirse la tasa por medios ingeniosos, tales como el de no vender trigo por su precio oficial, sino al que comprara á la vez aceite, vino ú otros artículos libres por más de su justo valor, ó al que no hiciera ciertas dándivas al vendedor, á su mujer ó á sus hijos, que equivalieran á la diferencia entre el precio verdadero y el tasado.

Cuantos más fraudes se inventaban para eludir las tarifas, tanto más se multiplicaban las pragmáticas condenándolos, fijando con esquisita minuciosidad el precio de los mantenimientos y adoptando todas las precauciones imaginables para remediar las desastrosas consecuencias de estas mismas leyes. Una de estas precauciones fué la de prohibir que se vendiese el trigo á plazo, si bien el emperador y doña Juana modificaron esta

(1) Campomanes, *Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y establecer el comercio de granos*, 1764.

(2) Pragmáticas y leyes de los Reyes Católicos. edic. 1549, f.º 131, v.º

prohibicion en 1525, permitiendo tales ventas, siempre que se estipulara pagar el grano al precio que tuviera en la cabeza del partido quince dias ántes ó despues del 8 de Setiembre (1). Felipe II, mandando en 1558 que no se vendiera el pan «sino á justos y moderados precios,» tuvo y señaló por tales, así en las ventas al contado como á plazo, 510 maravedises para el trigo y 200 para la cebada, ó sea el triple de los establecidos como máximo en 1502 (2). Y es de notar que, segun se ve en esta nueva pragmática, continuaba eludiéndose la tasa con los mismos fraudes y subterfugios que habian condenado los Reyes Católicos. Por eso y porque en realidad creció extraordinariamente en aquel tiempo el valor en cambio de todas las cosas, Felipe II y sus sucesores inmediatos retocaron tantas veces las tarifas legales, alzándolas por una parte y redoblando por otra las precauciones para evitar su quebrantamiento. Esto hizo aquel monarca en 1566 (3), 1568 (4), 1571 (5), 1582 (6) y 1591 (7); pero aunque todo ello era innecesario en años de abundante cosecha, en que los cereales solian venderse por ménos de la tasa, en los estériles nada bastaba para mantenerlos dentro de ella, ó para atraerlos á los mercados, donde no se permitia venderlos por su justo precio. En vano permitió la citada pragmática de 1568 vender el trigo de fuera con un recargo proporcionado á la distancia recorrida, pues esta providencia, sin ser bastante para atraerlo, allí donde la tasa inflexible no dejaba al vendedor una ganancia razonable, abria mil puertas al fraude y destruia la competencia entre la produccion local y la de otras comarcas. En vano Felipe II subió en 1600 la tasa del trigo desde 14 á 18 rs. y la de la cebada desde 6 á 9 (8): en vano Felipe IV en 1652 prohibió vender estas semillas al fiado, á pagar el más alto precio que tuvieran despues, ordenando que éste fuese el mediano entre aquel y

(1) Hugo Celso, *Repertorio de leyes*. Alcalá 1540, v. *Pan.*—Ley I, t. 19, lib. 7, Nov. Recop.

(2) L. 1, t. 25, lib. 5, Nov. Recop.

(3) Sube el precio de la cebada á 187 maravedises. L. 3, t. 25, lib. 5, Nov. Rec.

(4) Prohibe vender pan á quien no sea panadero de oficio. L. 4, ibid.

(5) Sube la tasa del trigo á 11 rs.

(6) Sube la tasa del trigo á 14 rs. y la de la cebada á 6, agrava la penalidad de los contraventores, simplifica el procedimiento contra ellos y condena los fraudes que por eludir la tasa seguan cometiéndose, mezclando el grano malo con el bueno, mojóndolo, vendiéndolo de noche para ocultar la mala medicion y cometiendo otros abusos.

(7) Despues de haber revocado la pragmática de 1568, la restablece.

(8) L. 12, t. 25, lib. 5, Nov. Recop.

el ínfimo en cuatro mercados consecutivos (1); en vano Carlos II en 1699 aumentó á 28 rs. el trigo y á 13 la cebada, reproduciendo las disposiciones preventivas de la escasez, dictadas por sus antecesores (2); en vano, en fin, se dictaron sobre esta materia multitud de providencias análogas en la primera mitad del siglo xviii: pues ninguna alcanzó á producir la abundancia en medio de la escasez, ni la baratura á pesar de la carestía.

Esta larga série de disposiciones legislativas respondia á la opinion, bastante generalizada en el país, sobre la justicia y la conveniencia de moderar el precio de todas las cosas necesarias para la vida, á fin de que no se enriqueciera el productor en perjuicio de los consumidores. El jurisconsulto Luis Mexia, ántes citado con otro motivo, escribió un extenso tratado en defensa de la tasa del pan que alcanzó gran nombradía (3). Fray Tomás Mercado, defendiendo la misma causa, decia de la pragmática de 1558, que poco ántes de publicar su libro, habia tasado el trigo á 510 maravedises, que era «una de las leyes santísimas y provechosas.» Quería, sin embargo, este autor que las tasas no fueran permanentes y se reformaran con más frecuencia, segun las circunstancias, pero sostenia que la de 1558, arreglada para tiempos estériles, no perjudicaba en ningun caso al labrador. En su concepto, esta ley obligaba en conciencia, aunque el costo del pan excediera á la tasa (4).

D. Melchor de Soria, obispo de Troya, publicó en 1627 un *Tratado de la tasa del pan*, con el propósito de defenderla, contra los que á la sazón la impugnaban, negando que fuese ella causa, como suponian sus adversarios, de la esterilidad presente y de la pobreza de los labradores; trató de justificarla como medio expedito de que estos pudiesen comprar baratas en años escasos, las semillas necesarias para sembrar en los siguientes, y de impedir que los ricos, monopolizando el trigo, lo vendieran caro, y esta carestía originara la de todas las cosas comerciabiles, haciéndose universal el daño (5). Anticipándose á algunos economistas modernos que han visto en el trigo el regulador de todos los precios, opinaba Soria que bastaba tasar el pan para que no fuera necesaria ninguna otra tasa. Mas la del trigo la queria fija y no variable, segun la abundancia de las cosechas, ni regulada

(1) L. 14, *ibid.*

(2) *Aut. acord.* 5 y 6, *ibid.*

(3) *Laconismus seu chilonium pro pragmática qua panis pretium taxatur.* Sevilla, 1569.

(4) *Suma de tratos*, etc., lib. 2, c. 7.

(5) L. 3, c. 2 y 6.

segun el precio comun entre los vendedores, ó por la autoridad local como otros pensaban, sino por la del rey, de una vez para siempre, y sin transigir con aquellos que querian dispensar del cumplimiento de la tasa en años muy estériles (1).

Opiniones tan exageradas, sostenidas con razones tan fútiles, convencieron, sin embargo, á un hombre tan docto y de espíritu tan independiente como el jurisconsulto toledano Jerónimo de Ceballos, si hemos de estar á su confesion propia. Este escritor notable al dar su *Aprobacion* al *Tratado de la tasa del pan*, ántes citado, por comision del Consejo, declaró que siendo contrario á ella se habia apartado de este parecer, movido por la defensa de Soria, la cual habia persuadido tambien á hombres muy doctos. La consideracion que más contribuyó á decidirle fué, como él mismo dice, «que las leyes positivas, para que tengan justificacion, han de mirar al bien público de los pobres, que son más en número que los ricos, » y á la utilidad de los compradores, que son más que los vendedores. » Buena razon, sin duda, para no sacrificar el derecho del consumidor al interés del productor, mas no para inmolár el derecho de los productores, porque son ménos, á la conveniencia de los consumidores, porque son más.

Habia tambien jurisconsultos y moralistas que no osaban defender la tasa como sistema permanente, pero que transigian con ella en circunstancias extraordinarias y lugares determinados. Así Luis de Molina, despues de tratar esta cuestion extensamente, concluia opinando por la libertad de precios; mas haciéndose cargo en otro lugar de una consulta del Consejo, de la cual resultaba que en Portugal, en un año estéril, acaparaban los poderosos nueve décimas partes de la cosecha, no repugnó la tasa parcial donde pudiera temerse mayor carestía (2).

No es, pues, extraño que tales escritos y el ejemplo de los pasados reyes hicieran prevalecer en nuestra legislacion la doctrina favorable á la tasa; pero no sin excepciones graves é interrupciones importantes que respondian á otra opinion tambien antigua y no mal defendida, la cual consideraba injusta y funesta toda intervencion del Estado en el señalamiento de los precios. Ya Felipe II, al señalar los de la pragmática de 1558, declaró libres de tasa los cereales de Astúrias, Galicia, Vizcaya y Guipúzcoa, y los puertos de mar de Andalucía y Murcia porque eran de acarreo, y todos

(1) Cap. 5, 6 y 7.

(2) *De just. et jur.* Disput. 364 y 365.

los que por el mar viniesen. También permitió á los labradores en 1590 vender el pan que fabricaran de sus propias cosechas, utilizando doble ganancia por su doble industria, aunque esta pragmática fué derogada al año siguiente. Felipe III, en 1619, concedió á los labradores, entre otros privilegios, el de vender el trigo de sus cosechas sin sujecion á tasa, y el pan cocido, siempre que lo hicieran registrar previamente por la justicia, á fin de que no pudieran vender más de lo que cogiesen (1). Esta novedad tuvo muchos adversarios, ya porque con ella temian que hubiese dos precios para los cereales, ya porque en todo caso se arrendarian las tierras á pagar en dinero, á fin de que todo el trigo se vendiera sin tasa por los labradores. Los que tal pensaban lograron, pues, la revocacion de este privilegio en 1628; mas las Cortes de 1632 pidieron su restablecimiento, y Felipe IV facultó de nuevo á los labradores para vender su trigo y semillas «al precio que quisieren y pudieren» (2). D. Melchor de Soria, á fuer de buen obispo, reconoció que estas leyes obligaban en conciencia, pero diciendo que no estaban bastante experimentadas y debia aguardarse la resolucion.

Estas disposiciones legales eran fruto de la doctrina de doctos varones que en todos tiempos habian hecho oposicion á la tasa en las Cortes, en los libros y en los consejos de la corona. Las Cortes de 1608 representaron á Felipe III los graves daños que de la tasa venian al reino. A la iniciativa de las Cortes tambien se debió la pragmática de 1619, últimamente citada, así como su restablecimiento en 1632. Ya en el siglo xvi impugnó la tasa por injusta el eminente jurisconsulto y escritor afamado D. Martin de Azpilcueta, aunque no le siguiera en este camino su discípulo Luis Mexia, arriba citado. Mas tuvo otros partidarios que defendieron sus opiniones, así entre los juristas como entre los políticos. Lopez Deza, en su *Gobierno de la agricultura*, publicado en 1618, demostró tambien la injusticia de la tasa, fundándose principalmente en que, si la señalada no cubria el coste del producto, perdía el vendedor, y si lo sobrepujaba se perjudicaria el comprador. Para persuadir además de su inconveniencia, manifestó los fraudes á que daba origen, ya de adulteracion y ya de merma de los granos. El consejo, en su famosa consulta de 1619, verdadera recopilacion de todos los capitulos de agravios que sufría el reino, presentó la tasa como uno de ellos y no de los ménos importantes. Pedro Fernandez Navarrete,

(1) L. 28, t. 21, lib. 4, Nov. Recop.

(2) L. 13, t. 25, lib. 5, Nov. Recop.

que glosando esta consulta, retrató aún más al vivo la decadencia del Estado, de su población y de su riqueza, demostró que la tasa era una de las causas de tanta desdicha. Pero es lo más notable la opinión que el mismo Consejo formaba de sus propios actos en esta materia. Después de tasar el trigo en 1699, y antes de publicar la tasa general que se le había encomendado, representó á Carlos II contra la primera, alegando que tales medios, sin aliviar siempre la falta repentina de pan en la corte, habían sido los más perniciosos, porque habían hecho irreparable el daño: que el mal era preferible á tales remedios, y que aquella tasa había sido ocasionada por el clamor respectivo de los que temieron la falta de pan ó advirtieron sus malas calidades, temor que «turbó de tal suerte á todos los ministros... que al querer dar las más efectivas providencias, eligió su inconsiderada turbación, no su celo, los arbitrios más eficaces que se pueden discurrir, si solicitaran una universal ruina.» Y luego añadía el mismo Consejo: «No han encarecido el pan los labradores, sino los ministros... A ménos de la mitad de los precios hubiera vendido el trigo la más solícita industria» (1). Así confesaba aquel alto cuerpo su propia debilidad cediendo á vulgares preocupaciones de que no participaba; pero sin que su arrepentimiento le librase luego de recaer una y otra vez en la misma falta. Esto explica harto claramente las leyes contrarias á la tasa que, con las favorables á ella, se promulgaron en el siglo xvii y en el xviii. Así vivió esta institución todavía largos años por la fuerza del hábito y los errores del vulgo, pero contra el parecer unánime de todos los hombres ilustrados.

II

OTRAS RESTRICCIONES DEL COMERCIO DE GRANOS.

Más para asegurar la observancia de la tasa y los fines de su establecimiento, eran indispensables otras muchas medidas preventivas, que limitando en distinta forma la contratación de los frutos, cedían en menoscabo de la propiedad. Tales fueron las leyes restrictivas del comercio de cereales que con las tarifas legales completaban esta parte del sistema económico del antiguo régimen. Con los precios tasados, si eran insuficientes, rehusaban vender los labradores sus cosechas; apremiados á hacerlo las escon-

(1) Cita esta consulta Campomanes en su *Respuesta fiscal sobre abolir la tasa*, de que antes he hecho mención.

dian, y así se aumentaba la penuria y subía el precio clandestino de las subsistencias. Ya los romanos, sintiendo estos inconvenientes, nombraron unos ministros llamados *compulsores*, que registraran los graneros y troxes y obligaran á sus dueños á vender todo el grano que les sobrara despues de cubrir sus necesidades. Esto mismo hizo Felipe II en la pragmática de tasa de 1558; pues fundándose en que «por experiencia se ha visto que las personas que tienen el pan, poniéndose tasa, lo esconden y no lo quieren vender, de que resulta falta y estrechez,» ordenó á los corregidores y justicias, que sabiendo por los registros, que debían formarse, quiénes tenían grano, repartieran entre ellos el que debieran vender, para el consumo, apremiándoles á hacerlo luego que hubiese quien quisiera comprarlo con tal objeto, aunque no fuera vecino (1). El mismo monarca tuvo que adoptar despues nuevas providencias sobre esta materia, mandando á las justicias en 1571 que tomaran á los dueños de granos ó harinas todo lo necesario para el consumo público, dejándoles lo preciso para el suyo (2). Felipe IV y Carlos II repitieron por motivos idénticos estas disposiciones, y el último mandó hacer visitas domiciliarias para descubrir el grano que ocultaban los labradores, á fin de evitar la venta forzosa y la tasa (3).

Parece que con el registro previo de las cosechas, la venta forzosa de los granos y la tasa, debía quedar resuelto el problema de la alimentacion segura y barata, que con tanto ahinco estudiaban nuestros legisladores; mas no era así, sin embargo, porque aún quedaban muchos caminos abiertos á la malicia para eludir aquellas prescripciones legales, ó para que no se cumpliera el objeto de su establecimiento. Entendiase que era uno de ellos el comercio y reventa de los cereales, la cual, contribuía además en todo caso, á recargar su precio con la ganancia del comerciante. Así D. Juan I en las córtes de Bribiesca de 1387, prohibió ejercer su oficio en la córte, y en el radio de cinco leguas á los regatones de pan, cereales, legumbres, carnes, pescados y otras viandas (4). Verdad es que Enrique III tuvo que modificar esta disposicion, porque con motivo de ella, segun dijo, se hacian «muchos cohechos y desaguisados» permitiendo comprar para revender el trigo, las legumbres y la carnes (5); pero Enrique IV en 1462 renovó

(1) L. 1, t. 25, lib. 5, Nov. Recop.

(2) L. 4, *ibid.*

(3) Aut. acor. 5 y 6, t. 25 lib. 5, y l. 16, t. 19, lib. 7, Nov. Recop.

(4) L. 1, t. 14, lib. 5, Nov. Recop.

(5) L. 2, *ibid.*

la prohibicion de comprar para revenderlas, las provisiones que vinieran á la corte (1): los Reyes Católicos no permitieron vender el pan y las semillas más que en alhóndigas ú otros lugares públicos, señalando á los panaderos las puertas y calles por donde habian de entrar en la corte (2); Carlos I en 1530 reprodujo la prohibicion de Enrique IV en cuanto á los cereales, exceptuando tan sólo á los recueros, que llevaban los granos de unos á otros lugares, con tal de que no los almacenaran (3); y Felipe IV prohibió á los tratantes comprar en los caminos ó en las calles los comestibles que vinieran á la corte (4), sin contar otras prohibiciones semejantes de otros monarcas.

Atribuíase á veces la escasez de los abastos á que los vecinos de unos pueblos acudian á otros á proveerse de ellos, y de aqui las ordenanzas municipales que prohibian sacar pan y viandas de muchos lugares, y que tan justamente derogó Enrique II (5). Y como la tasa no permitía la abundante provision de los mercados públicos, fué menester que Carlos I en 1528 otorgara preferencia y tanteo á las alhóndigas y comunes, que concurrieran con particulares á la compra anticipada de los granos (6). Todavía este privilegio no hubo de estimarse suficiente para su objeto, y así el mismo emperador, en 1548, autorizó á los pueblos, á tomar para su abasto, á los arrendadores de cereales la mitad del trigo, cebada, centeno y avena que recogieran, por el precio que les hubiera costado (7). Todas estas cortapisas del libre ejercicio del dominio, aunque dictadas con fin justo y laudable, no solamente no remediaban el mal, sino que daban origen á graves abusos; y convencido de ello el Consejo, dictó un auto acordado en 1699, mandando que no se impidiera á los forasteros comprar trigo, con pretexto de no estar abastecido el pueblo, y que sin licencia del mismo Consejo, que habia de darla siempre con conocimiento de causa, no se permitiera tantear el comprado (8).

Los adversarios de la tasa lo eran generalmente tambien de estas leyes restrictivas del comercio de granos, puesto que tenian inconvenientes aná-

(1) L. 6, t. 14, lib. 5, Nov. Recop.

(2) L. 2, t. 17, lib. 7, *ibid.*

(3) L. 19, t. 11, lib. 5, *ibid.*

(4) Aut. acor. 2, t. 14, lib. 5.

(5) L. 1, t. 17, lib. 7, Nov. Recop.

(6) L. 18, t. 11, lib. 5, *ibid.*

(7) L. 21, *ibid.*

(8) Aut. 7, t. 25, lib. 5.

logos y contra una y otras militaban las mismas razones. D. Miguel Zavala en su *Representacion á Felipe V para aumento del real Erario*, que corre impresa, hizo ver cómo el registro de los granos ordenado por las leyes anteriormente citadas, daba lugar á su ocultacion, y por lo tanto á que se publicara un falso resultado de la cosecha, muy inferior al verdadero; y cómo juzgándose ésta insuficiente, el temor infundado de una carestía futura aumentaba la demanda de granos y el precio de ellos, dándose así ocasion á una tasa desproporcionada. La Junta general de comercio y moneda, informando en el expediente de ley agraria, impugnó la tasa de los granos y las leyes que prohibian comprarlos para revenderlos con menoscabo de la libertad del tráfico y defendió la de exportarlos del reino cuando excedieran de cierto precio (1).

Instruyóse al fin en 1762 expediente en el Consejo sobre autorizar el comercio de granos y el establecimiento de depósitos de algunos de ellos y sobre la abolicion de la tasa, con motivo de solicitarla el alcalde mayor de Don Benito. Oidos entonces los fiscales, presentó Campomanes un informe lleno, como todos los suyos, de erudicion y doctrina, segun la profesaban los hombres más ilustrados de su época, en el cual calificando de tumultuarias y propias tan sólo para salir del dia, las providencias dictadas sobre este asunto desde principios del siglo XVIII, demostró que la tasa no traia abundancia en tiempo de carestía, ni era compatible con la subsistencia del labrador y el fomento de la agricultura; que el libre comercio era el medio más seguro de contener el precio de los granos en tiempo de carestía, y que en él debia permitirse la introduccion, así como en el de abundancia, autorizarse la exportacion de granos, porque de este modo se evitarian los ínfimos precios, que arruinan al labrador, y los subidos, que dañan al consumo.

Conforme con estas conclusiones fué la resolucion de Carlos III, que es á quien cupo la gloria de dar el primer paso para abolir la tasa de los granos, permitiendo en 1765 su libre comercio en lo interior y prohibiendo todo monopolio. Siguiendo tambien el dictámen de Campomanes, autorizó aquel monarca á los comerciantes de granos, con tal que sus almacenes fueran públicos y socorrieran á los pueblos de la comarca cuando fuese necesario, dándoles su grano á los precios corrientes, y permitió la extraccion cuando el precio bajase á cierto limite, y la introduccion cuando lo exce-

(1) Exped. n. 290.



diese (1). Así el derecho de propiedad tantas veces violado con las leyes anteriores, recibió en ésta satisfaccion cumplida.

No quedó, sin embargo, tan sólidamente establecida esta libertad del tráfico, que dejara de sufrir despues graves contrariedades. El mismo Carlos III ordenó en 1768 que se sujetaran á precio fijo en las ventas al por-menor, el pan cocido, las carnes y otros artículos que adeudaban contribucion de millones, sin perjuicio de que conservaran la libertad en las ventas por mayor (2), y suspendió en 1769 la facultad de extraer cereales (3). A instancia del ayuntamiento de Madrid, que alegaba haber notable exceso en los precios de los géneros, que habian quedado libres de postura, el mismo monarca la restableció respecto á ellos, en 1772. Por último, Carlos IV, dando un paso más en la senda del retroceso, abierta ya por su padre y alegando por fundamento no haberse establecido los almacenes públicos de granos con sus libros y demás formalidades, ó porque no habia tales comerciantes, ó porque se hacia clandestinamente este comercio, derogó en 1799 la pragmática de 1765, en cuanto autorizaba aquella especulacion y renovó las antiguas prohibiciones de *atravesar* granos ántes de su llegada al mercado y de revenderlos. Algunos años despues, en 1802, cediendo el Consejo al mismo espíritu que revelaba aquella pragmática, declaró que por entonces y hasta que otra cosa no se decidiese, podrian ser obligados los cosecheros y dueños de trigo á vender para el abasto público, por los precios corrientes, el grano que les sobrase á ellos (4).

Las Córtes de Cádiz fueron las que en este punto como en tantos otros acabaron la reforma empezada por Carlos III, declarando en el decreto de 8 de Junio de 1813, que ningun fruto de la tierra, ni los ganados, ni sus esquilmos, ni los productos de la caza y pesca, ni las obras del trabajo, estarían sujetas á tasa ni postura; que todo se podría vender y revender á precio libre, y que nadie tendría preferencia ni derecho de tanteo en las compras. En la misma ley se declaró libre el tráfico interior de granos y de los demás productos de la tierra ó de la industria, y que todos podian dedicarse á él y almacenar sus acopios, sin necesidad de matricularse ni llevar libros, ni recoger testimonio de las compras. Con esto desaparecieron verdaderamente todas las restricciones del libre ejercicio del domi-

(1) L. 19, t. 19, lib. 7. Nov. ecop.

(2) L. 16, *ibid.*

(3) Not. 13, t. 19, lib. 7.

(4) L. 19, t. 17 y not. 15 de este tít. lib. 7.

nio en los frutos inmediatos de la tierra, y se eximió la propiedad de las servidumbres y menoscabos con que estaba gravada por razon de ellas.

CAPÍTULO VIII.

De los censos enfiteúticos y de los foros.

I.

DE LOS CENSOS ENFITEÚTICOS.

Como uno de los modos más naturales de utilizar la tierra, sea dividir sus dominio, la enfiteusis ha debido ser una de las modificaciones más antiguas y más importantes de la propiedad inmueble. Pero atendida la naturaleza y objeto de esta institucion, desde luego se comprende que no pudo tener principio hasta que la tierra tuvo por sí misma un valor, como mero instrumento de produccion é independientemente de sus frutos espontáneos y de todo trabajo empleado ó que se empleara en ella. Mientras que hubo tierras yermas á disposicion del primer ocupante, que quisiera abrirlas y cultivarlas, nadie tomaria en enfiteusis las ajenas, pagando por ellas un cánon y sujetándose á las demás condiciones de este contrato. Pero cuando empezaron á escasear las tierras vacantes, por lo ménos á distancia proporcionada de las poblaciones, ya los dueños de vastos terrenos eriales, no lejanos de ellas, pudieron utilizarlos, dándolos á colonos, que rompiéndolos y explotándolos por su cuenta, obtuvieran un beneficio superior á la remuneracion de su trabajo y al interés del capital invertido, porque este exceso podia aplicarse al que habia contribuido á crearlo con aquel esencial instrumento de produccion. No pagar nada ó pagar algo por el uso de la tierra, equivale á haber tierras gratuitas ó no haberlas, sino en condiciones que hagan su cultivo más costoso que el de las que puedan obtenerse por precio.

Así nace la renta territorial, pero atravesando en su desenvolvimiento histórico grados ó periodos diferentes, segun el estado de la sociedad, el desarrollo de la riqueza y otras especiales circunstancias. Cuando habia tierras vacantes en abundancia y muchas tambien eriales en poder de

pocos y grandes propietarios que no podían utilizarlas por sí mismos, solían estos darlas á colonos que las rompieran y cultivarían por su cuenta y gratuitamente ó sin otras obligaciones que las ordinarias de obediencia y vasallaje personal, que ya tenían contraídas por su nacimiento. Ningun valor *en cambio* tenían esas tierras: el dueño no podía dárselo: si ofreciéndolas generosamente á sus vasallos lograba asegurar su sumision, y aumentar la riqueza de la comarca, tanto él como los colonos reportaban utilidad de este contrato. De aquí dos clases de enfiteusis que llamaré impropias, las casi gratuitas por las cuales no se pagaba pension alguna, y en que el propietario sólo se reservaba la fátiga y el laudemio; y las gratuitas en que el enfiteuta sólo estaba obligado á la fátiga y al reconocimiento del dominio directo. Cuando por hallarse más asegurada la poblacion del lugar, ó ser ménos las tierras cultivables, ó haber mayor concurrencia de colonos que las solicitasen, fué posible exigir alguna renta, si no como remuneracion de un valor adquirido, como agasajo y reconocimiento de un derecho ajeno reservado, se constituyó la enfiteusis propia, perpétua ó temporal, con un cánón ligero y las demás cargas de este contrato. Pero al escasear las tierras vacantes, estando solicitadas las eriales de propiedad particular y en disposicion de producir fruto desde luego, ó se substituyó á la enfiteusis el censo reservativo de pension correspondiente al valor de la tierra, ó se prefirió el contrato de arrendamiento, que es la última y más perfecta expresion de la renta territorial. La enfiteusis impropia es la que corresponde al órden económico de las poblaciones nacientes que luchan por su existencia: la propia pertenece á las ya establecidas que procuran asegurarse, desenvolverse y fomentar su riqueza; pero cuando adelantada ya la civilizacion, adquieren todas las tierras un valor conocido y proporcionado á su fruto, no responde ya la enfiteusis á ninguna necesidad social y desaparece de la práctica, aunque subsista en las leyes. Hé aquí ahora cómo la historia viene á comprobar esta teoría.

Los romanos acostumbraban desde muy antiguo, repartir las tierras conquistadas entre soldados y plebeyos, las cuales se llamaban por este motivo *vectigales* y *enfiteúticas* (1). Se generalizó más el uso de estos repartimientos cuando aumentados los consumos, fué necesario extender el cultivo, y creciendo la poblacion emancipada ó libre, fué menester darle ocupacion, entregándole tierras eriales para su beneficio. Durante mucho tiempo fué éste un contrato innominado, cuya calificacion disputaron los

(1) Dig. *Si ager vectigalis*.—Cicer. Philip. 5, y Epist. famil. lib. 2, ep. 19.

jurisconsultos, llamándole unos venta y otros arrendamiento, hasta que el emperador Zenon en 474, le dió por ley el nombre griego de *emphiteusis*, que significa literalmente *insercion* ó *plantacion* (1). El mismo emperador sujetó este contrato á las convenciones particulares, estableciendo, sin embargo, algunas reglas á las que en su defecto, habian de someterse los contrayentes. Hallábase, pues, entonces la enfiteusis en su segundo periodo, ó sea en el de verdadero censo enfitéutico, destinado á promover el rompimiento y cultivo de las tierras eriales, que aún subsistian en grande extension en el imperio de Oriente.

Las leyes de Partida reprodujeron en este punto las romanas, resolviendo de paso algunas dificultades que su ejecucion ofrecia, mas no fueron ellas las que introdujeron en España la enfiteusis, pues que ésta existia sustancialmente desde mucho ántes que rigiera en Castilla el código alfonsino. La verdadera enfiteusis de España fué el establecimiento de solariego, que con diversos nombres segun los reinos, y distintas formas segun los tiempos, corresponde á los diferentes periodos del desenvolvimiento histórico de la renta territorial. Recuerde el lector que uno de los modos más usados en España de utilizar las tierras, era darlas á collazos que las poblaran y cultivaran, á veces sin pagar por ellas renta ni infurcion alguna, y prestando tan sólo la fidelidad y los servicios de vasallaje; á veces pagando un censo módico en reconocimiento del dominio directo. Ninguna diferencia sustancial existia entre el censo solariego y el enfitéutico, por más que el sutil Velazquez Avedaño procurara encontrarla. El primero arranca por lo ménos desde la Reconquista, sino es que ya era algo parecida á él la propiedad que los romanos tributarios conservaron en sus tierras despues de la invasion de los visigodos: siguió luego rigiéndose por las costumbres y fueros locales, y puestas en ejecucion las Partidas, solamente á falta de convencion, de fuero y de ley comprendida en el mismo código, acerca de los solariegos, eran aplicables las relativas á la enfiteusis, tomadas del derecho romano. Pero de todos modos, solian ser en Castilla las condiciones generales de estos censos, además del cánón módico, la fádiga de dos meses, el laudemio de la cincuentena en caso de venta, el comiso, por falta de pago en tres ó dos años, la perpetuidad del contrato y su dissolution al perecer ó hacerse infructifera la finca censida.

El mismo origen y objeto tuvieron en Aragon los *treudos*. Desde el siglo XII por lo ménos, acostumbró allí la Iglesia dar en treudo ó censo tem-

(1) *Adeo autem*. 3. Inst. De loc. et cond. y l. 1, De jur. emphit. Cod.

poral ó perpétuo, los vastos terrenos de conquista que adquiría de los fieles y no podía explotar por sí misma. Sus condiciones generales diferían, sin embargo, de las de los censos solariegos de Castilla. Así el poseedor de la finca *entrendada* podía venderla sin fádiga ni laudemio, á no ser que se hubieran estipulado expresamente, por no estimarse inherentes al contrato estas circunstancias, como en la enfiteusis (1). Pero cuando se estipulaba laudemio, solía consistir en la décima parte del precio. También se convenía muchas veces en que el dador del treudo pudiera tantear la finca por una décima parte ménos de su valor en cualquier tiempo. La pension no era tampoco ni aún en los orígenes de la institucion, tan módica como en Castilla, pues solía equivaler al 7 ú 8 por 100 del precio de la cosa (2). También se hacia frecuentemente este contrato con carta de gracia ó luicion, que en Castilla se llama retroventa. La carta de gracia podía ser absoluta ó condicional: en el primer caso, nunca se perdía el derecho de redimir la finca censida: en el segundo, se perdía cuando dejaba de cumplirse cualquiera de las condiciones convenidas (3).

En Navarra se daban las heredades *en pecha*, que es á lo que su fuero llama «fundar collazo en heredad libre;» y este era allí el censo solariego ó enfiteútico. No debe, sin embargo, confundirse esta pecha estipulada entre el dueño de la tierra y el villano á quien la entregaba para poblarla, con las otras pechas más personales que reales ó de carácter mixto, que traian origen del estado de servidumbre. La pecha en general no se debía por los villanos realengos ó abadengos cuando se perdía la cosecha. El solariego estaba obligado á edificar casa cuando recibía para ello solar de su señor. Si abandonaba la heredad por excusar la pecha y era aprehendido por su señor, podía redimir su libertad, pagando otra pecha por su persona. Todos los años podía exigirse de estos pecheros que apearan sus heredades, y aún de los hidalgos, si contra lo prescrito en las leyes, llegaran á adquirirlas. Para la cobranza de las pechas reales y los censos, no sólo podían sacarse prendas vivas de la casa ó heredad, sino cerrar, clavar ó derribar sus puertas. La falta de pago producía á los dos años el comiso y la disolucion definitiva del contrato (4).

(1) Molino, Repertor. v. *Tributum*.

(2) Asso, *Histor. de la economia política en Aragon*. Zarag. 1798, c. 4.

(3) Molino, v. *Tributum*.

(4) Yanguas, *Diccionario de los fueros y leyes de Navarra*; p. *Solariego; censo y pecha*.

Los censos enfiteúticos de Cataluña tuvieron origen, como los feudos, en aquellos primeros repartimientos de tierras que se hicieron bajo la dominacion y por orden de Carlo Magno y de Ludovico Pio. Aquellos primeros adquirentes de las tierras las repartieron á su vez á beneficiarios libres y á colonos siervos ó libertos, resultando de aquí con el tiempo, por una parte enfiteusis regulares y por otra tierras de *remensa*, cuyos poseedores, sujetos á la merced de sus amos, gimieron en dura servidumbre, hasta la abolicion de los *malos usos*. Entonces vinieron á igualarse hasta cierto punto las tierras de estos vasallos con las beneficiarias ó feudales propias, resultando de esta confusion que muchas de unas y de otras que ántes no pagaban cánon, quedaron con él gravadas, y muchas tambien que continuaron siendo censatarías, no lo pagaban aunque estuvieran sujetas á otras gabelas. Tambien disfrutaban los censatarios el beneficio de que por falta de pago no cayera en comiso la finca, sino que quedaran obligados á pagar el duplo de lo debido. El comiso sólo procedia cuando se negaba el dominio directo del señor ó cuando se vendia como alodial el predio acensuado. La fádiga era sólo de treinta dias, pero en cambio, y tal vez para suplir el cánon, era el laudemio de cuatro sueldos y cuatro dineros por libra, donde no habia otra costumbre local diferente, y tenia el señor derecho de tanteo sobre los frutos del predio enfiteútico. El enfiteuta tenia tambien á su favor el mismo derecho de tanteo en la enajenacion del dominio directo, y no pagaba laudemio en la trasmision del útil por testamento ó donacion entre vivos (1).

De un modo semejante nació en Valencia el censo enfiteútico despues de la conquista de D. Jaime. Ya se ha visto en el capítulo 1.º del libro VII cómo para que no cesara el cultivo de las tierras ocupadas por los vencedores, fué menester darlas otra vez á los moros vencidos, á título de enfiteusis, con pension cierta en especie ó dinero, de lo cual resultó ser censataria la mayor parte de la propiedad territorial. Tambien se ha visto en capítulo 2.º del mismo libro, cómo al principio era condicion expresa de estos enfiteutas, la de residir forzosamente en sus heredades, so pena de confiscacion de todos sus bienes y aún de esclavitud, y de qué manera fué despues modificándose esta durisima condicion, hasta quedar reducida, como en Castilla, á la de no partirse del lugar sin vender la heredad censida á otro del mismo estado de vasallaje. Todos estos censos se entendian constituidos, como en Cataluña, con fádiga de 30 dias, á no ha-

(1) *Cancer, Var. Resolut.* part. 1.ª, c. 11.

berse estipulado otra cosa, pero el luismo ó laudemio era de la décima parte del precio de la venta, y de la vigésima del capital en la hipoteca; y la finca caía por la ley en comiso, si dejaban de pagarse cuatro años los réditos. Estos tambien crecian ó se aminoraban cuando por aluvion se acrecentaba ó se disminuía la heredad (1).

En estos ejemplos se ven claramente los diversos estados de la renta territorial. En su origen no la produce propiamente la trasmision del dominio útil con reserva del directo, porque si bien proporciona utilidades eventuales, por razon de laudemios, multas, corveas y otros arbitrios, el principal objeto de este contrato era constituir el vínculo de vasallaje, fuente inmediata de aquellos y de otros derechos. Estos emolumentos, por lo mismo que eran ó arbitrarios ó casuales, no constituian la participacion regular y proporcionada en los frutos ordinarios de la tierra, despues de cubiertos los gastos de su explotacion, que es la verdadera renta territorial. Los establecimientos de solariego en Castilla, Navarra, Aragon y Cataluña ofrecen ejemplos de enfiteusis con renta ó sin ella: las cartas-pueblas y los fueros que reducian á cánon cierto y periódico las prestaciones ántes arbitrarias de los poseedores de tierras, convertian en heredades enfiteúticas las que no tenian propiamente tal carácter y constituian una verdadera renta territorial. De lo cual se infiere que el suelo no la podia producir cuando se separó su dominio útil del directo, bien porque en realidad no quedara ningun producto sobrante, cubiertos los gastos de explotacion, ó bien porque el que quedase fuera necesario emplearlo en retribuir los servicios personales, que se exigian del infiteuta, pero que aumentadas con el trabajo las fuerzas productoras de la tierra, y mejor organizada la sociedad, se multiplicó el fruto, se redujeron y regularizaron los servicios personales, y quedó aún despues de satisfacerlos, algun producto excedente. Esto sucedió desde luego en Valencia, donde se repartieron más tierras cultivadas que yermas, y de abundantes y seguros frutos. Las heredades arrancadas á los sarracenos perfectamente labradas, producian, desde luego una crecida renta, y así al devolvérselas en dominio útil para que siguieran cultivándolas, fué con la condicion de pagar por ellas pension cierta, y no mínima, no tan sólo en testimonio del dominio directo reservado, como en la enfiteusis, sino proporcionada al valor y productos de la finca, como en el censo reservativo. Estas diferencias entre los censos enfiteúticos de Va-

(1) Tarazona, *Institucions dels Furs de Valencia*. Valencia 1580, tít. 25, lib. 3.

lencia y los de otros reinos de España, provenian principalmente de lo que la sociedad habia adelantado en los cuatro siglos transcurridos desde las conquistas de los monarcas de Astúrias, Aragon y Cataluña, á las primeras del rey D. Jaime.

II.

DE LOS FOROS DE GALICIA Y ASTURIAS.

En casi todas las provincias prevalecieron desde muy antiguo las enfiteusis perpétuas sobre las temporales, de lo cual, y de no practicarse generalmente el comiso por falta de pago de las pensiones, y de ser irredimibles los más de estos censos, y de haberse considerado como imprescriptible el derecho á exigir las pensiones devengadas y no satisfechas durante treinta años, resultó que los señores directos perdieron la esperanza de recobrar la plenitud de su dominio, considerándose, más bien que dueños, meros pensionistas, cuyo derecho estaba asegurado con hipoteca. A su vez, los enfiteutas fueron haciéndose dueños casi absolutos de las heredades que poseian, porque aunque no lograran, como muchos, hacer olvidar la carga que pesaba sobre ellos, ésta se iba aligerando, bien por consistir en dinero, cuyo valor bajaba constantemente, ó bien por consistir en frutos y haberse aumentado los de la tierra por efecto del mayor capital y del más prolijo trabajo invertidos en ellas. Así el enfiteuta iba haciéndose cada vez más dueño á medida que crecia la participacion en los frutos de la tierra, y el llamado señor directo lo era cada vez ménos, segun iba menguando su participacion absoluta ó relativa en los mismos frutos. Mas en Galicia y en parte de Astúrias, prevaleciendo la enfiteusis temporal sobre la perpétua, nacieron los foros, y así aquellos fenómenos económicos y jurídicos no se produjeron con la misma regularidad, ni tuvieron desde luego las mismas consecuencias. Hé aqui una interesante y poco trillada historia local, que derrama mucha luz sobre la general de la propiedad en toda España. La historia de los foros de Galicia es sustancialmente la de las tierras censatarias en todas las provincias de España.

En Galicia se llamó foro el mismo contrato que, en otras partes, y con el nombre de censo solariego, treudo ó enfiteusis, sirvió para poner en cultivo los terrenos incultos, transfiriendo su dominio útil al que hubiera de hacerlo, pero no perpétuamente, sino á la antigua moda feudal, por tres ó ménos vidas de reyes ó de foristas. Para mayor semejanza con los feudos

habia foros *de pacto* y *providencia*, los cuales eran indivisibles é inalienables y se trasmitian de padres á hijos del modo prescrito en la carta foral; y los habia tambien alienables, aunque no sin consentimiento ó aviso prévio, por lo ménos, al señor directo, al cual se reservaba derecho de tanteo, ni sin pago de laudemio. En unos y en otros procedia el comiso por falta de pago de la pension, del mismo modo que en la enfiteusis castellana, y solia elevarse el laudemio, si no por costumbre, por contrato, hasta el 10 por 100 del precio, como en Valencia. Mas concluido el tiempo del foro debia volver la heredad al señor directo con las mejoras hechas en ella, durante las dos ó tres generaciones que se habia hallado fuera de su poder, no siendo obligatoria la renovacion del contrato por más que fuese frecuente en cuanto á las tierras de las iglesias y grandes propietarios.

Estos contratos fueron en su tiempo muy favorables á los foristas, á la agricultura y al fomento general de la riqueza, porque dieron vida á la propiedad amortizada, mejoraron el estado precario de los colonos, elevándolos al de casi dueños, contribuyeron á la formacion y al incremento de la clase media y convirtieron en granjas frondosas los terrenos más incultos.

Hasta la inalienabilidad de los foros *de pacto* y *providencia* fué conveniente mientras hubo tierras vacantes, porque obligó á extender á ellas la labranza ántes que á subir con la competencia el precio de las cultivadas. Creció así tanto la afición á este contrato, y se facilitó de tal modo su uso con la minoracion sucesiva de las pensiones, relativamente al producto de la tierra aforada, que se dió lugar á los subforos y á los foros de tercero y cuarto grado, por cuyo medio, el forista lograba una pension para sí, además de la principal, y nuevos laudemios que percibia sin trabajo alguno. Esto mismo hacia á su vez el subforista cuando, aumentado el producto de la finca, podia obtener de ella una nueva pension, quedando, sin embargo, al que la cultivara, una utilidad razonable. Acostumbraban tambien muchos foristas, cuando se atrasaban en el pago de las pensiones, imponer los caidos como censo frumentario, sobre el mismo dominio útil que poseian. De este modo llegaban á pesar sobre una finca varios dominios directos y pensiones y sub-pensiones diversas, siendo el único correctivo á tales complicaciones, por una parte, la amortizacion, que ponia límite á las cargas de la propiedad, y por otra, la reversion periódica que, como el jubileo cincuentenario de los hebreos, de tiempo en tiempo liquidaba todas las deudas y liberaba todas las propiedades.

Pero la reversion á los señores directos de las heredades aforadas intro-

ducia una desastrosa perturbacion en los derechos creados sobre los foros, tanto más sensible cuanto más se habia mejorado la finca, dando lugar al establecimiento de mayor número de aquellos derechos. Porque con la reversion perdía, como he dicho, el colono todos los capitales invertidos en mejoras, se extinguían los subforos y desaparecían los censos y gravámenes del dominio útil, á fin de que el dueño fuera reintegrado en la plenitud de sus derechos, sin carga ni obligacion alguna, que no hubiese libremente aceptado. Así reintegrado el propietario, no solia resistirse á aforar de nuevo su heredad, mas no ya por la misma renta en que tres generaciones ántes se aforara, sino por otra superior, más en armonía con el subido precio de las tierras; y el ejercicio de este derecho, siendo un medio perfecto y legítimo de acrecentar los señores sus rentas, en proporcion al aumento de las necesidades sociales y al mayor valor de todas las cosas, tentaba su codicia demasiado vivamente para que les arrastrara el ejemplo de la iglesia y de algunos grandes propietarios, bastante ricos para renunciar por munificencia, al derecho de desposeer á sus colonos y de renovar sus foros con mayor beneficio. Pero al lado de estos estímulos poderosos á la reversion, por parte del señor directo, los opuestos del colono y de los demás partícipes en las utilidades de la heredad aforada, no podían ser más apremiantes, sobre todo desde que no abundaron de tierras, lo cual sucedió más pronto en Galicia que en otras provincias, porque allí, como en otro lugar he dicho, no habia montes comunes, siendo todos por lo general de señorío privado. Era triste, en verdad, la suerte del forero, obligado á abandonar la tierra en que habia nacido y de la que se habian alimentado sus mayores y á perder los capitales que él ó aquellos habian invertido en mejorarla, sin tener quizá otra con qué sustituirla, ó á sufrir la ley inexorable del dueño que le forzaba á pagar una renta que no permitian tal vez los productos de la finca ó que, por lo ménos, habia de privarle de una buena parte de las utilidades con que contara hasta entonces. De aquí graves conflictos entre los señores que reclamaban sus heredades libres y los colonos que pugnanaban por retenerlas, apoyados por la multitud de partícipes dependientes de su derecho. Así se levantaron frecuentemente contra los señores los foristas, los subforistas, los censualistas y acreedores, y como eran los más numerosos y más osados y temibles, al fin vencieron.

Esta multitud de interesados en la perpetuidad de los foros no hallaba otro remedio á tanto daño que el radicalísimo de declarar forzosa la renovacion de tales contratos, y así desde principios del siglo xvii se empezó á solicitar, en nombre de Galicia, una ley que impusiera tan grave restriccion á las

facultades del dominio directo, ó por mejor decir, que lo anulara en cuanto á la libre disposición de las cosas foreras. D. Francisco Salgado de Somoza, jurisconsulto gallego, autor famoso de obras notables de jurisprudencia civil y canónica, presentó á Felipe III una memoria con tal objeto, bajo el título de *Patrocinium pro patria*, que no ha llegado á ver la luz pública. Los diputados de Galicia, reunidos en 1629 para acordar sobre cierto servicio pedido por el rey, encargaron á su delegado en la corte D. José Gonzalez, que pidiera la ley de renovación foral obligatoria y la impetración de un breve para hacerla extensiva á la iglesia. La Junta del reino reiteró este encargo en 1659 al licenciado Gonzalo Sanchez Boado, pero añadiendo una circunstancia importante, que por lo visto no se habia tenido presente en las gestiones anteriores: tal era la de que se pudiese en las renovaciones aumentar la pensión foral, siempre que no excediera de la octava parte del fruto. Creia la Junta que esto era conveniente para justificar su súplica «y para que quedara proveído el señor directo y no destituido el dueño del foro.» No habiéndose logrado, ni aún con esta grave limitación, la ley solicitada, el marqués de Mos, diputado del reino, la volvió á impetrar de Carlos II, presentando al efecto una nueva memoria, suscrita por seis letrados, pero sin que esta gestión produjera mejor resultado que las precedentes, salvo el de contener un tanto las reversiones, que iban siendo cada vez más frecuentes (1).

Con esto hubieron de suspender sus gestiones los patronos de los foristas, hasta que á mediados del último siglo tuvieron la pretensión de desposeerlos algunos propietarios, cuyos foros se extinguían entonces por el trascurso del tiempo (ó de las *voces*, segun se dice en el país) estipulado en su establecimiento. Congregado á la sazón el reino para deliberar sobre el servicio de millones, reprodujo en 1759 sus anteriores instancias acerca de este asunto. Carlos III las pasó al Consejo, el cual pidió informe á las Audiencias de Galicia y Asturias, oyó á su propio fiscal y dió traslado á las órdenes de San Benito y San Bernardo, que se habian mostrado parte en el expediente. Mas como entretanto continuaran las demandas de despojo contra los foristas, el diputado general del reino, marqués de Bosque-Floredo solicitó del Consejo en 1763, que mientras no se resolviera el expediente

(1) Estas noticias y antecedentes de la real provision que mantuvo el estado posesorio de los foros, se hallan en unos excelentes artículos que publicó en el *Boletín judicial de Galicia* en 1860, D. José Castro Bolaño, con el título de *Cargas perpétuas que afectan á la propiedad territorial de Galicia*.

gubernativo, suspendiesen los tribunales todo procedimiento de despojo y repusieran los foros al estado que tenian en 1759. El consejo temeroso quizá de mayores conflictos, y resuelto sin duda á proponer en su día la renovacion forzosa solicitada, dictó la real provision de 1763 mandando á la Audiencia, juzgados y tribunales de Galicia suspender los pleitos pendientes sobre foros, y no permitir el despojo de ningun forista que pagara la pension acostumbrada, mientras que no se resolviera el indicado expediente. Mas éste tardaba en resolverse y saltaba á la vista la injusticia de no permitir alteracion alguna en las pensiones, concluidas las *voces*, cuando valian mucho más las tierras y habia subido el precio de todas las cosas. Estas consideraciones hubieron de originar una real provision de 1766 y una real orden de 1767, mandando regular y tasar, en caso de discordia entre los interesados, las pensiones de los foros que continuaran, conforme á lo resuelto en 1763. Pero tampoco hubieron de aceptar este temperamento los patronos de los foristas, y aprovechando quizá el momento en que predominaban en los Consejos de la corona los adversarios más decididos de la tasa oficial de precios, lograron en 1768 la derogacion de las disposiciones recientes que prescribian la de las pensiones forales. En su consecuencia quedó restablecida plenamente la real provision de 1763, pero no sin que su ejecucion diese lugar á dudas, que durante algun tiempo hicieron vacilar la jurisprudencia en punto á admitir demandas relativas á foros. Fomentaron tambien estas dudas una real provision de 1776 que mandaba entender la prohibicion de despojar á los foristas, sin perjuicio de oír al señor directo sobre la nulidad del contrato, y una resolucion del Consejo de 1784, desestimando la pretension de que se decidiera cierta demanda pendiente en la Audiencia de Galicia sobre nulidad de un foro. Pero al fin, vino á resolver estas dificultades otra orden del Consejo dirigida á la misma Audiencia en 1785, prohibiendo admitir demandas sobre foros verdaderos ó presuntos, ó sobre despojo de los foristas; á cuya regla absoluta puso luego una excepcion la real cédula de 1789, que mandó admitir y sustanciar las demandas de nulidad de foros ó subforos, que se fundaran en falta de derecho para constituirlos, ó en lesion enormísima, pero advirtiendo que no se ejecutase la sentencia que recayese, sin dar cuenta al Consejo y esperar su resolucion. Desde entonces la Audiencia referida y la Chancilleria de Valladolid no volvieron á admitir, sino en los raros casos exceptuados, ninguna demanda cuyo objeto ó cuyo resultado fuese alterar el estado actual de posesion de los foros.

De este modo quedó consumada una grande y trascendental expropia-

cion sin indemnizacion prévia ni suficiente, aunque por causa pública, fundada en la perturbacion que produciria el despojo de los foristas. Sin embargo, aquella providencia, por más que fuese injusta y atentatoria á los derechos de la propiedad, no fué en realidad tan violenta ni tan injustificable como á primera vista parece. Si los dueños directos se hubiesen hallado en la quieta y pacífica posesion de recobrar el dominio útil de sus fincas al terminar los foros, dándolas de nuevo á quien mejor se las pagase, de seguro no habrian sufrido semejante despojo. Pero el hecho era que la mayor parte de los foristas solian perpetuarse en el disfrute de sus heredades por medio de renovaciones periódicas, que no negaban los dueños, y esta posesion tan continuada y consentida, quebrantaba, no el derecho, pero sí el vigor del derecho de estos, al paso que daba cierto color de derecho al hecho de aquellos. Algunos propietarios pugnaban por ser reintegrados en los bienes que con el trascurso del tiempo estipulado dejaran de ser forales, y esto bastaba para dar á conocer la inmensa perturbacion que producirian tales reversiones, si las solicitaran todos los que tenían derecho á ellas; pero la mayor parte del dominio territorial directo de Galicia pertenecía á la iglesia, á mayorazgos, ó manos muertas de todas especies, que tenían generalmente la costumbre de renovar sus foros, y por lo tanto la providencia de 1763, sin dejar de ser una violacion manifiesta del derecho de propiedad, no produjo una violenta y repentina perturbacion material en el estado posesorio, ántes bien confirmó el que existia de hecho, dejando en suspenso indefinidamente las acciones que pudieran alterarlo. La resolucion fué sin embargo interina hasta que se dictara la definitiva en el expediente sobre renovacion de foros mandado instruir, y esto hubo de aquietar al pronto á algunos interesados, á quienes perjudicaba; pero ha pasado más de un siglo y el expediente está sin resolverse todavía. Ni se resolverá ya, porque el tiempo con su autoridad misteriosa ha hecho á los foristas casi propietarios, del mismo modo que en la antigüedad daba al fin el dominio de las tierras á los que con mejores ó peores títulos se mantenian en su posesion largos años.

Mas la perpetuidad otorgada á los foristas en 1763 produjo tambien otras consecuencias muy graves en la organizacion de la propiedad territorial de Galicia. Seguros ya los foristas de no ser despojados, creció extraordinariamente el número de foros, porque hubo más labradores que los solicitaran, se constituyeron desde entonces multitud de sub-foros, y los vinculistas, tan numerosos en Galicia, se dieron á aforar sus bienes por pensiones exiguas, pero con gratificaciones de presente en dinero muy

considerables, que ellos solos aprovechaban en perjuicio de sus sucesores inmediatos, á quienes dejaban harto menguadas sus rentas vinculares. La misma seguridad sirvió de estímulo á los foristas para dividir y subdividir por herencias ó enajenaciones, las tierras forales, dejando de este modo al señor más bien que el dominio directo, un derecho real, vago é indeterminado, parecido al de hipoteca.

De la facultad de dividir, subdividir, subforar y enajenar los bienes forales, resultó la necesidad del juicio llamado de prorateo, establecido para que los poseedores de tales bienes repartieran entre sí la pension que debían pagar al dueño directo, en proporción á la parte que poseyera cada uno, reconocieran y renovaran esta obligacion y nombraran entre sí un recaudador llamado *cabazalero*, que cobrara la cuota de cada uno y pagara íntegra la pension al dueño. Mas á pesar de que este juicio debía repetirse cada diez años y á costa de los foristas, la complicacion y confusion de los derechos territoriales llegó á tal extremo, que muchos dueños directos dejaron de conocer sus fincas forales, y fué necesario obligar á los foristas á señalarlas, por medio de las mismas actuaciones, so pena de tener por aforadas todas las que poseyeran en el lugar y cuyo dominio absoluto no justificasen competentemente. Creciendo aún más la subdivision de los dominios y la confusion de bienes de diverso origen, llegó á suceder que ni el forista, ni el señor, ni aún el *cabazalero* pudieran en algunos casos señalar y deslindar las heredades aforadas, y entonces fué necesario que los jueces hicieran á su prudente arbitrio, la division y prorateo de las pensiones, por indicios y conjeturas, sin que los juristas hayan llegado á convenir hasta ahora en si el arbitrio judicial debe inclinarse en tal caso á favor del aforante, en pena del abandono del forista, ó á favor del forista para castigar el descuido del aforante en solicitar oportunamente los apeos y reconocimientos necesarios (1). Pero de cualquier modo que estas cuestiones se resuelvan, lo que principalmente se desprende de ellas es que en casos tales debería considerarse perdido, en rigor de derecho, el dominio directo del dueño. Así la perpetuidad de los foros, contribuyendo á subdividirlos y multiplicarlos, no sólo redujo gravemente los derechos de la propiedad, sino que ha acabado en algunos casos con ella.

Si la suspension de las reversiones hubiera sido en realidad una providencia interina, segun la intencion de los que la dictaron, no habria dado lugar á tales conflictos, pues á medida que ha ido prolongándose el estado

(1) Herbellá, *Derecho práctico y estilos de la real Audiencia de Galicia*, c. 12.

posesorio se han multiplicado los foros y subforos y los censos y gravámenes sobre ellos, creciendo la confusion de bienes y derechos que suele ocasionar su pérdida. Asi, cuanto más tiempo ha ido trascurriendo, tanto más se ha ido dificultando la solucion del problema planteado en 1763. Pero despues de esta fecha escribia D. Francisco Somoza su obra de los *Estorbos y remedios de la riqueza de Galicia*, en la cual aprobaba la suspension de los despojos de los foristas, y convenia en que la perpetuidad de los foros era favorable á la riqueza, pero sosteniendo á la vez que no podia imponerse generalmente su renovacion, como no fuera á la Iglesia, que solia concederla voluntariamente y en circunstancias extraordinarias, á los dueños seglares poderosos. Quería además que en todo caso equivalieran las pensiones á una parte alicuota del fruto, aunque no fija, y al fin propendia á resolver la cuestion, autorizando á los foristas para redimir el dominio directo, obligando á los señores á aceptar la redencion cuando les fuera propuesta por aquellos y reduciendo las pensiones exorbitantes ó usurarias. Esta solucion es hoy mucho más difícil, porque es infinitamente mayor el número de los señores á quienes habria que imponer el sacrificio, tanto por haberse aumentado los foros, cuanto por haberse distribuido y subdividido entre multitud de nuevos dueños los dominios ántes acumulados en las manos muertas acostumbradas á la renovacion foral. Despues se han promulgado diferentes leyes libertando á la propiedad de gravámenes que estorbaban al fomento de la riqueza, y aunque algunas de ellas han violado derechos adquiridos y muchos intereses creados, ninguna ha pretendido alterar el estado posesorio de los foros (1), que trae origen de una ley injusta y arbitraria, da ocasion á graves abusos y condena á las provincias que lo sufren á la pobreza y á la miseria.

CAPÍTULO IX

De los censos consignativos.

I.

ORÍGENES Y PRIMERAS VICISITUDES DEL CENSO CONSIGNATIVO.

Hacia muchos siglos que los dueños de tierras las utilizaban dándolas

(1) Cuando se escribió este capítulo no se habia promulgado la ley de 1873 que autorizaba á los foristas para redimir forzosamente sus foros. Pero como la ejecucion de esta ley fué al poco tiempo suspendida, no creo necesario tratar de ella.

á cultivar ó beneficiar á colonos que las usufructuasen, con ciertas cargas, cuando se inventó otro género de contrato llamado censo, aunque no tenia con los antiguos de este nombre la menor comunidad ni semejanza. El objeto de estos era la labranza de lo inculto ó la reparacion de lo ruinoso, mediante la trasmision á un tercero del dominio útil de lo mismo, sirviendo de garantía la reserva del directo y los demás derechos dominicales. El objeto de los nuevos censos, llamados despues consignativos, fué obtener capitales mediante la obligacion de pagar por ellos pensiones ciertas y periódicas, aunque redimibles, consignadas sobre fincas fructíferas, las cuales sin salir del poder de sus dueños, servian de garantía á la misma obligacion. Así como por la enfiteusis se adquiria el derecho á todos los frutos de un predio, mediante el pago de cierto cánon, así por el censo consignativo se adquiria el derecho á una parte fija de los réditos de una finca, mediante la entrega al dueño de un capital determinado.

Además entre unos y otros censos, habia otra diferencia concerniente á su origen, que explica la distinta época de su nacimiento. Los enfiteúticos fueron á mi juicio, la expresion histórica de la formacion y desenvolvimiento de la renta territorial, y respondian por lo tanto, á una necesidad importante de la sociedad y de la naturaleza. El censo consignativo, de ménos noble origen, lo trae de leyes puramente convencionales, tan ineficaces en sus fines, como erróneas en sus medios y fundamentos, y por lo tanto no tuvo necesidad de existir hasta que fué indispensable buscar un temperamento, que sin violar directamente estas leyes, eludiese en la práctica sus tristes efectos. El dinero no produce dinero, decian los teólogos y jurisconsultos de la Edad Media, y por lo tanto, todo interés ó rédito que de él se exigiese, carecia á sus ojos de justificacion económica y de fundamento legítimo. De aquí las leyes rigerosas contra la usura y la doctrina de que obligaban en conciencia; y como ni la industria, ni el comercio podian alimentarse y crecer sin el auxilio de capitales, que era en vano pedir al crédito gratuito, fué menester, ó quebrantar directamente aquellas leyes, ocultando la usura en los préstamos, ó inventar contratos, que como el de censo consignativo, surtiesen los efectos del préstamo á interés, sin estar literalmente comprendido en las leyes económicas y civiles que lo condenaban como usurario. Por eso pertenece esta institucion á los tiempos modernos, empezando por las naciones más adelantadas en su industria y comercio, y coincidiendo en todas partes con el crecimiento de la riqueza mueble, si las leyes contra la usura le oponian en la práctica, algun embarazo.

Alemania (si no se anticipó Italia, como es probable, aunque no consta) fué al parecer, la cuna del censo consignativo. La memoria más antigua que de él se halla, es la que ofrece una decretal de Martin V de 1420, dirigida á los obispos de Tréveris y Lubek, en la cual se dice que en estas y otras diócesis, se usaba, hacia ya mucho tiempo, aquel contrato, inventado por los contrayentes y no autorizado por ninguna ley civil. Como cualquiera que fuese el nombre que se diera á este contrato, se simulaba con él muchas veces, un préstamo á interés condenado por derecho, el primero de aquellos prelados acudió al Papa manifestándole que se imponian censos desde el 10 al 14 de capital por uno de rédito; que pasaban ya de 2.000 los establecidos en su diócesis, con la calidad de redimibles á la voluntad de los censatarios; que muchos de ellos servian de dotacion á beneficios eclesiásticos, y que no pocos de los mismos censatarios se negaban á pagar sus pensiones, alegando que por la usura que envolvian, eran ilegales estos contratos. La malicia interesada fué, pues, más diligente que el celo apasionado de los teólogos que acusaba de ilícito el censo; pero como áun produciendo este contrato los efectos del préstamo, tenia la singularidad importante de diferenciarse de él, si perpétuo por su misma duracion, y si redimible, por no poder exigir la redencion el censalista, el sensato Martin V declaró que tales contratos eran lícitos y que los censatarios podian ser obligados á su cumplimiento (1). Todavía volvieron á suscitarse dudas sobre si seria ilegal por usurario, el censo en que se estipulara la facultad de redimir por partes, aminorándose la pension, á medida que se fuera reduciendo el capital, y la cesacion en el pago del rédito, cuando desapareciera del todo la finca acensuada; y consultado el Papa Calixto III, las resolvió en 1455, declarando tambien válidos los contratos censuales aunque contuvieran estas estipulaciones (2). La Iglesia fué, pues, la primera que dió su sancion al censo consignativo que el interés de la industria y del comercio sugiriera, desvaneciendo para ello escrúpulos livianos, y considerando, sin duda, que no habia razon para condenarlos por extremado rigor de lógica, en las aplicaciones de la doctrina que anatematizaba la usura.

Estaban ya autorizados los censos por la primera al ménos de las decretales referidas, y se usaban en Sicilia, cuando se introdujeron de este reino en el de Aragon, al unirse ámbas coronas. Alfonso I, despues de

(1) Cap. 1, t. 5, lib. 3. Extrav. comm.

(2) Cap. 2, t. id., id.

haberlas juntado en su cabeza, pidió al Papa Nicolás V que remediara el daño de sus vasallos, «permitiéndoles una forma de censo con que aliviar sus necesidades, sin perder sus almas.» Una Constitucion de aquel Pontífice, dictada entre 1447 y 1455, declaró que lícitamente y sin usura, podian venderse y comprarse censos á carta de gracia, reservándose el vendedor la facultad de redimir el capital, tanto por tanto, y obligando los contrayentes sus personas y bienes de todas clases, con los pactos y penas que juzgaran convenientes para su seguridad, siempre que la pension ánnua estipulada no excediera de una décima parte del precio ó capital entregado. Esta Constitucion hubo de ser dictada únicamente para los dos reinos referidos, y por eso no se insertó como las otras dos citadas entre las Extravagantes comunes, por más que se observara tambien en algunos otros Estados (1).

Algunos años más tarde se introdujo de Aragon en Castilla el uso de los censos, siendo de notar que los más antiguos de que hay memoria, coinciden con la expulsion de los judíos, á quienes, como es sabido, no estaba vedada la usura (2). Así es de presumir que mientras estos negociantes proveyeron con sus capitales á las necesidades del crédito, no hubo de ser frecuente, si es que llegó á existir, el uso del censo consignativo; y cuando ellos desaparecieron de Castilla, es cuando más hubo de sentirse la necesidad de esta forma indirecta del préstamo oneroso. Albornoz en su tratado *De contratos* (3), asegura, en efecto, que en su tiempo no habia memoria de censos de esta especie anteriores á 1492, en que tuvo lugar aquella expulsion desastrosa. Y no fué el legislador quien los introdujo en este reino, sino la costumbre, pues la primera ley castellana que hizo mencion de ellos, fué la que D. Carlos y doña Juana promulgaron en 1528, conminando con la multa equivalente al duplo del capital, á quien vendiera censos sin manifestar los anteriormente impuestos sobre la finca censida (4).

(1) Vela, *Dissertat. juris controvers.* Coloniae 1761. *Dissert.* 28, n. 54 ad 57.

(2) Algunas veces se prohibió la usura tambien á los judíos, mas las leyes que tales prohibiciones contenian, no llegaron á tener efecto y las que prevalecieron y regian á fines del siglo xv, eran las que les tasaban el interés que podian exigir en sus contratos de logro. En aquella época no se podian éstos estipular á más de 3 por 4 ó sea 25 por 100.

(3) Tit. 2. De los censos al quitar.

(4) La ley 68 de Toro, que mandó cumplir la condicion de caer la finca en comiso por falta de pago, si fuera estipulada, aunque anterior á la de Carlos I, se referia únicamente al censo enfiteútico y al reservativo, y así fué siempre entendida por los jurisconsultos.

No consta si los censos fueron desde luego usados en Castilla con la misma tasa del 10 por 100 que Nicolás V autorizó en Aragon: es lo más probable que no se sujetaran á ninguna fija, puesto que no hubo ley que la estableciera determinadamente para este reino, hasta que D. Carlos y doña Juana dictaron la primera en 1554. Estos monarcas, rindiendo tributo á las opiniones dominantes sobre la usura, la tasa y la reglamentacion comercial, que tanto incremento habian adquirido desde los Reyes Católicos, fijaron á un mismo tiempo el interés de los cambios, girós y demás contrataciones honestas y el precio de los censos, introducidos «de pocos tiempos acá,» segun dice el texto de la citada pragmática. Publicáronse, pues, en el referido año una que limitó á 10 por 100 el interés de aquellas negociaciones (1), y otra que prohibió fundar censos redimibles frumentarios, ó á pagar en otra especie que dinero, á fin de que por el precio vario de los frutos y la diversidad de las cosechas, no excediera nunca el rédito de una tasa cierta y moderada (2). Con esta y otras leyes parecidas, se trató de desvirtuar el carácter un tanto usurario de los censos, en el concepto de muchos moralistas y teólogos, evitando el daño y grave lesion de los que por necesidad, segun dice la misma ley, gravaban sus bienes con ellos.

Pero la disposicion más trascendental de esta pragmática, fué la que mandó que los censos hasta entonces impuestos «se reduzcan á dinero á respecto de 14.000 maravedís al millar del precio que ovieren dado por ellos «los que los compraron» (3). Esta prescripcion se limitó por entonces á los

(1) *Compilacion de leyes y nuevas premáticas hechas desde 1523 por Andrés Martínez de Burgos*, Medina, 1551, lib. 5, t. 4, l. 1.^a

(2) L. 3, t. 15, lib. 10, Nov. Rec.

(3) Así dice el texto de esta pragmática, segun se insertó en la citada *Nueva compilacion de leyes y nuevas premáticas hechas desde 1523*. En los mismos términos apareció en la primera edicion de la *Recopilacion* publicada en 1571. Mas en la segunda y posteriores ediciones de este código, así como en la Novísima de 1805, resultó alterado este texto de un modo que puede hacer dudar de su sentido, pues dice: «Los contratos que hasta aquí se ovieren hecho i hicieren de aquí adelante, se reduzca el dinero, que se oviere dado por el censo de las tales cosas, á «respecto de 14.000 maravedís el millar, para que se pague en dinero i no en las «dichas cosas» (l. 4, t. 15, lib. 5, Rec). Esta cláusula parece referirse, así á los censos de especie como á los de dinero impuestos hasta entonces, y no á los primeros únicamente, segun el sentido claro y expícito del texto primitivo de la pragmática. Hasta envuelve un contrasentido el texto moderno, porque para ajustar á 1 por 14 el censo impuesto á 1 por ménos de 14, que era la intencion del legislador, no se necesitaba «reducir el dinero dado por él,» sino aumentarlo ó reducir el rédito, que es justamente la operacion contraria.

censos frumentarios, puesto que no se refiere la pragmática, segun su texto primitivo, á los que debian pagarse en dinero; pero habiendo sido hasta aquel momento tan lícitos los unos como los otros, segun el derecho civil y el canónico, y no habiendo ley tampoco que tasara su precio, pues que las Extravagantes de Martin V y Calixto III no lo señalaron y el Breve de Nicolás V no se dió para Castilla, aquella disposicion retroactiva envolvía una violacion manifiesta del derecho de propiedad y de los límites de la potestad soberana, á la vez que una expropiacion violenta, sin causa y sin indemnizacion, siendo además un triste ejemplo que sirvió despues de fatal precedente á otros abusos de la misma indole. Fué violada la propiedad del censualista, porque equivaliendo á ella ó á cierta participacion en el dominio, su derecho real sobre la finca acensuada, para percibir una porcion cierta de sus productos, reducir la cuantía de está porcion, aunque fuera eventualmente, cambiando la especie en que se habia de verificar el pago, era despojar al dueño del censo de una parte del capital que representaba y valia su derecho adquirido sobre la misma finca. Compra del derecho real á percibir una pension cierta, llamaban los jurisconsultos á la constitucion de censo, para que no recayeran sobre este contrato los anatemas fulminados contra el préstamo á usura; y siendo esto así, reducir á dinero y á tasa los réditos pagaderos en especie, era tan injusto como sujetar á revision los contratos de venta de fincas cuyo precio se hubiera pagado en frutos, á fin de que, si reducidos estos á dinero, no llegara aquel á cierta cuantía, se obligara al comprador á abonar la diferencia. Traspasó el legislador los límites de su potestad, puesto que no la tiene para despojar á nadie de lo suyo, fuera del caso de necesidad pública y con sujecion á las leyes. Fué aquella, en fin, una expropiacion injustificada, segun el derecho escrito vigente, aún admitida, por causa legítima, la conveniencia de amonorar el rédito de los censos, que ninguna ley tasaba hasta entonces, pues que no se dió el «buen cambio» que exigia la de Partida, por más que los jurisconsultos apasionados á las doctrinas imperialistas lo estimaran innecesario, cuando no era individual la expropiacion.

II.

TASA Y REDUCCION GENERAL DE LOS CENSOS.

Con todas estas medidas arbitrarias subsistió, sin embargo, el estado legal de los censos no constituidos en frutos. Acerca de ellos no existia ley

alguna, fuera de la general de 1528 citada, que penaba al imponente de censo que no advirtiera al nuevo censalista los gravámenes impuestos anteriormente sobre la misma finca, y otra de 1539 que con igual objeto, mandó establecer registros públicos de la propiedad acensuada; mas en cuanto al precio, que era á la sazón el punto más interesante y controvertido, habia gran diversidad de pareceres y de costumbres. De ello da testimonio D. Diego Covarrubias, cuando por el mismo tiempo escribia que el justo precio en los censos perpétuos era, segun unos, el 20 y segun otros, desde el 15 hasta el 50 de capital por 1 de rédito: que no habiendo, por tanto, regla fija, debia estarse en este punto á la costumbre de la provincia: que tambien se debia sujetar á ella el precio de los censos vitalicios, porque si bien solian constituirse al 8 por 100, no habia sobre este punto regla cierta, y variaban mucho las opiniones; y que tambien en los censos redimibles debia estimarse justo precio el acostumbrado en la respectiva provincia, el cual oscilaba entonces en los diferentes Estados de Europa, de 10 á 20 por 1, y era en Andalucía tambien de 10 por 1, mientras que en Castilla llegaba á 12 ó 14. Refiere asimismo Covarrubias cómo se disputaba en su tiempo, si la pragmática de 1554 habia ó no mandado reducir tambien á la tasa de 14 por 1 los censos constituidos á dinero (1); y aunque él sostenia la opinion negativa, la existencia de otra contraria, cuando era explicito y no se habia alterado, como sucedió despues, el texto de aquella ley, es indicio suficiente de la desconfianza con que eran mirados los censos por los celosos adversarios de la usura. Lejos de satisfacerse éstos con la reduccion de los censos constituidos en frutos, se esforzaban por reducirlos todos á tasa, sin reparar en la injusticia de semejante propósito, y abriendo así el camino á nuevas leyes en menoscabo del derecho de propiedad.

Los censos consignativos llevaron consigo desde su origen cierta odiosidad y descrédito, que facilitaron en gran manera las providencias injustas de que sus poseedores fueron objeto, así como la necesidad de ellos estimulaba á los propietarios á eludir el cumplimiento de las leyes dictadas en su provecho. Unos por odio á la usura, de que tales contratos anduvieran siempre tan sospechados, y otros por suponer que daban estímulo á la holganza, fueron muchos y muy poderosos los adversarios que desde su introduccion en España tuvieron los censos. A ellos se debieron todas las leyes que restringieron su uso á costa de la justicia. Son conocidas

(1) Var. Resolut., lib. 3, c. 10.

estas leyes, puesto que andan insertas en nuestros códigos, pero no lo han sido hasta ahora las causas y circunstancias que contribuyeron á su formacion, pues que hasta hace poco no han visto la luz pública las actas de las Cortes que las solicitaron y discutieron. No fueron los reyes ni los consejos los que provocaron aquellos violentos despojos y las medidas de rigor contra los censualistas, fueron las Cortes las que una y otra vez excitaron al monarca á restringir en este punto la libre disposicion del dominio y á violar el ya adquirido bajo la proteccion de las leyes.

La pragmática de 1554 no se aplicaba á los censos constituidos ó que se constituian en dinero, los cuales, por lo tanto, seguian ajustándose, en cuanto á su precio, á la costumbre del lugar ó á la voluntad de los contrayentes, mientras que los constituidos en frutos se reducian á metálico á razon de 14 por 1. Esta situacion era á la verdad indefendible para unos por su oposicion á los censos; para otros porque semejante diferencia entre ellos carecia de todo fundamento. Las Cortes de Madrid de 1552 solicitaron ya que se extendiera á todos los censos redimibles la tasa señalada para la reduccion á dinero de los censos frumentarios. «Por quanto por las Extravagantes de los sumos pontífices, decian en la peticion 109, están permitidos los contratos de censo al quitar, al precio y tasacion que les dieran en aquellos reinos (Aragon); y porque en estos reinos hay muchos censos de 10, é 11, é 12 é 15.000 al millar, suplicamos á V. M. mande no se pueda dar á censo al quitar ménos de á 14.000 el millar, é los que estén dados á ménos se reduzgan á este precio.» Las Cortes consideraban, pues, como fundamento de su peticion, no sólo la conveniencia de que desapareciera toda desigualdad entre censos de la misma especie, sino los subidos y al parecer usurarios precios de 10, 11, 12 y 13 por 1 que se acostumbraban en España. Y no se contentaban los procuradores con sujetar á tasa más reducida las nuevas imposiciones, sino que querian reducir á ella tambien todos los censos antiguos, privando de su derecho al que lo tuviera adquirido, siguiendo el ejemplo de las Cortes que tambien pidieron la pragmática de 1554. Pero Felipe II, obrando con más cordura, no adoptó entonces semejante parecer, y respondió á la peticion que estaba proveido lo que convenia.

No por eso cesaron, sin embargo, las Cortes en su propósito. En las de Madrid de 1565, Juan de Santo Domingo, procurador por Burgos, presentó una proposicion para que se volviera á pedir al rey, no ya todo lo que solicitaron las de 1552, respecto á censos, sino la prohibicion de imponer los nuevos á ménos de 14 por 1. La apoyó su compañero Diego Martínez

Soria, con la adición de que se redujeran al mismo tipo todos los censos consignativos existentes. Luego, el procurador por Leon propuso que la misma regla se hiciera extensiva á los juros, por ser contratos de idéntica naturaleza. El acta de la sesion de Córtes á que me refiero, da bien á entender, á pesar de su laconismo, que esta proposicion fué muy controvertida y tuvo obstinados impugnadores. El jurado de Sevilla, Juan de Lugo, el procurador por Murcia y otros, teniendo más en cuenta los fueros de la justicia que las preocupaciones de su época, opinaron que no debia tratarse de este asunto «porque era perjuicio del reino.» El procurador por Segovia, respetando los derechos adquiridos, sostuvo que la reduccion debia limitarse á los censos que en adelante se constituyeran; mas sometida á votos la proposicion, fué aprobada por mayoría de votantes, con las adiciones de Martinez Soria y del procurador por Leon.

Los fundamentos de la peticion se expresaron claramente en su texto. «Como las necesidades del reino—decia—han ido y van cada dia en crecimiento, y como no hay otra manera de socorrer la gente, si no es tomando censos sobre sus haciendas, y estos se hallan tan baratos como son á 10 por 100, que muchos se han dado tanto á ellos que, pareciéndoles que es buena manera de vivir, se han dejado de la labranza y crianza y de otros tratos y grangerías, en que entendian, con que el reino era beneficiado, y emplean sus haciendas en los dichos censos...» En su virtud suplicaban que no se permitiera imponerlos á ménos de 14.000 al millar, que se redujeran tambien á este tipo los ya impuestos, y que esta disposicion fuera extensiva á los juros. Aún no se dieron por vencidos los procuradores que se habian opuesto á este acuerdo, puesto que al dia siguiente de aprobado, Ruy Barba Coronado, Juan de Lugo y D. Miguel de Leon presentaron un requerimiento, al cual se adhirieron despues otros cinco procuradores para que no se pidiera lo acordado. Pero, esto no obstante, la peticion siguió su curso, y Felipe II, juzgando que no debia ya resistir más tiempo al deseo de las Córtes, respondió que mandaria no se impusieran censos ni juros á ménos de 14 por 1, bajo pena de nulidad en cuanto excediera el rédito de este tanto, que los ya impuestos se redujeran al mismo tipo, aunque fuesen antiguos ó hubiesen sido contratados en lugares donde era costumbre venderlos á ménos precio, y que se sujetaran los juros á la misma disposicion (1). Y en efecto, en la Recopilacion se insertó una ley

(1) Actas de las Córtes de Castilla publicadas por el Congreso de Diputados, t. I, Córtes de Madrid de 1563, pág. 212, 313, 218, 219 y 383, pet. 127.

conforme con esta respuesta, que despues ha sido reproducida en todas las ediciones del mismo Código (1).

Mas todavía quedaron sin decidir muchas dudas que suscitaban sobre esta materia, por una parte, los que sospechaban de la moralidad del contrato de censo, y por otra, los que patrocinaban su uso como una necesidad social. Moviósse empeñada controversia entre los letrados, por lo que afectaba á la legalidad del acto, y entre los teólogos por lo que tocaba á la conciencia, sobre si la tasa señalada en la ley de 1563 era solamente aplicable á la primera constitucion del censo ó juro, ó si debia tambien guardarse en la venta ó trasmision de los ya impuestos para fijar el precio. Una y otra opinion contaban mantenedores celosos, y como todos se apoyaran en la misma ley, las Córtes de Madrid de 1575 (2) pidieron que se declarara su sentido, de modo que se supiera si los tributos y juros impuestos podrian venderse en adelante á ménos de 14 por 1. Respondiendo el rey á esta peticion mandó que el Consejo la examinara y le consultara lo que se ofreciera; mas no hay noticia de que recayera sobre ella resolucion alguna.

Entre tanto, como la ley que habia proserito los censos frumentarios y la que tasaba los constituidos á dinero, se refirían únicamente á los temporales y redimibles, en Galicia, Leon y Astúrias siguieron imponiéndose en especie y á ménos de 14 por 1, con color de perpétuos, los cuales, defraudando la intencion del legislador, eran de legalidad muy disputada y dieron motivo á otra grave determinacion en menoscabo de derechos legitimamente adquiridos. Tal fué la pragmática de 1575, por la cual dispuso Felipe II que todos los censos impuestos con el carácter de perpétuos desde 1534, en especies, cuyo valor computado en dinero al tiempo de la imposicion, diera por resultado un rédito superior á 1 por 14, se redujeran á este tipo y se pudieran redimir mediante la devolucion del capital como si fueran redimibles, y que si estos censos resultaran impuestos á ménos de 1 por 14 sin llegar á 1 por 20, el deudor podria ajustarlos voluntariamente á aquella proporcion (3). De suerte que para impedir la constitucion de censos frumentarios, no sujetos á tasa como perpétuos, todos los impuestos de esta calidad fueron declarados redimibles, contra la voluntad de los imponentes. Esta nueva injusticia tuvo, sin embargo, su correctivo en la inobservancia

(1) L. 6, t. 15, lib. 5, Rec.

(2) Pet. 93.

(3) L. 7, t. XV, lib. 5, Rec.

de la pragmática, al ménos en parte, y en las provincias que la habian provocado, pues los censos frumentarios han subsistido hasta nuestros dias en Galicia y Astúrias, y áun los perpétuos de hecho, dado que la facultad de redimir otorgada por la ley respecto de ellos, no se usaba generalmente por los censatarios.

Todavía la redimibilidad de todos los censos al arbitrio exclusivo de los censatarios, principio adoptado por Felipe II, para reducir su número y mejorar sus condiciones onerosas, solia hasta cierto punto eludirse con el uso de los censos vitalicios por dos ó más vidas, pues así trascurrian varias generaciones, sin que durante ellas, pudiera cesar el gravámen impuesto. Los letrados y los moralistas disputaban sobre la legalidad de este contrato y sobre si el precio que mediaba en ellos debia ajustarse á tasa; mas la pragmática de 1585 solventó estas dificultades, restringiendo el uso de tales censos. En ella se prohibió fundarlos por más de una vida, ni á ménos de 7.000 al millar; mandándose que su precio se pagara en dinero, al contado y con fe de entrega dada por escribano; y que los censos ya fundados, si lo habian sido por una sola vida, se redujeran á la tasa legal de 7 por 1: si por dos vidas, á 8 por 1, y si por más, quedaran reducidos á dos vidas solamente, y al mismo rédito de 1 por 8. Otra violacion flagrante del derecho de propiedad, pero que no debia extrañarse, viniendo despues de tantas. Todavía esta vez se tuvieron en cuenta los derechos adquiridos en los censos de dos vidas, aunque reduciendo á tasa sus réditos.

Algo hubo de influir en esta última pragmática, el *Motu proprio* que Pío V expidió sobre la misma materia en 1568, por más que no fuera recibido en España. Habíase ya promulgado la ley de 1563 sobre reduccion y tasa de los censos, cuando aquel Santo Pontífice, deseando proscribir ciertas opiniones del jurisconsulto Lesio acerca de esta materia, condenadas ya por el tribunal de la ciudad de Roma y por el Vaticano, segun afirma Pignatelli, y para impedir que continuaran celebrándose contratos de censo con infraccion de las leyes canónicas, dictó una nueva constitucion con reglas encaminadas á refrenar la codicia de los imponentes y amparar á los censatarios. Por ella se dispuso que no se impusieran censos sino sobre bienes inmuebles, ó que tuvieran la consideracion de tales, fructíferos y señalados por sus linderos: que el precio habia de ser justo y de pagarse íntegro en dinero, á presencia del notario que autorizara la escritura, y de los testigos de ella, sin que bastase la confesion del recibo; que no podria estipularse el pago anticipado de los réditos, ni el pacto de quedar el censatario responsable exclusivamente al caso fortuito, ó el de no ena-

jenar la finca censida, ó el de poder ser apremiado el mismo censatario á la redencion, ó el de pagar laudemio por la enajenacion, ó el de satisfacer intereses por los réditos que no fueran pagados desde su vencimiento: que se extinguiera ó se rebajara el rédito cuando pereciera ó se deteriorara la finca gravada: que el censatario que hubiera de redimir, anunciara su propósito al censalista con un mes de anticipacion; y que dejando de hacerlo pudiera ser demandado por ello durante un año. Todas estas reglas eran solamente aplicables á los censos nuevos; los antiguos, á diferencia de lo que sucedia en España, eran respetados en la forma en que fueran establecidos (1).

Tal era el célebre *Motu proprio*, que Felipe II declaró no haber admitido en España, á peticion de las Cortes de Madrid de 1583; ¿cuál fué el motivo de haberle el rey negado su *exequatur*? ¿Fué simplemente una cuestion de prerogativa? ¿Lo fué el mismo contenido de la nueva constitucion pontificia? Causas de una y otra especie hubieron de contribuir á ello. Felipe II, que aunque ferviente católico, era celosísimo de su potestad, no toleraba que nadie, ni aún el Papa, invadiese la esfera propia de ella, y mucho ménos con actos legislativos, que como el *Motu proprio*, derogaban el derecho patrio. Mas lo que principalmente hubo de decidirle á decretar aquella retencion, fué al parecer la cláusula del Breve, que mandaba constituir los censos con dinero de presente, puesto que conteniendo, como se ha visto, otras varias el documento, fué esta la que empleó el monarca para designarlo. «El propio motu sobre que los censos se impongan con dineros... no está recibido,» dice Felipe II, en la ley formada con su respuesta á la peticion segunda de las Cortes citadas de 1583. Esta prescripcion no era conforme entonces con nuestro derecho, aunque el mismo monarca, despues de negarle el pase, la adoptara como propia, en cuanto á los censos vitalicios. Tambien estaban en abierta oposicion con las leyes de España las cláusulas que prohibian el pacto de no enajenar la cosa censida, y el de pagar laudemio; todo lo cual tendia al parecer á reformar nuestra legislacion civil, prescindiendo del soberano temporal, y explica suficientemente la denegacion del *exequatur*.

Pero la misma ley que lo derogó fué á su vez origen de graves dudas y diversos pareceres. Disputaron los letrados si la retencion se extendia á todas las cláusulas del *Motu proprio*, ó si se limitaba á las indicadas en la

(1) Gomez, *Explicatio Motus proprius, Pii V qui de censibus tractat, etc.*—Madrid, 1593.

citada ley, sobre que los censos se impusieran en dinero. Mientras que los juriconsultos más autorizados sostenian la primera opinion, defendian otros que la retencion no alcanzaba á los capitulos declaratorios del derecho comun canónico, como lo era el que declaraba extinguido el censo, cuando parecia la cosa acensuada, segun lo habian ordenado las Extravagantes de Martin V y de Calixto III. Opinaban algunos que aunque el *Motu proprio* no valiese como ley del reino, debia estimarse como autoridad magistral; y de hecho tenia grande influjo en la decision de todas las cuestiones que se suscitaban sobre esta materia (1). Antonio Gomez, no el famoso juriconsulto de Salamanca, sino otro de su mismo nombre, que escribia poco despues, publicó en 1593 un sucinto comentario del *Motu proprio*, como si se hallara en uso y hubiera modificado nuestra legislacion, en lo que no era conforme con ella. El espíritu restrictivo del uso de los censos que en aquel documento se descubre, era tan conforme con la opinion que acerca de ellos profesaban nuestros letrados, que confesando todos cuando escribian, la retencion del Breve, luego adoptaban y defendian los más de sus preceptos, como decisiones doctrinales, en las frecuentes controversias que sobre tan complicada materia se suscitaban.

Los censos del reino de Aragon que sirvieron de ejemplo á los de Castilla y sufrieron las mismas vicisitudes, conservaron, sin embargo, sus caracteres especiales. Fueron allí más usados que en otras partes los censos colectivos, llamados *censales*. Por ellos quedaban obligados todos los vecinos de un lugar, con sus bienes y personas, á pagar los réditos de los capitales que ellos en comunidad, ó sus señores, tomaban en aquel concepto, para subvenir á las necesidades públicas. Así quedaba perpétuamente gravado el vecindario, pero con la singularidad injustisima de eximirse de este gravámen los sucesores del señor, que habia sido parte en el contrato, aunque éste se hubiera celebrado en su exclusivo provecho. Los señores podian imponer estos censales sobre sus vasallos de *signo servicio*, á su voluntad, como no hubiera mediado pacto en contrario. Cargábanse ordinariamente sobre los arbitrios y rentas de las *generalidades* (derechos de entrada), cuando habia que contribuir al rey con los servicios que votaban las Córtes. Entonces se abria sobre ello pública negociacion y celebraba los contratos el consistorio de la Diputacion, pero no quedaban gravados más que los vecinos cristianos, pues los sarracenos estaban exentos,

(1) Ceballos, *Opiniones comm. contra commun. quæst.* 847.—Salgado, *Labyrinthus creditor.*, part. 2.^a, cap. 29.—Vela, *Dissert.* 33, núm. 19, y *Disert.* 36, núm. 35.

por no tener intervencion alguna en los concejos. Los vecinos de pueblos gravados con censos no se eximian de pagarlos cuando trasladaban á otro lugar su domicilio: los bienes que dejaban en el en que habian vivido debian responder de toda la pension con que ántes contribuian ellos, y si no bastasen, se habia de repetir contra los que adquiriesen en el pueblo de su nueva residencia (1). En toda clase de censos era lícita la estipulacion de que por falta de pago de las pensiones, cayesen los bienes en comiso.

No habiéndose tampoco admitido en Aragon el *Motu proprio* de Pio V, solian fundarse nuevos censos con réditos devengados y no pagados de los antiguos; y se estimaban perpétuos los que no estaban constituidos á carta de gracia, ó sea con la facultad de redimir en época fija ó indeterminada, mientras que en Castilla se declaraban todos redimibles. Allí fué donde se dió el primer ejemplo de reducir arbitrariamente las pensiones de los censos constituidos sin contravencion de las leyes. D. Juan II en 1461, rebajó á 40 por 1.000 los censales antiguos impuestos sobre las aljamas de moros y judíos. Sentado este precedente, el mismo monarca ordenó una reduccion general de los réditos de todos los censos, ajustándolos á la proporcion de 30 por 1. Pero ó esta disposicion no llegó á tener efecto, ó el que tuviera no fué permanente, puesto que segun consta de registros y documentos antiguos, en los siglos xvi y xvii los diputados continuaban imponiendo censales á razon de 20 por 1 (2), que es el límite que fijaba la ley al interés en los contratos de censo. El fuero condenaba la usura, pero advirtiéndole que esta condenacion no alcanzaba á los censales constituidos en instrumento público, siempre que no lo estuvieran á más de 1 por 10. La amplitud de este tipo contrastaba singularmente con la estrechez del establecido para el censo reservativo y para el vitalicio llamado *violario*, que debiendo ser más alto, no pasaba de 1 por 20 (3).

No ménos que en Aragon se usaron los censales en Valencia, pero con sujecion á diferente tasa. Los constituidos á carta de gracia, que eran los redimibles, podian estipularse lícitamente á razon de 11, 12, 13 ó 14 por 1, más ó ménos, segun los tiempos. Sobre la ciudad de Valencia y su generalidad ó rentas, no se podian imponer á ménos de 15 por 1. El censo vitalicio ó *violario* podia, sin embargo, cargarse á razon de 2 sueldos

(1) Molino, Repert. v. *Censualia*.

(2) Asso, *Historia de la economia política en Aragon*, c. 4.

(3) Molino, Repert. v. *Censualia*.—Fuer. 6, 7, libr. 4, *De usur.*—Franco., *Fororum Aragon. Codex*, lib. 4, dict. for.

de renta por 10 dineros de capital, ó sea á 13 3/4 por 100, de suerte que aquel se repusiera con 7 años de pension, mas no debia exceder de dos vidas (1).

En Cataluña, donde tampoco se admitió el *Motu proprio*, solian constituirse censales sin entrega de presente del capital y mediante la confesion del censatario de haberlo ántes recibido, ó con réditos vencidos y no satisfechos, ó á pagar á voluntad del censatario, en especie tasada, el precio convenido en metálico. En los pueblos gravados con censales, quedaban obligados los bienes y nunca las personas de los vecinos presentes y futuros. No habia tasa legal para ningun género de censos, aunque por costumbre se computaban á 5 por 100, ó sea á reponer el capital en 20 años, y los violarios á 14 2/7 por 100, ó sea 7 por 1, sin limitacion en cuanto al número de vidas (2).

La retencion del *Motu proprio* no hubo de alcanzar á Navarra, puesto que casi todas las cláusulas de aquel documento, y en particular las que expresamente habian sido rechazadas en Castilla, se insertaron en las leyes especiales de aquel reino. Allí se prohibió constituir censos de otro modo que con dinero al contado y entrega de presente, bajo fé de escribano, que era precisamente la condicion del Breve que sirvió para designarlo en la ley que lo mandó retener. Su imposicion habia de verificarse sobre bienes señalados y no sobre alguna comunidad de ellos. El rédito no habia de exceder de 5 por 100: la redencion en su caso habia de verificarse de una vez, salvo que hubiese mediado pacto de hacerlo por partes, y con exclusion de los censales de más de 400 ducados, los cuales podrian redimirse en dos plazos, aunque hubiera estipulacion en contrario, si no pertenecian á iglesia ó mayorazgo. La finca censida no habia de caer en comiso por falta del pago del rédito, mas el censualista tenia derecho á cobrarlo con preferencia á otros acreedores (3).

(1) Tarazona, *Sumario dels furs*, etc., pág. 347 á 352.

(2) Cancr, *Var. resolut.* Par. 2, c. 1, n. 277. Par. 3, c. 1. n. 207, y c. 7, número 74 á 76.

(3) L. 5, 2, 4 y 9, t. 4, lib. 3, Nov. Recop. de Navarra.

III.

CONTROVERSIAS ACERCA DE LOS CENSOS Y NUEVAS REDUCCIONES DE SUS RÉDITOS EN EL SIGLO XVII.

Introducida la nueva institucion de los censos en todos los antiguos reinos de España, fué objeto de graves impugnaciones y de empeñada controversia, que explican el progreso de las leyes que en Castilla, Aragon y Navarra restringieron su uso. En la cuestion de si envolvía ó no usura este contrato, dieron su parecer favorable al mismo, teólogos tan eminentes como fray Domingo de Soto, fray Juan Medina, fray Tomás Mercado y el P. Luis Molina, y jurisconsultos tan sábios como D. Diego Covarrubias, D. Martin Azpilcueta, Antonio Gomez, Luis Velazquez de Avendaño, Feliciano Solís y otros muchos. No ocultaron su opinion ó su sospecha sobre la inmoralidad de tales contratos Alfonso de Acevedo, Bartolomé de Albornoz, Gaspar Rodriguez Parladorio, D. Fernando Gonzalez Socueva y otros jurisconsultos y moralistas. Mas no era solamente en este concepto en el que los atacaban sus adversarios, sino tambien en otro en que tenian ménos defensa, el de la conveniencia pública. De enemigos de la agricultura y de las artes y fomentadores de la ociosidad y la pobreza, los acusaron Lopez Deza, Mateo Lopez Brabo, Pedro Fernandez Navarrete, Sancho de Moncada, D. Juan Solorzano, Alfonso de Olea, D. Tomás Anzano y otra multitud de escritores, juristas y políticos.

Alfonso de Acevedo, sosteniendo que para «asegurar las conciencias gravadas con los censos adquiridos por corto precio,» fué necesario reducir sus réditos, sin indemnizar á los censualistas despojados (1), daba á entender muy claramente su opinion acerca de tales contratos. No disenta de ella Albornoz, cuando aseguraba que las *Extravagantes* de Martin V y Calisto III, prueba incontestable entonces de la justicia de los censos, no constituian derecho general (2). Gaspar Rodriguez, escribiendo especialmente de esta materia (3), mostraba más claramente su intencion, cuando decia que en Galicia, su patria, no se usaban los censos temporales, y con razon, porque los mismos graves doctores que los aprueban, confiesan «que

(1) *Comment. in Hisp. reg. constitutiones*, lib. 5, t. 15, ad leg. 6.

(2) *Obr. cit.* t. 2, De los censos al quitar.

(3) *De annuis et mensuris redditibus*. Medina, 1604, lib. 1, quæst. 5.

son sospechosos, y por lo tanto debe aconsejarse á los cristianos que se abstengan de ellos.» Parladorio, más explícito todavía, los declaró resueltamente usurarios. D. Juan Valenzuela atribuía á la avaricia, á la necesidad y al desenfreno de las pasiones, la introducción de los censos en los reinos de Aragón y Sicilia (1). Viniendo á tiempos más modernos, tampoco se mostraron menos adversarios de ellos por iguales motivos, los escritores juristas que en el último siglo trataron especialmente de esta materia. D. Fernando Gonzalez de Socueva, veinticuatro de Sevilla y relator de su Audiencia, escribiendo á mediados del último siglo sobre el estado de los censos, decía después de mucho discutir sobre su legalidad: «Lo cierto es que »se dan dineros para cobrar de ellos réditos. Pero como las necesidades »humanas hagan tolerables muchas cosas peligrosas, éstas han forzado »que las leyes permitan los censos que no inventaron, y que los procuren »justificar con moderaciones y tasas» (2). Poco después escribía D. Vicente Vizcaino sobre la misma materia, que no hablaba de la moralidad de los censos, porque le imponían silencio las leyes eclesiásticas y las civiles, por más que teólogos y jurisconsultos confiesen que son contratos tan equívocos con la usura, que no pueden distinguirlos, y añadía, «no porque se permitan los censos son buenos, pues también se permiten los lupanares» (3).

A estas críticas oponían los defensores de la institución, como Soto y otros muchos, que siendo lícito el censo reservativo, por consistir en la venta de una finca, por precio de un rédito annuo, no podía ser ilícito el consignativo, que se reduce á la operación inversa, ó sea la venta de un rédito por precio de un derecho real sobre determinada finca (4). A los que negaban á este contrato el carácter de compra-venta, porque decían que antes de constituirse el censo no había cosa vendible, contestaba Juan Medina (5), que lo era el derecho á percibir, con cargo á la finca acensuable, cualquiera porción de sus productos perpétua ó temporalmente. Y aunque severo moralista, añadía que la adquisición de censos no era por sí acto

(1) *Consilia sive responsa juris*. Lugduni 1671, cons. 201, n. 3, 4, 8 y 27.

(2) *Estado actual de los censos más frecuentes en estos reinos y aquel á que deben reglarse sus réditos y condiciones*. Sevilla 1759, c. 1, pár. 1.

(3) *Discursos políticos sobre los estragos que causan los censos*. Madrid 1766, número 31 al 34.

(4) *De just. et jur.* lib. 6, quæst. 5.

(5) *Codex de restitutione et contractibus*, publicado en 1546 después de la muerte del autor, bajo los auspicios del cardenal Silíceo.

ilícito, sobre todo para los que no pueden dedicarse á la industria ó al comercio: que tampoco eran contratos usurarios, aunque por su medio solia ejercitarse la usura: que los censos vitalicios semejantes al precario y al arrendamiento, no eran como algunos creian usurarios, y que ni aún lo eran los constituidos por tiempo fijo y á fondo perdido, como hoy se dice, aunque el imponente llegara á recibir por réditos, mayor suma que la del capital, si ofrece algun riesgo el negocio ó hay causa que pueda hacerlo desmerecer. Porque era venta del derecho de exigir una pension, y no podia el censalista como el mutuante, reclamar la devolucion del capital, defendió el P. Mercado que no habia en el censo simulacion de préstamo, y podia adquirirse con conciencia segura (1). Esta misma doctrina sostuvieron el P. Molina (2), Solís (3), Velazquez Avendaño (4) y otros muchos jurisconsultos y teólogos.

Mas no puede negarse que los mismos defensores del contrato solian á veces mostrar desconfianza de sus propias opiniones, y cierto recelo de que acertaran sus adversarios. Los más convenian en que esta materia de censos, como odiosa y sospechosa de suyo, era de interpretacion estrecha. El P. Mercado, decia que «este contrato, siendo lícito y seguro, ha sido como dicen desdichado, teniendo siempre tan mala reputacion, que casi hubiera ya caido y cesado, si la Sede apostólica, con su autoridad y aprobacion, no lo detuviera y sustentara.» «Los censos redimibles, añadia, fueron los que infamaron el contrato de usurario, y no dejaba de tener el escrúpulo algun color:» parecian «un género de préstamo interesal: y llegó el escándalo á tanto, que no se apaciguó ni quitó hasta que se consultó sobre ello á Urbano VI y á Calixto III y lo aprobaron.» Aludiendo despues al *Motu proprio* de Pio V, decia: «De poco acá Su Santidad publicó un *proprio motu* do pone muchas condiciones que se deben guardar en estos censos. La mayor parte de las quales son una barbacana para defender las usuras... Si se guarda y recibe dará gran lustre á este negocio; mas no lo veo rebullir ni platicar entre nosotros... Estoy á la mira á ver en qué pára, y no sé yo cómo no predicán los prelados y promulgan una ley tan justa y necesaria. En él prohíbe algunas cosas que aquí se aprueban y es muy justo prohibillas» (5). Estas palabras dan á entender

(1) *Suma de tratos, etc.*, lib. 4, c. últ.

(2) *De just. et jur.* vol. 2. De contractibus. Tract. 2, disput. 185.

(3) *Comentarii de censibus*. Alcalá 1594.

(4) *Tract. de censibus Hispaniae*. Alcalá 1614, c. 16.

(5) *Suma de tratos, etc.*, lib. 4, c. últ.

la vacilacion del autor y cómo se murmuraba entre los teólogos de su tiempo de que no se publicara desde luego el Breve de 1568. D. José Vela, refiriendo la historia de los censos, y sin contestar su legalidad, escribía que la decretal de Nicolás V declarándolos licitos, de que ántes he hecho mencion, habia sido dada para evitar mayores males, corroborando su opinion con la de Juan B. Lobo, que consideraba aquella constitucion «peligrosa, sospechosa y ocasion de censos inícuos y usurarios» (1).

Aún más que en el orden moral, en el político eran objeto los censos de general censura. El mismo Juan Medina, que los defendía ántes que Felipe II ordenara su reduccion, confesaba que con ocasion de ellos se empobrecían muchos ó se entregaban al ocio, si bien creía que no habiéndolos, aquellos propietarios que los imponían por necesidad, tendrían que remediarse vendiendo sus fincas y se arruinarían más pronto (2). Lopez Deza atribuía la falta de labradores y la carestía de los frutos á la muchedumbre de censos, que habiendo sido autorizados para evitar las usuras, resultaban ser peores que ellas, porque constituían un gravámen sucesivo, y éstas al ménos pasaban de una vez (3). Mateo Lopez Brabo decía de los censos que disminuían el comercio y aumentaban el ocio (4). Pedro Fernandez Navarrete les atribuía el abatimiento y desestimacion de la agricultura, «porque, decía, todos los ricos han puesto en ellos (como en hacienda holgazana) su caudal, dejando la labranza y crianza, que antiguamente se juzgaban por solas y sólidas riquezas.» Añadía que cuanto ganaban los labradores lo consumía la voraz polilla de los censos, y concluía pidiendo su extincion (5). Luis Valle de la Cerda proponía la creacion de Erarios públicos que tomaran caudales á censo de 5 por 100 y los dieran también á censo de 6 por 100, para que con esta competencia tuvieran los capitalistas que moderar el subido precio de los capitales que daban en igual concepto á los propietarios, con lo cual la tierra y el cultivo se hallaban tan desamparados (6). «Los ricos y los pobres, decía Sancho de Moncada en tiempo de Felipe III (7), fundan ya su vivir en renta, y sien-

(1) *Dissertat.*, 28.

(2) *De restitut.*, edic. 1546, fol. 154.

(3) *Gobierno de la agricultura*, part. 2, fol. 27.

(4) *De rege et regendi ratione*.

(5) *Conservac. de monarquías*. Barcelona, 1621, discurs. 39.

(6) *Desempeño del patrimonio de S. M. por medio de los Erarios públicos*. Madrid, 1618, c. 10.

(7) *Restauracion política de España*.

«do los censos no más que un poco de papel, no tienen otro ser que el ser
 «de los bienes en que estriban, y como faltan los bienes, faltando la labor,
 «la crianza, comercio y oficios, dan con el censo en el suelo, y así se ve la
 «falta que tienen por ellos las rentas reales, los labradores y generalmente
 «todo el reino, hasta que obligaron á V. M. á subirlos á 20. A algunos ha
 «parecido que importaría subirlos más, para que viendo los réditos tan
 «cortos, empleasen las haciendas en comercio, labranza y crianza.» Don
 Juan Solorzano, sábio consejero, reprodujo y confirmó las opiniones citadas
 de Lopez Deza y Lopez Brabo (1). Alfonso de Olea queria que no se pudie-
 ran imponer nuevos censos sin prévia licencia, dada con conocimiento de
 causa, porque tales contratos «aminoran el patrimonio de los ciudadanos,
 «hacen á los hombres ociosos é ignorantes y disminuyen el comercio y la
 «agricultura» (2).

Prevalciendo estas opiniones entre los hombres más ilustrados de los
 siglos xvi y xvii, no es de extrañar que la propiedad de los censos fuera
 tan mal tratada por los últimos reyes de la casa de Austria, como lo había
 sido por los dos primeros. Además, corria entre los letrados la doctrina de
 que los contratos de tracto sucesivo, jastos en su origen, si llegaban á ser
 lesivos, debian ser moderados en cualquier tiempo por los jueces. Si, pues,
 los censos se hallaban en este caso; si eran perjudiciales á la república, y
 si, como en otro lugar he dicho, era opinion comun entre los jurisconsultos,
 que por causa de utilidad pública, podia privarse á cualquiera del de-
 recho legitimamente adquirido, sin indemnizarle, siempre que esto se hiciese
 por ley general (3), debia hallar pocos inconvenientes la reduccion sucesiva
 de los censos. Al amparo de estas doctrinas se verificaron las dos primeras
 en 1534 y 1565; ¿por qué no habian de seguir otras y otras, cuando fue-
 ran convenientes á la causa pública, segun se entendia entonces? Así al
 comenzar el siglo xvn, parecieron ya inmoderados los precios de 14 por
 uno y siete por uno respectivamente, tasados en el xvi para los censos re-
 dimibles y los vitalicios, y alegando entonces Felipe III, por razon que el
 decaimiento de la labranza y crianza provenia de los muchos censos que
 compraban los capitalistas, como grangeria más cuantiosa y segura; pro-

(1) *De jure Indiarum*, tom. 2, lib. 1, c. 14, n. 113.

(2) *Tract. de cessione jurium*. Lion, 1699, tit. 7, quæst. 2, n. 8.

(3) En esta doctrina se fundan para defender la reduccion de los censos, decla-
 rando que sin ella, no podria verificarse, Juan Matienzo, *Commentaria in librum quin-
 tum Recollectionis legum Hispaniæ*, lib. 5, t. 15, gloss. 3; Luis Mexia, *Laconismus pro
 pragm. qua panis pretium taxatur*. Concl. 6, y otros varios.

mulgó en 1608, una nueva tarifa, no para los censos existentes, sino para los que se impusieran en adelante. Segun ella, los censos redimibles no habian de pagarse á ménos de 20 de capital por 1 de rédito, los vitalicios de una vida á 10 por 1 y los de dos vidas á 12 por 1 (1).

Es digno de notarse cómo Felipe III no osó entónces lastimar los derechos adquiridos por los censualistas, que no habia respetado su severo padre, limitándose á someter á la nueva tasa solamente los censos futuros. Mas si durante aquel reinado se tuvieron tales miramientos, no sucedió lo mismo en el inmediato. Felipe IV, creyendo insuficiente para combatir la usura y remediar el daño público, la pragmática de 1608, expidió otra en 1621, extendiendo las prescripciones de aquella á todos los censos fundados hasta entonces por menores precios, y mandando reducir por consiguiente, al respecto de 5 por 100, todos los que devengaban mayor rédito (2). Esta nueva violacion de la propiedad censal tenia por cierto ménos disculpa que la verificada 58 años ántes, pues al fin los censos, que fueron objeto de la primera, no habian sido impuestos ni reducidos conforme á una tarifa legal precedente, como sucedia á los comprendidos en la nueva pragmática.

Una reduccion semejante sufrieron tambien en aquella época los censales de Aragon. Muchos lugares de este reino, y particularmente los de señorio que quedaron despoblados con la expulsion de los moriscos, se hallaban gravados con aquellos tributos; y como no pudieran pagarlos los pocos vecinos que permanecieron en ellos, ni sus señores, suscitáronse pleitos y disturbios que terminaron las más veces por concordias con los censualistas. Fundándose luego en ellas, las Córtes de 1626 mandaron reducir á 5 por 100 los réditos de los censos impuestos á mayor interés. Así los dueños de los constituidos al 10 por 100 de rédito que permitia el fuero, perdieron la mitad de sus rentas sin indemnizacion alguna. Todavía no se satisficieron con este regalo los censatarios. Los pueblos más gravados pidieron nuevas rebajas: algunos censualistas las otorgaron, sustituyendo, mediante convenios privados, los censos antiguos por otros nuevos más reducidos; y como la causa de los censatarios pasaba generalmente por causa pia, las Córtes de 1646 no dudaron en reducir otra vez los réditos de los censales de las

(1) *Pragmática para que no se puedan imponer censos á ménos precio, etc.* Madrid, 1608. Esta edicion es la única en que se halla integro el texto que se insertó en la Nueva recopilacion, suprimiendo los razonamientos.

(2) L. 13, t. 15, lib. 5. Recop. que extracta la not. 2, t. 15, lib. 10. Nov. Recop.

Generalidades que devengaban 6 por 100, á 4 solamente (1). Asi los censualistas sufrieron en poco tiempo dos reducciones de la renta á que tenian derecho por títulos tan legítimos.

Fué condicion de esta gracia que lo que los pueblos censatarios ahorrasen por efecto de ella, lo emplearan en tomar capitales á censo reducido, con que redimir los antiguos, cuyos réditos no habian podido reducirse, por pertenecer á extranjeros. Con despojos tan repetidos de la propiedad censal, venia ésta á gran descrédito, y así abierto ahora el camino á la redencion por los antiguos tipos, muchos censualistas, para optar á este beneficio, simulaban enajenar sus censos á los extranjeros. Tambien se hubieron de redimir muchos de los que pesaban sobre las Generalidades, cuando las Córtes de 1676 acordaron otra nueva reduccion de ellos, dando el derecho de exigir la redencion á los censualistas que no consintieran la rebaja (2).

IV.

ÚLTIMA REDUCCION Y ESTADO DE LOS CENSOS EN EL SIGLO XVIII

Todavía en el siglo xviii sufrió la propiedad censal nuevos menoscabos y violaciones. Felipe V, fundándose en las repetidas instancias de los pueblos, en la necesidad de pedirles nuevos subsidios, para atender á los gastos de la guerra, que á la sazón estaba sosteniendo dentro de la península, con los enemigos de su dinastía, y en la disminucion del producto de las haciendas, que habia obligado á muchos censualistas á reducir voluntariamente sus réditos, por evitar que los censatarios dimitieran sus fincas, ordenó en 1705, que en adelante no se impusieran censos consignativos á ménos precio de 55 1/5 por 1, y que se redujeran á este tipo los réditos de todos los existentes (3). Así quedaron rebajados del 5 al 3 por 100 todos los censos reducidos ó impuestos de nuevo conforme á la pragmática de 1608, perdiendo los censualistas las dos quintas partes de su renta. Fernando VI siguió en este punto el camino de sus predecesores, mandando en 1750 aplicar tambien á los censos reservativos la ley y tasa de 1705, y á todos los de Aragon que á pesar de la abolicion de sus fueros, ordenada en 1707, habia continuado rigiéndose en este punto por sus leyes especiales (4).

(1) Franco, *Foror. Arag. Codex.* t. 1, p. 608.

(2) Asso, obr. cit. c. 4.

(3) L. 8, t. 15, lib. 10. Nov. Rec.

(4) L. 9, t. 15, lib. id., id.

El mismo espíritu restrictivo de la institucion, y no mucho más respeto á los derechos creados por ella, revelan las leyes dictadas sobre esta materia en el reinado de Carlos III. En la venta de las casas de Madrid, sujetas á censo perpétuo, era costumbre sacar dos laudemios, uno de 2 por 100 para el señor directo, y otro igual, que quedaba en poder del comprador, para cuando vendiera la finca; y aquel monarca mandó no pagar más que un laudemio: redujo asimismo el que se pagaba en las vinculaciones de edificios, cuyo suelo estaba acensuado: autorizó la redencion de los censos perpétuos á razon de 66 $\frac{2}{3}$ por 1, pudiéndose obligar á los censatarios á redimirlos ó cargar su capital sobre la finca, como censo redimible; mandó capitalizar á este mismo tipo, en lugar del 50 por 1 que entonces se acostumbraba, las pensiones de los censos enfitéuticos, para rebajar su importe del precio en la venta de la finca censida; prohibió imponer los censos perpétuos á ménos precio que el doble de los consignativos, y otorgó al dueño del dominio útil el derecho de tanteo, siempre que fuera enajenado el directo (1). Secundando el Consejo este propósito, mandó en 1767, emplear una parte de las rentas de propios en la redencion de censos que abrumaban á los pueblos, y en 1775, con motivo de haberse excusado algunos censualistas de redimir sus censos por ménos cantidad que la pactada en las imposiciones, adoptó la injusta providencia de mandar redimir las censos concejiles por la mitad de su capital, si éste no llegaba á 100.000 rs., y por las dos terceras partes en todo otro caso, pudiendo los pueblos obligar á los censualistas á aceptar estas redenciones, depositando su importe y suspendiendo el pago de los réditos (2).

Verdad es que este espíritu de hostilidad á los censos seguia cada vez más sostenido por la pública opinion. Gonzalez Socueva, que ántes cité entre los modernos adversarios de la institucion, escribia á mediados del siglo XVIII, denunciando y condenando por usurarias muchas condiciones que solian ponerse en su tiempo, en estos contratos, favorables á los censualistas, tales como la de pagar á estos ciertas adealas al tiempo de la redencion, ó la de haber de verificarse ésta en cierto término. Sostenia al mismo tiempo que era aplicable al censo consignativo la ley de Partida que declara la extincion del enfitéutico, cuando se arruina totalmente la finca censida, y que el censo debia asimismo reducirse á medida que se fuera aminorando el producto de dicha finca. Calificaba de usurario todo pacto

(1) L. 13, t. 15, lib. 10. Nov. Recop.

(2) Leyes 14 y 16, t. 15, lib. 10. Nov. Recop.

que tendiera á hacer personal el censo, defendiendo calorosamente las reducciones de réditos. Decía que muchos solares no se reedificaban por temor á los censos con que estaban gravados, y que á veces los censualistas aguardaban ocultos á que algun incauto edificara en el solar acensuado, para sorprenderle despues con su demanda, á pesar de no haber ley expresa que haga renacer en tales casos los censos extinguidos. Se lamentaba de que aún subsistieran censos frumentarios y juros de 5 por 100, á pesar de las leyes que los prohibían, y concluía pidiendo que se hiciera otra nueva reduccion de los réditos, bajándolos al 2 por 100, y se fundaba, entre otras razones, en que no produciendo las fincas más de 2 á 2 $\frac{1}{2}$ por 100, las abandonarían sus dueños, ántes que pagar un rédito superior al producto (1).

D. Vicente Vizcaino, cuyo juicio sobre la moralidad de los censos indiqué arriba, los trató aún más duramente, examinándolos con relacion á la conveniencia pública. «Los censos, decia, son hijos de la ociosidad, y por lo tanto padres de todos los vicios.» Atribuía á su muchedumbre la subida de los alquileres de las casas, porque los dueños descargaban el peso de los réditos sobre los inquilinos. Los labradores abandonaban por ellos su labor, y los edificios gravados con censos no se reparaban por falta de estímulo. Apoyándose en el testimonio del catastro hecho en tiempo de Fernando VI para la contribucion única, aseguró que en las 22 provincias de Leon y Castilla importaban entonces los réditos de los censos 43.193.538 rs., que representaban un capital de 1.459.777.935 rs.; y para que todas estas sumas vinieran á invertirse en la agricultura, la ganadería y el comercio, propuso la abolicion de los censos existentes y la prohibicion de fundarlos en lo futuro. Con este objeto indicó diferentes medios, que consistían ó en despojar al censatario de alguna de las fincas censidas, ó de parte de su dominio, si fuera una sola, para entregarlo al censualista como redencion del capital, ó en disminuir los réditos á la mitad, obligando á los censatarios á pagar además un 5 por 100 por amortizacion del capital, que quedaria así reembolsado en el término de veinte años (2).

Poco despues de Vizcaino, en 1768, escribia D. Tomás Anzano sus *Reflexiones políticas sobre las causas de la alteracion de precios que ha padecido Aragon en lo general de los abastos*, entre las cuales no dejó de seña-

(1) *Estado de los censos*, pár. 2, 3, 4, 5 y 6.

(2) *Discursos políticos sobre los estragos de los censos*.—Madrid 1766.—Números 36, 46, 59, 61, 62, 71, 79, 80, 219, 240.

lar los censos. Decía de ellos que eran motivo visible de la decadencia de aquel reino, y que admitidos únicamente para evitar mayores males, se hallaban «notados de odiosos y debían ser de interpretacion estrecha.» Condenaba los censos concejiles porque importando sus réditos 324.885 libras jaquezas, correspondientes á 41.240.745 de capital, gravaban excesivamente los abastos y traían desordenada la administracion de los Propios. Atribuía semejante efecto á los censos particulares, porque la reduccion de sus réditos habia obligado á los infinitos censualistas á buscar la indemnizacion de aquella pérdida en el aumento de precio de otros artículos, y estimulado á los propietarios con el cebo del corto interés, á gravar sus haciendas por motivos livianos. Concluía proponiendo la redencion sucesiva de los censos concejiles, destinando á este desempeño los sobrantes de propios y otros arbitrios (1). De estos censos, escribía poco despues D. Ignacio Asso, que en 1782 importaba su capital 102.670.781 rs., consumían la sustancia de los pueblos y corporaciones, propagaban la ociosidad y el lujo, y causaban la perdicion del reino (2).

Así prevenida contra los censos la opinión de los hombres ilustrados de la época, Carlos IV no temió dar nuevas acometidas á este género de propiedad. No se atrevió á reducir á 2 por 100, como pretendía Gonzalez Socueva, el rédito de 3, que á la sazón se pagaba; pero combinando los medios de extinguir los censos con los de proporcionar recursos al exhaustó erario, dió un golpe mortal á la propiedad y al derecho. Para restaurar el crédito de los vales reales, que devengaban 4 por 100, libertando al mismo tiempo la tierra de antiguos gravámenes, imaginó que sería el medio más adecuado permitir á los censatarios de todas especies la redencion de sus censos, á pagar en aquellos valores. Así se ordenó, en efecto, en 1799, aunque hasta 1801 no se determinó la forma de proceder en aquella operacion. Entonces se dispuso que los vales fueran admitidos por su valor nominal: que los censualistas no se excusaran de aceptar estas redenciones, cualesquiera que fuesen las condiciones del censo ó carga piadosa y aunque hubiera mediado la de no redimir: que pudieran redimirse de este modo tambien las cargas piadosas: que por los censos enfiteúticos impuestos sobre casas, se pagara un capital doble al que correspondiera, regulado el cánón á razon de 33 1/3 al millar, y otra suma *pro laudemio*: que por los censos redimibles se diera una suma igual á su ca-

(1) Parte 1.ª, reflexion 8, y parte 2.ª, discurso 4, pár. 1 y 3.

(2) *Historia de la economía política en Aragon, Zaragoza, 1798, c. 4.*

pital, si era conocido, y la que resultara capitalizándolos al 3 por 100 si no lo era; y que por los perpétuos y las cargas pías se pagara el doble del capital impuesto, y si se ignoraba cuál fuese, lo que importara la capitalización de las pensiones ó cargas periódicas, al mismo tipo de 3 por 100 (1).

Con estas providencias, que tan mal parados dejaban los derechos adquiridos, hubieron de retraerse los capitalistas, de adquirir nuevos censos, y siendo esta una de las formas en que más solia usarse del crédito, hubo de paralizarse un tanto el curso de los capitales con daño de la real Hacienda y de las corporaciones poderosas que lo empleaban. Así á los tres años se creyó necesario modificar la legislacion vigente sobre la materia, permitiendo constituir nuevos censos sin obligacion de imponerlos en vales reales, y con las condiciones que los interesados juzgaran convenientes, así en cuanto á los plazos en que hubiera de hacerse la redencion, como la moneda en que habia de verificarse el pago, y renunciar válidamente á las facultades que, para hacerlo con vales reales, otorgaban á los censatarios las leyes de 1799 y 1801. Mas no bastaba abrir así el camino á las nuevas imposiciones, pues la redencion de las antiguas en la forma últimamente permitida, era ocasion de graves despojos y ocasionaba en la práctica insuperables dificultades. Fué menester, por lo tanto, ponerles algun correctivo, y para ello se publicó un nuevo reglamento en 1805, en el cual se ordenó que no estuvieran sujetos á redencion los dominios solariegos, los foros y las prestaciones de parte alícuota de frutos: que la de los censos ó cargas cuyo capital no constase, se hiciera segun la costumbre de cada lugar, ántes que por el precio tasado en 1801: que los particulares que no quisieran invertir en vales el producto de las redenciones, recibirían de la Caja de amortizacion una renta equivalente, mientras que no se les restituyera el capital: y que si bien las redenciones se podrian seguir haciendo con vales, seria en tanto que el valor de estos, el dia de su entrega, cupiera en el del capital que debiera consignarse para este efecto (2). Con tales providencias se remedió un tanto el daño, mas no se reparó del todo la injusticia. Esta reparacion ha venido despues de la costumbre que dejó en desuso Carlos IV, y ha logrado que los censos, cualesquiera que sean sus inconvenientes económicos, se consideren como desmembraciones del dominio, y su propiedad tan sagrada como la directa é inmediata de cualesquiera otros bienes inmuebles.

(1) Leyes 21 y 22, t. 15, lib. 10, Nov. Recop.

(2) Leyes 23 y 24, t. 15, lib. 10, Nov. Recop.

LIBRO X

De la propiedad territorial de la Iglesia.

CAPÍTULO I.

Origen y progresos del patrimonio territorial de la Iglesia.

I.

ORÍGEN GENERAL DEL PATRIMONIO DE LA IGLESIA.

La propiedad territorial que, como elemento político del Estado, ayudó á la sociedad durante la Edad Media á reorganizarse y defenderse, pasando por las pruebas más difíciles y peligrosas, consagrada al sostenimiento de la religion y al culto, no contribuyó ménos al engrandecimiento, esplendor y propagacion de la Iglesia. Las instituciones permanentes necesitan elementos de vida de la misma índole, y nada los ha ofrecido nunca, ni los ofrece ahora tan sólidos como el dominio de la tierra. Así es que los templos y las corporaciones religiosas del paganismo poseían inmensas propiedades que, ó eran legalmente inalienables ó no solían enajenarse sino en circunstancias extraordinarias ó con precauciones rigurosas. Así tambien la Iglesia cristiana necesitó y obtuvo desde su origen los recursos temporales necesarios para su subsistencia, aunque no siempre de la misma índole ni de igual solidez, pues esto ha dependido de los tiempos y las circunstancias.

Los bienes raíces no formaban parte, sin embargo, del patrimonio pri-

mitivo de la Iglesia, porque siendo ésta entonces á los ojos de la ley civil una sociedad ilícita, ó no autorizada, carecía del derecho de adquirir, y no podía por lo tanto poseer inmuebles que no era fácil ocultar á las pesquisas de los delatores del fisco. Esta y no otra, política ni religiosa, fué la causa de que la Iglesia no poseyera inmuebles durante los tres primeros siglos de su establecimiento.

Jesucristo habia aconsejado á los que le siguieran y aspirasen á realizar el tipo de la perfeccion cristiana, vender sus bienes y distribuir su importe entre los pobres. Por eso los primitivos fieles, al entrar en el gremio de la nueva Iglesia, solian vender toda su hacienda y entregar su precio á los apóstoles, á fin de que participaran de él todos los hermanos, y de subvenir así á los gastos de la vida, que hacian en comun con ellos. Este procedimiento era á su parecer el más conforme á la letra del consejo evangélico, y tambien el que mejor les permitia eludir las persecuciones fiscales.

Pero como los rigores empleados contra los cristianos no fueron siempre iguales, y aún casi llegaron á desaparecer en algunas ocasiones, en ellas, á pesar de las leyes imperiales, hubo la Iglesia de adquirir algunas propiedades inmuebles. Tan necesario ó conveniente para sus altos fines estimó siempre este género de riqueza. Así en el mismo siglo III, hacian ya algunos cristianos á sus iglesias oblaciones de predios y otros inmuebles, con la condicion de que los conservaran en su dominio y emplearan solamente sus frutos en las necesidades de la comunidad y del culto. Esto se infiere de un edicto expedido por los emperadores Constantino y Licinio en el año 313, mandando restituir á la Iglesia los bienes que Diocleciano y Maximiano le habian confiscado once años ántes (1).

Dada por fin la paz al cristianismo, dejó la Iglesia de ser considerada como sociedad ilegal, y obtuvo en su consecuencia el derecho de adquirir toda clase de bienes, así por donacion ó testamento, como por los demás títulos reconocidos en la ley civil (2). Tras la libertad vino luego la proteccion, pues una vez reconocida la legitimidad y la conveniencia del patrimonio eclesiástico, todos los poderosos adictos al nuevo culto, contribuyeron eficazmente á enriquecerlo. Constantino y los más de los emperadores que le sucedieron, otorgaron á las iglesias pingües donaciones, y entre ellas las

(1) Euseb. *Hist. ecles.* lib. X, cap. 5: y *De vita Constantini*, lib. II, cap. 29.—Lactant., *De morte persecutor.* núm. 5.

(2) *Cod. Justin.* lib. I, t. 2, const. 1.

rentas de algunas ciudades. El emperador Honorio dió á los obispos católicos los bienes que habian sido donados á ciertas congregaciones de los hereges donatistas de Africa (1).

Al mismo tiempo los particulares legaban á cual más, por testamento, cuantiosos bienes á las iglesias de su devocion; y hasta la ley civil vino á favorecer especialmente su liberalidad, eximiendo del descuento de la cuarta falcidia las mandas que se dejaran á los templos. Teodosio el Joven concedió á las iglesias y monasterios todos los bienes hereditarios de sus respectivos clérigos ó monjes, que murieran sin herederos legitimos, segun el derecho civil ó el pretorio. Otras leyes anteriores á Justiniano excusaron de la *insinuacion* ó licencia judicial, que necesitaban para su validez, las donaciones de más de doscientos sueldos áureos, siempre que se hicieran á los templos y lugares piadosos, segun refiere dicho emperador en la constitucion que dictó, sujetando á aquella formalidad así estas donaciones como las profanas, cuando excedieran de quinientos sueldos (2). Y si Justiniano igualó en este punto las propiedades eclesiásticas á las civiles, fué concediendo á las primeras otros grandes privilegios: tales como el de que durara cien años la accion para reivindicarlas, y el de que esta misma accion reivindicatoria pudiera ejercitarse para reclamar los bienes donados ó dejados á la Iglesia por testamento, aunque no hubiera mediado entrega de ellos, que era requisito indispensable para que tal accion pudiera ejercitarse por cualquiera otro adquirente (3).

Que algunos clérigos abusaran de la liberalidad de los fieles no puede negarse. La constitucion del emperador Valentiniano del año 370, prohibiendo á los eclesiásticos aceptar herencias, legados ó donaciones de las mujeres, con quienes bajo pretexto de religion, solian asociarse, es buen indicio de tal abuso (4). Lo mismo debe inferirse de otra constitucion de Teodosio, prohibiendo á las diaconisas instituir por herederos á los clérigos (5). Y en efecto, San Jerónimo deplorando estas leyes, no se quejaba tanto de los emperadores que las habian dictado, como de la avaricia de los eclesiásticos que las habian en su concepto merecido (6). Mas aun prescindiendo de lo que pensaron de tales leyes los padres de la iglesia y particu-

(1) *Cod. Theod.* lib. XVI, t. 5, const. 52.

(2) *Cod. Just.* lib. I, t. 2, const. 19.

(3) *Ibid.* lib. I, t. 2, const. 24.

(4) *Cod. Theod.* l. 20, t. 2, lib. XVI.

(5) *Cod. ibid.*, l. 28, t. 2.

(6) *Epist. ad. Nepotianum, De vita clericorum.*

larmente San Ambrosio, que las condenó del modo más expícito (1), no se descubre en ellas, como han pretendido algunos escritores, el propósito de limitar el derecho de adquirir reconocido á la iglesia, sino el de impedir que lo hiciese por medios vituperables, ó más bien que sirviera tal derecho para fomentar la codicia de algunos de sus indignos ministros. Aún así el mismo emperador Teodosio, autor de la segunda constitucion citada, la derogó á los dos meses de promulgarla. Después el emperador Marciano en 455, confirmando esta derogacion, mandó que se tuvieran por válidas cuantas donaciones hicieran las viudas, diaconisas y vírgenes santimoniales por testamento ó acto entre vivos, á las iglesias, clérigos ó monjes (2). De modo que no solamente no fué el ánimo de Valentiniano ni el de Teodosio moderar las adquisiciones de la Iglesia, sino que ni siquiera pudieron sus leyes producir la menor alteracion en su patrimonio.

Después de la caída del imperio romano, las ideas religiosas, las costumbres y las leyes de la Edad-Media contribuyeron poderosamente al enriquecimiento de la Iglesia. En muchas diócesis era obligacion de los clérigos instituir por heredera de todos sus bienes ó de parte de ellos, á la parroquia ó al templo á que estuvieran adscritos. El Concilio III de Cartago de 398, prescribió á los eclesiásticos el destino piadoso que á su muerte, habian de dar á los bienes que hubieran comprado ó heredado durante su ministerio (3). El de Agde, en Francia, celebrado el año 506, ordenó á los obispos instituir por herederas á sus iglesias, cuando ellos no tuvieran hijos ni nietos y hubiesen dispuesto en vida, de algunos bienes eclesiásticos (4). Carlo Magno ordenó en una de sus capitulares que los obispos legaran á sus iglesias todos los bienes que hubieran adquirido después de su ordenacion.

A fin de facilitar el uso de los legados piadosos, dispuso el nuevo derecho pontificio, que bastara para la validez de su constitucion la presencia de dos ó tres testigos, cuando la ley civil declaraba nulos los de cualquiera especie, que no se constituyesen en testamento ó codicilo otorgado con las solemnidades propias de tales actos. También permitió la misma legislacion canónica á los testadores encomendar á la voluntad de un tercero, la ejecucion de las mandas pias, lo cual estaba rigurosamente prohibido por la ley civil comun. Ambas excepciones en favor de la Iglesia fueron, sin em-

(1) *Secunda epist., cont. Symachum.*

(2) *Novell. Constit. Marcian., tit. 5, l. un.*

(3) *Can. 49. Collect. Canon. Eccl. Hisp.*

(4) *Can. 33. Collect. id.*

bargo, admitidas por los tribunales seculares y llegaron á formar parte de su jurisprudencia.

Entre las opiniones que más contribuyeron á enriquecer el patrimonio eclesiástico, debe contarse la que suponía que con las donaciones y legados á la Iglesia, se ganaba seguramente el reino de los cielos. Practicando muchos fieles incompletamente el consejo de Salviano, que exhortaba á procurar el perdón de los pecados, ofreciendo á Dios los bienes propios «con lágrimas, dolor y arrepentimiento;» entendiendo otros mal con textos evangélicos, que prometían el centuplo y la gloria á los que para seguir á Jesús, abandonasen sus bienes y sus familias, creyeron redimir sus culpas sólo con larguezas ó que bastaba legar algunos bienes á los templos, para ganar el reino de los cielos. Así en la Edad Media no había apenas testamento en que no se legase algo á la Iglesia con alguna de estas cláusulas: *por la salvacion de mi alma, por la redención de mi alma, para remedio de mi eterna salvacion*. Esta costumbre llegó á ser tan general y á arraigarse tanto, que en algunas naciones testaban los obispos en nombre de los que morían sin hacerlo por sí mismos, á fin de que no perdiera la Iglesia la manda pia á que juzgaba tener perfecto derecho.

También contribuyó mucho á enriquecer el patrimonio eclesiástico la antigua costumbre de instituir por herederos á los monasterios, los que profesaban ó vivían en ellos. Muchas reglas monásticas disponían que los monjes ó regulares, ántes de profesar, renunciaran sus bienes en favor de los pobres, de sus parientes ó del mismo convento en que hicieran su profesión. Además los padres, que según la antigua disciplina, ofrecían sus hijos á la Iglesia, solían donar con ellos algunas propiedades. En ciertas órdenes religiosas era costumbre que los novicios, ántes de profesar, dividieran sus bienes en tres partes, una para su familia, otra para los pobres y otra para el monasterio.

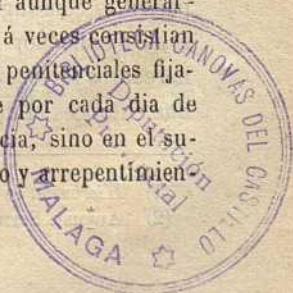
Estos varios usos hubieron de dar lugar á una constitución de Justiniano, disponiendo que cuando el monje no tuviera hijos ni dispusiera previamente de su hacienda, se transfiriese este derecho á su propio convento: que si tuviera hijos, les reservase su legítima, ó les transfiriese todos sus bienes, excepto una porción igual á la misma legítima, que había de dar á la comunidad; y que si muriese sin haber hecho esta partición, no heredaran los hijos más que su legítima y sucediera el monasterio en todo el caudal restante (1). Dedicándose entonces á la vida clerical ó á la mo-

(1) Cavalier. *Inst. can.*, part. 2.^a, cap. 38.—Justin. Novell., 123, c. 38.

nástica tantas personas ricas, y aún algunas opulentas, no es extraño que con tales prácticas creciese en poco tiempo el patrimonio de la Iglesia.

También contribuyó mucho á aumentarlo la costumbre de dar la misma Iglesia en precario, los bienes que con tal objeto, adquiria de los fieles. Este contrato tenia diversas formas, pero la que hubo de ser más provechosa al clero, era aquella que se asemejaba á nuestros vitalicios ó préstamos á fondo perdido. No era otra cosa esencialmente el contrato en cuya virtud entregaba el dueño su propiedad á la Iglesia, para recibirla despues en usufruto temporal ó vitalicio, ó bien una renta en su lugar, igual ó superior á la de la finca cedida. De este contrato, lícito en todos tiempos, reportaba entonces no poca utilidad el *precarista*, pues por su medio, no solamente aseguraba una renta en vida, mayor que los rendimientos de su propiedad, sino que ponía ésta á cubierto de la usurpacion y de la fuerza, que eran tan frecuentes, y aún solia librarla de tributos onerosísimos, que oprimian y arruinaban á los propietarios seculares. Exenta la Iglesia de pagarlos y con más medios que los particulares para conservar y defender sus bienes, podía dar por los de precario una renta muy superior á la líquida que percibieran de ellos sus dueños, realizando, sin embargo, no corta ganancia. Y para que este contrato fuese aún más favorable á los propietarios, mandó el Concilio III de Tours de 813, que los hijos y herederos de los que lo hubieran celebrado, continuaran usufructuando los bienes de precario á título de beneficio, con la obligacion de prestar por ellos á la Iglesia, los mismos servicios que sus padres ó causantes. Así, aunque estos no hubieran estipulado nada á favor de sus hijos, si los tenían al tiempo del contrato ó llegaban despues á tenerlos, la Iglesia, más previsora y más justa que los mismos padres, no consentia que quedaran desheredados en ningún caso.

Algunas propiedades hubo de adquirir también la Iglesia por redencion de penitencias impuestas á los pecadores. Eran éstas en algun tiempo tan largas, que á veces no alcanzaba para cumplirlas toda la vida de los penitentes, y esto dió lugar á la práctica de redimir una parte de ellas con limosnas á los pobres, á los cautivos ó á los templos. Y aunque generalmente se hacian tales limosnas en dinero ó en frutos, á veces consistian también en predios á voluntad del penitente. Los libros penitenciales fijaban, es verdad, la tarifa de lo que habia de satisfacerse por cada día de penitencia, pero la Iglesia no reconoció nunca su eficacia, sino en el supuesto de que tales larguezas significaran dolor profundo y arrepentimiento sincero del pecador.



Y para no omitir ni aún los medios censurables que alguna vez contribuyeron á aumentar el patrimonio eclesiástico, debo tambien recordar el fraude de que se hicieron cómplices algunos prelados, particularmente en Italia, allegando bienes en virtud de contratos simulados en perjuicio del fisco. Como la propiedad eclesiástica disfrutaba tan grandes inmunidades y privilegios, al paso que la secular se hallaba tan gravada é insegura, algunos propietarios daban sus bienes á la Iglesia, para recibirlos despues de ella en enfiteusis perpétua, mediante el pago de un cánon módico. De este modo redimia el propietario las exacciones fiscales y lucraba la Iglesia el dominio directo de tales bienes, en fraude del Erario, con la esperanza de que algun dia vinieran á refundirse en ella ámbos dominios. Los reyes Pipino y Lotario tuvieron que remediar este daño en Italia, sujetando á las cargas públicas comunes, las propiedades adquiridas de aquella manera.

Prevaleciendo en la sociedad cristiana tales opiniones y costumbres, no es extraño que algunos eclesiásticos, traspasando la medida del justo celo por el engrandecimiento de la Iglesia, y abusando de su inmenso prestigio, acumularan más riquezas de las necesarias ó favorecieran la propagacion de los errores que contribuian á proporcionarlas. Los clérigos de aquel tiempo, no por ser más ilustrados que los legos, dejaban de participar del espíritu y de las preocupaciones de la sociedad en que vivian, ni estaban exentos de los errores, de las debilidades y de las pasiones inherentes á la humana naturaleza. Hubo, pues, monjes avaros y opulentos: hubo obispos poco escrupulosos, que distrajeron y dilapidaron los bienes eclesiásticos: hubo clérigos y prelados codiciosos que para acrecentar su patrimonio, emplearon fraudes censurables; pero á estos ejemplos puede oponerse el más autorizado de los padres de la Iglesia, el de los concilios y otros prelados eminentes. San Jerónimo fulminó graves censuras contra los monjes avarientos que acumulaban riquezas (1). San Agustin declaró que no aceptaria para su Iglesia ninguna herencia en perjuicio de los hijos de los testadores y consta que repudió varias, para no perjudicar ni aún á parientes consanguíneos ó afines (2). Aurelio, obispo de Cartago, restituyó á un bienhechor de su Iglesia los bienes que le habia donado, no teniendo herederos forzosos, cuando supo que le habia nacido un hijo, á pesar de que entonces el derecho romano no contaba todavía el nacimiento del pós-

(1) *Hieronim. in epist. ad. Nepotian.*

(2) *August. Sermon. 49 De diversis. — Possidii vita August. cap. 24.*

tumo entre las causas de revocacion de las donaciones (1). El Concilio de Chalons de 845 (Cabillonense II) condenó á penitencia eclesiástica al obispo ó prelado que hiciese clérigo ó monje á algun moribundo para heredarle, y mandó restituir á los herederos, los bienes de este modo adquiridos (2).

Cuando en la sociedad civil prevaleció el sistema feudal, la Iglesia, que se acomoda siempre á las varias necesidades de los tiempos, adquirió tambien muchos bienes á título de feudo, tanto de reyes como de señores particulares. Ya ántes de ese tiempo poseia ella, sin embargo, ciudades y territorios en que ejercia la plenitud de la potestad temporal, como los propietarios alodiales, segun el derecho germánico. Pipino en el siglo viii, dió al romano Pontifice el exarcado de Rávena, con otras ciudades de Italia ganadas á los lombardos, y así vino á constituirse el señorío temporal de la Iglesia en los Estados Romanos. Generalizado luego el feudalismo, varios reyes más piadosos que sensatos, ó creyendo asegurar más así la posesion de sus reinos y provincias, los ofrecieron en dominio directo á la Santa Sede, declarándose ellos meros poseedores feudales y con la obligacion de rendir homenaje y pagar tributo al Papa. En tal concepto, fueron cedidos á la Iglesia los Estados de Aragon, Portugal, Polonia, Silesia, Dinamarca, Hungría, Inglaterra, Escocia y otros.

La costumbre de otorgar los príncipes á las Iglesias ciudades y territorios en feudo, con todos los derechos de la soberanía, empezó á usarse en Occidente bajo la dinastía de los Carolingios; y al principio del siglo xi, en tiempo de Oton I, era ya general y de derecho comun. Así sucedieron los obispos á los condes en el gobierno de tantas provincias. Luego el ejemplo de los monarcas y príncipes soberanos fué seguido por sus propios vasallos, que á su vez subinfeudaron á las iglesias, las mismas tierras que ellos tenían en feudo de sus señores; y de este modo vino á establecerse el sistema de relaciones de vasallaje y de señorío temporal y espiritual más complicado que el mundo hasta entonces hubiera conocido.

Sentimientos piadosos siempre, y necesidades politicas, hijas del espíritu del tiempo, movian el corazon de los príncipes á tanta liberalidad. Seguian la general costumbre y pagaban tributo á las creencias de su tiempo, los que para redimir las penitencias á que estaban sujetos como los otros fieles, llevaban en ofrenda á los altares, las rentas y emolumentos de la soberanía en determinados pueblos ó comarcas. Otros entendian con-

(1) August. Serm. 49 cit.

(2) Concil. Cabillon., cap. 7.

solidar el dominio de la corona en alguna provincia recién conquistada, encomendando su señorío al obispo, porque pensaban, y no sin razón por cierto, que su autoridad moral, su prestigio y las excomuniones en caso extremo, serían más eficaces para el objeto, que el yugo de la fuerza y el imperio de las armas. Así explicaba, en efecto, el antiguo cronista Guillermo de Malmesbury las mercedes de Carlo Magno á la Iglesia. Los monarcas que cedieron al Papa el señorío directo de sus Estados, no tuvieron en general más objeto que afirmar bajo tan poderoso patrocinio, la corona que vacilaba en sus sienes. Otros príncipes donaron á prelados y obispos villas y ciudades que éstos habían fortificado á sus expensas, ya en Italia para resistir á los hunnos, ya en España para hostilizar á los sarracenos.

Pero lo que con más profusión se dió á los monasterios, fué el dominio de bosques y terrenos incultos que los monjes rompieron y fertilizaron, convirtiéndolos en ricas campiñas ó en villas populosas, y que sin ellos habrían quedado improductivos y sin valor durante muchos siglos. No hay, pues, motivo para sentir que la Iglesia adquiriese entonces tanta propiedad territorial: sin ella, ¿quién sabe el tiempo que la riqueza y la civilización habrían tardado en reponerse del gravísimo quebranto que sufrieron con la invasión de los bárbaros!

De las posesiones feudales vinieron sin duda graves daños á la Iglesia. Ocupados muchos obispos en gobernar á sus vasallos y en acompañar á sus señores los reyes, abandonaban con frecuencia el cuidado espiritual de sus ovejas. Algunos se convirtieron en capitanes, con infracción manifiesta de los cánones; pues aunque Carlo Magno les eximió del servicio militar, á que estuvieran obligados por razón de sus feudos, este privilegio no pudo de hecho sostenerse. Los más de los abades y prelados vinieron entonces, por causa de sus posesiones feudales, á recibir su investidura de la corona, con lo que, amenazada la Iglesia de perder su independencia y su autonomía, tuvo que sostener con el imperio una prolongada guerra, en que ambas potestades corrieron grandes peligros y sufrieron dolorosas pérdidas. Pero tampoco puede desconocerse que la sociedad reportó del feudalismo de la Iglesia grandes beneficios. Siendo el clero la clase más ilustrada, la de condición y costumbres más suaves, la en que estaban más arraigados los sentimientos de la caridad y de la justicia, y la que más eficazmente suplía con su autoridad moral el uso de la fuerza, su gobierno debió ser, y fué, más inteligente, más regular, más equitativo, más humano y ménos violento que el de los condes y señores seglares. En aquellos Estados teocráticos eran inducidos los pueblos á la paz y á la observancia de las leyes

más fácilmente con el auxilio de la religion, que lo hubieran sido con la amenaza y con la fuerza. Delitos que en los condados se castigaban con penas de sangre, eran reprimidos en muchos Estados de abadengo con penitencias eclesiásticas. Así los vasallos prefirieron casi siempre el señorío de la Iglesia al de los seglares, y de ella tuvieron que aprender los buenos principios las artes del buen gobierno.

A todas estas adquisiciones, que vinieron á formar el patrimonio de la Iglesia, deben agregarse las verificadas por título oneroso, con el sobrante de las ofrendas voluntarias, de los diezmos y de las primicias. Llenos están los archivos de la cristiandad de escrituras antiquísimas, que prueban cómo las iglesias y monasterios acrecentaban sus dotaciones con nuevas propiedades compradas á particulares.

Tales fueron los títulos que en su origen constituyeron el dominio temporal de la Iglesia. Despues vino la prescripcion á corroborarlos; pero no la prescripcion ordinaria de 20 á 30 años, sino la que purifica los títulos más dudosos y la posesion ménos justificada, la inmemorial de muchos siglos.

II.

ACRECENTAMIENTO EXCESIVO DEL PATRIMONIO DE LA IGLESIA DE ESPAÑA.

No bastaron á contener el rápido acrecentamiento del patrimonio eclesiástico los feudos que á costa de él, otorgaron á sus propios vasallos, Cárlos Martel, Carlo Magno, Teodorico y Cárlos el Calvo, por más que nunca revirtiera á sus antiguos dueños, la mayor parte de los bienes entonces infeudados. Tampoco hubieron de producir efecto sensible en la cuantiosa dotacion de la Iglesia, las infeudaciones de diezmos y otros bienes que solian hacer los obispos á favor de caudillos y señores poderosos, á fin de buscar en ellos el auxilio y la proteccion que habian menester, para guardar su territorio y sus derechos, en tiempos de guerra y de continuos disturbios. Contribuyó no poco al aumento de aquella dotacion, la costumbre tan general en España, desde la monarquía visigoda, en cuya virtud el que edificaba y dotaba una iglesia era dueño de ella y de todos sus productos en oblaciones, limosnas y rentas, menos de la parte necesaria para la manutencion del sacerdote y del culto. Diéronse así á edificar iglesias muchos especuladores, á fin de tener en ellas una propiedad lucrativa, pero como al fin una parte de sus rentas habia de invertirse en el culto, crecía sin cesar el patrimonio eclesiástico. En vano condenó tan indigno tráfico el Concilio II de Braga

de 572, pues como en el periodo de la reconquista fué menester repoblar muchos territorios y para ello fundar nuevas iglesias, tuvieron que edificarlas los dueños del suelo, y como era natural, lo verificaron segun la antigua costumbre, conservando el dominio de ellas y percibiendo la parte de sus frutos que no era necesaria para sostener el culto y sus ministros. La Iglesia volvió á condenar desde el siglo xi, este género de propiedades: el Concilio III de Letran ordenó la restitucion de los diezmos que disfrutaban los legos, prohibiendo su enajenacion en lo futuro; pero ni los más de ellos fueron restituidos, ni dejaron de figurar, en los diplomas de la Edad Media las adquisiciones de iglesias ó de sus rentas por personas seglares.

Así llegó la Iglesia á acumular más propiedades de las que para su justo esplendor, necesitaba y más tal vez de las que permitia la severidad de su primitiva disciplina, agravando sensiblemente este exceso su no siempre adecuada distribucion entre los partícipes. En los primeros siglos del cristianismo habia notado ya San Jerónimo que la muchedumbre de eclesiásticos contribuía á su menosprecio (1). Justiniano tuvo que prohibir la ordenacion de nuevos eclesiásticos, mientras que no quedara reducido el número de cada iglesia, al que le estuviera señalado por sus estatutos (2). El Papa Alejandro III, en el siglo xii, exhortó con su autoridad á los monjes del Cister, á no hacer ciertas adquisiciones, y les mandó pagar diezmos ó transigir con las iglesias que se los reclamaban, dando por razon, lo mucho que se habian aumentado y enriquecido desde que obtuvieran de la Santa Sede la exencion de aquel impuesto (3). Así los abades de aquella órden requeridos por Inocencio III, á satisfacer las quejas de las iglesias perjudicadas, acordaron en el Concilio de Letran de 1216, no volver á adquirir bienes sujetos al pago del diezmo; y el Concilio, no sólo aprobó esta constitucion, sino que la extendió á las demás órdenes monásticas y prohibió el establecimiento de nuevos institutos religiosos (4). Esta misma prohibicion repitió el Concilio de Lion de 1274, mandando además reducir las órdenes religiosas, mediante la supresion de las establecidas despues del IV de Letran, sin autorizacion pontificia (5).

No habiendo tenido efecto, sin embargo, esta reduccion, ó no bastando á impedir que con la facultad de elegir sepultura que disfrutaban los fieles,

(1) *Multitudo clericorum illos contemptibiles facit*. Epist. ad Eugen. episc.

(2) *Novell. Collat. III*, tít. III, c. I.

(3) *Decret. lib. III*, t. 30, c. IX.

(4) *Ibid.* t. 36, c. IX.

(5) *Sext. Decr. lib. III*, 17, c. ún.

afluyese á los conventos la mayor parte de las ofrendas, con perjuicio de las parroquias, Bonifacio VIII, al fin del siglo xiii, atribuyó á éstas el derecho á percibir la cuarta parte de todo lo que diesen los fieles á los regulares, en su última enfermedad ó por testamento (1). Clemente V, en el Concilio de Viena de 1311, previno á los eclesiásticos que no retrajeran á los testadores de las restituciones debidas, ni procurasen para sí ó sus conventos y en perjuicio ajeno, legados ó limosnas en compensacion de débitos dudosos ó restituciones inciertas (2). El Concilio de Costanza del siglo xv reiteró estas providencias, con motivo de quejas que dió el clero de su inobservancia y mandó á los religiosos mendicantes vender los inmuebles que poseian, ya en particular, ya en comun, con infraccion de sus reglas. Nuestro cardenal Gonzalez de Mendoza negó en el mismo siglo, la licencia que se le pidió para erigir nuevos monasterios, fundándose en que habia demasiados y eran perjudiciales algunos á los pueblos que los sustentaban. El mismo Concilio de Trento, tan celoso favorecedor de los institutos monásticos, prohibió á los conventos recibir merced alguna de sus novicios, fuera de la comida y el vestido (3). Urbano VIII en el siglo xvii autorizó en general, la enajenacion de los bienes eclesiásticos (4).

Si los pontífices y los prelados reconocian de antiguo, la necesidad de moderar un tanto el exceso que notaban, así en las riquezas de la Iglesia, como en el número de sus ministros, júzguese con cuánto ardor clamarian por el remedio, cuando el mal llegó á ser más grave, el estado seglar que principalmente lo sentia y los que por aficion ó por oficio, trataban de la cosa pública. Advirtieron el daño y pidieron, aunque en vano, el remedio, las Cortes de Valladolid de 1523, las de Toledo de 1525, las de Segovia de 1532 y las de Madrid de 1528, 1534, 1579 y 1588. Antonio Perez en su *Norte de príncipes*, si en efecto es autor de este libro, que con su nombre corre impreso, pedia á Felipe II que considerara lo que habian crecido los bienes eclesiásticos, y que si no se les ponía término y medida, habian de venir á ser de la Iglesia todas las casas, heredades y juros del reino, con grave perjuicio de los seglares y del real Erario. Tambien llamaba la atencion del príncipe sobre el número excesivo de eclesiásticos, diciendo eran tantos, que necesitaban cuanto poseian é iban aumentando y que no habia

(1) Sext. Decr. lib. III, tit. XII, c. I.

(2) Clement. lib. III, tit. VII, c. II.

(3) Ses. 25, c. III.

(4) *Bullar. magn. Const. Urban. VIII*, 715, pár. 1.º

de quedar en breve quien labrase la tierra, ni quien defendiese la república, ni quien amparase el mismo patrimonio de la Iglesia. En el mismo siglo xvi ó poco después, D. Tomás Cerdán escribía en el reino de Valencia sus *Reglas de Estado* (1), una de las cuales era, en su concepto, evitar la muchedumbre de eclesiásticos y de regulares, sobre todo cuando no había para ellos una dotación adecuada.

Mas en el siglo xvii fué en el que con el mayor incremento del mal, tomó vuelo la opinion que lo condenaba y pedía el remedio. Hubo de ser ésta entonces tan general y tan poderosa, que el mismo Consejo de Castilla, á pesar de su espíritu ordinariamente poco dado á novedades, fué quien inició la reforma en este y otros puntos, en su célebre consulta de 1619. Fijando su consideración aquel alto cuerpo sobre todos los males que á la sazón padecía el Estado, no pudo ménos de señalar el de la muchedumbre excesiva de personas y propiedades eclesiásticas. Que se tenga la mano, decía, en dar licencia para muchas fundaciones religiosas, y que se suplique á Su Santidad ponga término en esto, representándole los grandes daños que se siguen del aumento de comunidades y de religiones, entre ellos, la mengua de la población útil á la corona y el incremento constante de bienes eclesiásticos que salen del estado seglar, empobreciéndole y debilitándole para levantar las cargas públicas (2).

Al mismo tiempo que el Consejo acordaba su célebre consulta, escribía Sancho Moncada su *Restauración política de la monarquía*. Este autor no juzgaba como otros que la muchedumbre de eclesiásticos fuese una de las causas de la despoblación del reino, ni que con disminuir la rentas eclesiásticas, se remediaría el mal estado de la real hacienda; pero conviniendo en que había más eclesiásticos que los necesarios y en que esto era causa de que se relajase su disciplina, aconsejaba se pidiese una bula al Pontífice prohibiendo ordenar de sacerdote á quien no fuera bachiller en teología ó cánones (3).

La consulta del Consejo hubo de producir en el público sensación profunda, cuando tantos escritores políticos se apresuraron á comentarla ó tomaron pie de ella para promover las reformas. D. Pedro Fernandez Navarrete, glosando y aprobando, aunque canónigo, aquel importante docu-

(1) *Veriloquium en reglas de Estado...* enderezado á la conservación de la autoridad del rey Felipe III, Valencia 1604. Su autor Cerdán fué abogado fiscal y después del Consejo en el reinado de Felipe II.

(2) Gonzalez Dávila, *Historia de Felipe III*, p. 225.

(3) Dicha obra, discurso 7.

mento (1), propuso que no se diera real licencia para fundar nuevos conventos, sino cuando su necesidad estuviese muy justificada: que se procurase la disminucion de eclesiásticos, suplicando al Santo Padre exigiese mayor edad que la señalada en los cánones, para entrar en religion y para ascender al sacerdocio, y aunque sin opinar como otros respecto á la excesiva hacienda de la Iglesia y su influjo en el empobrecimiento del estado seglar, aconsejó á las catedrales y conventos que tenian más dotacion de la necesaria en capellanías y aniversarios, renunciasen algunos de ellos, así como Moisés no admitió ofrendas para la ereccion del tabernáculo, luego que hubo reunido las necesarias para costearla (2).

Jerónimo de Zevallos, jurisconsulto famoso y distinguido político, escribiendo sobre materias de Estado, á poco de ser conocida la consulta del Consejo (3), juzgaba que la muchedumbre de eclesiásticos era una de las causas de la despoblacion de España y el excesivo número de religiones y conventos, así como sus demasiadas riquezas, origen del empobrecimiento del estado seglar y de la disminucion de las rentas de la corona. Hágase la cuenta, decia, de los bienes y juros que disfrutaban las religiones, y se verá que es más lo que está fuera del comercio, que lo que poseen los legos, con la obligacion de sustentar en paz y en guerra á los eclesiásticos; y calculando la parte de las herencias que generalmente iba á parar en aquel tiempo á la Iglesia, exclamaba: Si tales adquisiciones siguen, así como Dios repartió la tierra entre las tribus de Israel, no dando á la de Levi más que un décimo de los frutos, ahora se llevarán los eclesiásticos los nueve décimos de la propiedad, además del diezmo. Aumentaban el daño, en su concepto, «las nuevas religiones de recoleccion (mendicantes), que cada día se iban extendiendo,» y así decia con Pedro Gregorio, que si no se ponía límite á tantas fundaciones, todo el reino seria monasterios. Nueve mil conventos de varones y más de 10.000 religiosos habia entonces en España, segun varios autores; cuyas eran las casas principales de las ciudades, y Zevallos citaba 25 solares de Toledo convertidos en monasterios, afirmando que pocas casas de aquella ciudad no pertenecian á iglesias ó corporaciones eclesiásticas, ó no eran tributarias de ellas. Por todo lo cual concluía proponiendo la reduccion del número de clérigos, que se fijase el necesario

(1) *Conservación de monarquías.*

(2) Dicha obra, discurso 42 al 45.

(3) *Arte real para el buen gobierno de los reyes y principes de sus vasallos*, Toledo, 1623.

en cada iglesia y no se ordenaran otros, sino para ocupar las vacantes que ocurriesen, y que se acudiera á Su Santidad con este objeto, así como para que pusiera remedio al exceso de bienes, sin perjuicio de gravar los que se trasfirieran á la Iglesia conforme á la ley de amortizacion de don Juan II (1).

En el mismo sentido escribia poco despues Lopez Bravo su notable opúsculo *De rege et regendi ratione* (1627). Tambien pedia que no hubiera más sacerdotes que los necesarios, ni se permitiera erigir más iglesias ni monasterios que los convenientes, segun se prevenia en la consulta citada de 1619 y que se limitase el número de religiosos. Afirmaba que las muchas propiedades de la Iglesia eran causa de la extremada desigualdad que se advertia en la distribucion de la riqueza, y opinaba como Zevallos, que si pronto no se ponia remedio, no se hallaria con el tiempo, una heredad profana (2).

No deploraba ménos el exceso de personas y propiedades eclesiásticas el insigne repúblico D. Diego Saavedra en sus *Empresas políticas*, escritas algo más tarde. Este exceso desnivelaba á sus ojos las fuerzas del estado seglar y perjudicaba á la misma Iglesia, aunque hacia la salvedad de que «quien inspira al estado eclesiástico, asiste á su conservacion, sin daño de la república.» Sin embargo, para que no creciera el poder de los exentos de las cargas públicas, á la vez que menguaba el del príncipe, y se moderara el exceso de las mandas piadosas, proponia que los parientes dentro del cuarto grado, fueran declarados herederos forzosos (3).

Diego de Arredondo, contador de rentas, en un *Discurso sobre el restablecimiento de la monarquía* (4), dirigido á Felipe IV, ponderando el mismo mal, decia que si pronto no se aplicaba algun remedio, no quedaria dentro de cuarenta años ninguna finca de provecho, que á no ser de mayorazgo, no perteneciera á la Iglesia. El remedio que proponia era limitar las adquisiciones de ésta en lo futuro y subrogar algunas obras pías en otras más útiles, como casas de expósitos, hospicios, pensiones á soldados viejos y otras. Aún iba más adelante el notable político del reinado de Carlos II, Miguel Alvarez Osorio, pues en su *Zelador general para el bien comun* (5):

(1) *Arte real*, etc., documento XXIII.

(2) Lib. 3, fol. 2 y 26 v.º

(3) Empresa 66.

(4) Citado por Campomanes en su respuesta fiscal en el *Expediente* del obispo de Cuenca.

(5) Campomanes, *Apéndice á la educacion popular*, t. 1, p. 298.

pedia que, de acuerdo con la Santa Sede, se redujera el número de ordenandos y se promulgara una ley obligando al clero, bajo pena de extrañamiento, á vender dentro de cuatro años los bienes raíces que tenia adquiridos.

Las Córtes del siglo xvii no podían ser indiferentes á los clamores de la opinion, como tampoco lo habían sido las del siglo precedente. Felipe III había consultado este grave negocio en 1603, con el general de la orden de San Francisco, fray Francisco de Sosa, y con fray Sebastian Bricianos, su predicador, siendo ambos de parecer que debía ponerse tasa á las fundaciones de nuevos conventos. Este último religioso escribió con tal motivo un notable informe, en que refería cómo se habían multiplicado los monasterios, haciéndose el fundarlos punto de emulacion y vanidad, con grave daño de los pueblos. También dieron su parecer en el mismo sentido otros prelados, teólogos y religiosos de nota. Así, cuando las Córtes de 1619 hicieron presentes los daños que se habían seguido del establecimiento de nuevas religiones de Recoletos, y nuevos monasterios de las antiguas órdenes, poniendo en su vista por condicion, para otorgar el servicio de millones, que mientras éste durase, no había de permitirse la fundacion de nuevos monasterios, ni aún con el título de hospederías, misiones, residencias ú otros semejantes, no hubo de ser difícil obtener el asentimiento de Felipe III. Escribía poco despues el maestro Gil Gonzalez Dávila, cronista de aquel príncipe, que si el rey Felipe IV pidiera parecer á los obispos y al Consejo sobre el modo de evitar que hubiese tantos clérigos, fuera inspiracion divina: que en su tiempo sólo las órdenes de Santo Domingo y San Francisco tenían en España 32.000 religiosos, y los obispados de Calahorra y Pamplona, 24.000 clérigos; y concluía así: «Sacerdote soy; confieso que somos más de los que son menester, y que ya es tiempo de renovar un cánón de un concilio lateranense... para que no sean admitidos á las órdenes más ministros de los que sean menester» (1).

Para fundar D. Felipe Alosa su exhortacion al estado eclesiástico á que contribuyera al Erario con algun donativo, alegaba que su hacienda era mayor que la del estado seglar; y que éste se hallaba sin la sustancia que pedían sus cargas, sin las rentas que requerian sus empeños, sin gente para el cultivo de sus heredades y sin medios de servir al Rey. «Hoy lo vemos, añadía, en poblaciones cortas, donde con la suavidad que suelen, se

(1) *Historia de la vida y hechos de Felipe III*, cap. 85. — Escrituras y acuerdos de los servicios de millones.

han entrado algunas familias religiosas, y poco á poco van adquiriendo las mejores posesiones, haciéndose señores de todo el contorno, empobreciendo á los seglares, quedando aquellos solos que necesitan para que labren sus tierras, viniendo á ser criados jornaleros los hijos ó nietos de los que eran ántes verdaderos señores de las heredades que labran» (1).

Justo es, sin embargo, advertir que aunque este mal fuese reconocido y su remedio indicado por los repúblicos más ilustres del siglo xvii, no faltaron tampoco teólogos y políticos que negaran el uno y combatiesen empuñadamente el otro. A Zevallos contradijo un impugnador ardiente, don Gutierre Marques de Careaga, que saliendo á la defensa del estado eclesiástico, calificó las doctrinas de aquel autor de «maquiavélicas, contrarias á la teología y los cánones, y agregado confuso de licenciosos pensamientos.» En su concepto el único medio de remediar los reinos sus necesidades, era acudir á Dios con oraciones y con ofrendas: la disminución de pechos, originada por las adquisiciones de la Iglesia, era liviano inconveniente, atendido el provecho que de ellas obtenian los fieles: los aumentos de la monarquía desde fines del siglo xv eran debidos á la liberalidad de los Reyes Católicos y sus sucesores, con la Iglesia: las donaciones piadosas nunca menoscababan los recursos del Estado, porque con los buenos años y sucesos, daba Dios más de lo que recibia; y si, alguna vez fueran tantas las adquisiciones eclesiásticas que perjudicaran al Estado, á nadie más que al Papa correspondia poner remedio; mas este caso no creia el autor que jamás ocurriese (2).

En igual sentido, pero no con mejores argumentos, trató esta cuestion D. Juan de Madariaga en su *Gobierno de Príncipes*, que dió á luz por primera vez en 1617. A sus ojos cuanto se decia sobre el exceso de riquezas eclesiásticas, era obra del enemigo comun, que asentaba en los pechos de algunos hombres celos sacrílegos del clero: no era lícito á los seglares censurar á los eclesiásticos, porque esto se hallaba reservado á Dios, ni murmurar de sus riquezas; y siendo Dios dueño del mundo y de cuanto en él se contiene, de él y por lo tanto de la Iglesia, tenian los emperadores y reyes cuanto poseian, sin que hubiese apenas reino ni señorío que se disfrutase con mejor título que el que ella otorgaba (3). Madariaga creia, como

(1) Exhortacion al estado eclesiástico para que con voluntarios donativos socorra los ejércitos católicos de España. Madrid 1655, cap. 2.º

(2) *Por el estado eclesiástico y monarchia española*, pár. IX y XXXII.

(3) Cap. 39.

se ve, en la soberanía temporal universal del Papa proclamada en la Edad Media, por más que nunca fuera de hecho reconocida, y con esta hipótesis consideraba justificada la absoluta independencia del clero y la incompetencia de la potestad secular para mezclarse en sus asuntos. Otros escritores, que no iban tan lejos en sus opiniones ultramontanas, creían como el Padre Juan Eusebio Nieremberg (1), que no mostraban espíritu cristiano los que procuraban la disminución del estado religioso, para que no se menoscabara el estado seglar.

Mas esta oposicion y la de otros teólogos no contuvo el vuelo de la opinion más ilustrada, que queria moderar un tanto las adquisiciones de la Iglesia. En el siglo xviii tuvo esta opinion mantenedores esforzados y aún más atrevidos que en el precedente. D. Melchor de Macanaz, fiscal del Consejo, en un informe que presentó á este cuerpo en 1713, sobre abusos de la curia romana, procuró demostrar que la muchedumbre de institutos religiosos y sus adquisiciones excesivas cedían en perjuicio de los establecimientos de beneficencia, de las parroquias pobres, de la república y de la disciplina eclesiástica. Propuso en su consecuencia que se redujera el número de las religiones al pié en que quedaron cuando las reformó el cardenal Cisneros: que las fundadas despues por españoles, como la de San Ignacio y la de San Juan de Dios, se conservaran, sin embargo, pero con rentas moderadas y sin adquirir otras nuevas, excepto con real licencia: que las religiones reformadas de San Agustin, Carmelitas, Trinitarios, Mercedarios, Franciscanos y Capuchinos quedaran reducidas á sus respectivas matrices, aplicándose los bienes de los conventos, por tal reduccion suprimidos, á institutos de beneficencia, seminarios y colegios; y que el número de conventos en cada pueblo fuese proporcionado al de sus habitantes pecheros, pero sin que hubiese en ninguno más de una comunidad de religiosos y otra de religiosas de la misma orden (2).

Pero que Macanaz, extremado regalista y educado en la escuela galicana, profesara estas opiniones, no es tan de admirar como que las sustentara tambien en parte, un jesuita dignísimo, el padre Juan Cabrera, en el libro que publicó en 1719 con el título de *Crisis política determina el más florido imperio y la mejor institucion de príncipes y ministros*. Este escritor confesaba que era excesivo en algunos pueblos el número de eclesiásticos,

(1) *Obras y dias: manual de señores y príncipes*. 1628.

(2) Publicó este informe Llorente en su *Coleccion diplomática de varios papeles sobre disciplina eclesiástica*.

y citaba alguna villa de Extremadura, donde para 1.000 vecinos, existian 80 clérigos: juzgaba que tal exceso era contrario al interés de la Iglesia: condenaba las ordenaciones á título de patrimonio, fuera de raros casos, y abogó por la reduccion de las capellanias cortas, que servian de pretexto para ordenarse sin la cóngrua suficiente. Este modo de apreciar la cuestion en cuanto al clero secular, parecia prometer en cuanto al regular un juicio análogo; mas léjos de ser así, por una inconsecuencia inexplicable, lo que en los clérigos parecia á Cabrera grave daño, era á sus ojos en los frailes y monjes ventaja irreprochable. Hízose cargo de todas las objeciones que contra la muchedumbre de estos y la demasia de sus bienes, habian alegado los escritores políticos, y consignado el Consejo en su célebre consulta; pero más bien con el fin de refutarlas que con el de robustecerlas. Para que no se aumentara el número de institutos monásticos, bastaba en su concepto observar las leyes que no permitian fundar nuevos conventos sin licencia de los prelados y de las autoridades municipales, y el concilio Tridentino que mandaba no hubiese en cada monasterio más individuos de los que se pudieran mantener con sus rentas. Pero aún esto era á su parecer precaucion vana, porque siendo Dios mismo quien traia las religiones al mundo y quien las enriquecia y adelantaba, no creia que hiciesen falta á la república los que eran verdaderamente llamados á hacer en ellas vida más perfecta. Tampoco creia que por haber muchos buenos religiosos faltase á la república sustancia ni servicio, ni la labor á los campos, y si á pesar de todo, añadia, sufriese alguna mengua la poblacion ó la riqueza, Dios tiene medios de repararla, pues que da ciento por uno, segun el Evangelio. Querria, pues, que los gobernadores de las ciudades solicitasen el establecimiento de nuevas religiones, y mostraba como ejemplo más digno de ser imitado que la república de Platon y la de Tomás Moro, el de aquella ciudad de Oxirinto que contaba tantos monasterios como casas y en ellos 50.000 religiosos. No veia inconveniente en la acumulacion de riquezas en los monasterios, puesto que solian invertirse mejor que las de los legos, y juzgaba que la despoblacion del reino no debia atribuirse á la muchedumbre de conventos, por cuanto se observaba que allí donde habia más virgenes consagradas á Dios, eran más fecundos los matrimonios (1). Por todo lo cual se ve que la argumentacion en defensa de la muchedumbre ilimitada de personas y de propiedades eclesiásticas no era más fuerte, ni más fundada

(1) Trat. III, cap. 6, pár. 5.º y 6.º

en el siglo xviii, que en el xvii; pero no se concibe cómo era aplicable á los regulares y no al clero secular, á no suponer que Cabrera escribía inspirado por el amor á su orden, que sobre ser una de las más numerosas y ricas, era de las establecidas despues del Concilio IV de Letran y contra la limitacion puesta en él á la creacion de nuevos institutos religiosos.

Y la verdad es que en aquel tiempo no podia escribirse sobre los intereses políticos y económicos de España sin tropezar con la cuestion importante de la distribucion de la riqueza entre el estado seglar y el clero; y como ya era imposible negar que fuese desproporcionada, los escritores que no se atrevian á deducir de este hecho sus naturales consecuencias, en el orden político, buscaban en el sobrenatural razones para eludirlas. Si alguno se abstenia, por escrúpulo de conciencia ó por otras consideraciones, de pronunciar su opinion en tan interesante debate, harto se le conocia la que su razon profesaba. Así D. Jerónimo Ustariz, distinguido economista del reinado de Felipe V, protestando en su *Teórica y práctica del comercio* (1), que no se atrevia á decidir si era ó no excesivo el número de conventos y el de eclesiásticos, recordaba y recomendaba, sin embargo, todas las autoridades que resolvian esta cuestion afirmativamente, como la consulta citada del Consejo, la condicion de millones ántes referida, Fernandez Navarrete y Saavedra.

Pero los que en el siglo xviii ventilaron esta cuestion con más libertad y conocimiento, despues de Macanaz, fueron los fiscales del Consejo, con motivo de haberse tratado en el reinado de Carlos III, del restablecimiento de las antiguas leyes de amortizacion. Moñino, Campomanes y Carrasco, en diferentes informes que corren impresos, demostraron el exceso á que habian llegado las propiedades de la Iglesia, los males que de ello se seguian á la religion y al Estado, y la necesidad de poner pronto remedio. Decia Moñino contestando á cierto papel del obispo de Cuenca, que dió lugar al expediente contra este prelado, que anda impreso, que segun el catastro de Zaragoza de 1725, 5.699 eclesiásticos disfrutaban 805.165 reales de renta, al paso que 24.042 seglares, que constituian el vecindario, poseian solamente 553.646 reales. En otra alegacion de D. Francisco Carrasco, fiscal del Consejo de Hacienda en 1764, se lee que, segun los estados que suministró al conde de Campomanes D. Francisco Cuellar, secretario de la junta de única contribucion, por orden del superintendente general de Hacienda, poseian en aquella época los vasallos seglares 61.196.166 medidas de tierra en toda

(1) Madrid, 1726, cap. 107.

España, fuera de las provincias exentas; y las manos muertas eclesiásticas, incluso el clero regular y el secular, 12.204.063, ó sea una sexta parte de todas las tierras apropiadas. Había al mismo tiempo en el indicado territorio 6.322.172 habitantes seglares y 141.840 individuos dedicados á la Iglesia, entre clérigos, religiosos de ambos sexos y sirvientes de éstos y de los hospitales y casas de enseñanza; de modo que tocaban á cada uno de estos 86 $\frac{1}{3}$ medidas de tierra, y á cada seglar 9 y $\frac{1}{3}$ solamente. Según los mismos datos, poseían los 6.322.172 legos 29.006.238 cabezas de ganado, y los 141.840 individuos del clero 2.935.277; de modo que correspondía á cada uno de los primeros 4 $\frac{1}{3}$ cabezas, y á cada uno de los últimos 20 $\frac{1}{3}$. Poseía, pues, el clero la décima parte de todo el ganado de España. Del producto de todos los demás bienes, fuera de las tierras y ganados, pertenecían al estado seglar 252.086.009 rs., y á los eclesiásticos y lugares pios 164.154.489, ó sea 40 rs. aproximadamente por cada lego, y 1.157 por cada persona dedicada á la Iglesia (1). Era, pues, dueño el clero, según estos cálculos, á fines del último siglo, de la sexta parte de todas las tierras apropiadas y de una tercera parte de la riqueza mueble y semoviente. Tal vez no fuera exacta por error ó de propósito esta estadística, como formada en tiempo en que eran harto inseguros los medios de ejecutarla; pero aunque así fuese, y aún atribuyendo alguna parte de su exageración al apasionado intento de los que se sirvieron de tales noticias para quebrantar el poder del clero, todavía resulta demostrado hasta la evidencia la absurda distribución á que había llegado la riqueza territorial, por la parte excesiva que habían alcanzado en ella el clero y las manos muertas eclesiásticas.

CAPÍTULO II.

De la inmunidad de tributos otorgada á la Iglesia.

I.

LA INMUNIDAD DESDE EL SIGLO IV AL XII.

La inmunidad de tributos más ó ménos restringida fué uno de los privilegios con que los emperadores cristianos favorecieron siempre á la Iglesia. Constantino contaba entre los bienes exentos de pechos los de su

(1) Campomanes, *Alegaciones fiscales*, t. III, pág. 157.

patrimonio propio y los de la Iglesia católica (1). Los emperadores Constantio y Constante en el año de 353 eximieron á los clérigos de ciertos servicios personales ínfimos, llamados *munera sordida*, de otras cargas comunales, del censo con que tanto ellos como sus mujeres é hijos estaban gravados, y de todo impuesto por razon de las tiendas ó talleres que poseyeran, siempre que invirtiesen su producto en mantener á los que trabajaran en ellos y en el socorro de los pobres (2). Luego los emperadores Constante y Juliano, despues de haber confirmado estos privilegios en 357, los restringieron en 360 con motivo de la inmunidad general de todas las tierras de la Iglesia, que acababa de decretar el Concilio de Rimini, disponiendo que los clérigos continuaran exentos de las cargas sórdidas (*sordida munera*) y aún del impuesto de negociantes por algun corto tráfico, que tuvieran para procurarse alimento y vestido; pero que todos los demás que ejercieran algun comercio pagaran dicho impuesto, y que los eclesiásticos poseedores de predios, no solamente no eximieran de pechos las heredades ajenas, sino que pagarian por las propias, los tributos fiscales acostumbrados. Aquellos emperadores justificaban esta resolucion con la autoridad de ciertos obispos de Italia, España y Africa, que habian reconocido la justicia y la conveniencia de que fuera de las tierras que formaban los *mansos* de las iglesias, todas las demás propiedades de los clérigos estuvieran sujetas á tributo (3). Tambien se infiere de esta ley que ya en aquel tiempo se cometia el fraude de excusar de pechos algunas fincas, haciéndolas pasar como propiedad eclesiástica. Poco despues, en 370, los emperadores Valentiniano y Valente libraron del censo personal propio de la plebe, á las viudas y huérfanos que se consagraban perpétuamente á la Iglesia (4). Honorio y Teodosio en 412, reprodujeron la exencion de cargas sórdidas, que disfrutaban los predios dedicados al sostenimiento del culto, expresando las gabelas que en su consecuencia no debian exigírseles, conminando con graves penas al que las exigiera y declarando que tales fincas sólo estarian gravadas con la contribucion meramente canónica (5). Mas

(1) „Præter privatas res nostras et ecclesias catholicas, et domum clarissimæ memoriæ Eusebii ex-consule et ex-magistro equitum, et Arsacis regis Armeniorum, nemo ex nostra jussione, præcipuis emolumentis familiaris jubetur substantia.“ L. 1, tít. 1.º, lib. XI, Cód. Theod.

(2) Cód. Theod. l. 10, tít. 2.º, lib. XVI.

(3) Ibid. l. 15, t. 2, lib. XVI.

(4) Ibid. l. 6, t. 10, lib. XIII.

(5) Ibid. l. 40, t. 2, lib. XVI.

hubieron de ofrecer algunos inconvenientes los términos generales de estas constituciones, cuando los mismos emperadores en 425, declararon que entre las cargas sórdidas, no había de contarse la de contribuir á la construcción y entretenimiento de carreteras, puentes y calles, de cuyo servicio no debían eximirse ni aún las casas dedicadas á Dios, ni las iglesias (1).

Pero como el número de los exentos y sus haciendas creciesen más cada día, y como los mismos privilegios de exención se interpretasen cada vez de un modo más extensivo, fuéronse disminuyendo en la misma proporción los recursos del fisco, dando esto lugar á que los emperadores Teodosio y Valentiniano aboliesen de un golpe la mayor parte de las exenciones. Con este objeto dictaron en 441 una nueva constitución, derogando las que disfrutaban por razón de sus propiedades las dignidades del imperio, la milicia y la Iglesia, restableciendo los censos á que tales heredades hubiesen estado sujetas á favor del Erario, declarando que no eran cargas sórdidas para la generalidad de su exención, una multitud de servicios públicos, y reduciendo la inmunidad del clero y de las clases privilegiadas á los censos personales (2). Justiniano más tarde declaró sujeta la Iglesia á las cargas municipales, al servicio de bagajes para los ejércitos y á contribuir á la construcción de caminos y puentes, pero al mismo tiempo eximió del tributo que se pagaba por las adquisiciones á título lucrativo, las que hicieran los establecimientos de beneficencia (3). Después amplió un tanto la inmunidad eclesiástica, confirmando la de las cargas sórdidas, extendiéndola á las contribuciones extraordinarias y limitando las de obras de puentes y calzadas á las corporaciones eclesiásticas ó clérigos que tuvieran fincas en los mismos lugares en que las obras habían de ejecutarse (4).

Carlo Magno, siguiendo las tradiciones del imperio, confirmó la inmunidad de los predios consagrados á Dios, pero manteniendo la obligación de contribuir por ellos á la construcción y reparación de los caminos y puentes, al alojamiento del emperador, su familia, sus oficiales y sus legados, y mandando que las heredades pecheras que la Iglesia adquiriese, continuasen pagando el tributo ó volvieran á los herederos del enajenante, á fin de que no dejara aquel de satisfacerse. Sólo se habían de eximir de

(1) Cód. Theod. l. 6, t. 3, lib. 15.

(2) Novell. Valentin., III, t. X.

(3) Cód. Justin., leyes 11, 7 y 23, t. 2., lib. I.

(4) Novell. Justin., 131, t. 14, c. 5.

todos estos pechos y gabelas los *mansos* de las iglesias, las casas y huertos contiguos á ellos, de la misma pertenencia, las oblaciones y los diezmos (1).

La inmunidad de las propiedades eclesiásticas estuvo, pues, limitada durante muchos siglos á una corta porcion de ellas y á contados tributos fiscales. Los santos padres no dudaron del derecho con que el Estado podia exigirlos al clero. San Ambrosio creia que habiendo pagado censo el hijo de Dios, nadie podia eximirse de satisfacerlo (2). Por eso decia en otro lugar: «Si el emperador pide tributos no se lo negamos, pues tributo pagan los campos de la Iglesia» (3). El Papa Urbano II fundaba la obligacion del clero á contribuir al Estado con una parte de sus rentas, en el pasaje evangélico, segun el cual Cristo mandó á Pedro pagar tributo, no con el pez entero que habia sacado del mar, sino con la moneda encontrada en sus entrañas, y añadia venir establecida de antiguo la obligacion de pechar la Iglesia á los emperadores, á fin de que ellos la defiendan y protejan y mantengan la paz y la tranquilidad en el Estado (4).

Lo que sí hubo de mantenerse en todas las naciones cristianas con esmerado celo, fué la inmunidad personal de los eclesiásticos de los servicios y obras manuales, ó su conmutacion en dinero, que pesaban sobre los seglares. Así este privilegio fué tambien el único del mismo orden que la legislacion canónica tomó de la civil de aquel tiempo para confirmarla y sancionarla con sus preceptos. En España, bajo la monarquía visigoda, no solamente lo disfrutaba el clero, sino tambien sus siervos. El Concilio III de Toledo, celebrado en 589, mandó privar de comunión eclesiástica á los jueces y autoridades que ocuparan á los clérigos ó á sus siervos en servicios públicos ó privados (5). No se entendia entonces, sin embargo, que procediese de la Iglesia esta inmunidad, sino del soberano, y así es que el Concilio IV de Toledo, celebrado en 633, al declarar y confirmar el mismo privilegio, advirtió que lo hacia «por orden del rey Sisenando» (6). Es de notar que la exencion, segun este Concilio, se extendia á *trabajos* y á *tributos públicos* (públicas indicciones), mas estos últimos eran tambien

(1) Capítular, *Regum Francor.*, lib. 5, c. 187; lib. 6, c. 107; lib. 2, c. 16; lib. 3, c. 86; lib. 1, c. 91; lib. 5, c. 45.

(2) *In Luc.*, cap. 5, vers. 3.

(3) Serm. 385 contra el arriano Auxencio.

(4) Cán. 22, q. 8, caus. 23.—Berardi in cánon. Part. 2.^a, c. 85.

(5) Cán. 21.

(6) Cán. 47.

impuestos personales, pues los reales, afectos á los inmuebles no eran conocidos con aquella denominacion. Consta por el contrario del Concilio XVI de Toledo, tenido en 695, que los obispos pagaban al Erario tributos reales (*regias inquisitiones, perquisitionum obsequia*) de los predios propios de sus sedes (1).

Despues de la invasion sarracena las iglesias de mozárabes que subsistieron en las provincias conquistadas, pagaron un fuerte y desigual tributo; las de los territorios libres continuaron disfrutando los privilegios de las leyes antiguas y alcanzaron otros muchos nuevos de la piedad de los monarcas castellanos. Desde entonces los cánones generales y los provinciales, las leyes civiles y los diplomas de mercedes particulares, concurren como á porfía á extender y á asegurar la inmunidad eclesiástica. La prueba sin embargo de que ésta no se hallaba por regla general establecida, es que los reyes, al donar bienes á las iglesias ó monasterios, creian necesario renunciar á los tributos á que tenian derecho por ellos, para que la exencion fuese legal y segura. Alfonso el Casto, al donar á la Iglesia de Lugo en 841, varios monasterios con sus términos, cuidó de declarar que «desde entonces» dejarían de pagarse por ellos al fisco los censos y servicios acostumbrados (2). Pero la inmunidad de estos últimos era la que más generalmente se otorgaba, ya á favor de los mismos clérigos, ó ya al de los colonos y habitantes de sus tierras y de las que nuevamente adquirian de la corona. El señor Fernan Armentales, con aprobacion del conde de Castilla Garci Fernandez, eximió en 950 á los clérigos de Melgar de Suso, de las cargas de alojamiento y *facendera* (3). El conde de Castilla Fernan Gonzalez, al dar varias heredades al monasterio de Santa Maria de Rezmondo en 969, eximió al abad de las exacciones entonces acostumbradas por razon de homicidios, hurtos y fornicios que se cometieran en el territorio, así como de

(1) En el *tomo régio* de este Concilio, exhortó el rey Egica á los padres á conminar con excomunion á los obispos que pagaran los tributos reales que ellos deben de los predios de sus sedes, con bienes ó dinero exigidos por vía de impuesto á las iglesias parroquiales. Ignórase el origen y la naturaleza de este tributo con que contribuian los predios episcopales. Cenni supone que era un donativo voluntario que Witiza convirtió en forzoso, mas no ofrece de esta opinion ningun fundamento sólido. De las actas del Concilio no resulta que éste adoptara el cánón propuesto por el rey. (Cenni, *De antiquit. eccles. hispan. Disert.* 4.^a, cap. 7, pár. 15.)

(2) *Esp. Sagr.* t. 40, p. 379.

(3) Fuero de Melgar de Suso en la *Coleccion de fueros y cartas-pueblas* publicada por Muñoz.

los servicios de *serna*, *fosadera* y *anubda* (centinelas ó escuchas) (1). Segun el fuero de Najera, otorgado en 1035 y extendido despues á tantos pueblos, los clérigos estaban exentos de ir al fonsado, de pagar fonsadera y dar alojamiento (2). Fernando I, al dar en 1045 al monasterio de Cardena las villas de Villafria y Orbaneja, eximió de todo tributo y servicio, tanto á los villanos moradores de su territorio, como á los demás vasallos del monasterio, y añadió que el clérigo que comprara heredades de ellos, pecharan al abad é hicieran facendera por las mismas, como los demás vasallos (3).

Desde el reinado de Alfonso VI fueron aún más frecuentes y más completos los privilegios de inmunidad: desde entonces se extendieron más generalmente á los censos ó tributos prediales, de que no solian ántes estar exentos los bienes del clero. Aquel monarca dió al obispado de Búrgos, en 1075, villas, monasterios y tierras con exencion de todo impuesto fiscal, además de los de anubda, fonsado, homicidio, calumnias y aduanas (4). El mismo Alfonso VI, condoliéndose de que los clérigos de Atorga fuesen tratados como los seglares, les eximió en 1087, de todo servicio fiscal, tanto á favor de la corona, como del obispo, librándoles en su consecuencia de muchas gabelas que cita (5). Igual exencion declaró en 1084 al monasterio de Sahagun con todas sus dependencias (6). La reina Doña Urraca en 1109 dispensó á la Iglesia de Leon de pagar rauso, homicidio, fonsadera y calumnias por cuantos bienes poseia y en adelante adquiriera (7). Luego las disposiciones canónicas tanto provinciales como generales dieron más fuerza á estas exenciones. El sínodo de Compostela de 1114 y los de Palencia de 1115 y 1129 reprodujeron las de pagar fosadera y acudir con armas á la guerra (8). Alfonso VII eximió en 1128 á los clérigos de Toledo de pagar por sus heredades el diezmo lego que satisfacian las demás, y de

(1) Berganza, *Antigüed. de Esp.*, t. 2.º, escr. 65.

(2) Llorente, *Notic. histór. de las prov. vasc.* dicho fuero.

(3) Berganza, obr. cit. t. 2, escr. 85.

(4) *Esp. Sagr.*, t. 26, ap. 8.

(5) *Esp. Sagr.*, t. 16, ap. 21. Los servicios é impuestos de que quedaron eximidos aquellos clérigos fueron *nuncio*, *mañería*, *fonsadera*, *rauso*, *homicidio*, *parricidio*, *prueba del fuego* y *alojamiento*. Los clérigos habian de poder disponer de su patrimonio para despues de su muerte, dando tan sólo al obispo un mulo ó caballo y una alhaja de plata.

(6) Escalona, *Hist. del Monast. de Sahagun*.

(7) *Esp. Sagr.*, t. 36, ap. 43.

(8) Synod. Compostell., c. 43; y Concil. Palent. de 1115, cán. 15, y de 1129, cán. 13.

todo servicio de guerra (1). Exenciones semejantes más ó ménos extensas otorgó el mismo monarca á la órden de San Juan de Jerusalem en 1129 y 1156, al monasterio de Villaperil, á los clérigos de Guadalajara en 1133, á los de Balbas y al monasterio de Celanova en 1155, á la Iglesia de Si-güenza en 1140, y á otros varios institutos religiosos (2).

II.

PROGRESOS DE LA INMUNIDAD DESDE EL SIGLO XII HASTA EL XV.

Pero aunque los reyes de Castilla extendiesen más cada dia el privilegio de la inmunidad, es lo cierto que en el siglo xii no habia en cuanto á ella, en las naciones cristianas, ninguna regla fija y comun. Donde regian las capitulares de los reyes Francos, estaban exentos de tributos los mansos de las iglesias, los átrios, casas y huertos contiguos á ellas, lo que se les daba por sepultura, los diezmos y las oblaciones, «aunque no las demás cosas que poseyera el clero;» pero como esta última cláusula, consignada en la misma capitular y en el cánón del Concilio de Meaux de 845, fuese omitida por Graciano, cuando insertó en su *Decreto* todo lo demás del mismo cánón, resultaba cierta incongruencia, acerca de este punto, entre la legislación civil y la canónica. Donde aún regía el derecho romano, la inmunidad no solia extenderse sino á las *cargas sórdidas*; mas para determinar cuáles eran éstas no habia regla alguna de ley ni de jurisprudencia constante, y su falta daba lugar á veces á graves conflictos entre ámbas potestades. En España ya se ha visto cómo la inmunidad dependia de mercedes particulares ó de privilegios locales de varias clases y ocasionados por las circunstancias.

Para remediar tanto desórden trató la Iglesia de unificar su legislación en esta materia, adoptando sobre ella reglas universales obligatorias en toda la cristiandad. Graciano, siguiendo el texto de las falsas decretales, insertó en su *Decreto* algunas de las leyes imperiales ántes citadas, doctrinas de Santos Padres, capitulares de reyes Francos y cánones de concilios, con el propósito sin duda de extender y uniformar la inmunidad eclesiástica, pero con tan poco acierto, que puso tal vez más en duda el punto que deseaba

(1) Muñoz, *Colec. de fuer.*, p. 370.

(2) Pueden verse los diplomas de estos privilegios en Gonzalez, *Colec. de documentos de los prov. vasc.*, t. 5, p. 43 y 44. Muñoz, *Colec. de fuer.*, p. 507. Gonzalez, *ibid.*, t. VI, p. 84. Id. t. V, p. 48. Muñoz, *ibid.*, p. 529.

esclarecer. Por una parte adoptó el derecho de las capitulares, confirmado por el Concilio de Meaux, que limitaba la inmunidad á los mansos, edificios contiguos, diezmos etc., y privaba de ella los demás bienes que poseyera el clero (1), y por otra dió cabida á un texto del Código Teodosiano, que no se halla en los más de sus antiguos códigos, ni fué incluido en el Código de Justiniano, á pesar de haberse insertado en él la ley de que se suponía formaba parte, segun el cual ni los fundos, ni los esclavos de los clérigos debían ser gravados con nuevos tributos (2). Insertó mutilándola y atribuyéndola al Papa Urbano, la ley del Código Teodosiano ántes referida, que eximia de cargas sordidas, impuestos extraordinarios y bagajes, los predios destinados á la Iglesia, aunque añadiéndole ahora la excepcion del caso de necesidad extrema y urgente (3): proclamó la inmunidad al parecer absoluta, invocando las leyes imperiales y señalando el origen de este privilegio en la proteccion que Faraon dispensó á los sacerdotes de Egipto, al mantenerles en sus posesiones, cuando compró las de los seglares para reducirlos á servidumbre (4); y al mismo tiempo reprodujo en forma de precepto, las palabras de San Ambrosio arriba citadas, que declaran la obligacion del clero y de la Iglesia á contribuir con sus haberes al fisco, si bien atribuyendo una parte de ellas al Papa Urbano (5), y el fragmento de la epístola de Urbano II, ántes tambien aludido, que fundaba la misma obligacion en el pasaje evangélico de la moneda encontrada en la boca del

(1) Graciano insertó dos veces en su *Decreto* el cánon 63 del sínodo de Meaux que reprodujo una capitular de Ludovico Pio, limitando la inmunidad á los bienes referidos en el texto: en el cán. 24, q. 8, caus. 23 omitió la cláusula de la capitular que deja á salvo los tributos que debieran pagarse por los demás bienes eclesiásticos: en el cán. 25 de la misma *quest.* y caus. repitió dicho texto sin aquella omision, pero atribuyéndolo al Concilio de Worms y añadiendo por su cuenta, que de las cosas que la Iglesia comprase ó adquiriese por donacion entre vivos, debía satisfacer á los príncipes los tributos acostumbrados.

(2) Graciano atribuyó á Honorio y Teodosio la ley de que suponía parte esta cláusula (cán. 40, q. 1, caus. 16); mas es de advertir 1.º, que su verdadero autor fué Constantino; 2.º, que la cláusula que extiende la inmunidad á los fundos, se ha hallado sólo en 6 códigos de los innumerables que recientemente ha consultado para su nueva edicion del Código Teodosiano el infatigable investigador Haenel; 3.º, que este eminente crítico ha omitido en dicha edicion la cláusula mencionada.

(3) Cán. 4, q. 1, caus. 16, pár. 4.

(4) Cán. 23, q. 8, caus. 23.

(5) El cán. 28, q. 1, caus. 11, comprende las palabras de San Ambrosio. "Si enim census filius Dei solvit, quis tu tantus es, qui non putes esse solvendus." El cán. 27 q. 1, caus. 11, contiene las palabras de un sermón del mismo santo: "Si tributum petit Imperator, non negamus, Agri ecclesie solvunt tributum."

pez (1). Era, pues, notoria la incongruencia y quizá la antinomia entre estas diversas prescripciones canónicas, y así la inmunidad corrió varia suerte, por cuanto hubo de prescindirse de ella en muchos Estados cristianos, para seguir las costumbres ó fueros especiales de cada lugar.

El Concilio III de Letran, celebrado en 1179, fué el que adoptó la primera disposición canónica de carácter general y obligatorio en esta materia. Fundándose en que los cónsules y gobernadores de muchas ciudades oprimian á los clérigos con cargas onerosísimas, declaró aquel sínodo que la Iglesia no debía contribuir con subsidios al Erario, sino cuando el obispo y el clero lo creyesen indispensable, por no bastar el caudal de los legos para atender á las necesidades públicas, y excomulgó á las autoridades seglares y á cualesquiera personas que dispusieran ó ejecutaran algo en contrario (2). Esta regla no podia ser más general; pues comprendia todo género de tributos, así los prediales como los personales, y no contenia excepciones como las leyes romanas, las capitulares, y los cánones provinciales ántes referidos. No habia en ella más caso de excepción que uno no contado hasta entonces por los legisladores, el de no alcanzar las fuerzas de los contribuyentes legos para satisfacer las públicas necesidades; pero como los únicos jueces de este punto habian de ser el obispo y el clero, el subsidio no habia de tener ni aún entonces, el carácter de forzoso, y seria por lo tanto un mero donativo voluntario que los preladados y clérigos ofrecerian cuando ellos, y nadie más que ellos, lo juzgaran conveniente.

Esto no obstante, los reyes de España siguieron dispensando la inmunidad á las iglesias particulares, por via de privilegio, como ántes, y á veces con excepciones no admitidas en ley canónica. Alfonso VIII en 1184 eximió al clero de Toledo y á sus vasallos y collazos de fonsaderas, facenderas, pechos y servicios reales, excepto el de acudir á la guerra cuando el rey mandase en persona el ejército (3). Sin embargo, á este monarca se debe la primera ley general de inmunidad publicada en Castilla. Tal fué la pragmática de 1180, en que renunció D. Alfonso á los espolios de los obispos, prometió no pedir subsidios al clero con amenazas ni violencia, sino recibir de él lo que por amor y de buen grado quisiera darle, y le eximió

(1) Cán. 22, q. 8, caus. 23.

(2) *Decret. Greg. IX*, c. 4, t. 49, lib. III.

(3) Muñoz, obr. cit. p. 386.

de fonsadera, facendera y pechos reales de toda especie (1). Esta disposicion habia de ser aplicable á todo el clero del reino, y era, como se ve, conforme con el decreto de Letran, que acababa de promulgarse. Sin embargo, no hubo aquel monarca de cumplirla siempre fielmente, cuando por haber exigido tributos de guerra, dió motivo á que el Papa Inocencio III reclamase contra este proceder en 1205, y ordenase á ciertos obispos que le obligaran á desistir de su empeño, con censuras eclesiásticas (2). Con igual objeto y por motivos análogos, hubo de escribir tambien aquel pontífice á los reyes de Leon, Aragon, Portugal y Navarra.

El reino de Leon, separado del de Castilla al comenzar el siglo xiii, tuvo tambien su ley general de inmunidad, bajo el reinado de Alfonso IX. Las córtes de Leon de 1208, de acuerdo con este monarca, prohibieron exigir *pedidos* á las iglesias, y el arzobispo de Compostela, que estaba presente, conminó con excomunion al que infringiera este precepto. El antiguo texto romancéado de aquellas Córtes, contiene además una cláusula importante, que no se halla en el original latino: tal era la de que conservaran su condicion de tributarias ó libres, que ántes tuvieran, las cosas que por cualquier título pasaran al dominio de la Iglesia ó del clero (3). Esta era una limitacion importantísima de la inmunidad eclesiástica, que á haberse observado constantemente, habria sido de gran provecho para la Iglesia. Aquella exencion de *pedidos*, otorgada al clero de Leon, se concedió despues por San Fernando en Castilla, á muchas iglesias y monasterios, por mercedes especiales. En 1234 eximió aquel Santo rey al monasterio de Santa Maria de Rioseco, con sus doce collazos y su villa de Valdelacuesta de todo pecho, pedido, marzazga, fonsadera y facendera (4). De pedidos excusó tambien en 1255 á los vasallos del monasterio de San Miguel de las Dueñas (5), sin contar otras mercedes análogas.

Celebróse entre tanto el Concilio IV de Letran de 1215, el cual, considerando que muchos cónsules y gobernadores de pueblos continuaban oprimiendo al clero con tributos de tallas, derramas y otras exacciones, reprodujo el cánón del Sinodo III de 1179, pero añadiendo ahora que no habia de acordar el clero ningun subsidio al Estado en caso de necesidad

(1) Mondexar, *Memor. histor. de D. Alfonso el Noble*, ap. 7.

(2) *Ibid.*, c. 88.

(3) Muñoz, *Col. de fuer.*, p. 111 y 113.

(4) Gonzal, *Doc. de las Prov. Vasc.*, t. 5, p. 161.

(5) *Ibid.*, t. 5, p. 163.

extrema, sin consultar previamente al romano Pontífice: que cualquiera exaccion que se hiciera contra estas prescripciones fuera nula: que lo cobrado por razon de ella se restituyera en el término de un mes, y que la censura eclesiástica, lanzada contra el que exigiese tales tributos, fuera extensiva á sus sucesores, mientras que no restituyeran lo indebidamente percibido (1).

La dignidad del estado eclesiástico exigia tambien su exencion de pechos, segun las ideas y las costumbres del tiempo. El tributo fué en su origen señal de servidumbre, ya de los pueblos vencidos, ya de los siervos emancipados. Por eso los hidalgos que blasonaban de descender de familias que siempre fueron libres, ó que si rendian vasallaje á algun señor, era voluntario y condicional, estaban tambien exentos de pechos por naturaleza, desde los orígenes de la monarquía. Y cuando esta clase disfrutaba semejante privilegio, ¿cómo no habia tambien de poseerlo otra clase aún más digna en el concepto público, de seguro más ilustrada y en realidad más poderosa? Si el pagar pechos era condicion de gente baja y plebeya, ¿cómo no se eximiria de ellos el clero, cuyos individuos, por su autoridad, por su ciencia y por la dignidad de su ministerio, ocupaban en todas partes el lugar más distinguido? Así, lo ménos que los eclesiásticos podian pretender, y que la opinion les podia otorgar, era el estado de hidalguía en cuanto á los tributos, ya que lo tenían superior para todas las consideraciones sociales.

Es digno de notarse, sin embargo, cómo los sábios autores de las leyes de Partida que recopilaron casi toda la legislacion canónica vigente, no admitieron por completo los cánones de los dos concilios de Letran, cuando su propósito era dar á la inmunidad eclesiástica toda la latitud que permitian las antiguas leyes del Estado y la Iglesia. En Letran se estableció el trascendental principio de que toda contribucion del clero habia de ser voluntaria, y que el clero mismo no podria consentirlo, sino en circunstancias muy calificadas y con aprobacion del Papa: las leyes de Partida, reconociendo en general la inmunidad de las propiedades eclesiásticas, admitieron, sin embargo, el principio del impuesto obligatorio en determinados casos.

Segun este Código, los clérigos y sus sirvientes estaban exentos de pechos personales, como los de construccion de fortalezas, acarreo de materiales, reparacion y limpieza de acequias y otros oficios bajos, é igualmente del ser-

(1) *Deer. Greg.* IX, c. 7, t. 49, l. 3.

vicio de alojamiento y del de guarda y vela de los castillos y murallas en tiempo de guerra; pero estaban obligados á contribuir con los legos á la construccion y reparacion de los puentes, calzadas y calles, cuando las rentas municipales no alcanzaran para atender á estos servicios, á velar y guardar las murallas ó castillos, cuando los cercasen moros ú otros enemigos de la fé, á ir en hueste con el rey ó quien hiciera sus veces, si tenian tierras ó heredamientos de la corona y la guerra fuese contra infieles, y á acudir en defensa del soberano en las rebeliones y bullicios y en las invasiones repentinas de enemigos (1). Hallábanse tambien exentos de tributos, segun el mismo Código, los bienes destinados á fundar, dotar ó reparar iglesias, los que á éstas daban los fieles por sus sepulturas y los que los reyes les donaban para mantener el culto; mas debian continuar sujetos á los mismos pechos que ántes tuvieran los bienes que heredara la Iglesia de sus clérigos que murieran sin herederos legitimos ó testamentarios y los que por donacion ó compra adquiriese de pecheros.

Segun se ve en las mismas leyes, tambien habia tierras en que por fuero especial, las heredades exentas ántes, dejaban de serlo cuando pasaban á la iglesia (2). Siéntese, es verdad, en todas estas disposiciones el influjo de la nueva legislacion canónica; pero no hasta el punto de poderse deducir de ellas la novedad importantísima de no ser obligatorio el impuesto. Es tal vez una reminiscencia de esta circunstancia la prevencion que hace una de las leyes referidas para que los clérigos no sean apremiados por los legos á contribuir á las obras de puentes y caminos, por cuanto los prelados «son »tenudos en todas maneras de ge lo mandar cumplir» (3); mas si era esta obligacion imprescindible de los prelados, el rey podria exigir de ellos su cumplimiento por los medios especiales que autorizaba el derecho. Los autores de las Partidas, aunque influidos por el espíritu de la nueva legislacion canónica, no admitieron nunca el principio de la absoluta independencia del clero de la potestad temporal, del que la inmunidad de impuestos tambien absoluta ó la tributacion voluntaria, era consecuencia rigurosa.

Mas escritas estas leyes en las Partidas, no fueron todavía, sin embargo, las que rigieron en todo el reino. El mismo D. Alfonso X siguió dando como sus antecesores privilegios especiales de inmunidad, ya á las iglesias

(1) Leyes 51, 52 y 54, t. 6, Part. I; l. 20, t. 32, y l. 3, t. 19, Part. II.

(2) Leyes 54 y 55, t. 6, Part. I.

(3) L. 54, t. 6, Part. I.

de los territorios que conquistaba, ya á las antiguas que dotaba ó enriquecía con sus dones. En 1252 eximió del diezmo lego las heredades del clero de Alicante y de toda pecha, pedido ó servicio nuevo á los vasallos de su Iglesia, los cuales, sin embargo, quedarían sujetos á la *facendera* como los demás vecinos, por más que no hubieran de ser apremiados á prestarlas, sino por la autoridad eclesiástica (1). El mismo monarca eximió á los canónigos de Toledo del impuesto de *moneda* (2); de pechos y pedidos á 40 clérigos de Avila con «sus paniaguados, yuberos, pastores y cortesanos» (3), y de moneda y de todo pecho al abad y beneficiados de Sevilla con sus «paniaguados, hortelanos, pastores y quinteros» (4). Con estos privilegios alternaban otras disposiciones restrictivas de la inmunidad, como la del «Ordenamiento de los artefactos» que mandaba á los *mozos coronados*, ó sea los clérigos de órdenes menores, pechar del mismo modo que en tiempo de Alfonso VIII, que exigió cierto subsidio al monasterio de Cardena para cuyo pago tuvo éste que vender el usufruto del lugar de Riocavia y otras semejantes (5). De cualquier modo es indudable que en aquel reinado pagaron tributo muchos bienes eclesiásticos contra lo prescrito en las leyes ó en los cánones. Hubieron de exigirlo los alcaldes y merinos de Búrgos á los monasterios, pues que estos se querellaron de ello, y mandó D. Alfonso que sólo fuera atendida su queja en el caso de que no hubieran pagado pechos reales ni municipales en los dos reinados anteriores (6). El Papa Nicolás III, en la instruccion secreta que dió en 1279 al obispo de Reatino, su legado *a latere* en España, le decia que uno de los agravios del clero, cuyo remedio debía procurar, era que cuando pasaban á la Iglesia propiedades exentas, se les cargaban de nuevo ó por primera vez tributos (7).

No fué Sancho IV ménos pródigo de exenciones que lo habia sido su padre D. Alfonso. Las otorgó del tributo llamado *nuncio* á los canónigos de Toledo; de todo pecho y servicio, incluso el de *moneda*, al obispo y cabil-
do de Cartagena y á los vasallos del ministerio de Santa María de la Vid; de

(1) Gonzalez, *Doc. de las prov. vasc.*, t. 6, pág. 95.

(2) *Memorial histórico de la Academia de la Historia*, t. 1.º, pág. 18.

(3) *Ibid.*, pág. 149.

(4) *Ibid.*, pág. 268.

(5) Berganza, t. 2, pág. 162, núm. 36.

(6) *Ibid.* pág. 167, núm. 46 y pág. 172, núm. 55.

(7) Alegac. fiscal de D. José Moñino contra el obispo de Cuenca en el *Expediente* contra el mismo, núm. 578.

todo pecho, excepto el últimamente nombrado, á los mayordomos y escribanos del cabildo de Valladolid; de cierto tributo en especie al clero de Amaya; y de toda contribucion y facendera, salvo la *moneda*, á los heredamientos del monasterio de Santa Clara de Allariz y á las familias que vivieran en ellos. También prometió aquel monarca, en una especie de indulto general, que concedió en 1288, no exigir tributos ni servicios á los clérigos ni á los que eran exentos por privilegios (1). Y en efecto, no debió de haber en su reinado tantos quebrantamientos de la inmunidad como en otros, cuando las quejas de los agraviados no han llegado hasta nuestros días.

Húbolas en el reinado de Fernando IV, ya del obispo de Leon contra los recaudadores del *quinto servicio*, ya contra los adelantados y merinos que exigian de los monasterios un vaso de plata y una mula cada vez que nombraban nuevos abades (2), ya por otras exacciones. D. Fernando no desoyó estas quejas, ni dejó de ordenar el remedio, pero confirmando al mismo tiempo lo ya establecido, aunque no quizá observado, en las Partidas y en las Córtes de Leon de 1208, declaró, á peticion de las de Valladolid de 1295 y las de Cuellar de 1297, que las tierras realengas que habian comprado ó compraran los clérigos, pecharian como las demás (3).

A vueltas con muchos actos de fuerza ó de mal disimulado fraude, desde el reinado de Alfonso XI se nota más la influencia de los cánones lateranenses en puntos de inmunidad. Aquel monarca pidió y obtuvo licencia del Papa para exigir á los clérigos sus vasallos, la décima de sus rentas y las tercias de las iglesias (4). Posteriormente, para pedir al clero un servicio con que hacer la guerra de Portugal, se fundó en que «las gentes de su regno estaban en grand afinamiento, porque con los muchos pechos que habian dado al rey para las guerras pasadas, non podian dar para esta guerra tanto como él avia menester» (5). Aún con ménos apoyo en los cánones, introdujo é impuso el nuevo servicio general de alcabala para continuar el cerco de Algeciras; y si bien con grandes dificultades,

(1) *Mémor. hist.*, t. 1, pág. 138, t. 2, pág. 93 y 134. — Gonzal., *Docum.* t. 5, página 203, 214, 216, 226 y 240.

(2) Gonzal., t. 5, p. 266; y Berganza, t. 2, p. 184, n. 84.

(3) Córte. de Vallad. de 1295. Pet. 51; y Cór. de Cuellar de 1297. Pet. 3.

(4) Crón. de D. Alf. XI, c. 83.

(5) Cron., c. 180, añade: «E todos los arzobispos et obispos et abades del regno le dieron grandes quantías de aver cada uno de sus rentas: et despues echaron pechos en las clerecias para esto, en manerá que con esto ovo cumplimiento de lo que ovo menester para aquella guerra.»

tambien lo autorizaron los prelados, despues de haberlo otorgado los concejos (1). Todo lo cual revela el propósito de cubrir al ménos las apariencias, en cuanto al modo de tributar los eclesiásticos.

A veces los reyes no lograban obtener el consentimiento de los prelados en esta materia, sino á costa de grandes sacrificios, que al cabo recaian sobre los vasallos. Consta del Ordenamiento de prelados de las Córtes de Valladolid de 1351, que algunos monarcas, ya para vencer la resistencia que el clero opusiera á las exacciones fiscales, ó ya para obtener su cooperacion á ellas, otorgaron á varias iglesias y monasterios el singular privilegio de percibir de sus vasallos la mitad de lo que les exigiera la corona, por razon de servicios, monedas y otros pechos. Verdad es que con la misma facilidad se otorgaban que se quebrantaban en aquellos agitados tiempos, estas exenciones exorbitantes. Así se quejaban los prelados en las Córtes últimamente citadas, de que no se les guardase el privilegio de que queda hecha mencion, desde el reinado de Alfonso XI, ni el de encabezamiento por cantidad cierta en la contribucion de acémilas, ni la exencion de fondadera que disfrutaban algunos pueblos de abadengo (2). Así en las Córtes de Toro de 1371 se querellaban los prelados de los señores temporales que «echaban pechos é pedidos á los clérigos... é sobre esta razon que los »prenden é prendan é cofechanlos muchas veces é facenles pagar grandes »quantias á las quales non son tenudos á pagar de derecho, é aún otros »dicen que por los cohechar que los atormentan.» Tambien se quejaban de los concejos, porque en los pechos y servicios que pagaban á los señores, obligaban á contribuir por fuerza á los eclesiásticos y si no lo hacian les prendaban y prohibian labrar sus heredades y comprar sus viandas, por lo cual estaban los alcaldes y regidores excomulgados y sus lugares en entredicho. Acusaban igualmente á los merinos del rey de tomar yantarres, y exigir pedidos en los lugares de abadengo, y dar posada en las casas de los clérigos (3). A veces los procuradores otorgaban al rey servicios extraordinarios con la condicion irritante de que contribuyeran á ellos los clérigos, pero no los caballeros, las dueñas, ni los hidalgos (4).

Eran estos actos como represalias de la extension que daba el clero á

(1) Cron., c. 263 á 265.

(2) Pet. 2 y 7 del Ordenam. de prelad. de las Córtes de Valladolid de 1351.

(3) Pet. 4, 5, 7 y 8 del Ordenam. de prelad. de las Córtes de Toro de 1371.

(4) Las Córtes de Palencia de 1388 otorgaron á Juan I un servicio para pagar cierta deuda al duque de Alencaster, con la condicion de que fuese repartido del modo que se expresa en el texto.

su inmunidad, eludiendo de modos diversos, el cumplimiento de las leyes, que la limitaban. Las que sujetaban á pechos los bienes pecheros de legos que pasaran á la Iglesia, no hubieron de observarse, en vista de la tenacidad con que casi todas las Córtes del siglo xiv reclamaron su cumplimiento. En vano prescribieron aquella excepcion de la inmunidad Alfonso IX en las Córtes de Leon de 1208, Alfonso X en las Partidas y Fernando IV en las Córtes de Valladolid y de Cuellar de 1295 y 1297: el clero aumentaba cada dia su patrimonio con heredades, que por este solo hecho dejaban de ser pecheras, arruinando al fisco y empobreciendo á los vasallos. Ni se contentaban los eclesiásticos con su exencion personal, sino que la trasmitian á sus familias, servidores, renteros y paniaguados, en cuanto á los servicios y pedidos del rey y á los repartos comunales (1). Muchos seglares para disfrutar la inmunidad, afectaban pertenecer al estado eclesiástico, abriéndose corona, cuando en realidad no tenian órdenes, vestian el traje laical y aún solian estar casados en secreto (2). Tambien se excusaban de pechar las personas de ambos sexos, que sin dejar de habitar en sus casas, ni de vivir de sus bienes propios, profesaban en la Orden Tercera de San Francisco (3). Por último, segun decian los procuradores de las Córtes de Segovia de 1586, algunos hasta se hacian ermitaños y simulaban donaciones de todos sus bienes á las iglesias ó clérigos para librarlos de pechos, ó sin salir de sus casas, ni abandonar su estado seglar, simulaban estas enajenaciones con igual objeto, segun se lee en una ley de don Juan II (4).

En aquella grave contienda entre los exentos y el estado llano, entre los intereses fiscales y los del clero, preponderaron al fin estos últimos, como que contaban con el apoyo de una clase poderosa y entonces la más ilustrada. La cuestion llegó á tener tal importancia en la segunda mitad del siglo xiv, que Enrique II encomendó su decision, por ley general, á los oidores de su Audiencia, con motivo de un ruidoso pleito que sostuvieron sobre este asunto, algunos concejos con ciertos clérigos. Falló entonces aquel tribunal y fué tambien ley del reino: 1.º, que los eclesiásticos no estaban obligados á contribuir con los concejos á los *pedidos* del rey ó de los señores. 2.º, que á los gastos comunales por servicios de

(1) Córtes de Búrgos de 1373.

(2) Córtes de Búrgos de 1379.

(3) Córtes de Soria de 1380.

(4) *Ordenanzas reales de Castilla*, lib. 6, t. 9, lib. 5.

interés municipal (muros, calzadas, calles, compra de términos, puentes, fuentes, etc.) debían contribuir, cuando no alcanzaran las rentas del concejo. 3.º, que los clérigos que compraran heredades tributarias continuaran pagando los tributos inherentes á ellas (1). Ordenó tambien el mismo D. Enrique en las Cortes de Toro de 1371, que los señores y los concejos no apremiaran á los clérigos á contribuir con pechos ni pedidos, ni á prestar servicio de aposento, salvo al rey ó las personas de su familia. Despues D. Juan I dispuso en las Cortes de Búrgos de 1379 que los clérigos de órdenes menores casados, pecharan por los bienes de su pertenencia, mas no los solteros que trajeran hábito y corona: á peticion de las Cortes de Soria de 1380, sujetó á tributos reales y concejiles á los hermanos de la Orden Tercera; y en las Cortes de Guadalajara de 1390 reprodujo y sancionó con penas la ley de Enrique II, fundado en la sentencia de sus oidores, en el pleito del clero con los concejos, ordenando además que los clérigos no pechasen por las heredades que hubieran de sus padres, sus parientes ó la Iglesia, pero sí por las que comprasen sujetas á infurcion ó censo, y tambien por las que no lo estuvieran, cuando la compra fuera de toda la hacienda de un labrador y se perdiese con ella un vecino contribuyente, que es lo que en el lenguaje de la época, se llamaba *comprar á fumo muerto*. Tambien declaró el mismo monarca que los excusados de pechar por privilegios, se eximirian sólo del tributo de *moneda*, y para eso habian de estar inscritos en un registro llamado *libro de los salvados* y que si en alguna comarca hubiese antigua costumbre de pechar igualmente los seglares y los eclesiásticos, no se hiciese en ella novedad alguna (2).

Las más de estas leyes necesitaron despues muchas confirmaciones, y algunas fueron expresamente derogadas, que tanta debió de ser la resistencia opuesta á su cumplimiento. D. Juan II, á peticion de las Cortes de Zamora de 1452, suspendió la ejecucion de la pragmática, que él mismo habia expedido algunos años ántes, mandando que cualquiera que comprase heredades de los pecheros, pechase por ellas, siendo de advertir una diferencia importante entre la peticion de las Cortes y el texto de la ley, inserto en las Ordenanzas reales bajo el nombre de aquel monarca. Las Cortes de Zamora pidieron que la pragmática referida se entendiera solamente respecto á los bienes que se vendieran á las iglesias, monaste-

(1) Ordenam. de prelad. de las Cortes de Guadalajara de 1390.

(2) Crón. de D. Juan I, año XII, c. 11 y 12. Orden. real. lib. 13, t. 3, lib. 1, lib. 7, t. 9. lib. 2, Nov. Recop.

rios y personas eclesiásticas: D. Juan respondió que suspendería sus efectos (1); y la ley promulgada en su virtud, ordenó que los bienes de pecheros que comprasen *hidalgos* ó *exentos* no pasaran á estos con su carga de pechos. Y como bajo la denominacion general de *exentos*, se comprendian tambien las iglesias y los eclesiásticos, á ellos alcanzaron igualmente los beneficios de aquella suspension (2). La prueba de que fué tal el sentido de esta ley, es que las Cortes de Valladolid de 1447, se quejaron del daño que sufría el real erario con las muchas heredades que adquirian las iglesias y los eclesiásticos, y dejaban de ser por ello pecheras, pidiendo en su virtud que no se hiciesen tales adquisiciones sin licencia del rey, á fin de que se cumpliera su servicio y su derecho. Entonces D. Juan II, dejando sin efecto su ordenanza de 1432, mandó que cualquiera de sus súbditos que enajenase heredamientos á personas exentas de su jurisdiccion, pechase la quinta parte de su valor, además de la alcabala, si la enajenacion se hiciera por venta, entendiéndose inherente este tributo á tales heredamientos (3). Este fué el impuesto llamado de amortizacion, con que aquel monarca trató de compensar las pérdidas que experimentaba el fisco por dejar de tributar los bienes pecheros que pasaban á exentos.

Mas ni con esto vió cumplido el rey su justo propósito. Sucedió entonces que para eludir el pago de los tributos, de que por lo visto seguian exentos los bienes eclesiásticos, muchos pecheros donaban simuladamente todos los suyos, ya á algun hijo clérigo, ó ya á algun eclesiástico pariente ó extraño, apareciendo de este modo insolventes al pago del impuesto, que tampoco podía ya exigirse al adquirente, por razon de su inmunidad. Las Cortes de Búrgos de 1455 denunciaron este fraude, y á peticion suya ordenó D. Juan II, que cuando por tales enajenaciones, no quedaran bienes al pechero donante con que responder del pago del impuesto que hubiese devengado el traspaso, se tuviera éste por nulo y el enajenante fuera reducido á prision, hasta que pagara el débito ó presentara bienes con que asegurar su pago (4). Igual procedimiento se mandó emplear despues contra los legos que vendian ó enajenaban sus bienes á personas no sujetas á la jurisdiccion real (5).

Todas estas disposiciones acreditan que el impuesto de amortizacion no

(1) Córd. de 1432, pet. 31.

(2) Orden. real., l. 12, t. 4, lib. IV.

(3) Córd. de Vallad. 1447. Pet. 17.—Orden. real., l. 7, t. 9, lib. V.

(4) Córd. de Burg. 1453. Pet. 5, l. 11; t. 10, lib. V. Recop.

(5) Orden. real., l. 28, t. 4, lib. IV.

estaba en uso, porque cumplida la ley que lo establecía, se hubiera podido hacer efectivo con los mismos bienes enajenados á clérigos, como pecho que era afecto á las heredades. Ni es extraño en verdad que aquella nueva contribucion no se llevara á efecto cuando se llegó á dudar de que la alcabala pudiera exigirse al clero por la venta de sus bienes, á pesar de haberla éste pagado desde su origen, y de haber confirmado esta obligacion don Juan II y D. Enrique IV, bajo pena de extrañamiento y ocupacion de temporalidades. Tanta autoridad llegó entonces á tener la doctrina ultramontana de las inmunidades, que los Reyes Católicos no osaron aprobar las leyes á la sazón vigentes, que obligaban al clero á contribuir con este impuesto, y las reformaron ordenando que no se le exigiera, sino de las ventas ó permutas que hiciese por especulacion ó granjería, si bien las heredades que comprara á legos, habian de quedar responsables de la alcabala, cuando el vendedor no fuera habido ó resultara insolvente (1).

III.

LA INMUNIDAD EN LOS REINOS DE LA CORONA DE ARAGON Y NAVARRA.

En los otros reinos de España logró tambien la inmunidad progresos semejantes, aunque con más graves y generales excepciones. En Aragon, los clérigos estaban exentos de tributos, pechas, censos y monedaje como los infanzones; pero la ley presumia simulada y fraudulenta toda donacion de bienes pecheros que se hiciera á algun clérigo, aunque fuese hijo del donante, cuando los bienes no salieran del poder de éste, y disponia que las propiedades así adquiridas continuaran sujetas á las mismas contribuciones que ántes. Esto determinaban las *Observancias del reino* y confirmó despues el rey D. Pedro II en 1372; mas todo al parecer con escaso resultado, puesto que Cárlos I tuvo que repetir la misma prescripcion en 1528, fundándose en que la experiencia habia demostrado los perjuicios que sufrían los pueblos con las muchas ventas fingidas que los hombres de *signo servicio*, que eran en Aragon los pecheros, hacian á personas eclesiásticas y otras privilegiadas, sin que los bienes vendidos pasaran á poder de los compradores (2). Tampoco estaban exentos del *monedaje* los clérigos de tonsura casados,

(1) *Quaderno de las alcavalas de 1491*, l. 3.—L. 8 y 9, t. 9, lib. 1. Nov. Rec.

(2) *Observantie regni Aragonum*. tit. *Declarationes D. regis Jacobi*. Ad. XI capitulum.—Tit. id. *Item si alguno sera clerigo*.—Tit. id. *Si alguno avra corona*.—Fuer. de Arag., tit. *Quod donationem faciens*, y tit. *Que los cargos reales*.

aunque lo estuvieran con mujer virgen, por más que el derecho comun canónico concediese en tal caso el privilegio del fuero. También debía pagar el mismo tributo el eclesiástico que ejercitaba el comercio, abriendo tienda de mercancías (1); y todos los clérigos sin distincion, estaban sujetos á las *alfardas*, que era un impuesto que pagaban los propietarios de tierras de regadío para la reparacion y limpieza de las acequias comunes. D. Pedro II, fundándose en que éstas se hallaban obstruidas, porque muchos clérigos excusaban el pago de las *alfardas*, mandó en 1348 que cuando los prelados ó sus vicarios fueran requeridos por los recaudadores de aquel impuesto, lanzaran sentencias de excomunion contra los clérigos que no pagaran sus cuotas en el término de quince dias, y que si aún con esto no se obtuviera el pago, procedieran las justicias seglares contra tales eclesiásticos como contra los legos (2). Por costumbre, debían igualmente contribuir los clérigos á ciertos gastos de interés local comun, como el que ocasionaba la persecucion de malhechores y otros, en que los infanzones eran también contribuyentes (3). Había, sin embargo, en Aragón una diferencia importante entre la inmunidad de los infanzones y la de los clérigos, puesto que los primeros debían pagar las pechas de los bienes que adquirieran de hombres de *signo servicio* (4), y los segundos se eximían de hacerlo cuando compraban y poseían real y materialmente los mismos bienes.

Pero lo que en aquel reino hubo de afectar más gravemente á la propiedad eclesiástica, fueron los cuantiosos y repetidos subsidios con que los Papas solían gravarlas, ya á favor del Estado ó ya para otros servicios, «Las calamidades y jacturas» que por esto sufría el reino, movieron, según el rey D. Juan II, al Papa aragonés Calixto III á mandar guardar en su patria un decreto de Martin V, en el Concilio de Costanza, que confirmando otros anteriores, prohibía á los prelados y autoridades subordinadas al Papa exigir diezmos ú otras cargas á las iglesias, y prometía no imponerlas generales á todo el clero, sino mediante causa grave, por utilidad comun y con asentimiento de los cardenales, ni especiales á algun reino ó provincia, sino con el beneplácito de la mayor parte de sus prelados. Declaró en su consecuencia el Papa Calixto que no exigiria más los diezmos y subsidios á la sazón impuestos, sino cuando fuera igualmente gravado con

(1) Observancias citadas: *Item si alguno sera clerigo y Item si alguno avra corona.*

(2) Fuer de Arag., tit. *De affardio.*

(3) Portoles, *Scholia ad Molinum*, pár. *Contributio*, n. 26.

(4) Ibid., pár. *Contributio*, n. 27.

ellos todo el clero de la cristiandad, y dispuso que se retasaran de nuevo todos los beneficios, á fin de que el tipo de sus rentas así reducidas y retasadas, sirviese de norma para los subsidios futuros, y que éstos no volviesen á recaer sobre aniversarios, oblacones, fábricas, misas ni sufragios. Pio II confirmó despues estos decretos, y D. Juan II en 1462, queriendo darles fuerza y vigor, y evitar el daño de la saca de moneda del reino, á que daban lugar á veces los subsidios, prometi6 y jur6 hacerlos cumplir, los declaró fueros del reino y mand6 no dar cumplimiento á cualesquiera bulas 6 breves que se expidieran en derogacion de ellos (1).

Ibando de Bardaxi, glosando esta ley, decia que la última prescripcion de no cumplir las bulas posteriores que fuesen opuestas á ella, era contraria á la libertad eclesiástica y no obligatoria, mientras que no se obtuviese su confirmacion de la Santa Sede, que era quien podia dar 6 quitar rentas á los beneficios. Y esta opinion hubo de estar bastante autorizada, puesto que segun el mismo glosador refiere, habiendo los clérigos de Zaragoza, Huesca y Tarazona pedido contra el subsidio *firma de derecho*, fundándose en el citado fuero, no le fué otorgada (2). Tambien aseguraba Portoles, que á pesar del mismo fuero, solia conceder el Papa el llamado *cuarto diezmo* de todos los beneficios (3).

Esto no obstante, habia en Aragon, como en Castilla, iglesias y monasterios exentos por privilegios especiales, de todo tributo. El monasterio de San Juan de la Peña, quizá el más antiguo y de seguro el más poderoso del reino, no pagaba impuesto alguno al rey ni al obispo, por merced que en 1090 le otorg6 el rey D. Sancho Ramirez (4). Los clérigos de Daroca y sus aldeas estaban exentos de todo servicio personal, por privilegio que les concedió en 1142, el conde de Barcelona, Ramon Berenger (5), siendo señor de la villa. El mismo beneficio disfrutaban desde 1167 los clérigos de Molina, por gracia de su señor Melrich, aunque debian contribuir al obispo con el tercio de pan, vino y cordero (6). La iglesia de Alquezar, villa del alto Aragon, que adquirió grande importancia en el tiempo de la reconquista, obtuvo en 1069, tambien de D. Sancho Ramirez, la exencion de todo tributo y servicio á la corona y al prelado, por los bienes que adqui-

(1) Fuer. de Arag., tít. *De subsidiis*.

(2) Obr. cit. Ad. for. *De subsidiis*.

(3) Obr. cit., pár. *Clericus*.

(4) Briz, *Histor. de dicho monasterio*, p. 360.

(5) Muñoz, *Colec. de fuer.*, p. 534.

(6) Fuero de Molina de Aragon.

riera desde aquella fecha (1). Pudiera citar otros ejemplos de exenciones semejantes, pero no tantas quizá como en Castilla.

En el reino de Navarra hubo de progresar la inmunidad más lentamente también que en aquel reino. Alfonso I en el siglo xu, concedió por fuero á Marañon, que los clérigos dieran á quien el rey les mandase, la cuarta parte del diezmo de granos, y prestaran servicio de hueste una vez cada tres años, quedando con esto exentos de fonsadera, *apellido* y hospedaje y una parte de las *calumnias* (2). Según el fuero que D. Sancho el Sábido dió en 1172, á San Vicente de Sosierra, los clérigos no estarían exentos de ir en hueste, cuando la guerra fuese campal (3). El fuero general del reino no eximia de trabajar para el señor, al clérigo que lo hiciera para sí ó para otro, algunos días del año, ó poseyese heredades en que el señor tuviera algun derecho (4). Por ordenanza general se dispuso en 1567, que las heredades pecheras no pasaran á exentos sino con las pechas y servicios personales á que estuvieran afectos. Hasta el siglo xvii no se dió allí á la inmunidad la amplitud que ya en otras partes disfrutaba. Entonces fué cuando se declaró que los clérigos estaban exentos de los tributos de *cuarteles* (5) y alcabalas en la venta de sus frutos decimales ó patrimoniales, por los ganados de labranza de las heredades de que recibieran su cógrua sustentacion y por los bienes que adquirieran de nuevo; mas esto último sólo en el caso de que la costumbre del lugar no fuera ajustar la cuota de aquellos impuestos al valor de los bienes de cada contribuyente, porque si así fuese, no se eximiría tampoco de pagar el clérigo (6).

La forma rigurosamente feudal de la mayor parte de las propiedades en Cataluña fué rémora constante á la inmunidad de las de la Iglesia. Los bienes feudales y enfitéuticos que el clero poseía, como todos los vasallos, estaban sujetos á las mismas cargas y á los mismos servicios que los de los legos. No estaban exentos ni del censo frumentario, ni de los tributos eventuales que eran tantos y tan gravosos en el Principado, ni de los llamados *malos usos* que abolió Fernando V, ni de los impuestos en dinero, en que se habían conmutado muchas prestaciones personales antiguas, ni del servicio de las

(1) Muñoz, *Col. de fuer.*, 246.

(2) *Ibid.*, p. 495.

(3) Zuzanavar, *Ensayo histórico-crítico sobre la legislación de Navarra*, t. 2, p. 135.

(4) Fuero de Navarra, lib. 3, t. 5, cap. 17.

(5) Llamábase así un servicio voluntario en dinero que hacía el reino á S. M.

(6) *Recop. de las leyes de Navarra*, lib. 1, t. 12, l. 17.

armas, ni de ciertas obras de interés comunal (1). Los derechos dominicales antiguos que se consideraban como cargas reales, se transferían siempre con los bienes. El servicio militar era consecuencia ineludible del homenaje prestado por el clérigo al recibir el feudo, si bien podía desempeñarlo por delegado.

Según los principios de la jurisprudencia feudal, era el rey señor originario de casi todo el territorio, en el cual se había reservado al cederlo, ciertos derechos; y como uno de estos fuese el de los laudemios en las ventas y trasmisiones de las tierras, no se halló otro modo de preservarlos, cuando éstas eran adquiridas por la Iglesia ú otras manos muertas, que no podían ó no solían enajenarlas, más que su venta inmediata y forzosa á pecheros, ó la exacción de un fuerte tributo, en compensación de los derechos que al señor ó á la corona dejarían de devengar, por salir del comercio (2). Tal fué el origen del impuesto de amortización, con que además de las otras cargas feudales, estaban gravadas en Cataluña las propiedades que se trasmitían á la Iglesia.

No se crea, sin embargo, que el clero de Cataluña estuviese privado de toda inmunidad, en cuanto al disfrute de sus bienes, ni que le fuera rigurosa y constantemente exigido el impuesto de amortización. Jaime I en 1234, le eximió de los tributos de *peaje* y *leudas* (derecho de entrada), impuestos después de la muerte del rey su padre, así como del llamado *questa*, aunque dejando á salvo los censos establecidos desde antiguo, según la costumbre de cada lugar (3). El mismo monarca en 1257, confirmó aquel privilegio, en cuanto á los *peajes* y *leudas*, añadiendo que los oficiales reales no hicieran en los clérigos cuestaciones ni exacciones de trigo, ganados ni otros bienes (4). Pedro II prometió no exigir posadas y otros servicios que no fueran de los acostumbrados, en los lugares de barones, iglesias ó caballeros (5). Alfonso IV, después de haber celebrado en 1419 una concordia con el brazo eclesiástico, en que éste se obligó á que sus vasallos contribuyeran con los demás, á los servicios de «matrimonios y coronaciones reales» y á los gastos de guerra, otorgó otra en 1451, con un legado del Papa, en la cual renunció al impuesto de amortización, que no habían satisfecho las adquisiciones hasta entonces verificadas por el clero

(1) Oliban, *De jure fisci*, c. 9, n. 20, c. 8, n. 2 al 9, c. 3, n. 33.

(2) Ibid., obr. cit. c. 7.

(3) *Constitutions de Cathal.* lib. 1, t. 4, c. 1.

(4) Ibid. lib. 1, t. 3, c. 4.

(5) Ibid. lib. 10, t. 5, c. 2.

en perjuicio del fisco, mandó devolver varios bienes ocupados á la Iglesia, por no haberse presentado el título de su adquisición, derogó ciertas pragmáticas en que se habían impuesto al clero nuevos tributos y prometió no volver á exigirlos, ni aún en caso de necesidad, salvo los censos con que los bienes eclesiásticos estuvieran gravados á favor de la corona. La Iglesia convino á su vez, en que cuando el rey pidiera algun servicio á las Cortes, contribuirían á él los bienes eclesiásticos juntamente con los de los legos, segun el valor que el mismo clero les diese y sin que se entendiera perpétua semejante obligacion (1). Esta concordia es prueba harto manifiesta de que la inmunidad, á pesar del feudalismo, hacia más progresos que en las leyes, en la sociedad y en la opinion pública.

Aún estuvo más restringida la inmunidad en el reino de Valencia, si ha de juzgarse por los documentos posteriores á la conquista. Jaime I, despues de sus victorias, fundó y dotó ricamente las principales iglesias de aquella tierra; pero considerándose dueño de ésta, segun las ideas del tiempo, no permitió al clero disfrutarla sino con las condiciones y gravámenes comunes á todos sus vasallos. Así dispuso en 1246, que los clérigos que de cualquier modo adquirieran casas ó heredades en la ciudad de Valencia y los que las compraran en su término, de propietarios pecheros, pagaran, sirvieran y contribuyeran por ellas en todas las *questas* ó pechas, *huestes*, *cabalgadas* y demás tributos reales y vecinales (2). Despues, en 1251, confirmando la disposicion anterior y dando reglas sobre el modo de llevarlo á efecto, ordenó que los eclesiásticos contribuyeran sin excusa y sueldo á libra, de los bienes que por compra ó donacion poseyeran, á todas las cargas y servicios reales y vecinales (3). Segun el fuero que el mismo monarca dió al reino, los eclesiásticos habian de contribuir á la reparacion de muros, puentes, calzadas y acequias, pagando estos y los demás pechos comunales, tanto por razon de sus bienes patrimoniales, como de sus beneficios eclesiásticos (4).

La Iglesia de Valencia estaba tambien sujeta como la de Cataluña al impuesto de amortizacion. Los clérigos podian comprar bienes realengos, siempre que pagaran por ellos los pechos acostumbrados; mas la Iglesia

(1) *Pragmat. Cathal.* t. 2, lib. 10 y lib. 1, t. 1, 2.

(2) *Privilegia regni Valentie*, cap. 21. Branchat, *Derechos y regalías del real patrimonio en el reino de Valencia*, t. 2, c. 3, privil. 13.

(3) Branchat, t. 2, c. 13, privil. 16.

(4) *Fori regni Valentie*, fuer. 18 y 19, rubr. 12, lib. 9.

no podia adquirir inmuebles, sino con la obligacion de venderlos inmediatamente, á ménos que obtuviera del soberano un privilegio de amortizacion, mediante el pago de cierto tributo, que en el siglo xv era de cuatro sueldos por libra y fué aumentado despues (1).

Sin embargo, los legisladores valencianos no desconocieron por completo la inmunidad eclesiástica. El mismo Jaime I, que tan celoso se mostró en la defensa de los intereses del erario, otorgó ya exenciones de tributos á favor de determinadas iglesias. A la catedral de Valencia concedió el privilegio de poder adquirir y retener cualesquiera bienes, sin pagar por ellos servicio, pecho ni tributo real alguno (2), y á todas las iglesias el de adquirir heredades de caballeros, siempre que no estuvieran sujetas á los mismos servicios ó tributos (3). Jaime II en 1307 y 1316, declaró exentos del servicio de *moneda* á los clérigos no casados que usaran corona y sirvieran en la Iglesia (4).

Por otra parte hubo tambien muchas exenciones de hecho, en contravencion á las leyes forales, como se infiere de la repeticion con que fué menester prescribir la obligacion de pagar tributos los eclesiásticos. La ciudad de Valencia se quejó de su inobservancia en 1315: Pedro II la tuvo que recordar en 1342 y 1356: Juan II en 1446, ordenó que los bienes adquiridos por la Iglesia con licencia de amortizacion, continuaran sujetos á las cargas reales y vecinales, y en 1450 tuvo que celebrar una concordia con el clero para que la Iglesia pagara nuevos impuestos por los bienes pecheros que adquiriese; Fernando V juzgó necesario confirmar las leyes anteriores sobre esta materia: los religiosos franciscanos y trinitarios rehusaron en 1528 el pago de cierto servicio extraordinario: el clero de Valencia se quejó en 1538 de que un impuesto sobre las murallas y puertas, concedido sólo por tres años, se continuaba exigiendo, trascurrido este término; por último, el brazo eclesiástico, en las Cortes de 1585, obtuvo exencion de los peajes y derechos reales que no pesaran sobre los legos (5).

(1) Fuer. 5 y 15, rubr. 19, lib. 4. Belluga, *Speculum principum*, rubr. 14, vers. Restat.

(2) Tarazona, *Institutions del furs y privilegis del regne de Valencia*, lib. 1, tit. 1.

(3) Fuer. 9, rubr. 19, lib. 4.

(4) *Privileg. reg. Valent.* c. 78 y 81.

(5) Branchat, *Privil.* 18, 26, 38, 43. *Act. de Cort.* de 1585, c. 29.

IV.

CONTROVERSIAS SOBRE EL ORIGEN Y LÍMITES DE LA INMUNIDAD Y SUS
PROGRESOS HASTA FIN DEL SIGLO XVII.

Las crecientes pretensiones del clero estaban en verdad justificadas por el influjo cada día más poderoso de la legislación canónica y sus preceptos cada vez más rigurosos en defensa de la inmunidad. Después de los concilios de Letran III y IV vinieron las decretales de los Papas prohibiendo toda exacción tributaria de los bienes del clero y de la Iglesia, y amenazando con penas severísimas á los contraventores. Alejandro IV, en 1260, para refrenar, según decía, la audacia de los muchos señores y comunes franceses que imponían tributos sobre los bienes que la Iglesia adquiría de nuevo, ó la obligaban á enajenarlos (es decir, que exigían el impuesto de amortización, según se practicaba en Cataluña y Valencia), condenó rigurosamente tales actos como opuestos á la libertad y á la inmunidad eclesiásticas (1). Más tarde, en 1298, Bonifacio VIII, quejándose de que muchos príncipes y señores, particularmente en Francia, exigían por tributo al clero, ya la mitad, ya la décima, ó ya la vigésima parte de sus rentas, á lo cual asentían por miedo algunos prelados, sin pedir al Papa la licencia debida, prohibió á los clérigos pagar nada á los legos so color de préstamo, subvención, donativo, subsidio ó cualquiera otro título, bajo pena de incurrir en entredicho las corporaciones que tales exacciones cometieran, y en excomunión mayor los exactores y los clérigos que contribuyesen (2). Aquel mismo pontífice hizo aún mucho más por la causa de las inmunidades, que con tanto ardor sustentaba, pues al confirmar en 1298 la exención de peajes y derechos de entrada otorgada á los eclesiásticos por Alejandro IV, respecto á las cosas propias que trasportaran, no por causa de negociación, se fundó en que la Iglesia y los clérigos eran inmunes de los tributos de los legos, no solamente por derecho humano, sino también por derecho divino (3); declaración importantísima que dió por el pronto á la inmunidad una fuerza incontestable y que apenas se concibe cómo no bastó para generalizarla á toda la cristiandad, acabando con las excepciones que la restringían en muchos

(1) *Sext. Decret.* lib. 3, t. 23, c. 1. *Quia nonnulli.*

(2) *Ibid.* cap. 3. *Clericis laicos.*

(3) *Ibid.* lib. 3, t. 20, c. 4. *Quonian pedagogorum.*

Estados católicos. Era sin duda que todas aquellas disposiciones generales aplicadas á naciones y pueblos tan diversos en leyes, caractéres y costumbres, ofrecían en la práctica graves inconvenientes, como sucedió á la misma Constitucion de Bonifacio VIII de 1298 arriba citada, que tuvo que derogarla Clemente V por los escándalos, daños y peligros que producía (son sus palabras), y mandar cumplir pura y simplemente los cánones de los dos concilios Lateranenses III y IV (1).

La declaracion de Bonifacio VIII sobre el origen divino de la inmunidad de tributos era, sin embargo, consecuencia necesaria del principio de que se deducia, á saber: la independendencia absoluta del clero de toda potestad temporal. Si como opinaban muchos teólogos eminentes, los clérigos no eran súbditos del soberano en cuyo territorio moraban, si no estaban sujetos en definitiva más que al Papa, era evidente que no habia rey ni príncipe con autoridad bastante para imponerles contribuciones de ninguna clase, dado que esto era atributo eminente de la soberanía. Y si aquella exencion de las potestades de la tierra era además de derecho divino, segun creía la escuela ultramontana, y pretendia justificar con textos del antiguo testamento y con dudosas alegorías del Nuevo, prescindiendo de los más claros y terminantes preceptos de Jesucristo y sus apóstoles, no podía negarse el mismo origen á la exencion de pagar impuestos. De aquí los esfuerzos del clero para que en España tuvieran cumplido efecto los cánones de Letran y las constituciones pontificias últimamente citadas y el nacimiento en nuestra península de una escuela canónica puramente decretalista, á la cual pertenecieron muchos y muy ilustres jurisconsultos y que propagó y defendió contra otros, más apegados á las tradiciones y costumbres patrias, las nuevas doctrinas de la Iglesia romana.

Diego Perez, el glosador de las Ordenanzas reales de los Reyes Católicos, defendió en el siglo xvi el origen divino de la inmunidad tributaria del clero, y procuró restringir cuanto le fué posible, las excepciones de ella que prescribían las leyes patrias. Sostuvo, al efecto, que las heredades pecheras dejaban de serlo, ya cuando se trasmitían de padre seglar á hijo clérigo, y ya cuando su dueño lego abrazaba el estado eclesiástico; que la Iglesia y el clero estaban exentos de pagar alcabala de lo que compraran ó vendieran, no por grangería, así como del impuesto de sisas y de los repartos para el sostenimiento de la Santa Hermandad, y hasta se inclinó á la opinion de algunos teólogos que consideraban inválida la ley que obligaba á los clérigos

(1) Clement. lib. 3, t. 17, c. ún. *Quoniam ex constitutione.*

á contribuir para la reparacion de murallas y otros servicios comunales (1).

Gregorio Lopez, el ilustre comentador de las Partidas, afirmó que la ley que no excusaba al clero de guardar con los legos, los castillos y lugares cercados por enemigos, sólo debia tener aplicacion cuando el temor del daño fuese comun á eclesiásticos y seglares, repentino é imprevisto; que las leyes que mandaban ir en hueste con el rey á los prelados que tuvieran de él algun heredamiento, no les obligaban á pelear personalmente, sino á ayudarle con su consejo y con sus exhortaciones ántes de comenzar la lid, lo cual, si era conforme con el espíritu evangélico y con los cánones, no lo era con el recto sentido de los textos legales, ni tampoco con los hechos; que los clérigos estaban exentos, no sólo de las cargas meramente personales, sino tambien de las que se impusieran á las personas por razon de las cosas; que los gravámenes reales de que no quedaban libres los bienes cuando pasaban á la iglesia ó al clero, eran únicamente los fijos y perpétuos como los censos y otros, y de ningun modo aquellos que se impusieran para remediar necesidades accidentales; y, por último, que á pesar de la ley que no excusaba al clero de contribuir á la construccion, reparacion y guarda de puentes, caminos y calles, opinaba con el Abad, Juan Andrés el Hostiense y otros canonistas, que ni la Iglesia ni los eclesiásticos debian dar tales impuestos, por cuanto no les obligaban las leyes civiles; y las que hubieran de gravarles con tributos, no podian dictarse sino con las condiciones prescritas por los cánones y con licencia del pontífice (2).

Todos los esfuerzos de los canonistas y jurisconsultos de los siglos xvi y xvn se dirigian á conciliar las antiguas leyes patrias y los principios de buen gobierno con la amplitud que los cánones lateranenses y la influencia del clero habia dado á la inmunidad. Los más incurrian sin embargo, en contradicciones notables, pues partiendo del principio de que las leyes y estatutos temporales no obligaban á los eclesiásticos ni á sus bienes, aunque les fueran favorables, por falta de potestad en el legislador; que eran inválidas las leyes que privaran á la Iglesia ó al clero de cualquier privilegio que el Papa ó los principes le hubiesen otorgado ó limitasen de cualquier modo su libertad; y que la exencion de tributos era de derecho divino y además irrenunciable por los eclesiásticos (3), concluian que podria orde-

(1) *Ordenan. real. de Castilla*. Glosa á la ley 1, t. 2, lib. 1.

(2) Glosa á las leyes 52, 51 y 54, t. 6. Part. 1.

(3) D. Juan del Castillo, *De tertiis debitis regibus Hispanie*, cap. 9, n. 1 y sig.—Castillo Bobadilla, *Politica de corregidores*, lib. 2.º, n. 252 y sig.—Narbona, *Com-*

narse por ley general que los predios pecheros no dejasen de serlo, aunque pasaran á la Iglesia (1); que las cargas inherentes á las heredades de que no se eximian éstas cuando pasaban al clero, no eran solamente los censos procedentes de contrato, sino los impuestos fijos, anteriormente decretados por la autoridad pública (2): que por causa, sospecha ó temor de guerra era obligacion de los eclesiásticos ayudar al rey, aunque para ello tuvieran que vender los vasos sagrados (3): que si tardase la licencia del Papa, indispensable segun los cánones para exigir servicios al clero, y la necesidad apremiara, podrian aquellos exigirse con solo el asentimiento del obispo: que tampoco seria necesaria aquella licencia cuando se tratara de leyes dictadas en interés comun de legos y eclesiásticos, pudiendo en todo caso ser embargadas las rentas de estos, áun por los concejos, para obligarles á la obediencia de tales preceptos (4): que no era contraria á la inmunidad la ley que declaraba hipotecada al pago de la alcabala devengada en su enajenacion, la finca adquirida por la Iglesia (5): que tampoco lo era el que los eclesiásticos contribuyesen al impuesto de *sisas*, establecido ya para atender á servicios comunales ó ya en utilidad general del reino (6); y por último, que ni siquiera perjudicaba á la inmunidad el impuesto del 20 por 100 de amortizacion establecido por D. Juan II (7).

El ilustre jurisconsulto Alfonso Diaz Montalvo ofrece un vivo ejemplo de la lucha sorda que agitaba la opinion en tan grave materia. En el comentario del Fuero real que escribió aquel sábio consejero de los Reyes Católicos, afirmó que los bienes eclesiásticos no debian contribuir con los de los legos á las cargas generales del Estado, aunque se tratara de impuestos extraordinarios ó establecidos por verdadera utilidad pública, y que los bienes pecheros trasferidos á los clérigos quedaban inmunes y libres; y en su glosa á las leyes de Partida sostuvo que los eclesiásticos debian tributo al príncipe por derecho divino, canónico y civil: que los

mentar. in tertiam partem Novæ recopilationis legum Hispaniæ. In leg. 35, t. 3, lib. 1, glos. 4.—Valenzuela, *Defensio Monitorii Pauli V adversus ducem et senatum reipubl. venetorum.* Part. 4.

(1) Perez, *Comment.* in leg. 1, t. 1, lib. 1, Orden. reales de Castilla.

(2) Greg. Lopez, ad leg. 51, t. 6, Part. 1.^a—Matheu, *De regimine regni Valentie*, c. 2, pár. 50, n. 44 y sig.

(3) Bobadilla, *Política*, etc., lib. 2, c. 18, n. 297.

(4) Cevallos, *Communia contra communes*, etc., Quæst. 578.

(5) Lassarte, *De decima vereditione... quæ alcabala nuncupatur*, c. 19, n. 9 al 14.

(6) Bobadilla, lib. 2.^o, c. 18, n. 291.

(7) Narboná, *Comment.* ad leg. 35, t. 3, lib. 1.^o, glos. 4, Recop.

clérigos que no contentos con los diezmos y primicias, poseían predios, villas y castillos pecheros, no estaban exentos de contribuir por ellos: que de todo lo que la Iglesia adquiría, por compra ó donacion, no siendo por derechos de sepultura, debía dar al fisco del rey los impuestos acostumbrados, y entre ellos la alcabala, que ya de antiguo satisfacía, tolerándolo los Papas; y que el cánón del Concilio IV de Letran citado más arriba, sólo eximía al clero de los pechos extraordinarios que acordaran las autoridades locales ó inferiores, porque si fuera extensivo á toda clase de tributos derogaría muchas leyes, lo cual no podía ser, porque éstas tenían, en su concepto, fuerza de cánones en lo que no eran conformes con ellos. «Contén-
tense los clérigos, añadía Montalvo, con su porcion levítica, y si más tu-
vieren, si poseyerén inmuebles, sirvan por ellos á sus señores... La in-
munidad no exime sino de impuestos extraordinarios, que son los no
sujetos á cuota fija, y de los personales, pero no de los reales... Los cléri-
gos deben perder sus privilegios cuando con ellos causan grave detrimento
en los derechos del rey... Es notorio que la Iglesia y el clero han aumen-
tado tanto su riqueza, que si no pagarán tributos, no quedaria bastante
hacienda á los legos para subvenir á las cargas públicas» (1).

D. Diego Covarrubias, uno de los más doctos é ilustres jurisconsultos españoles del siglo xvi, incurrió en contradicciones semejantes. Despues de afirmar y probar concluyentemente que la inmunidad del clero en lo criminal y en cuanto á las cosas temporales, procedia del derecho humano y de los príncipes de la tierra, sostuvo que estos no podían derogarla, y que el Papa podia eximir de su jurisdiccion las personas y las cosas eclesiásticas en virtud de su potestad de proveer á todas las necesidades de la Iglesia y de ser los soberanos súbditos de la Santa Sede en lo espiritual y eclesiástico (2).

Otros doctores, para tranquilizar su conciencia un tanto alarmada de no ver entre la rigurosa doctrina de las decretales y las costumbres y leyes patrias y aún las necesidades públicas, la conformidad que desearan, hacian los mayores esfuerzos por conciliarlas, inventando distinciones sutiles é interpretaciones ingeniosas. A la independecia del clero de la jurisdiccion de los tribunales seculares, se opuso la potestad tuitiva y económica del

(1) Fuero real de España... glosado por el egregio doctor Alfonso Diaz Montalvo. Glos. á la ley 1, t. 5, lib. 1.º—Las Siete Partidas con la glosa de Alfonso Diaz Montalvo. Glos. á la l. 50, t. 6, Part. 1.ª

(2) *Practicar. quest.*, c. 31, n. 2 y sig.

soberano, que permitia tratar como extranjero al eclesiástico rebelde, extrañándole del reino y ocupándole las temporalidades. Esta distincion entre la jurisdiccion propriamente dicha, de la cual se supuso que hablaban tan sólo los cánones, y la potestad discrecional del monarca como dueño del territorio, para no consentir en él la presencia de extranjeros peligrosos, juntamente con el patronato universal de la corona (1), ya fuese adquirido por costumbre ó ya por expresa merced pontificia, sirvieron admirablemente para justificar muchas leyes y prácticas restrictivas de la inmunidad eclesiástica, en cuanto á la jurisdiccion y á los tributos.

Tambien contribuyó no poco al mismo fin la doctrina canónica de que las rentas eclesiásticas debian invertirse en obras piadosas, pues con atribuir este carácter á muchos de los servicios á que se destinaban los impuestos, pudo cohonestarse un tanto su exaccion á los clérigos. Fundándose en que la extincion de la langosta, la provision de aguas potables, la defensa de las viudas y huérfanos expuestos á las depredaciones de los enemigos, el rescate del rey cautivo, la guarda de la vida y de la hacienda del prójimo eran oficios de piedad, se defendia que los tributos destinados á estos objetos, podian gravar á los eclesiásticos, sin mengua de sus privilegios. De aqui nació la doctrina de que podia exigirse al clero subsidio extraordinario de guerra. Ayudó igualmente no poco á corroborarla la circunstancia de poseer los más de los prelados tierras feudales ó de la corona, por las cuales estaban obligados á auxiliar al rey con su persona y sus tierras, cuando salia en hueste. Pero como los cánones de Letran, aún en los casos de necesidad extrema, no permitian gravar los bienes eclesiásticos sin licencia del obispo y del Pontífice, era difícil de eludir esta condicion, sin interpretarla de un modo hasta cierto punto, arbitrario. Afirmóse entonces que aquel canon se referia únicamente al caso en que se pudiera esperar la licencia pontificia, sin daño público, y no á aquel en que la necesidad del tributo fuera tan urgente, que hubiese en la demora peligro. Sin embargo, muchos de los autores que profesaban esta doctrina, al señalar los diversos casos en que por interpretacion, debian contribuir los eclesiásticos, como si se arrepintiesen de lo que acababan de sostener, concluian por aconsejar que se siguiera la opinion más segura, que era en su concepto, la de impetrar para todo un Breve pontificio (2).

(1) Fray Domingo de Soto, en su célebre *De justitia et jure tractatus*, dice que el rey como patrono de las iglesias puede exigir algo de ellas cuando pecharan los demás exentos y no bastaran los tributos de los seglares. Lib. 10, quest. 4.^a, art. 5.^o

(2) Castillo Bobadilla, lib. 2, c. 9, n. 10 y sig.

Otros canonistas, no sabiendo como conciliar el origen divino de la inmunidad con sus excepciones de carácter puramente humano, inventaron la distincion sutil de que tal privilegio no era de derecho divino, pero si conforme al derecho divino (1). Para justificar las leyes civiles que declaraban sujetos á tributo los bienes pecheros que adquiriese la Iglesia, convinieron los más de sus intérpretes en que ellas no se referian á los impuestos públicos, sino á los censos enfiteúticos, laudemios y otras cargas privadas con que estuviesen gravados, y algunos no consideraban válida la obligacion de contribuir los eclesiásticos con ciertos impuestos locales, sino porque la habia autorizado la Iglesia (2).

Admitida en ciertos casos la obligacion de pechar los eclesiásticos, no podia desconocerse la necesidad de apremiarles alguna vez al pago: mas ¿cómo hacerlo, siendo ellos exentos de la jurisdiccion secular? Este era otro punto muy controvertido entre teólogos y jurisconsultos: unos querian que se acudiese al prelado para que apremiara al clérigo renuente; otros ménos escrupulosos sostenian que el juez seglar podia proceder por embargo y apremio, no contra el mismo clérigo, pero si contra sus bienes (3). Los que pretendian conciliar la obediencia de los eclesiásticos á las leyes y á las autoridades temporales, con su independendencia doctrinal de las mismas, distinguieron en la ley una fuerza *directiva* y otra *coactiva* para suponer que el clero estaba sujeto á la primera y no á la segunda (4).

No á todos convencieron, sin embargo, estas interpretaciones ingeniosas. Otros doctores más lógicos y ménos contemporizadores, levantaron su voz contra ellas, siguiendo rumbos opuestos, ya en favor de la inmunidad y contra las leyes que la menoscababan, y ya en favor de estas leyes y contra los cánones de que disentan. Unos consideraban injusta y nula, como contraria á la inmunidad canónica, la ley de D. Juan II que establecia el impuesto de amortizacion (5); otros suponian derogadas por los concilios de Letran las leyes pátrias que mandaban contribuir á los eclesiásticos con ciertos impuestos generales (6); otros tenian por más segura la opinion de

(1) Gonzalez Tellez, *Comment. in Decret.* lib. III. t. 49, c. 4.

(2) Ibid.

(3) Narbona, *Comment. in leg.* 35, t. 3, lib. I, glos. 4.

(4) Diana, Villalobos y otros; pero Gonzalez Salcedo, Covarrubias, Ramos del Manzano y algunos otros consideraban sujeto el clero á la ley en ambos conceptos.

(5) Matienzo, *Comment. in leg.* 2, t. 10, lib. V. Recop. Glos. 5, n. 4. — Lassarte, *Décima venditionis*, etc., c. 9.

(6) Gutierrez, *Practice quæst. De gabellis*, Quæst. 92.

que los bienes pecheros dejaban de serlo cuando se trasmitían á la Iglesia (1); otros, en fin, estimaban que ni los impuestos locales de utilidad comun á legos y clérigos, obligaban á estos, á pesar de las leyes de Partida que ordenaban lo contrario (2). Segun esta doctrina las únicas disposiciones que debían observarse en España sobre la materia, eran las decretales, entendiéndose derogadas todas las leyes y costumbres que no se hallaran en perfecta consonancia con ellas.

Los jurisconsultos que en aquel grave conflicto entre las leyes y los cánones, siguieron contrario rumbo, partían generalmente del principio de que la inmunidad, como de origen puramente humano, no había sido consentida por los principes temporales, sino en cuanto no dañaba á la república, y los cánones que la establecían no habían sido admitidos en España sino con la misma limitación. D. Francisco Ramos del Manzano, presidente del consejo de Castilla en el siglo xvii, que defendió esta doctrina (3) con abundante copia de razones y de ejemplos, deducía de ella la potestad del soberano para preservar sus derechos y los del Estado, exigiendo tributos de los bienes realengos, aunque pasaran á ser eclesiásticos, siempre que esto no se hiciese en odio ni en fraude de la Iglesia ni de sus libertades. Jerónimo Zeballos, jurisconsulto y político famoso del mismo siglo, sostuvo con otros escritores, que el capítulo de la bula *In cæna domini*, relativo á la inmunidad no obligaba á los principes soberanos, sobre todo cuando eran justos los nuevos impuestos (4). Otros muchos escritores adoptaron por principal criterio, en estas graves cuestiones, la necesidad pública y la utilidad comun, ley superior en su concepto á todos los cánones, ante la cual debían enmudecer todos los privilegios. Segun ellos, el soberano temporal podía exigir del clero todo cuanto éste pudiera darle, siempre que la salud de la república lo hiciera necesario y que no resultasen los seglares más favorecidos (5).

Unas y otras doctrinas estaban además autorizadas con ejemplos his-

(1) Marta, *Tract. de jurisdictione*. Suarez, *Defens. contr. reg. Angliæ*, lib. 4, c. 20. —Valenzuela, *Contr. Venetos* n., 169. —Solorzano, *Politica indiana*, lib. 6, c. 12.

(2) Gregor. Lopez in leg. 54, t. 6, Part. 1.^a—D. Gutierre Marques de Careaga sostuvo tambien estas opiniones en su opúsculo *Por el estado eclesiástico y monarchia española*, Granada 1620, escrito contra cierto discurso de Jerónimo de Zeballos, comprendido probablemente después en su *Arte real* impreso en Toledo 1623.

(3) *Ad. leg. Juliam et Papiam*, lib. III, cap. 45.

(4) *De cognitione per viam violentiæ*, c. 12.—*Arte real*, docum. 20.

(5) Pedro Gonzalez Salcedo, *De lege politica*, lib. 1, cap. 4. Ramos del Manzano, *Ad leg. Jul. et Pap.* lib. 3, c. 45 y otros jurisconsultos y políticos.

tóricos de no escasa fuerza. Los reyes de España habían pedido y obtenido en muchas ocasiones, como merced y gracia, el permiso de la Santa Sede para gravar con impuestos las rentas eclesiásticas; y no pocos pontífices habían sido hasta generosos con ellos, acudiendo al remedio de las necesidades públicas. Gregorio VII concedió al rey D. Sancho Ramirez de Aragon los diezmos de todas las iglesias que edificara ó ganara de los moros: Gregorio X cedió á D. Alfonso el Sábio temporalmente las tercias de los diezmos, que despues fueron confirmadas como perpétuas á D. Juan II y extendidas al reino de Granada en favor de los Reyes Católicos: Juan XXII otorgó á Alfonso IX la cruzada y la décima de las rentas eclesiásticas: Urbano V dió al rey D. Pedro el Cruel el tercio de las décimas de los beneficios de Castilla: Inocencio III concedió la cruzada, que después Calixto IV, para favorecer á Enrique IV, extendió á vivos y á difuntos: Sixto IV permitió imponer un subsidio de 100.000 escudos para la guerra de Granada: Urbano VIII é Inocencio X otorgaron otros semejantes en distintas ocasiones. Felipe II excluyó de la Recopilacion la ley de D. Juan II, inserta en las Ordenanzas reales, que gravaba con el impuesto de amortizacion los bienes raices que pasaran á la Iglesia, sin duda porque ni estaba en observancia, ni él pretendia que lo estuviese, siendo en verdad muy aplaudida esta omision por Matienzo, Narbona, Lassarte y otros glosadores y pragmáticos contemporáneos.

De estos ejemplos inferian algunos juristas y teólogos que desde el siglo x, al ménos, habia sido regla constante de nuestros monarcas, no imponer tributos al clero, sin licencia del Papa; mas otros advertian que casi todos los indicados se impusieron, no sobre los bienes que disfrutaba el clero, en virtud de títulos meramente civiles y como cualquier propietario seglar, sino por las rentas que poseia, en virtud de títulos canónicos y en razon á su estado. No era lo mismo, en efecto, tomar al clérigo una parte de los diezmos que disfrutaba como ministro del culto, que exigirle tributo de su hacienda patrimonial, heredada ó adquirida: lo primero podia afectar al servicio de la Iglesia, y no debia hacerse sin el consentimiento de ésta; lo segundo afectaba únicamente al eclesiástico, como miembro del Estado y persona privada. Así, á los ejemplos citados oponian los regalistas el de Pedro II de Aragon, que sin permiso de la Santa Sede, impuso en 1206, el servicio de *monedage*, exigiéndolo á todos sus naturales y vasallos, tanto seglares como eclesiásticos (1): el de Jaime I, que del mismo modo, gravó

(1) Zurita, *Anales de Aragon*, lib. II, cap. 53.

con el impuesto de amortizacion, si no eran enajenados, los bienes que adquirieran las iglesias y clérigos de Valencia; y el de Felipe II que tambien sin licencia del Papa, hizo contribuir al clero en el servicio de 8 millones de escudos, que mandó repartir en 1590, para reparar los desastres de la grande armada. Contestábase, sin embargo, en cuanto á este último hecho, que su exaccion fué ilegal y arbitraria, que la resistieron varios cabildos, que algunos jueces eclesiásticos fulminaron censuras contra sus exactores, y que habiendo reclamado la congregacion general del clero reunida en Madrid en 1596, Felipe II no prorogó el servicio, que habia sido otorgado sólo por seis años, sin obtener del Papa el Breve correspondiente para exigirlo á los clérigos. Consta en efecto que el jurisconsulto D. Juan Gutierrez, autor de tantas obras jurídicas, fué encargado por dicha congregacion de escribir un informe impugnando el reparto hecho á los eclesiásticos del nuevo tributo, y verificándolo trató de demostrar que la inmunidad establecida por derecho divino, habia sido violada: que habian incurrido en excomunion los que habian impuesto, exigido ó cooperado á la exaccion del servicio: que ningun tributo nuevo ni antiguo podia repartirse al clero sin expresa licencia del Pontífice: y que las leyes que le sujetaban á colectas ó gravámenes por utilidad comun, habian sido corregidas por los cánones. La congregacion presentó al rey este informe: el Consejo lo estimó ajustado á derecho, y en su consecuencia no se cobró del Estado eclesiástico el donadio de los *millones*, segun se le llamaba, hasta que Clemente VIII expidió un Breve autorizando á las justicias seglares para exigir á los clérigos la *sis*a de la carne y el vino que consumieran, y para apremiarles á su pago, á fin de que así contribuyesen con los legos, al servicio de millones. Mas era ya entonces tan favorecida la causa de las inmunidades, que ni aún este Breve se ejecutó cumplidamente. El clero se agravio de que fueran exactores del impuesto los ministros seglares, y para satisfacerlo fué menester encargar su cobranza á los eclesiásticos, bajo la dependencia de los obispos, y eximir de la *sis*a lo que los clérigos ó sus familias personalmente consumiesen.

Ni fué esta la única concesion que entonces se hizo á la inmunidad. Como muchos concejos de villas y lugares propios del clero hubiesen tomado censos con la hipoteca de todas las heredades de sus términos, y para redimirlos se hicieran repartimientos á los dueños de las fincas que quedaron libres de aquel gravámen, pidió la congregacion del clero, y concedió el monarca, que á pesar de la utilidad notoria y comun de esta contribucion, quedaran exentos de ella, así los bienes de las iglesias y prela-

dos, cuyos fueran los lugares acensuados, como los patrimoniales de los clérigos (1).

Tambien volvió á ponerse en cuestion en aquel reinado lo resuelto por los Reyes Católicos sobre reducir las alcabalas de los bienes eclesiásticos á las ventas que hicieran los clérigos por tráfico y grangeria. Los juristas disputaron sobre la legalidad de este impuesto, conviniendo los más al fin, en que no tenia otra justificacion que la de venir en apoyo de los cánones que prohibian á los eclesiásticos el ejercicio del comercio. Así es que habiéndose suscitado un ruidoso pleito entre el clero de Jerez de la Frontera y el ministerio fiscal sobre esta materia, se dictó en él, en 1598, una sentencia, que fué despues elevada á ley del reino, segun la cual no habia de exigirse alcabala á los clérigos de los frutos que vendiesen de sus haciendas propias ó beneficios eclesiásticos, pero si de los procedentes de bienes que llevaran en arrendamiento y de cualesquiera otras mercaderias que por trato y negociacion enajenaran. Tal fué el *auto* llamado de *presidentes* (2), por haberlo dictado los de los consejos reunidos, por comision especial del rey, y que á pesar de reducir el tributo á los actos de especulacion y comercio que reprobaban los cánones, fué siempre mal mirado por el clero, combatido por muchos canonistas ultramontanos, como contrario á sus inmunidades y ejecutado con grave dificultad ó eludido frecuentemente.

Así Felipe II marchaba al compás de las opiniones predominantes de su tiempo, cuando para remediar los grandes apuros del Erario, no acudia á los tributos del clero, sin obtener previamente una concesion pontificia. De este modo obtuvo de Pio IV en 1561 el *subsidio* llamado de *galeras*, ó sea una suma de 420.000 ducados que habian de pagar el clero, las obras pías y los comendadores de las órdenes militares, para mantener en el Mediterráneo 60 galeras que defendiesen nuestras costas de moros y turcos: gracia que aunque temporal en su origen, fué despues prorogada por otros Papas y perpetuada al fin por Benedicto XIV. Así logró tambien el mismo monarca de Pio V en 1567, que el clero contribuyese además con el *excusado*. Debia ser éste, segun su concesion primitiva, el diezmo que correspondiese pagar al mayor contribuyente del impuesto en cada parroquia, despues de los dos primeros: mas no habiendo tenido efecto la gracia des-

(1) Gutierrez, *Practice quest. De gabellis*. Quest. 92.

(2) Es entre los autos acordados el I, t. 18, lib. IX y en la Nov. Rec. la I. 12, t. 9, lib. 1.

de luego, se extendió en 1571, por cinco años, á los diezmos del mayor contribuyente de cada parroquia. Este indulto fué despues prorogado constantemente á su vencimiento, hasta que Benedicto XIV lo declaró perpétuo.

Los reyes de la casa de Austria no volvieron á exigir al clero nuevos servicios sin autorizacion pontificia. Las mismas Córtes que en 1625, otorgaron un servicio de doce millones de escudos, pusieron por condicion, para exigirlo al Estado eclesiástico, que se pidiera bula á Su Santidad (1). Obtúvola Felipe III para gravar con el mismo impuesto al clero durante tres años; y por cierto que Paulo V, despues de haberle prorogado la gracia, la revocó en 1607. Felipe IV pidió Breve á Urbano VIII para que contribuyera el clero á un servicio de doce millones, que habian de sacarse gravando el consumo de ciertas especies y con 1 por 100 de las ventas de todas clases; y el Papa se lo concedió en 1628, pero con exclusion de este último arbitrio. Despues revocó esta concesion en 1629, y como el impuesto siguiese cobrándose al clero, ántes de autorizar la Santa Sede el servicio de 18 millones en nueve años, que se impuso inmediatamente, tuvo el rey que pedir á aquel Pontífice la absolucion de las censuras en que por ello habia incurrido. Las Córtes de 1649, al otorgar otro servicio de 24 millones en seis años, pusieron por condicion que el rey procurara contribuyesen á él los eclesiásticos del modo que en conciencia pudiera hacerlo; y aunque Felipe IV lo prometió así, no pudo obtener el Breve que solicitó en el pontificado de Inocencio X. Prorogado el servicio en 1658 por diez y nueve y medio millones en seis años, Alejandro VII otorgó licencia para repartirlos al clero. Pagábalo éste en efecto, bajo el reinado de Carlos II con la correspondiente licencia pontificia; mas como se diese por agraviado de ello, la reina gobernadora mandó suspender la exaccion de 1668, con lo que dejó de pagar tributo el clero en todo aquel sexenio; y si contribuyó en el siguiente, prorogado el servicio, fué en virtud de indulto que en 1673 otorgó Clemente X (2).

DECADENCIA Y TÉRMINO DE LA INMUNIDAD DE TRIBUTOS.

Pero con el siglo XVIII comenzó la decadencia de todas las inmunidades eclesiásticas. Las ideas y las costumbres francesas, siempre inclinadas á

(1) Condiciones generales para el alivio y bien de estos reinos de las Córtes de Castilla de 1625. Condic. 2.

(2) Representacion del cabildo de Cartagena contra los arts. 7 y 8 del Concordato de 1737.

restringirlas, según lo exigía el espíritu de las *libertades de la Iglesia galicana*, vinieron á España con la dinastía de Borbon y aún encontraron algun apoyo en ciertos vestigios de nuestra historia patria. Nuestros antiguos monarcas y las Cortes, en los apuros del Erario y en sus contiendas con el clero, ofrecían no pocos ejemplos contrarios á la inmunidad que corroboraban hasta cierto punto las doctrinas galicanas. Uno de los primeros y de los más ilustres propagadores de estas doctrinas en España, fué D. Melchor de Macanaz, fiscal del Consejo en tiempo de Felipe V. Aquel tan sabio como apasionado escritor, en uno de sus informes, que lleva la fecha de 1713, pidió el restablecimiento de la pragmática de D. Juan II, disponiendo que los bienes pecheros no dejaran de serlo por pasar á personas exentas, la cual habia sido suspendida por el mismo monarca, según en otro lugar se ha visto. Fundaba su solicitud en el exceso de riquezas que ya poseía el clero y en las muchas donaciones simuladas que se le hacían, para excusar el pago de los impuestos; y á fin de desvanecer los escrúpulos canónicos que pudieran dificultar esta medida, alegaba que el Concilio IV de Letran no habia sido recibido en España, puesto que leyes posteriores, entre ellas las de don Juan I en las Cortes de Guadalajara de 1590, mandaban pechar á los clérigos: que por haber dotado los reyes casi todas las iglesias, estaban obligados los eclesiásticos al servicio militar en ciertos casos, y que también lo estaban á contribuir á los servicios de interés comun, locales ó generales como los demás vasallos (1). En concepto, pues, de Macanáz y de la escuela regalista, el Estado podia obligar á los eclesiásticos á contribuir con los legos en todos los impuestos, ya que de ninguno de ellos podia decirse que su objeto no fuese satisfacer una necesidad comun.

Mas aunque en las altas regiones del gobierno prevalecieran las opiniones regalistas, no sucedía lo mismo en la nacion ni en las clases más influyentes en ella, y así Fernando VI obró prudentemente acudiendo como sus predecesores, á la Santa Sede, para restringir y reformar la inmunidad eclesiástica. Con este objeto y con el de arreglar otros puntos de disciplina, entabló negociaciones para celebrar un concordato, que al fin quedó concluido y promulgado en 1757. Fundándose en que los bienes de los legos estaban excesivamente gravados, y lo estarían más, á medida que la Iglesia fuese adquiriendo otros nuevos, pidió aquel monarca al Papa que los adquiridos desde el principio de su reinado y los que en adelante se adquirie-

(1) Publicó este informe Llorente en su *Coleccion diplomática de varios papeles sobre disciplina eclesiástica*.

ran por el clero, pecharan como los de legos; pero no lo logró, sino respecto á los adquiridos desde la misma fecha del Concordato, si no fuesen bienes de primera fundacion ni de los que por concesiones apostólicas, pagaban ya otros impuestos, y en todo caso no habian de compeler á la exaccion de los nuevos más que los obispos (1).

La concesion, como se ve, no podia ser más tímida ni más limitada; con ella continuarian exentas de tributo las cuantiosas propiedades que ya poseia la Iglesia, y si se remediaba el daño futuro, quedaba sin alivio el presente. Sin embargo, esta disposicion del concordato, á pesar de la autoridad del Papa, halló en el clero de España tenaz resistencia. El cabildo de Cartagena hizo y publicó en 1738, una representacion al rey, ponderando lo recargado que se hallaba el estado eclesiástico y pidiendo que se tuviera esto en cuenta, al obligarle á contribuir con arreglo á lo pactado. En otros discursos y papeles publicados tambien entonces, se trató de probar que los eclesiásticos estaban contribuyendo al Estado con más de lo permitido por los indultos apostólicos, que el gobierno habia faltado al compromiso que contrajera en su última concordia, de no pedir bulas á Su Santidad para nuevas exacciones ó no usar de las facultades que para hacerlas se le concedieran, sino á peticion del mismo clero, y que hallándose por tanto quebrantada la inmunidad eclesiástica, debian quedar sin efecto los articulos del Concordato que autorizaban la imposicion de nuevos pechos.

Por esta oposicion, sin duda, los arts. 7 y 8 de Concordato no tuvieron cumplimiento durante muchos años, y cuando el mismo Fernando VI quiso formalmente dárselo, tuvo que modificarlos favorablemente á la inmunidad, mediante la instruccion que promulgó en 1745. Ordenó, pues, que si los bienes nuevamente adquiridos por la Iglesia procediesen de legos exentos de pagar el servicio ordinario, continuaran disfrutando la misma exencion; que cuando los frutos de las heredades adquiridas fuesen granos y los adquirentes declararan haberlos consumido en su manutencion, tampoco pagaran por ellos alcabala ni otros tributos; y que si bien contribuirian los eclesiásticos al impuesto de 19 1/2 millones autorizado entonces por la Santa Sede, se les eximiria del de 4 1/2 millones y del llamado de los *ocho mil soldados* que, segun el mismo Concordato, debian satisfacer, durante cinco años, los lugares pios y las comunidades eclesiásticas (2).

Pero era tal el concepto que gozaban las inmunidades del clero, que ni

(1) Art. 8.º del Concordato de 1737.

(2) L. 14, t. 5, lib. 1. Nov. Recop.

aún con éstas, para él tan ventajosas modificaciones, pudo cumplirse lo dispuesto en los artículos citados del Concordato, á pesar de las estrechas órdenes que para ello diera el consejo de Hacienda en 1745 y 1756. Así lo declaró Carlos III en la real orden de 1760, por la que mandó al mismo Consejo formar una nueva instruccion, si la anterior no era suficiente, para que tuviese efecto el referido artículo 8.º del Concordato. Con este objeto se expidió en el mismo año una real cédula, mandando averiguar los bienes adquiridos por las iglesias y el clero desde 1757, y adoptando otras disposiciones para hacer efectivas las contribuciones á que debian estar sujetos. Estas disposiciones, aunque conformes con el Concordato y aún interpretándolo siempre favorablemente al clero, no dió ya tanta extension á la inmunidad como la de 1745. Por ella no sólo quedarian exentos de tributos los bienes de primera fundacion, segun lo estipulado, sino aquellos con que hubieran sido despues sustituidos por permuta ó venta, pero sujetándose á contribucion todos los demás bienes con que se subrogasen los que no fuesen de primera fundación, aunque se hubieran adquirido ántes del Concordato. De este modo venian á pesar sobre los bienes eclesiásticos muchos tributos laicales y entre ellos el tanto por ciento establecido por gastos de recaudacion, el *equivalente del aguardiente*, donde se recargaba á las contribuciones reales, el *utensilio* considerado ya como impuesto real; el *servicio ordinario y extraordinario*, cuando los bienes procedian de legos pecheros, la *alcabala* de la venta de bienes adquiridos despues del concordato y de la de sus frutos y los *millones* de las especies sujetas á este impuesto, que produjeran los mismos bienes, y las iglesias ó los clérigos vendieran por mayor ó consumieran en sus propios usos, y de las que vendieran por menor, cualquiera que fuese su procedencia. Los jueces que habian de hacer efectiva la exaccion de estos tributos, serian los eclesiásticos; mas si fueran morosos en el despacho de los apremios, habian de subrogarse en su lugar las justicias ordinarias y los superintendentes ó sus delegados (1).

Mas con todo esto no contribuian aún los eclesiásticos en proporcion á sus grandes riquezas, ni á lo que pagaban por las suyas los seglares. La igualdad de los impuestos continuaba siendo una de las grandes aspiraciones de los ilustres políticos del reinado de Carlos III. D. José Moñino, fiscal del Consejo, sostuvo en sus alegatos, que no habia decision eclesiástica que con claridad relevara al clero de tributos antiguos, por los bienes

(1) L. 15, t. 5, lib. 1. Nov. Recop.

que adquiriese de legos pecheros, y aprovechó cuantas ocasiones se le ofrecieron de hacer ver la justicia y la necesidad de que los eclesiásticos contribuyeran como todos los súbditos á levantar las cargas del Estado. Campomanes y otros eminentes repúblicos de aquella edad, mostraron siempre la misma tendencia á restringir las inmunidades. Cárlos III obedeciendo á este espíritu, solicitó indulto de Pio VI para tomar una parte de las rentas de los beneficios eclesiásticos y aplicarla á la fundacion de casas de misericordia y de correccion, hospicios y otros establecimientos de beneficencia. El Papa le concedió la gracia en 1780, pero con estas condiciones: que no sufrirían el impuesto los obispados ni los beneficios con cura de almas, que no fuesen de real patronato: que la cuota con que habia de contribuir cada beneficio, se fijaria con audiencia del ordinario; y que en todo caso habia de quedar á salvo la porcion cóngrua y no habia de exceder la cuota de la tercera parte de la renta gravada. A pesar de todas estas restricciones y de mediar la autoridad pontificia, llevó el clero muy á mal aquella nueva imposicion; algunas iglesias representaron contra ella, y aunque el rey les mostró su desagrado, conteniendo así á otras que trataban tambien de representar, no se atrevió al fin á hacer uso del Breve, sino respecto á los beneficios vacantes ó que fueran vacando (1).

Todavía en el reinado de Cárlos IV ofrecia dificultades la ejecucion del artículo 8.º del Concordato de 1757. Habíase dado al parecer una latitud excesiva á la inmunidad acordada á los bienes de primera fundacion, y se disputaba si el servicio ordinario y extraordinario debia gravar todos los bienes eclesiásticos, excepto aquellós, cualquiera que fuese su procedencia. Cárlos IV vino á resolver al fin estas dificultades en 1795, declarando que no debian considerarse bienes de primera fundacion los destinados á memorias de misas, aniversarios, festividades ó limosnas, aunque si todos los demás que se destinaran á fines piadosos, y que no se exigiera el servicio ordinario y extraordinario de los bienes que la Iglesia adquiriese de personas exentas de pagarlo (2). Tal era el estado de la inmunidad de los bienes eclesiásticos cuando las reformas modernas no sólo acabaron con el privilegio, sino tambien con el derecho de poseer la Iglesia los mismos bienes tributarios.

(1) Acedo y Rico, *Exposición del breve de Su Santidad para tomar una parte de las rentas eclesiásticas*.

(2) L. 16, t. 5, lib. 1. Nov. Recop.

CAPÍTULO III

Limitaciones de la facultad de la Iglesia para adquirir bienes inmuebles establecidas por la potestad temporal ántes del siglo XVI.

I.

ORÍGEN Y PROGRESOS DE LAS LEYES DE AMORTIZACION EN CASTILLA.

A las cuantiosas adquisiciones de la Iglesia y á la inmunidad del clero, los soberanos territoriales opusieron desde el siglo XII, leyes que limitaran las primeras y contuvieran los efectos económicos de la segunda, sin acudir al duro remedio del préstamo forzoso ó de la ocupacion violenta de propiedades. El clero poseia ya entonces inmensos dominios feudales, y aunque por ellos estaba obligado á prestar á la corona ó á los señores los servicios propios de los feudos, su cooperacion militar no era tan activa ni tan útil como la de los vasallos seculares. Cuantas más tierras poseyesen los clérigos en un Estado, tantas ménos quedaban para los nobles é hidalgos, nervio á la sazón de los ejércitos, y ménos eran también los hombres de armas aptos para defenderlo. Menguaban, además, con tal motivo, los provechos del señorío feudal y las rentas de la corona: los unos porque cayendo las tierras en manos muertas, dejaban de contribuir al señor con los derechos de sucesion hereditaria, y los de trasmision de dominio en las enajenaciones; las otras porque exento el clero de ciertos tributos, menguaba la riqueza imponible, tanto cuanto crecian sus adquisiciones.

¿Cómo remediaría este daño la potestad temporal, que se reconocia incompetente para disponer cosa alguna respecto á los bienes de la Iglesia? Cualquier medio que con tal fin emplease, no podia exceder de los límites de su autoridad sobre los vasallos legos, y con esta condicion se trató de impedir el acrecentamiento del patrimonio territorial del clero. Adquiridas entonces las más de las tierras por repartimientos ó feudos de la corona, considerábase ésta con el derecho de imponer á sus poseedores las condiciones que juzgaba convenientes. Así en unos lugares estaba prohibido á los vecinos vender sus heredades á forasteros ó á nobles y ricos hombres; en otros se obligaba al vecino que mudara su residencia, á vender su solar dentro de cierto término; y en la mayor parte y particularmente en Castilla, no se permitia al solariego vender sus heredades por entero, ó

á *fumo muerto*, segun la frase de la época. No siendo, pues, completa y absoluta la propiedad de la mayor parte de los poseedores de tierras, era más fácil imponerles condiciones que no toleraria el dominio perfecto, segun lo comprendemos hoy. Así no hubo de parecer violento que el soberano, de cuyas mercedes procedían las más de aquellas propiedades y de cuya voluntad emanaban las restricciones ántes dichas, añadiese una más de la misma índole, con el fin legítimo de defender sus regalías y corregir un tanto el desnivel creciente entre los dos estados que formaban la república. Quien habia prohibido vender tierras á forasteros, á nobles y á *fumo muerto*; bien podia prohibir su enajenacion á iglesias y monasterios. Esta seria una restriccion más del dominio, que pesaria directamente sobre los legos, en quienes ejercia el soberano absoluto imperio y que se impondria sin acto alguno de potestad sobre la Iglesia, por más que le afectase indirectamente. Ni la piedad debia ofenderse de semejante prohibicion, estando ya el clero suficientemente dotado y entrando á la parte con los vasallos seglares, en el reparto de las tierras que se iban conquistando.

En el siglo XII empezaron, pues, á promulgarse leyes que prohibían á los vasallos enajenar á las iglesias y corporaciones eclesiásticas, no toda clase de bienes raices, sino tan solo los procedentes de la corona, poseidos bajo su dependencia. No es cierto como dicen Campomanes (1) y otros escritores, que hubiese una ley de esta especie bajo la dominacion visigoda. El único fundamento de esta opinion es el cánón 15 del concilio III de Toledo, que dice: «Si alguno de los siervos fiscales construyere iglesias y las dotare con su peculio, procure el obispo con sus preces, que esto sea confirmado por el rey.»

Para comprender el sentido de este precepto, es menester recordar que los siervos fiscales, llevadores ó poseedores de tierras de la corona, aunque no debían enajenarlas sino á otros siervos de la misma condicion, podían donar á la Iglesia y á los pobres bienes de otra clase, no obstante que para adquirirlos, tuvieran que vender sus tierras ó sus esclavos á otros siervos fiscales. Siendo esta la ley del reino, infringiala (2) el siervo que fabricaba iglesia en sus tierras ó la donaba con propiedades ó con esclavos, que no podia enajenar sino á otros siervos de su clase, y por eso los padres del concilio trataron de legitimar estos actos piadosos, mandando á los obispos que pidieran al rey su confirmacion, que era el único modo de revalidarlos. De

(1) *Tratado de la regalia de amortizacion*, cap. 18.

(2) *For. judic.* l. 16, tit. 7, lib. 5.

modo que lejos de haber en la monarquía visigoda, leyes que limitaran las adquisiciones de la Iglesia, las habia que las facilitaban, aún en aquellos casos en que no eran permitidas á los seglares. La ley del fuero juzgo citada vedaba á los siervos fiscales toda enajenacion de tierras y esclavos, por la razon potísima de que no eran enteramente suyos y debian prestar por ellos servicios personales, que no se podian exigir á los hombres libres. Por eso les estaba tambien prohibido emancipar á sus esclavos sin autorizacion del rey (1). Dejar sin efecto estas prohibiciones respecto á la Iglesia, ya permitiendo dar á ésta el precio de los mismos bienes vendidos á otros siervos fiscales, ya obteniendo la dispensa del príncipe cuando estos siervos invirtieran en la edificacion ó dotacion de alguna iglesia, lo mismo que hubiesen recibido de la corona, fué más bien que una restriccion de la facultad de adquirir, un privilegio para ampliarla y favorecerla.

¿Ni cómo habia de ser de otro modo, cuando así las leyes como los cánones españoles revelaban á cada paso el intento de enriquecer el patrimonio eclesiástico? Entre los españoles, mientras se gobernaron por las leyes romanas recopiladas en el Brevario de Alarico, regia la Constitucion de Marciano, citada en otro lugar (2), que los jurisconsultos compiladores é intérpretes de aquel código, exponian diciendo, que por ella se permitia á las monjas, viudas, diaconisas y demás religiosas dar lo que quisieran en vida ó en muerte y por cualquier título á las iglesias, á los obispos y á los eclesiásticos (3). Recesvinto decia despues en una ley, que si los monarcas están obligados á recompensar á los que les sirven, con mucha más razon y con más largueza deben hacer ofrendas á los templos y conservar los bienes perpétuamente destinados á fin tan santo; por cuyas razones ordenó que fueran irrevocables las donaciones hechas á la Iglesia, así por los príncipes como por los particulares (4). No es menester citar otras leyes civiles y canónicas inspiradas por el mismo espíritu que ya mandaban respetar los bienes eclesiásticos y restituir los usurpados, ó ya prohibian su enajenacion, fuera de casos señaladísimos, porque de ellas están llenos los códigos.

Sólo la preocupacion de ánimo con que solian escribir sobre esta materia los regalistas del último siglo, pudo impedirles ver que la legislacion visigoda civil y canónica, lejos de poner el menor embarazo al enri-

(1) *For. judic.* 1. 15, tít. 7, lib. 5.

(2) Véase el cap. I de este libro.

(3) Haenel, *Lex romana wisigothorum*, Novel. Marcian.

(4) *For. judic.* 1. 1, tít. 1, lib. 5.

quecimiento de la Iglesia, lo promovió y favoreció cuanto era dable. Sólo aquella ciega preocupacion pudo hacer incurrir al ilustre conde de Campomanes en el error gravísimo de confundir á los siervos fiscales con los pecheros de la Edad Media, para deducir de ello que las leyes que prohibían á estos últimos enajenar sus inmuebles á eclesiásticos, eran idénticas á las que vedaban á los primeros dar sus tierras y sus esclavos á los hombres libres, y por consiguiente á las iglesias. ¿Cómo pudo ocultarse á la erudición profunda de tan sábio jurisconsulto la grande diferencia que mediaba entre la cosa del fisco, que esto, aunque con ciertos privilegios, de que no disfrutaban otros esclavos, era el siervo fiscal, y el pechero libre del siglo xiii?

Ni en los primeros siglos de la reconquista se hallan indicios de leyes encaminadas á limitar las adquisiciones de la Iglesia. Lejos de eso, lo que en aquel tiempo aparece con más frecuencia, son privilegios y diplomas concedidos para facilitar tales adquisiciones. La Iglesia de Oviedo obtuvo de Ordoño I en 827, entre otras mercedes, la de que los siervos de la corona pudieran darle la quinta parte de sus heredades, segun permitia la ley gótica á los que tenían herederos forzosos (1). Para dar más á la Iglesia los vasallos ó siervos, cuyo señor tenía derecho á heredarlos, se necesitaba que éste lo autorizase con expresa licencia. Así hizo una cierta Jimena, que habiéndose consagrado á Dios, y siendo sierva ó liberta del rey Bermudo II, le pidió permiso para dar al monasterio de Sahagun todos sus bienes «tanto los que Dios le había otorgado, como los que el mismo monarca le había concedido,» y hasta que lo logró, no pudo hacer la donacion que deseaba (2). La única restriccion, aunque muy indirecta, que en aquel periodo puede descubrirse de la ilimitada facultad de adquirir reconocida á la Iglesia, es la prohibicion que imponian algunos fueros á los vasallos realengos, de poblar en determinadas tierras de abadengo, por cuanto adquirir propiedad en ellas, equivalia á trasferir á la Iglesia una cierta participacion en el dominio adquirido y dejar de contribuir á la corona con los pechos propios del vasallaje, para acudir con ellos al señor eclesiástico del lugar. Fernando I, al dar al monasterio de Cardena en 1043, las villas de Villafria y Orbaneja, mandó que no adquirieran casas ni heredades en ellas las personas reales, los condes, los caballeros ni los ciuda-

(1) *Esp. Sagr.*, t. 37, apénd. 9, p. 328.

(2) Escalona, *Hist. de Sahagun*, escrit. 58.

danos (1). Con igual condicion adquirieron tierras otras varias iglesias, y las dieron los prelados á sus propios vasallos. Asi el obispo de Leon, don Manrique, dió por fuero á Villafrontin en 1202, que el que quisiera vender su heredad lo hiciese á hombre que fuera vasallo de Santa Maria (2).

En el siglo XII, segun ántes he dicho, es cuando tanto en las leyes generales, como en los fueros locales, aparecieron las primeras prohibiciones directas de enajenar á la Iglesia heredades de realengo. Ley general hicieron con este objeto las Córtes de Nájera de 1138, que se insertó despues en el Fuero Viejo de Castilla. En ella se dispuso que los *heredamientos del rey* no se transfiriesen á hidalgos ni á monasterios (3). Mas debe advertirse que no se llamaban entonces heredamientos del rey todas las que despues se han

(1) Berganza, t. 2, escr. 85.

(2) *Esp. Sagr.*, t. 36, apénd. 60.

(3) Fuero viejo, l. 2, t. 1, lib. 6. Siguiendo Marina á otros escritores, atribuye á Alfonso VI la primera ley restrictiva de las adquisiciones de la Iglesia, y cita un privilegio de aquel monarca concediendo á la iglesia mayor de Toledo exencion de la ley general que prohibia á las manos muertas adquirir bienes raices, y el fuero dado á la misma ciudad por el propio D. Alfonso, despues de conquistarla. Ambas citas son equivocadas é inconducentes. El privilegio cuyas palabras cita Marina, no es de Alfonso VI, sino de Alfonso VIII, y su fecha, la era de 1240, ó sea el año de 1202. Asi consta de la copia de este documento, que se halla en la *Colección de Burriel*, que posee la Biblioteca nacional. El auto acordado, 4, n. 33, tít. 1, lib. 4, del tiempo de Carlos II, alude á aquel privilegio, suponiéndolo expedido en la era de 1140 por Alfonso VI, mas esto debió de ser error de fecha cometido por el copiante del privilegio que se tuviera presente al redactar el auto, el cual hubo de suprimir una C, escribiendo era MCXL en lugar de MCCXL. Tal errata es la que ha dado lugar á que casi todos los escritores posteriores al auto acordado atribuyan á Alfonso VI lo que fué obra de Alfonso VIII.

No es ménos cierto que en el fuero dado á Toledo por Alfonso VI no se puso límite alguno á las adquisiciones de la Iglesia. Lo que sí mandó aquel fuero, fué que los vecinos no vendieran sus heredades á condes y señores poderosos. Son sus palabras: *et vendat populator ad populatorem et vicinus ad vicinum, sed non volo ut aliquis de ipsis populatores vendant Cortes aut hereditates ad nullo comite vel potestate*. Ni puede decirse que el sustantivo *potestates* se aplicase tambien al clero, pues todos los documentos del tiempo en que se prohibia enajenar bienes á nobles y á eclesiásticos, distinguían con sus propios nombres cada una de estas clases, y aún en el supuesto de que tal denominacion alcanzara á los señores eclesiásticos, no comprenderia á las iglesias ni á los clérigos que no ejercían señorío alguno ni eran poderosos.

Otros escritores han atribuido la primera prohibicion de enajenar inmuebles realengos á la Iglesia, al fuero de Sepúlveda, dado por Alfonso VI en 1070. Hállase, en efecto, una disposicion con tal objeto, en una coleccion de leyes formada probablemente en el siglo XIV y publicada á fines del siglo último, por Reguera Valdellomar, con el título de *Fuero de Sepúlveda*; pero tal disposicion no fué consignada en el verdadero fuero que dió á Sepúlveda Alfonso VI.



llamado *tierras realengas*, como suponen algunos escritores. Decíanse heredamientos del rey las tierras propias de la corona que estaban dadas á vasallos en prestimonio, encomienda, *tierra*, honor ó feudo, y la denominacion de bienes realengos se aplicó despues á todos los que no eran de señorío particular, cualquiera que fuese su procedencia. No se llamaban heredamientos del rey aquellos de cuyo dominio se habia desprendido enteramente la corona, al darlos por juro de heredad, sin carga ni obligacion alguna, fuera del servicio de guerra, al paso que todos estos heredamientos se denominaron despues realengos, si no habian entrado á constituir parte de algun señorío. Que los del rey eran solamente los dados á pecheros para su cultivo con cargas más ó ménos pesadas, se infiere del texto mismo de la ley de Nájera, en cuanto prohíbe que tales heredamientos *non corran á los fijosdalgo*; pues seria un contrasentido que no pudiesen pasar á hidalgos los bienes que poseian las personas de esta clase, y hé aquí lo que justamente habria ordenado aquella ley, si se hubieran comprendido en los heredamientos del rey todos los alodiales llamados despues realengos.

Una ley semejante á la de Nájera dictaron para el reino de Leon ciertas Córtes que en el mismo siglo xii se celebraron en Benavente. Así consta de la ley 251 del Estilo y de otros documentos; y no resultando que aquellas Córtes fueran las de 1202, convocadas por Alfonso IX, puesto que en sus ordenamientos no se halla la ley á que alude la del Estilo, debieron ser las de 1176 del tiempo de Fernando II, pues no hay noticia de otras celebradas en Benavente. Esto mismo comprueba un privilegio de donacion del mismo Fernando II á la órden de Santiago fechado en 1181, en el cual decia aquel monarca que confirmaba á la órden la propiedad de ciertos bienes «perpétuamente, desde el tiempo en que tuve mis Córtes con mis »barones en Benavente, donde mejoré el estado de mi reino é hice recoger todas las encartaciones y las confirmé con aquel derecho que cada uno »debe tener» (1).

Como no es conocido el texto de los ordenamientos de estas Córtes, no se sabe por ellos si la prohibicion de enajenar heredades á la Iglesia, consignada en los mismos, era en cuanto á sus límites, igual á la establecida para Castilla, mas debe presumirse que fuera idéntica, puesto que la ley del Estilo citada, al explicar su sentido en ambos reinos, no indica ninguna diferencia. En uno y en otro, lo único no permitido de enajenar á iglesias,

(1) Bullar. Ord. S. Jacobi ad ann. 1181, scrip. un.

eran los heredamientos del rey. Así despues de referir dicha ley del Estilo lo ordenado sobre este punto en las Córtes de Nájera y en las de Benavente, añade: «Pero los fijos-dalgo, lo que oviesen en sus behetrias et lo »que non fuese realengo *que fuese suyo*, fué establecido que lo pudiesen »vender á las órdenes et al abadengo, maguer las órdenes non hayan privi- »legio que puedan comprar ó que les pueda ser dado.» No cabe, pues, decir de un modo más claro y expícito que si los heredamientos del rey no debian darse á la Iglesia, era porque no pertenecian en absoluta propiedad á los pecheros que los disfrutaban, y que por lo tanto los hidalgos podian darle libremente todo cuánto era *suyo* propio ó de su behetría, por cuanto en el dominio de ello no habia conservado ó nunca habia tenido el rey participacion alguna.

Todavía ofrece otra prueba la misma ley del Estilo citada de los límites de aquella prohibicion. Habiendo arrendado un tal Mascaran las rentas reales, empezó á demandar en el reino de Leon, indistintamente todas las heredades legadas ó donadas á las iglesias ú obras pías; y puesto pleito sobre ello «fué fallado, dice la ley, que realengo es tan solamente en los »celleros del rey, mas los otros heredamientos que son behetría. Et el rey »D. Alfonso, padre del rey D. Sancho, declarólo así, que los heredamientos »que no los pudiesen vender á abadengo, nin el abadengo comprarlos, »salvo si oviesen privilegio de los reyes: mas darles ó dexarles por sus »almas, que los pudiesen dar; mas non en tales lugares que fuesen contra »señorío del rey.» Los *celleros* ó *cilleros* del rey eran el tesoro, ó más propiamente, los graneros del real patrimonio; de manera que *heredades que estaban en los celleros* eran precisamente las tierras que contribuian al monarca con algun servicio frumentario por corresponder á su señorío territorial. Sobre estas, pues, y no sobre las alodiales ni las de behetría pesaba, segun las leyes de Nájera y Benavente, la prohibicion de enajenar inmuebles á iglesias. La ley del Estilo citada interpretó las dos anteriores, mas restringiendo por una parte y ampliando por otra la prohibicion en ellas contenida. Ambas prescribian, que los heredamientos que estaban en los cilleros reales, no *corriesen* á los monasterios. Despues se declaró, segun dice la ley del Estilo, que los bienes que poseyeran los hidalgos en sus behetrias como suyos propios y no fueran realengos, pudieran ser vendidos al abadengo, aunque el comprador no tuviera privilegio para adquirirlos, pero que los no hidalgos y sus mujeres no podrian vender á la Iglesia lo que tuvieran en el realengo, salvo con real licencia. Por último, segun la misma ley, mandó el rey D. Alfonso VII que «los heredamientos non los pudiesen

»vender á abadengo» sin real privilegio, pero si dejarlos por sus almas, con tal de que no se menguase por ello el señorío de la corona. No es fácil resolver las dudas que nacen de este último periodo del texto de la ley, por no expresarse en él la clase de los heredamientos que no se podrian vender, pero si legar al abadengo, como de ello no resultara perjuicio al Fisco. No podian ser los alodiales de los hidalgos; porque entonces estaria en contradiccion la última parte del texto con la primera, que permitia vender sin restriccion alguna á la Iglesia tales heredades: tampoco serian probablemente las de realengo, que disfrutaban los pecheros, porque si pasaban al abadengo por herencia, sufría menoscabo el señorío del rey. Tal vez quiso aludirse á los heredamientos que poseian los villanos en lugares de behetría, libres de todo servicio á la corona, respecto á los cuales nada se habia dispuesto en las leyes anteriores; mas para eso es menester suponer que faltan en el texto algunas palabras por incuria de los copiantes. Si esta es asi, lo que D. Alfonso agregó á las leyes de Nájera y Benavente fué la prohibicion á los villanos de behetría de vender á la Iglesia sus heredades no realengas y el permiso de legárselas por sus almas.

Pero de cualquier modo que esto fuese, las leyes de que se trata siguieron interpretándose en el sentido de no impedir las enajenaciones al abadengo, siempre que quedaran á salvo los derechos de la corona. La ley 3.^a, título 1.^o del libro 1.^o del Fuero Viejo (que no es de las más antiguas, puesto que fué una de las que se incluyeron en este código, cuando el rey D. Pedro lo refundió y publicó de nuevo) declaró que «el monasterio real de Búrgos é el Hospital del rey é los otros monasterios del reino *pueden comprar* (1) de otros monasterios é de otras órdenes ó de hijosdalgo é de donaciones quel rey aya fecho á ome que non haya de facer al rey pecho nin otra cosa ninguna, mas non de lo del rey, onde él á de haber sus pechos é los avrie aver é los podrie perder por aquella carrera: é maguer tenga privilegios algunos que pueda comprar. Este es é debe ser el entendimiento del privilegio, que compren lo que deben é non lo que non deben en arte nin en engaño, nin en ninguna manera: é si lo compraren que lo pierdan.» Como el hospital del rey y los monasterios eran exentos de pechar, nada perdía la corona con permitirles comprar heredades á otros monasterios ó

(1) Estas dos palabras faltan en el texto publicado por Asso y Manuel, dejando incompleto el sentido de la ley y haciéndola hasta ininteligible. Sigo pues otro texto del Fuero viejo, que poseo manuscrito en un antiguo códice, en el cual no faltan las palabras notadas, y es por lo general más correcto que el publicado por aquellos dos preciables escritores.

exentos; mas no sucederia lo mismo si adquiriesen *lo del rey*, aquello de donde el fisco ha de exigir pechos que podria perder, si pasara á poder de exentos. Campomanes infiere de las palabras de esta ley *maguer tengan privilegios algunos*, que las manos muertas eclesiásticas necesitaban licencia real para adquirir cualquiera clase de inmuebles. No hay motivo, en mi concepto, para semejante suposicion. Lo que únicamente puede inferirse del texto citado es que habiendo obtenido algunos monasterios licencia al parecer ilimitada, para adquirir bienes, lo cual era contrario á las leyes de Nájera y Benavente, fué menester declarar que tales privilegios no bastaban para hacer adquisiciones en perjuicio de la corona, sino solamente aquellas que necesitaran tal requisito, segun lo prevenido en la ley del Estilo ántes citada.

Esta prohibicion de enajenar realengos á la Iglesia se consignó despues en multitud de fueros locales. Como que estos se daban á los pueblos, á la vez que se repartian sus términos entre los vecinos, con carga de servicios, que en general no se podian exigir á los eclesiásticos, el señorío de la corona quedaba menoscabado cuando las heredades así adquiridas pasaban al abadengo. Para evitar este daño y en cumplimiento de las leyes generales referidas, se puso por condicion en tantos fueros, la de no enajenar al abadengo las heredades adquiridas del rey.

Seria inútil citar todos los fueros que consignaron esta prohibicion: basta indicar algunos de los principales. El mismo Alfonso VII, despues de conquistar á Baeza, le dió por fuero (1) que ninguno vendiera ni diera á monjes ni á hombres de orden sus bienes raices, fundándose en que á ellos les vedaba su ley enajenar los suyos á los seglares. Tambien dispuso el mismo fuero que el que profesara en algun instituto religioso, no pudiera reservar para sí y su convento, que habia de heredarle, más del quinto de sus bienes muebles, y que los cuatro quintos restantes y todos los inmuebles pasaran desde luego á los herederos legítimos, porque segun el texto «non es derecho nin comunal cosa por desheredar á los suyos, dar mueble ó »raiz á los monges». El mismo monarca dió á la Iglesia el señorío de Tuy y mandó á sus vecinos que no vendieran sus heredades á otros santuarios, caballeros ú hombres de clase superior, y que todos pagaran yantares al obispo (2). Por donde se ve que la ley en cuestion lo mismo se aplicaba para preservar el señorío soberano del rey, que los derechos de los magnates y prelados sobre sus vasallos.

(1) Sandoval, *Hist. de Alfonso VII*, edic. de Madrid, 1792, pág. 260.

(2) *Esp. sagr.* t. 22, apénd. 10.

La prueba más concluyente de la inobservancia de las leyes de Nájera y Benaventô, es la necesidad en que se veían los reyes de reproducirla como fuero especial de las ciudades y villas recién conquistadas, y á veces con paliativos y excepciones que facilitarían su ejecucion. Alfonso VIII, segun sus propias palabras, en un privilegio de 1207, considerando los daños que sufría la ciudad de Toledo y el detrimento que de ello se seguía á la tierra, ordenó con los hombres buenos de la misma, que ningun vecino diera ni vendiera su heredad á ninguna órden, excepto á la Iglesia mayor de Santa Maria, y que si tal hiciese, la perdiera el adquirente, y pagara una multa el enajenante ó sus parientes más próximos; pero que de lo mueble todos pudieran dar ó vender lo que quisieran á las Órdenes (1). Así Toledo cuyas heredades tenían los vecinos desde la conquista en el siglo XI, con graves restricciones del dominio, por cuanto el rey se habia reservado sobre ellas una especie de señorío feudal, no recibió la ley de amortizacion hasta principios del siglo XIII, y para eso fué menester modificarla con excepciones importantes. Del mismo Alfonso VIII es el primer fuero de Cuenca, en el cual, sin excepcion alguna, se prohibió que por ningun título pasara lo realengo al abadengo (2).

Alfonso IX de Leon, al recibir en 1229, por cambio con otras villas, la de Cáceres, que poseía la órden de Santiago, le dió tambien por fuero, entre otros, que ningun vecino enajenase su heredad á individuos de la misma Orden, bajo pena de perderla, juntamente con todos sus demás bienes, y prohibió que vinieran á poblar en el lugar las Órdenes ni los monjes; mas permitió legar dichas heredades á la Iglesia y á las cofradías de la villa (3). Excepcion importantísima que revela el propósito más bien de impedir que Cáceres volviese á caer en poder de las Órdenes militares, y la introduccion de nuevos institutos religiosos, que de dificultar que las iglesias existentes continuaran aumentando su riqueza. San Fernando confirmó este fuero y además dió otro á Córdoba en 1241, despues de conquistarla, prohibiendo á sus vecinos enajenar á Órdenes las heredades que les habia repartido, pero exceptuando de esta prohibicion, como Alfonso VIII habia hecho en Toledo, la iglesia mayor de la ciudad, á la cual podria darse ó venderse cuanto se quisiera (4).

(1) Muñoz, *Colec. de fuer.*, p. 388.

(2) Gonzalez, *Colec. de docum. de las prov. vasc.* t. 6, p. 156.

(3) *Ibid.*, *ibid.*, p. 91.

(4) Manuel, *Memor. para la vida de San Fernando*, p. 458.

El mismo fuero de Toledo y Córdoba otorgó Alfonso X á Alicante en 1252 (1); y sin excepciones á favor de iglesia alguna, hizo extensiva la prohibicion de enajenar á Badajoz en 1254 y en 1265 (2); á Cuenca, en 1268 (3); y á Orihuela, en 1272 (4). Mas como á pesar de estas prohibiciones continuara la Iglesia adquiriendo heredades de realengo, D. Alfonso, al confirmar ó mejorar los fueros de ciertos lugares, mandó venderlas dentro de señalado plazo. Así sucedió en Sahagun donde, habiendo adquirido las Ordenes varias casas, al dar al rey nuevo fuero á la villa en 1255, mandó venderlas en el término de un año á personas que pagaran pechos á la corona y al monasterio; que en adelante no pudieran tener casas en el lugar las Ordenes ni los ricos hombres; que las heredades que se dejaren por el alma á hospicios ó cofradías se vendieran en el plazo de un año, por delegados del concejo y se entregara á los agraciados su precio; y que el abad no adquiriese tampoco heredades pecheras del rey ó vendiese á pecheros las que se le dejasen, pero que pudiera retener las ya adquiridas (5).

Tambien se imponia á veces la prohibicion de enajenar bienes al clero como compensacion de otros privilegios, que á la vez se le otorgaban. Así el mismo Alfonso X eximió de *moneda* y de todo pecho á los beneficiados de Sevilla y á «sus paniaguados, hortelanos, pastores y quinteros;» pero con la condicion de que no vendieran ni dieran sus heredades á Iglesia ni á Orden sin su real licencia (6).

Alguna vez la prohibicion de adquirir impuesta á los institutos religiosos no se extendia á los clérigos; pero en tanto que estos poseyeran los heredamientos adquiridos, como los vasallos seglares, sin perjuicio de los derechos de la corona y con la prohibicion de enajenarlos á abadengo, salvo con facultad real. En estos términos extendió á Murcia el Rey Sábio la ley de amortizacion (7).

La facultad real para adquirir realengos solia darse á iglesias ó monasterios, pero siempre con limitacion á bienes señalados, ó á la suma que en ellos habia de ser invertida. Existen, en efecto, varios privilegios de esta clase, autorizados por el mismo D. Alfonso, como el que dió á su tio el

(1) Gonzalez, *Colec. de docum. de las prov. vasc.*, t. 6, p. 95.

(2) Ibid., *ibid.*, p. 112 y 116.

(3) Ibid., *ibid.*, Privil. 262.

(4) *Memorial histór. de la academ.*, t. 1, p. 289.

(5) Escalona, *escr.* 250.

(6) *Memorial histór.*, *ibid.*, p. 268.

(7) Cascales, *Discursos de Murcia*. Discur. 2, cap. 18.

infante D. Alonso para vender á la órden de Calatrava cierta heredad de Córdoba, el que otorgó al obispo de Cartagena en 1259, para comprar en Murcia y á los moros de Lorca heredamientos que valiesen hasta 6.000 maravedís alfonsíes, y el que concedió al cabildo de Cuenca para invertir en la misma clase de bienes hasta 1.000 maravedís de la moneda nueva (1).

II.

VICISITUDES DE LAS LEYES DE AMORTIZACION DE CASTILLA DESDE EL SIGLO XIII AL XV.

Alfonso X, que dió por fuero especial la ley de amortización á tantos lugares, no la consignó, sin embargo, en su *Fuero real*, que fué el derecho comun en casi toda Castilla, ni la admitió como regla general en sus *Partidas*. Siguiendo, por el contrario, la doctrina de las Decretales, declaró en este último Código, que todos podrian dar cuanto quisieran á la Iglesia, con tal de que no dejaran de contribuir como ántes, las heredades pecheras que se le trasfriesen, y siempre que quedaran á salvo los privilegios en que el rey hubiera prohibido la enajenacion al abadengo de algunas de tales heredades (2). De lo cual se infiere que el legislador no consideraba ya vigentes las leyes generales de Benavente y de Nájera; que sólo estimaba en vigor los fueros y privilegios especiales que las habian reproducido en determinados lugares, y que tales fueros no eran, por lo tanto, sino la excepcion del derecho comun.

Mas aún la observancia de estas disposiciones forales fué siempre inexacta y trabajosa, y á veces nula. Asi Sancho IV, haciendo merced al reino, por un servicio que este le otorgara durante diez años, y considerando las vejaciones á que daba lugar la confiscacion de los bienes realengos que ilegalmente habian pasado al abadengo, cuyo producto para la corona estaba á la sazón arrendado (3) con otras rentas reales, tuvo que reconocer y confirmar en las Córtes de Haro de 1288 todas estas adquisiciones, así como las que se habian hecho tambien ilegalmente en contrario sentido, pasando al realengo las heredades solariegas, de abadengo y de behetria (4).

(1) *Memor. histór.*, *ibid.*, p. 21, 152 y 295.

(2) L. 55, tít. 6, Part. 1.^a

(3) Las demandas puestas por la corona para recuperar estos realengos habian sido arrendadas á D. Abraham el Barchilon por 1.400.000 maravedís.

(4) Gonzal., *Colec. de doc.* t. 5, p. 226.—Córtes de Castilla public. por la Academia, t. 1, p. 99.

Sin embargo, éste fué á la vez el primer monarca que restableció como ley general del reino la prohibicion de enajenar inmuebles á la Iglesia, ordenando á peticion de las Cortés de Valladolid de 1293, que ni los preladados ni los ricos-hombres pudieran comprarlos en las villas realengas (1).

Desde aquella época hasta el reinado de Enrique II, apenas se celebraron Cortés en que no se quejaron los procuradores de la inobservancia de la ley de amortizacion, y en que ésta no fuese confirmada y reproducida por los reyes. Las de Valladolid de 1299 y las de Burgos de 1301 pidieron á Fernando IV que ocupara todo el realengo que desde las Cortés de Haro de 1288, habia pasado á abadengo. Otras Cortés de Valladolid de 1307, llevando más lejos sus pretensiones, pidieron al rey que tomara para sí todas las heredades realengas que habia adquirido la Iglesia desde las Cortés de Nájera de 1138 y las de Benavente de 1176, lo cual no quiso hacer Fernando IV, sin oir primero á los prelados, aunque luego accedió á otra peticion de las Cortés de Valladolid de 1312, mandando que volviera al realengo lo que de él habia salido, sin distincion de fechas. Mas esta providencia no hubo de llevarse á efecto, puesto que los tutores de Alfonso XI pactaron con los prelados reunidos en Medina del Campo, que mediante cierta suma que estos les dieran, no habia de exigírseles la devolucion de los realengos que poseian, hasta que el rey llegara á la mayor edad (2); pacto que tampoco hubo de cumplirse, puesto que en las Cortés de Burgos de 1315, cuando aún era menor D. Alfonso, se volvió á ordenar la devolucion al realengo de todo lo que de él habia salido sin real privilegio, desde las Cortés de Haro. No siendo tampoco eficaz esta providencia, las Cortés de Medina del Campo de 1318, pidieron que para la guerra que entonces se preparaba, se tomasen al abadengo las heredades mal adquiridas y se vendiesen á los concejos y á los vecinos del estado llano, con la condicion de no enajenarlos, aunque el rey no accedió á la demanda, reproduciendo en su lugar la prohibicion de adquirir en lo sucesivo. Peticiones del reino denunciando la inobservancia de estas leyes y numerosos ordenamientos, ya mandándolas cumplir, ya prescribiendo además la restitucion al realengo ó la confiscacion de lo enajenado á la Iglesia, ó ya revocando á instancia del clero, estas mismas disposiciones, ocuparon todo el reinado de Alfonso el Onceno y particularmente á las Cortés de

(1) Córd. de Castil., *ibid.*, t. I.

(2) Crón. de Alf. XI, cap. 11.

Valladolid de 1522 y 1525, las de Medina del Campo de 1528 y las de Madrid de 1529. El ordenamiento de las de Valladolid de 1525, mandando devolver al realengo los heredamientos que de él habian pasado á la Iglesia, fué derogado al año siguiente, á peticion del clero, por real cédula expedida en Medina del Campo (1). Si D. Alfonso nunca vaciló en corroborar la ley de amortizacion con nuevas confirmaciones, tanto generales como particulares, en los fueros que dió á varios pueblos (2), para desposeer á la Iglesia de lo ya adquirido, aunque fuera ilegalmente, no mostró resolucion tan firme.

Atribúyese, sin embargo, á aquel monarca, haber sido el primero que por ley general, extendió á toda clase de bienes raices la prohibicion de enajenarlos á la Iglesia. Habianla decretado así en fueros y privilegios particulares, ora los reyes, ora los señores de vasallos (3) y las Ordenes militares (4); pero como la ley general comprendia solamente á los pecheros y eso con excepciones numerosas, aún observada rigurosamente, no ofrecia grande obstáculo al enriquecimiento de la Iglesia. Los reyes, los nobles y los exentos, que eran muchos y los más ricos, podian darle y le daban, en efecto, sin tasa, cuanto exigian su piedad ó la razon de Estado. Los mismos príncipes que con mayor teson, prohibian por una parte á los pecheros la enajenacion de sus bienes al abadengo, donaban por otra á la Iglesia vastos territorios, fruto de sus conquistas. El interés del reino en mantener estas prohibiciones se hacia patente cada vez que se reunia en Córtes para votar los impuestos; pues creciendo las necesidades con los aumentos de la monarquía, sin que se aumentasen en la misma propor-

(1) Marina, *Ensayo histórico-crítico sobre la legislacion de los reinos de Leon y Castilla*, lib. V, núm. 48.

(2) Fueros de Lucena de 1340, de Priego de 1341 y de Alcalá de los Gazules de 1342. (Gonzal. t. VI, p. 268.)

(3) Garci-Lopez y doña Inglesa, señores temporales de Alfaro, prohibieron á sus vasallos dar heredades á las Ordenes. En 1241 alzaron esta prohibicion en cuanto á la Orden de Calatrava, permitiendo á los vecinos darle ó venderle cualesquiera propiedades. Bullar. Ord. Calatr. ad ann. 1241.

(4) Fernando II en 1181, aprobó las donaciones hechas por la corona y los particulares á la Orden de Santiago, y Alfonso IX confirmó este privilegio, facultando á la Orden para adquirir por herencia, tanto de los nobles é hidalgos como de los pecheros, toda clase de heredades, excepto las tierras dadas á poblar en los primeros repartimientos y las que de nuevo se conquistasen. Bullar. Ord. S. Jacobi ad ann. 1245, escr. 23. El mismo D. Alfonso IX facultó á la Orden de Alcántara en 1227 para adquirir por donacion ó herencia, cualesquiera bienes. Bullar. Alcánt. ad ann. 1255, p. 83.

ción las rentas ordinarias, había que demandar frecuentemente servicios extraordinarios, que sólo debían repartirse entre los pecheros, según el haber de cada uno. Así cuanto más adquirían los exentos, tanto menor era la riqueza imponible y tanto más gravoso el servicio. Y aunque con pasar bienes raíces de los exentos seglares al clero, no se disminuyera el caudal de los contribuyentes á tales servicios, siempre se perjudicaba la corona, porque menguaba la hacienda de aquellos que debían por lo ménos servir al rey á su costa con hombres y caballos.

No es, pues, extraño que para contener más eficazmente las adquisiciones del abadengo se extendiera la prohibición á todo género de inmuebles. Respondiendo el rey D. Pedro á la petición 33 de las Cortes de Valladolid de 1351, decía que «su padre D. Alfonso había ordenado en las Cortes de «Alcalá é en las otras Cortes que fizo ántes dellas, que non pasase heredamiento de lo realengo, *nin solariego nin behetría* á abadengo;» es decir, que había extendido la ley de amortización á las heredades de behetría y á las de señorío. Verdad es que las Cortes ántes citadas sólo hacen mención de las heredades realengas: que las de Alcalá de 1348 ni en sus peticiones ni en su famoso Ordenamiento, trataron de este asunto: que tampoco lo mencionan las de la misma ciudad de 1345, y que no hay noticia de otras Cortes que allí celebrase Alfonso XI. Mas á pesar de todo es tan terminante la afirmación del rey D. Pedro y el documento que la contiene tan auténtico, que no parece deba dudarse de su exactitud. En tal supuesto fué seguramente D. Alfonso quien primero extendió la ley de amortización á heredades que hasta entonces no habían podido darse libremente á la Iglesia.

Estas leyes no fueron mejor guardadas que las anteriores, contribuyendo no poco á ello una peste asoladora, en la cual, ya para mover á Dios á misericordia, ya para sufragios por sus almas, hicieron los fieles ricos y numerosas mandas á los templos, sin cuidarse de las leyes profanas que las vedaban en cierta forma. Pasada esta calamidad, el mismo D. Alfonso, á petición de los ricos-hombres y de los hidalgos que con él se hallaban en el sitio de Gibraltar, acordó hacer ordenamiento para que las heredades legadas ó dadas á las iglesias durante la epidemia, se restituyesen á los herederos de los testadores ó donantes, si ellos quisiesen abonar su precio á las mismas iglesias y que en otro caso fueran vendidas con igual objeto. Pero el rey murió ántes de expedir este ordenamiento, por lo que las citadas Cortes de Valladolid de 1351, reconociendo el incremento del mal é invocando los referidos antecedentes, pidieron al rey D. Pedro que llevase á efecto lo acordado por su padre, ordenando á la vez que los heredamien-

tos trasferidos al abadengo ántes y despues de la epidemia, volviesen al realengo dentro de cierto plazo, segun se habia mandado en las Córtes de Medina del Campo de 1328. El rey contestó que haria justicia á los que agraviados se querellaran, y proveeria de modo que se guardase su servicio, el bien del Estado y el derecho de la Iglesia; y en efecto, en el Ordenamiento de fijos-dalgo acordado en las mismas Córtes, mandó que las heredades pecheras de las behetrias y señorios legadas por los labradores á iglesias ó monasterios durante la peste, fuesen ocupadas y tomadas por los señores de los lugares respectivos. Tambien hubo de disponer que se incorporaran á la Corona los heredamientos de realengo trasferidos á la Iglesia, si ésta no los vendiese á pecheros, en el término de año y dia; puesto que, segun resulta de una escritura contemporánea, el mismo D. Pedro hizo merced á Alvar García, su copero, de todas las heredades adquiridas por el monasterio de Sahagun, y que por no haberlas éste vendido en el plazo ántes señalado, debian recaer en el monarca, segun las leyes vigentes (1). La costumbre, sin embargo, se sobreponia á estas leyes, puesto que segun resulta del mismo documento, D. Pedro revocó aquella donacion en 1356, por habérsele dicho que el monasterio acostumbraba trocar sus bienes con los vecinos.

Aquí es digno de notarse cómo desde entonces, sin que las leyes de amortizacion fuesen mejor guardadas, trascurrió cerca de un siglo sin que las Córtes reclamaran ni los reyes ordenaran su observancia. En los reinados de Enrique II, Juan I y Enrique III no volvió á tratarse de este asunto, á pesar de lo mucho que en ellos adquirió la Iglesia, y de las penurias que sufrió el erario. ¿Fué efecto este silencio de ser ya conocidas en España las disposiciones canónicas, que habian condenado en otros países, las leyes que ponian límite á la libertad eclesiástica en la adquisicion de propiedades inmuebles?

La Iglesia habia desaprobado algunas de estas leyes, aunque sobre otras semejantes habia guardado prudente silencio. Inocencio III reclamó contra las que dictaron los emperadores de Oriente Phocas, Manuel Commeno y Enrique I, prohibiendo las donaciones y legados de inmuebles á las iglesias (2), y además revocó en 1199 un estatuto del Senador romano Basilio, que habia prohibido enajenar á la Iglesia predios litigiosos, fundándose en la incompetencia de la potestad temporal para dictar disposiciones

(1) Escalona, escr. 304.

(2) Inocen. III, lib. 11, epíst. 12, in *Baluzio*.

que obligasen á la Iglesia, aunque sean en su beneficio (1). Alejandro IV declaró tambien en 1260, no ser lícito á los señores temporales ni á las autoridades municipales de Francia, imponer tributos sobre los bienes eclesiásticos y obligar á su enajenacion, segun solian hacerlo (2). Despues Bonifacio VIII, al empezar el siglo xiv, excomulgó á los señores temporales que prohibieran á sus vasallos vender ó comprar algo á las iglesias, fundándose en que tales prohibiciones quebrantaban la libertad eclesiástica (3). Sobre cuyo cánón decia el glosador Juan Andrés en el siglo xiv, que era nula cualquiera prohibicion directa á los súbditos, que perjudicara, aunque fuese indirectamente, aquella libertad.

Verdad es que Clemente V revocó despues esta constitucion, para volver á la del Concilio Lateranense, que condenaba tan sólo las *tallas* y tributos que imponian los señores á los clérigos (4). Además sabian los papas que no era sólo en Francia donde existia la ley de amortizacion, puesto que en Alemania el emperador Federico Barbaroja habia prohibido en 1158, á sus vasallos enajenar feudos, sin licencia de los respectivos señores, á las corporaciones eclesiásticas (5), y en otros Estados del mismo imperio existian estatutos locales, con análogas y aún más rigurosas prohibiciones. Habian asimismo tolerado los pontífices que Eduardo I dictase en 1278 para Inglaterra, una ley semejante, que prohibia á las manos muertas adquirir bienes feudales sin licencia de la corona y del señor inmediato (6). Aún ménos podia ignorar la Santa Sede que en Nápoles y en Sicilia, desde el tiempo de los reyes Normandos, existia una prohibicion análoga, que á principios del siglo xiii, renovó el emperador Federico II, con algunas adiciones, si bien fué luego derogada (7). Aún podia alegarse que la constitucion de Alejandro IV citada no hablaba con los príncipes soberanos, sino con los señores y autoridades locales, que excedian sus facultades dictando tales prohibiciones. Mas á pesar de todo, era lo cierto que consistiendo el vicio de estos estatutos en la incompetencia de la potestad temporal para dictarlos, lo mismo concurría este defecto en el señor local que en el monarca. Y por más que la Iglesia no hubiera resuelto la cuestion de un modo

(1) Decr. cap. 10, tit. 2, lib. I.

(2) Sext. decr. cap. 1, tit. 23, lib. 3.

(3) Ibid. cap. 3, *ibid.*

(4) *Extravag.* cap. un. t. 17, lib. III.

(5) Lib. I. De feud. t. 55.

(6) Cunningham, *Law Dictionary*. Ver. *Mortmain*.

(7) Cavallari, *Institut. jur. canon.* Part. 2.^a cap. 38, pár. 2.

general y definitivo, como no eran muy conformes con estos estatutos, ni el espíritu de los citados señores, ni la creencia vulgar de que sólo con ofrendas podria ganarse el reino de los cielos, no es extraño que los católicos no admitiesen con conciencia tranquila aquellas prohibiciones, hijas de un interés profano. Eran éstas además en aquel tiempo mucho más gravosas que hoy para la Iglesia, porque siendo entonces la riqueza mueble tan escasa, relativamente á la inmueble, y por lo mismo tan difícil vender las propiedades de esta última clase, eran pocos los que podian hacer pingües legados ó donaciones, que no consistieran en tierras y edificios. No es pues extraño que los fieles continuasen ofreciendo sus bienes á los templos y que noticioso el clero de las constituciones pontificias indicadas, les confirmase en su propósito. En cuanto á los monarcas, quizá contribuyó algo tambien á que dejaran caer en el olvido las leyes de amortizacion, la esperanza de hacerlas innecesarias, con las restricciones de la inmunidad de tributos, que decretaron Enrique II y Juan I, segun se ha visto en el capitulo precedente.

Mas como estas leyes no surtiesen el efecto que se aguardaba de ellas y el patrimonio eclesiástico continuara aumentándose, con mengua del de la Corona, fué menester volver los ojos á las leyes de amortizacion, sacándolas del olvido en que yacian. Las Cortes de Palenzuela de 1425 se quejaron á D. Juan II de que los deanes, cabildos y beneficiados compraban muchas heredades en perjuicio de la jurisdiccion y de los pechos reales; y aunque el rey contestó que se guardaran las leyes del reino, tampoco entonces fueron observadas, segun dijeron despues las Cortes de Madrigal de 1438. Además ordenó aquel monarca que los bienes pecheros no dejasen de serlo, aunque pasaran á personas exentas de tributos; pero como á peticion de las Cortes de Zamora de 1432, revocase despues esta pragmática, y las Cortes de Valladolid de 1447 volvieron á quejarse de las muchas adquisiciones que seguia haciendo el clero, creyó D. Juan que era necesario ensayar otro remedio, puesto que el ya empleado y tantas veces repetido no curaba el daño. Convencido de que la prohibicion de adquirir directa y absoluta la eludia el clero y la rechazaba la opinion pública, arbitró un medio indirecto de moderar por lo ménos tales adquisiciones, del cual, en su concepto, no pudiera decirse que excedia de la competencia de la potestad temporal y menoscababa la libertad eclesiástica. Despues de derogar la pragmática citada de 1432, ordenó en 1452, á peticion de las mismas Cortes de Valladolid de 1447, que los que por cualquier título, enajenaran bienes raices á personas exentas de la jurisdiccion real, contri-

buyeran al erario con la quinta parte de su precio, además de la alcabala correspondiente, en caso de venta, entendiéndose siempre inherente aquel tributo á los mismos bienes enajenados (1).

Contóse con que de este modo ó se disminuirían mucho las enajenaciones, sin prohibirlas directamente, que es lo que más repugnaba al clero, ó qué por los menoscabos del Fisco, en las que se hicieran, recibiría éste la correspondiente indemnización. Vana esperanza: la ley de D. Juan II no fué mejor guardada que las anteriores, ni produjo los resultados que de ella se prometían. Ya hemos visto en el capítulo precedente, cómo eludían el pago de este impuesto muchos de los que daban sus bienes al clero y las providencias que el mismo D. Juan II tuvo que adoptar, á petición de las Cortes de Burgos de 1453, para impedir tales fraudes. Si la declaración de ser inherente á la heredad el impuesto del quinto hubiese producido sus consecuencias legales, no habría bastado para eludirlo, la insolvencia cierta ó simulada del enajenante de los bienes á iglesias ó á exentos.

Desde entonces hasta el siglo xvi, volvieron á guardar silencio sobre este asunto las Cortes, las leyes y las crónicas. Ni en el reinado de Enrique IV; ni en el de los Reyes Católicos, se trató de él nuevamente, y no porque la Iglesia dejase entonces de acrecentar su patrimonio, sino porque ganaba influjo en la opinión la doctrina que condenaba tales leyes. Quizá era harto menguado para su objeto el impuesto del quinto, como dijeron las Cortes de Madrid de 1554; pero lo que mejor explica el constante incremento del patrimonio eclesiástico, es la ardiente piedad de los españoles y su vivo celo por la religión y el culto.

Mas ántes de continuar exponiendo las vicisitudes de la propiedad eclesiástica bajo la monarquía única de España, necesito retroceder para dar alguna noticia de ella en los otros reinos de la Península, en los tiempos que precedieron á su union con el de Castilla.

III.

ORÍGEN Y PROGRESOS DE LA LEY DE AMORTIZACIÓN EN LOS REINOS DE LA CORONA DE ARAGON.

Poco despues que en Castilla, apareció en Cataluña la ley de amortización. Cuando en el siglo xi se recopilaron los *Usages de Barcelona*, todo dueño de alodio, caballero ó plebeyo, podia venderlo ó donarlo á iglesias

(1) L. 12, tít. 5, lib. 1. Nov. Recop.

ó monasterios, quedando á salvo el derecho que en ellos tuvieran los nobles (1). Luego Jaime I, tomándola de Francia, donde existia desde más de un siglo ántes, introdujo aquella ley en sus Estados hereditarios del Principado, en Rosellon, en Cerdania y en Montpeller, prohibiendo en 1226, toda enajenacion de bienes raices á iglesias ó personas eclesiásticas. Asi lo afirma el jurisconsulto Antonio Olivan (2), aunque la pragmática no se halle recopilada entre las de Cataluña. Mas luego el mismo D. Jaime hubo de reformar y modificar su propia obra, puesto que en 1254, dictó otra pragmática declarando que, tanto en Cataluña como en Aragon, «pudiese cualquiera legar, donar ó enajenar de cualquier modo sus posesiones á iglesias ó lugares religiosos, siempre que quedaran á salvo el derecho y señorío general de la corona y los estatutos antiguos» (3). De este modo desapareció la prohibicion absoluta que contenia la pragmática de 1226, siendo desde entonces lícitas tales enajenaciones, siempre que no se menoscabasen por ellas, la jurisdiccion real y los derechos fiscales de la corona, así como tampoco los de los nobles, á que aludia el usage anteriormente citado. Lo cual queria decir, que las iglesias y corporaciones eclesiásticas podrian adquirir bienes, pero con las mismas cargas y tributos que ellos tuviesen, y quedando sujetos los adquiridos á la jurisdiccion real. De donde se infiere que la ley de Jaime I, más bien que de amortizacion, fué derogatoria de la que existia de esta especie, haciéndola hasta cierto punto innecesaria, con dejar sujetos los bienes que de nuevo entrasen en la Iglesia, á las mismas obligaciones y cargas que ántes tuviesen.

Mas como el determinar cuándo y de qué modo quedaban á salvo los derechos de la corona en estas adquisiciones, era punto de grave trascendencia para confiarlo tan sólo á los contrayentes ó interesados, Jaime II dispuso en 1288, que los notarios no otorgasen instrumento alguno de enajenacion de bienes raices á las iglesias que no estuvieran autorizadas con real facultad (4). La observancia de este precepto debió de encontrar al pronto alguna resistencia, cuando el mismo monarca tuvo que confirmarlo y repetirlo en 1505, en cuanto á Cataluña y los condados de Rosellon y Cerdania (5). Luego Pedro III, en las Córtes de Cervera de 1559, mandó que cuando el vasallo enajenara ó legara su feudo á iglesia ó lugar

(1) *Constit. de Catal.*, lib. 1, tit. 3, usag. 1.

(2) Olivan, *Comment. ad usat. Alium namque*, cap. 7, n. 5.

(3) *Constit. de Catal.*, lib. 1, t. 3, c. 2.

(4) Olivan, *ibid.* n. 5.

(5) *Ibid.*

religioso (inhábil, por lo tanto, para prestar los servicios feudales correspondientes), se vendiera en el término de un año á persona hábil para dichos servicios y se pagara al señor por luismo, la tercera parte del precio (1). También por la real facultad para adquirir, debía pagarse al rey cierto derecho.

No obstante estas prescripciones, la Iglesia adquirió muchas heredades en Cataluña, sin facultad real, y muchos feudos que no enajenó en el plazo señalado. De ello ofrece prueba concluyente la concordia que Alfonso V, hallándose en Nápoles falto de recursos, celebró en 1450 con un legado del Papa. En ella, mediante cierta suma que recibió del clero de Cataluña, confirmó el rey todas las adquisiciones hechas hasta entonces por la Iglesia, sin los requisitos legales; revocó ciertas providencias que ántes tomara sobre ocupacion de bienes eclesiásticos, cuyos títulos de propiedad no se habian exhibido; derogó cierto tributo impuesto al clero, además de otras disposiciones adoptadas en perjuicio de la Iglesia, y prometió no exigir de los eclesiásticos más que los censos de sus bienes y los servicios á que contribuyeran á la vez los seglares (2). De modo que la suma que entonces pagó el clero, fué como un derecho de amortizacion general, con el que aseguró la posesion de todos sus bienes. Así quedó sancionada la práctica de convalidar las manos muertas la adquisicion de todos sus bienes raices, pidiendo dentro de un año la real facultad para poseerlos, mediante el pago al rey de un derecho fiscal y del luismo al señor directo, si lo hubiese. Así también desde entonces, la ley de amortizacion no fué ya un medio de impedir que los bienes pecheros se trasfirieran á la Iglesia, sino uno de los recursos ordinarios de la real Hacienda.

Los diplomas de la época ofrecen varios ejemplos del uso que hicieron los reyes de la regalía de amortizacion en Cataluña. Jaime I otorgó real facultad en 1272, á la comunidad de Carmelitas de Lérida, para adquirir un huerto contiguo al convento, sin expresar si por esta gracia se habia pagado algun derecho (3). En los mismos términos concedió á las monjas de Santa Clara de aquella ciudad, licencia para comprar censos, hasta en cantidad de 200 maravedís, siendo despues confirmado este privilegio en 1280 por Pedro III (4). Jaime II en 1319, autorizó al obispo de la misma diócesis de Lérida para comprar tierras y honores, aunque fueran de realengo, cuyo

(1) *Const. Catal.*, l. b. 3, tít. 28, c. 2.

(2) *Pragmáticas de Catal.*, lib. 1, tít. 1, c. 2.

(3) *Esp. Sagr.*, t. 47, apénd. 58.

(4) *Ibid.*, apénd. 63.

precio no excediera de 20.000 sueldos jaqueses, pero con la condicion de que las propiedades que adquiriese, continuaran pechando como ántes, en los impuestos generales y municipales (1).

En documentos posteriores de la misma indole suele hallarse ya alguna noticia del derecho de amortizacion que se habia pagado por la real facultad. Pedro IV disputó al cabildo y clero de la diócesis de Lérida las propiedades eclesiásticas del territorio, fundado en la prohibicion de adquirirlas decretada por Jaime I. El clero se defendió diciendo que el rey no tenia por ello derecho á confiscarlas, y que en todo caso, la prohibicion no alcanzaba á los eclesiásticos que poseian sus bienes como los seglares, ni á las cofradías y lugares pios administrados por legos. D. Pedro transigiendo el litigio, resolvió en 1371, que la Iglesia, el clero y los lugares piadosos continuaran en la posesion de sus bienes: que no adquiriesen otros nuevos sin la facultad correspondiente; y que los clérigos particulares pudieran adquirir otros inmuebles, con tal de que á su muerte ó ántes, los trasfirieran á legos, ó á otro eclesiástico que hiciera esta trasmision, ó que impusiera á su heredero eclesiástico la obligacion de hacerla: por todo lo cual confesó el rey haber recibido del obispo 14.000 sueldos barceloneses, importe al parecer, del derecho de amortizacion (2).

Un carácter semejante tuvo la ley de amortizacion en Mallorca. Jaime I, despues de conquistar la isla, repartió sus tierras, reservando como una mitad de ellas para la Corona, y al año siguiente otorgó fuero á los pobladores, con la cláusula de que los bienes repartidos no habian de salir, sin real licencia, del patrimonio de los vasallos seglares, ni de la jurisdiccion de la Corona (3). En su virtud, allí tambien se introdujo la costumbre de autorizar el rey las enajenaciones de inmuebles á la Iglesia, mediante el pago de un impuesto proporcional á su precio.

La ley de amortizacion fué, pues, en Mallorca una consecuencia del derecho de conquista, ó sea una condicion que el conquistador impuso á aquellos á quienes dispensó sus mercedes, por más que Campomanes no viera en ella sino un acto de absoluta soberanía, fundado en que las tierras repartidas, en virtud del contrato celebrado previamente con los prelados y caballeros que ayudaron á la conquista, no pudieron ser gravadas con nuevas condiciones no convenidas. En aquella capitulacion solemne se obligó

(1) *Esp. Sagr.*, apénd. 24.

(2) *Ibid.*, t. 47, ap. 26.

(3) Fuero de Mallorca en Damato, *Histor. del reino Baleárico*.

el rey, en efecto, á distribuir las tierras que no habian de adjudicarse á la Corona, dándolas como recompensa de servicios, pero con la condicion de que los adquirentes no habian de enajenarlas sin dejar *á salvo la fidelidad* debida al rey y *su señorío* (1). Quería decir esta cláusula, segun el lenguaje del tiempo, que las enajenaciones no habian de menoscabar los servicios de vasallaje debidos á la Corona, ni su alta jurisdiccion en las tierras enajenadas. Para que tal fin se cumpliese, era necesario que ó aquellas tierras no pasaran á exentos, ó que pasaran con la obligacion en los adquirentes de acudir al servicio del rey y de reconocer la jurisdiccion real en ellas. D. Jaime optó por el primero de estos medios, en el hecho de prohibir la enajenacion al clero de tales fincas, salvo con real licencia, cuyo precio indemnizaria á la Corona del perjuicio que por ello, se siguiera á la *fidelidad* y al *señorío* real. Ciertó es que se consideraron como más dependientes del rey, las tierras que dió D. Jaime, de las que le tocaron en el reparto, que las primitivamente adjudicadas á los conquistadores, puesto que las unas devengaban por derecho de amortizacion una tercera parte de su precio y las otras sólo una cuarta, segun la tarifa que fijó Jaime III de Mallorca en 1335; mas en ambos casos esta dependencia reconocia el mismo origen, como que segun el derecho público á la sazón ya vigente, nadie sino el monarca podia adquirir tierras por derecho de conquista. La ley, la costumbre ó el pacto podian obligarle á repartir algunas de estas tierras entre sus soldados, mas era despues que hubiesen entrado en el dominio de la Corona y á título de merced. Nada habia establecido respecto á las condiciones con que hubieran de poseerse estas tierras: los reyes imponian las que juzgaban más adecuadas, segun las circunstancias. Unas veces prohibian desde luego enajenarlas á manos muertas: otras veces guardaban silencio sobre este punto y despues dictaban la prohibicion, aplicándola á las tierras antiguamente repartidas, mas siempre se suponía que este era un derecho que se habian reservado al tiempo de la conquista: derecho, es verdad, inherente á la soberanía, pero que traía su origen del de declarar, ordenar y dirigir la guerra, que no era propio de los vasallos.

Tambien en Valencia introdujo Jaime I la ley de amortizacion. Conquistóla y repartió sus tierras en 1238, sin hacer mencion de la facultad de enajenarlas, en el acta de repartimiento; mas en el cuerpo de leyes que dió á su nuevo reino en 1250, con el título de *Costumbres y establecimientos*, ordenó que las heredades que se donaran ó legaran á iglesias ó lugares religiosos,

(1) Dameto, obr. cit., lib. II, p. 207.

fuesen vendidas dentro de un mes y se diera su precio al mismo legatario ó donatario, deducido el laudemio. Despues, estimando harto breve el plazo de un mes para tales enajenaciones, lo amplió hasta un año, como en Cataluña (1). El mismo monarca prohibió legar en testamento, bienes inmuebles á clérigos ó religiosos, mandando dar á los parientes del testador, los que se dejaran con aquel objeto (2); tambien prohibió venderlos, hipotecarlos ó acensuarlos á favor de lugares religiosos ó de clérigos, y enajenar las heredades de estos á otros eclesiásticos, así como las de caballeros ó ciudadanos. Pero luego el mismo D. Jaime moderó un tanto el rigor de estas prohibiciones, ya permitiendo fundar sobre cualesquiera bienes raíces, capellanías, aniversarios ó sufragios, por los cuales debiera pagarse una renta fija á la Iglesia, ya autorizando á los caballeros para enajenar á clérigos ó religiosos las heredades que no hubiesen recibido de la corona, con condicion de tributo ó servicio (3). Despues Alfonso I en 1529, permitió á los ricos hombres y caballeros generosos, comprar y poseer con ciertas exenciones, los bienes pertenecientes á personas reales, aunque con la condicion de no trasferirlos á eclesiásticos, y amenazando por primera vez, con la confiscacion de los que fueran así enajenados. Esta pena mandó aplicar tambien D. Pedro II, á peticion de las Córtes de Valencia de 1542, siempre que los bienes legados á iglesias ó clérigos no fueran vendidos dentro del año (4). Pero al mismo tiempo, la *seu* ó catedral de Valencia obtuvo privilegio para adquirir por cualquier título, bienes de los caballeros, cambiarlos por los de los vasallos del rey y poseerlos libres de todo pecho y servicio (5). Luego el rey D. Martin en 1403, cediendo sin duda á reclamaciones de los prelados, reformó las leyes anteriores, ordenando que los clérigos pudieran adquirir y poseer por cualquier título, para sus propios usos, bienes de realengo, siempre que pagaran por ellos las cargas reales y vecinales, sometiéndose á la jurisdiccion real, y que los dejaran á su muerte ó los dieran en vida, á seglares (6). Por último, Alfonso V amplió aún más el sentido de este fuero, declarando que con las condiciones en él prescritas, podrian los clérigos adquirir para sus usos propios, bienes realengos de

(1) *Fori regni Valentia*, for. 5, rubr. *De reb. non alienand.*

(2) *Ibid.* for. 47, rubr. *De testam.*

(3) *Ibid.* for. 6, 7, 8, 9 y 10, rubr. *De reb. non. alienand.*

(4) *Ibid.* for. 12, rubr. *id.*—Branchat, *Trat. del real patrim.* t. 2, c. 3, XXII.

(5) Tarazona, *Institucions dels furs*, etc., lib. 1, tít. 1.

(6) For. 15, rubr. *De reb. non. alienand.*

sus parientes legos, no sólo por testamento, sino tambien *ab intestato* (1).

Esto disponian las leyes valencianas sobre la regalia de amortizacion; mas en la práctica, quedó reducido su efecto á que las iglesias y corporaciones religiosas pidieran licencia al rey para adquirir bienes raices, la cual se les otorgaba siempre, mediante el pago de un derecho llamado de amortizacion. Este derecho en el siglo xv, era de cuatro sueldos por libra y uno por derecho de sello, y en el xvii, subió á seis sueldos por libra (2), no habiendo fuero que lo tasase. El interés del Fisco en su exaccion fué sin duda la causa de que la ley de amortizacion no cayese allí enteramente en desuso, como en otros reinos. A pesar de todo, ganó en el de Valencia, la Iglesia muchos bienes, sin licencia real, ni pago del derecho, puesto que los reyes mandaron en algunas ocasiones ocupar sin forma de juicio, las propiedades eclesiásticas, cuya legítima adquisicion no se justificara de presente. Reinando el mismo Alfonso V, se otorgó por merced á los clérigos, la restitution de los bienes así ocupados, si despues presentaran la licencia que para adquirirlos, hubiesen obtenido (3). Tambien se ordenó una cabrevacion general de todos los realengos que hubieran pasado á la Iglesia, á fin de confiscar aquellos que sin dicha licencia, se le hubieran trasferido, y exigir cierto impuesto, por los adquiridos legítimamente (4). Este ordenamiento es uno de los que fueron revocados por la concordia de 1450, celebrada en Nápoles, por el mismo D. Alfonso, de que ántes he hecho mencion.

En las otras provincias de España, que fueron tambien Estados independientes, la ley de amortizacion no hubo de ser admitida, ó al ménos ni en su legislacion ni en su historia, se encuentra de ella ningun rastro verdadero. El motivo no fué la mayor piedad de sus habitantes, pero bien pudo ser su mayor pobreza, que no diera ocasion á tanta desigualdad entre el patrimonio de los seglares y el de los eclesiásticos. Cualquiera que la razon fuese, es lo cierto que ni en Aragon, ni en Navarra, ni en Vizcaya, se puso nunca coto á las adquisiciones de la Iglesia.

Tampoco resulta que las Córtes de Aragon, ni las de Navarra, clamaran nunca, como las de Castilla, contra el excesivo enriquecimiento del clero, á pesar de que en uno y otro reino, adquirió este relativamente, muchas y

(1) For. 17, *ibid.*

(2) Belluga, *Speculum principum*, rubr. 14, vers. *restat.*—Branchat, *ibid.* t. 2, c. 3, LXXXVII.

(3) For. 21, rubr. *De reb. non. alien.*

(4) Branchat, *tít.* 2, c. 3, XXXIX.

pingües propiedades, sin dejar de ser exento de tributos. Una ley foral de Navarra que prohibía al villano pechero que entrara en religion, llevar á ella, sin licencia del señor, sus muebles, no ponía el menor obstáculo á que los inmuebles pasaran todos á los monasterios. En Vizcaya no se podían trasferir á la Iglesia las tierras tributarias que poseían los legos, pero era porque su enajenacion estaba prohibida casi en absoluto, á fin de preservar los derechos del señor, ó de los hijos y parientes, á suceder en ellas (1). Por eso no estaba allí prohibido á la Iglesia adquirir bienes aldeales, siempre que se respetara el derecho de tanteo, que disfrutaban los consanguíneos (2). Nada, pues, tan contrario á la realidad histórica como la especie de ley de amortizacion que, apasionado por su asunto, creyó ver el Ilustre Campomanes en los fueros especiales de Navarra y Vizcaya.

CAPÍTULO IV.

Vicisitudes de las leyes de amortizacion y controversias acerca de su validez desde el siglo XVI al XVIII.

I.

VICISITUDES DE LAS LEYES DE AMORTIZACION EN LOS SIGLOS XVI Y XVII.

Si desde el reinado de D. Juan II hasta el de Carlos I, guardaron silencio las Cortes de Castilla acerca de la ley de amortizacion, no fué ciertamente porque con la del primero de aquellos monarcas dejaron de pasar á la Iglesia bienes raices, puesto que de las excesivas adquisiciones verificadas en este período, se quejaron precisamente las Cortes de Burgos de 1512, gobernando el reinado D. Fernando el Católico. En aquel tiempo, más que en el transcurrido desde D. Pedro hasta D. Juan II, fué en el que con los progresos de la jurisdiccion eclesiástica y el estudio más general de las decretales, hubo de acreditarse la opinion que juzgaba incompetente á la autoridad temporal para poner impedimento á las adquisiciones de la Iglesia. No de otro modo puede explicarse cómo pudo coincidir con

(1) *Fuero de Vizcaya*, l. 2, t. 30.

(2) *Ibid.* l. 1 y 3, tít. 17.

el mayor incremento de la potestad real y sus competencias y conflictos con la corte de Roma, la novedad importantísima de no creerse facultados los reyes para reproducir y hacer ejecutar las mismas leyes de amortización promulgadas tantas veces por sus antecesores. Esta cuestión de competencia es el hecho característico más importante de la historia de la propiedad eclesiástica en este segundo período.

Más moderadas en sus pretensiones que otras, las Cortes de Burgos últimamente citadas, pidieron únicamente que se prohibiera á las iglesias, cofradías y hospitales comprar bienes raíces, pero sin privar á los legos de la libertad de instituir sobre los mismos bienes, memorias piadosas y sufragios. Mucho más que esto habían otorgado por sí los reyes en otras ocasiones; pero entonces por primera vez, se juzgó incompetente la corona para adoptar semejante providencia, y respondió á los procuradores que rogaría al Papa cometiese á dos prelados españoles, el encargo de hacer sobre este asunto, la provision necesaria. De modo que el rey reconoció el mal denunciado y la necesidad del remedio pedido, pero se juzgó sin autoridad para administrarlo, confesando que esto competía únicamente á la Santa Sede. Otras cortes de Burgos de 1515, fundándose en que «la mayor parte de los heredamientos estaban en poder de iglesias, monasterios, «colegios, hospitales y cofradías,» pidieron que no se permitiera á estas corporaciones comprar otros nuevos, y que los que adquirieran por donación ó herencia, fuesen vendidos dentro de un año, en el precio que fijaran peritos nombrados por las justicias. El rey, reconociendo otra vez su incompetencia, no prometió ya siquiera que pediría, para proveer sobre este asunto, una delegacion pontificia á favor de prelados españoles, sino que procuraría una bula en la que Su Santidad dictara la provision correspondiente.

No fueron más afortunadas las Cortes en esta materia, con el emperador Carlos V. Las que se celebraron en Valladolid en 1518, apenas hubo el nuevo rey llegado á España, le pidieron prohibiese legar y vender heredades á iglesias y monasterios. D. Carlos prometió consultar con el Consejo el modo de proveer conforme á la petición, escribiendo con su acuerdo al Pontífice, y encargando al embajador en Roma que solicitara el breve despacho. Si esto se hizo, no produjo la gestion ningun resultado, porque otras Cortes de Valladolid de 1523 reprodujeron la misma petición, añadiendo que se señalara un plazo á las iglesias para vender los inmuebles que adquirieran por título lucrativo; mas convencidos al parecer los procuradores de la incompetencia en esta materia, de la potestad temporal,

no rogaron ya al rey que por sí proveyese, sino que suplicara la provision al romano Pontífice. Quizá el mal resultado de las gestiones diplomáticas practicadas con la Santa Sede, en virtud del acuerdo de 1518, fué lo que movió á D. Carlos á responder ahora, que no convenia hacer sobre este asunto, novedad alguna.

Pretensiones mucho más atrevidas formularon, sin embargo, las Córtes de Toledo de 1525. Los procuradores de ellas no se contentaron ya con que se guardase en lo futuro la ley de amortizacion, sino que pidieron se señalara un plazo á las iglesias para vender á legos todo lo que, contravieniendo á dicha ley, hubiesen adquirido por cualquier título: y que nombrase el rey dos visitadores, uno lego y otro eclesiástico, que despues de señalar la dotacion de las iglesias y monasterios necesaria para la subsistencia, y el número de frailes y de monjas que segun sus rentas, deberia tener cada convento, mandaran vender todo lo que no les hiciera falta para sus necesidades perentorias. D. Carlos no respondió como ántes, con seca negativa, pero se remitió á las provisiones acordadas en las Córtes de Valladolid de 1518, y prometió escribir á Roma y consultar al Consejo respecto á los visitadores. Digno es de notarse que unas providencias de esta especie fueran las que iniciaron en Inglaterra la Reforma protestante, en tiempo de Enrique VIII. Peticion semejante, aunque con la salvedad de que se impetrase el acuerdo de la Santa Sede, hicieron despues las Córtes de Madrid de 1528, pero añadiendo que se agravasen las penas de los legos que enajenaran y de las personas eclesiásticas que adquirieran los bienes raices que no debian pasar al abadengo. La respuesta del monarca no fué tampoco más satisfactoria.

Las Córtes de Segovia de 1532 pidieron al emperador que no permitiera vender ni dar heredamientos á iglesias ni monasterios, facultando á los parientes y en su defecto á los extraños, para retraer por su precio, los que así se enajenaran. Las Córtes de Madrid de 1534, insistiendo en la peticion anterior, suplicaron que entre tanto se accedia á ella, se guardara la ley de amortizacion de D. Juan II, pero elevando á la tercera parte del precio del inmueble, la multa del quinto impuesta en dicha ley, por toda adquisicion de manos muertas. Tambien pidieron las mismas Córtes se trajese breve de Su Santidad, á fin de que las iglesias y monasterios vendieran forzosamente, en el plazo de un año, los bienes raices que heredaran. Estas peticiones reprodujeron y esforzaron las Córtes de Valladolid de 1548, agregando, para su mayor eficacia, otras nuevas, como que la prohibicion de adquirir se extendiese á las cofradías; que fueran nulos los

contratos celebrados en fraude de ella; que los bienes enajenados pasaran al más próximo pariente, sin abonar su precio á la corporacion eclesiástica que los hubiera adquirido y pagado; y que los escribanos no autorizaran tales contratos, bajo pena de perdimiento de oficio. Análogas peticiones hicieron tambien las Córtes de Madrid de 1552; pero á todas, desde las Córtes de 1525, respondió el emperador desabridamente, que no convenia hacer novedad, ó que bastaba con lo anteriormente proveido.

Como el mal entre tanto crecia, y el remedio nunca llegaba, las Córtes siguieron reclamándolo con no ménos empeño, en el reinado de Felipe II. Las de Madrid de 1563 se quejaron de que no se hubiera ejecutado lo prometido por el emperador en las de 1525 sobre este asunto, y prescindiendo de la cuestion de competencia, pidieron que mientras llegaba la confirmacion de Roma, se dieran provisiones para que al ménos las cate-drales, colegiatas y monasterios de frailes no compraran inmuebles, y vendieran los que adquiriesen, ó se los vendiesen las justicias, dándoles su precio, si ellos no los enajenaban dentro de un año. Tambien solicitaron las mismas provisiones interinas para que los monasterios no pudiesen heredar á sus frailes ó monjas. Pero á nada de esto accedió el rey. Mucho más moderadas las Córtes de Madrid de 1573, se limitaron á pedir que mientras proveia Su Santidad sobre los puntos suplicados, al ménos se impusiese por condicion en las ventas de tierras concejiles y baldias, que entonces se estaban verificando, la de que los compradores no las trasfiriesen nunca á iglesias ó monasterios, y ni aún á esto quiso Felipe II prestar su asentimiento.

II.

CONTROVERSIAS SOBRE LA VALIDEZ DE LA LEY DE AMORTIZACION.

Si el incesante empeño de las Córtes en poner límite á las adquisiciones de la Iglesia indicaba el incremento constante de la propiedad eclesiástica, la insistencia con que los reyes denegaban ó eludian aquellas pretensiones, y la necesidad que ellos y á veces las mismas Córtes reconocian de impe-trar en esta materia la autoridad del romano Pontífice, probarian la oposicion del clero á tales providencias, aunque otros testimonios no hubiese de ella. En efecto, mucho ántes del siglo xvi, habia tenido ya principio la reñida controversia acerca de los límites de la potestad temporal sobre los bienes eclesiásticos, que tanta influencia tuvo en la vária suerte que las le-

yes de amortizacion corrieron en toda Europa. A fines del siglo XIV estaba ya en tela de juicio entre los teólogos más doctos y los jurisconsultos más famosos, la célebre tesis de si las leyes de la potestad temporal obligaban á los eclesiásticos. Empezó la cuestion en Milan con motivo de la ejecucion de cierto estatuto que prohibia enajenar bienes raices á los extranjeros, por cuanto no eran súbditos del Estado, el cual se trató de aplicar á las iglesias y monasterios como corporaciones exentas, lo mismo que los extranjeros, de los tributos y de la jurisdiccion temporal. El jurisconsulto Signorolo de Homedeis escribió en apoyo de esta aplicacion, fundándose en que los motivos del estatuto concurrían de igual modo en los eclesiásticos que en los extranjeros (1). La misma opinion defendió despues el famoso Baldo. Pero Bartolo, jurisconsulto de gran autoridad, sostuvo el parecer contrario, afirmando que el estatuto no podia ser aplicable á las iglesias y monasterios de Milan, y que si lo fuese no seria válido, como derogatorio de la inmunidad eclesiástica y contrario á una Constitucion del emperador Federico II, inserta en el código de Justiniano, que revocaba las ordenanzas locales que privaran á la Iglesia de cualquier derecho propio de los ciudadanos (2). Esta misma opinion sostuvo despues Jason (3), jurisconsulto tambien de gran fama, asegurando que era la más seguida. Otros escritores defendieron, sin embargo, la contraria de Signorolo, y como muchos Estados tuviesen estatutos semejantes al controvertido, pronto se generalizó el debate entre los jurisconsultos y teólogos de toda Europa. Si fué aplicado á la Iglesia el estatuto de Milan, es punto cuestionable, habiendo autores que lo afirman y otros que lo niegan; pero es lo cierto que el senado de aquella república otorgaba licencia á los no súbditos para adquirir bienes raices, y que Carlos V como duque soberano del territorio de Milan, mandó en 1541 que estos bienes no pasaran á personas privilegiadas, sino con las cargas y tributos que pesaran sobre ellos (4).

Renovóse con gran vigor esta disputa en el siglo XVI, por haber ordenado el mismo emperador como soberano de Flandes en 1515, el cumplimiento de las leyes antiguas que prohibían enajenar bienes raices á manos muertas. El clero reclamó contra esta disposicion en el Consejo de Brabante. D. Carlos mandó oírle, suspendiendo entre tanto su providencia, y á

(1) Consil. 21.

(2) Digest. in leg. *Filius familias*, pár. 1. De legat.

(3) Ibid.

(4) *Collectio statutorum mediolanensium*, tit. *De oneribus*, p. 176,

los cinco años la reprodujo con beneplácito del mismo clero, prohibiendo tales adquisiciones sin el consentimiento del soberano, el del señor baronal y el del tribunal del distrito respectivo (1). Mas á pesar del acuerdo del clero, fué esta ley muy combatida por los defensores de la inmunidad, dando lugar sus impugnaciones á que escribiesen en apoyo de su validez y conveniencia Pekio (2), Gudelino (3), Zoezio (4) y otros jurisconsultos.

La misma contrariedad de pareceres reinaba en España en el siglo xvi. Alfonso de Montalvo, el célebre glosador de las Partidas y del Fuero real, el código de más general observancia en tiempo de los Reyes Católicos, opinaba que la prohibicion de enajenar bienes á la Iglesia, era contraria á las leyes imperiales y á los cánones (5), aludiendo á la Auténtica de Federico II y á las Constituciones pontificias que establecian la inmunidad eclesiástica. Diego Perez, el glosador de las Ordenanzas reales en el siglo xvi, estimaba nulas tambien tales prohibiciones, fundándose en que los estatutos seculares no obligaban á los eclesiásticos, ni á sus bienes; y con mucha más razon, si eran odiosos é imponian algún gravámen á los clérigos (6). Esta doctrina sustentaron tambien en el mismo siglo, Gregorio Lopez, el célebre comentador de las Partidas (7), y Alfonso de Acevedo, el glosador de la Recopilacion (8). De modo que el jurisconsulto famoso cuyas opiniones tuvieron en un tiempo fuerza de ley en España, Bartolo y los cuatro comentadores de más autoridad de los códigos más generalmente consultados y aplicados, condenaban unánimes las leyes de amortizacion. Eran de la misma opinion los tratadistas más célebres y de mayor influjo en los tribunales, como D. Juan del Castillo (9), autor de tantas obras de jurisprudencia; D. Francisco de Avilés, que siendo abogado en Mombeltran, hizo declarar por ejecutoria en cierto pleito, la nulidad de la ley de amortizacion, no obstante haber sido dada por fuero especial á la villa, segun

(1) Van-Espen, *Jur. ecclesiast. univer.* part. 1.^a, tit. 29, cap. 3. n. 15. El jurisconsulto flamenco Pekio, que escribió en el mismo siglo, sobre la *amortizacion*, asegura que Carlos V durante la suspension de su pragmática, negoció el asentimiento del clero.

(2) *De amortizatione.*

(3) *De jure novissimo*, lib. 6, c. 13.

(4) In. cod. ad. tit. *De sacros. eccles.* quæst. 3.

(5) Glos. ad. leg. 1, tit. 5, lib. 1, Fuero real.

(6) Glos. ad. leg. 2, tit. 3, lib. 3, Ordenanzas reales de Castilla.

(7) Glos. ad. leg. 19, tit. 9, Part. 1.

(8) Glos. ad. leg. 11, tit. 3, lib. 1, Recop.

(9) *De tertiis debitis regibus Hispaniar.* 1634.

refiere en su exposicion de los capitulos de corregidores (1); Martin de Azpilcueta, el célebre canonista (2); Alfonso Narbona, glosador de la Nueva Recopilacion, que calificaba de *impio* y *detestable* el fuero de amortizacion dado á Toledo por Alfonso VIII (3); Juan Matienzo, comentador tambien de una parte del mismo código, que notaba y aplaudia que no hubiese tenido en él cabida la ley de amortizacion de D. Juan II (4); D. Juan Valenzuela, el teólogo profundo y el polemista ardiente, que tan esforzado terció con su pluma en las cuestiones de la Santa Sede con el senado de Venecia (5), y otros muchos escritores, no sólo jurisconsultos, sino tambien políticos, como Sancho Moncada, Marques de Careaga y Madariaga, citados por sus opiniones ultramontanas en el capitulo precedente.

Habia algunos escritores de opiniones más templadas, que en casos señalados y con ciertas modificaciones, no condenaban la ley de amortizacion. D. Juan Gutierrez, aunque canónigo y defensor celoso de la inmunidad eclesiástica, creía válida la prohibicion de enajenar ciertas cosas á la iglesia, cuando no le causara grande perjuicio y fuese su utilidad notoria, como si se tratara de terrenos en la frontera ó de edificios arrendados para algun servicio público (6). D. Rodrigo Suarez, que no aprobaba la prohibicion general y directa de enajenar bienes á la Iglesia, admitia la especial de transferirle cosa determinada, siempre que fuera comun á clérigos y legos, como igualmente las leyes que obligaban á unos y á otros á guardar las formas externas de los actos y contratos (7). Esta opinion defendió despues el jurisconsulto portugués Domingo Antunez (8). El insigne doctor Palacios Rubios llegaba á conceder al rey el derecho de prohibir la enajenacion á iglesias, eclesiásticos y extranjeros, de las rentas que reconociera á sus vasallos sobre el Erario público (9). El doctísimo D. Diego Covarrubias, aunque seguia á Bartolo en esta cuestion, advirtiendo que su doctrina era la comun, reconocia que si para el buen régimen y gobierno

(1) *Nova, diligens ac per utilis expositio capitum seu legum praeorum*, 1571.

(2) *Consilior. sive responsor.*, lib. 5. Consil. 4, n. 6, lib. 1.

(3) *Comment. in tertiam part. Nov. Recopilat. leg.* Glos. 2, ad. leg. 35, tit. 3, lib. 1.

(4) *Comment. in lib. 5, Recollet. leg. Hisp.* Glos. 8, ad. leg. 11, tit. 10.

(5) *Defensio Monitorii. Paul. V advers. Ducem et Senat. Reip. Venetor.*

(6) *Pract. quæst. civiles*, lib. 4, quæst. 38.

(7) *De bonis constante matrim. adquir.* 1580.

(8) *De donation. regis*, lib. 3, c. 43.

(9) *Repet. in rubr. et cap. Pervestras...* De donat. int. vir. et uxor. pár. 16, n. 14, 1503.

de la comunidad, era necesario que *ciertas cosas* no se trasfriesen á clérigos, el estatuto que así lo ordenase, seria válido y obligaria á la Iglesia (1). Beltrán de Guevara, que como Valenzuela, tomó parte muy activa por la Santa Sede, en la polémica sobre las leyes venecianas: el portugués Agustín Barbosa, autor fecundísimo de jurisprudencia civil y canónica: el P. Sánchez, que después de haber tratado todas las cuestiones posibles relativas al matrimonio, dilucidó con igual profundidad, otras muchas teológicas y canónicas (2); Alfonso Olea, el sábio consejero de Castilla, que tanto ilustró con sus escritos la materia de cesion de derechos (3), y otros varios juriconsultos que negaban la validez del estatuto prohibitivo, admitían la de la condicion, que así los particulares como el soberano impusieran al enajenar sus bienes, para que nunca fueran trasferidos á la Iglesia.

Esta opinion y la de otros autores ménos favorables á la inmunidad eclesiástica, contaba en su apoyo, la del famoso juriconsulto Baldo, que en el siglo xiv habia sostenido la validez de los estatutos que prohibían enajenar á la Iglesia bienes raíces, fundándose en que era lícito hacer por ley y más para el bien comun, lo que podia hacerse por condicion de contrato, y en que con la prohibicion no se quebrantaban los privilegios de la Iglesia, puesto que no empezaba á disfrutar los relativos á sus bienes, hasta después de haberlos adquirido, y esto no se verificaba cuando el estatuto prohibia é invalidaba la adquisicion. Esta doctrina siguieron en el siglo xvi Melchor Peláez de Mieres, en su tratado de mayorazgos (4), Luis Mexía, en el suyo tan notable de la tasa del pan (5) y otros juriconsultos, que estimaron justa y no contraria á la libertad eclesiástica, la prohibicion de enajenar inmuebles á la Iglesia, con tal de que la ley en que se consignase, respetara todas las propiedades adquiridas.

Sin estos miramientos apoyaron tambien en Castilla la misma prohibicion algunos juriconsultos y políticos, aunque en mucho menor número que los que la rechazaban y los que la admitían con restricciones. Gerónimo Zevallos no encontraba otro remedio al aumento excesivo de las riquezas del clero, que la adopcion de la ley de amortizacion, tal como se

(1) In regul. *Possesor mala fidei*. De reg. jur. lib. 6, Decret. part. 2, n. 8, vers. *Tertium*. 1554.

(2) *Consilia seu opuscula moralia*, 1634.

(3) Addition. ad suum tract. De cess. jur. tit. 2, quæst. 4, 1652.

(4) *Tract. maiorat. et melioration*. Pars. 3.^a quæst. 3.^a n. 2.—1575.

(5) *Laconismus seu chilonium pro pragmat. quæ panis pretium taxatur*, Conclus. 5.^a n. 17, 18.—1590.

usaba en Portugal y en Francia. D. Cristóbal de Anguiano trató de demostrar en general, la validez de las leyes que prohibían enajenar inmuebles á manos muertas (1). Pero los que más se distinguieron en este sentido fueron los jurisconsultos catalanes y los valencianos, por cuanto entre ellos, la ley de amortizacion no habia experimentado tanta contradiccion como en Castilla. En el siglo xv escribió Pedro Belluga (2) justificando los fueros de Valencia, que la establecian. En el siglo inmediato comentó y defendió Antonio Oliban los de Cataluña, dictados con igual objeto, segun se ha visto en el capítulo anterior. En el primer tercio del siglo xvii salieron á la defensa del fuero de amortizacion de Valencia D. Gaspar Rodriguez, al tratar de la enajenacion del censo enfitéutico (3) y D. Francisco Gerónimo Leon en sus comentarios sobre las decisiones de la Audiencia de Valencia (4).

Mas la opinion que en realidad prevalecia en la córte y en los Consejos en el mismo siglo, era la de que el soberano carecia de potestad para prohibir y aún para dificultar las enajenaciones de inmuebles á la Iglesia. No se explica de otro modo la resistencia de Carlos V y de Felipe II á las peticiones de las Córtes en aquel sentido. Por eso no llegó á insertarse en ninguno de nuestros códigos provision alguna en cumplimiento de lo acordado en las córtes de Valladolid de 1518; por eso fué excluida de la Nueva Recopilacion, cuando Felipe II la dió á luz por primera vez, la ley de amortizacion de D. Juan II, que se hallaba comprendida en las Ordenanzas reales.

Esta polémica se renovó con gran violencia en los primeros años del siglo xvii, con motivo de las cuestiones entre la Santa Sede y el senado de Venecia, á que antes he aludido. Desde 1529 era ley de aquella república que los inmuebles eclesiásticos sitos en la capital de ella, adquiridos por titulo gratuito, habia de enajenarlos la Iglesia en el plazo de diez años, distribuyendo su precio de la manera que hubiese dispuesto el testador ó donante. Este plazo habia sido reducido á dos años en el de 1536; pero como el Consejo de *Pregadi* creyese que estas leyes eran insuficientes para su objeto, acordó en 1605 extender su aplicacion á todo el territorio de la Repú-

(1) *De legib. et constitut. Principum*, part. 2.^a controv. 15.

(2) *Speculum Principum, cum addition.* Camillo Borrell, Venecia, 1580. Esta obra fue impresa por primera vez en Paris en 1530, pero su autor floreció en la primera mitad del siglo xv, bajo el reinado de D. Alfonso V de Aragon.

(3) *De annuis et menstruís redditibus*, 1604.

(4) *Decisiones sac. reg. Audientie Valent.*, 1620.

blica, mandando que ninguno sin licencia del gobierno, vendiera, donara, ni legara bienes raíces á personas eclesiásticas (1). Paulo V, que ascendió poco despues al Pontificado, reclamó la derogacion de esta ley y otras de igual tendencia como contrarias á la libertad de la Iglesia y dictadas con exceso de autoridad. El senado se negó á hacerlo, y despues de otras contestaciones, lanzó el Papa un monitorio en 1606, poniendo entredicho al territorio de la República, si el gobierno persistia en no revocar las leyes reclamadas. A este acto contestó el senado con un edicto de protesta, mandando que no se guardase el entredicho, ni se interrumpiesen los divinos oficios, y asi trascurrió un año en estas diferencias, hasta que con la mediacion de la corte de Francia, se puso término al conflicto, revocando el senado su edicto de protesta y cediendo en algunos de los puntos disputados y alzando el Papa sus censuras, sin insistir en la derogacion del estatuto ántes referido.

Estos sucesos tuvieron grande eco en toda Europa y dieron lugar á que, reproduciéndose la antigua controversia entre regalistas y ultramontanos, la animasen con sus obras en pró de una ú otra opinion, escritores de varios países y entre ellos algunos españoles muy distinguidos. Tales fueron entre otros el arzobispo D. Juan Beltran de Guevara que en 1607 dió á luz en Roma su *Propugnaculum ecclesiasticæ libertatis adversus leges Venetiis latas*: el jesuita Fernando de la Bastida, que poco despues, con motivo de la apologia de las leyes venecianas publicada á la sazón por el célebre Fr. Pablo Sarpi, autor de la Historia del concilio de Trento, escribió su *Antidoto* contra las *consideraciones de Fr. Paulo de Venecia*, y el que fué despues consejero y obispo D. Juan Valenzuela, que tambien en 1607 escribió en Cuenca y dedicó al Papa su *Defensio monitorii Pauli V Pontif. adversus Ducem et Senatum Reipub. Venetæ*. Las leyes venecianas no encontraron en España más que impugnadores; pero como al fin la Santa Sede no falló en principio el punto controvertido, quedó abierto á las investigaciones de la razon y la critica y pudieron otros autores, sin incurrir en censuras, no defender á los venecianos, porque esto habria sonado mal despues del entredicho, pero si sostener la necesidad de las leyes de amortizacion y la competencia del Estado para dictarlas dentro de ciertos límites.

Los anti-venecianos ponderaban el agravio que se hacia á la Iglesia privándola de un derecho que era comun á todos los ciudadanos: afirmaban que, aunque la prohibicion de enajenar se dirigiese á los legos, menos-

(1) *Statorum ac Venetarum legum*, lib. 6, c. 57, y *Adicion* á dicha obra.

cababa la libertad eclesiástica, pues tal era su efecto, aunque fuese indirecto el medio empleado; y concluían que la potestad temporal era incompetente para poner límites á la inmunidad de la Iglesia. A esto contestaban los defensores de la República que no disponiendo de cosas eclesiásticas el estatuto impugnado, ni mandando nada al clero, no causaba á éste ningun agravio, por la misma razon que no agraviaban al extranjero las leyes que prohibían introducir en el reino sus mercancías ó venderles las nuestras: que así como el propietario de una finca acensuada no la puede transmitir á la Iglesia sin el censo, así no debe estar á su arbitrio enajenarla sin los tributos fiscales; que el soberano tiene el derecho y el deber de adoptar las providencias necesarias para la conservacion del Estado, aunque de ellas resulte accidentalmente algun perjuicio; y que si la ley de amortizacion fuese contraria á la libertad eclesiástica, la que prohíbe al clero enajenar su hacienda sería contraria á la libertad civil.

Seguia esta polémica en las escuelas del siglo xvii, cuando vino á avivarla otro grave suceso. Desde el siglo xiii existían en Portugal leyes restrictivas de la facultad de enajenar inmuebles á la Iglesia; pero habiendo reclamado el clero contra ellas al rey D. Dionis, se celebró entre ámbos una concordia, en la cual quedó convenido que no podrían comprar tales bienes, sin licencia del rey, los conventos y corporaciones eclesiásticas (1). D. Juan I en 1427, amplió esta prohibicion á las adquisiciones de inmuebles por testamento, exceptuando las destinadas á capellanías ó aniversarios, siempre que su importe no excediera de cierto limite y se confiara á algun lego la administracion de los bienes (2). Con estas disposiciones se formó una ley que fué comprendida en las *Ordenanzas* de los reyes D. Alfonso V y D. Manuel, en la cual se prohibió á las iglesias y á las Ordenes adquirir por ningun título, bienes raíces sin real licencia y se mandó que los que les fuesen legados en testamento, se vendieran á legos en el término de un año (3). Esta ley aunque combatida por Marta (4) y otros escritores extranjeros, la habían defendido muchos autores regnicolas, como Caldas Pereira (5) y Pereira de Castro (6) y se hallaba en observancia, bajo la dominacion de España, cuando el Nuncio

(1) Pereyra, *De manu regia*, ap. t. 1.

(2) Ibid. art. 77, n. 260.

(3) Orden. 18, lib. 2.

(4) *De jurisdictione*, 1618.

(5) *De emptione et vendit.* c. 8.

(6) *De manu regia*, c. 64.

y Colector Castracani publicó en 1635 un edicto derogándola, que mandó leer en todas las iglesias del reino. Este suceso reanimó de nuevo la antigua controversia. D. Agustin Barbosa, el jurisconsulto anteriormente citado, publicó un escrito en impugnacion del edicto (1): D. Juan Chumacero escribió en defensa de la ley derogada: el Consejo de Portugal y el real de España consultaron tambien en favor de ella, y en su vista declaró Felipe IV que «el Colector no tenia facultad (ni el Pontífice en sentir de algunos) para derogarla, y que se le escribiese para que repusiera el edicto »sin dilacion» bajo las penas acostumbradas contra los eclesiásticos desobedientes. Urbano VIII, que á la sazón ocupaba el sόlio pontificio, no mantuvo el edicto del Nuncio, y así terminó esta contienda, como la de Venecia, sin que la cuestion de derecho fuese definitivamente resuelta (2).

Despues de este suceso no hubo de ser tan combatida en Castilla como ántes la ley de amortizacion. Fué si vivamente atacada en Italia por el famoso teólogo Diana (3) y el docto canonista Tomás Delbene (4) que sostuvo no haber habido competencia para dictarla en Francia ni en Alemania, en Brabante, ni en Portugal, ni en Valencia: que la de Castilla, promulgada por D. Juan II, habia sido revocada por Felipe II y la de Sicilia por Carlos II; y que la tolerancia del Pontífice no significaba aprobacion de la ley, sino permiso de usarla, ménos en cuanto al precepto de vender los bienes adquiridos, porque éste en su concepto, era nulo y estaba expresamente condenado por la Iglesia. Pero en España los más de los escritores que desde entónces trataron de esta materia, se apartaron de tales opiniones.

(1) *Vota plurima decisiva*, etc., vot. XXVI.

(2) En el siglo xvii se arraigaron y extendieron en casi toda Europa las opiniones y la leyes que tendian á limitar las adquisiciones de la Iglesia. El emperador de Alemania, Leopoldo, renovó y extendió en 1669 la observancia en sus Estados de Austria, de una ley de 1518, prohibiendo enajenar inmuebles á manos muertas sin su licencia, y mandándoles vender las que adquiriesen á los parientes del testador ó donante, y otra de 1664 permitiendo á los parientes ceder este derecho, y reservándolo en otro caso al Estado. Luis XIV confirmó en 1666, las antiguas leyes de amortizacion de Francia. Fernando I, elector de Baviera en 1672, prohibió enajenar sin su licencia, los bienes nobles; y como de sus resultas quedara inhabilitado el clero para adquirirlos, suscitóse una fuerte controversia sobre la validez de esta ley, en que tomaron parte á su favor el docto jurisconsulto Schmid, y en contra el canónigo Michel, quedando admitida como opinion más probable, la que atribuía al soberano la potestad necesaria para dictar tales leyes, en casos de necesidad y con los temperamentos convenientes para que no cedieran en ofensa del clero.

(3) *Resolution. moral.* par. 1.^a tract. 2, resolut. 103.

(4) *De immunitate et jurisdict. Eccles.* cap. 8, dubitatio 12.

No sólo los célebres jurisconsultos valencianos de aquel periodo D. Cristóbal Crespi (1) y D. Lorenzo Matheu (2) justificaron el fuero de amortización de aquel reino, aunque fundándose el último, ménos en los derechos de la soberanía, que en los títulos de la conquista; no sólo escribieron en favor del fuero análogo de Cataluña el secundo Luis Peguera (3) el docto Fontanellas (4), el erudito Acasio Ripoll (5) y el sábio magistrado D. Miguel Cortiada (6), sino que tambien abogaron otros escritores castellanos por el restablecimiento de la ley de amortización de Castilla. Fué entre ellos uno de los más hábiles y decididos el ilustre presidente del Consejo D. Francisco Ramos del Manzano (7) que combatió con grande energía las opiniones de Marta, Diana y Debelne y sostuvo que tales leyes eran válidas y aceptables para la Iglesia, siempre que no prohibieran todo comercio con ella, fuesen dictadas por el soberano y no por señores jurisdiccionales y tuvieran por objeto, el bien público y la conservacion del real erario. Por la misma causa abogaron Miguel Alvarez Ossorio (8), que pedía al rey *como dueño* de lo temporal, que obligase á los eclesiásticos, bajo pena de extrañamiento, á vender en el término de cuatro años, los inmuebles adquiridos; D. Diego de Saavedra (9), que recomendaba el estatuto de Venecia de que ántes he hecho mencion; y Diego Arredondo (10), que queria se encomendase á una Junta, el exámen y la aprobacion en su caso, de las adquisiciones que tratara de hacer la Iglesia.

En los consejos de la corona predominaron tambien al fin, estas opiniones, aunque faltara resolucion para remover los obstáculos que impedían llevarlas á la práctica. En 1677 mandó Carlos II al Consejo que teniendo presente la famosa consulta de 1619, de que he dado noticia en el capítulo anterior, propusiera los medios de evitar los abusos de los jueces eclesiásticos, así en cuanto á las haciendas, como en cuanto á las jurisdicciones. El Consejo examinó con este motivo los abusos del estado eclesiástico, mencionando entre otros, el exceso de sus propiedades, y aunque no pro-

(1) *Observat. illustratæ*, 1662, obser. 91, n. 13 y 14.

(2) *De regim. regn. Valentie*, 1654, c. 2, pár. 5.

(3) *In constit. It. ne sup. laudem*, vers. 7, n. 3.

(4) *De pactis nuptial.*, Clausul. 4, glos. 12, n. 19.

(5) *Var. resolut.* cap. 7, n. 118.

(6) *Decisiones Cancellar. et Sacr. reg. Senatus Cathalon.* Decis. 284.

(7) *Ad leg. Juliam et. Papiam*, lib. III, cap. 45.

(8) *El zelador general para el bien comun.*

(9) *Empresas políticas*, empr. 66.

(10) Discurso sobre el restablecimiento de la monarquía.

puso ningun remedio definitivo, porque dependia el que se adoptase de la reforma eclesiástica, que era otro de los puntos consultados, declaró que la ley de Nájera prohibiendo á las iglesias adquirir bienes raices, inducia obligacion de contrato, como dictada por el conquistador al tiempo de la conquista y division de los dominios: que San Fernando la habia confirmado á pesar de las reclamaciones de Gregorio IX, y que se habia mantenido sin interrupcion por espacio de 150 años á vista y ciencia de 18 pontífices celosísimos del acrecentamiento de la Iglesia (1). El rey se conformó con esta consulta, y aunque sobre el punto indicado no adoptó providencia alguna, aceptó las importantes declaraciones que quedan indicadas.

CAPÍTULO V.

De la ocupacion y expropiacion de los bienes eclesiásticos en interés del Estado

I.

DE LA OCUPACION DE BIENES ECLESIASTICOS POR VÍA DE PENA.

A la inmunidad de tributos del clero opuso la potestad temporal la confiscacion y el despojo de sus propiedades. Si faltó jurisdiccion á los tribunales ordinarios para castigar á los eclesiásticos rebeldes ó desobedientes, porque no eran sus súbditos, los monarcas se reservaron el derecho de tratarlos como extranjeros, privándoles de sus bienes raices y extrañándoles de su territorio, como podian hacerlo con cualquiera otro seglar que no fuese su súbdito. Si el clero y las iglesias no debian nada al Estado por razon de tributos, hartó pagaron este privilegio con los despojos, confiscaciones y préstamos forzosos que sufrieron durante la Edad-Media. De modo que lo que por un concepto, dejaron de satisfacer al Estado los bienes eclesiásticos, lo pagaron por otro, de un modo irregular y aún violento.

Segun el derecho público de la Edad Media, los extranjeros no tenian el derecho de morar en las tierras en que lo fuesen, ni de poseer en ellas propiedad alguna inmueble: la que adquiriesen contra esta prohibicion, estaba, lo mismo que sus personas, á la merced del señor del territorio.

(1) Auto acord. 4, tit. 1.º lib. IV, Nov. Recop.

Si los clérigos se suponían independientes del soberano territorial, si no eran sus súbditos, razón tenía aquel para considerarles como extranjeros, en todo lo concerniente al derecho de propiedad y de residencia. Así los reyes de España tuvieron siempre la facultad de extrañar y ocupar las temporalidades á los eclesiásticos rebeldes. La ejercieron los monarcas visigodos, puesto que Wamba mandó confiscar los bienes de los obispos y clérigos que tomaron parte en la rebelion de Paulo (1). Y no debió de ser aquella una medida de circunstancias dictada por sorpresa y contra la libertad de la Iglesia, cuando el Concilio XVI de Toledo la confirmó despues, imponiendo entre otras penas, la de confiscacion al arzobispo Sisberto, por haber conspirado contra el rey Egica, y mandó que fueran castigados del mismo modo los eclesiásticos que incurrieran en igual delito. Segun el mismo Concilio, el rey disponia á su arbitrio de los bienes así confiscados, y las donaciones que hiciera de ellos habian de ser firmes y valederas para siempre (2).

La misma potestad ejercieron despues los monarcas castellanos. Don Alfonso el Sábio mandó en el Fuero real, que los que hablasen mal del rey, si fueran hidalgos ó clérigos, perdieran la mitad de sus bienes á favor del fisco y fuesen echados de la tierra (3). D. Juan II ordenó en 1447, por otra ley, que se ocuparan sus temporalidades y extrañara del reino á los eclesiásticos que llamados por el rey para algun asunto del servicio público, no acudieran al tercer requerimiento (4). No sostuvieron con ménos teson esta regalia los monarcas de la casa de Austria. D. Carlos I y su madre doña Juana, por pragmática de 1559, conminaron con la pérdida de sus temporalidades y de su naturaleza en estos reinos, á los eclesiásticos que consintieran pensiones sobre sus beneficios, á favor de extranjeros (5). La misma pena se mandó despues imponer á los obispos que ejecutaran bulas concediendo á extranjeros beneficios eclesiásticos, á los jueces conservadores nombrados por la Santa Sede y á los jueces eclesiásticos que conocieran de causas ajenas á su competencia, á los clérigos que formaran ligas ó bandos, y á los que cometieran otras faltas señaladas en las leyes (6).

(1) *For. judicum*, l. 8, tít. 2, lib. 9.

(2) *Concil. Tolet.*, XVI, c. 9 y 10.

(3) L. un., tít. 2, lib. I.

(4) L. 13, tít. 3, lib. 4, Recop.

(5) L. 1, tít. 22, lib. 1, Nov. Recop.

(6) L. 25, tít. 3, y l. 1, tít. 8, lib. 1: l. 4, tít. 4, lib. 4: l. 5, tít. 14, lib. 8, Nov. Recop.

Del uso de esta facultad ofrece nuestra historia ejemplos numerosos. Alfonso VIII extrañó al abad de Santa María de Nájera, porque dilapidaba las rentas del monasterio (1). Carlos I, por su pragmática de Worms de 1520, mandó que los eclesiásticos culpados en la guerra de las comunidades, fueran extrañados del reino y perdieran sus temporalidades (2). Este mismo castigo sufrieron despues un vicario del arzobispo de Granada, por no haber querido alzar cierta sentencia de entredicho, que estando en Roma, lanzó contra aquella ciudad (3), unos canónigos de Santo Domingo de la Calzada, un religioso que predicando en Lima un sermon subersivo, dió lugar á que se alterase la tranquilidad pública (4), varios obispos de Nápoles, cuando eran allí vireyes el duque de Osuna y el de Alba, el arzobispo de Toledo, Carranza (5), y otros muchos eclesiásticos.

Mas la ocupacion de temporalidades no suponía un derecho especial del soberano sobre los bienes de la Iglesia, pues era consecuencia necesaria del mismo extrañamiento. Este no consistía solamente en el destierro material, sino en la pérdida de la naturaleza. Como el extrañado, fuera ó no eclesiástico, quedaba reducido á la condicion de extranjero, quedaba tambien privado de la facultad de adquirir y poseer bienes raices, pues que ésta era en toda Europa privilegio exclusivo de los naturales. Por eso en nuestras antiguas leyes andaban siempre juntas ambas penas, cuando se trataba de castigar ó apremiar á eclesiásticos rebeldes ó desobedientes.

Ni la ocupacion de temporalidades se aplicó nunca en España á las corporaciones religiosas cuando eran extinguidas, como á la vez no fueron todos sus individuos condenados á extrañamiento, por atribuirles algun delito contra el rey ó la paz pública. Fuera de este caso, el destino de los bienes de las corporaciones canónicamente suprimidas, se fijaba de acuerdo entre ambas potestades, la temporal y la eclesiástica. Extinguida la órden de los Templarios en toda la cristiandad por Clemente V, pero no desnaturalizados por nuestros monarcas los españoles que pertenecian á ella, el Papa aplicó sus bienes á la órden de San Juan, aunque suspendiendo toda resolucíon en cuanto á los sitios en Castilla, Aragon, Portugal y Mallorca, hasta obtener el beneplácito de los soberanos de estos Estados. Y en efecto, con el de Jaime II, aplicó el Papa Juan XXII en 1317, á la Orden de

(1) Garibay, *Compendio historial*, etc., lib. 12, cap. 26.

(2) Véase dicha pragmática en Molina, *De primogeniis*, etc., cap. fin, n. 58.

(3) Amaya, *In codic.*, l. 40, tit. 31, lib. 10, n. 40 y 41.

(4) Solorzano, *De jur. Indiar.*, lib. 3, c. 27, n. 18.

(5) Peralta, *De la potestat secular en los ecclesiasticis*, cap. 13.

Montesa, los bienes que poseía en Aragón la de los Templarios; y de acuerdo con el rey de Portugal, adjudicó los de este reino á la Orden de Cristo. Verdad es que los reyes de Castilla obraron con más independencia, disponiendo ellos por sí, de las temporalidades de los Templarios de su reino, mas fué este acto desaprobado y reclamado por la Santa Sede. Así es que suprimidas despues regularmente las comunidades de los claustrales y conventuales de España, la autoridad eclesiástica, de acuerdo con la real, aplicó sus bienes á las nuevas Ordenes monásticas (1).

En la guerra de sucesion fueron rebeldes á Felipe V varias comunidades y corporaciones eclesiásticas del reino de Valencia. Hecha la paz, y asegurado aquel principe en el trono, consultó el Consejo si las corporaciones aludidas deberian continuar poseyendo sus bienes raices y sus jurisdicciones: hé aquí cómo respondió el rey á la representacion del Consejo: «Considerando que en virtud de las regalías que tengo en aquel reino, no puedo quitar á las comunidades eclesiásticas que han sido rebeldes, los bienes raices y las jurisdicciones que con justos títulos, poseian en él, así por el indulto general que despues de recobrado el reino concedí... como porque estas jurisdicciones y bienes raices son de la Iglesia, que no se considera incurso en el crimen de rebellion, y no puede perder lo que es suyo, por el delito en que han incurrido los individuos, mayormente cuando cumpliendo los prelados el gobierno de sus trienios, se podrán elegir otros prelados fieles, y sacar de sus monasterios los infieles y sospechosos. poniendo en su lugar otros sugetos de mi satisfaccion, he resuelto prevenirlo al consejo» (2).

Si Felipe V hubiera juzgado necesario suprimir aquellos monasterios, ó si ellos hubieran quedado extinguidos de hecho ó de derecho, considerando que sus bienes pertenecian á la Iglesia, no los habria adjudicado al fisco, sino que habria procurado darles algun destino piadoso, de acuerdo si era posible, con el Papa. Esto hizo Felipe IV, cuando con motivo del levantamiento y separacion de Portugal, mandó ocupar los bienes del *Hospital de los portugueses* de Madrid, como pertenecientes á rebeldes, y aplicarlos á la *Hermandad del Refugio*.

Ejemplo aún más calificado ofrece la supresion de la Compañía de Je-

(1) Citan estos actos Campomanes y Moñino en su *Respuesta fiscal*, inserta en la real cédula de Carlos III, declarando devueltos á S. M. los bienes ocupados á la extinguida Compañía de Jesús, promulgada en 14 de Agosto de 1768.

(2) L. 13, tit. 5, lib. 1, Nov. Recop.

sús. Esta corporacion habia sido acusada de graves crímenes, y entre ellos el de conspiracion contra la paz pública y los derechos del soberano. Carlos III, prestando fácil oído á estas acusaciones poco justificadas, juzgó comprometida la tranquilidad del reino «y haciendo uso (son sus palabras) »de la suprema potestad económica que el Todopoderoso habia depositado »en sus manos para la proteccion de sus vasallos y respeto de su corona,» en 27 de Febrero de 1767, mandó extrañar de todos sus dominios á los jesuitas y ocupar sus temporalidades. En otra pragmática de 2 de Abril del mismo año manifestó el rey haber adoptado aquella resolucion, «estimula- »do por gravísimas causas relativas á la obligacion en que se hallaba cons- »tituido de mantener en subordinacion, tranquilidad y justicia sus pueblos »y otras urgentes, justas y necesarias que se reservaba su real ánimo.» Los fiscales del Consejo hicieron despues insinuaciones más explícitas sobre la naturaleza de estas causas, diciendo en un informe inserto en una real cédula de 14 de Agosto de 1768, que aquella providencia habia sido «abso- »lutamente necesaria para apartar del seno de la nacion la semilla de las »inquietudes que se habian experimentado,» aludiendo sin duda al motin llamado de Esquilache.

Mas prescindiendo de la justicia de aquella grave determinacion y de la verdad de sus fundamentos, es lo cierto que Carlos III procedió penalmente contra la Compañía de Jesús, haciendo con ella, lo que otros monarcas sus predecesores habian hecho con los eclesiásticos rebeldes ó desobedientes: no la suprimió para aplicar sus bienes al fisco, como despues se ha hecho con otras corporaciones eclesiásticas, sino que desnaturalizó á todos sus individuos, como culpados y ocupó los bienes que ellos no podian ya poseer como extranjeros. El rey procedió sin duda con lijereza, influido por sugeriones malévolas y hasta con inhumanidad notoria, nas no se atribuyó el derecho de apropiarse los bienes de la corporacion suprimida. Siguió, pues, el ejemplo de sus predecesores, que como patronos de las iglesias, no se creyeron autorizados para destinar á usos profanos, con menoscabo de la religion y del culto, los bienes que ocupaban á los eclesiásticos, en virtud de su potestad económica. Gozaban si, desde muy antiguo, el derecho de disponer de las iglesias y monasterios que encontraban abandonados y perdidos, mas para restaurarlos y dotarlos, no para demolerlos y enajenarlos al mejor postor. Ocupaban tambien los bienes de los eclesiásticos rebeldes, pero ó se los devolvian despues, perdonándoles, ó los aplicaban á otras iglesias ú objetos piadosos, y aún no hacian esto último sino con audiencia y acuerdo de los obispos.

Así es que Carlos III, en la pragmática citada de 2 de Abril de 1767, anunció que en cuanto á la administracion y destino á otros fines piosos de los bienes de la Compañía, tomara providencia oyendo á los ordinarios eclesiásticos. Fueron en su consecuencia llamados al Consejo los arzobispos de Búrgos y de Zaragoza, y los obispos de Tarazona, Albarracin y Orihuela, quienes en union con los ministros ordinarios, consultaron á S. M. otra real cédula determinando la aplicacion que habia de darse á aquellos bienes. Ordenóse en ella que se erigiesen seminarios conciliares, casas de correccion y penitencia para los eclesiásticos, seminarios de misiones para Ultramar, casas de pension y enseñanza para niños, hospicios, hospitales, inclusas y casas para huérfanos; que las cargas piosas de los bienes ocupados se cumpliesen ó se conmutasen en caso de necesidad, por los obispos, conforme á lo dispuesto en el concilio de Trento, y que el Consejo, con asistencia de los cinco prelados referidos, pudiese acordar la venta de las fincas de conservacion difícil ó costosa, como molinos ú otros artefactos, pero con la obligacion precisa de subrogarlos con otras rentas líquidas que no tuvieran tales contingencias (1). Campomanes y Moñino fueron los autores de esta real cédula, y el conde de Aranda la suscribió como presidente del Consejo. Véase con qué restricciones tan graves entendian los regalistas más intransigentes del reinado de Carlos III, que podia disponer la corona de las temporalidades ocupadas á los eclesiásticos. Hé aquí como ni la prohibicion canónica de disponer la potestad temporal de las cosas eclesiásticas era tan absoluta en España, que careciese el soberano de medios de coaccion sobre el clero, ni la potestad económica tan ilimitada, que autorizase para destinar á usos profanos las cosas de la Iglesia.

II.

DE LA OCUPACION DE BIENES ECLESIÁSTICOS POR NECESIDADES PÚBLICAS HASTA PRINCIPIO DEL SIGLO XVI.

Ménos justificacion tienen sin duda las desmembraciones que sufrió el patrimonio de la Iglesia en distintas épocas, ya para remediar necesidades públicas, ya para satisfacer la codicia de los poderosos. Fuese porque las leyes civiles habian en su origen, concedido á la Iglesia el derecho de adquirir, que ántes no tuviera; fuese porque el derecho de patronato y las

(1) Real cédula de 14 de Agosto de 1768.

donaciones cuantiosas obligasen á la misma Iglesia á prestar ciertos servicios extraordinarios á los príncipes sus patronos y donadores; fuese, en fin, porque las violaciones de la propiedad colectiva no suelen ser tan sensibles como las del dominio individual, es lo cierto que desde los orígenes de las monarquías cristianas, hubieron de creerse los soberanos con cierto derecho á servirse de los bienes de la Iglesia, en las grandes necesidades públicas. Un texto notable de San Ambrosio inserto despues en el decreto de Graciano, si no justificaba, ofrecia al ménos pretesto plausible á esta pretension. Perseguido aquel santo por la madre arriana del emperador Valente, decia en un sermón contra Maxencio: «Si el emperador desea los campos de la Iglesia, potestad tiene para tomarlos... Quitelos si es su voluntad. Al emperador ni le doy ni le niego» (1). Mas como ninguna ley civil autorizaba al fisco especialmente para despojar á la Iglesia de lo que poseia, la *potestad* de que hablaba San Ambrosio no era ninguna particular que se hubiesen reservado los emperadores sobre las cosas eclesiásticas, sino la general absoluta y arbitraria que ellos se atribuian sobre las personas y los bienes de todos sus súbditos. No debe olvidarse que cuando el mundo gemia bajo el yugo despótico de los emperadores, era su voluntad la única ley soberana, y que dependiendo de ella la vida de los vasallos, no podia su hacienda eximirse de la misma dependencia. Los pueblos, envilecidos por la corrupcion y la tiranía, divinizaron á los césares. ¿Cómo los dioses no habian de disponer á su arbitrio, de los míseros mortales y de cuanto poseyeran en la tierra? Esta doctrina profesaban los políticos y los jurisconsultos de aquella triste edad. Con razon decia Séneca que por derecho civil la propiedad de todas las cosas pertenecia al rey, y que los súbditos tenian solamente la posesion de ellas (2), pues que tal era la consecuencia del concepto que los legisladores tenian entonces de la soberanía. Cuando estas teorías reinaban en el mundo, ¿cómo ha de extrañarse que San Ambrosio, obediente siempre á la autoridad constituida, reconociese el hecho de haber en el emperador potestad, segun las leyes, para tomar los bienes de la Iglesia?

A esta tradicion del imperio, que sin duda recibieron los monarcas que pretendian haber heredado la autoridad de los césares, juntábase otra circunstancia importantísima, que le daba gran valor, segun las ideas de la

(1) *Si agros desiderat imperator potestatem habet vindicandorum... Tollat eos si libitum est. Imperatori non dono, sed non nego.* Can. 27, quæst. 1, can. 11.

(2) *De beneficiis*, 7, 4.

época: tal era la de haber conquistado los reyes bárbaros todo el territorio, siendo en su consecuencia dueños originarios de él y con la especie de derecho que para ciertas eventualidades, reservaban las leyes á los donantes, sobre las cosas donadas graciosamente. Verdad es que una y otra consideracion eran igualmente aplicables á las propiedades profanas y á las eclesiásticas; mas aunque todas sufrieron en efecto, su influencia, estas últimas la experimentaron más eficaz, sin duda por su índole colectiva, y por ser debidas generalmente de un modo más especial, á la munificencia de los principes temporales.

La Iglesia sin embargo no asintió nunca á semejante doctrina, por más que sus prelados obedecieran, siguiendo los preceptos evangélicos, á los soberanos que la practicaban. Ya en el siglo v el papa Symacho condenó en el sínodo VI romano, á los que por orden ó donacion de los principes ó señores poderosos, ó por invasion tiránica, detentaban los bienes de la Iglesia, y á sus hijos y herederos, cuando no los restituyeran inmediatamente (1). Verdad es que estos severos anatemas no lograron impedir las usurpaciones de bienes eclesiásticos, ni que los reyes se consideraran autorizados para disponer de ellos muchas veces, en beneficio del Estado ó para remedio de sus necesidades; pero la Iglesia protestó siempre contra tales actos y los mismos principes que los ejecutaban, solian reconocerse después culpados por ellos, solicitando transacciones generosas con las corporaciones despojadas, que tranquilizaban su conciencia, aunque no evitaban nuevos despojos en lo futuro.

Los reyes francos de la dinastía merovingia concedieron tierras propias de las iglesias á muchos de sus vasallos, en feudo vitalicio. Cárlos Martel y Carlo-Magno las dieron tambien á sus soldados, en premio de servicios militares, aunque con la carga de pensiones módicas, en reconocimiento del dominio directo reservado á la Iglesia y la reversion del dominio útil, á la muerte del usufructuario. Teodorico y Cárlos el Calvo y otros señores y principes de Francia é Italia dispusieron tambien arbitrariamente de las propiedades eclesiásticas; pero Carlo-Magno reconoció después su yerro, prometiendo por sí y sus sucesores, no volver á tomarlas, sin el consentimiento de los obispos: Pipino hizo guerra á Waitario, rey de Aquitania, por no querer restituir los bienes que habia ocupado á la Iglesia (2): Teodorico mandó devolver á ésta los que detentaba el duque Iba, por decreto de Alari-

(1) C. 57. Can. 16. *Quest. 1.*

(2) Anon. *De gestis Francorum*, lib. IV.

co (1): Luis el Gordo y Felipe I obligaron con las armas á otros príncipes y señores, á restituciones semejantes. Es digna de notarse la diferencia que estableció Cárlos el Simple entre los bienes de las iglesias y los de los monasterios. Concedió á sus próceres, á título de beneficio, muchos de estos últimos bienes, no dejando á los monjes más que los necesarios para su sustento; pero como los beneficiarios invadiesen á la vez propiedades de los obispados, declaró que éstas eran santas é inmunes, sin hacer igual declaración respecto á las otras, porque servían para alimentar á los soldados del general de la caballería Roberto y de su hermano Hugo (2).

Son innumerables los cánones y disposiciones de la Iglesia contra los invasores de su propiedad. Las expropiaciones eclesiásticas ordenadas por Alarico de Francia, dieron lugar á que los concilios de Clermont-Ferrand y Meaux conminaran con excomuniones, á los que pidieran de los reyes ó recibieran de ellos, bienes de la Iglesia ó de los pobres. El primero de aquellos concilios dirigió una epístola al rey Teodoberto exhortándole á mantener la inviolabilidad de las propiedades eclesiásticas, que invadían y dilapidaban otros príncipes (3). El obispo de Reims, Hincmar, escribía en el siglo ix, á Ludovico Pio: «Hay quien dice que porque las cosas eclesiásticas de los obispos están bajo vuestra potestad, podeis darlas á quien os plazca, pero sólo el espíritu maligno que perdió á nuestros padres, puede aconsejaros que penseis así para vuestra perdición» (4). El papa Nicolás I ordenó en el mismo siglo, que cuando algunos bienes de la iglesia se hallaran fuera de su poder, consultaran los obispos al soberano, para averiguar si se había verificado el despojo por orden suya ó por la voluntad del detentador; que en el primer caso, exhortaran al mismo príncipe á enmendar su yerro y que en el segundo, excomulgaran al detentador, mientras que no restituyera lo usurpado (5). Igual anatema lanzó despues Gregorio VII contra los militares y otras personas que recibieran de los reyes prédios eclesiásticos, sin la voluntad de los prelados ó con su asentimiento depravado y vicioso (6). El Concilio de Lion de 1055, declaró nulas las donaciones de los mismos bienes que hicieran los reyes (7). El concilio IV de

(1) Cassiodor, lib. IV, epist. 17.

(2) Valenzuela, *Defensio Monitorii Pauli V, advers... Venet.* p. 25.

(3) Gonzalez, *In Decret.* lib. III, tit. 13, cap. 2.—Gonzalez, *Collec. canon. Eccl. hispan.* XXXV, p. 271.

(4) Gonzal. *In Decret.* loc. cit. n. 5.

(5) Can. 22. Caus. 16, quaest. 2.^a

(6) Can. 4. Caus 16, quest. 2.^a

(7) Decret. cap. 2, tit. 13, lib. III.

Letran de 1216, mandó compeler con censuras, á su restitution (1).

Mas á pesar de tan larga série de disposiciones canónicas dictadas por la Iglesia, la historia de las expropiaciones de bienes eclesiásticos verificadas en España es más larga y curiosa de lo que generalmente se cree. Aún prescindiendo del despojo y de la ruina que padecieron las iglesias de los pueblos que hicieron resistencia á los moros, en su primera invasion, porque de esto he dado ya alguna noticia en el capítulo III del libro II, los documentos antiguos ofrecen vivos indicios de otras expoliaciones cometidas por los mismos cristianos, de los bienes de las iglesias que no habian sucumbido con la conquista. El P. Berganza cita un pasaje de un libro antiguo de la iglesia de Braga, segun el cual, los cristianos reconquistando lentamente los lugares perdidos, se apoderaban tambien de sus iglesias y aún solian convertirlas en posesiones laicales, ó bien fundaban iglesias y monasterios nuevos, pero que quedaban en el dominio absoluto de los seglares. Este fué segun parece, el estado de la Iglesia, hasta el reinado de Alfonso I, que nombró algunos obispos, á quienes encomendó la administracion y custodia de las cosas eclesiásticas (2).

De actos de dominio ejercidos por la potestad temporal en los bienes de la Iglesia, ofrece un notable ejemplo Ordoño III, dando al conde Fernando Ansur la villa de Sahagun, que poseia el monasterio de este nombre, por donacion de un particular, segun resulta de la escritura en que la reina Teresa confirmó en 978, la devolucion que de aquella propiedad hizo el mismo conde al monasterio (3). Fueron aún mayores las expoliaciones cometidas por D. Alfonso I de Aragon, con motivo de la guerra sangrienta que hizo á su mujer doña Urraca, reina de Castilla. La iglesia de Leon conserva aún el recuerdo de aquellos despojos: la de Búrgos, la de Palencia y el monasterio de Sahagun corrieron igual suerte (4). Doña Urraca por su parte, no dejó tampoco de proveerse de algo que necesitó para aquella guerra, con la hacienda de las iglesias de su reino. A la de Leon tomó en calidad de préstamo forzoso, una cruz, un caliz, una caja de oro y una mesa de altar de plata y además dinero y caballos: á la de Oviedo exigió 9.270 metcales de oro y 10.400 sueldos de plata. Después indemnizó

(1) Decr. cap. 12, tit. 13, lib. III.

(2) *Antigüedades de España*, lib. 2.º c. I, n. 3.

(3) Escalona, *Histor. de Sahagun*, escr. 53.

(4) "*Ecclesias Dei absque pietate violat atque dirumpit, eorumque ministros expoliat possessionesque eripit*" decia de él doña Urraca en un documento notable. Berganza, lib. VI, cap. 1.º n. 17.

á ambas iglesias dando á la primera las villas de San Martin, Viadangos y Villavelidi, y á la segunda la ciudad de Oviedo con su castillo y mandacion, una villa, dos monasterios y otros privilegios (1). Pero el mayor indicio de lo mucho que tales actos solian repetirse, es el cuidado con que procuraban las iglesias que los reyes declararan irrevocables sus donaciones, prohibiendo á sus sucesores en las escrituras que otorgaban de ellas, volver á ocupar los bienes donados. Fernando I dió varias tierras, castillos y vasallos al monasterio de Santa Juliana en 1045, declarando en la carta de donacion, que ni á él ni á los de su linaje, seria licito volver á adquirirlos, ni aún por necesidad de guerra (2) que era lo que más frecuentemente ocasionaba tales readquisiciones.

Una de las circunstancias que hubieron de contribuir á facilitar la secularizacion de los bienes eclesiásticos, fué la facultad atribuida á los legos para adquirir y poseer iglesias, como patrimonio privado. En Castilla, por costumbre inmemorial, el que edificaba y dotaba una iglesia era dueño de ella y disponia de sus bienes como de hacienda propia. En Aragon, por bulas de Alejandro II y de Urbano II de 1071 y 1095, los reyes y los próceres adquirian las iglesias que existian ó edificaban en las tierras que conquistaban de moros, con sus diezmos, primicias y heredades, y las enajenaban y las trasmitian á sus herederos, sin más obligacion que la de mantener en ellas el culto (3). Habiendo, pues, conquistado los reyes casi todo el territorio de la Peninsula, y siendo ademas los fundadores de una gran parte de sus iglesias, claro es que estos títulos les servirian de grande apoyo, ó por lo ménos de pretesto, para disponer de sus bienes, cuando lo juzgaran necesario, siempre que no quedara desatendido el culto. Así lo hizo D. Sancho I de Aragon, que por las necesidades de la guerra, ocupó las rentas eclesiásticas y las destinó á otros usos, despues de haber obtenido de Gregorio VII, la confirmacion de la bula citada de Alejandro II (4). ¿Cuántas riquezas no sacó el rey D. Ramiro II del monasterio de San Juan de la Peña para socorrerse en las guerras que tuvo que sostener con D. Garcia VI de Navarra y con D. Alfonso VII de Castilla? Ya le tomaba vasos y ornamentos sagrados, ya urnas de santos y piedras preciosas, ya mesas de plata y dinero

(1) *España Sagrada*, tom. 35, trat. 71, cap. 3.º n. 18 y 32; y tom. 38, apén-dice 32.

(2) Muñoz, *Colec. de fuer.* p. 199.

(3) Mariana, *Hist. de España*, lib. 10, c. 7. — *Discursus historicus de decimis*, n. 48

(4) Zurita, *Anales de Aragon*, part. 1, lib. 1, c. 25.

contante. Verdad es que D. Sancho, arrepentido luego de estos actos, hizo penitencia pública en la Iglesia de Roda, mandando restituir todo lo usurpado, y que D. Ramiro resarció también abundantemente lo tomado al monasterio de San Juan, dándole villas, aldeas, iglesias, tierras y otras muchas riquezas (1); mas estos ejemplos no servian de leccion á otros monarcas, ni impedian nuevas expropiaciones. Pasado algun tiempo ocurrían otras necesidades públicas y los reyes volvian á proveerlas, acudiendo á los tesoros de la Iglesia, sin perjuicio de arrepentirse despues é indemnizar las pérdidas sufridas, ó restituir las mismas cosas ocupadas.

La *Historia compostelana* ofrece un ejemplo muy interesante de estas expropiaciones. Es una narracion contemporánea, circunstanciada y curiosa, escrita por un parcial de la Iglesia, en que se refiere cómo Alfonso VII exigió y obtuvo una fuerte suma de la iglesia de Santiago. Presentóse el rey, segun dicha historia, con algunos de los suyos, en la tesoreria de la Iglesia, pidiendo al arzobispo un poco de dinero para atender á las grandes necesidades del reino. El prelado, «aunque conociendo la ficcion con que se le hablaba,» ofreció desde luego 500 marcos de plata. El rey sin aceptar su oferta y para deliberar sobre ella, le mandó retirarse, y habiendo tomado consejo reservadamente de los secretarios que le acompañaban, ordenó se le diesen 600 marcos, por lo ménos, autorizando á prender para su exaccion, á cualquier vecino de la ciudad. El arzobispo mandó á decir al rey que designara las personas que habian de ser presas, mas como D. Alfonso señalase al mismo tesorero de la Iglesia y á sus parientes, contestó aquel con gran pesadumbre, que á nadie prenderia por tal motivo. Indignado el rey con este mensaje, aumentó hasta 1.000 marcos el pedido, diciendo que, si no los entregaba, le privaría del *honor* de su diócesis, es decir, de sus temporalidades, menos de la parte necesaria para su sustento. El arzobispo entonces convocó al cabildo; le participó la exigencia y la amenaza del soberano y le anunció que él por no someterse á ellas, estaba resuelto á dimitir su cargo. Los canónigos, aunque muy afligidos, fueron de parecer que entre pagar los 1.000 marcos, ó perder á su prelado, debia optarse por lo primero, que era mal menor, y ofrecieron contribuir con su hacienda á aquel gran sacrificio. Despues de otra intimacion de D. Alfonso, prometió el arzobispo dar lo que se le pedia, con la condicion de que ningun vecino fuese por ello detenido ni molestado. Sus enemigos, segun dice el historia-

(1) Briz, *Hist. de S. Juan de la Peña*, lib. 5, c. 41, extracta las escrituras en que se refieren todos estos hechos.

dor, y particularmente algunos clérigos, se acercaron entonces al rey diciéndole que le engañaban sus consejeros, que el arzobispo podía dar hasta el triple de la suma pedida, y que ellos la darian de buena gana, si se les entregase en cambio el señorío de la ciudad. Mas D. Alfonso no quiso faltar á lo pactado, aceptando esta oferta, y se llevó á efecto la exaccion, dando una parte el prelado, otra los canónigos y otra los seglares, sin distincion de estados. Debo añadir para completar esta historia, que poco tiempo despues de consumado el sacrificio, reconvinó el arzobispo por su falta al rey, le exhortó á hacer penitencia y le obligó á mostrar su arrepentimiento, aunque advirtiéndole que habia gastado y no podia devolver la cantidad recibida. Llevada la cuestion al cabildo, que deliberó con asistencia del mismo D. Alfonso y algunos de su corte, acordó que la Iglesia se diese por satisfecha, siempre que el rey aceptase el título de canónigo de la misma y eligiese en ella su sepultura, lo cual llevaba consigo la obligacion de cuantiosas ofrendas. D. Alfonso las hizo en efecto, dando á la Catedral el castillo de San Jorge y la mitad de la tierra de Montañó y haciéndole otras mercedes (1), con las cuales tuvo término á gusto de todos, aquel ruidoso conflicto.

Ni fué esta la única expropiacion de la Iglesia verificada por Alfonso VII. Al monasterio de Sahagun quitó el de San Salvador de Nogal, para darlo á sus soldados, si bien se lo devolvió despues en 1127 (2). Dos años más tarde declaró en otro documento «haber tomado muchas cosas injustamente »á los monjes de Sahagun, haber aplicado á sus gastos y á los de sus tropas, »el oro, la plata y la hacienda de aquel monasterio, haber quebrantado su »territorio, sus derechos señoriales y sus privilegios pontificios, haber puesto »gobernador en la villa contra derecho y haber distribuido lugares y posesiones de la Iglesia entre sus soldados y otras personas;» y arrepentido de estos pecados, como de los cometidos en la Iglesia de Santiago, mandó devolver al monasterio de Sahagun todo cuanto le usurpara (3).

Los prelados resistian cuanto en su mano estaba, aquellas expropiaciones, ya condenándolas de un modo general en sus concilios, ya oponiendo á los mandatos de exaccion, su inmunidad y sus privilegios. El concilio provincial de Leon de 1114, anatematizó á los que tomaban por fuerza y no restituian

(1) *España sagr.* t. 20; *Hist. compostell.* cap. 86 y 87.

(2) Escalona, *Hist. de Sahag.* escr. 154.

(3) *Ibid.*, escr. 155.

las cosas eclesiásticas, y prohibió vender y comprar iglesias á los legos (1): el de Palencia de 1129, mandó tambien restituir los bienes eclesiásticos usurpados y prohibió á los seglares adquirir las tercias y las oblaciones (2). De Alfonso VIII alcanzó el clero una pragmática en 1180, prometiendo no exigir nada á las iglesias y monasterios por fuerza, miedo ó amenazas, sino de buen grado, con su beneplácito y con el consejo de su arzobispo (3). Mas esto no impidió que Alfonso IX quitase á la iglesia de Astorga, la villa de San Martin de Torres, para darla á pobladores, ni que Enrique I por las urgencias de la guerra, se apoderara del tercio de las rentas de las fábricas de las iglesias, por más que el primero procurara indemnizar el daño causado, dando otras iglesias, un tercio de los portazgos y unas casas al obispo, y que el segundo, apremiado por censuras y entredichos, cesara en la ocupacion de las rentas de las fábricas y prometiera no volver á servirse de ellas (4). Alfonso IX se apoderó tambien de algunos bienes del monasterio de Sahagun, puesto que Inocencio III le escribió en 1215, amonestándole á que los restituyese (5).

Con la concesion de la mitad del tercio diezmo de las fábricas de las iglesias, hecha en 1219, por Honorio III, durante la menor edad de San Fernando, al arzobispo de Toledo, para los gastos de la guerra; con los dos novenos del diezmo y otros subsidios otorgados al mismo monarca por Gregorio IX; y con la próroga sucesiva de estas gracias, se ayudaron desde entonces los reyes, sin que tuvieran necesidad de acudir á las expropiaciones eclesiásticas durante muchos años, ó por lo ménos, no queda memoria de ellas en los reinados de Alfonso X y de Sancho IV. Si los tutores de San Fernando, concluida la segunda próroga trienal del tercio diezmo, intentaron cobrarlo, el mismo Papa Gregorio les hizo desistir de su propósito, mandando á los obispos que aconsejaran al rey contra aquella resolucion, y que no entregaran á sus ministros las rentas de la Iglesia. Si despues Sancho IV, concluido y no prorogado el indulto de los dos novenos, hubo de exigirlo, dando esto lugar á censuras eclesiásticas y entredichos y á grandes turbaciones, aquel conflicto terminó prorogando Bonifacio VIII la gracia de los dos novenos en 1301, y remitiendo lo indebidamente percibido hasta

(1) *Esp. sagr.*, t. 35, p. 353.

(2) *Ibid.*, t. 19, p. 304.

(3) Mondexar, *Memorias histór. de D. Alfonso el Noble*, apénd. 7.

(4) *Esp. sagr.*, t. 16, apénd. 34.—*Libro de bulas y breves de las Santas Iglesias*, f. 159.

(5) Escalona, *escr.* 220.

aquella fecha (1). Fernando IV fué quien á pesar de haber obtenido esta gracia, y de Clemente V, en 1309, el diezmo por tres años, de casi todas las rentas eclesiásticas, para la guerra de Granada (2), hizo por medio de sus adelantados y merinos, grandes exacciones á los monasterios, que menguaron mucho su hacienda (3), y tomó á las iglesias muchas heredades, que juntamente con otras ocupadas despues por Alfonso XI, mandó devolver el rey D. Pedro (4). Tantos hubieron de ser en aquel tiempo los despojos sufridos por el clero, que once obispos de los reinos de Leon, Asturias, Castilla y Galicia, formaron en 1310 una liga solemne, otorgando carta de hermandad entre si, para asegurarse reciprocamente el cumplimiento de las censuras y entredichos que decretaran contra los violadores de la inmunidad eclesiástica, y socorrerse unos á otros, con parte de sus rentas, cuando por defender los fueros de la Iglesia, quedaran algunos de ellos privados de sus temporalidades, y prestarse otros auxilios en defensa de sus comunes derechos (5).

Aunque el Papa Juan XXII concedió á Alfonso XI 150.000 florines cada año, del tercio del diezmo correspondiente á las fábricas (6), fué el reinado de este príncipe uno de los en que mayores usurpaciones sufrió la Iglesia. El mismo le tomó, segun ántes he dicho, algunas heredades, la expropió de todas las salinas que poseía, y quitó al monasterio de Sahagun las escribanías de la villa, que le diera otro monarca, aunque despues mandó restituirlas (7). Pero aún mayores daños recibió la Iglesia de los señores jurisdiccionales y de las autoridades locales, si hemos de creer á los prelados que acudieron con sus quejas al rey, en las Cortes de Burgos de 1315 y en las de Valladolid de 1325. Segun ellos, los ricos hombres y caballeros exigian yantares y servicios indebidos á los vasallos de abadengo y á los monasterios, y si se los negaban, robaban los pueblos y cometian en ellos grandes desafueros: detentaban violentamente muchos lugares de abadengo con sus iglesias, cobraban por fuerza las tercias de sus fábricas, prendian á los labradores de dichos lugares, y no les daban alimento hasta

(1) Gallardo, *Rentas de la corona*, t. 3, p. 33, 43, 49, 54, 67, etc.—*Libro de bu-
las*, etc. Represen. del cabildo de Cartagena, f. 11.

(2) Gallardo, t. 3, p. 70.

(3) Berganza, t. 2, p. 184, n. 84.

(4) Cort. de Vallad. de 1351. Orden. de prelad., pet. 11.

(5) *Esp. sagr.*, t. 18, apénd. 31.

(6) Gallardo, t. 3, p. 88.

(7) Escalona, escr. 297.

que satisfacian los pechos indebidamente exigidos, y posaban en los hospitales, echando de ellos á los pobres y dejándolos morir en las calles. Verdad es que á su vez los clérigos, segun el texto de las mismas Córtes, hacian tambien «muchas malfetrias,» por lo cual mandó el rey á los señores de abadengo «que hicieran escarmiento é justicia, é si non, que me tornaré á ellos por ello» (1).

Tratóse de buscar remedio á estos males en el reinado de D. Pedro, pero todo fué en vano. Los procuradores de las Córtes de Valladolid de 1351, pidieron se enmendara el agravio causado por D. Alfonso XI, quitando contra derecho, á las iglesias, algunos lugares y jurisdicciones. D. Pedro respondió que examinaria el asunto y lo resolveria en justicia (2). Pidieron tambien los prelados en las mismas Córtes que se devolviesen á las iglesias las salinas que les habian sido ocupadas por Alfonso XI, juntamente con todas las de propiedad particular. El rey contestó que si tal hiciese, ellos tendrian poco provecho y las rentas reales sufririan gran mengua, pero que les guardaria el ordenamiento que su padre les habia hecho sobre este asunto. Los mismos prelados reclamaron igualmente la devolucion de muchas heredades y posesiones que decian haber sido quitadas á las iglesias y órdenes religiosas, durante las tutorias de Fernando IV y Alfonso XI. D. Pedro respondió que mandaria restituir todo lo que hubiera sido tomado sin derecho (3), mas no consta si llegó así á verificarse. Ni hubo quizá de tener mejor éxito la peticion de los mismos prelados, para que se respetase el derecho que tenian muchas iglesias, de cobrar de los pueblos de su señorío, la mitad de los pechos reales que se exigian en sellos, lo cual tampoco se cumplia, á pesar de haber prometido mucha veces guardarlo el rey D. Alfonso.

No cesaron tampoco las usurpaciones de los señores jurisdiccionales en las temporalidades de la Iglesia. En las Córtes de Toro de 1371 volvieron á quejarse los prelados de que los señores y los concejos embargaban sus bienes y rentas, para obligarles á enajenarlos, por los precios que á ellos convenian; prohibian á sus vasallos tomarlos en arrendamiento; echaban pechos y pedidos á los eclesiásticos; mandaban, si éstos resistian pagarlos, que nadie contratase con ellos ni labrase sus heredades; y quebrantaban

(1) Orden. de prel. de las Córtes de Vallad. de 1325., pet. 3, 4, 7, 8, 11, 19 y 21.

(2) Pet. 77.

(3) Orden de prelad. de dichas Córtes, pet. 5 y 11; Cort. de Toro de 1371, pet. ultim.; y Cort. de Búrgos de 1379.

las iglesias, robando sus ornamentos y sus riquezas (1). Enrique II prometió adoptar providencias para remediar estos desmanes, y dictó, en efecto, la ley de exencion de pedidos reales y señoriales, citada en el capitulo anterior. Mas no por eso hubo de ser más respetada la inmunidad eclesiástica. Así es que los prelados volvieron á querrellarse á D. Juan I en las Cortes de Guadalajara de 1390, de los agravios que recibian de hombres poderosos, con cuyo motivo tuvo el rey que volver á promulgar la ley últimamente citada, imponiendo penas á los que la quebrantasen, así como á los que apremiaran á los vasallos de las iglesias á hacerles servicios «de puercos é de pan, é de vino, é de dineros, é de otras cosas.» En las mismas Cortes falló tambien el rey un pleito famoso entre los prelados y los poseedores legos de diezmos, mandando que estos fueran restituidos á la iglesia, si en el término de treinta dias, los que los disfrutaban no mostrasen los titulos de su derecho, aunque con ciertas excepciones.

Mas el haber confirmado la ley de exencion de pedidos, no impidió á D. Juan I acudir tambien á la Iglesia en sus necesidades, en demanda de préstamos, que tenian por las circunstancias, el carácter de exacciones. Al cabildo de Sevilla pidió alguna cantidad de cebada y trigo para socorrer los castillos de las fronteras de moros, prometiéndole pagarla con la primera cosecha de las tercias, y alegando que otros préstamos semejantes habia hecho ya otras veces el cabildo. Este obedeció, en efecto, las órdenes del rey, dándole los granos pedidos (2). En otra ocasion tomó tambien D. Juan varias alhajas que le dió el monasterio de Guadalupe, requerido de la misma manera que el cabildo de Sevilla (3).

Mucho más considerables fueron las expropiaciones que por aquel mismo tiempo, sufrieron las iglesias de Aragon del rey D. Pedro IV. Hallándose aquel monarca en guerra con Castilla, peligrando su dominacion en Aragon y Valencia y siendo insuficientes sus recursos para mantener el ejército, mandó ocupar todos los bienes de la Cámara apostólica y los frutos y rentas de todos los beneficios de los cardenales y de otros eclesiásticos ausentes de su reino. Ofendido el Papa Urbano V, que poco ántes habia prorogado el indulto de las tercias, trató de privar á D. Pedro del feudo de Cerdeña y aún de excomulgarle y poner entredicho en sus Estados. El rey trató de justificarse, diciendo al Pontifice, que segun el parecer de grandes

(1) Orden. de prelad. de dichas Cortes, pet. 1, 2, 3, 4, 5 y 7.

(2) *Crónica de D. Juan I.* Adiciones á las notas, p. 642.

(3) Marqués de Careaga, *Por el estado eclesiástico, etc.*, pár. 9.

letrados, podía en casos de suma necesidad, tomar no sólo los frutos y rentas, sino todo el oro y la plata de las iglesias, con tal que prometiese pagarlo á tiempo cierto, por estar todos obligados á la defensa de la tierra, así legos como clérigos; y Urbano V por la mediación de D. Pedro Gispert, tío del rey, hubo de sobreseer en el asunto (1). Convertida despues Tarragona en feudo, cuyo señorío directo pertenecía al arzobispo y el útil á la corona, quiso el mismo monarca que los habitantes le prestaran juramento y homenaje y nombró procurador general que defendiese sus derechos en la ciudad. Opúsose el arzobispo á estas novedades, lanzando censuras contra sus ejecutores, por lo cual el rey ocupó todo el dominio temporal de la Iglesia y para verificarlo, mandó tropas á Tarragona é hizo la guerra á los lugares que resistian su poder. Durante ella le acometió la muerte y se cuenta que al anunciarle los médicos su próximo fin, se arrepintió de sus faltas y mandó restituir todos los bienes ocupados á la Iglesia. Fué despues creencia muy recibida en el vulgo, que lo que ocasionó su mortal dolencia, fué una palmada que Santa Tecla ofendida de sus desmanes, le dió en el rostro, al entrar él un dia en su iglesia (2). Tan cierto es que en tales conflictos entre ámbas potestades, la conciencia pública se ponía siempre al fin, de parte de la eclesiástica.

Las expropiaciones de la Iglesia continuaron á pesar de todo, en Castilla durante el siglo xv. D. Juan II, segun refiere su crónica, consultó al Consejo en Búrgos, sobre las cosas que necesitaba para hacer la guerra en Aragon y Navarra; y el Consejo, considerando que serian menester unos 100 millones, propuso que se labrase moneda, pidiendo plata prestada á las principales iglesias, á los más ricos monasterios, á algunos prelados y á otras personas. El rey tuvo por bueno el consejo, y envió cartas con mensajeros de su casa, así legos como eclesiásticos, pidiendo tales empréstitos á varios monasterios é iglesias, ciudades, villas y particulares, manifestándoles la necesidad en que se hallaba y prometiéndoles que serian bien pagados (3). Constá, en efecto, que teniendo entonces en sus arcas el monasterio de Cardena una gran cantidad de dinero destinada á la reedificacion del convento, se la pidió D. Juan y el abad le entregó en calidad de préstamo, 1.200.000 maravedis (4). Además de estos empréstitos, se hicieron en aquel reinado á la Iglesia otras exacciones aún más irregulares, que

(1) Zurita, *Anales*, lib. 9, cap. 53.

(2) Ibid., lib. 9, cap. 24.

(3) *Crón. de D. Juan II*, cap. 144, año 29.

(4) Berganza, t. 2, p. 233.

se atribuyeron al favorito D. Alvaro de Luna, cuando cayó en desgracia, pero de las cuales no debió ser él únicamente responsable. En los capítulos de culpas que contra D. Alvaro presentaron el rey de Navarra, el infante D. Enrique y otros condes y caballeros, le acusaron de haber ocupado los florines de la cruzada de Marchena y de haber obligado á algunos religiosos de las Ordenes, á cambiar sus lugares por juro perpetuos, de cuyo modo había obtenido del abad de Pelayos, la villa de San Martín de Valdeiglesias y otros lugares (1). Así en las cartas que el rey envió á las ciudades y villas, noticiándoles la sentencia de muerte dictada contra D. Alvaro, contaba entre sus delitos haber ocupado vasallos, lugares, rentas y diezmos á las iglesias y monasterios, contra la voluntad de estos y sin forma de derecho (2).

El desdichado condestable no pagó solamente sus culpas, que si él daba juro por villas y ocupaba los fondos de la cruzada, el rey se aprovechaba también de ello, y sin él exigía préstamos, que en vano se llamaban voluntarios, si en realidad eran forzosos. Así le pidieron las Cortes de Burgos de 1430 que excusara tomar la plata de las iglesias, y como D. Juan respondiese que sólo la pidió prestada voluntariamente y con ánimo de devolverla, replicaron los procuradores que mal podía ser voluntario el préstamo, habiéndose hecho entender á los prelados, que incurrirían los que no lo diesen, en el enojo del rey, lo cual, según decían las mismas Cortes, tenía tanto efecto, como un mandato de tomar aquellas riquezas. Todavía insistieron los procuradores en que las cosas eclesiásticas de que el rey se hubiera de servir, no fueran tomadas, sino en la forma que permitía el derecho; á lo cual volvió á responder D. Juan, que no había tomado cosa alguna, sino recibido las que se le dieran (3). Las Cortes de Palencia de 1431 viendo que el rey á pesar de sus promesas, no satisfacía estos préstamos, le pidieron que restituyese la plata que había tomado de las iglesias para la última guerra. D. Juan prometió hacerlo, mas no lo verificó tan pronto, que las Cortes de Zamora de 1432 no tuvieran que repetir la petición. A esta nueva súplica contestó el rey (4) que todo lo había mandado pagar, que su voluntad era satisfacer todos los préstamos que le habían sido hechos, y que mandaba dar su mandamiento en forma, para que los contadores lo librasen desde luego. De esta respuesta se tomó la ley de la Recopilación que

(1) Dicha crón. c. 301, año 40.

(2) Ibid. c. 130, año 53.

(3) Dichas Cortes, pet. 9 y 10.

(4) Cortes de Palencia de 1430, pet. 6; y Cort. de Zamora de 1432, pet. 25.

empieza diciendo no debe el rey tomar la plata ni los bienes de las iglesias, y concluye declarando que puede hacerlo en gran menester, siempre que la restituya enteramente (1). Prueba es de tal origen una nota marginal que así lo dice y se halla en un manuscrito antiguo de los *Ordenamientos fechos en las Córtes de Zamora de 1432* (2).

Esta ley fijó como se vé, los límites de una facultad que de hecho se habian atribuido otros monarcas. La excepcion en ella admitida del principio nunca negado de la inviolabilidad del dominio eclesiástico, se limitó á los tiempos de guerra ó gran menester, á la plata, con exclusion de los bienes de otra especie y á los préstamos voluntarios; pues aunque el texto no hace mencion de esta última circunstancia, los antecedentes de la misma ley que quedan referidos, prueban demasiado que no debian entenderse de otro modo los pedidos de plata que el rey podía hacer á las iglesias. No era otro, sin embargo ántes, el derecho no escrito que profesaban los legistas, mas los hechos convenian con él raras veces, ya porque se ocupaban á la Iglesia bienes de todas clases, ya porque no se tomaban á título de préstamo, y ya porque con el nombre de préstamos voluntarios, se hacian en realidad expropiaciones forzosas. Para remediar estos abusos escribiendo y promulgando aquel derecho, que reconocian los juriscónsultos, aunque no fuera enteramente conforme con los modernos cánones, que exigian otros requisitos en los contratos de préstamo que otorgara la Iglesia, es para lo que, cediendo á los clamores de las Córtes, dictó la ley referida D. Juan II.

Del uso de ella ofrece un testimonio notable el reinado de Enrique IV. Este desdichado monarca apremiado por la necesidad en que le pusieran las guerras civiles, sacó del monasterio de Cardeña, por mano de su contador Diego Arias, 400.000 maravedises en calidad de préstamo, y más de 18 millones como donativo voluntario. Luego, en remuneracion de este servicio y en descargo de su conciencia, concedió D. Enrique al monasterio una renta perpétua de 40.000 maravedises, sobre las alcabalas de ciertas

(1) L. 8, tit. 5, lib. 1, Nov. Recop. El colector de este código atribuyó equivocadamente la ley citada á las Córtes de Búrgos, año de 1407, pet. 8 y 9: mas en aquel año no se celebraron Córtes en Búrgos, sino en el de 1429, y éstas duraron parte del de 1430, por lo cual sus cuadernos llevan esta última fecha. Tampoco trata de este asunto la petición 8, sino la 9 y 10.

(2) Cuaderno m. s. de dichas Córtes que posee la biblioteca del Escorial, let. Z, plut. 2, n. 8, copiado en la coleccion de Córtes de Salvá, m. s. que posee la Academia de la Historia.

villas, las tercias y todos los pechos de un lugar, la exención de sus vecinos de los servicios personales que prestaban á la corona y el nombramiento de 50 excusados de contribuciones en cualquier lugar del reino (1).

Ni los Reyes Católicos, con ser tan devotos de la Iglesia, excusaron la necesidad de tomar sus bienes, en graves ocasiones. Hallándose en guerra con Portugal, tuvieron que levantar el cerco puesto á Toro y retirarse á Medina del Campo, por falta de víveres y de dinero con que comprarlos y pagar sus sueldos al ejército. En tan gran necesidad y no creyendo posible obtener por otro medio recursos oportunos, los del Consejo propusieron á los reyes que tomaran la plata de las iglesias, fundándose, segun dice la crónica, en que esto no seria cosa nueva ni grave, por cuanto en necesidades tan extremas era permitido tomar, no sólo la plata, sino los bienes, las rentas y los vasos sagrados de las iglesias, segun se habia hecho en otros reinos, y los prelados y el clero estaban dispuestos á entregarlas de buen grado. Todavía pareció cosa grave á los reyes tocar á los bienes eclesiásticos, pero no hallando otro remedio á la necesidad, acordaron tomar solamente la mitad de la plata de las iglesias, obligándose, á pagarla dentro de tres años, con 50 millones de maravedises, que en el mismo periodo, habia de pagar el reino por pedidos y monedas. Y así se verificó en efecto, tanto la entrega de plata como su devolucion, á la cual se obligó el cardenal Mendoza, cuidando muy particularmente de ella la Reina Católica (2). Celebráronse Cortes con este motivo en Medina del Campo, en 1475 y fué en ellas, segun Ortiz de Zúñiga (3), en las que los Prelados otorgaron á los reyes cantidades de plata prestada, granos y dinero, y los procuradores un servicio de 172 millones de maravedises. El cabildo de Sevilla contribuyó con gran parte al préstamo, y los capitulares lo repartieron entre sí, por no tocar á lo reservado al culto divino. Préstamos semejantes hubieron de tomar los mismos reyes para la guerra de Granada, cuando el monasterio de Guadalupe les envió con tal objeto la reja de la capilla mayor y su altar, que eran de plata, añadiendo que si aquello no bastase, aún quedaban los cálices, las cruces, los relicarios y los demás bienes del convento. Los reyes dieron en remuneracion á los monjes la propiedad de varias escribanías (4).

No deberian contarse quizá entre las cosas eclesiásticas de que dispu-

(1) Berganza, tom. 2, p. 233, n. 184 y sig. y p. 362, n. 157.

(2) Pulgar, *Cron. de los Reyes Catól.*, cap. 24. — Salazar, *Cron. del gran cardenal de España*, cap. 41.

(3) *Anales de Sevilla*, lib. XII, año 1475, n. 7.

(4) Marques de Careaga, *Por el Estado eclesiástico*, etc.

sieron aquellos monarcas, los diezmos que les pagaron los moros sometidos del nuevo reino de Granada; mas era considerado este tributo tan propio de la Iglesia, que debiendo continuar su pago los infieles sometidos, por la condicion estipulada de satisfacer los mismos impuestos que acostumbraban pagar á sus emires y soberanos, los Reyes Católicos no se consideraron autorizados á percibirlo, hasta que una bula de Inocencio VIII se lo otorgó como bienes eclesiásticos (1). Tan arraigada estaba la opinion del origen divino del diezmo y de su carácter tradicional, que no obstante la tolerancia ofrecida á los mahometanos rendidos, se creyó que estos estaban tan obligados á pagarlo como los fieles.

III.

LAS EXPROPIACIONES DE LA IGLESIA DESDE EL REINADO DE CÁRLOS I HASTA EL DE CÁRLOS III.

En el reinado de Cárlos I se intentó hacer á la Iglesia una expropiacion más considerable. Las Córtes habian reclamado varias veces contra las excesivas adquisiciones del clero y la inobservancia de las leyes de amortizacion, sin obtener del monarca más que respuestas evasivas ó ineficaces. Las de Madrid de 1528 pidieron que se incorporaran á la corona los vasallos y jurisdicciones de la Iglesia, lo cual pareció al emperador que seria injusto despojo. Pero cuando faltó el Erario de recursos para proveer á las graves atenciones de tan vasto imperio, propuso el Consejo que, con la autorizacion competente, se tomaran bienes, jurisdicciones y vasallos á las iglesias y monasterios de Castilla, á cambio de otras rentas equivalentes. D. Cárlos pidió y obtuvo de Clemente VII, Paulo III y Julio III los breves que habia menester para hacerlo. Diósele en ellos facultad para vender villas, fortalezas, vasallos, jurisdicciones, montes y otros bienes propios de las iglesias, monasterios y lugares pios, hasta cierta cuantia, mediante compensacion que le ofreceria el Estado con otros bienes y rentas equivalentes. El principal objeto de esta providencia importantisima, fué acabar en lo posible con los señorios de abadengo ó disminuir por lo ménos su número, segun habian deseado las Córtes de Madrid de 1528, pues no otra cosa eran los «bienes jurisdiccionales» (*bona jurisdictionalia*), que mencionaban los indultos pontificios. No contenian, por lo tanto, estos

(1) Gallardo, *Rentas de la Corona*, t. 3, p. 102.

breves solamente una medida económica, sino que encerraban además una providencia de alta política, encaminada á robustecer la autoridad del monarca y á privar á la Iglesia de un género de propiedad, que si en los pasados tiempos, habia podido ser conveniente y aún necesaria, perjudicaba á la sazón, al progreso social y á la misma Iglesia. Señalado progreso era entonces la centralizacion del poder público, remedio indispensable para restaurar la sociedad medio disuelta por la guerra y la anarquía. La Iglesia, para restablecer su disciplina tan alterada y corrompida por la turbacion de los tiempos, y para ajustar su conducta al espíritu y á las máximas de su divino fundador, era menester que renunciara á los señoríos jurisdiccionales, que por otra parte, tampoco necesitaba ya para defender su independencia.

Mas el clero, celoso como nunca de su inmunidad, y creyéndola quebrantada con tales proyectos, se opuso enérgicamente á la ejecucion de los breves pontificios, y logró que Carlos V la suspendiera, hasta oir el parecer de sugetos graves de autoridad y consejo. Consultados, en efecto, varios prelados y teólogos de fama, dieron unánimes su dictámen negativo. El que hubo de sostenerlo con razones más persuasivas, fué un abad de la órden de San Benito, llamado fray Juan de Robles, pues cuéntase que cuando acabó de hablar, exclamó el emperador: «Nunca Dios quiera que yo les quite lo que no les dí,» y mandó que no se volviera á tratar del asunto (1).

Esta resolucion, sin embargo, no se llevó á efecto, porque como crecieran los apuros del Erario con los gastos de nuevas guerras, el Consejo de Hacienda instó en 1553, por la ejecucion de los breves pontificios. El emperador entonces volvió á someter al asunto en consulta, á una junta de siete teólogos, entre los cuales se hallaban el ilustre Melchor Cano y el célebre fray Bartolomé Carranza, y todos convinieron unánimemente en que ni S. M. podia pedir con buena conciencia, la facultad de enajenar bienes eclesiásticos, ni Su Santidad concederla, tratándose de cosa que no era suya, y que aunque se pudiera dar y pedir, no parecia decente usar de ella. Melchor Cano redactó en este sentido un notable informe que suscribieron en efecto todos los teólogos consultados (2). El mismo Padre Robles

(1) Sandoval, *Hist. de Carlos V*, lib. 26, pár. XXXIV.

(2) Este informe, del cual existen varias copias manuscritas en nuestros archivos públicos, y un extracto impreso en la biblioteca provincial de Toledo, ha sido publicado íntegro por mi ilustre amigo D. Fermin Caballero, en la *Vida de Melchor Cano*,

escribió á la sazón otro memorial en defensa del derecho de la Iglesia á conservar sus señoríos y vasallos, y el emperador, cediendo otra vez á sus razones, ordenó que no se hiciera uso del indulto pontificio (1).

Mas pasados algunos años, volviendo Felipe II á tomar en consideración este asunto, por el mal estado de la Hacienda, impetró y obtuvo de Gregorio XIII en 1574, un nuevo breve que le autorizaba para disponer de villas, lugares, castillos, tierras, vasallos y jurisdicciones pertenecientes á las iglesias, cuya renta no excediera la suma de 40.000 ducados, computada por el producto del último quinquenio, y mediante la obligacion de indemnizar á las mismas iglesias, con otros bienes y rentas equivalentes (2). Tambien contra este breve representaron algunos prelados, fundándose, como Melchor Cano, en la falta de autoridad del Pontífice para disponer de los bienes eclesiásticos. D. Sancho Busto de Tavera, gobernador del arzobispado de Toledo, escribió con este objeto al rey, un notable papel que fué impreso y publicado dos siglos más tarde (3). Pero Felipe II, ménos escrupuloso ó más necesitado que su padre, no tomó en cuenta tales objeciones, y sin consultar más teólogos, hizo uso del indulto pontificio. Para este efecto mandó inquirir desde luego las rentas, derechos y bienes de muchos señoríos eclesiásticos, lo que habian producido en el quinquenio último, sus términos jurisdiccionales, el número de sus vecinos, sus castillos y fortalezas y las tierras y heredades anejas á ellos, enviando con este fin, comisionados especiales á varias provincias (4). Practicada esta averiguacion, se incor-

que acaba de dar á luz, para honra suya y lustre de las letras y de la patria. Diffícilmente podria haber encontrado aquel célebre maestro y escritor famoso, un historiador más digno de restaurar y perpetuar su memoria que el autor de la *Población rural* y la *Vida de Alonso de Montalvo*.

(1) Sandoval, obr. y lug. cit.

(2) Hácese relacion de este breve en una bula por la cual Clemente VIII, en 1604, mandó restituir los bienes eclesiásticos incorporados á la corona por Felipe II, que no hubieran sido enajenados á terceras personas, segun se dirá luego, en el texto.

(3) Valladares, *Semanario erudito*, t. 6, p. 216.

(4) En los autos seguidos por el marqués de Villafranca sobre réversion á su casa, de los bienes del convento de San Isidro del Campo, en Sevilla, pieza 3.^a, folio 623, existe una real carta de Felipe II, dirigida á su criado Juan Ruiz Carrillo en 1578, que da á conocer cómo procedió aquel monarca á la incorporacion de los señoríos eclesiásticos. Dice así: "Sepades como nuestro muy Santo Padre Gregorio XIII, por un su breve y letras apostólicas, nos ha concedido licencia y facultad para que podamos desmembrar y apartar y vender perpétuamente cualesquiera villas y lugares, fortalezas, vasallos, jurisdicciones, montes, bosques y otros bienes y rentas temporales pertenecientes en cualquier manera á cualquier iglesia de estos reinos, catedrales, aunque sean metropolitanas, provinciales, colegiales, parroquia-

poraron á la corona muchos señoríos y bienes eclesiásticos, y algunos fueron enajenados á particulares, ya por permuta con otros, que éstos poseían, y quedaron incorporados tambien desde entonces al Estado, ó ya por venta real y perpétua. Entre los bienes permutados, lo fueron la villa de Utrella y Almaner, que pasaron al duque de Medinaceli, por cambio con ciertas salinas. Los vendidos á particulares hasta 1604, producian cerca de 9.500 ducados de renta. Algunos de los mismos bienes fueron dados á corporaciones eclesiásticas, para que los poseyeran bajo la dependencia de la co-

les, y á cualesquier monasterios, cabildos, conventos y dignidades, hospitales y otros lugares pios, y darlos y donarlos y venderlos y disponer de ellos, no excediendo la venta de las dichas villas y lugares y fortalezas y otros bienes, que así desmembrásemos y vendiésemos, del haber de 40.000 ducados de renta en cada año; lo qual se puede hacer sin consentimiento de los prelados, abades, priores, prepositos, rectores, conventos, cabildos y otras personas que los poseyeren, dándoles justa recompensa y equivalencia que hubieren de haber, por las rentas que así desmembráremos, incorporáremos y vendiéremos, segun más largo esto y otras cosas en el dicho Breve se contienen, el qual tenemos aceptado y de nuevo lo aceptamos. Y del usando, habemos acordado desmembrar del prior, frailes y convento del monasterio de la orden de San Hieronimo, el lugar de Santiponce, con sus términos é jurisdicciones civil é criminal, alta y baxa, mero y mixto imperio, para los vender y disponer de ellos, como más fuéremos servido, conforme al Breve de Su Santidad. En seguida manda averiguar si dicho monasterio disfrutaba en Santiponce algunas rentas, derechos, penas de cámara, mostrencos y martiniegas anexos al señorío del lugar, y lo que habian valido en los cinco últimos años desde 1573 hasta 1577, para que se les de y consigne la recompensa y equivalencia justa que hubieren de haber por ello, conforme á dicho Breve. Ordena para este efecto al D. Juan Ruiz que visite el lugar, y llamando al prior, averigüe las jurisdicciones que ha usado, qué rentas, pechos, penas de cámara, calumnias, mostrencos y otros aprovechamientos ha tenido y tiene el convento por razon de la jurisdiccion y el señorío, y lo que le habian rentado en los cinco años últimos. Que averigüe asimismo los vecinos que tiene el lugar, para lo cual haria que la justicia le presentara el padron jurado y firmado, conminándole con la multa de 50.000 maravedís, por cada habitante que en él no constase. Que compruebe la exactitud del padron, contando á los vecinos y escribiendo sus nombres casahita, y si no resultaren más de 100, mida el término. Que indague asimismo si existe en el lugar, alguna fortaleza ó edificio perteneciente al convento, y habiéndolo, lo haga tasar por peritos, así como las tierras, viñas ú otros heradamientos á él anexos. Que se informe tambien si además de las rentas procedentes de la jurisdiccion, tenia el convento algunos censos ú otras rentas que no fueran diezmos, así como de pan, de maravedís, de yerba ú otras, y lo que producian cada año. Por último, que desempeñe esta comision en el término de diez dias, y concluida, presente la informacion al Consejo, para que provea lo conveniente. Pero tambien resulta de los mismos autos, pieza 8.ª, folio 628, que los monjes representaron al rey contra aquella providencia: que en su vista mandó S. M. extender la informacion á averiguar los perjuicios que podria sufrir el monasterio, y que la desmembracion del señorío de Santiponce no llegó entonces á tener efecto.

rona, mediante ciertas sumas, con que á ella contribuyeron; y otros cuya incorporacion habia sido tambien decretada, no la obtuvieron, porque las iglesias que los poseian, los redimieron, abonando su importe en metálico ó en otros efectos.

Mas sucedió en aquella operacion económica, lo que suele suceder en todas las de su especie. La indemnizacion ofrecida á la iglesia no hubo de ser en todos los casos la correspondiente (1); fueron tambien enajenados más bienes que los necesarios para producir los 40.000 ducados de renta; muchas enajenaciones se verificaron sin las formalidades indispensables; y su producto no fué siempre invertido en los fines para que ellas habian sido autorizadas. Asi es que el mismo Felipe II, agitado por los estímulos de su conciencia, mandó en su testamento, que se arbitrara algun medio para devolver á las Iglesias los bienes de que habian sido privadas. Felipe III al subir al trono, consultó la ejecucion de esta cláusula del testamento de su padre con una junta de teólogos y juristas, los cuales reconocieron la legalidad de las enajenaciones de bienes eclesiásticos verificadas en el anterior reinado, manifestaron que no se podia despojar á los compradores, sin resarcirles previamente del precio que habian satisfecho y del importe de las obras y mejoras que hubieran ejecutado, y demostraron la imposibilidad en que á la sazón se hallaba el tesoro de subvenir á tan cuantiosas indemnizaciones. Con esta consulta acudió el rey á la Santa Sede, pidiéndole la solucion del grave conflicto en que se hallaba su conciencia. Clemente VIII, atendiendo á su súplica, expidió una bula de 1604, en la cual, despues de hacer mencion de todos los hechos referidos, ordenó que los bienes simplemente incorporados á la corona, y los adjudicados á corporaciones, mediante algun servicio en dinero, fuesen restituidos á sus antiguos poseedores, si estos devolvian los que en sustitucion hubieran recibido: que los bienes permutados fueran tambien restituidos, y cuando esto no fuera posible, se dieran algunos otros bienes á las Iglesias á que habian pertenecido, como complemento de su indemnizacion, á juicio del Nuncio Apostólico: que las corporaciones que habian redimido sus bienes de la incorporacion, mediante el pago de alguna cantidad de dinero ó de otros valores, recibieran tambien alguna compensacion al arbitrio del mismo Nuncio; y que las ventas verificadas á particulares fueran firmes y valederas, sin que en ningun tiempo pudiera reclamarse su nulidad, cualquiera que fuese el

(1) Así resulta de la bula de 1604 que se cita más adelante en el texto.

vicio de que pudieran haber adolecido (1). De este modo terminó el primer ensayo de expropiación eclesiástica á la moderna, que tuvo lugar en Castilla. No hay noticia, sin embargo, de que aquella restitución se llevara á efecto: sábase por el contrario que en los reinados de Felipe III y Felipe IV defendieron como legítimas las enajenaciones verificadas por Felipe II, algunos escritores políticos y jurisconsultos, lo cual es prueba de que aún estaban subsistentes.

Felipe III so pretesto de prohibir la labor y la extracción de la plata, causa á su juicio de la quiebra de los comercios y de la disminución de la riqueza, adoptó en 1600 una providencia gravísima, que se interpretó generalmente como preliminar de otra expropiación de la Iglesia. Tal fué la de que todas las personas y corporaciones, sin excluir las Iglesias y monasterios, entregaran á los corregidores, en el término de diez días, un inventario detallado de toda la plata labrada que poseyeran. El rey escribió á los arzobispos y obispos para que ejecutasen lo mandado en sus respectivas Iglesias y procuraran su cumplimiento, en los monasterios de su territorio. El clero comprendió desde luego la segunda intención de esta medida: muchos predicadores la impugnaron en sus sermones: el confesor del rey Fr. Gaspar de Córdoba la censuró también en las juntas que con tal motivo celebraron los consejeros de la corona; los prelados se lamentaron de que no se excluyeran de ella las custodias ni los vasos sagrados, y tales inconvenientes se advirtieron al fin, que se desistió de su ejecución (2). El cronista Gil Gonzalez Dávila no dice que el intento del monarca fuera servirse de la plata inventariada, pero bien se infiere de su relato que la opinión pública le atribuía tal propósito, y aunque él no da su parecer sobre aquel acto, se lamenta de que la abundancia de piedras preciosas y el excesivo lujo consumían la riqueza del reino.

Mas no deben extrañarse las vacilaciones ni la varia é inconstante conducta de nuestros reyes en esta materia, pues que eran reflejo de las dudas y contradicciones que agitaban á los letrados y juristas y movían en diversos sentidos la opinión pública. Los jurisconsultos y escritores políticos del siglo xvi no podían desconocer la costumbre antigua y la ley de D. Juan II que atribuían á la corona la facultad de tomar prestada la plata de las iglesias; mas deseando conciliarlas con las prescripciones canónicas, de

(1) *Bulas, Breves, Indultos apostólicos, etc. con otros papeles importantes al estado eclesiástico, sacados de los archivos de la Santa Iglesia de Toledo.*—Madrid 1635.

(2) Gil Gonzalez Dávila, *Hist. de Felipe III*, lib. 2, c. 9.

que ántes he hecho mérito, y con la Constitucion entonces reciente de Paulo II, que fulminaba graves censuras contra los que destinaban á usos profanos las cosas eclesiásticas (1), trataron de limitarla con restricciones no comprendidas en dicha ley. Diego Perez comentándola, añadía á las dos únicas condiciones en ella establecidas, «el gran menester y la restitution,» la de que los legos no pudieran contribuir con más recursos (2). Alfonso de Acevedo requiría además el consentimiento del obispo y del clero de la iglesia respectiva (3). Lopez Bravo y otros doctores, creían que además era indispensable la licencia del Pontífice (4). Lo mismo opinaba el docto Mariana, extrañando que esta última condicion de la licencia pontificia hubiera caído en desuso. «No consienta el rey, escribía, que se quiten á las iglesias y á los obispos los pueblos y fortalezas que hoy poseen, pues con ellos podrá el sacerdocio defender la religion contra la impiedad de los innovadores, entre los cuales pudieran hallarse los mismos monarcas... Las rentas, el dinero y las alhajas de las iglesias, son un sagrado depósito para las circunstancias más apuradas de la república, pues que en las guerras, en que es combatida la religion, es lícito apelar á ellas» (5).

Otros escritores no admitían aquella facultad de la corona y la ley de D. Juan II, ni aún con las restricciones expresadas. El padre Ribadeneira creía que el rey no debía aprovecharse en ningún caso de los bienes de las iglesias, y observaba que «cuando los príncipes (ahora sea por codicia, ahora por alguna verdadera necesidad), se entregan en los bienes de la Iglesia, parece que ninguna cosa les luce, y que no solamente la hacienda eclesiástica que toman, se les deshace entre las manos, sino tambien la otra seglar que se junta con ella» (6). D. Felipe Antonio Alosa á la vez que exhortaba al clero á ofrecer un donativo á la corona, escribía que el tomar las alhajas de las iglesias en las grandes urgencias del Erario, segun aconsejaban los antiguos estadistas, era más político que católico, y no debía proponerse á un rey más católico que político. Sin embargo, condenaba severamente el exceso de las riquezas del clero, decía que las vajillas de plata de los obispos parecerían mejor que en sus aparadores, reducidas á

(1) Extravag. comm. lib. 3, tit. 4, cap. ún. promulgada en 1468.

(2) Orden. reales, l. 12, tit. 12, lib. 1, glosa.

(3) Commentar. jur. civ. in hispan. regi. constitutiones. In leg. 9, t. 2, lib. 1, Recop.

(4) De rege et regendi ratione, 1627, lib. 3, fól. 26. v.

(5) De rege et regis institutione, lib. 1, c. 10.

(6) Tratado de la religion y virtudes del príncipe cristiano, 1609, cap. 37 y 38.

moneda en la pagaduría del ejército, y sostenía que sin licencia del Papa podía el clero hacer donativos voluntarios al rey (1). Partidario más extremado de las inmunidades D. Juan de Madariaga, ni aún con bula del Pontífice juzgaba lícito al rey valerse de los bienes eclesiásticos (2). Esto mismo sentía D. Gutierre Marques de Careaga (3), según el cual, el único medio de remediar los reinos de sus necesidades, no es aplicar á ellas la renta de la Iglesia, sino acudir á Dios con ofrendas y oraciones, pues no le parecía conveniente que cuando todos deberían desnudarse para dar á Dios y á sus templos, se buscara el remedio en lo que siempre habia sido destruccion y ruina de los Estados. D. Juan Vela escribía tambien en el siglo xvn, que el príncipe debe poner toda su atencion en que bajo ningun pretexto se toque á las cosas de la Iglesia, porque lo consagrado una vez á Dios no se puede sin grave peligro, destinar á otros usos, aunque sea el de socorrer necesidades urgentísimas (4).

Todos estos escritores citaban además en apoyo de su doctrina muchos ejemplos de príncipes que habian tenido un fin desastroso, por haberse apoderado de bienes de la Iglesia. En su concepto, Gunderico, rey de vándalos, pereció al entrar en el templo de San Vicente, por llevar el propósito de saquearlo; Alonso I de Aragon padeció grandes trabajos, por haber despojado algunos templos; Sancho I del mismo reino, murió por igual motivo, atravesado por una saeta en el cerco de Huesca; doña Urraca murió repentinamente á las puertas de San Isidro de Leon, por haber usurpado sus tesoros; Juan I perdió la batalla de Aljubarrota, por haberse servido de las riquezas del monasterio de Guadalupe; Pedro IV de Aragon, por haber quitado su jurisdiccion y dominio á la Iglesia de Tarragona, murió de resultas de una bofetada que le dió su patrona Santa Tecla: Cárlos Martel, Aistulfo, rey de Lombardos, Federico, emperador de Alemania y otros príncipes extranjeros alcanzaron tambien mal fin, por semejantes motivos. Todos aplaudian al mismo tiempo á San Fernando, porque hallándose

(1) *Exhortacion al estado eclesiástico para que con voluntarios donativos, socorra los ejércitos católicos de España*, 1655, cap. 1, 2 y 7.

(2) *Gobierno de príncipes*, 1617. El autor elogia á Felipe II porque dice, no siguió el consejo de los que le propusieron tomara los bienes de las iglesias dando en cambio una renta, "como á pupilo que no tiene discrecion para administrar su hacienda." Es muy extraño que escribiendo Madariaga á principios del siglo xvn ignorara que Felipe II siguió en efecto aquel consejo, según queda ántes demostrado con documentos irrecusables.

(3) "Por el estado eclesiástico, etc.," pár. 9.

(4) *Política real y sagrada*, discurso 9, secc. 3.

en gran necesidad, cuando cercaba á Sevilla, desechó el consejo que se le daba de servirse de la hacienda de la Iglesia. Los escritores más favorables á la corona, como D. Diego de Saavedra, admitiendo aquellos casos milagrosos, los atribuían á no haber mediado en las expropiaciones, la circunstancia indispensable de extrema necesidad (1). Otros, como Mariana, sin afirmar tales milagros, pero refiriéndolos, tomaban en cuenta la creencia popular de que los usurpadores de los bienes de la Iglesia espían siempre en la tierra su delito, para advertir á los reyes del influjo que las murmuraciones del vulgo solían tener en el éxito de los negocios del Estado, y la necesidad de evitar que sus menores contratiempos se atribuyan á castigo del cielo (2).

El influjo de estas doctrinas acabó al fin con las dudas y vacilaciones del gobierno y las controversias de los juristas y de los políticos del siglo xvii. La opinion que los teólogos tenían por más segura, la de que no debía tocarse á los bienes eclesiásticos, sino en necesidad extrema y con autorizacion prévia del Pontífice, es la que oficialmente prevaleció, por lo ménos hasta los fines del siglo xviii, á pesar de los regalistas y de los filósofos, que deseaban con afán, el empobrecimiento de la Iglesia. Macanaz, invocando el derecho y ejemplos antiguos, propuso al Consejo en 1713, que para las urgencias de la guerra de sucesion, aún no concluida entónces, se exigiera á los prelados y á las iglesias el derecho de lanzas sobre sus estados y rentas, y se comprendiera á los eclesiásticos en los repartimientos, y que si esto no bastase y sin acudir al Papa, se utilizara la plata de los templos; mas fué oído con escándalo y no se adoptó su propuesta (3). Suprimida la compañía de Jesús y ocupadas sus temporalidades, con las restricciones y temperamentos indicados, la opinion fué adversa á esta medida y Carlos III no tranquilizó su conciencia, hasta que logró verla sancionada por el Pontífice. Así, cuando juzgó necesario que el clero contribuyera con alguna parte de su cuantiosa hacienda á levantar las cargas del Estado, acudió á la Santa Sede en demanda del indulto correspondiente, y todavía habiéndolo obtenido de Pío VI en 1780, en la forma expresada en el capítulo precedente, no se atrevió á utilizarlo, por temor á la censura pública y á la resistencia del clero. Por motivos semejantes no quiso tampoco acceder á

(1) *Idea de un príncipe político-cristiano*, empresa 25.

(2) *De rege*, etc., lib. I, c. 10.

(3) Informe al Consejo, publicado por Llorente en su *Coleccion diplomática sobre disciplina eclesiástica*, p. 34.

una consulta del Consejo, proponiéndole la reducción y extincion de las cofradías y la aplicacion de sus bienes á objetos de beneficencia, y se limitó á mandar en 1783, que se revisaran las erigidas sin autoridad real y se secuestraran sus bienes, en tanto que decidia sobre su supresion ó su permanencia (1).

CAPÍTULO VI

La propiedad eclesiástica segun la escuela política y los economistas del siglo XVIII.

I.

INFLUJO DE LAS DOCTRINAS FILOSÓFICAS Y POLÍTICAS DEL SIGLO XVIII
EN LA EXPROPIACION DE LA IGLESIA.

Antes de reseñar la historia de las leyes de amortizacion y de las expropiaciones de la Iglesia en el siglo XVIII, conviene exponer, aunque sea brevemente, las doctrinas filosóficas, políticas y económicas que tanto contribuyeron á extender las unas y promover las otras. Hasta entonces se habian dictado aquellas leyes para alivio de los vasallos, en sus relaciones con el Fisco: la escuela reformista del siglo XVIII las examinó bajo nuevos puntos de vista, ya el filósofo, poniendo en cuestion la misma propiedad eclesiástica y el derecho á adquirirla, ya el político, dejando reducido el clero á corporacion ó indiferente ó ilícita, ó ya el económico, para determinar el influjo de la propiedad amortizada en la produccion de la riqueza, concluyendo de todo, por la abolicion completa de toda propiedad colectiva y amortizada. Sabida es la influencia que, aunque en grados diversos, ejerció esta escuela en las expropiaciones que entonces y despues ha sufrido la Iglesia en casi todos los Estados de Europa; pero como en Francia es donde, si no tuvo su primer origen, alcanzó sus mayores triunfos, á la vez que sus más tristes desengaños, allí es donde debemos buscar los textos genuinos de su enseñanza.

Los principios filosóficos de esta escuela no eran conformes con la verdad católica. Sus jefes eran deistas los más, ateos algunos y adversarios,

(1) Sempere, *Bibliot. económ.*, t. I, p. 134.

todos del clero y de la autoridad pontificia. Aunque oficialmente pasaban por cristianos, pocos creían serlo en su conciencia: unos aspiraban á la completa abolición del cristianismo, al paso que otros se contentaban con reformar la Iglesia, reduciéndola á su estado primitivo de pobreza y dependencia de la potestad temporal. Todos convenían en tolerarla, ya que profesaba sus dogmas la mayoría del pueblo, mas con la esperanza de que fuese perdiendo prosélitos, á medida que aquel se ilustrase, y con el firme propósito de reformar su disciplina exterior, á fin de ponerla en armonía con las ideas modernas y los nuevos intereses. Esta reforma que prepararía al pueblo para otra más radical, tenía desde luego por objeto: 1.º proveer á las necesidades urgentes del Estado, con los bienes de la Iglesia: 2.º procurar que los medios de subsistencia de ésta no embarazaran el desarrollo de la riqueza, por el influjo pernicioso que ejercían sobre ella, los diezmos y la amortización: 3.º someter el clero á la potestad temporal, obligándole á recibir su alimento del Erario; y 4.º crear intereses á favor del nuevo orden político, haciendo pasar á manos de los seglares, los bienes de la Iglesia.

Había además otra secta, que profesando de buena fé los principios del cristianismo y deseando mantener su culto, seguía la doctrina de Jansenio y aspiraba á restituir á la Iglesia sus caracteres exteriores primitivos, condenaba como abusos y corruptelas muchas prácticas católicas, nada más que porque no eran conocidas en tiempo de los apóstoles, y pretendía descargar al clero del cuidado de los bienes temporales, que le distraía de su espiritual ministerio. Así los jansenistas, aunque cristianos sinceros, cooperaban á la obra de los enemigos del cristianismo, creyendo que sólo se trataba de consolidar y purificar el culto. No aspiraban ellos á convertir al clero en instrumento de una determinada política, ni á servir con sus riquezas á la causa de la revolución; pero creían que restablecidas las costumbres de los primitivos cristianos, recuperaría el catolicismo la fuerza moral perdida y que reducida la Iglesia á poseer lo estrictamente necesario para mantener un culto pobre y sencillo, ganarían mucho la religión y el Estado: la una adquiriendo nuevos títulos á la consideración del mundo, y el otro entregando á la circulación y haciendo más productiva una masa considerable de riqueza.

Para llevar á cabo aquellas reformas sin el concurso de la Santa Sede, servían por una parte, el espíritu anti-católico de la filosofía dominante, y por otra, las máximas de la Iglesia galicana; pues aunque estas no autorizaban expresamente al soberano para confiscar los bienes eclesiásticos, como

ampliaban sus facultades en puntos de disciplina, restringiendo las del Papa, y el mismo clero, en los antiguos Estados de Blois, se habia reconocido obligado á acudir con sus riquezas al alivio de las calamidades públicas, hubo de parecer á muchos conforme con el espíritu de tales doctrinas, el derecho de la potestad civil á disponer de los bienes de la Iglesia.

Corrian al mismo tiempo casi sin contradiccion opiniones muy atrevidas ó ya condenadas acerca del origen, legitimidad y conveniencia de la propiedad eclesiástica. Eran las más ingeniosas las de los enciclopedistas, que con puntas de teólogos, pretendian acomodar á sus fines, los textos sagrados y las tradiciones de la Iglesia. La facultad de adquirir reconocida á esta, decian unos, es contraria á la ley evangélica de la pobreza establecida por Jesucristo, cuando prohibió á sus discípulos poseer *oro, plata y dinero* (1). Y como si pudiera fijarse el sentido de este precepto, sin tener en cuenta otros que declaran dignos de merced y recompensa á los ministros del culto (2), y sin consultar la tradicion de la Iglesia, estos nuevos intérpretes del evangelio consideraban ilegítima y abusiva toda propiedad eclesiástica, olvidándose de que precisamente al recomendar Jesús la pobreza á sus discípulos, fué cuando les manifestó que podian recibir el alimento de aquellos á quienes aprovecharan sus obras.

Otros afirmaban que los bienes eclesiásticos emanaban de un origen vicioso y anti-cristiano, por cuanto las gracias que se dispensaban á los fieles, en el ejercicio del sagrado ministerio, eran dones divinos, que no debian venderse, sino darse gratuitamente, segun mandaba el Evangelio (3). Interpretacion contraria tambien á la que siempre diera á la Iglesia al texto evangélico, segun la cual, las oblaciones no habian sido nunca el precio de los sacramentos, sino un modo de contribuir al sostenimiento material del culto.

Los que prescindiendo de la teología, buscaban en las teorías jurídicas argumentos contra la propiedad eclesiástica, sacaban partido de que la ley hubiese limitado el derecho de enajenarla y el de adquirirla. Puesto que la Iglesia, decian, no puede vender sus bienes sino en circunstancias extraordinarias, ni adquirir otros nuevos, sino con los gravámenes y restricciones de la ley de amortizacion, su dominio en ellos, es una especie de usu-

(1) *Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris.* San Math. c. 10, v. 9.

(2) *Dignus est enim operarius cibo suo.* S. Math. c. 10, v. 10.—*Qui altari deserviunt cum altare participant.* S. Paul. epist. 1 ad Cor. c. 9, v. 13.

(3) *Gratis accepistis, gratis date.* S. Math. c. 10, v. 8.

fructo perpétuo, mucho ménos perfecto que el de los particulares y que no merece por lo tanto el mismo respeto, ni excluye cierta participacion del Estado, que en el otro sería inadmisibile. Como si por diferenciarse el dominio eclesiástico del seglar, en cuanto á la limitacion de su uso y á los requisitos necesarios para su adquisicion y trasmision, arguyera otra diferencia en cuanto al derecho de poseer; como si de que no se deban aplicar al dominio eclesiástico las leyes profanas relativas á los puntos en que difiere del laical, se siguiera que tampoco deban aplicársele las leyes concernientes á puntos en que ambos dominios son enteramente idénticos, y entre ellos todo lo que se refiere al derecho de poseer y disfrutar los bienes. Así, más bien que un argumento contra la inviolabilidad del dominio eclesiástico, era otro favorable á ella el que los defensores de la Iglesia deducian de las restricciones impuestas á su enajenacion y á la inversion de sus productos, pues que su único objeto era asegurarlos en la misma Iglesia, sin pérdida ni menoscabo. Además, decian, las mismas condiciones limitan el dominio y la administracion de los bienes del menor, del insensato y del pródigo, y sin embargo, no por eso se le considera ménos inviolable que el del mayor de edad y el del cuerdo, ni podría ser suprimido ni confiscado, sin injusticia.

Argumento de más fuerza aparente se deducia contra la inviolabilidad del dominio eclesiástico, de su naturaleza colectiva y de pertenecer á una persona meramente jurídica, cuya existencia estaba á merced del Estado: circunstancia que nunca concurre en el dominio de los particulares. De la colectividad del derecho inferian sus adversarios que la parte correspondiente á cada uno de los que lo disfrutaban era tan pequeña, que no merecia el mismo respeto que el dominio individual. Conclusion errónea y arbitraria, porque tanto vale el derecho á obtener cierto servicio de unos bienes, que es el que disfrutaban el clero y los fieles, en cuyo provecho existia la propiedad eclesiástica, como el derecho á recibir de otros bienes servicios indeterminados, á voluntad del poseedor. Tan perfecto es el derecho del que ganó servidumbre de paso por un predio, como el del propietario del mismo predio: y así no era ménos respetable que el dominio de éste, el derecho del monje á vivir de las rentas de su monasterio y el del católico á que la Iglesia proveyera con bienes propios, á sus necesidades religiosas.

De la circunstancia de ser una persona jurídica quien poseia los bienes eclesiásticos, se inferia tambien, que quedando éstos sin dueño, cuando el Estado, en uso de su derecho, suprimia la corporacion propietaria, debian

como mostrencos pasar al Fisco. A lo cual contestaban los defensores de la Iglesia que los bienes destinados al culto eran propiedad de ella: que la corporacion que la misma forma, no puede ser suprimida, en una nacion católica; que aunque el Estado pudiera suprimir determinadas corporaciones eclesiásticas, por motivos de utilidad pública, otros muchos ántes que él tendrían derecho á sus bienes, segun fuese el origen de éstos y la especie de la corporacion suprimida: que tratándose de una comunidad religiosa, sus individuos tendrían derecho á continuar viviendo con el producto de su hacienda: que tratándose de bienes destinados en general al culto de algun templo, la Iglesia, por razon de su dominio eminente, puede destinarlos al culto de otra; y que en el caso de haber sido legadas las propiedades de la corporacion suprimida, con condiciones que no puedan cumplirse, la reversion debería verificarse á los herederos de los testadores, y en su defecto, la equidad aconsejaria dar á tales propiedades el destino más análogo al suyo primitivo. Estas ideas prevalecieron despues en Francia, puesto que de acuerdo con ellas, proveyó una ley de 1827, á la aplicacion de los bienes de las comunidades eclesiásticas, en el caso de su disolucion.

Fundándose otros adversarios de la propiedad de la Iglesia, en que ésta era un establecimiento público autorizado por la ley, al cual habia dado la nacion medios de subsistencia, en provecho de ella misma, ménos que del clero, deducian que éste no debia ser considerado como propietario, sino como mero administrador de sus bienes, de los cuales la nacion habia conservado su propiedad y podia disponer, atendiendo de otro modo á sus necesidades religiosas. Argumento histórica y legalmente falso, porque ni la Iglesia esperó para existir el permiso de los emperadores, ni éstos tuvieron la pretension de fundarla cuando se convirtieron al cristianismo: ni los que le daban ó legaban sus bienes entendian reservarse ningun derecho sobre ellos, cuando los trasmitian en propiedad.

Atacaban otros el patrimonio de la Iglesia atribuyendo origen ilegítimo á una parte de él, ya por suponerla arrancada á la ignorancia de los fieles, cuando éstos creian comprar con sus ofrendas la remision de sus culpas, ya por proceder de donaciones de la corona, cuando los reyes disponian á su arbitrio de las cosas de dominio público. De aquí se procuraba deducir que la Iglesia no tenia derecho á los bienes de una y otra procedencia; no á los de la primera, porque tales donaciones eran nulas, siendo falsa la causa de ellas; y no las de la segunda, por falta de dominio en el donante. Argumento, en verdad, poco concluyente, pues de la pretendida

nulidad de algunas donaciones, nunca podria inferirse que la Iglesia debiera ser privada de todos sus bienes, aunque no tuvieran tal procedencia. Pero aún los que la tuvieran, no podian decirse mal adquiridos, ya porque el error de concepto, como lo fué el de los que creyeron redimir sus pecados sólo con ofrendas, no vicia la donacion, y ya porque en la Edad Media, y mucho despues, la soberanía territorial llevaba consigo la facultad de disponer de las tierras no apropiadas.

Mas las opiniones de los filósofos y de los reformadores politicos que prometian regenerar el mundo, prevalecieron al fin en los inquietos ánimos de Francia. La clase media, ya preponderante, pugnaba por sacudir el yugo de toda autoridad; tibia en la fé y acandillada por enemigos del cristianismo, acogia con entusiasmo las doctrinas nuevas, que tendian á justificar su propia tibieza, su separacion del clero y su propension á emanciparse de la autoridad de la Iglesia. No es, pues, extraño que los errores indicados se difundiesen en breve tiempo y contribuyesen sobremanera á los excesos de la revolucion.

II.

INFLUJO DE LAS DOCTRINAS ECONÓMICAS EN LA EXPROPIACION DE LA IGLESIA.

No ménos que las doctrinas politicas del siglo XVIII, contribuyeron á la expropiacion de la Iglesia, las doctrinas económicas que coincidieron con ellas. Dos escuelas se disputaban entonces el campo de la ciencia: la de los fisiócratas, fundada por Quesnay, y la de Adam Smith. La primera veia en la agricultura el origen de toda riqueza y de toda prosperidad: la segunda contemplaba la fuente de una y de otra sólo en el trabajo; pero ambas, por distintos caminos, venian á parar á la misma conclusion, en cuanto al influjo económico de la propiedad amortizada.

Si la tierra era madre de toda riqueza, y madre tanto más fecunda cuanto mayores capitales se invirtieran en ella, estimular á cultivarla con abundancia y perfeccion, era el fin supremo del gobierno, y todo debía sacrificarse al interés fundamental de remover los obstáculos que impedian el desarrollo de la agricultura. Era uno de estos obstáculos la amortizacion, porque con ella el propietario no se estimulaba á invertir en el cultivo los capitales necesarios para mejorarlo y extenderlo, no teniendo seguridad de disponer del mayor valor que diera á sus propiedades. Así, decian los fi-

siócratas que mientras el clero y las manos muertas poseyeran una parte considerable del territorio, no progresaría la agricultura, porque los mayores propietarios del país no tendrían interés en aplicar á ella, el capital que necesitaba su fomento.

Si el trabajo material, único que Smith llamaba *productivo*, era el origen de todo bienestar, debían mirarse con recelo las instituciones que lo disminuyesen, por noble y santo que fuera su objeto. En su virtud, aquel sábio economista condenaba el derecho de primogenitura y los mayorazgos, el excesivo número de eclesiásticos, las fundaciones piadosas y la posesion de las grandes heredades, que sin distribuirse entre colonos útiles, formaban parte en Inglaterra, del patrimonio de la corona. Tantos millares de clérigos, frailes y legos que viven de las rentas eclesiásticas, decían los economistas de esta escuela, son otros tantos brazos robados á la industria y á la produccion. Si la Iglesia no poseyera más bienes que los indispensables para su objeto, esos brazos improductivos se emplearían en trabajos útiles y aumentarían la riqueza nacional.

Del principio de la libre concurrencia, que también profesaban los economistas, se deducía otro argumento en el mismo sentido. Era menester remover los obstáculos que dificultaban la produccion y distribucion de la riqueza, uno de los cuales era la amortizacion, porque acumulando en pocas manos, las propiedades, se disminuía el número de productores concurrentes y faltaba entre ellos el estímulo á aumentar y perfeccionar los productos; y como el precio de estos depende también, según la misma escuela económica, de su abundancia, atribuíase á la amortizacion el encarecimiento de las tierras, y por lo tanto, la escasa utilidad de los capitales invertidos en adquirirlas y el retraimiento de los capitalistas que pudieran mejorarlas. Pónganse en circulacion, decían, todas las tierras amortizadas, y al punto bajará su precio, crecerán sus rentas, se emplearán en ellas muchos capitales, mejorará el cultivo, abaratarán los productos de la industria y crecerá el bienestar de la nacion.

Otro de los malos efectos de la amortizacion, según los economistas de aquella escuela, era mantener separada la propiedad del cultivo, porque las corporaciones poseedoras de vastos terrenos ó carecian del capital necesario para cultivarlos ó excusaban con razon hacerlo, por la incompatibilidad de las funciones de su instituto con las faenas industriales. Por cuya razon, arrendadas siempre las heredades de manos muertas, eran cultivadas con la única mira de obtener de ellas el mayor producto posible, en el más breve tiempo, y con el menor capital que fuese dable, cuando lo que la agricul-

tura exige para su fomento, es acumular en ella grandes capitales que den productos lentos, duraderos y seguros.

La division del trabajo que aumenta y perfecciona los productos de la industria, hallaba tambien un obstáculo, segun los economistas, en la amortizacion, que sacaba del comercio una parte considerable de la riqueza. Por último, la amortizacion dificultaba la subdivision de la propiedad, que era para muchos, el mayor bien de los pueblos. Una nacion de pequeños propietarios labradores, con fortunas iguales ó semejantes, empuñando ya el arado, ya la espada, segun las necesidades de la patria, era el bello ideal á que aspiraban muchos filósofos cándidos del siglo xviii, que soñaban todavía con Esparta y Atenas.

Todas estas consideraciones económicas debian parecer incontestables, cuando la economia politica hacia en el mundo sus primeros ensayos científicos y no habia sido probada en la piedra de toque de la experiencia. Algunas de ellas eran, sin duda, fundadas; pero las más adolecian del error en que incurrian sus autores, al determinar los resultados de cada ley económica, sin tener en cuenta que la produccion y distribucion de la riqueza son hechos esencialmente complejos, que se verifican bajo el influjo simultáneo de diversas leyes, las cuales por el solo efecto de la simultaneidad de su accion, se modifican reciprocamente en la práctica. Así, por ejemplo, examinada aisladamente la ley que hace depender de la concurrencia, la perfeccion y la baratura de los productos, venimos á esta conclusion: «Cuanto mayor sea el número de los propietarios cultivadores, tanto más perfectos y baratos serán los productos de la agricultura. Pero la experiencia desmiente esta regla, y no porque sea falsa la ley de la concurrencia, sino porque juntamente con ella, obra otra ley económica que modifica sus efectos, y es la que hace depender tambien la perfeccion y baratura de los productos de la industria, de la division del trabajo empleado en ella. Como que cuantos más sean los propietarios cultivadores, tanto menor parte de tierra debe tocar á cada uno, en esta misma proporcion deberá disminuirse tambien la posibilidad y la conveniencia de dividir el trabajo en sus heredades; y así lo que ganaria el cultivo en perfeccion y en baratura de sus frutos, por la concurrencia de cultivadores, lo perderia por la acumulacion de las faenas agricolas, á que obligaria la corta extension de las heredades.

Los economistas han prestado gran servicio á la ciencia, analizando aisladamente los fenómenos económicos y determinando los efectos de la accion exclusiva de cada una de las leyes que los producen; mas no han tenido

bastante en cuenta, que este método propio del estudio, no es el de la sociedad ni el de la naturaleza, en sus diversos desenvolvimientos: que una y otra emplean sus fuerzas simultáneamente: que se rigen por leyes en la apariencia contrarias, aunque en realidad conformes, y que quien toma por criterio una sola de ellas, en vez del conjunto, incurre en un error semejante al de aquellos filósofos, que habiendo tenido que analizar separadamente las leyes del entendimiento para conocerlas, y no funcionando ellas del mismo modo, les atribuyeron en la práctica, los efectos consiguientes á su supuesta accion individual. Asi, de la economía política se pueden deducir buenas reglas de administracion y gobierno, siempre que se funden en el resultado práctico de la acción simultánea de sus leyes; pero si solo se toman en cuenta algunas de éstas, podrán deducirse de ellas, con mucha lógica, los errores más funestos.

Hé aquí ahora cómo son aplicables estas consideraciones al exámen de los argumentos de los economistas contra la amortizacion.

Erró Quesnay en considerar la tierra como origen único de todas las riquezas: acertó en atribuir el fomento de la agricultura á la importancia de los capitales que se inviertan en ella; pero se equivocaron los que de estos principios dedujeron, que para asegurar la inversion en la tierra de grandes capitales, bastaba arrancarla á las manos muertas y entregarla subdividida en menudos pedazos, á multitud de pequeños cultivadores. Los que esto afirmaron no advirtieron que la ley que atribuye á la propiedad libre, la virtud de estimular al propietario, á invertir en el cultivo, los fondos convenientes para mejorarlo, se modifica en la práctica por otra ley que niega á la pequeña propiedad, por libre que sea, y al reducido cultivo, los medios necesarios para acumular utilidades y formar capitales que invertir en la tierra. Dada la subdivision y la libertad de la propiedad, no faltará estímulo al propietario para mejorar y extender el cultivo, pero como sus utilidades serán reducidas, carecerá de capital, para dar satisfaccion á su estímulo.

Atribuir á la amortizacion el subido precio de las tierras, fué error grave, aunque disculpable, cuando aún no era conocida la teoria de la renta, que despues ha demostrado el profundo economista Ricardo. Entonces pudo creerse que el precio de las tierras se regulaba, como el de cualquiera otro artefacto, por la ley de la demanda y la oferta, y que por lo tanto, bastaria declarar alienables todas las propiedades, para que salieran al mercado por corto precio. Pero hoy es ya un hecho reconocido que el precio de las tierras, obedeciendo á otra ley, ha subido á la vez que su renta: que ésta ha

venido aumentándose, en la misma proporcion en que se ha extendido el cultivo á terrenos ménos fértiles y de produccion más costosa; y que estos han sido roturados y cultivados sucesivamente, segun que ha ido creciendo el consumo de los frutos agrícolas, con el aumento de la poblacion y el desarrollo de la industria. No es, sin embargo, la abundancia ó escasez de las tierras, una circunstancia del todo indiferente, por su propia índole, para regular el precio de ellas, pero suele no producir efecto sensible, porque la neutraliza y modifica la ley reguladora de la renta. Si cuando crece el consumo agrícola de un país, se ponen en cultivo tierras de inferior calidad, aumentándose, en su consecuencia, la renta de las de calidad superior, unas y otras deben subir de precio en venta, cualquiera que sea el número de las inalienables. Estas últimas no experimentarán el mismo aumento, porque ni ántes tuvieron precio, ni despues lo tienen, pero subirá su renta, como la de todas.

España ofrece un ejemplo reciente de estas verdades. En 1836, en 1841 y en 1854 se lanzaron al mercado grandes masas de bienes, hasta entonces amortizados, procedentes de los monasterios, el clero, las obras pías, la beneficencia y los propios y comunes: ¿bajó por eso, el precio de las tierras? Fué al contrario, mucho más subido, porque como siguiese creciendo más cada dia el consumo agrícola, con el aumento de la poblacion, fué menester poner en cultivo tierras de inferior calidad. Si el consumo se hubiera disminuido, habrian abandonado los colonos las tierras ménos fértiles, lo cual habria hecho descender la renta de las más productivas y con ella, el precio en venta de todas. Si el consumo hubiese permanecido inalterable, no se habria extendido el cultivo, ni aumentado la renta de las tierras de superior calidad, y por lo tanto, la enajenacion de las amortizadas no habria alterado el precio de todas, en venta ni en renta. De modo que si se hubiera verificado el fenómeno que buscaban los economistas, la reduccion de los precios, habria sido esta una prueba incontestable de otra reduccion correspondiente en el cultivo y en la riqueza pública. Abatar las tierras era á primera vista, propósito laudable, pero incompatible con los progresos de la agricultura y con el engrandecimiento de las naciones: puede realizarse despoblando y empobreciendo al país; pero no desamortizando su propiedad.

En dos casos tan sólo, haria bajar la desamortizacion el precio de las tierras: cuando por ella se pusieran en cultivo tierras de superior calidad y labor poco costosa, ántes completamente improductivas, sin que se aumentara el consumo, y cuando se lanzara al mercado una gran masa de

bienes, para darlos al mejor postor, sin limitacion de precio y sin que la validez y la seguridad de estas enajenaciones inspirara el menor recelo á los compradores, ni estableciese la menor diferencia en la estimacion de estas propiedades, respecto á las de particulares. En el primer caso, dejarian de cultivarse las tierras de inferior calidad, disminuiria el costo de la produccion, valdrian ménos los frutos, se reduciria la renta y bajaria por consiguiente el precio de la propiedad. En el segundo caso, la *oferta* de bienes seria muy superior á la *demanda*, las subastas no fijarian el justo precio de las fincas, los que desearan adquirir propiedades no buscarian las de particulares, y cuando estos tuviesen que enajenarlas, ó no hallarian compradores, ó tendrian que darlas á vil precio. Mas ni lo uno ni lo otro es lo que generalmente sucede: ni con la desamortizacion se suelen poner en cultivo las tierras en que la produccion es ménos costosa, porque esas están ya cultivadas, ni las fincas desamortizadas consiguen en muchos años la misma estimacion que las de particulares, y así no suele bajar el precio de la propiedad, como otras causas no concurran á producir este efecto.

Cierto era el cargo, que los economistas hacian á la amortizacion, de mantener separada la propiedad del cultivo lo cual no es en general, conveniente para el fomento de la agricultura. Los que acumulan grandes capitales en tierras no suelen dedicarse á su labranza, y la amortizacion favorecia sin duda esta acumulacion. El colono no hace en tierras ajenas, las mejoras importantes que haria en las propias, no estando seguro de recoger el fruto del capital y del trabajo que invierta en ellas. Algo remediaría este mal la desamortizacion, pero no tan radicalmente, como se prometian los economistas. La desamortizacion divide y esparce al pronto grandes patrimonios y lleva á manos más activas, propiedades ántes descuidadas, mas una parte de ellas suele acumularse despues en manos de grandes capitalistas, formando patrimonios no ménos cuantiosos, en que la propiedad vuelve á estar separada del cultivo. Y no puede ménos de ser así, porque rindiendo generalmente más utilidades la produccion en grande que la muy limitada, los pequeños productores van lentamente desapareciendo, las cortas industrias van siendo absorbidas por las grandes, y cada vez va necesitándose mayor capital, para dedicarse con fruto, á cualquier ramo de la produccion. Así cuanto más capital circulante ha sido necesario para la útil labranza, menor ha debido ser el número de propietarios con el suficiente para cultivar sus tierras, y más separada ha debido estar la propiedad del cultivo: cuantas más ventajas ofrezca éste, ejecutado en grandes

proporciones, mayor irá siendo la acumulacion de la propiedad laborable. El único modo de evitar que la separacion entre la propiedad y el cultivo produzca los inconvenientes indicados, seria reemplazar los arrendamientos cortos con los largos: así se confundirian hasta cierto punto los intereses del colono con el del dueño y mejoraria la labranza de las tierras, aunque su dominio estuviese amortizado. A los arrendamientos largos debe Inglaterra la prosperidad de su agricultura, á pesar de tener amortizada una gran parte de sus tierras.

No era tampoco completamente exacto el cargo de que la amortizacion dificultaba la division del trabajo: ella disminuia la circulacion de la propiedad, pero no la de los productos, que es la que, restringida, puede producir aquel efecto. La tierra no es un producto, sino un instrumento de produccion: circulando de mano en mano, tiene tal vez más ocasiones de aumentar su fuerza productora, que permaneciendo estancada; pero por el solo hecho de mudar de dueño, no da lugar á una mayor division de trabajo. Puédese ocasionar de este modo una mayor subdivision de la propiedad, mas ésta, segun ántes se ha visto, lo que origina es una mayor acumulacion de los trabajos agrícolas, porque la pequeña propiedad trae el cultivo en pequeño, y sólo en el extenso es en el que las faenas de la agricultura admiten la division oportuna entre trabajadores que se ocupen asiduamente en ellas. Subdividida la propiedad de modo que no baste la porcion de cada labrador al sustento de su familia, no solamente tiene aquel que desempeñar labores diversas, sino que necesita ayudarse con otras industrias. Una extension dada de tierra dividida en pequeñas heredades, exige más brazos para su cultivo, que la misma tierra cultivada por cuenta de uno solo; y sin embargo, en este caso, resulta más favorecida la poblacion que en el otro, pues siendo más los productos, el exceso, que se reparte entre el propietario y el colono, viene á invertirse en la industria y á dar lugar al empleo de más brazos en ella, lo cual no se verifica en el caso opuesto.

La desamortizacion favorece sin duda el cultivo en pequeño, pero éste, además de los inconvenientes expresados, disminuye, cuando su pequeñez es excesiva, las fuerzas productoras de la tierra, que dependen del capital y del trabajo invertido en ella. No suelen estar al alcance de los pequeños labradores las obras de arte, como caminos, canales, nivelaciones, ni las máquinas costosas, ni los ganados, ni aún los abonos, que convienen á veces, para la labranza más productiva. Sin ellos la agricultura no abandona jamás las viejas rutinas, ni puede competir con la de otros países más ade-

lantados. Por otra parte, como en el pequeño cultivo no hallan ocupacion los labradores, sino en breves períodos del año, contraen hábitos de indolencia y disipacion, que causan su miseria y la del país en que viven. Los pegujaleros de las montañas de Escocia y de Irlanda son, segun Mr. Cullloch (1), holgazanes incorregibles, con todos los vicios de la civilizacion. Del influjo que el grande y el pequeño cultivo ejercen en la agricultura, ofrecen, por último, ejemplos concluyentes Inglaterra con sus admirables adelantos agricolas y sus grandes cultivos, y Francia con su agricultura relativamente atrasada, sus pequeños cultivos y sus cinco millones de propietarios; allí produciendo la hectárea de terreno cultivado por término medio 835 2/3 rs. de nuestra moneda, y aquí tan sólo 104.

Conviene ciertamente que haya una clase numerosa de propietarios interesada en la conservacion del orden público; pero cuando la propiedad se subdivide demasiado, este interés se desvirtúa, porque falta el estímulo ó se debilita la causa que lo origina. Así, la misma facilidad de procurarse alguna heredad, aunque corta, estimula desacertadamente á adquirirla, á los que no teniendo capital para cultivarla, se ven forzados á tomarlo á préstamo: la usura devora entónces sus utilidades, tras ellas va á veces la misma finca comprada, y así suelen esas propiedades cambiar tan frecuentemente de manos, que apenas pueden estimarse como garantia del orden público. Tiene sin duda mucho interés en conservarlo el propietario que fia en los bienes que posee, su subsistencia y la de su familia, pero no así aquel que mira su propiedad como transitoria é insegura. Los deudores arruinados no fueron nunca prenda de estabilidad en la república.

Por todo lo cual se ve que sin faltar razon á los economistas que consideraban la amortizacion, como un obstáculo al más rápido crecimiento de la riqueza, exageraron tambien sus inconvenientes y aún le atribuyeron algunos, que ó no tenían relacion con ella, ó dependian no tanto de la existencia de la propiedad amortizada, como de su exceso. Era indudable su influjo contrario al fomento de la agricultura y á la conservacion material

(1) *Statistical account of the British empire*, vol. 1, pág. 445.—*Survey of Ross and Cromarty* by sir George Mackenzie, pág. 84 y 237.—*Account of Ireland*, vol. 1, página 517.—Los pegujaleros de Irlanda se visten de harapos, viven en sucias chozas, no educan á sus hijos, ni se ejercitan en ninguna industria. Sus cortas labores duran un breve periodo, y son tan indolentes, que desdeñan los crecidos jornales, que podrían ganar despues, pescando ó sirviendo en otras heredades. Dependiendo su subsistencia de las patatas que siembran, á veces ni las recogen oportunamente, dejando que el hielo las destruya.

de las propiedades, y esto cedía en gran mengua de la riqueza general, cuando el clero poseía la quinta parte del territorio, sobre todo por razón de capellanías, patronatos, cofradías, memorias piadosas y otras fundaciones pertenecientes á quienes entre todas las manos muertas, tenían ménos interés en la conservacion y fomento de sus bienes. Esto bastaba para justificar el empeño de los que pedían el restablecimiento de las leyes de amortizacion; pero los demás argumentos reseñados y discutidos eran, como se acaba de ver, de poca fuerza, así en el terreno de la ciencia como en el de la práctica.

CAPÍTULO VII

Restablecimiento de las leyes de amortizacion en el siglo XVIII

I.

PROGRESOS DE LAS LEYES DE AMORTIZACION EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XVIII.

Con las nuevas doctrinas esparcidas por Europa, ó con su espíritu, que más ó ménos había penetrado en todas las naciones, el movimiento en las ideas, favorable á las leyes de amortizacion, iniciado en España en el último tercio del siglo xvii, continuó aún más acelerado en el xviii. Entonces encontró ya asilo en la Nueva Recopilacion, la ley de D. Juan II, que gravaba con el impuesto del quinto, los bienes dejados á la Iglesia. Fernando VI prohibió en 1757, transferir á manos muertas las casas edificadas en el real heredamiento de Aranjuez, si bien adoptó esta disposicion, ménos en su calidad de soberano, que en la de dueño directo del suelo (1). Mas como la ley de D. Juan II, aunque tácitamente rehabilitada, no se cumpliese, ó fuera ineficaz, se mandó instruir expediente en el Consejo, para el establecimiento general de otra, que llenase mejor su objeto. En este expediente demostraron los fiscales la necesidad de dicha ley y defendieron con calor, la autoridad del soberano para decretarla. En igual sentido representó la Diputacion de Millones de los reinos, trasunto de las antiguas Córtes, ale-

(1) Nota 5.ª, tit. 17, lib. X, Nov. Rec.

gando que la despoblacion y la ruina de tantas familias acomodadas provenian del exceso de las adquisiciones por manos muertas.

Mientras que este expediente seguia su largo curso, dictó Carlos III varias providencias encaminadas á su mismo objeto. Como que la ley de D. Juan permitia á las manos muertas adquirir inmuebles, con real licencia y pago del impuesto, aún con este gravámen continuaban sus adquisiciones en gran cuantia; lo cuál dió motivo á que en 1763, se prohibiese admitir instancias en solicitud de licencia para verificarlas y se mandara al Consejo de Hacienda, que cuando viese alguna concedida, ó se le pidiese informe sobre concederla, representara las órdenes dadas en contrario «y los intolerables daños (son palabras de la real orden) que se seguian á la causa pública, de que á título de una piedad mal entendida, se fuera acabando el patrimonio de los legos» (1). El mismo monarca mandó en 1767, que no se enajenaran á manos muertas, las heredades de las nuevas poblaciones que habia fundado en Sierra Morena (2). Despues, habiéndose declarado patrono de la orden de Trinitarios, le prohibió en 1769, adquirir bienes raices por compra, legado, ni otro título. En el mismo año, al prescribir los trámites para el otorgamiento de las licencias de amortizar en los reinos de Valencia y Mallorca, encargó á la Cámara tuviese presente cuánto convenia al Estado excusar semejantes recursos y permisos, y que cuando concurrieran justos motivos para concederlos, habian de quedar gravados los bienes con las cargas reales y vecinales y con todas las demás contribuciones que pagaran las haciendas de los legos (3). Por último, como la resolucion del expediente del Consejo tardase demasiado, se mandó en 1771, guardar y cumplir el capitulo del Fuero de Córdoba que prohibia dar heredades á la Iglesia, excepto á la catedral, y se previno á los escribanos de aquel antiguo reino, bajo pena de privacion de oficio, que no otorgaran instrumento de tales enajenaciones y fueran declarados nulos los contratos de ellas, que se celebraran sin real licencia, á consulta del Consejo (4).

Mas el reinado de Carlos III concluyó, sin que se dictara la ley general de amortizacion, que habia de poner término al expediente instruido con tal objeto. Tampoco lo logró en verdad, Carlos IV, por más que lo desearan

(1) L. 17, tít. 5, lib. I, Nov. Rec.

(2) L. 3, tít. 22, lib. VII. Id.

(3) L. 19, tít. 5, lib. I, Nov. Rec.

(4) L. 21, id., id.

los hombres ilustrados de su Corte. Tuvo, pues, aquel monarca que limitarse, como su augusto padre, á dictar algunas medidas parciales, que si no dejaban duda acerca del espíritu que las inspiraba, eran insuficientes para su objeto. Eludiéndose frecuentemente el pago del quinto, que debían devengar los bienes que se amortizaban, se creyó facilitar la exaccion de este impuesto, moderándolo, y al efecto quedó reducido en 1795 al 15 por ciento del valor de los bienes que pasaran á manos muertas, en las provincias de Leon y Castilla, en que no se observaran las antiguas leyes de amortizacion (1). Al año siguiente se dictaron nuevas reglas para asegurar la observancia de estas leyes en el reino de Valencia y privar á las manos muertas de lo que habian adquirido indebidamente (2). Segun la real cédula dictada con este fin, se habian suscitado en todo tiempo, tantas dudas para entorpecer el cumplimiento de aquellas leyes, y eran tantos los recursos promovidos y otorgados sobre indulto de adquisiciones indebidas, que casi parecian autorizada la dispensa ó la infraccion de las mismas leyes y desconocido el objeto con que fueran promulgadas. Tambien aparece del mismo documento, que aunque en Valencia se giraban visitas de tiempo en tiempo á las iglesias, para averiguar si habian adquirido algunos bienes, sin la competente licencia y pago del derecho, todas solian terminar por un indulto á favor de las corporaciones adquirentes, quedando las heredades en su poder y perjudicada la real Hacienda.

Algo contribuyó quizá al impulso que en el siglo xviii, se dió en España á este género de reformas, el ejemplo de las de la misma índole, que se verificaban á la vez, en otros países. Algo debió estimular á nuestro gobierno el saber que Carlos VI, emperador de Alemania, habia en 1716, declarado nulas las enajenaciones que se hicieran contra lo dispuesto en la antigua ley de amortizacion, y mandado vender, en el plazo de un año, las fincas que adquiriesen las manos muertas, anulando despues, en 1720, todas las adquisiciones verificadas desde 1669, fecha de aquella ley: que Luis XV de Francia en 1749, habia mandado restringir el uso de las licencias para amortizar: que la república de Génova, en 1762, habia prohibido vender inmuebles á las manos muertas, y mandado que los que se les donaran ó legaran se vendieran, invirtiendo en juros, su importe: que en Módena y en Luca se habia prohibido dar, sin prévia licencia, á manos muertas, más de una vigésima parte del patrimonio ó herencia del donante, y que el

(1) L. 18, tít. 5, lib. id.

(2) L. 20, id., id.

elector de Baviera habia extendido á toda clase de bienes una ley de 1672, que prohibia enajenar á manos muertas los bienes nobles.

Hasta los decretos del infante D. Felipe de Borbon, soberano de Parma, que dieron lugar al famoso Monitorio de Clemente XIII, encontraron en la corte de España calorosa defensa. Aquel príncipe no se contentó con limitar las adquisiciones de inmuebles por las manos muertas, sino que en 1764, prohibió la enajenacion á la Iglesia de toda clase de bienes, permitiendo sólo donarle entre vivos ó por última voluntad, la vigésima parte en metálico del patrimonio del disponente y reservándose autorizar, en casos extraordinarios, algunas de las adquisiciones que quedaban prohibidas. Equivaliendo esta medida á la abolicion casi absoluta de la facultad de adquirir de la Iglesia, el Papa reclamó contra ella, á la vez que contra otras que suponía derogatorias de las prerogativas de la Iglesia, dictadas por el mismo soberano; y como no fuese atendida su queja, lanzó contra él un Breve ó Monitorio anulando sus decretos y conminándole con la excomunion y con relevar á sus súbditos del juramento de fidelidad. Este documento fué mandado recoger á mano real por Cárlos III, y consultado ej consejo, fué enérgicamente impugnado por sus fiscales Moñino y Campomanes, en los célebres informes que corren impresos, aunque mereciendo la censura de más de un teólogo (1).

II.

CONTROVERSIA SOBRE LA LEY DE AMORTIZACION EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XVIII.

Pasando ahora una mirada retrospectiva sobre las vicisitudes de las leyes de amortizacion, se advierte que sus defensores, perteneciendo casi siempre á las clases superiores, se han apoyado segun los tiempos, en intereses y principios diferentes. Mientras que la propiedad conservó sus caracteres feudales y los señores tuvieron, con el dominio directo de las tierras, el derecho de exigir en sus enajenaciones, laudemios y alcabalas, en su trasmision por herencia, impuestos de sucesion, y en otras circunstancias, gabelas de varias especies, era notorio el interés de las clases altas en impedir que tales tierras recayesen en personas que no podian enajenar-

(1) Juicio imparcial sobre las letras en forma de Breve que ha publicado la corte romana, en que se intentan derogar ciertos edictos del duque de Parma, 1769.



las y se hallaban exentas de su potestad. Engrandecidas luego las monarquías de Europa, mediante la incorporacion de muchos de estos mismos señoríos, creció el interés de los reyes en conservar los derechos y emolumentos feudales que de ellos procedían. Aumentándose con las mismas monarquías, las necesidades públicas, que no alcanzaban á satisfacer las rentas feudales ordinarias y obligaban á recurrir, cada vez con más frecuencia, á las derramas y servicios extraordinarios, lo cual coincidía fatalmente con la extension de la inmunidad eclesiástica, fué aún mayor el interés de los príncipes en evitar que los exentos acumulasen nuevas riquezas, y se manifestó el de los pueblos en impedir que menguase el número y la importancia de las heredades pecheras. Mas como á pesar de todo, siguió el clero aumentando sus propiedades, se hizo tan poderoso, que llegó á causar celos á los príncipes, y el estado seglar atribuyó su propia reduccion y pobreza á las excesivas adquisiciones de las manos muertas. De aqui resultaron interesados en poner limite á estas adquisiciones, no sólo los que vivían del Fisco, sino los que buscaban el remedio de los males públicos y el progreso de la sociedad en el poder absoluto de los reyes y en la centralizacion de la soberanía.

En el siglo xviii se debilitaron ya en España, algunos de los intereses que estimulaban á mantener las leyes de amortizacion, mas en cambio otras circunstancias vinieron á favorecerlas. Con el concordato de 1737, que sujetó á tributos los bienes que pasaran á manos muertas, excepto los de primera fundacion, cesó en gran parte, uno de los principales fundamentos de aquellas leyes; pero tambien con los aumentos del comercio y con la propagacion de los nuevos principios de economía política, importados del extranjero, cobraron mayor importancia á los ojos del público, los inconvenientes económicos de la amortizacion. Las razones á favor de la libertad del dominio, que sólo habían apuntado algunos escritores del siglo xvii, se esforzaron y desarrollaron entonces, con el auxilio de las nuevas doctrinas económicas. El empobrecimiento del Estado, la des poblacion, el atraso de la agricultura y la decadencia del comercio, todo se atribuyó al exceso de la amortizacion civil y eclesiástica.

Entre tanto, iban propagándose en Europa las ideas jansenistas, segun las cuales, debía restituirse la Iglesia á su pobreza y sencillez primitivas; y corrían el mundo los nuevos sistemas filosófico-políticos, que aspiraban cuando ménos, á privar al clero de toda influencia social. Los hombres más ilustrados de España no eran á la sazón jansenistas, ni ménos volterianos; pero habían abrazado con entusiasmo el sistema económico de los fisiócras.

tas franceses, y como regalistas intransigentes, participaban hasta cierto punto, de las ideas de los nuevos filósofos, en cuanto á restringir la autoridad del Papa y la de los ministros de la Iglesia. Asi las tradiciones históricas, las decretales pontificias y las opiniones de los teólogos, por autorizados que fuesen, tenían poco valor ante una escuela que desdeñaba la historia, despreciaba las decretales y no admitía la autoridad de la teología sino en puntos propiamente de fé.

Los estadistas más ilustres de España en el siglo xviii, versados ya en las nuevas doctrinas políticas y económicas de su tiempo, procuraron con el mayor empeño, limitar en lo sucesivo, el enriquecimiento del clero y aún reducir en lo posible su ya crecida hacienda. Con este propósito escribieron repetidas alegaciones D. Francisco Carrasco, fiscal de Millones, D. José Moñino y D. Pedro Rodríguez Campomanes, fiscales del Consejo. Con el mismo fin dió á luz este último su célebre *Tratado de la regalia de amortizacion*, una de las obras de más nombradía é influencia entre las de su tiempo. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, en su inmortal *Informe sobre la ley agraria*, abogó por la misma causa, con la elocuencia y copia de nueva doctrina, en que abundaban todos sus escritos. Y por último, cuantos escritores de la escuela moderna trataron del fomento de la agricultura, la poblacion y los intereses materiales, señalaron la amortizacion como una de las causas de su decadencia.

Campomanes discutió la cuestion con talento, sagacidad y vasta erudicion, pero con suma parcialidad de juicio y no siempre con escrupulosa exactitud en la narracion de los hechos. Su *Tratado de la amortizacion*, más que un estudio rigurosamente científico, fué una alegacion apasionada de jurisperito. Pasadas aquellas circunstancias, siempre se le consulta con fruto, mas no se le puede adoptar por texto de doctrina, sin un prolijo discernimiento.

Propúsose demostrar Campomanes: primero la competencia del soberano para limitar la facultad de adquirir de las manos muertas, y despues la necesidad de que el monarca hiciera uso entonces de esta potestad, porque el exceso de las adquisiciones verificadas perjudicaba á la riqueza y bienestar de los seglares, al clero mismo en sus diezmos y en su disciplina y al Estado en su Hacienda.

Para la demostracion de la primera tesis, partia del supuesto de haber sido dado á la Iglesia el derecho de adquirir por la potestad temporal, puesto que habiéndoselo quitado los emperadores paganos, cuando ella era una corporacion ilícita y perseguida, se lo devolvieron los mismos emperadores

convertidos al cristianismo; argumento tan poco concluyente, como lo seria decir que la potestad espiritual de la Iglesia en materia de sacramentos, procede tambien de los emperadores, porque Constantino derogó las leyes tiránicas que prohibian administrarlos, juntamente con todas las ceremonias del culto católico. Pero admitido aquel supuesto, no podia rechazarse la consecuencia: si la potestad secular hubiera dado á la Iglesia el derecho de adquirir, podria quitárselo cuando lo juzgara conveniente. No admitió, sin embargo, Campomanes esta consecuencia en toda su extension, porque habria pecado contra las definiciones canónicas, pero dejó abierto el camino á la lógica de los ménos escrupulosos.

Otro de sus puntos de partida era, que la exencion de tributos, que disfrutaban los eclesiásticos, procedia únicamente de la ley civil; de lo cual inferia que si el soberano podia imponer al clero los mismos tributos que á los legos, legislando así en cuanto á los bienes temporales de la Iglesia, tambien podria señalar á la adquisicion de estos, los límites que estimara justos. Consecuencia, á la verdad, improcedente, puesto que la facultad de imponer tributos á los seglares, no supone la de incapacitarles para adquirir toda clase de bienes, sin abuso de autoridad y notoria injusticia.

Mejor argumento era el de que no disponiendo las leyes de amortizacion sino de los bienes laicales, sujetos privativamente á la autoridad real, podian dictarlas los soberanos temporales, en virtud de la misma potestad con que señalaban las condiciones de autenticidad y moralidad de los contratos, ó prohibian enajenar los bienes de menores, de pródigos ó de mujeres casadas, salvo con ciertas garantías y solemnidades, por más que tampoco esta comparacion fuera del todo concluyente, puesto que no es lo mismo exigir condiciones para la celebracion de un contrato, que prohibirlo absoluta y perpétuamente.

Ni era más suficiente otro argumento, ya muy controvertido desde el siglo xvi y reproducido por Campomanes, fundado en que así como el propietario podia enajenar sus bienes con la condicion de que no recayeran en manos muertas, ó vincularlos para mantener el lustre de su familia, así podia el legislador imponer la misma condicion á sus súbditos, vinculando en el estado seglar todo el patrimonio de su pertenencia. Decian los antiguos juriconsultos que primero alegaron este argumento: lo que se puede poner por condicion de acto ó trato, respecto de bienes, se puede ordenar por ley: á lo que contestaban los defensores de la inmunidad: sí, pero es sólo cuando el que hace la ley es á la vez dueño de los bienes, porque sin este requisito, serian arbitrarias y tiránicas muchas condiciones, que no lo son

cuando el libre consentimiento las autoriza, Campomanes replicaba que el legislador inhabilita á la mujer casada y al menor para disponer de sus bienes, sin atribuir al Estado el dominio de ellos, y sólo en virtud de su facultad para prescribir condiciones á los contratos. Pero bien analizadas estas inhabilitaciones, se vé que no restringen sustancialmente las facultades esenciales del dominio. Prohibese al menor y al pródigo disponer libremente de su hacienda, porque no pueden administrarla; mas esto no quiere decir que ella sea inalienable, sino que por incapacidad moral ó material no son aquellos los que pueden enajenarla. Las propiedades eclesiásticas y las municipales no podian enajenarse sin licencia del superior, porque los eclesiásticos ó las corporaciones que las administraban no eran sus verdaderos dueños, sino la Iglesia ó el comun, y porque no ejerciendo este dominio el propietario, como sucede en las propiedades individuales, ha tenido la ley que suplir su falta para prevenir la incuria ó los abusos de malos administradores. Pero de que el legislador restrinja los derechos ordinarios del dominio á quien notoriamente carece de idoneidad para ejercerlo, no se sigue que pueda hacer lo mismo con quien tenga la capacidad necesaria. Podrá alguna vez verificarlo, mas no por estas razones, sino por motivos notorios de utilidad pública, semejantes á los que autorizan la expropiacion forzosa.

De las razones en apoyo de la potestad del soberano para dictar la ley de amortizacion, pasa Campomanes á los ejemplos y expone el origen y la historia de esta ley en muchos Estados de Europa, citando varios autores regnicolas y extranjeros que la han defendido. En esta parte de su obra muestra la vasta erudicion de un sábio y la habilidad de un abogado eminente, mas no la imparcialidad de un tratadista, ni el elevado espíritu de un filósofo. Dominado por las ideas de su siglo y por el deseo de inspirar sus propias convicciones, consulta la historia, ménos con el fin de averiguar y exponer todo lo que ella enseña acerca de las leyes de amortizacion, que con el de buscar argumentos en pró de su texto. Por eso no hizo mencion sino de lo que convenia á su propósito, y calló ó indicó de un modo vago todo aquello que podia contrariarlo. Así, por ejemplo, para probar que el derecho de conquista no era el fundamento de la regalía de amortizacion, alega la ley de Partida que determinaba el modo de repartir el botin de guerra, y calla que este código se hizo sólo para los reinos de Leon y Castilla, que aún en ellos, no fué supletorio hasta un siglo despues, y que precisamente fuera de aquellos reinos, es donde las leyes de amortizacion aparecen más enlazadas con la conquista. Tambien citó con esmerada pro-

lijidad multitud de acuerdos y peticiones de Córtes favorables á su objeto, callando otras en que tanto los procuradores como los reyes reconocieron la necesidad ó la conveniencia de no legislar sobre esta materia, sino de acuerdo con el romano Pontífice.

Tampoco distinguió Campomanes los diversos fines, que segun los tiempos y los países, tuvieron las leyes de amortizacion, y ni siquiera hizo notar sus intimas relaciones con la constitucion feudal de la propiedad. A sus ojos las leyes promulgadas sobre este asunto, en el siglo xiii, probaban lo mismo que las dictadas en el siglo xviii, y hasta llegó á afirmar que «no tanto se habian establecido para preservar los tributos, como para «evitar el empobrecimiento de los vasallos seculares» (1). Investigando el uso de esta regalia en la mayor parte de los Estados católicos, donde quiera que hallaba una restriccion de la facultad de adquirir de la Iglesia la adaptaba á su asunto, sin distinguir las que aludian á bienes puramente feudales, de las que comprendian tambien los alodiales, y por consiguiente, sin discernir entre las prohibiciones dictadas en uso del señorío feudal, y las emanadas de la potestad legislativa del soberano. Solo una gran preocupacion de ánimo pudo hacerle desconocer que el único objeto de las leyes de amortizacion, en los primeros tiempos, fué mantener el patrimonio feudal de los señores: que despues se extendió á preservar los tributos y la jurisdiccion del rey; y que hasta el siglo xvii, no se pensó en remediar tambien con ellas el empobrecimiento de los seglares.

Para demostrar los daños que del exceso de adquisiciones por manos muertas, se seguían á la riqueza pública, al clero y al Fisco, que era su segunda tésis, partía Campomanes de estos tres supuestos: 1.º que los aumentos de poblacion lo son á la vez de riqueza: 2.º que el acumular cuantiosos bienes, fuera del diezmo, no era conforme con la verdadera disciplina de la Iglesia; y 3.º que el concordato de 1737 no bastaba para remediar el daño de la amortizacion excesiva. La poblacion era en su concepto más numerosa y permanente allí donde los bienes raíces circulaban con mayor facilidad entre los seglares, sin salir de ellos, porque las familias se multiplican cuando se acrecienta su patrimonio. Así en España, añadía, por lo mucho que adquieren las manos muertas, los antiguos propietarios ó sus herederos abandonan empobrecidos sus pueblos ó se reducen á la condicion de jornaleros de las mismas corporaciones adquirentes, con lo cual se empobrecen más los otros vecinos, por cuanto resultan más gravados

(1) Cap. 2, n. 3.

de tributos. También contribuía, según el autor, al mismo resultado, el poseer las manos muertas sus propiedades con condiciones más ventajosas que los seglares las suyas, porque así podían pagar mejor precio por las tierras que salían á la venta, impidiendo que los particulares las comprasen ó que por pagarlas demasiado, no obtuviesen de ellas utilidad proporcionada.

Como el principal objeto del libro á que aludo, fué defender la regalía, la cuestión económica de la amortización se halla en él muy someramente tratada; pero Campomanes la dilucidó detenidamente en otros escritos y sobre todo en su alegación fiscal contra el obispo de Cuenca, en el expediente de su nombre, que corre impreso. Partiendo del principio de los fisiócratas que hacía consistir en la agricultura la riqueza, el bienestar y la fuerza del Estado, sostenía que ella no prosperaba cuando caían las tierras en manos muertas, porque éstas en su opulencia, solo conservaban en cultivo las mejores, destinando á dehesas todas las otras. También había menudado, según Campomanes, la producción agrícola, porque con la amortización, se extraía del reino mucho numerario, ya para ponerlo á la disposición de superiores extranjeros, ya para traer en cambio objetos de lujo, ó ya para invertirlo en gastos de capítulos ó en la curia romana. El autor vacilaba, pues, en economía política, entre la escuela mercantil y la fisiocrática, pero hacía uso de las doctrinas de una ú otra, según convenia á su objeto.

Perjudicaban también, en su concepto, á la Iglesia sus muchas adquisiciones, porque corrompían al clero, distrayéndole con ocupaciones ajenas á su ministerio, fomentaban su lujo y su codicia y le impedían observar las máximas evangélicas, que tanto recomiendan la pobreza. Lo que más esencialmente constituye al patrimonio de la Iglesia son los diezmos, y estos, añadía, también se disminuyen con pasar tantas propiedades que los devengan en manos de legos, á monasterios exentos de pagarlos.

Sufría también, según Campomanes, grave perjuicio el erario, porque si bien el Concordato de 1757 había sujetado los inmuebles que adquiriese el clero á los mismos impuestos que pagaran los de los legos, esto no se refería sino á los tributos reales, que eran los más cortos, conservándose la inmunidad en cuanto á los personales y mixtos y quedando en todo caso exentos, así el inmenso caudal ya adquirido, como el que se destinara á primeras fundaciones, que eran muy cuantiosas, por comprenderse en ellas las capellanías instituidas por última voluntad. A estos quebrantos del Tesoro se agregaban los que producían los fraudes, que el Concordato no

evitaba, de hacer pasar por fundaciones nuevas, muchos aumentos de las antiguas, y por subrogacion de bienes antiguos, no pocas adquisiciones nuevas, ó de eximirse del pago de los derechos reales de Millones, de alcabala y otros, los procuradores y grangeros de las comunidades, á título de *consumo propio* de ellas, siendo en todo caso, muy difícil su exaccion al clero, por la necesidad que tenian las justicias de acudir á los ordinarios eclesiásticos en demanda de los apremios. Tampoco había remediado el Concordato otros perjuicios de la amortizacion, tales como la pérdida de alcabalas, por salir del comercio los bienes amortizados: la baja de la contribucion de *utensilios*, que como personal en su origen (pues reemplazó á la *fonsadera* y la *castilleria*), no la pagaban los clérigos: la disminucion de las *tercias reales* y del *excusado* correspondientes á los diezmos, que dejaban de pagar las heredades que pasaban á comunidades exentas de este tributo; y la minoracion de los ejércitos, que era el resultado de disminuirse con la escasez, la poblacion que habia de formarlos. A todos estos daños se agregaban, segun el autor, el que sufrían los pueblos, con el acrecentamiento de las cuotas vecinales en las derramas concejiles, para gastos á que no estuviese exento de contribuir el clero: la propension de las manos muertas á emplear el sobrante de sus rentas en la adquisicion de más haciendas; y el menoscabo de la real jurisdiccion, en cuanto pasaban á ser de la competencia de los jueces eclesiásticos, las cuestiones relativas á los bienes amortizados.

Con los escritos de Campomanes quedaron ámpliamente discutidas y ventiladas la cuestion política ó de regalia, la cuestion canónica y la fiscal, á que daban origen las leyes de amortizacion: la cuestion económica es la que segun he dicho, quedó sin desenvolver y profundizar. Aquel juriconsulto eminente indicó que las adquisiciones de las manos muertas dañaban á la agricultura, mas no acertó á determinar la manera cómo producian este efecto, encerrándose en el vago concepto de que hacian menguar la poblacion. Jovellanos, en su inmortal *Informe sobre la ley agraria*, fué el que llenó este vacio, analizando con su talento elevado y perspicaz y con el auxilio de los conocimientos económicos de su tiempo, que él poseia en toda su extension, los efectos de las leyes de amortizacion sobre la agricultura.

Partiendo Jovellanos del supuesto de ser un mal político inevitable la acumulacion irregular de riquezas y la desigualdad de fortunas, y que el único correctivo que podia oponérsele, era la posibilidad y la esperanza de todos, de pertenecer al número de los pocos, que mayor parte tuvieran en

la distribucion de la riqueza, afirmaba que esto no se conseguia sin la fácil y rápida circulacion de la propiedad, sin que ésta fuese igualmente para todos, premio de su industria, y sin que su falta fuese del mismo modo, castigo de la pereza. Deducia de estas consideraciones aquel eminente político, que el estancamiento en manos muertas de una parte considerable de la riqueza pública, con la facultad de aumentarla indefinidamente, quebrantaba aquella ley natural de compensacion de la desigualdad de fortunas.

Tambien atribuyó Jovellanos á la amortizacion la carestía de las tierras, fundándose en la ley económica que hace depender el precio de las cosas de su escasez ó abundancia. Del alto precio de las tierras dependia á la vez, en su concepto, la acumulacion de la propiedad en pocas manos, su escasa circulacion y el atraso de la agricultura. Esta acumulacion era causa tambien de que anduviese separado de la propiedad el cultivo, por haber de hacerse en grandes proporciones, á que ordinariamente no solia alcanzar el capital del propietario; de todo lo cual resultaban disminuidos los productos agrícolas y el estímulo á continuar una industria, cuyas utilidades parecian condenadas á menguar constantemente. Asi se hallaban tantas heredades abiertas sin poblacion, sin árboles, sin riegos y sin mejoras: asi se veia abandonada la agricultura á pobres é ignorantes colonos: asi el dinero, huyendo de los campos, venia á refugiarse al poblado y buscaba alli su empleo en otras profesiones y grangerias. Jovellanos fué el primero que en España elevó la cuestion de que se trata á la altura de una gran cuestion científica.

Los promovedores de la desamortizacion exageraban no poco la verdad y participaban más ó ménos de los errores políticos y económicos de su siglo, pero los defensores de la amortizacion no acertaban á justificarla, ni aún en la parte que era justa y necesaria, y hasta carecian de los conocimientos indispensables para presentar sus errores con apariencias seductoras. A los argumentos económicos de la despoblacion de España, la miseria y la decadencia del estado seglar, respondian que todos estos males eran castigo del cielo, que databan precisamente desde el tiempo en que se habia empezado á reducir y quebrantar los privilegios de la Iglesia. El obispo B. Juan Palafox decia en su memorial por la inmunidad eclesiástica, dirigido á Felipe IV, que desde 1591, en que comenzaron los tributos del clero, contaba la monarquía más desdichas que victorias, habian crecido sus necesidades y se habian minorado sus reinos y provincias; «porque el impuesto sobre la Iglesia y el culto divino es peste del real patrimonio, que cuando parece que lo aumenta, lo deshace y consume.»

Más ingenioso, aunque no más lógico, se mostró el obispo de Cuenca, D. Isidro Carbajal, cuando con motivo de explicar su carta al confesor de Carlos III, que dió lugar al expediente que lleva su nombre, tocó entre otras cuestiones, la de la regalia de amortizacion. Fundándose en que la facultad de adquirir inmuebles es de derecho natural y de gentes, así en los eclesiásticos como en los seglares, y no procedía de la ley civil, opinaba que el soberano no podía restringirla, á no ser que mediasen privilegios apostólicos, concordatos, costumbres legitimamente establecidas ó circunstancias críticas de extrema necesidad. De que Felipe V hubiese aceptado el Concordato de 1737, en que la Santa Sede autorizaba en ciertos casos, la exaccion de tributos de los bienes eclesiásticos, infería que aquel monarca se había reconocido sin autoridad para prohibir al clero la adquisicion de bienes ó gravar con impuestos, los que adquiriese. Afirmaba que no era necesaria la ley de amortizacion para preservar los derechos del Fisco, y que bastaba el indulto pontificio ya otorgado, para que los tributos fueran tolerables á los legos. Negaba que fuesen excesivos el clero regular y el secular, y que las iglesias tuvieran más de lo necesario para mantener con decencia el culto. Alegaba que las dotaciones piadosas redundaban en bien del Estado, puesto que sus rentas se invertían ordinariamente en hospitales, colegios, limosnas y otros objetos útiles, ó en misas, sufragios y oblações, que ayudaban á mantener el culto y sus ministros, firme sustentáculo de la república. La despoblacion y la decadencia del reino, no provenían, en su concepto, de que los naturales diesen su hacienda al clero, pues siendo gratas á Dios estas obras, no debía creer ningún católico que disminuyeran las conveniencias y justos intereses de quien las practicaba: aquellos males provenían del ocio, de la falta de industria y comercio, del lujo, de los vicios que empobrecían é inutilizaban para el matrimonio, de la ausencia de los ricos de los pueblos donde tenían su hacienda y de la introduccion de manufacturas extranjeras, cuando España producía todo lo necesario para la vida.

Después de encomiar el obispo la administracion de los eclesiásticos, como más favorable á la riqueza pública, que la de los legos, concluía rechazando los ejemplos que se alegaban en apoyo de la ley de amortizacion, porque unos no probaban lo que se suponía, otros eran estatutos olvidados ó impuestos como condicion en los repartimientos de conquista, otros se referían únicamente á lo realengo y público, de que el rey podía disponer, como de cosa propia, y otros eran el resultado de concordias ó privilegios apostólicos. Estos razonamientos fueron empeña-

damente combatidos por los fiscales Moñino y Campomanes en dos extensas alegaciones, y la carta que los contenia, asi como la anterior que con ella se trataba de explicar, fueron recogidas y archivadas, y el obispo, su autor, comparecido y reprendido ante el Consejo.

Con tales argumentos, no es extraño que la causa de la inmunidad quedase tan mal parada. Mas cualquiera que hubiese sido la habilidad de sus defensores, lo que de aquella apasionada discusion se desprende, es que las adquisiciones de las manos muertas habian traspasado en efecto, el limite de lo conveniente: que sin ser ellas la causa principal de la despoblacion, ni del atraso de la agricultura, ni de la pobreza del país, contribuian no poco á la disminucion de la riqueza; y que por lo tanto era llegado el caso, como decia Campomanes, de dictar la ley de amortizacion, pero de modo que sin derogar el derecho de la Iglesia á adquirir propiedades, limitara considerablemente su uso.

CAPÍTULO VIII.

Expropiacion de la Iglesia de España á fines del siglo XVIII y en los primeros años del XIX.

Los principios de la escuela reformista acerca de la propiedad eclesiástica contribuyeron más aún que á extender y vigorizar las leyes de amortizacion, á promover las expropiaciones de la Iglesia. Considerábase ya tan excesiva la propiedad amortizada, que no se creía remedio suficiente la prohibicion de nuevas adquisiciones: era menester, segun los estadistas más ilustrados del tiempo, que el clero dejase de poseer una parte de su patrimonio territorial, ó que la cambiase al ménos, por otro género de riqueza, que no tuviese en sus manos los mismos inconvenientes. El regalismo que tanta participacion daba á la corona en el gobierno de Iglesia, abria caminos fáciles á esta reforma: las penurias de la Hacienda pública eran para ella estímulo poderoso. Asi lo que Carlos III no había osado hacer con los bienes de las cofradías y hermandades, lo realizó después Carlos IV, no solamente con ellos, sino con todos los de beneficencia y obras pias. Predominando en el gobierno las doctrinas regalistas, menguando más cada día la riqueza pública, con el exceso de la amortizacion, y abrumado el Tesoro con el peso de una inmensa deuda, se decidió al fin áquel monarca

á aumentar los ingresos del Erario con algun recurso extraordinario. A este fin mandó en 1798, enajenar todos los bienes raices pertenecientes á casas de beneficencia, hermandades, obras pias y patronatos de legos, é imponer su precio en la caja de amortizacion, al interés del 3 por 100, ó lo que es lo mismo, permutó dichos bienes por una renta perpétua igual al 3 por 100 de su valor en venta. Exceptuáronse tan sólo de la enajenacion, los bienes de establecimientos benéficos ú obras pias de patronato familiar, pero quedando autorizados sus administradores para enajenarlos tambien, sin informacion prévia de utilidad y necesidad, siempre que, con iguales condiciones, impusieran su producto en la caja de amortizacion. No se creyó autorizado el rey para enajenar del mismo modo los bienes de las capellanias colativas y otras fundaciones eclesiásticas, por considerarlos espiritualizados, pero rogó á los obispos y prelados que lo hiciesen é invirtieran tambien su precio en rentas del Estado (1).

Cárlos IV adoptó esta gráve providencia en uso de su soberanía y sin contar con la Santa Sede, á pesar de que los bienes que fueron objeto de ella, ó estaban espiritualizados, ó se hallaban bajo la tutela de la Iglesia, pero no sin pedir luego su aprobacion, que al fin obtuvo de Pio VI. Las ventas empezaron á ejecutarse por la potestad temporal; mas como le negase esta competencia la eclesiástica, respecto á las propiedades espiritualizadas comprendidas en la enajenacion, resolvió el monarca que se hiciera por los obispos, la de bienes pertenecientes á obras pias fundadas con caudal de las iglesias, ó cuya espiritualizacion constase por cláusula expresa de las fundaciones (2). Al mismo tiempo mandó el gobierno incorporar á la real Hacienda y vender, como los bienes de obras pias, los que quedaban sin aplicacion de la extinguida compañía de Jesús, pero destinando sus productos á la extincion de la deuda pública y no á los objetos piadosos, á que Cárlos III se creyó en el deber de aplicarlos (3).

El ruego del monarca á obispos y prelados, para que promovieran la enajenacion de otros bienes eclesiásticos, no hubo de producir resultado, y creyendo el gobierno que tampoco alcanzaria cumplido remedio á sus necesidades con el producto de los bienes de obras pias, acudió á la Santa Sede, en demanda de indulto para utilizar una parte de los bienes de la Iglesia, con la condicion de indemnizarla, reconociéndola una renta sobre

(1) L. 22, tit. 5, lib. 1, Nov. Rec.

(2) L. 23, t. 5, lib., *ibid.*

(3) L. 24, *ibid.*

el Estado, igual á los rendimientos de los mismos bienes de que fuese privada. El bondadoso Pío VII otorgó tambien esta gracia á Carlos IV, como Pío VI habia concedido á Carlos III la de una parte proporcional de los beneficios eclesiásticos, y en su consecuencia expidió un Breve en 14 de Junio de 1805, facultando al rey católico para enajenar propiedades de la Iglesia, cuyo valor no excediera de 6.400.000 reales de renta, luego que hubiera constituido otra igual á favor de sus poseedores, sobre la Caja de vales reales. Usando pues el rey de esta facultad, mandó que una comision compuesta de legos y eclesiásticos, designara los bienes que habian de desmembrarse del patrimonio de la Iglesia, hasta cubrir la suma ántes indicada, y ordenó su venta en pública subasta, con pago del precio al contado y en metálico (1).

Los promovedores y defensores de estas expropiaciones, juzgando que la conveniencia no era título suficiente para justificarlas, les buscaron otro en cierto dominio eminente, que algunos jurisconsultos del bajo imperio y de la monarquía francesa en el siglo xvii, atribuian al soberano. El canciller de Francia Duprat exhumó esta doctrina en el siglo xvi, aplicándola primero á los bienes de la Iglesia y despues á todas las propiedades; mas fué recibida con universal reprobacion. El marqués de Paulmy la reprodujo en el siglo xviii, y el mismo Luis XV, á quien pretendia lisonjear, la calificó de maquiavélica (2). Nuestros regalistas del mismo siglo, que habian adoptado muchas opiniones de la escuela galicana, hubieron de tomar de ella aquella doctrina y proclamaron como regla de derecho público, la del alto imperio y dominio eminente del soberano en todas las propiedades de su territorio, así las laicales como las eclesiásticas. Campomanes y Moñino invocaron esta regalia, cuando propusieron al Consejo que se declarase haber quedado á la disposicion de la Corona las temporalidades de la compañía de Jesús. En la misma doctrina se han apoyado despues los que con la libertad y los derechos individuales, han pedido ó decretado las expropiaciones de la Iglesia. Alto imperio y dominio eminente eran, segun nuestros regalistas, el título en cuya virtud podia el soberano limitar los derechos de la propiedad privada, gravándola con tributos, confiscándola ó restringiendo la facultad de adquirirla ó de transmitirla, por causa de muerte ó por contrato entre vivos.

Esta doctrina tiene, como se ve, estrecho parentesco con la que atribuye

(1) Suplemento de la Nov. Rec., l. 1, tit. 5, lib. I.

(2) Affre, *Traité de la propriété des biens eclesiastiques*, c. I, pár. 2.

la creacion de la sociedad y las restricciones de la libertad individual que ella exige, á un contrato primitivo, utópico y absurdo. Él solo podría explicar, en efecto, cómo en el origen de las sociedades se habia reservado al soberano una cierta coparticipacion en el dominio de la tierra, para cuando necesitara utilizarla en provecho comun. Pero la sociedad no es obra de la voluntad humana, y así la necesidad de su existencia es lo que justifica en algunos casos, la limitacion de los derechos del propietario y de todos los demás derechos individuales. Ella para su seguridad y defensa, necesita brazos y ha exigido el servicio militar; para cubrir sus necesidades, há menester recursos y ha establecido los impuestos; para mantener el orden y el imperio de la justicia, necesita penas, y ha fulminado entre otras, ja confiscacion y la multa; para establecer ó conservar cierta organizacion politica, necesita mantener la unidad de las familias ó dividir las, limitando con tal objeto, en uno ó en otro sentido, la facultad de testar; y así para satisfacer otras necesidades comunes, ha impuesto sacrificios que recaen sobre el propietario, el industrial, el bracero, el padre de familias ó las corporaciones. Si para justificar los exigidos al propietario fuera menester atribuir al soberano un dominio eminente sobre todas las propiedades, los demás sacrificios no tendrian justificacion, sin ampliar este dominio á la industria, á las personas, á las familias y á todas las facultades individuales que puedan y deban ser limitadas por la ley.

En cumplimiento de aquellas disposiciones se puso en venta á la vez una masa inmensa de bienes, cuyo valor hubo de calcularse entonces en doscientos millones de duros. La mayor parte de los que llegaron á enajenarse, no alcanzó en las subastas, muy alto precio. Las comisiones encargadas de la enajenacion fueron acusadas de negligencia ó fraude en el manejo de aquellos cuantiosos intereses. Los establecimientos piadosos recibieron en cambio de sus bienes, títulos de la Deuda pública, mas no recuperaron sus perdidas rentas. El Estado recibió el precio de estos bienes, mas lo invirtió en atenciones perentorias, y al fin no se disminuyó la Deuda pública ó más bien hubo de aumentarse, la hacienda de los pobres quedó medio arruinada y el patrimonio de la Iglesia disminuido en una sétima parte.

Así aquella medida y los fraudes y las dilapidaciones que en su ejecucion se cometieron, lastimaron de tal modo el sentimiento público, que la Junta central adoptando en su concepto, una resolucion popular y patriótica, mandó suspender en 1808 la enajenacion referida. Habíanse ya vendido en aquella fecha por valor de 1.600 millones.

La tregua ordenada por la Junta central duró, sin embargo, poco tiempo, pues siendo con la guerra cada día más apremiantes las necesidades del Erario, y más enérgico y exigente el espíritu de reforma en los partidos políticos, fué menester volver otra vez los ojos á los bienes eclesiásticos, y pusieron la mano en ellos tanto el gobierno legítimo, como el rey intruso. La Junta central, en 6 de Diciembre de 1809, mandó aplicar á las urgencias del Estado los productos de las Obras pías no destinadas á beneficencia, instruccion ni otro objeto de utilidad pública. Luego las Cortes, en 1.º de Diciembre de 1810, destinaron al mismo objeto, las rentas de los beneficios eclesiásticos vacantes, excepto los que tuvieran cura de almas y las prebendas de oficio, mandando á la vez no proveer los que vacasen. Napoleon, hallándose en su cuartel general de Chamartin en 1808, mandó reducir á una tercera parte de los existentes, el número de conventos. Su hermano el rey José, en el año siguiente, suprimió todas las órdenes religiosas, ocupó sus bienes en todo el territorio á que alcanzaba su autoridad y se apoderó de las alhajas de muchas iglesias. Al mismo tiempo mandó aplicar todos estos bienes á la extincion de la Deuda pública, para lo cual se crearon ciertas cédulas, llamadas unas *hipotecarias* y otras *de indemnizacion y recompensa*, á fin de pagar con ellas los créditos contra el Estado á voluntad de los acreedores, y recibirlas éste á su vez, en pago de aquellos bienes. Algunos especuladores y cortesanos de José compraron al principio estas cédulas y adquirieron con ellas fincas de la Iglesia, mas como éstas tuviesen muy escaso valor en el mercado, por la desconfianza del público en la validez de su adquisicion, fué muy corto tambien el número de las que llegaron á enajenarse.

Estas medidas fueron, sin embargo, de las que más hondamente lastimaron los sentimientos del pueblo y concitaron más los ánimos contra el gobierno intruso. Al ver los españoles profanados y saqueados sus templos, destruidos ó convertidos en cuarteles sus conventos, y perseguidos ó fugitivos los ministros del culto, creyeron en peligro, no sólo la patria, sino la fé católica y acudieron á defenderla con el entusiasmo y el heroismo de los mártires. A sus ojos, la causa del clero perseguido era la de la religion y la de la patria, y así á medida que el enemigo era arrojado de las poblaciones que ocupaba, se restablecian en ellas los conventos y los templos suprimidos, como consecuencia necesaria de la victoria y aún sin esperar las órdenes del gobierno.

Mas como el pensamiento de la reforma eclesiástica bullia en la cabeza de los legisladores de Cádiz, la Regencia no decretó el restablecimiento de

todos los conventos suprimidos y mandó reunir á otras, algunas comunidades. Las Córtes no juzgaron suficiente esta providencia, y deseando aprovechar la ocasion que le ofrecian las circunstancias, para ejecutar la reforma, acordaron un decreto en 18 de Marzo de 1813, reservándose la facultad de resolver sobre esta materia y previniendo á la Regencia que se abstuviese de entender en ella. Al mismo tiempo confirmaron las reuniones de comunidades anteriormente decretadas, siempre que los conventos subsistieran, prohibiendo reedificar los arruinados; suprimieron los que no tuvieran doce religiosos profesos, á ménos que no hubiera otro en los pueblos respectivos; mandaron que formaran una sola comunidad los religiosos del mismo instituto que hubiese en cada poblacion, y que los de conventos suprimidos ingresaran en otros de la misma órden; y prohibieron la admision de novicios, hasta que se verificara la reforma proyectada del clero regular. El Estado entre tanto, conservó en su poder los bienes ocupados á las comunidades por el gobierno intruso, si bien prometiendo devolver los que fueran necesarios, cuando aquella reforma se llevara á efecto.

Lo que pensaban las Córtes acerca del destino futuro de estos bienes, se descubrió poco despues en el decreto de 15 de Setiembre de 1813 sobre clasificacion y pago de la Deuda pública. Por él se destinaron á satisfacer los réditos de la misma, durante la guerra, entre otros arbitrios, las rentas de los maestrazgos y encomiendas vacantes de las Ordenes militares, los bienes de la Inquisicion, incorporados ya al Estado por supresion del tribunal, y el sobrante de las rentas de los conventos, despues de cubiertos los gastos del culto y la cógrua sustentacion de los regulares. Para llevar á efecto la ley en este ultimo punto, se habian de entregar todos los dichos bienes á la Junta nacional de crédito público, «sin perjuicio de que si esta lo estimaba oportuno, encargase alguna parte de su administracion á los mismos regulares, y sin perjuicio tambien de que verificada la reforma, se les dieran con arreglo á ella, en plena propiedad, las fincas que se creyese justo y conveniente dejarles en este concepto.» En el mismo decreto declararon las Córtes hipoteca de la Deuda nacional las temporalidades de los jesuitas, las de la órden militar de San Juan, las fincas de los maestrazgos vacantes de las otras cuatro Ordenes militares y las de los conventos arruinados ó que quedaran suprimidos, pero entendiéndose que habian de seguirse cumpliendo las cargas que sobre si tuvieran tales bienes. Ordenóse, por último, en el mismo decreto, la enajenacion en pública subasta de todas las propiedades, que por efecto de estas reformas, pasaran á poder del Es-

tado, pero no á la vez, sino una parte cada año y pagando los compradores las dos terceras partes del precio en deuda sin interés, y el resto mediante el reconocimiento de un censo, por cantidad igual á 3 por 100 de rédito, el cual podría ser redimido á metálico, destinándose el producto de la redencion al pago y amortizacion de la Deuda pública.

Pero ántes de decretarse la reforma de los regulares, y apenas comenzada la enajenacion de sus bienes, acaeció la restauracion de las antiguas instituciones y con ella la derogacion de casi todas las leyes de las Córtes de Cádiz. Fernando VII, en 21 de Mayo de 1814, mandó devolver á las comunidades sus conventos y bienes, verificándose desde luego la restitution de los que se hallaban en poder del gobierno. Otro real decreto de 31 de Agosto del mismo año, fundándose en que la Regencia habia declarado oportunamente nulas las ventas que por orden del rey José, se hicieran de bienes confiscados á corporaciones eclesiásticas ó particulares, por su adhesion á la causa nacional, creó en cada capital de Audiencia, una junta de ministros que gubernativamente acordara la restitution de estos bienes á sus antiguos poseedores. No bastante satisfecho el rey Fernando con esta devolucion, ordenó tambien que los detentadores fueran condenados, en la misma forma gubernativa, á abonar los frutos que las fincas devueltas hubieran debido producir en su poder, con los deterioros y menoscabos que hubiesen sufrido, á perder todas las impensas y mejoras útiles ó de ornato que hubieran hecho en ellas, y á las penas de multa é inhabilitacion temporal para obtener cargos públicos.

Así volvieron á los conventos y corporaciones eclesiásticas casi todos los bienes de que habian sido despojados por el gobierno de José Bonaparte. Pero restablecido el gobierno constitucional en 1820, fué uno de sus primeros actos, preparar la reforma eclesiástica iniciada anteriormente. En 9 de Agosto de aquel año dictaron las nuevas Córtes una ley, mandando enajenar, en subasta pública los bienes designados en el decreto ántes referido de 13 de Setiembre de 1813, los cuales habian de pagarse integramente con créditos de todas clases contra el Estado. En 17 del mismo mes, restablecieron la pragmática de Carlos III suprimiendo la Compañía de Jesus y aplicaron sus bienes al crédito público. Pero despues, en 1.º de Octubre del mismo año, un nuevo decreto legislativo suprimió los monasterios de órdenes monacales, los cañónigos regulares, los conventos de las órdenes militares, los de San Juan de Dios y de Betlemitas y todos los hospitalarios: mandó reducir el número de Ordenes no suprimidas; prohibió fundar otras nuevas, así de hombres como de mujeres, la admision de

nuevos novicios y la profesion de los existentes: aplicó al crédito público las rentas sobrantes de los conventos subsistentes y todos los bienes de los suprimidos, y autorizó á los ordinarios para dar los vasos sagrados, alhajas y objetos del culto á las parroquias pobres y á habilitar para la cura de almas, las iglesias que resultaran vacantes. Luego, por otro decreto de 9 de Noviembre del mismo año, se extendió la expropiacion á otros bienes eclesiásticos, destinándose á la amortizacion de la Deuda pública los de las capellanías no familiares, vacantes y que vacaran en lo sucesivo, los de ermitas, cofradías, memorias ó fundaciones que no estuvieren espiritualizadas, ni formasen parte de la cóngrua de algun eclesiástico, y los de establecimientos piadosos, con exclusion de los hospitales en ejercicio, hospicios, casas de educacion y otros. Entonces se mandaron poner en venta todos los bienes expropiados; y para que el efecto de estas medidas fuera más inmediato, en 7 de Abril de 1821, se suspendió, hasta que se verificase el anunciado arreglo del clero, la provision de todos los beneficios y capellanías que no llevaran aneja la cura de almas, aunque fueran familiares, y la creacion de patrimonios para títulos de ordenacion.

Pero cuantas más concesiones se hacian en esta materia á los partidos reformistas, tanto mayores eran sus exigencias. La supresion de algunas órdenes monásticas y de muchos conventos y las expropiaciones decretadas en 1820, no les satisfacian ya en el año siguiente. Aún subsistia el diezmo, tan condenado por los economistas como impuesto y tan disputado á la Iglesia por los nuevos políticos: aún conservaban sus bienes el clero secular y las parroquias, á disgusto de muchos, que se imaginaban no ser conforme al verdadero espíritu de la Iglesia, el derecho de adquirirlos y poseerlos. Cediendo, al fin, las córtes al influjo de estas doctrinas, decretaron en 21 de Junio de 1821, la reduccion de la mitad de los diezmos y primicias, mandaron aplicar sus productos exclusivamente á la dotacion del culto y del clero, cesando la participacion que tenian en ellos, el Estado y los particulares legos, y dispusieron que estos fueran indemnizados con los bienes raices del clero y de las fábricas de las iglesias, menos los prediales, casas rectorales, palacios y jardines de los obispos y las propiedades que en algunas diócesis, creyese conveniente el gobierno conservar á determinados beneficios. Además se impuso al clero una contribucion de 120 millones de reales sobre el producto del medio diezmo que se le reservaba. Dictaron tambien las Córtes otros decretos, ya para suspender el pago de las cargas piadosas y facilitar la enajenacion de los bienes eclesiásticos,

poniéndolos al alcance de las más modestas fortunas (1); ya para ampliar la supresion á los conventos, que en lo sucesivo llegasen á carecer del número de religiosos necesario (2); ya para amortizar todas las memorias de misas que no formasen parte de la cóngrua dotacion de algun establecimiento eclesiástico ó piadoso (3). Para disminuir el número de clérigos, se prohibió á los obispos conferir órdenes mayores, se redujo el número de párrocos y se fijó el de las parroquias en las capitales, mediante una nueva division eclesiástica (4).

Con estas reformas quedaron privadas de sus bienes raíces las más de las comunidades religiosas, salió al mercado una masa tan grande de ellos, que no pudieron venderse sino á vil precio, con menoscabo de la propiedad particular: la administracion y la adquisicion de tales bienes fueron objeto de ágios y abusos escandalosos: quedaron en la indigencia millares de religiosos, á quienes no se pagaron tampoco puntualmente sus módicas pensiones; muchos de ellos, que no mostraron bastante resignacion evangélica, fueron injuriados por desafectos; algunos de costumbres corrompidas, que aprovecharon la ocasion para abandonar la vida monástica, fueron ensalzados y favorecidos por la parcialidad dominante; el Papa cortó sus relaciones con el gobierno, que tan mal trataba á los ministros del culto, y así se llegó á generalizar la creencia de que el sistema constitucional era necesariamente hostil á la Iglesia católica. Estas reformas eclesiásticas, inspiradas más bien por la pasion de partido que por la razon de Estado; estas expropiaciones del clero católico tan torpemente ejecutadas, fueron causas de las que más contribuyeron entonces, al descrédito de aquel sistema político. En un pueblo amante de su fé y de su culto, acostumbrado á vivir largos siglos bajo la influencia moral del clero, era imposible que se asegurara un régimen de gobierno bajo el cual estaban desdeñado el culto, perseguidos sus ministros, despojada de sus bienes la Iglesia é incomunicados los fieles con el Sumo Pontífice.

Así sucedió que los excesos revolucionarios y las reformas heterodoxas del gobierno constitucional provocaron una reaccion á la vez religiosa y política, que condujo á otros excesos no ménos deplorables. La presencia de un ejército extranjero bastó para destruir en un dia el edificio levanta-

(1) Decreto de las Córtes de 29 de Junio de 1821.

(2) Decr. de 2 de Abril de 1822.

(3) Decr. de 9 de Junio de 1822.

(4) Decr. de 26 de Abril de 1821.

do á tanta costa, por los innovadores: á su vista desaparecieron las instituciones constitucionales y recobró el monarca la plenitud de sus derechos absolutos. Uno de los primeros actos de la Regencia establecida en Madrid, durante la cautividad del rey, fué el decreto de 6 de Junio de 1823, restableciendo el medio diezmo suprimido por las Córtes. Siguió á éste el decreto del 11 del mismo mes, reponiendo los institutos religiosos al ser y estado que tenían en 1820, y declarando nulos todos los actos del gobierno constitucional concernientes á los regulares. En su virtud tuvieron que restituir á los monasterios, sus bienes, los que los habían comprado al Estado, y como muchos de estos compradores pidieran que se les amparase en su posesion ó se les indemnizara, la misma Regencia declaró en 12 de Agosto siguiente, que los bienes nacionales vendidos debían restituirse como usurpados á las comunidades, sin que sus poseedores ó arrendatarios tuviesen otro derecho que el de recoger los frutos pendientes, si pagaban á aquellas la renta del año corriente, segun el último contrato de arrendamiento, ó por tasacion de peritos. Otro decreto, tambien de la Regencia, expedido en 2 de Setiembre inmediato, derogó el que habia ordenado la aplicacion al crédito público, de los bienes de capellanias vacantes, santuarios, hermandades y demás establecimientos piadosos. Por último, el rey Fernando, apenas recobró su libertad, confirmó por su decreto de 1.º de Octubre todos los actos de la Regencia y dejó sin efecto los del gobierno constitucional.

Si grave fué la injusticia cometida por las Córtes, decretando, en la forma que lo hizo, la expropiacion de la Iglesia, no fué menor la del nuevo gobierno ordenando la restitution de los bienes vendidos por el Estado, sin indemnizar á la vez á los compradores. Esto no era justificable, ni aún admitida la nulidad de aquellas adquisiciones. Si las comunidades tenían derecho á la restitution de sus propiedades y al resarcimiento de los perjuicios que arbitrariamente les habia irrogado un gobierno de hecho, no era justo que esta indemnizacion se verificase únicamente á costa de los pocos individuos que habían comprado los bienes, sino á cargo de la nacion que habia aceptado, ó por lo ménos, tolerado aquel gobierno. Si el régimen constitucional y las expropiaciones de la Iglesia duraron tres años, no fué por culpa sólo de los compradores de bienes nacionales, sino de la nacion toda, que lo consintió y autorizó con su aquiescencia. Allí donde la opinion pública es vigorosa, el espíritu nacional bastante poderoso para reprimir las voluntades aviesas y la organizacion política fuerte y respetada, no se pueden improvisar gobiernos facciosos, y si alguno se improvisa, no

dura siquiera el tiempo necesario para constituirse. Cuando tales gobiernos son posibles, es porque existe en la sociedad algun vicio grave que altera la regularidad de sus funciones y debilita sus fuerzas. Si la nacion española hubiese estado bien constituida, nadie se habria atrevido seguramente á violentar al rey para que aceptase el régimen constitucional, ó los que tal cosa hubieran hecho, habrian sucumbido inmediatamente en la empresa de organizar un nuevo gobierno. Si el país hubiera tenido una opinion arraigada y concienzuda, contraria al nuevo régimen político, y los individuos todos el patriotismo y la abnegacion indispensables para hacerla valer, no habria sido necesario que un ejército extranjero viniese en su auxilio. ¿Y quién debe soportar las consecuencias de la falta de una opinion pública compacta é ilustrada sobre los negocios más importantes del Estado, ó de la falta de valor y energía para hacerla prevalecer? ¿La nacion, ó algunos de sus individuos? ¿Quién tuvo más culpa del despojo que entonces sufrió la Iglesia: los compradores de sus bienes, ó el país que sufrió al despojador y asistió impasible al reparto del botin? Y cuanto más se pondere la invalidez de aquel régimen político y la injusticia de sus actos, tanto mayor será la responsabilidad de la nacion que les prestó su tácito consentimiento.

No se diga que siendo los compradores los que más inmediatamente contribuyeron á que se consumara el despojo y los que de él reportaron mayor provecho, debieron ser también los que repararan el daño. El despojo quedó consumado desde que el gobierno se apoderó de los bienes eclesiásticos y dispuso de sus rentas. Quien mayor ventaja reportó de la enajenacion no fué el comprador, que apenas pudo disfrutar su propiedad uno ó dos años, sino el Estado que percibió desde luego el precio ó su mayor parte. Los compradores secundaron ciertamente las miras del gobierno, pero no agravaron la injusticia del hecho de la expropiacion, y si alguna culpa cometieron, no fué de las que podian castigarse en el foro externo, pues obraron segun las leyes á la sazón establecidas; y el que vive con arreglo á ellas no debe ser culpado á los ojos de ningun gobierno, aunque alguna vez lo sea en el foro de la conciencia. ¿Qué seria de la sociedad si prevaleciese la doctrina de que incurre en responsabilidad el que usa los derechos que la dan las leyes, si éstas fueren despues derogadas por injustas? Es, pues, evidente que si despojo cometió el gobierno constitucional apoderándose de los bienes eclesiásticos, despojo cometió también el gobierno absoluto, mandando devolver los ya vendidos, sin restituir á los compradores, al ménos lo que el Estado habia recibido de ellos. Para re-



mediar una injusticia grave, se incurrió en otra que no lo era ménos: la culpa del gobierno constitucional y de la nacion la pagaron tan sólo unos cuantos individuos, que creyeron contratar válidamente, haciéndolo con el Estado y segun sus leyes; y así quedó sentado un precedente funesto, origen de otras posteriores y no ménos violentas expoliaciones. Si los compradores hubieran sido indemnizados á costa del Erario, todos los españoles habrian pagado por igual, la culpa común; mas aprovecharse el Estado del precio de los bienes vendidos y despojar á los poseedores, como si ellos los hubieran violentamente usurpado, fué una verdadera iniquidad, que nó hallará nunca á los ojos de la historia justificacion ni disculpa. Harto se han sentido despues sus consecuencias en las últimas expropiaciones que en nuestros dias ha sufrido la Iglesia, las cuales no refiero ni juzgo, por ser demasiado recientes y cónocidas.

FIN DEL TOMO II Y ÚLTIMO

ÍNDICE DEL TOMO SEGUNDO

LIBRO VI

De la propiedad territorial en el principado de Cataluña.

| | Págs. |
|--|-------|
| CAPÍTULO I.—Constitucion de la propiedad territorial bajo la dominacion de los reyes francos..... | 5 |
| I.—Repartimientos de tierras y sus condiciones..... | Id. |
| II.—De las tierras alodiales..... | 9 |
| III.—Tierras beneficiarias..... | 12 |
| IV.—Tierras tributarias..... | 17 |
| CAP. II.—Estado de la propiedad territorial bajo la dominacion de los condes soberanos de Barcelona..... | 18 |
| I.—Servicio militar y otras cargas de los propietarios..... | Id. |
| II.—Cargas de las tierras tributarias..... | 23 |
| CAP. III.—De las restricciones del dominio territorial..... | 31 |
| I.—De la alienabilidad de las tierras..... | Id. |
| II.—De la trasmision por herencia de las tierras..... | 35 |
| CAP. IV.—De la jurisdiccion inherente á la propiedad territorial: sus orígenes y forma primitiva..... | 42 |
| CAP. V.—De la jurisdiccion señorial y de la real, segun la antigua legislacion de Cataluña..... | 50 |

LIBRO VII

De la propiedad territorial en los reinos de Mallorca y Valencia.

| | |
|--|----|
| CAP. I.—Repartimiento de tierras y constitucion de la propiedad despues de la reconquista de ambos reinos..... | 70 |
|--|----|

| | |
|--|-----|
| CAP. II.—Tributos, cargas y servicios militares de los propietarios. | 83 |
| CAP. III.—De las restricciones del dominio. | 94 |
| CAP. IV.—Jurisdiccion y potestad inherentes al dominio. | 102 |

LIBRO VIII

De la propiedad vinculada y de la civil amortizada y gravada despues de la Edad Media.

| | |
|---|-----|
| CAP. I.—Cómo perdió la propiedad territorial sus caractéres feudales. | 112 |
| I.—Causas que contribuyeron á separar del dominio de la tierra el servicio militar y la jurisdiccion. | Id. |
| II.—Reduccion de los señoríos de abadengo: leyes de amortizacion. | 121 |
| CAP. II.—Decadencia del régimen señorial: los mayorazgos. | 124 |
| I.—Insuficiencia del régimen señorial en el siglo XVI. | Id. |
| II.—Orígen y progresos de los mayorazgos. | 128 |
| III.—Cómo se vulgarizaron y desacreditaron los mayorazgos. | 137 |
| CAP. III.—Progresos de la desvinculacion en el siglo XVIII. | 143 |
| I.—Progresos de las doctrinas contrarias á las vinculaciones. | Id. |
| II.—Progresos de la legislación desvinculadora. | 149 |
| CAP. IV.—Fin de la propiedad feudal y de la vinculada. | 157 |
| I.—Abolicion de los señoríos. | Id. |
| II.—Leyes de desvinculacion. | 163 |
| III.—Efectos y vicisitudes de las leyes de desvinculacion. | 173 |
| CAP. V.—De la propiedad municipal. | 181 |
| I.—Orígen y vicisitudes de las tierras concejiles hasta fines del siglo XVIII. | Id. |
| II.—Nuevos repartimientos de tierras concejiles. | 189 |
| III.—Desamortizacion y enajenacion de las tierras concejiles. | 196 |

LIBRO IX

De las cargas y menoscabos de la propiedad.

| | |
|---|-----|
| CAP. I.—De la expropiacion directa por causa de utilidad pública. | 201 |
| I.—Historia de la teoría de la expropiacion. | Id. |
| II.—Expropiacion de los indios de América. | 208 |

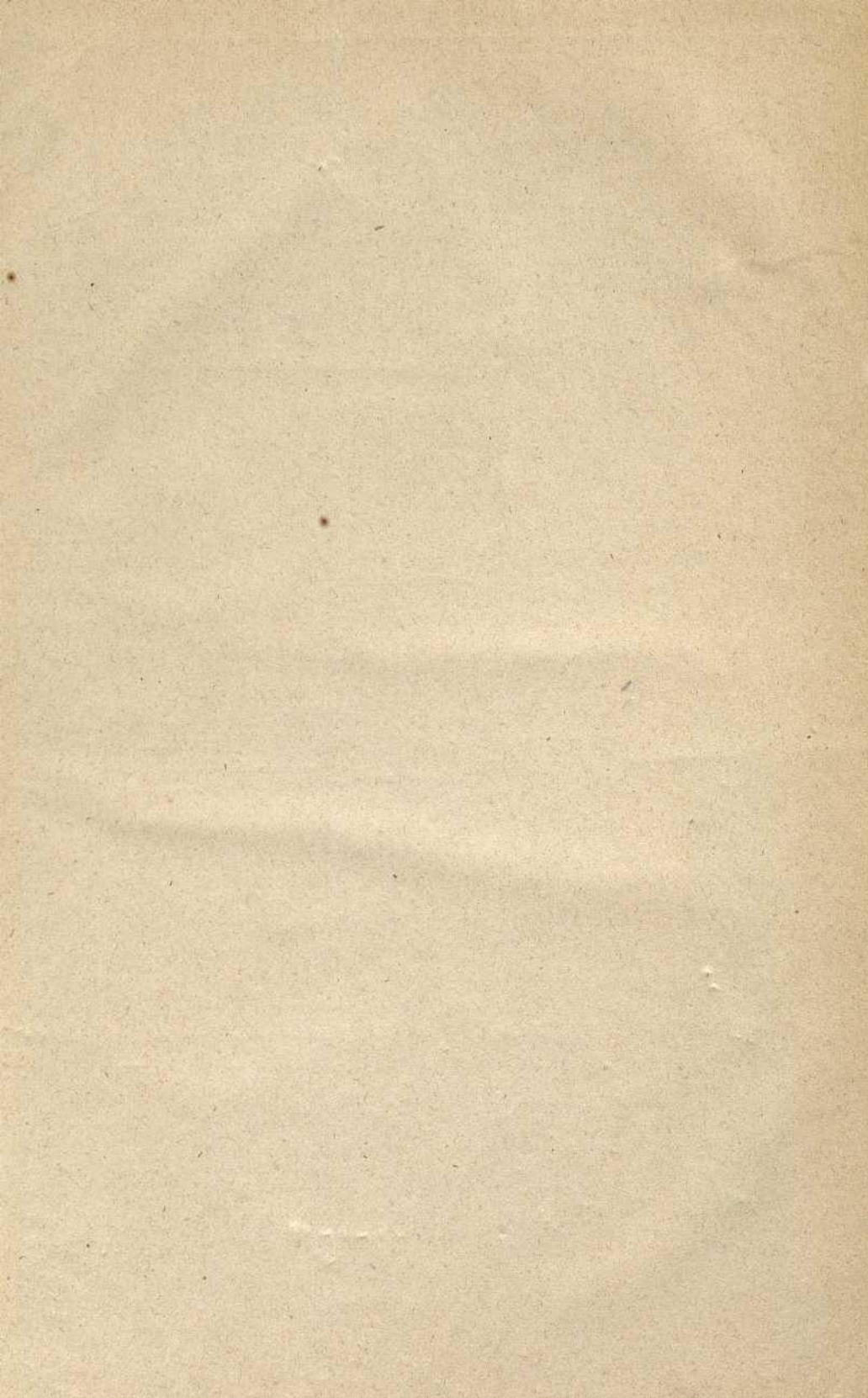
| | Págs. |
|--|-------|
| III.—Expropiacion y expulsion de los judíos..... | 212 |
| IV.—Expropiacion y expulsion de los mudéjares y de los moriscos..... | 217 |
| V.—Expropiacion de salinas..... | 222 |
| VI.—Otras varias expropiaciones..... | 229 |
| CAP. II.—De la expropiacion indirecta por utilidad pública..... | 232 |
| I.—De las mudanzas en el valor legal de las monedas..... | Id. |
| II.—De las moratorias otorgadas por el soberano, para el pago de las deudas..... | 237 |
| III.—De otras restricciones del dominio equivalentes á la expropiacion..... | 240 |
| CAP. III.—De los antiguos impuestos considerados como fruto del señorío territorial... .. | 245 |
| CAP. IV.—De los diezmos..... | 254 |
| I.—Orígen y vicisitudes de este impuesto..... | Id. |
| II.—Decadencia y fin del diezmo..... | 266 |
| CAP. V.—De las antiguas servidumbres de la propiedad rural en beneficio de la ganadería..... | 276 |
| I.—Servidumbres de cañada y pasto..... | Id. |
| II.—Acotamiento de tierras y dehesas..... | 286 |
| CAP. VI.—De otras antiguas servidumbres de la propiedad á favor de la ganadería y de la agricultura..... | 295 |
| I.—Rompimiento de dehesas..... | Id. |
| II.—Posesion privilegiada de los ganaderos de la Mesta en las tierras de pasto..... | 301 |
| III.—Limitaciones del dominio á favor de la agricultura..... | 310 |
| CAP. VII.—Servidumbre en interés de las subsistencias y abastos públicos..... | 317 |
| I.—De la tasa del precio de los granos..... | Id. |
| II.—Otras restricciones del comercio de granos..... | 324 |
| CAP. VIII.—De los censos enfitéuticos y de los foros..... | 329 |
| I.—De los censos enfitéuticos..... | Id. |
| II.—De los foros de Galicia y Asturias..... | 335 |
| CAP. IX.—De los censos consignativos..... | 342 |
| I.—Orígenes y primeras vicisitudes del censo consignativo..... | Id. |
| II.—Tasa y reduccion general de los censos..... | 347 |
| III.—Controversias acerca de los censos y nuevas reducciones de sus réditos en el siglo xvii..... | 357 |
| IV.—Ultima reduccion y estado de los censos en el siglo xviii. | 363 |

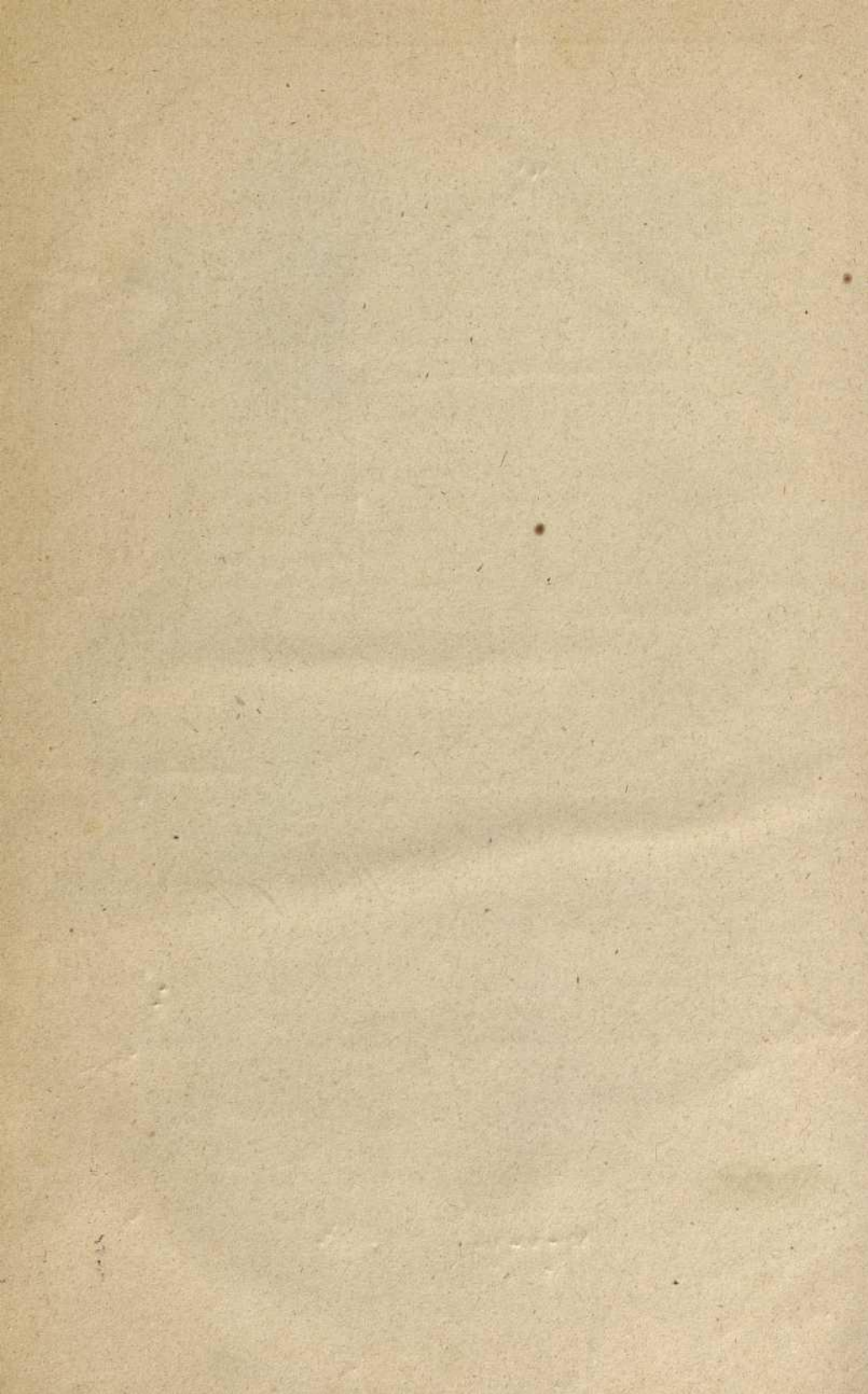
LIBRO X

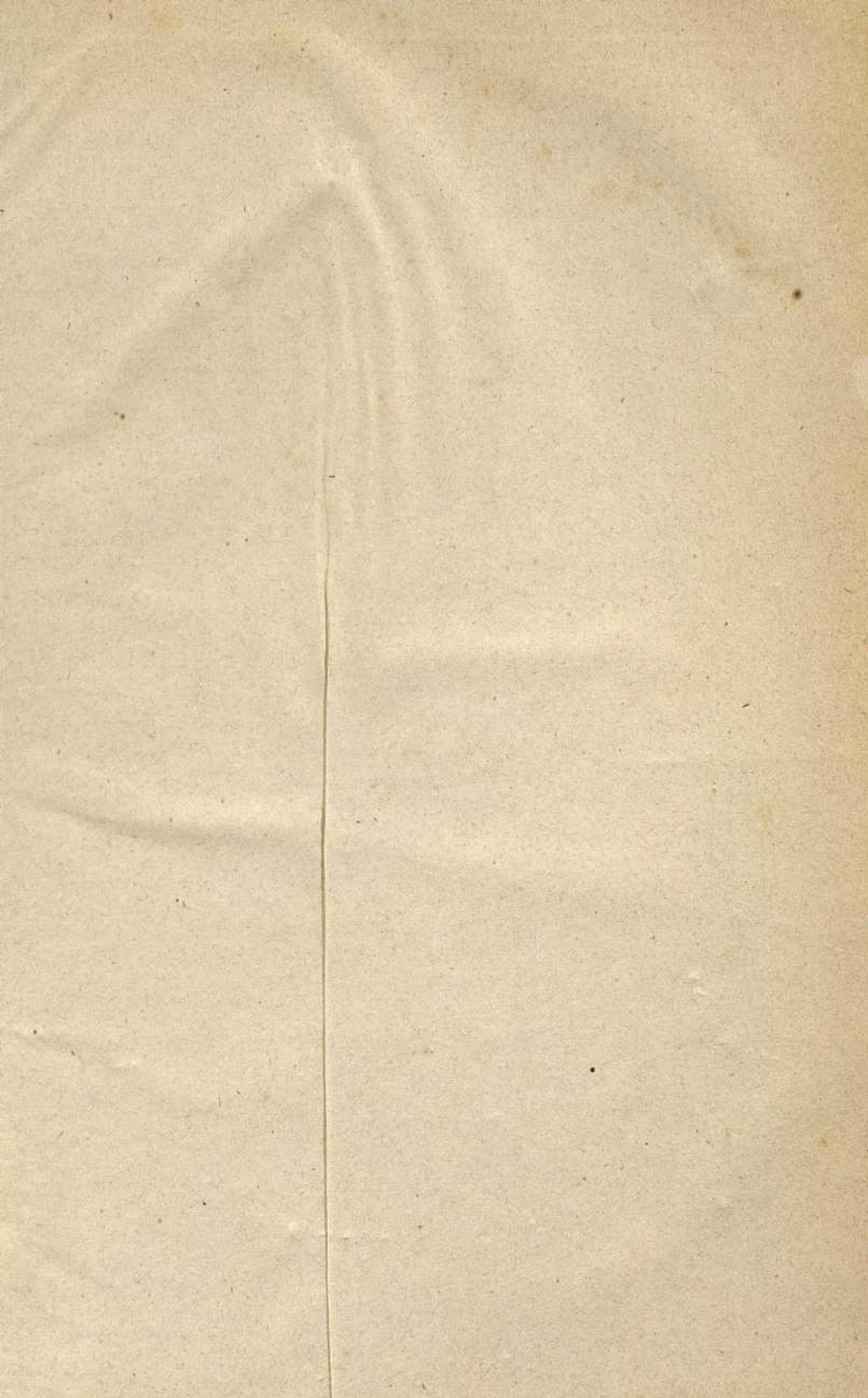
De la propiedad territorial de la Iglesia.

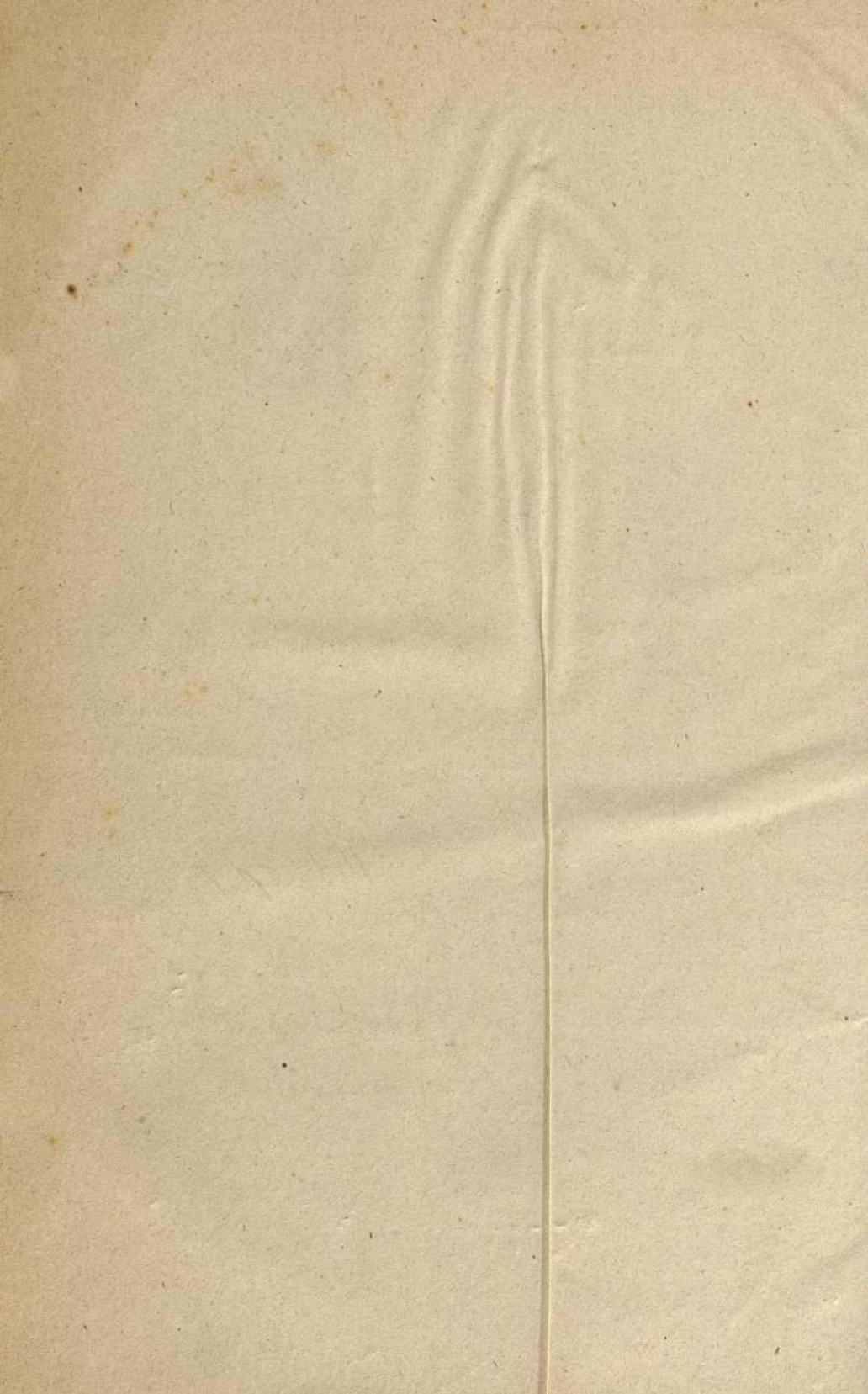
| | Págs. |
|--|-------|
| CAP. I.—Origen y progresos del patrimonio territorial de la Iglesia. | 368 |
| I.—Origen general del patrimonio de la Iglesia | Id. |
| II.—Acrecentamiento excesivo del patrimonio de la Iglesia.... | 377 |
| CAP. II.—De la inmunidad de tributos otorgada á la Iglesia..... | 388 |
| I.—La inmunidad desde el siglo iv al xii..... | Id. |
| II.—Progresos de la inmunidad desde el siglo xii hasta el xv.. | 394 |
| III.—La inmunidad en los reinos de la corona de Aragon y Navarra..... | 406 |
| IV.—Controversias sobre el origen y límites de la inmunidad y sus progresos hasta fin del siglo xvii..... | 413 |
| V.—Decadencia y término de la inmunidad de tributos..... | 424 |
| CAP. III.—Limitaciones de la facultad de la Iglesia para adquirir bienes inmuebles establecidas por la potestad temporal, ántes del siglo xvi..... | 429 |
| I.—Origen y progresos de las leyes de amortizacion en Castilla. | Id. |
| II.—Vicisitudes de las leyes de amortizacion de Castilla desde el siglo xiii al xv..... | 440 |
| III.—Origen y progresos de la ley de amortizacion en los reinos de la corona de Aragon..... | 447 |
| CAP. IV.—Vicisitudes de las leyes de amortizacion y controversias acerca de su validez desde el siglo xvi al xviii..... | 454 |
| I.—Vicisitudes de las leyes de amortizacion en los siglos xvi y xvii..... | Id. |
| II.—Controversias sobre la validez de la ley de amortizacion.. | 457 |
| CAP. V.—De la ocupacion y expropiacion de los bienes eclesiásticos en interés del Estado..... | 467 |
| I.—De la ocupacion de bienes eclesiásticos por via de pena.... | Id. |
| II.—De la ocupacion de bienes eclesiásticos por necesidades públicas, hasta principio del siglo xvi..... | 472 |
| III.—Las expropiaciones de la Iglesia desde el reinado de Carlos I hasta el de Carlos III..... | 488 |
| CAP. VI.—La propiedad eclesiástica segun la escuela política y los economistas del siglo xviii..... | 497 |
| I.—Influjo de las doctrinas filosóficas y políticas del siglo xviii en la expropiacion de la Iglesia..... | Id. |

| | |
|--|-----|
| II.—Influjo de las doctrinas económicas en la expropiacion de la Iglesia..... | 502 |
| CAP. VII.—Restablecimiento de las leyes de amortizacion en el siglo XVIII..... | 510 |
| I.—Progresos de las leyes de amortizacion en España durante el siglo XVIII..... | Id. |
| II.—Controversia sobre la ley de amortizacion en España durante el siglo XVIII..... | 513 |
| CAP. VIII.—Expropiacion de la Iglesia de España á fines del siglo XVIII, y en los primeros años del XIX..... | 523 |









F. DE
DE LA
TERRIT

F. DE CÁRDENAS
HISTORIA
DE LA PROPIEDAD
TERRITORIAL EN ESPAÑA

1-2

FAN
XIX
482